



DOCUMENTOS OFICIALES DE LA ASAMBLEA GENERAL
TRIGESIMO PERIODO DE SESIONES

SEXTA COMISION

ASUNTOS JURIDICOS

ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES

17 DE SEPTIEMBRE-5 DE DICIEMBRE DE 1975

NACIONES UNIDAS



DOCUMENTOS OFICIALES DE LA ASAMBLEA GENERAL
TRIGESIMO PERIODO DE SESIONES

SEXTA COMISION

ASUNTOS JURIDICOS

ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES

17 DE SEPTIEMBRE-5 DE DICIEMBRE DE 1975

NACIONES UNIDAS

Nueva York, 1976

ADVERTENCIA

Los *Documentos Oficiales de la Asamblea General* correspondientes a un período de sesiones determinado comprenden las actas de las sesiones, los anexos a esas actas, los suplementos, así como la *Lista de delegaciones* y la *Lista de documentos*. En esta última lista y en los fascículos de anexos figura información sobre otros documentos.

*

* *

Las firmas de los documentos de las Naciones Unidas se componen de letras mayúsculas y cifras. La mención de una de tales firmas indica que se hace referencia a un documento de las Naciones Unidas.

INDICE

Programa	Página		Página
Programa	xii	1528a. sesión	
1522a. sesión		<i>Miércoles 1º de octubre de 1975,</i>	
<i>Miércoles 17 de septiembre de 1975,</i>		<i>a las 15.25 horas</i>	
<i>a las 11.35 horas</i>		ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS	12
ELECCION DEL PRESIDENTE	1		
1523a. sesión		1529a. sesión	
<i>Martes 23 de septiembre de 1975,</i>		<i>Jueves 2 de octubre de 1975,</i>	
<i>a las 11 horas</i>		<i>a las 15.15 horas</i>	
ELECCION DE LOS VICEPRESIDENTES	1	TEMA 110 DEL PROGRAMA:	
ELECCION DEL RELATOR	1	Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para	
ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS	2	el Derecho Mercantil Internacional sobre la labor	
		realizada en su octavo período de sesiones (<i>con-</i>	
		<i>tinuación</i>)	13
1524a. sesión			
<i>Miércoles 24 de septiembre de 1975,</i>		1530a. sesión	
<i>a las 10.50 horas</i>		<i>Viernes 3 de octubre de 1975,</i>	
ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS	3	<i>a las 10.50 horas</i>	
1525a. sesión		TEMA 110 DEL PROGRAMA:	
<i>Viernes 26 de septiembre de 1975,</i>		Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para	
<i>a las 10.50 horas</i>		el Derecho Mercantil Internacional sobre la labor	
ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS	4	realizada en su octavo período de sesiones (<i>con-</i>	
		<i>tinuación</i>)	18
1526a. sesión		TEMA 109 DEL PROGRAMA:	
<i>Lunes 29 de septiembre de 1975,</i>		Sucesión de Estados en materia de tratados: in-	
<i>a las 15.20 horas</i>		forme del Secretario General (<i>continuación</i>)	20
TEMA 109 DEL PROGRAMA:			
Sucesión de Estados en materia de tratados: in-		1531a. sesión	
forme del Secretario General	5	<i>Lunes 6 de octubre de 1975,</i>	
		<i>a las 15.15 horas</i>	
1527a. sesión		TEMA 110 DEL PROGRAMA:	
<i>Martes 30 de septiembre de 1975,</i>		Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para	
<i>a las 10.45 horas</i>		el Derecho Mercantil Internacional sobre la labor	
TEMA 110 DEL PROGRAMA:		realizada en su octavo período de sesiones (<i>con-</i>	
Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para		<i>tinuación</i>)	24
el Derecho Mercantil Internacional sobre la labor		ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS	30
realizada en su octavo período de sesiones	12		

	Página		Página
1532a. sesión		1538a. sesión	
<i>Martes 7 de octubre de 1975, a las 12.10 horas</i>		<i>Martes 14 de octubre de 1975, a las 15.10 horas</i>	
TEMA 110 DEL PROGRAMA:		TEMA 108 DEL PROGRAMA:	
Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la labor realizada en su octavo período de sesiones (<i>con-</i> <i>tinuación</i>)	31	Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 27° período de sesiones (<i>continuación</i>)	61
1533a. sesión		TEMA 109 DEL PROGRAMA:	
<i>Martes 7 de octubre de 1975, a las 16.45 horas</i>		Sucesión de Estados en materia de tratados: in- forme del Secretario General (<i>continuación</i>) . . .	
TEMA 110 DEL PROGRAMA:			
Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la labor realizada en su octavo período de sesiones (<i>con-</i> <i>tinuación</i>)	35	1539a. sesión	
1534a. sesión		<i>Miércoles 15 de octubre de 1975, a las 10.45 horas</i>	
<i>Miércoles 8 de octubre de 1975, a las 15.15 horas</i>		TEMA 108 DEL PROGRAMA:	
TEMA 108 DEL PROGRAMA:		Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 27° período de sesiones (<i>continuación</i>)	68
Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 27° período de sesiones	41	TEMA 109 DEL PROGRAMA:	
1535a. sesión		Sucesión de Estados en materia de tratados: in- forme del Secretario General (<i>continuación</i>) . . .	
<i>Jueves 9 de octubre de 1975, a las 15.20 horas</i>		1540a. sesión	
TEMA 108 DEL PROGRAMA:		<i>Miércoles 15 de octubre de 1975, a las 15.15 horas</i>	
Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 27° período de sesiones (<i>continuación</i>)	44	TEMA 108 DEL PROGRAMA:	
TEMA 109 DEL PROGRAMA:		Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 27° período de sesiones (<i>continuación</i>)	72
Sucesión de Estados en materia de tratados: in- forme del Secretario General (<i>continuación</i>) . . .		TEMA 109 DEL PROGRAMA:	
1536a. sesión		Sucesión de Estados en materia de tratados: in- forme del Secretario General (<i>continuación</i>) . . .	
<i>Viernes 10 de octubre de 1975, a las 15.15 horas</i>		1541a. sesión	
TEMA 109 DEL PROGRAMA:		<i>Jueves 16 de octubre de 1975, a las 15.40 horas</i>	
Sucesión de Estados en materia de tratados: in- forme del Secretario General (<i>continuación</i>) . . .	50	TEMA 108 DEL PROGRAMA:	
1537a. sesión		Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 27° período de sesiones (<i>continuación</i>)	79
<i>Lunes 13 de octubre de 1975, a las 15.15 horas</i>		TEMA 109 DEL PROGRAMA:	
TEMA 109 DEL PROGRAMA:		Sucesión de Estados en materia de tratados: in- forme del Secretario General (<i>continuación</i>) . . .	
Sucesión de Estados en materia de tratados: in- forme del Secretario General (<i>continuación</i>) . . .	54		

	Página		Página
1542a. sesión		1546a. sesión	
<i>Viernes 17 de octubre de 1975, a las 10.45 horas</i>		<i>Miércoles 22 de octubre de 1975, a las 10.50 horas</i>	
TEMA 108 DEL PROGRAMA:		TEMA 108 DEL PROGRAMA:	
Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 27° período de sesiones (<i>continuación</i>)	82	Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 27° período de sesiones (<i>continuación</i>)	103
TEMA 109 DEL PROGRAMA:		TEMA 109 DEL PROGRAMA:	
Sucesión de Estados en materia de tratados: in- forme del Secretario General (<i>continuación</i>) . . .		Sucesión de Estados en materia de tratados: in- forme del Secretario General (<i>continuación</i>) . . .	
1543a. sesión		1547a. sesión	
<i>Lunes 20 de octubre de 1975, a las 10.45 horas</i>		<i>Jueves 23 de octubre de 1975, a las 10.50 horas</i>	
TEMA 108 DEL PROGRAMA:		TEMA 108 DEL PROGRAMA:	
Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 27° período de sesiones (<i>continuación</i>)	87	Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 27° período de sesiones (<i>continuación</i>)	112
TEMA 109 DEL PROGRAMA:		TEMA 109 DEL PROGRAMA:	
Sucesión de Estados en materia de tratados: in- forme del Secretario General (<i>continuación</i>) . . .		Sucesión de Estados en materia de tratados: in- forme del Secretario General (<i>continuación</i>) . . .	
1544a. sesión		1548a. sesión	
<i>Martes 21 de octubre de 1975, a las 10.50 horas</i>		<i>Viernes 24 de octubre de 1975, a las 15.15 horas</i>	
TEMA 108 DEL PROGRAMA:		EXPRESIONES DE CONDOLENCIA POR EL FALLECIMIENTO DE DOS EMBAJADORES DE TURQUIA	120
Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 27° período de sesiones (<i>continuación</i>)	92	TEMA 108 DEL PROGRAMA:	
TEMA 109 DEL PROGRAMA:		Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 27° período de sesiones (<i>continuación</i>)	120
Sucesión de Estados en materia de tratados: in- forme del Secretario General (<i>continuación</i>) . . .		TEMA 109 DEL PROGRAMA:	
1545a. sesión		Sucesión de Estados en materia de tratados: in- forme del Secretario General (<i>continuación</i>) . . .	
<i>Martes 21 de octubre de 1975, a las 15.20 horas</i>		1549a. sesión	
TEMA 108 DEL PROGRAMA:		<i>Lunes 27 de octubre de 1975, a las 15.25 horas</i>	
Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 27° período de sesiones (<i>continuación</i>)	97	TEMA 108 DEL PROGRAMA:	
TEMA 109 DEL PROGRAMA:		Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 27° período de sesiones (<i>continuación</i>)	129
Sucesión de Estados en materia de tratados: in- forme del Secretario General (<i>continuación</i>) . . .		TEMA 109 DEL PROGRAMA:	
		Sucesión de Estados en materia de tratados: in- forme del Secretario General (<i>continuación</i>) . . .	
		EXPRESIONES DE CONDOLENCIA POR EL FALLECIMIENTO DE DOS EMBAJADORES DE TURQUIA (<i>conclusión</i>)	137

	Página		Página
1550a. sesión		1556a. sesión	
<i>Martes 28 de octubre de 1975, a las 10.50 horas</i>		<i>Martes 4 de noviembre de 1975, a las 10.55 horas</i>	
TEMA 108 DEL PROGRAMA:		TEMA 111 DEL PROGRAMA:	
Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 27º período de sesiones (<i>continuación</i>)	137	Cuestión del asilo diplomático: informe del Secre- tario General (<i>continuación</i>)	167
TEMA 109 DEL PROGRAMA:		1557a. sesión	
Sucesión de Estados en materia de tratados: in- forme del Secretario General (<i>continuación</i>) . . .		<i>Martes 4 de noviembre de 1975, a las 15.20 horas</i>	
		TEMA 111 DEL PROGRAMA:	
		Cuestión del asilo diplomático: informe del Secre- tario General (<i>continuación</i>)	174
1551a. sesión		1558a. sesión	
<i>Martes 28 de octubre de 1975, a las 15.20 horas</i>		<i>Miércoles 5 de noviembre de 1975, a las 10.55 horas</i>	
TEMA 111 DEL PROGRAMA:		TEMA 112 DEL PROGRAMA:	
Cuestión del asilo diplomático: informe del Secre- tario General	144	Informe del Comité de Relaciones con el País Huésped	178
1552a. sesión		1559a. sesión	
<i>Miércoles 29 de octubre de 1975, a las 10.55 horas</i>		<i>Jueves 6 de noviembre de 1975, a las 10.50 horas</i>	
TEMA 111 DEL PROGRAMA:		TEMA 112 DEL PROGRAMA:	
Cuestión del asilo diplomático: informe del Secre- tario General (<i>continuación</i>)	150	Informe del Comité de Relaciones con el País Huésped (<i>continuación</i>)	179
1553a. sesión		TEMA 111 DEL PROGRAMA:	
<i>Jueves 30 de octubre de 1975, a las 15.20 horas</i>		Cuestión del asilo diplomático: informe del Secre- tario General (<i>continuación</i>)	182
TEMA 111 DEL PROGRAMA:		1560a. sesión	
Cuestión del asilo diplomático: informe del Secre- tario General (<i>continuación</i>)	150	<i>Viernes 7 de noviembre de 1975, a las 15.20 horas</i>	
1554a. sesión		FELICITACIONES CON MOTIVO DEL ANIVER- SARIO DE LA REVOLUCION DE OCTUBRE	182
<i>Viernes 31 de octubre de 1975, a las 10.55 horas</i>		TEMA 112 DEL PROGRAMA:	
TEMA 111 DEL PROGRAMA:		Informe del Comité de Relaciones con el País Huésped (<i>continuación</i>)	182
Cuestión del asilo diplomático: informe del Secre- tario General (<i>continuación</i>)	154	TEMA 111 DEL PROGRAMA:	
1555a. sesión		Cuestión del asilo diplomático: informe del Secre- tario General (<i>continuación</i>)	187
<i>Lunes 3 de noviembre de 1975, a las 15.10 horas</i>		1561a. sesión	
TEMA 111 DEL PROGRAMA:		<i>Lunes 10 de noviembre de 1975, a las 15.20 horas</i>	
Cuestión del asilo diplomático: informe del Secre- tario General (<i>continuación</i>)	158	TEMA 111 DEL PROGRAMA:	
		Cuestión del asilo diplomático: informe del Secre- tario General (<i>conclusión</i>)	187

TEMAS 113 Y 29 DEL PROGRAMA:

Informe del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas

Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones y la promoción de las normas del derecho internacional en las relaciones entre los Estados: informes del Secretario General 188

1562a. sesión

*Martes 11 de noviembre de 1975,
a las 15.20 horas*

TEMAS 113 Y 29 DEL PROGRAMA:

Informe del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas (*continuación*)

Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones y la promoción de las normas del derecho internacional en las relaciones entre los Estados: informes del Secretario General (*continuación*) 189

1563a. sesión

*Miércoles 12 de noviembre de 1975,
a las 10.40 horas*

TEMAS 113 Y 29 DEL PROGRAMA:

Informe del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas (*continuación*)

Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones y la promoción de las normas del derecho internacional en las relaciones entre los Estados: informes del Secretario General (*continuación*) 190

1564a. sesión

*Jueves 13 de noviembre de 1975,
a las 15.20 horas*

TEMAS 113 Y 29 DEL PROGRAMA:

Informe del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas (*continuación*)

Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones y la promoción de las normas del derecho internacional en las relaciones entre los Estados: informes del Secretario General (*continuación*) 193

1565a. sesión

*Viernes 14 de noviembre de 1975,
a las 10.50 horas*

TEMAS 113 Y 29 DEL PROGRAMA:

Informe del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas (*continuación*)

Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones y la promoción de las normas del derecho internacional en las relaciones entre los Estados: informes del Secretario General (*continuación*) 199

1566a. sesión

*Martes 18 de noviembre de 1975,
a las 10.55 horas*

TEMAS 113 Y 29 DEL PROGRAMA:

Informe del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas (*continuación*)

Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones y la promoción de las normas del derecho internacional en las relaciones entre los Estados: informes del Secretario General (*continuación*) 204

TEMA 109 DEL PROGRAMA:

Sucesión de Estados en materia de tratados: informe del Secretario General (*continuación*) ... 208

1567a. sesión

*Martes 18 de noviembre de 1975,
a las 15.20 horas*

TEMAS 113 Y 29 DEL PROGRAMA:

Informe del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas (*continuación*)

Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones y la promoción de las normas del derecho internacional en las relaciones entre los Estados: informes del Secretario General (*continuación*) 209

TEMA 109 DEL PROGRAMA:

Sucesión de Estados en materia de tratados: informe del Secretario General (*continuación*) ... 212

1568a. sesión

Miércoles 19 de noviembre de 1975,
a las 10.55 horas

TEMAS 113 Y 29 DEL PROGRAMA:

Informe del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas (*continuación*)

Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones y la promoción de las normas del derecho internacional en las relaciones entre los Estados: informes del Secretario General (*continuación*) 213

TEMA 109 DEL PROGRAMA:

Sucesión de Estados en materia de tratados: informe del Secretario General (*continuación*) . . . 218

1569a. sesión

Miércoles 19 de noviembre de 1975,
a las 15.20 horas

TEMAS 113 Y 29 DEL PROGRAMA:

Informe del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas (*continuación*)

Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones y la promoción de las normas del derecho internacional en las relaciones entre los Estados: informes del Secretario General (*continuación*) 219

TEMA 109 DEL PROGRAMA:

Sucesión de Estados en materia de tratados: informe del Secretario General (*continuación*) . . . 225

1570a. sesión

Jueves 20 de noviembre de 1975,
a las 10.55 horas

HOMENAJE A LA MEMORIA DEL GENERALÍSIMO FRANCISCO FRANCO, JEFE DEL ESTADO ESPAÑOL 225

TEMAS 113 Y 29 DEL PROGRAMA:

Informe del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas (*continuación*)

Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones y la promoción de las normas del derecho internacional en las relaciones entre los Estados: informes del Secretario General (*continuación*) 225

1571a. sesión

Viernes 21 de noviembre de 1975,
a las 10.55 horas

TEMAS 113 Y 29 DEL PROGRAMA:

Informe del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas (*continuación*)

Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones y la promoción de las normas del derecho internacional en las relaciones entre los Estados: informes del Secretario General (*continuación*) 232

1572a. sesión

Lunes 24 de noviembre de 1975,
a las 10.55 horas

TEMAS 113 Y 29 DEL PROGRAMA:

Informe del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas (*continuación*)

Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones y la promoción de las normas del derecho internacional en las relaciones entre los Estados: informes del Secretario General (*continuación*) 239

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 246

TEMAS 114 Y 70 DEL PROGRAMA:

Respeto de los derechos humanos en los conflictos armados: informe del Secretario General

Los derechos humanos en los conflictos armados: protección de los periodistas en misión peligrosa en las zonas de conflictos armados 246

TEMA 110 DEL PROGRAMA:

Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la labor realizada en su octavo período de sesiones (*continuación*) 246

TEMA 109 DEL PROGRAMA:

Sucesión de Estados en materia de tratados: informe del Secretario General (*continuación*) . . . 246

1573a. sesión

Martes 25 de noviembre de 1975,
a las 10.55 horas

TEMAS 113 Y 29 DEL PROGRAMA:

Informe del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas (*continuación*)

	Página		Página
Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones y la promoción de las normas del derecho internacional en las relaciones entre los Estados: informes del Secretario General (<i>continuación</i>)	246	Los derechos humanos en los conflictos armados: protección de los periodistas en misión peligrosa en las zonas de conflictos armados (<i>continuación</i>)	256
TEMA 109 DEL PROGRAMA:		TEMA 108 DEL PROGRAMA:	
Sucesión de Estados en materia de tratados: informe del Secretario General (<i>continuación</i>) . . .	253	Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 27º período de sesiones (<i>conclusión</i>)	260
1574a. sesión		TEMA 110 DEL PROGRAMA:	
Martes 25 de noviembre de 1975, a las 15.20 horas		Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la labor realizada en su octavo período de sesiones (<i>conclusión</i>)	260
TEMAS 113 Y 29 DEL PROGRAMA:		TEMA 117 DEL PROGRAMA:	
Informe del Comité <i>ad hoc</i> sobre la Carta de las Naciones Unidas (<i>continuación</i>)		Programa de asistencia de las Naciones Unidas para la enseñanza, el estudio, la difusión y una comprensión más amplia del derecho internacional: informe del Secretario General (<i>continuación</i>)	263
Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones y la promoción de las normas del derecho internacional en las relaciones entre los Estados: informes del Secretario General (<i>continuación</i>)	253	TEMA 109 DEL PROGRAMA:	
TEMA 117 DEL PROGRAMA:		Sucesión de Estados en materia de tratados: informe del Secretario General (<i>continuación</i>) . . .	264
Programa de asistencia de las Naciones Unidas para la enseñanza, el estudio, la difusión y una comprensión más amplia del derecho internacional: informe del Secretario General	254	1576a. sesión	
TEMA 110 DEL PROGRAMA:		Viernes 28 de noviembre de 1975, a las 10.55 horas	
Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la labor realizada en su octavo período de sesiones (<i>continuación</i>)	255	TEMAS 114 Y 70 DEL PROGRAMA:	
TEMA 108 DEL PROGRAMA:		Respeto de los derechos humanos en los conflictos armados: informe del Secretario General (<i>continuación</i>)	
Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 27º período de sesiones (<i>continuación</i>)	255	Los derechos humanos en los conflictos armados: protección de los periodistas en misión peligrosa en las zonas de conflictos armados (<i>continuación</i>)	264
TEMA 109 DEL PROGRAMA:		TEMA 117 DEL PROGRAMA:	
Sucesión de Estados en materia de tratados: informe del Secretario General (<i>continuación</i>) . . .	255	Programa de asistencia de las Naciones Unidas para la enseñanza, el estudio, la difusión y una comprensión más amplia del derecho internacional: informe del Secretario General (<i>continuación</i>)	271
1575a. sesión		TEMAS 113 Y 29 DEL PROGRAMA:	
Miércoles 26 de noviembre de 1975, a las 15.20 horas		Informe del Comité <i>ad hoc</i> sobre la Carta de las Naciones Unidas (<i>continuación</i>)	
TEMAS 114 Y 70 DEL PROGRAMA:		Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones y la promoción de las normas del derecho internacional en las relaciones entre los Estados: informes del Secretario General (<i>continuación</i>)	271
Respeto de los derechos humanos en los conflictos armados: informe del Secretario General (<i>continuación</i>)			

1577a. sesión

Lunes 1° de diciembre de 1975,
a las 15.20 horas

TEMAS 114 Y 70 DEL PROGRAMA:

Respeto de los derechos humanos en los conflictos armados: informe del Secretario General (*conclusión*)

Los derechos humanos en los conflictos armados: protección de los periodistas en misión peligrosa en las zonas de conflictos armados (*conclusión*) . 273

TEMA 112 DEL PROGRAMA:

Informe del Comité de Relaciones con el País Huésped (*conclusión*) 277

TEMAS 113 Y 29 DEL PROGRAMA:

Informe del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas (*continuación*)

Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones y la promoción de las normas del derecho internacional en las relaciones entre los Estados: informes del Secretario General (*continuación*) 279

TEMA 117 DEL PROGRAMA:

Programa de asistencia de las Naciones Unidas para la enseñanza, el estudio, la difusión y una comprensión más amplia del derecho internacional: informe del Secretario General (*continuación*) 280

1578a. sesión

Martes 2 de diciembre de 1975,
a las 15.25 horas

TEMAS 113 Y 29 DEL PROGRAMA:

Informe del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas (*continuación*)

Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones y la promoción de las normas del derecho internacional en las relaciones entre los Estados: informes del Secretario General (*continuación*) 281

TEMA 117 DEL PROGRAMA:

Programa de asistencia de las Naciones Unidas para la enseñanza, el estudio, la difusión y una comprensión más amplia del derecho internacional: informe del Secretario General (*continuación*) 284

Página

TEMA 115 DEL PROGRAMA:

Cumplimiento por los Estados de las disposiciones de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961 y medidas para aumentar el número de las partes en ella 284

1579a. sesión

Miércoles 3 de diciembre de 1975,
a las 11 horas

TEMA 115 DEL PROGRAMA:

Cumplimiento por los Estados de las disposiciones de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961 y medidas para aumentar el número de las partes en ella (*continuación*) 287

TEMA 117 DEL PROGRAMA:

Programa de asistencia de las Naciones Unidas para la enseñanza, el estudio, la difusión y una comprensión más amplia del derecho internacional: informe del Secretario General (*conclusión*) . 291

TEMA 109 DEL PROGRAMA:

Sucesión de Estados en materia de tratados: informe del Secretario General (*continuación*) . . . 292

1580a. sesión

Jueves 4 de diciembre de 1975,
a las 11 horas

TEMA 109 DEL PROGRAMA:

Sucesión de Estados en materia de tratados: informe del Secretario General (*conclusión*) 293

TEMA 115 DEL PROGRAMA:

Cumplimiento por los Estados de las disposiciones de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961 y medidas para aumentar el número de las partes en ella (*continuación*) 294

TEMA 116 DEL PROGRAMA:

Medidas para prevenir el terrorismo internacional que pone en peligro vidas humanas inocentes o causa su pérdida, o compromete las libertades fundamentales, y estudio de las causas subyacentes de las formas de terrorismo y los actos de violencia que tienen su origen en las aflicciones, la frustración, los agravios y la desesperanza y que conducen a algunas personas a sacrificar vidas humanas, incluida la propia, en un intento de lograr cambios radicales: informe del Comité Especial sobre el Terrorismo Internacional 295

Página

	Página		Página
1581a. sesión			
<i>Jueves 4 de diciembre de 1975, a las 15.30 horas</i>			
TEMA 116 DEL PROGRAMA:			
Medidas para prevenir el terrorismo internacional que pone en peligro vidas humanas inocentes o causa su pérdida, o compromete las libertades fundamentales, y estudio de las causas subyacentes de las formas de terrorismo y los actos de violencia que tienen su origen en las aflicciones, la frustración, los agravios y la desesperanza y que conducen a algunas personas a sacrificar vidas humanas, incluida la propia, en un intento de lograr cambios radicales: informe del Comité Especial sobre el Terrorismo Internacional (<i>conclusión</i>)	298	nocidos por la Organización de la Unidad Africana o la Liga de los Estados Arabes, o por ambas;	
		b) Resolución relativa a la aplicación de la Convención en las actividades futuras de las organizaciones internacionales	305
TEMA 115 DEL PROGRAMA:			
Cumplimiento por los Estados de las disposiciones de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961 y medidas para aumentar el número de las partes en ella (<i>conclusión</i>)	303		
TEMA 118 DEL PROGRAMA:			
Resoluciones aprobadas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales:			
a) Resolución relativa a la condición de observador de los movimientos de liberación nacional reco-			
		1582a. sesión	
		<i>Viernes 5 de diciembre de 1975, a las 11.05 horas</i>	
		TEMAS 113 Y 29 DEL PROGRAMA:	
		Informe del Comité <i>ad hoc</i> sobre la Carta de las Naciones Unidas (<i>conclusión</i>)	
		Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones y la promoción de las normas del derecho internacional en las relaciones entre los Estados: informes del Secretario General (<i>conclusión</i>)	305
		CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE LA COMISION	306

PROGRAMA

[*Nota.* Los temas del programa están enumerados en el orden en que figuran en la carta, de fecha 19 de septiembre de 1975, dirigida al Presidente de la Sexta Comisión por el Presidente de la Asamblea General (A/C.6/434)¹. Se indica entre corchetes para cada tema su número en el programa de la Asamblea General.]

En su 2353a. sesión plenaria, celebrada el 19 de septiembre de 1975, la Asamblea General decidió asignar los siguientes temas del programa del trigésimo período de sesiones a la Sexta Comisión para que los examinara e informara al respecto:

1. Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 27º período de sesiones [108].
2. Sucesión de Estados en materia de tratados: informe del Secretario General [109].
3. Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la labor realizada en su octavo período de sesiones [110].
4. Cuestión del asilo diplomático: informe del Secretario General [111].
5. Informe del Comité de Relaciones con el País Huésped [112].
6. Informe del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas [113].
7. Respeto de los derechos humanos en los conflictos armados: informe del Secretario General [114].
8. Los derechos humanos en los conflictos armados: protección de los periodistas en misión peligrosa en las zonas de conflictos armados [70].
9. Cumplimiento por los Estados de las disposiciones de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961 y medidas para aumentar el número de las partes en ella [115].
10. Medidas para prevenir el terrorismo internacional que pone en peligro vidas humanas inocentes o causa su pérdida, o compromete las libertades fundamentales, y estudio de las causas subyacentes de las formas de terrorismo y los actos de violencia que tienen su origen en las aflicciones, la frustración, los agravios y la desesperanza y que conducen a algunas personas a sacrificar vidas humanas, incluida la propia, en un intento de lograr cambios radicales: informe del Comité Especial sobre el Terrorismo Internacional [116].
11. Programa de asistencia de las Naciones Unidas para la enseñanza, el estudio, la difusión y una comprensión más amplia del derecho internacional: informe del Secretario General [117].
12. Resoluciones aprobadas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales [118]:
 - a) Resolución relativa a la condición de observador de los movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana o la Liga de los Estados Arabes, o por ambas;
 - b) Resolución relativa a la aplicación de la Convención en las actividades futuras de las organizaciones internacionales.
13. Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones y la promoción de las normas del derecho internacional en las relaciones entre los Estados: informes del Secretario General [29].

¹ Para el orden de examen de los temas decidido por la Comisión, véanse las sesiones 1524a. y 1525a.

ASAMBLEA GENERAL
TRIGESIMO PERIODO DE SESIONES

SEXTA COMISION

**Actas resumidas de las sesiones 1522a. a 1582a., celebradas en la Sede, Nueva York,
del 17 de septiembre al 5 de diciembre de 1975**

1522a. sesión

Miércoles 17 de septiembre de 1975, a las 11.35 horas

Presidente provisional: Sr. Gaston THORN (Luxemburgo).

A/C.6/SR.1522

Elección del Presidente

1. El Sr. JOB (Yugoslavia) propone la candidatura del Sr. Frank X. J. C. Njenga (Kenya), al cargo de Presidente.
2. No habiendo otros candidatos y de conformidad con el artículo 103 del reglamento de la Asamblea General, el PRESIDENTE PROVISIONAL declara que el Sr. Njenga (Kenya) queda elegido Presidente por aclamación.

Por aclamación, el Sr. Njenga (Kenya), queda elegido Presidente.

Se levanta la sesión a las 11.40 horas.

1523a. sesión

Martes 23 de septiembre de 1975, a las 11 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1523

Elección de los Vicepresidentes

1. El Sr. ABDALLAH (Túnez) presenta la candidatura del Sr. Víctor M. Godoy (Paraguay).
2. El Sr. CASTRÉN (Finlandia) presenta la candidatura del Sr. Alfons Klafkowski (Polonia).
3. El Sr. MANGAL (Afganistán) apoya las candidaturas.

El Sr. Godoy (Paraguay) y el Sr. Klafkowski (Polonia) quedan elegidos Vicepresidentes por aclamación.

Elección del Relator

4. El Sr. SANDERS (Guyana) presenta la candidatura del Sr. Eike Bracklo (República Federal de Alemania).

El Sr. Bracklo (República Federal de Alemania) queda elegido Relator por aclamación.

5. El Sr. STARČEVIĆ (Yugoslavia), hablando en nombre del Presidente de la Sexta Comisión en el anterior período de sesiones, en nombre de su delegación y en nombre de la

Comisión en su totalidad, felicita calurosamente al Presidente, a los dos Vicepresidentes y al Relator por su elección. A su delegación le complace mucho ver que la Presidencia de la Comisión está ocupada este año por el representante de un noble país africano, que también es miembro de la comunidad de Estados no alineados. Las bien conocidas cualidades personales del Presidente, sus conocimientos jurídicos y su capacidad de iniciativa para hallar soluciones a problemas complejos lo hacen eminentemente idóneo para el puesto y constituyen la mejor garantía de que el trabajo de la Sexta Comisión durante el trigésimo período de sesiones será eficaz y fructífero.

6. La Comisión también tiene la suerte de contar con juristas tan eminentes como el Sr. Godoy, el Sr. Klafkowski y el Sr. Bracklo como miembros de su Mesa. Ellos harán sin duda una valiosa contribución a la labor de la Comisión y asistirán en la organización de los trabajos de una manera conducente a su efectividad y éxito.

7. La Comisión afronta una vez más un programa de trabajo denso, pero con la hábil dirección de su Mesa y su tradicional espíritu de cooperación y seria dedicación, el orador está seguro de que ésta tendrá éxito una vez más en el examen de las importantes cuestiones jurídicas y políticas que se le han confiado y hallará soluciones mutuamente aceptables y constructivas que promuevan aún más el imperio del derecho en las relaciones internacionales.

8. El Sr. Starčević asegura al Presidente y a los otros miembros de la Mesa de la Comisión apoyo y cooperación plenos.

Organización de los trabajos (A/C.6/434, A/C.6/L.1015)

9. El PRESIDENTE dice que hay varias cuestiones financieras y administrativas que se ha solicitado a los presidentes de la Comisiones Principales que señalen a la atención de las delegaciones.

10. La primera se refiere a la documentación. Se recordará que las Comisiones Principales, a las que se proporcionan normalmente actas resumidas, están autorizadas, en virtud del inciso e) del párrafo 10 de la resolución 2538 (XXIV) de la Asamblea General, a decidir la reproducción íntegra de una declaración hecha durante una sesión, siempre que el órgano interesado tome la decisión pertinente después de que se haya presentado una exposición de las consecuencias financieras de tal decisión. Al Presidente se le ha dicho que el costo actual de traducir y reproducir una declaración es aproximadamente de 250 dólares por página del texto original si éste es proporcionado por el orador. Si no proporciona el texto, debe agregarse a esa cifra el costo de transcribir la grabación de la declaración. Si la Comisión decidiera incluir íntegramente una declaración en el acta resumida, incurriría en un gasto adicional de aproximadamente 80 dólares por página. La antedicha cifra de 250 dólares por página también se aplicaría si la Comisión decidiera incluir un resumen de las principales tendencias del debate en su informe a la Asamblea General.

11. En el transcurso de los años, como los miembros de la Comisión saben, la Asamblea General ha aprobado varias resoluciones relativas al control y reducción de la documentación, sobre las cuales él se siente obligado a llamar la

atención una vez más. Insta a las delegaciones a que procedan con moderación al formular solicitudes especiales de distribución de documentos adicionales.

12. Para asegurar la más alta calidad posible de interpretación, sería de desear que los miembros de la Comisión observaran ciertas reglas simples, tales como hablar lentamente y proporcionar con anticipación por lo menos seis copias, de ser posible, de los textos preparados de sus declaraciones para los intérpretes y una copia adicional para los redactores de actas resumidas. Al referirse a los documentos de las Naciones Unidas, los miembros de la Comisión deben indicar siempre que sea posible el número del párrafo y no el número de la página, ya que la numeración de las páginas evidentemente difiere, según el idioma de las distintas versiones.

13. La duración normal de las sesiones es de 10.30 a 13 horas para las sesiones matutinas y de 15 a 18 horas para las sesiones vespertinas. El Presidente se propone iniciar las sesiones a más tardar 15 minutos después de la hora prevista, y pide disculpas por lo tarde que se inició la presente sesión. Con el fin de aprovechar lo más posible el tiempo disponible para las sesiones, se solicita de las delegaciones que sean puntuales para que las sesiones puedan iniciarse a la hora prevista. Como regla general, el Presidente se propone levantar las sesiones a la hora señalada, es decir, a las 13 o a las 18 horas. En lo que concierne al servicio de interpretación, cualquier prolongación substancial de una sesión después de la hora normal requiere un cambio de equipos, lo que no se puede hacer si no se solicita por lo menos con una hora de anticipación.

14. Al llamar la atención sobre los documentos A/C.6/434 y A/C.6/L.1015, el Presidente sugiere que la Comisión apruebe la recomendación de la Secretaría, contenida en el párrafo 4 de su nota (A/C.6/L.1015), de que el examen del tema 108, que aparece encabezando la lista en el documento A/C.6/434, se postergue hasta después de finalizado el examen del tema 110.

15. El Sr. BOUAYAD-AGHA (Argelia) estima que la nota de la Secretaría sobre la organización de los trabajos (A/C.6/L.1015) es un documento práctico que indica claramente la enorme tarea que afronta la Comisión. En opinión del orador, sin embargo, el tema 113, relativo al informe del Comité *Ad Hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas, requiere más sesiones que las siete que se le han asignado. El problema es delicado pero muy urgente, en opinión de muchos, especialmente de los países no alineados. El orador solicita que se asignen más sesiones a ese tema de modo que todas las delegaciones puedan expresar sus opiniones. Además, el tema 116, relativo a las medidas para prevenir el terrorismo internacional, debería ser colocado al final del programa de la Comisión y se debería reducir el número de sesiones que se le han asignado. La cuestión ha sido debatida exhaustivamente durante los dos últimos años y no sería útil dedicar cinco sesiones al tema en el trigésimo período de sesiones.

16. El PRESIDENTE estima que sería prudente postergar la decisión sobre el tema 113 mientras esté pendiente la publicación del informe pertinente, prevista para el final de octubre. Además, hay cuatro sesiones adicionales mantenidas en reserva que pueden utilizarse, de ser necesario, para

el debate del tema. El Presidente da la seguridad de que el informe no será objeto de un examen superficial.

17. El Sr. ROSENSTOCK (Estados Unidos de América) dice que sería inapropiado en la etapa actual colocar el tema 116 al final del programa de la Comisión. Los antecedentes del caso, en realidad, no indican que el tema haya sido examinado a fondo.

18. El Sr. STEEL (Reino Unido) dice que no tiene objeciones a la propuesta de Argelia de asignar más tiempo al tema 113. Destacando ciertas afinidades entre ese tema y el tema 29, relativo al fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento y la consolidación de la paz, que se había debatido anteriormente en el plenario y está en el programa de la Comisión por primera vez, el orador sugiere que se acerquen esos dos temas, más o menos en el centro del programa, y sean debatidos juntos. Los oradores podrían entonces ahorrar tiempo comentando los dos temas a la vez. El Sr. Steel estima, además, que sería difícil iniciar el trabajo de la Comisión con el examen del tema 109, relativo a la sucesión de Estados en materia de tratados, ya que el informe pertinente del Secretario General todavía no ha llegado a muchas misiones. Las delegaciones necesitarán un plazo de dos o tres días para examinar el informe y posiblemente solicitar instrucciones de sus gobiernos.

19. El Sr. PEDAUYE (España) apoya la propuesta de Argelia de que se asignen más sesiones al tema 113 y la propuesta del Reino Unido relativa a los temas 113 y 29. Pregunta por el estado del informe del Comité *Ad Hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas, en vista de la decisión de ese órgano de publicar declaraciones íntegras en un anexo.

20. El Sr. RYBAKOV (Secretario de la Comisión) dice que la última declaración se recibió el 8 de septiembre y el informe está actualmente en la etapa de producción. Los servicios técnicos han estado recargados de trabajo por las necesidades del período extraordinario de sesiones y del actual período de sesiones, pero todavía se espera el informe para fines de octubre.

21. El Sr. BOUAYAD-AGHA (Argelia) estima que la propuesta del Reino Unido relativa a los temas 113 y 29 es interesante pero presenta problemas, porque el Comité *Ad*

Hoc es todavía un órgano endeble y requiere apoyo de la Comisión, que debe examinar su informe muy cuidadosamente. El orador insta nuevamente a que el tema 116 sea colocado al final del programa de la Comisión.

22. El Sr. BAJA (Filipinas) apoya la propuesta de Argelia de que se asignen más sesiones al tema 113, que es de un interés considerable. Insta a que el tema 29 sea debatido separadamente, después del tema 113, ya que los dos temas han sido examinados anteriormente en foros distintos.

23. El Sr. FERNANDEZ BALLESTEROS (Uruguay) recuerda a la Comisión de que en el anterior período de sesiones se declaró que el orden en la lista de los temas para su examen no indicaba de ninguna manera su importancia relativa. Todos los temas son de gran importancia, incluso el tema 116, que fue el último debatido por la Comisión en el anterior período de sesiones, cuando se postergó por segunda vez. El orador está de acuerdo con el representante de los Estados Unidos de América en que el tema es importante y no debe ser colocado al final del programa de la Comisión, pues allí corre el riesgo de ser postergado nuevamente.

24. El Sr. STEEL (Reino Unido) desea aclarar su propuesta. Los temas 113 y 29 tienen, en efecto, características distintas. Sin embargo, los asuntos que tratan se superponen y sería útil que las delegaciones tuvieran la posibilidad de hablar sobre los dos temas al mismo tiempo y pudieran evitar así decir dos veces las mismas cosas o cosas similares. El debate sería entonces más flexible y quizás hubiera menos y más cortos discursos.

25. El Sr. DROZDOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que la Comisión necesita más tiempo para examinar la organización de los trabajos y propone que el debate se postergue hasta la sesión siguiente.

26. El PRESIDENTE acoge con beneplácito la propuesta soviética e insta a las delegaciones del Reino Unido, España, Filipinas y Argelia a celebrar consultas y llegar a un acuerdo sobre los temas 113 y 29. Pide que en general no se cambie el orden de examen de los temas, e insta a las delegaciones a estudiar el informe relativo al tema 109 en la sesión siguiente.

Se levanta la sesión a las 12.05 horas.

1524a. sesión

Miércoles 24 de septiembre de 1975, a las 10.50 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1524

Organización de los trabajos (A/C.6/434, A/C.6/L.1015)

1. El PRESIDENTE inquiere acerca de la marcha de las consultas oficiosas que él sugirió, al final de la sesión anterior, con respecto a los temas 113 y 29 y a su lugar en el programa de la Comisión.

2. El Sr. STEEL (Reino Unido) dice que pudo ponerse en contacto con los representantes de España y de Filipinas, pero no con el de Argelia. Considera que se está avanzando hacia una solución, pero que se requerirá más tiempo.

3. El PRESIDENTE dice que advierte que la cuestión de la colocación del tema 116 tampoco se ha resuelto todavía,

pero que desearía saber si algún representante desea hacer otras propuestas. Pregunta si, fuera de las cuestiones de examinar juntamente los temas 113 y 29 y de la colocación del tema 116, las demás sugerencias de la Secretaría acerca de la organización de los trabajos del Comité son aceptables.

4. El Sr. BAJA (Filipinas) dice que su delegación está dispuesta a aceptar el orden de temas propuesto, pero considera que la cuestión del número de sesiones asignadas a cada tema requiere más examen. El representante de Argelia ha pedido, por ejemplo, que se asignen más de siete sesiones al tema 113.

5. El PRESIDENTE dice que si se consideran juntos los temas 113 y 29 quedará bastante tiempo para el estudio cabal de ambos.

6. El Sr. BAQIR (Pakistán) dice que su delegación se opone a que se debatan juntos los temas 113 y 29. Son temas distintos y se los debe examinar por separado.

7. El PRESIDENTE insta al representante del Pakistán a tomar parte en las consultas oficiosas sobre esos temas. Dice que, de no haber objeciones, entenderá que el Comité aprueba su programa de trabajo tal como figura en los párrafos 2 y 8 del documento A/C.6/L.1015, con sujeción a lo que resulte de las consultas oficiosas acerca de los temas 113, 29 y 116.

Así queda decidido.

Se levanta la sesión a las 11.05 horas.

1525a. sesión

Viernes 26 de septiembre de 1975, a las 10.50 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1525

Organización de los trabajos (A/C.6/434, A/C.6/L.1015)

1. El PRESIDENTE dice que, conforme a la decisión adoptada por la Comisión en la sesión precedente, ha celebrado con las delegaciones interesadas consultas relativas al orden en que la Comisión se ocupará de los temas del programa que se le han asignado. En las consultas se acordó que las delegaciones que lo deseen podrán debatir los temas 113 y 29 en forma conjunta, entendiéndose que siguen siendo temas distintos y que cualesquiera proyectos de resolución relativos a ellos deberán presentarse completamente separados. Por consiguiente, debe desplazarse el tema 29 de la lista de temas del programa que figura en el documento A/C.6/434 de modo que figure a continuación del tema 113. También se ha acordado que el tema 116 del programa se desplace hasta el final de la lista, entendiéndose que se asignará un número suficiente de sesiones para el examen del tema y que no se postergará para otro período de sesiones.

2. El Sr. FERNANDEZ BALLESTEROS (Uruguay) dice que, en opinión de su delegación, debe seguirse el orden de examen de los temas sugerido en la nota de la Secretaría (véase A/C.6/L.1015, párr.4). Está dispuesto a convenir, sin embargo, en que se trate al final el tema 116, con la condición de que se den firmes seguridades de que dicho tema, al que su delegación atribuye considerable importancia, sea examinado en el actual período de sesiones.

3. El Sr. MONTENEGRO (Nicaragua) y el Sr. PRIETO (Chile) apoyan esas observaciones.

4. El Sr. SABEL (Israel) dice que su delegación está descontenta con la propuesta de ubicar el tema 116 al final de la lista. Dicha medida de la Comisión puede muy bien

interpretarse como un intento por parte de la Comisión de evadir su responsabilidad para con las Naciones Unidas y la comunidad mundial en general de estudiar y redactar medidas jurídicas para combatir el flagelo de las actividades terroristas que continúa castigando, incapacitando y matando a civiles inocentes en todo el mundo. Su delegación considera firmemente que la Comisión debiera encontrar tiempo suficiente para ocuparse en forma adecuada y completa del tema y agradece las seguridades del Presidente de que se asignará tiempo suficiente para su examen.

5. El Sr. ABDALLAH (Túnez) hace suyas las propuestas del Presidente relativas al orden de examen de los temas; sin embargo, tiene reservas en lo relativo a los temas 113 y 29. No ve relación alguna entre los dos.

6. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, entenderá que la Comisión conviene en que quienes lo deseen puedan debatir en forma conjunta los temas 113 y 29 y en que el tema 116 se examinará al final, entendiéndose que se asignará tiempo suficiente para su examen.

Así queda decidido.

7. El PRESIDENTE dice que se espera la próxima llegada a Nueva York del Presidente de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), que estará disponible para presentar su informe a partir del 29 de septiembre. Por lo tanto, sugiere que la Comisión considere conveniente suspender el debate sobre el tema 109 el 30 de septiembre, de modo que el Presidente de la CNUDMI pueda presentar su informe y las delegaciones puedan hacerle las preguntas que deseen.

Así queda decidido.

8. El Sr. ROSENSTOCK (Estados Unidos de América) dice que podría ser útil que la Comisión tuviera la oportunidad de debatir el tema 109 junto con el tema 108. Debería estudiarse la conveniencia de incluir juntos en la lista ambos temas y de sumar el número de sesiones que se les han asignado como temas separados.

9. El PRESIDENTE dice que la sugerencia de los Estados Unidos es buena. Para terminar, anuncia que se cerrará la lista de oradores sobre el tema 109 al final de la sesión prevista para el 29 de septiembre de 1975.

Se levanta la sesión a las 11.15 horas.

1526a. sesión

Lunes 29 de septiembre de 1975, a las 15.20 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya)

A/C.6/SR.1526

TEMA 109 DEL PROGRAMA

Sucesión de Estados en materia de tratados: informe del Secretario General (A/10198 y Add.1, A/9610/Rev.1*)

1. El PRESIDENTE recuerda que la lista de los oradores que deseen tomar la palabra sobre el tema en examen se cerrará al término de la sesión en curso. La Comisión, después de las sesiones previstas para el día siguiente, suspenderá el examen del tema para abordar el estudio del tema 108, relativo al informe de la Comisión de las Naciones Unidas de Derecho Mercantil Internacional.

2. El Sr. KLAFKOWSKI (Polonia) dice que su delegación desea, en primer lugar, felicitar a la Comisión de Derecho Internacional (CDI) y a sus dos Relatores Especiales sobre la cuestión de la sucesión de Estados en materia de tratados por el proyecto de artículos que han elaborado y los comentarios muy profundos que lo acompañan, que figuran en la sección D del capítulo II del informe de la CDI sobre su 26º período de sesiones (A/9610/Rev.1). Ya se han concluido 10 convenciones multilaterales de codificación sobre la base de proyectos elaborados por la CDI, y el proyecto de artículos examinado será, por tanto, la undécima convención elaborada de esa forma. Ese éxito se ha debido sobre todo al método de trabajo de la CDI, tal como se desprende de los párrafos 45 a 47 y 51 a 56 de su informe. A este respecto, la delegación de Polonia apoya las conclusiones expresadas en el párrafo 83 del informe en lo concerniente a los trabajos de la CDI sobre la sucesión de Estados en materia de tratados.

3. En segundo lugar, la delegación de Polonia observa con satisfacción que la CDI ha tenido en cuenta ciertas observaciones de su Gobierno. La delegación de Polonia estima que el proyecto de artículos es generalmente aceptable y constituye una buena base para la elaboración de una convención. La CDI ha hecho bien en incorporar los artículos 11 y 12 en la primera parte del proyecto (Disposiciones generales). La delegación de Polonia apoya los artículos 11 (Regímenes de frontera) y 14 (Sucesión respecto de una parte del territorio) de la última versión del proyecto de artículos. El Gobierno polaco ha precisado ya,

en sus observaciones¹, su actitud a ese respecto. El nuevo artículo 13. (Cuestiones relativas a la validez de un tratado) es ciertamente útil desde el punto de vista del conjunto del proyecto. La delegación de Polonia estima que los nuevos artículos 31, 32, 35, 36 y 37 derivan de la práctica de los Estados, lo que puede contribuir de manera positiva a su aplicación.

4. En tercer lugar, la delegación de Polonia desea señalar que ciertos problemas aún no han sido resueltos: se trata especialmente del artículo 7, de la distinción mencionada en el párrafo 72 del informe, y de dos textos propuestos por miembros de la CDI (*ibid.*, párrs. 75 a 80). La delegación de Polonia opina que esas cuestiones podrían ser examinadas por una conferencia internacional convocada para elaborar y adoptar una convención en la materia.

5. Finalmente, la delegación de Polonia está persuadida de que el proyecto de artículos puede ser sometido a una conferencia diplomática de plenipotenciarios, y que su valor jurídico y político justifica el examen del mismo en una fecha próxima, teniendo en cuenta además la importancia del tema y el interés de la seguridad de las relaciones jurídicas internacionales.

6. El Sr. ROSENSTOCK (Estados Unidos de América) estima que la CDI ha llevado a cabo una tarea difícil al elaborar un proyecto de artículos que constituye una base de codificación satisfactoria. Un importante aspecto de ese trabajo es la forma en que el proyecto ha sido armonizado con la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados². No obstante, cabe aportar al proyecto ciertas mejoras; el Gobierno de los Estados Unidos ya ha hecho a ese respecto sugerencias precisas que han sido publicadas en el documento A/10198 y sobre las cuales no hay necesidad de insistir en detalle.

7. El Sr. Rosenstock recuerda que, a juicio de su Gobierno, la forma en que el proyecto trata la cuestión de la no retroactividad requiere un examen más a fondo. No parece haber razón para impedir a un Estado, que se haya

¹ Distribuidas ulteriormente en el documento A/10198/Add.2.

² Véase *Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados*, *Documentos de la Conferencia* (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.70.V.5), documento A/CONF.39/27, pág. 311.

* *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno período de sesiones, Suplemento No. 10.*

independizado antes de la entrada en vigor de la convención prevista, que pase a ser parte en la misma después y que utilice las disposiciones de ese instrumento para regular sus relaciones convencionales teniendo en cuenta la situación existente en el momento en que los artículos pasen a ser aplicables al Estado sucesor.

8. En lo tocante a las propuestas relativas a los tratados multilaterales de carácter universal, el Sr. Rosenstock comprende que se trata de dar la aplicación más amplia posible a las normas fundamentales que se encuentran frecuentemente en esos tratados. No obstante, la inclusión de disposiciones sobre esa cuestión en el proyecto plantea varias objeciones. En primer lugar, no hay consenso sobre lo que debe entenderse por “tratado multilateral de carácter universal”. En lugar de aclarar el problema, la definición propuesta parece más bien reflejar las largas discusiones estériles de la Conferencia de Viena sobre el derecho de los tratados a ese respecto. Hay tantos tratados cuyo carácter sería incierto según la definición propuesta, que ella plantearía más dificultades de las que resolvería. Además, podría imponer a los Estados recién independizados numerosas obligaciones, inclusive obligaciones financieras, de las que podrían no tener conocimiento. Los aspectos más importantes de los tratados que pueden considerarse “tratados multilaterales de carácter universal” son los que codifican el derecho existente o los que se consideran normas de derecho internacional obligatorias para todos como, por ejemplo, las disposiciones del Artículo 2 de la Carta, y prácticamente todas las disposiciones de las Convenciones de Viena sobre las relaciones diplomáticas, sobre relaciones consulares y sobre el derecho de los tratados. Esas normas se aplicarían en todos los casos a todos los Estados, nuevos o antiguos.

9. En cuanto a la cuestión de la notificación de la sucesión en un tratado multilateral, el Sr. Rosenstock estima que el enfoque adoptado en el proyecto es satisfactorio. No obstante, la delegación de los Estados Unidos sigue creyendo que procedería prever disposiciones relativas a los efectos de las objeciones a una notificación de sucesión basadas en el hecho de que esa sucesión sería incompatible con el objeto y la finalidad del tratado, y al respecto su delegación mantiene las opiniones ya expresadas por su Gobierno (véase A/10198).

10. En cuanto a la cuestión de la solución de controversias, el Sr. Rosenstock estima que es esencial que la convención prevista contenga un procedimiento para ese fin. La convención podría estipular que todas las cuestiones relativas a su interpretación o a su aplicación serán sometidas a la Corte Internacional de Justicia. En efecto, solamente la Corte puede asegurar una igualdad de trato a todos los países, ricos o pobres, grandes o pequeños, y crear una jurisprudencia que podría orientar el comportamiento de los Estados. Dado que el proyecto ha sido elaborado teniendo en cuenta las observaciones de un número tan grande de gobiernos y que está destinado a convertirse en un instrumento abierto a la firma de todos los Estados, el Sr. Rosenstock no cree que las objeciones que algunos han planteado con respecto a la aplicación de un procedimiento obligatorio de arreglo de controversias sean válidas. Ahora bien, en caso de que la comunidad internacional considerara que no está en una fase suficientemente avanzada de desarrollo para aceptar esa solución, el Sr. Rosenstock

estima que procedería adoptar, como mínimo, el procedimiento de conciliación y de arbitraje previsto por la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.

11. La delegación de los Estados Unidos estima que el objeto del proyecto de artículos es importante y que ese texto constituye una excelente base de codificación. Por tanto, piensa que convendría convocar una conferencia diplomática para tratar la cuestión. Esa conferencia podría celebrarse en la primavera de 1976, o si ello no fuera posible teniendo en cuenta el calendario de conferencias, a principios de la primavera de 1977.

12. El Sr. BUSSE (República Federal de Alemania) recuerda que las observaciones de su Gobierno sobre el proyecto de artículos acaban de ser publicadas bajo la signatura A/10198/Add.1. Por tanto, el Sr. Busse se limitará a destacar los puntos principales de las mismas.

13. A juicio del Gobierno de la República Federal de Alemania, el proyecto de artículos constituye una buena base para proseguir los trabajos de elaboración de una convención sobre la sucesión de Estados en materia de tratados. La CDI ha hecho bien en aprovechar en su proyecto la estructura general y la terminología de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, de forma que constituya un conjunto coherente y uniforme de reglas de derecho en esa importante esfera de las relaciones internacionales.

14. El Gobierno de la República Federal de Alemania ha sugerido que, paralelamente a sus trabajos sobre el proyecto de artículos, la CDI intente codificar el derecho de la sucesión de Estados en las materias distintas de los tratados. Por tanto, podría ser conveniente aplazar toda decisión definitiva acerca del tenor de una convención sobre la sucesión de Estados en materia de tratados hasta el momento en que se hayan definido claramente las grandes líneas del fundamento jurídico de la sucesión de Estados en las materias distintas de los tratados.

15. El Gobierno de la República Federal de Alemania es partidario de que el proyecto contenga disposiciones que regulen el arreglo de controversias. Tales disposiciones son indispensables habida cuenta del número considerable de términos complejos e insuficientemente definidos y de cláusulas que podrían suscitar interpretaciones divergentes. La propuesta del Sr. Kearny de un nuevo artículo 32 (véase A/9610/Rev.1, nota 58) debería gozar del beneplácito de todos los Estados, incluidos los que se oponen al arreglo obligatorio de controversias. No obstante, será necesario examinar si ese modo de arreglo bastaría para resolver todas las controversias posibles o si, en ciertas situaciones, no sería preferible adoptar un procedimiento más obligatorio. Se podría prever que la cuestión fuese llevada ante un tribunal arbitral o ante la Corte Internacional de Justicia.

16. En cuanto a la propuesta del Sr. Ushakov sobre el artículo 12 *bis* (*ibid.*, nota 57), el Gobierno de la República Federal de Alemania estima que no es deseable que los tratados multilaterales de carácter universal sean objeto de un trato diferente. Apenas parece posible una diferenciación satisfactoria entre los tratados multilaterales cuya continuidad se desee garantizar y de los demás tratados. El concepto de tratados multilaterales generales fue clara-

mente rechazado al elaborarse la Convención de Viena y, por tanto, no podría ser incluido en una convención sobre la sucesión de Estados.

17. El Gobierno de la República Federal de Alemania considera que los artículos 29 y 30 del proyecto no han sido suficientemente aclarados para ser objeto de una codificación. Deberían ser reexaminados con objeto de evitar toda confusión y todo malentendido en su aplicación.

18. El Sr. Busse subraya que su Gobierno comparte la convicción general según la cual habría que realizar esfuerzos suplementarios para definir reglas prácticas sobre la sucesión de Estados en materia de tratados. Parece prematuro pensar en convocar ya una conferencia internacional. El Sr. Busse estima, pues, que convendría pedir a la CDI que reexaminase el proyecto de artículos en función de las observaciones escritas de los Estados y que estudiase las propuestas del Sr. Kearny y del Sr. Ushakov.

19. El Sr. NOLAN (Australia) señala que, como lo observa la CDI en su informe sobre la labor realizada en su 26º período de sesiones, el problema principal relativo a la codificación de las normas aplicables a la sucesión de Estados en materia de tratados consiste en lograr un equilibrio entre el principio de la continuidad y el de la "tabla rasa". Al presente, como ocurre inevitablemente cuando se trata de lograr una fórmula de transacción, los resultados de los trabajos de la CDI distan de ser perfectos. Evidentemente, la CDI ha debido ceder con frecuencia a consideraciones prácticas y de política a expensas de precedentes o principios estrictamente jurídicos. Sin embargo, el Gobierno australiano considera que, en general, el proyecto de artículos es aceptable.

20. Reconociendo la validez del principio según el cual un Estado de reciente independencia debe tener derecho a determinar sus propias obligaciones contractuales, a la delegación australiana le satisface observar, sin embargo, que el proyecto de artículos pone ciertos límites a ese principio. De aplicarse en forma absoluta, el principio de la "tabla rasa" no sólo comprometería la estabilidad y la continuidad de las relaciones internacionales, sino que privaría a los Estados de reciente independencia de las disposiciones contractuales que les eran aplicables antes de su independencia, que les eran favorables y que consideran que todavía les son favorables. Sería un error suponer que todos los tratados concertados por una Potencia colonial y aplicables a sus territorios dependientes obedecen únicamente a los intereses de la primera y son, por lo tanto, desfavorables a los últimos. A ese respecto, tal vez convenga señalar a la atención de la Comisión la posición adoptada por el nuevo Estado de Papua Nueva Guinea en una carta dirigida al Secretario General. Papua Nueva Guinea declara que reconoce la oportunidad de mantener en lo posible la continuidad de sus relaciones contractuales con los demás Estados. Reconoce también la necesidad de examinar todos los tratados que anteriormente eran aplicables a su territorio con miras a determinar si deben permanecer en vigor. El Gobierno de Papua Nueva Guinea se propone estudiar todos los tratados bilaterales y multilaterales anteriores con el objeto de formular una declaración sobre sus intenciones respecto de cada uno de ellos. Mientras tanto, el Gobierno de Papua Nueva Guinea respetará, sobre una base de

reciprocidad, todos los tratados que eran aplicables a su territorio antes de su independencia.

21. Sin desconocer la necesidad de proteger los legítimos intereses de los Estados de reciente independencia, el Gobierno de Australia está convencido de que hay que asegurar un cierto grado de continuidad en las obligaciones internacionales. Australia, que antes fue también colonia, se consideró obligada por los tratados del imperio británico que le eran aplicables antes de su independencia. Desde entonces, ha examinado cuidadosamente esos tratados, y de ellos se siguen considerando vigentes los que figuran en la lista de tratados australianos, mientras que los que no figuran en esa lista no son ya aplicables a Australia. Así, en el momento de hacer su entrada en la vida internacional, Australia pudo beneficiarse de una gran variedad de tratados útiles que, en caso contrario, hubiese tenido que negociar de nuevo. Para dar un ejemplo de algunas de las dificultades que podrían plantearse si se aplicara sin reservas el principio de la "tabla rasa", un Estado que no deseara obligarse por un tratado del imperio británico podría considerar tal tratado como inaplicable entre ese Estado y Australia. Ahora bien, como no está prevista la novación para determinados tratados del imperio británico que figuran en la lista de tratados australianos, la aceptación sin reservas del principio de la "tabla rasa" podría plantear la cuestión del mantenimiento de la vigencia de esos tratados. Por eso, Australia no podría poyar la aplicación retroactiva de principios que pudieran menoscabar relaciones contractuales de larga data.

22. La delegación de Australia considera que conviene establecer un equilibrio entre las evidentes ventajas de la continuidad en las obligaciones internacionales y el deseo comprensible de los Estados de reciente independencia de reexaminar sus obligaciones contractuales, con objeto de llegar a una solución universalmente aceptable en materia de sucesión de Estados. Quizás el enfoque general de la CDI sea, desde un punto de vista de política práctica, el más aceptable en el plano universal. Algunos Estados pueden considerar que el proyecto de artículos no atiende suficientemente al principio de la libre determinación y, otros, que no atribuye suficiente importancia al principio de la continuidad; la delegación de Australia, por su parte, considera que el proyecto representa un equilibrio aceptable entre esos dos puntos de vista opuestos.

23. El Sr. SETTE CAMARA (Brasil) da la bienvenida a las delegaciones de los tres nuevos Estados Miembros, Mozambique, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe, que vienen a engrosar las filas de la comunidad de Estados Miembros de habla portuguesa.

24. El orador recuerda que la CDI ha dedicado siete largos años, desde el nombramiento del primer Relator Especial, Sir Humphrey Waldock, en 1967, hasta la presentación del proyecto definitivo de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados, al estudio de esa cuestión. Se ha respetado escrupulosamente el procedimiento previsto en el artículo 16 del estatuto de la CDI y los Estados Miembros tuvieron oportunidad de presentar sus observaciones y comentarios sobre el proyecto de artículos tanto después de la primera como después de la segunda lectura. Los comentarios y observaciones presentados por los gobiernos después de la primera lectura fueron examinados

cuidadosamente en su primer informe por el nuevo Relator Especial, Sir Francis Vallat³, y éste aceptó e incorporó en el proyecto un buen número de sugerencias formuladas por los gobiernos. La CDI aprobó el proyecto en su forma definitiva con una sola abstención, y lo ha presentado a la Asamblea General de conformidad con la recomendación expresa formulada en la resolución 3071 (XXVIII). No queda, pues, ninguna duda de que el proyecto de artículos presentado por la CDI en su informe sobre la labor realizada en su 26º período de sesiones es un proyecto definitivo. Por lo demás, en el párrafo 84 de ese informe la CDI, con arreglo al artículo 23 de su estatuto, ha recomendado a la Asamblea General que invite a los Estados Miembros a presentar observaciones y comentarios por escrito acerca del proyecto definitivo de artículos y que convoque una conferencia internacional de plenipotenciarios para estudiar ese proyecto y celebrar una convención sobre la materia. Sorprende, pues, a la delegación del Brasil, constatar al leer el informe del Secretario General (A/10198) que, al parecer, ciertos Estados Miembros desean que la CDI realice en cierta forma una tercera lectura del proyecto. A su juicio, ese procedimiento no se ajustaría a los métodos de trabajo habituales de la CDI y comprometería su labor futura de condificación. Por lo demás, los Estados no están obligados por las conclusiones de la CDI y tienen la posibilidad de modificar total o parcialmente el texto preparado por sus miembros, en la que participan a título de expertos y no como representantes de sus gobiernos. Sería pues, erróneo, remitir a la CDI para un nuevo examen un proyecto de artículos ya presentado en su forma definitiva.

25. Es cierto que dos cuestiones relativas al proyecto de artículos no se han resuelto aún y que, por falta de tiempo, la CDI no ha podido examinar las propuestas formuladas a su respecto. La primera se refiere a los tratados multilaterales de carácter universal, y el autor se pronuncia a favor de su continuidad de derecho. Esa propuesta refleja las mismas preocupaciones que las expresadas por varios gobiernos respecto de los tratados normativos, que a su juicio podrían constituir una excepción al principio de la "tabla rasa". Suscita dificultades análogas a las que han llevado a la CDI a rechazar las sugerencias de gobiernos encaminadas a que los tratados normativos sean objeto de un trato especial, a saber, un problema de definición. En efecto, el concepto de "tratado multilateral de carácter universal", como el de "tratado normativo", es demasiado vago. Además, no hay razón para que, si los Estados que no sean los de reciente independencia no se consideren automáticamente vinculados por los "tratados normativos" o por "los tratados de carácter universal", no ocurriese lo mismo con los Estados de reciente independencia. De aprobarse esa propuesta, esos Estados entrarían en la vida internacional con la carga de un número considerable de obligaciones contractuales que les habrían sido impuestas sin haber sido consultados. La delegación del Brasil considera que ningún miembro de la comunidad internacional debería ser obligado, sin una manifestación de su voluntad, a una participación automática en una convención, cualquiera que ésta fuese.

26. La delegación del Brasil aprueba el artículo 12 tal como ha sido establecido por la CDI, y considera que no

corresponde prever en él excepciones para determinadas categorías de tratados. Sin embargo, respeta el derecho de toda delegación de proponer, cuando se reúna una conferencia futura para la elaboración de una convención sobre la sucesión de Estados en materia de tratados, apartarse del criterio en que está fundado el proyecto de artículos establecido por la CDI y que está encaminado a conservar la integridad del principio de la "tabla rasa". La delegación del Brasil considera que sería un error remitir a la CDI el proyecto presentado en su forma definitiva para que examine una propuesta que contradice la esencia misma de ese proyecto.

27. La otra cuestión pendiente atañe a la solución de controversias. A juicio del orador, la CDI hizo bien en no zanjar ese problema. Corresponderá a la futura conferencia de plenipotenciarios elegir el mecanismo adecuado para ese fin. El procedimiento de conciliación previsto en el anexo de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados es una posibilidad y el procedimiento incorporado en la Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, incluso los agentes diplomáticos⁴ es otra y es posible que puedan preverse otras soluciones. De cualquier manera, las disposiciones relativas a la solución de controversias pueden adoptarse independientemente del cuerpo del proyecto mismo. La CDI se ha manifestado dispuesta a examinar esa cuestión en el marco del proyecto de artículos en su próximo período de sesiones, si la Asamblea General decide encomendarle esa tarea, y la delegación del Brasil confía en que ello no implicará que la CDI deba reconsiderar el conjunto del proyecto de artículos. Además, preferiría que la cuestión se dejase en suspenso hasta la elaboración de la convención misma. La delegación del Brasil opina que, por el momento, la Sexta Comisión debería limitarse a examinar las cuestiones de procedimiento planteadas por el proyecto de artículos y dejar para más tarde el examen de las cuestiones de fondo, que podría confiarse indistintamente a la Sexta Comisión o a una conferencia internacional de plenipotenciarios.

28. El Sr. HAGARD (Suecia) dice que, a juicio de su delegación, el proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados es importante tanto desde el punto de vista político como jurídico. En efecto, el proyecto refleja las perturbaciones que se han producido en el mundo a causa del proceso de descolonización y contribuye al desarrollo del derecho internacional, ya que se ocupa de una esfera en que el derecho consuetudinario tiene lagunas. Además, la doctrina no es unánime en cuanto a la mejor forma de codificar las cuestiones que no han sido resueltas. En el debate celebrado durante el vigésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General sobre el informe de la CDI sobre su 26º período de sesiones, el sentir general fue que era prematuro decidir la convocación de una conferencia con miras a dar al proyecto su forma definitiva o confiar esa tarea a cualquier otro órgano. Aplicando el párrafo 2 de la sección II de la resolución 3315 (XXIX), aprobada por consenso por la Asamblea General, varios países — entre ellos Suecia — presentaron sus observaciones y comentarios sobre el proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados y sobre las propuestas mencionadas en el párrafo

³ Véase *Anuario de la Comisión de Derecho Internacional*, 1974, vol. II, documento A/CN.4/278 y Add.1 a 6.

⁴ Resolución 3166 (XXVIII) de la Asamblea General, anexo.

75 del informe de la CDI, relativa una a los tratados multilaterales de carácter universal y la otra a la solución de controversias, así como sobre el procedimiento que debía seguirse y la forma que debía adoptarse para culminar los trabajos relativos al proyecto de artículos. Esas observaciones, que figuran en el informe del Secretario General (A/10198), así como las que se presentaron antes, merecen un examen más amplio. La delegación sueca considera que la propuesta relativa a los tratados multilaterales de carácter universal revisten gran interés y deberían ser objeto de un estudio a fondo. En cuanto a la segunda propuesta, la delegación sueca opina que es indispensable incluir en el proyecto de artículos disposiciones relativas a la solución de controversias. La CDI está especialmente calificada para pronunciarse sobre esas dos propuestas en el contexto del proyecto de artículos.

29. La delegación sueca espera, pues, que, en su trigésimo período de sesiones, la Asamblea General pedirá a la CDI que prosiga su labor sobre el proyecto de artículos, con el examen de la cuestión de los tratados multilaterales de carácter universal y la de la solución de controversias. Cuando se haya hecho eso, corresponderá a la Asamblea General decidir en qué recinto y en qué momento deberá el texto del proyecto recibir su forma definitiva y aprobarse, de preferencia bajo la forma de una convención.

30. La Sra. ULYANOVA (República Socialista Soviética de Ucrania) desea ante todo dar la bienvenida a las delegaciones de los tres nuevos Estados que acaban de ser admitidos en las Naciones Unidas: las Repúblicas de Mozambique, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe.

31. La cuestión de la sucesión de Estados en materia de tratados figura por primera vez en el programa de la Sexta Comisión, si bien ésta ya ha debatido el tema durante varios períodos de sesiones anteriores, al examinar los informes de la CDI. Durante esos debates, la Comisión ha convenido en subrayar el carácter complejo de la sucesión de Estados en materia de tratados y la calidad del proyecto de artículos preparado por la CDI al término de muchos años de labor. Todo proyecto de artículos que atañe al derecho internacional debe ser examinado por la Sexta Comisión, habida cuenta de que está destinado a ser un elemento constitutivo del derecho contemporáneo y a servir al desarrollo progresivo del derecho internacional en general. Es aun más necesario respetar estos criterios cuando se trata de la sucesión de Estados, ya que esa cuestión está estrechamente vinculada con los principios de igualdad soberana de los Estados y de libre determinación de los pueblos y con el derecho de los nuevos Estados a decidir qué tratados seguirán vigentes para ellos, eso último en interés del equilibrio y de la estabilidad de las relaciones internacionales. El proyecto de la CDI responde a tales exigencias; enuncia una concepción justa de la sucesión de Estados y apunta a facilitar a los numerosos Estados Nuevos el acceso a las relaciones contractuales internacionales. El proyecto tiene en cuenta las tendencias esenciales del derecho moderno de los tratados, así como la norma general, enunciada en los artículos 11 y 12 del proyecto, según la cual la sucesión de Estados no afecta al régimen de fronteras ni a ciertos regímenes territoriales establecidos por un tratado.

32. Por esas razones, el proyecto constituye una base útil para proseguir la labor de codificación en la materia, si bien

ello no significa que esté suficientemente maduro para poder solucionar en esa etapa la cuestión del procedimiento que debe seguirse respecto de la última fase de la codificación. Es necesario proseguir los trabajos sobre el proyecto, tanto más cuanto que las opiniones divergentes expresadas el año anterior en la Sexta Comisión atestiguan los graves desacuerdos sobre ciertas cuestiones fundamentales relativas a los principios de base.

33. La oradora coincide con el representante del Brasil en que la CDI ha respetado todas las etapas del procedimiento previsto, pero no puede aceptar que se sacrifique el fondo por el procedimiento. Las profundas divergencias que se manifestaron en el curso de los debates no pueden ser silenciadas. Por ejemplo, la cuestión de saber cuáles son los casos comprendidos en el proyecto plantea serios problemas. El proyecto no trata los casos de revolución social y se consagra sobre todo a los casos de acceso a la independencia como consecuencia del derrumbamiento del régimen colonial. Pero el proceso de descolonización toca a su fin, en tanto que es muy posible que abunden en el futuro los casos de sucesión por fusión, unión o separación de territorios; ahora bien, esos casos se tratan en forma menos elaborada en el proyecto de artículos.

34. Los proyectos de dos nuevos artículos — 12 bis y 32 — no han sido estudiados a fondo y han merecido opiniones sumamente diversas en los comentarios reproducidos en el informe del Secretario General. Además, la delegación de la RSS de Ucrania desea señalar a la atención de la Comisión que sólo algunos Estados han presentado comentarios sobre el proyecto, lo que prueba la complejidad de los problemas que se plantean y permite deducir que muchos Estados necesitan más tiempo para estudiar el proyecto a fondo. Además, la mayoría de los Estados que han presentado sus observaciones consideran que es prematuro responder a la pregunta sobre la convocatoria de una conferencia.

35. También es oportuno mencionar el vínculo estrecho que existe entre la sucesión en materia de tratados y la sucesión relativa a otros asuntos. En ambos casos, las disposiciones generales deben ser idénticas, en particular en cuanto hace a la noción de sucesión y a la fecha de la sucesión. No se podrá llegar a una redacción satisfactoria de las disposiciones comunes a los dos aspectos de la sucesión de Estados si las decisiones no se adoptan sobre la base de un examen profundo de ambos aspectos.

36. La delegación de la RSS de Ucrania considera, pues, que sería prematuro adoptar una decisión sobre la cuestión del procedimiento y que la CDI debe examinar nuevamente el proyecto de artículos a la luz de las observaciones de los gobiernos y de los debates de la Sexta Comisión durante los períodos de sesiones vigésimo noveno y trigésimo de la Asamblea General.

37. El Sr. SADI (Jordania) dice que su delegación ya expresó su punto de vista sobre la cuestión durante el anterior período de sesiones (1492a. sesión) y no considera deseable volver a exponerlo en esta etapa. Por su parte, el Gobierno de Jordania no ha podido presentar aún sus observaciones escritas. El Sr. Sadi opina que sería conveniente extender el plazo del envío de comentarios.

38. El Sr. GOBBI (Argentina) felicita a la CDI y a los Relatores Especiales por haber elaborado un documento

jurídico que contempla las necesidades de los nuevos Estados que emergen a la vida internacional. Ha llegado el momento de coordinar los diferentes puntos de vista a fin de que ese trabajo sea apto para su tratamiento a nivel diplomático por medio de una conferencia *ad hoc*. Sin embargo, se está en una etapa que no es sólo procesal, y la delegación de la Argentina desea formular algunas observaciones de fondo.

39. El artículo 7, referente a la retroactividad, no está debidamente ubicado y su actual redacción, por su imprecisión, va a dar lugar a serias dificultades hermenéuticas. Debe señalarse también que es válida la observación del Gobierno de Austria en lo referente al párrafo 2 del artículo 19 (véase A/10198), ya que aun si esa disposición no existiera, podría ser necesario formular reservas a través de los mecanismos adecuados sin hipotrofiar indebidamente el principio de la “tabla rasa”. Con referencia a los artículos 38 y 39, la delegación de la Argentina considera que podrían suprimirse, habida cuenta de que esas materias deben ser regidas por los principios generales aplicables a cada caso.

40. En el ámbito de los tratados multilaterales hay algún campo de incertidumbre, pero no se trata de una cuestión que pueda ser resuelta en un foro de expertos exclusivamente. Por ello, sólo una conferencia a nivel de plenipotenciarios podría encontrar una formulación adecuada. La conferencia podría resolver igualmente el problema del arreglo de controversias por métodos propios o escogiendo el criterio del artículo 66 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.

41. La delegación de la Argentina coincide con lo manifestado por varias delegaciones en el sentido de que el trabajo de la CDI, con un análisis adecuado de la Sexta Comisión, podrá servir de base para la codificación de esa materia en el marco de una conferencia de plenipotenciarios.

42. El Sr. MEISSNER (República Democrática Alemana) se complace en señalar los progresos logrados entre el primer proyecto de artículos de la CDI⁵ y el que se está examinando, pero considera que el texto debe ser objeto de un nuevo examen antes de poder presentarlo a otra instancia. En materia de sucesión de Estados, el objeto debe ser asegurar la estabilidad y la seguridad de las relaciones contractuales, sobre la base de los principios fundamentales de derecho internacional y, por otra parte, facilitar la incorporación del Estado sucesor al ámbito de las relaciones internacionales de manera que pueda hacer uso de sus derechos sin obstáculos ni demoras, sobre la base de la igualdad soberana y de la libre determinación, y reexaminar los tratados concertados por el Estado predecesor.

43. A fin de mantener la paz mundial y alentar la cooperación internacional, es indispensable que el principio de la continuidad se aplique a todos los tratados multilaterales de carácter universal, cualquiera sea el tipo de sucesión que entre en juego. Se trata en ese caso de tratados abiertos a todos los Estados y que tienen un interés mundial, por ejemplo, el Tratado sobre la no proliferación

de las armas nucleares, los Pactos relativos a los derechos humanos y los Convenios de la Cruz Roja. Por ello, la delegación de la República Democrática Alemana apoya decididamente el artículo 12 *bis* propuesto por el Sr. Ushakov. Ciertas delegaciones han destacado que sería difícil establecer una distinción entre los tratados denominados normativos y los tratados que no lo son. Ahora bien, tal distinción no es necesaria en ese caso. El carácter universal de un tratado es un criterio suficiente para justificar que se aplique el principio de la continuidad. En el mismo orden de ideas, la delegación de la República Democrática Alemana no podría admitir la idea expresada en el comentario relativo al artículo 15 de que la continuidad de los tratados multilaterales de carácter universal no es necesaria puesto que las normas principales contenidas en esos tratados están igualmente consagradas por el derecho internacional consuetudinario. Puesto que actualmente los tratados, y en particular los tratados de carácter universal, son la fuente principal del derecho internacional, parecería oportuno partir de esa base firme. La codificación del derecho internacional tiene por fin precisamente eliminar las ambigüedades inherentes al derecho consuetudinario. La delegación de la República Democrática Alemana estima que no ha llegado aún el momento de convocar una conferencia para la codificación de ese tema, por lo menos hasta que los problemas antes mencionados y otros problemas aún en suspenso hayan sido solucionados por la CDI.

44. El Sr. LAMPTEY (Ghana) dice que su país se reserva el derecho de expresar su opinión definitiva sobre el proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados cuando se haga la formulación definitiva de la convención. Por ahora, la delegación de Ghana considera que el proyecto de artículos elaborado por la CDI es satisfactorio en su conjunto y piensa que su adopción contribuirá al desarrollo y a la codificación del derecho internacional. En su opinión, la definición de la expresión de “Estado de reciente independencia” del inciso f) del párrafo 1 del artículo 2 es muy importante, porque permite circunscribir las circunstancias en que se aplicará el principio de la “tabla rasa” a los Estados sucesores. De hecho, ese principio no se aplicaría sino a los Estados que emergen de la descolonización o de un proceso de emancipación análogo. Sin embargo, la lectura del párrafo 3 del artículo 33 da motivos para pensar que sería útil precisar y completar los criterios enunciados en el artículo 2. La delegación de Ghana, que reconoce los méritos del artículo 6, teme que, en ausencia de criterios más precisos que permitan distinguir lo que es y lo que no es ilegal, esa disposición crea un vacío jurídico en los casos de ciertas sucesiones de Estados. El artículo 9 constituye una codificación útil de una práctica muy generalizada entre los Estados de reciente independencia y completa el artículo 26. Los artículos 11 y 12 se refieren a tratados que establecen “obligaciones locales”. El artículo 11, que preserva a las fronteras de los efectos de la sucesión de Estados, tiene el mérito de favorecer la estabilidad internacional. El artículo 12, por el contrario, es menos aceptable. En efecto, parece que, entre los regímenes territoriales protegidos por ese artículo, faltaría incluir las bases navales establecidas por un tratado perpetuo o, por lo menos, concertado por un período muy prolongado, así como las zonas desmilitarizadas y los territorios desmilitarizados originalmente en interés del Estado predecesor y de

⁵ Véase *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo séptimo período de sesiones, Suplemento No. 10*, cap. II, secc. C.

sus aliados. Ese artículo tiene el efecto de imponer al Estado sucesor en su territorio una serie de servidumbres que no responden necesariamente a sus intereses políticos o militares. El artículo 13, que debería servir de salvaguarda, no juega necesariamente ese papel, ya que un tratado del tipo en estudio podría ser perfectamente legal y válido.

45. La libertad de elección inherente al principio de la "tabla rasa" enunciado en el artículo 15 debe ser conservada incluso en lo tocante a los tratados normativos. Aunque el artículo 18 no se basa en una práctica bien establecida de los Estados, es el corolario natural de los artículos 15 y 16 y contribuye al desarrollo del derecho internacional.

46. No se ve con claridad el objetivo del párrafo 1 del artículo 22. Al parecer, las disposiciones de ese artículo tratan de resolver los conflictos que podrían surgir de la retroactividad o de la probabilidad de un hiato entre la fecha de la sucesión de Estados y la de la notificación. No obstante, el vínculo jurídico establecido en el párrafo 1 entre el Estado de reciente independencia y el tratado es inútil, por una parte, porque, al aplicar el principio de la "tabla rasa", el Estado de reciente independencia no está obligado a participar en el tratado, y por la otra, porque, en virtud de las disposiciones del párrafo 2, el tratado permanece sin efecto hasta la fecha de la notificación, que es la fecha más importante para los Estados partes. El hecho de que el Estado de reciente independencia sea parte en un tratado desde la fecha de la sucesión o desde la fecha de entrada en vigor del tratado no tiene, en efecto, mucha importancia, ya que ese Estado se incorpora a un tratado cuya aplicación se considera suspendida respecto a los demás Estados partes.

47. El artículo 26 parece establecer una distinción entre la aplicación provisional respecto de un territorio de los tratados que ya están en vigor y la de los tratados que aún no lo están. En el primer caso, contemplado en el párrafo 1, el Estado de reciente independencia puede notificar su intención de que el tratado se aplique provisionalmente respecto de su territorio. En el caso contemplado en el párrafo 2, sólo puede hacerlo si el tratado era ya aplicable provisionalmente a su territorio en la fecha de la sucesión. Ello significa que un Estado que se incorpora a un tratado en virtud de la aplicación del artículo 17 no puede aplicar dicho tratado provisionalmente, a menos que ya sea aplicable a su territorio. El artículo 17 tiene el objeto de permitir a los Estados de reciente independencia que participen en los tratados que aún no están en vigor para ellos en la fecha de la sucesión.

48. Cabría esperar que un Estado de reciente independencia pudiera tratar de que se le aplicara, en virtud del artículo 26, un tratado de ese género con carácter provisional, en espera de que formulase su notificación de sucesión en el tratado, de conformidad con el artículo 17. Sin embargo, el artículo 26 tiene al parecer como efecto que un Estado interesado en que un tratado que aún no está

en vigor se le aplique provisionalmente deba notificar en primer lugar su sucesión, sea como Estado contratante, sea en calidad de parte, a menos que el tratado no haya sido ya aplicable a título provisional al Estado predecesor. La delegación de Ghana no considera necesaria esa distinción y teme que tenga la consecuencia, en el párrafo 2, de forzar la mano al Estado de reciente independencia, que habría preferido la aplicación provisional del tratado, en tanto decidía si deseaba participar o no en el mismo. Debería ser posible suprimir sin inconvenientes el párrafo 2, puesto que el artículo 28 dispone que la aplicación provisional de un tratado puede darse por terminada si el Estado de reciente independencia expresa su intención de no ser parte en el tratado.

49. El párrafo 3 del artículo 33 prevé una excepción a la norma general según la cual, una vez que un Estado se separa de otro Estado, los tratados en vigor respecto de la totalidad del territorio del último continúan en vigor respecto del primero. El principio de la "tabla rasa" se aplica por lo tanto a un Estado que se separa de otro Estado en circunstancias que revisten esencialmente las mismas características que las que existen en el caso de formación de un Estado de reciente independencia. Esa disposición, si bien es aceptable, no puede menos de plantear problemas si no se dispone de una definición más exacta de las circunstancias en que ese párrafo es aplicable.

50. Por lo que hace a la solución de controversias, parecería razonable adoptar un régimen análogo al previsto en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que la convención prevista está destinada a completar. Sin embargo, la delegación de Ghana aún no tiene una opinión definida sobre esa materia.

51. Respecto de las cuestiones de procedimiento, no tiene objeciones a que la CDI reexamine el proyecto de artículos y estime si la convención habrá de ser aprobada por una conferencia diplomática de plenipotenciarios.

52. El Sr. URIBE (Colombia) dice que su delegación, que ha estudiado cuidadosamente los documentos A/10198 y Add.1, no considera que el número de comentarios y observaciones de los Estados Miembros recibidos por el Secretario General sea suficiente para arrojar un consenso que justifique la convocatoria de una conferencia internacional en un futuro inmediato. La delegación de Colombia opina que correspondería hacer un nuevo llamamiento a los Estados Miembros que aún no lo han hecho para que hagan llegar sus observaciones sobre el proyecto de artículos de la CDI. Con esas nuevas observaciones, la CDI podría perfeccionar su proyecto de artículos, lo que llevaría, después de un plazo razonable, a la convocatoria de una conferencia internacional que podría preverse para 1977. Según la delegación de Colombia, el instrumento a adoptar podría revestir la forma de un protocolo adicional a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.

Se levanta la sesión a las 17.05 horas.

1527a. sesión

Martes 30 de septiembre de 1975, a las 10.45 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1527

TEMA 110 DEL PROGRAMA

Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la labor realizada en su octavo período de sesiones (A/10017)

1. El PRESIDENTE invita al Presidente de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) a presentar el informe de la Comisión (A/10017).
2. El Sr. LOEWE (Presidente de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional) hace una declaración¹.
3. El PRESIDENTE propone, dado que en la declaración del Sr. Loewe figuran muchos puntos importantes no tratados en el informe de la CNUDMI, que se publique su texto íntegramente.

¹ El texto completo de la declaración se publicó como documento A/C.6/L.1017.

4. El Sr. RYBAKOV (Secretario de la Comisión) dice que el costo de publicar la declaración como documento de la Comisión en los seis idiomas de trabajo sería de unos 250 dólares por página. Además, para reproducir la declaración íntegramente como parte del acta resumida de la reunión y no como un documento aparte, entrañaría un costo adicional de 80 dólares por página, ya que las actas resumidas definitivas se publican en forma impresa. En caso de no disponerse del texto de la declaración, el costo de transcribirlo de las grabaciones sonoras sería de unos 400 dólares. Las consecuencias financieras totales, por lo tanto, serían de 6.650 dólares a 8.650 dólares.

5. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, entenderá que la Comisión desea que la declaración del Sr. Loewe sea publicada íntegramente por el método menos costoso posible.

Así queda decidido.

Se levanta la sesión a las 11.55 horas.

1528a. sesión

Miércoles 1° de octubre de 1975, a las 15.25 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1528

En ausencia del Presidente, el Sr. Godoy (Paraguay), Vicepresidente, ocupa la Presidencia.

Organización de los trabajos

El PRESIDENTE observa que ninguna de las delegaciones presentes solicita el uso de la palabra sobre el tema 110. Como el número de oradores inscritos para las sesiones siguientes es relativamente reducido, propone a la Comisión proseguir en forma paralela el estudio de ese tema y el análisis del tema 109. Ruega, por lo tanto, a las delegaciones que deseen hacer uso de la palabra sobre ese último tema que se inscriban en la lista que se elaborará al efecto.

Se levanta la sesión a las 15.35 horas.

1529a. sesión

Jueves 2 de octubre de 1975, a las 15.15 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1529

TEMA 110 DEL PROGRAMA

Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la labor realizada en su octavo período de sesiones (continuación) (A/10017, A/C.6/L.1016, A/C.6/L.1017)

1. El Sr. MANNER (Finlandia) desea felicitar al Presidente de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) por la excelente presentación del informe de la CNUDMI sobre la labor realizada en su octavo período de sesiones (A/10017); así como a la propia CNUDMI, a sus grupos de trabajo y a su secretaría, por la labor cumplida durante el año pasado. En especial, se congratula de que todas las partes interesadas se hayan mostrado dispuestas a aceptar determinadas transacciones. Eso es, principalmente, lo que ha permitido al Grupo de Trabajo sobre la reglamentación internacional del transporte marítimo elaborar un proyecto de convenio sobre el transporte marítimo de mercancías¹, que Finlandia considera sumamente útil y a cuyo respecto presentará observaciones detalladas en su respuesta a la CNUDMI. Cabe destacar que ese es el primer proyecto de convención de alguna importancia que la CNUDMI concluye en una esfera en que están en juego importantes intereses económicos y, en consecuencia, políticos. Igualmente, es una esfera en que desde el punto de vista jurídico existe ya una cierta uniformidad. Sería, pues, lamentable permitir que el nuevo convenio coexista durante demasiado tiempo con las reglas de La Haya². En su noveno período de sesiones, la CNUDMI deberá esforzarse por conservar e incluso acrecentar la uniformidad en ese ámbito.

2. La labor del Grupo de Trabajo sobre la compraventa internacional de mercaderías ha progresado también en forma rápida y debería posibilitar la preparación de una convención sobre la compraventa internacional de mercaderías que, sin duda alguna, serviría al comercio internacional y favorecería la armonización de las leyes nacionales en esa esfera. A ese respecto, cabe señalar que un grupo de trabajo finlandés, encargado de preparar una nueva ley sobre la compraventa, ha recibido instrucciones de tener en cuenta en su labor el proyecto de convención de la CNUDMI.

3. En la preparación de instrumentos relativos al derecho mercantil internacional, hay que evitar una complejidad excesiva que pueda obstaculizar a los Estados cuando quieran adaptar su legislación a esos instrumentos. Al parecer, hasta ahora la CNUDMI ha podido salvar ese escollo.

4. La delegación de Finlandia aprueba sin reservas la decisión de la CNUDMI de mantener en su programa la cuestión de la responsabilidad por los productos y de proseguir su labor preparatoria a ese respecto. Dada la importancia que reviste esa cuestión, convendría que la CNUDMI pudiese dedicarse a ella lo más posible.

5. La delegación de Finlandia aprueba también que se mantenga en el programa de la CNUDMI el tema relativo a las empresas multinacionales y la decisión tomada por la CNUDMI de esperar, para poner a punto su propio programa de trabajo en ese ámbito, que la Comisión de Empresas Transnacionales haya determinado los problemas jurídicos de que podría ocuparse la CNUDMI. Esa decisión debería permitir que los trabajos de la CNUDMI, por una parte, y los de la Comisión de Empresas Transnacionales y del Centro de Información e Investigaciones, por la otra, no se duplicaran.

6. La delegación de Finlandia aprueba las medidas adoptadas por la CNUDMI y su secretaría con respecto al anteproyecto de reglamento de arbitraje para uso facultativo en el arbitraje especial relacionado con el comercio internacional (*ibid.*, anexo I), y señala la importancia de la labor desarrollada en ese ámbito. En efecto, la frecuencia cada vez mayor de relaciones comerciales entre las partes que representan sistemas económicos distintos no puede sino aumentar las ocasiones de litigio. Las reglas y principios enunciados en el anteproyecto se fundan, en su mayoría, en una práctica internacional bien establecida y, en conjunto, son aceptables. Sin embargo, no parece oportuno incluir en el reglamento normas especiales sobre el arbitraje administrado por institutos de arbitraje.

7. En lo que concierne al procedimiento que deberá seguirse cuando un grupo de trabajo termine la elaboración de un proyecto, la delegación de Finlandia considera que el proyecto debe comunicarse a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, para que formulen observaciones, y no solamente a quienes estén representados en la CNUDMI. Ese procedimiento ofrecería a la CNUDMI la posibilidad de darse cuenta del apoyo que recibe el proyecto antes de adoptar ella misma una posición.

8. El simposio sobre la función de las universidades y los centros de investigación con respecto al derecho mercantil internacional parece haber sido un éxito. La CNUDMI debería, pues, proseguir sus actividades en esa esfera y organizar otros simposios que, si atraen la participación de un gran número de profesores de derecho mercantil internacional, no pueden sino favorecer la unificación del derecho mercantil e influir favorablemente en sus trabajos.

9. El Sr. VAN BRUSSELEN (Bélgica) felicita al Presidente y a los demás miembros de la Mesa por su elección y agradece al Presidente de la CNUDMI la presentación del

¹ A/CN.9/105, anexo.

² Véase International Law Association, *Report of the Thirtieth Conference*, vol. II, *Proceedings of the Maritime Law Committee*, Londres, Sweet & Maxwell, Ltd., 1922, pág. 269.

informe de la CNUDMI sobre la labor realizada en su octavo período de sesiones.

10. En lo que concierne a la cuestión del arbitraje, el anteproyecto de reglamento que figura en el anexo I del informe de la CNUDMI es tanto más importante por tratarse de uno de los textos que, de aprobarse el año próximo, podría hacer sentir rápidamente todos sus efectos en una de las esferas más importantes de las relaciones internacionales. Las autoridades belgas manifiestan su total acuerdo con la decisión adoptada por la CNUDMI, mencionada en el párrafo 83 de su informe, pero desea que se incorporen algunas revisiones en el texto del anteproyecto y que algunas de las ideas que allí aparecen en forma ambigua puedan ser confirmadas o expresadas con mayor fuerza en el texto revisado. Refiriéndose al párrafo 4 del anexo I, el orador señala que las autoridades belgas no tienen dudas de que el reglamento de la CNUDMI no puede sustituir a las legislaciones nacionales y que, en consecuencia, esa cuestión debería señalarse a la atención de las partes. A ese respecto, las autoridades belgas no tienen una preferencia marcada respecto de uno u otro de los métodos propugnados al final del párrafo 4.

11. El problema que plantea el alcance del reglamento es más complejo. Tal como está redactado actualmente, comprende dos categorías de arbitrajes calificados de “arbitraje administrado” y “arbitraje no administrado”. Las razones por que las autoridades belgas consideran que el reglamento no debe aplicarse al arbitraje administrado se mencionan en el párrafo 7 del anexo I. La extensión del reglamento al arbitraje administrado no puede ser sino fuente de confusión y de conflictos, dado que los institutos de arbitraje tienen ya su propio reglamento. Para las partes, la referencia a dos reglamentos serviría para provocar, cuando menos, una cierta ambigüedad. Las autoridades belgas comparten, pues, totalmente la opinión que ha prevalecido entre los miembros de la CNUDMI y que tiende, por el momento, a excluir el arbitraje administrado del ámbito del reglamento.

12. Cabe reprochar al artículo 6 del anteproyecto que establezca un procedimiento engorroso y complicado para la designación de árbitros. Ese procedimiento se aligeraría si se atribuyese mayor importancia a la autoridad competente del lugar del arbitraje. Sin duda, esa es la idea que tratan de expresar las tres últimas frases del párrafo 13 del anexo del informe. El significado de ese pasaje sería a todas luces más claro si estuviese redactado en la forma siguiente:

“Se ha expresado también la opinión de que la autoridad competente debería ser la del lugar del arbitraje. Sólo a falta de designación de lugar o a falta de designación de una autoridad competente del lugar de arbitraje podría preverse el recurso a una autoridad central”.

13. Refiriéndose al comentario al inciso a) del párrafo 1 del artículo 31, el orador señala que las autoridades belgas se cuentan entre las que consideran que las facultades de los árbitros de fijar ellos mismos sus honorarios deben limitarse, de una manera u otra. Una de las principales críticas dirigidas al arbitraje es, en efecto, que se trata de una institución costosa, principalmente para las empresas pequeñas. Concluyendo sus observaciones respecto del arbitraje,

el orador informa a los miembros de la Comisión que su país acaba de ratificar la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, de 1958, y que además, la Convención europea sobre arbitraje comercial internacional, de 1961, ha sido aprobada por el Parlamento y, en consecuencia, será ratificada en un futuro próximo.

14. En lo que concierne a las normas uniformes que regulan la compraventa internacional de mercaderías, la delegación belga se asocia por entero a la decisión tomada por la CNUDMI (véase A/10019, párr. 17) respecto del tratamiento que se dará al texto del proyecto de convención. En efecto, parece imprescindible que en una materia tan importante todos los gobiernos — no solamente los que están representados en la CNUDMI — y las organizaciones internacionales interesadas puedan examinar el proyecto y expresar sus opiniones y comentarios antes de que el proyecto se remita para su aprobación a una conferencia de plenipotenciarios.

15. En cambio, la delegación belga manifiesta menos entusiasmo con respecto a la decisión tomada por la CNUDMI (*ibid.*, párr. 25) en lo que concierne a las condiciones generales de venta y a los contratos tipos. En efecto, no parece que los trabajos relativos a la preparación de las condiciones generales puedan culminar en un acto internacional que sea realmente utilizable y que constituya un progreso efectivo en relación con la situación actual. Las condiciones generales realmente “generales” se traducirán necesariamente en disposiciones de carácter general que serían análogas a las de la Ley uniforme sobre la compraventa internacional de mercaderías (LUCI). Además, existen diferencias de tanta importancia entre la venta de determinados productos, por ejemplo, la de los productos agrícolas y la de los productos manufacturados, que parece poco probable que las condiciones generales “generales” puedan regular la venta de esos tipos diferentes de productos.

16. En cuanto a la reglamentación internacional del transporte marítimo, la delegación belga se congratula de la decisión por la cual la CNUDMI (*ibid.*, párr. 77) se compromete a examinar el año próximo el proyecto de convenio sobre el transporte marítimo de mercancías y expresa sus más calurosas felicitaciones a los miembros del Grupo de Trabajo y en particular a su Presidente, por su excelente labor.

17. Respecto de la formación y asistencia en materia de derecho mercantil internacional, el orador informa de que, por segunda vez, dos becarios inician actualmente en Bélgica una etapa de seis meses para recibir formación tanto teórica como práctica. Los candidatos que utilizaron esas becas el año anterior han obtenido un beneficio efectivo y es probable que, en la medida en que la experiencia renovada por el Gobierno belga en 1975 sea también positiva, se repita la oferta en 1976.

18. El Sr. PRANDLER (Hungría) recuerda que fue por iniciativa de la delegación de Hungría que hace 10 años la Asamblea General adoptó la resolución 2101 (XX) relativa al desarrollo progresivo del derecho internacional privado con miras a fomentar el comercio internacional. Esta resolución dio lugar en 1966 a la creación de la CNUDMI, cuyo fin especial es el desarrollo del comercio internacional

por medios jurídicos apropiados en interés de todos los países, independientemente de sus sistemas sociales y económicos, y en particular en interés de los países en desarrollo.

19. El Sr. Prandler estima que el informe presentado a la Comisión revela los progresos considerables realizados en la esfera de la unificación y la armonización del derecho mercantil internacional, y felicita al Presidente de la CNUDMI durante el octavo período de sesiones por la excelente presentación de dicho informe. Entre los numerosos temas estudiados por la CNUDMI, algunos puntos han atraído particularmente la atención de la delegación de Hungría. Por ejemplo, observa que el Grupo de Trabajo sobre la reglamentación internacional del transporte marítimo ha terminado, como se indica en el párrafo 72 del informe, la segunda lectura de un anteproyecto de convenio sobre la responsabilidad de los portadores marítimos respecto de la carga y que ha aprobado un proyecto de convenio sobre el transporte marítimo de emergencia. La CNUDMI también ha podido, en su octavo período de sesiones, examinar los conceptos fundamentales de un proyecto de reglamento de arbitraje. Con respecto al párrafo 116 del informe, parece que la decisión de establecer un Comité Plenario que examine el proyecto de convención sobre el transporte marítimo de mercaderías y el proyecto de reglamento de arbitraje es acertada en esa ocasión, pero la delegación de Hungría no cree que haya que recurrir a esa práctica de forma regular.

20. Como se indica en el párrafo 17 del informe, el proyecto de convención sobre la compraventa internacional de mercaderías puede enviarse a los gobiernos y a las organizaciones internacionales para que hagan observaciones al respecto. Parece que el Grupo de Trabajo sobre la compraventa internacional de mercaderías se propone celebrar en su próximo período de sesiones un debate preliminar sobre la formación y la validez de los contratos de compraventa. En el séptimo período de sesiones de la CNUDMI, la delegación de Hungría señaló que el mandato del Grupo de Trabajo era sumamente complejo dado el número de instrumentos que debe estudiar. En consecuencia, propuso que la CNUDMI adoptara todas las medidas adecuadas para que el Grupo de Trabajo pudiera acelerar sus trabajos y terminarlos en un plazo máximo de dos años, es decir para el décimo período de sesiones de la CNUDMI.

21. La delegación de Hungría observa con satisfacción que la CNUDMI ha realizado algunos progresos en el examen del tema relativo a las condiciones generales de venta y a los contratos tipo, y estima que la culminación de los trabajos emprendidos contribuirá enormemente a fomentar el comercio internacional. Su delegación se congratula también de los nuevos progresos realizados en las esferas de la formación y la asistencia, y piensa que la organización de un simposio aportaría una contribución valiosa a la enseñanza, la difusión y una comprensión más amplia del derecho mercantil internacional.

22. El Sr. BUSSE (República Federal de Alemania) felicita a la CNUDMI por los buenos resultados obtenidos en el curso de su octavo período de sesiones y da las gracias a su Presidente por la presentación del informe.

23. En lo que respecta a la compraventa internacional de mercaderías, el Sr. Busse recuerda que su Gobierno parti-

cipó como observador en los períodos de sesiones durante los cuales el Grupo de Trabajo elaboró las reglas uniformes. Los resultados obtenidos son muy satisfactorios y cabe esperar que los trabajos sobre ese tema se terminen pronto. La decisión de la CNUDMI de transmitir el texto definitivo del proyecto de convención sobre la compraventa internacional de mercaderías a todos los gobiernos es ciertamente acertada. El Gobierno Federal desearía en particular que se tuviera en cuenta el carácter complementario de diversos instrumentos relativos a la compraventa, que deberían redactarse de forma que no dieran lugar a contradicciones. Con respecto a las condiciones generales de venta y a los contratos tipo, no parece necesario, a juicio del Gobierno Federal, formular reglas que puedan ser en la práctica una repetición de la LUCI revisada por el Grupo de Trabajo de la CNUDMI. Por tanto, aprueba la decisión de pedir a la Secretaría que efectúe un estudio sobre la utilidad práctica de esas condiciones.

24. Con respecto a la ley uniforme sobre las letras de cambio internacionales y pagarés internacionales, el Gobierno Federal sigue teniendo ciertas dudas sobre la necesidad de elaborar un instrumento internacional que, a su juicio, apenas tendrá interés en el plano económico. En cuanto a la reglamentación del transporte marítimo, el Sr. Busse se congratula de que en el octavo período de sesiones del Grupo de Trabajo se haya elaborado el proyecto de convención sobre el transporte marítimo de mercancías. Ese proyecto ofrece una base válida para los trabajos de una conferencia diplomática que, a juicio del Gobierno Federal, debería reunirse lo antes posible dado el carácter poco satisfactorio de la situación jurídica en esa esfera. A propósito del arbitraje comercial internacional, el Sr. Busse dice que será interesante ver cómo las sugerencias hechas con ocasión del último período de sesiones de la CNUDMI se incorporarán en el nuevo proyecto de reglamento de arbitraje. La delegación de la República Federal de Alemania, como varias otras delegaciones, ha propuesto que se supriman las disposiciones relativas al "arbitraje administrado" y que se dé más importancia a la autonomía de las partes, que es un principio básico del arbitraje. Igualmente convendría simplificar el procedimiento de designación de los árbitros.

25. En cuanto a la responsabilidad por los daños causados por los productos destinados al comercio internacional u objeto de éste, el Gobierno Federal considera que no es particularmente urgente proseguir los estudios preparatorios en la materia, ya que parece poco probable que se llegue a un acuerdo mundial sobre esa compleja cuestión.

26. Con respecto a la formación y asistencia en materia de derecho mercantil internacional, el Gobierno Federal se congratula del simposio sobre la función de las universidades y los centros de la investigación con respecto al derecho mercantil internacional, a cuya financiación ha contribuido. A su juicio, convendría celebrar en 1977 una reunión parecida, a condición de que los demás países industrializados estuvieran igualmente dispuestos a aportar una contribución adecuada.

27. El Sr. TODOROV (Bulgaria) felicita al Presidente de la CNUDMI por la excelente presentación del informe de su Comisión. La delegación de Bulgaria estima que las actividades de la CNUDMI son propicias para el desarrollo de las

relaciones económicas internacionales, particularmente entre los países con sistemas sociales diferentes, y que la CNUDMI contribuye de esa forma al esfuerzo común encaminado a reducir las tensiones internacionales. Los textos que prepara la CNUDMI se refieren a temas de la mayor importancia; deben estar coordinados entre sí y ser aceptables como base de trabajo de conferencias diplomáticas encargadas de adoptar convenciones; las dificultades que se presenten en el curso de esa obra de elaboración deben superarse con un espíritu de comprensión mutua. La delegación de Bulgaria aportará su contribución a los diversos proyectos de convención que la CNUDMI tiene en estudio. No obstante, en esa fase considera útil subrayar algunos aspectos de los trabajos de la CNUDMI que le parecen particularmente importantes.

28. En lo que respecta al proyecto de convención sobre la compraventa internacional de mercaderías, la CNUDMI ha hecho bien en pedir al Secretario General que transmita el texto revisado del proyecto a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas para recoger sus observaciones; esa convención debe ser de carácter universal y debe tener también en cuenta los puntos de vista de los Estados que no son miembros de la CNUDMI. La delegación de Bulgaria preferiría que las reglas relativas a la formación y la validez de los contratos de compraventa fueran objeto de una convención aparte y no fueran incorporadas en el proyecto de convención sobre la compraventa. En efecto, ese último se encuentra ya en una fase de elaboración avanzada, lo que no sucede con las reglas mencionadas, que habrá que hacer concordar con la convención sobre la compraventa. Además, la práctica ha demostrado que cuando se someten a una conferencia diplomática diversos documentos diferentes, sus trabajos avanzan con más dificultad.

29. En lo que respecta al anteproyecto de reglamento de arbitraje, la delegación de Bulgaria estima que tiene una importancia excepcional para los intercambios internacionales al crear condiciones propicias para la solución objetiva de los litigios y al permitir que los países con sistemas políticos y económicos diferentes se remitan con confianza a sus disposiciones. La delegación de Bulgaria tiene preferencia por el arbitraje *ad hoc* libre; al mismo tiempo, examinará con interés las reglas relativas al arbitraje administrado, que deben tener en cuenta los intereses de todas las partes en un litigio. Tal vez convendría que esa forma de arbitraje no estuviese demasiado estrechamente ligada con el arbitraje institucionalizado.

30. El Sr. Todorov, recordando que la CNUDMI, al elaborar proyectos de convención, sigue la práctica de consultar a las instituciones especializadas de carácter regional y a especialistas eminentes en ciertas esferas del derecho internacional, sugiere que la CNUDMI solicite igualmente la opinión de las organizaciones internacionales y de los expertos de los países socialistas que en el marco del Consejo de Asistencia Económica Mutua (CAEM) tratan problemas análogos a los que estudia la CNUDMI. Ello permitiría colmar una laguna en las actividades de la CNUDMI y obtener textos de carácter más universal.

31. El Sr. BUBEN (República Socialista Soviética de Bielorrusia) da las gracias al Sr. Loewe por la presentación sumamente detallada que hizo del informe que se examina.

32. Es de observar que la atmósfera internacional actual es favorable al desarrollo del comercio internacional. La reciente Conferencia sobre la seguridad y la cooperación en Europa, que ha consagrado los principios de la coexistencia pacífica y de la igualdad de todos los Estados cualquiera que sea su régimen político y social, ha reconocido también los efectos favorables de la cláusula de la nación más favorecida en el comercio internacional. Si la mejora del clima político internacional contribuye al desarrollo del comercio internacional, éste a su vez permite una amplia cooperación entre los Estados y favorece la elevación del nivel de vida de su población, el desarrollo de su economía y el pleno empleo. Una reglamentación jurídica eficaz del comercio internacional reviste por tanto una importancia esencial, que es capital en la medida en que permite desarrollar las relaciones económicas entre todos los Estados. Por tanto, conviene reglamentar el comercio internacional, limitando las prácticas discriminatorias a las que siguen recurriendo ciertos Estados, e introduciendo elementos favorables a su expansión. Por tanto, a la CNUDMI le corresponde desempeñar un papel importante, habida cuenta de las exigencias políticas objetivas actuales.

33. El informe de la CNUDMI sobre la labor realizada en su octavo período de sesiones muestra que los grupos de trabajo de ese órgano han realizado progresos en sus esferas respectivas. Así, el Grupo de Trabajo sobre la reglamentación internacional del transporte marítimo ha elaborado un proyecto de convención sobre el transporte marítimo de mercancías, que ha comunicado a los gobiernos para que hagan observaciones al respecto. Dada la importancia de esa cuestión, el Sr. Buben se congratula de que la CNUDMI haya decidido dedicar un período de sesiones entero en 1976 a la aprobación de un texto definitivo sobre ese tema, que podrá ser sometido a continuación a una conferencia diplomática.

34. El informe del Grupo de Trabajo sobre la compraventa internacional de mercaderías relativo a la labor realizada en su sexto período de sesiones muestra que ese órgano ha continuado examinando las cuestiones que no había podido resolver en sus períodos de sesiones precedentes. El Sr. Buben apoya la decisión por la cual la CNUDMI ha pedido a su Grupo de Trabajo que elabore un proyecto de convención, que luego será comunicado a los gobiernos y a las organizaciones internacionales interesadas para que hagan observaciones al respecto, y espera que el Grupo de Trabajo pueda terminar sus trabajos en el séptimo período de sesiones.

35. El Grupo de Trabajo sobre títulos negociables internacionales ha proseguido, en su tercer período de sesiones, su examen de la ley uniforme sobre letras de cambio internacionales y pagarés internacionales. La existencia de reglas uniformes en la materia indudablemente debería favorecer una reglamentación más precisa de las compraventas internacionales.

36. En cuanto a las garantías reales en las mercaderías, el Sr. Buben observa que el estudio sobre las garantías reales, titulado "*Study on security interests*"³ desgraciadamente es incompleto, ya que no refleja, como ha señalado la CNUDMI, las normas jurídicas de todos los Estados y en

³ ST/LEG/11.

particular las de los Estados socialistas de Europa oriental. El Sr. Buben apoya la decisión de la CNUDMI (*ibid.*, párr. 63) de pedir al Secretario General que complete el estudio sobre ese punto.

37. En su octavo período de sesiones, la CNUDMI examinó también la cuestión del arbitraje comercial internacional, debatiendo artículo por artículo el anteproyecto de reglamento de arbitraje que se utilizará a título facultativo en los arbitrajes *ad hoc* relativos al comercio internacional. El Sr. Buben desea señalar a la atención del Secretario General el hecho de que, para elaborar el proyecto de reglamento revisado que la CNUDMI le ha rogado que presente en su noveno período de sesiones, debería tener en cuenta la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, de 1958, la Convención europea sobre arbitraje comercial internacional, de 1961, y la Convención sobre la resolución mediante arbitraje de los litigios de derecho civil surgidos en el marco de las relaciones relativas a la cooperación económica, científica y técnica, celebrada por los países del CAEM en 1972.

38. En cuanto a la importantísima cuestión de las empresas multinacionales, la delegación de la RSS de Bielorrusia ya ha tenido ocasión de subrayar, en anteriores períodos de sesiones, que los monopolios capitalistas multinacionales constituyen una amenaza para la soberanía y el desarrollo económico armonioso de los países en que operan. Este problema debe ser examinado con mucha atención por la CNUDMI, y el Sr. Buben apoya la decisión de ese órgano (*ibid.*, párr. 94) de estudiar los aspectos jurídicos concretos de la cuestión tal como se señalen por la Comisión de Empresas Transnacionales y el Centro de Información e Investigaciones sobre las Empresas Transnacionales.

39. La cuestión de si conviene establecer reglas uniformes sobre la responsabilidad por los daños causados por los productos destinados al comercio internacional u objeto de éste es compleja. La CNUDMI ha decidido con razón pedir al Secretario General que estudie ese problema más adelante con miras a determinar la factibilidad y las ventajas de una unificación a escala mundial de las reglas aplicables.

40. En lo que respecta a los trabajos futuros de la CNUDMI, el Sr. Buben desearía que ese órgano siguiera examinando en forma crítica sus métodos de trabajo. En vez de pensar en prolongar la duración de sus períodos de sesiones, la CNUDMI debería preocuparse de no causar gastos suplementarios, y para ello tratar de racionalizar sus métodos de trabajo utilizando lo mejor posible el tiempo de que dispone.

41. El Sr. Buben subraya que su delegación tiene una opinión positiva y favorable de la labor realizada por la CNUDMI en su octavo período de sesiones.

42. El Sr. LANG (Austria) felicita a la CNUDMI por los trabajos de excelente calidad que ha realizado en su octavo período de sesiones. Austria está complacida de que se eligiera a su representante para ejercer la presidencia de dicho período de sesiones. La CNUDMI ha querido sin duda reconocer así el valor de la participación del Sr. Loewe en sus trabajos desde hace muchos años.

43. Dado que el comercio exterior desempeña un papel importante en su economía, Austria sigue con el mayor interés los trabajos de la CNUDMI, en la convicción de que un mejoramiento de las normas jurídicas que rigen la conclusión y la ejecución de los contratos comerciales no puede sino estimular los intercambios de bienes y servicios.

44. En cuanto a las reglas uniformes que rigen la compraventa internacional de mercaderías, Austria se ha abstenido de hacerse parte de la LUCI, porque ha querido conocer primero el resultado de los trabajos de la CNUDMI en esa esfera.

45. En lo que concierne a la reglamentación internacional del transporte marítimo, Austria tiene un gran interés en que en la reglamentación se incluyan disposiciones equitativas, ya que muchos de los productos que importa o exporta se transportan por mar.

46. La delegación austríaca valora los trabajos emprendidos por la CNUDMI en materia de títulos negociables. Si bien ciertos países que comercian con Austria son partes de los tres convenios de Ginebra de 1930 sobre las letras de cambio y pagarés a la orden, otros no lo son. Sería muy útil establecer un régimen uniforme en esa materia.

47. El informe que se examina demuestra que la CNUDMI dedicó una parte considerable de su octavo período de sesiones al examen del anteproyecto de reglamento de arbitraje para uso facultativo en el arbitraje especial relacionado con el comercio internacional, que las autoridades competentes deberán estudiar en detalle. El interés particular que tiene Austria en dicho reglamento dimana de la experiencia que ha adquirido en la esfera del arbitraje comercial entre partes con diferentes sistemas sociales. Cabe señalar que el órgano de arbitraje permanente recientemente creado en Viena está a disposición de las partes de un contrato para todo desacuerdo que de él pueda surgir.

48. Austria, que ha contribuido financieramente al simposio de derecho mercantil internacional, se felicita de su éxito. La atención que Austria presta a la formación en materia de derecho mercantil internacional queda demostrada por el hecho de que un banco austríaco ha asignado dos becas para una pasantía de seis meses en su servicio jurídico.

49. En lo que concierne a los trabajos futuros de la CNUDMI, la delegación austríaca acoge con satisfacción toda iniciativa tendiente a mejorar las normas jurídicas que rigen el comercio internacional. Sería útil, sin embargo, que la CNUDMI terminara primero con el examen de las cuestiones en curso antes de emprender el estudio de otros problemas.

50. La delegación austríaca desea señalar a la atención de la CNUDMI la resolución 3350 (XXIX) de la Asamblea General, relativa a la inclusión de Viena en el plan de conferencias, que ofrece a la CNUDMI la posibilidad de celebrar un período de sesiones en dicha ciudad. Por supuesto, Austria acogería con placer cualquier decisión de la CNUDMI en ese sentido.

51. El Sr. SEIDEL (República Democrática Alemana) agradece calurosamente al Sr. Loewe su excelente presentación del informe que se examina.

52. Los órganos competentes de la República Democrática Alemana han examinado a fondo el informe del Grupo de Trabajo sobre la compraventa internacional de mercaderías relativo a los progresos realizados en su trabajo de revisión de la LUCI, anexa a la Convención de La Haya de 1964. El Sr. Seidel se congratula de la decisión de la CNUDMI de comunicar, para formulación de comentarios, el texto actual del proyecto de convención sobre la compraventa internacional de mercaderías a los gobiernos y organizaciones internacionales interesadas, y de transmitirles más adelante el proyecto que adopte para que lo examinen nuevamente antes de someterlo a una conferencia diplomática. El Sr. Seidel estima que la CNUDMI debería observar el mismo procedimiento con todas las otras cuestiones que estudia. Los Estados no miembros de la CNUDMI tendrían así la posibilidad de examinar a tiempo los proyectos de convención. Esa solución respondería igualmente a los objetivos del proceso de unificación del derecho, que sólo podrá ser eficaz si un gran número de Estados incorporan las reglas unificadas a su legislación interna. Por lo tanto, la decisión de los Estados de adherirse o no a la convención depende en gran medida de la posibilidad que hayan tenido de estudiar la materia a fondo y a tiempo.

53. La delegación de la República Democrática Alemana otorga una gran importancia a los trabajos de la CNUDMI en la esfera del arbitraje comercial internacional, puesto que tiene un gran interés en la elaboración de un sistema eficaz. El Sr. Seidel opina que, en muchos casos, el arbitraje permite, mejor que los procesos del derecho codificado, tener en cuenta las características propias de las transacciones comerciales internacionales. Si bien apoya los objetivos del anteproyecto de reglamento de arbitraje elaborado por la CNUDMI y está dispuesta a sostener a dicho organismo en sus trabajos de revisión de dicho texto, la delegación de la República Democrática Alemana estima que es de lamentar que un elemento esencial en esa esfera, a

saber, el arbitraje especial bajo los auspicios de una cámara de comercio o de un consejo de arbitraje permanente, no haya figurado en los debates del octavo período de sesiones de la CNUDMI sobre el tema. El Sr. Seidel estima que convendría que en el nuevo proyecto que se someterá a la CNUDMI en su noveno período de sesiones se tenga en cuenta esa posibilidad.

54. En lo que concierne a las empresas multinacionales, la República Democrática Alemana atribuye una importancia considerable a ese problema, dado que tales empresas intervienen en los asuntos internos de los Estados en los que funcionan. Por ello, la República Democrática Alemana apoya vigorosamente la decisión de la CNUDMI de mantener en su programa el tema relativo a las empresas multinacionales. En cuanto al progreso de los trabajos preliminares en esa esfera, el Sr. Seidel estima que no cabe tomar decisión alguna respecto del programa de trabajo de la CNUDMI sobre ese tema en tanto la Comisión de Empresas Transnacionales no haya delimitado los aspectos jurídicos propios de la cuestión. El Sr. Seidel acoge, pues, con satisfacción la intención de la CNUDMI de establecer una cooperación estrecha con la Comisión de Empresas Transnacionales y el Centro de Información e Investigaciones sobre las Empresas Transnacionales. No correspondería, sin embargo, que la cuestión de las empresas multinacionales se postergara indefinidamente, y el Sr. Seidel estima que la CNUDMI debe iniciar en cuanto sea posible el examen concreto de todos los aspectos políticos y jurídicos del problema.

55. El PRESIDENTE anuncia que la lista de oradores que desean hacer uso de la palabra sobre el tema que se examina se cerrará el viernes 3 de octubre a las 18 horas.

Se levanta la sesión a las 16.45 horas.

1530a. sesión

Viernes 3 de octubre de 1975, a las 10.50 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1530

TEMA 110 DEL PROGRAMA

Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la labor realizada en su octavo período de sesiones (continuación)
(A/10017, A/C.6/L.1016, A/C.6/L.1017)

1. El Sr. STEEL (Reino Unido) felicita a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) por la útil y constructiva labor que se refleja en el informe sobre su octavo período de sesiones (A/10017). La CNUDMI, de acuerdo con su característica, ha adoptado un enfoque práctico en sus trabajos, preparando de esa forma el camino para alcanzar auténticos logros en la esfera del derecho mercantil internacional.

2. El orador da las gracias al Presidente de la CNUDMI por su completa y lúcida declaración de introducción, y espera la esperanza de que comunique el agradecimiento y aprecio de su delegación a sus colegas de la CNUDMI, así como a su abnegada y competente secretaría, dirigida por el Sr. Vis.

3. Es de elogiar que en general el octavo período de sesiones de la CNUDMI haya estado bien concurrido. Por su parte, el Reino Unido siempre ha apoyado firmemente la labor de la CNUDMI y ha tomado parte activa en todas sus deliberaciones. Al igual que otros miembros de la CNUDMI, su Gobierno se enorgullece de asegurar que los expertos que asisten a sus sesiones y a las de sus grupos de trabajo como representantes del Reino Unido sean personas de la máxima categoría y autoridad en sus esferas respectivas. Le com-

place observar el continuo y valioso papel desempeñado en la labor de la CNUDMI por los observadores de los organismos especializados y de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. La CNUDMI ha aprovechado debidamente parte de la labor realizada por la Cámara de Comercio Internacional, particularmente en la esfera del derecho bancario; por ejemplo, sobre el tema de los créditos comerciales bancarios y la revisión de los "Usos y Prácticas Uniformes en Materia de Créditos Documentarios". La utilidad para la CNUDMI de la labor realizada por órganos tales como la Cámara de Comercio Internacional se refleja bien también en los párrafos 42 a 46 del informe de la CNUDMI, que tratan de las garantías bancarias.

4. A su delegación le complace observar los sólidos progresos realizados en la importantísima esfera de la reglamentación internacional del transporte marítimo. Esa esfera tiene particular interés para el Reino Unido, ya que es uno de los países más importantes del mundo en la esfera del transporte marítimo, pero también tiene gran interés para la comunidad internacional en su conjunto, puesto que tendrá una enorme influencia en el comercio internacional y, por consiguiente, en la prosperidad y ritmo de desarrollo de muchos países. A ese respecto, su delegación se hace eco de la esperanza registrada en el párrafo 75 del informe de la CNUDMI de que muchos gobiernos presenten observaciones sobre el proyecto de convención preparado por el Grupo de Trabajo.

5. En lo substancial, la labor de la CNUDMI está siguiendo una línea acertada y está produciendo resultados correctos. Debe elogiarse a la CNUDMI por mantener un continuo progreso en la multitud de tareas que le han sido asignadas.

6. Con respecto a los nuevos temas que han sido asignados a la CNUDMI, su delegación aprueba la cuidadosa preparación de las bases para el examen del problema de la responsabilidad por los daños causados por los productos destinados al comercio internacional u objeto de éste, y considera que la CNUDMI ha actuado con acierto al decidir aplazar sus trabajos sobre las empresas transnacionales hasta que la Comisión de Empresas Transnacionales determine las cuestiones jurídicas específicas sobre las que procedería que actuara la CNUDMI.

7. A veces se ha criticado el ritmo a que la CNUDMI lleva a cabo sus trabajos. No obstante, el complicado y detallado carácter de los problemas que examina no permite resultados rápidos o espectaculares. Además, el elevado nivel de los expertos que participan en los grupos de trabajo y la necesidad de obtener las observaciones de los gobiernos no permiten celebrar las reuniones con mayor frecuencia o durante períodos más largos. A juicio de su delegación, la CNUDMI sigue siendo uno de los instrumentos más efectivos, eficientes y valiosos de que disponen las Naciones Unidas para aumentar la prosperidad y acelerar el desarrollo. Su delegación espera con interés el informe de la CNUDMI sobre la labor realizada en su noveno período de sesiones, con confiada esperanza de que el nivel de logros registrados en el presente informe sea igualado.

8. El Sr. LAMPTEY (Ghana) recuerda que su delegación participó tanto en el Grupo de Trabajo sobre la compraventa internacional de mercaderías como en el Grupo de

Trabajo sobre la reglamentación del transporte marítimo. Expresa la satisfacción de su delegación por la labor realizada hasta la fecha por la CNUDMI y espera que se efectúen nuevos progresos.

9. El orador recuerda que en el vigésimo noveno período de sesiones, su delegación dijo (1500a. sesión) que no estaba satisfecha con el artículo 59 del texto de la Ley Uniforme sobre la compraventa internacional de mercaderías (LUCI), anexo a la Convención de La Haya de 1964¹ que, a su juicio, tendería a coartar la libertad de los países que tienen problemas de balanza de pagos para regular la salida a los países industrializados de sus escasas reservas en divisas. Es de lamentar que el Grupo de Trabajo sobre la compraventa internacional de mercaderías aún no haya considerado posible aceptar una enmienda que su delegación propuso para responder a esa preocupación, y su delegación se propone insistir en dicha enmienda en el próximo período de sesiones del Grupo de Trabajo. Igualmente su delegación objetó a la redacción del párrafo 1 del artículo 73, basándose en que daba al vendedor discreción ilimitada para decidir unilateralmente cuándo las circunstancias económicas del comprador justifican la suspensión de las obligaciones asumidas jurídicamente por el vendedor. Su delegación está muy complacida con la nueva redacción del párrafo 1 del artículo 73², que establece criterios más objetivos para determinar las obligaciones del vendedor. Al elegir el criterio del empeoramiento del crédito que merece el comprador, la nueva redacción se acerca tanto como cabe esperar de una ley uniforme a la aceptación del criterio de la quiebra o de la insolvencia general, que es suficientemente conocido como para proporcionar un criterio seguro de trabajo. Su delegación apoya la decisión del Grupo de Trabajo de denominar el instrumento en preparación "Ley Uniforme".

10. Pasando a la reglamentación internacional del transporte marítimo, felicita a la CNUDMI por su redacción del proyecto de convenio sobre el transporte marítimo de mercancías. Su delegación espera con interés la conferencia diplomática que concluya ese trabajo. Al respecto, su delegación agradecería recibir información sobre la situación de la Convención relativa a un Código de Conducta de las Conferencias Marítimas, aprobada bajo los auspicios de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y abierta a la ratificación en julio de 1974. El sistema nada equitativo que impera actualmente en el transporte marítimo beneficia a las claras a algunos países desarrollados. Así pues, sería muy de lamentar que esa importante Convención no obtuviese el número de ratificaciones necesarias para su entrada en vigor.

11. Su delegación apoya la continuación de los trabajos de la CNUDMI sobre los pagos internacionales, el arbitraje comercial internacional, los problemas jurídicos que plantean los distintos tipos de empresas multinacionales y la formación y asistencia en la esfera del derecho mercantil internacional.

12. El Sr. AL-OTHMAN (Kuwait) dice que su delegación ha estudiado cuidadosamente el informe de la CNUDMI

¹ Véase *Registro de textos de convenciones y otros instrumentos relativos al derecho mercantil internacional*, vol. I (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.71.V.3), pág. 40.

² Véase A/CN.9/87, anexo I.

sobre la labor realizada en su octavo período de sesiones. Como país comercial, Kuwait está interesado en los problemas relativos al comercio marítimo, tales como la responsabilidad de los portadores y de los propietarios de mercancías y la responsabilidad por los daños causados por productos destinados al comercio internacional u objeto de éste. La liquidación de los pagos internacionales, entre Kuwait y sus asociados comerciales extranjeros, ya sean individuos o sociedades, es también tema importante que merece cuidadoso examen. Su delegación desea destacar la importancia de las reglas que rigen la compraventa internacional de mercaderías, que su delegación espera reducirán las enormes diferencias entre los distintos sistemas jurídicos, sociales y económicos de los distintos Estados. Su delegación apoya la redacción de una definición internacional de los conocimientos de embarque, según recomienda el informe de la CNUDMI, y también está a favor de la cooperación entre la CNUDMI y la Comisión de Empresas Transnacionales para elaborar un código de conducta destinado a proteger a los países en desarrollo de las actividades de dichas empresas, que con frecuencia no concuerdan con las metas de desarrollo económico y social de esos países. Al respecto, espera que la CNUDMI aborde el tema de las normas que rigen las empresas y las divergencias. Su delegación pide al Secretario General que prepare un estudio sobre el tema de la responsabilidad por los daños causados por los productos en relación con los seguros, ya que a menudo los seguros no proporcionan una indemnización completa.

El Sr. Klafkowski (Polonia), Vicepresidente, ocupa la Presidencia.

13. El Sr. LOEWE (Presidente de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional) lamenta no poder asistir al resto del debate de la Sexta Comisión sobre el informe de la CNUDMI. Antes de dejar Nueva York, desea dar las gracias al Presidente y a todos los miembros de la Sexta Comisión por el interés que han demostrado en la labor de la CNUDMI y por la cálida acogida que le han dispensado personalmente. Tras haber escuchado atentamente las declaraciones hechas hasta ahora, y espera que se hagan más observaciones en la próxima semana, está convencida de que la Sexta Comisión aprueba en gran parte las decisiones adoptadas por la CNUDMI en su octavo período de sesiones. Algunas delegaciones se han referido a cuestiones de detalle, tales como el arbitraje, que indudablemente serán examinadas por los grupos de trabajo en sus próximos períodos de sesiones, y que serán examinadas de nuevo en el noveno período de sesiones de la CNUDMI. Dado que el programa de trabajo del noveno período de sesiones de la CNUDMI está muy recargado, apoya plenamente la opinión expresada por varias delegaciones de que, en la medida de lo posible, la CNUDMI trabaje rápidamente y que sus períodos de sesiones sean lo más cortos posible. En cuanto a las consecuencias financieras, señala que dejar sus funciones durante un período largo de tiempo plantea graves dificultades a los profesores y altos funcionarios de los gobiernos. No obstante, a su modo de ver, no será posible alcanzar los resultados que se esperan de la CNUDMI en su noveno período de sesiones si éste tiene una duración menor de cuatro semanas. Comprende la dificultad que la celebración de reuniones simultáneas de dos grupos de trabajo diferentes planteará para algunas delegaciones más pequeñas,

pero no prevé un alivio en la carga del programa de trabajo en el décimo período de sesiones, que se espera que prepare el proyecto definitivo de convención sobre la compraventa internacional de mercaderías. Si a la CNUDMI se le da el tiempo necesario para terminar sus trabajos, confía en que podrá alcanzar los resultados que de ella se esperan. Ciertamente comunicará todos los comentarios y observaciones hechos por las delegaciones en la Sexta Comisión, a la CNUDMI, pues serán de gran ayuda para ella en sus trabajos.

14. Por ser de nacionalidad austríaca, le complace mucho la invitación hecha por el representante de Austria para que la CNUDMI celebre su próximo período de sesiones en Viena. Espera que al menos algunos de los miembros de la Sexta Comisión puedan asistir a ese período de sesiones, y que la Sexta Comisión continúe sus trabajos de la misma manera provechosa que lo ha hecho hasta ahora y logre los resultados deseados por todos.

15. El PRESIDENTE da las gracias al Presidente de la CNUDMI por su destacada declaración de introducción, que tiene ante sí la Comisión en el documento A/C.6/L.1017, y por el resumen que acaba de hacer.

TEMA 109 DEL PROGRAMA

Sucesión de Estados en materia de tratados: informe del Secretario General (continuación)* (A/10198 y Add.1 a 3, A/9610/Rev.1)**

16. El Sr. PEDAUYE (España) está de acuerdo con la opinión expresada por el representante del Brasil (1526a. sesión) de que, dado que la Comisión de Derecho Internacional (CDI) ha preparado un proyecto definitivo, no parecería adecuado que se le devolviera de nuevo el proyecto para un nuevo examen. Una iniciativa de ese tipo carece de precedentes y podría obstaculizar el normal desenvolvimiento de las labores de la CDI, cuyo programa de trabajo se halla muy recargado actualmente. Las propuestas hechas por dos miembros de la CDI sobre los tratados multilaterales de carácter universal y sobre la solución de controversias (véase A/9610/Rev.1, notas 57 y 58) deberían examinarse en una conferencia diplomática. Por otra parte, no parece que existan razones que exijan una rápida conclusión del proceso codificador en esa materia. El proyecto sólo se refiere a una parte de la sucesión de Estados, siendo dudoso que resulte lo más conveniente el cristalizar unas normas en ese sector, dejando de lado los demás. Concretamente, dado que la CDI continúa estudiando la sucesión en lo que respecta a materias distintas de los tratados, podría esperarse hasta que la CDI terminara este trabajo, con lo que los Estados contarían con dos proyectos complementarios que habrían de formar un todo armónico. Dada la trascendencia de ese tema y la conveniencia de contar con el mayor número posible de opiniones, quizás sería oportuno solicitar de nuevo a los gobiernos sus comentarios sobre el proyecto ya terminado.

17. Su delegación estima que la convocatoria de una conferencia de plenipotenciarios permitiría un examen más

* Reanudación de los trabajos de la 1526a. sesión.

** Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno período de sesiones, Suplemento No. 10.

pausado del proyecto. Además, las dificultades que puede plantear a algunos países el enviar sus representantes a dicha conferencia se disiparían si la convocatoria no fuera inmediata. En esa conferencia también podría abordarse la cuestión de la forma jurídica que habría de darse al proyecto.

18. El Sr. FUENTES IBÁÑEZ (Bolivia) considera que el tema es de gran importancia porque está vinculado con el proceso de descolonización que está llegando a su fin. El cuerpo de normas jurídicas propuesto por la CDI para la cuestión de Estados en materia de tratados se aplica principalmente a los Estados de reciente independencia, que deben tener la mayor libertad de elección posible en cuanto a sus obligaciones y no asumir aquellas que limiten el ejercicio de su soberanía, dificulten la protección de sus recursos naturales o traben su pronto y legítimo desarrollo. Ciertos compromisos económicos, por ejemplo, pueden ser lesivos para los intereses de un nuevo Estado y por ese motivo muchos gobiernos, incluido el de Bolivia, han pedido que se incluyan en el proyecto disposiciones relativas al procedimiento para la solución de controversias. Puede encontrarse un antecedente valioso en las disposiciones existentes en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados³.

19. El orador aprueba la elección de la CDI del principio de la "tabla rasa" con respecto a la sucesión y la inclusión de excepciones en cuanto a los regímenes territoriales en los artículos 11 y 12 del proyecto (*ibid.*, cap. II, secc. D). Tales excepciones deberían abarcar también la libertad de navegación y el acceso al mar para los países sin litoral.

20. El orador coincide con los representantes que propugnan la incorporación de los artículos en un protocolo adicional a la Convención de Viena.

21. La aplicación del principio de la "tabla rasa" como facultad irrestricta de un nuevo Estado debería estudiarse más a fondo por la CDI, puesto que el principio no podría aplicarse en todos los casos. Las llamadas convenciones universales, como los Convenios de Ginebra de 1949 para la protección de las víctimas de guerra, deberían permanecer fuera del ámbito del principio de la "tabla rasa", ya que representan las aspiraciones más caras y permanentes de la comunidad internacional. Debería ser posible establecer un conjunto de normas que permitiese la aceptación progresiva de las convenciones existentes por los nuevos Estados, sin menoscabo para el principio de la "tabla rasa". El proyecto de artículos revisado debería examinarse en una conferencia de plenipotenciarios.

22. El Sr. GARCÍA ORTIZ (Ecuador) ratifica los puntos de vista expresados por su delegación con respecto a la sucesión de Estados en materia de tratados en el vigésimo noveno período de sesiones (1494a. sesión).

23. La delegación del Ecuador ha examinado con interés las observaciones de los Estados Miembros que figuran en los documentos A/10198 y Add.1 a 3, y coincide con

algunas de esas observaciones. El Gobierno del Ecuador estudia actualmente sus propias observaciones, pero aún no las ha formulado por escrito. El orador sugiere que, teniendo en cuenta que al parecer muchos otros Estados se hallan en la misma posición, se solicite del Secretario General que se dirija de nuevo a los gobiernos pidiéndoles que transmitan sus observaciones lo antes posible. Dado que ello podría hacerse en 1976, no debería tomarse ninguna decisión sobre la forma final del proyecto de artículos antes del trigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General.

24. Un punto muy interesante planteado en las observaciones de los Estados Miembros es el de determinar si el texto que en definitiva se apruebe debe tener la forma de una convención, de una resolución o de una declaración de principios. La sucesión de Estados ha permanecido hasta hoy sujeta al derecho consuetudinario y, en consecuencia, es totalmente lícito preguntarse si vale la pena hacerla objeto de una convención o si bastaría con trazar los principios generales que regulen la materia. Además, se debe tener presente que las regulaciones de ese tipo se aplicarán cada vez con menor frecuencia, ya que los casos de sucesión de Estados disminuirán inevitablemente con el transcurso del tiempo, a medida que el proceso de descolonización y de formación de nuevos Estados llegue a su término.

25. La delegación del Ecuador se pronuncia por la supresión de los artículos 38 y 39 del proyecto. El Gobierno del Ecuador estudiará cuidadosamente los demás artículos y formulará su parecer acerca de ellos.

26. La cuestión de la solución de controversias depende de si el documento adopta en definitiva la forma de una convención o alguna otra, puesto que sólo una convención podría contener disposiciones sobre ese punto. Además, esas disposiciones deberían ser las mismas que figuran en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados en lo que atañe a la solución de controversias. La forma que se dará al documento no podría decidirse en el trigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General; si se decide que sea una convención, el texto debería examinarse en una conferencia de plenipotenciarios que, por consiguiente, no podría reunirse sino en 1977.

27. La delegación del Ecuador comparte la inquietud expresada por algunos gobiernos en el sentido de que podría ser conveniente que la CDI adoptase de inmediato una posición sobre la cuestión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados, a fin de poder acometer la tarea global de regular todos los aspectos concernientes a la sucesión. Incluso a esa cuestión, sin embargo, debería darse una consideración más detallada en las próximas observaciones.

28. El Sr. GODOY (Paraguay) observa que el principio *pacta sunt servanda* ha cedido amplio terreno a la cláusula *rebus sic stantibus*. El principio de la "tabla rasa", que constituye la piedra fundamental del proyecto de artículos, refleja acabadamente esa tendencia. El artículo 15 del proyecto no deja dudas a ese respecto. La CDI, con toda justicia, ha dado prioridad al derecho congénito del Estado de reciente independencia a una auténtica libre determinación, y no al principio de la continuidad y la estabilidad jurídica de las relaciones internacionales. Así, se ha puesto

³ Véase *Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados*, *Documentos de la Conferencia* (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.70.V.5), documento A/CONF.39/27, pág. 311.

en aplicación *de jure* el principio de la igualdad soberana de todos los Estados, que les permite decidir por sí solos qué obligaciones convencionales adquiridas en su nombre por sus predecesores se mantendrán en vigor y cuáles deberán ser denunciadas. Sin embargo, habida cuenta de la creciente interdependencia de relaciones entre los Estados, cualesquiera sean su nivel de desarrollo y sus sistemas económicos, sociales y políticos, también interesa al Estado de reciente independencia, como miembro de la comunidad internacional, velar porque la sucesión altere en el menor grado posible las relaciones convencionales existentes, establecidas de acuerdo con el derecho internacional, y contribuir al equilibrio indispensable para el mantenimiento de un orden internacional armónico. Al mismo tiempo, es absolutamente necesario que los nuevos Estados, independientemente de las medidas que adopten respecto de las relaciones convencionales de los Estados predecesores, reconozcan los principios generales del derecho internacional que emanan, por ejemplo, de la posición geográfica de sus territorios. Tal es el caso de los Estados de tránsito, por cuyo territorio se ejercita la navegación fluvial internacional u otras formas de tránsito reconocidas por el derecho internacional consuetudinario. Esos territorios tienen el carácter de servidumbres, y las obligaciones emergentes deben pasar normalmente al nuevo Estado. A ese respecto, la delegación del Paraguay considera que el artículo 5 protege suficientemente el principio mencionado. Lo mismo se aplica en el caso de los llamados “tratados multilaterales de carácter universal”.

29. La delegación del Paraguay coincide en general con el fondo del proyecto presentado por la CDI. Sin embargo, considera que en el inciso *b)* del párrafo 1 del artículo 2 deberían reemplazarse las palabras “de un territorio” por la frase “del territorio al que se refiere la sucesión de Estados”. Con esa enmienda, el artículo será más preciso y al mismo tiempo se uniformaría la redacción con la terminología empleada en otras partes del mismo párrafo. El inciso *h)* sería más claro y más breve si se sustituyeran las palabras “de un Estado” y “al Estado” por la frase “del Estado sucesor” y “a ese Estado”, respectivamente. Deberían introducirse modificaciones análogas en los incisos *i)* y *j)*. Además, la redacción de la última parte del inciso *h)* es defectuosa, pues no se puede comunicar la “notificación”.

30. Habida cuenta de la actual geografía política, la delegación del Paraguay observa con preocupación la posible demora en la convocación de una conferencia de plenipotenciarios encargada de aprobar el texto definitivo de la convención sobre la sucesión de Estados en materia de tratados, así como la conferencia encargada de aprobar la convención sobre la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados, especialmente teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 7 y el hecho de que, para su entrada en vigencia, un instrumento internacional multilateral requiere normalmente varios años desde el momento de su adopción. Tampoco debe olvidarse que la CDI debe renovar la totalidad de sus miembros a fines del año próximo, y que los nuevos miembros necesitarán algún tiempo para familiarizarse con los métodos de trabajo y con la sustancia de los temas que examinen. Una obra que ha consumido tantos años de esfuerzo debe ser aprovechada mientras todavía haya quien la necesite. Por lo tanto, el orador comparte la opinión de que no queda tiempo para devolver el proyecto a la CDI para nuevas enmiendas,

adiciones o supresiones de carácter sustantivo. Ello implicaría correr el riesgo de retroceder en los progresos alcanzados. De todos modos, las modificaciones de naturaleza política y los toques finales que sean necesarios deben quedar librados a la conferencia de plenipotenciarios. Mientras tanto, para ganar tiempo y facilitar la labor de la conferencia, el Relator Especial, en colaboración con el Comité de Redacción de la CDI podría introducir, según procediera, los comentarios y sugerencias presentados por los gobiernos y las delegaciones durante los dos últimos períodos de sesiones de la Asamblea General. Además, debe eliminarse toda ambigüedad en la redacción.

31. La delegación del Paraguay apoya asimismo el método de utilizar al máximo la terminología empleada por la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y otros instrumentos multilaterales análogos. Ese procedimiento contribuye, sin duda, al desarrollo y la codificación del derecho internacional.

32. La delegación del Paraguay tiene dudas acerca de la actual redacción del artículo 12, especialmente de la frase “no afectará de por sí”, en relación con las obligaciones y los derechos aplicados a los territorios en virtud de tratados. No es claro si esas obligaciones y derechos seguirán en vigencia como consecuencia de una sucesión de Estados o si esa sucesión anulará los efectos de un tratado preexistente en cuanto a los derechos y obligaciones que se consideren vinculados a dichos territorios. La misma observación se aplica al artículo 11.

33. Igualmente, sería preferible que las reservas mencionadas en el artículo 19 se limitasen al mínimo necesario a fin de no enervar la efectividad de esa convención o de cualquiera otra. Esas reservas no deben emplearse para anular o debilitar el principio de la continuidad y estabilidad de las relaciones entre los Estados.

34. La delegación del Paraguay lamenta que no se haya previsto en el proyecto ningún mecanismo para la solución pacífica de las controversias que surjan como consecuencia de la interpretación o aplicación de las normas que regirán la sucesión de Estados en materia de tratados. Se podría prever ese mecanismo en el texto del proyecto o elaborar un protocolo adicional para salvar la omisión. Los procedimientos del caso deberían basarse en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.

35. La delegación del Paraguay tiene la firme convicción de que la futura convención cubrirá una sentida necesidad de la legislación internacional, dado que en la actualidad no existe una práctica uniforme de los Estados en esa materia.

El Sr. Njenga (Kenya) vuelva a ocupar la Presidencia.

36. El Sr. CEAUSU (Rumania) dice que el tema de la sucesión de Estados en materia de tratados es muy importante y que, en consecuencia la Sexta Comisión debe examinar más a fondo el proyecto de artículos preparado por la CDI, con miras a hallar soluciones generalmente aceptables para las cuestiones de principio mencionadas en el informe de la CDI, tales como la celebración de una conferencia de plenipotenciarios y la formulación de una convención o código, así como para determinadas cuestiones concretas como los tratados multilaterales de carác-

ter universal y la solución de controversias. La forma más adecuada de completar la labor de la CDI sería que la Sexta Comisión examinara y aprobara el proyecto de artículos, como se hizo, por ejemplo, en el caso del proyecto de artículos sobre las misiones especiales. En cuanto a la forma jurídica que se dará al proyecto de artículos en examen, la Sexta Comisión podría considerar, además de una convención o un código, un documento análogo al que versa sobre la Definición de la agresión o a la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, que sería aprobado por una declaración o resolución de la Asamblea General. La cuestión de los tratados multilaterales de carácter universal es especialmente importante y oportuna, y debería estudiarse más a fondo de lo que se prevé en el párrafo 76 del informe de la CDI. La presunción de continuidad y la calificación jurídica del consentimiento expreso como adhesión y no como sucesión deberían basarse no en el carácter normativo de tales tratados sino, en cambio, en el interés general que revisten para todos los Estados.

37. Refiriéndose a artículos concretos del proyecto, el orador dice que, en lo que respecta al artículo 4, la aplicación o la aceptación de determinados instrumentos contractuales aprobados en las organizaciones internacionales no deberían ser afectadas por otras normas que no fueran las relativas a la calidad de miembros de una organización internacional.

38. Con referencia al artículo 5, el orador dice que el uso del artículo 43 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados como fuente no es enteramente adecuado. El artículo 5 se ocupa de la aplicación o de la adhesión futura a determinados tratados como un todo y no a normas independientes que ya se han convertido o que se han de transformar en consuetudinarias.

39. Con referencia al artículo 6, el orador dice que la cuestión de si una sucesión se ajusta a los principios del derecho internacional es demasiado compleja para ser tratada de una manera tan concisa en relación con la sucesión en materia de tratados. De mantenerse el artículo, sería necesario establecer criterios básicos para definir la sucesión de Estados.

40. Con referencia al artículo 9, el orador dice que las declaraciones unilaterales relativas a la aplicación de un tratado por un Estado de reciente independencia deben considerarse, cuando menos, como ofertas encaminadas a la continuidad del ejercicio de ciertos derechos y obligaciones. Sin embargo, tales declaraciones no podrían considerarse como declaraciones generales de intención pendientes de

confirmación. Si fuesen lo suficientemente precisas, podrían considerarse como notificación de la aceptación de determinados tratados.

41. Con referencia al artículo 10, el orador dice que si un tratado establece la posibilidad de que un Estado de reciente independencia se considere parte en un tratado, no está claro por qué ese Estado deba anunciar su sucesión en el tratado en lugar de formular la notificación habitual. El nuevo Estado debe considerarse parte desde la fecha en que ha prestado su consentimiento.

42. Las disposiciones del artículo 12 son discutibles, y el comentario de la CDI carece de convicción. Contiene muchas referencias a la práctica y a las obras de juristas de ciertos países metropolitanos y ninguna a la práctica y al parecer de los nuevos Estados. El orador no podría apoyar la propuesta de la CDI de excluir los tratados territoriales de la aplicación del principio de la "tabla rasa". El artículo 12 impondría al Estado de reciente independencia la obligación de respetar condiciones concedidas por el Estado metropolitano a otros Estados. El artículo debería establecer, en cambio, que el Estado sucesor pudiese, con miras a establecer buenas relaciones con sus vecinos, mantener facilidades como el tránsito, por ejemplo, pero sólo en la medida en que considere que la continuación de esas facilidades no menoscaban su propia soberanía o su derecho a hacer uso de sus recursos como estime conveniente. Si no se puede mejorar el artículo 12, convendría suprimirlo.

43. Con referencia al artículo 17, el orador entiende que algunos de los términos empleados son vagos y que la participación de los Estados de reciente independencia en los tratados que no están en vigor en la fecha de su sucesión debería estar cubierta por disposiciones generales relativas a los tratados.

44. El artículo 18 debería suprimirse, puesto que el vínculo entre el Estado predecesor y el tratado es demasiado débil. Un Estado podría no ratificar o aprobar la firma de otro Estado. Sería más útil estudiar la situación en que el Estado predecesor haya tenido derecho a adherirse a un tratado, especialmente a un tratado de participación limitada, pero no ha ejercido ese derecho.

45. Con referencia al Artículo 19, el orador considera que sería útil examinar la cuestión de la objeción del Estado predecesor a las reservas hechas por terceros Estados, así como la objeción del Estado de reciente independencia.

Se levanta la sesión a las 12.15 horas.

1531a. sesión

Lunes 6 de octubre de 1975, a las 15.15 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1531

TEMA 110 DEL PROGRAMA

Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la labor realizada en su octavo período de sesiones (continuación) (A/10017, A/C.6/L.1016, A/C.6/L.1017)

1. El Sr. NORDTØMME (Noruega) felicita a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) por los progresos realizados en su octavo período de sesiones, y da las gracias al Presidente de la CNUDMI por su excelente presentación del informe (A/10017).

2. Noruega es un país porteador de mercaderías entre muchos países, y tiene uno de los niveles más altos del mundo de actividad comercial con el extranjero per cápita; por consiguiente, la armonización del derecho mercantil internacional tiene especial importancia para su país, que es miembro de la CNUDMI y participa activamente en sus deliberaciones.

3. Su Gobierno está a favor de los métodos de trabajo establecidos de la CNUDMI, que parecen permitirle llevar a cabo sus tareas en una atmósfera constructiva mediante el uso de grupos de trabajo para ahorrar tiempo, con lo cual la CNUDMI puede adoptar todas sus decisiones por consenso.

4. Su Gobierno se propone firmar pronto la Convención sobre la prescripción en materia de compraventa internacional de mercaderías¹, de 1974, la única convención que ha producido hasta ahora la CNUDMI. Su Gobierno desea señalar a la atención de todos los Estados la invitación del Secretario General a que hagan observaciones sobre el proyecto de convenio sobre el transporte marítimo de mercancías para octubre de 1975, de forma que la CNUDMI pueda tener en cuenta las observaciones del mayor número posible de Estados y terminar de forma realista el texto, que tendrá gran importancia como base para una futura conferencia diplomática.

5. En la mayoría de los países, el derecho interno relativo a la importante cuestión de la responsabilidad por los daños causados por productos destinados al comercio internacional u objeto de éste es con frecuencia ambiguo o incluso no está desarrollado; por tanto, el orador espera que la CNUDMI en su décimo período de sesiones prepare una nueva serie de reglas que pudieran tener por efecto desarrollar el derecho interno, beneficiando así tanto a la comunidad internacional como a los consumidores.

6. Con respecto a la inclusión de nuevos temas en el programa de la CNUDMI, su Gobierno comparte la opinión

de que parece prematuro confiarle nuevas tareas en la fase actual, y sugiere que la CNUDMI vuelva a examinar la cuestión cuando haya terminado un mayor número de sus tareas actuales. Expresa la esperanza de que la Sexta Comisión, durante el actual período de sesiones de la Asamblea General, llegue por consenso a una resolución que refleje las distintas recomendaciones de la CNUDMI.

7. El Sr. ESGUERRA (Filipinas) elogia al Presidente de la CNUDMI por su completa y útil presentación del informe.

8. Con respecto a la compraventa internacional de mercaderías, su delegación cree que el texto revisado de la Ley Uniforme sobre la compraventa internacional de mercaderías (LUCI), anexa a la Convención de La Haya de 1964, debería redactarse en forma de convención, en vez de como ley uniforme anexa a una convención. Esa solución evitaría numerosas reservas que podrían tender a aminorar el valor de la convención y a limitar indebidamente su ámbito de aplicación. La nueva convención debería adoptar solamente las disposiciones vigentes de otras convenciones, tales como la Convención sobre la prescripción en materia de compraventa internacional de mercaderías, cuando esa adopción no lleve a un resultado inadecuado. Convendría que la nueva convención y toda codificación relativa a la formación de los contratos de compraventa se examinaran en la misma conferencia siempre que ambos textos estuvieran listos, y que se incorporaran en la misma convención.

9. Con respecto a las condiciones generales de venta y los contratos tipo, su delegación celebra la creación de un grupo de estudio compuesto por representantes de las distintas organizaciones regionales interesadas. La necesidad práctica de un proyecto de condiciones generales procede de la idea de que las condiciones generales aplicables a una amplia gama de productos pueden ser también aplicables a una ley sobre la compraventa. Ahora bien, tales condiciones generales para ramas específicas del comercio o para determinados productos sólo corresponderán a las necesidades comerciales si la rama del comercio interesada ha expresado su deseo de que existan. Es, pues, apropiado establecer un grupo para que estudie la cuestión.

10. Con respecto a la reglamentación internacional del transporte marítimo, su delegación se suma a las que han felicitado al Grupo de Trabajo correspondientes por su rápida y feliz terminación de un nuevo proyecto de convenio sobre el transporte marítimo de mercancías.

11. Su delegación apoya las propuestas destinadas a obtener información sobre los problemas jurídicos que plantean los distintos tipos de empresas multinacionales y sus consecuencias para la unificación y armonización del derecho internacional. La CNUDMI debería estudiar las cuestiones jurídicas sobre las que puede adoptar medidas por sí misma, en estrecha coordinación con la Comisión de Empresas Transnacionales.

¹ Véase *Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la prescripción en la compraventa internacional de mercaderías* (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.74.V.8), documento A/CONF.63/15.

12. Su delegación sigue creyendo que los trabajos y las decisiones de la CNUDMI deberían basarse en el consenso. Apoya el problema de trabajo de la CNUDMI, incluida la duración del noveno período de sesiones y la fecha propuesta para el mismo, y elogia a la CNUDMI por sus laudables esfuerzos en relación con la celebración de simposios sobre el derecho mercantil internacional.

13. El Sr. STANFORD (Canadá) felicita a la CNUDMI y a su Presidente por la labor realizada durante el año pasado. Le complace saber que algunos de los complejos temas estudiados por la CNUDMI y por sus grupos de trabajo en los últimos años pronto estarán listos para ser examinados por una conferencia diplomática.

14. Aunque el Canadá no es miembro de la CNUDMI, está particularmente interesado en dos temas de su programa, a saber: la reglamentación internacional del transporte marítimo y las empresas multinacionales. Su Gobierno ha participado activamente en los trabajos del Grupo de Trabajo sobre la reglamentación internacional del transporte marítimo y desea felicitar al Grupo por la preparación del proyecto de convenio sobre el transporte marítimo de mercaderías que actualmente está siendo examinado por su Gobierno y por el sector privado canadiense, con miras a preparar observaciones para que sean examinadas por la CNUDMI.

15. El hecho de que la Comisión de Empresas Transnacionales ya haya elegido para estudio varios temas que tienen importantes aspectos jurídicos confirma la opinión de su delegación de que la CNUDMI tiene un papel importante que desempeñar en la labor que han de realizar las Naciones Unidas en relación con las empresas multinacionales. Por tanto, su delegación celebra que la CNUDMI esté dispuesta a cooperar con la Comisión de Empresas Transnacionales. Es importante que las Naciones Unidas aseguren que las empresas multinacionales desempeñen un papel adecuado en el desarrollo económico de los países en desarrollo. La experiencia del Canadá confirma la considerable contribución que esas empresas pueden aportar a las economías de aquellos países en los que han invertido sus sustanciales recursos. La misma experiencia conforma también la necesidad de una regulación adecuada de las empresas, de forma que esas actividades sean concordes con las políticas y objetivos del país en desarrollo que las acoge. Evidentemente el derecho tiene una importante contribución que hacer al desarrollo de ese marco regulador, y la CNUDMI debería dar gran prioridad a los temas que le remita la Comisión de Empresas Transnacionales.

16. El Sr. ENKHSAIKHAN (Mongolia) dice que la actual situación política mundial es particularmente favorable para el desarrollo de la cooperación económica internacional de todos los Estados, independientemente de sus sistemas sociales y económicos. Importantes acontecimientos recientes en Indochina y en Helsinki han abierto nuevas posibilidades para consolidar la paz y la seguridad internacionales, y crean condiciones favorables para resolver los urgentes problemas de las relaciones económicas internacionales, tales como la lucha de los países en desarrollo para superar las devastadoras consecuencias de la opresión colonial y neocolonial, la reestructuración de las desiguales relaciones existentes entre los países en desarrollo y los países capitalistas, y la liquidación de la discriminación en

el comercio internacional. Las decisiones del sexto y del séptimo períodos extraordinarios de sesiones de la Asamblea General han aportado una contribución positiva al desarrollo de relaciones económicas internacionales justas.

17. Con respecto a los capítulos II y III del informe de la CNUDMI, su delegación celebra los considerables progresos realizados por la CNUDMI en su labor, y aprueba su decisión de pedir al Secretario General que termine el estudio sobre las garantías reales titulado "*Study on security interests*"² incluyendo el derecho de otros países, en particular de los Estados socialistas de Europa Oriental, y prosiga, en consulta con las organizaciones internacionales y las instituciones financieras y comerciales interesadas, el estudio de viabilidad sobre el posible alcance y contenido de las normas uniformes sobre garantías reales en las mercaderías. La cuestión de la formulación de criterios para identificar las transacciones comerciales internacionales a las que se aplicarán las reglas uniformes propuestas, así como otros graves problemas que dimanen de las cuestiones relativas a la responsabilidad por los daños causados por los productos destinados al comercio internacional u objeto de éste, requieren más estudio por parte de la Secretaría.

18. Con respecto al capítulo IV del informe, su delegación considera que el Grupo de Trabajo sobre la reglamentación internacional del transporte marítimo ha desempeñado con éxito la tarea que le fue asignada en el séptimo y el octavo períodos de sesiones, apoya la decisión de la CNUDMI de examinar el proyecto de convenio sobre el transporte marítimo de mercancías en su noveno período de sesiones.

19. Con respecto al capítulo V, su delegación considera que la CNUDMI ha actuado acertadamente al convenir en centrarse en los conceptos básicos subyacentes al anteproyecto de reglamento de arbitraje y a las cuestiones principales tratadas en cada artículo. El Secretario General, de conformidad con la petición de la CNUDMI, debería preparar un proyecto revisado de reglamento de arbitraje, teniendo en cuenta las observaciones hechas por distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como por las formuladas en el octavo período de sesiones de la CNUDMI. Las disposiciones que surjan de las actividades relativas a la cooperación económica, técnica y científica de 1972, concluida por los Estados miembros del Consejo de Asistencia Económica Mutua, por ejemplo, podría contribuir también a la formulación del anteproyecto de reglamento de arbitraje para uso optativo en el arbitraje *ad hoc* relativo al comercio internacional.

20. Con respecto al capítulo VI, el orador expresa la esperanza de que en el proyecto de programa de trabajo detallado en relación con las empresas multinacionales que han de presentar la Comisión de Empresas Transnacionales y el Centro de Información e Investigaciones sobre las Empresas Transnacionales se señalarán las cuestiones jurídicas concretas que ha de examinar la CNUDMI. Su delegación apoya la decisión de la CNUDMI de mantener en su programa el tema relativo a las empresas multinacionales, y de aplazar la elaboración de su programa de trabajos sobre el tema hasta que la Comisión de Empresas Transnacionales haya determinado las cuestiones jurídicas concretas que ha de examinar.

² ST/LEG/11.

21. El Sr. SIMANI (Kenya) felicita a la CNUDMI y a su Presidente por su excelente labor e informe.
22. Con respecto a la compraventa internacional de mercaderías, su delegación apoya la decisión del Grupo de Trabajo correspondiente de presentar un proyecto de convención, en vez de una ley uniforme anexa a una convención. Cuando el Grupo de Trabajo termine el proyecto de convención sobre la compraventa internacional de mercaderías, debería remitirse a los gobiernos para que hicieran comentarios y observaciones antes de convocar una conferencia diplomática para estudiar la adopción de la convención. Su delegación celebra la decisión del Grupo de Trabajo de abordar la cuestión de las condiciones generales de venta y los contratos tipo y la formación y validez de los contratos de compraventa en una fase posterior.
23. Con respecto a los pagos internacionales, su delegación observa con satisfacción que el Grupo de Trabajo sobre títulos negociables internacionales ya ha examinado varios proyectos de artículos para una ley uniforme sobre letras de cambio internacionales y pagarés internacionales. El orador sugiere que la cuestión de los cheques se examine junto con ese tema, y que se elaboren normas uniformes al mismo tiempo, de ser posible. Su delegación aprecia la labor realizada por la CNUDMI en cooperación con la Cámara de Comercio Internacional (CCI) sobre otros temas conexos.
24. Su delegación espera presentar pronto sus comentarios y observaciones relativos al proyecto de convenio sobre el transporte marítimo de mercancías.
25. Convendría que la CNUDMI y la Comisión de Empresas Transnacionales trabajasen en colaboración en el importante tema de las empresas multinacionales.
26. Con respecto a la formación y la asistencia en la esfera del derecho mercantil internacional, su Gobierno desea expresar su agradecimiento a los países que han hecho posible que participantes de los países en desarrollo, incluido un participante de la Universidad de Nairobi, asistieran al simposio sobre la función de las universidades y los centros de investigación con respecto al derecho mercantil internacional aportando contribuciones para sus gastos.
27. Su delegación está de acuerdo con la propuesta de la CNUDMI de terminar los trabajos sobre los temas que está examinando actualmente antes de abordar nuevos temas.
28. El Sr. MUSEUX (Francia) felicita a la CNUDMI por la labor que ésta y sus grupos de trabajo han realizado y que, salvo excepciones, es muy constructiva.
29. Con respecto a la compraventa internacional de mercaderías, aunque su Gobierno cree que la LUCI se adapta a las necesidades del comercio internacional, toma nota con satisfacción de los avances significativos que la CNUDMI ha hecho en lo tocante a la revisión del texto. Una convención ampliamente aceptada tendría gran importancia económica y, por consiguiente, la delegación de Francia espera que los trabajos sean totalmente satisfactorios.
30. Con respecto a las condiciones generales de venta y los contratos tipo, su delegación no cree que el criterio adoptado actualmente por la CNUDMI, que consiste en preparar un conjunto de condiciones generales "generales" que sea aplicable a una amplia gama de productos, satisfaga las necesidades de los círculos comerciales. Sería más realista y más útil preparar varias cláusulas tipo, cada una de las cuales se aplicara a una categoría de productos. Además, la CNUDMI debería guiarse en mayor medida por los trabajos realizados en esa esfera por la Comisión Económica para Europa.
31. Su delegación se complace en observar los progresos que se han realizado con respecto al proyecto de ley uniforme sobre letras de cambio internacionales y pagarés internacionales. En especial, acoge complacido los resultados logrados con respecto a los créditos documentarios, ya que los trabajos han llevado a la preparación de un nuevo texto de "Usos y Prácticas Uniformes en Materia de Créditos Documentarios", que ahora aplicarán los bancos de gran número de países. También le complace comprobar que se ha entablado una cooperación fructífera en esa esfera entre la CNUDMI y la CCI. Acoge complacido el estudio sobre las garantías reales, pero lamenta que sólo se haya distribuido el texto en inglés. Es preciso que todas las delegaciones puedan familiarizarse con ese texto.
32. Le complace el hecho de que el Grupo de Trabajo sobre la reglamentación internacional del transporte marítimo haya podido completar su labor con tanta rapidez, de manera que la CNUDMI podrá examinar en su noveno período de sesiones el proyecto de convenio sobre el transporte marítimo de mercancías.
33. Con respecto a la cuestión del arbitraje comercial internacional, la delegación de Francia felicita al Secretario General por la valiosa tarea realizada y se congratula de que se hayan eliminado las incertidumbres que existían entre el arbitraje especial y el "arbitraje administrado". Espera que el reglamento de arbitraje, en su versión definitiva, merezca amplio reconocimiento y se utilice, por tanto, en la máxima medida posible.
34. Desde que se incluyó la cuestión de las empresas multinacionales en el programa de la CNUDMI, su delegación ha tenido dudas en cuanto a la posibilidad de destacar problemas estrictamente jurídicos en relación con los que ya están examinando la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la Organización Internacional del trabajo y ahora el Consejo Económico y Social por intermedio de su Comisión de Empresas Transnacionales. El deseo de evitar duplicaciones, así como los problemas de carácter esencialmente económico que plantea la existencia de las empresas multinacionales, llevan a su delegación a creer que la CNUDMI no es el foro adecuado para ocuparse de esa cuestión, por lo menos en un futuro próximo.
35. La cuestión de la responsabilidad por los daños causados por los productos destinados al comercio internacional u objeto de éste es uno de los temas del programa con respecto a los cuales su Gobierno abriga reservas, pues considera que la CNUDMI debería ocuparse únicamente de aquellas cuestiones que reflejen una necesidad claramente existente en todas las partes del mundo y en todos los sistemas jurídicos, lo que no sucede en ese caso concreto. Señala que hay una convención de La Haya de 1973 relativa a los conflictos de leyes y que a nivel europeo la cuestión de

la responsabilidad por daños causados por los productos ha sido objeto de una convención en el marco del Consejo de Europa, así como de directrices de la Comunidad Económica Europea. Además, su delegación cree que la CNUDMI ha adoptado un criterio excesivamente ambicioso a ese respecto, ya que se ha fijado como objetivo preparar normas uniformes a nivel mundial. Sin embargo, bastará con que un Estado importante rechace esas normas para que las empresas de los Estados que las hayan aceptado se encuentren en una situación competitiva desfavorable en los mercados internacionales.

36. El Sr. IŁOPUSZAŃSKI (Polonia) dice que su delegación desea recalcar la importancia de las actividades de la CNUDMI. De hecho, su país es uno de los pocos Estados que han firmado la Convención sobre la prescripción en materia de compraventa internacional de mercaderías, de 1974. Su delegación se siente satisfecha con la labor de la CNUDMI, y observa que el Grupo de Trabajo pertinente ha podido completar la labor relativa a un proyecto de convenio sobre el transporte marítimo de mercancías, que será examinado por la CNUDMI en su noveno período de sesiones. Los trabajos del proyecto de convención sobre la compraventa internacional de mercaderías están en su última etapa y se han realizado considerables progresos en la preparación del proyecto de convención sobre un proyecto de ley uniforme sobre letras de cambios internacionales y pagarés internacionales.

37. Su delegación ha tomado nota con satisfacción de que la CNUDMI y la CCI han establecido una cooperación fructífera, con lo que los expertos de países cuyas cámaras de comercio no son miembros de la CCI han podido participar en la labor de esta última. Así pues, los expertos de los países socialistas han podido participar en la revisión del texto de "Usos y Prácticas Uniformes en Materia de Créditos Documentarios", aprobado en 1974. Expertos de países socialistas han participado también en la labor de la CCI con respecto a un asunto de gran importancia para el comercio internacional, a saber, las garantías bancarias.

38. La delegación de Polonia apoya la opinión de que en lo tocante a los trabajos sobre las garantías reales, hay que tener en cuenta las leyes, prácticas y doctrinas jurídicas de los países socialistas.

39. Su delegación se complace en observar que ha entrado en su etapa final la labor relativa a un anteproyecto de reglamento de arbitraje para uso facultativo en el arbitraje especial relacionado con el comercio internacional. Al respecto, apoya la decisión de presentar el proyecto de reglamento al Quinto Congreso de Arbitraje Internacional, celebrado en Nueva Delhi en 1975, para su examen.

40. La delegación de Polonia cree que la CNUDMI debe proseguir sus trabajos con respecto al problema de las empresas multinacionales. Son bien conocidos los problemas y las dificultades que causan en algunos países las actividades de esas empresas.

41. La delegación de Polonia está a favor también de que prosiga la labor sobre la responsabilidad por los daños causados por los productos destinados al comercio internacional u objeto de éste. El problema no es sólo

económico, sino también social, ya que tiene un profundo aspecto humano que no cabe olvidar.

42. El orador expresa su satisfacción por el hecho de que la CNUDMI haya decidido patrocinar más simposios sobre derecho mercantil internacional. A ese respecto, señala que en el simposio de 1975 dieron conferencias ocho representantes, incluido uno de Polonia.

43. El Sr. ROSENSTOCK (Estados Unidos de América) elogia a la CNUDMI por sus métodos de trabajo serios y toma nota de las relaciones constructivas y beneficiosas que se han entablado entre la CNUDMI y otros órganos, tales como la CCI y el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. La Convención sobre la prescripción en materia de compraventa internacional de mercaderías, aprobada por una conferencia diplomática en 1974, es la primera de una serie de convenciones para eliminar los obstáculos que se derivan de las divergencias jurídicas que se oponen al crecimiento del comercio internacional.

44. La delegación de los Estados Unidos acoge complacida la decisión de la CNUDMI de pedir al Grupo de Trabajo sobre la compraventa internacional de mercaderías que termine su revisión de la LUCI para principios de 1976. En seis períodos de sesiones, el Grupo de Trabajo casi ha terminado la primera lectura de un proyecto de convención sobre la compraventa internacional de mercaderías. Aunque quedan algunas cuestiones por resolver, ya se pueden apreciar los grandes rasgos de esa convención. Por ejemplo, se decidió que el texto revisado debe redactarse en forma de convención integrada y no como ley uniforme anexa a una convención, lo que, a juicio de su delegación, es un buen criterio. Su delegación también apoya la decisión del Grupo de Trabajo de que, en principio y cuando proceda, es conveniente atenerse en todo lo posible a las fórmulas de la Convención sobre la prescripción en materia de compraventa internacional de mercaderías.

45. Con respecto a la cuestión de si la propuesta convención sobre la compraventa y las normas sobre la formación y validez de los contratos de compraventa deben incorporarse en una convención única o si las normas deben ser objeto de una convención separada, su delegación está a favor de esa última posibilidad. Con respecto a la cuestión conexa de si esa convención separada sobre formación debe examinarse en la conferencia de plenipotenciarios que considerará la convención sobre la compraventa, su delegación apoya el acuerdo de la CNUDMI de aplazar la decisión hasta el décimo período de sesiones, fecha para la que se dispondrá de todos los datos pertinentes.

46. Su delegación toma nota con satisfacción de que el Grupo de Trabajo sobre títulos negociables internacionales ha realizado considerables progresos sobre el último año. Aunque quedan algunas cuestiones por resolver, el Grupo de Trabajo ha examinado tres cuartas partes de los artículos del proyecto de ley uniforme preparado por la Secretaría. Su delegación espera que continúe progresando y que el Grupo termine la primera lectura de los artículos en su reunión de febrero de 1976. Si termina sus trabajos para esa fecha, se podrá cumplir el programa de trabajo establecido en el séptimo período de sesiones de la CNUDMI, a saber, que el proyecto debe terminarse con tiempo suficiente para que los gobiernos puedan examinarlo plenamente antes del

11° período de sesiones de la CNUDMI, período en el que se examinará con detalle el proyecto de artículos.

47. Con respecto al proyecto de ley uniforme sobre letras de cambio internacionales y pagarés internacionales, su delegación apoya la decisión de la CNUDMI de pedir al Secretario General que haga indagaciones acerca del uso de cheques para efectuar pagos internacionales, para determinar si se plantean problemas jurídicos parecidos a los que plantean las letras de cambio internacionales. A ese respecto, la delegación de los Estados Unidos expresa su satisfacción por la contribución que ha aportado hasta ahora a la labor de la CNUDMI su Grupo de Estudio sobre Pagos Internacionales, integrado por expertos cuyos servicios son ofrecidos por las organizaciones internacionales y las instituciones bancarias y comerciales interesadas, y espera que sigan ayudando a la CNUDMI en sus trabajos.

48. La aprobación de un proyecto de convenio sobre el transporte marítimo de mercancías por el Grupo de Trabajo sobre la reglamentación internacional del transporte marítimo es un logro importante. El orador espera participar en la continuación de los trabajos relativos a ese tema en el noveno período de la CNUDMI, en el que todos sus miembros tendrán ocasión de participar en un examen del convenio artículo por artículo.

49. La delegación de los Estados Unidos cree que la CNUDMI ha actuado con acierto en lo tocante a la cuestión de las empresas multinacionales. El criterio adoptado refleja un reconocimiento de la función central de la Comisión de Empresas Transnacionales en lo tocante a examinar la cuestión, así como de la importante función que la CNUDMI puede desempeñar con respecto a sus aspectos jurídicos. Su delegación confía en que las altas normas de profesionalismo de la CNUDMI y su tradición de evitar propaganda política sean garantía de que, cuando se ocupe de esa cuestión, se tendrá plenamente en cuenta el hecho de que la esfera de interés incluye empresas que son privadas, estatales o mixtas. Lo único que lamenta a ese respecto son las observaciones propagandísticas innecesarias que algunas delegaciones han juzgado oportuno hacer. Sus comentarios perjudican a la CNUDMI y, además, sirven para distraer a las Naciones Unidas de su empeño en ocuparse de las cuestiones importantes que se plantean en relación con las empresas multinacionales.

50. La avanzada etapa en que se encuentran los trabajos sobre el anteproyecto de reglamento de arbitraje para uso facultativo en el arbitraje especial relacionado con el comercio internacional y el amplio consenso con respecto a las sugerencias de mejoras llevaron a la CNUDMI, en su octavo período de sesiones, a pedir al Secretario General que preparara un proyecto revisado, teniendo en cuenta el debate general celebrado en ese período de sesiones. Su delegación espera que el proyecto revisado esté a disposición de los gobiernos antes de que termine 1975, de manera que puedan consultar con sus expertos nacionales en arbitraje y con hombres de negocios experimentados antes del debate que se celebrará en el noveno período de sesiones de la CNUDMI. Si se sigue el programa, su delegación espera que la labor de la CNUDMI con respecto a ese importante tema termine en la primavera de 1976.

51. El Sr. VALLADAO (Brasil) da las gracias al Presidente de la CNUDMI por la presentación del informe sobre la labor realizada en su octavo período de sesiones.

52. Es alentador observar los progresos que se han realizado con respecto a la armonización y unificación del comercio internacional, ya que la eliminación de los obstáculos jurídicos existentes en esa esfera ayuda a mejorar el nivel de vida de todos los pueblos. También es alentador que el examen por la CNUDMI de las cuestiones de la compraventa internacional de mercaderías y del transporte marítimo de mercancías hayan llegado a una etapa bastante avanzada. Los miembros de la CNUDMI deben ser felicitados por sus esfuerzos.

53. Con respecto a la compraventa internacional de mercaderías, su delegación considera conveniente, en bien de la uniformidad y la interpretación, que en el proyecto de convención sobre la compraventa internacional de mercaderías se sigan en la máxima medida posible las fórmulas de la Convención sobre la prescripción en materia de compraventa internacional de mercaderías. Apoya la decisión de la CNUDMI de pedir a los gobiernos y organizaciones interesadas que hagan observaciones antes de iniciar un examen final del proyecto. El establecimiento de condiciones generales de venta y contratos tipo puede resultar muy útil al facilitar las transacciones entre nuevos asociados o asociados acostumbrados a distintas prácticas comerciales. No obstante, en los estudios y consultas con los círculos comerciales interesados deben tenerse en cuenta los progresos realizados en la proyectada convención sobre la compraventa internacional de mercaderías para evitar conflictos innecesarios o duplicaciones.

54. Con respecto a los pagos internacionales, le complacen los resultados del tercer período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre títulos negociables internacionales. También son dignos de elogio los intercambios fructíferos entre la CNUDMI y organizaciones no gubernamentales tales como la CCI con respecto a los créditos comerciales bancarios y las garantías bancarias.

55. El hecho de que tras varios años de cuidadoso análisis por parte del Grupo de Trabajo correspondiente se haya aprobado un proyecto de convenio sobre el transporte marítimo de mercancías constituye un gran logro. Dada la continua expansión del comercio por vía marítima, es muy conveniente una actualización de las normas que rigen la responsabilidad de los porteadores. En ese análisis, una de las consideraciones más importantes ha sido el fortalecimiento eficaz de la protección de las partes con respecto a las condiciones de seguridad de la mercancía, sin imponer excesivos gastos de seguro. Su delegación está de acuerdo en que el proyecto de convenio deberá ser examinado por la CNUDMI a la luz de los comentarios que presenten los gobiernos y las organizaciones internacionales.

56. Su delegación apoya la decisión de la CNUDMI de establecer, en el noveno período de sesiones, un comité plenario para que examine el proyecto revisado de reglamento de arbitraje. Las deliberaciones preliminares sobre el asunto, según se indican en el anexo I del informe, justifican esa medida. En opinión de su delegación, unas normas equilibradas desempeñarán una función positiva al asegurar a las partes en transacciones internacionales el

arreglo rápido y equitativo de sus controversias contractuales.

57. El orador felicita a quienes han contribuido al primer Simposio de derecho mercantil internacional, incluidos los Gobiernos de Austria, Noruega, la República Federal de Alemania y Suecia, por los fondos que aportaron para sufragar los gastos de viaje de los participantes de los países en desarrollo, y a los miembros de la CNUDMI que no han regateado esfuerzo alguno por dar conferencias, sin perjuicio de sus funciones en la CNUDMI. Durante los últimos años, su delegación ha seguido con gran interés los preparativos para esa reunión y le complace que haya estado a la altura de lo que se esperaba.

58. El Sr. ABUL-KHEIR (Egipto) elogia a la CNUDMI por la excelente labor realizada y expresa la esperanza de que podrá llevar a cabo sus tareas futuras con el mismo espíritu de cooperación y comprensión mutua.

59. La delegación de Egipto siempre ha dado gran importancia a la participación como observadores de los representantes de organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, quienes, a través de los años, han hecho contribuciones positivas a la tarea de la CNUDMI. Egipto ha participado en las deliberaciones de la CNUDMI durante algún tiempo y así ha podido expresar sus opiniones sobre varios temas estudiados por ese órgano. Su delegación está satisfecha de la marcha de los trabajos sobre la LUCI. El orador espera que, al estudiar el proyecto de convención sobre la compraventa internacional de mercaderías, la CNUDMI tenga en cuenta la situación de los países en desarrollo que han experimentado durante mucho tiempo un déficit en su balanza de pagos.

60. La delegación de Egipto está de acuerdo con las observaciones del Presidente de la CNUDMI en cuanto a la gran importancia de la cuestión de la reglamentación internacional del transporte marítimo. No hay duda de que los comentarios de los Estados acerca del proyecto de convenio sobre el transporte marítimo de mercancías conducirá a un texto bien equilibrado y definitivo.

61. En opinión de la delegación de Egipto, convendría que la CNUDMI esperara hasta conocer los resultados de los estudios del Consejo Económico y Social sobre las empresas multinacionales. Entonces podría precisar las cuestiones jurídicas concretas para examinarlas.

62. El Sr. CEAUSU (Rumania) da las gracias al Presidente de la CNUDMI por su instructiva exposición sobre la labor realizada por la CNUDMI y sus grupos de trabajo.

63. Para Rumania, como para todos los países en desarrollo, la realización normal del comercio y la cooperación con otros Estados es necesaria para el progreso económico y social. En consecuencia, Rumania es partidaria de la expansión del comercio y la cooperación con todos los países. Su Gobierno espera que la CNUDMI aporte una contribución aun mayor al perfeccionamiento del derecho mercantil internacional mediante la elaboración de normas uniformes y la preparación de nuevos instrumentos, teniendo en cuenta las preocupaciones actuales, con miras a establecer un nuevo sistema de relaciones económicas internacionales.

64. La CNUDMI y sus grupos de trabajo han realizado progresos notables en su labor. A ese respecto, podría ser útil que la Asamblea General examinara el programa de trabajo de la CNUDMI a la luz de las decisiones recientes relativas al establecimiento de un nuevo orden económico internacional, estableciera prioridades adecuadas y proporcionara nuevas directrices para su labor futura.

65. La delegación de Rumania felicita a la CNUDMI por los progresos realizados en la preparación del proyecto de convenio sobre el transporte marítimo de mercancías y advierte con satisfacción que la CNUDMI finalmente ha decidido elaborar un nuevo convenio en vez de revisar las normas que figuran en el Convenio internacional para la unificación de ciertas reglas en materia de conocimientos, firmado en Bruselas en 1924. En vista de la importancia económica del instrumento en cuestión, la decisión de la CNUDMI de transmitir el proyecto de texto a los gobiernos y a las organizaciones internacionales interesadas para la formulación de observaciones es muy atinada. El orador expresa la esperanza de que, en su siguiente período de sesiones, la CNUDMI complete su labor sobre el proyecto de convenio, para que la Asamblea General pueda convocar una conferencia diplomática para que se apruebe lo antes posible.

66. La delegación de Rumania toma nota con satisfacción de que la CNUDMI ha iniciado el estudio del anteproyecto de reglamento de arbitraje. En vista de la importancia del arbitraje internacional para la promoción del comercio internacional, la CNUDMI debe acelerar sus trabajos sobre la materia con miras a elaborar un reglamento tipo de arbitraje, unificando así los reglamentos nacionales en esa esfera. Además, en vista del interés demostrado por los círculos comerciales y científicos en ser informados de la práctica del arbitraje en distintos países, valdría la pena publicar una recopilación de laudos arbitrales o, por lo menos, estudios periódicos de tendencias identificadas, como lo sugiere el Relator Especial en el párrafo 185 de su informe de 1972 sobre el arbitraje comercial internacional³.

67. La delegación de Rumania esperaba que se realizaran progresos más sustanciales en relación con el proyecto de convención sobre la compraventa internacional de mercaderías, la preparación de condiciones generales "generales" de venta y contratos tipo, y pagos internacionales. El orador expresa la esperanza de que la CNUDMI acelere su labor sobre los proyectos relativos a la compraventa internacional de mercaderías de modo que puedan aprobarse lo antes posible documentos internacionales aceptables para todos los Estados.

68. La delegación de Rumania felicita a la CNUDMI por haber celebrado un Simposio sobre la función de las universidades y los centros de investigación con respecto al derecho mercantil internacional, y apoya la decisión de celebrar otro en 1977. La Secretaría de las Naciones Unidas deberá lograr por todos los medios una participación más

³ Véase *Anuario de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional*, vol. III (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.73.V.6), "Problemas relacionados con la aplicación e interpretación de las convenciones internacionales multilaterales existentes en materia de arbitraje comercial internacional: informe preparado por el Sr. Ion Nestor (Rumania), Relator Especial (A/CN.9/64)", pág. 217.

amplia en ese Simposio y en otras actividades de formación en la esfera del derecho mercantil internacional. A ese respecto, el orador agradece a los Gobiernos de Austria, Bélgica, Noruega, la República Federal de Alemania y Suecia sus contribuciones voluntarias para el Simposio. Expresa el deseo de que el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones haga una contribución más sustancial para la celebración de seminarios sobre el derecho mercantil internacional destinados a personas de países en desarrollo.

69. La delegación de Rumania está convencida de que la CNUDMI se esforzará al máximo por acelerar aún más su labor a fin de poder presentar a la Sexta Comisión proyectos que puedan transformarse en convenios internacionales.

Organización de los trabajos

70. El Sr. OLMOS (Argentina) propone que la apertura de la sesión de la mañana del 7 de octubre se aplase hasta el mediodía para permitir a los miembros de la Comisión escuchar el discurso que el Presidente de México pronunciará en la Asamblea General.

71. El Sr. KRISHNADASAN (Swazilandia) apoya la propuesta del representante de la Argentina y propone que se adopte un procedimiento análogo para la sesión de la tarde, con el fin de permitir a los miembros de la Comisión escuchar la declaración del Presidente de Chipre en la Asamblea General.

72. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, considerará que la Comisión está de acuerdo en aplazar la apertura de las sesiones del día siguiente hasta que los Presidentes de México y Chipre hayan pronunciado sus discursos en la Asamblea General.

Así queda acordado.

73. El Sr. ROSENSTOCK (Estados Unidos de América), hablando a título puramente personal, dice que, si bien no está en desacuerdo en absoluto con la decisión que la Comisión acaba de adoptar, espera que no se tome un precedente general. La Comisión siempre ha considerado que se ocupa de cuestiones técnicas y que puede continuar sus deliberaciones en forma simultánea con el debate en las sesiones plenarias de la Asamblea. Si la Comisión suspende sus actividades cada vez que un jefe de Estado pronuncia un

discurso en la Asamblea General, podría disponer de escaso tiempo al final del período de sesiones.

74. El Sr. OSMAN (Somalia) está en desacuerdo con las opiniones expresadas por el representante de los Estados Unidos. La visita de un jefe de Estado a las Naciones Unidas para pronunciar un discurso en la Asamblea General es un asunto de interés general y es importante que los miembros de la Comisión, en su calidad de representantes de sus respectivos países, estén presentes cuando se pronuncia dicho discurso.

75. El Sr. GUNNEY (Turquía) apoya plenamente la opinión expresada por el representante de los Estados Unidos de América. Desde un punto de vista práctico, no es posible que la Comisión suspenda sus deliberaciones siempre que un jefe de Estado venga a pronunciar un discurso en la Asamblea General. Empero, no debe considerarse que, con sus observaciones, el orador haya querido poner en tela de juicio la decisión que acaba de adoptar la Comisión.

76. El PRESIDENTE dice que la decisión adoptada por la Comisión no tenía por objeto sentar un precedente, sino que se refería meramente a las sesiones del día siguiente.

77. El Sr. MAIGA (Malí) dice que es práctica de todas las Comisiones Principales suspender las deliberaciones cada vez que un jefe de Estado hace uso de la palabra en la Asamblea General. Debe mostrarse el mismo respeto hacia todos los jefes de Estados, independientemente del país que representen. La Comisión no sienta un precedente, sino que continúa una práctica establecida.

78. El Sr. BOOH BOOH (República Unida del Camerún) está de acuerdo en que cada vez que un jefe de Estado visite las Naciones Unidas, se le trate con la cortesía que corresponde. Es el procedimiento que las demás Comisiones Principales han decidido adoptar y no ve razón alguna por la cual la Sexta Comisión deba constituir una excepción.

79. El Sr. FUENTES IBÁÑEZ (Bolivia) no está de acuerdo con las opiniones expresadas por el representante de los Estados Unidos. Informa a la Comisión de que el Presidente de Bolivia pronunciará un discurso en la Asamblea General el miércoles 8 de octubre y le será muy grato que los miembros asistan al debate ese día. Esa práctica es muy correcta.

Se levanta la sesión a las 16.55 horas.

1532a. sesión

Martes 7 de octubre de 1975, a las 12.10 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1532

TEMA 110 DEL PROGRAMA

Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la labor realizada en su octavo período de sesiones (*continuación*) (A/10017, A/C.6/L.1016, A/C.6/L.1017)

1. El Sr. RAKOTOSON (Madagascar) da las gracias al Presidente de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) por la presentación clara y completa de su informe.

2. La delegación de Madagascar ha estudiado con mucho interés el informe de la CNUDMI sobre la labor realizada en su octavo período de sesiones (A/10017). En efecto, Madagascar, situado en una encrucijada, tiene especial interés en el desarrollo de sus relaciones comerciales con el mayor número posible de países y, más particularmente, en la uniformación y simplificación de las normas y prácticas del derecho mercantil internacional.

3. El Grupo de Trabajo sobre la compraventa internacional de mercaderías previó acertadamente cláusulas suficientemente flexibles para evitar la presunción automática de culpa en caso de falta de conformidad de la mercadería, demora en la declaración de resolución del contrato de compraventa o incumplimiento de sus obligaciones por una de las partes. La delegación de Madagascar aprueba la decisión, que figura en el párrafo 17 del informe, con arreglo a la cual la CNUDMI pide que se transmita el proyecto de convención sobre la compraventa internacional de mercaderías a los gobiernos y a las organizaciones internacionales competentes para que lo examinen y formulen sus observaciones.

4. En lo que respecta a las condiciones generales de venta y contratos tipo, la eficacia de esos instrumentos parece estar vinculada a dos condiciones, a saber: que estén en armonía con las disposiciones relativas a la compraventa internacional de mercaderías y que puedan aplicarse a una gama de productos tan amplia como sea posible. La labor en esas materias es compleja y podría producirse una duplicación con los trabajos relacionados con las normas uniformes que regulan la compraventa. En todo caso, la delegación de Madagascar estima que deben proseguirse esos trabajos, y aprueba la decisión de la CNUDMI, que figura en el párrafo 25 de su informe, encaminada a que el Secretario General haga indagaciones sobre la necesidad, en la práctica, de esas condiciones y establezca, a efectos de consulta, un grupo de estudio integrado por representantes de las comisiones regionales y de las asociaciones comerciales, las cámaras de comercio y organizaciones análogas interesadas de distintas regiones. La convención sobre la compraventa y las normas relativas a la formación y la validez de los contratos de compraventa deberían examinarse en la misma conferencia.

5. En lo tocante a los pagos internacionales, la uniformación y simplificación de las normas relativas a esa materia necesariamente han de contribuir al desarrollo de las transacciones comerciales. Por ello, sería conveniente que la Secretaría y el Grupo de Trabajo sobre títulos negociables internacionales prosiguieran sus estudios sobre la posibilidad de utilizar cheques para efectuar pagos internacionales. En relación con los créditos comerciales bancarios, las cartas de crédito comerciales desempeñan un importante papel en el pago de las transacciones comerciales internacionales. Tampoco debe descuidarse la función de las garantías bancarias, especialmente respecto de los países en desarrollo. Habida cuenta de que no se ha puesto a disposición de los miembros de la Sexta Comisión el último texto revisado de los "Usos y Prácticas Uniformes en Materia de Créditos Documentarios", preparado por la Cámara de Comercio Internacional (CCI), la delegación de Madagascar no puede emitir una opinión acerca de ese texto ni acerca de la decisión de la CNUDMI que figura en el párrafo 41 de su informe, en la que se recomienda que a partir del 1º de octubre de 1975 se utilice la revisión de 1974 en las transacciones que entrañen el establecimiento de un crédito documentario. Es evidente que la cooperación entre la CNUDMI, la CCI y otras instituciones bancarias y comerciales debe ser fructífera, ya sea en materia de créditos o de garantías bancarias.

6. Dado que Madagascar no cuenta con una marina mercante que pueda asegurar el transporte internacional, su delegación atribuye particular importancia a las normas que rigen la responsabilidad de los porteadores marítimos. A ese respecto, sería conveniente atribuir a los documentos distintos de los conocimientos el mismo valor de ellos y aumentar la responsabilidad del porteador y el cargador, limitando en la mayor medida posible las causales de exoneración de responsabilidad. El Grupo de Trabajo sobre la reglamentación internacional del transporte marítimo ha efectuado una útil labor al preparar el texto definitivo de un proyecto de convenio sobre el transporte marítimo de mercancías.

7. En lo que respecta al arbitraje, el arbitraje institucional no debería excluir la posibilidad del "arbitraje no administrado". Incluso en el primer caso habría que dejar a las partes cierta libertad respecto del procedimiento. En el mismo orden de ideas, la delegación de Madagascar sugiere que en el artículo 23 del anteproyecto de reglamento de arbitraje (véase A/10017, anexo I) se prevea una disposición que autorice a las partes a nombrar de común acuerdo expertos o, llegado el caso, a nombrar peritos de comprobación, una vez presentado el informe de los expertos designados por los árbitros. La delegación de Madagascar teme que, como consecuencia del artículo 31, en que se prevé que los árbitros fijen sus propios honorarios, el arbitraje resulte demasiado costoso. La delegación de Madagascar no tiene una preferencia marcada ni por el arbitraje institu-

cional ni por el arbitraje especial. En todo caso, parecería que el arbitraje especial ofreciera mayores ventajas prácticas, siempre que no resultase demasiado costoso.

8. En lo tocante a las empresas multinacionales, cabe esperar que los progresos en los trabajos de la Comisión de Empresas Transnacionales, creada por el Consejo Económico y Social, permita a la CNUDMI reanudar a la mayor brevedad posible su labor sobre esa materia.

9. El Sr. HAFIZ (Bangladesh) felicita al Presidente y a los demás miembros de la Mesa por su elección y da la bienvenida a los tres nuevos Estados Miembros, la República de Cabo Verde, la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe y la República Popular de Mozambique.

10. Bangladesh, cuyo comercio depende en gran parte del transporte marítimo internacional, atribuye la mayor importancia a los esfuerzos de la CNUDMI por armonizar y unificar el derecho mercantil internacional. Además, la delegación de Bangladesh desea dar las gracias al Presidente de la CNUDMI por su excelente presentación de su informe y expresa su satisfacción por la labor realizada por la CNUDMI y sus grupos de trabajo.

11. El proyecto de convención sobre la compraventa internacional de mercaderías, preparado por el Grupo de Trabajo encargado de examinar esa cuestión, es de suma utilidad. Ahora, habría que terminar el proyecto definitivo a la mayor brevedad posible.

12. En lo que respecta a los títulos negociables internacionales, el Grupo de Trabajo correspondiente habría de incluir en el proyecto definitivo de ley uniforme sobre letras de cambio internacionales y pagarés internacionales reglas uniformes aplicables a los cheques internacionales.

13. Complace a la delegación de Bangladesh el hecho de que la CNUDMI haya asignado alta prioridad a la labor del Grupo de Trabajo sobre la reglamentación internacional del transporte marítimo y, particularmente, a la revisión del Convenio internacional para la unificación de ciertas reglas en materia de conocimientos, firmado en Bruselas en 1924. A ese respecto, es importante el proyecto de convenio sobre el transporte marítimo de mercancías. Las disposiciones del Convenio de Bruselas están obsoletas y no permiten resolver los problemas que plantean en el medio de los comerciantes de los países en desarrollo, problemas que habrá que tener en cuenta en la preparación definitiva de la reglamentación del transporte marítimo. Convendría poder suscribir antes de 1978 un convenio sobre los conocimientos.

14. La cuestión de la responsabilidad por los daños causados por los productos destinados al comercio internacional u objeto de éste tiene una importancia vital para el país comprador. Por lo tanto, la CNUDMI, en el proyecto definitivo de normas uniformes que regulan la compraventa internacional de mercaderías, debería prever una protección adecuada para el consumidor.

15. La delegación de Bangladesh toma nota con satisfacción del texto revisado de los "Usos y Prácticas Uniformes en Materia de Créditos Documentarios", preparado por la CCI.

16. En lo tocante al arbitraje comercial internacional, cabe señalar que, aunque los procedimientos judiciales para la solución de las controversias entre portadores y vendedores, por una parte, y los compradores, por otra, son largos y poco satisfactorios, también en el anteproyecto de reglamento de arbitraje preparado por la CNUDMI figuran numerosas disposiciones que retrasan el procedimiento de arbitraje. Convendría, pues, revisar ese anteproyecto con miras a suprimir las distintas causas de demora. En la revisión de ese anteproyecto, habrá también que tener en cuenta la protección de los intereses de los países en desarrollo.

17. La formación y la difusión de conocimientos en materia de derecho mercantil internacional indudablemente contribuyen al desarrollo del derecho internacional. Lamentablemente, ese tipo de actividad está aún muy limitado en los países en desarrollo; habría que organizar más seminarios y proporcionar formación a jóvenes juristas procedentes de esos países. Los esfuerzos de la CNUDMI en esa esfera son encomiables y la delegación de Bangladesh toma nota con satisfacción de las generosas contribuciones aportadas para ese fin por los Gobiernos de Bélgica, Austria, Noruega, Suecia y la República Federal de Alemania. La delegación de Bangladesh sugiere que se establezcan en los países en desarrollo centros de formación e investigación en materia de derecho mercantil, a fin de que los países del tercer mundo puedan aprovechar los conocimientos adquiridos en esa materia por los países desarrollados.

18. Habida cuenta del importante papel que deben desempeñar los países pequeños y los países en desarrollo en el establecimiento de un nuevo orden económico internacional, en el curso de la codificación del derecho mercantil internacional la CNUDMI y sus grupos de trabajo deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los problemas de esos países.

19. El Sr. STARČEVIĆ (Yugoslavia) subraya que conviene considerar las actividades de la CNUDMI en el marco general de los esfuerzos hechos para modificar el actual sistema de las relaciones económicas internacionales y para establecer un orden económico internacional más equitativo. Del sexto y séptimo período extraordinarios de sesiones de la Asamblea General se desprende que la comunidad internacional ha entrado por un camino que debe necesariamente conducir a modificaciones en las relaciones económicas. En el sexto período extraordinario de sesiones se señalaron objetivos y, aunque los resultados obtenidos en el séptimo período extraordinario de sesiones aún distan mucho de lo que los países en desarrollo han propuesto y tienen derecho a esperar, el documento aprobado por consenso en ese período de sesiones (resolución 3362 (S-VII) de la Asamblea General) constituye una base sobre la cual podrán adoptarse importantes medidas en el porvenir. Como ha declarado el representante de Yugoslavia en el trigésimo período de sesiones de la Asamblea General (2360a. sesión plenaria), ésta debería pedir a todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que en sus actividades concedieran una prioridad destacada a las cuestiones de su competencia mencionadas en el documento del séptimo período extraordinario de sesiones.

20. La estructura del comercio internacional y las condiciones en que se operan los intercambios internacionales

revisten gran importancia en la perspectiva de los cambios que han de introducirse en las relaciones económicas internacionales. Para acelerar el desarrollo económico de los países en desarrollo, es preciso en primer lugar que los intercambios internacionales sean más fáciles, más libres, más equitativos y menos restrictivos. Las actividades de la CNUDMI consisten precisamente en reducir o eliminar, merced a la armonización y unificación progresivas del derecho mercantil internacional, los obstáculos jurídicos que frenan el comercio internacional. La CNUDMI participa, pues, en la realización de las tareas generales señaladas en el sexto y séptimo períodos extraordinarios de sesiones de la Asamblea General, lo que no significa que esas actividades no pueden ser más eficaces aún.

21. Hasta el presente, la CNUDMI se ha dedicado a estudiar cuestiones vitales para el comercio internacional y ha obtenido resultados notables en un tiempo bastante corto. Como lo ha hecho hasta ahora, la CNUDMI debe seguir orientando sus trabajos, tanto hacia la adopción de nuevas reglas como hacia la revisión de las reglas existentes. Todos los instrumentos adoptados hasta la fecha son el resultado de trabajos de organismos internacionales en los que los países desarrollados han desempeñado un papel predominante. Además, la CNUDMI debería proseguir e intensificar su cooperación con otros órganos y organizaciones que se ocupan de los mismos problemas que ella en el plano internacional.

22. Tras felicitar al Presidente de la CNUDMI por su brillante presentación del informe en examen, el representante de Yugoslavia hace hincapié en el papel que han desempeñado los grupos de trabajo en el curso del último período de sesiones de la CNUDMI. La delegación yugoslava espera con interés el texto definitivo del proyecto de convención sobre la compraventa internacional de mercancías, ya que ese documento de base, una vez adoptado, va a facilitar la adopción o la revisión de otros documentos relativos a la misma esfera.

23. La delegación yugoslava se congratula de los esfuerzos hechos para elaborar reglas uniformes aplicables a los pagos internacionales en sus diversas formas. En esa esfera, es preciso avanzar progresivamente, pues con frecuencia se plantean cuestiones muy delicadas y las reglas aplicadas por los distintos países o grupos de países son muy diferentes.

24. Como Potencia marítima que dispone de una importante flota mercante, Yugoslavia atribuye particular importancia a la reglamentación internacional del transporte marítimo. Esa cuestión presenta también gran interés para todos los países en desarrollo, como lo han señalado varias conferencias internacionales, de forma que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y sus órganos auxiliares así como la CNUDMI, deberían acelerar los trabajos emprendidos en la materia. En consecuencia, la delegación yugoslava se congratula de que el Grupo de Trabajo ampliado sobre la reglamentación internacional del transporte marítimo haya terminado la segunda lectura del proyecto de convención sobre el transporte marítimo de mercancías. Ese proyecto representa evidentemente un progreso considerable en relación con el Convenio de Bruselas de 1924 y su Protocolo de 1968.

25. Los problemas jurídicos que plantean las empresas multinacionales figuran entre los problemas más compli-

cados y delicados que han de tratar las Naciones Unidas. Dada la influencia de las actividades de las empresas transnacionales en la economía de los países en desarrollo y habida cuenta de ciertas prácticas condenables de tales empresas, que a veces actúan desdénando las leyes y reglamentos del país en desarrollo en que tienen sus actividades, esos problemas han atraído la atención de las Naciones Unidas, así como la de los órganos de trabajo de los países no alineados. Se ha tratado de encontrar la manera de subordinar las inversiones privadas extranjeras a los objetivos de desarrollo nacional, y establecer normas comunes que rijan las actividades de las empresas transnacionales. Habida cuenta de los aspectos políticos, jurídicos y económicos y de otro tipo que presenta el problema, importa abordarlo con mucha prudencia y asegurar una estrecha cooperación entre la CNUDMI, por una parte, y dos órganos creados por el Consejo Económico y Social, por otra, a saber: la Comisión de Empresas Transnacionales y el Centro de Informaciones e Investigaciones sobre las Empresas Transnacionales. En espera de que esos órganos estén organizados y en condiciones de formular conclusiones, la CNUDMI podría comenzar a estudiar por su parte algunos problemas, pero sin limitarse necesariamente a los que se indican en el informe del Secretario General sobre el tema¹.

26. La cuestión de la responsabilidad por los daños causados por productos destinados al comercio internacional u objeto de éste reviste creciente importancia debido a que cada vez hay mayor preocupación por proteger al consumidor. También los trabajos de la CNUDMI relativos al arbitraje comercial internacional y, en particular, a la elaboración de un proyecto de reglamento de arbitraje que se utilice a título facultativo en los arbitrajes *ad hoc*, también son dignos de atención.

27. El Sr. Starčević celebra que se prosigan los programas de formación y asistencia en materia de derecho mercantil internacional, y expresa la esperanza de que el programa de simposios pueda ampliarse más gracias a las contribuciones de los gobiernos, las organizaciones internacionales y otras fuentes.

28. Yugoslavia, que actualmente no es miembro de la CNUDMI, ha seguido sus trabajos con vivo interés y se congratula de los resultados obtenidos. No obstante, le parece que la CNUDMI podría desempeñar un papel más activo en otras esferas, lo que le permitiría contribuir más a la creación de un nuevo orden económico internacional.

29. La CNUDMI ha conseguido resolver ciertos problemas concretos del derecho mercantil internacional sin perderse en el terreno de las discusiones políticas o político-jurídicas. Dado que la CNUDMI parece haber superado con éxito las dificultades de esa primera etapa, cabe proponerle que examine problemas de orden más general como la elaboración de reglas uniformes para la inversión de capitales o la transmisión de conocimientos técnicos y de tecnologías de los países desarrollados a los países en desarrollo, a fin de que pueda contribuir a la creación de condiciones mejores y más equitativas para la celebración de acuerdos. Es cierto que esas cuestiones, además de sus aspectos puramente jurídicos, presentan también aspectos

¹ A/CN.9/104.

políticos, pero los ocho años de existencia de la CNUDMI y los resultados concretos que ha obtenido demuestran que ese órgano es capaz de abordar competentemente problemas más complejos. El hecho de regular los aspectos jurídicos de los grandes problemas del comercio internacional no podría sino facilitar la solución de esos problemas en lo que tienen de no jurídico. La CNUDMI desempeñaría entonces el papel de "legislador internacional" sobre puntos de importancia capital para favorecer al comercio internacional y reducir la disparidad existente entre los países desarrollados y los países en desarrollo.

30. El Sr. GUNÉY (Turquía) felicita al Presidente de la CNUDMI por su excelente exposición de introducción de su informe y celebra los progresos sustanciales realizados en el curso del octavo período de sesiones de dicha Comisión.

31. El Grupo de Trabajo encargado de redactar un instrumento internacional relativo a la compraventa internacional de mercaderías ha llegado a un acuerdo completo sobre los textos que tratan las materias reguladas por los artículos 1 a 83 de la Ley Uniforme sobre la compraventa internacional de mercaderías, la cual consta en total de 101 artículos. Para la delegación turca, es lógico que la convención sobre la compraventa y las reglas relativas a la formación y la validez de los contratos de compraventa sean examinadas ulteriormente por una sola conferencia.

32. Las condiciones generales de venta y los contratos tipo son otro aspecto de la compraventa que estudia actualmente la CNUDMI. El proyecto de las condiciones generales de venta presentado por el Secretario General² exige un estudio e investigaciones más a fondo antes de poder ser utilizado en multitud de sectores comerciales. El grupo de estudio creado a tal efecto facilitará el examen de la cuestión y podrá disipar las dudas expresadas en el último período de sesiones de la CNUDMI.

33. En lo que respecta a los títulos negociables, el establecimiento del texto definitivo de un proyecto de ley uniforme sobre letras de cambio internacionales y pagarés internacionales, así como la cuestión de la conveniencia de establecer reglas uniformes para cheques internacionales, están aún en examen. Por consiguiente, la delegación turca se limita a tomar nota de los progresos realizados por el Grupo de Trabajo.

34. Con respecto a los créditos comerciales bancarios, la CNUDMI ha examinado la revisión de 1974 del texto de los "Usos y Prácticas Uniformes en Materia de Créditos Documentarios". A la delegación turca le es grato observar que la CCI ha cooperado eficazmente con países distintos

de aquéllos cuyas cámaras de comercio están afiliadas a ella. La recomendación de la CNUDMI en el sentido de que la versión de 1974 de las reglas uniformes se utilice a partir del 1º de octubre de 1975 en las transacciones que llevan consigo la contratación de un crédito documentario es oportuna, ya que la CCI ha hecho la versión de 1974 más aceptable que la de 1962.

35. En lo que respecta a las garantías reales en las mercaderías, la CNUDMI ha considerado que los dos estudios a que se refiere el párrafo 48 del informe eran muy útiles, pero incompletos. Por consiguiente, es importante proseguirlos o completarlos.

36. La delegación turca observa con satisfacción que el Grupo de Trabajo sobre la reglamentación internacional del transporte marítimo dará su forma definitiva al anteproyecto de convención sobre la responsabilidad de los porteadores marítimos respecto de la carga. El examen de ese anteproyecto, habida cuenta de las observaciones de los gobiernos y de las organizaciones interesadas, hará resaltar la complejidad e importancia de la materia.

37. En lo que respecta al arbitraje comercial internacional, procede revisar el anteproyecto de reglamento presentado por el Secretario General a la luz de las observaciones formuladas en el curso del último período de sesiones de la CNUDMI y eliminar las innovaciones que no puedan llevarse a la práctica.

38. En cuanto a la cuestión de las empresas multinacionales, merece también la atención de la Comisión de Empresas Transnacionales y del Centro de Información e Investigaciones sobre las Empresas Transnacionales, dos órganos creados por el Consejo Económico y Social. La delegación turca aprueba la decisión de la CNUDMI de esperar a que los problemas relativos a las empresas multinacionales sean examinados con precisión, pero manteniendo ese tema en su programa.

39. La delegación turca observa con satisfacción que se ha organizado un simposio sobre la función de las universidades y de los centros de investigación con respecto al derecho mercantil internacional y se congratula de que haya otro simposio previsto para 1977. Aprueba la decisión de la CNUDMI de no agregar nuevos temas a su programa de trabajo.

40. En lo que respecta a la sugerencia del representante de Austria (1529a. sesión) en el sentido de que la CNUDMI celebre en adelante algunas de sus reuniones en Viena, el Sr. Güney declara que esa propuesta merece ser estudiada atentamente.

² Véase A/CN.9/98.

1533a. sesión

Martes 7 de octubre de 1975, a las 16.45 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1533

TEMA 110 DEL PROGRAMA

Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la labor realizada en su octavo período de sesiones (continuación)
(A/10017, A/C.6/L.1016, A/C.6/L.1017)

1. El Sr. MUHAMMAD (India) da la bienvenida como miembros de la Comisión a las delegaciones de Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, y Mozambique.

2. Da las gracias al Presidente de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) por su amplia reseña de la labor realizada por ella en su octavo período de sesiones. Los miembros de las Naciones Unidas aprecian cada vez más la importancia de la labor de la CNUDMI. La India es miembro de la CNUDMI y siempre ha participado activamente en sus deliberaciones. Los temas de que se ocupa la CNUDMI son de carácter sumamente técnico y, aunque no todos los países en desarrollo tienen aún suficientes expertos en derecho mercantil, cabe esperar que se interesen cada vez más en la labor de la CNUDMI. El informe de la CNUDMI (A/10017) ocupa un lugar muy importante en el programa de la Sexta Comisión.

3. En general, a la delegación de la India le satisface la forma en que la CNUDMI ha cumplido su mandato, establecido en la resolución 2205 (XXI) de la Asamblea General. No obstante, conviene que la CNUDMI no se considere a sí misma como un simple órgano de redacción. Debe exponerse a las expectativas de la mayoría de la comunidad internacional en la esfera de la cooperación mercantil internacional. En esa esfera, el derecho internacional debe evolucionar según las necesidades de la vida económica internacional contemporánea. Las Naciones Unidas han reconocido la necesidad forzosa de reparar los desequilibrios económicos entre los países desarrollados y los países en desarrollo, y la delegación de la India espera fervientemente que en su búsqueda de soluciones justas y equitativas la CNUDMI tenga debidamente en cuenta los principios de la Declaración y el Programa de acción sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional contenidos en las resoluciones 3201 (S-VI) y 3202 (S-VI) de la Asamblea General, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados contenida en la resolución 3281 (XXIX), y la resolución 3362 (S-VII).

4. El procedimiento de consenso que sigue la CNUDMI para adoptar sus decisiones ha realizado considerablemente la utilidad de su labor y cabe esperar que en el futuro siga el mismo procedimiento. Además, como el éxito de los grupos de trabajo depende en gran medida de los trabajos de antecedentes que realiza la Secretaría, convendría proporcionar todas las facilidades para que la Secretaría pudiera proseguir preparando estudios de investigación y docu-

mentos de antecedentes para beneficio de la CNUDMI. Esta también se ha beneficiado de la participación de observadores de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y de organismos especializados con una amplia gama de experiencia práctica en la esfera del derecho mercantil internacional. La CNUDMI debería seguir fomentando las consultas con esas organizaciones de expertos. Otra práctica que ayuda a acelerar la labor de la CNUDMI, y que debería proseguir, es la creación de grupos de trabajo para que se ocupen de distintos temas.

5. Refiriéndose al programa de trabajo de la CNUDMI, el orador dice que, aunque la decisión de no agregar ningún tema nuevo al programa de trabajo actual hasta que se hayan completado las principales tareas ya iniciadas es esencialmente buena, la CNUDMI debería mantener bajo estudio la determinación de nuevas esferas de estudio para su futuro programa de trabajo.

6. La reglamentación de las actividades de las empresas multinacionales es de importancia vital para los países en desarrollo. Como los aspectos jurídicos relacionados con las empresas multinacionales están estrechamente vinculados a los aspectos de carácter económico, social y político, la CNUDMI ha actuado sabiamente al decidir no terminar su programa de trabajo en esa esfera hasta que la Comisión de Empresas Transnacionales haya determinado las cuestiones jurídicas concretas que puede que exijan medidas de la CNUDMI. Cabe esperar que aquella Comisión y la CNUDMI mantengan un sistema de consulta para evitar la duplicación de los trabajos. La delegación de la India se complace en observar que la CNUDMI ha expresado su deseo de considerar favorablemente cualquier solicitud de la nueva Comisión para asistencia especializada en cuestiones jurídicas.

7. El orador señala que el correspondiente Grupo de Trabajo de la CNUDMI ha realizado considerables progresos y espera que se apruebe pronto un convenio sobre conocimientos de embarque.

8. El orador da las gracias a los Gobiernos de Austria y Bélgica, que proporcionaron becas de capacitación en sus países a nacionales de los países en desarrollo. También da las gracias a los Gobiernos de Austria, Noruega, la República Federal de Alemania y Suecia por sus contribuciones voluntarias para sufragar los gastos de viaje y las dietas de los participantes en el Simposio sobre la función de las universidades y los centros de investigación con respecto al derecho mercantil internacional. La importancia de los programas de capacitación en la esfera del derecho mercantil internacional no puede exagerarse y cabe esperar que se reciban más contribuciones.

9. El Sr. JACHEK (Checoslovaquia) da la bienvenida a las delegaciones de Cabo Verde, Mozambique y Santo Tomé y Príncipe.

10. Dice que los progresos realizados con respecto a la coexistencia pacífica y la cooperación entre Estados con distintos sistemas económicos, como demuestra el Acta Final de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa, ha aumentado la importancia del derecho mercantil internacional. El Gobierno de Checoslovaquia entiende y evalúa la función de la CNUDMI en ese contexto político. En la unificación y armonización del derecho mercantil internacional es preciso buscar soluciones aceptables para el mayor número posible de Estados, independientemente de sus sistemas sociales. Los instrumentos aprobados deberían fomentar en la máxima medida posible el desarrollo de relaciones económicas internacionales equitativas y recíprocamente ventajosas y proporcionar seguridad jurídica en esas relaciones, de conformidad con los principios y propósitos de la Carta, la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas (resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, anexo) y la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados.

11. Checoslovaquia otorga especial importancia a la unificación de las normas que regulan la compraventa internacional de mercaderías, ya que los acuerdos relativos a la compraventa internacional de mercaderías son el tipo más importante de tratado utilizado en el comercio internacional. Por consiguiente, su delegación acoge complacida la decisión de la CNUDMI, que figura en el párrafo 17 de su informe, y espera que todos los Estados participen en la conferencia de plenipotenciarios.

12. En la esfera de los pagos internacionales, su delegación valora la labor del Grupo de Trabajo sobre títulos negociables internacionales y otorga especial importancia también a las reglas uniformes sobre las garantías bancarias contractuales. Aunque acoge complacido la asistencia de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) a ese respecto, el orador considera que las reglas preparadas por la CCI y simplemente recomendadas por la CNUDMI no bastan. Sería conveniente que la propia CNUDMI completara el proyecto de ley, de manera que las reglas uniformes pudieran reemplazar también a las normas efectivas de otros códigos jurídicos que, si no, también se aplicarían.

13. Con respecto a la legislación internacional que rige el transporte marítimo, aunque su delegación se siente complacida por los resultados logrados por el Grupo de Trabajo pertinente, estima que sería más conveniente contar con una base uniforme que no limitara la eficacia internacional de las normas uniformes a las relaciones entre personas procedentes de los Estados signatarios del tratado.

14. Su delegación considera útil la cooperación de la CNUDMI con otros órganos de las Naciones Unidas para resolver distintas cuestiones jurídicas con respecto a las actividades de las empresas multinacionales, y está de acuerdo con la decisión de la CNUDMI consignada en el párrafo 94 de su informe. No obstante, en su labor futura en esa esfera, la CNUDMI debería estudiar la protección de los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales y debería tener en cuenta los principios que rigen las relaciones entre los Estados y las empresas multinacionales, según figuran en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Sin embargo, del párrafo 92 del

informe de la CNUDMI no se desprende que vaya a mantener bajo estudio la protección total de los intereses y derechos de los Estados en que operan empresas multinacionales, ya que el objeto de las normas tipo parece ser únicamente el de permitir a los Estados que ejerzan “un mayor grado de control” sobre las actividades de las empresas multinacionales.

15. Habida cuenta de la gama muy amplia de problemas de que habrá de ocuparse la CNUDMI, no deberían incluirse en su programa cuestiones de importancia marginal o dudosa para el comercio internacional. En consecuencia, su delegación no apoya la propuesta de que se incluya en la labor de la CNUDMI la cuestión de la responsabilidad por los daños causados por los productos destinados al comercio internacional u objeto de éste, de la que se derivarían derechos para personas distintas de los participantes en el comercio internacional. Por consiguiente, parece adecuado dejar el arreglo de las cuestiones que se discuten en el capítulo VII del informe a los sistemas jurídicos de los distintos países.

16. Refiriéndose al capítulo IX del informe, dice que debería estudiarse la adopción de un concepto más amplio de las reglamentaciones previstas sobre los contratos de venta y sobre las condiciones de su validez y la redacción de disposiciones generales relativas a la conclusión de contratos de comercio internacional o la estipulación de condiciones para su validez. También sería conveniente examinar los métodos actuales de unificación y armonización del derecho mercantil internacional, que se basan en una selección de algunas cuestiones jurídicas limitadas o en un cierto tipo de contrato y que no se ocupan de las cuestiones más generales con respecto a las cuales hay disposiciones diferentes en los sistemas jurídicos de distintos países. Los métodos parciales actuales no bastarían si se aprobaran varias convenciones internacionales u otros instrumentos sin coordinar su contenido. También existe el peligro de que resulte difícil orientarse a través de las disposiciones ya aprobadas, de que haya lagunas en ellas como resultado de una coordinación insuficiente y, de que, en cualquier caso, la labor de unificación resulte poco económica, ya que las mismas cuestiones generales tendrían que resolverse con cada tipo distinto de contrato, aunque se podrían formular de manera general y se podrían prever excepciones a los principios generales de la misma manera que en los códigos legales amplios. Aunque puede que resulte prematuro examinar la cuestión de preparar un código mercantil internacional amplio, su delegación desea señalar a la atención de la CNUDMI el problema para que lo tenga presente y a su debido tiempo considere las posibilidades de armonizar distintas disposiciones y de ir preparando una legislación mercantil internacional uniforme.

17. Refiriéndose a los métodos de trabajo en la codificación del derecho mercantil internacional, el orador dice que al preparar los instrumentos respectivos hay que tener en cuenta la experiencia de todos los sistemas jurídicos, incluidas las normas jurídicas de los países socialistas de la Europa oriental. Su delegación toma nota con satisfacción de la declaración del Presidente de la CNUDMI (A/C.6/L.1017) en el sentido de que se rectificarán algunos de los descuidos cometidos en el pasado.

18. En general, la labor de la CNUDMI, sus grupos de trabajo y su secretaría es satisfactoria.

19. El Sr. PRIETO (Chile) da las gracias al Presidente de la CNUDMI por su notable presentación del tema que se examina. Su delegación acoge con agrado la asistencia de un gran número de observadores de los organismos especializados y de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales al octavo período de sesiones de la CNUDMI, ya que dicha participación enriquece los trabajos de la CNUDMI y los hace más universales.

20. La tarea fundamental de la generación actual es edificar un mundo de paz y armonía en el que no existan las amplias brechas que actualmente separan a los países desarrollados y a los países en desarrollo. Un modo de fomentar el logro de ese objetivo es tomar medidas dirigidas a mejorar las condiciones comerciales de los países en desarrollo y eliminar todo tipo de discriminación a ese respecto. Por consiguiente, a su delegación le complace que se haya confiado a la CNUDMI la unificación del derecho mercantil internacional, ya que de ese modo contribuye a que la paz entre las naciones sea una realidad como resultado del aumento de las relaciones comerciales entre los Estados.

21. Examinando la labor realizada hasta la fecha por la CNUDMI, resulta alentador observar los progresos conseguidos en la unificación de las normas que regulan la compraventa internacional de mercaderías. Igualmente, su delegación acoge con agrado los progresos realizados en relación con los títulos negociables internacionales, materia en la que, si bien el progreso no ha sido tan espectacular como el conseguido con respecto a la compraventa internacional de mercaderías, es, sin embargo, alentador, sobre todo si se tiene en cuenta la complicada naturaleza del tema.

22. Con respecto a la cuestión de las garantías reales de las mercaderías, su delegación cree que es necesario revisar y completar el valioso estudio del Sr. Drobnig¹ con miras a remediar algunos vacíos, lo que parece perfectamente explicable en vista de la envergadura del estudio. Por ejemplo, en el estudio no se mencionan varios casos importantes de garantías reales consagradas por las leyes chilenas.

23. Las actividades del Grupo de Trabajo sobre la reglamentación internacional del transporte marítimo, del que Chile es miembro, son de importancia fundamental para los países en desarrollo. Por lo tanto, es altamente satisfactorio observar que se ha completado un proyecto de convenio sobre el transporte marítimo de mercaderías.

24. Su delegación considera satisfactorio en general el anteproyecto de reglamento de arbitraje, ya que proporciona un procedimiento rápido y simple para el arreglo de las controversias sobre la base de normas uniformes y universalmente aceptadas que tendrán un efecto positivo sobre el fomento del comercio internacional.

25. Su delegación conviene en que la CNUDMI debe limitarse a los aspectos jurídicos de la cuestión de las empresas multinacionales, especialmente si se desea evitar una duplicación innecesaria de los trabajos de otros órganos

de las Naciones Unidas. Debe asegurarse una coordinación adecuada con otros órganos del sistema que se ocupan de problemas relativos a las actividades de dichas empresas. A ese respecto tiene considerable mérito la sugerencia formulada en el anterior período de sesiones por el representante de Francia (1500a. sesión) de que, como primera medida, debe elaborarse una definición satisfactoria del concepto de empresa multinacional. Su delegación cree que la definición debe elaborarse en el momento oportuno y con exactitud científica; la definición que finalmente se acuerde puede ser más amplia que el concepto actual de empresa multinacional.

26. Con respecto a la responsabilidad por los daños causados por los productos destinados al comercio internacional u objeto de éste, la cuestión jurídica principal parece ser el alcance de la responsabilidad, que dependerá de las decisiones que se tomen en cuanto a los tipos de productos que originan responsabilidad, las clases de personas a las que debiera imponerse tal responsabilidad, los daños por los cuales podría exigirse indemnización y los tipos de transacción que caerían en el ámbito de la responsabilidad propuesta. Como factor importante que hay que tener en cuenta figura el hecho de que muchos productos que actualmente se fabrican pueden causar graves daños a las personas y a las cosas y que esos daños, además de los problemas de orden jurídico, tienen importantes repercusiones sociales y económicas.

27. Respecto a la formación y asistencia en materia de derecho mercantil internacional, cabe destacar las becas concedidas por un banco comercial de Austria y el Gobierno de Bélgica. Debe expresarse gratitud a los Gobiernos de Austria, Noruega, la República Federal de Alemania y Suecia por proporcionar fondos para cubrir los gastos de viaje de varios participantes de países en desarrollo en el Simposio sobre derecho mercantil internacional. Cabe esperar que su ejemplo sea seguido por otros países con recursos económicos. La enseñanza del derecho mercantil internacional debería recibir el realce que merece. Debe alentarse a las universidades a incluirlo en sus cursos regulares; recientes experimentos en ese sentido en Chile han producido resultados satisfactorios.

28. Su delegación apoya plenamente las propuestas hechas sobre el lugar, el programa y la fecha de los próximos períodos de sesiones de los grupos de trabajo y de la CNUDMI.

29. El Sr. SIAGE (República Árabe Siria) felicita a la CNUDMI por su excelente informe.

30. Con respecto a la compraventa internacional de mercaderías, su delegación apoya la decisión de la CNUDMI, que figura en el párrafo 17, de pedir al Secretario General que transmita el proyecto de convención sobre la compraventa internacional de mercaderías a los gobiernos y organizaciones internacionales interesadas para que formulen comentarios. En su opinión, esos comentarios, que han de examinarse en el décimo período de sesiones de la CNUDMI, enriquecerán el proyecto, ya que de ese modo se dispondrá de las opiniones de todos los sistemas jurídicos mundiales.

31. Señala que el arbitraje está obteniendo cada vez más importancia como medio de arreglo de controversias dima-

¹ ST/LEG/11.

nantes de transacciones en el comercio internacional. En consecuencia, su delegación apoya los principios en que se basa el anteproyecto de reglamento de arbitraje (véase A/10017, anexo I). Sin embargo, es esencial tener en cuenta la legislación local de las partes interesadas.

32. Su delegación concede considerable importancia al asunto de las empresas multinacionales, que constituye una amenaza, en especial, a la soberanía e independencia de los países en desarrollo. Apoya la decisión de la CNUDMI de mantener ese tema en su programa. Cree que la CNUDMI debe cooperar estrechamente con el Consejo Económico y Social, la Comisión de Empresas Transnacionales y el Centro de Información e Investigaciones sobre las Empresas Transnacionales.

33. Con respecto a la formación y asistencia en materia de derecho mercantil internacional, su delegación destaca la importancia de conceder becas a estudiantes de países en desarrollo. En su opinión, sería adecuado celebrar simposios durante los períodos de sesiones de la CNUDMI, como se ha hecho en 1975. Expresa el aprecio de su delegación a los gobiernos que han concedido becas de formación a nacionales de países en desarrollo.

34. Su país participó en las deliberaciones de la CNUDMI en su octavo período de sesiones y está satisfecho con la labor que se ha realizado. Apoya las decisiones de la CNUDMI y los esfuerzos realizados para el desarrollo del derecho mercantil internacional, en especial, en beneficio de los países en desarrollo.

35. El orador expresa la esperanza de que la CNUDMI seguirá llevando a cabo su trabajo con un espíritu de cooperación.

36. El Sr. KOLESNIK (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el informe de la CNUDMI muestra que ese órgano se ocupa de importantes y pertinentes cuestiones. La CNUDMI, creada hace 10 años a iniciativa de Hungría para fomentar el desarrollo progresivo del derecho mercantil internacional, tiene la misión de elaborar instrumentos jurídicos internacionales en la esfera del comercio que fomenten una cooperación económica equitativa y mutuamente ventajosa entre todos los países, incluidos los que tienen sistemas sociales y económicos diferentes. Como se indicó en el Acta Final de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa, el comercio internacional es uno de los factores más importantes del crecimiento económico y el progreso social. A su vez, unas relaciones económicas estables permiten a los países hacer pleno uso de las ventajas de la división internacional del trabajo que fomenta el desarrollo de las relaciones de amistad entre los pueblos. Esos son los objetivos que también pretenden lograr los trabajos de la CNUDMI.

37. La CNUDMI ha realizado una labor constructiva sobre las distintas cuestiones de que se ocupó en el octavo período de sesiones. Su delegación conviene en que el Grupo de Trabajo sobre la compraventa internacional de mercaderías se ha mostrado especialmente eficaz, ya que ha podido conseguir plenos acuerdos sobre la mayoría de los artículos del proyecto de convención sobre la compraventa internacional de mercaderías. Apoya la decisión de la CNUDMI que figura en el párrafo 17 del informe, y en

especial la petición al Secretario General de que transmita el proyecto de convención a los gobiernos y organizaciones internacionales interesadas. Coincide con varios oradores anteriores en que sería deseable adoptar como método de trabajo general la práctica de transmitir los proyectos preparados por los grupos de trabajo y la propia CNUDMI a los gobiernos y organizaciones internacionales interesadas para que hicieran comentarios. Debe alentarse dicha práctica, ya que permitirá a todos los Miembros de las Naciones Unidas seguir los trabajos de la CNUDMI y ayudar a ese órgano.

38. Es alentador observar que se han realizado progresos considerables durante el año actual con respecto a la reglamentación internacional del transporte marítimo y que se ha completado el proyecto de convenio sobre el transporte marítimo de mercaderías.

39. Se desprende claramente del informe que la CNUDMI ha celebrado una discusión exhaustiva sobre el anteproyecto de reglamento de arbitraje para uso facultativo en el arbitraje especial relacionado con el comercio internacional. En opinión de su delegación, la CNUDMI ha procedido acertadamente al presentar el proyecto de artículos con sus comentarios a la Sexta Comisión.

40. Su delegación toma nota de que la CNUDMI está dispuesta a examinar las cuestiones jurídicas concretas planteadas por las actividades de las empresas multinacionales y mantener el tema en su programa. Entiende las dificultades con que se ha enfrentado al examinar esa cuestión, pero desearía que se le asegurase que la demora en el examen de dichas cuestiones no se prolongará más allá de límites razonables ya que, tal como se ha declarado en varias ocasiones en la Sexta Comisión, la elaboración de medidas, incluidas las de naturaleza jurídica, para restringir las actividades de las grandes sociedades monopolísticas internacionales constituirán medidas importantes para la eliminación de la desigualdad existente en las relaciones económicas internacionales como consecuencia del imperialismo.

41. El éxito de las actividades de la CNUDMI depende en gran medida de que se tengan en cuenta las necesidades de los principales sistemas jurídicos del mundo. Es lamentable que, en el examen de problemas tales como los pagos internacionales, la CNUDMI no haya tenido suficientemente en cuenta la legislación de los países socialistas. El error de un enfoque de esa índole resulta evidente si se tiene en cuenta el volumen del comercio de los países socialistas. El no tener en consideración las prácticas mercantiles extranjeras de los países socialistas en la preparación de los proyectos constituye un flaco servicio a la CNUDMI, y su delegación confía en que ese órgano y la Secretaría tendrán en cuenta sus comentarios.

42. El tema de la formación y asistencia en materia de derecho mercantil internacional está comenzando a adquirir una importancia cada vez mayor en las actividades de la CNUDMI. Su delegación acoge con agrado los positivos resultados del Simposio celebrado durante el octavo período de sesiones de la CNUDMI. La celebración de dicho Simposio es una práctica saludable y fomenta el desarrollo y un mayor reconocimiento del derecho mercantil internacional. También apoya la idea de hacer participar a la

CNUDMI en la organización de simposios sobre derecho mercantil internacional en los países en desarrollo.

43. El orador opina que la CNUDMI no debe tratar de ampliar sus períodos de sesiones, sino más bien de acortarlos, haciendo de ese modo su labor más eficaz. Resulta difícil a los expertos abandonar sus países para asistir a las reuniones de la CNUDMI. No menos importante es el hecho de que debe hacerse un esfuerzo para efectuar ahorros. El presupuesto de las Naciones Unidas continúa creciendo, principalmente a causa del aumento constante del mecanismo administrativo y de las reuniones de las distintas comisiones y comités.

44. El Sr. YOKOTA (Japón) dice que, desde su creación, la CNUDMI se ha transformado en un importante foro de cooperación internacional en la unificación del derecho mercantil internacional. Sus miembros constituyen una representación bien equilibrada de los distintos sistemas jurídicos e intereses económicos del mundo. La delegación del Japón toma nota con satisfacción de los esfuerzos de la CNUDMI por mantener un estrecho contacto y fortalecer su cooperación con otras organizaciones internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, interesadas en la unificación del derecho mercantil internacional. Puesto que las tareas confiadas a la CNUDMI exigen conocimientos muy técnicos del derecho mercantil y de los usos comerciales internos, la delegación del Japón espera que la CNUDMI seguirá utilizando la experiencia de otras organizaciones y entidades internacionales.

45. La CNUDMI ha logrado un progreso considerable desde el séptimo período de sesiones, especialmente en la esfera de la reglamentación internacional del transporte marítimo. A ese respecto, la delegación del Japón desea felicitar al Grupo de Trabajo correspondiente por haber finalizado el proyecto de convenio sobre el transporte marítimo de mercancías. Dicha delegación presentará en breve sus comentarios sobre ese proyecto de convenio al Secretario General y también expresará sus opiniones sobre él durante el noveno período de sesiones de la CNUDMI. En vista de la importancia de un nuevo convenio sobre el transporte marítimo de mercancías, la CNUDMI debe tomar plenamente en cuenta los usos comerciales existentes y el desarrollo de nuevas técnicas en el transporte marítimo y debe encontrar un equilibrio entre los intereses de los cargadores y los de los portadores.

46. También se espera que en su noveno período de sesiones la CNUDMI dé forma definitiva al anteproyecto de reglamento de arbitraje comercial internacional. A ese respecto, una de las cuestiones importantes es el ámbito de aplicación del reglamento. La opinión prevaleciente, tal como se sintetiza en el anexo I al informe de la CDI, parece estar en favor de la exclusión, por el momento, del "arbitraje administrado" del ámbito del reglamento, opinión compartida por su delegación, ya que refleja en forma adecuada la práctica actual del arbitraje.

47. En cuanto a las condiciones generales de venta y contratos tipo, la delegación del Japón aprueba la decisión de la CNUDMI de establecer un grupo de estudio compuesto por representantes de comisiones regionales y organizaciones y asociaciones comerciales interesadas, incluso de cámaras de comercio. Ese estrecho contacto con

organizaciones interesadas es el método de trabajo más apropiado, no sólo para ese tema en particular, sino también para la planificación de leyes y reglas en la esfera del comercio internacional en general. La CNUDMI debe continuar por partes su trabajo sobre ese tema, estudiando los distintos aspectos prácticos y, en particular, las características del comercio de determinadas mercaderías.

48. En su trabajo sobre las empresas multinacionales, la CNUDMI ha tomado en cuenta, con razón, la creación de la Comisión de Empresas Transnacionales. La delegación del Japón está de acuerdo con la decisión de la CNUDMI de abstenerse de tomar una decisión definitiva sobre su programa de trabajo en esa esfera hasta que la Comisión de Empresas Transnacionales haya determinado las cuestiones jurídicas apropiadas para ser objeto de la labor de la CNUDMI. Los problemas jurídicos que plantean las empresas multinacionales se hallan estrechamente relacionados con los de carácter económico, social y político y no pueden debatirse con provecho si los aspectos económicos y financieros del problema no están completamente estudiados.

49. El orador toma nota con satisfacción del éxito del Simposio patrocinado por la CNUDMI sobre la función de las universidades y los centros de investigación con respecto al derecho mercantil internacional. La función informativa de la CNUDMI no es menos importante que sus actividades de preparación de proyectos de convenios, puesto que las actividades de información ayudan a fomentar la comprensión, que es un requisito previo necesario para la unificación y la armonización del derecho mercantil internacional. Su delegación, por lo tanto, también acoge con beneplácito la decisión de la CNUDMI de pedir al Secretario General que organice, en relación con su décimo período de sesiones, un simposio internacional sobre el derecho mercantil internacional.

50. Con relación al futuro programa de trabajo de la CNUDMI, su delegación hace suya la propuesta de celebrar un período de sesiones de cuatro semanas desde el 26 de abril al 21 de mayo de 1976, porque la CNUDMI tendrá que ocuparse de dos materias extremadamente importantes, a saber el proyecto de convenio sobre el transporte marítimo de mercaderías y el proyecto revisado de reglamento de arbitraje.

51. Su delegación acoge con beneplácito el realismo de la CNUDMI al decidir terminar las tareas importantes que ya está realizando, antes de emprender nuevos proyectos.

52. El Sr. LAUTERPACHT (Australia) dice que, si bien puede definirse a la Sexta Comisión como un cuerpo técnico, es importante no perder de vista el aspecto político de su función. Está bien decir que es obligación de los miembros enfocar con pericia técnica y jurídica los problemas internacionales, pero tal pericia debe estar enfocada de manera que asegure una contribución positiva y constructiva a la búsqueda de una sociedad internacional mejor ajustada capaz de realizar sus propias aspiraciones.

53. El orador aplaude el trabajo de la CNUDMI, tal como se refleja en su informe. Con respecto a cada una de las materias en examen, dice que la CNUDMI parece estar avanzando con el grado de empuje o de medida adecuado al

caso particular: empuje en el caso, por ejemplo, de la preparación de un proyecto de convenio sobre la compraventa internacional de mercaderías, los estudios sobre las condiciones generales de venta y contratos tipo, el trabajo sobre la mecánica de los pagos comerciales, la elaboración de un nuevo proyecto de convenio sobre el transporte marítimo de mercaderías y el fomento de simposios; y medida en el caso de las empresas multinacionales, en el que ha decidido coordinar su trabajo con la Comisión de Empresas Transnacionales y la del Centro de Información e Investigaciones sobre las Empresas Transnacionales.

54. La delegación de Australia está particularmente interesada en las primeras etapas del enfoque por la CNUDMI del arbitraje comercial internacional. El orador felicita a la CNUDMI por el trabajo substancial que ha realizado sobre el tema hasta el momento. La importancia intrínseca del arreglo jurídico de controversias en el comercio internacional es evidente. En realidad, el hecho de que 35 Estados hayan hecho referencia expresa a ello en el Acta Final de la Conferencia Europea de Seguridad y Cooperación indica la importancia política actual del tema. Lo que puede pasarse por alto con más facilidad es que la categoría de arreglo de controversias no es más que un aspecto del problema mucho más amplio del arreglo internacional de controversias que ocupará la atención de la Sexta Comisión durante el mes siguiente. Por esa razón, su delegación aprueba que en el reglamento no se incluya ninguna disposición que limite expresamente su ámbito al comercio. La CNUDMI ha evitado cualquier pronunciamiento doctrinario de identificación de las partes involucradas en las transacciones que puedan ser objeto de arbitraje comercial internacional. Tampoco ha tratado de imponer una limitación substantiva del concepto. Ello no quiere decir que el reglamento de arbitraje internacional pueda o deba aplicarse a las controversias tradicionales entre Estados. Sin embargo, en la época actual el Estado mismo es un comerciante. No sólo compra y vende mercaderías; también se dedica a actividades vinculadas al comercio del sector público y, por lo tanto, entabla una vasta gama de relaciones contractuales “internacionales” con extranjeros, que pueden en última instancia ocasionar controversias en las cuales puede resultar adecuado el arbitraje internacional del tipo contemplado en el proyecto de reglamento de arbitraje. De esa manera, el reglamento de uso facultativo en el arbitraje especial forma un complemento útil y una ampliación de métodos institucionales de la misma importancia que el sistema del Banco

Mundial para el arreglo de controversias relativas a inversiones internacionales. Dicho reglamento tendría, además, una función útil que desempeñar en las controversias que puedan surgir de contratos en los cuales fueran partes organizaciones internacionales y para los cuales no existiera en muchos casos proceso de arreglo alguno fuera del arbitraje. Por esas razones, es de desear que la CNUDMI no tratará de limitar el ámbito de aplicación actual del reglamento.

55. Con respecto a la relación entre el derecho interno y el arbitraje, la CNUDMI está bien en lo cierto al identificar el efecto derogatorio del derecho interno respecto de actividades de arbitraje que tienen lugar dentro del territorio de un Estado determinado. Pero pareciera haber lugar para una mayor clarificación sobre lo que actualmente constituye una de las características más inciertas del arbitraje, a saber, la ausencia de control o guía en la cuestión de la sede del tribunal, que hace surgir un elemento de inseguridad. La importancia de ese asunto es más evidente cuando se relaciona con el artículo 27 del anteproyecto que se ocupa de la cuestión del derecho que deben aplicar los árbitros, pero no indica la influencia que el orden público de la sede del arbitraje pueda tener sobre el fondo del laudo.

56. Es de desear que se examine más a fondo el problema del efecto del laudo arbitral. Los artículos 29 y 30 del anteproyecto tratan, respectivamente, de la interpretación y de la rectificación del laudo. No se trata concretamente del efecto del laudo. En particular, no se analiza el problema de la impugnación del laudo por las causales de error de forma o de fondo, que son, sin embargo, cuestiones de una importancia práctica considerable.

57. Entre algunos otros asuntos de detalle, que la delegación de Australia comentará a su debido tiempo en la CNUDMI y que desea mencionar de paso, están el problema de nombrar árbitros que también representen a una de las partes, el deber del árbitro de asegurar que se escuche a las partes comparecientes, sobre todos los asuntos pertinentes al laudo, y la forma de formular preguntas a expertos.

58. Australia espera con interés seguir asistiendo a la CNUDMI en su importante labor, y acoge su informe con beneplácito.

Se levanta la sesión a las 18.25 horas.

1534a. sesión

Miércoles 8 de octubre de 1975, a las 15.15 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1534

TEMA 108 DEL PROGRAMA

Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 27º período de sesiones (A/10010)

1. El PRESIDENTE invita al Presidente de la Comisión de Derecho Internacional a presentar el informe de la Comisión sobre la labor realizada en su 27º período de sesiones.
2. El Sr. TABIBI (Presidente de la Comisión de Derecho Internacional) recuerda que se han producido muchos cambios desde la presentación del primer informe de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) a la Sexta Comisión en 1949. En aquella ocasión no había más que unos cuantos asiáticos presentes y casi no había africanos. Le complace ver que en la presente sesión hay más asiáticos y africanos presentes que representantes de otras naciones, y está seguro de que tendrán gran influencia en el desarrollo del moderno derecho internacional, que durante siglos fue un monopolio de las cancillerías occidentales y de los juristas europeos.
3. Rinde homenaje a la destacada contribución que la Sexta Comisión ha hecho al desarrollo progresivo del derecho internacional durante los últimos 30 años, y expresa la esperanza de que la continua cooperación entre la Sexta Comisión, la CDI y la Corte Internacional de Justicia contribuirá a asegurar una paz permanente en el mundo.
4. Elogia también las importantes contribuciones hechas por la Oficina de Asuntos Jurídicos a la labor de la Sexta Comisión, de la CDI, de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y de otros órganos jurídicos. Pese a la difícil situación presupuestaria que afrontan las Naciones Unidas, deberían hacerse esfuerzos para encontrar la manera de aumentar el personal de la Oficina, particularmente de la División de Codificación y la División de Asuntos Jurídicos Generales. Convendría que la Oficina participara activamente en la tarea de vital importancia de preparar y formalizar documentos normativos relativos al nuevo orden económico internacional a que se refieren las resoluciones 3201 (S-VI) y 3202 (S-VI) de la Asamblea General.
5. Pasando al informe de la CDI (A/10010), el orador dice que en su 27º período de sesiones la CDI formuló su programa, estableció la prioridad asignada a los temas que han de examinarse de conformidad con la resolución 3315 (XXIX) de la Asamblea General, y logró progresos considerables en relación con todos los temas de su programa.
6. En cuanto al capítulo II del informe, relativo al tema de la responsabilidad de los Estados, el orador recuerda que el proyecto de artículos sobre ese tema se limita a la

responsabilidad de los Estados por actos internacionalmente ilícitos y no incluye la responsabilidad internacional de los Estados por las consecuencias lesivas causadas por la realización de ciertas actividades no prohibidas por el derecho internacional; esa última cuestión ha pasado a ser un tema separado del programa de trabajo de la CDI. El proyecto de artículos trata de la responsabilidad internacional de los Estados por el incumplimiento de una obligación internacional y no se limita a la responsabilidad por el incumplimiento de obligaciones correspondientes a un sector determinado del derecho internacional. Sin embargo, en el proyecto no se deja de tener en cuenta la importancia que concede la comunidad internacional al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Las distinciones entre diferentes categorías de obligaciones internacionales serán plenamente estudiadas por la CDI, en la medida en que puedan ser pertinentes. El proyecto no tiene por objeto definir las obligaciones cuya violación pueda constituir una fuente de responsabilidad internacional, las llamadas "normas primarias", sino que más bien está encaminado exclusivamente a la codificación de las reglas generales de la responsabilidad internacional de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos como tales, a saber, las reglas que rigen todas las nuevas relaciones jurídicas derivadas de un hecho internacionalmente ilícito de un Estado como consecuencia del incumplimiento de una obligación internacional.

7. El proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados está dividido en dos partes; la primera parte se refiere al origen de la responsabilidad internacional y la segunda parte al contenido, formas y grados de la responsabilidad internacional. La CDI tal vez decida agregar una tercera parte relativa a ciertos problemas concernientes a la solución de controversias y al modo de "hacer efectiva" la responsabilidad internacional. La CDI tuvo en cuenta el deseo expresado por varias delegaciones en la Sexta Comisión en anteriores períodos de sesiones de disponer de un cuadro claro del tema en su totalidad y, por consiguiente, decidió incluir en su informe (*ibid.*, párrs. 42 a 44) una descripción general de los asuntos que se estudiarán en cada parte del proyecto.

8. La primera parte constará de aproximadamente 31 artículos divididos en cinco capítulos. En su 27º período de sesiones, la CDI terminó el examen del capítulo II, que comprende los artículos 5 a 15 y que se titula "El hecho del Estado según el derecho internacional", que trata de la determinación de las condiciones en que un tipo determinado de conducta debe considerarse como un "hecho del Estado" según el derecho internacional, es decir, el elemento subjetivo del acto internacionalmente ilícito. El capítulo III, que contendrá las disposiciones relativas a la violación de una obligación internacional, se examinará en el próximo período de sesiones de la CDI.

9. El orador recuerda que en los artículos 5, 6 y 7, aprobados en anteriores períodos de sesiones de la CDI, se prevé la atribución al Estado sujeto de derecho internacional, como fuente posible de responsabilidad internacional, la conducta de los órganos que forman parte de la maquinaria del Estado propiamente dicha y la conducta de los órganos de las entidades gubernamentales territoriales o de otras entidades también facultadas por el derecho interno a ejercer atribuciones de la autoridad gubernamental. Naturalmente, esas disposiciones se aplican solamente a la conducta que las personas que constituyen el órgano hayan adoptado en el desempeño de sus funciones como miembros de dichos órganos y no como particulares. En el artículo 10, aprobado en el 27º período de sesiones, se prevé que dicha conducta deberá atribuirse al Estado incluso si los autores se han excedido de su competencia según el derecho interno o contravenido sus instrucciones, es decir, han actuado rebasando las atribuciones que les confiere el derecho interno. Por las razones expuestas en el comentario, la CDI consideró que no había excepción a la regla, incluso en el caso de incompetencia manifiesta del órgano, incluso si otros órganos del Estado hubieran desautorizado la conducta del órgano, incluso si otros órganos del Estado hubieran desautorizado la conducta del órgano culpable. Por otra parte, según el sistema adoptado por la CDI, los actos de los seres humanos que integren dichos órganos realizados a título privado no se consideran actos del Estado y, en cuanto tales, no dan lugar a responsabilidad internacional.

10. En los artículos 12, 13 y 14, que se basan en el mismo principio básico, se dispone respectivamente que el comportamiento de un órgano de un Estado, de una organización internacional o de un movimiento insurreccional, que actúen en cuanto tales, es un hecho del Estado, de la organización internacional o del movimiento insurreccional al que pertenezcan, el órgano de que se trate, y no se considerará un hecho del Estado en cuyo territorio se haya adoptado tal comportamiento. Esas disposiciones presuponen que el órgano de que se trata no está bajo el control del Estado territorial, ya que ese caso se ha tratado en el artículo 9. Los artículos 13 y 14 no tienen por objeto definir la capacidad o condición internacional de las organizaciones internacionales y de los movimientos insurreccionales. En esos artículos se presupone que, en los casos concretos en que son aplicables, los actos considerados emanan de una organización internacional o de un movimiento insurreccional que posee personalidad propia según el derecho internacional.

11. El artículo 15, que se refiere a la atribución al Estado del hecho de un movimiento insurreccional que se convierte en el nuevo gobierno de un Estado o cuya acción da lugar a la creación de un nuevo Estado, indudablemente será objeto de observaciones por parte de los miembros de la Sexta Comisión. La cuestión de atribución prevista en el artículo surge solamente cuando el movimiento insurreccional, tras haber triunfado, sustituye las estructuras del gobierno anterior del Estado de que se trate por las suyas propias, o cuando las estructuras del movimiento insurreccional se convierten en las del nuevo Estado, constituido por sucesión o descolonización. En el artículo, que se basa en el principio de la continuidad, se dispone que el hecho de un movimiento insurreccional se considerará hecho del Estado con el que el movimiento insurreccional se identifique

después de su triunfo. Se dispone también que cuando dicho movimiento se convierta en el nuevo gobierno de un Estado, la atribución al Estado referido de los hechos del movimiento se entiende sin perjuicio de atribuir a dicho Estado cualquier comportamiento que anteriormente se hubiera considerado hecho de ese Estado en virtud de los artículos 5 a 10 del proyecto y por consiguiente, no se excluye en modo alguno la atribución paralela a dicho Estado de los hechos realizados durante el conflicto por los órganos del gobierno entonces establecido.

12. La CDI ha seguido haciendo progresos en sus trabajos sobre el tema importante, aunque difícil y complicado, de la sucesión de los Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados. Ya ha adoptado ocho artículos sobre el tema, centrándose por el momento en la sucesión en los bienes del Estado. Uno de los nuevos artículos importantes aprobados provisionalmente por la CDI es el artículo 9 titulado "Principio general del paso de los bienes de Estado". La CDI ha adoptado también provisionalmente el artículo X, en el cual se detalla la falta de efectos de una sucesión de Estados sobre los bienes de un tercer Estado, y un nuevo inciso que ha de incluirse en el artículo 3, en el que se define el término "tercer Estado". Durante el examen efectuado por la CDI, varios miembros expresaron reservas sobre el texto del artículo 11. Se expresó la opinión, entre otras, de que el artículo no era pertinente al tema, que su redacción no era adecuada para expresar la norma deseada y que podía hacer más difíciles las negociaciones entre el Estado predecesor y el Estado sucesor. Por esa y otras razones señaladas en el comentario, la CDI decidió poner la totalidad del artículo entre corchetes, para señalar esas cuestiones a la atención de la Sexta Comisión. La CDI se propone continuar sus trabajos sobre los bienes del Estado, materia sobre la que se han hecho considerables progresos, y luego pasar a examinar las "deudas públicas", limitando posiblemente su estudio a las deudas del Estado.

13. Con respecto al capítulo IV del informe, que trata de la cláusula de la nación más favorecida, el orador señala que, en su 27º período de sesiones, la CDI examinó los informes cuarto, quinto y sexto del Relator Especial, que contenían una nueva serie de proyectos de artículos y aprobó 14 artículos más, elevando de este modo el total a 21. Señalando a la atención algunos puntos relevantes, el orador se refiere en primer lugar a la relación entre la cláusula de la nación más favorecida y la cláusula del trato nacional. Debido a la interacción entre la operación de la cláusula de la nación más favorecida y la cláusula del trato nacional, cláusulas que a menudo aparecen juntas en los tratados y algunas veces combinadas, el Relator Especial propuso en su quinto informe¹ varios proyectos de artículos relativos al trato nacional y la cláusula de trato nacional. En su sexto informe², el Relator Especial reiteró su creencia en la necesidad de mencionar explícitamente tanto la cláusula de la nación más favorecida como la cláusula de trato nacional en los artículos aplicables a ambas cláusulas. Tras un debate general, la CDI convino en concentrar su labor en normas relativas a la cláusula de la nación más favorecida y al trato de nación más favorecida. Sin embargo, aprobó dos disposiciones (arts. 16 y 17) relativos al trato nacional. La CDI deseaba proporcionar a la

¹ A/CN.4/280.

² A/CN.4/286.

Asamblea General una oportunidad de pronunciarse sobre la conveniencia de ampliar el proyecto en relación con las cláusulas de trato nacional y el trato nacional. En consecuencia, las opiniones de la Sexta Comisión serán valiosas a la CDI para concluir su primera lectura del tema, prevista para el próximo año.

14. El segundo punto que desea señalar se refiere a la relación entre la cláusula de la nación más favorecida y los diferentes niveles de desarrollo económico, que es una cuestión de gran importancia para el tercer mundo. Refiriéndose a la tendencia cada vez más señalada en la Asamblea General y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) de aplicar la cláusula de la nación más favorecida a todos los países en consideración de su nivel de desarrollo económico, el orador dice que dicha aplicación entraña una discriminación implícita contra los países del tercer mundo. Para los fines de desarrollo económico, es necesario asegurar que la cláusula de la nación más favorecida no se aplicará durante cierto período de tiempo a ciertos tipos de relaciones mercantiles internacionales. El octavo principio general de las recomendaciones aprobadas por la UNCTAD en su primer período de sesiones³ sustenta ese punto de vista. Como la cuestión guarda una relación estrecha con la codificación definitiva del tema, la CDI, reconociendo su importancia, comenzó a examinar en su 27° período de sesiones la cuestión de las excepciones al funcionamiento de la cláusula y aprobó provisionalmente un primer artículo (art. 21) relativo a la cláusula de la nación más favorecida en relación con el trato en virtud de un sistema generalizado de preferencias. La CDI tiene la intención de estudiar más a fondo en su próximo período de sesiones la cuestión de la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida a los países en desarrollo, a fin de determinar si pueden ser necesarias algunas disposiciones adicionales a fin de proteger adecuadamente sus intereses y examinar, en ese contexto, el artículo 21 con miras a su posible perfeccionamiento. Según algunos miembros de la CDI que pertenecen principalmente al tercer mundo, ese artículo, que debe constituir el primer paso en una serie de proyectos de artículos dedicados a la cuestión, resulta inadecuado. Personalmente, el orador está a favor de un conjunto de artículos destinados a abarcar los intereses de las naciones económicamente más débiles, incluidos los países sin litoral.

15. El tercer punto que desea señalar a la atención de la Sexta Comisión se refiere a la cuestión de si la cláusula de la nación más favorecida atrae o no ventajas dimanantes de las uniones aduaneras y asociaciones similares de Estados. La CDI celebró un debate preliminar sobre el asunto en su 27° período de sesiones, pero no adoptó una posición concreta al respecto. Desea tener en cuenta las reacciones de los representantes de los Estados cuando examine de nuevo el asunto en su próximo período de sesiones. A ese efecto, la CDI ha considerado útil incluir en su comentario sobre el artículo 15 parte del material que figura en el informe del Relator Especial, al igual que un resumen de sus indagaciones y conclusiones sobre el tema. Aunque algunos miembros de la CDI apoyaron la posición del Relator Especial, otros expresaron reservas.

16. Debe subrayarse que los artículos sobre la cláusula de la nación más favorecida están destinados a complementar la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados⁴. Como las normas generales sobre los tratados se formularon en dicha Convención, el proyecto de artículos contiene normas especiales aplicables a cierto tipo de disposición convencional, es decir, la cláusula de la nación más favorecida. Por lo general, las disposiciones del proyecto de artículos se entienden sin perjuicio de las disposiciones que las partes pueden convenir en el tratado, contenga o no la cláusula. A fin de subrayar ese carácter residual, pueden adoptarse dos posibles enfoques: introducir en cada artículo, según resulte adecuado, una cláusula inicial tal como "a menos que en el tratado se disponga otra cosa o que se convenga otra cosa", o insertar en el proyecto un artículo en el que se reconozca expresamente dicho carácter residual, que sería de aplicación general a todas las disposiciones de la misma naturaleza. En su próximo período de sesiones la CDI tomará una decisión sobre cuál de los dos enfoques debe adoptarse.

17. La CDI ha realizado importantes progresos sobre la cuestión de los tratados concertados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales. En el capítulo V del informe se examina detalladamente la labor realizada hasta la fecha en esa esfera y se explican el alcance y el carácter del proyecto de artículos. También se explica la estrecha relación del proyecto de artículos con la Convención de Viena en su conjunto, al igual que con determinados artículos de dicha Convención. En su 27° período de sesiones, la CDI, además de llenar los vacíos en el artículo 2 sobre el uso de los términos, aprobó otros 12 artículos. Como se señala en los comentarios generales en la parte introductoria del capítulo, la CDI siguió en gran medida las disposiciones de la Convención de Viena, que se refiere a los tratados entre Estados, para los tratados celebrados entre uno o más Estados y una o más organizaciones internacionales y los tratados celebrados entre dos o más organizaciones internacionales. Sin embargo, al hacerlo, la CDI no dejó de tener en cuenta la circunstancia de que, en la etapa actual de desarrollo del derecho internacional, las organizaciones internacionales no podrán ser asimiladas a los Estados. Por consiguiente, las normas establecidas en la Convención de Viena están siendo adaptadas por la CDI, cuando lo juzga necesario, a las organizaciones internacionales, tarea que no siempre resulta fácil. Las dificultades inherentes se manifestaron durante el año en curso cuando la CDI examinó algunos de los proyectos de artículos aprobados y, en especial, cuando comenzó a examinar las disposiciones de la Convención de Viena relativas a las reservas, que continuarán siendo estudiadas en el próximo período de sesiones de la CDI. La naturaleza especial de las organizaciones internacionales también hizo necesario, en algunos casos, complementar los términos utilizados en la Convención de Viena con otros nuevos.

18. El 27° período de sesiones de la CDI ha sido uno de los más productivos: se aprobaron 35 proyectos de artículos en primera lectura y se hicieron progresos en la

³ Véase *Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo*, vol. I, *Acta Final e Informe* (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 64.II.B.11), pág. 22.

⁴ Véase *Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados*, *Documentos de la Conferencia* (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.70.V.5), documento A/CONF.39/27, pág. 311.

preparación de proyectos de artículos sobre cuatro de los temas a los que se había dado prioridad en vista de las recomendaciones pertinentes de la Asamblea General.

19. Además, la CDI prestó especial atención al deseo expresado en la Sexta Comisión de que se hiciera un esfuerzo para racionalizar más la organización y los métodos de trabajo de la CDI cuando fuera conveniente para la realización de las tareas que le habían sido confiadas. Se creó un grupo de planificación para que estudiara el funcionamiento de la CDI y formulara sugerencias con respecto a sus trabajos. El grupo emprendió un examen del volumen de trabajo de la CDI con miras a proponer objetivos generales que la CDI podría tratar de alcanzar. La CDI llegó a ciertas conclusiones importantes sobre la base de dicho examen. La CDI opinó que, si bien la adopción de un programa de operaciones rígido resultaría impracticable, el uso de metas en la planificación de sus actividades proporcionaría una referencia útil para la toma de decisiones. Se convino también en que el grupo de planificación continuara examinando el progreso de los trabajos de la CDI, al igual que formulando sugerencias sobre las actividades y necesidades de la CDI. La CDI tiene la intención de continuar el próximo año el examen de los temas incluidos en su programa actual, es decir, la responsabilidad de los Estados, la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados, la cláusula de la nación más favorecida, la cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más

organizaciones internacionales y el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación.

20. La cooperación con los órganos jurídicos regionales, que es útil tanto a la CDI como a las comisiones jurídicas regionales, continuó durante el pasado año. Observadores de la CDI participaron en las reuniones de los órganos jurídicos regionales, y la CDI escuchó declaraciones de observadores de dichos órganos.

21. El Seminario sobre derecho internacional se celebró como de costumbre mientras tenía lugar el 27º período de sesiones y todos los miembros del Seminario asistieron a reuniones de la CDI y escucharon conferencias dadas por muchos de sus miembros. Muchos participantes eran juristas jóvenes de países en desarrollo.

22. De conformidad con una decisión adoptada por la CDI en su 23º período de sesiones, y sobre la base de un generoso subsidio del Gobierno del Brasil, la tercera Conferencia en memoria de Gilberto Amado fue dictada en el Palacio de las Naciones el 11 de junio de 1975 por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia. Al igual que en años anteriores, la Conferencia se ha publicado, con una introducción del Presidente de la CDI, y se distribuirá próximamente.

Se levanta la sesión a las 16.45 horas.

1535a. sesión

Jueves 9 de octubre de 1975, a las 15.20 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1535

TEMA 108 DEL PROGRAMA

Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 27º período de sesiones (continuación) (A/10010)

TEMA 109 DEL PROGRAMA

Sucesión de Estados en materia de tratados: informe del Secretario General (continuación)* (A/10198 y Add.1 a 4, A/9610/Rev.1)**

1. El Sr. STANFORD (Canadá) felicita a los miembros de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) y a su Presidente por la permanente excelencia de su labor; el alcance del derecho internacional se ha extendido rápidamente en los últimos años y la CDI es, en gran medida, el centro de las crecientes exigencias de la comunidad de naciones al derecho internacional y a los abogados. Observando con especial interés la parte B del capítulo VI del

informe de la CDI (A/10010), que trata de la organización de su labor y de las predicciones sobre un probable progreso durante los próximos seis años, el orador expresa la convicción de que se debe ejercer mucha moderación en la remisión de nuevos temas a la CDI en esos momentos. Los acontecimientos recientes justifican la esperanza de que los debates que se desarrollan en otras partes sobre materias que han ido adquiriendo más importancia para las Naciones Unidas en los últimos años podrán conducir pronto a un consenso sobre algunos de esos temas. Sería, pues, correcto que la comunidad internacional tratara de elaborar normas de especial aplicación a tales materias. Después de eso, cabe esperar que se puedan formular otras peticiones a la CDI. Por esa razón, es importante que la CDI se concentre durante los próximos dos años en completar su labor sobre las materias de que actualmente se ocupa, en especial, las cuestiones de la responsabilidad de los Estados, de la sucesión de Estados y de los tratados celebrados por las organizaciones internacionales.

2. Con respecto al proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados (véase A/9610/Rev.1, cap. II, secc. D), el orador observa que el comentario al artículo 7 sugiere que el propósito de ese artículo es el de

* Reanudación de los trabajos de la 1530a. sesión.

** Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno período de sesiones, Suplemento No. 10.

incorporar en el proyecto una disposición análoga al artículo 4 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados¹ y el principio general de la irretroactividad de los tratados, recogido en el artículo 28 de esa Convención. La delegación del Canadá coincide con la opinión expresada por el Gobierno de la República Federal de Alemania en sus comentarios sobre el proyecto de artículos (A/10198/Add.1), de que la redacción deliberada del artículo con miras a su aplicación a cualquier sucesión de Estados que ocurriera después de la entrada en vigor general de los artículos, y no después de su entrada en vigor con respecto a una parte en particular, es una desviación clara del principio de la irretroactividad enunciado en el artículo 28 de la Convención de Viena. Es dudoso que esa desviación de un principio fundamental del derecho de los tratados se justifique y que una disposición de ese tipo tenga la probabilidad de hacer que los artículos en conjunto sean más o menos aceptables para los Estados que obtengan su independencia después de la entrada en vigor general del instrumento.

3. La sucesión por el Canadá en los tratados celebrados en su nombre por el Reino Unido se ha regido por los principios del derecho internacional consuetudinario que, a juicio del Canadá, estaban en vigor en el momento de esa sucesión, lo que no se ajusta en todos sus aspectos a los principios reflejados en el actual proyecto de artículos. Esos artículos se atienen considerablemente a la práctica más reciente de los Estados. El Gobierno del Canadá ha adoptado siempre la posición por ejemplo, de que, tras obtener la condición de Estado independiente, el Canadá ha sucedido en los tratados de extradición celebrados por el Reino Unido y aplicados al Canadá antes de que obtuviese esa condición de independiente. Hay una práctica nacional considerable entre el Canadá y los otros Estados partes en los tratados que confirma esa opinión del derecho internacional consuetudinario vigente en el momento de la sucesión de Estados con respecto al Canadá.

4. Respecto de la cuestión de las medidas que han de tomarse en relación con el proyecto de artículos, el orador observa que siguen sin resolver dos cuestiones, a saber, el propuesto artículo 12 *bis*, sobre los tratados multilaterales de carácter universal, y el propuesto artículo 32 sobre la solución de controversias (véase A/9610/Rev.1, notas 57 y 58). Se ha sugerido que se remitan de nuevo esas cuestiones a la CDI para mayor estudio. Si bien tiene en mucha estima la voluntad de la CDI de dedicar más tiempo y esfuerzos a la materia, la delegación del Canadá no comparte la opinión de que sea necesario o conveniente volver a remitirlas a la CDI.

5. En lo que concierne a la cuestión de los tratados multilaterales de carácter universal, el orador recuerda a la Sexta Comisión que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados abandonó su intento de incorporar la distinción entre tratados multilaterales generales y tratados multilaterales restringidos en la Convención de Viena porque no pudo llegar a un acuerdo sobre las

definiciones necesarias de esas dos clases de tratados, que fueran tanto exhaustivas como recíprocamente excluyentes. Por consiguiente, es dudoso que quepa esperar que la CDI llegue a un acuerdo sobre la definición de los tratados multilaterales de carácter universal y que tal definición pueda mantenerse en las deliberaciones de cualquier órgano diplomático que se convoque más tarde para examinar y aprobar oficialmente el proyecto de artículos. La delegación del Canadá cree que es muy probable que la práctica que se rija por los artículos actuales tropiece con la preocupación de quienes han propuesto el artículo 12 *bis* y que un intento de incorporar el concepto de tratados multilaterales de carácter universal pueda, en definitiva, crear más problemas que los que solucione.

6. En lo que toca a la cuestión de los procedimientos para la solución de controversias, la delegación del Canadá cree que si el proyecto de artículos adopta en definitiva forma de convención, esa convención debe incluir disposiciones sobre esa cuestión. Lo ideal es que tales disposiciones estipulen la conciliación, seguida, en caso necesario, por el fallo obligatorio y vinculativo de un tercero. Sin embargo, como mínimo indispensable, las disposiciones sobre la solución de controversias deben ajustarse a las enunciadas en la Convención de Viena, con la cual se relaciona estrechamente toda convención sobre la sucesión de Estados en materia de tratados. Lo más probable es que todo debate sobre los procedimientos de solución de controversias giren alrededor de la cuestión de si habrá una disposición relativa al arbitraje obligatorio y vinculativo por terceros, lo que a su vez conducirá al examen de si el arbitraje obligatorio es compatible con el concepto de la igualdad soberana de los Estados y en qué circunstancias lo es. Por la materia de ese examen, que por fuerza es de un carácter eminentemente político, la delegación del Canadá duda de que un nuevo estudio de la cuestión por la CDI signifique un progreso considerable de las negociaciones políticas que deben tener lugar en el órgano diplomático que en definitiva se convoque para examinar y aprobar oficialmente el proyecto de artículos.

7. El orador advierte que la CDI ha recomendado la práctica habitual de convocar una conferencia diplomática para examinar el proyecto de artículos, y aprobar y abrir a la firma una convención basada en el proyecto de la CDI. Sin embargo, la delegación del Canadá comparte las reservas expresadas por los Gobiernos de Bélgica y Francia en sus comentarios escritos (véase A/10198) acerca de si la aprobación de una convención es realmente el medio más adecuado y eficaz de adelanto en la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional sobre la materia. En el plano práctico y jurídico, cuando, con posterioridad a la aprobación y entrada en vigor de una convención sobre la sucesión de Estados en materia de tratados, un Estado adquiera su independencia – acontecimiento que se producirá probablemente con mucho menos frecuencia en el futuro porque la era de colonización está llegando a su fin – naturalmente no quedará obligado por la convención. Cabe suponer que el Estado de reciente independencia examinará los tratados que anteriormente se aplicaban a su territorio, determinará cuáles está dispuesto a aplicar y cuáles no, y se pronunciará en consecuencia. Sólo entonces se podría esperar, si es que cabe hacerlo en absoluto, que examine la cuestión de si se adhiere o no a la convención.

¹ Véase *Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados*, *Documentos de la Conferencia* (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.70.V.5), documento A/CONF.39/27, pág. 311.

8. Los Estados que tienen interés especial en la cuestión de la sucesión de Estados en materia de tratados podrían entender que la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional sobre la materia se beneficiarían más mediante la adopción de artículos en forma de un código por una resolución de la Asamblea General que mediante la aprobación de una convención que pudiese atraer sólo un número limitado de ratificaciones y adhesiones. De decidirse la celebración de una conferencia diplomática sobre la materia, la delegación del Canadá exhortaría a que se aplazase la decisión sobre la fecha de esa conferencia hasta la conclusión de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, a fin de no aumentar la carga que sobre los recursos humanos y financieros imponen las conferencias ya previstas.

9. El Sr. CASTRÉN (Finlandia) da las gracias al Presidente de la CDI por la presentación de su informe.

10. Refiriéndose a la cuestión de la responsabilidad de los Estados, que se trata en el capítulo II del informe de la CDI, dice que los textos de los artículos 10 a 15, aprobados por la CDI en su 27º período de sesiones, son claros y concisos y sus disposiciones parecen estar respaldadas en general por la práctica judicial internacional y nacional, la práctica de los Estados y la mayor parte de las obras de los juristas modernos, como indican los comentarios tan detallados que figuran en el informe. Aunque algunas de las reglas establecidas en dichos artículos podrían parecer casi evidentes por sí mismas, su inclusión es útil para disipar ciertas dudas e interpretaciones erróneas que han existido en el pasado. Aunque no está seguro de la necesidad de la disposición de salvaguardia contenida en el párrafo 2 de los artículos 11, 12 y 14 y en la segunda frase del párrafo 1 del artículo 15, no hay razón para que no se mantenga a efectos de mayor seguridad. Refiriéndose al párrafo 1 del artículo 14, dice que, si bien es indiscutible que dicha disposición en cuanto regla general está bien fundada, puede debatirse si, a la luz de los párrafos 25 a 27 del comentario, dicha regla no admite excepciones. Aunque la CDI ha dado una respuesta negativa, algunos autores han avanzado opiniones divergentes. En cualquier caso, parece haber fundamentos para incluir una reserva a dicha disposición, dado que el artículo 15 contiene una regla contraria. Aunque la disposición contenida en el párrafo 1 de dicho artículo es acertada, su redacción parece imprecisa y debería complementarse a la luz de las observaciones que figuran en el párrafo 5 del comentario.

11. Refiriéndose al capítulo III del informe, que trata de la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados, dice que los artículos 9, 11 y X, relativos a la sucesión de Estados en los bienes del Estado, y el nuevo inciso e) del artículo 3 son aceptables a su delegación. Aunque pueden suscitarse diversas objeciones teóricas al artículo 9 porque no establece una diferencia entre bienes públicos y privados, dicho artículo sigue a ese respecto la práctica habitual de los Estados. En lo que se refiere al artículo X, desearía mantener las palabras “del Estado predecesor o” contenidas en los primeros corchetes y suprimir las que figuran en los segundos corchetes. El inciso e) del artículo 3 es necesario, y la definición que contiene es aceptable.

12. La CDI ha realizado considerables progresos en su examen de la cuestión de la cláusula de la nación más favorecida. Como resultado de ello, queda muy poco por hacer sobre la misma en el próximo período de sesiones de la CDI. Su delegación no ve inconveniente en que se amplíe el ámbito del proyecto que se está preparando actualmente para que incluya el trato nacional y las cláusulas de trato nacional, habida cuenta de la estrecha relación que existe entre esas cuestiones y la cláusula de la nación más favorecida, siempre que dicha ampliación no demore excesivamente los trabajos de la CDI. Su delegación está de acuerdo en general con el fondo y la forma de los artículos aprobados (véase A/10010, párr. 119). Las reglas expuestas en dichos artículos reflejan las tendencias modernas de la práctica de los Estados y las obras de los juristas. Por otra parte, los comentarios tan detallados de la CDI y del Relator Especial son muy convincentes. Refiriéndose al artículo 15, dice que su Gobierno volverá oportunamente sobre la cuestión de la ampliación del trato en virtud de un acuerdo bilateral o multilateral. A la luz de los comentarios de la CDI y del Relator Especial, parece que la práctica de los Estados y las opiniones expresadas por los tratadistas sobre esa cuestión no son uniformes. Igual sucede respecto de la cuestión tratada en el artículo 16. Sin embargo, el texto presentado por la CDI parece fundado. En lo que respecta al artículo 21, el texto de carácter más general propuesto por algunos miembros de la CDI y transcrito al final del párrafo 15 del comentario podría considerarse como posible variante del texto existente.

13. Se han realizado también considerables progresos respecto de la cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales. Hasta la fecha, la labor de la CDI sobre esa cuestión ha sido relativamente sencilla, ya que, en gran medida, ha podido seguir el texto de los artículos correspondientes de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, con algunas ligeras modificaciones de redacción. Si se comparan los textos de Viena y los preparados por la CDI (*ibid.*, párr. 137), solamente se advierten diferencias considerables en el artículo 7. Se han introducido también algunas innovaciones en los nuevos incisos del artículo 2. Sería útil probablemente que se añadiera en dicho artículo una definición más formal de las partes que han “participado en la elaboración del tratado”. Como se dice en el párrafo 3 del comentario al artículo 9, la CDI se propone examinar más adelante esta cuestión. Si bien no tiene comentarios que hacer sobre el fondo de los artículos de que se trata, estima que podría condensarse la forma de algunos de ellos. Por ejemplo, parece posible fundir los párrafos 3 y 4 del artículo 7 y los dos párrafos del artículo 10. Sin embargo, su delegación podría aceptar la redacción actual si resultara necesaria por razones de claridad y precisión. Como muestran los párrafos 121 a 132 del informe de la CDI, quedan todavía por considerar diversas cuestiones difíciles antes de que quede completada la serie de proyectos de artículos sobre relaciones convencionales en que sean partes las organizaciones internacionales. Una de esas cuestiones se refiere a la terminación de los tratados.

14. La CDI no ha examinado la cuestión del derecho de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación en su 27º período de sesiones, pues estaba esperando las respuestas de los gobiernos a un cuestionario

del Secretario General. Desde entonces, se han recibido esas respuestas y datos, que serán publicados por el Secretario General. El Gobierno de Finlandia ha enviado una larga respuesta indicando que la CDI debería, en sus deliberaciones, prestar considerable atención a las propuestas preparadas por la Asociación de Derecho Internacional, el Instituto de Derecho Internacional y demás instituciones y organismos internacionales que se ocupan del desarrollo progresivo y de la codificación del derecho de los cursos de agua internacionales. En su respuesta, su Gobierno ha subrayado también que la CDI no debería ocuparse, por lo menos en las fases iniciales de su trabajo, de demasiados detalles técnicos, sino que debería esforzarse por encontrar y formular principios generales que constituyeran la base para la reglamentación de cuestiones relativas a la utilización de los recursos hidráulicos. Al mismo tiempo, debería examinar las cuestiones de la utilización y protección de los cursos de agua y reglamentos sobre contaminación. Su delegación observa que la CDI dispone ya de suficientes datos para ocuparse de esa cuestión y que continúan siendo válidas las mismas razones que indujeron a la Asamblea General, hace cinco años, a adoptar la propuesta de Finlandia de confiar a la CDI el examen de esa cuestión², por lo que deberían comenzar sin demora los trabajos sobre esta materia.

15. Se ha reconocido en general que la labor de la CDI ha sido muy fructífera, pero que ella no puede emprender por sí sola la totalidad de la tarea de desarrollo y codificación del derecho internacional debido al hecho de que el tiempo disponible para sus períodos de sesiones anuales es limitado. Los proyectos de convención elaborados por otros órganos de codificación de las Naciones Unidas no son siempre preparados con suficiente detenimiento, lo que tiende a complicar y demorar los trabajos de las conferencias de plenipotenciarios convocadas para concertar convenciones sobre los diversos aspectos del derecho internacional. Por consiguiente, convendría que las Naciones Unidas examinaran la forma en que mejor pudieran organizarse los trabajos sobre desarrollo y codificación del derecho internacional, prestando especial atención a los métodos de trabajo de la CDI. Por ejemplo, podría establecerse para comenzar un grupo de trabajo limitado. No desea formular una propuesta oficial o sugerencias concretas, sino simplemente señalar esa cuestión a la atención de la Sexta Comisión.

16. Su delegación ha tomado nota con satisfacción del éxito del Seminario de derecho internacional celebrado durante el 27º período de sesiones de la CDI. Asimismo, celebra anunciar que el Gobierno de Finlandia se propone ofrecer una vez más una beca de 2.000 dólares a participantes de países en desarrollo en el Seminario que ha de celebrarse en 1976 en Ginebra.

17. El Sr. SIBLESZ (Países Bajos) dice que las observaciones de su Gobierno acerca del proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados han sido publicadas en el informe del Secretario General (véase A/10198).

18. Refiriéndose al propuesto artículo 12 *bis*, subraya que la actitud positiva de su Gobierno hacia esa disposición

obedece solamente a su deseo de evitar, en el caso de convenciones multilaterales de carácter universal, el vacío jurídico que podría dimanar de una aplicación demasiado estricta de la regla de la "tabla rasa". Aunque la aplicación ininterrumpida de esos tratados parece ser una excepción al principio ya establecido de la "tabla rasa", debe subrayarse que el propio principio de la libre determinación permanece inalterado, ya que el artículo 12 *bis* establece el derecho del Estado de reciente independencia a quedar excluido de su aplicación. Su delegación conviene en que la definición propuesta por un miembro de la CDI de la expresión "tratado multilateral de carácter universal" se presta a crítica. La calificación de "abierto a la participación de todos los Estados" da lugar a que se defina demasiado estrictamente el ámbito del artículo propuesto, ya que quedarían excluidas de esa categoría la mayor parte de las convenciones que, por su propia naturaleza y objeto, reúnen requisitos para que sean aplicadas ininterrumpidamente entre el Estado de reciente independencia y los demás Estados partes en las convenciones de que se trate. La definición propuesta merece ciertamente ulterior estudio, que tal vez podría emprender la CDI.

19. Se han dado ya a conocer las opiniones de su Gobierno sobre la importante cuestión de la solución de controversias. Se requiere un procedimiento a tal efecto, ya que una evaluación realista de las cuestiones abarcadas en el proyecto de artículos pone fácilmente de manifiesto su posible carácter explosivo. Se han formulado varias sugerencias respecto de un procedimiento eficaz, que van desde negociaciones bilaterales a la presentación de la controversia a la Corte Internacional de Justicia. Así pues, los gobiernos deberían examinar cuál de las fórmulas existentes prefieren que se incluya en una convención futura. Sin embargo, si los gobiernos prefieren el proyecto de artículo sobre solución de controversias propuesto por un miembro de la CDI, debería insertarse una disposición que dijera que cualquiera de las partes en una controversia relativa a la interpretación o aplicación del proyecto de artículos podría presentarla a la Corte Internacional de Justicia para que decidiera en los casos en que un procedimiento previo de conciliación no produjera una solución definitiva. A ese respecto, recuerda las disposiciones del párrafo 2 de la resolución 3232 (XXIX) de la Asamblea General.

20. En lo que se refiere a la forma definitiva que debe darse al proyecto de artículos, su delegación sostiene que es adecuada la forma de una convención, dado que los artículos se han redactado como complemento de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. En cuanto al procedimiento que debe observarse, habida cuenta del calendario de las próximas conferencias sobre cuestiones jurídicas, sería preferible que el proyecto se formalizara en la Asamblea General. Sin embargo, si la Sexta Comisión desea remitir a la CDI algunas cuestiones pendientes de solución y si, como consecuencia de ello, se dispone de un proyecto completo en una fase posterior, su Gobierno estaría dispuesto a reconsiderar su posición a la luz de las circunstancias que existieran en ese momento.

21. El Sr. MANSFIELD (Nueva Zelanda) dice que su delegación no hará observaciones detalladas en la fase actual sobre el proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados, dado que su actitud general con respecto a los artículos y su actitud frente a los principios

² Véase *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo quinto período de sesiones, Anexos*, tema 91 del programa, documento A/7991.

subyacentes fueron esbozadas en sus declaraciones ante la Sexta Comisión en los períodos de sesiones vigésimo séptimo (1323a. sesión) y vigésimo noveno (1489a. sesión). En esas ocasiones, su delegación señaló que el punto de partida del proyecto de artículos, es decir, la idea de que un Estado de reciente independencia comienza la vida con una “tabla rasa”, era un concepto sobre el que inicialmente se inclinaba a dudar. El principio de la “tabla rasa” no parece ajustarse a la práctica seguida en la parte del mundo en que está situada Nueva Zelanda, en la cual los países siempre se han considerado herederos legítimos de las obligaciones y derechos heredados del Reino Unido o de cualquier otra Potencia de la que hayan surgido. Recuerda la declaración hecha por su delegación el anterior período de sesiones en el debate de la Sexta Comisión (*ibid.*) sobre el informe de la CDI de que su país, en su propia práctica como Estado, había invocado con frecuencia viejos tratados bilaterales concertados por el Reino Unido antes del nacimiento de Nueva Zelanda como algo a lo que tenía derecho y que constituía una ventaja práctica, debido a que en muchas esferas, regidas por tratados bilaterales, tales como la extradición y la ejecución recíproca de sentencias, se requería un período considerable para elaborar nuevos tratados. No obstante, teniendo en cuenta que el trabajo de la CDI no tendrá una aplicación retrospectiva, su delegación aceptó que, al establecer el principio básico, la CDI tenía razón al dar cierta prioridad a una práctica más reciente que la suya como prueba de la *opinio juris* del mundo moderno, y que también tenía razón al prestar especial atención al principio de las Naciones Unidas de la libre determinación. Además, a medida que se habían formulado los artículos de la CDI, su Gobierno había visto que su preocupación, basada en su propia experiencia, por la protección de los intereses reales de los Estados de reciente independencia se tomaba debidamente en cuenta, particularmente al enunciar el principio de que un Estado de reciente independencia tenía derecho a determinar su posición en cuanto parte en los tratados multilaterales de carácter general.

22. Algunos oradores han sugerido que el proyecto de artículos se remita de nuevo a la CDI para que lo reexamine. A juicio de su delegación, esa no es la forma de proceder adecuada que ha de seguir la Sexta Comisión. En la resolución 3071 (XXVIII), la Asamblea General pidió a la CDI que terminara en su 26° período de sesiones la segunda lectura de sus artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados. Al presentar el informe de la CDI sobre la labor realizada en su 26° período de sesiones, su Presidente señaló (1484a. sesión) que había reexaminado los artículos, según lo pedido por la Asamblea, a la luz de las observaciones de los gobiernos, y había aprobado el texto definitivo de su proyecto de artículos sobre el tema. Como instrumento para la codificación, la CDI es un órgano único que combina los niveles más elevados de competencia profesional con la sensibilidad para con las opiniones de los gobiernos. No es un órgano de juristas académicos que operan en una atmósfera alejada del mundo de la política práctica. Al decir que ha examinado sus artículos a la luz de las observaciones de los gobiernos, no cabe duda de que dichas opiniones se han tenido plenamente en cuenta. Dadas esas circunstancias, remitir de nuevo los artículos a la CDI sería alterar radicalmente los proyectos de codificación establecidos y crear un precedente sumamente desacertado. Además, desde el punto de vista práctico, pedir a la CDI que efectúe un examen de su proyecto definitivo sobre el

tema supondría demorar sustancialmente los trabajos sobre otros temas importantes de su programa.

23. En su informe sobre el año precedente, la CDI señaló que había dos propuestas de miembros que la CDI en su conjunto no había tenido tiempo de examinar plenamente (véase A/9610/Rev.1, párr. 75). Su delegación tiene algunas reservas sobre la primera de esas propuestas, relativa a los tratados multilaterales de carácter universal. A su juicio, debe seguir siendo sumamente difícil definir lo que constituye o no un tratado universal o de carácter normativo, de forma que la inclusión de un artículo tal como el propuesto podría dar lugar a una amplia zona de incertidumbre acerca de las normas que se aplican a los tratados multilaterales en general. Además, en caso de un tratado multilateral que fuera indiscutiblemente de carácter universal o normativo, sería recibido dentro del cuerpo del derecho consuetudinario de forma que la cuestión de si un Estado sucesor está ligado por él sería irrelevante.

24. Con respecto a la segunda propuesta, su delegación considera que la inclusión de una disposición sobre la solución de controversias es importante. Como se señala en el párrafo 79 del informe de la CDI sobre la labor realizada en su 26° período de sesiones, en muchos casos el proyecto de artículos establece condiciones cuya aplicación puede plantear dificultades. El artículo propuesto a la CDI, que figura en la nota 58 de ese informe, a juicio de su delegación es una disposición razonable que está en consonancia con la opinión de que el proyecto de artículos de la CDI formaría el capítulo que falta en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. A juicio de su delegación, no hay necesidad de que la CDI siga trabajando en la cuestión, ya que las posibilidades de una disposición sobre la materia son bien conocidas.

25. Con respecto a la forma en que pudieran completarse los trabajos de la CDI sobre el proyecto de artículos, hay dos posibilidades: primera, convocar una conferencia internacional de plenipotenciarios; segunda, completar los trabajos en la Sexta Comisión. Su delegación cree que los argumentos a favor de utilizar la Sexta Comisión para ese fin son fuertes, ya que convocar una conferencia internacional entrañaría considerables gastos adicionales tanto para las Naciones Unidas como para los gobiernos de los Estados participantes. Además, parece que no hay indicios de que la Sexta Comisión tenga una carga de trabajo excesiva en el futuro.

26. Una cuestión aún más importante es la cuestión de la participación. Los miembros estarán de acuerdo en que el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional son una tarea importante de las Naciones Unidas, y que su éxito depende en no pequeña medida de la participación activa del mayor número posible de los Estados que integran la comunidad internacional. Ahora bien, a su delegación le preocupa el creciente número de conferencias sobre temas jurídicos, que habitualmente son largas y suponen una carga considerable para los recursos limitados de personal capacitado de los pequeños Estados tales como el suyo. Su delegación considera que, como se indicó en la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Representación de los Estados en sus Relaciones con las Organizaciones Internacionales, la adición de más y más conferencias sobre temas jurídicos al programa de

conferencias supondría que, llegado cierto momento, una proporción significativa de los Miembros de las Naciones Unidas simplemente no podrían tomar parte en la última fase del proceso de desarrollo progresivo y codificación del derecho internacional.

27. El Sr. MUSHOBOKWA (Zaire) felicita a los miembros de la CDI por la labor realizada, en particular con respecto al proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados.

28. Su país es uno de los que apoya la idea de la continuidad de los tratados, armonizando fácilmente el concepto de la sucesión de Estados en materia de tratados con la norma *pacta sunt servanda*. No obstante, acepta el principio de la “tabla rasa” siempre que los principios fundamentales de su soberanía estén comprometidos.

29. Dado que la expresión “sucesión de Estados” implica la sustitución de un Estado por otro en la responsabilidad por las relaciones internacionales del territorio, su Gobierno ha optado por la sucesión automática a beneficio de inventario, para utilizar un término tomado del derecho privado. Es decir, su país conviene en aceptar la responsabilidad por tratados negociados y firmados en su ausencia, con la posibilidad de denunciar en una fase posterior los que afecten sus intereses fundamentales.

30. Así pues, los derechos y obligaciones del Estado predecesor han sido transferidos a su Estado sin ninguna acción por su parte o incluso contra su voluntad, es decir, automáticamente. Por consiguiente, un cambio de soberanía no altera las relaciones internacionales.

31. Por lo tanto, la práctica de su país con respecto a la sucesión, tanto en tratados bilaterales como en tratados multilaterales de carácter universal o de carácter restringido, está de conformidad con la disposición de su Constitución según la cual los tratados internacionales celebrados antes del 30 de junio de 1960 serán válidos solamente si no son modificados por la legislación nacional.

32. Por consiguiente, el principio seguido es el de la preservación de los tratados firmados en nombre de su país por el Estado predecesor, Bélgica. No obstante, su Gobierno se reserva el derecho a rechazar o denunciar aquellos que no hayan sido motivados por nobles ideales. Esa posición obliga a su Gobierno a examinar cuidadosamente tales tratados, lo cual no es una tarea fácil, ya que su número es superior a 200. Sobre la base de esos principios, la República del Zaire ha preferido renegociar su condición de miembro en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), en tanto que ha aceptado la sucesión con respecto a la Organización Internacional del Trabajo.

33. Pese a la claridad de lo dispuesto en la Constitución de Zaire, algunos Estados han preferido renegociar algunos acuerdos con el país de reciente independencia, particularmente en el caso de los acuerdos relativos al transporte aéreo, al comercio y a la garantía de las inversiones. Además, muchos Estados han rechazado la sucesión de Zaire en los derechos y obligaciones de la antigua metrópoli en los llamados acuerdos de extradición y asistencia jurídica. Su país cree en una sucesión auténtica de los Estados en materia de tratados y está a favor de la idea de

que la tabla no es totalmente rasa, es decir, propugna el principio de la continuidad de cierto tipo, que podría llamarse la sucesión a beneficio de inventario.

34. En general, su delegación celebra la forma en que se ha preparado el proyecto de artículos, es decir, el deseo constante de asegurar una sucesión indiscutible basada en las dos consecuencias de la continuidad: la cláusula *rebus sic stantibus* y la relatividad de los compromisos según el principio *res inter alios acta*. Es decir, cuando se ha producido un cambio en las circunstancias o en las partes, pueden modificarse las obligaciones.

35. Con respecto al artículo 7, a su delegación le plantea problemas el principio de la irretroactividad en él establecido. Aunque la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados incorpora ese principio sobre la base del principio de la irretroactividad de las leyes en el derecho interno, no sucede lo mismo con respecto a la sucesión de Estados en materia de tratados. Su delegación está de acuerdo en que las leyes se promulgan sólo para el futuro. No obstante, es esencial no perder de vista el hecho de que los tratados se firman para ser aplicados. Por tanto, su delegación considera que el artículo mencionado pierde el sentido merced al artículo 22, que establece de nuevo el principio de la retroactividad para los países de reciente independencia. Dado que el principio de la irretroactividad de los tratados ya está incorporado en la Convención de Viena, debería suprimirse el artículo 7.

36. Con respecto al artículo 11, relativo a las fronteras, su delegación aprueba el principio de la “tabla rasa” adoptado por la CDI. No puede haber sucesión en los tratados que establecen fronteras. Su país rechaza tal sucesión y toma nota de las situaciones existentes, a saber: las fronteras que constituyen los límites del ejercicio de su soberanía. Así, la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana, reunidos en El Cairo en su primer período ordinario de sesiones declaró que los Estados miembros de la Organización se comprometían a respetar las fronteras existentes al alcanzar la independencia nacional.

37. Aceptar la aplicación de la sucesión de Estados en la materia equivaldría a que cualquier Estado sucesor tuviera derecho a denunciar un tratado de fronteras basándose en el párrafo 2 del artículo 23, lo que daría lugar a muchos conflictos de fronteras. La República del Zaire no es un país expansionista y respeta ciertas fronteras establecidas por acuerdos firmados entre Bélgica y Portugal. Su país aprueba la redacción del artículo 11 en su totalidad.

38. Refiriéndose al artículo 12, dice que aunque está mal redactado, su delegación aprueba la exclusión de los tratados en él mencionados del ámbito de la sucesión de Estados en materia de tratados. Las disposiciones del artículo están en consonancia con la historia y con el nuevo orden político internacional.

39. Con respecto a los artículos 15 a 29, que tratan de los Estados de reciente independencia, dice que su país no puede aprobar el principio de la “tabla rasa” establecido en el artículo 15. Su país está a favor de una fórmula que incluye el principio de *pacta sunt servanda*, con la posibilidad de denunciar los tratados que sean incompatibles con

el nuevo orden político y jurídico. El artículo 15 es contrario a la práctica seguida hasta la fecha por la mayoría de los nuevos países respecto de los tratados celebrados por la antigua metrópoli, ya que o bien han permanecido en silencio o han negociado un nuevo tratado con el Estado predecesor. En su comentario al artículo 15, la CDI da ejemplos de países que, a su juicio, no son Estados de reciente independencia, tales como los Estados Unidos de América, Bélgica, Panamá, Irlanda, Polonia, Checoslovaquia y Finlandia. A su país le cuesta algo aceptar la distinción entre tratados multilaterales (artículo 16) y tratados bilaterales (artículo 23). Resulta difícil ver por qué la presunción de aceptación de sucesión en tratados bilaterales no debería aplicarse a los tratados multilaterales. Ello contribuiría al respeto del principio de la continuidad en las relaciones internacionales.

40. El Sr. BOJILOV (Bulgaria) dice que su delegación comparte las ideas básicas del proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados preparado por la CDI, ya que se basan, por lo general, en el derecho de los tratados, los principios generales y del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. La CDI ha conseguido establecer el debido equilibrio entre dos principios importantes, a saber: el principio de la “tabla rasa” y el principio de la continuidad *ipso jure*.

41. Su delegación apoya firmemente el principio de la “tabla rasa”. La población de un territorio bajo dominación colonial no puede quedar obligada por tratados a los que no ha dado su consentimiento. No obstante, se requieren ciertas excepciones al principio de la “tabla rasa” para proteger los intereses tanto de los Estados de reciente independencia como los de la comunidad internacional en su conjunto. Ejemplo de ello es el artículo 11, que trata de la cuestión de las fronteras.

42. Aunque comparte las ideas básicas del proyecto de artículos, su delegación cree que aún pueden mejorarse. Pone en duda vigorosamente la conclusión de la CDI de que no es adecuado incluir en el ámbito del proyecto de artículos los problemas de sucesión que surgen como resultado de los cambios producidos por la revolución social. Además, el artículo 7, que trata de la cuestión de la irretroactividad, ha sido adoptado por una pequeña mayoría y, por lo tanto, la importancia del proyecto de artículos en su conjunto se ha reducido enormemente. La cuestión de la irretroactividad merece más estudio y debate.

43. Además, conviene que la CDI examine detalladamente el propuesto artículo 12 *bis*, sobre los tratados multilaterales de carácter universal, y el propuesto artículo 32, sobre el arreglo de controversias, ya que aparentemente no hubo tiempo para hacerlo en el 26º período de sesiones. Merecería la pena examinar de nuevo si no sería preferible introducir el sistema de renuncia de la sucesión exclusivamente para los tratados multilaterales de carácter universal. Tal sistema fortalecería el papel del derecho internacional en beneficio de la comunidad internacional en su conjunto. Si no hubiera desacuerdos políticos sobre esa cuestión, encontrar la fórmula más adecuada para establecer el sistema para esos países sería puramente una cuestión de técnica jurídica.

44. El proyecto preparado por la CDI constituye una buena base para seguir la labor. Es prematuro examinar la cuestión de convocar una conferencia diplomática sobre la materia. La CDI debería examinar de nuevo el proyecto de artículos, teniendo en cuenta las observaciones hechas por los gobiernos y las deliberaciones de la Sexta Comisión en el vigésimo noveno y trigésimo período de sesiones.

Se levanta la sesión a las 16.50 horas.

1536a. sesión

Viernes 10 de octubre de 1975, a las 15.15 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1536

TEMA 109 DEL PROGRAMA

Sucesión de Estados en materia de tratados: informe del Secretario General (*continuación*) (A/10198 y Add.1 a 4, A/9610/Rev.1*)

1. El Sr. MUHAMMAD (India) dice que su delegación está de acuerdo con la opinión unánime de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) (véase A/9610/Rev.1, párr. 63) de que al proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados (*ibid.*, cap. II, secc. D) debería dársele el mismo carácter que a la Convención de

Viena sobre el derecho de los tratados¹ y que, en consecuencia, debería adoptarse en forma de convención, en vez de en forma de declaración de principios. El objetivo primario de codificar esa rama del derecho es hacer una declaración que tenga autoridad en la materia, y la mejor forma de realizarlo es por medio de una convención.

2. Con respecto al procedimiento para completar los trabajos sobre el proyecto de artículos, la delegación de la India apoya la recomendación de la CDI (*ibid.*, párr. 84) de que se convoque una conferencia internacional de pleni-

* Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno período de sesiones, Suplemento No. 10.

¹ Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.70.V.5), documento A/CONF.39/27, pág. 311.

potenciarios para celebrar una convención sobre el tema, dado el complejo carácter de las cuestiones planteadas y la excepcional importancia del instrumento que ha de adoptarse. En general, no debería recargarse a la Sexta Comisión con los trabajos de codificación, ya que tiene otros temas importantes que abordar. No obstante, se facilitaría la decisión de la cuestión si la Secretaría informase a la Sexta Comisión del plan de conferencias jurídicas internacionales para los próximos dos o tres años. Sea como fuere, la delegación de la India apoya la adopción de una convención sobre el tema en un futuro próximo.

3. Refiriéndose a las propuestas presentadas a la CDI sobre los tratados multilaterales de carácter universal y la solución de controversias (*ibid.*, notas 57 y 58), el orador observa que el Gobierno de Austria, en su respuesta al Secretario General (véase A/10198), declaró que la experiencia de convenciones anteriores codificadas bajo los auspicios de las Naciones Unidas mostraba que la formulación de una disposición sobre el arreglo de controversias, que requería por lo común intensas negociaciones, podía hacerse más adecuadamente en el marco de una conferencia diplomática. Además, el orador observa que también el Gobierno de los Estados Unidos considera innecesario que la CDI reexamine la cuestión. La propuesta relativa a los tratados multilaterales de carácter universal es compleja. Además de las dificultades mencionadas en los párrafos 76 y 77 del informe de la CDI sobre la labor realizada en su 26º período de sesiones, existe también el problema de llegar a una definición clara y precisa de la expresión "tratado multilateral de carácter universal". No obstante, la delegación de la India comprende la preocupación de las delegaciones que tienen una opinión diferente. El Gobierno indio está examinando cuidadosamente la propuesta y expresará su opinión sobre ella en el momento oportuno. No obstante, la mencionada propuesta también podría ser examinada por una conferencia de plenipotenciarios.

4. Dado lo cargado del programa de trabajo de la CDI, la delegación de la India no considera justificado que se le devuelva el proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados para que los reexamine.

5. El Sr. RASOLKO (República Socialista Soviética de Bielorrusia) dice que la CDI ha realizado una gran labor constructiva sobre el tema de la sucesión de Estados en materia de tratados; el presente proyecto de artículos refleja aspectos importantes del tema, tales como el principio de la libre determinación de los pueblos y las cuestiones relativas a la sucesión en materia de territorios y de fronteras. Como acertadamente señala el proyecto, la sucesión de Estados se efectúa de conformidad con el derecho internacional y en consonancia con los principios de derecho internacional establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.

6. Ahora bien, en conjunto el proyecto de artículos aún no ha alcanzado un grado de preparación que justifique la convocación de una conferencia para examinarlo. El proyecto aún necesita más trabajo y adolece de varias insuficiencias. Por ejemplo, en relación con el principio de la "tabla rasa", el proyecto tiene el defecto de que deja abierta la posibilidad de que el Estado sucesor se aproveche del principio para negarse a cumplir normas generalmente aceptadas de derecho internacional, particularmente obliga-

ciones contraídas por el Estado predecesor como parte en tratados multilaterales. Los Estados predecesores, tales como las Potencias coloniales, podrían también utilizar el principio como excusa para eximirse de responsabilidad por actos ilícitos realizados en el territorio de que se trate antes de que obtenga la independencia.

7. Debería también recordarse que los nuevos Estados pueden surgir no solamente debido a la descolonización, sino también en virtud de una revolución social, y los Estados de ese último tipo deberían gozar del derecho de aplicar los mismos principios que se aplican en el caso de los Estados que han surgido como consecuencia de la descolonización. La CDI no ha prestado la debida atención a los problemas relativos a la sucesión de Estados en caso de revolución social. Es esencial que esos casos se incluyan en el proyecto de artículos. La formulación del artículo 7, relativo a la no retroactividad, tiene ciertas deficiencias, en particular el hecho de que las disposiciones del artículo se aplican solamente respecto de la sucesión de Estados que se produce "después de la entrada en vigor de estos artículos". Eso significaría que muchos casos de sucesión que se han producido en el pasado como consecuencia del derrumbe del sistema colonialista del imperialismo pueden quedar fuera del ámbito de aplicación de la convención.

8. A juicio de la delegación bielorrusa, el artículo 13 debilita sustancialmente las disposiciones establecidas en el artículo 11 sobre inviolabilidad de las fronteras.

9. A finales del 26º período de sesiones, un miembro de la CDI propuso un artículo 12 *bis*, relativo a los tratados multilaterales de carácter universal, y otro propuso un artículo 32 sobre la solución de controversias. La CDI no pudo examinar esas propuestas a fondo y adoptar una decisión al respecto. En vista de ese problema y de las insuficiencias del proyecto, a las que muchas delegaciones se han referido en el curso del debate sobre el tema en el vigésimo noveno y el trigésimo períodos de sesiones de la Asamblea General, la delegación bielorrusa opina que la única decisión correcta que puede adoptar la Sexta Comisión es recomendar que la CDI repase de nuevo seriamente el proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados, teniendo en cuenta las observaciones hechas por los Estados y las deliberaciones de la Sexta Comisión. Al continuar su examen del proyecto, la CDI tendría también la oportunidad de terminar sus trabajos sobre el tema de la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados; eso sería conveniente, ya que ambos temas están relacionados entre sí. Después de eso, el proyecto de artículos podría someterse a la Sexta Comisión para que lo examinara, en vez de a una conferencia internacional convocada especialmente para ese fin.

10. Sir Vincent EVANS (Reino Unido) dice que el proyecto de artículos presentado a la Comisión representa una prueba más de la alta calidad que la Comisión se ha acostumbrado a esperar de la CDI. El Reino Unido tiene especial interés en el proyecto de artículos debido a la contribución que aportaron a su preparación Sir Humphrey Waldock y Sir Francis Vallat, como Relatores Especiales. Será una satisfacción para la delegación del Reino Unido comunicarles las elogiosas observaciones hechas sobre su trabajo en el curso de las deliberaciones de la Sexta Comisión.

11. Con respecto a los artículos 12 *bis* y 32 propuestos para las cuestiones de los tratados multilaterales de carácter universal y de la solución de controversias, la delegación del Reino Unido mantiene las opiniones expresadas en su respuesta al Secretario General (véase A/10198) de que los proyectos de artículos del tipo propuesto aumentarían la utilidad de una convención y de que la CDI debería tener una nueva oportunidad de examinarlos. A juicio de la delegación de su país, hay poderosos argumentos por los cuales, en interés tanto de los Estados de reciente independencia como de la comunidad internacional en su conjunto, no debería cesar la vigencia de los tratados multilaterales de carácter universal para los Estados de reciente independencia. Aunque comprende los sentimientos en que se basa el principio de la "tabla rasa", la delegación del Reino Unido ha expresado dudas repetidas veces acerca de si se han sopesado suficientemente los casos en que los Estados interesados se han declarado a favor de la continuidad, teniendo presente el papel esencial que los tratados, tanto bilaterales como multilaterales, desempeñan en la marcha ordenada de las relaciones internacionales, y la inmensa tarea que un nuevo Estado con personal limitada tendría que afrontar para recuperar derechos valiosos reconocidos en tratados perdidos a consecuencia de la aplicación automática del principio de la "tabla rasa". Los tratados multilaterales de carácter universal constituyen una parte significativa de esas relaciones convencionales y, por consiguiente, el proyecto de artículo propuesto requiere un examen más detenido.

12. El Gobierno del Reino Unido considera muy deseable que existan disposiciones adecuadas para la solución de controversias. Además, dado que la CDI ha expresado que está dispuesta a seguir examinando la cuestión y a preparar un informe, habría que invitarla a hacerlo. La propuesta contenida en el informe de la CDI sobre la labor realizada en su 26º período de sesiones tal vez no baste por sí sola para abarcar la amplia variedad de controversias que pueden surgir de las disposiciones del proyecto de artículos propuesto, particularmente habida cuenta del carácter necesariamente amplio de algunas de las definiciones contenidas en el proyecto. También podría ser aconsejable disponer que se sometieran ciertos tipos de controversias a arbitraje o a la Corte Internacional de Justicia. Por lo tanto, la delegación del Reino Unido considera que sería sumamente conveniente remitir los dos proyectos de artículos a la CDI para que los estudiara más.

13. Una tercera cuestión que tal vez convendría pedir a la CDI que siguiera examinando es la de las modalidades por las que un Estado de reciente independencia o un Estado sucesor podrían aplicar el régimen establecido en los artículos a su propia situación. Evidentemente es una cuestión clave para la eficacia de las reglas propuestas, ya que solamente pueden ser eficaces en cada caso concreto de sucesión de Estados si se aplican al Estado sucesor. Cuanto más tarden en ser aplicables, mayores serán las dificultades que surjan, en particular con respecto a la cuestión de la retroactividad. Como otros miembros de la Sexta Comisión, el orador no está plenamente convencido de que el actual artículo 7 resuelva satisfactoriamente las dificultades inherentes al problema. Por lo tanto, la cuestión debería remitirse de nuevo a la CDI para que la examinara más.

14. La delegación del Reino Unido no considera que la CDI debiera revisar la totalidad del proyecto de artículos.

Está de acuerdo con las opiniones expresadas por otras delegaciones de que la CDI, en general, ha logrado una transacción satisfactoria entre opiniones divergentes en una rama un tanto controvertida del derecho internacional. Está plenamente de acuerdo con el representante del Brasil (1526a. sesión) en que no sería ventajoso ni justificable pedir a la CDI que diera una tercera lectura a la totalidad del proyecto, y que hacerlo perturbaría indebidamente el programa de trabajo de la CDI. No obstante, hay que entender que al abordar las tres cuestiones concretas que se remitirían de nuevo a la CDI, ella debería tener libertad para proponer cualquier enmienda que considerase conveniente a las restantes disposiciones del proyecto de artículos. Además, debería pedirse a la CDI que, de ser posible, informase sobre los tres artículos mencionados a la Asamblea General en su trigésimo primer período de sesiones, de forma que se mantuviera el impulso dado al programa de codificación del derecho internacional.

15. Como se desprende del informe sobre la labor realizada en su 27º período de sesiones (A/10010), la CDI continúa llevando a cabo sus trabajos sobre otros temas, y es importante que no se forme una acumulación de proyectos no terminados. Si se adoptara la línea de conducta que el orador propone, no haría falta ni convendría que la Sexta Comisión decidiera en el actual período de sesiones si la labor de finalizar el proyecto de artículos debía ser llevada a cabo por una conferencia diplomática o por la propia Sexta Comisión. Esas cuestiones podrán decidirse mejor después de que la CDI haya presentado su informe a la Sexta Comisión, a la luz del programa de conferencias que exista en ese momento y del propio programa de trabajo de la Sexta Comisión, y cuando ésta esté en condiciones de formarse una opinión más ponderada acerca de si el proyecto de artículos debe incorporarse en una convención, que es lo que la delegación del Reino Unido prefiere, o en alguna forma de resolución.

16. El Sr. VAN BRUSSELEN (Bélgica) dice que los comentarios presentados por el Gobierno de Bélgica en respuesta a la resolución 3315 (XXIX) de la Asamblea General figuran en el documento A/10198.

17. En las circunstancias actuales, la delegación belga no puede aceptar la propuesta de incluir el artículo 12 *bis*, tal como está formulado en la nota 57 de pie de página del informe de la CDI sobre la labor realizada en su 26º período de sesiones. Sin embargo, esa posición de principio, explicada en la respuesta del Gobierno de Bélgica al Secretario General, no disminuye la preocupación que el Gobierno belga comparte con algunos miembros de la CDI de que la aplicación de ciertas convenciones multilaterales, en especial, de las de carácter humanitario, pueda interrumpirse. Ahora bien, si se llega al caso de elegir entre aplicar provisionalmente un tratado o disponer de un texto que sea lo más claro posible y que deje un margen mínimo para interpretaciones diferentes, la delegación de Bélgica no vacilará en escoger lo último. Si, como resultado de un examen más a fondo de la cuestión, la CDI puede encontrar una solución más satisfactoria, el Gobierno belga podría reconsiderar su opinión. Por consiguiente, la delegación de Bélgica sugiere que el proyecto se devuelva a la CDI para un nuevo examen.

18. Esa conclusión se aplica igualmente al problema planteado por la ausencia de un mecanismo para resolver

controversias. También a ese respecto hay una ventaja indudable en confiar la preparación de ese mecanismo a la CDI, dado que uno de sus miembros ha presentado ya una propuesta y la CDI estaría en mejores condiciones que una conferencia de plenipotenciarios para lograr que los textos que se incluyan se ajusten a las disposiciones de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.

19. En lo que concierne a la etapa final de codificación, la delegación belga considera que el proyecto de artículos debe remitirse una vez más a la CDI, a fin de que pueda considerar de nuevo las dos propuestas mencionadas en el párrafo 75 de su informe. Aunque la delegación belga no insistirá en que la CDI proceda a una tercera lectura de todo el proyecto de artículos, ésta tiene libertad para revisar otros artículos si lo considera necesario. Por lo tanto, parece lógico no seguir adelante por el momento; todo lo que podría hacer la Sexta Comisión sería tomar decisiones de principio sujetas a una revisión ulterior. A su juicio, la Sexta Comisión estaría en mejores condiciones de tomar las decisiones necesarias sobre la etapa final de codificación en 1976. Se dispondría entonces de los resultados de la labor de la CDI y la Sexta Comisión tendría una idea más clara de las posibilidades reales de convocar a una conferencia de plenipotenciarios, a favor de lo cual se declara en principio la delegación belga. La Sexta Comisión estaría también en mejores condiciones para examinar la conveniencia de elaborar un solo texto, que abarcara tanto la sucesión de Estados en materia de tratados como la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados.

El Sr. Godoy (Paraguay), Vicepresidente, ocupa la Presidencia.

20. El Sr. BULL (Liberia) expresa que, respecto del tema de la sucesión de Estados en materia de tratados, su delegación apoya la tesis de que todo Estado tiene el derecho immanente de determinar por sí mismo aquello que ha de obligarlo. Ese derecho immanente está consagrado en los principios de libre determinación y de igualdad soberana de los Estados. Sería una transgresión burda de esos principios bien establecidos compeler a los Estados de reciente independencia a quedar automáticamente vinculados por obligaciones derivadas de tratados en cuya formulación no han participado. Todo Estado soberano debe conservar la libertad de decidir por sí mismo cuáles son los tratados bilaterales o multilaterales — celebrados, en la mayoría de los casos, por la antigua Potencia colonial — que los han de obligar y cuáles son los tratados que han de denunciar. Los Estados de reciente independencia, especialmente los Estados africanos, no fueron consultados en el momento de la celebración de esos tratados, antes de obtener su independencia, y sus intereses tampoco fueron tenidos en cuenta. Todo nuevo Estado debe estar en libertad de examinar en forma crítica los tratados celebrados por el Estado predecesor y de determinar luego qué tratados lo benefician.

21. A juicio del orador, no debe haber excepciones a esa libertad de elección. Por consiguiente, no apoya el concepto de que los Estados de reciente independencia deban quedar automáticamente obligados por tratados multilaterales de un supuesto "carácter universal". El significado de esa expresión no es claro y no proporciona motivos valederos para hacer una excepción a los principios justos y general-

mente aceptados de igualdad soberana de los Estados y de libre determinación.

22. La delegación de Liberia acepta decididamente el principio de la "tabla rasa" tal como lo formula la CDI. Esa propuesta es justa y práctica y robustece la libertad de elección de los Estados de reciente independencia.

23. La delegación de Liberia felicita a la CDI por la labor realizada en el proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados, cuya importancia no puede destacarse en demasía. Su pronta aprobación por la comunidad mundial asegurará aún más el mantenimiento de la paz y el orden internacionales, objetivo fundamental de las Naciones Unidas. En vista de la importancia del proyecto de artículos, es imprescindible que se presenten para su consideración adecuada a una conferencia diplomática de Estados, tan pronto como sea posible.

24. El Sr. MUSEUX (Francia), después de agradecer al Presidente de la CDI la presentación del informe sobre la labor realizada en su 27º período de sesiones, observa que el Gobierno de Francia ya ha expuesto su posición (véase A/10198) con respecto al proyecto de artículos elaborado por la CDI sobre el tema de la sucesión de Estados en materia de tratados. En consecuencia, la delegación de Francia sólo desea destacar algunos puntos para completar sus anteriores observaciones sobre el particular.

25. El Gobierno de Francia rinde tributo a la importantísima labor realizada por la CDI. Sin embargo, no cree que todo proyecto de artículos preparado por la CDI en su labor de codificación y desarrollo del derecho internacional deba tomar automáticamente la forma de una convención. El Gobierno de Francia no suscribe la opinión de que sea preferible preparar una convención sólo porque un instrumento de esa índole tendría mayor autoridad. Sería un error dar forma de convención a disposiciones que no estén destinadas a regir de un modo directamente obligatorio los casos de sucesión de Estados que puedan ocurrir, por el efecto relativo de los tratados y, sobre todo, dado que en la mayoría de los casos no va a haber sucesión en la convención sobre la sucesión de Estados en materia de tratados. El párrafo 62 del informe de la CDI sobre su 26º período de sesiones (A/9610/Rev.1) contiene algunos puntos muy pertinentes y convincentes a ese respecto. Desde luego que, teóricamente, se podrían corregir las imperfecciones del proyecto actual. Sin embargo, en la presente etapa, a menos que se presenten nuevas ideas para resolver el problema, esa medida sólo podría tomarse al precio de violentar los principios de relatividad e irretroactividad, y de violentarlos en tal extremo, especialmente respecto de la seguridad de las relaciones jurídicas, que el Gobierno francés no podría aceptarla. Sería más adecuado elaborar normas tipo que, cabe esperar, puedan aprobarse unánimemente y no una convención que, en último término, podría no recibir el número suficiente de ratificaciones que permitiese el alcance que la CDI había querido darle. A ese respecto, el orador se pregunta si se habría robustecido la autoridad de la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas (resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, anexo) de haberse consagrado sus disposiciones en una convención que actualmente estuviera ratificada sólo por unos pocos Estados.

26. A juicio de la delegación de Francia, sería prematuro llegar a una conclusión definitiva sobre el proyecto de artículos preparado por la CDI. Tal vez la CDI pueda ahondar provechosamente en los problemas de redacción y en sus consecuencias, así como en los problemas mencionados por otras delegaciones en el debate actual. La Sexta Comisión dispondría así de toda la información necesaria para tomar una decisión final sobre la materia.

27. El Sr. CALLE Y CALLE (Perú) se congratula de que el Presidente de la CDI haya podido acudir a Nueva York a presentar su informe sobre la labor realizada en su 27º período de sesiones. La CDI ha estudiado cuidadosamente el tema de la sucesión de Estados en materia de tratados durante muchos años, y ha llegado el momento de considerar los problemas concretos planteados por cada uno de los artículos del proyecto, como lo ha hecho notar el representante del Reino Unido. La delegación peruana rinde

tributo a los sobresalientes aportes hechos a la CDI por los dos Relatores Especiales británicos. Sólo se conseguirá retrasar el progreso de la cuestión si se remite de nuevo el proyecto de artículos a la CDI para un estudio más a fondo. Se requiere un enfoque más dinámico en las circunstancias actuales: debe convocarse una conferencia diplomática para que complete la última etapa de codificación del proyecto de artículos. Antes de que se reúna la conferencia diplomática, los Estados deben tener una última oportunidad de expresar por escrito su parecer sobre el tema. Las dos cuestiones bastante delicadas planteadas hacia el final del 26º período de sesiones de la CDI — los tratados multilaterales de carácter universal y la solución de controversias — podrían considerarse adecuadamente en una conferencia de plenipotenciarios que concluyera el proyecto.

Se levanta la sesión a las 16.20 horas.

1537a. sesión

Lunes 13 de octubre de 1975, a las 15.15 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1537

TEMA 109 DEL PROGRAMA

Sucesión de Estados en materia de tratados: informe del Secretario General (*continuación*) (A/10198 y Add.1 a 4, A/9610/Rev.1*)

1. El Sr. ABUL-KHEIR (Egipto) felicita a la Comisión de Derecho Internacional (CDI) por su excelente labor sobre la sucesión de Estados en materia de tratados, así como por otros importantes trabajos que ha efectuado en relación con la codificación del derecho internacional, que han culminado principalmente con la aprobación de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados¹ y la Convención de Viena sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal². La delegación de Egipto desea también elogiar la excelente labor realizada por Sir Humphrey Waldock y Sir Francis Vallat, Relatores Especiales de la CDI.

2. La cuestión de la sucesión de Estados en materia de tratados es una de las más importantes y delicadas de que se ocupa la CDI en su informe sobre su 26º período de sesiones (A/9610/Rev.1), por cuanto que abarca cuestiones jurídicas derivadas de la eliminación del colonialismo, la

libre determinación de pueblos colonizados y la integración de esos pueblos a la comunidad internacional como miembros plenos. El proyecto de artículos (*ibid.*, cap. II, secc. D) cubre un vacío existente en el derecho internacional, dado que no hay uniformidad en ese aspecto ni en la práctica de los Estados ni en la doctrina del derecho internacional. La CDI, con gran previsión, se ha preocupado de la práctica de los Estados de reciente independencia sin desconocer la de los Estados más antiguos, y ha basado su labor en los principios de la Carta de las Naciones Unidas, que todos los Estados se han comprometido a observar. En su labor sobre la cuestión de la sucesión, la CDI ha considerado correctamente el derecho de los pueblos a la libre determinación como una de las piedras angulares de la Carta.

3. Los Estados de reciente independencia deben gozar de entera libertad para reexaminar los tratados celebrados por los Estados predecesores en materias relativas a la soberanía sobre su territorio y determinar, entre esos tratados, cuáles son congruentes con sus principios nacionales y dignos de sucesión. De ese modo, evitarán asumir obligaciones inadmisibles o injustas, porque la historia indica que muchos tratados celebrados por los Estados predecesores, que atañen a la soberanía de los Estados sucesores, son injustos. Un ejemplo evidente es el caso de Sudáfrica, cuya ocupación de Namibia ha sido declarada ilegal por la Corte Internacional de Justicia³. Sudáfrica ha permitido que intereses extranjeros, en cumplimiento de tratados, exploten los recursos naturales de Namibia en detrimento de su

* Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno período de sesiones, Suplemento No. 10.

¹ Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.70.V.5), documento A/CONF.39/27.

² Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales vol. II (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.75.V.12), documento A/CONF.67/16.

³ Véase *Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de Sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971*, pág. 16.

población, y esos tratados no pueden seguir en vigor después de que Namibia obtenga su independencia.

4. El principio de la “tabla rasa” es justo y debe constituir la base de la sucesión de Estados en materia de tratados. La CDI ha afirmado con razón en el párrafo 58 de su informe que, “bien entendido y debidamente limitado, el principio ‘tradicional’ de que un ‘nuevo Estado’ empieza sus relaciones convencionales con una ‘tabla rasa’ estaba más en consonancia con el principio de la libre determinación” y es “apropiado para responder a la situación de los Estados de reciente independencia”.

5. La delegación de Egipto comprende las consideraciones que han llevado a la CDI a tratar ciertos acuerdos, a saber, los acuerdos de fronteras y algunas otras situaciones de carácter territorial, como limitaciones al principio de la “tabla rasa”. Comprende que la CDI haya adoptado el parecer de que tales acuerdos no forman una clase separada por sí mismos, sino más bien que las situaciones que surgen de esos acuerdos requieren estabilidad y continuidad. A ese respecto, la CDI ha conciliado felizmente el principio de la “tabla rasa” con el principio de continuidad, y la delegación de Egipto coincide enteramente en ese enfoque.

6. La delegación de Egipto no comparte el temor de que el principio de la “tabla rasa” predomine sobre el de la continuidad. Los Estados de reciente independencia tienen conciencia política, como lo indica su entusiasta labor en las Naciones Unidas con respecto a la codificación, y no debe suponerse que van a aplicar el principio de la “tabla rasa” desde un punto de vista territorial estrecho. Esos Estados entienden bien el principio y no sería razonable suponer que un Estado de reciente independencia que considere ventajoso un tratado determinado rehúse la sucesión a su respecto. Si ese Estado escoge libremente seguir vinculado por las obligaciones de un tratado celebrado por un Estado predecesor y así lo declara, no lo hará compelido por el derecho sino expresando su libre voluntad e independencia.

7. La delegación de Egipto coincide en el enfoque general adoptado por la CDI en la codificación de los principios de sucesión, y estima que esos principios pueden formar la base de un acuerdo que podría lograrse en una conferencia diplomática que se celebraría tan pronto como el calendario de conferencias lo permitiese.

8. El orador está de acuerdo con la opinión expresada en el párrafo 63 del informe de la CDI de que debe mantenerse, tanto en la estructura como en la redacción, la relación existente entre el proyecto de artículos y la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Por lo tanto, debe conservarse el artículo 7, mientras su texto sea compatible con el artículo 28 de la Convención de Viena. El proyecto de artículos puede ser independiente y al mismo tiempo compatible con la Convención.

9. En lo que toca al propuesto artículo 12 *bis* (*ibid.*, nota 57), la delegación de Egipto considera que el establecimiento de los tratados multilaterales de carácter universal carece de una adecuada base jurídica. La Convención de Viena no se ocupa de esos tratados como una clase distinta, y la CDI no ha podido formular una definición aceptable de ellos. La definición que figura en el párrafo 76 del informe

no es enteramente convincente, aun cuando podría ser verdad que algunos de esos tratados son de carácter humanitario. Distinguir una clase tal de tratados sin una definición adecuada pondría en serio peligro el principio de la “tabla rasa”. Los Estados de reciente independencia saben perfectamente que si esos tratados les son ventajosos, pueden tomar las medidas que correspondan. Así, no transcurrirá tiempo alguno entre la sucesión de un Estado y el anuncio por el Estado interesado de su sucesión en tales tratados, dado que en la práctica el Estado, tras su independencia, puede aceptar voluntariamente las obligaciones que derivan de los tratados. En ese caso, se mantendría el principio de la “tabla rasa”.

10. La delegación de Egipto está a favor de que se incluya en el proyecto de artículos una disposición sobre la solución de controversias que sea compatible con las disposiciones de la Convención de Viena y que, simultáneamente, no pase por alto la posibilidad de recurrir a la Corte Internacional de Justicia cuando los otros medios fracasen. La resolución 3232 (XXIX) de la Asamblea General destaca la ventaja de incluir en los tratados cláusulas que prevean el sometimiento a la Corte de las controversias que puedan surgir de su interpretación o aplicación, y debe estimularse esa tendencia. Un buen ejemplo es el que Marruecos, Mauritania y España hayan recurrido a la Corte para resolver su controversia relativa al Sáhara Español.

11. La delegación de Egipto considera que, en general, el proyecto de artículos sobre sucesión es aceptable. Las diferencias de parecer a su respecto no atañen a los principios básicos y podrían resolverse en una conferencia diplomática, sin devolver el proyecto a la CDI. El acuerdo que se alcance en la conferencia será de gran importancia en el futuro en relación con la unión y separación de los Estados.

12. El Sr. THEODORACOPOULOS (Grecia) dice que la delegación de Grecia ha estudiado con mucho interés el proyecto de artículos presentado por la CDI, que constituye una base satisfactoria para la codificación de las normas sobre la sucesión de Estados en materia de tratados.

13. Grecia, que ha logrado su independencia nacional en etapas sucesivas, ha tenido que ocuparse en distintas ocasiones de problemas planteados por la aplicación de tratados en relación con los territorios liberados. Por consiguiente, su Gobierno se halla bien calificado para darse cuenta de las dificultades con que ha tropezado la CDI en la preparación del proyecto de artículos, que merece la admiración de la Sexta Comisión.

14. El proyecto de artículos trata de lograr un equilibrio entre dos principios opuestos: el principio de la continuidad. El Gobierno griego ha aceptado el principio de la interrupción de las relaciones contractuales y el principio de la continuidad. El Gobierno griego ha aceptado el principio de la continuidad y lo ha aplicado en diversas ocasiones en sus relaciones bilaterales y multilaterales. A ese respecto, el orador hace notar que los acuerdos celebrados entre Grecia y el Reino Unido en 1910 y en 1926, relativos a la extradición y al tonelaje de buques mercantes, respectivamente, siguen en vigor y se aplican en las relaciones entre Grecia y algunas de las antiguas colonias del Reino Unido.

15. Es en cuanto a los regímenes territoriales donde el principio de la continuidad encuentra su mejor aplicación. A ese respecto, la CDI, correctamente, ha dado preferencia a la continuidad de las relaciones contractuales, lo que se ajusta a las normas consuetudinarias y a la práctica corriente.

16. En cambio, en el caso de los países de reciente independencia, la CDI se ha pronunciado a favor del principio de la “tabla rasa”, lo que se ajusta al derecho de los pueblos a la libre determinación. La delegación de Grecia considera, sin embargo, que la aparición de un Estado de reciente independencia no implica necesariamente la desaparición de toda relación contractual. Además, su delegación comparte la opinión de que es necesario, dado que la era del colonialismo está llegando a su fin, que el proyecto contenga disposiciones relativas a otros casos de aparición de nuevos Estados.

17. Su delegación teme que la aplicación del propuesto artículo 12 *bis* dé lugar a dificultades, puesto que el artículo no está redactado en términos suficientemente claros, y es difícil pensar en tratados multilaterales de carácter universal.

18. Su delegación está a favor de que se establezca un procedimiento para solucionar las controversias que surgen de la interpretación y aplicación del proyecto de artículos. Por lo tanto, considera que la CDI debe volver a examinar la propuesta ya formulada sobre la materia antes de que el proyecto se presente para su aprobación a la conferencia de plenipotenciarios, que, a juicio del orador, es el foro más apropiado para la formulación definitiva del proyecto de artículos.

19. Su delegación estima que el proyecto de artículos debe revestir la forma de una convención.

20. El Sr. RAKOTOSON (Madagascar) dice que de conformidad con la invitación contenida en el párrafo 2 de la sección II de la resolución 3315 (XXIX) de la Asamblea General, el gobierno de Madagascar pronto presentará comentarios y observaciones por escrito en torno al proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados, incluidos los propuestos artículos 12 *bis* y 32.

21. La delegación de Madagascar felicita a la CDI por la valiosa labor que ha realizado desde 1962 respecto de la codificación del derecho internacional relativo a la difícilísima cuestión de la sucesión de Estados. Una vez más la CDI ha demostrado la importancia de su papel en esa esfera, y ha contribuido a asegurar la primacía del derecho en las relaciones entre los Estados y, de esa forma, al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. No obstante, en el caso de la sucesión de Estados en materia de tratados, las consideraciones políticas influyen mucho en las consideraciones jurídicas y, por lo tanto, debe determinarse si el proyecto de artículos de la CDI sobre ese tema consigue el equilibrio necesario entre la estabilidad de las relaciones convencionales entre los Estados, por una parte, y los imperativos de la soberanía nacional y la igualdad de los Estados, por la otra, dos condiciones que no siempre son fáciles de conciliar.

22. La delegación de Madagascar considera que, en conjunto, el proyecto de artículos expresa el deseo de la CDI de satisfacer esas dos condiciones. Al adoptar el principio de la “tabla rasa”, el proyecto de artículos trata de respetar el principio de la libre determinación y de la igualdad de los Estados, que se incorpora en el artículo 15. A juicio de su delegación, la expresión “principio de la ‘tabla rasa’” significa que el Estado sucesor tiene el derecho pero no la obligación de convertirse en parte en los tratados celebrados por el Estado predecesor.

23. Las disposiciones del artículo 22 pueden dar lugar a cierta preocupación, pues parecen dar efecto retroactivo a la notificación de sucesión. No obstante, la delegación de Madagascar considera que un país podría invocar, por una parte, el artículo 26, que prevé la posibilidad de la suspensión y la aplicación provisional de los tratados, por una parte, y la frase del artículo 22 “salvo . . . que se haya convenido otra cosa” por otra que permite evitar el efecto retroactivo.

24. El período de notificación de 12 meses previsto en el párrafo 3 del artículo 28 parece demasiado corto para un Estado de reciente independencia, que frecuentemente tiene dificultades de todo tipo después de haber alcanzado la independencia. Aunque el párrafo dice también “salvo . . . que se haya convenido otra cosa”, su delegación cree que sería preferible, para evitar dificultades, que el texto estableciera explícitamente un período de notificación más largo.

25. La delegación de Madagascar comparte la preocupación de algunos representantes con respecto a las cuestiones de los regímenes de fronteras y otros regímenes territoriales tratadas en los artículos 11 y 12 respectivamente. A su juicio, esos dos artículos excluyen los tratados de esas categorías de la aplicación del principio de la “tabla rasa”. La delegación de su país tiene conciencia de que, al redactar esos artículos, la CDI ha estado animada por el deseo de salvaguardar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. La misma preocupación indudablemente inspiró la resolución adoptada por la Organización de la Unidad Africana en su conferencia de El Cairo de 1969, y las decisiones pertinentes de la Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los Países no Alineados celebrada el mismo año en esa ciudad. No obstante, hay tratados de esas categorías en los que el principio de la continuidad no puede armonizarse con el de la soberanía, en particular en el caso de tratados “desiguales” que establecen regímenes territoriales. Tales tratados están en contradicción con las normas imperativas de derecho internacional en el sentido de los artículos 53, 64 y 79 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.

26. Se ha planteado la cuestión de si el proyecto de artículos debería contener una disposición especial relativa a los tratados multilaterales de carácter universal. Aunque teóricamente es posible identificar ciertos aspectos de los tratados multilaterales de carácter universal para distinguirlos de los tratados de carácter restringido, no siempre es fácil llegar a una distinción práctica. Los tratados multilaterales que aparentemente tienen carácter restringido pueden estar abiertos a la participación de todos los Estados y, por consiguiente, en virtud del propuesto artículo 12 *bis*, estarían sujetos al principio de la continuidad. El hecho de

que el párrafo 1 de ese artículo disponga que un tratado multilateral de carácter universal permanecerá en vigor entre el Estado de reciente independencia y los demás Estados partes en el tratado hasta que el Estado de reciente independencia notifique la terminación de dicho tratado significa que dicho artículo va contra el principio de la "tabla rasa". Además, los depositarios de tratados no han podido hacer una distinción entre las dos categorías de tratados. Nunca han considerado que un Estado de reciente independencia esté obligado por una convención, a menos de que ese Estado haya expresado su intención de seguir siendo o de pasar a ser parte en la misma.

27. Con respecto a las convenciones multilaterales generales celebradas por la Potencia administradora antes de su independencia, Madagascar en varias ocasiones ha optado a favor de la continuidad, sujeta a confirmación, de la "teoría de la reflexión", del sistema de aceptación como nuevo Estado, o de una declaración de continuidad pura y simple sujeta a denuncia. La posición de su país es esencialmente pragmática. Puede decirse que Madagascar ha aceptado convenciones multilaterales, incluso aquellas que puede considerarse que tienen carácter universal, sólo con ciertas condiciones. Su delegación considera que sería inadecuado incluir el propuesto artículo 12 *bis* en el proyecto de artículos.

28. Con respecto a la cuestión del procedimiento y la forma para completar los trabajos sobre el proyecto de artículos, la delegación de Madagascar estima que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y el presente proyecto de artículos no tienen el mismo alcance, y que el derecho relativo a la sucesión de Estados tiene consecuencias mucho más complejas que las del derecho codificado en la Convención de Viena. Además, la cuestión de la sucesión de Estados en materia de tratados, en particular los tratados que entrañan obligaciones financieras, está íntimamente relacionadas con la cuestión de la sucesión en lo que respecta a materias distintas de los tratados. Principios comunes pueden regir ambos casos de sucesión, y cabe preguntarse si no deberían ser objeto de un proyecto único. El Gobierno de Madagascar no podrá adoptar una opinión definitiva sobre el tema hasta que la CDI haya terminado sus trabajos acerca del proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados. A su juicio, la CDI debería examinar con carácter prioritario tanto esa cuestión como la cuestión de la responsabilidad de los Estados.

29. El Sr. JACHEK (Checoslovaquia) dice que su Gobierno aprecia la considerable labor realizada por la CDI sobre la sucesión de Estados en materia de tratados, particularmente dado que la cuestión entrañaba también la solución de cuestiones íntimamente relacionadas con los movimientos victoriosos de liberación y con la lucha contra el colonialismo.

30. La delegación de Checoslovaquia celebra que el proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados incorpore principios correctos y progresivos de derecho internacional y que, por consiguiente, pueda considerarse una base sólida para la codificación de ese importante tema.

31. Dado que su Gobierno presentó por escrito en octubre de 1973 observaciones acerca del proyecto de artículos

sobre la sucesión de Estados en materia de tratados (*ibid.*, anexo I) y que explicó sus opiniones con detalle en el anterior período de sesiones (1488a. sesión), en el momento actual desea hacer comentarios solamente sobre algunos problemas, que considera particularmente oportunos.

32. La delegación de Checoslovaquia ha observado con satisfacción que el principio de la "tabla rasa" es uno de los principios fundamentales en que se basa el proyecto. Considera correcto ese enfoque, pero desea señalar el hecho de que el principio no está plenamente formulado en el proyecto, particularmente en lo que respecta a la cuestión de la sucesión respecto de Estados divididos. Considera que el principio de la "tabla rasa" debería aplicarse también cuando un Estado surge como consecuencia del desmembramiento del Estado predecesor. La posición del Gobierno de Checoslovaquia a ese respecto se basa en su propia experiencia, ya que nació en 1918 como consecuencia del desmembramiento del imperio austrohúngaro. Considera que en tales casos no hay razón para la continuidad de los tratados. No obstante, eso no significa que no admita excepciones al principio de la "tabla rasa". Al contrario, considera que sería adecuado estudiar la posibilidad de que un Estado sucesor utilizara ese principio como pretexto para no cumplir las normas generalmente aceptadas de derecho internacional contenidas en ciertos tratados multilaterales de carácter universal celebrados por el Estado predecesor y relacionados, por ejemplo, con la defensa de los derechos humanos fundamentales.

33. La delegación de Checoslovaquia considera un defecto el hecho de que el proyecto de artículos propuesto no reconozca las situaciones en que nuevos Estados se han formado como consecuencia de una revolución social. El concepto del Estado de reciente independencia formulado en el inciso f) del párrafo 1 del artículo 2 no comprende todos los casos de formación de nuevos Estados, y la cuestión requiere más estudio.

34. Aunque el artículo 7 contiene la expresión "salvo que se haya convenido en otra cosa", la delegación de Checoslovaquia considera que merece más estudio la disposición de que los artículos se aplicarán solamente a la sucesión de Estados producida después de la entrada en vigor del proyecto, particularmente en relación con la gradual desaparición del sistema colonial.

35. La cuestión de la fecha de sucesión también debe resolverse, ya que no hacerlo podría tener graves consecuencias jurídicas. Cabe preguntarse si es posible determinar el momento de la sucesión desde un punto de vista objetivo. El inciso e) del párrafo 1 del artículo 2 no da una respuesta suficientemente clara a esa cuestión. La sucesión de Estados significa la sustitución de un Estado por otro en lo relativo a la responsabilidad por las relaciones internacionales del territorio. Si la cuestión dependiera exclusivamente de un acto subjetivo del nuevo Estado, podrían surgir problemas en lo relativo a la determinación de su responsabilidad internacional. Podría haber problemas también si el nuevo Estado no hiciese una notificación en la que fijase la fecha de sucesión. Por consiguiente, la delegación de Checoslovaquia considera que convendría basar la determinación de la fecha de sucesión en hechos objetivos. Esa cuestión también merece más estudio.

36. El hecho de que solamente unos pocos Estados hayan presentado observaciones sustanciales respecto de varios artículos da motivos para pensar que la celebración de una conferencia diplomática para examinar y adoptar la convención podría no tener éxito. Por consiguiente, la CDI debería reexaminar algunos de los artículos, en particular los propuestos artículos 12 *bis* y 32, a la luz del presente debate y de las observaciones de los gobiernos.

37. El Sr. GÜNEY (Turquía) dice que la CDI ha tenido éxito en la difícil tarea de preparar el proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados. El proyecto de artículos es importante, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista político y podría constituir una base adecuada para determinar los principios y normas en esa esfera. La delegación de Turquía desea expresar su agradecimiento por los considerables esfuerzos realizados por el Relator Especial para preparar el proyecto de artículos.

38. El Gobierno de Turquía aún no ha presentado observaciones y comentarios por escrito sobre el proyecto de artículos debido a que prefiere esperar hasta que el proyecto tenga forma definitiva, a fin de poderlo considerar en su totalidad. Está de acuerdo en la opinión expresada por varias delegaciones de que la Asamblea General debería renovar su invitación a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho para que presenten sus observaciones y comentarios sobre el proyecto de artículos.

39. La delegación de Turquía no está convencida de que el derecho relativo a la sucesión de Estados en materia de tratados deba codificarse en forma de convención. Dado que una sucesión de Estados lleva consigo necesariamente el establecimiento de un nuevo Estado, una convención sobre el derecho de la sucesión de Estados en materia de tratados sería aplicable con respecto al Estado sucesor solamente si pasara a ser parte en la convención y desde la fecha en que pasara a ser parte en la misma. En ese caso, la convención no sería obligatoria para el Estado respecto de un acto anterior a la fecha en que se hubiera pasado a ser parte en la convención. Además, otros Estados no estarían obligados por la convención respecto del nuevo Estado hasta que pasara a ser parte en ella. La participación del Estado sucesor plantearía también problemas relativos al modo de expresión y al efecto retroactivo del consentimiento para quedar obligado por la convención. Si en los artículos finales se dispone de manera adecuada que la participación de un Estado sucesor se produce en la fecha de sucesión, la forma de convención tendrá cierto valor. Aunque sobre la base del contenido actual de los artículos, su delegación está a favor de una declaración de principios más que de una convención, está dispuesta a guiarse por el deseo de la mayoría.

40. El proyecto de artículos debería remitirse de nuevo a la CDI para que pudiera examinar los textos de los propuestos artículos 12 *bis* y 32. Ese procedimiento sería particularmente útil si el proyecto de artículos hubiera de recibir la forma definitiva de una convención. La experiencia ha enseñado que, al ser puestas en práctica, las convenciones de codificación basadas en proyectos elaborados por la CDI tienen gran valor como instrumentos que consolidan la opinión jurídica.

41. En lo que respecta a la fase final de la codificación, su delegación, por razones de eficiencia, preferiría una conferencia de plenipotenciarios. La fecha de esa conferencia podría fijarse de conformidad con el calendario de conferencias, tomando en cuenta las opiniones expresadas por los países del tercer mundo sobre la cuestión.

42. El Sr. WISNOEMOERTI (Indonesia) da la bienvenida a las delegaciones de Cabo Verde, Mozambique y Santo Tomé y Príncipe.

43. La preparación por la CDI del proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados constituye una contribución importante para el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional. La delegación de Indonesia agradece especialmente a la CDI que haya adoptado el principio de la “tabla rasa” como principio básico del régimen jurídico relativo a los Estados de reciente independencia, pues está en conformidad con el principio de libre determinación reconocido por la Carta de las Naciones Unidas. Como Estado soberano, un Estado de reciente independencia no está obligado *ipso jure* a continuar aplicando los tratados celebrados por el Estado predecesor y previamente aplicables a su territorio. Al mismo tiempo, es digno de mención que la CDI haya equilibrado felizmente el principio de la “tabla rasa” con el principio de la continuidad *ipso jure* en la parte IV del proyecto. En la sucesión resultante, bien de la fusión de dos o más Estados o de la separación de una parte o de partes de un Estado para formar uno o más Estados independientes, el Estado sucesor es un Estado independiente que ya tiene personalidad internacional, o parte de un Estado que ya ha disfrutado de un alto grado de independencia en la fecha de la sucesión. En tales casos, el elemento del consentimiento del Estado sucesor existe con anterioridad a la fecha de la sucesión. El principio de continuidad *ipso jure*, dimanante del principio *pacta sunt servanda*, debe en efecto, primar sobre la doctrina de la “tabla rasa”, a fin de que pueda mantenerse la certidumbre jurídica y la continuidad en las relaciones convencionales. Además, con el proceso de descolonización tocando a su fin, los Estados se van a encontrar más a menudo ante casos de sucesión previstos en la parte IV del proyecto de artículos, donde se recoge el principio de continuidad *ipso jure*.

44. Con respecto al propuesto artículo 12 *bis*, dice que en él no se tienen suficientemente en cuenta los intereses de los Estados de reciente independencia, ya que priva a tales Estados del derecho a determinar si los tratados celebrados por el Estado predecesor son conformes a sus intereses nacionales. Algunas de las convenciones catalogadas como tratados de carácter universal en la nota explicativa relativa al artículo 12 *bis* en realidad tienen una participación limitada, aunque su objeto y propósito sean de ámbito mundial y, de ese modo, estén abiertos a la participación de todos los Estados. Generalmente los Estados tienen razones legítimas para abstenerse de ser partes en tales convenciones. Por lo tanto, no es razonable esperar que un Estado sucesor asistido por una razón legítima tal quede vinculado por el artículo 12 *bis*. Eso es simplemente un ejemplo de las dificultades que puede suscitar una disposición de esa naturaleza. Por consiguiente, la delegación de Indonesia considera innecesario el artículo 12 *bis* propuesto.

45. Por lo que hace al propuesto artículo 32 (véase A/9610/Rev.1, nota 58), dice que un rasgo importante del

procedimiento de conciliación establecido en dicho artículo es su carácter no vinculante que, en muchos casos, se considera más eficaz — y por lo tanto más atractivo — que un procedimiento obligatorio. El artículo propuesto, juntamente con su anexo, es una propuesta razonable digna de seria consideración. Sin embargo, aunque el arreglo de controversias es esencialmente una cuestión jurídica, no deja de tener consecuencias políticas. La cuestión del acierto de incluir una disposición de esa índole en el proyecto de artículos y, en caso afirmativo, cuál sería el procedimiento adecuado, debe resolverse pues, en una conferencia de plenipotenciarios.

46. El proyecto de artículos preparado por la CDI proporciona una base aceptable para la etapa final de codificación. Por consiguiente, la delegación de Indonesia apoya la propuesta de la CDI de convocar una conferencia internacional de plenipotenciarios para estudiar el proyecto de artículos y celebrar una convención sobre el tema. No está de acuerdo en que el proyecto de artículos en su conjunto o las dos propuestas mencionadas en el párrafo 75 del informe sean enviadas de nuevo a la CDI. Una medida tal le impondrá simplemente una carga adicional y atrasará su examen de temas prioritarios, especialmente si tiene que ocuparse de temas tan polémicos como los suscitados por las dos propuestas de que se trata. Sin embargo, la convocación de dicha conferencia debe tener en cuenta el calendario de conferencias de las Naciones Unidas en los próximos años a fin de asegurar una representación adecuada de los Estados que cuentan con pocos juristas, especialmente los países en desarrollo. Dentro de ese contexto, la delegación de Indonesia está dispuesta a apoyar la propuesta de que los trabajos sobre el proyecto de artículos sean completados por la Sexta Comisión sólo si se tienen amplias garantías de que ello no va a atrasarle indebidamente los trabajos. Con respecto a las fechas, acepta gran flexibilidad.

47. El Sr. BOOH BOOH (República Unida del Camerún) da la bienvenida a las delegaciones de Mozambique, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe.

48. El proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados preparado por la CDI tiene una importancia innegable. La delegación camerunesa ha tomado nota con interés del modo en que los miembros de la CDI han conseguido reconciliar intereses aparentemente conflictivos mediante una evaluación objetiva de la práctica de los Estados, la práctica judicial y los trabajos de los juristas. Las observaciones escritas presentadas por los gobiernos y las declaraciones hechas en la Sexta Comisión han identificado muchos sectores de acuerdo en el proyecto de artículos. La delegación de la República Unida del Camerún está dispuesta a apoyar cualquier medida constructiva destinada a fomentar el examen del proyecto, que constituye indudablemente un suplemento útil a los trabajos de codificación ya realizados en la esfera del derecho de los tratados. Incluso cuando el proceso de descolonización haya sido completado y el concepto de Estado de reciente independencia haya desaparecido de la terminología jurídica, la futura convención sobre la sucesión de Estados en materia de tratados continuará aportando respuestas pertinentes a problemas relativos a la unificación y separación de Estados. Su Gobierno presentará comentarios escritos detallados sobre el proyecto en el momento oportuno.

49. Con respecto al artículo 15, dice que su delegación aprueba el principio de la “tabla rasa” adoptado por la CDI como hipótesis de trabajo. El logro de la independencia no implica en modo alguno la aceptación obligatoria de los compromisos asumidos por una administración colonial. Ese principio lo aplicó su país porque responde más estrechamente a las exigencias de su soberanía, a su libertad de determinar sus propias relaciones convencionales y su determinación de aceptar los compromisos asumidos por el Estado predecesor sólo en condiciones estrictas. En la práctica, el principio de la “tabla rasa” ha sido generalmente aplicado por los países de reciente independencia con un sentido de responsabilidad y una consideración para los intereses de la comunidad internacional que hacen superfluas más salvaguardias.

50. En su comentario al artículo 15, la CDI señala acertadamente que la práctica de los Estados y los depositarios confirma que el principio de la “tabla rasa” se aplica a los tratados multilaterales generales y a los tratados multilaterales de carácter normativo. Por consiguiente, aunque conviene en que los Estados de reciente independencia tienen derecho a opción por ser partes en ciertas categorías de tratados multilaterales en virtud de su carácter de Estado sucesor, como se prevé en el artículo 16, a su delegación le resulta sumamente difícil aceptar el propuesto artículo 12 *bis* en su forma actual. La cuestión suscitada por ese artículo dio lugar a considerable controversia en la Conferencia de Viena sobre el derecho de los tratados y postula principios incompatibles con la protección de los intereses de los países de reciente independencia. Tal como ya ha señalado una delegación en el documento A/10198, la aprobación del artículo 12 *bis* impondría una multitud de obligaciones a los Estados de reciente independencia, incluso obligaciones financieras, cuyo ámbito no puede evaluarse con exactitud en el momento de la sucesión.

51. Las disposiciones del artículo 11, relativas a los regímenes de frontera, se ajustan estrechamente al principio de la inviolabilidad de las fronteras que los Estados africanos han incorporado a la Carta de la Organización de la Unidad Africana y que ha sido adoptado por los dirigentes políticos de la República Unida del Camerún. Aunque la administración colonial fue perjudicial para los intereses de su país por lo que hace a las fronteras, el Gobierno se adhirió al principio de la inviolabilidad de las fronteras porque parecía preferible respetar los intereses de la paz, de la comprensión y de la estabilidad en África.

52. El concepto de otros regímenes territoriales utilizado en el artículo 12 puede dar lugar a malentendidos e imponer cargas excesivas. En la medida en que esa noción se refiere a obligaciones internacionales como el arrendamiento y las bases militares extranjeras, parece justificado condicionar el disfrute de tales derechos, después de la independencia, a un nuevo arreglo entre el Estado sucesor y las demás partes interesadas. Además, los comentarios de la CDI indican que el concepto de obligación internacional ha sido aceptado con frecuencia en circunstancias excepcionales, bien para permitir un arreglo internacional en interés general de la comunidad internacional o de una región, o en virtud de una costumbre local firmemente establecida. A falta de tales circunstancias, se precisa un nuevo arreglo contractual a fin de tener en cuenta los intereses del nuevo Estado soberano. Por consiguiente, sería aconsejable suprimir el artículo 12.

53. Debido a la complejidad de sus disposiciones y los intereses que trata de reconciliar, la convención futura sobre la sucesión de Estados en materia de tratados dará lugar indudablemente a interpretaciones diferentes. Por consiguiente, su delegación apoya la idea de incluir una disposición sobre el arreglo de controversias y cree que el propuesto artículo 32 es digno de consideración. Las dificultades que pueden surgir en la aplicación de la convención pueden solucionarse razonablemente mediante la conciliación. Cualquier otro sistema de arreglo pacífico puede crear serias dificultades para su delegación por las razones que ya expuso en la Sexta Comisión durante el 29º período de sesiones (1492a. sesión), en los debates sobre el tema relativo al examen de las funciones de la Corte Internacional de Justicia.

54. Con respecto al procedimiento que ha de seguirse y la forma que ha de adoptarse para concluir los trabajos sobre el proyecto de artículos, señala que aproximadamente sólo una docena de países han podido presentar observaciones por escrito al Secretario General de conformidad con la resolución 3315 (XXIX) de la Asamblea General. Todos ellos, a excepción de uno, son países desarrollados. La delegación de la República Unida del Camerún opina que la respuesta limitada se debe no a una falta de interés en el proyecto de artículos, sino a las desmedidas exigencias de que son objeto los recursos humanos y técnicos, especialmente los de los países en desarrollo, como resultado del gran número de conferencias jurídicas celebradas durante el año. Por consiguiente, la Sexta Comisión procedería acertadamente aplazando su decisión sobre el procedimiento que haya de seguirse y dirigiendo un nuevo llamamiento a los Estados para que comuniquen sus opiniones sobre el proyecto de artículos a fin de que pueda adoptarse una decisión aceptable para todos en el 31º período de sesiones.

55. Como el programa de trabajo futuro de la CDI está sobrecargado, no sería adecuado enviarle de nuevo el proyecto de artículos para una tercera lectura sin conocer primero las opiniones de una gran proporción de Estados Miembros acerca de los trabajos que ya han sido realizados y sin estar seguros de que no puede seguirse otro procedimiento para reconciliar las opiniones de los Estados sobre los pocos artículos que todavía dan lugar a diferencias justificadas.

56. El Sr. ALIHONOU (Congo) da la bienvenida a las delegaciones de Cabo Verde, Mozambique, Papua Nueva Guinea y Santo Tomé y Príncipe.

57. El derecho internacional debe reflejar los cambios fundamentales producidos por la descolonización, a fin de que pueda tener la aceptación de la mayoría de los Estados, especialmente los nuevos Estados que han entrado en las relaciones convencionales internacionales tras recuperar su libertad. La cuestión de la sucesión de Estados en materia de tratados debe, por consiguiente, estudiarse seriamente a la luz de la experiencia adquirida por los nuevos Estados desde la obtención de su independencia.

58. Nadie negará el principio de que un Estado tiene derecho a determinar libremente y en buena conciencia las obligaciones que lo vinculan, ya que muchos Estados han tenido que firmar tratados bajo toda clase de presiones.

59. El proyecto de artículos que se examina, que es el resultado de un elogiado trabajo de la CDI, constituye una base útil para preparar un texto definitivo. Sin embargo, la delegación del Congo lamenta que el artículo 2 se refiera solamente a los Estados de reciente independencia y no haga mención de los Estados en que han tenido lugar cambios profundos, especialmente mediante la sustitución de un orden social antiguo por otro nuevo. La Sexta Comisión será objeto de críticas si perturba la estabilidad internacional, pero será mucho más criticada si impone a los Estados obligaciones que contradigan francamente el concepto de sociedad que tengan. La importancia que se da a los Estados de reciente independencia en el proyecto de artículos mueve a la delegación del Congo a preguntarse cuántos territorios serán todavía dependientes cuando el texto definitivo entre en vigor.

60. De momento, la delegación del Congo sólo puede recomendar que la CDI examine el proyecto a la vista de las observaciones presentadas por los gobiernos y las opiniones expresadas durante los debates de la Sexta Comisión, teniendo en cuenta que está tratando una esfera jurídica poco desarrollada y que los acontecimientos mundiales crean nuevos problemas y conceptos jurídicos que no cabe pasar por alto.

61. La delegación del Congo se inclina por el examen de una convención en una conferencia diplomática especial. Su Gobierno presentará más observaciones en una etapa posterior.

62. El Sr. BRUNA (Chile) dice que resulta evidente de las disposiciones de la resolución 3315 (XXIX) de la Asamblea General que el tema que se examina se ha incluido en el programa con el objeto de que los Estados puedan manifestar sus opiniones al Secretario General y tomar una decisión, si las circunstancias lo aconsejan, sobre el proyecto de artículos.

63. Según consta en el documento A/10198 y Add.1 a 4, sólo 14 Estados Miembros, es decir, un 10% del número total de Miembros, han presentado observaciones. La delegación de Chile cree que incluso si se les diera más tiempo a los Estados Miembros, no aumentaría mucho el número de respuestas. El proyecto de artículos, aprobado en su segunda lectura por la CDI, satisfizo a un gran porcentaje de Estados Miembros, por lo que muchos juzgaron innecesario formular observaciones.

64. La delegación de Chile expuso su opinión acerca del fondo del proyecto de artículos en la Sexta Comisión durante el 29º período de sesiones (1491a. sesión), y analizó el informe completo presentado por la CDI. El debate giró en torno a unos pocos artículos tales como los artículos 7, 11, 12 y 22 y, en especial, se concentró en aquellos temas que la CDI no alcanzó a tratar, es decir, las propuestas sobre tratados multilaterales de carácter universal y sobre solución de controversias. La delegación chilena comparte la inquietud que se ha expresado en relación con dichos temas, pero no cree que sea necesaria una tercera lectura por la CDI. Si la Sexta Comisión desea que la CDI presente un proyecto acabado y perfecto, que satisfaga a todos los Estados, se necesitaría no sólo una tercera lectura sino tal vez muchas más. La delegación de Chile cree que la misión de la CDI en ese proyecto de artículos está cumplida.

y que la Sexta Comisión no puede pedirle una nueva versión sin entorpecer su labor en otros proyectos que son importantes.

65. Chile coincide con la CDI y con muchos Estados en que el proyecto de artículos actual debe adoptar la forma de una convención aprobada en una conferencia diplomática. En la conferencia pueden formularse observaciones de fondo sobre los artículos. Su delegación no se pronuncia sobre la oportunidad de esa conferencia, que habrá de

determinarse de acuerdo con el calendario de conferencias jurídicas. Sin embargo, cree que la conferencia debería celebrarse en 1976 o a comienzos de 1977 y, hasta entonces, los Estados que no lo hubieran hecho aún podrían presentar sus observaciones al Secretario General, a fin de que pudieran tenerse en cuenta en la preparación de la conferencia.

Se levanta la sesión a las 17 horas.

1538a. sesión

Martes 14 de octubre de 1975, a las 15.10 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1538

TEMA 108 DEL PROGRAMA

Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 27º período de sesiones (*continuación*) (A/10010)

TEMA 109 DEL PROGRAMA

Sucesión de Estados en materia de tratados: informe del Secretario General (*continuación*) (A/10198 y Add.1 a 4, A/9610/Rev.1*)

1. El Sr. DIAZ GONZALEZ (Venezuela) da las gracias al Presidente y a los miembros de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) por el informe sobre la labor realizada en su 27º período de sesiones (A/10010), que representa el fruto de una paciente y sabia labor. Dada la importancia de los trabajos de la CDI, su delegación apoya la recomendación de la CDI de que sus períodos de sesiones sean de 13 semanas de duración.

2. El proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados (véase A/9610/Rev.1, cap. II, secc. D), que la CDI preparó con tanto celo a lo largo de un período de siete años, constituye una base adecuada para la redacción de un instrumento internacional. Al preparar los artículos, la CDI se atuvo al procedimiento establecido en el artículo 16 de su estatuto, y se dio a los Estados Miembros la oportunidad de presentar sus observaciones y comentarios sobre el proyecto. La CDI aprobó el proyecto en su forma definitiva con una abstención y lo presentó a la Asamblea General de conformidad con la resolución 3071 (XXVIII). En consecuencia, su delegación comparte la opinión mantenida por el representante del Brasil (1526a. sesión) de que el proyecto es un proyecto definitivo, y que sería un error remitirlo de nuevo a la CDI para mayor estudio. Tras nuevos debates, una conferencia de plenipotenciarios debería transformar el proyecto en una convención. Como muchos oradores anteriores han señalado, la cuestión de los tratados multilaterales de carácter universal es una cuestión de principio. Evidentemente, ningún miem-

bro de la comunidad internacional puede ser obligado, sin una manifestación expresa de su voluntad, a ser parte automáticamente en un tratado. La cuestión de la solución de controversias podría resolverse en la conferencia de plenipotenciarios.

3. Convendría hacer un llamamiento a todos los Estados Miembros que aún no han presentado observaciones sobre el proyecto, de conformidad con la petición del Secretario General, para que procedan a hacerlo. Esas observaciones serían un elemento esencial para orientar los debates de la conferencia plenipotenciaria.

4. Al orador le complace observar que aunque el desarrollo progresivo del derecho internacional se ha reflejado en muchas de las disposiciones del proyecto, al mismo tiempo se han respetado las normas obligatorias del derecho internacional consuetudinario. Ello es evidentemente cierto con respecto a los artículos 10 y 11. Su delegación apoya plenamente las disposiciones establecidas en el proyecto de artículos tal como ha sido redactado por la CDI.

5. El Sr. SETTE CAMARA (Brasil) dice que el 27º período de sesiones de la CDI ha sido uno de los más fructíferos y productivos, gracias a la continua aplicación por la CDI de los métodos tradicionales que han demostrado su valor en el pasado. El orador da las gracias al Presidente de la CDI por su lúcida presentación del informe sobre la labor realizada en ese período de sesiones, y dice que desea comentar los textos presentados en ese informe, quedando entendido que el tiempo no permite un examen a fondo de los distintos artículos propuestos.

6. Refiriéndose al tema de la responsabilidad de los Estados, abordado en el capítulo II, felicita al Relator Especial por su competente y precisa redacción y por los doctos comentarios. El Relator Especial ha suprimido los estrechos límites dentro de los cuales se debatió en el pasado el problema de la responsabilidad de los Estados, y ha conseguido eliminar toda la confusión anterior entre el problema de la responsabilidad de los Estados y las cuestiones relativas a las reglas sobre la reparación de los daños causados a extranjeros. Los detallados y exhaustivos

* Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno período de sesiones, Suplemento No. 10.

comentarios del cuarto informe del Relator Especial (A/CN.4/264 y Add.1)¹ no han sido controvertidos en la CDI. Sería ciertamente inadmisible poner en duda la norma según la cual los Estados responden de los actos de sus órganos, o de los entes facultados para ejercer atribuciones de la autoridad gubernamental, cuando actúan a título oficial, que rebasen su competencia según el derecho interno o contravengan las normas de ese derecho que regulan su actividad. Los miembros de la CDI han estado de acuerdo con el Relator Especial en que las anticuadas concepciones del siglo XIX que eximían al Estado de responsabilidad internacional por los actos realizados por sus órganos rebasando las atribuciones conferidas han sido totalmente abandonadas. La razón en que se basa la doctrina de la responsabilidad por tales actos es que la seguridad de la vida internacional requiere algo más sólido que las normas de competencia establecidas por el derecho interno, que podrían ser cambiadas por el propio Estado, según su parecer y conveniencia, siguiendo simplemente sus propios procedimientos constitucionales. De lo contrario sería difícil llegar a un acuerdo sobre una norma que estableciera satisfactoriamente el principio amplio de la responsabilidad de los Estados por los actos ilícitos cometidos por sus órganos.

7. A juicio de su delegación, la CDI ha hecho bien en suprimir el párrafo 2 del artículo 10 propuesto por el Relator Especial en su cuarto informe (*ibid.*, párr. 60) en el que se incorporaba la doctrina de que debe admitirse una excepción en los casos en que el carácter *ultra vires* de los actos sea demasiado evidente para ser ignorado por las partes interesadas. La CDI ha considerado que esa disposición es innecesaria y que solamente serviría para debilitar el principio general incorporado en la norma. En efecto, los actos que estuvieran fuera de la competencia de tales órganos constituirían evidentemente simples actos de individuos y como tales caerían dentro de un proyecto de artículo diferente, y en particular bajo el artículo 11 del proyecto de artículos.

8. El principio incorporado en el artículo 11, tal como ha sido propuesto por el Relator Especial, ha demostrado ser correcto y estar en consonancia con las ideas en que se basa el proyecto. El texto aprobado por la CDI ha seguido la redacción sugerida por el Relator Especial, con pequeños cambios de redacción para ajustarlo a las formulaciones anteriormente adoptadas y para ampliar el alcance del concepto de actos ilícitos cometidos por Estados, con objeto de incluir tanto la acción como la omisión. Es indudable que el Estado no puede ser considerado responsable por los actos de individuos que actúan a título privado. No obstante, con frecuencia sucede que los actos de individuos causan una situación jurídica que puede entrañar la responsabilidad del Estado correspondiente. Sin embargo, debería trazarse siempre una distinción entre los actos de individuos y el eventual incumplimiento de una obligación internacional por un Estado o sus órganos. Ese último, y no los primeros, es fuente de responsabilidad internacional. La doctrina según la cual cuando un Estado, por acción u omisión, apoya o tolera los actos de individuos, se convierte, por consiguiente, en "cómplice" al cometer tales actos, actualmente goza de un apoyo muy limitado. Ciertamente, sería difícil admitir que un indi-

viduo, por sus actos, pueda violar una obligación internacional, ya que los individuos no son sujetos de derecho internacional. Los actos de los individuos podrían tener alguna importancia solamente si sirvieran de catalizador de la conducta ilícita de los órganos del Estado, y en ningún caso podrían considerarse como fuente de responsabilidad internacional.

9. Los tribunales casi unánimemente sólo atribuyen responsabilidad al Estado por la acción u omisión de sus órganos, cuando hayan dejado de prevenir actos ilícitos realizados por individuos o de castigar a sus autores. En ese caso tal responsabilidad entrañaría denegación de justicia, la omisión de proporcionar seguridad y protección, y la falta de eficacia en la inmediata persecución y castigo de los autores de los actos de que se trate. Los dos párrafos del artículo 11 reflejan la dicotomía entre las dos relaciones jurídicas del caso, una que afecta a los individuos y que pertenece al orden jurídico interno, y otra que afecta al Estado y que corresponde al orden jurídico internacional.

10. Con respecto al problema de las personas especialmente protegidas, debe tenerse presente que la Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, aprobada por la Asamblea General en 1973 por su resolución 3166 (XXVIII), estableció nuevas obligaciones internacionales que podrían ser una fuente de responsabilidad para los Estados. Las opciones de enjuiciar o conceder la extradición, por ejemplo, podrían hacer a un Estado responsable por la negativa a conceder la extradición. Por otra parte, la importancia del principio en que se basa el artículo 11 se refleja en el secuestro de aeronaves en vuelo, que sin lugar a dudas es el resultado de actos individuales, realizados a título privado; ni el Estado del que son nacionales ni el Estado de cuyo territorio despegó la aeronave han sido considerados en ningún momento responsables de tales actos. La responsabilidad surgiría solamente si el Estado en que se produjo el secuestro no hubiera ejercido la debida vigilancia o si el Estado en que la aeronave aterrizó finalmente y en el que desembarcaron los culpables no los enjuiciara y castigase. Por todas las razones expuestas, su delegación apoya el texto del artículo 11, tal como ha sido aprobado por la CDI.

11. La CDI ha decidido acertadamente dividir el artículo 12 propuesto por el Relator Especial en su cuarto informe (*ibid.*, párr. 192), en tres disposiciones diferentes: los artículos 12, 13 y 14, cada uno de los cuales se refiere a una situación diferente. Debería trazarse una distinción entre las situaciones tratadas por el artículo 12 y las tratadas en el artículo 9, que se refiere a los órganos puestos a disposición del Estado por otro Estado o por una organización internacional. El texto del artículo 12 debería contener una referencia a las "entidades facultadas para ejercer atribuciones de la autoridad gubernamental" con objeto de complementar el concepto de órganos del Estado. Es necesario examinar la posibilidad de que las actividades de tales entidades de un Estado moderno puedan producirse en el territorio de otro Estado, sin una acción u omisión de un "órgano del Estado" en sentido estricto. Además, ello pondría el texto en consonancia con el sentido del proyecto de artículos en conjunto. Por otra parte, la cláusula de excepción contenida en el párrafo 2 del artículo 12 es muy útil.

¹ Véase *Anuario de la Comisión de Derecho Internacional*, 1972, vol. II, pág. 75.

12. Con respecto al artículo 13, debe observarse que el Relator Especial no ha proporcionado ejemplos concretos en los que pueda basarse la regla general. Aunque los precedentes son escasos, nadie puede negar que las organizaciones internacionales son sujetos de derecho internacional y que como tales pueden ser consideradas responsables por un hecho internacionalmente ilícito.

13. En el párrafo 1 del artículo 4 se afirma el principio de que el Estado en cuyo territorio ocurra un movimiento insurreccional no será considerado responsable según el derecho internacional por los actos de los órganos de ese movimiento. La nueva redacción es mucho más precisa que la formulada en el párrafo 2 del antiguo artículo 10 (*ibid.*, párr. 60). El movimiento insurreccional *per se* constituye prueba suficiente de la incapacidad del Estado para controlar el territorio que está bajo su jurisdicción, especialmente si el movimiento ha adquirido dimensiones suficientes para que se le reconozca personalidad internacional. La responsabilidad del llamado Estado "territorial" por no ejercer vigilancia y conceder protección es, por consiguiente, de carácter excepcional. Esa posibilidad excepcional está prevista en la cláusula de reserva contenida en el párrafo 2. A ese respecto, las observaciones del Relator Especial contenidas en el párrafo 154 de su cuarto informe, en el sentido de que las más de las veces las actividades mencionadas caen completamente fuera del control del Estado, deberían ser tenidas en cuenta.

14. El párrafo 3 del artículo 14 trata de los movimientos insurreccionales que poseen personalidad internacional. La sustitución de la formulación del párrafo 2 del antiguo artículo 12 (*ibid.*, párr. 192), relativa a los movimientos que poseen personalidad internacional distinta, por el nuevo proyecto que habla de los casos en que podrían atribuirse los actos ilícitos a órganos de movimientos insurreccionales según el derecho internacional, es una acertada circunlocución semántica y evidentemente mejora el texto.

15. A su delegación no le plantea problemas el texto del artículo 14 en la forma propuesta, aunque tal vez fuera más seguro hablar simplemente de movimiento insurreccional en vez de referirse a sus "órganos".

16. El principio incorporado en el artículo 15 se basa atinadamente en la doctrina y en la práctica de los Estados, y su delegación apoya el texto propuesto por la CDI.

17. Pasando al tema de la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados, mencionado en el capítulo III del informe, el orador observa que la CDI ha aprobado el nuevo texto del artículo 9 que abandona la anticuada distinción entre el dominio público y el dominio privado del Estado, y suprime otros tipos de categorías que contenían vestigios de esa distinción. Su delegación está totalmente de acuerdo con la CDI en que la mejor solución es recurrir a una fórmula general, dejando la puerta abierta a los Estados para que decidan otra cosa siempre que lo consideren necesario. En consecuencia, el principio establecido en el artículo 9 se convierte en una norma residual. Su delegación apoya plenamente el texto del artículo tal como ha sido adoptado.

18. Tras un largo debate del texto del artículo 10 propuesto por el Relator Especial, la CDI decidió suprimir

la disposición. Debería apoyarse plenamente esa decisión, que ha sido acertada, dado el nuevo texto del artículo 9 y la definición de los bienes de Estado contenida en el artículo 5.

19. A su delegación no le plantea problemas especiales el contenido del artículo 11, pero comparte las dudas expresadas por algunos miembros de la CDI acerca de si el artículo es necesario en absoluto, a la luz de los textos de los artículos 5 y 9. El tema de las deudas de Estado es vasto y complejo, y podría inducir a error dedicarle solamente un artículo que tratase exclusivamente de la posición de los Estados acreedores. Además, la naturaleza de la sucesión desempeñaría un papel muy importante en las cuestiones relativas a la deuda; por ejemplo, la solución de cualquier problema dependería de si el Estado predecesor mantiene su personalidad o deja de existir. Además, hay muchos tipos de deuda que serían examinados separadamente. Por tanto, su delegación piensa que la CDI ha actuado con cautela y acierto al aplazar una decisión definitiva sobre el fondo del artículo 11.

20. Con respecto a los tres artículos adicionales — artículos X, Y y Z — propuestos por el Relator Especial², señala que el artículo X, tras un debate, fue insertado en el texto como inciso e) del artículo 3. Los artículos Y y Z fueron combinados en un texto único, en adelante denominado artículo X, que contiene expresiones entre corchetes, lo que prueba que no hubo acuerdo en la CDI sobre una formulación definitiva. A su delegación le complace que la CDI haya descartado la excepción propuesta por el Relator Especial para los casos en que la norma de respeto de los bienes de terceros Estados sea contraria al orden público del Estado, ya que el concepto de orden público puede variar de un Estado a otro y puede ser alterado incluso por el derecho interno del Estado, según le convenga. Dichas situaciones excepcionales pueden tratarse normalmente por separado, mediante acuerdos concretos entre los Estados interesados y no debe incluirse en una norma destinada a aplicación general. Su delegación considera útil incluir disposiciones sobre la propiedad de los terceros Estados y confía en que se alcanzará un acuerdo sobre el texto del artículo X cuando la CDI reanude su examen del tema.

21. Con referencia al capítulo IV del informe, relativo a la cláusula de la nación más favorecida, señala que la CDI ha realizado considerables progresos y ha aprobado los artículos 8 a 21, sentando las bases para el optimismo en cuanto a la posibilidad de conclusión de los trabajos sobre el proyecto de artículos en el próximo período de sesiones de la CDI.

22. El artículo 8 no ha ofrecido dificultades a la CDI, ya que la incondicionalidad de la cláusula de la nación más favorecida se acepta actualmente sin discusión en la práctica y en la doctrina.

23. El artículo 9 tampoco ha suscitado controversia alguna en la CDI. A ese respecto es importante establecer una distinción entre la reciprocidad formal, que es el intercambio normal de trato de nación más favorecida en virtud de cláusulas incorporadas en tratados bilaterales o multi-

² Véase A/CN.4/282.

laterales, y la reciprocidad material, que es objeto del artículo 10. Su delegación está de acuerdo con la formulación, simple, concisa y amplia de ambos artículos.

24. El artículo 11 se refiere obviamente a la interpretación y funcionará siempre habida cuenta de los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados³. La CDI ha procedido acertadamente al tratar de evitar el uso de expresiones latinas en un texto legislativo, y la formulación resultante del principio resulta concisa y plena de sentido. Su delegación no tiene dificultad alguna respecto del fondo del artículo 11 o del artículo 12, que se refiere también a la interpretación. Esos dos artículos abarcan exhaustivamente la esfera de la norma *ejusdem generis*, que se reconoce indiscutiblemente en los laudos arbitrales y en la práctica de los Estados en relación con la cláusula de nación más favorecida.

25. Su delegación no tiene problemas con respecto al artículo 13, que se ajusta por completo a la filosofía general del proyecto y, en especial, a los artículos 6, 7 y 8.

26. Observa con satisfacción que la CDI no ha recurrido en su formulación del artículo 14, que trata de la cuestión, otrora polémica, de las denominadas *clauses reservées*, a viejas ideas que parecían admitir la existencia de ciertos dominios especiales, convenidos por el Estado concedente y el tercer Estado, que se consideraban fuera del ámbito de aplicación de la cláusula de la nación más favorecida. De conformidad con la práctica estatal moderna, las *clauses reservées* son *res inter alios acta* y no pueden interferir con la cláusula de nación más favorecida, a no ser que expresamente estén destinadas a cumplir esa función. Debe señalarse que el artículo 14 no es *jus cogens* y que los Estados pueden decidir de otro modo, cuando así lo deseen.

27. Considera igualmente positivo e indiscutible el principio incorporado en el artículo 15, de que cualquier ventaja concedida mediante convenciones bilaterales o multilaterales puede ser invocada por el beneficiario para reclamar el trato de nación más favorecida, independientemente de que el tratado correspondiente sea abierto o restringido. Los tratados pueden contener excepciones o renunciaciones del trato de nación más favorecida, negociadas y expresamente convenidas, pero, de no ser así, la solución general será que dichas ventajas pueden ser reclamadas por cualquier beneficiario del trato de nación más favorecida. Apoya la firme posición de la CDI sobre el problema de las uniones aduaneras y otras asociaciones similares y su negativa a concederles la naturaleza de una excepción a la norma general incorporada en el artículo 14.

28. Con respecto al problema, en cierto modo polémico, del trato nacional, que se trata en los artículos 16 y 17, no tiene objeción alguna a que se trate exhaustivamente en el proyecto. Ha habido siempre una relación en la práctica de los Estados entre la cláusula de la nación más favorecida y la cláusula de trato nacional, habiéndose aplicado ampliamente la última en la esfera del comercio. Los países en desarrollo tienen reservas con respecto a ambos tipos de cláusula, ya que la paridad interna entre sus empresas

nacionales — que a menudo carecen de capital y de conocimientos técnicos — y la poderosa competencia extranjera origina frecuentemente el estrangulamiento de la iniciativa privada local. Apoya los artículos 16 y 17 y también los artículos 18, 19 y 20.

29. La inclusión en el proyecto del artículo 21 es de la mayor importancia. La CDI no puede ignorar la situación especial de los países en desarrollo al enfrentarse a las realidades de las relaciones mundiales contemporáneas. Señala que la igualdad de trato entre desiguales equivale a la desigualdad y dice que es necesario un trato privilegiado para los países en desarrollo a fin de que la igualdad de situaciones dimanantes de la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida no dé lugar a una competencia desleal. En consecuencia, la CDI debe asegurarse de que el proyecto de artículos no obstaculice cualquier medida que ya se haya adoptado, para asegurar la justicia en el trato dado a los países en desarrollo en su lucha por el desarrollo económico, tales como las medidas adoptadas en relación con el establecimiento de un nuevo sistema generalizado de preferencias, no recíproco y no discriminatorio. El artículo resulta satisfactorio en su formulación actual, pues está redactado en términos generales y no pretende ocuparse con detalle del problema de las preferencias para los países en desarrollo. Sin embargo, el principio de una excepción privilegiada a la norma de igualdad, es decir, que los terceros Estados no pueden invocar el trato de la nación más favorecida para reclamar los beneficios concedidos a los países en desarrollo en virtud de tales, se mantiene plenamente. Acoge con agrado la decisión de la CDI de suprimir cualquier limitación expresa de los efectos del artículo a la esfera del “comercio”, señalando que las materias relacionadas pueden también ser objeto de trato preferencial, en especial los servicios de navegación y portuarios. A la postre, otras materias pueden también beneficiarse de dicho trato, tales como las incorporadas normalmente en los denominados tratados de establecimiento, que se ocupan de los derechos de los extranjeros, los derechos de sucesión de los extranjeros, *locus standi in judicio*, y la obligación de prestar servicio militar. El texto actual está bien equilibrado, pero debe dejarse abierta la posibilidad de progresos ulteriores en la esfera del trato privilegiado otorgado a los países en desarrollo. Confía en que la CDI explorará nuevos medios de consolidar la formulación del artículo y ampliar su ámbito, habida cuenta de las realidades de las relaciones interestatales en el mundo moderno.

30. En relación con el capítulo V del informe de la CDI, que se refiere a los tratados en que intervienen organizaciones internacionales, acoge complacido la decisión de continuar ajustando el proyecto de artículos lo más estrechamente posible con la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. También acoge complacido la inclusión del inciso e) del párrafo 2 del artículo 7, que concuerda con el párrafo 1 del artículo 12 de la Convención de Viena sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal⁴.

³ Véase *Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados*, *Documentos de la Conferencia* (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.70.V.5), documento A/CONF.39/27, pág. 311.

⁴ Véase *Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales*, vol. II (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.75.V.12), documento A/CONF.67/16.

31. Señala que el artículo 7 responde afirmativamente a la cuestión de si los plenos poderes en la forma tradicionalmente utilizada por los Estados se aplican a las organizaciones internacionales, aunque los poderes de los representantes de dichas organizaciones a efectos de adoptar o autenticar el texto de un tratado se denominan simplemente “poderes”. La CDI ha reconocido que la práctica de las organizaciones internacionales, hasta la fecha, no ha considerado la presentación de los poderes como requisito indispensable, pero ha preferido no incluir un reconocimiento expreso de que los poderes no son necesarios, ya que puede llevar a confusión en la práctica. Con respecto a la disposición que figura en el párrafo 2 del artículo 9, sobre la norma de la mayoría de dos tercios en ciertas conferencias internacionales, opina que esa práctica todavía no puede constituir la base de una norma obligatoria del derecho internacional. Se admite que las conferencias son soberanas para establecer su propio reglamento y esa debe seguir siendo la norma.

32. Sus únicas objeciones a los textos de los artículos 10 a 18 se refieren al problema de si debe mantenerse la ratificación como el medio de expresar el consentimiento de una organización internacional a vincularse por un tratado. Si se extiende la ratificación a las organizaciones internacionales, surgirán problemas debido a que no podrán adoptarse los textos antes de un proceso de aprobación en dos etapas por un complejo mecanismo consultivo, en el que intervendrían órganos de distinta categoría. El nuevo concepto, “acto de confirmación formal”, introducido en los artículos no soluciona esos problemas y constituye una innovación que no tiene ningún antecedente en la práctica de las organizaciones. El proyecto resultaría más realista si se descartaran los intentos de introducir el procedimiento de ratificación en la vida de las organizaciones internacionales por falta de precedentes.

33. Con respecto a la organización del programa de trabajo de la CDI, tal como figura en el capítulo VI del informe, la felicita por haber establecido un grupo de planificación para estudiar su funcionamiento y formular sugerencias relativas a su trabajo. Con respecto a la cooperación con otros órganos, señala con satisfacción que la CDI escuchó con provecho declaraciones de muchos observadores distinguidos de órganos regionales encargados del estudio, el desarrollo y la codificación del derecho internacional. Es una práctica muy positiva y útil un canje tal de información en el plano internacional y regional, entre juristas consagrados al objetivo común de fomentar el imperio del derecho en las relaciones entre los Estados. También felicita al Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra por la organización de la undécima reunión del Seminario sobre derecho internacional que, como los anteriores seminarios, ha resultado ser en extremo útil. Expresa su satisfacción por el éxito de la tercera Conferencia en memoria de Gilberto Amado, que constituyó un tributo excepcional a la memoria de un gran ciudadano del Brasil.

34. El Sr. GODOY (Paraguay) agradece al Presidente de la CDI la presentación de su informe y felicita a la misma por su labor.

35. El Paraguay, Miembro fundador de las Naciones Unidas, nunca ha sido miembro de la CDI. Tal vez ese sea

un caso en que quede por aplicar el principio de la universalidad y de la distribución equitativa en las Naciones Unidas.

36. Refiriéndose al capítulo II del informe de la CDI, relativo a la cuestión de la responsabilidad de los Estados, dice que el hecho de que la CDI haya podido aprobar hasta ahora sólo 15 artículos es una prueba evidente de la magnitud de la empresa y de su trascendental importancia para la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional.

37. El proyecto de artículos establece una distinción clara entre los hechos ilícitos y las consecuencias perjudiciales de determinadas actividades lícitas. Sin embargo, es imprescindible encontrar un mecanismo que impida que la gradación de las responsabilidades de los Estados por la comisión de esos hechos o la práctica de esas actividades se utilice consciente y continuamente para evadir o disminuir la responsabilidad por tales hechos o actividades. Se debe impedir que los Estados conciban e ejecuten actos aparentemente lícitos que en realidad busquen producir efectos análogos a los ocasionados por los hechos ilícitos. En materia de responsabilidad, el elemento subjetivo de la intención es lo que en definitiva hay que determinar para calificar el acto y establecer la culpabilidad y la responsabilidad.

38. En relación con el artículo 10, la delegación del Paraguay tiene serias dudas acerca de la frase “cuando tal órgano ha actuado en esa calidad”. Es difícil, o casi imposible en la práctica, divorciar la calidad oficial de la calidad privada de ciertas personas que representan a órganos del Estado. La frase citada lleva a concluir que si un órgano de esa índole — que siempre estará representado por personas naturales — no ha actuado en calidad de órgano de un Estado, el hecho de que se trata no podrá ser considerado hecho del Estado a los efectos de las relaciones internacionales. Son evidentes los peligros de considerar hecho del Estado todo comportamiento de las personas físicas que representan o pertenecen a sus órganos. Sin embargo, las dificultades prácticas, a nivel internacional, de distinguir los actos cometidos como órgano del Estado de los cometidos como simple ciudadano no podrían superarse. Además, la frase mencionada se presta a abusos inaceptables, ya que en un caso dado se podría argüir fácilmente que el órgano o la persona de que se trata ha actuado sólo a título privado y no como órgano del Estado. Sería preferible, pues, eliminar la frase comentada.

39. En el artículo 11, la frase “que no actúe por cuenta del Estado” plantea también la dificultad de determinar en la práctica cuándo una persona o un grupo de personas actúa por cuenta del Estado y cuándo no. Es evidente que en los casos en que la responsabilidad de un Estado amenaza con comprometer sus relaciones con otro Estado, aquél declarará de inmediato su total desvinculación con los hechos de que se trate. El párrafo 2 de ese artículo parece indicar que cualquier omisión del Estado en adoptar medidas razonables para evitar los hechos, para castigar a las personas que supuestamente hayan actuado por cuenta propia o para proceder a su extradición se considerará, a los efectos del proyecto de artículos, un hecho del Estado por omisión.

40. El artículo 12 parece excluir los casos de complicidad o tolerancia del Estado territorial con órganos de otro Estado que permite que esos órganos cometan hechos internacionalmente ilícitos en perjuicio de terceros Estados. Si el Estado territorial incurre en esos actos ilícitos por omisión, debería ser considerado responsable en casi igual medida que el Estado cuyos órganos han ejecutado esos hechos. La delegación del Paraguay preferiría la supresión de la frase “en esa calidad” que figura en el párrafo 1 del artículo 12.

41. El artículo 13 es totalmente aceptable para la delegación del Paraguay.

42. En cuanto al artículo 14, quizá deba aclararse que se aplica a los movimientos insurreccionales dirigidos contra el gobierno del territorio en que se establecen. En su forma actual, el artículo puede interpretarse en el sentido de que se aplica a un movimiento insurreccional que establece una base en un Estado simplemente para facilitar sus actividades contra un Estado vecino, que es el verdadero objetivo de sus operaciones.

43. La delegación del Paraguay comparte el parecer de los redactores del proyecto de que es preciso distinguir entre la responsabilidad por la falta de vigilancia, prevención o represión de una simple revuelta, y la responsabilidad eventual por la impotencia de un Estado para controlar un movimiento insurreccional sólidamente organizado y establecido. En el primer caso, el Estado debería asumir la responsabilidad, mientras que en el segundo los movimientos insurreccionales son en cierto grado capaces de cometer hechos internacionales ilícitos por cuenta propia y, en consecuencia, deben ser directamente responsables de los hechos de su órganos, sin que ello implique necesariamente reconocerles una personalidad internacional.

44. El artículo 15 parece del todo aceptable. Las disposiciones del párrafo 2 serían especialmente adecuadas en los casos de territorios que han estado bajo dominación colonial.

45. El orador tiene plena confianza en la labor futura de la CDI y espera que el examen del proyecto concluya pronto. La delegación del Paraguay desearía también que se agregaran al proyecto actual algunos artículos relativos a la cuestión de la solución pacífica de las controversias que pudieran plantear la interpretación y aplicación de las normas codificadas en el proyecto de artículos.

46. Refiriéndose a la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados, el orador dice que, por lo que hace al artículo 9, su delegación sólo tiene dudas con las palabras “convenido o decidido”. Aun cuando puede suponerse que los que participan en tal convenio son las dos partes directamente interesadas, es decir, el Estado sucesor y el Estado predecesor, no está claro si la decisión la tomarían esos mismos Estados con arreglo a la propia convención o alguna autoridad o tribunal internacional. Por consiguiente, la supresión de las palabras “o decidido” daría más fuerza al proyecto de artículo. Lo mismo se aplica al artículo 11 del proyecto. También en el artículo 9 del proyecto debería precisarse el término “bienes” a fin de aclarar no necesariamente su calidad de bienes públicos o privados, sino su naturaleza física.

Algunos medios de transporte u otros bienes muebles, por ejemplo, pueden encontrarse fuera del territorio en el momento de la sucesión.

47. Con respecto al artículo X del proyecto, es evidente que, cualesquiera que sean los arreglos concertados entre el Estado predecesor y el Estado sucesor, los bienes, derechos e intereses de terceros Estados que se encuentren en esos territorios deben ser respetados y que su destino final debe poder determinarse por acuerdo directo entre esos terceros Estados y el Estado sucesor.

48. La delegación del Paraguay también está de acuerdo con la inclusión del inciso e) del artículo 3 como salvaguardia de los intereses de la comunidad internacional en general.

49. El orador expresa la esperanza de que la CDI acelere su labor sobre la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados, a fin de que se pueda presentar un proyecto completo de artículos lo antes posible, especialmente teniendo en cuenta que casi se ha completado el proyecto sobre la sucesión de Estados en materia de tratados.

50. Refiriéndose a los artículos 8, 9 y 10 del proyecto de artículos sobre la cláusula de la nación más favorecida, el orador conviene en que es preferible dejar que los Estados interesados decidan, dentro de límites razonables, qué tipo de cláusula responde mejor a sus necesidades e intereses. Entre Estados de un nivel de desarrollo análogo, es común y aceptable que se aplique la forma condicionada o recíproca. En tales casos, desaparecerían los conceptos de Estado concedente y Estado beneficiario, ya que ambas partes reunirían simultáneamente ambas calidades. Sin embargo, cuando el grado de desarrollo o la capacidad comercial internacional de los Estados interesados difiere notablemente, sería injusto exigir que los beneficios o privilegios que recibiera el Estado más necesitado se condicionaran a la concesión automática de prestaciones iguales o equivalentes. La exigencia *sine qua non* de la forma incondicional desalentaría la concertación de acuerdos internacionales. Para algunos Estados, el precio de conceder la cláusula de la nación más favorecida a todos los Estados con quienes concierten algún tipo de acuerdo resultaría prohibitivo en determinados casos, como lo ha demostrado el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).

51. La delegación del Paraguay acepta también la norma del *ejusdem generis* utilizada en la formulación del artículo 11 del proyecto. Ese principio permite limitar la concesión de la cláusula de la nación más favorecida a determinadas cosas y categorías. Protege asimismo la voluntad soberana de los Estados y limita su responsabilidad a ciertos casos y situaciones.

52. Suponiendo que la cláusula mencionada sea del tipo incondicional, la delegación del Paraguay está de acuerdo con la redacción actual del artículo 13, ya que refleja la principal razón de ser de la concesión incondicional.

53. También considera muy apropiado el texto del artículo 14.

54. El artículo 15 refleja el caso del GATT. Ese artículo, que favorece sin duda al Estado beneficiario, estimula un cierto grado de "aislamiento" entre los Estados que tienen dificultades para aceptar ciertas condiciones del GATT, mientras que a la vez mantiene el principio de la universalidad de la cláusula de la nación más favorecida.

55. En relación con los artículos 16 y 17, la delegación del Paraguay sostiene que el trato nacional otorgado en acuerdos bilaterales, ya sea del tipo incondicional o recíproco, no debe ser invocado por terceros Estados cuando esas concesiones son consecuencia exclusiva de la situación geográfica desventajosa del Estado beneficiario. Tal medida limitaría las posibilidades de los Estados sin litoral de obtener un trato adecuado a su especial ubicación, ya que el Estado otorgante no estaría en condiciones de hacer extensivo ese trato a terceros Estados. En el artículo 10 de la Convención sobre el comercio de tránsito de los Estados sin litoral⁵ se establece una protección de esa índole.

56. El artículo 21 será de beneficio positivo para los países en desarrollo menos adelantados y confirma la convicción de su delegación de que el derecho, como toda ciencia social, debe renovarse y adaptarse a las circunstancias cambiantes en lo social y lo económico.

57. En lo que toca al proyecto de artículos sobre los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales, le complace observar que se han seguido en gran parte la terminología y los métodos utilizados en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, con unas pocas modificaciones que eran necesarias. Si bien la naturaleza jurídica y las características de los Estados y de las organizaciones internacionales difieren radicalmente, la codificación progresiva del derecho internacional se acelerará y fortalecerá considerablemente con la adopción de textos que, por su analogía, faciliten la interpretación y aplicación del gran número de instrumentos internacionales nuevos y complejos. Por consiguiente, la CDI debe concluir la preparación de ese proyecto lo antes posible, teniendo en cuenta las enseñanzas prácticas que ha dejado la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.

58. En cuanto a los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, el orador expresa la esperanza de que el mayor número posible de gobiernos envíen sus respuestas al cuestionario del Secretario General, a fin de que la CDI pueda continuar el examen de ese importante tema en su próximo período de sesiones y presentar su informe a la Asamblea General en su trigésimo primer período de sesiones.

59. El Sr. KURUKULASURIYA (Sri Lanka) dice que los sufrimientos sin precedentes padecidos durante la segunda guerra mundial, el rápido desarrollo de la ciencia y la tecnología en la postguerra y la aparición de casi 100 naciones independientes han cambiado radicalmente los cimientos sobre los que se ha asentado el derecho internacional. Las relaciones feudales y fundamentalmente de explotación entre los Estados han dado paso a unas

relaciones basadas en la soberanía, la igualdad y el respeto mutuo. El derecho internacional ya no es un instrumento de dominación en manos de unos pocos. En resumen, las fronteras del derecho internacional han cambiado y siguen cambiando para abarcar normas y conceptos nuevos. La Sexta Comisión ha tenido la gran responsabilidad de traducir a normas jurídicas los principios fundamentales elaborados dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas en las esferas social, humanitaria y, sobre todo, económica. La Sexta Comisión debe ser técnica sólo en la medida en que se ocupe del derecho y la jurisprudencia. Sin embargo, no cumpliría su función si no fijase, en el contexto de los acontecimientos económicos, sociales y culturales, las nuevas fronteras del derecho internacional por las que se guiarán las organizaciones especializadas que deben dar forma jurídica a los principios que regulan la conducta de los Estados en las distintas esferas de la actividad humana.

60. Los períodos extraordinarios de sesiones sexto y séptimo de la Asamblea General se han celebrado para formular una nueva frontera económica que satisfaga las legítimas aspiraciones de los países en desarrollo a una emancipación económica total y completa. La Sexta Comisión debe exhortar a los órganos especializados como la CDI y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional a que tengan en cuenta la Declaración y el Programa de acción sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional (resoluciones 3201 (S-VI) y 3202 (S-VI) de la Asamblea General), las resoluciones del séptimo período extraordinario de sesiones y la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados (resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General). Aun cuando algunos países han formulado fuertes reservas a esos documentos, éstos establecen, a juicio de la gran mayoría de los Estados Miembros, el nuevo orden económico internacional. Aquellos a quienes se pide que participen en el proceso de traducir a derechos las normas aceptadas de la época no pueden permitirse hacer caso omiso de los principios que contienen tales documentos.

61. Refiriéndose a la cuestión de la sucesión de Estados en materia de tratados, dice que el proyecto de artículos refleja una transacción aceptable entre el principio de la "tabla rasa" y el de la continuidad. Sin embargo, considera que el propuesto artículo 12 *bis* (véase A/9610/Rev.1, nota 57) podría crear más dificultades que las que trata de resolver. La definición de tratados multilaterales de carácter universal puede abarcar muchos tratados en los que un buen número de países, especialmente los de reciente independencia, consideran difícil ser partes, por diversas razones. La delegación de Sri Lanka no ve justificación suficiente para incluir una disposición de ese tipo, que colocaría a los Estados de reciente independencia en una posición difícil, ya que mientras consideran si deben continuar o no siendo partes en esos tratados, seguirán vinculados por sus disposiciones.

62. Con respecto al propuesto artículo 32 (*ibid.*, nota 58), la delegación de Sri Lanka opina que, dado que la propuesta convención sobre la sucesión de Estados en materia de tratados es necesariamente un complemento de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, procedería incluir en él disposiciones análogas a las que figuran en la Convención de Viena.

⁵ Naciones Unidas, *Recueil des Traités*, vol. 597, No. 8641, pág. 79.

63. Los dos artículos propuestos deben reenviarse a la CDI para que los examine cuidadosamente teniendo en cuenta las opiniones expresadas en la Sexta Comisión. Sin embargo, si en el examen de esos dos artículos la CDI considera necesario revisar otros artículos, nada debe obstar a que lo haga.

64. En lo que atañe al informe de la CDI, el orador dice que la labor de la CDI es de una importancia sin paralelo para el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional. Un aspecto de los trabajos de la CDI que Sri Lanka considera de gran importancia es el relativo a la cláusula de la nación más favorecida y, en especial, a la aplicación de esa cláusula a los países de niveles de desarrollo económico distintos. La delegación de Sri Lanka está completamente de acuerdo con el parecer expresado por la secretaría de la Conferencia de las Naciones Unidas

sobre Comercio y Desarrollo, y mencionado en el párrafo 2 del comentario sobre el artículo 21 del proyecto de artículos sobre esa cuestión, de que “la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida a todos los países, cualquiera que sea su nivel de desarrollo, satisfaría las condiciones de una igualdad formal, pero en realidad entrañaría una discriminación implícita contra los miembros más débiles de la comunidad internacional... El reconocimiento de las necesidades de los países en desarrollo en cuanto a comercio y progreso exige que durante un tiempo determinado no se aplique la cláusula de la nación más favorecida a determinados tipos de relaciones comerciales internacionales”. La delegación de Sri Lanka confía en que la CDI tendrá presente esas realidades cuando examine el proyecto de artículos.

Se levanta la sesión a las 17.50 horas.

1539a. sesión

Miércoles 15 de octubre de 1975, a las 10.45 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1539

TEMA 108 DEL PROGRAMA

Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 27º período de sesiones (continuación) (A/10010)

TEMA 109 DEL PROGRAMA

Sucesión de Estados en materia de tratados: informe del Secretario general (continuación) (A/10198 y Add.1 a 4, A/9610/Rev.1*)

1. El Sr. MEISSNER (República Democrática Alemana), después de felicitar al Presidente de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) por su excelente presentación del informe que se examina (A/10010), precisa que las observaciones de su delegación sólo tendrán un carácter preliminar.

2. Con respecto a la responsabilidad de los Estados, la delegación de la República Democrática Alemana cree esencial diferenciar los hechos internacionalmente ilícitos en función de su gravedad. En especial, la agresión debe considerarse como un delito contra la paz mundial, y el colonialismo o el genocidio no deben considerarse como violaciones ordinarias de los tratados. En consecuencia, el Sr. Meissner se congratula porque la CDI quiera examinar, en una primera fase, el origen de la responsabilidad internacional y, en una segunda, el contenido, las formas y los grados de esa responsabilidad. En la segunda fase de sus trabajos, la CDI deberá ante todo establecer el fundamento de la distinción entre los hechos internacionalmente ilícitos que entrañan solamente la obligación de reparar y los que conllevan la aplicación de sanciones, así como examinar la

distinción eventual entre los casos en que las relaciones jurídicas dimanantes del hecho internacionalmente ilícito se establecen únicamente entre el Estado autor del hecho y el Estado directamente lesionado por él, y aquellos casos en que esas relaciones se instauran igualmente con otros Estados, incluso con la comunidad internacional en su conjunto.

3. Pasando revista al proyecto de artículos relativo a la responsabilidad de los Estados que la CDI aprobó en su 27º período de sesiones (*ibid.*, cap. II), el representante de la República Democrática Alemana declara que el artículo 10 (Atribución al Estado del comportamiento de órganos que actúan excediéndose en su competencia o en contra de las instrucciones concernientes a su actividad) y el artículo 11 (Comportamiento de personas que no actúan por cuenta del Estado) se atienen fielmente a la práctica internacional. Con respecto al artículo 12 (Comportamiento de órganos de otro Estado), la delegación de la República Democrática Alemana juzga interesante la propuesta tendiente a que se establezca una disposición distinta en el caso muy importante de la complicidad flagrante de un Estado que consienta voluntariamente a que su territorio sea utilizado para la perpetración de un hecho internacionalmente ilícito contra otro Estado. Incluso el Estado que se limitara a consentir que su territorio sea utilizado para la perpetración de actos de agresión podría considerarse como agresor en el sentido de la definición de la agresión adoptada por la Asamblea General en su vigésimo noveno período de sesiones (resolución 3314 (XXIX), anexo). Esa cuestión deberá tratarse en el capítulo IV del proyecto (La participación de otros Estados en el hecho internacionalmente ilícito de un Estado). Con respecto a los artículos 14 y 15, ambos relativos a los movimientos insurreccionales, el Sr. Meissner opina que la expresión “movimiento insurreccional” debería definirse con mayor precisión. A fin de determinar la

* Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno período de sesiones, Suplemento No. 10.

atribución de responsabilidad, no cabe ignorar la legitimidad de la lucha de un movimiento insurreccional victorioso; no se puede tratar de la misma manera a un golpe de Estado fascista que a un movimiento de liberación nacional. El representante de la República Democrática Alemana dice que duda que el programa de trabajo indicado en el párrafo 143 del informe que se examina permita a la CDI proseguir su labor sobre la responsabilidad de los Estados al ritmo esperado por la Asamblea General.

4. Habida cuenta de la complejidad de la cuestión de la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados, la delegación de la República Democrática Alemana estima prematuro formular observaciones sobre los proyectos de artículos ya aprobados. Sería deseable que se realizaran importantes progresos en esa cuestión antes de que la sucesión de Estados en materia de tratados fuera definitivamente reglamentada. Por otra parte, la delegación de la República Democrática Alemana ha considerado siempre que esas dos cuestiones deben tratarse con arreglo a los mismos principios.

5. Tras señalar la importancia de la cláusula de la nación más favorecida, que contribuye a desarrollar las relaciones comerciales entre todos los Estados, prescindiendo de su sistema social y su nivel de desarrollo económico, el Sr. Meissner se complace en afirmar que la CDI ha progresado sensiblemente en el estudio de ese tema, magistralmente tratado por el Relator Especial al que se le ha encargado. En general, el proyecto de artículos aprobado por la CDI (véase A/10010, cap. IV, secc. B) parece codificar las normas aplicables en materia de trato de la nación más favorecida. No obstante, esa codificación suscita algunos problemas sobre los que la delegación de la República Democrática Alemana desea exponer su opinión. Se congratula porque el principio de la incondicionalidad de la cláusula de la nación más favorecida haya sido enunciado en el artículo 18; no se opone a la idea de una cláusula condicional de la nación más favorecida, pero no podría admitir condiciones intervencionistas o de otra índole, que serían incompatibles con el derecho internacional generalmente aceptado y atentaría contra los derechos soberanos de otros Estados. El artículo 21, relativo al sistema generalizado de preferencias, tuvo su origen a raíz de una propuesta del Relator Especial. Esa disposición está perfectamente de acuerdo con el artículo 26 de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, aprobado por la Asamblea General en su período de sesiones anterior, en la resolución 3281 (XXIX). Es indispensable conceder a los países en desarrollo preferencias intransferibles a países desarrollados en virtud de la cláusula de la nación más favorecida. La CDI, que aceptó unánimemente ese punto de vista, no debería dejarse intimidar por cuestiones de definición. La expresión "país en desarrollo" ha adquirido, en las Naciones Unidas y en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, una connotación general que podría aún ser precisada por esas organizaciones y sobre la que la CDI podría basar sus trabajos. Pero una convención sobre la cláusula de la nación más favorecida no debería contener una definición de esa expresión. La delegación de la República Democrática Alemana aprueba la intención, expresada por la CDI en el párrafo 141 de su informe, de concluir satisfactoriamente la primera lectura del proyecto de artículo sobre la cláusula de la nación más favorecida en su período de sesiones de 1976 a fin de

presentarlo a la Asamblea General en su trigésimo primer período de sesiones.

6. La delegación de la República Democrática Alemana se felicita por los progresos conseguidos en el estudio de la cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales. En sus excelentes informes, el Relator Especial encargado del estudio de ese tema ha tomado como modelo la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Sin embargo, será necesario establecer más tarde distinciones entre Estados y organizaciones internacionales, como lo ha hecho la CDI en el artículo 6 (Capacidad de las organizaciones internacionales para celebrar tratados) del proyecto de artículos (*ibid.*, cap. V, secc. B). La República Democrática Alemana opina que la capacidad de una organización internacional para concertar tratados depende esencialmente de su acto constitutivo; ese punto de vista dimana del principio fundamental de la igualdad soberana de los Estados. El ámbito y el contenido de esa capacidad no debe ser contrario a la voluntad de los Estados Miembros. Por otra parte, vale la pena establecer, desde el principio, una distinción neta entre los tratados en los que son partes Estados y organizaciones internacionales y los tratados celebrados entre organizaciones internacionales únicamente. Una tal distinción tiene en cuenta las diferencias entre el estatuto internacional de los Estados y el de las organizaciones internacionales. La República Democrática Alemana cree que la segunda lectura de la serie de artículos debería poder terminarse en 1981, si no antes, tal como se indica en el párrafo 145 del informe que se examina.

7. El Sr. LANG (Austria) rinde homenaje a los miembros de la CDI y los Relatores Especiales por los trabajos especialmente fructíferos que han realizado en el 27º período de sesiones de la CDI. Entre los nuevos artículos presentados por la CDI sobre la responsabilidad de los Estados, figura un artículo relativo al comportamiento de órganos que actúan excediéndose en su competencia o en contra de las instrucciones concernientes a su actividad. El Gobierno austríaco examinará atentamente el criterio de ausencia manifiesta de competencia. En cuanto a la decisión de la CDI de sustraer a la responsabilidad de los Estados el comportamiento que los órganos adoptan a título puramente personal, será ciertamente bien acogida. La delegación austríaca aprueba el artículo 11 (Comportamiento de personas que no actúan por cuenta del Estado); considera, sin embargo, que la expresión "por cuenta del Estado" significa el ejercicio de prerrogativas del poder público. En consecuencia, una persona no actúa por cuenta de un Estado si lo hace en nombre de una sociedad o de un organismo privado que pertenecen total o parcialmente a dicho Estado. Esa interpretación parece confirmada por las conclusiones extraídas por la CDI en el párrafo 36 de su comentario al artículo 11. De modo general, la delegación austríaca cree que la atribución de responsabilidad está justificada cuando la persona que ha observado un comportamiento ilícito podría invocar la inmunidad estatal, en caso en que fuera emplazada ante un tribunal del Estado territorial. Es justo decir que la responsabilidad internacional del Estado territorial entra en juego con ocasión y en relación con el comportamiento internacionalmente ilícito de un órgano extranjero, sobre todo si los órganos del Estado territorial han observado un comportamiento

indebidamente pasivo. Esa pasividad, en gran parte, podrá apreciarse en función de las circunstancias y, eventualmente, asimilarse a la complicidad. La delegación austríaca aprueba el artículo 13 (Comportamiento de órganos de una organización internacional), pues la norma que contiene figura ya en la sección 46 del Acuerdo entre la República de Austria y el Organismo Internacional de Energía Atómica relativo a la sede del Organismo, firmado el 11 de diciembre de 1957¹.

8. Con respecto a los nuevos artículos elaborados sobre la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados, el Sr. Lang estima que los miembros de la CDI deberían reflexionar todavía sobre la asimilación de los bienes de dominio privado a los bienes de dominio público, incluso aunque esa distinción sea ante todo teórica, tal como ha observado el representante de Finlandia (1535a. sesión).

9. Por lo que hace a la cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales, la delegación austríaca aprueba el método de trabajo de la CDI, que ha establecido un paralelo entre la serie de artículos que se están elaborando y la convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Por lo que respecta al artículo 6 (Capacidad de las organizaciones internacionales para celebrar tratados) del proyecto de artículos sobre esa cuestión, la delegación austríaca sigue opinando que esa disposición podría interpretarse en el sentido de que una organización puede, a su arbitrio, ampliar su capacidad de celebrar tratados adoptando o elaborando normas a ese fin. Ahora bien, los poderes de una organización internacional al respecto están limitados por el objetivo y la finalidad de la organización de que se trate, tal como se enuncian en su acto constitutivo. La delegación austríaca opina que los representantes de las organizaciones internacionales deberían establecer su competencia para llevar a cabo ciertos actos en materia de conclusión de tratados, pero que haría falta un nuevo examen de la cuestión de la representación de las organizaciones internacionales, a fin de determinar si no existen en la mayoría de ellas órganos con poder de representación “en virtud de sus funciones”. De modo general, la delegación austríaca apoya todos los artículos del proyecto que ya han sido aprobados, aunque la redacción de algunos de ellos podría mejorarse.

10. Con respecto al derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, la delegación austríaca desea recordar que su Gobierno ya ha respondido a las preguntas que figuran en el informe de la Subcomisión encargada de examinar esa cuestión (véase A/9610/Rev.1, cap. V, anexo, párrs. 17 y 30). Debido a su situación geográfica, Austria tiene un interés muy especial en la cuestión. Por esa razón, la delegación austríaca desea reafirmar que, en su opinión, el problema de la contaminación del agua es consecuencia de las distintas formas de utilización del agua dulce y es por ahí por donde conviene comenzar el examen del problema. Habida cuenta de las dificultades con las que tropiezan los demás organismos internacionales que han tratado de ultimar y codificar las normas relativas a la contaminación de las aguas internacionales, parece que la CDI debería esforzarse en extraer principios generales y llenar los vacíos que existen todavía,

como sucede, por ejemplo, en la esfera de la responsabilidad del Estado por los daños causados por la contaminación en general. A ese respecto, el Gobierno austríaco cree que la cuestión de la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales resultantes de ciertas actividades lícitas que implican riesgos importantes deben ser estudiadas por la CDI. En efecto, el Gobierno austríaco, que ha iniciado negociaciones con los Estados vecinos sobre el emplazamiento de centrales nucleares en la proximidad de sus fronteras, ha podido darse cuenta de que, en esa esfera, el derecho internacional no estaba lo suficientemente desarrollado ni era lo suficientemente preciso. Por otra parte, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos ha juzgado conveniente tener un grupo de trabajo encargado de estudiar la responsabilidad de los Estados por las actividades capaces de causar daños debidos a la contaminación más allá de las fronteras del país en donde se realizan dichas actividades. La delegación austríaca se congratula por la decisión de la CDI de volver a abordar, en su 28º período de sesiones, el examen de la cuestión del derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación y espera que para entonces el mayor número posible de gobiernos habrá presentado sus observaciones al respecto.

11. La posición de Austria sobre el proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados figura en el documento A/10198. En cuanto al procedimiento que cabe seguir a propósito de los propuestos artículos 12 *bis* y 32 (véase A/9610/Rev.1, notas 57 y 58), parece que debería dejarse a una conferencia de plenipotenciarios, convocada en el momento oportuno por la Asamblea General, la tarea de decidir sobre la conveniencia de adoptar dichos artículos.

12. Con respecto a la cláusula de la nación más favorecida, el Gobierno austríaco está satisfecho de la labor realizada hasta la fecha por el Relator Especial y la CDI y examinará con la mayor atención los proyectos de artículos ya redactados.

13. Por lo que hace al programa de trabajo y a la organización de los trabajos de la CDI, el Sr. Lang se felicita por la creación de un grupo de planificación en el seno de la Mesa Ampliada. Es ciertamente difícil aprobar un plan rígido de organización de los trabajos; sin embargo, los esfuerzos de planificación sólo pueden mejorar los métodos de trabajo de la CDI, cuya obra contribuye sin duda alguna al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

14. El Sr. KLAFFKOWSKI (Polonia) se asocia a las delegaciones que han felicitado al Presidente de la CDI y le agradece la excelente presentación de su informe. Los cuatro proyectos de artículos presentados en ese informe son de calidad excepcional.

15. La delegación de Polonia coincide con la CDI en que la redacción de un proyecto de artículos constituye el método más eficaz para separar y desarrollar las reglas del derecho internacional relativas a la responsabilidad de los Estados. Los 15 artículos preparados hasta ahora por la CDI sobre esa cuestión no representan sino los dos primeros capítulos de la primera parte del proyecto, debiendo examinarse aún tres capítulos más. Como esa primera parte ha de formar un todo, tal vez sea demasiado temprano para formular observaciones a su respecto. Sin embargo, se pueden advertir ya determinadas tendencias. Por ejemplo, la ten-

¹ Naciones Unidas, *Recueil des Traités*, vol. 339, No. 4849, pág. 214.

dencia a ampliar la noción de responsabilidad de los Estados aparece en el informe del Sr. Ago, Presidente de la Subcomisión encargada de examinar esa cuestión, y se confirma en el párrafo 37 del informe de la CDI. Asimismo, la CDI ha dado una interpretación amplia de la noción de hecho internacionalmente ilícito. Se observa también una tendencia a extender la noción de órgano estatal que puede dar lugar a responsabilidad del Estado y a restringir al mínimo las circunstancias que podrían limitar esa responsabilidad. Los 15 artículos del proyecto sobre la responsabilidad de los Estados elaborados hasta ahora constituyen un punto de partida excelente.

16. Refiriéndose a la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados, el orador observa que la CDI, en su 27º período de sesiones, sólo aprobó en primera lectura tres nuevos artículos. El Relator Especial presentó en sus excelentes informes recomendaciones que han permitido precisar sobre todo criterios que sirvan para distinguir entre la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados y la sucesión de Estados en materia de tratados. Aunque los trabajos sobre esa cuestión progresan lentamente, los párrafos 71 a 74 del informe de la CDI permiten esperar que tengan éxito.

17. Se ha progresado mucho en los trabajos sobre la cláusula de la nación más favorecida. En el párrafo 102 de su informe, la CDI, reconociendo la importancia fundamental de la función de la cláusula de la nación más favorecida en la esfera del comercio internacional, expresa su intención de no limitar su estudio a la aplicación de la cláusula en esa esfera, sino hacerlo extensivo a la aplicación de la cláusula en todas las esferas posibles. Esa es una intención encomiable que demuestra que la CDI desea tener en cuenta todos los acontecimientos recientes que pueden influir en la codificación o el desarrollo progresivo de las normas relativas a la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida. En cuanto al alcance del proyecto de artículos, conviene señalar que la cláusula de la nación más favorecida corresponde por entero al derecho general de los tratados y que el proyecto de artículos sobre esa cláusula supone la existencia de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, de la que debe considerarse un complemento.

18. El capítulo relativo a la cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales es muy interesante. En su conjunto, el proyecto de artículos refleja el deseo de la CDI de mantenerse fiel al espíritu de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y, principalmente, a su precisión y flexibilidad, teniendo en cuenta las características especiales de las organizaciones internacionales que participan en los tratados. Sin embargo, debe admitirse que si la práctica internacional da pruebas de una libertad terminológica extrema en cuanto a la celebración de los tratados, la asimilación de las organizaciones internacionales a los Estados resulta pronto inexacta, pues las organizaciones internacionales son consecuencia de un acto de voluntad de los Estados que da formas a su figura jurídica otorgando a cada una de ellas una finalidad especial. El proyecto de artículos se ocupa de una cuestión fundamental para la diplomacia contemporánea y recoge acertadamente la práctica internacional y la doctrina moderna en la materia. Aunque todavía quedan por resolver cuestiones importantes, se puede prever desde ahora que los

trabajos de la CDI sobre el particular serán coronados por el éxito.

19. En lo que atañe al capítulo VI titulado "Otras decisiones y conclusiones de la Comisión", el orador observa que las respuestas al cuestionario de la CDI sobre los usos de los cursos de aguas internacionales para fines distintos de la navegación no han llegado hasta ahora a un número suficiente que permita determinar el alcance y el contenido de los trabajos sobre ese tema. Sin embargo, parecen bien encaminados los trabajos realizados por la Subcomisión encargada de examinar esa cuestión. El informe de la Subcomisión constituye una base adecuada para un examen preliminar y puede servir de marco inicial para la codificación de la materia.

20. La delegación de Polonia toma nota con satisfacción de las informaciones sobre la Conferencia en memoria de Gilberto Amado, así como de las relativas al Seminario sobre derecho internacional organizado durante el 27º período de sesiones de la CDI.

21. El Sr. CALLE Y CALLE (Perú) se congratula del informe sumamente valioso de la CDI y de la exposición magistral del representante del Brasil (1538a. sesión), que presidió la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal, cuestión de suma importancia que atañe a la vida de los representantes de los Estados acreditados ante las organizaciones internacionales.

22. Refiriéndose a la cuestión de la responsabilidad de los Estados, el orador manifiesta que a ese respecto la América Latina ha elaborado doctrinas que han facilitado la evolución de esa rama del derecho internacional. Los artículos 10 a 15, de que se ocupa la Sexta Comisión, completan la parte que determina los elementos subjetivos de la responsabilidad internacional, a saber, las circunstancias que hacen que tales comportamientos o tales hechos puedan atribuirse a los Estados. En el futuro, la CDI deberá desarrollar el elemento objetivo de la responsabilidad internacional, es decir, lo que constituye un hecho ilícito en el plano internacional. Después estudiará la participación de otros Estados en los hechos internacionalmente ilícitos de un Estado y las circunstancias que excluyen la ilicitud, así como las circunstancias atenuantes o agravantes. En lo que respecta al artículo 10, relativo a la atribución al Estado del comportamiento de órganos que actúan excediéndose en su competencia o en contra de las instrucciones concernientes a su actividad, el representante del Perú estima que la CDI ha resuelto uno de los problemas más debatidos en la doctrina y que el artículo 10 refleja la práctica de los Estados y la tendencia actual de la jurisprudencia arbitral. Más aún, el orador cree que, antes que eliminar de ese artículo, como se ha propuesto, la cláusula "cuando tal órgano ha actuado en esa calidad", convendría reforzarla. En cambio, el Estado no es responsable de los actos de personas que no actúan por cuenta de él, puesto que en el plano internacional la responsabilidad debe ser imputable al Estado, a un funcionario o a un órgano que dependa del Estado. Además, el Perú ha sostenido siempre el principio de la no responsabilidad del Estado por los actos de particulares. A ese respecto, el orador lamenta que ningún artículo se ocupe de los casos de desorden público y manifestaciones de violencia colectiva que un Estado tal vez

tenga dificultades en controlar, aun cuando esa posibilidad se contemplaba en el proyecto original de artículos. Además, deplora la supresión de las disposiciones relativas al caso de los movimientos insurreccionales que tienen personalidad propia, distinta de la del Estado, y reconocida en derecho internacional, pero añade que se prevé que en caso de que un movimiento insurreccional se transforme en un nuevo Estado, éste será responsable. En cuanto a los demás artículos de que se ocupa la Sexta Comisión, la delegación del Perú los aprueba en su conjunto.

23. Refiriéndose a la cuestión de la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados, el orador considera que la CDI ha logrado escaso progreso, pese a los profundos estudios redactados por el Relator Especial teniendo en cuenta las observaciones formuladas en la Sexta Comisión. La delegación del Perú aprueba los tres nuevos artículos elaborados por la CDI (véase A/10010, cap. III, secc. B), en particular, el artículo 9, que completa el artículo 8, relativo al paso de los bienes de Estado sin compensación, y estipula que los bienes de Estado que estén situados en el territorio al que se refiera la sucesión de Estados pasarán al Estado sucesor. En cuanto al artículo 10, el representante del Perú estima que se debería recoger la idea inicial expresada por el Relator Especial, porque los bienes del Estado predecesor quedan bajo la responsabilidad de ese Estado y no son objeto de sucesión.

24. En lo que toca a la cuestión de la cláusula de la nación más favorecida, institución tradicional que se trata de reglamentar ahora, el representante del Perú señala que la CDI trata de hacerlo no solamente en una esfera precisa, por ejemplo, el comercio o las aduanas, sino en los términos más amplios posibles. La delegación del Perú considera que los artículos son satisfactorios, pero se inquieta por el respeto manifestado hacia una cláusula que data de la época mercantil. Con todo, es cierto que se han hecho progresos hacia un sistema generalizado de preferencias en favor de los "países económicamente débiles" para responder a una exigencia de justicia social. En realidad, existe un nuevo

principio de derecho económico y mercantil internacional en cuya virtud se aplican normas distintas a los países desarrollados y a los países en desarrollo y que responde a la idea de un derecho adaptado a los problemas económicos del subdesarrollo. Sin embargo, la delegación del Perú teme que la cláusula de la nación más favorecida desaliente los esfuerzos desplegados con miras a crear zonas de libre cambio y a concertar acuerdos de integración regional, interregional y subregional. El artículo 14, relativo a la no pertinencia de las restricciones convenidas entre el Estado concedente y el tercer Estado tiene validez en teoría, pero en la práctica tal vez sea necesario otorgar un trato especial a un país. La cláusula de la nación más favorecida no debe producir el efecto de beneficiar a un Estado con el trato especial otorgado a otro Estado por razones bien precisas.

25. En lo que respecta al proyecto de artículos sobre los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales, el orador expresa que las dificultades de orden técnico fueron resueltas hábilmente por la CDI gracias a los trabajos preparatorios del Relator Especial. Una vez reconocida la capacidad de las organizaciones internacionales para celebrar tratados, ellas deben asimilarse a los Estados en el plano convencional. La terminología no es aún muy firme en esa esfera y la CDI ha adoptado términos distintos según se trate de Estados o de organizaciones internacionales, pero el representante del Perú considera que no habría que ir muy lejos en ese sentido aun cuando a veces los matices de distinción resultan útiles. La CDI ha progresado en sus trabajos pero no ha terminado los artículos relativos a las reservas. A juicio del orador, no hay que privar a las organizaciones internacionales de la posibilidad de formular reservas cuando ello no sea incompatible con el propósito final del tratado. En efecto, por razones de orden jurídico y práctico, es preciso mantener un sistema liberal de reservas que favorezca tanto a los Estados como a las organizaciones internacionales.

Se levanta la sesión a las 12.10 horas.

1540a. sesión

Miércoles 15 de octubre de 1975, a las 15.15 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1540

TEMA 108 DEL PROGRAMA

Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 27º período de sesiones (continuación) (A/10010)

TEMA 109 DEL PROGRAMA

Sucesión de Estados en materia de tratados: informe del Secretario General (continuación) (A/10198 y Add.1 a 4, A/9610/Rev.1*)

1. El Sr. OSMAN (Somalia) felicita a la Comisión de Derecho Internacional (CDI), a su Presidente, al Asesor Jurídico de las Naciones Unidas y al Jefe de la División de Codificación por sus valiosísimos servicios y contribuciones al desarrollo progresivo y a la codificación del derecho internacional. La CDI ha efectuado progresos impresionantes en su 27º período de sesiones, y el Gobierno de Somalia presentará a su debido tiempo observaciones y comentarios acerca del informe sobre la labor realizada en ese período de sesiones (A/10010), en particular, con respecto al proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados.

2. Pasando a la cuestión de la sucesión de Estados en materia de tratados, el orador dice que el proyecto de

* Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno período de sesiones, Suplemento No. 10.

artículos presentado por la CDI (véase A/9610/Rev.1, cap. II, secc. D) podría constituir una base general para la codificación. La delegación de Somalia expresa su agradecimiento a la CDI por la actitud progresiva que supone el haber adoptado el principio de la "tabla rasa" como base fundamental de su proyecto. La decisión refleja auténticamente la tendencia universal contemporánea de la comunidad internacional a instituir las reformas necesarias en el derecho internacional para ajustarlo a las realidades actuales y a las aspiraciones de la humanidad en su conjunto.

3. Dados los diversos y a veces contrapuestos conceptos y posiciones sobre la cuestión de la sucesión de Estados, sería un error suponer que existen principios y doctrinas uniformes y universalmente aceptables sobre el tema, particularmente con respecto a los tratados de carácter territorial (tratados dispositivos). No puede establecerse ningún principio universal que regule todos los tratados sobre fronteras y regímenes territoriales, a menos que se incorporen cláusulas de reserva para prever las situaciones especiales. La línea de razonamiento expuesta por algunas delegaciones según la cual los tratados dispositivos constituyen una categoría especial y deberían considerarse como una excepción al principio de la "tabla rasa", a juicio del orador está orientada políticamente e influida por consideraciones ajenas al tema que no están en consonancia con los principios jurídicos universales y la moralidad internacional.

4. La codificación de principios jurídicos internacionales no debe considerarse dentro del limitado contexto de los arreglos políticos destinados a la cooperación y la seguridad regionales. Igualmente, no redundaría en beneficio de la paz y el bienestar de las naciones que se confirmaran normas internacionales formuladas mediante la influencia y la presión de las antiguas Potencias coloniales. Tendría graves consecuencias políticas y humanas que la doctrina de la inviolabilidad de las fronteras se aplicase a todos los pueblos y países, sin tener debidamente en cuenta los factores históricos, políticos y sociales que les son propios. La delegación de Somalia no puede estar de acuerdo en la evolución de los principios y normas jurídicas que meramente toleran las herencias coloniales y las decisiones arbitrarias y que contradicen claramente los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Los partidarios de la doctrina de la exclusión de los tratados dispositivos aparentemente basan su opinión en el derecho consuetudinario internacional reflejado en las normas y principios tradicionales aplicados por las Potencias europeas durante la época de la colonización. Hay que hacer más hincapié en la práctica moderna de los Estados, particularmente en relación con la situación de los nuevos países de África y Asia.

5. Debe considerarse con suma precaución el razonamiento contenido en el párrafo 11 del comentario sobre los artículos 11 y 12, que cita una resolución de la Asamblea de Jefes de Estado de la Organización de la Unidad Africana, celebrada en El Cairo en 1964, por considerar que sustenta que la doctrina de la inviolabilidad de las fronteras es aplicable a todos los casos fronterizos y territoriales. Varios países, incluido el suyo propio, se reservaron su posición con respecto a esa resolución. Su país es uno de los pocos que ha heredado graves problemas territoriales del período colonial. Los casos citados por el Relator a favor de la inviolabilidad de las fronteras son aplicables solamente a las circunstancias y situaciones reinantes durante los siglos

XVIII y XIX y no pueden considerarse como precedente que establezca un principio general sobre los regímenes de fronteras en los tiempos modernos. De ello se sigue, por consiguiente, que la distinción trazada entre tratados dispositivos y otros tratados no se basa ni en un principio concreto del derecho internacional ni en la práctica moderna de los Estados. El informe fracasa en su intento de establecer una excepción al principio de la "tabla rasa" con respecto a los tratados dispositivos.

6. Se han mencionado los conceptos de continuidad y estabilidad como base de los principios que apoyan que el caso de la inviolabilidad de las fronteras es una excepción al principio de la "tabla rasa". Si se limitara la aplicación de esa norma a las fronteras permanentes demarcadas sobre una base justa y teniendo debidamente en cuenta los derechos e intereses de los pueblos interesados, habría razones para adoptarla en beneficio de la continuidad y la estabilidad de las relaciones internacionales. Ahora bien, es dudoso que ese argumento sea válido en el caso de los tratados coloniales dispositivos, que fueron celebrados puramente para salvaguardar y promover los intereses y ambiciones egoístas de las Potencias coloniales. La paz y la seguridad internacionales se verían seriamente comprometidas si se confirmase la validez de los tratados coloniales desiguales relativos a los regímenes de fronteras creados por las Potencias coloniales en los siglos XVIII y XIX y en clara contradicción con el derecho a la libre determinación y la igualdad soberana de los Estados. Es hora de que la comunidad internacional, a través de procedimientos institucionales, formule principios jurídicos, no solamente con respecto a la creación de nuevos títulos sobre la base de disposiciones *de facto*, sino también, cuando proceda, en el caso de los antiguos títulos territoriales, con miras a investigar, analizar y evaluar su legitimidad como base de la paz y la justicia.

7. La delegación de Somalia comparte la preocupación expresada por el representante de Madagascar (1537a. sesión) y de otros representantes con respecto a la validez de los artículos 11 y 12. El orador propone que se supriman esos artículos del proyecto, ya que las fronteras internacionales y los arreglos territoriales son cuestiones que caen esencialmente dentro de las esferas de las negociaciones bilaterales, de la conciliación y del arbitraje. Los problemas que surgen de los tratados de fronteras no pueden ser resueltos satisfactoriamente por normas rígidas universales que están en contradicción con el derecho a la libre determinación y la independencia. Existe además la necesidad de incorporar al proyecto de artículos un artículo que provea procedimientos de arbitraje y conciliación adecuados. Además, el propuesto artículo 12 *bis* (véase A/9610, nota 57) debería suprimirse o formularse con mayor exactitud y precisión. La delegación de Somalia no tiene objeciones a que se convoque una conferencia diplomática internacional de plenipotenciarios para debatir y finalizar el proyecto, a condición de que el proyecto de artículos se reexamine siguiendo las líneas que ha sugerido.

8. El Sr. GOBBI (Argentina) felicita a la CDI por su importante informe.

9. Con respecto al proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados (véase A/10010, cap. II, secc. B), dice que la exposición de la posición de América Latina hecha

en el párrafo 19 del comentario al proyecto de artículo 10 no es exacta. En determinadas oportunidades se adoptaron posiciones muy restrictivas en ese ámbito con el fin de evitar que la protección diplomática fuera una excusa para intervenir en los asuntos internos de un país determinado, pero esas actitudes no constituyen la línea rectora de la doctrina latinoamericana. La esencia de la posición latinoamericana fue tratar de precisar las normas internacionales para evitar abusos y colocar la circulación interestatal en pie de igualdad y de respeto mutuo, sin propugnar la eliminación de la responsabilidad. En el pasado, los países más poderosos, valiéndose del concepto de los derechos mínimos de toda sociedad civilizada, impusieron sus propias escalas de valores y se arrogaron las facultades de legisladores internacionales. La cláusula Calvo, en virtud de la cual se renuncia contractualmente a la protección diplomática y el extranjero queda exclusivamente sometido a la jurisdicción local, constituyó un esfuerzo para asegurar el trato igual de nacionales y extranjeros. Aunque inicialmente fue tratada con hostilidad y menosprecio, en la actualidad comienza a ser aceptada hasta en uno de los países que más la comabtió. Y lo que es más, la cláusula Calvo fue elogiada en el período de sesiones de 1960 del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano, y una delegación llegó a decir que era imprescindible para evitar intervenciones y resguardar la independencia de los Estados. Le complace ver que el informe de la CDI recoge las ideas de Calvo sobre la no responsabilidad de los Estados en casos de guerra civil.

10. Con referencia al artículo 10, el orador dice que contiene ideas correctas, aunque su redacción es poco clara. Podría haber sido más útil aligerar el texto del artículo, estableciendo una asimilación entre la conducta privada de los órganos de un Estado y la de los particulares mediante un inciso más al artículo 11.

11. Con respecto al artículo 11, observa que la teoría consagrada coincide con la inveterada práctica latinoamericana. El orador está de acuerdo en el comentario al artículo, pero desea aclarar un pasaje que critica a los partidarios de ciertas posiciones restrictivistas. El informe no señala el peligro que suponían algunas posiciones hipertróficas en materia de responsabilidad que las posiciones más estrictas trataron de contrarrestar. El problema radicaba en que los textos no consagraban claramente el principio de la irresponsabilidad por los actos particulares, sin perjuicio de admitir la responsabilidad en la hipótesis prevista en el párrafo 2 del artículo 11.

12. Con respecto a los artículos 12 y 13, el orador considera que los actos de órganos de otro Estado y de organizaciones internacionales podrían asimilarse a los actos de particulares sin necesidad de formar una categoría específica. Se trata evidentemente de casos en los que ningún órgano del Estado resulta directamente vinculado con la conducta ilícita. Es obvio que sería difícil probar el nexo de causalidad entre el comportamiento del Estado territorial y el del Estado extranjero.

13. Respecto de los artículos 14 y 15, que se refieren a los movimientos insurreccionales, el orador aprueba el criterio seguido. Aun aceptando el principio incorporado en el artículo 14 y la excepción contenida en su párrafo 2, el orador considera que el párrafo 3 constituye un error conceptual y metodológico. La redacción del párrafo es

muy confusa y parece que intenta establecer la responsabilidad de los órganos del movimiento insurreccional por hechos que le sean imputables. Si tal es el caso, se trata de establecer la responsabilidad de un sujeto dotado de una personalidad internacional relativa distinta de la del Estado, caso que cae fuera del ámbito del proyecto de artículos en examen. Por consiguiente, el párrafo 3 debería suprimirse, ya que trata de un tema claramente ajeno al objeto del proyecto. No obstante, el tema merece un estudio a fondo y debería considerarse en un contexto diferente.

14. Su delegación comprende la utilidad práctica de los preceptos contenidos en el artículo 15, que persiguen esencialmente preservar la seguridad jurídica. Ahora bien, todo nuevo gobierno tendrá una doble responsabilidad: la derivada de su propia gestión y la heredada de su predecesor. En ese último caso, cabe imaginar que el nuevo gobierno sea considerado responsable por los actos ilícitos del gobierno anterior, incluidos los actos armados destinados a sofocar la propia insurrección.

15. Refiriéndose al capítulo III, relativo a la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados, la delegación de la Argentina felicita al Relator Especial por su feliz incursión en una esfera compleja y con antecedentes doctrinales y judiciales escasos y dispersos.

16. Pasando al capítulo IV, que trata de la cláusula de la nación más favorecida, el orador considera que la CDI ha adoptado un enfoque técnico adecuado a los problemas planteados. Los artículos 9 y 10 han sido tratados con todo acierto por el Relator Especial. Los artículos 11 y 12 también han sido muy bien elaborados y servirán de marco interpretativo en el futuro, ya que limitan el ámbito de aplicación de la cláusula de la nación más favorecida, así como el de los derechos adquiridos como consecuencia de la aplicación de la misma. El artículo 13 está en consonancia con anteriores artículos, y los artículos 14 y 15 son coherentes con la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados¹.

17. Los artículos 16 y 17 plantean problemas de un tipo totalmente diferente. Conceptualmente, el tema de la cláusula de la nación más favorecida y la cuestión del trato nacional son dos temas diferentes. No obstante, están vinculados en la práctica y tienen importancia en el contexto del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). La delegación argentina coincide con la CDI en que el trato nacional podría estudiarse conjuntamente con la cláusula de la nación más favorecida. El trato nacional supone algunas consecuencias que los países en desarrollo deben pesar detenidamente. Además, esa materia no guarda relación directa con la doctrina latinoamericana de igualdad de tratamiento destinada a configurar una norma básica en materia de responsabilidad internacional. La CDI ha decidido acertadamente considerar el tema del trato nacional, pero en su labor futura deberían tenerse en cuenta los efectos de las dos cláusulas, particularmente con respecto a las uniones aduaneras y a los movimientos de integración económica semejantes.

¹ Véase *Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados*, *Documentos de la Conferencia* (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.70.V.5), documento A/CONF.39/27, pág. 311.

18. Uno de los aspectos más interesantes de la cláusula de la nación más favorecida es el examen de las excepciones. A ese respecto, se reconoce la existencia de dos tipos principales de situaciones: el caso de las distintas formas de integración (zonas de libre comercio, uniones aduaneras) y el tratamiento preferencial a favor de los países en desarrollo. Con respecto al primer caso, no cabe duda de que en la práctica reciente las uniones aduaneras y agrupaciones similares se han considerado excepciones a la cláusula. No obstante, no debería exagerarse la importancia de esa cuestión, especialmente dado que se resuelve a través del artículo XXIV del GATT.

19. El artículo 21 constituye una novedad en la legislación internacional y está encaminado a adaptar la antigua cláusula a las realidades del mundo moderno, con particular referencia a los países en desarrollo. El artículo tiene por objeto mejorar la situación de los países de menos recursos y está concebido como una excepción a los principios generales de la cláusula de la nación más favorecida. Sin esa excepción, el efecto de la cláusula sería hacer más pobres a los países pobres. Además, el artículo 21 responde a las preocupaciones expresadas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y expuestas en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados (resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General. Tal vez sería conveniente un enfoque más amplio y flexible al artículo 21 que, entre otras cosas, incluyera situaciones vigentes tales como las preferencias comerciales que los países en desarrollo se otorgan entre sí.

20. En lo que hace al capítulo V, la delegación argentina apoya la idea de seguir en lo posible el marco establecido en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969. También es positivo que la CDI haya incorporado al proyecto de artículos contenido en el capítulo V los conceptos de la Convención de Viena sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal, de 1975. Algunos artículos son idénticos a los de la Convención de 1969 o solamente difieren en la forma, y otros se apartan de esa Convención debido a las diferencias inherentes al tema. El segundo tipo de disposiciones plantea ciertos problemas que aparecen en los artículos 7, 9, 10 y 11. Otras cuestiones, tales como las reservas y el ámbito de aplicación geográfica, también plantean ciertos problemas. En el artículo 7 la distinción entre "plenos poderes" y "poderes" parece innecesaria. Con respecto al párrafo 2 del artículo 9, la delegación de la Argentina estima que no es aconsejable establecer la regla de los dos tercios para la adopción de textos en una conferencia internacional. La CDI ha realizado una labor encomiable en el capítulo V, y habría que felicitar al Relator Especial por su excelente presentación del tema.

21. Es de lamentar que la CDI no haya tenido tiempo para examinar con más detalle el tema del derecho de los usos de los cursos de aguas internacionales para fines distintos de la navegación. Ese tema tiene una actualidad de importancia, y un estudio del mismo por la CDI sometería a la prueba de codificar las disposiciones jurídicas pertinentes. El Gobierno de la Argentina ya ha respondido al cuestionario enviado por la CDI sobre el tema (véase A/9610/Rev.1, cap. V, anexo, párrs. 17 y 30) y ha definido su posición, que a su juicio refleja el derecho internacional en su

evolución actual. El orador reitera la confianza de la delegación argentina en la capacidad del Relator Especial para tratar el tema.

22. El Sr. GARCIA ORTIZ (Ecuador) agradece al Presidente de la CDI la excelente presentación de su informe, que es un verdadero volumen científico y demuestra que la CDI se supera cada vez más.

23. A su juicio, sería preferible que la CDI no comenzase el estudio de nuevos temas y lograrse terminar todos los que están pendientes. Sin perjuicio de la autonomía de su discernimiento, la CDI debe establecer sus prioridades de conformidad con las peticiones que le formula la Asamblea General, a instancia de la Sexta Comisión. A juicio de la delegación del Ecuador, el primer tema que debe ser exhaustivamente tratado es el de la responsabilidad de los Estados, dejando en segundo lugar el de la sucesión de Estados, tanto en materia de tratados como en materias distintas de los tratados. Y los demás vendrían a continuación en el orden que la CDI estimare conveniente.

24. El tema de la responsabilidad de los Estados constituye uno de los más intrincados del derecho internacional; los precedentes provenientes de los fallos arbitrales no guardan uniformidad, y es evidente que el tema, por sus aspectos políticos y diplomáticos, por un lado y, por otro, por los penales, se vuelve más discutible aún. En cierto momento ese punto ha servido hasta de instrumento de presión de los Estados fuertes sobre los débiles y pequeños, aplicándose especialmente a las relaciones de las grandes Potencias con los países latinoamericanos. La doctrina Calvo, a que acaba de hacer referencia el representante de la Argentina, es muy pertinente al respecto. No ha sido raro el caso, entre fines del siglo pasado y comienzos del presente en que, por daños insignificantes padecidos por un ciudadano extranjero en algún país latinoamericano, con motivo de perturbaciones del orden público, dicho ciudadano haya logrado movilizar todo un aparato político-diplomático de su país para reclamar y hacer efectiva una indemnización, lo que ha conducido algunas veces a que tales países se vean obligados a establecer, a manera de salvaguardia para las relaciones provenientes de contratos con personas jurídicas extranjeras, la llamada cláusula de reserva, en virtud de la cual se exige la renuncia a toda reclamación diplomática a la parte contratante, cláusula que inclusive ha revestido la forma de un precepto constitucional. Pero ése es un antecedente histórico que sirve para ayudar a medir la magnitud de los problemas relativos a la responsabilidad de los Estados. Ello explica que la propia CDI haya tropezado también con dificultades en su estudio.

25. El método seguido para examinar la cuestión de la responsabilidad de los Estados debe ser exclusivamente jurídico y, por analogía con la responsabilidad de los individuos, la de los Estados se debe tratar como un haz de deberes y conductas que pueden imputarse a un Estado.

26. Aunque los 15 artículos del proyecto, y en especial los 10 primeros, han recibido ya el consenso en el seno de la CDI, estima que el artículo 2, en la forma que está redactado, parece redundante.

27. El artículo 13 le parece correctamente formulado. Ahora bien, como se observa en el párrafo 7 del comentario

sobre dicho artículo, se plantea la cuestión de saber si las cláusulas que suelen figurar en acuerdos de asistencia técnica o de otra índole, en virtud de las cuales el Estado beneficiario asume la responsabilidad en caso de reclamaciones que pudieran ser hechas por terceros contra la organización internacional, habrán de considerarse como excepción a la norma enunciada en el artículo. La opinión de la CDI, expuesta en ese mismo párrafo 7, de que “En otros términos, no se trata en modo alguno de atribuir al Estado territorial un comportamiento ajeno, sino de que el Estado territorial asuma, en virtud de una convención especial, las consecuencias de un comportamiento que no es suyo, sino de la organización”, es simplemente un juego de palabras: la verdad está en que se trata de casos de responsabilidad indirecta o responsabilidad por hecho ajeno, como expresa la CDI en el mismo párrafo. La delegación del Ecuador aguardará los resultados del nuevo estudio que la CDI haga de la cuestión. No obstante, se pregunta hasta qué punto es justo aplicar una responsabilidad indirecta, que evidentemente existe en el derecho civil, en las relaciones internacionales. Tal aplicación permite a los organismos que prestan asistencia técnica obtener todas las ventajas posible del Estado beneficiario, que acaba siempre por verse obligado a asumir toda clase de responsabilidades, ya que a ello está condicionada la prestación de asistencia. La CDI debería estudiar ese punto, ofreciendo soluciones que satisficieran los intereses de la justicia y de la igualdad jurídica de los Estados.

28. El Gobierno del Ecuador tiene intención de emprender un estudio más profundo de los artículos referentes a la responsabilidad de los Estados, y enviará sus observaciones al Secretario General.

29. Si bien su delegación se reserva el derecho de hacer las debidas observaciones sobre el asunto de la cláusula de la nación más favorecida, desea por el momento limitarse a manifestar su conformidad con lo que expresó el representante del Perú en la sesión anterior. Evidentemente, la institución de la cláusula de la nación más favorecida obedeció a una realidad económica del pasado que está siendo superada por las nuevas realidades, que exigen poner a tono las regulaciones. La delegación del Ecuador mantiene también el principio de la dualidad de sistemas para los dos distintos mundos económicos que hoy se enfrentan entre sí, hasta cuando sea posible la implantación de un solo nuevo orden económico sobre la base de la cooperación mutua.

30. El Sr. RASOLKO (República Socialista Soviética de Bielorrusia) agradece al Presidente de la CDI su exhaustiva presentación al amplio informe de la CDI. La delegación de la RSS de Bielorrusia no tiene intención de comentar detalladamente cada uno de los temas tratados en el informe.

31. Es alentador observar que la CDI ha terminado por fin de examinar uno de los temas importantes del derecho internacional contemporáneo, el de la responsabilidad de los Estados, que ha figurado en el programa de trabajo de la CDI como tema prioritario desde 1949. Comentando en detalle el proyecto de artículos sobre ese tema, dice que la delegación bielorrusa no tiene objeciones serias al texto de los artículos 1 y 2. La definición que hace el artículo 3 de un “hecho internacionalmente ilícito” no es totalmente satisfactoria, por cuanto no abarca una serie de aspectos de

actos ilícitos cometidos por Estados. La definición no se detiene en actos graves como son la agresión, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, el uso de fuerza militar para aplastar movimientos de liberación nacional y la discriminación racial. Es cierto que en el capítulo III del proyecto de artículos la CDI tratará de definir ciertas categorías de violaciones de una obligación internacional. La delegación bielorrusa acoge con satisfacción los esfuerzos de la CDI a ese respecto y espera que los actos ilícitos a que se ha referido queden reflejados en el proyecto de artículos.

32. Por lo que respecta al artículo 10, estima que debe atribuirse a un Estado en todos los casos la responsabilidad por el comportamiento de sus órganos, por cuanto tales órganos ejercen prerrogativas del poder público. La frase “cuando tal órgano ha actuado en esa calidad” puede dar lugar a una interpretación ambigua, y la CDI debería darle nueva forma.

33. El artículo 13 no llega a dejar en claro que un órgano de una organización internacional, que esté situado y actúe en el territorio de un Estado determinado y que haya sido reconocido por dicho Estado, debe actuar de conformidad con el estatuto de la organización de que se trate, respetando y observando las leyes y costumbres del Estado territorial. Ese, a su vez, está obligado a prestar ayuda y colaboración a la organización internacional y sus órganos en la ejecución de las funciones establecidas en el estatuto de la organización.

34. En vista de la importancia que tiene el tema de la responsabilidad de los Estados, la delegación bielorrusa estima que la CDI debería con prioridad completar sin demora su labor al respecto, aunque sin sacrificar por ello la calidad.

35. Pasando a la cuestión de la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados a que se refiere el capítulo III del informe, observa que la CDI, en su 27º período de sesiones, ha podido examinar más a fondo sólo tres artículos, a saber: el 9, el 11 y el X, que han sido aprobados en primera lectura.

36. Por lo que respecta al artículo 9, le resulta difícil utilizar la expresión “estén situados en el territorio al que se refiera la sucesión de Estados”, por cuanto esa frase no abarca los bienes muebles del Estado situados fuera del territorio del Estado sucesor. En el párrafo 10 del comentario sobre el artículo 9, la CDI ha reconocido que el vínculo que une un bien mueble al territorio en el que se encuentra en un momento determinado es tenue y ha advertido que el paso de los bienes muebles del Estado predecesor al Estado sucesor a menudo es objeto de acuerdos basados en criterios distintos del de la situación de tales bienes en la fecha de la sucesión de Estados.

37. El artículo X, tal como lo interpreta la delegación bielorrusa, se refiere a todos los bienes de un tercer Estado, estén situados o no en el territorio del Estado predecesor o del Estado sucesor. En consecuencia, la propiedad de un tercer Estado no debe sufrir ninguna consecuencia lesiva como resultado de las relaciones entre el Estado predecesor y el Estado sucesor durante el proceso de sucesión.

38. Al volver sobre el tema, la CDI deberá tener presente que las cuestiones relativas a la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados deben considerarse teniendo debidamente en cuenta el principio de la soberanía de los Estados. Todo intento de utilizar la fuerza, la agresión o la ocupación para lograr la sucesión es contrario a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional. La delegación bielorrusa concuerda con quienes estiman que debe prepararse un texto unificado que abarque todas las cuestiones de la sucesión de Estados en materia de tratados y la sucesión en lo que respecta a materias distintas de los tratados, ya que unas y otras están relacionadas entre sí.

39. Pasando a la cláusula de la nación más favorecida, la delegación bielorrusa está satisfecha de la gran aportación que representa el proyecto de artículos formulados por el Relator Especial (véase A/10010, cap. IV, secc. B). Apoya la propuesta del Relator Especial relativa a la necesidad de examinar la cláusula de la nación más favorecida junto con el tema del trato nacional, ya que ambos están estrechamente relacionados entre sí. Eso obligará a volver a examinar el actual proyecto de artículos; en particular, habrá que estudiar cuidadosamente los artículos 17 y 18. Ahora bien, en general, ve favorablemente el proyecto de artículos sobre la cláusula de la nación más favorecida, que es un principio democrático y progresista destinado a reglamentar los derechos de los Estados en las relaciones comerciales. No obstante, la cláusula de la nación más favorecida sólo fomentará la expansión del comercio si se aplica sin discriminación alguna. En la nueva labor que realice sobre el tema, la CDI deberá tener en cuenta nuevos acontecimientos de índole progresista en la esfera del comercio internacional, inclusive las disposiciones pertinentes del Acta Final de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa.

40. El proyecto de artículos sobre los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales (*ibid.*, cap. V, secc. B) parece referirse más al mecanismo de procedimiento para concertar y aplicar dichos tratados que a la condición jurídica específica de las organizaciones internacionales partes en un tratado, que debe distinguirse de la condición jurídica de los Estados. La personalidad jurídica de las organizaciones internacionales difiere en muchos aspectos sustantivos de la personalidad de los Estados, siendo más limitada la de las primeras que la de los segundos. La personalidad jurídica de las organizaciones internacionales nace, se transforma o expira en virtud de una expresión conjunta de la voluntad de los grupos de Estados que constituyen tales organizaciones. Una organización internacional no es más que un cuerpo colectivo cuyo objetivo es adoptar medidas decididas por los Estados que la componen. Debe establecerse una distinción entre los tratados concertados entre Estados y organizaciones internacionales, por una parte, y los tratados concertados entre organizaciones internacionales, por otra. A juicio de la delegación bielorrusa, esas cuestiones no han sido adecuadamente tratadas en el proyecto de artículos. Como han señalado diversas delegaciones, los principios de los artículos pertinentes de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados no pueden aplicarse automáticamente al tema abordado en el capítulo V del informe de la CDI; aquella Convención contiene una serie de disposiciones que van en contra de los principios

fundamentales del derecho internacional contemporáneo. Es de lamentar que el Relator Especial y la CDI no hayan tenido plenamente en cuenta las observaciones de las delegaciones mencionadas.

41. Aunque la CDI ha realizado una considerable labor constructiva sobre una serie de proyectos de tratados, convenios y acuerdos, distan mucho de haberse agotado las posibilidades de realzar más la eficacia de su labor. La CDI procede con bastante lentitud en su labor sobre diversos temas importantes. Como trata varios temas a la vez, muchos pasan de un año a otro con consecuencias perjudiciales para la calidad de la labor sobre ciertos asuntos. A juicio de la delegación bielorrusa, la CDI debe analizar cuidadosamente los temas que todavía requieren más estudio y esforzarse por mejorar sus métodos de trabajo con miras a concluir con mayor rapidez la labor sobre los temas ya abordados. La CDI debe tener más en cuenta los procesos evolutivos positivos que se producen en el mundo, como son el fortalecimiento de la distensión y la afirmación de los principios progresistas consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Debe darse más realce al cometido de la CDI en la preparación de proyectos de instrumentos de derecho internacional.

42. La delegación bielorrusa desea manifestar que apoyará la aprobación del informe de la CDI sobre la labor realizada en su 27º período de sesiones.

43. El Sr. HAMBRO (Noruega) elogia al Presidente de la CDI por la presentación de su informe.

44. Como miembro de la CDI se siente particularmente interesado por las declaraciones en que se critica la labor de la CDI, por cuanto la crítica es más útil que la alabanza. A ese respecto, escuchó con interés y preocupación la declaración del representante de Sri Lanka (1538a. sesión) de que hasta hace poco tiempo el derecho internacional ha sido obra principalmente de colonialistas e imperialistas. Esa observación tiene bastante de verdad, ya que el derecho internacional ha sido creado en su mayor parte por Estados europeos. Por esa razón, su Gobierno atribuye gran importancia a la labor de la CDI. Tan sólo mediante esa labor, continuada en la Asamblea General y en conferencias internacionales, podrá establecerse un nuevo modelo de derecho internacional creado por todos los Estados. El propósito de la codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional es crear un derecho moderno de las naciones en armonía con la actual comunidad internacional. En su creación pueden participar actualmente todos los Estados, grandes y pequeños, viejos y nuevos, de manera que todas las naciones puedan sentirse autoras de ese derecho y confiar en que representa la expresión de las necesidades de la comunidad mundial.

45. Entiende que el representante de la República Socialista Soviética de Bielorrusia ha expresado impaciencia ante el ritmo lento que sigue el trabajo de la CDI. Son muchas las razones por las que debe trabajar con bastante lentitud. En particular, para que su obra sea expresión de toda la comunidad internacional, se debe permitir y alentar a todos a que participen en ella; los discursos pronunciados en la CDI son en ocasiones reiterativos, pero su labor tendría un interés considerablemente menor si no participasen todos los grupos. La CDI representa a todas las regiones del mundo, a todas las formas de civilización y a los principales sistemas jurídicos, lo cual debe quedar fielmente reflejado

en los debates. También se debe tener en cuenta que todos los miembros de la CDI son personas muy ocupadas, en su mayoría embajadores o profesores. No tiene la culpa de que su participación no entrañe un trabajo a tiempo completo como legisladores internacionales. Desea señalar que la Asamblea General decidió en 1952 (resolución 600 (VI)) no adoptar ninguna medida respecto de la petición de la CDI de que se le autorizase a trabajar todo el año, de manera que todos sus miembros tienen otras obligaciones. Además, la CDI tuvo que luchar para obtener la autorización de sesionar durante 12 semanas en lugar de 10. De todas maneras, deberá examinarse el problema de la lentitud de la labor de la CDI.

46. En derecho internacional, como en todo derecho, existe una tensión entre los elementos estáticos y los dinámicos. La seguridad tiene que ser el cimiento del derecho, y éste debe ser en cierta medida estático para que sus sujetos puedan saber cuál es la ley. Ahora bien, si la ley se hace demasiado estática, puede fosilizarse, como el derecho romano, y sólo ser susceptible de reforma mediante una revolución.

47. En correspondencia con esos elementos estáticos y dinámicos del derecho, están las dos tareas gemelas de codificación y desarrollo que incumben a la CDI, tareas imbricadas y con frecuencia difíciles de distinguir. En ocasiones, algunos miembros de la CDI pueden estimar que ya existe un elemento de derecho internacional apto para ser codificado, en tanto que otros estiman que tal elemento forma parte del desarrollo.

48. El Gobierno de Noruega está totalmente de acuerdo en la mayoría de los artículos sobre la responsabilidad de los Estados. El Relator Especial ha dado pruebas de gran pericia y su informe es un monumento de conocimientos y prudencia jurídicos. El informe se basa de tal manera en el derecho existente que, al mismo tiempo, es progresista y dedica acertadamente más atención a la jurisprudencia reciente que a la pasada. El debate desarrollado en la CDI ha servido al Relator Especial para preparar el informe, como se ha demostrado, por ejemplo, al suprimir un segundo párrafo relativo a actos *ultra vires* que se había propuesto para el artículo 10 y que hubiese debilitado peligrosamente dicho artículo. La labor de la CDI en esa esfera demuestra claramente la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno en lo que se refiere a la responsabilidad de los Estados. Inevitablemente, la CDI necesitó largo tiempo para estudiar el tema de la responsabilidad de los Estados, y la labor todavía no ha concluido. En ese sentido, observa el orador que las demoras para dar fin a la labor iniciada por la CDI no son consecuencia exclusivamente de los trabajos de la CDI, sino también de otras fases del proceso de codificación, como es la presentación de un informe a la Asamblea General, las deliberaciones consiguientes, la elaboración de un tratado y la convocación a una conferencia internacional. El tiempo transcurrido entre la firma y la ratificación de un tratado tiende a ser particularmente largo, debido a que surgen dudas sobre la corrección del tratado, a la lentitud o al exceso de prudencia de la burocracia, o al deseo de ver cómo reaccionan otros gobiernos. Estima que todos los representantes tienen la obligación de alentar a los gobiernos de sus países para que ratifiquen los tratados, de

manera que se pueda llevar a término rápidamente la última fase del proceso de codificación.

49. Expresa su admiración por el erudito y conciso capítulo V del informe, sobre la cuestión de los tratados en que participan organizaciones internacionales. La cuestión puede abordarse desde dos puntos de vista. Algunos tienden a subrayar las diferencias entre organizaciones internacionales y Estados y poner de relieve que las organizaciones internacionales no son soberanas y que tan sólo pueden ejercer las facultades que les confieren los Estados. El Gobierno de Noruega adopta el criterio opuesto; a saber, que las organizaciones internacionales deberán representar un papel más importante en el derecho internacional futuro, y que debe hacerse todo lo posible para facilitar su desarrollo. A ese respecto, no considera útil distinguir entre los poderes conferidos por los gobiernos y los conferidos por organizaciones internacionales, llamando a los primeros "plenos poderes" y a los otros meramente "poderes". Eso suena a conceptualismo y resulta una complicación innecesaria. Noruega adopta un enfoque pragmático y cree que las organizaciones internacionales adquirirán poderes sea cual fuere el nombre que se les dé.

50. Pasando a la cuestión de la cláusula de la nación más favorecida, recuerda, en calidad de miembro de la CDI, que todos sus componentes se mostraron de acuerdo en ayudar a los países en desarrollo en la forma prevista en el artículo 21. La nota de pie de página relativa a dicho proyecto de artículo no refleja desacuerdo alguno de fondo al respecto. Algunos miembros de la CDI consideraron simplemente que la cuestión de un sistema generalizado de preferencias era asunto de codificación, en tanto que otros estimaron que debería tratarse como derecho en desarrollo.

51. La cuestión de la aplicabilidad de la cláusula de la nación más favorecida a las uniones aduaneras y a las zonas de libre comercio no abarcaba única ni primordialmente a grupos como la Comunidad Económica Europea ni la Asociación Europea de Libre Comercio. Las uniones aduaneras y otras asociaciones de Estados de carácter semejante pueden desempeñar una importante función en África, Asia y América Latina, y los representantes no deben adoptar una actitud negativa frente a ellas por el simple hecho de que hayan surgido por vez primera en los países industrializados.

52. Por lo que se refiere al futuro programa de trabajo, observa que cuando la CDI esté integrada por otros miembros tendrá que decidir los temas que desee examinar. Deben seleccionarse temas que sean políticamente importantes. Si no, la labor será puramente académica. Pero deben ser de tal naturaleza que sean susceptibles de formulación jurídica. Deben haber llegado a cierto estado de madurez, pero todavía ser susceptibles de desarrollo progresivo. Entre tales temas se encuentra la responsabilidad por los actos jurídicos de los Estados y de organizaciones internacionales, la inmunidad de los Estados, la sucesión de gobiernos, el reconocimiento de Estados y de gobiernos, la extradición y otros temas. Espera que todas las delegaciones mediten sobre esas posibilidades y orienten a la CDI, con su nueva integración, en cuanto a los temas que deba examinar.

Se levanta la sesión a las 17.20 horas.

1541a. sesión

Jueves 16 de octubre de 1975, a las 15.40 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1541

TEMA 108 DEL PROGRAMA

Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 27º período de sesiones (*continuación*) (A/10010)

TEMA 109 DEL PROGRAMA

Sucesión de Estados en materia de tratados: informe del Secretario General (*continuación*) (A/10198 y Add.1 a 4, A/9610/Rev.1*)

1. El Sr. LAUTERPACHT (Australia) dice que el informe de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) (A/10010) inspira respeto no sólo por la eminencia de quienes lo han preparado sino también por su valor intrínseco. Huelgan, en la Sexta Comisión, comentarios detallados sobre el fondo del informe, pues en el caso de las formulaciones jurídicas específicas de la CDI esa tarea ha sido llevada a cabo con mayor eficiencia y por escrito por cada gobierno, y la gama de cuestiones que abarca el informe es en todo caso tan amplia que impide toda discusión exhaustiva. Además, el procedimiento de codificación utilizado por las Naciones Unidas establece que, en la etapa provisional, los comentarios pormenorizados de los gobiernos sólo podrán formularse por escrito. Un análisis a fondo en la Sexta Comisión sólo cabe en circunstancias limitadas, por ejemplo, cuando un representante pueda aportar su conocimiento personal sobre la labor de la CDI, como lo ha hecho el representante del Brasil (1538a. sesión), cuando las circunstancias requieran que la Sexta Comisión apruebe o enmiende la orientación sustantiva de la labor de la CDI o cuando no haya otra ocasión de formular comentarios a la CDI antes de que vuelva a considerar un determinado asunto. Por esa última razón, el orador desea comentar varios puntos sustantivos del informe.

2. Los artículos 14 y 15 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados (véase A/10010, cap. II, secc. B), y sus comentarios, constituyen exposiciones doctas y lúcidas del derecho relativo a las consecuencias de la insurrección. No obstante, un aspecto del tema que tiene importancia práctica específica es la cuestión del efecto de los actos de las autoridades insurreccionales *de facto* sobre la creación o la exoneración de obligaciones estatales. Un ejemplo de ese problema es la cuestión de saber qué derecho, si alguno existe, tienen los órganos de un movimiento insurreccional para exigir pagos a los extranjeros, por vía de impuesto o por otros medios y, si esos pagos se hacen efectivos, en qué medida exoneran de toda obligación al extranjero respecto de las autoridades legítimas. El párrafo 26 del comentario del artículo 14 alude a ese problema, pero la cuestión merece una formulación más específica en el propio artículo.

3. La cuestión que plantea ejemplifica la índole algo general del proyecto de artículos. Ello quizá sea una consecuencia inevitable de la naturaleza del tema de la responsabilidad del Estado, pero una mayor particularización de las normas, a fin de que dudas como la que acaba de mencionar puedan resolverse o por lo menos identificarse como no susceptibles de resolución, será posiblemente valiosa.

4. Un ejemplo adicional de la conveniencia de formular las normas de manera más específica es la definición de “un órgano de un movimiento insurreccional” que figura en el artículo 14. Los órganos de un Estado o de una organización internacional que se mencionan en artículos anteriores pueden identificarse sin recurrir a una definición, porque las estructuras de los Estados y las organizaciones internacionales están reguladas jurídicamente, pero lo mismo no sucede con los movimientos insurreccionales. Ese problema ha sido reconocido en el párrafo 3 del comentario del artículo 14, pero la declaración de que “la situación varía a partir del momento en que surge un movimiento insurreccional, en el sentido que se da a ese concepto en derecho internacional” no resuelve la cuestión. Lo que se trata precisamente de solucionar es el problema del sentido que tiene el término “movimiento insurreccional” en el ámbito del derecho internacional.

5. Refiriéndose al proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados (*ibid.*, cap. III, secc. B), el Sr. Lauterpacht señala a la atención el párrafo 4 del comentario del artículo 9 en que la CDI advierte que ha renunciado a formular una regla general para determinar cuáles son los bienes situados fuera del territorio a los que se aplica la sucesión de Estados. Ese comentario permite subrayar que el problema es de índole práctica; sin embargo, una indagación suplementaria quizá produzca cierto resultado positivo, aunque sólo sea una declaración general que reconozca el derecho del Estado sucesor a los bienes que eran atribuibles o que estaban asociados a la administración del territorio al que se aplica la sucesión de Estados.

6. Su último comentario sustantivo se relaciona con el proyecto de artículos sobre la cláusula de la nación más favorecida (*ibid.*, cap. V, secc. B). Los artículos 7 y 20 se refieren al trato que el Estado concedente otorga a un tercer Estado, pero ninguno de los artículos trata el aspecto temporal de ese problema. Por ejemplo, un Estado concedente puede autorizar al nacional de un tercer Estado que se establezca en su territorio conforme a una política interna a la sazón en vigor, pero puede suspender subsiguientemente esa política sin efecto retroactivo, a la vez que permite a los extranjeros ya establecidos que continúen la actividad que ya han iniciado. Podría surgir entonces un problema si el nacional de un Estado beneficiario reclamase el derecho de establecerse sobre la base de que los

* Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno período de sesiones, Suplemento No. 10.

nacionales de un tercer Estado siguen realizando actividades en el Estado concedente, con arreglo a una política ya no en vigor. Se trata de una cuestión de interés general y práctico, y el orador espera que la CDI le preste atención.

7. La práctica anterior muestra que la Sexta Comisión ha desempeñado solamente un papel limitado al examinar los aspectos sustantivos de la labor de la CDI. Por ejemplo, las resoluciones de la Asamblea General sobre previos informes, aprobadas por recomendación de la Sexta Comisión, solamente aluden en términos generales a cuestiones sustantivas y se ocupan sobre todo en cuestiones de procedimiento. Esa función limitada de la Sexta Comisión plantea la cuestión importante de saber qué debe esperarse del informe de la CDI. Es cierto que el contenido del informe, si bien se dirige formalmente a la Sexta Comisión, es estudiado por profesionales, especialistas y muchas otras personas, pero su innegable valor e interés no excusa a la Sexta Comisión de la tarea de evaluar más cuidadosamente si ese informe ha ido más allá de lo que la situación requería. La CDI debe naturalmente informar con suficiente amplitud acerca de su labor para que la Sexta Comisión pueda cumplir su tarea, pero el orador se pregunta si ello justifica realmente un informe de cerca de 400 páginas mimeografiadas.

8. El análisis de informes anteriores de la CDI refleja un cambio de práctica notable. Hasta el año 1970 inclusive, los informes apenas rebasaban las 40 páginas impresas, salvo en 1966 en que la CDI presentó el texto completo del proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados. Pero, en 1971, la extensión del informe aumentó notablemente a más de 150 páginas impresas y actualmente se ha incrementado aún más. Ese súbito crecimiento no puede explicarse por la incorporación de nuevos miembros a la CDI, que ya había sucedido en 1961, ni por la extensión de los períodos de sesiones de la CDI, que no han aumentado proporcionalmente a la longitud de los informes. La explicación reside más bien en la mayor longitud de cada capítulo y en el gran número de materias que la CDI ha examinado.

9. El informe incluye actualmente un comentario académico muy completo sobre cada proyecto de artículo, como se observa en los capítulos sobre responsabilidad de los Estados y sobre la cláusula de la nación más favorecida del informe que se examina. Eso significa que el papel secundario del informe, a saber, la difusión de material científico, comienza a sobrepasar a su función primordial, que es mantener informada a la Asamblea General sobre la labor de la CDI. Tal riqueza de material reduce las posibilidades que tiene la Sexta Comisión para estudiar adecuadamente el informe durante el limitado período que transcurre desde su aparición y el inicio de los debates y le dificulta su análisis de los puntos centrales que reclaman su atención. Además, quienes no pertenecen a la Sexta Comisión no podrán dejar de notar el gasto que significa preparar informes de tal entidad.

10. Esas consideraciones pasajeras no deben menoscabar una labor que en cierto sentido se escribe para la posteridad. Por otro lado, buena parte del mismo material científico puede hallarse en etapas precedentes y ulteriores de la labor de la CDI. Los informes de los Relatores Especiales, que contienen citas minuciosas de decisiones judiciales, práctica de los Estados y doctrina de los autores,

figuran en el *Anuario* de la CDI, a menudo en términos idénticos a los que figuran en el informe. Y, posteriormente, cuando se trata de formular un proyecto de artículos definitivo, la CDI sin duda preparará comentarios, como lo ha hecho en el pasado para los proyectos de artículos sobre el derecho del mar y el derecho de los tratados. Si el material científico ha de figurar en el comentario sobre el proyecto de artículos definitivo, los argumentos para omitirlo de los informes de la CDI, en una etapa intermedia, son quizá muy valederos.

11. En lugar de contener comentarios académicos detallados, el informe debería proporcionar a la Sexta Comisión una explicación de los fundamentos de la formulación del proyecto de artículos por la CDI. La práctica judicial y de los Estados, así como la doctrina de los autores, tienen cierta importancia a ese respecto, pero su presentación no debe recargar el comentario ni oscurecer las cuestiones. El comentario, en realidad, deberá identificar específicamente todo punto sobre el que la CDI desee la asistencia de la Asamblea General o de la Sexta Comisión.

12. Las observaciones del orador sobre la longitud del informe no son una crítica de la CDI ni de sus distinguidos Relator y Relatores Especiales. Tienden únicamente a individualizar una tendencia que, de mantenerse, podría ser negativa para la causa de la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional.

13. Otro factor que incluye en la extensión del informe es que cada capítulo sustantivo empieza con una recapitulación de la labor sobre el tema realizada en anteriores períodos de sesiones de la CDI. El Sr. Lauterpacht no cuestiona la necesidad de formular esas recapitulaciones en las circunstancias que prevalecen actualmente. Con el método actual de dividir en varios años el examen de un tema, son esenciales pasajes que relacionen la labor de un año con la de años anteriores, si bien caben ciertas síntesis. Se pregunta, no obstante, si no sería ventajoso instar a la CDI a que se concentrara más intensivamente en el análisis de menos temas durante períodos más breves. Por ejemplo, podría sugerirse a la CDI que limitase su labor, como ya lo hizo anteriormente, a uno o dos temas por períodos de sesiones, en lugar de cuatro, para que pudiera concluir sus deliberaciones con mayor rapidez. Ello exigiría más moderación a los Miembros de las Naciones Unidas que desearan proponer temas para su examen por la CDI y significaría además que ella debería planificar aún más cuidadosamente su programa. Eso recargaría también la tarea de los Relatores Especiales asignados a cada tema, si bien por períodos más breves. A pesar de todo, esos objetivos deberían ser alcanzables y la Sexta Comisión tendría al menos que identificarlos como deseables.

14. De lo dicho se deduce que la delegación de Australia acoge con beneplácito la declaración que figura en el párrafo 140 del informe, en el sentido de que se haya constituido en el seno de la Mesa Ampliada un grupo de planificación encargado de estudiar el funcionamiento de la CDI y de formular sugerencias acerca de su trabajo. Su delegación observa con preocupación que, sobre la base de los cálculos de ese grupo, el tiempo de la CDI estaría dedicado enteramente hasta el año 1981 a los asuntos ya en examen. Sin embargo, como se expresa en el informe de la CDI sobre la labor realizada en su 26° período de sesiones

(A/9610/Rev.1), existen ya varios asuntos adicionales cuya consideración por la CDI se considera aconsejable y, dado el carácter dinámico de la sociedad internacional, cabe suponer que otros asuntos más habrán de proponerse inevitablemente. El orador se pregunta de qué manera podrá encarar la CDI esa acumulación de trabajo. El Sr. Lauterpacht cree que existe un acuerdo general en que la solución no reside en aumentar el tamaño de la CDI dividiéndola en secciones, o en prolongar sus períodos de sesiones. Deben estudiarse, por lo tanto, técnicas diferentes y quizás simplificadas, o aun técnicas adicionales.

15. En años recientes, cuando la CDI ha tenido tiempo para examinar su programa de trabajo a largo plazo, lo ha hecho casi exclusivamente en función de la selección de temas por examinar. Ya en 1973 varios miembros se refirieron a la necesidad de mejorar los métodos de trabajo e incluso ahora, el examen escrito más reciente sobre las técnicas de la CDI es la reseña objetiva de la Secretaría que figura como anexo del informe de la CDI sobre su 20º período de sesiones¹. Por lo tanto, el Sr. Lauterpacht espera que en los meses venideros la CDI pueda volver a considerar tanto sus métodos como su programa.

16. Las cuestiones que el orador ha planteado reflejan sólo parcialmente un problema mucho mayor. En la sesión anterior, el representante de Noruega recordó a la Sexta Comisión la necesidad de reconocer los límites de la capacidad de los Estados para examinar adecuadamente el material producido por la CDI, y también de hacer caso a las advertencias. Pero como sólo una pequeña porción del nuevo material convencional multilateral internacional refleja la tarea de la CDI, aparentemente las Naciones Unidas se están aproximando al momento en que deberán efectuar un examen general de todo el sistema internacional de elaboración de tratados, tanto fuera como dentro de la CDI. Deben examinarse las respectivas funciones de la Secretaría y de los Relatores Especiales. Ha de estudiarse la posibilidad de elaborar un conjunto de directrices para garantizar un enfoque uniforme para los comentarios de los proyectos con el propósito de simplificar su examen gubernamental. La medida en que cabe otorgar un papel a las subcomisiones legislativas debe evaluarse y debe revisarse el funcionamiento de las conferencias diplomáticas. La Sexta Comisión tendría que reflexionar sobre su propia función como Comisión de Asuntos Jurídicos — y subraya las palabras “Asuntos Jurídicos” — de la Asamblea General, dentro del proceso legislativo internacional total. La legislación internacional por vía de tratados es un arte y no un accidente. Se trata de una técnica compleja y flexible que cambia a medida que la sociedad lo hace. Si la Sexta Comisión es incapaz de reflexionar productivamente sobre ese problema, es difícil suponer que ello suceda en otro ámbito.

17. El Sr. KHAN (Pakistán) agradece al Presidente de la CDI la clara presentación de su informe. En lo que atañe a la importante cuestión de la responsabilidad de los Estados, el orador aprueba el criterio de la CDI, es decir, pasar gradualmente de las cuestiones generales a las particulares. El tema debe ser objeto de una detenida consideración y habría que prestar especial atención a los problemas que se suscitan como consecuencia de la agresión.

18. Ya en anteriores períodos de sesiones se ha dejado constancia de las opiniones de la delegación del Pakistán respecto de la sucesión de Estados en materia de tratados, y el orador sólo desea añadir que, respecto de los tratados territoriales, su delegación apoya el principio de la continuidad, en aras de la amistad y de la paz y la seguridad internacionales. En lo tocante a la cláusula de la nación más favorecida, el orador insta a que se protejan plenamente los intereses de los países en desarrollo.

19. El Sr. FRANCIS (Jamaica) expresa el cálido reconocimiento de su delegación por la informativa presentación del informe de la CDI hecha por su Presidente.

20. En relación con el proyecto de artículos sobre responsabilidad de los Estados, el orador dice que no se puede impugnar la norma del artículo 10 que atribuye responsabilidad al Estado por el comportamiento de órganos que actúan excediéndose en su competencia o en contra de las instrucciones concernientes a su actividad. El orador deplora que no se haya formulado con igual claridad y precisión la norma similar prevista en el artículo 8 respecto de los actos de individuos, pero toma nota de que en el párrafo 2 del comentario al artículo 10 se encuentra una explicación clara y precisa del principio implícito en el artículo 8. El artículo 11, estrechamente relacionado con el artículo 8, adolece también de ciertas deficiencias. Sigue pendiente la cuestión de saber cuándo una persona o un grupo de personas no actúa por cuenta del Estado. A los efectos de los artículos 8 y 11, en la formulación requerida habría que destacar los elementos esenciales en el sentido de que la persona o grupos de personas de que se tratae deben haber tenido la intención de actuar por cuenta del Estado y, además, debe establecerse que, de hecho, no han actuado por cuenta del Estado. En consecuencia, el texto del párrafo 1 del artículo 11 debería ser el siguiente:

“No se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de una persona o de un grupo de personas que pretendan actuar por cuenta del Estado, si se establece que, de hecho, esa persona o grupo de personas no actuaban por cuenta del Estado”.

Esa redacción no afectaría a la del párrafo 2 del artículo 11, con la que su delegación conviene plenamente, y el orador la recomienda a la consideración de la CDI.

21. El orador señala que, en su labor sobre responsabilidad de los Estados, la CDI se ve frente al delicadísimo problema de armonizar el principio de la *lex lata* previsto en su Proyecto de Declaración de Derechos y Deberes de los Estados², de 1949, con los principios de *lex lata* y *lex ferenda* incluidos en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, aprobada por la Asamblea General en 1974 en su resolución 3281 (XXIX).

22. En relación con la labor de la CDI respecto de la cláusula de la nación más favorecida, el orador advierte la especial importancia que tiene el artículo 21 para los países del tercer mundo. A la luz de las observaciones que figuran en el párrafo 11 del comentario sobre ese artículo y de la declaración del Presidente de la CDI de que en el artículo

¹ Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo tercer período de sesiones, Suplemento No. 9.

² *Ibid.*, cuarto período de sesiones, Suplemento No. 10, Segunda parte.

no se protegía en forma suficiente los intereses de los países del tercer mundo (1534a. sesión), la delegación de Jamaica opina que tal vez la mejor solución sería que la Asamblea General pidiera a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo que colaborara con la CDI en sus trabajos futuros de redacción del artículo 21, con miras a velar porque se tuvieran suficientemente en cuenta los intereses de los países en desarrollo.

23. Complace al Sr. SADI (Jordania) que el representante de Australia haya tomado la iniciativa de plantear el problema que entraña para los miembros de la Sexta Comisión el tamaño y el contenido del informe de la CDI. Resulta especialmente difícil para una delegación pequeña, como la de Jordania, analizar un informe de tal entidad en el corto tiempo disponible y preparar observaciones y juicios de carácter sustantivo. El orador sugiere que, en esa etapa, la Sexta Comisión se limite a formular declaraciones de política y dar directrices para la labor de la CDI. Si

bien no quiere en modo alguno minimizar la valía e importancia de la dura tarea efectuada por los expertos jurídicos y por los juristas miembros de la CDI, el orador pide que ésta tenga en cuenta las observaciones del representante de Australia y que, en el futuro, su informe sea más conciso y en mayor consonancia con el programa de trabajo de la Sexta Comisión. Habida cuenta del breve tiempo de que dispone para examinar el informe, no se puede prever que la Sexta Comisión estudie en forma detallada y completa 200 páginas de proyectos de artículos. El hecho de presentar informes de tanta longitud equivale a pedir a la Sexta Comisión que simplemente no los lea. Como consecuencia, deplorablemente la Sexta Comisión se encuentra en una situación en que no puede siquiera ocuparse adecuadamente de los aspectos de procedimiento de la tarea.

Se levanta la sesión a las 16.30 horas.

1542a. sesión

Viernes 17 de octubre de 1975, a las 10.45 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1542

TEMA 108 DEL PROGRAMA

Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 27º período de sesiones (continuación) (A/10010)

TEMA 109 DEL PROGRAMA

Sucesión de Estados en materia de tratados: informe del Secretario General (continuación) (A/10198 y Add.1 a 4, A/9610/Rev.1*)

1. La Sra. ULYANOVA (República Socialista Soviética de Ucrania) señala en primer lugar que la responsabilidad de los Estados guarda relación con la garantía del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y recuerda que la Sexta Comisión ya ha emitido su opinión respecto de la interpretación que cabe dar al sentido y alcance de la responsabilidad de los Estados, especialmente en la resolución 3315 (XXIX), aprobada por la Asamblea General por recomendación de la Sexta Comisión. Si bien la delegación de la RSS de Ucrania se da cuenta de cuán complejo es codificar esa cuestión, le preocupa la lentitud de los trabajos y deplora que, hasta ahora, la Comisión de Derecho Internacional (CDI) sólo haya aprobado 15 artículos (véase A/10010, cap. II, secc. B), esto es, sólo la mitad de la primera parte del plan del proyecto. Esos artículos se refieren a la teoría general de la responsabilidad y enuncian las normas generales que definen al contenido y la orientación del proyecto. Ahora, la CDI debe emprender una tarea tal vez aun más compleja, la de expresar esas normas generales en términos más precisos y detallados. La

delegación de la RSS de Ucrania señala a la atención de la Comisión el párrafo 35 del informe de la CDI, según el cual la CDI se propone concentrar su estudio en la determinación de las normas que rigen la responsabilidad, manteniendo una distinción rigurosa entre esa tarea y la que consiste en definir las normas que atribuyen a los Estados obligaciones cuya violación puede ser causa de responsabilidad. Al codificar la cuestión de la responsabilidad, conviene tener en cuenta la evolución del concepto mismo de responsabilidad en el derecho internacional contemporáneo. Debe, pues, hacerse hincapié en la responsabilidad de los Estados en caso de transgresiones graves como la agresión, que constituye un crimen contra la paz y la humanidad.

2. En lo que concierne a los artículos aprobados por la CDI en su 27º período de sesiones, la delegación de la RSS de Ucrania está de acuerdo con la postura adoptada por la CDI respecto del artículo 10; en efecto, estima que, en vista de la práctica y la doctrina modernas, procede atribuir al Estado el comportamiento de órganos del Estado, incluso cuando se exceden en su competencia. En cuanto al artículo 11, éste delimita claramente los fundamentos jurídicos de la responsabilidad de los Estados. En relación con el artículo 12, la representante de la RSS de Ucrania hace notar que el Estado en cuyo territorio otro Estado ejecuta un hecho ilícito internacional es responsable cuando haya dado su consentimiento o su cooperación. El artículo 13 merece un estudio más a fondo y habría que simplificar y aclarar los artículos 14 y 15.

3. En relación con el proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados (*ibid.*, cap. III, secc. B), la delegación de la RSS de Ucrania atribuye especial importancia al artículo X,

* Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno período de sesiones, Suplemento No. 10.

aprobado con carácter provisional, con arreglo al cual una sucesión de Estados no afecta en cuanto tal a los bienes, derechos e intereses que pertenezcan a un tercer Estado.

4. Refiriéndose al proyecto de artículos sobre la cláusula de la nación más favorecida (*ibid.*, cap. IV, secc. B), la Sra. Ulyanova toma nota con satisfacción de los importantes resultados alcanzados por la CDI, que, en gran parte, se deben al Relator Especial, quien realizó un estudio a fondo del problema sobre la base de un análisis de la práctica y la doctrina. La cláusula de la nación más favorecida existe desde hace más de un siglo y ha adquirido cada vez más importancia a medida que se ha ido desarrollando la cooperación entre los Estados. En sus trabajos, la CDI debe asignar el lugar que le corresponde al estudio de las normas de derecho internacional que pueden fomentar la cooperación y eliminar los obstáculos artificiales a la cooperación internacional dimanados de la guerra fría. La delegación de la RSS de Ucrania conviene en que la cláusula de la nación más favorecida sería uno de los medios de poner en práctica los principios de la igualdad de los Estados y de la no discriminación. Le complace el hecho de que la CDI, si bien reconoce la importancia fundamental de la función de la cláusula de la nación más favorecida en la esfera del comercio internacional, no desea limitar su estudio a la aplicación de la cláusula en esa esfera sino hacerlo extensivo a la aplicación de la cláusula en todas las esferas posibles. En su último período de sesiones, la CDI se planteó varias cuestiones que no ha resuelto del todo. Especialmente, la CDI se preguntó si debía incluir en el proyecto de artículos disposiciones relativas al trato nacional. La delegación de la RSS de Ucrania apoya la opinión del Relator Especial, que considera indispensable prever disposiciones en ese sentido dado que ambas instituciones tienen varias características comunes. Además, la CDI, que había decidido centrarse en la elaboración de artículos relativos a la cláusula de la nación más favorecida, se vio obligada por consideraciones lógicas a elaborar también dos artículos relativos al trato nacional. Si la CDI hubiera propuesto al mismo tiempo dos series de artículos, una relativa exclusivamente a la cláusula de la nación más favorecida, y otra relativa a la vez a la cláusula y al trato nacional, se habrían facilitado sus trabajos futuros y los gobiernos habrían podido, en sus observaciones, pronunciarse a favor de una de las dos variantes.

5. La CDI tiene ante sí otra cuestión, la de saber si la cláusula de la nación más favorecida otorga el derecho de beneficiarse de las ventajas acordadas en el marco de una unión aduanera o de otras asociaciones semejantes de Estados. Al respecto, la delegación de la RSS de Ucrania comparte plenamente la opinión del Relator Especial de que no debe excluirse del ámbito de aplicación de la cláusula de la nación más favorecida a las ventajas acordadas en virtud de una unión aduanera. Cabe prestar especial atención a dos consideraciones; en primer lugar, se desprende de un análisis detenido de la cuestión que ninguna norma general del derecho internacional contemporáneo excluye del campo de aplicación de la cláusula que se examina las ventajas acordadas en el marco de una unión aduanera; el hecho de que en ciertos acuerdos figure tal o cual excepción a la cláusula de la nación más favorecida confirma la inexistencia de una norma en ese sentido en el derecho internacional contemporáneo; los Estados tienen plena libertad para incluir en sus acuerdos cualquier

disposición en que convengan. En cambio, la inclusión en el proyecto de artículos de una cláusula encaminada a excluir del ámbito de aplicación de la cláusula de la nación más favorecida las ventajas acordadas en el marco de una unión aduanera disminuiría considerablemente el interés del proyecto, iría en contra de las tendencias en materia de desarrollo de la cooperación entre los Estados, especialmente entre los Estados con diferentes sistemas económicos y sociales, y no respondería a las necesidades legítimas del desarrollo de las relaciones internacionales contemporáneas.

6. Por otra parte, tomando nota de que la CDI desea proseguir el estudio de la cuestión de la cláusula de la nación más favorecida y los diferentes niveles de desarrollo económico, la delegación de la RSS de Ucrania destaca que la elaboración de proyectos de artículos tendientes a resolver esa cuestión debe basarse en una comprensión cabal de las necesidades objetivas del desarrollo de las relaciones económicas y de los intereses de los países en desarrollo.

7. Refiriéndose a la cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales, la Sra. Ulyanova hace notar que sus observaciones tienen carácter preliminar, pues la elaboración del proyecto de artículos está en una de sus etapas iniciales. Como se desprende del capítulo V del informe, dedicado a esa cuestión, la CDI decidió atenerse en la mayor medida posible a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, pero, en sus trabajos futuros, la CDI deberá basarse en un análisis más a fondo de las diferencias básicas entre la naturaleza jurídica de los Estados y la de las organizaciones internacionales. Esa cuestión ha pasado a ser un tema separado de codificación porque se han advertido diferencias considerables, en el plano jurídico, entre los tratados concertados entre Estados y los concertados entre organizaciones internacionales. No es posible obviar las dificultades que señala la CDI (en particular, el artículo relativo a los plenos poderes y a los poderes) limitándose a modificar la terminología empleada. La codificación de esa cuestión exige buscar soluciones basadas en un análisis más a fondo de la naturaleza misma de las organizaciones internacionales. Conviene también tener en cuenta la práctica, que se caracteriza especialmente por el fortalecimiento de la función de las organizaciones internacionales en las relaciones internacionales, el aumento del número de estas organizaciones y la diversificación de su naturaleza.

8. El examen del informe de la CDI por la Sexta Comisión constituye un elemento importante de la contribución de la Asamblea General a la codificación del derecho internacional. Para evaluar los progresos alcanzados por la CDI, procede analizar los resultados que ella ha logrado respecto de tal o cuál materia de codificación y compararlos con la labor de codificación que se le confió en un momento determinado. Esa forma de encarar los problemas permitiría llegar a soluciones más justas y en mayor consonancia con la realidad.

9. La Sra. Ulyanova señala que, en su anterior período de sesiones, la CDI dedicó cierto tiempo al examen de su programa de trabajo. No cabe duda alguna de que la codificación es una tarea difícil que exige un estudio detenido de algunas cuestiones y que los miembros de la CDI deben hacer gala de la más alta competencia; sin

embargo, no es menos cierto que la CDI debe perfeccionar sus métodos de trabajo a fin de utilizar al máximo sus posibilidades. La CDI no debería dispersar sus esfuerzos. Si se centrara en un número más limitado de problemas, podría resolverlos con la rapidez suficiente para que no perdieran su actualidad, como sucedió con la sucesión de Estados en materia de tratados. Dado que cada año la CDI difiere el examen de algunas cuestiones, que no ha tenido tiempo de estudiar, la delegación de la RSS de Ucrania propone que la CDI se limite al examen de los temas respecto de los cuales ya existan proyectos de artículos, a saber, la responsabilidad de los Estados, la sucesión de Estados en materias distintas de los tratados, la cláusula de la nación más favorecida y la cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales. A reserva de esas observaciones, la delegación de Ucrania es partidaria de que se apruebe el informe de la CDI.

10. El Sr. LUGOE (República Unida de Tanzania) recuerda que durante el vigésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General, su delegación formuló observaciones en la Sexta Comisión (1496a. sesión) sobre la lentitud que caracteriza la labor de la CDI. En tanto que el derecho debe responder a las exigencias del momento, la CDI parece complacerse más en doctas exposiciones que en la búsqueda de soluciones jurídicas a los problemas que se plantean actualmente a la comunidad internacional. Así, el estudio de la sucesión de Estados, que ocupa a la CDI desde hace mucho tiempo, sólo se ha materializado en un proyecto de convención al finalizar la era de la descolonización, lo que suscita la cuestión de la utilidad de la CDI o, por lo menos, subraya la necesidad de reexaminar sus métodos de trabajo. La utilidad de un órgano depende de su aptitud para obtener ciertos resultados en el momento en que son necesarios. En cuanto a la CDI, se comprueba además que ha sido necesario crear otros órganos para tratar cuestiones que normalmente habrían sido de su competencia. Sin embargo, la delegación tanzaniana observa con satisfacción que la CDI reconoce actualmente la necesidad de acelerar su labor, según se infiere del número de temas que ha examinado en 1975.

11. Tras precisar que por el curso de los trabajos de la CDI, las opiniones de la delegación tanzaniana sobre el informe que se examina no pueden sino tener un carácter preliminar, el Sr. Lugoe indica que su delegación aprueba el principio general formulado sobre la responsabilidad de los Estados. En cuanto al principio enunciado en el artículo 12 del proyecto de artículos sobre esa cuestión, considera necesario precisarlo. Las relaciones internacionales proporcionan efectivamente un gran número de ejemplos de situaciones confusas que ese artículo podría aclarar. Las naciones poderosas han cometido frecuentemente en el territorio de otros Estados actos que causan perjuicio a terceros Estados y han negado subsiguientemente su responsabilidad invocando el hecho de que esos actos no se cometieron en su propio territorio. Por ello tiene importancia que se proclame en términos inequívocos que un Estado es responsable de su conducta, aun si ella se ha manifestado en el territorio de otro Estado. Una disposición de ese género no sólo contribuiría a proteger los derechos de los Estados soberanos, y en particular de las naciones pequeñas, sino que haría ver a quienes se dedican a actividades clandestinas contra otros Estados, que son

indiscutiblemente responsables por el comportamiento de sus órganos.

12. La norma enunciada en el artículo 15 se refiere a la atribución al Estado del hecho de un movimiento insurreccional victorioso y se inspira en la teoría de la continuidad. Según la delegación tanzaniana, sería oportuno que la CDI tuviese también en cuenta la historia de los movimientos insurreccionales y el hecho de que, una vez triunfante, formulan frecuentemente una declaración relativa a las responsabilidades que están dispuestos a asumir. Por otra parte, la CDI debería hacer una clara distinción entre los movimientos insurreccionales y los movimientos de liberación, que no pueden considerarse en un mismo plano. La legitimidad de la lucha de los movimientos de liberación deriva de las disposiciones de la propia Carta de las Naciones Unidas. Debería quedar bien en claro que los Estados que niegan a su población el derecho a la libre determinación son responsables por los hechos cometidos por sus movimientos de liberación nacional ante los terceros Estados. A ese respecto, la CDI debería tener también en cuenta la historia de los movimientos de liberación nacional; es posible comprobar que ellos actúan generalmente desde el territorio de terceros Estados. Ahora bien, esos Estados con frecuencia se han visto amenazados con represalias u otros actos parecidos que estarían pretendidamente legitimados por el derecho internacional clásico. Habida cuenta de la primacía de las normas jurídicas contenidas en la Carta, cabe suponer que el tercer Estado que sustenta a una población que lucha por ejercer su derecho de libre determinación conforme a la Carta no asume responsabilidad alguna respecto de los regímenes coloniales o racistas que niegan ese derecho a su población. El movimiento de liberación triunfante no debería tampoco considerarse responsable por los actos cometidos durante su lucha. Sería útil insertar una disposición a ese efecto en el proyecto de artículos.

13. La delegación tanzaniana reconoce los progresos realizados por la CDI en el estudio de la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados, pero no comprende por qué esos trabajos deben limitarse a los bienes situados en el territorio del Estado sucesor. En lo tocante a la sucesión de Estados en materia de tratados, su delegación constata que el principio enunciado por la CDI es el de la "tabla rasa", pero que éste lleva consigo excepciones atinentes a los tratados de frontera y otros tratados relativos a los derechos de utilización del territorio por terceros Estados. Al respecto, es conveniente que se tenga en cuenta el hecho de que cuando tales tratados han sido celebrados por el Estado predecesor, éste no siempre estaba autorizado para conferir tales derechos de utilización a terceros Estados. Tal es el caso, por ejemplo, cuando los poderes de soberanía de un territorio colonial han sido confiados a una Potencia administradora. Ha llegado a suceder que la Potencia administradora celebre tratados que rebasan su mandato. Por ello, la delegación tanzaniana estima que antes de examinar si esos tratados son objeto de sucesión, correspondería asegurarse de su validez.

14. Las dos cuestiones principales que se destacan en el proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados son de orden político y desbordan el mandato estrictamente jurídico de la CDI. Conforme a la práctica, correspondería convocar una conferencia diplo-

mática pero, habida cuenta de las dificultades en materia de personal y de recursos que aquejan a los países pequeños, la delegación tanzaniana se pronunciará por el examen del proyecto en la Sexta Comisión.

15. La Sra. HERNANDEZ CARMONA (Cuba) agradece al Presidente de la CDI la excelente presentación de su informe. Por falta de tiempo, sólo comentará dos cuestiones prioritarias estudiadas en el informe, a saber, la responsabilidad de los Estados y la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados.

16. Por lo que hace a la responsabilidad de los Estados, durante el vigésimo noveno período de sesiones se acordó limitar por el momento el alcance del proyecto de artículos a la responsabilidad por hechos internacionalmente ilícitos (resolución 3315 (XXIX)). Por eso, la CDI se ha circunscrito a fijar una noción general de responsabilidad, entendida como el conjunto de relaciones jurídicas nuevas a que puede dar origen un hecho internacionalmente ilícito, cualquiera sea el sector al que corresponda la norma violada por la acción o la omisión imputable al Estado según el derecho internacional. No se sabe aún con claridad qué posición adoptará la CDI en el futuro sobre esa cuestión: ¿se atenderá a las fórmulas generales conservadas hasta el presente o definirá más exactamente diferentes tipos de violación de obligaciones internacionales de carácter civil, administrativo o penal? La delegación de Cuba estima que no basta afirmar que todo hecho internacionalmente ilícito compromete la responsabilidad internacional del Estado; es indispensable dar una definición objetiva de los hechos que generan la responsabilidad internacional, pues contentarse con enunciar un principio general equivale en realidad a dejar al intérprete del derecho la facultad discrecional de decidir si el acto calificado de ilícito por una de las partes compromete la responsabilidad internacional del Estado de que se trate. Por lo tanto, hay que definir en el proyecto de artículos al menos las categorías de violación que más reprueba la conciencia universal, por ejemplo, las que ponen en peligro la paz y la seguridad internacionales, y prevén los recursos necesarios. Entre las demás violaciones graves cabe citar la agresión, sea de carácter militar, político o económico y, tratándose de la agresión económica, conviene insistir particularmente en el bloqueo económico y en el saqueo de los recursos naturales de un territorio dependiente. Deben subrayarse igualmente las violaciones de los derechos humanos, la discriminación racial y la explotación brutal de los trabajadores extranjeros. La delegación de Cuba está convencida de que la responsabilidad internacional es uno de los campos en que el desarrollo progresivo del derecho internacional tiene un papel particularmente importante que cumplir.

17. En lo que concierne al artículo 8, que prevé la atribución al Estado del comportamiento de personas que actúan de hecho por cuenta del Estado, la delegación de Cuba considera que el inciso a) es positivo, pero le preocupa la indeterminación de su alcance. ¿Basta establecer que una persona ha actuado por cuenta de un Estado para que sus actos se consideren como un acto del Estado? Por ejemplo, existe entre ciertos Estados y las sociedades multinacionales un vínculo real que obliga a considerar las actividades de las últimas fuera de las fronteras nacionales como una fuente de responsabilidad para el Estado imperialista que las protege y las sostiene al poner a su disposición los

mecanismos de presión de que dispone. El inciso b) del artículo 8 va demasiado lejos. En efecto, las personas consideradas en esa disposición no pueden considerarse propiamente como funcionarios del Estado, sino como personas que ejercen prerrogativas del poder público en circunstancias excepcionales que no se definen. Conforme a esa norma, en el caso de una agresión el Estado víctima sería considerado responsable por los actos de autoridades que le hubieran sido impuestas por el Estado agresor.

18. La delegación de Cuba formula asimismo reservas respecto de la imputación al Estado de la conducta de órganos que actúan más allá de su competencia. Si la víctima, aun cuando fuese extranjera, ha podido utilizar los recursos internos, el Estado no está obligado a asumir responsabilidad internacional por actos de ese género. La responsabilidad internacional del Estado sólo cabe respecto de los daños y perjuicios causados a los extranjeros por actos contrarios a las disposiciones de los tratados en vigor. A pesar de la posición adoptada por la CDI en su informe, la delegación de Cuba sigue opinando que las disposiciones del artículo 10 son inaceptables. En los días actuales todavía existen en la comunidad internacional relaciones de subordinación que someten a los países descolonizados a la constante injerencia de las Potencias imperialistas en sus asuntos internos. Por otra parte, la delegación de Cuba no cree que el Estado deba proteger con más celo los derechos de los extranjeros que los de sus propios ciudadanos. Aprueba la posición adoptada a ese respecto por la CDI, que se propone codificar en el proyecto de artículos las normas que rigen en general la responsabilidad de los Estados por hechos internacionales ilícitos y no únicamente las referidas a ciertos sectores particulares, como es el caso de la responsabilidad por hechos que hayan causado perjuicios a la persona o a los bienes de extranjeros. En efecto, la misión de las Naciones Unidas no es proporcionar garantías especiales a los inversionistas extranjeros, sino crear mecanismos tendientes a fortalecer la soberanía y el desarrollo independiente de los pueblos. No es posible que se identifique al derecho internacional con la práctica de los países exportadores de capitales.

19. Pasando a la cuestión de la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados, la Sra. Hernández Carmona menciona el segundo informe del Relator Especial, titulado "Los derechos económicos y financieros adquiridos y la sucesión de Estados"¹, que plantea el problema de los bienes y las deudas públicas, de los derechos de concesión y de los contratos administrativos, a la luz del derecho de los pueblos de disponer de sus recursos naturales. Sin embargo, algunos miembros de la CDI han considerado que la cuestión de los derechos adquiridos era muy discutible y que su estudio prematuro podría retrasar los trabajos sobre el tema en su totalidad. La delegación de Cuba no comparte ese punto de vista; se trata en realidad de un problema que se plantea respecto de todos los aspectos de la sucesión de los Estados y cuyo examen no puede, pues, diferirse indefinidamente. Los artículos actualmente aprobados por la CDI no ofrecen mayores dificultades. El artículo 9, que establece el principio general del paso de los bienes de Estado, merece sin embargo algunos comentarios. La CDI ha eludido el

¹ Véase *Anuario de la Comisión de Derecho Internacional*, 1969, vol. II, documento A/CN.4/216/Rev.1, pág. 71.

problema de los bienes de Estado situados fuera del territorio al que se aplica la sucesión y ha renunciado a elaborar normas a ese respecto. Por otra parte, es algo sorprendente el empleo de la palabra “decidido” en la reserva a la que está sometida la norma general enunciada en el artículo 9. El artículo 11, relativo al paso de los créditos de Estado completa el artículo 9, pues la CDI estimó que el criterio de la ubicación material de los bienes de Estado enunciado en el artículo 9 no podía aplicarse en la mayoría de los casos a los créditos. Para que un crédito pase al Estado sucesor basta que se cumpla una de las dos condiciones siguientes: que se adeude el crédito al Estado predecesor en virtud de su soberanía sobre el territorio al que se refiera la sucesión de Estados o de su actividad en dicho territorio. La delegación de Cuba apoya las reservas formuladas por quienes estiman que la norma enunciada en el artículo 11 podría obstaculizar la negociación de un acuerdo entre el Estado predecesor y el Estado sucesor concerniente al paso de créditos de Estado basado en otros principios. Ello resalta la discrepancia que existe entre la manera en que las grandes Potencias imperialistas y los países del tercer mundo conciben al derecho internacional.

20. La delegación de Cuba desea subrayar el vínculo estrecho entre la sucesión de Estados en materia de tratados y la sucesión en lo que respecta a materias distintas de los tratados y se pronuncia a favor de una convención única en la que los dos aspectos de la sucesión de Estados se codifiquen sobre la base de los mismos principios.

21. El Sr. BULL (Liberia) expresa su respeto y admiración por la inestimable contribución que la CDI ha aportado desde su creación a la codificación y al desarrollo progresivo del derecho internacional. Felicita al Presidente de la CDI por su brillante presentación del informe que se estudia y señala que Liberia tiene cada vez más presentes las posibles repercusiones del derecho internacional sobre el bienestar y el desarrollo económico y político de los países del tercer mundo.

22. Así, la delegación de Liberia reconoce la necesidad de elaborar normas de derecho internacional relativas a la responsabilidad de los Estados que puedan servir de base a la celebración de una convención sobre el tema. En general, los artículos ya aprobados parecen satisfactorios, pero la CDI podría precisar aún más el principio general enunciado en el artículo 3, según el cual hay hecho internacionalmente ilícito de un Estado cuando un comportamiento constituye una violación de una obligación internacional del Estado. No obstante, es sin duda difícil enunciar normas precisas en un campo en que se plantean problemas delicados, sobre todo de orden político. Si bien el Gobierno de Liberia ha

sostenido siempre que está facultado para definir cuáles son los comportamientos de simples particulares por los que se considera responsable, reconoce que a fin de promover la paz y la estabilidad internacionales es necesario intervenir en ese dominio de la soberanía de los Estados. El principio de la responsabilidad internacional ilimitada e indirecta del Estado por el comportamiento de sus órganos, cuando actúan bajo su autoridad y en el marco de su competencia, es un principio justo y conforme a las normas jurídicas reconocidas universalmente por el derecho interno de la mayoría de los Estados modernos. Asimismo, la delegación de Liberia aprueba la excepción a ese principio, que prevé los hechos de personas que no actúan por cuenta del Estado, de hecho o de derecho. En cambio, un Estado puede ser considerado responsable por el comportamiento de simples particulares cuando se les ha conferido legalmente el ejercicio de prerrogativas del poder público. Esa regla debería aplicarse también a los agentes diplomáticos. Por lo que hace al artículo 15, el Sr. Bull se limita a observar que el hecho de un movimiento insurreccional que se convierte en nuevo gobierno de un Estado no debe considerarse como hecho de ese Estado. Tal disposición se atendería a los principios de la descolonización, en particular cuando se hayan agotado todos los medios pacíficos para desembarazarse del yugo colonial.

23. En cuanto a la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados, la delegación de Liberia encuentra satisfactorios los artículos aprobados hasta la fecha.

24. Con referencia al estudio de la cláusula de la nación más favorecida, ella ofrece un interés particular para un país en pleno desarrollo económico como Liberia. La delegación de Liberia celebra en particular que la CDI se esfuerce en asegurar una aplicación más justa de esa cláusula respecto de las naciones del tercer mundo. Es innegable que si la cláusula de la nación más favorecida se aplicase de la misma manera a los Estados económicamente fuertes y a los Estados económicamente débiles, resultarían éstos muy perjudicados. Como lo ha manifestado la CDI en el párrafo 112 de su informe, si bien los Estados están obligados por el deber que les impone el principio de la no discriminación, tienen, no obstante, libertad para conceder ventajas especiales a otros Estados. Ateniéndose precisamente a eso, la CDI ha redactado el artículo 16, que la delegación de Liberia considera particularmente interesante.

25. El orador subraya la importancia de los seminarios de derecho internacional que la CDI organiza cada año.

Se levanta la sesión a las 12.15 horas.

1543a. sesión

Lunes 20 de octubre de 1975, a las 10.45 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1543

TEMA 108 DEL PROGRAMA

Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 27º período de sesiones (continuación) (A/10010)

TEMA 109 DEL PROGRAMA

Sucesión de Estados en materia de tratados: informe del Secretario General (continuación) (A/10198 y Add.1 a 4, A/9610/Rev.1*)

1. El Sr. RASHID (Afganistán) felicita al Presidente de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) por la excelente presentación de su informe (A/10010) y se limitará a formular observaciones acerca de algunos artículos del proyecto preparado por la CDI en relación con la sucesión de Estados en materia de tratados (véase A/9610/Rev.1, cap. II, secc. D). Convendría repetir la invitación a los Estados a que enviaran sus comentarios y observaciones acerca del proyecto de artículos, en vista de que hasta ahora sólo se ha recibido un número muy reducido.

2. Respecto del artículo 7, la delegación del Afganistán considera que, en vista de la redacción del artículo 6, es necesario especificar que los artículos del proyecto no tendrán efecto retroactivo. La inclusión del artículo 7 podría constituir un estímulo para varios Estados que, de otra forma, no se adherirían a ese instrumento. Es totalmente innecesario hacer referencias a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados¹, que no ha sido aceptada por un número suficiente de Estados. El artículo 7 debe mantenerse en el lugar en que está, después del artículo 6.

3. En cuanto a los artículos 11 y 12, recuerda que la delegación del Afganistán ya expresó sus opiniones en el vigésimo octavo período de sesiones (1406a. sesión). El Sr. Rashid observa que varias delegaciones, incluidas las de Madagascar, Somalia y la República Unida de Tanzania, han manifestado que les resultaba difícil aceptar la redacción actual de esos dos artículos. Las declaraciones categóricas que figuran en la versión actual no se compadecen con la evolución del derecho internacional contemporáneo y podrían tener consecuencias perjudiciales para su futuro. Como la propia CDI reconoció en el párrafo 1 del comentario acerca del artículo 11, la cuestión de los tratados territoriales es sumamente delicada, pues esos tratados son a la vez importantes, complejos, y controversiales. La delegación del Afganistán comparte la opinión de que debe

aplicarse la doctrina del *rebus sic stantibus* en el caso de los tratados territoriales cada vez que se produzca un cambio fundamental en las circunstancias. Podría aducirse que la disolución de los imperios coloniales en la primera mitad del siglo XX conllevó un cambio fundamental en las circunstancias, con vastas consecuencias jurídicas para las fronteras de los Estados. Con arreglo a ese razonamiento, todos los acuerdos relativos a las posesiones territoriales y a la soberanía de la Potencia colonial ya no tienen validez alguna. De hecho, algunos Estados han sufrido graves perjuicios no sólo como consecuencia de la colonización, sino también de la descolonización, al aducirse que no había sido posible aplicar la doctrina del *rebus sic stantibus* respecto de ellos. La CDI ha hecho valer otro argumento basado en el párrafo 2 del artículo 62 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados a la que muchos Estados no se han adherido. Asimismo, la CDI trata de justificar los artículos 11 y 12 alegando que la aplicación del principio de la "tabla rasa" en relación con los tratados territoriales podría constituir una fuente de peligrosa tirantez entre Estados, en vez de ser un instrumento de cambio pacífico. En todo caso, la delegación del Afganistán estima que esas consideraciones no hacen más que complicar las relaciones entre Estados vecinos, que, de otra forma, podrían mantener un ambiente de concordia y respeto mutuo de la soberanía.

4. La CDI examinó también, desde el punto de vista del principio de la libre determinación, la cuestión de los tratados en que se establecen fronteras. Las opiniones de la CDI a ese respecto figuran en el párrafo 10 del comentario acerca de los artículos 11 y 12, en que se cita el comentario de la CDI acerca del que había pasado a ser artículo 62 de la Convención de Viena sobre derecho de los tratados, en el que se señalaba que la CDI había opinado que "la libre determinación", tal como se prevé en la Carta, es un principio distinto y que podría originar confusiones el que en el contexto del derecho de los tratados se presentara como una aplicación de la norma enunciada en el artículo que se examina. El eximir de la aplicación del artículo a los tratados que establezcan una frontera no obsta a que se aplique el principio de la libre determinación en todos los casos en que existan las condiciones necesarias para su legítima aplicación". La delegación del Afganistán estima que esos comentarios son exagerados e inconexos.

5. Por lo tanto, comparte la opinión de que se iría demasiado lejos si se excluyera por completo a los tratados territoriales de la norma del cambio fundamental en las circunstancias y de que esa exclusión sería incompatible con el principio de la libre determinación establecido en la Carta. Huelga decir que el principio de la libre determinación, según se establece en la Carta, va acompañado de otro principio de igual importancia, a saber, el de la igualdad de derechos de los pueblos. Cuando alcanzaron su independencia, la mayoría de los Estados africanos, al igual que los

* Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno período de sesiones, Suplemento No. 10.

¹ Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.70.V.5), documento A/CONF.39/27, pág. 311.

de la América del Sur, al verse frente a la existencia de fronteras coloniales arbitrarias, no pudieron encontrar otra solución que aceptarlas tal como estaban. Sin embargo, resulta difícil aplicar esas soluciones en Asia, continente en que antes del período colonial, que fue relativamente breve, existían Estados establecidos desde hacía mucho tiempo y en que las fronteras coloniales no eran más que líneas imaginarias que separaban a pueblos y regímenes cuya cohesión política era más fuerte que la que existía en otros continentes colonizados.

6. Con esos antecedentes, la CDI adoptó la opinión mayoritaria de que las fronteras de los Estados de reciente independencia y de otros Estados eran inviolables, colocándose así en pugna con la voluntad de los pueblos que viven en zonas fronterizas, sumamente celosos de su independencia. Más aún, al optar por el principio de la continuidad de los tratados de fronteras, la CDI prescindió del principio de la igualdad de derechos de los pueblos y su derecho a la libre determinación, según se establece en la Carta de las Naciones Unidas.

7. En muchos casos, la aplicación del principio de continuidad a los tratados relativos a los territorios coloniales determinó el reemplazo del sistema colonial por el de una dominación foránea extranjera, sistema que han condenado las Naciones Unidas y, en esa perspectiva, la redacción actual de los artículos 11 y 12 no es compatible ni con la práctica de las Naciones Unidas ni con el concepto democrático del derecho internacional progresivo. La delegación del Afganistán no se opone a la aplicación del principio de la continuidad respecto de los tratados territoriales; no obstante, estima que ese principio sólo es válido en la medida en que se concilie con la libre determinación. A ese respecto, el orador hace notar la nueva norma perentoria del derecho internacional conocida como *jus cogens*, que está dirigida a promover la liberación de los pueblos sometidos y con arreglo a la cual toda opinión jurídica en contrario es nula y sin valor alguno. Así, se justifica por completo la aplicación del principio de la "tabla rasa" respecto de los tratados territoriales, pues proporciona una ocasión a todos los que han sufrido bajo el colonialismo para que recuperen sus derechos, sus bienes y su integridad territorial. Sin una reserva de esa índole, la liberación de un Estado sólo serviría para perpetuar tratados inequitativos o impuestos por la fuerza, que constituyen la causa de muchas situaciones de tirantez internacional. Por lo tanto, la delegación del Afganistán se siente obligada a pedir a la CDI que reconsidere su posición sobre la materia.

8. En lo tocante al arreglo de controversias, la delegación del Afganistán coincide con aquellas que estiman necesario prever un procedimiento satisfactorio. En vista de la importancia de la cuestión a que se refiere el proyecto de artículos, sería sumamente útil prever un procedimiento de conciliación para los casos en que no se pudiera resolver una controversia mediante la negociación directa. Habría que alentar a la CDI a que continuará su estudio de la cuestión y a que transmitiera el resultado de este estudio a los Estados Miembros para que hicieran llegar sus observaciones.

9. Respecto de la cuestión de la revolución social, a que se hace referencia en el párrafo 66 del informe, la delegación del Afganistán apoya el razonamiento de la CDI y considera

que esa situación es propia de la sucesión de gobiernos y no de la sucesión de Estados.

10. En cuanto a las medidas que se han de tomar en el futuro en relación con el proyecto de artículos, la delegación del Afganistán comparte la opinión general de que es necesario seguir estudiándolos a fin de elaborar normas prácticas y coherentes, en que se tengan en cuenta las observaciones de los gobiernos. Se requiere una labor suplementaria para mejorar el proyecto de artículos y eliminar las actuales contradicciones, que se evidencian por el hecho de que no hay consenso acerca del proyecto. Una vez logrado lo anterior, cabría adoptar una decisión respecto del foro adecuado para finalizar el proyecto.

11. El Sr. MELESCANU (Rumania) felicita a los miembros de la CDI y a los Relatores Especiales por la admirable labor que figura en el informe de la CDI.

12. La cuestión de la responsabilidad de los Estados tiene gran importancia para su delegación, pues constituye la única garantía jurídica de la aplicación de buena fe de los acuerdos celebrados por los sujetos de derecho internacional. Ya no es simplemente la expresión jurídica de la "política del garrote" practicada por los Estados coloniales, sino que ha pasado a ser una institución que garantiza a cada Estado, con independencia de su tamaño y poderío, la posibilidad de hacer valer sus derechos en relación con otros Estados. La delegación de Rumania acepta el enfoque gradual adoptado por la CDI, con arreglo al cual se codificarían en primer lugar las normas relativas a la responsabilidad dimanada de hechos ilícitos y, a continuación, se codificarían las normas relativas a la responsabilidad objetiva, sobre la base del riesgo creado. La CDI debe velar porque la formulación de los artículos relativos a la primera cuestión no prejuzguen los artículos que prepare en el futuro.

13. Es importante que en el proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados (véase A/10010, cap. II, secc. B) se reconozca y se refleje la diferencia entre los distintos tipos de responsabilidad, material, política, civil y penal. Si se abarca tanto la responsabilidad penal como la civil de los Estados en los mismos artículos, tácitamente se pone en pie de igualdad a ambos tipos de responsabilidad, pese a la particular gravedad que tienen los actos contra la paz, la independencia y la integridad territorial de los Estados. Por ejemplo, en el artículo 12 se dispone que el comportamiento que haya observado en el territorio de un Estado un órgano de otro Estado que actúe en esa calidad no se considerará hecho de ese último Estado. El orador puede aceptar la exclusión de la responsabilidad material del Estado, pero no la de su responsabilidad política. Fundamentando su opinión, el orador cita la definición de la agresión que figura en el inciso f) del artículo 3 del anexo de la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General. Convendría, pues, revisar el artículo.

14. En general, la delegación de Rumania está de acuerdo con el proyecto de artículos acerca de la cláusula de la nación más favorecida (*ibid.*, cap. IV, secc. B), particularmente con el principio de la incondicionalidad previsto en el artículo 9. Sin embargo, la cuestión del trato preferente suscita ciertas cuestiones habida cuenta de los problemas actuales en materia de desarrollo y de la necesidad de

igualar los niveles de desarrollo de diversos países. La delegación de Rumania conviene en que la CDI debe codificar las normas que rigen el trato preferente para los países en desarrollo, de conformidad con las resoluciones aprobadas por la Asamblea General en sus períodos extraordinarios de sesiones sexto y séptimo. El trato preferente debe aplicarse no sólo a las relaciones comerciales, sino también a la transmisión de la tecnología, la explotación de los recursos que constituyen el patrimonio común de la humanidad y a todas las esferas de la vida económica y las relaciones económicas internacionales.

15. Acerca del proyecto de artículos sobre los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales (*ibid.*, cap. V, secc. B), el orador estima que debe establecerse una distinción entre los Estados y las organizaciones internacionales, que constituyen dos categorías distintas de sujetos de derecho internacional. Por ejemplo, el artículo 11 se refiere a ambas categorías en términos muy similares en relación con el consentimiento a obligarse por un tratado. El concepto de "acto de confirmación formal", previsto en el párrafo 2, parece forzado y no está respaldado por la doctrina jurídica o la práctica internacional. Además, es superfluo, pues las palabras "o en cualquier otra forma" abarcarían cualquier procedimiento utilizado por las organizaciones internacionales a ese respecto.

16. En lo que atañe al programa de trabajo de la CDI, el orador estima que existen posibilidades, aún inexploradas, para acelerar su labor y aumentar su productividad. Sería conveniente que todos los miembros de la CDI participaran activamente en la preparación de informes y proyectos de artículos. Los miembros podrían presentar por escrito sus observaciones acerca de los informes y proyectos y sólo recurrir a los debates cuando formularan proyectos de artículos en su forma final. A su parecer, la CDI debe asignar prioridad a los temas de la responsabilidad de los Estados y la cláusula de la nación más favorecida, que debe incluir también normas sobre un sistema generalizado de preferencias.

17. El Sr. CASSESE (Italia) dice que su delegación se complace en observar que la CDI ha avanzado considerablemente en la codificación y el desarrollo de diversas esferas del derecho internacional.

18. Desea asociarse a otros representantes que han elogiado al Relator Especial del tema de la responsabilidad de los Estados por su espléndida labor. En general, la delegación de Italia apoya el pertinente proyecto de artículos.

19. En relación con ciertas disposiciones, expresa que los artículos 14 y 15, que se refieren a la posible imputación de hechos internacionalmente ilícitos a los movimientos insurreccionales, han deseado correctamente las características políticas o ideológicas de esos movimientos. El orador no comparte la opinión del representante de la República Democrática Alemana (1539a. sesión) de que la legitimidad de un movimiento insurreccional triunfante debe tenerse en cuenta para determinar la imputación de responsabilidad, a fin de no tratar de la misma manera a un golpe de Estado fascista que a un movimiento de liberación nacional. En su opinión, la naturaleza política o ideológica de los movimientos insurreccionales no debe contar en absoluto para la

imputación de responsabilidad. Si esos movimientos causan perjuicios al actuar en contra del derecho internacional, éstos deben repararse independientemente de los objetivos políticos de los insurgentes. El propósito de la codificación internacional, en especial en la esfera de la responsabilidad de los Estados, no consiste en perseguir objetivos a corto plazo sino en elaborar y desarrollar el derecho de modo que pueda regir las relaciones internacionales durante un período prolongado. Sería inadecuado, pues, inyectar valores políticos o ideológicos en las normas internacionales, ya que esos valores cambian rápidamente con el tiempo y son difíciles de definir apropiadamente.

20. Según la delegación de Italia, el comentario sobre el párrafo 1 del artículo 15 significa que en ciertas situaciones excepcionales, como una revolución social importante dimanada de un movimiento insurreccional triunfante, la conducta ilegal del gobierno anterior no puede imputarse al Estado nuevo que nace de la revolución. Esa salvedad del párrafo 1 del artículo 15 se justifica, pues en esos casos excepcionales la fundamentación de la continuidad *de facto* que inspira la norma general ya no es válida, y se observa en cambio una ruptura completa en la estructura social y en el mecanismo de gobierno del Estado. La no imputación al Estado de hechos cometidos durante el conflicto por el aparato gubernamental anterior la justifica también en sentido común. Por ejemplo, si los insurgentes derriban un gobierno preexistente racista y autoritario para instaurar la democracia y la igualdad, y como resultado cambian toda la estructura del Estado, sin duda que no podrá sostenerse que son responsables de actos de genocidio u otras violaciones graves y en gran escala de los derechos humanos de los extranjeros perpetradas por el gobierno preexistente durante su intento de sofocar la rebelión.

21. Podría objetarse que la excepción al párrafo 1 del artículo 15 a la que el orador se acaba de referir no se presta para una definición que abarque todos los casos de revolución política y social. Cabe desechar no obstante esa objeción, pues la CDI podría tratar de formular dicha definición señalando algunos requisitos básicos y objetivos necesarios para que un cambio de gobierno quedara incluido en la excepción. Como que la definición debe ser objetiva, los postulados ideológicos o políticos, tanto del gobierno "legítimo" como del movimiento rebelde, sólo entrarán en juego como elementos objetivos atendibles para verificar si se ha producido realmente una ruptura entre el viejo mecanismo estatal y el nuevo gobierno.

22. Otra objeción posible a la excepción es que las víctimas de hechos internacionalmente ilícitos cometidos por el gobierno preexistente durante la lucha por el poder no pueden quedar desamparadas. Esa consecuencia, sin duda muy lamentable, no tendría nada de nuevo, ya que, cuando se trata de hechos ilícitos de insurgentes, las personas perjudicadas carecen también de amparo si los insurgentes fracasan. Ese inconveniente irremediable es común a todos los sistemas jurídicos. Cabe suponer razonablemente que una víctima queda desamparada si la persona contra quien se inicia una reclamación ha desaparecido o si no es posible alcanzarla por las vías legales.

23. El orador desea encomiar la excelente labor del Relator Especial del tema de la cláusula de la nación más favorecida. La delegación de Italia apoya la sugerencia de la

CDI de que debe dedicarse a examinar los artículos sobre esa materia en primera lectura para su presentación durante el trigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General y espera que pueda finalizar su primera lectura en 1976, tomando en cuenta las observaciones de la Sexta Comisión.

24. En respuesta al interrogante planteado por la CDI a la Asamblea General en el párrafo 108 del informe, la delegación de Italia opina que no debe darse más amplitud al proyecto de artículos en lo que se refiere al trato nacional y a las cláusulas de trato nacional. En su comentario del artículo 17, la CDI ya ha hecho hincapié en las numerosas dificultades prácticas que surgen cuando se trata de vincular la norma de trato nacional con la cláusula de la nación más favorecida. A efectos de la claridad y simplicidad sería preferible, pues, que la CDI se concentrara en la formulación de proyectos de normas que se refiriesen específicamente a la cláusula de la nación más favorecida.

25. La CDI, luego de subrayar que el trato de nación más favorecida no es sino un corolario del principio de no discriminación, ha señalado correctamente que las cláusulas de la nación más favorecida no deben aplicarse sin tener debidamente en cuenta las notables desigualdades que existen entre los Estados desarrollados y los Estados en desarrollo. De otra manera, por tratar de garantizar una igualdad formal, surgiría una discriminación implícita contra los miembros más débiles de la comunidad internacional. La delegación de Italia aprueba en consecuencia el artículo 21, que prevé las necesidades especiales de los países en desarrollo. La redacción de ese artículo debe mejorarse, como lo ha destacado acertadamente la propia CDI, pero la idea básica que lo inspira es correcta y la delegación de Italia la apoya plenamente.

26. Su delegación alberga en cambio algunas dudas respecto del artículo 15, que no tiene en cuenta otra excepción necesaria a la cláusula de la nación más favorecida. Ese artículo no excluye de la aplicación de la cláusula los tratados multilaterales que establecen uniones aduaneras, asociaciones de libre comercio y similares agrupaciones de Estados. Como ya lo señalaron los representantes del Perú (*ibid.*) y de la Argentina (1540a. sesión), esa excepción es muy necesaria. Las razones por las que la delegación de Italia se manifiesta partidaria de ese punto de vista se explicarán en una sesión futura mediante una declaración formulada en nombre de la Comunidad Económica Europea.

27. Por lo que hace a la sucesión de Estados en materia de tratados, el orador considera válida la opinión de que los dos aspectos de la cuestión no analizados por la CDI, a saber, los artículos propuestos sobre tratados multilaterales de carácter universal y sobre el arreglo de controversias, deben remitirse nuevamente a la CDI para que los examine. La delegación de Italia estará dispuesta a apoyar ese procedimiento si tal fuese el criterio de la mayoría de la Sexta Comisión, pero tiene también en cuenta el considerable volumen de trabajo de la CDI y la consiguiente necesidad de evitar retrasos en su labor. Además, si la CDI reexaminase la cuestión de la sucesión de Estados en materias de tratados, correría el riesgo de engolfarse en prolongados debates que llevarían incluso a la reapertura de la discusión sobre ciertas disposiciones clave que ya han

sido aprobadas. La delegación de Italia considera, por lo tanto, que la solución más adecuada sería reiterar a los gobiernos la petición de que presentasen comentarios sobre los artículos. Como sólo unos pocos gobiernos han cumplido con la solicitud de comentarios del año anterior, sería adecuado esperar más reacciones gubernamentales antes de decidir de qué manera ha de procederse respecto de los artículos propuestos.

28. Se han expresado dudas sobre si el programa de trabajo de la CDI sugerido en el párrafo 143 del informe se ajusta a la recomendación que figura en la resolución 3315 (XXIX) de la Asamblea General de que prosiguiese su labor sobre la responsabilidad de los Estados, asignándole carácter de alta prioridad. No obstante, el Sr. Cassese considera que si se acelerara excesivamente la labor de la CDI sobre esa materia, se podrían perjudicar los excelentes resultados ya logrados. Se trata de un asunto de gran importancia, que está vinculado a numerosas y delicadas esferas de derecho internacional, por lo que el ritmo de trabajo no puede ser excesivamente rápido. En consecuencia, considera que se avanzará suficientemente durante el año próximo si la CDI logra resolver satisfactoriamente la cuestión crucial de si existe una categoría especial de actos internacionalmente ilícitos de particular gravedad. La delegación de Italia confía en que la CDI mantendrá su tradición en materia de textos redactados con cuidado y esmero, sin dejar de lado la necesidad de sancionar nuevas disposiciones jurídicas lo antes posible en relación con ciertas esferas decisivas del derecho internacional.

29. Sr. ALTING VON GEUSAU (Países Bajos) dice que el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional no es tarea fácil en una organización como las Naciones Unidas, que se enfrenta con cambios incesantes en las relaciones internacionales y profundas divisiones políticas e ideológicas entre sus Miembros. Teniendo en cuenta los obstáculos que se le presentan, la CDI ha realizado progresos encomiables, siendo su labor sobre la responsabilidad de los Estados y sobre la cláusula de la nación más favorecida ejemplos especialmente notables de erudición. Ahora bien, en última instancia, los logros de la CDI dependen de que los Estados Miembros estén dispuestos a aprobar los textos finales adoptados por ella. Ha sido necesario aplazar o abandonar el examen de varios temas importantes que se transmitieron a la CDI. Incluso en los casos en que su labor condujo a la adopción de convenciones, la aceptación por parte de los Estados Miembros no ha sido muy prometedora, como han señalado los representantes de Noruega (*ibid.*) y Australia (1541a. sesión).

30. Entre las convenciones adoptadas como resultado de proyectos elaborados por la CDI, la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas es la única que hasta ahora ha recibido la ratificación o la adhesión de una mayoría de Estados Miembros. Más aún, en el curso de los 30 últimos años se han aprobado en la Asamblea General muchas convenciones y declaraciones importantes sin la participación de la CDI ni de la Sexta Comisión. Algunos de esos instrumentos pueden considerarse como aportaciones al desarrollo progresivo del derecho internacional, aunque tal vez no haya sido ese su propósito primordial. Un análisis objetivo de la labor realizada por la CDI y por la forma en que dicha labor ha sido continuada por la Asamblea General y los Estados Miembros sólo puede conducir a la conclusión

de que las oportunidades para el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional son efectivamente limitadas. La amplia aceptación de las Convenciones sobre relaciones diplomáticas y sobre relaciones consulares parece indicar que la CDI logra sus mayores éxitos cuando se trata de formular normas formales del derecho internacional.

31. Su delegación elogia el enfoque adoptado por la CDI en lo que respecta a la responsabilidad de los Estados. La CDI ha mantenido acertadamente una estricta distinción entre la tarea de determinar las normas que rigen la responsabilidad y la de formular las normas que imponen a los Estados obligaciones cuya violación podría ser causa de responsabilidad. Esa distinción ha permitido a la CDI formular un proyecto de artículos generalmente claros acerca del hecho del Estado según el derecho internacional.

32. Comentando sobre los artículos 10 a 15, su delegación está de acuerdo con la enumeración explícita, en los artículos 11 a 14, de los casos de comportamiento que no debe considerarse hecho del Estado según el derecho internacional. El comportamiento de particulares, de órganos de otro Estado o de órganos de un movimiento insurreccional, a que se refieren los artículos 11, 12 y 14, no puede atribuirse a un Estado ni directa ni indirectamente. No obstante, tal comportamiento podría entrañar ciertos deberes para los Estados. Por consiguiente, su delegación está de acuerdo con el párrafo 2 de los artículos 11, 12 y 14, aunque tiene reservas sobre la conveniencia de formular de manera idéntica dichos párrafos. Debe presumirse que el comportamiento de personas que no actúen por cuenta del Estado, a que se refiere el párrafo 1 del artículo 11, ocurre en el territorio sobre el cual el Estado ejerce control exclusivo. Por lo tanto, cabe suponer que el Estado podrá cumplir sus deberes internacionales en los casos en que esté obligado — en virtud del derecho internacional general o en virtud de tratados especiales — a evitar actos ilícitos de particulares, a proteger a las posibles víctimas o, si no consigue hacerlo, a detener a los delincuentes y juzgarlos. Es efectivamente difícil definir más ampliamente la responsabilidad del Estado en tal situación por omisión propia o por falta de la debida diligencia de sus órganos. Esa cuestión merece una atención detenida y un estudio más amplio.

33. En el caso del párrafo 2 del artículo 12, puede presumirse que el Estado no ha podido ejercer plenamente control exclusivo sobre el territorio de que se trata ni, por consiguiente, cumplir sus deberes internacionales en lo que respecta a la conducta ilícita de órganos de otro Estado.

34. El artículo 14 parece referirse a dos situaciones distintas. Por una parte, en el párrafo 2 de dicho artículo se expresa adecuadamente la responsabilidad del Estado con respecto al comportamiento de órganos de un movimiento insurreccional que opera dentro del territorio de un Estado contra el Gobierno en el poder. Por otra parte, el artículo 14 se refiere también al comportamiento de órganos de un movimiento insurreccional que opera desde el territorio de un Estado contra el gobierno de otro Estado. Su delegación desearía que la CDI examinase la posibilidad de redactar un artículo por separado para tratar esa última situación, en la que se puede presumir que el objetivo específico del movimiento insurreccional es perjudicar a los órganos del otro Estado o a sus ciudadanos. En la primera situación, los

daños causados a extranjeros podrían ser tan sólo una de las consecuencias del comportamiento de órganos del movimiento insurreccional.

35. En lo que respecta a los planes futuros de la CDI para completar el proyecto de artículos sobre responsabilidad de los Estados, su delegación teme que las profundas divergencias entre los Estados sobre el contenido, la forma y el grado de la responsabilidad internacional obstaculicen gravemente el progreso de los trabajos en torno a la segunda y tercera partes del proyecto propuesto, por no mencionar el polémico tema del elemento objetivo de un hecho ilícito internacional. En consecuencia, su delegación sugiere que se complete la primera parte como instrumento por separado para su aprobación por la Sexta Comisión.

36. Su delegación ha examinado con particular interés el capítulo IV del informe de la CDI, sobre la cláusula de la nación más favorecida. Su interés particular nace de que los Países Bajos son parte Contratante en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), miembro de la Comunidad Económica Europea y patrocinador de un sistema generalizado de preferencias comerciales en favor de los países en desarrollo. En su informe, la CDI indica que no desea limitar su estudio al funcionamiento de la cláusula en la esfera del comercio internacional, sino extenderlo al mayor número de esferas posible. Ahora bien, en la práctica, la CDI se ha centrado primordialmente en el funcionamiento de la cláusula en la esfera comercial, cuya reglamentación como parte de un esfuerzo más amplio para desarrollar normas de derecho internacional económico se ve complicada por los cambios continuos y radicales que sufren las relaciones económicas entre Estados. Desde la segunda guerra mundial, se han observado diversos cambios fundamentales en el comercio internacional. En primer lugar, el GATT representó el comienzo de un nuevo período en el que la cláusula de la nación más favorecida se convirtió en instrumento para promover las relaciones comerciales multilaterales sobre la base de la no discriminación. En segundo lugar, la aparición de empresas comerciales de propiedad estatal creó nuevos problemas para la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida entre países con sistemas económicos diferentes. En tercer lugar, las uniones aduaneras y las zonas de libre intercambio marcaron una nueva tendencia, que puede considerarse como una serie de excepciones al funcionamiento de la cláusula. En cuarto lugar, las necesidades de los países en desarrollo exigieron la adopción de nuevas normas para facilitar el acceso de sus productos a los mercados de los países desarrollados. A juicio de su delegación, la CDI ha pasado por alto la mayoría de esos cambios ocurridos en la posguerra y ha tratado de reafirmar las normas tradicionales del derecho internacional anteriores a la guerra.

37. En lo que respecta al artículo 15 y al comentario del Relator Especial sobre el caso de las uniones aduaneras y otras asociaciones semejantes de Estados, su delegación concuerda con la declaración que se formulará en la Sexta Comisión en nombre de los nueve miembros de la Comunidad Económica Europea.

38. Su delegación abriga serias dudas sobre la conveniencia de que la CDI redacte artículos sobre la cláusula de la nación más favorecida en una esfera en que las normas que rigen las relaciones económicas internacionales están todavía sujetas a cambios continuos.

39. En cuanto al futuro programa de trabajo de la CDI, recuerda que en el vigésimo noveno período de sesiones (1494a. sesión) su delegación solicitó que la CDI atribuyese prioridad a estudiar el tema de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación. Es de esperar que se aborde ese tema tan pronto como se haya recibido un número suficiente de respuestas de gobiernos de los Estados Miembros.

40. El Sr. NICOL (Sierra Leona) agradece al Presidente de la CDI la clara presentación de su informe.

41. En lo que respecta a la responsabilidad de los Estados, su delegación está de acuerdo en general con el proyecto de artículos, observando con satisfacción que la CDI, al redactarlos, rechazó ciertos conceptos anticuados. Con referencia a los artículos 14 y 15, relativos al comportamiento de movimientos insurreccionales, su delegación ha observado con interés los comentarios y sugerencias del representante de la República Unida de Tanzania (1542a. sesión) sobre la distinción que debería hacerse entre movimientos insurreccionales ordinarios y movimientos de liberación. Por el momento, su delegación puede aceptar el principio general de considerar responsables a los movimientos insurreccionales victoriosos por los actos cometidos en el curso de su lucha.

42. En cuanto a la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados, insta a la CDI a que concluya rápidamente su labor sobre el tema, en vista de la etapa en que actualmente se encuentra el proceso de descolonización. Observa con satisfacción que, en el proyecto de artículos sobre la materia (véase A/10010, cap. III, sección B), la CDI ha resistido a la tentación de distinguir entre los dominios público y privado para el paso de bienes de Estado al Estado sucesor. Estima que las disposiciones

del artículo 9 son fundamentalmente supletorias y dejan amplia libertad de maniobra para cualquier arreglo especial que se pudiera considerar necesario, como podría ser una indemnización justa y adecuada. Su delegación concuerda con quienes han expresado dudas sobre la necesidad del artículo 11, poniendo particularmente en tela de juicio la justificación de aplicar trato especial a los créditos.

43. En lo que se refiere a la cláusula de la nación más favorecida, dice que su país acoge con interés particular la inclusión del artículo 21 en el proyecto. De esa manera, la CDI ha tenido debidamente en cuenta el hecho generalmente aceptado de que la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida puede crear dificultades no sólo en la esfera de las relaciones económicas, sino también en otras esferas en las que los participantes no se encuentran a un mismo nivel de desarrollo. Es aconsejable que se siga estudiando cuidadosamente la cuestión a fin de llegar a la formulación de nuevos artículos, en caso necesario, para proteger los intereses de las naciones económicamente más débiles.

44. En lo que se refiere a la organización del programa de trabajo de la CDI, su delegación se adhiere a las observaciones y sugerencias del representante de Australia. Acoge con satisfacción el establecimiento de un grupo de planificación dentro de la Mesa Ampliada de la CDI, que tenga en cuenta las propuestas de los Estados Miembros encaminadas a elaborar un plan para la labor de investigación y redacción de la CDI. La Sexta Comisión debe esmerarse en no recargar a la CDI sometiendo otros temas a su examen, salvo que se considere absolutamente necesario a causa de los acontecimientos internacionales.

Se levanta la sesión a las 12.10 horas.

1544a. sesión

Martes 21 de octubre de 1975, a las 10.50 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1544

TEMA 108 DEL PROGRAMA

Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 27º período de sesiones (continuación) (A/10010)

TEMA 109 DEL PROGRAMA

Sucesión de Estados en materia de tratados: informe del Secretario General (continuación) (A/10198 y Add.1 a 4, A/9610/Rev.1*)

1. El Sr. NYAMDO (Mongolia) expresa su agradecimiento al Presidente de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) por la presentación de su informe (A/10010).

* Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno período de sesiones, Suplemento No. 10.

2. Refiriéndose al trascendental asunto de la responsabilidad de los Estados, observa que muchos miembros de la Sexta Comisión han expresado su disconformidad por el escaso progreso logrado por la CDI. No obstante, el proyecto de artículos (*ibid.*, cap. II, secc. B) puede considerarse como un paso hacia la formulación de normas que rijan la responsabilidad de los Estados. La delegación de Mongolia apoya en principio la idea básica del artículo 10 sobre la atribución al Estado del comportamiento de órganos que actúan excediéndose en su competencia o en contra de las instrucciones concernientes a su actividad, pero manifiesta que no es claro el concepto de "entidad pública territorial" que la CDI ha incorporado al artículo. Si dichas entidades gubernamentales pudiesen actuar como órganos del Estado, se encontrarían comprendidas en ese último concepto. Si pudiesen actuar como particulares, los Estados serían responsables de sus acciones de conformidad

con otra norma, a saber, la de la connivencia. El orador, haciendo notar que el artículo establece la importante norma de que el Estado no quedará eximido de responsabilidad por las acciones *ultra vires* de sus órganos, dice que su delegación concuerda totalmente con el párrafo 18 del comentario sobre el artículo.

3. El artículo 11 vuelve a exponer en forma negativa el principio del artículo 8 sobre la atribución al Estado del comportamiento de personas, sobre el que la delegación de Mongolia expresó su acuerdo completo en el vigésimo noveno período de sesiones (1488a. sesión), y el orador no tiene objeciones que formular al artículo 11, a pesar de ser algo redundante.

4. En relación con el artículo 12, el orador hace notar que la CDI manifestó en su comentario que deseaba eliminar toda presunción de responsabilidad del Estado territorial por el comportamiento de los órganos de otros Estados en su territorio. El orador considera que debería haberse incluido una aclaración en el texto del artículo, como se hizo en el artículo 13. Debe recordarse también que existen casos en que un Estado pone su territorio a disposición de otro Estado para la comisión de actos ilícitos. En esos casos, el Estado territorial, naturalmente, es culpable y sobre él debe recaer la responsabilidad.

5. Los artículos 14 y 15 se refieren a problemas que exigen un estudio cuidadoso. La delegación de Mongolia comparte las opiniones de otros miembros de la Sexta Comisión que insisten en que, en lo tocante a su legalidad, debe trazarse una clara distinción entre los movimientos insurreccionales y los movimientos de liberación nacional. La distinción puede servir de criterio para decidir si el comportamiento del órgano de un movimiento insurreccional puede considerarse un acto del Estado en cuyo territorio tiene lugar. Deben elaborarse otros criterios similares.

6. En cuanto a la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados (véase A/10010, cap. III), el orador hace notar que los principios generales sobre el paso de la propiedad estatal del Estado predecesor al Estado sucesor se aplican igualmente a la propiedad estatal mueble, dondequiera que se encuentre. La delegación de Mongolia no tiene inconvenientes en aceptar el artículo X. En general, la cuestión de la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados está estrechamente vinculada a la de la sucesión de Estados en materia de los tratados, por lo que ambos asuntos deben ser abordados de conformidad con los mismos principios.

7. La delegación de Mongolia está profundamente interesada en el tema de la cláusula de la nación más favorecida (*ibid.*, cap. IV), habida cuenta especialmente de su oportunidad en relación con el logro de la igualdad y la no discriminación entre los Estados. Esa delegación concuerda con las propuestas del Relator Especial sobre la conveniencia de examinar la cláusula de la nación más favorecida conjuntamente con la cláusula de trato nacional, en vista de que en gran parte tratan del mismo asunto. En opinión del orador, el artículo 8 tiene importancia cardinal por cuanto se refiere al principio esencial de la incondicionalidad de la cláusula de la nación más favorecida. La delegación de Mongolia no tiene objeciones que oponer a los demás

artículos. Tomando nota de las decisiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y de las disposiciones de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados (resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General, anexo) relativas a un sistema generalizado de preferencias, así como del gran interés mostrado por los miembros de la Sexta Comisión por el artículo 21, la delegación de Mongolia espera que la CDI, en su próximo período de sesiones, adopte una posición acerca de la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida en favor de los países en desarrollo.

8. El Sr. KOLESNIK (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la CDI realizó una tarea importante en su 27º período de sesiones al examinar los grupos de proyectos de artículos sobre cuatro asuntos diferentes. Merece señalarse que los Relatores Especiales de esos asuntos representaban no sólo a los países occidentales sino también a los países socialistas y los países en desarrollo.

9. La labor de la CDI sobre la responsabilidad de los Estados tiene particular importancia, y ésta enfocó atinadamente su atención en la dilucidación de los principios fundamentales de derecho internacional relativos a ese asunto. La delegación de la URSS apoya plenamente la idea recogida en el párrafo 49 del informe sobre la necesidad de distinguir las categorías de actos internacionalmente ilícitos de particular peligrosidad que deben ser calificados de crímenes internacionales. La necesidad de formular esa distinción se desprende de muchos documentos importantes vinculados a la lucha contra la agresión, el *apartheid* y el racismo que han sido aprobados en el transcurso de los años por las Naciones Unidas.

10. Aunque no desea comentar en detalle el proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados, la delegación de la URSS desea señalar, en respuesta a una observación del representante de Austria (1539a. sesión) sobre el artículo 11, que la cuestión de la responsabilidad del Estado por las actividades de las compañías privadas y de las empresas transnacionales se presenta con frecuencia cada vez mayor en el ámbito del desarrollo progresivo del derecho internacional. Nadie ignora que las empresas nacionales y transnacionales son utilizadas muchas veces como medio para apoyar políticas imperialistas de intervención en los asuntos internos de Estados soberanos y para expoliar la economía de los pueblos. El derecho internacional contemporáneo se basa en principios progresistas inspirados en la Gran Revolución de Octubre y en el proceso histórico de decadencia del colonialismo, que han abierto el camino para que las naciones de África, América Latina y Asia participen en la vida internacional. El derecho internacional está siendo desarrollado cada vez más bajo la influencia de los países socialistas y los países en desarrollo.

11. Por lo que hace al artículo 15, el representante de la República Unida de Tanzania (1542a. sesión) ha subrayado correctamente la necesidad de distinguir entre el concepto de "movimiento insurreccional" y un movimiento de liberación nacional. Un tercer Estado que proporcione ayuda a un pueblo que lucha por la libre determinación no puede incurrir en responsabilidad alguna con los regímenes coloniales y racistas que niegan el derecho a la libre determinación. En opinión de la delegación de la URSS, ésa es una norma de derecho internacional contemporáneo.

12. Es de lamentar que la CDI haya llevado a cabo con tanta lentitud su labor relativa al proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados. La falta de un proyecto definitivo sobre ese tema se hizo sentir profundamente al preparar la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas (resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, anexo) y la Definición de la agresión (resolución 3314 (XXIX), anexo). Debido al lento avance de la CDI, la Asamblea General se vio obligada a recurrir a otros órganos para codificar esos asuntos. La delegación de la URSS recomienda firmemente que en su próximo período de sesiones la CDI examine detenidamente y en forma prioritaria la cuestión de la responsabilidad de los Estados. La CDI debería concentrarse primordialmente en la formulación de normas que rijeran la responsabilidad de los Estados por ciertos actos ilícitos como el quebrantamiento de la paz, el uso de fuerzas armadas para sofocar movimientos de liberación nacional y otros graves delitos internacionales.

13. La delegación de la Unión Soviética se complace en observar que la CDI avanzó considerablemente durante su 27° período de sesiones respecto de otro asunto de importancia para el derecho internacional, a saber, el proyecto de artículos sobre la cláusula de la nación más favorecida. El principio del trato de la nación más favorecida es parte de la lucha contra la discriminación en el comercio internacional, y la delegación de la URSS considera que los 14 nuevos artículos aprobados en primera lectura por la CDI son aceptables en su conjunto. También apoya la intención de la CDI de completar el texto del proyecto de artículos sobre la cláusula de la nación más favorecida en 1976. A ese respecto, debe hacerse notar que el Relator Especial del tema, quien hizo una aportación considerable a la labor de la CDI, sugirió que los trabajos adicionales sobre esa materia fuesen acompañados por el análisis de las disposiciones relativas al trato nacional, ya que ambos asuntos tenían muchos elementos en común. Esa sugerencia merece ser tenida en cuenta y apoyada.

14. En cuanto a la sustancia de las formulaciones aprobadas por la CDI, el orador señala que no hay normas generalmente aceptadas respecto de las excepciones a la cláusula de la nación más favorecida, salvo el sistema generalizado y no recíproco de preferencias que se ha de conceder a los países en desarrollo, según se expresa en el artículo 21. No existen motivos valederos para eximir de la aplicación de la cláusula a los beneficios que se otorgan mutuamente los miembros de asociaciones económicas o de uniones aduaneras.

15. En cuanto al tema de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales (véase A/10010, cap. V), el orador considera que la CDI ha adoptado un enfoque correcto al tratar de distinguir entre los Estados y las organizaciones internacionales, ya que ellas tienen sólo personalidad jurídica limitada. Al considerar ese asunto sería incorrecto limitarse a repetir las disposiciones correspondientes de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados¹. Los

tratados celebrados entre organizaciones internacionales deben ser claramente distinguidos de los tratados celebrados entre Estados.

16. Por lo que se refiere al proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados, la delegación de la URSS atribuye particular importancia al artículo X, concerniente a la falta de efectos de una sucesión de Estados sobre los bienes de un tercer Estado. Ese artículo se refiere correctamente a la necesidad de preservar los bienes de propiedad de un tercer Estado en los casos de sucesión. Es evidente que esa disposición se vincula también a la validez de las deudas contractuales asumidas respecto de un tercer Estado. A ese respecto, la referencia tan sólo al derecho interno del Estado sucesor podría ser insuficiente, y sería necesario incluir una mención adecuada al derecho internacional.

17. En lo tocante al tema de la sucesión de Estados en materia de tratados (véase A/9610/Rev.1, cap. II), el orador señala que, de conformidad con la resolución 3315 (XXIX) de la Asamblea General, su Gobierno ha presentado sus comentarios por escrito sobre el proyecto de artículos (A/10198/Add.4). En general, el proyecto de artículos proporciona una base aceptable para continuar las tareas sobre ese tema, y muchas disposiciones del proyecto reflejan normas jurídicas generalmente reconocidas, por lo cual han logrado un amplio apoyo en la Sexta Comisión. Ello ocurre particularmente en el caso de una de las ideas fundamentales expuestas en el proyecto de artículos, a saber, la noción de que la sucesión de Estados como tal no afecta las fronteras. En anteriores períodos de sesiones de la Asamblea General, la delegación de la URSS ha analizado en detalle el proyecto de artículos; por lo tanto, sería innecesario volver a hacerlo. Debe pedirse a la CDI que tome en cuenta los comentarios y observaciones hechos por los Estados en la Sexta Comisión en el presente período de sesiones. Es necesario asegurarse en particular de que la aplicación del principio de la "tabla rasa" no perjudique en absoluto los principios y normas de derecho internacional generalmente aceptados ni las obligaciones de todos los Estados que emanan de esos principios y normas. Los Estados de reciente independencia también deben regirse por los principios y normas del derecho internacional generalmente aceptados. Después de repetir la lectura del proyecto de artículos, la CDI podría volver a presentarlo a la Asamblea General en su trigésimo primer período de sesiones, oportunidad en que cabría adoptar una decisión sobre la mejor manera de dar forma definitiva al proyecto. La delegación de la URSS considera interesante en principio la sugerencia de varias delegaciones de que la Sexta Comisión complete por sí misma el examen del proyecto de artículos.

18. Respecto del futuro programa de trabajo de la CDI, el orador subraya la importancia de concentrarse en las cuestiones más importantes, particularmente la responsabilidad de los Estados y la cláusula de la nación más favorecida. Es evidente que la cuestión de los cursos de agua internacionales para usos distintos de la navegación no ha llegado aún a una etapa en que pueda ser estudiada seriamente por la CDI. El orador espera que la CDI continuará examinando cuidadosamente la cuestión de reducir la duración de sus períodos de sesiones, mejorar sus métodos de trabajo y aumentar su eficacia.

¹ Véase *Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados*, *Documentos de la Conferencia* (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.70.V.5), documento A/CONF.39/27, pág. 311.

19. El Sr. BUSSE (República Federal de Alemania) expresa el gran respeto que merece a su Gobierno la admirable labor de la CDI y da las gracias a su Presidente por la forma concisa y clara en que ha explicado y comentado el informe de la misma. Conviene con el representante de Australia (1541a. sesión) en que no sería adecuado comentar detalladamente el informe en el seno de la Sexta Comisión y, por lo tanto, sus observaciones se limitarán a unos pocos puntos importantes.

20. La delegación de la República Federal de Alemania se felicita de que la CDI haya podido completar su examen del capítulo II del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados, que se refiere al elemento subjetivo de los hechos internacionales ilícitos. El Gobierno de su país se interesa fundamentalmente en el proyecto de artículos sobre ese asunto, porque ha de tener repercusiones sobre problemas tales como el derecho internacional en materia de inversiones y la protección internacional de los derechos humanos. La ulterior codificación de las normas sobre responsabilidad de los Estados ha de conducir a una mayor estabilidad y claridad jurídica en esas y otras esferas.

21. En cuanto a la retroactividad del convenio propuesto, ya se consideró en anteriores debates de la CDI pero, a juicio de su delegación, la retroactividad permitiría que volvieran a suscitarse ciertas controversias internacionales resueltas hace mucho tiempo. El convenio sería, pues, una fuente de incertidumbre jurídica, a tal punto que varios gobiernos podrían negarse a ratificarlo. Por tanto, parece razonable aplicar el principio de la "tabla rasa" cuando entre en vigor el convenio. Para contribuir al éxito del convenio, también sería conveniente que la CDI incluyera un artículo que limitara expresamente su validez y aplicabilidad a acontecimientos futuros, respetando así la estructura del proyecto de convenio sobre la sucesión de Estados en materia de tratados. La delegación de la República Federal de Alemania continúa teniendo una opinión muy favorable de la actividad del Relator Especial sobre ese tema.

22. En cuanto a la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados, el orador dice que su Gobierno duda mucho de que pueda llegarse a una transacción aceptable en un futuro cercano sobre el tema que tiene tan delicadas connotaciones políticas. El proyecto de artículos sobre ese asunto, en su forma actual, es incompleto y vago en cierto sentido. Sería difícil formarse un juicio definitivo sobre dicho proyecto mientras no se hubiera resuelto el problema de la sucesión de Estados en lo que respecta a las deudas públicas y a los bienes públicos distintos de los bienes estatales.

23. El Gobierno se felicita de que, durante su 27º período de sesiones, la CDI aprobara 14 artículos adicionales sobre la cláusula de la nación más favorecida. La estrecha relación existente entre ese tema y la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados hace que se preste a su codificación por la CDI. En cambio, una codificación de alcance mundial sobre el tratamiento de la nación más favorecida afectará intereses comerciales extremadamente importantes en el sector del comercio entre el Este y el Oeste y el comercio entre los países industrializados y los países en desarrollo, intereses que oportunamente exigirían una revisión muy cuidadosa del proyecto de convenio.

24. La disposición del artículo 6 de que el trato de la nación más favorable se concederá a los Estados solamente en virtud de una obligación jurídica tiene suma importancia. El orador desea señalar a ese respecto que la concesión del trato de la nación más favorecida tuvo un papel esencial en los debates de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa. Sin embargo, en el Acta Final de esa Conferencia no se estableció ninguna obligación jurídica en el sentido que se le da en el artículo 6.

25. La declaración que ha de formular el portavoz de la Comunidad Económica Europea acerca del artículo 15 cuenta con el apoyo de la delegación de la República Federal de Alemania.

26. En lo tocante a la cuestión del decidir si un Estado beneficiario podría exigir el trato nacional en virtud de una cláusula de nación más favorecida invocando el hecho de que se haya concedido el mismo privilegio a un tercer país, su delegación opina que una interpretación tan amplia de la cláusula de la nación más favorecida podría provocar serias dudas. En respuesta a las observaciones del Presidente de la CDI (1524a. sesión) sobre ese tema, manifiesta que su Gobierno comparte la opinión ya expresada en los debates en el seno de la CDI de que la cuestión del trato nacional excede del mandato de la CDI y, por tanto, no debería examinarse en el marco del proyecto de artículos sobre la cláusula de la nación más favorecida.

27. En vista de los importantes aspectos comerciales de ese proyecto de artículos, convendría pedir las opiniones de los Estados Miembros en una etapa inicial de la labor de codificación, especialmente en lo que atañe a los temas que acaba de mencionar el orador.

28. En la etapa actual de la labor de la CDI sobre los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales, no parece apropiado expresar juicios detallados sobre el asunto. En principio, su país aplaude los intentos de codificar y desarrollar más el derecho de los tratados entre organizaciones internacionales como complemento de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que se relaciona con los tratados entre Estados.

29. A pesar de sus estrechas relaciones recíprocas, los tratados en que son partes organizaciones internacionales se diferencian mucho de los concertados entre Estados, especialmente en lo que se refiere a asuntos tales como la capacidad de concertar tratados, las deficiencias que podrían impedir que un tratado entrara en vigor y los procedimientos que deben aplicarse para concertar un tratado. Otro problema consiste en determinar si el principio establecido de que la validez de los tratados entre Estados sólo se extiende a las partes en ellos podría o no aplicarse a los tratados con organizaciones internacionales. En vista de esas dificultades, su delegación cree que todavía queda mucho trabajo por hacer sobre determinados temas.

30. Se ha puesto de manifiesto que algunos miembros de la CDI tienden a subrayar las diferencias entre los Estados y las organizaciones internacionales y por ello están a favor de una terminología que difiere de la utilizada en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. A juicio

del Gobierno de la República Federal de Alemania, debe tratarse de alcanzar el más alto grado posible de conformidad entre el proyecto de artículos y la Convención de Viena. Sin embargo, en la etapa actual sería prematuro adoptar un criterio definitivo con respecto a temas concretos. Entre ellos figura el problema de las reservas, que se examinó ampliamente en el período de sesiones del año en curso.

31. En cuanto a la capacidad de las organizaciones internacionales para concertar tratados, el orador dice que su Gobierno conviene con la redacción del artículo 6, que dispone que la capacidad de una organización internacional para celebrar tratados se rige por las normas pertinentes de esa organización. El orador expresa la confianza de su delegación en la labor del Relator Especial sobre ese tema.

32. El Sr. JARROUD (República Árabe Libia) da la bienvenida a los representantes de Cabo Verde, Mozambique, Papua Nueva Guinea y Santo Tomé y Príncipe.

33. Felicita al Presidente de la CDI por la clara y completa presentación de su informe, que facilitará mucho a la Sexta Comisión el estudio de ese documento.

34. La delegación de la República Árabe Libia no se propone formular por ahora sus juicios sobre el fondo del informe, y quizás lo haga oportunamente, después de haberlo estudiado cuidadosamente. El orador ha pedido la palabra sólo para decir cuánto aprecia la admirable labor realizada por la CDI en su 27º período de sesiones sobre los difíciles y delicados temas de la responsabilidad de los Estados, la sucesión de los Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados, la cláusula de la nación más favorecida y los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales. Su delegación confía en que la CDI, al preparar los proyectos de artículos, aplicará su gran capacidad en forma que refleje las experiencias de los países del tercer mundo, para satisfacer así la aspiración de esos últimos a participar en la redacción de disposiciones de derecho internacional que sean compatibles con los cambios habidos en el mundo moderno y se basan en los principios de la libertad, la justicia y la paz.

35. La delegación de la República Árabe Libia es partidaria de la cooperación entre la CDI y otros órganos de las Naciones Unidas, para unificar las actividades de codificación y desarrollo del derecho internacional.

36. El orador elogia a la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra por organizar un Seminario de derecho internacional para estudiantes especializados y jóvenes funcionarios durante el 27º período de sesiones de la CDI.

37. El Sr. CASSESE (Italia), hablando en nombre de la comunidad Económica Europea (CEE) y sus nueve Estados miembros, dice que la CEE y sus miembros consideran que la orientación general y algunas disposiciones del proyecto de artículos sobre la cláusula de la nación más favorecida, particularmente el artículo 15, así como las exposiciones del Relator Especial acerca de las uniones aduaneras y otras asociaciones similares de Estados, plantean serios problemas que afectan a todos ellos.

38. Del texto del artículo 15 se desprende que los Estados que están a favor de las uniones económicas, las uniones aduaneras, las zonas de libre comercio y asociaciones semejantes de Estados tendrían que conceder a terceros Estados, en virtud de la cláusula de la nación más favorecida, el mismo trato que se conceden entre sí. La CEE y sus miembros observan que, según se declara en el párrafo 23 del comentario sobre dicho artículo, la CDI reservó su posición sobre ese asunto. Sin embargo, las consecuencias de un artículo redactado en los términos propuestos por el Relator Especial tendrían tan gran alcance y darían lugar a reservas tan graves de parte de los países de la CEE que consideran procedente expresar su opinión inicial inmediatamente, especialmente en vista de que la CDI indicó en el párrafo 71 del comentario sobre el artículo 15 que quería tomar en cuenta las reacciones de los representantes de los Estados sobre esas cuestiones.

39. Si bien los países de la CEE no niegan que un artículo redactado en los términos actuales podría tener ciertos méritos como propuesta de carácter general, y si bien aprecian plenamente el valioso comentario presentado por el Relator Especial, desean formular tres objeciones principales. En primer lugar, el artículo está redactado en forma tan rígida que podría tener consecuencias adversas sobre la tendencia que se observa actualmente hacia la integración regional de Estados. Esa tendencia no se limita exclusivamente a Europa sino que puede observarse también en otras regiones del mundo como, por ejemplo, América Latina, donde ya se ven algunos ejemplos destacados de tales asociaciones. Esa tendencia se justifica por la necesidad general de resolver urgentes problemas económicos en forma conjunta mediante el establecimiento de vínculos estrechos entre los Estados de una misma región geográfica. Significaría un grave retroceso que los Estados, a consecuencia de firmar un tratado sobre la cláusula de la nación más favorecida, se vieran obligados a no participar en acuerdos regionales.

40. Por el mismo motivo, la aprobación del artículo 15 haría que los Estados se cuidaran mucho de conceder el trato de la nación más favorecida por temor a eliminar la posibilidad de formar más adelante una unión económica o de concertar acuerdos de integración regional, ya que obviamente es difícil que un Estado pueda prever los acuerdos internacionales que querría concertar en el futuro.

41. En segundo lugar, en su forma actual el artículo 15 no toma en cuenta el hecho de que en algunos tratados multilaterales por lo que se instituyen uniones económicas, las ventajas especiales se vinculan estrechamente a la existencia de instituciones comunes creadas para aplicar las reglas que conceden tales ventajas y comprobar que se observan. Además, tales ventajas no pueden separarse de los deberes, a veces muy amplios, que imponen los tratados a cada Estado contratante con respecto a los demás miembros de la comunidad. Por ejemplo, el tratado que instituyó la CEE incluye obligaciones tan amplias como el deber de permitir la libre circulación de las personas, los servicios y los capitales, de lograr la armonización de las leyes y reglamentos nacionales, de promover mejores condiciones de trabajo y un nivel de vida mejor para los trabajadores y de financiar un fondo social europeo para facilitar el empleo dentro de la CEE. Difícilmente se puede pretender que los Estados partes de tales uniones extiendan tales

beneficios a terceros Estados que no están sujetos a la vigilancia de las instituciones comunes de la comunidad no tienen la obligación de cumplir con los deberes relacionados con esos beneficios.

42. Esto ocurre particularmente en el caso de uniones tan avanzadas como la CEE, en la cual la integración regional no se limita a las relaciones económicas y comerciales, sino que también abarca amplios terrenos sociales y comprende un orden jurídico especial con normas aplicables directamente en cada Estado Miembro, cuya observancia está controlada por una corte de justicia con una jurisdicción muy amplia. En un caso como ése sería especialmente difícil separar las ventajas concretas previstas en el tratado por el que se instituyó la agrupación regional del contexto social y jurídico general del cual esas ventajas forman parte integrante.

43. La tercera consecuencia posible de la actual redacción del artículo 15 es que puede tener un efecto desintegrante sobre las relaciones actuales entre los miembros de las uniones aduaneras u otras organizaciones análogas existentes y los terceros Estados con los cuales dichos miembros hayan concertado anteriormente acuerdos con una cláusula de la nación más favorecida. En el caso de la CEE,

la negociación de arreglos mutuamente aceptables con terceros Estados ha sido una solución práctica del problema del efecto de las cláusulas de la nación más favorecida preexistentes, y, por ende, un artículo redactado en los términos del artículo 15 estaría en contradicción con los últimos progresos jurídicos y perturbaría la situación jurídica existente, alterando el equilibrio logrado merced a largos y arduos esfuerzos.

44. Por las razones que acaba de enunciar el orador, la CEE y sus nueve miembros opinan que en el artículo 15, y en otros artículos en la medida en que se refieran a uniones aduaneras y asociaciones análogas, habría que introducir salvedades que reflejen la actual tendencia hacia una cooperación regional más estrecha. Por lo tanto, la actitud de la CEE y de sus miembros con respecto al texto actual de esas disposiciones es una actitud de reserva general.

45. Las autoridades competentes de la CEE continúan estudiando activamente las cuestiones a que se ha referido el orador, quien, por consiguiente, desea reservar la posibilidad de una pequeña declaración adicional que se hará en los próximos días en nombre de la CEE.

Se levanta la sesión a las 12.15 horas.

1545a. sesión

Martes 21 de octubre de 1975, a las 15.20 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1545

TEMA 108 DEL PROGRAMA

Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 27º período de sesiones (continuación) (A/10010)

TEMA 109 DEL PROGRAMA

Sucesión de Estados en materia de tratados: informe del Secretario General (continuación) (A/10198 y Add.1 a 4, A/9610/Rev.1*)

1. El Sr. SIMANI (Kenya), tras subrayar la calidad constante de los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional (CDI), declara que su delegación considera definitivo el proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados (véase A/9610/Rev.1, cap. II, secc. D). Estima que dicho proyecto podría servir de base para la conclusión de una convención. Dado que el calendario de conferencias para el período de 1976 a 1977 está recargado, la Sexta Comisión podría examinar el proyecto en uno o varios de sus períodos de sesiones, como hizo respecto del proyecto de artículos sobre las misiones especiales.

2. Aunque algunas delegaciones hayan puesto de relieve la diversidad de factores históricos que han determinado el establecimiento de algunas fronteras, la delegación de Kenya aprueba el artículo 11, pues si fuera rechazado se plantearían muchos problemas insolubles que afectarían el mantenimiento de la paz y de la seguridad entre las naciones. Tras haber estudiado atentamente la doctrina y la práctica de los Estados, la CDI ha llegado a la convicción de que la mayoría de los autores modernos y de los Estados defienden la doctrina tradicional según la cual los tratados territoriales constituyen una categoría aparte y no se ven afectados por una sucesión de Estados. En 1963, la Organización de la Unidad Africana (OUA) se basó en consideraciones análogas para incluir en su Carta dos disposiciones en virtud de las cuales los Estados miembros de la OUA declaran solemnemente su adhesión al principio del respeto de la soberanía, de la integridad territorial y del derecho inalienable de todo Estado a observar una existencia independiente, y se comprometen además a observar escrupulosamente ese principio. Por otra parte, el objeto de los tratados que establecen una frontera es el de delimitar con precisión la soberanía de ciertos Estados; una vez efectuada esa delimitación, dichos tratados sólo tienen valor de pruebas documentarias. En caso de sucesión, el Estado sucesor se substituye en el Estado predecesor por lo que respecta a las fronteras, no a causa del tratado por el que se establecieron las fronteras, sino por el simple hecho

* Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno período de sesiones, Suplemento No. 10.

de la existencia de esas fronteras. No da lugar a recurrir en tales casos a la noción de la libre determinación, lo que sería una fuente de confusión.

3. La delegación de Kenya estima que cualquier otra excepción al principio de la "tabla rasa" surtiría el efecto de debilitar ese principio. Por ello le sería difícil aceptar el propuesto artículo 12 *bis* (*ibid.*, nota 57), según el cual los tratados multilaterales de carácter universal no se verían afectados por la regla enunciada en el artículo 15, que precisa la posición del Estado de reciente independencia con respecto a los tratados del Estado predecesor. Tampoco entiende por qué se ha realizado una distinción respecto de los tratados bilaterales, en los artículos 23 y 27. El representante de Kenya hace observar que el artículo 19, relativo a las reservas, contradice por completo el principio de la "tabla rasa". Dicha disposición se basa en la presunción de que el Estado sucesor hereda automáticamente las reservas, si no se demuestra que se han retirado. Ahora bien, el comentario a dicho artículo suministra muchos ejemplos extraídos de la práctica que contradicen dicha hipótesis.

4. Refiriéndose al voluminoso informe de la CDI sobre la labor realizada en su 27º período de sesiones (A/10010), que ha sido presentado brillantemente por el Presidente de la CDI, el Sr. Simani precisa que su delegación no ha tenido tiempo de examinarlo a fondo y que, por consiguiente, sus observaciones sólo tendrán carácter preliminar.

5. En lo que se refiere al proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados (*ibid.*, cap. II, secc. B), la delegación de Kenya celebra la alta calidad de los seis artículos recientemente adoptados sobre la base de los notables trabajos del Relator Especial encargado del estudio de esa materia. La CDI se propone acertadamente examinar la cuestión de la responsabilidad de los Estados en su conjunto, sin fraccionarla, como hizo para la sucesión de Estados.

6. Dado que el estudio de la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados sólo está en sus comienzos, el representante de Kenya se limita a hacer observar que será necesario, en uno u otro momento, proporcionar una definición del término "bienes", tal como se utiliza en el proyecto de artículos (*ibid.*, cap. III, secc. B).

7. En cuanto al estudio de la cláusula de la nación más favorecida (*ibid.*, cap. IV), ha progresado notablemente, pero, habida cuenta de la complejidad, de la importancia y del alcance de esa materia, la delegación de Kenya se propone exponer sus opiniones sino más adelante.

8. Se han realizado también grandes progresos en el estudio de la cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (*ibid.*, cap. V). Los 11 artículos que la CDI aprobó en su 27º período de sesiones se inspiran directamente en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados¹. Más adelante, la serie de artículos podría armonizarse en mayor grado con ese instrumento.

¹ Véase *Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados*, *Documentos de la Conferencia* (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.70.V.5), documento A/CONF.39/27, pág. 311.

9. En lo que respecta al derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación (*ibid.*, cap. VI, secc. A), el Sr. Simani precisa que el Gobierno de Kenya comunicará lo más pronto posible su respuesta al cuestionario preparado sobre esa materia.

10. El representante de Kenya aprueba la creación de un grupo de planificación encargado de estudiar el funcionamiento de la CDI y de formular sugerencias sobre sus trabajos, y observa con satisfacción que prosigue la cooperación con otros organismos que se ocupan de las mismas cuestiones que la CDI. Reconoce también la utilidad de seminarios de derecho internacional organizados durante los períodos de sesiones de la CDI.

11. El Sr. BEKELE (Etiopía), refiriéndose al proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados, observa con satisfacción que la CDI ha adoptado un principio conforme a las relaciones internacionales modernas, a saber el de la "tabla rasa". Dicho principio consagra la primacía del consentimiento en las relaciones convencionales: un Estado de reciente independencia no hereda automáticamente y, sin su consentimiento, los tratados del Estado predecesor. Asimismo, la CDI ha previsto acertadamente la aplicación del principio de la continuidad en algunos casos excepcionales, como el de los tratados que establecen fronteras. Esa excepción a la regla de la "tabla rasa", que deriva de principios de derecho internacional establecidos desde hace mucho tiempo y universalmente reconocidos, encuentra su expresión en la práctica de la gran mayoría de los Estados y recibe el apoyo de la mayor parte de los autores. Por otro lado, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados decidió excluir de la aplicación de la regla del cambio fundamental de circunstancias los tratados que establecen fronteras. Además, el principio del respeto de las fronteras establecidas ha sido confirmado por la mayoría de los Estados africanos cuando la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la OUA, reunida en El Cairo en 1964, aprobó una resolución por la que se comprometió a respetar las fronteras existentes en su lucha para obtener la independencia nacional. La delegación de Etiopía no entiende qué contradicción puede existir entre el principio de la continuidad de los tratados que establecen fronteras y el derecho a la libre determinación. En consecuencia, estima que el artículo 11 está confirmado sólidamente por el derecho internacional y la práctica de los Estados, y que su mantenimiento en la futura convención es una condición esencial para que reciba amplia aceptación.

12. En cuanto al propuesto artículo 12 *bis*, que se ocupa de los tratados multilaterales de carácter universal, la delegación de Etiopía estima que no es necesario remitirlo a la CDI. Es una conferencia de plenipotenciarios la que debe pronunciarse sobre la noción de tratado multilateral de carácter universal y decidir si el artículo 12 *bis* debe conservarse en la convención futura. Igualmente, el propuesto artículo 32 (véase A/9610/Rev.1, nota 58), relativo a la solución de controversias, no debe ser reexaminado por la CDI, aunque podría perfeccionarse; es preferible que una conferencia de plenipotenciarios lo examine a fondo.

13. Pasando al informe de la CDI sobre su 27º período de sesiones, brillantemente presentado por su Presidente, el Sr. Bekele pone de manifiesto la claridad y concisión de los

proyectos de artículos relativos a la cláusula de la nación más favorecida. Es indudable que el trato de la nación más favorecida estimula los intercambios comerciales entre Estados con sistemas económicos y sociales diferentes y que se encuentran en fases diferentes de desarrollo. A su vez, esos intercambios contribuyen a consolidar la paz y la seguridad internacionales. Al aprobar provisionalmente el artículo 21, que constituye una excepción a la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida, la CDI ha reconocido la necesidad de conceder a los países en desarrollo un trato especial, que consiste en otorgarles privilegios que no pueden ser invocados por los países desarrollados sobre la base de una cláusula de la nación más favorecida.

14. El representante de Etiopía celebra los progresos realizados por la CDI en el estudio de la cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales. Aprueba la metodología adoptada por el Relator Especial, que consiste en basarse en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.

El Sr. Klafkowski (Polonia), Vicepresidente, ocupa la Presidencia.

15. El Sr. MAKEKA (Lesotho) hace observar que el informe de la CDI ha llegado con mucho retraso a los gobiernos. Convendría que en el futuro los gobiernos recibieran esos documentos con mucha antelación a la apertura del período de sesiones de la Asamblea General, para que pudieran celebrar consultas con sus expertos. De lo contrario, las delegaciones deben limitarse a observaciones generales y preliminares sobre cuestiones que han sido examinadas a fondo por eminentes juristas.

16. En lo que respecta al proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados, el Sr. Makeka desea indicar que, si bien no le ofrecen especiales dificultades los artículos 1 a 13, se pregunta si no sería conveniente definir lo que se entiende por "órganos de un Estado". Antes de poder referirse a una entidad como órgano de un Estado, debe establecerse entre dicha entidad y el Estado de que se trate un vínculo que muestre que, en el momento del acto ilícito, dicho Estado ejercía un control sobre los actos de tal entidad. Ahora bien, según el proyecto de artículos, existe el riesgo de que se impute el acto de una entidad a un Estado por el sólo hecho de que esa entidad pretenda obrar en nombre de dicho Estado. Podría muy bien ocurrir que gobiernos como el de Lesotho se vieran abrumados de reclamaciones por actos sobre los cuales no ejercen ningún control efectivo. En cuanto a los artículos 14 y 15, tratan de los actos de movimientos insurreccionales, siendo así que el proyecto de artículos se refiere a la responsabilidad de los Estados. La cuestión planteada en esos artículos podría tratarse dentro del marco de la sucesión de Estados, y la delegación de Lesotho piensa que es difícil atribuir a los movimientos insurreccionales que llegan al poder la responsabilidad de los actos cometidos durante el combate, mientras que los movimientos insurreccionales que fracasan quedarían exentos de toda responsabilidad. En la mayoría de los casos, los combatientes de movimientos insurreccionales deben utilizar todos los medios de que disponen para conseguir sus objetivos. Por otra parte, los órganos de un movimiento insurreccional actúan frecuentemente con

toda independencia, sin control de los órganos superiores. Así pues, la delegación de Lesotho no estima lógico que se abruma a un nuevo gobierno o a un nuevo Estado con reclamaciones fundadas en los actos de un movimiento que puede, o no, haber dado nacimiento a ese nuevo gobierno, y piensa que debería mostrarse mayor prudencia en esa esfera.

17. En lo que respecta a la sucesión de Estados en materia de tratados, la delegación de Lesotho apoya plenamente la teoría de la "tabla rasa". Es cierto que, en la práctica, Lesotho ha observado el principio de la continuidad de los tratados para darse la posibilidad de examinar los tratados concluidos antes de la independencia. Pero conviene observar que, ocho años después de la independencia, todavía no ha finalizado ese examen. Por otra parte, el Sr. Makeka desea dar las gracias al Gobierno de Australia por la asistencia que ha proporcionado a su Gobierno con ese motivo. Sin embargo, ello no ha impedido que, en el intervalo, el Gobierno de Lesotho se viera abrumado de responsabilidades que no puede asumir. De ese modo, el Reino Unido, Potencia marítima, ha extendido a Lesotho, país in litoral, la aplicación de tratados marítimos. Tal es la razón de que el Gobierno de Lesotho prefiera un sistema basado en la libre adhesión del Estado sucesor y no en la presunción de continuidad. Por otra parte, el Gobierno de Lesotho defiende la posición adoptada por la OUA respecto de los tratados que establecen fronteras.

18. En lo que respecta a los trabajos de la CDI sobre la cláusula de la nación más favorecida, la delegación de Lesotho observa con satisfacción que la CDI ha tomado en cuenta los diferentes niveles de desarrollo económico en el mundo, y en particular que ha decidido excluir de la aplicación de la cláusula las situaciones previstas en el artículo 21. La delegación de Lesotho recomienda que, en su próximo período de sesiones, la CDI proceda igualmente en lo que concierne al libre acceso al mar y el derecho de tránsito de los países sin litoral "económicamente débiles", que constituyen la mayoría de los países menos desarrollados. En materia de tránsito, los países sin litoral deberían beneficiarse del trato nacional.

19. Por lo demás, Lesotho, que es parte en un acuerdo de unión aduanera, opina que no se puede equiparar el trato de la cláusula de la nación más favorecida con el trato concedido a otros asociados de una unión aduanera.

20. El Sr. Makeka felicita a la CDI por haber organizado el Seminario de derecho internacional, en el que el Gobierno de Lesotho desearía participar en el futuro.

21. El Sr. HAGARD (Suecia), antes de ocuparse del fondo del informe de la CDI, expresa que su delegación ha prestado gran interés a las observaciones del representante de Australia (1541a. sesión) sobre los métodos de trabajo de la CDI. Su idea de planificar la codificación y el desarrollo del derecho internacional en las Naciones Unidas y fuera de ellas atañe a problemas importantes y delicados que merecen un examen más detenido.

22. En lo que respecta a la responsabilidad de los Estados, el representante de Suecia se abstendrá de formular observaciones detalladas sobre el proyecto en la etapa actual. Sin embargo, el Gobierno sueco ha advertido que la

CDI enuncia un principio importante en el artículo 10 del proyecto, relativo a la atribución al Estado del comportamiento de órganos que actúan excediéndose en su competencia o en contra de las instrucciones concernientes a su actividad. Es justo que el Estado sea en principio responsable por los actos de las autoridades públicas aun cuando ellas se hayan extralimitado en su competencia y, además, existen disposiciones comparables en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y en la legislación sueca. La delegación de Suecia considera igualmente interesante el artículo 15 y, en especial, la idea de que hay que seguir atribuyendo al Estado, después del triunfo del movimiento insurreccional, el comportamiento anterior de los órganos del aparato de Estado preexistente. Sin embargo, cuando en el párrafo 6 de su comentario al artículo 15, la CDI expresa que "el comportamiento de los órganos del Estado preexistente no puede en forma alguna atribuirse al nuevo Estado que se ha separado de aquél por secesión o por descolonización", la delegación sueca considera que ese problema no corresponde al proyecto de artículos actual y debe considerarse en el marco de la cuestión de la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados.

23. Asimismo, la delegación sueca estima que la CDI debería tener en su programa de trabajo un tema distinto sobre la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales que derivan del ejercicio de actividades que no son prohibidas por el derecho internacional, cuyo estudio debería culminar con la elaboración de un proyecto de instrumento.

24. El informe de la CDI ilustra los importantes progresos realizados en los trabajos sobre la cláusula de la nación más favorecida. La delegación sueca espera que en su próximo período de sesiones la CDI esté en condiciones de fijar una posición sobre la delicada cuestión de la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida a los beneficios concedidos en el marco de una unión aduanera o de una zona de libre comercio. En la etapa actual de los trabajos, la delegación sueca no puede emitir una opinión definitiva sobre ese problema, y considera que la cuestión de saber si la cláusula de la nación más favorecida da a un Estado contratante el derecho a determinados beneficios que otro Estado contratante otorga a sus asociados en una unión aduanera constituye, en esencia, una cuestión de interpretación del tratado, es decir, que la conclusión que ha de extraerse puede diferir según el caso. Sin embargo, queda por ver si sería conveniente establecer una presunción legal en favor de una interpretación especial, presunción que no se aplicaría en el caso de que elementos de suficiente peso indujeran a extraer una conclusión distinta. Si hay motivos para admitir la existencia de una presunción según la cual la cláusula de la nación más favorecida no puede oponerse a las uniones aduaneras y a las zonas de libre comercio, esa presunción debería de preferencia aplicarse principalmente cuando la unión aduanera o la zona de libre comercio se hubiera creado después de la celebración del acuerdo que contenga la cláusula de la nación más favorecida. En ese caso, sería más conveniente que la cláusula de la nación más favorecida no tuviese por efecto otorgar un derecho a los beneficios ofrecidos por la cooperación que caracteriza a una unión aduanera o una zona de libre comercio. En cambio, si un Estado que ya es parte en un acuerdo por el que se establezca una unión aduanera o una zona de libre

comercio celebra con un tercer Estado un acuerdo que contenga una cláusula de la nación más favorecida, se puede pensar que ese Estado debe precisar si se propone o no establecer una excepción a la cláusula. En ese caso, no parece justificado presumir que la cláusula de la nación más favorecida no se extiende a los beneficios otorgados en el primer acuerdo.

25. La CDI ha previsto otra disposición interesante, a saber, el artículo 21, según el cual una cláusula de la nación más favorecida no extiende a otros Estados el trato concedido a los países en desarrollo sobre una base no recíproca, dentro del marco de un sistema generalizado de preferencias. Se trata en ese caso de una cuestión de interpretación de los tratados y sería totalmente ilógico interpretar una cláusula de la nación más favorecida en el sentido de que da a un país desarrollado el derecho de beneficiarse de las ventajas concedidas a los países en desarrollo en un sistema de preferencias. Teniendo en cuenta esas consideraciones, habrá que examinar si es necesario prever un artículo preciso sobre la cuestión.

26. La delegación sueca no tiene observaciones especiales que formular sobre las demás cuestiones examinadas por la CDI, pero espera poder presentar oportunamente sus comentarios sobre los proyectos de artículos relativos a la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados y a los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales. Por otra parte, confía en que la CDI podrá estudiar en su próximo período de sesiones el derecho relativo a los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, teniendo presentes las respuestas dadas a su cuestionario.

27. En cuanto al Seminario de derecho internacional en que participan estudiantes de países en desarrollo gracias a las becas financiadas mediante contribuciones voluntarias, sería oportuno que algunas de ellas se financiaran con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, pero la delegación sueca se referirá de nuevo a este punto más tarde. Al respecto, el representante de Suecia anuncia que su Gobierno ha decidido fijar en 2.500 dólares su contribución para el Seminario que se celebrará en 1976.

28. El Sr. BENJELLOUN (Marruecos) señala que Marruecos no ha presentado aún por escrito al Secretario General sus observaciones y comentarios respecto del proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados, pero que no dejará de hacerlo.

29. El proyecto de artículos relativo a la sucesión de Estados en materia de tratados reviste especial importancia para los Estados de reciente independencia. Cabe preguntarse si es oportuno dar al proyecto la forma de una convención. A juicio de la delegación de Marruecos, sería más apropiado que el texto se aprobase en definitiva bajo la forma de resolución de la Asamblea General. Sin embargo, si la mayoría se inclina a favor de la elaboración de una convención, sería necesario encomendar esa tarea a una conferencia diplomática. Para la preparación del proyecto de artículos, la CDI ha preferido partir del principio de que no hay sucesión automática y prever excepciones a este principio, en vez de optar por el método inverso. La CDI ha elegido a ese respecto una solución prudente pero que

necesariamente conduce a posiciones radicales, como lo demuestra el artículo 11. Tal como lo ha señalado la propia CDI, el examen detenido de la práctica de los Estados no ha permitido concluir en forma convincente en la existencia de una doctrina general capaz de ofrecer una solución adecuada al problema considerado. Era pues inevitable que la CDI adoptase en determinados casos una forma de transacción entre puntos de vista divergentes. El estudio realizado y el proyecto preparado por la CDI son profundos y detallados. Sin embargo, algunos artículos merecen un nuevo examen.

30. Debería suprimirse el artículo 7, aprobado por una mayoría muy débil, porque la irretroactividad es un principio general del derecho de los tratados. Además, la redacción propuesta carece de precisión y cabe preguntarse lo que ha de entenderse por la expresión "se haya convenido en otra cosa".

31. Los artículos 8 y 9, relativos a los acuerdos para la transmisión de obligaciones o derechos convencionales de un Estado predecesor a un Estado sucesor y a la declaración unilateral del Estado sucesor relativa a los tratados del Estado predecesor, también parecen superfluos. En efecto, si se aprueba el proyecto, la materia se regirá por sus propias disposiciones, que por lo demás establecen la misma solución. Al parecer, los artículos 8 y 9 duplican el resto del texto.

32. El artículo 11, que constituye una excepción muy importante al principio de la "tabla rasa", establece principalmente que una sucesión de Estados no afectará de por sí a una frontera establecida por un tratado. Naturalmente, en su comentario, la CDI aclara que tal disposición no influiría en absoluto sobre otra razón que pudiera invocarse para reclamar la revisión o el rechazo de un acuerdo de fronteras, ya se trate de la libre determinación o de la nulidad o extinción del tratado. No influiría tampoco en los argumentos jurídicos que podrían invocarse para justificar toda reivindicación. La CDI ha añadido en el párrafo 17 del comentario los artículos 11 y 12 que el simple hecho de una sucesión de Estados no debería tener por efecto consagrar la frontera existente si ella fuese objeto de impugnación. Esa afirmación parece estar en contradicción con el objeto que persigue la totalidad del proyecto y las explicaciones suministradas por la CDI que persigue la totalidad del proyecto y las explicaciones suministradas por la CDI causan alguna inquietud a la delegación marroquí en cuanto al alcance del propio proyecto. Víctima de una real desmembración en 1912, Marruecos no ha cesado de proclamar, desde su independencia, su derecho a la integridad territorial, ni de reclamar la restitución de sus territorios que todavía están bajo la dominación extranjera. Regularmente ha formulado reservas cada vez que se ha expuesto el principio de la intangibilidad de las fronteras, por ejemplo, cuando se aprobó el inciso a) del párrafo 2 del artículo 62 de la Convención de Viena o cuando la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la OUA aprobó en 1964 una resolución proclamando que todos los Estados Miembros se comprometían a respetar las fronteras existentes en el momento de obtener su independencia. El artículo 11, que procede del mismo punto de vista, suscita las mismas reservas. Tener en cuenta sólo un tratado, aprobado con frecuencia en detrimento de un Estado colonizado, equi-

vale a perpetuar de alguna manera los efectos de la colonización. Al parecer, la elección hecha por la CDI a ese respecto se ha inspirado en la importancia que atribuye a la noción de la libre determinación. Ahora bien, en materia de descolonización, esa noción no es excluyente de toda otra. La Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales (resolución 1514 (XV) de la Asamblea General) enuncia por cierto el principio del derecho de los pueblos a la libre determinación, pero dispone igualmente en el párrafo 6 que "Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas". Además, la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General, en el principio VI del anexo, expresa que un territorio no autónomo ha alcanzado la plenitud del gobierno propio: a) cuando pasa a ser un Estado independiente y soberano; b) cuando establece una libre asociación con un Estado independiente; c) cuando se integra a un Estado independiente. Es significativo a ese respecto el caso del Irán Occidental, que se ha restituido a Indonesia; y el hecho de que la Asamblea General haya aprobado la resolución 3292 (XXIX), en la que solicitaba la opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre los vínculos jurídicos que existían, en el momento de la colonización, entre el Sáhara occidental por una parte y Mauritania y Marruecos por la otra, demuestra que las Naciones Unidas admiten la existencia de casos especiales que requieren soluciones especiales. La CDI no ha conservado, por otra parte, sino el régimen de fronteras o determinados regímenes territoriales establecidos mediante tratados como excepciones a la regla de la "tabla rasa". Tal vez hubiera podido indagar más atentamente qué otras categorías de tratados podrían considerarse que ligaban obligatoriamente al Estado sucesor, lo que necesariamente hubiera dirigido su atención hacia otros aspectos del problema y hubiera podido inducir a adoptar una solución más amplia. La delegación marroquí se reserva su posición tanto sobre el artículo 11 como sobre el artículo 12 que lo complementa.

33. La delegación de Marruecos no está de acuerdo con la inclusión en el proyecto de un artículo 12 *bis* relativo a los tratados multilaterales de carácter universal porque, a su juicio, esa noción de precisión. En lo que respecta al propuesto artículo 32, relativo a la solución de controversias, cabe observar que esa cuestión no se planteará sino en el caso de que el proyecto revista en definitiva la forma de una convención. En consecuencia, debería quedar librada a la conferencia diplomática encargada de elaborar la convención la tarea de adoptar las soluciones que le parecieran más adecuadas. En cuanto a los artículos 38 y 39, que se ocupan de los casos de responsabilidad de un Estado o de ruptura de hostilidades y de la ocupación militar, deberían suprimirse porque se relacionan con cuestiones que nada tienen que ver con la sucesión de los Estados.

34. A juicio de la delegación marroquí, el proyecto de artículos, aunque interesante, merece un examen más acabado. En efecto, carece de la suficiente madurez como para permitir el establecimiento y la aprobación de un texto definitivo.

35. El Sr. ROSENSTOCK (Estados Unidos de América) constata con satisfacción que la CDI ha realizado una labor

importante durante su 27º período de sesiones, bajo la presidencia del Sr. Tabibi. Ha terminado el capítulo II de la primera parte del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados, capítulo que se ocupa de las circunstancias en que el comportamiento de ciertas personas o de ciertas entidades jurídicas puede atribuirse al Estado. Esa es una cuestión difícil que durante años ha sido la fuente de grandes desacuerdos en opiniones jurídicas. El capítulo II reafirma un conjunto de principios bien pensados con miras a resolver los problemas de imputación. Los Estados Unidos presentarán oportunamente sus comentarios respecto de esos artículos, así como de los demás artículos sobre la responsabilidad de los Estados. Sin embargo, el orador desea señalar desde ahora que el artículo 11, relativo al comportamiento de las personas que no actúan por cuenta del Estado, carece de la precisión suficiente. Del párrafo 2 del comentario de la CDI se desprende que ese artículo expresa la regla de que los actos de las personas jurídicas "paraestatales", así como de otras entidades públicas que sin embargo no están autorizadas a ejercer prerrogativas del poder público o que lo han estado en relación con un sector de actividad diferente de aquel en que han actuado, no deben considerarse como hechos del Estado según el derecho internacional. Es posible llegar a esa conclusión interpretando el párrafo 1 del artículo 11 a la luz de los artículos 5 y 7. Sin embargo, sería preferible aclarar la redacción del artículo 11 a fin de obviar ese esfuerzo de interpretación.

36. Los Estados Unidos aprueban el esbozo del contenido que la CDI se propone dar a los tres últimos capítulos de la primera parte del proyecto. En el artículo 20 del capítulo III, el Relator Especial se propone considerar el problema del agotamiento de los medios de recursos internos en el caso de la violación de una obligación de resultado y, al parecer, no tiene la intención de considerar sino ese aspecto de la cuestión del agotamiento de los recursos internos. Ahora bien, a juicio de la delegación estadounidense, ése es un punto que la CDI debería examinar bajo todos sus aspectos.

37. La delegación estadounidense aprueba la decisión de la CDI de terminar la primera lectura de la primera parte del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados antes que termine el próximo mandato de cinco años de sus miembros. Se congratula además de la creación del grupo de planificación encargado de estudiar el funcionamiento de la CDI y de formular sugerencias respecto de sus trabajos. Habida cuenta de la amplitud de la tarea encomendada a la CDI y del tiempo y medios limitados de que dispone, la organización racional de sus trabajos es una necesidad evidente. Además se han hecho sugerencias a ese respecto en la Sexta Comisión. Las mejoras son posibles, pero conviene no olvidar las ventajas que presentan los métodos actuales de trabajo de la CDI, que permiten que varios relatores especiales trabajan simultáneamente entre los períodos de sesiones y dejen suficiente tiempo a los gobiernos para formular sus observaciones durante la elaboración de un texto, lo que refuerza las oportunidades de que ese texto, una vez terminado, pueda lograr un acuerdo general. El grupo de planificación deberá atender esas ventajas, así como las sugerencias que se han formulado.

38. Los tres nuevos artículos del proyecto sobre la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas

de los tratados aprobados por la CDI atestiguan la complejidad de esa cuestión. El artículo 9, que dispone que los bienes de Estados que, en la fecha de la sucesión de Estados, pasarán al Estado sucesor, se ajusta a la práctica generalmente aceptada de los Estados, así como a la doctrina.

39. Los trabajos de la CDI sobre la cláusula de la nación más favorecida han progresado también considerablemente, y la delegación estadounidense toma nota con satisfacción de los 21 artículos del proyecto. El principio enunciado en el artículo 21, según el cual el trato favorable cedido por un Estado concedente desarrollado a un tercer Estado en desarrollo, sobre una base no recíproca, dentro del marco de un sistema generalizado de preferencias, no concede ningún derecho al Estado beneficiario de una cláusula de la nación más favorecida, se atiene a la posición adoptada por los Estados Unidos en diversos órganos en que se examinan los problemas del comercio entre Estados en desarrollo y Estados desarrollados. Sin embargo, transformar ese principio en norma obligatoria e incluirlo en un tratado destinado a permanecer por muchos años en vigor puede suscitar dificultades de aplicación. En efecto, no es fácil trazar una línea de demarcación neta entre la noción de país desarrollado y la de país en desarrollo. Además, se puede plantear el problema de saber si el Estado concedente desarrollado es juez único de lo que entra dentro del marco de un sistema generalizado de preferencias. Además, la CDI ha aprobado el texto del artículo 21 sólo provisionalmente y a reserva de un examen más amplio y de la introducción de mejoras durante el 28º período de sesiones. Deberá tener en cuenta entonces los problemas que el orador ha señalado. En el comentario al artículo 21, la CDI examinó en detalle diversos informes relativos a las preferencias comerciales. Ahora bien, parece que los problemas de política comercial que son materia de esos informes no entran en el marco normal de sus trabajos y que el proyecto de artículos sobre la cláusula de la nación más favorecida no constituye el contexto apropiado para considerar cuestiones que pertenecen más bien a la política comercial que al derecho.

40. Los trabajos sobre la cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales también han progresado considerablemente. No obstante, la delegación estadounidense cree que las distinciones que la CDI establece entre los Estados y las organizaciones internacionales son demasiado marcadas. Por ejemplo, el artículo 7 dispone que para los fines de la autenticación del texto de un tratado entre uno o varios Estados y una o varias delegaciones internacionales, el representante de un Estado debe presentar "adecuados plenos poderes", mientras que el representante de una organización internacional debe presentar su consentimiento en obligarse por un tratado mediante "ratificación", mientras que una organización internacional lo hace mediante, "un acto de confirmación formal". Si bien admite que es menester establecer una distinción entre los Estados y las organizaciones internacionales en ciertas esferas, la delegación estadounidense no cree que se gana nada estableciendo distinciones artificiales de esa índole. De hecho, se perdería algo al tratar de disminuir la estatura de las organizaciones internacionales mediante el uso de distinciones artificiales.

41. En su conjunto, los trabajos realizados por la CDI durante su 27º período de sesiones son muy satisfactorios y cabe esperar que pueda ejecutar el programa de trabajo que se ha fijado en el capítulo VI de su informe y continuar su labor sobre el derecho relativo a los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación,

cuya importancia es evidente en una época en que se somete los recursos naturales a una explotación cada vez más intensa.

Se levanta la sesión a las 16.40 horas.

1546a. sesión

Miércoles 22 de octubre de 1975, a las 10.50 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1546

TEMA 108 DEL PROGRAMA

Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 27º período de sesiones (continuación) (A/10010)

TEMA 109 DEL PROGRAMA

Sucesión de Estados en materia de tratados: informe del Secretario General (continuación) (A/10198 y Add.1 a 4, A/9610/Rev.1*)

1. El Sr. JACHEK (Checoslovaquia) da las gracias al Presidente de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) por su declaración introductoria (1534a. sesión) y se adhiere plenamente a sus observaciones en relación con el éxito logrado en la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional y los trascendentales cambios positivos que se han producido en la composición de los órganos de las Naciones Unidas que se ocupan de cuestiones relacionadas con el derecho internacional. El fortalecimiento y desarrollo del sistema de derecho internacional moderno, firmemente basado en la Carta de las Naciones Unidas, es una de las tareas primordiales a que hacen frente la Organización y todos sus Estados Miembros.

2. El 27º período de sesiones de la CDI fue uno de sus más productivos. Se lograron progresos respecto de todos los temas que se examinaron, incluida la necesidad de racionalizar la labor de la CDI. En principio, la delegación de Checoslovaquia aprueba el programa de trabajo recomendado por la CDI, pero espera que los esfuerzos de ella por racionalizar su labor se centren en la terminación, a la brevedad posible, de los trabajos acerca de temas tan importantes como los proyectos de artículos sobre responsabilidad de los Estados y la cláusula de la nación más favorecida. También es muy importante completar los trabajos sobre sucesión de Estados, pues existe el peligro de que, con el transcurso de los años, los proyectos que se examinan pierdan actualidad.

3. Refiriéndose al proyecto de artículos sobre responsabilidad de los Estados (véase A/10010, cap. II, secc. B), el orador hace hincapié en la importancia de una definición

más exacta del concepto de “violación de una obligación internacional”. La definición que figura en el artículo 3 es demasiado general. Al definir las diversas categorías de violaciones de obligaciones internacionales tal vez sería útil establecer una categoría de hechos internacionalmente ilícitos que pudieran calificarse de crímenes internacionales, como la agresión, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el *apartheid* y otros similares. En relación con los artículos 14 y 15, respecto de los cuales el representante de la República Democrática Alemana (1539a. sesión) formuló algunas importantes observaciones, la delegación de Checoslovaquia comparte la opinión de que debe aclararse el concepto de “movimiento insurreccional”, a fin de evitar toda posibilidad de que se atribuya responsabilidad por hechos internacionalmente ilícitos perpetrados por un Estado predecesor a un nuevo Estado de carácter totalmente distinto, que puede haberse formado como consecuencia de una revolución social o de una lucha de liberación nacional contra el colonialismo o el fascismo.

4. Complace a la delegación de Checoslovaquia observar los considerables progresos realizados por la CDI en su 27º período de sesiones acerca del proyecto de artículos sobre la cláusula de la nación más favorecida (véase A/10010, cap. IV, secc. B), y espera que la CDI pueda completar ese importante proyecto en el curso del próximo año. El sexto informe del Relator Especial¹ sobre el tema, preparado en forma excelente, proporciona una base adecuada para la codificación de los principios jurídicos relativos a la cláusula de la nación más favorecida, que tienen gran importancia para la coexistencia pacífica entre Estados con sistemas sociales diferentes y el fortalecimiento de la cooperación internacional sobre la base de la igualdad de derechos y el beneficio mutuo. La importancia del trato de la nación más favorecida se ha destacado en uno de los documentos políticos más importantes de los últimos tiempos, a saber, el Acta Final de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa. En sus trabajos futuros acerca de la cláusula de la nación más favorecida, la CDI debe también prestar atención a la cuestión del trato nacional, pues, como lo han señalado varias delegaciones, ambas cláusulas tienen muchos elementos en común. Su delegación no se opondría a que las dos cuestiones se consideraran simultáneamente, si se estimara adecuado. La CDI debe seguir centrando su atención en la cláusula de la

* Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno período de sesiones, Suplemento No. 10.

¹ A/CN.4/286.

nación más favorecida, que tiene gran importancia para la promoción de las relaciones comerciales y políticas entre Estados y para la eliminación de las discriminaciones. La delegación de Checoslovaquia sugiere que, en sus trabajos sobre la cuestión del trato nacional, la CDI incluya una cláusula de salvaguardia, de manera que las partes contratantes tengan la oportunidad de incluir las estipulaciones que deseen en un acuerdo que incluya una cláusula de la nación más favorecida. La delegación de Checoslovaquia apoya la idea en que se basa el artículo 21, esto es, que debe concederse una excepción especial a los países en desarrollo en relación con la cláusula de la nación más favorecida, a fin de que puedan recibir un trato preferente. Sin embargo, ésta debería ser la única excepción a la cláusula; cualquier otra excepción sería inaceptable y haría disminuir considerablemente la eficacia de la cláusula.

5. Refiriéndose al proyecto de artículos sobre los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales (*ibid.*, cap. V, secc. B), el orador observa que en los artículos 7 a 18 se ha seguido el modelo de los artículos correspondientes de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados². La CDI ha señalado acertadamente que, desde el punto de vista jurídico, no pueden asimilarse las organizaciones internacionales a los Estados y que la personalidad jurídica de esas organizaciones es la que les confieren sus Estados miembros. En sus trabajos futuros sobre ese tema, la CDI debe partir de la base de que no cabe considerar que las organizaciones internacionales tienen facultades supranacionales y que no pueden llegar a ser partes en tratados multilaterales generales en pie de igualdad con los Estados. Las organizaciones internacionales no deben arrogarse las prerrogativas que corresponden a sus Estados miembros cuando se hacen partes en tratados multilaterales de carácter universal.

6. El orador expresa el reconocimiento de su delegación a los miembros de la CDI y, en particular, al Presidente de la misma en su 27º período de sesiones, a los Relatores Especiales sobre los diversos temas de que se ocupó la CDI y a todos los funcionarios de la Secretaría que contribuyeron en gran medida al éxito de la labor realizada por la CDI en dicho período de sesiones.

7. El Sr. SABEL (Israel) expresa su reconocimiento por la labor sumamente detenida y valiosa realizada por la CDI en su 27º período de sesiones.

8. La cuestión de la sucesión de Estados en materia de tratados, a que se refiere el informe de la CDI sobre su 26º período de sesiones (A/9610/Rev.1), constituye un tema que, para su país, tiene un interés que excede del ámbito académico. Tras la terminación del Mandato británico en Palestina, se suscitó el problema de determinar hasta qué punto tenían fuerza obligatoria respecto de Israel, de tener alguna, los tratados en que había sido parte la Potencia Mandataria. Israel adoptó la posición de que, como nuevo sujeto con personalidad internacional, no estaba automáticamente obligado por los tratados en que había

sido parte Palestina y de que sus futuras relaciones convencionales con Potencia extranjeras habrían de ser reguladas directamente por Israel y las Potencias de que se tratara. En relación con el párrafo 75 del informe de la CDI, la delegación de Israel estima que será prácticamente imposible llegar a un acuerdo acerca de una lista de las convenciones multilaterales que estarían en una situación especial en relación con el principio de la "tabla rasa". En lo tocante a la solución de controversias, su delegación opina que habría que incluir en el proyecto un artículo sobre esa cuestión. La delegación de Israel no está segura de que el momento sea oportuno para convocar una conferencia de plenipotenciarios, especialmente si se tiene en cuenta el recargado calendario de conferencias jurídicas internacionales programadas para el futuro cercano.

9. La cuestión de la sucesión de Estados en materia de tratados tiene en general interés académico para la mayoría de los gobiernos. En vista de las disposiciones relativas al efecto no retroactivo de la convención propuesta, según se establece en el artículo 7 del proyecto (*ibid.*, cap. II, secc. D), resulta difícil prever alguna situación en que se pueda aplicar la convención propuesta. En consecuencia, es poco probable que muchos Estados participen en una conferencia sobre ese tema o que estén dispuestos a firmar y ratificar una convención de esa índole. Por lo tanto, la delegación de Israel tiende a sumarse a los partidarios de que se haga una declaración de principios sobre el tema, declaración que bien podría tener un valor más perdurable que una convención con un número muy reducido de partes. Sin embargo, es dudoso que la Sexta Comisión disponga de los medios o del tiempo necesario para efectuar el examen detallado, artículo por artículo, del proyecto que sería indispensable para lograr un texto aceptable. En esas circunstancias, la mejor solución sería aplazar la adopción de nuevas decisiones sobre la cuestión hasta el momento en que la CDI terminase sus trabajos sobre la cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales. De ese modo se podrían examinar esas cuestiones en una sola conferencia diplomática, a la que correspondería redactar un nuevo instrumento que complementara la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.

10. En lo que atañe al proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados, la delegación de Israel acepta el principio de atribuir al Estado responsabilidad por el comportamiento de sus órganos que actúen en transgresión de las disposiciones del derecho interno. Israel coincide con la CDI en que no procede examinar la cuestión de si el acto fue o no *ultra vires*, y de que no procedería establecer una distinción entre la falta manifiesta de competencia y la competencia aparente. En la esfera de los hechos internacionalmente ilícitos, no es pertinente el estado de ánimo presunto o inferido del ente que sufre el agravio. La negación de la responsabilidad internacional del Estado involucrado entrañaría la negación de toda responsabilidad respecto de la víctima que, por definición, seguiría sin medios para obtener reparación. La norma general que se establece en el artículo 12 debe ser objeto de un estudio muy cuidadoso. El párrafo 2 del artículo, al que la CDI se refiere como la "cláusula de salvaguardia", constituye una parte vital e integrante de la norma en su conjunto. En ciertas circunstancias, la responsabilidad que recaería sobre un Estado por su hecho, omisión, acción, negligencia o

² Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.70.V.5), documento A/CONF.39/27, pág. 311.

comportamiento pasivo en relación con un hecho ilícito perpetrado en su territorio por el órgano de otro Estado podría compararse con la responsabilidad que corresponde a ese último Estado. Además, es necesario estudiar detenidamente la cuestión de si existe alguna presunción de responsabilidad en esas cuestiones. En lo que respecta al artículo 13, la CDI, probablemente con un criterio bastante acertado, dejó sin estudiar un gran número de aspectos jurídicos. La delegación de Israel espera con interés que la CDI y la Sexta Comisión hagan un estudio completo de los diversos aspectos de las relaciones entre las organizaciones internacionales, los miembros participantes y los Estados huéspedes, pero deberá ser un estudio a fondo, que rebase el alcance limitado de la Convención de Viena sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal³.

11. Al igual que otras delegaciones, la delegación de Israel considera que el hecho de tener que estudiar en un período muy corto un informe tan voluminoso como el de la CDI significa un esfuerzo enorme. Por ello, acogería con beneplácito cualquier medida que se tomara para reducir esa presión; sin embargo, debe tenerse cuidado de no instituir cambios de procedimiento que puedan hacer que la CDI estime que no se reconoce la calidad de su trabajo o que la Sexta Comisión no exige el alto nivel actual de erudición jurídica. Tal vez sería útil que el informe se publicara con bastante antelación a las sesiones de la Sexta Comisión, a fin de que las delegaciones pudieran estudiarlo en detalle. La delegación de Israel apoya la sugerencia de que el informe anual de la CDI se limite estrictamente a los trabajos complementarios efectuados por ella en el curso del año correspondiente y que las referencias a la labor anterior y a los materiales de investigación se limite a las notas de pie de página. Esa condensación del informe podría originar algunos problemas prácticos para quienes lo estudiaran; sin embargo, ello quedaría compensado con creces por la gran ventaja de disponer de un informe mucho más corto y pondría fin al problema de la repetición a que hizo referencia el representante de Australia (1541a. sesión).

12. La delegación de Israel acoge con beneplácito la propuesta de que las Naciones Unidas consideren la posibilidad de emprender un estudio amplio de todo el sistema de celebración de tratados internacionales, inclusive las funciones que corresponden a la Sexta Comisión y a la CDI en ese proceso. Tal estudio sería oportuno y beneficiaría a las Naciones Unidas en su totalidad.

13. El Sr. MOGENSEN (Dinamarca) observa con satisfacción que en su 27º período de sesiones la CDI continuó su examen prioritario de las cuestiones de la responsabilidad de los Estados y de la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados.

14. En lo que se refiere a la responsabilidad de los Estados, parece convenirse ampliamente en que debe imputarse a los Estados la responsabilidad sólo por los hechos de sus propios órganos y no por los hechos de particulares. Ese

principio informa varios de los artículos aprobados hasta la fecha. Por ejemplo, en el artículo 14 se dispone que no se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de un movimiento insurreccional establecido en el territorio de ese Estado. Sin embargo, el Estado podría incurrir en responsabilidad por ese comportamiento si hubiera descuidado su deber de hacer cuanto estuviera a su alcance para proteger las personas y bienes de los extranjeros. En tal caso, la responsabilidad del Estado dimanaría de omisiones de los órganos del Estado. Sin embargo, todo ese problema queda fuera del contexto de los artículos relativos al comportamiento de los movimientos insurreccionales.

15. En el artículo 15, la CDI adoptó una posición sobre la cuestión controversial de si el hecho de un movimiento insurreccional que se hace con el poder *ex post facto* en un Estado debe considerarse como hecho de ese Estado. La respuesta de la CDI ha sido afirmativa, y ello corresponde a la práctica vigente al respecto. Podría parecer peculiar que la posibilidad de que una parte lesionada obtenga del movimiento insurreccional la reparación a que cree tener derecho dependa de que el movimiento insurreccional derroque al gobierno que ocupa el poder. Si embargo, sería irrazonable e incompatible con el principio contenido en el artículo 14 que a un Estado que hubiera reprimido un movimiento insurreccional se le considerara responsable por el comportamiento de los insurgentes, excepto, naturalmente, la responsabilidad que pudiera dimanar de la negligencia de sus órganos. A juicio de la delegación de Dinamarca, la solución prevista en el artículo 15 es adecuada por cuanto mantiene la continuidad de la responsabilidad. Si el movimiento insurreccional triunfa, podría presentarse una reclamación al nuevo régimen, pero, si fracasa, no habría posibilidad de obtener una reparación del movimiento ni de otros por sus hechos ilícitos.

16. A raíz de la aprobación provisional, en 1973, de ocho artículos del proyecto de convención sobre la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados, los tres últimos de los cuales se basan en la hipótesis de una transmisión *de facto* de los bienes públicos del Estado predecesor al Estado sucesor, se ha suscitado la necesidad de un artículo que establezca expresamente ese principio. Esa importante regla general, que está contenida actualmente en el artículo 9 (véase A/10010, cap. III, secc. B), podría insertarse de modo más adecuado como continuación directa del artículo 5, a fin de poner en claro la base de las disposiciones más detalladas de los artículos 6 a 8. La definición dada por el Relator Especial de los bienes públicos que han de transmitirse al Estado sucesor se ha basado en el concepto de la soberanía, que es difícil de interpretar desde el punto de vista político en una forma generalmente aceptable. Sin embargo, la delegación de Dinamarca coincide en que es necesaria alguna forma de definición, y considera que la revisión del artículo 9 llevada a cabo en el 27º período de sesiones constituye una mejora considerable. La limitación del ámbito de aplicabilidad de esa disposición a los bienes públicos situados en el territorio a que se refiere la sucesión suministra un punto de partida claro y generalmente viable. Dicha disposición, con su redacción actual, si se completa con disposiciones relativas a los bienes públicos situados fuera del territorio de que se trate, tomaría en cuenta adecuadamente los múltiples problemas que entrañan las diversas formas de sucesión.

³ Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales vol. II (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.75.V.12), documento A/CONF.67/16.

17. Con respecto al artículo 11, parecería lógico y acorde con el principio general enunciado en el artículo 9 que correspondieran al Estado sucesor las deudas pendientes del Estado predecesor. Como en el caso del artículo 9, probablemente podría conseguirse mayor claridad si se omitieran las referencias al concepto de soberanía y actividad. La delegación de Dinamarca no tendrá objeciones que oponer a la incorporación en el proyecto de convención de una regla expresa relativa a los bienes de terceros Estados en casos de sucesión, siempre que no se establecieran excepciones a dicha regla, como se ha hecho, por ejemplo, en el proyecto del Relator Especial⁴, que incluye una referencia al orden público del Estado sucesor. Tal excepción estaría fuera de lugar en los artículos relativos a la sucesión, aunque sólo fuera por la razón de que el sistema jurídico del Estado sucesor, y consiguientemente el concepto de orden público, surge después de la sucesión, cuando el sucesor comienza a ejercer la autoridad del Estado sobre el territorio de que se trate. Por consiguiente, no puede considerarse que cualquier medida que adopte un Estado sucesor respecto de los bienes de terceros Estados sea efecto de la sucesión; sería simplemente una manifestación de la jurisdicción que todo Estado tiene derecho a ejercer dentro de su territorio.

18. En cuanto al proyecto de artículos sobre la cláusula de la nación más favorecida, la delegación de Dinamarca elogia a la CDI por los considerables progresos conseguidos en su 27º período de sesiones. Los artículos aprobados hasta la fecha contienen disposiciones valiosas relativas al efecto entre las partes de la cláusula de la nación más favorecida. En relación con los tratados comerciales, se ha alegado que la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida en las relaciones entre Estados con diferentes niveles de desarrollo económico es de dudoso valor a juicio del tercer mundo. Aunque desde el punto de vista de la forma dicha regla satisface el requisito de igualdad, en su forma tradicional, basada en el principio de reciprocidad, la cláusula tendría un valor limitado para los países en desarrollo, ya que éstos rara vez pueden competir en pie de igualdad con los países industrializados y, en consecuencia, precisan un trato preferencial. Su Gobierno tiene plena conciencia de esos problemas y ha apoyado repetidamente la adopción de planes de trato preferencial. Sin embargo, la CDI debería concentrarse en los aspectos jurídicos de la cuestión, dejando la cuestión de su aplicación en tratados comerciales entre Estados con niveles diferentes de desarrollo económico a otros órganos internacionales, especialmente la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

19. Con respecto al artículo 15, su delegación apoya la declaración hecha por el representante de Italia (1544a. sesión) en nombre de la Comunidad Económica Europea y sus nueve miembros.

20. Observando que la CDI no tuvo oportunidad en su 27º período de sesiones de examinar la cuestión de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, su delegación expresa la esperanza de que en su próximo período de sesiones, cuando se disponga de las respuestas de los gobiernos, la CDI tenga tiempo para examinar ese importante tema, que entraña problemas de carácter urgente. Sería sumamente útil disponer de una

convención que estableciera los principios fundamentales de la reglamentación jurídica de la explotación de los cursos de agua internacionales.

21. El orador anuncia que su Gobierno, como en años anteriores, concederá becas para cubrir los gastos de participantes de países en desarrollo que asistan al Seminario de derecho internacional en Ginebra.

22. El Sr. YOKOTA (Japón) rinde homenaje a la CDI por sus realizaciones y a su Presidente por su clara presentación del informe.

23. Observando que se han expresado algunas críticas en relación con el método de trabajo de la CDI, dice que la preparación de un documento jurídico que resulte viable en los años venideros y aceptable a un amplio sector de la comunidad internacional debe realizarse sobre la base de un atento estudio de la práctica de los Estados, precedentes y opiniones jurídicas y la tendencia actual de su evolución. Dicho estudio a fondo lleva tiempo, pero es absolutamente necesario para que la CDI mantenga su autoridad. Por consiguiente, el orador apoya el método actual de trabajo de la CDI, habida cuenta de la naturaleza de la labor que se le ha confiado. Es dudoso que resulte muy provechoso reducir el número de temas de que ha de ocuparse la CDI en cada período de sesiones, pues ello podría imponer una carga excesiva a los relatores especiales correspondientes.

24. Con respecto al proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados, la delegación del Japón atribuye considerable importancia a la parte del proyecto que trata del hecho del Estado según el derecho internacional y del problema de la atribución del comportamiento y, eventualmente de la responsabilidad, al Estado. Observando que ha habido muchos casos en los que se han producido tensiones en las relaciones entre los Estados como consecuencia de conflictos de opiniones, el orador dice que la aclaración de esa cuestión ciertamente ayudará a los Estados en sus relaciones internacionales. Aunque su delegación no tiene dificultad en apoyar los artículos 5 a 9 en cuanto al fondo, el artículo 10, que trata de la cuestión más controversial, a saber, la atribución del comportamiento *ultra vires* de los órganos, presenta ciertos problemas. Si bien su delegación no tiene dificultad teórica en aceptar la formulación de la CDI de que el único criterio que debe aplicarse al atribuir el comportamiento *ultra vires* al Estado debe ser el de que los órganos de que se trate hayan "actuado en esa calidad", le preocupa la dificultad con que ciertamente se tropezará al aplicar esa regla en la práctica. No siempre es fácil determinar en un caso concreto si la persona ha actuado como órgano o como individuo. Incluso en el comentario al parecer no se logra establecer una clara delimitación de los actos que están comprendidos en el ámbito del artículo 10 y los que no lo están. Su delegación espera que la CDI realizará nuevos estudios sobre ese asunto con miras a elaborar una regla precisa basada en uno o varios criterios. Su delegación no tiene dificultad práctica en aceptar el principio contenido en el artículo 15.

25. Por lo que se refiere al proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados, el orador dice que su delegación atribuye considerable importancia al artículo X. Le suscita ciertas dudas la conveniencia de la remisión al derecho interno del Estado sucesor. Sería más sistemático utilizar la expresión

⁴ Véase A/CN.4/282.

“en el territorio al que se refiera la sucesión de Estados”, empleada en el artículo 9, en lugar de otra formulación que puede suscitar malentendidos. En lo que respecta a los artículos 9 y 11, su delegación tiene algunas reservas pero, antes de hacer observaciones sobre los artículos, desea ver la forma en que progresarán los trabajos de la CDI acerca de la formulación de reglas más concretas sobre esa materia.

26. La delegación japonesa acoge con satisfacción los trabajos de la CDI sobre la cláusula de la nación más favorecida, que contribuirán en gran medida a aclarar las situaciones con frecuencia controvertidas a que da lugar la interpretación de dicha cláusula. En cuanto a la relación entre el trato nacional y el trato de la nación más favorecida, considera que son dos cuestiones muy diferentes. Sin embargo, el proyecto de artículos sobre el trato nacional propuesto por el Relator Especial en su sexto informe no presentaría grandes dificultades en la elaboración del proyecto de artículos sobre la cláusula de la nación más favorecida, ya que el primero trata sólo del mecanismo con que funciona la cláusula de trato nacional, sin entrar en el fondo del trato en sí. En lo que respecta a la cuestión muy controversial de la “*clause réservée*” y su “excepción implícita”, el orador estima que la CDI ha logrado establecer una regla precisa sobre algunos aspectos de esa materia en los artículos 14 y 15. Por lo que se refiere a la cuestión de las uniones aduaneras y demás uniones económicas, el orador observa que la CDI no llegó a una conclusión definitiva en su 27º período de sesiones. Su país ha considerado expresamente en el pasado que las uniones aduaneras constituyen una excepción al funcionamiento de la cláusula de la nación más favorecida en la mayoría de sus tratados, y comprende plenamente la preocupación de algunos países por el efecto desfavorable que esa cláusula puede tener respecto de la formación de uniones aduaneras y demás uniones económicas. El orador sugiere que se incorpore en el actual proyecto de artículos una regla de no retroactividad, como la contenida en el artículo 4 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que no afectaría directamente en tal caso los intereses y posiciones que mantienen actualmente los Estados respecto de las uniones aduaneras. Si se formula una disposición definida sobre la cuestión de las uniones aduaneras y demás uniones económicas, los Estados procederán con mayor prudencia en la formulación de una cláusula de la nación más favorecida, lo que contribuiría a aclarar la situación. La delegación del Japón aprecia la actitud de la CDI en su consideración del sistema generalizado de preferencias como excepción a la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida y no tiene dificultades especiales en aceptar el fondo del artículo 21 sobre ese asunto. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, dicha delegación prefiere una formulación como la contenida en el párrafo 15 del comentario, es decir, una disposición en virtud de la cual nada de lo dispuesto en los artículos prejuzgue los regímenes especiales que puedan existir en las relaciones entre países en desarrollo y países desarrollados. El actual sistema generalizado de preferencias, previsto en forma transitoria por un período de 10 años, podría modificarse en el futuro, probablemente en favor de los países en desarrollo. En tal caso, la redacción actual del artículo 21 tal vez no sea suficiente para abarcar la nueva situación. Conviene evitar que se adopte la formulación de una regla de derecho que sea inestable y que pueda exigir su modificación en una fase ulterior.

27. Por lo que se refiere al proyecto de artículos sobre sucesión de Estados en materia de tratados, el orador observa que las dos propuestas contenidas en las notas 57 y 58 del informe de la CDI sobre la labor realizada en su 26º período de sesiones plantean ciertas cuestiones difíciles. A su delegación no le satisface enteramente la formulación del término “tratados multilaterales de carácter universal” que se propone en el informe y considera que la aplicación del principio de continuidad a esos tratados debería estudiarse con especial atención, debido a la vaguedad del alcance del término. Si esos tratados tienen ya carácter de derecho consuetudinario internacional, no es necesario hablar de sucesión.

28. La delegación del Japón ha preferido siempre un procedimiento claro y, de ser posible, obligatorio para el arreglo de controversias, y cree que la adición al proyecto de una cláusula de ese tipo ciertamente constituiría una mejora. Puede reconocerse que la cuestión es sumamente política y, por consiguiente, sería preferible que se tratara en una conferencia de plenipotenciarios o en la Sexta Comisión, cuando cualquiera de ellas emprendiese la conclusión del proyecto sobre la sucesión de Estados en materia de tratados. Sin embargo, sería útil que la CDI formulara propuestas sobre esa cuestión.

29. En cuanto a la conclusión del proyecto de artículos sobre sucesión de Estados en materia de tratados, su delegación es partidaria de que se convoque una conferencia de plenipotenciarios. Habida cuenta de las posibles dificultades de obtener expertos jurídicos para dicha conferencia en un futuro próximo, podría aplazarse el examen de esa cuestión hasta el próximo período de sesiones de la Asamblea General, cuando tal vez se tenga una idea más clara de la necesidad de tales expertos para otras conferencias.

30. El orador dice que su delegación no considera que haya mayor motivo para aplazar por mucho tiempo la conclusión del proyecto, por ejemplo, hasta que la CDI haya preparado el proyecto de artículos sobre sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados. Es innegable la estrecha relación que existe entre ambos proyectos, pero cuando la CDI decidió examinar la cuestión de la sucesión de Estados en materia de tratados dentro del marco de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, y no del marco de la teoría general de sucesión de Estados, ambas materias quedaron prácticamente separadas. Con respecto a la forma definitiva del proyecto, su delegación no ha adoptado todavía una opinión firme, pero considera que reviste gran interés la propuesta hecha por el representante del Reino Unido (1536a. sesión), de que la CDI realice un estudio de las modalidades en virtud de las cuales podría vincularse a nuevos Estados a las reglas sobre la sucesión de Estados en materia de tratados.

31. El Sr. STARČEVIĆ (Yugoslavia) felicita al Presidente de la CDI por la excelente presentación del informe sobre la labor realizada en el 27º período de sesiones.

32. En materia de responsabilidad de los Estados, señala que la CDI ha proporcionado normas generales respecto de los hechos que pueden considerarse hechos del Estado, sin prejuzgar la cuestión de la responsabilidad de ese Estado; es

de esperar que en el curso de su labor futura la CDI definirá con precisión las normas para determinar la existencia de responsabilidad. Visto desde esa perspectiva, los artículos 10 a 15, aprobados en el 27º período de sesiones, resultan más aceptables; la delegación de Yugoslavia formulará comentarios específicos sobre ellos en una etapa posterior. No obstante, si se presume que el capítulo en que figuran esos artículos, a saber, el capítulo II, titulado "El hecho del Estado según el derecho internacional", constituye por sí mismo una base para determinar la responsabilidad de los Estados, el orador se sentiría inclinado a subrayar en relación con el artículo 12, por ejemplo, que habida cuenta de la existencia de bloques político-militares organizados, podría sugerir la responsabilidad de un Estado, aun si el hecho del órgano de otro Estado que operase en su territorio no fuese formalmente imputable al primer Estado conforme al sentido de ese artículo. Podría subrayarse también, en relación con el artículo 15 y habida cuenta del inciso b) del artículo 3, que en el caso de un nuevo Estado surgido de un movimiento insurreccional, la determinación de responsabilidad por hechos cometidos durante ese movimiento sigue siendo una cuestión algo complicada. La delegación de Yugoslavia concuerda en términos generales con la orientación de la CDI respecto de su labor futura sobre las materias expuestas en líneas generales en los párrafos 42 a 45 del informe. Las respuestas a un cuestionario sobre la responsabilidad de los Estados, actualizado y codificado, serán de utilidad para los Estados pequeños y medianos y tendrán al mismo tiempo una importancia inestimable para el desarrollo del derecho internacional hacia un sistema general de normas jurídicas obligatorias.

33. Respecto de la compleja cuestión de la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados, el orador espera que la CDI podrá acelerar el examen del tema con miras a completar su labor sobre la sucesión de Estados en conjunto. Opina que los comentarios del representante de Australia (1541a. sesión) sobre el artículo 9 merecen la atención de la Sexta Comisión.

34. Por lo que hace a la cuestión de la cláusula de la nación más favorecida, hay que tener en cuenta constantemente la situación de los países en desarrollo y la absoluta necesidad de hacer una excepción en cuanto a la aplicación de la cláusula a esos países, puesto que ello entrañaría una discriminación en su contra. El artículo 21 demuestra que la CDI ha tenido en cuenta estas consideraciones. Además de las decisiones de la UNCTAD y del GATT, que se mencionan en el comentario a ese artículo, es necesario considerar las resoluciones aprobadas durante los períodos extraordinarios de sesiones sexto y séptimo de la Asamblea General y las disposiciones pertinentes de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados (resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General), que recalcan que los principios de no reciprocidad, no discriminación y trato preferencial para los países en desarrollo son el fundamento en que debe basarse el comercio entre los países desarrollados y los países en desarrollo; el proyecto de normas sobre la cláusula de la nación más favorecida debe responder a esa posición. El artículo 21 quizás no baste para excluir totalmente la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida a los países en desarrollo, y la CDI podría examinar la posibilidad de aprobar al menos un artículo adicional con el fin de proteger a esos países, en posible

concordancia con las pautas establecidas en el artículo 21 de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Ese artículo protegería a los países en desarrollo de la aplicación del artículo 15, cuyas disposiciones sólo son aplicables a los acuerdos celebrados entre países desarrollados. En opinión del orador, el artículo 15 debe aplicarse también a las uniones aduaneras y a otras comunidades económicas. El nuevo artículo que propone debe redactarse siguiendo las mismas líneas que el artículo 15 y teniendo en cuenta que no se aplicará a las asociaciones de países en desarrollo.

35. El Sr. Starčević subraya la necesidad de seguir trabajando intensamente en el tema de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales, puesto que el número en constante aumento de esos tratados requiere la aplicación de normas uniformes.

36. Deseo renovar su llamamiento a los Estados para que presenten sus opiniones sobre la cuestión de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, con objeto de que la CDI pueda proseguir su labor sobre esa importante cuestión durante su próximo período de sesiones.

37. Apoya el propuesto programa general de trabajo de la CDI y observa con satisfacción los esfuerzos de la CDI para acelerar su labor sobre las cuestiones actualmente incluidas en su programa. Elogia asimismo la celebración del reciente Seminario sobre derecho internacional y la continua cooperación entre la CDI y los organismos regionales que trabajan activamente en la esfera del derecho internacional, así como la celebración de la tercera conferencia en memoria de Gilberto Amado.

38. El Sr. AL-KINDI (Omán) dice que el informe de la CDI contiene importantes declaraciones de principios jurídicos que exigen cuidadoso estudio por parte de la Sexta Comisión. Agradece al Presidente de la CDI (1536a. sesión) y al representante del Brasil (1538a. sesión) sus excelentes análisis del informe.

39. Si bien algunos representantes han manifestado su preocupación por la extensión del informe y han hecho valiosas sugerencias a ese respecto, el orador no es partidario de que se supriman en los informes de la CDI la mención de las fuentes de las conclusiones. En cambio, sugiere que se distribuyan resúmenes de esos informes para uso inmediato, antes de la publicación de los propios informes. Esos resúmenes deberían contener los puntos fundamentales, como los expuestos por el Presidente de la CDI. Con ello se facilitaría a la Sexta Comisión el análisis de los informes a la vez que no se impediría que quienes tuviesen tiempo e interés leyesen los informes completos.

40. La delegación de Omán no evaluará en detalle el proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados. No obstante, considera que es esencial que los Estados soberanos asuman la responsabilidad por los hechos ilícitos de sus órganos, actúen o no fuera de su competencia o en contra de sus instrucciones. Su competencia e instrucciones son pertinentes para el derecho interno de los Estados, pero no para el derecho internacional. No se debe exigir que otros Estados conozcan o indaguen si los órganos del Estado estaban facultados para obligarlo.

41. La disposición que establece que el comportamiento de los órganos que no actúan para un Estado no debe imputarse al Estado, si bien es obvia, puede aceptarse. El orador presume que la CDI tuvo motivos para incluir una disposición tan evidente, pero se pregunta si era realmente necesaria.

42. En relación con el artículo 15, la delegación de Omán apoya la sugerencia de algunos representantes de que es necesario trazar una clara distinción entre los hechos de un movimiento de liberación nacional, que lucha legítimamente contra regímenes coloniales o racistas para el logro de su libre determinación y el derrocamiento de la dominación extranjera, y los actos de agresión de individuos fuera de la ley cuyo único objetivo es la destrucción, cualquiera sea el lema que adopten.

43. El Sr. Al-Kindi agradece al Relator Especial del tema de la responsabilidad de los Estados su excelente labor.

44. También da las gracias al Relator Especial del tema de la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados por su experta labor en un asunto tan intrincado como la sucesión en los bienes estatales. El enfoque de esa cuestión es correcto, y la delegación de Omán lo aprueba, habida cuenta sobre todo de que sus disposiciones permiten que las partes lleguen a acuerdos propios. Pero el orador insta a que se siga elaborando el proyecto de artículos hasta incluir la cuestión de la sucesión de Estados respecto de bienes fuera de su jurisdicción. Además expresa sus dudas sobre la conveniencia de incluir las deudas como bienes transmisibles, ya que ello causaría innumerables complicaciones tanto al Estado sucesor como al Estado predecesor si dichas obligaciones fueron contraídas cuando el Estado sucesor era incapaz de expresar su voluntad.

45. En opinión del Sr. Al-Kindi, el Relator Especial del tema de la cláusula de la nación más favorecida y del asunto conexo del trato nacional merece la gratitud de la Sexta Comisión por su trabajo magistral. La delegación de Omán dará a conocer más adelante sus opiniones sobre los artículos 16 y 17; mientras tanto, vería con agrado la realización de más estudios sobre las materias comprendidas en esos artículos. Su delegación hace suya la preocupación expresada respecto de la aplicabilidad de la cláusula de la nación más favorecida a Estados con niveles diferentes de desarrollo económico. El trato especial permitiría lograr mejores resultados que el trato igualitario en situación de desigualdad, ya que es necesario ajustar los desequilibrios provocados por prácticas anteriores en las economías de los países del tercer mundo. La delegación de Omán aprueba, pues, el artículo 21 e insta a la elaboración de otras disposiciones similares que tomen debidamente en cuenta los comentarios ya formulados al respecto en la Sexta Comisión.

46. El Sr. Al-Kindi agradece al Relator Especial del tema de tratados entre Estados y organizaciones internacionales entre dos o más organizaciones internacionales su cuidadosa labor. Como resultado de ella, la CDI ha podido aprobar los artículos 7 a 11 y perfeccionar el texto del artículo 2. No debe permitirse que la proliferación de órganos internacionales de carácter jurídico oscurezca el propósito para el que fueron creados. Se les otorgaron

ciertas facultades, derechos y deberes para llevar a cabo las funciones que se les asignaron. En consecuencia, si bien la cuestión merece mayor estudio, ciertas distinciones sugeridas, por ejemplo, respecto de poderes y plenos poderes, no parecen justificarse. Cuando se conceden poderes a los órganos jurídicos internacionales para que participen en relaciones jurídicas con otros órganos, tales poderes son completos en sí mismos, aun cuando requieran cierta forma de confirmación de otra persona jurídica.

47. La delegación de Omán tiene ciertas dificultades en aceptar que la ratificación se aplica solamente a los Estados y la confirmación a las organizaciones internacionales, como indica el artículo 14. Esa distinción parece algo artificiosa si se basa solamente en que la ratificación implica necesariamente cierto procedimiento dentro del Estado. Un acto de confirmación es un acto de ratificación, sea cual fuere la terminología que se emplee. La comunidad internacional se ha apartado de viejos conceptos, y el trato igualitario de los Estados y de las organizaciones internacionales a ese respecto es razonable.

48. La delegación de Omán apoya la creación de un grupo de planificación en el seno de la Mesa Ampliada de la CDI. Debe considerarse seriamente la posibilidad de completar los estudios sobre temas que han figurado desde hace mucho tiempo en el programa de la CDI, así como la de limitar el número de asuntos en estudio.

49. La delegación de Omán desea expresar su agradecimiento a los Estados que han hecho posible el Seminario sobre derecho internacional y las conferencias en memoria de Gilberto Amado y espera que continuarán dando su apoyo a dichas iniciativas.

50. Insta asimismo a que se mantenga la cooperación entre la CDI y los órganos jurídicos regionales, que sólo puede dar resultados fructíferos.

51. El Sr. RAKOTOSON (Madagascar) agradece al Presidente de la CDI su clara introducción del informe.

52. Se limitará a consideraciones preliminares sobre el informe, pues su Gobierno presentará sus puntos de vista definitivos en una etapa posterior.

53. Al examinar la importante cuestión de la responsabilidad de los Estados, íntimamente vinculada con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la CDI debe tener en cuenta las disposiciones de la Carta y de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas sobre la caracterización de hechos internacionales ilícitos y sobre la atribución de esos hechos a un Estado. Entre esas resoluciones figuran las resoluciones 2625 (XXV), 1514 (XV) y 3314 (XXIX) de la Asamblea General, relativas, respectivamente, a la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas (en particular el párrafo 3 del anexo), la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales y la Definición de la agresión. Esos instrumentos son los fundamentos del derecho internacional moderno, y la comunidad internacional debe respetar su espíritu al definir los hechos internacionalmente ilícitos y al atribuir la responsabilidad.

Muchos ejemplos de comportamiento ilícito mencionados en esos instrumentos son más adecuados como fuente de derecho internacional en lo tocante a la responsabilidad del Estado, que la historia jurídica de los siglos pasados. Entre ellos se cuentan la injerencia en los asuntos internos de otro Estado, los actos dirigidos al desplazamiento parcial o total de la unidad nacional y de la integridad territorial de otro Estado, la amenaza del uso directo o indirecto de la fuerza, la resistencia al ejercicio por un pueblo del derecho a la libre determinación y a la independencia, la ayuda directa o indirecta a esa resistencia, la política del *apartheid*, que es un delito contra la humanidad, y la explotación de los recursos naturales de un país.

54. A la luz de los instrumentos que acaba de mencionar, el orador considera que debe formularse una clara distinción entre dos tipos de movimiento insurreccional. Un movimiento de liberación nacional, que lucha contra el colonialismo, el *apartheid* o la dominación extranjera, ejerce un derecho legítimo reconocido en los instrumentos mencionados precedentemente, y las consecuencias de esa acción no pueden considerarse causa de responsabilidad, aun si el movimiento se convierte en nuevo Estado. Pero si el territorio no está ligado a un país metropolitano se plantea el problema de imputar responsabilidades. Esas consideraciones deben servir de base a los artículos 14 y 15 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados.

55. Respecto del proyecto de artículos sobre sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados, el orador observa que el párrafo 10 del comentario al artículo 9 indica que solamente los bienes muebles sitos en el territorio al que se aplica la sucesión pasan al Estado sucesor y no así los bienes muebles sitos en otra parte. Se pregunta qué sucedería si la Potencia administradora, a fin de privar al futuro Estado nuevo de sus derechos, transfiriese los bienes muebles al país metropolitano antes de que el territorio alcanzara la independencia. En opinión de la delegación de Madagascar, el hecho de que los bienes muebles estén situados en el territorio al que se aplica la sucesión no debe ser el único criterio para el paso de esa propiedad al Estado sucesor. La cláusula de salvaguardia "a menos que se haya convenido o decidido otra cosa al respecto" sería de poca utilidad en ciertos casos para solucionar ese problema.

56. En cuanto a su labor en el proyecto de artículos sobre la cláusula de nación más favorecida, la CDI debería análogamente tener en cuenta tanto la letra como el espíritu de las resoluciones aprobadas durante el sexto y el séptimo períodos de sesiones extraordinarios de la Asamblea General. Entre los principios de esas resoluciones, particularmente en el campo del comercio internacional, figuran el trato preferencial y la no reciprocidad para los países en desarrollo y el trato de las importaciones de los países desarrollados en condiciones no más favorables que las otorgadas a las importaciones de los países en desarrollo. Esos principios fueron reiterados en los artículos 18 y 26 de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. En otras palabras, el derecho de la cláusula de la nación más favorecida debe tener en cuenta los intereses especiales de los países en desarrollo y colaborar con las medidas encaminadas a crear un nuevo orden económico. En algunas ocasiones sería injusto imponer la misma obligación a ricos y pobres.

57. La delegación de Madagascar desea a la CDI éxito en su labor de desarrollo y codificación del derecho internacional. Animada por ese sentimiento, desea hacer comentarios sobre el método de trabajo, tanto de la CDI como de la Sexta Comisión. Su delegación apoya las observaciones sobre este tema del representante de Australia y de otros representantes. Sin caer en una brevedad exagerada, el informe habría ganado mucho con una mayor concisión. Además, la labor de la CDI habría sido más eficaz si la Sexta Comisión y la Asamblea General hubiesen fijado cuidadosamente las prioridades de los temas que debían examinarse. La Sexta Comisión tiene tendencia a pedir que se dé prioridad a varios asuntos que se encuentran sometidos a estudio en la CDI, como se desprende de la resolución 3315 (XXIX) de la Asamblea General, que menciona por lo menos cinco de esos asuntos. La CDI ha seguido fielmente esas recomendaciones y la Sexta Comisión es, pues, parcialmente responsable de la excesiva extensión del informe, de la que ahora se queja.

58. Otro problema concomitante es que los miembros de la Sexta Comisión deben examinar en un plazo muy breve diversas cuestiones que no tienen nada en común, cosa que no pueden hacer a fondo si al mismo tiempo supervisan la labor de la CDI. La Sexta Comisión puede fracasar en esa última tarea si sigue exigiendo prioridad para la mayoría de los asuntos remitidos a la CDI y, por tanto, debería asignarse prioridad a un tema solamente. Si así lo hace, la CDI podrá finalizar su programa en una fecha más temprana y completar de ese modo en el futuro próximo el proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados o sobre la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados. Cualquiera de los dos proyectos de artículos debería terminarse en 1976, ya que el primero constituye un suplemento útil de la definición de la agresión y el segundo, a juicio de muchas delegaciones, complementa el proyecto sobre la sucesión de Estados en materia de tratados.

59. Quizás sería adecuado pedir que el informe de la CDI llegase a los Estados Miembros en una fecha más temprana, con objeto de que tuviesen tiempo suficiente para estudiarlo antes del período de sesiones de la Asamblea General. Dado que el 27º período de sesiones de la CDI no se inició hasta principios de mayo y finalizó a fines de julio, el informe no se distribuyó en efecto hasta después de iniciado el actual período de sesiones. Si bien el orador comprende que los miembros de la CDI tienen otras obligaciones, sería útil que la CDI iniciase antes su período de sesiones a fin de que la Sexta Comisión pudiera cumplir adecuadamente sus funciones.

60. Del mismo modo que la CDI ha creado un grupo de planificación para estudiar su funcionamiento y formular sugerencias sobre su método de trabajo, sería oportuno que la Sexta Comisión emprendiese algún tipo de autocrítica; a juicio de la delegación de Madagascar, la Sexta Comisión debería dar prioridad a un tema solamente. En ese sentido, señala a la atención la advertencia que supone el caso del tema de la responsabilidad de los Estados, cuyo estudio recomendó la Asamblea General por primera vez en 1955 y cuya labor no se finalizará hasta 1981.

61. El Sr. LOPEZ BASSOLS (México) felicita al Presidente de la CDI por su clara presentación del informe.

62. La delegación de México ha señalado reiteradamente el gran interés que tiene su país en la cuestión de la responsabilidad de los Estados. De hecho, la historia de las relaciones internacionales de México tal vez podría escribirse en términos de las reclamaciones internacionales. Desde los primeros días de la independencia de México hasta 1940, la aplicación de la legislación mexicana a los extranjeros residentes en su territorio, mediante actos de un Estado soberano, fueron objeto de examen por diversas comisiones de reclamaciones. Ello pertenece irrevocablemente al pasado, ahora que la soberanía de los Estados más débiles ha triunfado sobre la "protección sin límites" practicada por las grandes Potencias; pero la historia de esas comisiones explica el hecho de que en el informe se hagan numerosas referencias a ellas, no todas afortunadas. Constituyen dos ejemplos el asunto de las reclamaciones relativas al bombardeo de la Ciudad de México y la reclamación de los Estados Unidos de América por la detención de algunos marinos en Tampico en 1914, a las que se hace referencia en los párrafos 18 y 28 respectivamente, del comentario acerca del artículo 14. En relación con la primera reclamación, el Comisionado mexicano señaló que el Estado no era responsable por los daños causados por asonadas militares si se probaba que había tomado todas las medidas necesarias para restablecer el orden. Con respecto a la segunda reclamación, la posición del Gobierno de México había sido que no era responsable de daños causados por fuerzas armadas que no lograsen establecer un gobierno. En ese caso, la reparación sólo sería a título *ex gratia*. En cambio, el gobierno asumiría responsabilidad por los actos de gobiernos legítimos o los actos de fuerzas revolucionarias que hubieran logrado establecer gobiernos. Los principios que figuran en los artículos 14 y 15 del proyecto de artículos sobre responsabilidad de los Estados se ajustan a la posición de México, según se señaló en relación con los dos casos mencionados, por lo que la delegación de ese país está en completo acuerdo con esos artículos.

63. El hecho de que la comunidad internacional habrá pronto de adoptar un conjunto de normas que regulen la responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos reviste especial importancia para México. El estudio de ese tema debería ir acompañado de un estudio de otros aspectos de la responsabilidad por hechos internacionalmente ilícitos, inclusive la responsabilidad por los posibles daños que puedan derivarse de la realización de ciertas actividades lícitas o de actividades que el derecho internacional aún no ha calificado de definitivamente prohibidas, o de actividades que están en la zona crepuscular entre la licitud y la ilicitud. Esas actividades son cada vez más frecuentes en las esferas de la navegación, el espacio y la energía nuclear, particularmente en relación con la protección del medio ambiente. Los aspectos más especializados y técnicos de ese nuevo campo seguirán siendo objeto de acuerdos especiales y de reglamentaciones elaboradas en diversas reuniones técnicas, pero tal vez llegue el momento en que se estime necesario identificar los principios esenciales en esa nueva esfera del derecho y darles el carácter de normas jurídicas. Así, tal vez procedería que la CDI empleara su reconocida competencia técnica y capacidad creadora para estudiar, dentro de su mandato, nuevos temas, distintos de la responsabilidad de los Estados, la sucesión de Estados y algunos aspectos del derecho de los tratados.

64. Por lo tanto, la delegación de México estima que la Sexta Comisión podría recomendar a la Asamblea General, en su actual período de sesiones, que fuera más allá de su recomendación habitual de que la CDI continuara los estudios iniciados. La delegación de México estima que la resolución que haya de aprobar la Asamblea debe reflejar el vivo interés de, cuando menos, algunos Estados Miembros en que se asigne prioridad al estudio de la responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos y en que se complemente ese estudio con la mayor urgencia posible.

65. Refiriéndose al capítulo IV del informe, el orador dice que la cuestión de la cláusula de la nación más favorecida tiene importancia vital en las relaciones económicas internacionales. La Sexta Comisión no tiene aún ante sí un proyecto acabado, por lo que no puede analizar en detalle el proyecto de artículos. Sin embargo, la delegación de México estima que la CDI, en su labor relativa a la cláusula de la nación más favorecida, debe tener en cuenta los cambios fundamentales que se están operando en las relaciones económicas y que tienen repercusiones importantes en la aplicación de la cláusula. A ese respecto, el orador menciona las resoluciones aprobadas por la Asamblea General en sus períodos extraordinarios de sesiones sexto y séptimo y la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. El desarrollo y codificación de las normas jurídicas en esa esfera debería, pues, adaptarse a la realidad actual.

66. El reconocimiento de la existencia de diversos niveles de desarrollo y de la necesidad de un régimen comercial mundial basado en un sistema de preferencias constituye uno de los importantes elementos del derecho internacional en evolución. Al respecto, el orador recuerda que el octavo principio general aprobado en el primer período de sesiones de la UNCTAD⁵ se basaba en la teoría de que las necesidades comerciales de una economía en desarrollo eran muy distintas a las de una economía desarrollada. En consecuencia, esos dos tipos de economía no deben quedar sujetos a las mismas normas en sus relaciones comerciales internacionales. La aplicación de la cláusula de la nación más favorecida a todos los países, cualquiera que sea su nivel de desarrollo, satisfaría las condiciones de una igualdad formal, pero, en realidad, entrañaría una discriminación implícita para los miembros más débiles de la comunidad internacional. Ello no significa rechazar con carácter permanente la cláusula de la nación más favorecida. El reconocimiento de las necesidades de los países en desarrollo significa simplemente que, durante un tiempo determinado, no se aplique la cláusula de la nación más favorecida a determinados tipos de relaciones comerciales internacionales.

67. El orador señala que en los artículos 18, 19, 21 y 26 de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados figuran disposiciones encaminadas a establecer un sistema generalizado de preferencias sin reciprocidad y sin discriminación, en beneficio de los países en desarrollo.

68. La delegación de México ya ha hecho llegar a la CDI sus observaciones acerca de la cuestión de la sucesión de

⁵ Véase *Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo*, vol. I, *Acta Final e Informe* (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 64.II.B.11), pág. 22.

Estados en materia de tratados (véase A/10198). Respecto de los aspectos de procedimiento de ese tema, la delegación de México estima que el proyecto es definitivo, con excepción de dos artículos que deberían remitirse a la CDI para su consideración, tal vez a la luz de las observaciones hechas por los Estados. A continuación podría decidirse

cuál sería el procedimiento adecuado para la última parte del proceso de codificación.

69. El orador felicita a la CDI por la excelente labor realizada en el año en curso y le desea éxito en el futuro.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

1547a. sesión

Jueves 23 de octubre de 1975, a las 10.50 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1547

TEMA 108 DEL PROGRAMA

Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 27º período de sesiones (continuación) (A/10010)

TEMA 109 DEL PROGRAMA

Sucesión de Estados en materia de tratados: informe del Secretario General (continuación) (A/10198 y Add.1 a 4, A/9610/Rev.1*)

1. El Sr. HAFIZ (Bangladesh) dice que el informe de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) (A/10010) es un documento valioso que demuestra elocuentemente la monumental labor que está llevando a cabo la CDI para promover el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional.

2. El papel de la CDI cobra cada vez mayor importancia a medida que se desarrollan nuevas relaciones internacionales como consecuencia de los cambios que originan en la estructura de la sociedad internacional el fin de la colonización y el nacimiento de nuevos Estados. Los Estados de reciente independencia y los países en desarrollo afrontan complejos problemas internacionales, políticos y económicos. Hay que traducir en términos jurídicos los principios fundamentales que regulan la comunidad internacional al establecer el nuevo orden económico que ha sido aceptado por la inmensa mayoría de los Estados Miembros.

3. Los principales problemas con que tropiezan los países en desarrollo son la escasez crónica de alimentos y el exceso de población. Los alimentos ya no pueden ser tratados como una dádiva o como una simple mercancía objeto de comercio internacional. Por lo tanto, la comunidad internacional, y en particular los países desarrollados, tiene el deber político y moral de prestar cooperación económica para resolver de forma permanente el problema de la subproducción de alimentos en los países en desarrollo. Habría que incorporar en el derecho internacional relativo a la paz y la seguridad internacionales una nueva normativa internacional para los alimentos, pues todo Estado con una población hambrienta es fuente de peligros para la paz mundial. Aunque la CDI se dedique principalmente al

derecho internacional público, no debe impedirse que entre también en el terreno del derecho internacional privado.

4. El orador elogia al Presidente de la CDI por la informativa exposición que ha hecho para presentar el informe. A su delegación le complace la decisión de la CDI de examinar con carácter prioritario los temas de la responsabilidad de los Estados y de la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados, que tienen cada vez mayor importancia para la comunidad internacional.

5. Como la labor de la CDI sobre la responsabilidad de los Estados aún no ha sido examinada por el órgano competente de su Gobierno, la declaración de su delegación sobre ese asunto será preliminar. Sin embargo, desea hacer constar que a su delegación le ha complacido mucho que la CDI haya considerado muy importante la cuestión.

6. Surgen dudas en cuanto a la atribución de responsabilidad a un Estado cuando un funcionario realiza un acto público excediéndose de su competencia. Su delegación considera que el Estado es responsable solamente cuando el funcionario actúa en el ejercicio de su cargo. Los problemas esenciales que han de examinarse a ese respecto son los de saber si el órgano del Estado ha sido el medio por el cual se ha causado el daño y si los actos realizados caen dentro de la competencia oficial de la persona que los realizó. Su delegación aprecia la labor de la CDI y de su Relator Especial sobre la cuestión de las consecuencias de la insurrección.

7. La labor de la CDI sobre la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados es muy importante, y el orador desea felicitar al Relator Especial por su docto informe sobre ese tema. Ahora bien, su delegación tiene reservas en lo que respecta a la redacción del artículo 11 del proyecto (*ibid.*, cap. III, secc. B).

8. Satisface observar los progresos realizados por la CDI en la cuestión de la cláusula de la nación más favorecida. Su delegación opina que la igualdad de trato entre Estados desiguales produce desigualdad y afectaría gravemente al desarrollo económico de los Estados en desarrollo. Deberían protegerse debidamente los intereses de esos Estados, y habría que volver a redactar el artículo 21 del proyecto (*ibid.*, cap. IV, secc. B) para protegerlos más efectivamente.

* Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno período de sesiones, Suplemento No. 10.

9. Su Gobierno tiene un gran interés en el derecho de los usos de los cursos de aguas internacionales para fines distintos de la navegación y, por consiguiente, espera con sumo interés los resultados del estudio de la CDI sobre ese tema. Insta a la CDI a que emprenda el estudio con carácter prioritario. Debido a la posición geográfica de Bangladesh, a su delegación le preocupan los problemas de la lucha contra las inundaciones y de la erosión que causan, y considera que deberían incluirse en el estudio de la CDI sobre ese importante tema. La regulación del uso de las aguas de los ríos internacionales también es motivo de grave preocupación para su país. El agua se ha convertido en uno de los principales recursos económicos de ciertos países, y debería prestarse especial atención a los intereses de los países pequeños y pobres cuando se formulen las normas de derecho internacional sobre la materia. El derecho relativo a la contaminación debería elaborarse de forma tal que no afectase al desarrollo económico de otros países.

10. Su delegación desea expresar su satisfacción porque la CDI haya continuado manteniendo relaciones con distintos órganos jurídicos, en particular con el Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano, ya que tal cooperación significa que la comunidad internacional está plenamente informada de todas las opiniones que se emiten en los sistemas jurídicos y las civilizaciones del mundo.

11. La continuación del Seminario sobre derecho internacional es de vital importancia para el desarrollo del derecho internacional. En 1973, un nacional de Bangladesh fue uno de los participantes en ese Seminario. El programa de trabajo en esa esfera no sólo debería continuarse sino que además debería ampliarse, ya que ello beneficiaría enormemente a los países en desarrollo, en los cuales la enseñanza y la difusión del derecho internacional son limitados.

12. Su delegación aún no ha hecho un estudio detallado del proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados (véase A/9610/Rev.1, cap. II, secc. D), por lo que los comentarios que hará sobre ese tema serán preliminares. Su país tiene gran fe en el principio de la libre determinación, y cree que el derecho sobre la sucesión en materia de tratados está adquiriendo mayor importancia debido a los cambios que se están produciendo en la estructura de la sociedad internacional. Aunque su delegación está sumamente satisfecha con la labor de la CDI sobre ese tema, tiene reservas a algunas disposiciones del proyecto de artículos, en particular a la definición de "Estado de reciente independencia" en el inciso f) del párrafo 1 del artículo 2 y a la redacción del párrafo 3 del artículo 33.

13. Ha de felicitarse a la CDI por haber adoptado el principio de la "tabla rasa", que es parte del desarrollo progresivo del derecho internacional y está basado en el principio de la libre determinación. El principio de la "tabla rasa" significa que los Estados de reciente independencia tienen derecho a decidir que no quedan obligados por antiguos tratados celebrados por el Estado predecesor. Pero la CDI no ha extendido suficientemente el principio de la "tabla rasa" al definirlo en el inciso f) del párrafo 1 del artículo 2 del proyecto y, por consiguiente, tampoco ha tomado suficientemente en consideración el principio de la libre determinación. Según su delegación, el concepto de "Estado de reciente independencia" comprende no sólo a todos los territorios antiguamente dependientes, tales como

las colonias, los territorios en fideicomiso, los territorios bajo mandato y los protectorados, sino también los nuevos Estados que han surgido como consecuencia de la separación de parte de un Estado existente o por una revolución social, así como las minorías religiosas, lingüísticas o culturales del territorio de un Estado existente que han luchado por el derecho a la libre determinación basado en los principios de la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas (resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, anexo). Esos documentos no distinguen entre el derecho a la libre determinación de los pueblos de territorios coloniales y el de los pueblos de otros territorios.

14. A su delegación tampoco le satisface el párrafo 3 del artículo 33, que no solamente es vago sino que, además introduce un elemento subjetivo que daría lugar a contradicciones. No hay justificación posible para hacer una distinción entre un "Estado de reciente independencia" y un Estado que surja de la separación de una parte de un Estado existente. Del proyecto de artículos se deduce que si un Estado formado por sucesión desea invocar los beneficios del principio de la "tabla rasa", debe encajar en la definición de "Estado de reciente independencia" contenida en el inciso f) del párrafo 1 del artículo 2 o reunir los criterios, no definidos, establecidos en el párrafo 3 del artículo 33. Ese último párrafo es vago, y las constantes controversias sobre su interpretación lo harían ineficaz. Esas disposiciones del proyecto de artículos deberían redactarse de nuevo con objeto de incluir todos los casos.

15. Su delegación considera que en el proyecto de artículos debería haber una disposición aparte que regulase la solución de controversias que surgieran de la interpretación o aplicación de la futura convención.

16. El orador desea hablar del papel dinámico del derecho internacional. En Asia, Africa y América Latina, una gran mayoría de la población sufre hambre, pobreza, enfermedades, analfabetismo, desigualdad, falta de vivienda, y desempleo, y esas condiciones hacen que sea imposible que el individuo llegue a vivir mejor. Por consiguiente, el derecho internacional no puede considerarse un fenómeno aislado, sino que debe tener en cuenta la realidad de la vida de la población de los Estados que padecen una subproducción crónica y que no pueden satisfacer las necesidades humanas básicas. Si el derecho interno no puede satisfacer las crecientes demandas de una época en rápida evolución, el derecho internacional debe proporcionar a los países en desarrollo los beneficios del progreso tecnológico. De lo contrario, se frenarán los esfuerzos humanos para conseguir la paz en el mundo, y los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos seguirán siendo letra muerta.

17. El Sr. GÜNEY (Turquía) expresa la satisfacción de su delegación por la excelente labor realizada por la CDI durante su 27º período de sesiones y agradece al Presidente de la CDI su elocuente y clara introducción del informe.

18. La delegación turca se limitará a formular observaciones preliminares. Aprueba el alcance del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados (véase

A/10010, cap. II, secc. B), la distinción hecha entre normas “primarias” y “secundarias”, y el método seguido para la preparación del proyecto. Que el proyecto de artículos se limite a la responsabilidad por hechos internacionalmente ilícitos no impedirá, desde luego, que la CDI estudie oportunamente la cuestión de la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de determinadas actividades que no están prohibidas por el derecho internacional. Las normas enunciadas en el proyecto de artículos se basan en una larga evaluación de la práctica de los Estados, las decisiones judiciales y los escritos de los juristas, y la CDI ha hecho bien en especificar sus fuentes en la codificación y el desarrollo del derecho consuetudinario en esa esfera.

19. El artículo 10 del proyecto sobre la responsabilidad de los Estados no es una fuente nueva de atribución de responsabilidad, puesto que en el artículo 5 ya se regula el comportamiento de un órgano estatal que actúe en esa calidad. Sin embargo, el artículo 10 completa al artículo 5 al determinar que el comportamiento de ese órgano se considerará hecho del Estado según el derecho internacional aunque el órgano se haya excedido en su competencia con arreglo al derecho interno o haya contravenido las instrucciones concernientes a su actividad.

20. A juicio de la delegación de Turquía, el artículo 12 es necesario, puesto que constituye un corolario del artículo 9 y en parte también del artículo 11. En el artículo 12 también debería regularse el comportamiento común del Estado o la organización a que pertenece el órgano y del Estado en cuyo territorio esté situado el órgano.

21. El artículo 14 es muy importante por el papel cada vez mayor que desempeñan los movimientos insurreccionales y por el reconocimiento internacional de que son objeto cada vez más. La delegación de Turquía se congratula de que la CDI no haya considerado el problema del reconocimiento de los movimientos insurreccionales y se haya limitado a afirmar que el comportamiento de esos movimientos no puede atribuirse al Estado.

22. La CDI ha tropezado con dificultades considerables para redactar los nuevos artículos sobre la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados, dado que la práctica de los Estados, las decisiones judiciales y la doctrina sobre esas materias no son suficientes ni uniformes. Las cuestiones reguladas por esos artículos han sido abordadas frecuentemente en acuerdos que no constituyen una base suficiente para una codificación y un desarrollo progresivo tan amplios. Han surgido dificultades a causa de la amplitud y la complejidad del asunto, que abarca los bienes públicos, los créditos públicos, el régimen jurídico del Estado predecesor, problemas territoriales y derechos adquiridos. El artículo 11 es un complemento del artículo 9. Sin embargo, es necesario precisar la naturaleza jurídica de la adquisición de créditos (*créances*) de un Estado predecesor por un Estado sucesor y determinar qué créditos estatales pasan al Estado sucesor. La CDI debe cuidarse también de mencionar no sólo los créditos estatales, sino también las obligaciones vinculadas con esos créditos.

23. La CDI ha progresado bastante en la cuestión de la cláusula de la nación más favorecida, examinándola como

una cuestión independiente y como un aspecto del derecho de los tratados. La delegación de Turquía coincide con el parecer de la CDI de que es conveniente un estudio especial de la cláusula aun cuando forme parte del derecho general de los tratados, ya que la cláusula reviste especial interés por lo mucho que se emplea en las relaciones económicas. Los nuevos artículos aprobados en el último período de sesiones de la CDI se basan en la práctica de los Estados, la jurisprudencia y la literatura jurídica sobre la materia, muy ricas.

24. La delegación de Turquía conviene en que existe una relación entre la cláusula de la nación más favorecida y el principio de la no discriminación. Mantener la igualdad entre todos los Estados interesados en la aplicación de la cláusula sin tener en cuenta las consideraciones geográficas, económicas y políticas sólo puede originar desigualdad, y deben hacerse excepciones en la aplicación de la cláusula a los países en desarrollo. En consecuencia, el artículo 21 del proyecto está bien concebido, ya que recoge el consenso general de que los Estados deben abstenerse de invocar su derecho a recibir el trato de la nación más favorecida para obtener, en todo o en parte, el trato preferencial que los países desarrollados otorgan a los países en desarrollo. Ese artículo puede evitar todos los efectos perjudiciales que resultan de la aplicación automática del proyecto de artículos a los países en desarrollo.

25. La delegación de Turquía ha tomado nota de los adelantos logrados por la CDI en relación con los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales. Hasta ahora, la CDI ha seguido en lo posible las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Sin embargo, porque las organizaciones internacionales no pueden ser asimiladas a los Estados y porque su capacidad para celebrar tratados difiere de la de los Estados, son necesarias algunas modificaciones a fin de adaptar las disposiciones de la Convención de Viena a las organizaciones internacionales.

26. La cuestión de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación es compleja y no puede ser tratada con apresuramiento. Al considerarla, la CDI debe estudiar la utilización y la protección de los cursos de agua y el problema de la contaminación.

27. Refiriéndose al programa de trabajo de la CDI, el orador acoge con agrado la creación de un grupo de planificación que examinará periódicamente la marcha de los trabajos de la CDI. La labor de la CDI es menos provechosa cuando ésta examina varias materias en el mismo período de sesiones, por lo que debería obrarse con prudencia antes de asignar a la CDI nuevas cuestiones, en especial cuestiones prioritarias.

28. La delegación de Turquía celebra que haya podido desarrollarse la tercera Conferencia en memoria de Gilberto Amado gracias a otro generoso donativo del Gobierno del Brasil, y confía en que se hará lo posible por organizar otra de esas conferencias en 1976 durante el período de sesiones de la CDI y durante el Seminario sobre derecho internacional.

29. El Sr. PHUMAPHI (Botswana) coincide con los representantes de Australia y otros países en que el tiempo de que se dispone para examinar el informe de la Comisión de Derecho Internacional es demasiado breve. Por lo tanto, desearía que los futuros informes se publicasen con mayor antelación. Algunas delegaciones han sugerido también que el propio informe sea más breve. Ello ahorraría tiempo, pero crearía dificultades para su delegación y las de otros países en desarrollo, ya que el informe enuncia claramente las fuentes de las conclusiones de la CDI, y así esas delegaciones no tienen que realizar sus propias investigaciones. Aunque se ha independizado hace más de 10 años, Botswana no ha podido aún reunir una bibliografía suficiente que suministre toda la información necesaria sobre las fuentes examinadas por la CDI.

30. Anuncia que su Gobierno formulará más adelante observaciones más completas sobre los dos temas que se examinan. El proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados, que constituye un logro importante de la CDI, resulta en general aceptable. La delegación de Botswana acoge con agrado el principio de la "tabla rasa", que está en consonancia con el de la libre determinación. Es de conocimiento general que los tratados celebrados por las Potencias coloniales en representación de sus colonias favorecen con frecuencia los intereses de los propios colonialistas más que a los de las colonias. Por lo tanto, exigir a los Estados de reciente independencia que queden obligados automáticamente por tales tratados equivale a negarles soberanía. La delegación de Botswana aprecia igualmente la excepción al principio de la "tabla rasa" establecida en el artículo 11, que trata de asegurar que los nuevos Estados no se mezclen en conflictos fronterizos al obtener su soberanía. La delimitación de las fronteras por las Potencias coloniales ha sido tan arbitraria que, de no establecerse tal excepción al referido principio, el retiro de esas Potencias podría dar origen a controversias fronterizas. Sin embargo, aun siendo necesaria, la excepción establecida en el artículo 11 no debe interpretarse de manera absoluta, ya que puede haber circunstancias en que un nuevo Estado reclame un ajuste de fronteras por motivos jurídicamente válidos. Por esa razón, la delegación de Botswana acoge con agrado el artículo 13.

31. Los argumentos convincentes que justifican el artículo 11 no parecen aplicarse al artículo 12, que aparentemente da lugar a más problemas que los que resuelve. Para empezar, el artículo es demasiado general, y no especifica qué obligaciones relativas al territorio serán heredadas por el Estado sucesor. ¿Abarca el artículo un acuerdo que permita la permanencia de tropas extranjeras en el territorio? Si es así, está en contradicción con el principio cardinal de la soberanía de los Estados; y si no, peca por omisión y por lo tanto es probable que conduzca a futuras controversias.

32. La CDI ha examinado los tratados relativos a derechos sobre las aguas en la redacción del artículo 12. De esos tratados se desprende claramente que a algunos Estados ribereños se han dado más derechos que a otros Estados sobre las aguas de ríos comunes, desatendiendo totalmente el desarrollo de los Estados en cuyo nombre se han firmado los tratados. Los Estados ribereños deberían siempre ponerse de acuerdo sobre el método más adecuado de efectuar una distribución equitativa de las aguas, pero la

delegación de Botswana se opone a todo tratado que dé a un Estado la facultad absoluta de decidir que cantidad de agua han de obtener otros Estados ribereños. Si los tratados de esa índole obligaran automáticamente a los Estados sucesores, no sólo pondrían en grave peligro la soberanía de esos Estados, sino que, además, en ciertas circunstancias, les privarían de sus medios de subsistencia. Por esa razón, la delegación de Botswana considera que ese artículo es inaceptable y desea que se suprima.

33. La delegación de Botswana no está del todo convencida de la necesidad de establecer otra excepción al principio de la "tabla rasa" en el propuesto artículo 12 *bis*. La libre determinación exige que las injerencias en las decisiones de los nuevos Estados sean mínimas, y una excepción innecesaria como la que figura en ese artículo del proyecto sólo serviría para originar controversias futuras. Además, el artículo propuesto es muy vago, porque no está claro el significado de la expresión "tratado multilateral de carácter universal".

34. La delegación de Botswana apoya a quienes han subrayado la necesidad de incluir el propuesto artículo 32, relativo a la solución de controversias.

35. Refiriéndose al informe de la CDI sobre la labor realizada en su 27º período de sesiones, el orador elogia el trabajo de la CDI sobre la cláusula de la nación más favorecida. En especial encomia el artículo 21, que reconoce la diferencia de riqueza que existe entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo. Por cierto, la invocación indiscriminada de la cláusula de la nación más favorecida condenaría prácticamente a las economías nacientes de los países en desarrollo. Si bien la delegación de Botswana estima que el artículo 21 es un paso importante hacia la satisfacción de los intereses especiales de los países en desarrollo, considera que el artículo omite algunos aspectos muy decisivos de las economías del mundo en desarrollo, como las uniones aduaneras y las zonas de libre comercio.

36. Los Estados sin litoral constituyen un caso *sui generis* que merece un trato excepcional en la aplicación de la cláusula más favorecida. Si se permitiera invocar la cláusula contra todo Estado ribereño que otorgue concesiones a sus vecinos sin litoral, entonces tal vez los Estados ribereños se resistirían a otorgar tales concesiones, lo que retrasaría el desarrollo de los Estados sin litoral. Desea señalar que esa cuestión ha sido resuelta como una excepción en el artículo 10 de la Convención sobre el comercio de tránsito de los Estados sin litoral¹ de 1965.

37. El Sr. ROMULO (Filipinas), tras expresar su reconocimiento al Presidente de la CDI por la excelente labor que realiza para las Naciones Unidas, dice que el oficio de legislar es, cuando menos, lento, ya que los abogados deben contemplar muchísimas situaciones, circunstancias incalculables y conflictos imprevisibles. Sin embargo, hay momentos en que los abogados, en su papel de legisladores, deben actuar también rápidamente para hacer frente a necesidades apremiantes. Por cierto, hay épocas de crisis graves en que deben crearse normas jurídicas para encarar y

¹ Naciones Unidas, *Recueil des Traités*, vol. 597, No. 8641, pág. 79.

resolver problemas que, de lo contrario, serían resueltos por procedimientos no jurídicos. El mundo atraviesa actualmente una crisis económica general, y las naciones están divididas al parecer por exigencias, temores y necesidades contrapuestos. El Secretario General mencionó en fecha reciente, en una recepción en la Misión filipina, los numerosos y nuevos problemas que afrontan las Naciones Unidas, y entre ellos los más importantes son la consecución de un nuevo orden económico internacional y la eliminación de la brecha que separa a las naciones ricas de las pobres. A ese respecto, el Sr. Waldheim hizo referencia al mensaje especial dirigido a la Asamblea General por la Primera Dama de Filipinas, en el que la Sra. de Marcos habló de las Naciones Unidas como la única organización en la que se puede desarrollar el diálogo necesario sobre un nuevo orden económico internacional.

38. Como expresión concreta de las ideas expresadas por el Secretario General y la Sra. de Marcos, el orador sugiere que se pida a la CDI que conceda una atención prioritaria a la cuestión de los derechos y deberes económicos de los Estados. La delegación de Filipinas está dispuesta a presentar un proyecto de resolución sobre esa cuestión, y solicitará de otras delegaciones que se unan a ese esfuerzo. Las resoluciones pertinentes aprobadas por la Asamblea General, como la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados (resolución 3281 (XXIX)), carecen de la formulación jurídica y, por ende, de la obligatoriedad de las normas de derecho internacional. En consecuencia, la delegación de Filipinas querría que la CDI se ocupara de esa cuestión con carácter prioritario y presentara un informe a la Asamblea General, de ser posible, en su próximo período de sesiones. Entre las muchas cuestiones que la CDI debe considerar a ese respecto figuran las siguientes: a) ¿Cuáles son — o cuáles deberían ser — las normas aceptables sobre las inversiones extranjeras o las actividades de las empresas transnacionales? b) ¿Cuál — o cuál debería ser — el derecho internacional aplicable a la nacionalización o a la socialización de bienes extranjeros y la indemnización que habría que pagar? c) ¿Con arreglo a qué normas deben compartir los recursos comunes dos o más Estados? d) ¿Cuáles son los límites jurídicos — si los hay — de la comercialización y la fijación de precios de las materias primas y los productos básicos? e) ¿Qué se entiende por agresión económica y cómo se define el uso o la amenaza de la fuerza económica?

39. Una cuestión importante y urgente es traducir la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados en una convención obligatoria. El orador confía en que la Sexta Comisión pedirá a la CDI que atribuya a esa labor la mayor prioridad.

40. El Sr. PRANDLER (Hungría) dice que el examen anual de los informes de la CDI sirve de base para el diálogo, no sólo entre la CDI y la Sexta Comisión, sino también entre quienes se interesan primordialmente en la codificación del derecho internacional y aquellos cuya función es aplicarlo. La delegación de Hungría agradece al Presidente de la CDI su muy lúcida y amplia presentación del informe y le ruega que transmita a los miembros de la CDI el reconocimiento de esa delegación por los resultados particularmente positivos alcanzados por la CDI en su 27º período de sesiones.

41. Refiriéndose a la responsabilidad de los Estados, uno de los temas más importantes del derecho internacional, dice que la delegación de Hungría está de acuerdo con la filosofía básica del proyecto de artículos preparado por la CDI. Si bien el proyecto de artículos debe tratar exclusivamente la responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos, es importante no minimizar el principio de la responsabilidad absoluta de los Estados por las consecuencias perjudiciales de ciertos tipos de actividad legítima que causen daños a terceros países. Aunque la CDI se ha concentrado acertadamente en la determinación de las normas que rigen la responsabilidad en general, en una etapa posterior debe prestar atención particular a las normas que imponen obligaciones específicas a los Estados. A ese respecto, señala a la atención el párrafo 36 del informe. La delegación de Hungría no desea analizar en detalle el contenido o la redacción de los artículos, pero quiere dejar sentada su seria preocupación por el lento ritmo de la labor de la CDI sobre el tema de la responsabilidad de los Estados. Aun teniendo plenamente en cuenta los obstáculos formidables que traban la labor de codificación y sin dejar de evaluar la excelente contribución del Relator Especial, la delegación de Hungría está decepcionada por la lentitud de la marcha de los trabajos sobre el proyecto de artículos, que no puede justificarse a pesar del nutrido programa que ha tenido recientemente la CDI. Los 15 artículos preparados hasta ahora constituyen solamente la primera mitad de la primera parte del proyecto. La segunda mitad de la primera parte tratará cuestiones aún más complicadas, como la violación de una obligación internacional y la participación de otros Estados en hechos internacionalmente ilícitos. Subsiguientemente, la CDI deberá afrontar el problema de elaborar los artículos de la segunda parte sobre el contenido, las formas y los grados de la responsabilidad internacional. Luego, la CDI deberá decidir si inicia la labor sobre la tercera parte del proyecto, relativa a la solución de las controversias y al modo de "hacer efectiva" la responsabilidad internacional. El orador espera que la CDI respete los plazos fijados en el párrafo 143 del informe, lo que supondría completar los artículos de la primera parte, a más tardar, en 1981.

42. Por lo que hace a la cuestión de la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados, la delegación de Hungría toma nota de la labor realizada por la CDI y felicita al Relator Especial por el éxito logrado en la elaboración de las principales pautas para la codificación de esta materia tan compleja. Esa delegación opina, no obstante, que el proyecto de artículos no podrá finalizarse hasta que se aclaren los restantes puntos controversiales sobre la sucesión de Estados en materia de tratados.

43. La labor de la CDI sobre la cláusula de la nación más favorecida es de suma importancia. Desde el punto de vista práctico, la cláusula cumple una función significativa, no sólo en el ámbito del comercio internacional, sino también en otros campos de las relaciones económicas, sociales y jurídicas internacionales. La intención de la cláusula, según la opinión de la Corte Internacional de Justicia, es establecer y mantener en todo momento una igualdad básica sin discriminaciones entre los países interesados². La

² Véase *Affaire relative aux droits des ressortissants des Etats Unies d'Amérique au Maroc, Arrêt du 27 août 1952: C.I.J. Recueil 1952, pág. 192.*

cuestión es importante, además, desde el punto de vista teórico, ya que representa virtualmente la primera vez en que se intenta codificar ese aspecto del derecho internacional. Merced, entre otras cosas, a la labor del Relator Especial del tema, la CDI ha llegado a una etapa avanzada en la elaboración de un proyecto completo de artículos.

44. Al comentar los artículos 8 a 14, la delegación de Hungría opina que pueden considerarse definitivos, sin excluir la posibilidad de mejoras adicionales de redacción. Como representante de un Estado sin litoral, el Sr. Prandler desea destacar que, en ciertas circunstancias, los Estados sin litoral no pueden ofrecer reciprocidad por el trato de la nación más favorecida. El trato favorable acordado a los Estados sin litoral en cláusulas multilaterales de la nación más favorecida debería considerarse, pues, como excepciones a la norma general de reciprocidad. En los párrafos 9 y 10 del comentario del artículo 14 se señala que los Estados sin litoral, en vista de su situación geográfica especial, quedan excluidos de la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida respecto de terceros Estados con litoral. La delegación de Hungría opina que la norma puede deducirse del derecho positivo actual.

45. Respecto del artículo 15, la delegación de Hungría concuerda totalmente con la conclusión del Relator Especial de que no existen normas consuetudinarias de derecho internacional que establezcan una excepción implícita para las uniones aduaneras u otras asociaciones de Estados similares, en relación con la cláusula de la nación más favorecida. Como lo señaló en la sesión anterior el representante del Japón, es una práctica general de los Estados insertar en los tratados las excepciones que aquéllos deseen formular en relación con la cláusula de la nación más favorecida.

46. Comentando algunos de los argumentos aducidos por el representante de Italia (1544a. sesión), quien habló en nombre de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea (CEE), el orador se permite disentir respetuosamente de la conclusión que cuestiona la propiedad del presente artículo 15. El representante de Italia sostuvo que el artículo 15 está redactado de manera tan rígida que podrá tener consecuencias adversas sobre la tendencia que se observa actualmente hacia la integración regional de los Estados. Como miembro activo del Consejo de Asistencia Económica Mutua, el Gobierno de Hungría opina que la creación de organizaciones concebidas para promover la integración económica, si se basa en principios de no discriminación y beneficio mutuo, constituye una tendencia objetiva de la economía mundial. Sin embargo, la delegación de Hungría no puede aceptar que el artículo 15 constituya un peligro real para la integración económica de parte alguna del mundo. El representante de Italia sostuvo además que el artículo 15 no toma en cuenta el hecho de que en algunos tratados multilaterales por los que se instituyen uniones económicas, las ventajas especiales se vinculan estrechamente a la existencia de instituciones comunes y que sería, pues difícil separar esas ventajas del contexto social y jurídico general de que forman parte. Si bien es cierto que algunas asociaciones económicas, inclusive la CEE, tienen una estructura muy complicada y una amplia gama de instituciones comunes, ello no es pertinente en cuanto al artículo 15. El problema que plantea el representante de Italia debe analizarse, en cambio, en el

marco del artículo 7, que deja a la discreción de cada Estado la determinación del ámbito del trato de la nación más favorecida y la separación de las ventajas específicas del contexto social y jurídico general. El representante de Italia afirmó, además, que el artículo 15 podría tener un efecto desintegrante sobre las relaciones actuales entre los miembros de las uniones aduaneras u otras organizaciones análogas existentes y los terceros Estados con los cuales dichos miembros hayan concertado anteriormente acuerdos con una cláusula de la nación más favorecida. Según la delegación de Hungría, sería erróneo atribuir efecto desintegrante al artículo 15 en cuanto a las relaciones entre los Estados; la falla reside más bien en la negativa a extender a terceros países los privilegios de que gozan los miembros de ciertos grupos económicos. La intención del artículo 15 es declarar lo que es obvio, a saber, que no existe una norma generalmente reconocida que demuestre la existencia de una excepción implícita para las uniones aduaneras. Como se señala en el párrafo 60 del comentario del artículo 15, ningún defensor de la expresión implícita en favor de las uniones aduaneras ha ofrecido jamás una solución satisfactoria al difícil problema planteado por los Estados que estipulan expresamente una o más excepciones a la cláusula, sin mencionar las uniones aduaneras u otras entidades similares.

47. La delegación de Hungría aprueba los artículos 16 y 17. El orador desea, sin embargo, recordar a este respecto que el Relator Especial propuso que se diese atención al trato nacional. La CDI decidió concentrarse en la formulación de proyectos de normas sobre el trato de la nación más favorecida, presumiblemente porque temía engolfarse en dos asuntos diferentes. La delegación de Hungría opina que deben tomarse medidas adicionales para ampliar el presente proyecto a fin de abarcar el trato nacional. El representante de la Argentina (1540a. sesión) señaló correctamente que deben reconocerse el vínculo práctico y la importancia paralela de esas dos cláusulas con referencia, entre otras cosas, al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. El hecho mismo de que la CDI haya aprobado los artículos 16 y 17 demuestra que existe un nexo estrecho entre el trato de la nación más favorecida y el trato nacional.

48. En relación con el artículo 21, parece haber acuerdo general en que la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional deben reconocer la diversidad de niveles en materia de desarrollo económico y las diferencias entre los sistemas económicos y sociales. Por ello, como se expresa en el párrafo 13 del comentario del artículo 21, parece existir un acuerdo general en que los Estados se abstengan de invocar sus derechos al trato de la nación más favorecida a fin de obtener total o parcialmente el trato preferencial otorgado a los países en desarrollo por los países desarrollados. Así, el artículo 21 concuerda con los artículos 18 y 26 de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. A ese respecto, el orador señala que el Gobierno de Hungría estableció en 1968 un sistema unilateral de franquicia aduanera para las importaciones de los países en desarrollo, que ha sido ampliado y mejorado en 1971 y 1974. Entre los beneficiarios figuran los países en desarrollo de África, América Latina y Asia cuyo ingreso nacional per cápita es inferior al de Hungría. En opinión de su delegación, la presente redacción del artículo 21, sin perjuicio de algunas mejoras de redacción, establece un

equilibrio adecuado entre las dos doctrinas sobre el tema, y debe mantenerse. La CDI debe tratar de evitar un debate indebidamente prolongado sobre el artículo 21, que podría perjudicar la fructífera conclusión de la primera lectura del proyecto de artículos el año próximo.

49. Refiriéndose a la cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (véase A/10010, cap. V), la delegación de Hungría toma nota del considerable progreso logrado por la CDI sobre la base de los excelentes informes del Relator Especial. La importancia del tema es cada vez mayor y existen ya miles de tratados en que las organizaciones internacionales son partes. No obstante, la mayoría de esos tratados suelen ser restringidos en materia de contenido y participación. La delegación de Hungría se complace en observar que la CDI ha basado su labor en el firme principio de que ninguna organización internacional tiene la misma capacidad que un Estado para celebrar tratados. La CDI debe esforzarse en aplicar ese enfoque aún más firmemente. En el párrafo 5 del comentario del artículo 9, la CDI declaró que, al proponer el párrafo 2 de ese artículo, no tuvo la intención de recomendar la participación de una o varias organizaciones internacionales en la elaboración de un tratado en una conferencia internacional y que ésa es una cuestión que, en cada caso, deben examinar y decidir los Estados. Nunca se insistirá demasiado en ese punto, que debe quedar reflejado adecuadamente en el proyecto de artículos.

50. En lo tocante al derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, el orador hace notar que el Gobierno de Hungría presentó sus opiniones sobre el tema al Secretario general de conformidad con la resolución 3315 (XXIX) de la Asamblea General. El interés de la delegación de Hungría en la materia deriva del hecho de que el 95% de las aguas de los ríos de Hungría proceden de países vecinos.

51. El Sr. FERNANDEZ BALLESTEROS (Uruguay) felicita al Presidente de la CDI por la presentación de su informe.

52. La declaración del representante de Australia (1541a. sesión) ha llamado a todos a la reflexión, pues no cabe duda de que la CDI produce informes voluminosos y de que la Sexta Comisión tiene un tiempo limitado para estudiarlos, por lo que muchas delegaciones sólo pueden sumarse a una expresión general de aprobación de los informes. En todo caso, lo que impresiona en los informes no es sólo su longitud sino también la erudición que reflejan, y debe reconocerse que esos informes son fruto de solicitudes de la propia Sexta Comisión, como se señala, por ejemplo, en la resolución 3315 (XXIX) de la Asamblea General. Algunas delegaciones, incluida la del Uruguay, deploran que la CDI no haya podido examinar la cuestión del derecho de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, de vital importancia para los países de la cuenca del río de la Plata.

53. El celo de la CDI se refleja, a veces con exceso, en el proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, la delegación del Uruguay estima que los artículos 11, 12 y 13 son

innecesarios. Si bien apoya plenamente las normas previstas en esos artículos, estima que ya están previstas en los artículos 8 y 9 y que cabe aplicar a esos artículos el comentario relativo a los artículos el comentario relativo a los artículos 11, 12 y 13. Si la CDI hubiera puesto mayor énfasis en la redacción de las condiciones exigidas por los artículos 8 y 9, habría logrado el mismo resultado que se busca con los artículos 11, 12 y 13. El orador coincide con el representante del Brasil (1538a. sesión) en que el artículo 14 debería referirse al comportamiento de un movimiento insurreccional, y que habría que suprimir la confusa referencia a un "órgano" de ese movimiento.

54. En relación con el proyecto de artículos sobre la cláusula de la nación más favorecida, la delegación del Uruguay apoya el enfoque innovador de examinar la interrelación entre la aplicación de dicha cláusula y la de la cláusula de trato nacional. A ese respecto, su delegación no tiene reservas respecto de los artículos 16 y 17. Sin embargo, estima que el proyecto en su conjunto debe utilizar el artículo 21 como principio rector, pues la positiva inclusión de ese artículo constituye un logro de suma importancia en relación con el establecimiento de un nuevo orden económico internacional.

55. El éxito de la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre la representación de Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales da lugar a la esperanza de que se logre una reglamentación total y definitiva del derecho de los tratados. Cabe esperar que la labor de la CDI acerca de la cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales progrese con mayor rapidez dada la excelente labor efectuada por el grupo de trabajo encargado de ese tema.

56. El Uruguay, que celebra sus 150 años de vida independiente, no es indiferente a la necesidad de un ordenamiento jurídico adaptado a las necesidades de las nuevas naciones, por lo que es partidario de que continúen los trabajos de la CDI respecto de la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados.

57. La delegación del Uruguay estima que no es apropiado remitir nuevamente a la CDI el proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados, pues ello iría en detrimento del desarrollo del derecho internacional y establecería un peligroso precedente que amenazaría la independencia de la CDI. La Sexta Comisión, en el vigésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General, apoyó las conclusiones a que había llegado la CDI en su segunda lectura de dicho proyecto de artículos en su 26º período de sesiones, y la Sexta Comisión debe ahora revisar o modificar ese texto, o recomendar que la cuestión sea objeto de estudio en una conferencia internacional de plenipotenciarios.

58. Los países que, como el Uruguay, han participado en 30 períodos de sesiones de la Asamblea General con el espíritu de dar plena expresión a los propósitos y principios de las Naciones Unidas ven en la CDI un eficaz aliado en lo que respecta al desarrollo progresivo del derecho internacional y estiman que el apoyo de su labor conducirá al logro de una paz duradera.

59. El Sr. AL-ADHAMI (Iraq) da las gracias al Presidente de la CDI por la excelente presentación de su informe.

60. En lo tocante al proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados, estima que esos artículos son aceptables y forman la base para la elaboración de un acuerdo. En todo caso, su delegación no puede apoyar el propuesto artículo 12 *bis*, sobre tratados multilaterales de carácter universal, que es incompatible con el derecho de los Estados de reciente independencia a la libre determinación y a la conducción de sus propios asuntos. Resulta difícil definir con precisión esos tratados y establecer distinciones entre los tratados multilaterales que son convenientes y deben seguir en vigor y otros tratados. Además, el propuesto artículo es incompatible con el principio de la igualdad de los Estados, pues discrimina entre los Estados de reciente independencia y otros Estados. Los Estados de reciente independencia deben tener el derecho de elegir los tratados que tendrán fuerza obligatoria respecto de ellos.

61. El orador advierte que hay desacuerdo en la Sexta Comisión en cuanto a la forma de ocuparse del proyecto de artículos de que se trata. Algunos representantes han instado a que se remita nuevamente a la CDI el proyecto de artículos, mientras otros estiman que la CDI sólo debe reexaminar los propuestos artículos 12 *bis* y 32, relativos a los tratados multilaterales de carácter universal y a la solución de controversias, respectivamente. La delegación del Iraq no está de acuerdo con ninguna de esas dos posibilidades pues, como han señalado muchos representantes, la CDI ya está recargada de trabajo y necesita acelerar su labor. La mejor forma de ocuparse del proyecto de artículos, de las cuestiones que se han suscitado en el curso del debate y de las observaciones de los gobiernos consistiría en celebrar una conferencia diplomática de plenipotenciarios a fin de que elaborase un acuerdo. Evidentemente, las delegaciones podrían hacer observaciones y presentar propuestas para su inclusión en el proyecto. La fecha de esa conferencia dependería, lógicamente del calendario de conferencias internacionales pero, al parecer del orador, una posibilidad sería que se celebrara en 1977.

62. El Sr. BRUNA (Chile) felicita al Presidente de la CDI por la presentación de su informe, y señala que las declaraciones introductorias de esa índole facilitan considerablemente el examen del informe por la Sexta Comisión.

63. Tomando nota de que varios representantes ya han formulado observaciones y sugerencias en relación con la longitud y el contenido del informe, con especial referencia a la dificultad que entraña estudiar un documento tan largo, profundo, complejo y acompañado por gran cantidad de antecedentes en el corto tiempo de que se dispone, el orador recuerda a la Sexta Comisión que, al presentar no sólo las conclusiones de sus deliberaciones, sino también una explicación de sus fines y procedimientos y una justificación de sus opiniones, la CDI ha efectuado una excelente labor de referencia acerca de las cuestiones examinadas. El informe se basta a sí mismo y constituye un modelo de orden y lógica en la explicación y en la documentación. En opinión del orador, la extensión del informe es proporcionada a la calidad del informe. Para resolver el problema, no habría que reducir la longitud del

informe, sino distribuirlo antes. El orador sugiere varios caminos posibles. En primer lugar, el Secretario General podría acelerar los procesos de redacción, traducción y distribución. En segundo lugar, podría dividirse el informe en dos volúmenes, el primero de los cuales se distribuiría con mayor antelación. En tercer lugar, la CDI podría iniciar antes sus sesiones, por ejemplo en abril, siempre que ello no se superpusiera con otras reuniones jurídicas internacionales. Una cuarta solución, menos conveniente, consistiría en diferir el examen del informe en la Sexta Comisión.

64. El orador ve con agrado la decisión de la CDI de crear un grupo de planificación a fin de que examine los progresos en la labor de la CDI, y espera que resulte posible acelerar los trabajos. Si bien los temas que examina la CDI son interesantes, hay otros temas igualmente interesantes y de mayor actualidad, cuyo examen está pendiente. El orador acoge con beneplácito los contactos que ha establecido la CDI con organizaciones jurídicas regionales, como consecuencia de los cuales podrían surgir nuevos temas para su examen por la CDI.

65. En lo tocante a la responsabilidad de los Estados, tema que ha figurado en el programa de la CDI desde 1949, el orador dice que, en vista de la creciente interdependencia entre los Estados y del creciente movimiento de personas y bienes de un Estado a otro, es sumamente importante que se establezcan normas que regulen la responsabilidad del Estado respecto de esas personas y bienes en relación con los hechos internacionalmente ilícitos, no sólo en el ámbito interno, sino también al nivel internacional. El objetivo no reside en conceder una protección excesiva a los extranjeros, sino en establecer normas que prevean garantías de seguridad y responsabilidad que beneficien tanto a los Estados como a los particulares. Para ese fin, la imputación de la máxima responsabilidad a un Estado conllevaría una máxima seguridad para las personas que llegaran desde el extranjero a su territorio, con fines de acercamiento social, cultural, científico, tecnológico y comercial. Los artículos 1 a 4 tienden a establecer esa máxima responsabilidad internacional. El orador observa con satisfacción que el artículo 10 se basa en la teoría de la responsabilidad *ultra vires*, que constituye una solución moderna a problemas antiguos. Sin embargo, coincide con el representante de la Argentina en que es necesario hacer más clara la redacción del artículo.

66. Respecto del artículo 14, el orador acepta la teoría prevista en el párrafo 1 y la excepción a esa teoría que figura en el párrafo 2, pero coincide con el representante de la Argentina en que el párrafo 3 es inútil y debe suprimirse. Tiene reservas respecto del artículo 15, que se refiere a la imputación al Estado del hecho de un movimiento insurreccional que pasa a ser el nuevo gobierno de un Estado. El Estado es uno, indivisible, perpetuo y permanente, y no debe confundirse con el gobierno, cuyas características son variables y transitorias. La introducción del concepto de movimiento insurreccional como gobierno posterior puede dar origen a la observación de que, por efectos de una revolución fundamental, se ha formado no un gobierno nuevo, sino un Estado nuevo. Su pretexto de que se ha formado un nuevo Estado, sería más fácil desconocer las responsabilidades del gobierno anterior. En todo caso, el tema es de carácter muy político, y el orador teme que, en

la práctica, las excepciones a la norma de atribuir responsabilidad al nuevo gobierno con efecto retroactivo dejen sin efecto la norma o sean fuente de problemas extrajurídicos. El método de trabajo de la CDI y su enfoque respecto del tema son correctos, y el orador espera con interés futuros informes que se ocupen de la transgresión de una obligación internacional y, en particular, de la cuestión de las circunstancias eximentes, agravantes y atenuantes de responsabilidad.

67. En cuanto a la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados, la delegación de Chile apoya los artículos 9 y 11, pero estima que esa cuestión debe tratarse no sólo desde el punto de vista del acreedor, sino también desde el punto de vista del deudor. Si bien la

delegación de Chile está de acuerdo en general con el artículo X, estima que la norma que se prevé debe abarcar también los bienes situados fuera del territorio donde se produce la sucesión.

68. En relación con la cláusula de la nación más favorecida y con la cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales, la delegación de Chile está de acuerdo en general con la metodología y los procedimientos de la CDI y formulará observaciones de fondo acerca de la cuestión en otra ocasión.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

1548a. sesión

Viernes 24 de octubre de 1975, a las 15.15 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1548

Expresiones de condolencia por el fallecimiento de dos embajadores de Turquía

1. Sir Vincent EVANS (Reino Unido) expresa a la delegación de Turquía las sinceras condolencias de su delegación por los indignantes asesinatos de dos embajadores de Turquía, perpetrados en Viena y París, respectivamente.

2. El PRESIDENTE, en nombre de los miembros de la Comisión, expresa al Gobierno turco los pésames de la Comisión.

TEMA 108 DEL PROGRAMA

Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 27º período de sesiones (continuación) (A/10010)

TEMA 109 DEL PROGRAMA

Sucesión de Estados en materia de tratados: informe del Secretario General (continuación) (A/10198 y Add.1 a 4, A/9610/Rev.1*)

3. El Sr. BAVAND (Irán) observa que los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional (CDI), según su informe (A/10010), progresaron considerablemente durante su 27º período de sesiones, aun cuando no se terminó ningún proyecto de artículos. Felicita a los miembros de la CDI, y en particular a sus Relatores.

4. En lo que concierne al proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados (*ibid.* cap. II, secc. B), la CDI, al aprobar el artículo 10, ha puesto fin al debate doctrinal sobre la extralimitación de competencia y ha

tomado una posición acorde con la realidad de la vida internacional moderna: los Estados ya no pueden encontrar una fácil escapatoria a su responsabilidad internacional alegando que determinadas acciones u omisiones de sus órganos son contrarias a las disposiciones de su derecho interno. A juicio de la delegación del Irán, el principio enunciado en el artículo 10 se ajusta, pues, a la filosofía del proyecto. Sin embargo, se ve obligada a formular reservas a dos puntos: primero, considera superflua la frase "cuando tal órgano ha actuado en esa calidad". En efecto, no siempre es fácil determinar en un caso dado si una persona ha actuado a título oficial o a título privado. Además, si se insiste en la calidad oficial de un órgano, se da paso a la controversia. En segundo lugar, la delegación del Irán preferiría que se eliminara la expresión "en el caso de que se trate" y se sustituyera por una fórmula más general que excluyese toda dificultad de interpretación.

5. El principio enunciado en el artículo 11 parece justo, y concuerda con la filosofía del proyecto. No cabe ninguna duda de que no se puede considerar al Estado responsable del comportamiento de particulares que actúen a título privado. No obstante, en relación con los actos ejecutados por una persona privada, el Estado puede, a causa de los hechos o las omisiones de sus órganos, contravenir una obligación internacional que entraña sus responsabilidad. Es cierto que en nuestros días la doctrina de la complicidad del Estado ha caído casi en desuso. Sin embargo, no hay que olvidar que con mucha frecuencia los Estados no vacilan en sacar partido de revueltas y manifestaciones de masas para realizar sus objetivos políticos. De más está decir que se les debe considerar responsables en tales ocasiones, en la medida en que violen sus obligaciones internacionales.

6. El principio enunciado en el artículo 12 está en consonancia con el texto del artículo 5, que no establece ninguna limitación territorial para la atribución al Estado del comportamiento de sus órganos. Además, las disposiciones de ese artículo precisan el alcance del artículo 9. No

* Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno período de sesiones, Suplemento No. 10.

obstante, la delegación del Irán considera que, puesto que el Estado territorial puede incurrir indirectamente en responsabilidad internacional a consecuencia de hechos cometidos en su territorio por los órganos de otro Estado, debiera haberse tenido en cuenta esa posibilidad.

7. La delegación del Irán aprueba el criterio que ha inspirado la elaboración del artículo 13, relativo al comportamiento de los órganos de una organización internacional.

8. El artículo 14 se refiere solamente a los movimientos insurreccionales que gozan de personalidad internacional y son sujetos de derecho internacional; el comportamiento de los movimientos que no reúnen esas condiciones está regulado en el artículo 11. Por analogía, los actos cometidos a título privado por un órgano de un movimiento insurreccional no deberían atribuirse a todo el movimiento. Aunque la CDI no haya definido, hablando con propiedad, lo que debe entenderse por movimiento insurreccional en el sentido que se da a esa expresión en el derecho internacional, sí ha adoptado en el párrafo 3 de su comentario una especie de definición tradicional diciendo que se trata de una organización dotada de su propio aparato institucional, cuyos órganos pueden actuar por cuenta del movimiento insurreccional mismo en una parte del territorio que está bajo la soberanía o la administración del Estado. Conforme a esa definición estrecha, para ser sujeto de derecho internacional un movimiento insurreccional debe asumir la condición de Potencia beligerante y ser reconocido como tal. La CDI debería comenzar por enunciar las condiciones que el derecho internacional exige para que un movimiento se pueda calificar de movimiento insurreccional y por adoptar una definición suficientemente flexible como para abarcar los diversos tipos de movimientos insurreccionales.

9. En su conjunto, la delegación del Irán aprueba el texto del artículo 15, relativo a la atribución al Estado del hecho de un movimiento insurreccional que se convierte en el nuevo gobierno de un Estado o cuya acción da lugar a la creación de un nuevo Estado. Sin embargo, tiene dudas de que sea legítimo atribuir al gobierno existente los hechos lesivos cometidos anteriormente por un movimiento insurreccional cuyos dirigentes han sido llamados a participar en el gobierno. Desde el punto de vista jurídico no hay solución de continuidad, porque la identidad del Estado sigue siendo la misma, pese a la participación de ciertos miembros del movimiento insurreccional en el gobierno. Contrariamente a la posición adoptada por la CDI en la nota 273 de pie de página, la delegación del Irán considera que, desde el punto de vista jurídico, una situación en la que las autoridades legítimas forman un gobierno de coalición con los jefes de un movimiento insurreccional es análoga a aquella en la que un gobierno legítimo, tras haber aplastado una insurrección, concede una amnistía a los insurrectos e invita a sus dirigentes a participar en el gobierno.

10. Refiriéndose al proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados (*ibid.*, cap. III, secc. B), el orador felicita al Relator Especial por su labor.

11. En lo que atañe al proyecto de artículos relativo a la sucesión de Estados en materia de tratados (véase A/9610/Rev.1, cap. II, secc. D), señala que refleja los hondos

cambios que se han producido en el mundo como consecuencia del proceso de descolonización y constituye un adelanto hacia el desarrollo progresivo del derecho internacional. Se ha logrado establecer un delicado equilibrio entre el principio de la continuidad, que emana de la regla *pacta sunt servanda*, y el principio de la "tabla rasa", que tiene en cuenta el derecho a la libre determinación. La CDI, aunque ha adoptado como principio básico el de la "tabla rasa", ha establecido sin embargo excepciones a los regímenes de frontera y a los demás regímenes territoriales. La delegación del Irán no tiene ninguna objeción a que así sea por lo que hace a los regímenes de frontera a que se refiere el artículo 11. En cambio, tratándose de los demás regímenes territoriales regulados en el artículo 12, los Estados sucesores deberían tener la posibilidad de rehusar o de aceptar las obligaciones contraídas por el Estado predecesor. Por lo tanto, debería suprimirse ese artículo.

12. En lo que atañe al propuesto artículo 12 *bis*, relativo a los tratados multilaterales de carácter universal (véase A/9610/Rev.1, nota 57), la delegación del Irán, que comprende las preocupaciones expresadas por algunos miembros de la CDI en relación con esos tratados, y principalmente con los de carácter humanitario, considera que no hay por qué derogar el principio de la "tabla rasa" para darles un trato especial. En cuanto al propuesto artículo 32, relativo a la solución de controversias (*ibid.*, nota 58), conviene dejar a la futura conferencia de plenipotenciarios la tarea de escoger el mecanismo apropiado a tal fin. Como el proyecto de artículos debe completar la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, parece lógico darle la forma de una convención, que debería ser aprobada por una conferencia internacional de plenipotenciarios.

13. El Sr. WISNOEMOERTI (Indonesia) da las gracias al Presidente de la CDI por su brillante presentación del informe que se examina, y celebra los considerables progresos realizados por la CDI en su 27º período de sesiones.

14. La delegación de Indonesia toma nota con satisfacción de los progresos de los trabajos de la CDI sobre la responsabilidad de los Estados, cuyo mérito corresponde en gran parte al Sr. Ago, Relator Especial sobre la cuestión. El artículo 10, que trata de la atribución al Estado del comportamiento de órganos que actúan excediéndose en su competencia o contraviniendo las instrucciones concernientes a su actividad, es importante y completa los artículos 5 y 7, relativos a la atribución al Estado del comportamiento de sus órganos o de otras entidades facultadas para ejercer prerrogativas del poder público. La delegación de Indonesia suscribe el principio enunciado en el artículo 10, que por otra parte es conforme con la práctica de los Estados, la jurisprudencia de los tribunales internacionales y la doctrina. En efecto, para asegurar la estabilidad de las relaciones internacionales es necesario que toda acción u omisión de los órganos de un Estado que hayan actuado en cuanto tales se pueda atribuir a ese Estado, incluso aunque haya sido cometida infringiendo las prescripciones del derecho interno. Por otra parte, conviene observar que el Estado sólo incurrirá en responsabilidad internacional si se demuestra que la acción u omisión que le es atribuible constituye una violación de una obligación internacional y si no se puede concluir que existe tal

violación mientras la persona lesionada no haya agotado todos los recursos internos. Esas dos reglas de derecho internacional deberían bastar para proteger al Estado cuyo órgano haya actuado excediéndose en su competencia contra toda reclamación abusiva de indemnización presentada en virtud del artículo 10. No obstante, los términos absolutos en que está redactado ese artículo causan cierta inquietud a la delegación indonesia. La necesidad de limitar el alcance del principio enunciado en el artículo 10 ha sido reconocida tanto en la práctica de los Estados como en la jurisprudencia internacional y en la doctrina, ya que la idea fundamental es que si la incompetencia del órgano era manifiesta en el momento en que actuaba, la parte lesionada debería haberse dado cuenta de ello y, por tanto, habría podido evitar el perjuicio. La CDI, tras haber examinado la limitación basada en la noción de incompetencia manifiesta, ha llegado a la conclusión de que no procedía incluirla en la regla definida en el artículo 10. No obstante, a juicio de la delegación de Indonesia, convendría que la CDI reexaminara su posición al respecto.

15. Las disposiciones del artículo 11, relativo al comportamiento de las personas que no actúan por cuenta del Estado, expresan el principio suficientemente establecido de que el comportamiento de esas personas no constituye, según el derecho internacional, un hecho que pueda acarrear responsabilidad internacional del Estado. Esa limitación negativa de la noción de hecho del Estado es necesaria por existir casos límites, que podrían ser ambiguos, en los que un órgano del Estado actúe a título privado. El criterio enunciado en la expresión "que no actúan por cuenta del Estado" es aceptable, ya que es lo bastante amplio como para abarcar diferentes tipos de personas, incluidas las personas morales paraestatales u otras entidades cuasipúblicas que no son consideradas personas privadas por el derecho interno, así como las personas físicas que posean la condición de órgano del Estado y las demás entidades a que se refiere el artículo 7. No obstante, como consecuencia del comportamiento de esas personas, un órgano del Estado puede ser culpable de un acto ilícito o de una omisión que constituye un hecho del Estado en derecho internacional y que, por tanto, entraña su responsabilidad. Ahora bien, en ese caso la responsabilidad del Estado no nace del acto cometido por la persona o grupo de personas a que se refiere el párrafo 1 del artículo 11, sino que emana del acto ilícito, o con mayor frecuencia de la omisión, de que es culpable el Estado en relación con aquel otro acto, por ejemplo si no ha utilizado todos los medios de que dispone para prevenir y castigar ese otro acto. El párrafo 2 del artículo 11 constituye una cláusula de salvaguardia que impide al Estado eludir su responsabilidad internacional por los hechos o las omisiones internacionalmente ilícitos cometidos con motivo del comportamiento de personas o de grupos de personas privadas.

16. El artículo 12 trata del comportamiento de órganos de otro Estado que actúen en calidad de tales en el territorio de un Estado o en cualquier otro territorio sometido a la jurisdicción del Estado extranjero, y su párrafo 1 dispone que dicho comportamiento no constituirá hecho del Estado en el territorio en el cual se haya observado. Esa disposición es útil, ya que va contra la noción errónea según la cual un Estado puede ser considerado responsable de todo lo que suceda en su territorio. No es realista imputar a un Estado la responsabilidad de las acciones u omisiones internacio-

nalmente ilícitas de un órgano sobre el que ese Estado no tiene control alguno. No obstante, conviene señalar que, conforme a las disposiciones del artículo 9, los hechos internacionalmente ilícitos cometidos por el órgano de otro Estado puesto a disposición de un Estado deben considerarse hechos del Estado a cuya disposición se ha puesto el órgano de que se trate y entraña la responsabilidad internacional de ese último. Además, el párrafo 2 del artículo 12 dispone también que todo comportamiento del Estado en relación con el previsto en el párrafo 1 es atribuible al Estado y en cuanto tal puede acarrear su responsabilidad internacional. Como la CDI ha subrayado en el párrafo 5 de su comentario, sería peligroso asimilar demasiado estrictamente esa situación a la prevista en el párrafo 2 del artículo 11.

17. El artículo 13 enuncia el mismo principio en lo que respecta al comportamiento de órganos de una organización internacional. En ese caso, hay que determinar también si el comportamiento del órgano de que se trate se puede atribuir a la organización internacional en cuanto tal o a sus Estados miembros.

18. El artículo 14 estipula que el comportamiento de un órgano de un movimiento insurreccional establecido en el territorio de un Estado no constituye un hecho que pueda entrañar responsabilidad internacional de ese Estado. Ese artículo se refiere a una situación en la que el Estado territorial coexiste con el movimiento insurreccional o a una situación en la que el movimiento insurreccional, habiendo sido vencido por el Estado territorial, ha dejado de existir. La delegación de Indonesia comparte el criterio utilizado para deducir el principio de la no atribución enunciado en ese artículo, a saber: la ausencia de control del Estado sobre el movimiento insurreccional. Su delegación aprueba la cláusula de salvaguardia enunciada en el párrafo 2. En cambio, tiene dudas sobre la pertinencia de la cláusula de salvaguardia enunciada en el párrafo 3. Aunque el artículo 14 se titule "Comportamiento de órganos de un movimiento insurreccional", las disposiciones de los párrafos 1 y 2 encajan en el capítulo II del proyecto de artículos, ya que tratan del problema de la atribución o no atribución de un comportamiento determinado al Estado, sujeto de derecho internacional. El párrafo 3, en cambio, trata del problema de la atribución o no atribución de un comportamiento a un tipo especial de persona jurídica internacional: un movimiento insurreccional. La delegación de Indonesia no ha podido encontrar en el comentario de la CDI sobre ese artículo un argumento que justifique la inclusión en el proyecto de una disposición semejante. Si se considera necesaria la existencia de tal disposición, sería preferible formularla en términos generales en un artículo distinto que sirviera de cláusula de salvaguardia aplicable al conjunto del proyecto.

19. No menos importante es el artículo 15, que enuncia la regla según la cual el hecho de un movimiento insurreccional que se convierte en el nuevo gobierno de un Estado o cuya acción da lugar a la creación de un nuevo Estado en una parte del territorio de un Estado ya existente o en un territorio bajo su administración se considera un hecho del Estado que puede dar lugar a responsabilidad internacional. Según la CDI, ese principio se justifica por el hecho de que no hay ruptura de continuidad, ya que en tal caso la identidad del Estado no cambia. Aun admitiendo la

importancia del principio de la continuidad para asegurar la estabilidad de las relaciones internacionales, la delegación de Indonesia se pregunta si la CDI ha tomado suficientemente en consideración otro principio importante reconocido en los artículos anteriores: el de que una acción u omisión internacionalmente ilícita de un órgano del Estado sólo se puede atribuir al Estado en derecho internacional en la medida en que ese Estado ejerza una autoridad efectiva sobre ese órgano y pueda controlarlo. Ese principio debería regir igualmente las normas relativas a los movimientos insurreccionales victoriosos, si se quiere mantener la coherencia del conjunto del proyecto. En su forma actual, el artículo 15 puede plantear dificultades. En efecto, la historia reciente enseña que un movimiento insurreccional no constituye siempre una organización homogénea ni puede ejercer en todo momento una autoridad y un control efectivos sobre sus órganos en el curso de la insurrección. Por tanto, no es realista hacer cargar retroactivamente al nuevo gobierno de un Estado o, según el caso, al nuevo Estado, con la responsabilidad de todos los hechos internacionalmente ilícitos cometidos por los órganos del movimiento insurreccional victorioso antes de su victoria. La delegación de Indonesia espera que en su 28º período de sesiones la CDI reexamine el artículo 15 y mejore su redacción.

20. Terminando sus observaciones sobre la responsabilidad de los Estados, el Sr. Wisnoemoerti expresa la esperanza de que la CDI prosiga sus trabajos sobre esa cuestión sumamente prioritaria en su 28º período de sesiones. Igualmente desea reafirmar la importancia de la recomendación formulada por la Asamblea General en sus resoluciones 3071 (XXVIII) y 3315 (XXIX), para que la CDI se ocupe, tan pronto como sea conveniente, del tema separado de la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional.

21. Pasando al proyecto de artículos sobre la cláusula de la cuestión de la nación más favorecida (véase A/10010, cap. IV, secc. B), celebra los progresos realizados por la CDI en esa esfera y el hecho de que haya previsto terminar la primera lectura del proyecto de artículos el año próximo. Apoya el principio enunciado en los artículos 8, 9 y 10. En efecto, la incondicionalidad de las cláusulas de la nación más favorecida es conforme con la práctica de los Estados en la época moderna. La delegación de Indonesia celebra también que se haya tenido en cuenta en el proyecto de artículos otra práctica moderna de los Estados, consistente en la facultad otorgada a las partes contratantes para imponer condiciones de reciprocidad material a una cláusula de la nación más favorecida, cuya aplicación esté limitada a ciertas esferas y que entraña un trato de la misma naturaleza y del mismo orden.

22. Los artículos 11 y 12, que tratan respectivamente del alcance de los derechos dimanantes de una cláusula de la nación más favorecida y de la adquisición de derechos en virtud de esta cláusula, son expresión de la regla *ejusdem generis*, que a su vez se deriva del principio según el cual un Estado no puede considerarse vinculado por obligaciones que no sean las que él mismo ha aceptado expresamente. Vista la utilidad de esa regla, la delegación indonesia apoya sin vacilar los artículos 11 y 12.

23. Su delegación apoya igualmente el artículo 15. En efecto, la regla enunciada en él se ajusta al principio de la incondicionalidad de la cláusula de la nación más favorecida.

24. Procedía asimismo regular, como lo ha hecho la CDI en los artículos 16 y 17, el derecho al trato nacional en virtud de una cláusula de la nación más favorecida. En efecto, existe una relación íntima entre esa última cláusula y la del trato nacional. No obstante, sólo procede incluir la cláusula del trato nacional en el proyecto de artículo en la medida en que se la considera desde el punto de vista de sus relaciones con la cláusula de la nación más favorecida.

25. Uno de los artículos más importantes del proyecto es el artículo 21, que trata de la relación entre la cláusula de la nación más favorecida y el trato otorgado en virtud de un sistema generalizado de preferencias. La regla adoptada por la CDI a ese respecto es realista y tiene en cuenta la situación de desigualdad acusada que caracteriza las relaciones económicas internacionales entre Estados que no han alcanzado el mismo nivel de desarrollo económico. A fin de corregir el desequilibrio existente en las relaciones económicas internacionales, los organismos de las Naciones Unidas se han puesto de acuerdo sobre la necesidad de establecer un trato preferencial generalizado sin discriminación y sin reciprocidad. Esa necesidad ha sido afirmada particularmente en la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo (resolución 2626 (XXV) de la Asamblea General), en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados (resolución 3281 (XXIX)) y en la resolución 3362 (S-VII), aprobada en el séptimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General. El artículo 21, que también tiene en cuenta esa necesidad, merece el apoyo total de la Sexta Comisión. No obstante, la delegación de Indonesia reconoce que las disposiciones del artículo no bastan para proteger los intereses de los países en desarrollo y aprueba la intención de la CDI de reexaminarlos y desarrollarlos.

26. El Sr. VILLAGRAN KRAMER (Guatemala), refiriéndose al proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados, declara que la CDI debería reelaborar los dos artículos que han sido objeto de mayor número de observaciones, antes de resolver la cuestión de la convocación de una conferencia de plenipotenciarios. Los tratados multilaterales pueden dividirse en dos categorías, según que codifiquen o no las reglas vigentes del derecho internacional. Las reglas contenidas en los tratados de la primera categoría se imponen a los nuevos Estados independientemente de su consentimiento, en tanto que las de los tratados de la segunda categoría se basan en el consentimiento de los Estados contratantes y, por consiguiente, también en el del Estado sucesor. La CDI debería también examinar el caso de los tratados multilaterales que exigen que se reúnan ciertas condiciones antes de que el Estado sucesor pueda dar su consentimiento. En cuanto a los tratados que delimitan fronteras, la delegación guatemalteca estima, como la CDI, que no son afectados en principio por la sucesión de Estados, pero desea subrayar que si un tratado de cesión territorial hubiese caducado, no puede pretenderse en ese caso que la delimitación de fronteras resultante de ese tratado sea inmutable. Como se desprende del párrafo 17 del comentario del artículo 11, el simple

hecho de una sucesión de Estados no consagra la frontera establecida en un tratado anterior de sucesión territorial cuando esa frontera es impugnada o cuando se discute la validez del tratado por haber caducado éste. En semejante caso, no puede considerarse que la frontera esté establecida con efectos obligatorios, y se podría incluso pretender que no existe frontera alguna. En la práctica, todo tipo de situaciones pueden dar lugar a una controversia sobre la existencia o el alcance jurídico de tales tratados en el momento de una sucesión de Estados, y entonces el Estado sucesor puede invocar el principio de la "tabla rasa".

27. Pasando al tema de la responsabilidad de los Estados, destaca la abundante jurisprudencia latinoamericana citada por la CDI en su informe. Es sorprendente observar, después de lo que ha sucedido en la América Latina, que el derecho internacional relativo a la responsabilidad de los Estados haya tenido una evolución desfavorable a los países en desarrollo. En términos generales, la delegación guatemalteca hace suyas las observaciones formuladas por otras delegaciones latinoamericanas, particularmente en lo relativo a la necesidad de aclarar la zona oscura entre lo lícito y lo ilícito, y de tener en cuenta las teorías avanzadas en la América Latina.

28. En cuanto al proyecto de artículos sobre la cláusula de la nación más favorecida, la CDI debería estudiarla desde una perspectiva más actual de la que lo ha hecho. Para codificar esa materia, la CDI debería tomar en consideración las modificaciones ocurridas en la esfera del derecho económico internacional, tanto en lo que respecta a las concepciones jurídicas como a las instituciones. En ciertos dominios, la reciprocidad ya ha desaparecido y en otros sufre transformaciones de fondo, para dar lugar a la instauración de regímenes basados en la equidad y en el desarrollo de todos los países. Como lo indican estudios hechos en los países del tercer mundo, la cláusula de la nación más favorecida responde más a las reglas del juego entre los países industrializados que entre esos países y los países en desarrollo; esa cláusula obstruye incluso las relaciones económicas entre los países en desarrollo. Precisamente por esa razón se han celebrado acuerdos de integración económica. Esos acuerdos establecen excepciones a la aplicación automática de la cláusula de la nación más favorecida y permiten un desarrollo equilibrado de todos los Estados partes en ellos. Por ese motivo, el artículo 15 del proyecto preocupa un poco a la delegación guatemalteca. Como ha señalado el representante de Italia, hablando en nombre de la Comunidad Económica Europea (CEE) (1544a. sesión), el principio enunciado en esa disposición podría acarrear la dislocación de los proyectos de integración económica. Para Guatemala, que es miembro del actual Mercado Común Centroamericano y que participa activamente en la creación de una comunidad económica y social centroamericana, una disposición del tipo de la del artículo 15 podría anular las ventajas que se conceden los Estados miembros de ese Mercado Común y reducir considerablemente los objetivos de la comunidad económica y social. El artículo 21 del proyecto sólo se refiere a los esquemas de preferencias generalizadas vigentes entre Estados, pero no hace alusión a los acuerdos que pueden celebrarse entre dos comunidades o dos zonas de integración económica. Aunque comprende las múltiples dificultades que tiene la CDI para elaborar una serie de artículos sobre la cláusula de la nación más favorecida, desea destacar

la necesidad de tener en cuenta los instrumentos recientes del derecho internacional económico, como es la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados.

29. El Sr. FUENTES IBAÑEZ (Bolivia) expresa su admiración a la CDI por la labor realizada en su último período de sesiones.

30. Pasando revista a los artículos ya elaborados en materia de responsabilidad de los Estados, señala que la cuestión de la atribución al Estado del comportamiento de sus órganos o del de otras entidades facultadas para ejercitar las prerrogativas del poder público nunca ha sido tratada con tanta precisión como en el proyecto presentado por la CDI. El artículo 10 se refiere al deslindamiento entre el hecho del Estado y el de sus órganos o entidades que se hayan excedido en su competencia; conforme al derecho internacional, ambos casos constituyen un hecho del Estado. Esa calificación parece acertada, teniendo en cuenta la excepción prevista en el artículo 11, en cuanto al comportamiento de personas que no actúan por cuenta del Estado. El artículo 12, sobre el comportamiento de los órganos de otro Estado diferente del Estado territorial, parece exigir un análisis más detenido por parte de la CDI. Subsisten efectivamente en los días actuales ciertas formas de injerencia extranjera en un Estado territorial, en detrimento de terceros Estados, que cuentan con la tolerancia y hasta con la cooperación de las autoridades locales. Lo mismo cabe decir del artículo 13, que se refiere al comportamiento de órganos de una organización internacional; debe evitarse que representantes o agentes de gobiernos o de organizaciones internacionales se presten a maniobras peligrosas para las buenas relaciones internacionales.

31. Por esa misma razón, la delegación de Bolivia estima que el texto del artículo 14, relativo al comportamiento de órganos de movimientos insurreccionales, no es totalmente satisfactorio. El trasfondo de la cuestión no ha sido ajustadamente tipificado sino como caso de excepción. Pero las actividades de un movimiento insurreccional exceden de ordinario la simple competencia de las autoridades subalternas, y su tolerancia resulta expresión de la voluntad del Estado territorial identificado con los fines propuestos por los insurgentes. La incompetencia de sus órganos dependientes no enerva la responsabilidad del Estado. El artículo 14 podría ser objeto de revisión a la luz de las experiencias de la vida contemporánea y, muy especialmente, en lo que toca a las bandas terroristas que se instalan en territorios de un Estado y lo convierten en un frente beligerante. La delegación de Bolivia opina que se justifica una excepción para los movimientos de liberación nacional que luchan contra un régimen colonial, pero que esa excepción no debe generalizarse. La excepción no se justifica cuando los actos de los movimientos insurreccionales afectan a países jurídicamente constituidos como Estados libres y con instituciones tradicionales. En su comentario al artículo 14, la CDI subraya que para que exista complicidad, las relaciones de un movimiento insurreccional con el país en que tiene su base han de ser estrechas. Si tal es el caso, los hechos de los movimientos insurreccionales dejan de ser hechos de particulares, desde el punto de vista internacional, y se transforman en los de entidades que actúan de consuno con el Estado. El caso que considera la CDI es una situación extrema, que sobrepasa la complicidad tácita que prevé el

artículo 14. Por otra parte, esa situación no está tratada expresamente en el artículo. En consecuencia, la delegación de Bolivia vería con agrado que dichos textos fuesen revisados o que se dedicase un nuevo artículo a tales violaciones.

32. En cuanto a los daños que pueden sufrir los extranjeros en caso de motines, disturbios o asonadas, esa delegación está de acuerdo en que la responsabilidad del Estado territorial es limitada, salvo negligencia u omisión de su parte.

33. La reserva con que los Estados latinoamericanos asisten a la evolución actual se debe a pasadas experiencias sobre la presión que más de una vez ejercieron contra ellos las potencias extranjeras en forma lesiva para su dignidad y soberanía. En la actualidad cuentan sin embargo con servicios eficaces de seguridad para la protección del Estado, el mantenimiento del buen orden en sus relaciones internacionales y la seguridad de sus habitantes.

34. En relación con la cláusula de la nación más favorecida, la delegación de Bolivia comparte el criterio expresado por la delegación del Paraguay (1538a. sesión) en el sentido de que el trato nacional conferido en los acuerdos bilaterales y el trato que reciben los países en desarrollo no debe ser invocado por terceros Estados cuando esas concesiones son consecuencia exclusiva de la situación geográfica desventajosa de los Estados beneficiarios. Tampoco podría ser viable su aplicación en el caso de las zonas de libre comercio, de unión aduanera o de grupos regionales cuyas finalidades de cooperación económica y de desarrollo común no podrían hacerse extensivas a países notoriamente más desarrollados. A fin de elaborar un código de normas jurídicas internacionales en materia económica, no sería posible prescindir de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados ni de las normas que contendrá la futura convención sobre el derecho del mar.

35. En cuanto al proyecto de artículos la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados, la delegación de Bolivia manifiesta su conformidad con los artículos 5, 6 y 7 y dice que el principio de la extinción de los derechos del Estado predecesor en la fecha en que el Estado sucesor asume la soberanía territorial tiene carácter irrefutable y debe aplicarse asimismo a los bienes situados en el extranjero. El principio enunciado en el artículo 9 está avalado por la jurisprudencia, y toda modificación no haría sino engendrar confusión. Por otra parte, el Estado predecesor y el Estado sucesor siempre pueden derogarlo y, en el informe que se examina, la CDI menciona casos de jurisprudencia en que los créditos han debido ser transferidos al Estado sucesor. Como algunos miembros de la CDI, la delegación de Bolivia estima que el término "pasarán" en el artículo 11, empleado para los créditos del Estado predecesor, es impreciso y que podría ser reemplazado por "pasarán a beneficiar al Estado sucesor" o por "serán transferidos en beneficio del Estado sucesor".

36. Resumiendo a grandes rasgos la posición de la delegación de Bolivia, el orador declara que no se justifica que el proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados vuelva a la CDI para un nuevo examen; que, en el momento oportuno, las observaciones formuladas

durante el presente debate deberían ser examinadas por la Sexta Comisión o por una conferencia de plenipotenciarios; que la noción de intervención extranjera, sea como insurrección armada o desplazamiento de bandas terroristas, debería ser tipificada en los artículos sobre la responsabilidad de los Estados; que correspondería prever excepciones adecuadas a la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida en el caso de los países en desarrollo y, muy especialmente, de los países sin litoral o de los países que tienen una situación geográfica desventajosa; y que los informes de la CDI deberían distribuirse con mayor antelación a fin de que se pudieran examinar con el detenimiento que merecen, sin que ello signifique la supresión de comentarios o su reducción a un compendio mínimo. Por último, la delegación de Bolivia expresa su especial interés en el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación.

37. Sir Vincent EVANS (Reino Unido) destaca los progresos considerables logrados por la CDI en su último período de sesiones en el estudio de múltiples e importantes asuntos y felicita al Presidente de la CDI por su brillante presentación del informe que se examina.

38. Es importante que la CDI siga gozando de un alto grado de autonomía en la dirección de sus trabajos. La delegación del Reino Unido ve con agrado que la CDI haya creado un grupo de planificación encargado de estudiar su funcionamiento y de formular sugerencias sobre su labor. La Sexta Comisión debería ejercer moderación al marcar directrices a la CDI sobre la organización de sus trabajos, en el entendimiento de que la CDI y su grupo de planificación habrán de considerar las opiniones expresadas durante el presente debate.

39. El representante del Reino Unido expresa su satisfacción por los progresos logrados por la CDI en la elaboración de cuatro proyectos importantes, pero se pregunta si no sería preferible que la CDI se circunscribiese a un número más reducido de temas durante cada período de sesiones. De ese modo, la Sexta Comisión y los gobiernos podrían seguir más fácilmente el trabajo de la CDI y hacer comentarios sobre sus proyectos. Haciendo suya una sugerencia formulada en la sesión anterior por el representante de Chile, el orador dice que la CDI debería considerar la publicación escalonada de sus informes en dos o más partes, para que los gobiernos contaran con algo más de tiempo a fin de estudiar los capítulos que primero se concluyan. Refiriéndose a las declaraciones formuladas por otros miembros de la Sexta Comisión respecto de la función y del contenido de los informes anuales de la CDI y, en particular, de la necesidad de incluir tanto material en los comentarios adjuntos a los proyectos de artículos, observa que no existe ninguna disposición en el Estatuto de la CDI que la obligue a presentar un informe anual a la Asamblea General. En consecuencia, nada impediría que la Sexta Comisión pidiese un informe redactado de manera diferente a la tradicional. Ahora bien, si el informe ha adoptado una forma determinada, ello se debe precisamente al Estatuto de la CDI. Cuando ella codifica un tema de derecho internacional debe, de conformidad con el artículo 20 de su Estatuto, redactar su proyecto en forma de artículos y presentarlo a la Asamblea General, acompañado de un comentario pertinente sobre los puntos precisados en esa disposición. Otras disposiciones del Estatuto se refieren a la

elaboración de propuestas de desarrollo progresivo y prevén asimismo que los proyectos de la CDI vayan acompañados de las explicaciones y del material secundario que juzgue apropiados. Por supuesto, la CDI rara vez distingue en la práctica entre los proyectos de artículos que se refieren a la codificación y los que se refieren al desarrollo progresivo del derecho internacional.

40. De acuerdo con ello, los comentarios que acompañan a los proyectos de artículos de la CDI forman parte del proceso de desarrollo progresivo y codificación y se redactan junto con los proyectos de artículos. Por tanto, sería difícil reservarlos para los proyectos definitivos y acompañar solamente comentarios resumidos en los informes provisionales de la CDI. El hecho es que los comentarios no pueden disociarse del texto de los proyectos de artículos y se incluyen en el informe para permitir que los miembros de la Sexta Comisión perciban de qué modo se orientan los trabajos de la CDI y, llegado el caso, formulen observaciones de carácter preliminar. No es menos cierto que esos comentarios, por excelentes que sean, tienden a extenderse demasiado.

41. Como han señalado otros miembros de la Sexta Comisión, parece prematuro formular observaciones detalladas sobre los numerosos proyectos de artículos que figuran en el informe de la CDI, habida cuenta de que no han sido oficialmente remitidos a los gobiernos para que formulen sus observaciones. El representante del Reino Unido reserva, en consecuencia, la posición de su Gobierno sobre la cuestión hasta el momento en que puedan estudiarse a la luz de un conjunto de artículos completo para cada uno de ellos.

42. Por lo que hace al proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados, Sir Vincent Evans indica que 20 años atrás tuvo conocimiento de un caso que le lleva a preguntarse si ciertas expresiones empleadas en el proyecto, como "órgano del Estado" u "órgano de una entidad que no forme parte de la estructura misma del Estado o de una entidad pública territorial pero que esté facultada por el derecho interno de ese Estado para ejercer prerrogativas del poder público" no deberían definirse con más rigor. En cuanto al caso al que ha aludido se trataba de un abordaje en el Canal de la Mancha entre un transbordador de la British Transport Commission, empresa pública creada para la gestión de los ferrocarriles y transbordadores nacionalizados, y un buque de la Marina norteamericana. ¿Cuál sería, en relación con el proyecto de artículos, la situación jurídica de una empresa pública autónoma creada por el derecho interno para garantizar el funcionamiento de una industria nacionalizada? ¿Se trata del órgano de un Estado? En aquel momento se insistió en que la British Transport Commission no era un órgano ni un agente del Gobierno británico. Sin embargo, si no era un órgano del Estado, cabe preguntarse si, al estar operando el funcionamiento de transbordadores del sistema nacionalizado de transportes, no era una entidad que ejercía "prerrogativas del poder público". Además, si alguno de los buques fue culpable por negligencia, ¿constituyó su comportamiento una violación de una "obligación internacional" en el sentido del inciso b) del artículo 3 del proyecto? Sobre ese tema, Sir Vincent Evans observa que la CDI indica en el párrafo 40 de su informe que estudiará ulteriormente si

corresponde definir ciertos términos empleados en el proyecto de artículos.

43. En relación con los artículos 7, 8, 9 y 11 del proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados, cada uno de los cuales está calificado por una cláusula de salvedad, la delegación del Reino Unido abriga serias reservas respecto del hecho de tratar cuestiones complejas mediante normas concebidas en términos muy generales, en particular porque pueden aplicarse a casos en que no cabe ninguna posibilidad de acuerdo entre el Estado predecesor y el Estado sucesor. Pero el proyecto apenas está en sus etapas iniciales y la Sexta Comisión no debe esperar con demasiada impaciencia los resultados de los trabajos de la CDI sobre ese punto.

44. La delegación de Italia ha formulado una declaración en nombre de los nueve Estados miembros de la CEE señalando a la atención ciertos problemas que el proyecto de artículos sobre la cláusula de la nación más favorecida plantea a la CEE y a otras uniones económicas y aduaneras. Sir Vincent Evans desea agregar respecto de los párrafos 105 a 108 del informe, dedicados a la cuestión del trato nacional, que la CDI no debería complicar su tarea extendiendo el alcance del proyecto de artículos al problema de las cláusulas de trato nacional.

45. La delegación del Reino Unido ve con satisfacción los progresos logrados en el proyecto de artículos sobre tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales (véase A/10010, cap. V, secc. B), y opina que la CDI debería intensificar sus esfuerzos por concluir su trabajo sobre la cuestión hacia 1981.

46. Como miembro del Comité Europeo de Cooperación Jurídica, uno de los tres órganos regionales con los que la CDI mantiene relaciones, Sir Vincent Evans señala que aquél sigue de cerca la labor de la CDI y se complace siempre en acoger en sus reuniones al Presidente o a otro representante de la CDI.

47. La Srta. AGUTA (Nigeria) reconoce la necesidad de codificar y desarrollar el derecho internacional en las esferas de la responsabilidad de los Estados, la sucesión de Estados en materias distintas de los tratados, la cláusula de la nación más favorecida, los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales y los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación. Respecto de los cuatro primeros puntos, la CDI ya ha elaborado proyectos de artículos que contribuirán a la labor de codificación. Sin embargo, el informe de la CDI es voluminoso y debería haberse enviado a las delegaciones con mayor antelación al período de sesiones.

48. Por otra parte, es un motivo de orgullo para Nigeria que uno de sus juristas sea miembro de la CDI, y apoyará la labor de dicho órgano teniendo en cuenta las sugerencias y observaciones formuladas por los miembros de la Sexta Comisión y los gobiernos.

49. En relación con la sucesión de Estados en materia de tratados, en el estado actual de las relaciones internacionales sólo se puede llegar a transacciones basadas en

intereses políticos, transacciones que están llamadas a evolucionar con el tiempo. De hecho, una de las tareas de la Sexta Comisión consiste en identificar las esferas en que es necesario introducir mejoras. Recogiendo todas las ideas aportadas por los representantes, sería posible llegar a un arreglo internacional ordenado; se logrará una mayor estabilidad de las leyes y reglamentos internacionales cuando sólo haya que proteger un interés común. La cuestión de la sucesión de Estados en materia de tratados es delicada e importante, pues se trata de eliminar las relaciones de dominación a fin de que los pueblos puedan ejercer su derecho a la libre determinación. Los Estados de reciente independencia deben tener derecho a revisar los tratados celebrados en su nombre por el Estado predecesor en los ámbitos que guardan relación con la soberanía sobre su territorio y a elegir los tratados en virtud de los cuales quieren obligarse. En consecuencia, Nigeria acepta el principio de la "tabla rasa" que, correctamente aplicado, no irá en detrimento del principio de la continuidad que tiende a preservar las normas internacionales cuya pertinencia se establezca. Indudablemente, el Estado sucesor aceptará sin dificultades, tras examinarlos, los tratados celebrados por el Estado predecesor cuyo interés para él sea manifiesto. Recordando unas palabras del representante de Ghana, según el cual "los amigos no deben ayudar a uno a elegir a sus enemigos", la Srta. Aguta declara que, gracias a esos principios, un Estado de reciente independencia comenzará su vida entre los demás miembros de la comunidad internacional sin temores y con conocimiento de causa.

50. La delegación de Nigeria reconoce la necesidad de salvaguardar los intereses de los Estados de reciente independencia, si bien estima que algunos de ellos no deben rechazar los tratados celebrados en su nombre por un Estado predecesor por el mero afán de manifestar su independencia. La delegación de Nigeria ve con agrado el enfoque adoptado por la CDI en la elaboración del proyecto de artículos y se reserva el derecho de formular observaciones más detalladas en el futuro.

51. Por otra parte, cuando la CDI estime haber concluido su trabajo sobre la cuestión, sería conveniente o convocar una conferencia de plenipotenciarios para examinar la cuestión o mantenerla en la Sexta Comisión. Dado que en el futuro cercano se han de celebrar varias conferencias, parecería acertado que la Sexta Comisión se ocupara de esa cuestión en su próximo período de sesiones.

52. El Sr. SIAGE (República Árabe Siria) señala, en relación con la sucesión de Estados en materia de tratados, que su delegación apoya los esfuerzos de la CDI por desarrollar y adoptar principios progresistas que sirvan de base para codificar esa cuestión en la forma de una convención internacional. La delegación de la República Árabe Siria afirma su adhesión al principio de la "tabla rasa", pues no puede obligarse a los países antes dominados por Potencias coloniales a respetar tratados celebrados sin su consentimiento. Partiendo de ese principio, la delegación de la República Árabe Siria tiene reservas respecto de los artículos 11 y 12 del proyecto. En efecto, el fundamento de esos artículos es contrario al derecho inalienable de los pueblos a la libre determinación. La comunidad internacional no puede conferir ningún tipo de legitimidad a las concesiones territoriales otorgadas con miras al logro de objetivos políticos que no tienen en cuenta la unidad

geográfica e histórica del país colonizado. En general, la delegación de la República Árabe Siria aprueba el proyecto de artículos sobre sucesión de Estados en materia de tratados pero, oportunamente, expresará sus reservas acerca de los artículos 11, 12 y 12 *bis*, que deben ser objeto de un nuevo examen. Asimismo, en vista del carácter político del artículo 32, convendría que la CDI lo revisara a la luz de las observaciones de los Estados y de los debates de la Sexta Comisión. Por último, el Sr. Siage estima que la CDI debe volver a examinar el proyecto de artículos y que sería prematuro convocar una conferencia diplomática.

53. En lo que atañe a la responsabilidad de los Estados, cuestión que refleja la evolución de las relaciones entre Estados de reciente independencia y Potencias coloniales, es importante establecer una distinción entre los hechos internacionalmente ilícitos y los hechos que constituyen una amenaza a la paz y seguridad internacionales. Debe atribuirse responsabilidad a los Estados por sus actos de carácter más peligroso, esto es, la expulsión de poblaciones de sus territorios, la agresión, la expansión territorial y las políticas discriminatorias y racistas que constituyen crímenes contra la paz y la humanidad. Los funcionarios culpables de esos delitos deben comparecer ante la justicia y los Estados deben asumir la responsabilidad civil correspondiente. Por otra parte, convendría que la CDI se inspirase en la Definición de la agresión adoptada por la Asamblea General en su vigésimo noveno período de sesiones (resolución 3314 (XXIX), anexo), así como en las observaciones formuladas por las delegaciones de la República Democrática Alemana y de Rumania (1539a. y 1543a. sesiones).

54. Además, debe establecerse una distinción entre los artículos 14 y 15 del proyecto, en la medida en que la legitimidad de los movimientos de liberación nacional dimana de la propia Carta de las Naciones Unidas, pues en ella se reconoce el derecho de los pueblos a la libre determinación. Por otra parte, no puede atribuirse responsabilidad a los movimientos de liberación nacional por actos cometidos en el curso de su lucha por la independencia y la libertad.

55. El orador estima que las nuevas normas del derecho internacional deben inspirarse en las necesidades y en los intereses del mundo en desarrollo. Ahora bien, el informe de la CDI adolece de dos defectos, pues, por una parte, impide que muchos países del tercer mundo que carecen de especialistas puedan participar en los debates y, por la otra, es excesivamente largo y ha sido distribuido demasiado tarde. En todo caso, el Sr. Siage observa que no debe sacrificarse la objetividad en aras de la concisión. Así pues, el orador pide al Presidente de la CDI que estudie sus observaciones y las señale a la atención de los miembros de ese órgano. De esa forma, las delegaciones del mundo en desarrollo podrían tener mayor participación en los debates relativos a la labor de la CDI.

56. En lo tocante al derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, el representante de la República Árabe Siria señala que las autoridades competentes de su país están examinando esa cuestión y harán llegar observaciones pormenorizadas al respecto. En el ínterin, el orador señala que cada Estado ribereño en una cuenca hidrográfica debería tener una parte equitativa en el uso de las aguas de la cuenca, y que es

necesario tener en cuenta las características geográficas (superficie, clima o población) e hidrológicas de la cuenca, sus usos anteriores y actuales, la importancia de cada uso en el ámbito social, las necesidades actuales y futuras (en el plano económico, social y desde el punto de vista del desarrollo), así como la presencia de otros recursos hídricos, y asignar prioridad a las necesidades del desarrollo y a los países ribereños cuyos recursos hídricos sean poco importantes.

57. El representante de la República Árabe Siria manifiesta que su delegación apoya los trabajos de la CDI.

58. El Sr. MANSFIELD (Nueva Zelanda) señala, en relación con los métodos de trabajo de la CDI, que su delegación ha tomado nota con especial interés de la constitución en el seno de la Mesa Ampliada de un grupo de planificación encargado de estudiar el funcionamiento de la CDI y de formular sugerencias acerca del trabajo de ésta. Aunque la CDI aprobó un número considerable de artículos, tal vez la creación de ese grupo de planificación constituya el acontecimiento más importante de su último período de sesiones. Gracias a ese grupo, el informe de la CDI da una idea clara del estado de los trabajos y del calendario de las actividades futuras. Las actividades de ese grupo deberían ser útiles para la CDI y para la propia Asamblea General, que podrá conocer en mejor forma los objetivos y prioridades de la CDI. Complace a la delegación de Nueva Zelanda observar que la CDI ha decidido proseguir las actividades del grupo de planificación. Con arreglo a las conclusiones a que ha llegado el grupo de planificación, parecería que en el curso de los seis próximos años deberían completarse cuatro proyectos de artículos (responsabilidad de los Estados, sucesión de Estados en materias distintas de los tratados, cláusula de la nación más favorecida y tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales) y que la CDI debería estar en condiciones de efectuar una segunda lectura de dos o tres de esos proyectos. Así pues, la Asamblea General podría tener ante sí cada año un proyecto de artículos terminado.

59. Evidentemente, si la CDI se ajusta a ese calendario y progresa en el estudio de otras cuestiones, tanto la CDI misma como la División de Codificación tendrán que efectuar un trabajo considerable, por lo que habrá que velar porque la División, que no presta servicios solamente a la CDI, disponga de personal suficiente para seguir aportando un apoyo de alto nivel a los trabajos de la CDI.

60. Además, es importante que la CDI pueda actuar con flexibilidad, esto es, que pueda ocuparse del estudio de las

nuevas cuestiones a las que la Asamblea General atribuye un carácter de urgencia; en todo caso, a juicio de la delegación de Nueva Zelanda, si se quiere mantener la calidad jurídica y el interés político de los trabajos de la CDI, no hay que agobiarla. Por lo tanto, la CDI ha actuado con acierto al reconocer las dificultades que entraña la sucesión de Estados en materias distintas de los tratados al pedir al Relator Especial que centre sus trabajos en la esfera de los bienes y las deudas públicas. Por la misma razón, la delegación de Nueva Zelanda abriga dudas sobre si, en la situación actual, es oportuno que la CDI estudie la cuestión del trato nacional en el marco de los artículos relativos a la cláusula de la nación más favorecida y estima que tal vez existan otras esferas en las que la CDI no debería abusar de sus esfuerzos.

61. Complacen al Sr. Mansfield los métodos de trabajo de la CDI, especialmente el sistema de relatores especiales. En efecto, con la asistencia de la División de Codificación, un relator especial puede avanzar en una esfera particular sin ocupar el tiempo de toda la CDI.

62. Parecería que los informes anuales de la CDI pudieran ser más breves, pero nunca se insistirá demasiado en el interés de una exposición como la que figura en la introducción del capítulo relativo a la responsabilidad de los Estados, que permite seguir el plan de trabajo de la CDI. Por su parte, la delegación de Nueva Zelanda estima que la CDI debe iniciar la segunda etapa del proyecto sobre responsabilidad de los Estados tan pronto como se complete la primera etapa, a fin de proporcionar un marco para el desarrollo progresivo del derecho y asegurar una cierta continuidad entre las distintas cuestiones incluidas en el programa de trabajo de la CDI. De esa forma, el hecho de centrar el interés en la responsabilidad por actos ilícitos pone también de relieve la importancia de la responsabilidad por los riesgos, cuestión que, al igual que la de los cursos de agua internacionales, está estrechamente vinculada con los esfuerzos de la comunidad mundial por hacer un uso más racional del medio ambiente.

63. Probablemente, la CDI podrá iniciar el estudio de nuevas cuestiones, sin tener que cambiar radicalmente sus métodos o su orientación; pero, en la actualidad, sería mejor que la CDI completara sus trabajos sobre la cláusula de la nación más favorecida y prosiguiera los relativos a la cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales.

Se levanta la sesión a las 17.45 horas.

1549a. sesión

Lunes 27 de octubre de 1975, a las 15.25 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1549

En ausencia del Presidente, el Sr. Godoy (Paraguay), Vicepresidente, ocupa la Presidencia.

TEMA 108 DEL PROGRAMA

Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 27º período de sesiones (continuación) (A/10010)

TEMA 109 DEL PROGRAMA

Sucesión de Estados en materia de tratados: informe del Secretario General (continuación) (A/10198 y Add.1 a 4, A/9610/Rev.1*)

1. El Sr. ROJANAPHRAUK (Tailandia) dice que le ha complacido saber que la Comisión de Derecho Internacional (CDI) ha progresado en sus trabajos sobre la responsabilidad de los Estados, pero señala que aún debe abordar la cuestión de la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional. Por lo que hace sobre todo al artículo 14 del proyecto (véase A/10010, cap. II, secc. B), relativo al comportamiento de órganos de un movimiento insurreccional, señala que, a tenor del párrafo 2, un Estado puede ser considerado responsable de un comportamiento que, hallándose relacionado con el del órgano de un movimiento insurreccional, deba considerarse hecho de ese Estado en virtud de los artículos 5 a 10. Ahora bien, la delegación tailandesa opina que los artículos 5 a 10 no podrían aplicarse al comportamiento de órganos de un movimiento insurreccional, que en ningún caso puede asimilarse al hecho de un órgano del Estado que actúe en calidad de tal, ya que por definición el movimiento insurreccional se opone al gobierno legítimo, órgano principal del Estado. La delegación tailandesa es plenamente consciente de que esa disposición se ha incluido para que sirva de cláusula de salvaguardia con el fin de evitar toda ambigüedad en el incumplimiento por un Estado de sus obligaciones internacionales. Por esa razón, sugiere que se agregue la frase “a menos que el derecho internacional disponga otra cosa” al final del párrafo 1 del artículo 14. Esa adición abarcaría todas las excepciones al principio de la no atribución a un Estado del comportamiento de un órgano de un movimiento insurreccional.

2. Pasando al proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados (*ibid.*, cap. III, secc. B), el representante de Tailandia dice que comparte la opinión de los miembros de la CDI que mantienen, con respecto al artículo X (Falta de efectos de una sucesión de Estados sobre los bienes de un tercer Estado), que hay que tener únicamente en cuenta el

derecho del Estado predecesor para determinar a quién pertenecen los bienes, ya que los bienes, derechos e intereses del tercer Estado existían antes de la fecha de la sucesión de Estados.

3. En cuanto al proyecto de artículos sobre la cláusula de la nación más favorecida (*ibid.*, cap. IV, secc. B), la delegación tailandesa estima que debería referirse también al trato nacional.

4. Con respecto al proyecto de artículos sobre los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales (*ibid.*, cap. V, secc. B), el representante de Tailandia señala que, ya que la redacción de ese proyecto de artículos se basa en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados¹, se pregunta si procede emplear términos distintos según que se trate de un Estado o de una organización internacional, ya que piensa que esa distinción no haría más que complicar la redacción de los tratados mencionados.

5. La delegación tailandesa no tiene nada que agregar a las observaciones que formuló en el anterior período de sesiones sobre la sucesión de Estados en materia de tratados (1496a. sesión), pero estima que una conferencia de plenipotenciarios, convocada a su debido tiempo, debería encargarse de examinar la cuestión de los tratados multilaterales de carácter universal y la cuestión de la solución de controversias.

El Sr. Njenga (Kenya) ocupa la Presidencia.

6. El Sr. TODOROV (Bulgaria) piensa que, con ocasión de cumplirse el trigésimo aniversario de las Naciones Unidas, debe felicitarse a la CDI por su contribución al desarrollo progresivo y a la codificación del derecho internacional al servicio de la paz y de la coexistencia pacífica. Pero los resultados obtenidos por la CDI no parecen suficientes si se comparan con el dinamismo de la vida internacional. Es cierto que la elaboración de tratados es un arte particular, pero habría que adaptar sus métodos a la rápida evolución de la sociedad internacional. Se pregunta si no sería preferible que la CDI centrara su atención en menos cuestiones, a fin de poder estudiarlas con más rapidez. De esa forma, la Sexta Comisión le aportaría una ayuda sustancial y no se podría reprochar a la CDI la lentitud de sus trabajos.

7. Subrayando la importancia de la codificación del derecho internacional relativo a la responsabilidad de los Estados, señala que la CDI no ha elaborado más que 15 artículos, y sin embargo ese tema figura en su programa

¹ Véase *Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados, Documentos de la Conferencia* (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.70.V.5), documento A/CONF.39/27, pág. 311.

* *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno período de sesiones, Suplemento No. 10.*

desde 1947. A su juicio, habría que definir con más precisión los hechos de los que puede considerarse responsable a un Estado. Habría que hacer una distinción entre las distintas categorías de hechos internacionalmente ilícitos según su gravedad, en particular en lo que respecta al colonialismo, el genocidio y la agresión. Habría que adoptar una definición más precisa que englobara la agresión política, militar y económica, particularmente el bloqueo económico, el saqueo de los recursos naturales y el maltrato de que son objeto los trabajadores extranjeros. Además, cuando un tercer Estado sostiene a un pueblo que lucha para ejercer su derecho a la libre determinación, no incurre en responsabilidad con respecto al régimen colonial y racista que niega ese derecho a aquel pueblo. Por consiguiente, convendría incluir una disposición a tal efecto en el proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados.

8. La delegación búlgara observa con satisfacción que la CDI tiene en cuenta tanto la responsabilidad internacional de los Estados en casos de incumplimiento de una obligación internacional como la importancia concedida por la comunidad internacional a las obligaciones vinculadas con el mantenimiento de la paz y de la seguridad.

9. En cuanto a la cuestión de la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados, la delegación búlgara estima que la CDI debería elaborar un texto único sobre la sucesión de Estados en materia de tratados y sobre la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados. También debería examinar el texto de los artículos 12 *bis* y 32 (véase A/9610/Rev.1, notas 57 y 58), propuestos para su inclusión en el proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados (*ibid.*, cap. II, secc. D), los que no han seguido el procedimiento habitual.

10. La cláusula de la nación más favorecida es un medio importante de mejorar las relaciones comerciales en el mundo, de ampliar la cooperación entre los países y de reforzar la paz y la seguridad internacionales. En lo sucesivo, la CDI debería tener en cuenta las nuevas tendencias progresistas que se manifiestan en el comercio internacional, como las que se expresan en las disposiciones del Acta Final de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, celebrada en Helsinki, relativas a la cooperación en la esfera de la economía, la ciencia, las técnicas y el medio ambiente. En conjunto, la delegación búlgara está satisfecha con el proyecto de artículos, quedando entendido que el proyecto debe basarse totalmente en el principio de la incondicionalidad enunciado en el artículo 8. Firmemente convencida de que ese principio refleja las tendencias dominantes de la doctrina internacional, así como las tendencias irreversibles de la práctica contemporánea, la delegación búlgara celebra la decisión de la CDI. No cabe duda alguna de que el proyecto de artículos sobre la cláusula de la nación más favorecida contribuirá a desarrollar una cooperación ventajosa para todos los Estados sobre la base de la igualdad soberana. El orador agrega que la CDI ha tenido en cuenta en su proyecto la situación particular de los países en desarrollo en las relaciones económicas internacionales contemporáneas.

11. Por otra parte, el artículo 21 del proyecto prueba que las decisiones de las Naciones Unidas, y en particular de la

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), comienzan a recibir expresión concretas en textos jurídicos internacionales. Ese artículo tiene en cuenta diferentes niveles de desarrollo económico, punto sumamente importante para los países en desarrollo.

12. A juicio de la delegación búlgara, interesa redactar con cuidado el proyecto de artículos relativo a los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales, con objeto de tener en cuenta las particularidades que distinguen a las organizaciones internacionales de los Estados. Cuando la CDI prosiga sus trabajos sobre ese proyecto, deberá tener presentes las recomendaciones y sugerencias hechas por los miembros de la Sexta Comisión y prestar atención particular a la cuestión de las reservas, teniendo en cuenta el hecho de que la personalidad jurídica de las organizaciones internacionales sólo existe por la libre voluntad de los Estados.

13. La delegación búlgara celebra los esfuerzos de la CDI para racionalizar la organización de sus trabajos y de sus métodos de trabajo. Para acelerar sus trabajos sobre ciertas cuestiones, conviene que reciba a tiempo las observaciones, opiniones y propuestas de los Estados sobre el punto correspondiente. Convendría buscar el medio de acelerar la comunicación de esas respuestas, y también revisar más a menudo el orden de prioridades de las cuestiones que la CDI está encargada de examinar.

14. El Sr. MONTENEGRO (Nicaragua), refiriéndose a ciertas críticas que se han hecho a la extensión del informe de la CDI, que según algunas delegaciones ha impedido examinar a fondo su contenido, declara que el informe da una idea del sentido de la responsabilidad y la competencia jurídica de los miembros de la CDI. Por su parte, estima que no está en condiciones de hacer sugerencias a la CDI sobre los medios de mejorar sus métodos de trabajo. Además, en última instancia es a los gobiernos a quienes corresponde dar su aprobación al informe de la CDI, que constituye de hecho una especie de base para celebrar consultas. Animado por ese espíritu, dice que sus observaciones tendrán carácter preliminar y general, y que su Gobierno presentará en el momento oportuno sus observaciones sobre los proyectos de artículos elaborados por la CDI.

15. En lo que respecta a la sucesión de Estados en materia de tratados, la delegación nicaragüense aprueba el principio de la "tabla rasa", partiendo de la idea de que todo nuevo Estado debe poder aceptar o rechazar con plena libertad los tratados que haya suscrito el Estado predecesor, de conformidad con los principios de la autodeterminación, la soberanía de los Estados y la libre determinación. Además, la CDI ha establecido un equilibrio entre el principio de la "tabla rasa" y el principio *pacta sunt servanda*. El proyecto de artículos es de gran importancia en un momento en que están naciendo nuevos Estados.

16. Refiriéndose a la cuestión de la responsabilidad de los Estados, que es uno de los temas que más se prestan a la polémica de los que ha estudiado la CDI, declara que su delegación apoya los criterios que sirven para determinar los hechos internacionalmente ilícitos y los órganos cuyo comportamiento da lugar a la responsabilidad del Estado, y suscribe la idea de que el hecho de un Estado sólo se puede

calificar de internacionalmente ilícito si se aplica el derecho internacional. Esa cuestión de la responsabilidad de los Estados, incluida en el programa de la CDI desde hace varios años, pero cuyo examen no ha podido desembocar en la elaboración de un proyecto de artículos por diversas razones, está íntimamente ligada con la violación de las normas de derecho internacional y de las obligaciones internacionales y con los actos ilícitos que pueden ser una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.

17. En cuanto a la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados, la delegación nicaragüense comparte la opinión expresada por la CDI en su proyecto de artículos.

18. Pasando a la cláusula de la nación más favorecida, que efectivamente ha contribuido no solamente al desarrollo de las relaciones comerciales entre los Estados sino también al desarrollo económico, el Sr. Montenegro teme que en el caso de los movimientos de integración, en la América Central por ejemplo, los Estados participantes puedan conceder a terceros Estados el beneficio de la cláusula de la nación más favorecida sólo en casos excepcionales.

19. El Sr. KRISHNADASAN (Swazilandia) da la bienvenida a las delegaciones de Cabo Verde, Mozambique, Papua Nueva Guinea y Santo Tomé y Príncipe.

20. En relación con la sucesión de Estados en materia de tratados, la delegación de Swazilandia celebra la forma progresiva y pragmática con que la CDI ha abordado el tema. A ese respecto, la cuestión fundamental sería, al parecer, la de saber en qué medida los tratados anteriormente aplicables a un territorio lo siguen siendo después de haberse producido un cambio de soberanía en dicho territorio.

21. En lo que respecta a un Estado de reciente independencia, el artículo 15, que dispone que dicho Estado no está obligado *ipso jure* por los tratados celebrados por su predecesor, ni tampoco está obligado a hacerse parte en ellos, se funda en el principio de la "tabla rasa" y tiene debidamente en cuenta el principio de la libre determinación y la igualdad de los Estados. En todo caso, los artículos 16 y 17 confieren al Estado de reciente independencia la facultad de hacer constar, mediante una notificación de sucesión, su calidad de parte o de Estado contratante en cualquier tratado multilateral. Con arreglo al párrafo 2 del artículo 22, la aplicación del tratado multilateral se considerará suspendida desde la fecha de la sucesión de Estados hasta la fecha en que se haga la notificación de sucesión. Ello no obstante, en virtud del artículo 26, el tratado puede aplicarse provisionalmente durante el período intermedio. En cierta forma, esas disposiciones se apartan del principio de la "tabla rasa", pues presuponen una relación jurídica entre el Estado nuevo y el Estado predecesor. En opinión de la delegación de Swazilandia, el artículo 24 enuncia algo evidente, por lo que es superfluo. Los artículos 18, 32 y 36, relativos a la participación en los tratados firmados por el Estado predecesor con sujeción a ratificación, aceptación o aprobación, no parecen necesarios y deben ser suprimidos. En efecto, en el momento de producirse la sucesión de Estados, el Estado predecesor no había contraído ni adquirido con carácter definitivo ninguna obligación o derecho que

podiera transmitir al Estado sucesor. Más aún, de conformidad con decisiones de la Corte Internacional de Justicia y con lo dispuesto en el artículo 14 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, la firma con sujeción a ratificación, aceptación o aprobación no obliga al Estado.

22. Los artículos 11 y 12, relativos a los regímenes de frontera y otros regímenes territoriales, constituyen la principal excepción al principio de la "tabla rasa". Esos artículos representan un esfuerzo loable por parte de la CDI, deseosa de asegurar la paz y la tranquilidad, pero se les puede reprochar que en ellos no se respeten el principio de la libre determinación y el de la igualdad soberana de los Estados, en los que se basa el artículo 15. Las fronteras coloniales se establecieron por razones estratégicas o económicas, sin tener en cuenta consideraciones geográficas o étnicas. El hecho de que en 1964 la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana (OUA) y la Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los países no alineados hayan aprobado sendas resoluciones por las cuales los Estados miembros se comprometieron a respetar las fronteras existentes en el momento en que alcanzaron la independencia, no significa necesariamente que en una futura convención sobre sucesión de Estados en materia de tratados haya que consagrar como norma de derecho internacional una disposición aprobada con miras a lograr la estabilidad en un momento determinado de la historia. Si bien es cierto que el artículo 62 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados dispone que no puede alegarse un cambio fundamental en las circunstancias como causa para dar por terminado el tratado que establece una frontera o para retirarse de él, ese artículo debe interpretarse a la luz de otras normas establecidas de derecho internacional. La Convención de Viena y el derecho internacional consuetudinario prevén que un Estado sólo puede obligarse por un acto voluntario en el que manifieste su consentimiento. Si falta este elemento consensual, no hay razón alguna para que un Estado suceda automáticamente en un tratado que establece una frontera u otro régimen territorial celebrado por el Estado predecesor. El Sr. Krishnadasan no niega en modo alguno la necesidad de los tratados territoriales, pero si hay que formular normas relativas a los regímenes de frontera y otros regímenes territoriales, esas normas deberán tener en cuenta la situación real y estar en consonancia con las normas generalmente aceptadas del derecho internacional.

23. La parte IV del proyecto, titulada "Unificación y separación de Estados", parece basarse en un principio diametralmente opuesto al de la "tabla rasa". No se entiende con claridad qué diferencia puede haber entre un Estado de reciente independencia y un nuevo Estado formado por unificación o separación que justifique el hecho de que el principio de la "tabla rasa" se aplique en el primer caso y no en el segundo. Por lo demás, la CDI ha admitido en el párrafo 3 del artículo 33 que cabe aplicar el principio de la "tabla rasa" cuando el territorio que se separa pasa a ser un Estado en circunstancias que fundamentalmente son del mismo carácter que las existentes en el caso de la formación de un Estado de reciente independencia. En todo caso, la aplicación de esa cláusula puede suscitar dificultades y, habida cuenta de que tanto la unificación como la separación de Estados pueden tener como resultado la creación de personalidades totalmente

distintas, habría sido preferible adoptar desde el primer momento el principio de la "tabla rasa".

24. El artículo 7, que establece el principio de la irretroactividad, parece inútil, por ser un principio general del derecho de los tratados consagrado en el artículo 28 de la Convención de Viena. Además, aquel artículo puede reducir la utilidad del proyecto de artículos respecto de los Estados de reciente independencia, a pesar de la expresión "salvo que se haya convenido en otra cosa". Sería preferible incluir en el proyecto de artículos una disposición en virtud de la cual el Estado sucesor pudiera, si lo desea, declarar que los artículos de que se trata le son aplicables desde la fecha de la sucesión.

25. La delegación de Swazilandia no es partidaria de la inclusión del artículo 12 *bis* que se ha propuesto. Por una parte, el concepto de tratado multilateral de carácter universal es demasiado vago. Por la otra, el Estado de reciente independencia tiene tanto derecho como cualquier otro Estado a ejercer su voluntad y a decidir si quiere llegar a ser parte en un tratado multilateral. Además, algunas convenciones multilaterales, como los convenios humanitarios de Ginebra, son la expresión del derecho consuetudinario como consecuencia de lo cual el Estado de reciente independencia queda obligado por ellas sea o no parte en esas convenciones.

26. En cuanto a la solución de controversias, el procedimiento de conciliación previsto en el propuesto artículo 32 debe ser objeto de un examen detenido. Lo mejor sería que la cuestión fuera resuelta por el órgano encargado de dar forma definitiva al proyecto de artículos.

27. En lo tocante a la cuestión del procedimiento, la delegación de Swazilandia considera que la CDI no tiene por qué volver a examinar el proyecto de artículos. Como éste ha sido concebido como un complemento de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, habría que aprobarlo dándole la forma de una convención. Esa tarea podría confiarse a una conferencia de plenipotenciarios o a la Sexta Comisión. La delegación de Swazilandia está dispuesta a aceptar cualquiera de estas soluciones.

28. Refiriéndose al informe de la CDI sobre la labor realizada en su 27º período de sesiones (A/10010) el Sr. Krishnadasan dice que los artículos 14 y 15 del proyecto sobre la responsabilidad de los Estados plantean varias interrogantes y deben ser reexaminados por la CDI. ¿Se pueden aplicar los mismos criterios, en relación con la responsabilidad por un hecho internacionalmente ilícito, a un movimiento de liberación nacional victorioso que ha liberado a su país del colonialismo y a un movimiento insurreccional que intenta derrocar al gobierno existente? Puesto que el derecho internacional reconoce a los movimientos de liberación nacional el derecho a la libre determinación, ¿no debería incluirse una disposición en virtud de la cual los artículos relativos a la responsabilidad de los Estados no fueran aplicables a las actividades de un movimiento de esa índole? ¿Qué debe entenderse exactamente por movimiento insurreccional? ¿Puede considerarse responsable de un hecho internacionalmente ilícito a un movimiento insurreccional que ha desaparecido por completo? Por último, habida cuenta de la naturaleza misma de

un movimiento de esa índole, ¿puede realmente hablarse de órganos de un movimiento insurreccional?

29. Respecto de la cláusula de la nación más favorecida, la delegación de Swazilandia comparte la opinión expresada por la UNCTAD en su informe titulado "El comercio internacional y la cláusula de la nación más favorecida" ("memorando de la UNCTAD")² en el sentido de que la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida a todos los países, cualquiera que sea su nivel de desarrollo, satisfaría las condiciones de una igualdad formal, pero en realidad entrañaría una discriminación implícita contra los miembros más débiles de la comunidad internacional. Evidentemente, convendría elaborar normas universalmente reconocidas en relación con esa cláusula, pero en esas normas deben tenerse en cuenta las diferencias de nivel de desarrollo económico y de sistemas económicos y sociales. Al respecto, los artículos 18 y 26 de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados (resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General) son de suma pertinencia. Habida cuenta de la desigualdad que existe en las relaciones económicas internacionales, la redacción del artículo 21 es satisfactoria. En todo caso, sería conveniente ir más lejos y establecer una excepción del mismo tipo a la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida en el caso del trato concedido por un Estado en desarrollo a un tercer Estado en desarrollo en el marco de un sistema generalizado de preferencias.

30. En lo que respecta a la cuestión de saber si una cláusula de la nación más favorecida permite al Estado beneficiario aprovechar las ventajas concedidas en el marco de una unión aduanera o de una asociación de Estados semejantes, sería conveniente agregar una norma que excluyera la concesión de esas ventajas en virtud de una cláusula de la nación más favorecida. La aprobación de un artículo similar a la disposición propuesta por un miembro de la CDI, y que se reproduce en el párrafo 70 del comentario al artículo 15, permitiría satisfacer las necesidades de los países en desarrollo y de los Estados desarrollados o no, que desearan cooperar en el ámbito subregional, regional o interregional. Ante la estrecha relación que existe entre la cláusula de la nación más favorecida y la cláusula del trato nacional, procedía mencionar expresamente ambas cláusulas en los artículos que se refieren a ellas, y la delegación de Swazilandia no tiene objeciones a que se amplíe el alcance del proyecto al trato nacional y a la cláusula del trato nacional.

31. Respecto de las observaciones que se han formulado en la Sexta Comisión en relación con el informe de la CDI, la delegación de Swazilandia considera excelente la forma actual del informe. Las informaciones y referencias detalladas que figuran en él están muy lejos de ser inútiles. En todo caso, en vista de la inevitable extensión del informe, convendría que se distribuyera por lo menos un mes antes del comienzo del período de sesiones de la Asamblea General y, de ser necesario, en dos partes, como sugirió el representante del Reino Unido (1548a. sesión). También podría ser útil que la CDI se limitara a estudiar menos cuestiones.

² Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, "Research memorandum No. 33/Rev.1" (en inglés solamente).

32. La delegación de Swazilandia toma nota con satisfacción de la creciente cooperación entre la CDI y otros órganos internacionales que se ocupan de la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional. Además, desea agradecer a todos los gobiernos que han proporcionado becas a juristas de países en desarrollo para que puedan participar en el Seminario sobre derecho internacional, particularmente a los países que han aumentado su contribución. La Sexta Comisión podría estudiar la posibilidad de que las Naciones Unidas sufragaran parte de los costos de ese Seminario.

33. El Sr. MUSEUX (Francia) presenta sus condolencias a la delegación de Turquía por los trágicos sucesos acaecidos en Viena y París.

34. La delegación de Francia ha tomado nota con satisfacción de los resultados del 27º período de sesiones de la CDI y, particularmente, de su decisión de planificar sus trabajos. La delegación de Francia aprueba plenamente los métodos elaborados a ese respecto por la CDI, así como las conclusiones acerca de su programa general de trabajo.

35. Respecto del tema de la responsabilidad de los Estados, el Sr. Museux considera acertado que, por el momento, la CDI se limite a la cuestión de la responsabilidad por hechos internacionalmente ilícitos. En cuanto al fundamento de los artículos que se están preparando, el Gobierno de Francia cree necesario señalar la importancia que atribuye al concepto de daño. Si el artículo 1, según el cual "Todo hecho internacionalmente ilícito de un Estado da lugar a la responsabilidad internacional de éste", debe interpretarse en el sentido de que prescinde de la necesidad de un daño, y si no se mantiene ese requisito fundamental de la responsabilidad, sea con carácter independiente, sea como parte del hecho internacionalmente ilícito, ello podría implicar que toda violación de cualquier obligación internacional da lugar *ipso facto* a una responsabilidad para con toda la comunidad internacional, responsabilidad que cualquier Estado podría invocar o hacer efectiva. En el estado actual de las relaciones internacionales, el Gobierno francés no está dispuesto a reconocer la validez de afirmaciones enunciadas de un modo tan general. Debe, pues, reservarse para un examen más detenido la cuestión de la existencia de un daño como requisito de la responsabilidad. Dicho esto, la delegación de Francia acepta *a priori* las fórmulas propuestas por la CDI, pero no comparte necesariamente todas las afirmaciones que figuran en los comentarios de los artículos.

36. La delegación de Francia toma nota con satisfacción de la labor realizada por la CDI acerca de la cláusula de la nación más favorecida. Si bien es cierto que algunos aspectos suscitan reservas, y a ese respecto la delegación de Francia recuerda la declaración que hizo el representante de Italia en nombre de la Comunidad Económica Europea (CEE) y de sus miembros (1544a. sesión), esas reservas no son de índole específicamente jurídica. Por otra parte, la delegación de Francia se pregunta si se han previsto todas las excepciones consuetudinarias a la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida. Asimismo, en relación con el artículo 16, la delegación de Francia tiene dudas de que las relaciones entre la cláusula de la nación más favorecida y la cláusula del trato nacional sean tan claras como lo considera la CDI. Respecto de las relaciones entre

países en desarrollo, el Gobierno de Francia está de acuerdo con el principio general enunciado en el artículo 21.

37. En lo tocante a la cuestión de la sucesión de Estados en materias distintas de los tratados, el estudio iniciado completará al de la sucesión de Estados en materia de tratados y permitirá apreciar con mayor exactitud su alcance.

38. La delegación de Francia acoge con satisfacción los progresos realizados en el estudio de la cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales, y espera que lo termine rápidamente.

39. El Sr. AL-OTHTMAN (Kuwait), si bien reconoce la importancia fundamental de todas las cuestiones que ha estudiado la CDI en su 27º período de sesiones, se limitará a hacer observaciones acerca de la cuestión de la responsabilidad de los Estados.

40. Para que nazca una responsabilidad internacional, es necesario que se cumplan dos requisitos; primero, que el autor del hecho ilícito tenga personalidad internacional y, segundo, que el hecho cometido sea contrario al derecho internacional. El Estado no es responsable de los hechos que hayan causado daños a terceros en el curso de una insurrección o de una guerra civil, a menos que haya actuado con negligencia. Sólo puede considerarse responsable a un Estado de los actos de un movimiento insurreccional cuando ese Estado reconoce a sus militantes la calidad de militares y siempre que el Estado agraviado haga lo mismo. El Estado es responsable de los hechos ilícitos cometidos por sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones, se hayan o no excedido en su competencia. Los Estados no pueden invocar las disposiciones de su derecho interno para eludir su responsabilidad internacional y, cuando redactan su legislación interna, deben ajustarse a las normas del derecho internacional. También nace la responsabilidad internacional del Estado cuando las decisiones de sus tribunales son contrarias al derecho internacional o cuando ha habido denegación de justicia.

41. El Sr. VANDERPUEYE (Ghana), tras felicitar al Presidente de la CDI por su excelente presentación del informe que se examina, hace hincapié en la elevada calidad de los trabajos realizados por la CDI respecto de cuatro temas innegablemente difíciles, que plantean delicadas cuestiones políticas. Al igual que otras delegaciones, la delegación de Ghana estima que la CDI no debería asumir la tarea de estudiar nuevos temas en los dos próximos años, con el fin de poder llevar a feliz término su actual programa de trabajo. En ese período, su grupo de planificación seguramente habrá concebido métodos de trabajo que permitan conciliar la rapidez con la eficacia. Convendría especialmente que la CDI diera pruebas de más rigor en la redacción de los artículos y que no formulase un mismo principio en forma positiva y negativa simultáneamente. Habida cuenta del volumen del informe que se examina y de la fecha tardía en que se distribuyó, las observaciones de la delegación de Ghana tendrán únicamente un carácter preliminar. Con respecto a la publicación de los informes de la CDI, el Sr. Vanderpueye hace suyas las observaciones formuladas por el representante de Chile en la 1547a. sesión.

42. Por lo que concierne al proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados, la delegación de Ghana no desea formular objeción alguna al plan adoptado por la CDI, es decir, el de limitarse momentáneamente al estudio de la responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos. En cambio, no le parece conveniente que la CDI aborde la cuestión de la solución de las controversias, habida cuenta de la delicada índole de esta cuestión. En cuanto al artículo 15, relativo a la imputación al Estado del hecho de un movimiento insurreccional que se convierte en el nuevo gobierno de un Estado o cuya acción da lugar a la creación de un nuevo Estado, la delegación de Ghana opina que habría que distinguir entre movimientos insurreccionales y movimientos de liberación nacional y que no debería imputarse a los movimientos que luchan por obtener la autodeterminación los actos cometidos contra los regímenes coloniales que no les reconocen ese derecho.

43. La cuestión de la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados, sumamente complicada, complementa la de la sucesión de Estados en materia de tratados. Ambas deberían regirse por los mismos principios, y la segunda no puede regularse definitivamente hasta que no se hayan hecho progresos importantes en el estudio de la primera. Por otra parte, convendría dar a la expresión "materias distintas de los tratados" una definición que no fuera simplemente teórica, sino que reportara una utilidad práctica a los Estados. La delegación de Ghana considera satisfactorio el artículo 9, pero duda de que el artículo 11 sea indispensable, habida cuenta de la existencia de los artículos 5 y 9, aun cuando esa disposición no ofrezca en sí dificultades de fondo. La delegación de Ghana tampoco tiene objeciones que hacer respecto del fondo del artículo X, pero no se pronunciará sobre el texto de esa disposición hasta tanto no se supriman los corchetes.

44. El representante de Ghana advierte con satisfacción que la CDI, en su último período de sesiones, aprobó los artículos 8 a 21 de su proyecto de artículos sobre la cláusula de la nación más favorecida y confía en que pueda finalizarse dicho proyecto en el siguiente período de sesiones. La importancia de ese tema es innegable, sobre todo para los países del tercer mundo. El artículo 21 es esencial para que la cláusula de la nación más favorecida no redunde en perjuicio de los países en desarrollo. Al respecto, la CDI debería también tomar en consideración la evolución reciente del derecho económico internacional cuando reexamine el artículo 21.

45. La delegación de Ghana aprueba la decisión de la CDI de continuar el estudio de la cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales inspirándose en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. La delegación de Ghana se propone formular observaciones a ese respecto en una fase posterior.

46. El Sr. Vanderpuye, acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por la CDI por fomentar la cooperación con los organismos regionales, tales como el Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano.

47. El Sr. HARDY (Observador de la Comunidad Económica Europea), haciendo uso de la palabra por invitación del Presidente, recuerda que en la declaración hecha por

el representante de Italia en nombre de la CEE y de sus Estados miembros sobre el texto elaborado por la CDI sobre la cláusula de la nación más favorecida, ya se dijo que las autoridades de la CEE estaban estudiando las cuestiones planteadas por ese texto. En su calidad de órgano al servicio de la integración regional, la CEE ha intentado eliminar los obstáculos al libre comercio entre sus miembros. Además de sus esfuerzos en pro de la integración interior, la CEE aplica una tarifa exterior común y una política comercial. Por consiguiente, las cuestiones relativas a la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida o del trato preferente en la esfera del comercio son las que derivan de su competencia.

48. El Sr. Hardy señala que la CEE siempre ha aplicado las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT); por este motivo, la CEE concede el trato de la nación más favorecida a las partes contratantes del GATT, si bien ha celebrado también con muchos Estados tratados que contienen una cláusula de la nación más favorecida o de trato preferente. En el caso de los Estados que no son partes del GATT o con los cuales la CEE no ha celebrado tratados de esa naturaleza, la CEE está facultada para aplicar el trato de la nación más favorecida de manera autónoma y ha ejercido en la práctica esa facultad.

49. Por consiguiente, al abordar un texto en el que se prevé la codificación y desarrollo progresivo de la cláusula de la nación más favorecida y de sus variantes, la CEE es consciente de que las cuestiones que se examinan le interesan de manera particular.

50. Por lo que concierne a la práctica seguida por la CEE en esa esfera, el Sr. Hardy indica que la misma ha celebrado acuerdos en que se prevé la concesión del trato de la nación más favorecida o de un trato preferente con más de 60 Estados. Como esos tratados son los principales instrumentos que rigen las relaciones comerciales entre esos países y la CEE, su importancia es evidente.

51. A modo de ejemplo, el orador informa a los miembros de la Comisión de que el 28 de febrero de 1975, 46 países de África, las Antillas y el Pacífico por una parte, y la CEE y sus Estados miembros por otra parte, suscribieron la Convención de Lomé³ por la que la CEE aceptó que sus Estados miembros importasen mercancías de aquellos países en régimen de franquicia, a condición de que ese trato no fuera más favorable que el que se aplicaba entre los propios Estados miembros de la CEE. Los 46 países de África, las Antillas y el Pacífico no estaban obligados a hacer concesiones equivalentes y convinieron simplemente en conceder a las demás partes el trato de la nación más favorecida. Además, para determinar en qué consiste el trato de la nación más favorecida, no se tendrán en cuenta las relaciones comerciales o económicas entre los países de África, las Antillas y el Pacífico entre sí o entre esos países y otros países en desarrollo, es decir, que esos arreglos no se someterán al mecanismo normal de la regla de la nación más favorecida. Así pues, las partes de la Convención de Lomé han establecido un régimen que combina la concesión de un trato individual favorable a los países en desarrollo y la cláusula de la nación más favorecida.

³ Véase A/AC.176/7.

52. Asimismo, refiriéndose al artículo 21, relativo al trato concedido dentro del marco de un sistema generalizado de preferencias, el Sr. Hardy recuerda que, como dijo el representante de Guatemala (1548a. sesión), la redacción actual parece indicar que la cuestión interesa únicamente a los Estados, cuando en realidad la CEE está igualmente interesada, puesto que los Estados miembros de la CEE, individualmente, carecen de la facultad de integrarse en ese sistema o de buscar sus ventajas o renunciar a ellas. Se trata de una cuestión que depende exclusivamente de la CEE. En vista de la importancia del sistema de la CEE para los países en desarrollo que se aprovechan del mismo, parecería conveniente que el artículo tuviera en cuenta además la situación actual.

53. La práctica contemporánea reviste una importancia considerable para el desarrollo del comercio internacional. Sin embargo, como es difícil describir en detalle la práctica de la CEE en materia de tratados, ella se propone presentar a la CDI un documento en el que se exponga su opinión. De momento, la CEE únicamente quiere formular observaciones preliminares, en las que se señalen las razones por las que no está convencida de que el enfoque adoptado en el proyecto de la CDI sea absolutamente satisfactorio y en el que se den algunos ejemplos de la práctica actual que conviene tomar en consideración al respecto.

54. El Sr. KARUHANGA (Uganda), refiriéndose al proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados, señala que la comunidad internacional acepta cada vez más los principios de la interdependencia, la soberanía y la autodeterminación. Por lo que se refiere a los tratados, todo Estado debería poder decidir actualmente por qué tratados tiene intención de verse vinculado. A ese respecto, un nuevo Estado se encuentra en una situación incómoda. Con harta frecuencia, el Estado en cuestión ha atravesado un período difícil bajo la dominación colonial, de modo que únicamente el principio de la "tabla rasa" es digno de un derecho verdaderamente internacional, que no debe seguir consistiendo en el derecho consuetudinario de los Estados europeos. Puede presuponerse que todo lo que hacían los regímenes coloniales redundaba principalmente en su propio interés, luego en interés de sus aliados y sólo eventualmente en interés de los pueblos colonizados. En esos momentos, el orden de preferencia de tales intereses se ha invertido, y el principio de la continuidad *ipso jure*, que proviene del principio *pacta sunt servanda*, no debería continuar rigiendo en esas circunstancias. Por el contrario, el principio de la "tabla rasa" es compatible con el de la autodeterminación y no hay razón para temer que los nuevos Estados abusen de las ventajas que reportan esos principios.

55. La delegación de Uganda abraza dudas sobre la utilidad del propuesto artículo 12 *bis*, relativo a los tratados multilaterales de carácter universal, que parece incluir tratados en los que los nuevos Estados no desearían ser parte por diversas razones. Esa disposición debería suprimirse o modificarse de forma que los nuevos Estados no se vieran vinculados por las disposiciones de esos tratados mientras consideran si les conviene o no aceptarlos.

56. Refiriéndose al informe de la CDI sobre su 27º período de sesiones, magistralmente presentado por su Presidente, el representante de Uganda celebra que, en

materia de responsabilidad de los Estados, la CDI haya decidido no imputar al Estado el comportamiento de los órganos del Estado cuando actúan a título privado. La delegación de Uganda apoya el artículo 11 en la medida en que el comportamiento de personas que no actúan "por cuenta del Estado" debe hacerse extensivo a actividades que no provengan del poder público. No debería aplicarse a las personas que actúan por cuenta de empresas que operan para el Estado, salvo que esas empresas estén en manos del Estado o las personas en cuestión puedan invocar la inmunidad de la función pública ante los tribunales del Estado territorial. Además, es justo que el Estado territorial se responsabilice cuando fomenta o excusa un comportamiento internacionalmente ilícito. En términos generales, un Estado sólo puede responder del comportamiento de los órganos sobre los que ejerce control.

57. En cuanto a la cláusula de la nación más favorecida, la delegación de Uganda no está en condiciones de formular observaciones constructivas, puesto que no ha podido estudiar en su totalidad el voluminoso informe de la CDI, distribuido en fecha tardía. En el futuro, los informes de la CDI deberían ser más breves o distribuirse con suficiente antelación; es cierto que en su último período de sesiones la CDI realizó un trabajo enorme. En opinión del Sr. Karuhanga, la CDI ha tenido sobrados motivos para crear un grupo de planificación encargado de estudiar el funcionamiento de la CDI.

58. El Sr. MAÏGA (Malí) recuerda que, en materia de sucesión de Estados, la doctrina ha venido influida por tres grandes corrientes de pensamiento, a saber, la teoría de la sucesión universal, la de la continuidad y la de la sucesión individual. Algunos Estados han adoptado una u otra de esas concepciones, en tanto que otros han aplicado las tres en casos análogos y en momento distintos. En cuanto a la CDI, ha recurrido a una visión ampliada del problema, habida cuenta de la reciente independencia de nuevos Estados cuya organización social y filosofía política difieren a menudo de las de los Estados que han influido en el derecho internacional clásico. Atinadamente la CDI estima que la codificación del derecho en esa esfera consiste en determinar, en el marco del derecho de los tratados, la repercusión de una sucesión de Estados, teniendo en cuenta los principios de la Carta de las Naciones Unidas. El principio de la "tabla rasa" es el que responde mejor a la noción del derecho de autodeterminación.

59. La aplicación a un territorio recién independizado de tratados internacionales relativos, por ejemplo, al régimen de ese territorio, a las servidumbres territoriales y a los privilegios en la esfera de las inversiones, pondría en tela de juicio la soberanía recientemente adquirida. Al igual que la CDI, la delegación de Malí estima, sin embargo, que el principio de la "tabla rasa" no debe afectar a los regímenes de fronteras y a otros regímenes territoriales. Esa excepción, consagrada en los artículos 11 y 12 del proyecto, se funda en el artículo 62 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, con arreglo al párrafo 2 del cual, "Un cambio fundamental en las circunstancias no podrá alegarse como causa para dar por terminado el tratado o retirarse de él", si el tratado establece una frontera. Esa excepción está consagrada asimismo por la jurisprudencia y por la práctica de los Estados y de las organizaciones regionales e internacionales. Los Estados miembros de la

OUA se han comprometido también, en una resolución aprobada en 1964, a respetar las fronteras existentes en el momento en que alcanzaron la independencia, y la Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los países no alineados aprobó ese mismo año una resolución similar.

60. La supresión de los artículos 11 y 12 podría convertirse en fuente de inestabilidad y de discordia entre los Estados, lo que amenazaría a la paz y la seguridad internacionales. En cambio, la delegación de Malí se opone al propuesto artículo 12 *bis*, con arreglo al cual los tratados multilaterales de carácter universal continuarán en vigor para el nuevo Estado hasta el momento en que éste notifique que da por terminado a dicho tratado por lo que a él concierne. Ahora bien, los tratados de esa naturaleza consagran frecuentemente reglas jurídicas establecidas por la costumbre; algunos pretenden que, de resultados de su carácter consuetudinario, esas reglas deben imponerse a todos los Estados, sea cual fuere la forma de su manifestación, y que un territorio de reciente independencia debería quedar vinculado por todos los tratados internacionales celebrados en su nombre por la antigua Potencia administradora. Esa idea es contraria al derecho internacional actualmente en vigor, que se basa en el consentimiento de las partes. Esa base consensual constituye el fundamento mismo de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. El mismo fundamento se encuentra también en el Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que reconoce la importancia y necesidad del consentimiento, puesto que prevé que la Corte no solamente podrá aplicar las reglas normales del derecho internacional, sino también decidir *ex aequo et bono*.

61. El principio según el cual un Estado no está vinculado más que en la medida en que acepte la fuerza obligatoria de una regla de derecho, ha sido consagrado por la jurisprudencia y especialmente por la Corte Permanente de Justicia Internacional en el caso *Lotus*⁴. En consecuencia, los tratados internacionales de carácter universal no deberían imponerse automáticamente a los nuevos Estados. Muchos de ellos no contienen cláusula de denuncia y, cuando la contienen, el procedimiento de denuncia es frecuentemente largo y complicado o la denuncia es objeto de inadmisibilidad.

62. El proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados no debería remitirse a la CDI, sino someterse a una conferencia de plenipotenciarios.

63. Tras felicitar a la CDI por su informe y a su Presidente por la excelente presentación del mismo, el representante de Malí señala que el proyecto de artículos relativo a la responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos se inspira en gran medida en disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas y en la práctica de los Estados. Sin embargo, convendría precisar que los Estados serán responsables en caso de agresión o de crímenes perpetrados contra los pueblos. A ese respecto, los artículos 5 y 7 deberían complementarse, teniendo en

cuenta el artículo 3 de la Definición de la agresión (resolución 3314 (XXIX), anexo, de la Asamblea General).

64. Por lo que respecta al estudio de la cláusula de la nación más favorecida, la delegación de Malí hace suya la opinión expresada en el "memorando de la UNCTAD", de que la aplicación de esa cláusula a todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo, respondería a las exigencias de una igualdad formal, pero conllevaría una discriminación implícita con respecto a los miembros más débiles de la comunidad internacional. Aunque sea por cierto tiempo, es preciso que la cláusula de la nación más favorecida no se aplique a determinados tipos de relaciones comerciales internacionales. Con respecto al artículo 16, el Sr. Maïga declara que el trato preferente que los países en desarrollo se conceden mutuamente para promover el desarrollo de los menos adelantados no debería en ningún caso hacerse extensivo automáticamente a terceros. El orador espera que la CDI, cuando reexamine el proyecto de artículos, tenga en cuenta las decisiones adoptadas por la Asamblea General en su sexto y séptimo períodos extraordinarios de sesiones sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional.

65. El Sr. VERCELES (Filipinas) felicita a la CDI por los progresos realizados en su último período de sesiones e indica que su delegación aprueba, en sus líneas generales, los artículos relativos a la responsabilidad de los Estados. La CDI atribuye a justo título al Estado el comportamiento de sus órganos, incluso cuando actúan excediéndose de su competencia según el derecho interno. La estabilidad de las relaciones internacionales exige que una vez que una persona o una entidad está facultada para ejercer prerrogativas del poder público, todos sus actos comprometen la responsabilidad del Estado. Por consiguiente, la delegación filipina aprueba los artículos 5 a 10. El artículo 11, que es su ineludible corolario, se refiere al comportamiento de personas que no actúan por cuenta del Estado y que, por tanto, no pueden comprometer su responsabilidad. Igualmente, es lógico que el comportamiento de órganos de un movimiento insurreccional no comprometa la responsabilidad del Estado en el territorio del cual opera, ya que ese comportamiento es de la misma naturaleza que el de los simples particulares. El único caso en que puede comprometerse la responsabilidad estatal, en virtud del artículo 14, es aquel en que el Estado incumple la obligación de vigilancia y de protección que le impone el derecho internacional consuetudinario. La delegación filipina aprueba esa excepción, contenida en el párrafo 2 del artículo 14, pero duda de que la disposición que figura en el párrafo 3 de ese artículo corresponda verdaderamente a la responsabilidad de los Estados. En efecto, dado que los movimientos insurreccionales no poseen una verdadera personalidad internacional, sus derechos y obligaciones son distintos de los de un Estado. Aprueba, en cambio, el artículo 15, que consagra una consecuencia lógica del éxito de un movimiento insurreccional, pero estima que habría que prever una excepción a la imputación al nuevo Estado de los hechos del antiguo gobierno cuando esos hechos estén dirigidos contra la creación del nuevo Estado.

66. La delegación filipina aprueba los principios en los que se basa el proyecto de artículos relativo a la sucesión de Estados en materia de tratados. La aprobación de ese proyecto por la comunidad internacional contribuirá a

⁴ *Publications de la Cour permanente de Justice internationale, série A, No. 10, le 7 septembre, Recueil des arrêts, Affaire du "Lotus"*.

completar la codificación del derecho de los tratados. Ese proyecto constituye una transacción justa entre el principio de la continuidad y el de la “tabla rasa”. No obstante, el principio de la “tabla rasa” debería dejar al nuevo Estado la facultad de decidir ser o no parte en un tratado en el momento de la sucesión. La CDI propone establecer dos excepciones a ese principio; por una parte, en los artículos 11 y 12, relativos a los tratados de fronteras y a otros regímenes territoriales y, por otra parte, en el propuesto artículo 12 *bis*, relativo a los tratados multilaterales de carácter universal. Es posible que los artículos 11 y 12 vayan contra el derecho de la libre determinación y, en algunos casos, contra los intereses de los Estados de reciente independencia que impugnen una frontera que fue establecida por un tratado en el que no participaron. Por otra parte, si esas cuestiones escaparan a la aplicación del principio de la continuidad, la estabilidad de las relaciones internacionales podría resentirse por ello, aunque la delegación filipina no tiene una idea bien decidida sobre los artículos 11 y 12. En cuanto al artículo 12 *bis*, no podrá sino atentar contra el sentido del proyecto mientras no se precise la expresión “tratados multilaterales de carácter universal”. En lo que respecta a la solución de controversias, a que se refiere el propuesto artículo 32, el Sr. Verceles estima que toda convención relativa a la codificación del derecho de los tratados debería prever un procedimiento de solución de las controversias surgidas de su aplicación o de su interpretación. No obstante, esa cuestión podría ser examinada por una conferencia de plenipotenciarios o por la Asamblea General, y no es necesario que la CDI se ocupe de ella. Si una conferencia se reuniera a principios de 1977, los gobiernos dispondrían de tiempo suficiente para estudiar el proyecto de artículos y formular nuevas observaciones escritas.

67. En lo que respecta al estudio de la cláusula de la nación más favorecida, el representante de Filipinas subraya la necesidad de proceder con prudencia. La aplicación incondicional de esa cláusula a todos los países entraña una discriminación contra los países en desarrollo. La aplicación de la cláusula conforme a un sistema generalizado de preferencias debería constituir una excepción. Conviene además tomar particularmente en cuenta los intereses de los países menos desarrollados, de los países sin litoral y de los países insulares, ya que todos tienen urgente necesidad de asistencia y de protección económicas. Además, habría que tener debidamente en cuenta las relaciones entre la cláusula de la nación más favorecida y la cláusula del trato nacional, aunque la última cláusula se encuentre cada vez menos. En un mundo caracterizado por la desigualdad entre los países ricos y los numerosos países pobres, los últimos están en posición desventajosa cuando tienen que negociar y celebrar tratados bilaterales en materia económica.

Expresiones de condolencia por el fallecimiento de dos embajadores de Turquía (conclusión)

68. El Sr. GÜNEY (Turquía) da las gracias a las delegaciones del Reino Unido y de Francia por los sentimientos de condolencia que han dirigido a su delegación con ocasión de los trágicos acontecimientos en los que hallaron la muerte en Viena y París dos brillantes embajadores de Turquía. Su delegación transmitirá sus condolencias al Gobierno turco, así como las que el Presidente de la Sexta Comisión le ha expresado en nombre de sus miembros.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.

1550a. sesión

Martes 28 de octubre de 1975, a las 10.50 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1550

TEMA 108 DEL PROGRAMA

Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 27º período de sesiones (continuación) (A/10010)

TEMA 109 DEL PROGRAMA

Sucesión de Estados en materia de tratados: informe del Secretario General (continuación) (A/10198 y Add.1 a 4, A/19610/Rev.*)

1. El Sr. MHLANGA (Zambia) da la bienvenida a los representantes de Cabo Verde, Mozambique y Santo Tomé y Príncipe y da las gracias al Presidente de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) por su utilísima y lúcida presentación del informe de la CDI (A/10010).

2. Con respecto al proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados (*ibid.*, cap. II, secc. B), dice que es en general aceptable. Ahora bien, el artículo 10 parece demasiado categórico al imputar al Estado el comportamiento de órganos del Estado que actúen excediéndose en su competencia según el derecho interno. Su delegación hubiera preferido que se sustituyera la palabra “considerará” por la palabra “presumirá” en ese artículo. Aunque el texto actual regularía las situaciones en las que la conducta afectada fuera la de órganos tales como empresas multinacionales, es igualmente importante tener en cuenta la posibilidad de que tales empresas multinacionales estuvieran bajo el control de una entidad distinta del Estado correspondiente.

3. En cuanto al artículo 15, relativo a los actos de los movimientos insurreccionales, su delegación preferiría que se estableciera una clara distinción entre los actos de movimientos insurreccionales y los de movimientos de liberación. Los últimos, por ser legítimos, no deberían estar

* Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno período de sesiones, Suplemento No. 10.

sujetos a la responsabilidad internacional subsiguiente. Tal vez podría insertarse un tercer párrafo en el artículo 15, en el que se definieran los movimientos insurreccionales de forma tal que se excluyeran específicamente los movimientos de liberación.

4. Con respecto al proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados (*ibid.*, cap. III, secc. B), dice que a su delegación no le satisface el razonamiento de la CDI en el comentario al artículo 11 en el sentido de que el paso al Estado sucesor de los créditos pagaderos al Estado predecesor no corresponde al tema. Tales créditos podrían muy bien estar íntimamente relacionados con los bienes del Estado tal como se definen en el artículo 5. Debería mantenerse el artículo 11, aunque sería preferible reformular el texto.

5. En cuanto al proyecto de artículos sobre la cláusula de la nación más favorecida (*ibid.*, cap. IV, secc. B), a su delegación le complace saber que la CDI está tomando cada vez más en cuenta el problema que la aplicación de la cláusula crea en la esfera de las relaciones económicas en un mundo integrado por Estados cuyo desarrollo económico es acusadamente desigual. Le agrada observar que, al formular el artículo 21, la CDI ha tenido en cuenta el octavo principio general adoptado en el primer período de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)¹, que estableció, con referencia al tratado de la nación más favorecida, que los países desarrollados deberían otorgar concesiones a todos los países en desarrollo, tuvieran o no litoral. El orador sugiere que la CDI formule y adopte un artículo similar, teniendo en cuenta los problemas de los Estados sin litoral en relación con el ejercicio de los derechos de tránsito al mar y desde el mar. Sería insatisfactorio que el trato relativo a dicha facilidad de tránsito concedido a los Estados sin litoral fuese reclamado por Estados beneficiarios invocando exclusivamente la cláusula de la nación más favorecida. Sugiere que se establezcan disposiciones similares con respecto a los artículos 16 y 17, con objeto de evitar la anomalía de que el trato nacional concedido a los Estados sin litoral con relación a las facilidades de tránsito al mar y desde el mar dé lugar a reclamaciones por parte de Estados beneficiarios invocando exclusivamente la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida.

6. Con respecto al proyecto de artículos sobre los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales (*ibid.*, cap. V, secc. B), le agrada observar que la CDI ha seguido en gran medida las disposiciones de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados² y no ha soslayado el hecho de que las organizaciones internacionales no pueden ser asimiladas a los Estados en la actual fase de desarrollo del derecho internacional.

7. En cuanto al derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, su

¹ Véase *Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo*, vol. I, *Acta Final e Informe* (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 64.II.B.11), pág. 22.

² Véase *Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados, Documentos de la Conferencia* (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.70.V.5), documento A/CONF.39/27, pág. 311.

delegación espera con interés la labor futura de la CDI sobre ese importante tema.

8. Con respecto al proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados (véase A/9610/Rev.1, cap. II, secc. D), al orador le complace observar que la CDI ha basado sus trabajos en el principio de la "tabla rasa". Le complace observar también que la CDI ha tratado de dar efecto a la decisión de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana (OUA) con respecto a las fronteras, en la cual todos los Estados miembros de la OUA se comprometieron a respetar las fronteras existentes al lograr la independencia nacional.

9. El orador apoya la decisión de la CDI de establecer un grupo de planificación en la Mesa Ampliada para estudiar el funcionamiento de la CDI y formular sugerencias con respecto a su trabajo. Es de celebrar la creciente cooperación de la CDI con otros órganos consultivos jurídicos internacionales, así como la continuación de la serie de seminarios sobre derecho internacional, que beneficia a jóvenes juristas de países en desarrollo.

10. El Sr. ROSSIDES (Chipre) observa que la labor de la Sexta Comisión está cobrando cada vez más importancia en la actual era de creciente inseguridad y anarquía internacionales. Es vital avanzar de forma progresiva hacia un orden jurídico mundial, sin el cual nunca podrá haber seguridad o paz internacionales. A ese respecto, la labor de la Sexta Comisión está vitalmente vinculada con los trabajos de la Primera Comisión y es tan importante como éstos. El Presidente de la CDI (1534a. sesión) ha destacado con razón la estrecha relación existente entre la CDI y la Sexta Comisión, ya que ambos órganos son los dos pilares principales del sistema ideado por la Asamblea General para desempeñar la obligación que le impone el inciso a) del párrafo 1 del Artículo 13 de la Carta de las Naciones Unidas de fomentar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. Señalando el papel de la Sexta Comisión de orientar la labor de la CDI, proporcionando una oportunidad a los gobiernos de expresar sus opiniones sobre la dirección y progreso de los trabajos de la CDI y de determinar la forma definitiva para la codificación de un tema, el orador recuerda que la Sexta Comisión tiene la obligación de proceder con rapidez para adoptar las decisiones necesarias relativas a la fase final de codificación, una vez que el proyecto definitivo o el informe haya sido presentado por la CDI. Los proyectos definitivos presentados por la CDI son el resultado de un largo proceso de cuidadoso y equilibrado estudio realizado en ese órgano, que combina la competencia científica con la conciencia política de las realidades de la vida internacional. La Sexta Comisión debería tener en cuenta la necesidad cada vez mayor de un orden jurídico internacional en un mundo en rápida evolución y crecimiento. Por consiguiente, el orador no está de acuerdo con la sugerencia de que el proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados se remita de nuevo a la CDI.

11. Otro caso de tema igualmente importante, si no lo es más, cuyo avance hacia la codificación ha sido suspendido por las Naciones Unidas es el proyecto de código de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad³, al cual su

³ Véase *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexto período de sesiones, Suplemento No. 9*, cap. IV.

delegación concede máxima importancia y cuyo examen fue aplazado desde la aprobación de la resolución 1186 (XII) hasta la preparación de una definición de la agresión. Dado que la Asamblea General aprobó la Definición de la agresión en su vigésimo noveno período de sesiones (resolución 3314 (XXIX), anexo), debería ahora reanudar el examen del proyecto de código de delitos sin más demora en beneficio del orden jurídico mundial y de la seguridad internacional. La Sexta Comisión debería tomar la iniciativa y formular sugerencias concretas con miras a completar el desarrollo progresivo y la codificación del tema, particularmente en un momento en que la agresión, la intervención militar y el uso de la fuerza se están haciendo cada vez más frecuentes en la vida de las naciones, en violación de los más fundamentales derechos de soberanía, integridad territorial e independencia nacional. El proyecto de código de delitos tiene además importancia para el derecho de la responsabilidad de los Estados, que actualmente es el tema de máxima prioridad del programa de la CDI.

12. Una de las cuestiones esenciales que surgirán cuando la CDI continúe su trabajo sobre ese último tema es la de saber si será necesario reconocer la existencia de una distinción basada en la importancia para la comunidad internacional de la obligación quebrantada y, en consecuencia, si el derecho internacional debe reconocer una categoría separada y más grave de hechos internacionalmente ilícitos que podrían describirse como crímenes internacionales. Señalando la importante distinción entre normas "primarias" y "secundarias" en las que la CDI ha basado sus trabajos, el orador dice que su delegación concuerda con la opinión de que el estudio del elemento objetivo del hecho internacionalmente ilícito haría plenamente patente la necesidad de tomar en cuenta el contenido, la naturaleza y el alcance de las obligaciones impuestas al Estado por las normas "primarias" de derecho internacional, y sobre esa base distinguir entre las distintas categorías de obligaciones internacionales. Para poder evaluar la gravedad del hecho internacionalmente ilícito y determinar las consecuencias imputables a tal hecho, habría que tomar en cuenta el hecho de que la importancia concedida por la comunidad internacional a ciertas obligaciones, por ejemplo, las relativas al mantenimiento de la paz, sería de un orden completamente diferente de la concedida a otras obligaciones. A ese respecto, la terminación de los trabajos sobre el proyecto de código de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad ayudaría a aclarar la determinación del grado de gravedad y las diferentes consecuencias imputables a un hecho internacionalmente ilícito. Tal determinación es fundamental para asegurar la viabilidad política del proyecto definitivo sobre el tema de la responsabilidad de los Estados.

13. Al orador le preocupan los indicios aparecidos en recientes debates de la Sexta Comisión que señalan el cambio de actitudes con respecto al valor y la necesidad de trabajar en el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional. Parece existir una corriente subterránea en las aparentemente inocuas y bien intencionadas sugerencias e iniciativas que propugnan retardar el proceso de desarrollo y codificación, como si el derecho internacional moderno que se está desarrollando y codificando con la participación de todos los Estados de reciente independencia hubiera de desempeñar un papel inferior en la

ordenación de la conducta de las naciones en el mundo contemporáneo y futuro. Es de lamentar esa tendencia, ya que afecta negativamente a la importante labor de la CDI y va contra las ideas de la Carta. Acontecimientos tales como la accesión a la independencia de muchos Estados nuevos, los cambios en las relaciones económicas y sociales tradicionales y la revolución científica y tecnológica han demostrado la insuficiencia del derecho internacional creado en el pasado y han probado que solamente el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional llevados a cabo por todos los miembros de la comunidad internacional pueden asegurar la aplicación universal y reforzada de ese derecho como uno de los medios más eficaces de lograr la seguridad internacional y la paz duradera.

14. El orador acoge complacido la sugerencia del representante de Filipinas (1547a. sesión) de que la Asamblea General remita a la CDI la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados y otros instrumentos conexos con objeto de traducir sus disposiciones en una convención jurídica aplicable. Ese llamamiento se hizo en un momento en que las Naciones Unidas se habían convertido en centro de negociación y debate encaminado a establecer un nuevo orden económico internacional. El derecho relativo al desarrollo económico es un tema que afecta a todas las categorías tradicionales del derecho internacional, y su estudio por la CDI supondría reconocer la creciente importancia tanto dentro como fuera de las Naciones Unidas de ese nascente cuerpo de derecho como parte y complemento de los objetivos de las Naciones Unidas formuladas en el preámbulo y en el párrafo 3 del Artículo 1 de la Carta.

15. El orador expresa su constante fe y esperanza en que la Sexta Comisión no quedará a la zaga de los acontecimientos y responderá con renovado vigor a los grandes problemas de la era actual con miras a establecer un orden jurídico mundial en beneficio de los supremos intereses de la comunidad internacional.

16. El Sr. TABIBI (Presidente de la Comisión de Derecho Internacional), hablando a invitación del Presidente, da las gracias a la Sexta Comisión por el aclarador debate que acaba de terminar. Agradece las palabras de elogio expresadas, y considera que las críticas, tales como las relativas a la extensión del informe de la CDI y a su método de trabajo, han sido constructivas.

17. La CDI es el mayor órgano científico de las Naciones Unidas dedicado al derecho internacional, pero su labor tiene también aspectos diplomáticos y, por consiguiente, la contribución de los miembros de la Sexta Comisión, en la que participan como juristas y como representantes de los Estados, es sumamente necesaria. La CDI es plenamente consciente del carácter de sus relaciones con la Sexta Comisión, y cada año formula su programa de trabajo ajustándose a las decisiones de ésta, prestando cuidadosa atención no sólo a las observaciones escritas presentadas por los gobiernos sino también a las opiniones expresadas oralmente en la Sexta Comisión, tal como son transmitidas por el Presidente de la CDI y por los miembros de ésta, que participan en los trabajos de la Sexta Comisión, y tal como aparecen en sus actas resumidas y en su informe sobre el tema. El espíritu de franqueza y de cooperación entre la Sexta Comisión y la CDI ha posibilitado los grandes logros

de las Naciones Unidas en la esfera del derecho internacional en los últimos tres decenios.

18. Aunque carece de autoridad para hablar en nombre de la CDI con respecto a los temas suscitados durante el debate, el orador tratará de resumir esos puntos brevemente. Los miembros de la Sexta Comisión han expresado satisfacción por el progreso realizado por la CDI sobre diversos temas, y también han hecho sugerencias útiles para mejorar más los métodos de trabajo de la CDI. A ese respecto, han visto con aprobación el establecimiento de un grupo de planificación para racionalizar más esos métodos.

19. Con respecto al capítulo II del informe, relativo a la responsabilidad de los Estados, varios representantes han aprobado el plan de trabajo para el proyecto de artículos, que abarca la responsabilidad por el incumplimiento de cualquier obligación internacional. Algunos representantes han destacado la importancia de las obligaciones relativas al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, que serán tenidas en cuenta por la CDI al formular las normas correspondientes, así como también las diferentes categorías de obligaciones internacionales. En términos generales, las disposiciones del proyecto de artículos han recibido apoyo de muchas delegaciones, aunque se han sugerido mejoras y se han expresado diversas opiniones sobre las cláusulas de reserva.

20. La mayoría de los representantes parece que han considerado básicamente acertados los principios que inspiran las normas establecidas en los artículos 10, 11, 12, 13 y 14. Los artículos 13 y 14 no tratan de resolver el problema de la condición y la capacidad jurídica según el derecho internacional de las organizaciones internacionales y los movimientos insurreccionales, sino que más bien presuponen que existe dicha capacidad en los casos concretos en los que se requiera su aplicación. Es evidente que un proyecto dedicado a la responsabilidad de los Estados no puede ampliarse excesivamente con objeto de incluir el tema de los “sujetos de derecho internacional”.

21. Con respecto al artículo 15, algunos han hablado de la no imputación de responsabilidad con respecto a todo acto cometido durante las actividades de un movimiento de liberación nacional. El artículo especifica que ese tipo de conducta es imputable al Estado preexistente y al Estado nuevo cuando el movimiento insurreccional triunfa.

22. Con respecto a la cuestión de los daños mencionada por el representante de Francia (1549a. sesión), el orador desea recordar la posición de principio expresada por la CDI en el párrafo 12 del comentario al artículo 3 aprobado en 1973⁴. En ese comentario la CDI examinó si los daños deberían considerarse un tercer elemento constitutivo de un “hecho internacionalmente ilícito”, además de los elementos de comportamiento atribuible al Estado y de violación de una obligación internacional. La CDI llegó a la conclusión de que el término “daños” comprendía “daños morales” y que los “daños” inherentes a un hecho internacionalmente ilícito eran inherentes a todo incumplimiento de una obligación internacional y, por consiguiente, ya estaban comprendidos en la actual formulación del

Artículo 3. Ahora bien, al llegar a esa conclusión, la CDI no pasó por alto el hecho de que los “daños económicos o patrimoniales” causados por la conducta del Estado pueden ser un factor importante para determinar la forma y cuantía de la reparación de un hecho internacionalmente ilícito, cuestión que pertenece a la segunda fase del plan de estudio aprobado (véase A/10010, párr. 43). A ese respecto, debe agregarse que cuando la finalidad de la obligación internacional correspondiente es impedir que se causen daños, tales como los daños causados a una embajada extranjera o a un extranjero y a sus bienes, la conducta negligente de los órganos del Estado no constituye un incumplimiento real de una obligación internacional a menos que la conducta vaya acompañada de “daños” materiales que el Estado hubiera debido impedir. A menos que eso ocurra, falta el elemento objetivo del “hecho internacionalmente ilícito”. Como se indica en los párrafos 45 y 49 del informe sobre la labor realizada en el 27º período de sesiones, la CDI examinará la cuestión en el capítulo III en la medida en que se refiera a los efectos del proyecto en preparación y trazará las distinciones necesarias entre incumplimiento de una “obligación de comportamiento”, una “obligación de resultado” y una obligación que surja a través de un acontecimiento externo.

23. En el párrafo 10 del comentario al artículo 11, que figura en el informe sobre el 27º período de sesiones, también se distingue entre el problema de la no atribución de las acciones de las personas privadas al Estado y el problema de la determinación de la cuantía de la reparación debida por el Estado en virtud de su propia conducta. En ese párrafo se manifiesta claramente que sólo puede considerarse al Estado obligado a satisfacer una reparación como consecuencia de violaciones de obligaciones internacionales imputables al mismo en virtud del derecho internacional. En dicho párrafo se establece también que, aunque puede tenerse en cuenta el alcance del daño para fijar la cuantía de la reparación, esa cuantía no tiene por qué estar necesariamente relacionada con el “daño económico o patrimonial”. El hecho de que las pérdidas financieras resultantes de acciones cometidas por personas privadas se utilicen a veces como norma para calcular la indemnización que debe pagar el Estado como consecuencia de su propio acto ilícito no implica que el Estado asuma los actos privados como si se tratase de su propia conducta.

24. Aunque generalmente los miembros de la Sexta Comisión han reconocido la importante contribución del Relator Especial en lo que atañe a la responsabilidad de los Estados, algunos han manifestado malestar por la lentitud con que se desarrolla el trabajo de la CDI sobre ese tema. El orador también desea ver acabada lo antes posible la codificación de esa importante cuestión, pero cree que, en esa esfera, el éxito no debe medirse principalmente por el número de artículos aprobados en cada período de sesiones de la CDI o por el tiempo empleado en completar el proyecto. Lo que verdaderamente importa es que los Estados Miembros en general apoyen cada nuevo paso, después de haber entendido plenamente todo lo que supone. Unicamente si se valoran con criterio realista las dificultades planteadas y el tiempo necesario para resolverlas se podrá codificar el derecho relativo a esa materia. En el futuro, tal vez la CDI pueda aprobar unos pocos artículos más en cada período de sesiones, pero no sería razonable esperar un cambio radical y, en cualquier caso,

⁴ *Ibid.*, vigésimo octavo período de sesiones, Suplemento No. 10, pág. 22.

ese cambio no sería aconsejable porque los Estados necesitan más tiempo del habitual para estudiar las trascendentes normas y comentarios que les presenta la CDI. A decir verdad, la mejor forma de evitar que tengan que realizarse nuevas lecturas totales o parciales en la Sexta Comisión y de facilitar el acuerdo mayoritario en el seno del órgano diplomático al que se confía la preparación de un instrumento internacional definitivo consiste en que los Estados realicen un estudio a fondo antes de la segunda lectura. Por lo tanto, el Sr. Tabibi ve con agrado que algunas delegaciones, incluso las que han apoyado sistemáticamente la idea de acelerar la preparación del proyecto de artículos, hayan considerado razonables los objetivos de la CDI. Al respecto, el orador señala que aunque el tema de la responsabilidad de los Estados ya había sido seleccionado como tema de codificación en 1949, la CDI comenzó a estudiar la cuestión en 1963 sobre una base totalmente nueva. Debido a la labor relativa a otras cuestiones, la CDI no inició la preparación del proyecto de artículos hasta 1973, pero desde entonces la tarea sobre la responsabilidad de los Estados se ha ido realizando sistemáticamente y la Sexta Comisión no debería entorpecer los importantes progresos realizados hacia la codificación. No hay que olvidar que todas las tentativas anteriores, tanto en las Naciones Unidas como en la Sociedad de las Naciones, no se tradujeron en un instrumento internacional, y que puede repetirse el fracaso si no se adoptan todas las medidas técnicas adecuadas de salvaguarda diplomática.

25. Acerca del capítulo III del informe, relativo a la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados, los comentarios al artículo 9 ayudarían a la CDI a completar esa importante norma, que ya ha sido aprobada provisionalmente. Por lo que se refiere al artículo X, las opiniones expresadas en la Sexta Comisión confirman la disparidad de opiniones en el seno de la CDI, y parece necesario proceder a un estudio detenido del artículo a la luz de las observaciones de la Sexta Comisión.

26. En cuanto al capítulo IV del informe, sobre la cláusula de la nación más favorecida, muchos representantes han expresado su apoyo en términos generales a los 14 artículos adicionales sobre la cuestión preparados en el 27º período de sesiones. Algunos han convenido con el Relator Especial en que debería abordarse también la cuestión de la cláusula del trato nacional, por su interacción con la cláusula de la nación más favorecida y porque es frecuente que ambas cláusulas aparezcan juntas en los tratados. Por otra parte, algunas delegaciones han apoyado el examen de la cláusula del trato nacional únicamente a condición de que ese estudio no impida la terminación de la primera lectura durante el próximo período de sesiones de la CDI, en tanto que otras han declarado que la cuestión rebasaba el ámbito del mandato de la CDI y, por lo tanto, debería dejarse al margen.

27. Muchos representantes han considerado que la CDI debería ampliar la norma contenida en el artículo 21, a fin de que abarcara los intereses de las naciones económicamente más débiles. La mayor parte de los miembros, incluidos todos los representantes del tercer mundo, han dicho que esa ampliación formaba parte de la legislación sobre el desarrollo, contaba con el apoyo de la opinión pública mundial y se ajustaba a lo dispuesto en las resoluciones 3281 (XXIX) y 3362 (S-VII) de la Asamblea

General y en decisiones del GATT y de la UNCTAD. En opinión de esos miembros, la CDI, en el próximo año, debería examinar las normas contenidas en los instrumentos mencionados a fin de incluir las disposiciones apropiadas en el futuro proyecto de convención.

28. Algunos representantes se han manifestado también partidarios de evitar las cláusulas que subrayan el carácter residual de las normas, tales como la insertada al principio del artículo 16. Los partidarios de las uniones aduaneras y económicas han opuesto fuertes objeciones a la imposición de restricciones a la tendencia a formar ese tipo de asociaciones, pero los partidarios del artículo 15 han señalado que ninguna regla existente reconoce una excepción con respecto a esas asociaciones y que la cuestión debe estudiarse en relación con el artículo 7 y no con el artículo 15. Algunos representantes del tercer mundo han indicado que la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida a todos los países, sin tener en cuenta su nivel de desarrollo económico, conlleva una discriminación implícita contra esos países y aumenta la disparidad entre países ricos y pobres.

29. Los representantes de los Estados sin litoral que participaron en el debate apoyaron sin excepción el artículo 14, a la luz de los párrafos 8 a 10 del comentario sobre ese artículo. Es natural que el derecho fundamental de un Estado sin litoral al libre acceso al mar, que constituye un derecho especial derivado del principio de libertad de la alta mar correspondiente únicamente a dicho Estado por su disposición geográfica, no pueda ser invocado por un tercer Estado en virtud de una cláusula de la nación más favorecida. La CDI estudiará todos esos extremos.

30. Con respecto al capítulo V del informe, que se refiere a la cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales, el orador advierte que los miembros de la Sexta Comisión aprueban el planteamiento adoptado por el Relator Especial y la CDI en el sentido de que el proyecto refleje, cuando proceda, las disposiciones de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, pero que tome también en consideración las características específicas de aquellos tratados.

31. En cuanto a las cuestiones de que trata el capítulo VI, algunas delegaciones han expresado el deseo de que la CDI acelere su labor sobre la cuestión del derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, en tanto que otras han declarado que no deberían alterarse las prioridades establecidas por la Asamblea General en su resolución 3315 (XXIX).

32. Los miembros de la Sexta Comisión que se han referido a ello, han dado su apoyo unánime al intercambio de observadores entre la CDI y los organismos jurídicos regionales tales como el Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano, el Comité Jurídico Interamericano y el Comité Europeo de Cooperación Jurídica, intercambios que han reportado beneficios mutuos a dichos organismos y la CDI. Durante el anterior período de sesiones de la CDI, los representantes de cada uno de los organismos regionales antes citados hicieron valiosas exposiciones, y el orador tiene la intención, conforme a la solicitud de la CDI, de participar en reuniones de esos organismos en un futuro próximo.

33. El Seminario sobre derecho internacional, cuyos propósitos están estrechamente relacionados con el Programa de asistencia de las Naciones Unidas para la enseñanza, el estudio, la difusión y una comprensión más amplia del derecho internacional, fue de gran utilidad para jóvenes juristas de todos los Estados Miembros, incluidos los países del tercer mundo, y el orador anuncia que le satisface que algunas naciones generosas, cuyos representantes han hablado durante el debate, aporten contribuciones adicionales para dicho programa. El Sr. Tabibi apoya la sugerencia del representante de Suecia (1545a. sesión) de que ese programa se incluya en el presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, y espera que los miembros de la Sexta Comisión tomen las medidas adecuadas para llevar a la práctica esa propuesta, ya que el apoyo presupuestario de las Naciones Unidas ayudaría grandemente a dar a los juristas del mundo en desarrollo la formación que necesitan para establecer los fundamentos jurídicos de sus sociedades.

34. Tanto la Sexta Comisión como la CDI podrían desempeñar un papel decisivo en la preparación de los documentos jurídicos relativos al nuevo orden económico internacional y, por lo tanto, el orador conviene plenamente con los representantes, incluido el de Filipinas que han señalado la existencia de lagunas en las decisiones sobre los derechos y deberes económicos de los Estados aprobadas por la Asamblea General, lagunas que requieren la traducción de esos derechos y deberes económicos en reglas jurídicas obligatorias. Esa necesidad es vital habida cuenta de la explosión demográfica, la mayor parte de la cual se está produciendo en el tercer mundo, especialmente en Asia, donde la acuciante necesidad de alimentos, cobijo y asistencia sanitaria plantea un grave problema a la paz mundial.

35. Con respecto al método de trabajo de la CDI y a las propuestas para su mejoramiento, el orador agradece las detalladas y doctas observaciones hechas por los representantes de Noruega, Australia y el Reino Unido (sesiones 1540a., 1541a. y 1548a., respectivamente). En respuesta a las cuestiones planteadas, el Sr. Tabibi señala, en primer lugar, que cada capítulo del informe de la CDI se preparó con arreglo a un criterio especialmente adaptado a dicho capítulo, teniendo en cuenta una serie de factores que varían de tema a tema. Los proyectos basados en principios o reglas bien establecidos no requieren el mismo tratamiento que los proyectos basados en el análisis de la práctica de los Estados. Además, en algunas esferas el derecho internacional es muy rico en precedentes pertinentes, mientras que en otros casos los precedentes no existen o no son tan abundantes. La fase procesal alcanzada en el estudio de un tema determinado es también un factor importante en la presentación del capítulo correspondiente. En términos generales, un capítulo que contenga un proyecto definitivo puede presentarse de una forma más consolidada, lo que permite evitar las repeticiones a veces necesarias en una primera lectura. En segundo lugar, la labor de codificación en el decenio de 1970 no es la que era en el de 1950, cuando la mayoría de los Estados Miembros eran Estados antiguos, que habían participado directa o indirectamente en la formación del derecho internacional. A esos Estados, que poseen una documentación rica sobre la práctica de los Estados, jurisprudencia y doctrina, la información incluida por la CDI en algunos comentarios puede parecer superflua. Sin embargo, no lo es en el caso de

los muchos Estados de reciente independencia que forman las dos terceras partes del número de miembros de las Naciones Unidas. Para los nuevos Estados, las referencias expresas a los precedentes son muy útiles, especialmente para la preparación de sus observaciones orales y escritas a los proyectos de la CDI. Aun cuando el precio sea elevado y el informe voluminoso, la repetición de los antecedentes históricos y los comentarios detallados revisten importancia práctica, ya que todos los Estados tienen derecho a conocer los antecedentes jurídicos de las reglas propuestas por la CDI. Una regla únicamente puede ser codificada de modo que se aplique efectivamente en las relaciones internacionales si cuenta con el apoyo documentado de los Estados. Además, el pleno conocimiento de los precedentes es el mejor modo de facilitar el desarrollo progresivo del derecho y su adaptación a las necesidades actuales de la comunidad internacional. En tercer lugar, las necesidades actuales de los Estados requieren una codificación de ámbito más amplio y de contenido más detallado que antes. Con la creciente presión a favor de una codificación más precisa, los proyectos se han vuelto más largos y más densos, lo que exige, a su vez, comentarios mucho más elaborados, a fin de evitar los malentendidos. Por último, la longitud del informe de la CDI es atribuible también al creciente número de artículos aprobados en cada período de sesiones y, en especial, al hecho de que la CDI está trabajando en varios temas importantes al mismo tiempo.

36. La situación actual no se debe a ninguna iniciativa de la CDI, sino a la recomendación aprobada por la Asamblea General a propuesta de la propia Sexta Comisión. Por ejemplo, durante la preparación del proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados, la CDI abandonó la cláusula de la nación más favorecida y la cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos más organizaciones internacionales, pero posteriormente la Asamblea General recomendó (resolución 2501 (XXIV)) que la CDI reanudase el estudio de ambos temas. También a recomendación de la Asamblea (resolución 2669 (XXV)) se remitió a la CDI y se incluyó en su programa de trabajo el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación. La Asamblea recomendó posteriormente (resolución 3071 (XXVIII)) que la CDI designase a un Relator Especial para ese tema, a pesar de que aún se estaban estudiando activamente otros cuatro temas. Pocos años antes, la Asamblea había recomendado que continuase de manera altamente prioritaria la labor de la CDI sobre la responsabilidad de los Estados y esa recomendación se repitió el año anterior (resolución 3315 (XXIX)); al mismo tiempo, la Asamblea pidió a la CDI que continuase con carácter prioritario la preparación del proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados. Por último, en el actual período de sesiones se ha sugerido en la Sexta Comisión que la CDI dé prioridad a la codificación de los principios englobados en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Todo ello es muy comprensible, habida cuenta del interés de los Estados por realizar progresos en esferas que revisten un interés especial para ellos, pero no todos los Estados están interesados en dar prioridad a los mismos temas. La Sexta Comisión debe reconocer que el resultado inevitable de todo ello es que la CDI no tiene más posibilidad que dividir entre los diversos temas el tiempo de que dispone. Si se considera aconsejable limitar el número de temas que se

estén examinando activamente, corresponde la Sexta Comisión indicarlo a la Asamblea y hacer las opciones necesarias. La Sexta Comisión debe decidir la cuestión de la política de codificación, puesto que es el órgano diplomático al que incumbe el control del proceso de codificación. Naturalmente, la CDI se esforzará por mejorar sus futuros informes, cuando ello sea razonable y posible, sin menoscabar el proceso de codificación. Algunas sugerencias hechas en el curso del actual debate pueden ser útiles y merecen que el grupo de planificación creado por la CDI las considere. No obstante, si los informes de la CDI son más complejos que antes, ello se debe a que la codificación del derecho internacional, como empresa científica y diplomática, es una tarea técnica y política más complicada de lo que era en el decenio de 1950 o bajo la égida de la Sociedad de las Naciones. Todos los miembros de la CDI y de la Sexta Comisión tendrá que trabajar aún más intensamente si se quiere que el *corpus juris* del derecho internacional codificado continúe enriqueciéndose en el futuro como lo ha hecho desde la creación de las Naciones Unidas.

37. En cuanto a la sugerencia de que en el futuro el informe de la CDI se envíe a los Estados Miembros mucho antes, el orador señala que, debido a las obligaciones de los miembros de la CDI, especialmente de aquellos que tienen compromisos académicos y profesionales, es imposible que la CDI cambie la fecha de convocación de su período de sesiones; el proyecto de informe de la CDI siempre está preparado a fines de julio o principios de agosto, pero la traducción y reproducción de un informe de naturaleza tan altamente técnica y científica plantea dificultades si ha de estar listo a finales de agosto para su presentación a los Estados Miembros. La mejor forma de abordar ese problema tal vez sea aplazar el examen del informe a una etapa posterior de la labor de la Sexta Comisión, con lo que se daría a las delegaciones más tiempo para estudiar y asimilar el contenido del informe.

38. El orador desea mencionar también que la Quinta Comisión y sus órganos y funcionarios siguen subestimando la labor de la CDI. La CDI ha tropezado con esa dificultad desde su creación con arreglo al Estatuto elaborado por la Sexta Comisión y aprobado por la Asamblea General. Como quiera que ese Estatuto está vigente, los arreglos administrativos y presupuestarios no pueden hacerse sin tener debidamente en cuenta la letra y el espíritu de sus disposiciones. El Sr. Tabibi recuerda que el año anterior la Dependencia Común de Inspección planteó determinadas cuestiones⁵ sin consultar a la CDI pero que, gracias al apoyo de la Sexta Comisión, la Asamblea apoyó por consenso la posición mantenida por la CDI. En el actual período de sesiones, el Secretario General ha tenido la amabilidad de atender a una solicitud de la CDI y proponer a la Quinta Comisión (véase A/C.5/1677) un pequeño aumento de los honorarios que perciben los Relatores Especiales por la preparación de los informes, honorarios que no se habían modificado desde la creación de la CDI en 1949 y un aumento aún menor de los honorarios de los miembros de la CDI. Sin embargo, la propuesta del Secretario General de un aumento en dichos honorarios ha sido rechazada por la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (véase A/10008/Add.3). El Sr. Tabibi ha enviado una carta en la que explica detalladamente las cuestiones de hecho pertinentes para

información de la Quinta Comisión, pero se le ha dicho que esa carta no se va a distribuir. Se le ha informado también de que, a pesar de la decisión adoptada por consenso en la Sexta Comisión y en la Asamblea General en apoyo de las disposiciones estatutarias relativas a la sede de la CDI (resolución 3315 (XXIX)), en el informe del Comité de Conferencias del presente año se insinúa (véase A/10032, párr. 53) que tal vez se reexamine la cuestión. La decisión del año precedente de la Sexta Comisión y de la Asamblea General debe ser reafirmada y el orador solicita que esta carta sobre los honorarios, que contiene las opiniones de la CDI, se distribuya como documento.

39. El Sr. Tabibi expresa su agradecimiento a la secretaría de la CDI, y dice que se siente satisfecho por el docto debate que ha habido en el actual período de sesiones. Tanto la CDI como la Sexta Comisión están dedicadas a la misma noble tarea de establecer el imperio de la ley, y espera que los próximos 30 años sean aún más fructíferos y satisfactorios en la tarea de fomentar el imperio de la ley en beneficio de la paz mundial y de la felicidad humana.

40. El PRESIDENTE da las gracias al Presidente de la CDI por su ilustrada reseña del debate acerca del informe sobre la labor de la CDI en su 27° período de sesiones. Espera que el Presidente de la CDI transmita las manifestaciones de aprecio de la Sexta Comisión a los miembros de la CDI y les informe sobre las deliberaciones de la Sexta Comisión. En lo concerniente a honorarios, considera que la Sexta Comisión, habida cuenta de la considerable importancia de la labor de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional, tiene la obligación de asegurar que la CDI disponga de los medios para llevar a cabo debidamente su tarea, inclusive de las asignaciones financieras adecuadas que permitan a sus miembros cumplir su misión. La CDI tiene derecho al menos a que se sigan los procedimientos establecidos y a que sus opiniones sean examinadas por los órganos presupuestarios competentes. Propone, en consecuencia, que la Sexta Comisión distribuya como documento de ésta la carta a que ha hecho alusión el Presidente de la CDI y que la envíe a la Quinta Comisión, que es competente para tratar ese asunto.

41. El Sr. FRANCIS (Jamaica) hace suya la propuesta que acaba de formular el Presidente, pero sugiere que se adopten enseguida medidas suplementarias para señalar la opinión de la CDI a la atención de la Quinta Comisión, que está examinando en esos momentos un proyecto de resolución (A/C.5/L.1236/Rev.1) cuyo efecto sería postergar la cuestión de las asignaciones y honorarios para un estudio ulterior. El trato dado a la carta del Presidente de la CDI no sólo es una ofensa personal sino una afrenta a la entera fraternidad jurídica de la Sexta Comisión. Sugiere, pues, que se entablen consultas a la mayor brevedad posibles con miras a llegar a una solución amigable sobre la materia en estudio.

42. El Sr. VANDERPUYE (Ghana) dice que la solicitud del Presidente de la CDI habría tenido más peso si hubiese sido enviada por intermedio del Presidente de la Sexta Comisión en vez de haber sido dirigida directamente a la Quinta Comisión. Concuera con el anterior orador en que la situación constituye una afrenta a la fraternidad jurídica y que hay que proceder con rapidez. A ese fin, insta a los miembros de la Sexta Comisión a que se pongan en

⁵ Véanse A/9795 y Add.1 y 2.

contacto con los de la Quinta Comisión con miras a hallar la manera de adoptar una solución a la solicitud formulada por el Presidente de la CDI.

43. El PRESIDENTE dice que la Sexta Comisión es evidentemente incompetente para tratar los aspectos financieros del tema pero que, sin invadir las prerrogativas de la Quinta Comisión, puede tomar los recaudos necesarios para que, al examinar ese asunto, dicha Quinta Comisión tenga ante sí los hechos pertinentes según fueron presentados por el Presidente de la CDI.

44. El Sr. TODOROV (Bulgaria) expresa que, según interpreta la situación, la Quinta Comisión ha adoptado la posición de que no desea distribuir la carta del Presidente de la CDI; en consecuencia, si la Sexta Comisión decide distribuirla como documento oficial, se puede producir un enfrentamiento no deseado entre las dos Comisiones. Opina, por lo tanto, que sería más adecuado que el Presidente de la Sexta Comisión hablase personalmente con el Presidente de la Quinta Comisión antes de adoptar una decisión respecto de la distribución del documento de que se trata.

45. El Sr. TABIBI (Presidente de la Comisión de Derecho Internacional) conviene con el representante de Bulgaria en que quizás sería adecuado que el Presidente de la Sexta Comisión se dirigiese al Presidente de la Quinta Comisión para discutir la situación.

46. El Sr. FRANCIS (Jamaica) apoya la idea de que los miembros de la Sexta Comisión se comuniquen con los de la Quinta Comisión para tratar de lograr un examen más favorable de la solicitud de la CDI. Si se dejara que unas pocas delegaciones hicieran prevalecer sus criterios sin oposición, podría llegarse a aprobar una decisión basada en premisas falsas.

47. El PRESIDENTE dice que consultará oficiosamente al Presidente de la Quinta Comisión, como se ha sugerido, y espera que, simultáneamente, los miembros de la Sexta Comisión celebren consultas paralelas con los representantes de las delegaciones respectivas en la Quinta Comisión.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

1551a. sesión

Martes 28 de octubre de 1975, a las 15.20 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1551

TEMA 111 DEL PROGRAMA

Cuestión del asilo diplomático: informe del Secretario General (A/10139, parte I y Add.1 y parte II)

1. El PRESIDENTE recuerda que la cuestión del asilo diplomático fue incluida en el programa del vigésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General a solicitud del Gobierno de Australia¹ y que la Asamblea decidió asignar el examen de la cuestión a la Sexta Comisión. Como consecuencia de ese examen, el 14 de diciembre de 1974 la Asamblea General aprobó la resolución 3321 (XXIX), en la que invitaba a los Estados Miembros a que comunicaran sus opiniones sobre la cuestión del asilo diplomático al Secretario General y pedía a éste que preparara un informe en el que figurara un análisis de la cuestión.

2. El Sr. LAUTERPACHT (Australia) señala que, después del intercambio preliminar de opiniones realizado en la Comisión en 1974, se han publicado dos documentos acerca de la cuestión del asilo diplomático. En uno de ellos (A/10131, parte I y Add.1) figuran las opiniones transmitidas al Secretario General por 25 Estados, de conformidad con la resolución 3321 (XXIX) de la Asamblea General. En

el otro (*ibid.*, parte II) figura el informe detallado que preparó el Secretario General de conformidad con dicha resolución y en el que se da una idea general muy completa e interesante de la documentación relativa al asilo diplomático. En 1974, cuando presentó la cuestión del asilo diplomático en un documento de trabajo², la delegación de Australia indicó que sería útil hacer un estudio preliminar de los aspectos humanitarios, jurídicos y de otra índole del asilo diplomático. Al hacerlo, Australia estaba animada exclusivamente por el deseo de difundir una idea que considera útil, esto es, la idea de que una embajada podrá dar refugio a un fugitivo a condición de que, por una parte, no se trate de un delincuente común y sea perseguido por razones o con fines políticos y, por otra, que haya urgencia por el hecho de que la vida de la persona está en peligro, por ejemplo, en caso de disturbios políticos o tumultos. Esa idea se completa con el concepto de que el asilo es temporal y que, oportunamente, el asilado puede salir de la embajada una vez que tenga garantías acerca de su seguridad futura.

3. La institución del asilo diplomático presenta diversos aspectos, el principal de los cuales es el humanitario. La concesión del asilo, que constituye un obstáculo material temporal entre el fugitivo y una situación que se caracteriza por su aspecto extrajurídico, desempeña una función social de utilidad inmediata. ¿Quién no sufre un profundo impacto cuando ve cómo se destruye una vida que podría

¹ Véase *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno período de sesiones, Anexos*, tema 105 del programa, documento A/9704.

² A/C.6/L.992.

haberse salvado o cuando es testigo de sufrimientos que se podrían haber evitado con una protección material inmediata?

4. A ese elemento humanitario se contraponen la soberanía del Estado en el territorio en que se plantea la cuestión del asilo. Es indudable que, en la mayoría de los casos, la concesión del asilo diplomático entraña una cierta injerencia en las facultades que ejerce el Estado en su propio territorio. Con la excepción del caso en que se concede asilo para proteger a una persona de la furia de una multitud que, temporalmente, el Estado no puede controlar, caso en el que el asilo puede considerarse como una ayuda que se brinda a las autoridades del Estado territorial, el asilo diplomático, a diferencia del asilo territorial, entraña una contraposición entre la inviolabilidad de los locales diplomáticos y la indiscutible autoridad del Estado sobre su territorio. En todo caso, esa contraposición no impide que se reconozca cierta validez al concepto del asilo diplomático.

5. Los Estados latinoamericanos han concertado un gran número de convenciones sobre asilo diplomático, lo que demuestra que algunos Estados están dispuestos a subordinar su soberanía a las ventajas reconocidas que presenta el asilo diplomático. Incluso en ausencia de tratados, una práctica concordante de los Estados puede dar origen a normas de derecho internacional consuetudinario sobre la materia, las cuales implican necesariamente una cierta limitación de las facultades del Estado receptor.

6. Sería erróneo pretender que el fugitivo goza de un derecho y que puede exigirse a la misión que le conceda el asilo; las convenciones latinoamericanas, que sin lugar a dudas son las más progresistas en la materia, no reconocen tal derecho. Si las misiones estuvieran obligadas a aceptar fugitivos, a menudo se encontrarían en situaciones insolubles. El concepto de asilo diplomático implica una libertad de acción para la misión.

7. En todo caso, las deliberaciones ya realizadas por la Comisión acerca del asilo diplomático, las observaciones de los gobiernos y el informe del Secretario General indican que ese concepto presenta elementos positivos. En primer lugar, la práctica del asilo diplomático no ha sido privativa de los Estados latinoamericanos en sus relaciones recíprocas sobre una base convencional. Como se recuerda en el informe del Secretario General, han concedido asilo en la América Latina Estados que no eran partes en las convenciones sobre la materia. Ello significa, por una parte, que los Estados latinoamericanos están dispuestos a ampliar el ámbito de aplicación de una institución que algunos han considerado esencialmente latinoamericana y, por otra, que algunos Estados no latinoamericanos están dispuestos a invocar el derecho a conceder asilo. Es menos importante determinar en qué se han basado esos Estados para invocar tal derecho que constatar que ese derecho ha sido invocado y reconocido, y que ni la soberanía del Estado territorial ni la posible inexistencia de normas de derecho internacional han constituido obstáculos insuperables.

8. Pueden citarse varios casos de ese tipo. En 1973, 25 misiones diplomáticas de Estados, no todos ellos partes en convenciones latinoamericanas, concedieron asilo en Santiago a unas 8.000 personas. En el informe del Secretario

General se mencionan sucesos similares, especialmente en relación con las Reglas de Lima, aprobadas en 1865 no por los Estados latinoamericanos únicamente sino por todo el cuerpo diplomático acreditado ante el Gobierno del Perú (*ibid.*, párr. 27). En 1898, las Reglas de la Paz fueron elaboradas de común acuerdo con los jefes de las legaciones del Brasil, los Estados Unidos y Francia en Bolivia. Así pues, un Estado latinoamericano y dos Estados no latinoamericanos elaboraron, sobre una base no convencional, normas aplicables a la concesión del asilo diplomático (*ibid.*, párr. 29). En cuanto a las Reglas de Asunción, éstas fueron elaboradas en 1922 por las misiones diplomáticas de seis Estados latinoamericanos y cinco Estados no latinoamericanos en el Paraguay (*ibid.*, párr. 30), en las circunstancias siguientes: los miembros de un movimiento revolucionario contra el Gobierno del Paraguay que temían por sus vidas habían buscado refugio en las legaciones de Alemania, la Argentina, el Uruguay y el Perú. Se les concedió asilo, de lo cual se informó al Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay. El 3 de junio de 1922, el Ministro de la Argentina, en su calidad de decano del cuerpo diplomático acreditado en el Paraguay, declaró en una reunión de ese cuerpo que era conveniente llegar a un acuerdo colectivo pues, en cualquier momento, podía pedirse a cualquier miembro del cuerpo diplomático que concediera asilo a refugiados que temieran ser objeto de actos de violencia por parte de sus adversarios políticos. Se decidió entonces que si las legaciones concedían asilo, incluso si ellas representaban a países que no eran partes en el Tratado de Montevideo de 1889³, se informaría de ello al Gobierno del Paraguay, en la forma prevista en ese Tratado y la legación que concediera el asilo invocaría su derecho a calificar los hechos y las condiciones de cada caso concreto. La participación del Ministro de Gran Bretaña en esa decisión fue ratificada posteriormente por el Foreign Office.

9. En cuanto a los hechos ocurridos fuera de la América Latina, cabe citar la concesión de asilo diplomático en Madrid en 1936. En esa ocasión, se concedió asilo a refugiados políticos en las misiones de 14 Estados, seis de los cuales eran europeos. Existen además otros ejemplos de concesión de asilo en los locales diplomáticos de Estados que no podrían justificar su actitud sobre la base de un tratado.

10. En todos esos casos, si la concesión del asilo diplomático no puede basarse en el derecho internacional consuetudinario, debe dimanar de la tolerancia del Estado receptor. No obstante, el hecho concreto es que, en muchas ocasiones, se ha concedido asilo en locales diplomáticos, lo que ha permitido salvar vidas y mitigar sufrimientos y no ha perjudicado ostensiblemente las relaciones diplomáticas entre el Estado receptor y las misiones correspondientes.

11. Cabe también recordar los casos en que las misiones diplomáticas han estimado que no podían recibir en sus locales a un fugitivo o garantizar su seguridad, una vez admitidos en sus locales. Esos casos demuestran que no existe una norma de derecho internacional consuetudinario y que, jurídicamente, el Estado territorial tiene pleno derecho a exigir la expulsión o la entrega de los fugitivos.

³ Véase Unión Panamericana, *Tratados y Convenciones Interamericanas sobre Asilo y Extradición*, Serie sobre tratados 34 (OEA Documentos Oficiales, OEA/Ser.X/7), pág. 1.

La Comisión debe preguntarse si la elaboración de normas más precisas en esa materia puede reducir el número de casos en que la denegación del asilo es causa de consternación. Es evidente que cuando existen normas precisas de conducta, los Estados suelen ceñirse a ellas. En ciertos casos, la existencia de tales normas en materia de asilo diplomático podría disuadir a los Estados receptores de presentar protestas y hacer posible que algunas misiones defendieran mejor su comportamiento. Igualmente, la Comisión podría recomendar algunas prácticas, como lo ha hecho a menudo en otras esferas de la actividad internacional.

12. Si la Comisión opta por una acción legislativa común en la materia, el problema consistirá en ponerse de acuerdo acerca de una definición generalmente aceptable del contenido del asilo diplomático. Como se recuerda en el informe del Secretario General (*ibid.*, nota 155), la Argentina tomó una loable iniciativa cuando propuso en la Asamblea de la Sociedad de las Naciones que se elaborara una convención sobre asilo diplomático de carácter no solamente regional sino universal. Esa propuesta no tuvo éxito. Incluso en la actualidad se advierten importantes discrepancias de opinión entre los Estados, tanto en lo que concierne al contenido del concepto de asilo diplomático como a lo oportuno de realizar ahora una labor de codificación o de desarrollo progresivo. De las observaciones de los gobiernos se desprende que incluso los Estados partidarios del asilo diplomático no están totalmente de acuerdo acerca de las circunstancias en que puede concederse el asilo, a excepción de los Estados latinoamericanos. Algunos Estados hacen hincapié en el carácter político de los delitos, mientras que otros ponen de manifiesto la gravedad del peligro que corre el interesado o el carácter excepcional de las circunstancias. Sin embargo, hay unanimidad respecto de un aspecto importante; la limitación de las funciones de la misión diplomática, según se desprende de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas⁴, no es absoluta hasta el punto de impedir que se conceda asilo en los locales diplomáticos. No obstante, varios países estiman que el actual estado de cosas tiene la ventaja de permitir cierta flexibilidad en la práctica. Esa es casi la misma situación que los Estados han indicado estar dispuestos a aceptar en otras esferas del derecho, especialmente el derecho del mar. Si se dejan en términos imprecisos ciertas normas jurídicas, se evita que los Estados se vean obligados, por razones de prudencia, a negarse a aceptar soluciones que considerarían inaceptables si tuvieran el valor de normas, pero que podrían seguir constituyendo la expresión de una práctica generalmente tolerada.

13. A la inversa, se puede aducir que si no se procura codificar o desarrollar las normas jurídicas relativas al asilo diplomático, éstas no tendrán jamás el carácter de normas consagradas de derecho internacional consuetudinario. Esa es la posición del Gobierno de Australia. La notable mayoría con que se aprobó la resolución 3321 (XXIX) se explica básicamente por el deseo de examinar y debatir la cuestión. Ello no implica el deseo de codificar o desarrollar progresivamente el derecho correspondiente ni significa que los partidarios de la elaboración de algunas normas se

pongan de acuerdo respecto de su contenido preciso. Al tratar de promover el concepto de asilo diplomático, no debe obstaculizarse la práctica de la concesión de asilo en locales diplomáticos, bastante frágil ya fuera de la América Latina. En todo caso, la delegación de Australia considera que el asilo diplomático, como institución humanitaria, cuenta con un considerable grado de apoyo. Si se debate públicamente la cuestión, será posible comprender mejor muchos problemas vinculados con ella. Habrá menos tendencia a considerar la cuestión del asilo como una afrenta política al Estado receptor o como una denegación de su soberanía territorial.

14. La cuestión del asilo sigue estando incluida en la lista de temas que debe estudiar la Comisión de Derecho Internacional (CDI). El estudio de la cuestión del asilo territorial ha progresado en otros foros distintos de la CDI, pero el del asilo diplomático sigue estando en suspenso. Por ello, si el actual debate no conduce a nada concreto, la CDI no debe olvidar la cuestión. Por otra parte, el desarrollo del derecho internacional, al menos en esa esfera, no depende necesariamente de la elaboración de un tratado multilateral o de una declaración colectiva. Un Estado siempre puede declarar unilateralmente que está dispuesto a permitir que las misiones diplomáticas extranjeras en su territorio concedan asilo diplomático con sujeción a ciertas condiciones. La delegación de Australia considera que la institución del asilo diplomático ya está reconocida en el derecho internacional, pero admite también que existen diferencias de opinión en cuanto a su legalidad y alcance. Si el actual debate no conduce a ninguna declaración colectiva acerca de la utilidad práctica del asilo diplomático, cada Estado puede considerar si, para el desarrollo de ese derecho, serían útiles las declaraciones unilaterales de intención que, por lo menos, tendrían validez entre el Estado que las formula y las misiones diplomáticas extranjeras situadas en su territorio.

15. El orador destaca que en el informe del Secretario General se indica que la posición oficial de un Estado en relación con el asilo diplomático no coincide necesariamente con su actitud de hecho. El orador expresa la esperanza de que, en el próximo debate, los Estados Miembros no permitan que un exceso de prudencia les impida dar libre curso a su simpatía instintiva por todos los oprimidos.

16. El Sr. GODOY (Paraguay) dice que en primer lugar hay que identificar el objetivo del asilo diplomático, así como el ámbito físico y geográfico de su aplicación. Debe precisarse, pues, que el asilo diplomático responde exclusivamente a un deseo humanitario de asegurar la protección de una persona cuya seguridad o integridad se halla en inminente peligro por motivos o delitos políticos. En cuanto al ámbito de aplicación del asilo diplomático, el orador indica que esa institución debe aprovechar la arcaica ficción jurídica de la extraterritorialidad de los locales diplomáticos o de los buques de guerra extranjeros situados en aguas jurisdiccionales del Estado territorial; eso último es lo que diferencia el asilo diplomático del asilo territorial. Dado que la calificación de la naturaleza de los actos susceptibles de poner en funcionamiento el asilo diplomático es marcadamente subjetiva, la mayor parte de los países ha considerado con recelo el reconocimiento de esa institución como un principio general del derecho inter-

⁴ Naciones Unidas, *Recueil des Traités*, vol. 500, No. 7310, pág. 162.

nacional y no ha aceptado darle el carácter de norma positiva del derecho internacional en forma de convenciones de carácter universal. Sin embargo, en la América Latina, el problema de la calificación ha debido someterse a las consideraciones humanitarias inspiradas en el derecho de asilo tradicional reconocido por el *jus gentium* a los perseguidos por razones religiosas.

17. El hecho de que esa institución sea latinoamericana por excelencia no significa que no sea reconocida o practicada en otras regiones del mundo, aunque, en general, dentro de límites más estrechos.

18. La delegación paraguaya está intrigada por el hecho de que, a pesar de la tendencia actual hacia la integración, la interdependencia, la codificación y la solidaridad internacional, algunos Estados sigan oponiendo los principios de la soberanía y de la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados a las gestiones puramente humanitarias, mientras que violan esos mismos principios al tratar de exportar ideologías de carácter social, político o económico.

19. El derecho de asilo no debe someterse a razonamientos ni prácticas selectivas o discriminatorias; la persona humana, como entidad política, necesita de esa institución que todos los Estados deben reconocer y respetar. Por ello, la delegación paraguaya desea expresar su reconocimiento a la delegación de Australia, a cuya iniciativa se debe la inclusión del tema que se examina en el programa de la Sexta Comisión. Se congratula igualmente del informe preparado sobre la cuestión en cumplimiento de la resolución 3321 (XXIX) de la Asamblea General.

20. Únicamente los países de la América Latina han aprobado en esa esfera instrumentos internacionales que hoy están en vigor y constituyen, por consiguiente, una de las fuentes principales del derecho internacional americano. En otros continentes, algunos países han aplicado normas supletorias (el derecho consuetudinario internacional, las leyes nacionales, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho de gentes). El Paraguay es actualmente el único Estado parte en todos los tratados y convenciones aprobados en la América Latina en materia de asilo político o diplomático. Además, ha respetado siempre esa institución, sea como Estado de asilo o como Estado territorial. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, la calificación subjetiva de la naturaleza del acto cometido y la observancia de las normas que regulan el funcionamiento de la institución plantean un problema, lo mismo que, desde el punto de vista humano, la gravedad y la inminencia del riesgo que corre el refugiado o asilado. La calificación del acto, así como la concesión del asilo, competen exclusivamente a los jefes de misión del Estado extranjero. Esa solución, que atribuye la calidad de juez a una sola de las partes involucradas en un eventual conflicto que por otra parte parece atentar contra los principios de la soberanía y de la jurisdicción del Estado territorial, pone de relieve la finalidad humanitaria de esa institución. En efecto, es tal la preocupación por la seguridad del asilado, que mientras exista la menor duda sobre la suerte que pueda correr fuera de los locales de la misión, el jefe de misión tiene el deber de proteger al asilado hasta que elementos fidedignos de juicio le permitan adoptar decisiones definitivas con respecto a él.

21. La responsabilidad del jefe de misión para con el asilado es delicada; sin embargo, la obligación que le incumbe de observar estrictamente las disposiciones jurídicas del Estado anfitrión, así como el principio de la no injerencia en sus asuntos internos, no es menos seria. Por esa razón, la misión diplomática que recibe una solicitud de asilo debe informar de inmediato a las autoridades competentes del Estado territorial, a fin de que puedan ejercitar sus derechos y obligaciones. En otras palabras, tanto la concesión como el rechazo del asilo entrañan consecuencias jurídicas para el Estado territorial y para el Estado que otorga el asilo, así como para el propio asilado.

22. El derecho humanitario forma parte del derecho internacional convencional desde hace unos 100 años y es actualmente la subsistencia de varios temas incluidos en el programa de la Asamblea General, así como en el de otras organizaciones internacionales o conferencias especializadas; el asilo, que es un elemento de ese derecho humanitario, debería ser reconocido y practicado por todos los Estados y no ser relegado a la categoría de institución regional. Los valores que esa institución protege no tienen fronteras físicas ni metafísicas y todos los hombres libres pueden necesitarla, y deben poder disfrutarla llegado el caso. El desconocimiento de la institución del asilo diplomático, así como la del asilo territorial, puede significar la negación de los valores humanos que trata de proteger.

23. La delegación paraguaya rechaza como contrario a la esencia del asilo diplomático todo intento de utilizar esa institución con propósitos no humanitarios. Así, la práctica de crear un número artificialmente alto de pretendidos asilados en misiones diplomáticas extranjeras con el único objeto de desprestigiar, por razones políticas internas, al gobierno del país anfitrión, contradice la finalidad de la institución.

24. La delegación paraguaya apoyará cualquier medida o recomendación sobre la continuación del estudio y del análisis de la cuestión del asilo diplomático, en el marco del desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional.

25. El Sr. BOJILOV (Bulgaria) dice que, antes de entrar a examinar el tema titulado "Cuestión del asilo diplomático", conviene hacer una distinción clara entre el asilo diplomático y el asilo territorial. Pese a algunas diferencias de opinión en cuanto a la interpretación del concepto, el asilo territorial se considera como una institución de derecho internacional. Sin duda ésa es la razón de que la Asamblea General aprobara por unanimidad la Declaración sobre el Asilo Territorial (resolución 2312 (XXII)). El Gobierno de Bulgaria concede ese asilo en virtud de las disposiciones del artículo 65 de su Constitución, y las personas que se acogen a él disfrutan de las mismas libertades y los mismos derechos que los ciudadanos búlgaros. En cambio, a juicio de su delegación, el asilo diplomático no es una institución de derecho internacional, porque no existe ni derecho escrito ni derecho consuetudinario sobre la materia, aceptado generalmente. El informe del Secretario General confirma además esa conclusión.

26. El reconocimiento y la concesión del asilo diplomático constituyen, en esencia, una práctica regional latinoamericana. Esa práctica de los Estados latinoamericanos se basa

en algunas convenciones: la Convención de La Habana de 1928 sobre asilo⁵, la Convención de Montevideo de 1933 sobre asilo político⁶ y la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático⁷. Sin embargo, cabe advertir que el objeto de esas convenciones es limitar, y no estimular, la práctica de la concesión del asilo diplomático. Es significativo el hecho de que en virtud de tratados que han sido ratificados por el mayor número de Estados latinoamericanos, a saber, la Convención de 1928 de La Habana y la Convención de 1933 de Montevideo, el derecho a conceder el asilo diplomático esté condicionado a la existencia anterior de un uso o de convenciones o leyes sobre la materia. Los tratados que prevén ese derecho en forma absoluta no han sido ratificados por todos.

27. Aunque comprende la firmeza de las tradiciones latinoamericanas y las consideraciones humanitarias en que se basa la iniciativa de Australia, la delegación búlgara considera que no sería prudente hacer extensiva a todo el mundo una práctica básicamente regional. La concesión del asilo por una misión diplomática implica una derogación importante de la soberanía del país receptor y constituye una especie de injerencia en sus asuntos internos. Por lo demás, el fallo dictado por la Corte Internacional de Justicia en la cuestión entre Colombia y el Perú⁸ sigue esa orientación. Por otra parte, la delegación búlgara considera que el derecho de otorgar el asilo diplomático es incompatible con los principios generalmente reconocidos del derecho diplomático y consular, en particular el párrafo 1 del artículo 41 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y el párrafo 2 del artículo 55 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares⁹.

28. Cuando la CDI examinó la cuestión del asilo diplomático en el marco de su labor sobre el proyecto de artículos relativos a las relaciones e inmunidades diplomáticas, que posteriormente pasó a ser la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, decidió omitir toda referencia a la cuestión del asilo en el artículo sobre la inviolabilidad de los locales. Sin embargo, decidió incluir en el párrafo 3 del artículo 40 del proyecto, que pasó a ser el artículo 41 de la Convención, una cláusula para salvaguardar el ejercicio del asilo con arreglo a acuerdos especiales vigentes entre el Estado acreditante y el Estado receptor. Cabe hacer notar que en el párrafo 4 de su comentario a ese artículo¹⁰, la CDI precisó, en particular, que "los locales de la misión no han de ser utilizados más que para los fines legítimos a que estén destinados. La falta de cumplimiento de ese deber no deroga la regla del artículo 20, relativa a la inviolabilidad de los locales de la misión; pero, por otra parte, dicha inviolabilidad no autoriza a utilizar los locales de la misión de un modo incompatible con las funciones de la misión". En el preámbulo de la Convención se estipula que el propósito de

los privilegios e inmunidades diplomáticas es garantizar el desempeño eficaz de las funciones de las misiones, y en el artículo 3, que las funciones de esas misiones consisten principalmente en fomentar las relaciones amistosas entre el Estado acreditante y el Estado receptor. Ahora bien, es evidente que la concesión del asilo diplomático no puede sino afectar el desempeño de las funciones de las misiones, porque implica el riesgo de provocar un deterioro de las relaciones entre los Estados interesados. Además, como lo señala S. Prakash Sinha en el capítulo X de su obra *Asylum and International Law*¹¹, el concepto de la extraterritorialidad de los locales diplomáticos no puede servir de fundamento al asilo diplomático porque ya no es aceptado como principio sobre el cual se apoyan las prerrogativas diplomáticas. Se ha otorgado asilo diplomático, y tal vez se otorgue todavía en casos extremos, pero la práctica de los Estados no permite llegar a la conclusión de que existe una costumbre internacional que autorice tal práctica.

29. El Sr. CASSESE (Italia) dice que la delegación de Italia ha examinado con interés el informe del Secretario General sobre la cuestión del asilo diplomático, así como las observaciones transmitidas por algunos Estados en cumplimiento de la resolución 3321 (XXIX) de la Asamblea General. Cabe felicitar a la delegación de Australia, que planteó esta cuestión en el anterior período de sesiones de la Asamblea General. Merced a esa iniciativa, los Estados intercambiaron provechosamente pareceres sobre esa cuestión controvertida. Los documentos de que dispone la Comisión demuestran que hasta ahora no se ha elaborado ninguna norma consuetudinaria internacional de alcance mundial en lo que respecta al asilo diplomático, aunque algunos Estados consideren que puede otorgarse en circunstancias urgentes y excepcionales, con fines humanitarios. En efecto, por una parte, un gran número de Estados, como los Estados socialistas y muchos Estados africanos y asiáticos, se oponen radicalmente a la concesión del asilo diplomático. Por otra parte, aun los Estados, distintos de los de la América Latina, que favorecen la concesión del asilo diplomático en casos excepcionales y por razones humanitarias, no están dispuestos a precisar las condiciones necesarias para que pueda ser solicitado u otorgado, sino que desean conservar amplia libertad de acción en esa esfera. No se ha llegado a ningún acuerdo en lo que respecta a la cuestión de saber si el derecho de calificación corresponde al Estado asilante o al Estado territorial, y la práctica de los Estados no ofrece ninguna respuesta clara sobre el particular. Así pues, la única conclusión posible es que el asilo diplomático no puede considerarse una institución generalmente aceptada del derecho internacional. Por otra parte, esa conclusión se halla confirmada por el hecho de que incluso Estados como el Canadá, Dinamarca y Francia, principalmente, que tienden a reconocer la legitimidad del asilo diplomático en algunos casos, han indicado que, a su juicio, no hay una norma consuetudinaria sobre la materia.

30. Italia figura entre los países que consideran que el asilo diplomático debe concederse en casos de extrema urgencia, cuando la vida de las personas está en grave e inminente peligro o cuando se violan de una manera burda y flagrante los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales. No obstante, el Gobierno italiano estima que los

⁵ Véase Unión Panamericana, *Tratados y Convenciones Interamericanas sobre Asilo y Extradición*, Serie sobre tratados 34 (OEA Documentos Oficiales, OEA/Ser.X/7), pág. 27.

⁶ *Ibid.*, pág. 47.

⁷ *Ibid.*, pág. 81.

⁸ *Affaire colombo-péruvienne relative au droit d'asile, Arrêt du 20 novembre 1950: C.I.J. Recueil 1950*, pág. 266.

⁹ Naciones Unidas, *Recueil des Traités*, vol. 596, No. 8638, pág. 392.

¹⁰ Véase *Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimo-tercer período de sesiones, Suplemento No. 9*, cap. III, secc. II.

¹¹ Publicado por Martinus Nijhoff, La Haya, 1971.

Estados deberían tener la máxima libertad para determinar, en cada caso particular, si conviene o no otorgar asilo. En consecuencia, sería inoportuna la formulación de una declaración general o de una convención en la materia. La inclusión de la cuestión del asilo diplomático en el programa de la Sexta Comisión ha sido útil, en el sentido de que ha posibilitado un esclarecimiento. Logrado eso, parece inútil que la Comisión vuelva a examinar el tema el año próximo. Sin embargo, dado el limitado número de Estados que han transmitido sus observaciones en cumplimiento de la resolución 3321 (XXIX), tal vez conviniera renovar la invitación a los Estados Miembros para que transmitieran sus opiniones al Secretario General. Si tal es el parecer de la mayoría, la delegación de Italia se sumará a ella, pero a condición de que se entienda que el único objeto de esa invitación es reunir más información y que la materia no sea objeto de una codificación internacional.

31. El Sr. SADI (Jordania) agradece a la delegación de Australia su iniciativa de incluir la cuestión del asilo diplomático en el programa de la Asamblea General y las explicaciones que ha dado respecto del informe del Secretario General. La delegación de Jordania estima que, si se desea evitar controversias entre los Estados, la cuestión no puede quedar en suspenso. Todo esfuerzo que se realice para legislar sobre esa cuestión no puede sino contribuir al mejoramiento de las relaciones internacionales. Algunos consideran que la cuestión del asilo diplomático interesa únicamente a los países de la América Latina. Jordania no opina lo mismo y recuerda al respecto que otros países lo han practicado. Además, habida cuenta de que los países latinoamericanos mantienen embajadas y misiones en muchas capitales, se trata de una cuestión que interesa a todos los Estados.

32. El Sr. GOBBI (Argentina) declara que su país ha sentido siempre gran simpatía por la institución del asilo diplomático, que apunta a proteger a la persona humana en tiempos de conmoción y de violencia. Al respecto, desea precisar los fundamentos jurídicos de esa institución, y recuerda que anteriormente se basaba en el principio de la extraterritorialidad. Al desaparecer esa ficción del derecho internacional en vigor, algunos países de la América Latina han aprobado varias convenciones; el orador agrega que muchos países que no han ratificado la Convención de Caracas han aplicado de hecho sus disposiciones en la práctica. El otorgamiento de asilo tiene consecuencias en el plano interno, es decir, para la estructura jurídica del Estado territorial; en efecto, un problema que habitualmente correspondería a la jurisdicción interna del Estado puede, en virtud de esa norma internacional, corresponder al derecho de gentes. Por ello es difícil hablar de una injerencia en los asuntos internos del Estado, puesto que es el Estado territorial mismo el que, al aceptar esa norma internacional, habilita al Estado extranjero para intervenir

en esferas que corresponderían normalmente a su jurisdicción. Del mismo modo, no puede hablarse de una violación de la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, puesto que el hecho de utilizar los locales de una embajada para dar asilo se basa en fundamentos jurídicos tan válidos como en el caso de las actividades propias de la misión.

33. Ha sido preciso buscar un fundamento jurídico para esa institución, porque el Estado que otorga el asilo goza de gran poder, en la medida en que está en condiciones de calificar unilateralmente el acto que pone en marcha el mecanismo del derecho de asilo. El Estado que otorga el asilo se enfrenta con el problema de la calificación del delito, ya que existen delitos políticos objetivos y subjetivos, y puede suceder que un delito de derecho común, cometido con una finalidad política, adquiera en definitiva carácter político. Además, entran en juego otros fenómenos y, del mismo modo que en el caso de la responsabilidad de los Estados cabe distinguir entre las simples insurrecciones y los movimientos de liberación, es preciso hacer una distinción entre los delitos progresivos y los regresivos, los cuales no tendrían las características de un delito político. Pero el Estado que otorga el asilo se enfrenta con un segundo problema aún más grave, en la medida en que debe calificar la urgencia, es decir, en el fondo, pronunciarse sobre la situación de un país en el plano constitucional y sobre el funcionamiento de sus tribunales, ya que es bien evidente que el asilo no entraría en juego en el caso de un delincuente político que tuviese a su disposición todos los recursos que le permiten defenderse normalmente. El hecho de que un jefe de misión pueda pronunciarse sobre la capacidad o la incapacidad de los tribunales de un país para administrar justicia puede despertar la sensibilidad política de ese país, pero ese problema no se plantea en la América Latina, donde reina un clima fraternal.

34. El orador expresa su preocupación por la tesis aparentemente paradójica expuesta por algunas delegaciones, según las cuales conviene mantener esa institución, pero en una situación de irregularidad. En efecto, si se otorga el asilo sin fundamento jurídico, se infringe efectivamente la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y se contraviene el régimen penal del Estado territorial.

35. En opinión de la delegación argentina es necesario proseguir el examen de esa cuestión, ya que el problema no se resolverá afirmando que el asilo viola la soberanía territorial del Estado, sino determinando si es o no conveniente crear normas en esa esfera. El orador agrega que no entiende el razonamiento de las delegaciones que subrayan el carácter humanitario de esa institución, sin sugerir al mismo tiempo ninguna solución adecuada para darle un fundamento aceptable en derecho internacional.

Se levanta la sesión a las 16.50 horas.

1552a. sesión

Miércoles 29 de octubre de 1975, a las 10.55 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1552

TEMA 111 DEL PROGRAMA

Cuestión del asilo diplomático: informe del Secretario General (continuación) (A/10139, parte I y Add.1 y parte II)

El PRESIDENTE, observando que no hay oradores inscritos para hablar sobre el tema que se examina, dice que espera que la Comisión completará el 4 de noviembre su debate sobre el asilo diplomático y anuncia que la lista de oradores se cerrará al finalizar la próxima sesión, que se celebrará el 30 de octubre por la tarde.

Se levanta la sesión a las 11 horas.

1553a. sesión

Jueves 30 de octubre de 1975, a las 15.20 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1553

TEMA 111 DEL PROGRAMA

Cuestión del asilo diplomático: informe del Secretario General (continuación) (A/10139 parte I y Add.1 y parte II)

1. El Sr. BUBEN (República Socialista Soviética de Bielorrusia) recuerda que en el vigésimo noveno período de sesiones su delegación subrayó (1510a. sesión) la complejidad y las contradicciones internas que caracterizan la cuestión del asilo diplomático, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista del derecho internacional, y expuso las razones por las que no estaba convencida de que fuese oportuno examinar la cuestión en aquella etapa. El informe del Secretario General (A/10139, parte II) ha venido a confirmar su opinión.

2. El principio de extraterritorialidad de los locales diplomáticos, en el que se basó la práctica del asilo diplomático hasta mediados del siglo XIX, fue rechazado como un atentado contra la soberanía del Estado receptor. Cuando el Consejo de la Sociedad de las Naciones examinó ese asunto, el representante de la URSS subrayó que ni el derecho internacional ni la práctica internacional permitían llegar a la conclusión de que el asilo diplomático era una institución reconocida universalmente. Tampoco es por casualidad que no hayan adoptado una decisión sobre esa cuestión ni la Asamblea General ni la Comisión de Derecho Internacional. A diferencia del asilo territorial, el asilo diplomático es un atentado contra la soberanía del Estado en cuyo territorio se practica y una injerencia en sus asuntos internos, y tanto el principio de la soberanía de los Estados como el de la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados están

consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en numerosos documentos aprobados en el marco de la Organización.

3. Algunas delegaciones partidarias del asilo diplomático han invocado como argumento la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas. No obstante, en el artículo 3 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas¹, en el cual se precisan las funciones de dichas misiones, no se prevé en absoluto el uso de sus locales con fines de asilo. En el párrafo 3 del artículo 41 de esa misma Convención se subraya, en cambio, que los locales de la misión no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión. Algunas delegaciones han invocado también consideraciones de orden humanitario en defensa del asilo diplomático. Esas consideraciones son valederas en algunos casos particulares, pero el elemento decisivo, cuando se trata de determinar si se las ha de tener en cuenta, sigue siendo político, y el acuerdo sobre ese punto parece aún distante.

4. En las relaciones internacionales contemporáneas, la práctica del asilo diplomático se reconoce sólo sobre una base regional limitada. Al tratar de extenderla a escala universal, se corre el riesgo de obligar a los Estados a adoptar posiciones rígidas y de comprometer la distensión y el desarrollo de relaciones de amistad entre los Estados. La delegación de la RSS de Bielorrusia estima por ello que sería apropiado no incluir más ese tema en el programa de la Asamblea General después de terminado el debate sobre la cuestión en el actual período de sesiones.

¹ Naciones Unidas, *Recueil des Traités*, vol. 500, No. 7310, pág. 162.

5. El Sr. ENKHTSAIKHAN (Mongolia) dice que el informe del Secretario General sobre la cuestión del asilo diplomático confirma lo que ya se había comprobado en el debate celebrado sobre ese tema en el vigésimo período de sesiones, a saber, que se trata de una cuestión en extremo controversial y que la mayoría de los Estados que han comunicado sus opiniones de conformidad con la resolución 3321 (XXIX) de la Asamblea General estiman que sería prematuro codificar esa materia, por lo menos en la etapa actual. A juicio de la mayoría de los gobiernos, una convención internacional tendría el inconveniente de restringir la autonomía de los Estados para determinar en qué casos excepcionales puede prestarse asilo por razones humanitarias, y un gobierno expresó su preocupación por los problemas que el otorgamiento de asilo podría plantear en las relaciones con los países vecinos. Otros países subrayaron que no habían celebrado ningún acuerdo internacional sobre la materia y que la jurisprudencia internacional sobre ese punto era prácticamente inexistente. Incluso los países que se pronunciaron por la concesión excepcional del asilo diplomático por razones humanitarias estimaron que no era necesaria una codificación. El asilo diplomático es esencialmente una práctica regional que no está consagrada ni en el derecho convencional ni en el derecho internacional consuetudinario contemporáneo. Por otra parte, eso es lo que decidió en substancia en 1950 la Corte Internacional de Justicia, en ocasión del asunto del derecho de asilo entre Colombia y el Perú². El asilo constituye un atentado contra la soberanía de los Estados que se oponen a que se practique en su territorio y una injerencia en sus asuntos internos. Cabe hacer notar igualmente que el derecho de asilo no figura entre los derechos y deberes de las misiones diplomáticas estipulados en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y que tampoco ha sido previsto en la Convención de Viena sobre relaciones consulares.

6. En cambio, Mongolia no se opone a la concesión de asilo territorial a las personas perseguidas por su defensa de los intereses de los trabajadores o por su participación en una lucha de liberación nacional, lo cual, por otra parte, está previsto en el artículo 83 de su Constitución. El asilo no es un derecho, si bien su delegación reconoce que puede estar justificado que se conceda en los locales diplomáticos o consulares, en casos excepcionales y con fines humanitarios. En la etapa actual, la materia no ha llegado aún a un punto apropiado para una posible codificación.

7. El Sr. VILLAGRAN KRAMER (Guatemala) hace observar que la cuestión del asilo diplomático no es controversial desde el punto de vista humanitario, sino del político. El derecho tiende cada vez más a acentuar sus efectos en el terreno de la protección de la persona humana y, en el plano internacional, es cada día más visible la preocupación de los Estados por establecer mecanismos y salvaguardas tendientes a garantizar la vida y la dignidad humanas. Tal movimiento ha penetrado incluso en esferas tradicionalmente reservadas a la competencia de los Estados pero, como es sabido, la soberanía ya no se entiende en la actualidad en la forma absoluta en que tradicionalmente se consideró.

8. El asilo diplomático preocupa a algunos Estados, a causa de los aspectos políticos que reviste en la práctica y, sobre todo, porque creen que afectan el normal desenvolvimiento de sus relaciones con otros Estados o bien porque se está invadiendo una esfera que corresponde a la jurisdicción interna de cada Estado. Tales reservas son explicable, pero resultan difíciles de comprender, por lo menos desde una perspectiva legal, en el caso de Estados que, sin aceptar la práctica en sus territorios, otorgan, sin embargo, asilo en otros países al serles solicitado.

9. Muchas delegaciones creen sinceramente que el asilo es una práctica latinoamericana, pero ha sucedido que la protección temporal en locales diplomáticos ha sido concedida por Estados distintos de los latinoamericanos y, además, ha sido respetada por el Estado territorial. A ese respecto, el orador considera oportuno precisar que el objetivo perseguido por la delegación de Australia, apoyada por otras delegaciones y por la de Guatemala, no es generalizar la práctica latinoamericana al resto del mundo, sino establecer dentro de qué límites y circunstancias precisos puede ser admisible el otorgamiento del asilo y dentro de qué límites y circunstancias el Estado territorial debe respetarlo, después de precisar las reglas que cabe seguir para ponerle fin sin afectar las relaciones normales entre los Estados. En ese sentido, la iniciativa de Australia es realista, puesto que parte de la idea de que el asilo diplomático existe efectivamente y que muchos Estados pueden verse obligados a otorgarlo por razones humanitarias, como es el caso reciente de Chile y como sucedió en España y Hungría.

10. La falta de un texto convencional general hace más difícil resolver las situaciones que se presentan cuando los Estados obligados, por razones humanitarias, se ven ante la situación de otorgar asilo, aunque sea temporal, a una persona cuya vida está en peligro. Hasta el presente, fuera de la América Latina, los precedentes reemplazan a las normas jurídicas generales. El orador se pregunta en consecuencia si no convendría anticiparse a las situaciones de emergencia y buscar soluciones aceptables a la mayoría de los países.

11. En cuanto al argumento de que el asilo diplomático implicaría una indebida injerencia en los asuntos que son de la exclusiva competencia de otro Estado, o bien que se estaría sustrayendo de la competencia de un Estado a una persona sometida a proceso, cabe correlacionar el argumento al caso similar del asilo territorial en que el Estado que confiere el asilo disfruta de la potestad de calificar el delito o la naturaleza de la persecución. Sin embargo, ese argumento no se hace valer tratándose del asilo territorial, lo que parece extraño al orador. En el último caso existe una protección claramente establecida por el derecho internacional y, en el caso del asilo diplomático, una protección basada más en consideraciones humanitarias.

12. Las consideraciones humanitarias también juegan un papel importante en el caso de la extradición, en que está también presente el factor de la sustracción de la justicia de un Estado de una persona que legalmente debería ser juzgada por otro Estado. El derecho internacional aplicable permite incluso que en casos claramente establecidos pueda rehusarse la entrega del delincuente, calificado como delincuente político. Además, tratándose de delincuentes

² *Affaire colombo-péruvienne relative au droit d'asile, Arrêt du 20 novembre 1950: C.I.J. Recueil 1950, pág. 266.*

comunes, la norma según la cual no se les aplica la pena de muerte es aún más interesante: ¿qué mayor injerencia en la soberanía de un Estado que esa, que no le permite aplicar la pena prevista por su propia legislación? Pero tales limitaciones han sido aceptadas y respetadas por motivos humanitarios. Así pues, el enfoque de que la concesión del asilo diplomático constituye una indebida injerencia en los asuntos internos de un Estado no resiste un análisis estrictamente jurídico.

13. El orador también desea señalar a la atención otro punto, a saber, que a pesar de no existir una convención general, ningún Estado territorial viola el asilo concedido a un individuo en su territorio por una misión diplomática extranjera. Por lo tanto, se pregunta en qué se han basado los países no latinoamericanos para conceder asilo en la América Latina y en otras regiones. A juicio de la delegación de Guatemala, han hecho uso de una facultad discrecional a la que pueden recurrir en casos de extraordinaria gravedad y por razones humanitarias. Se habla en tales casos de un "refugio temporal", de una "hospitalidad extendida" mientras dure la emergencia que, a criterio de la misión diplomática, justifica la concesión del asilo. Una vez pasado el peligro, el refugiado puede salir de la misión. El problema se presenta cuando se hace necesario asegurar la salida del refugiado fuera del país, y es en esa situación en que existe el mayor margen de controversia, ya que la concesión del asilo, *per se*, es respetada, y las autoridades de un Estado no tienen el derecho de entrar por la fuerza a una misión diplomática para extraer al refugiado. A ese respecto, el orador cree que se han dado algunas modalidades dignas de examen, en particular la extensión de un salvoconducto o de un pasaporte a un refugiado para que pueda salir del país sin que sea necesario que lo haga bajo la bandera del país del asilo. El Estado territorial, por su parte, tiene el derecho de solicitar, posteriormente a la salida del refugiado, su extradición.

14. El asilo desempeña, pues, un papel importante, pero no en épocas o tiempos normales. El representante de Guatemala menciona a ese respecto la situación de los ciudadanos de Rhodesia que están expuestos a la aplicación de leyes especiales de carácter represivo y que no gozan del derecho a un debido proceso legal, y mucho menos del derecho de defensa en juicio. Año tras año, las Naciones Unidas han condenado las violaciones a los derechos humanos en esa región del mundo, y el orador se pregunta cuál sería la reacción de la comunidad internacional si, por ejemplo, una misión diplomática concediera en Sudáfrica asilo a una persona que buscara refugio por una supuesta violación de leyes especiales que no constituye delito conforme a las normas usuales del derecho penal. El asilo sería respetado, sin duda alguna, pero la carencia de reglas aplicables para resolver el problema de poner fin al asilo llevaría a negociaciones en que se traerían a cuenta los precedentes latinoamericanos o las sugerencias del Instituto de Derecho Internacional o de la Asociación de Derecho Internacional. Al respecto, el Secretario General ha mencionado en su informe los trabajos de esos órganos, que lograron fijar reglas claras y precisas, tomando en cuenta no sólo las limitaciones existentes, impuestas por el derecho internacional, sino también la necesidad de establecer correctivos para evitar abusos y extralimitaciones. No existe ninguna razón valedera para poner fin al estudio de ese punto, y la delegación de Guatemala cree que debe

proseguirse la labor sobre la cuestión y afirma que apoyará todo esfuerzo encaminado a permitir que el tema sea objeto de estudio, en particular la idea de que sea examinado por un grupo de expertos.

15. Guatemala, como país que concede y respeta el asilo diplomático dentro del marco de los convenios interamericanos y la práctica regional, no busca extender el ámbito de aplicación, sino precisar, con la mayor claridad posible, las reglas que otros Estados observarán en casos de urgencia y, sobre todo, precisar los parámetros legales que podrían seguirse para poner fin al asilo concedido, sin que afecte las normales relaciones entre los Estados.

16. El Sr. LEE (Malasia) dice que la práctica del asilo diplomático parece bien establecida en los países de la América Latina, pero que está en decadencia en Europa y en otros países desde el siglo XIX. Por otra parte, si bien la mayoría de los países de la América Latina han firmado la última convención adoptada en la materia, la de Caracas de 1954, cuatro de ellos han formulado ciertas reservas. Aunque esté sometido a ciertas normas, la falta de uniformidad de las normas aplicables al asilo diplomático plantea problemas y dio lugar al asunto entre Colombia y el Perú del que se ocupó la Corte Internacional de Justicia.

17. La delegación de Malasia aprecia el espíritu generoso con que el Gobierno de Australia tomó la iniciativa de pedir que se efectuaran estudios preliminares sobre los aspectos humanitarios y de otra índole de la cuestión del asilo diplomático, y ha escuchado con interés los convincentes argumentos expuestos por el representante de ese país (1551a. sesión). Sin embargo, de los 25 Estados Miembros que han expresado su opinión sobre la cuestión de conformidad con la resolución 3321 (XXIX) de la Asamblea General, más de la mitad han expuesto dudas en cuanto a la utilidad de seguir examinando esa cuestión.

18. En vista de la situación política que impera en el Asia meridional, la delegación de Malasia estima que no es oportuno continuar examinando ese tema y que es preciso actuar con gran prudencia en esa esfera.

19. El Sr. ALIHONOU (Congo) reconoce la excelente calidad del informe del Secretario General sobre la cuestión del asilo diplomático y desea dar las gracias a las delegaciones que, en aplicación de la resolución 3321 (XXIX) de la Asamblea General, han comunicado sus opiniones sobre esa delicada cuestión, así como a la delegación de Australia por el esfuerzo que ha realizado para obtener la inclusión del tema en el programa.

20. Los partidarios de una extensión general del asilo diplomático aducen que se trata de una institución de carácter esencialmente humanitario que debería, por lo tanto, recibir la adhesión de todas las naciones amantes de la libertad, y que el asilo debería concederse sólo a los refugiados políticos y únicamente en casos de urgencia. Respondiendo por adelantado a las críticas que podrían hacerse en cuanto a las limitaciones que esa institución significa para la soberanía de los Estados, señalan que la solución consistiría en concertar una convención, tratando así de dar forma jurídica a esas limitaciones a la soberanía.

21. Aunque apoya todos los esfuerzos realizados con miras a la codificación progresiva del derecho internacional, la

delegación del Congo lamenta no poder apoyar a los partidarios de la codificación de esa cuestión. En efecto, aunque pueda admitirse desde un comienzo el valor de las consideraciones humanitarias que están en juego, se impone la prudencia: también bajo la apariencia de operaciones humanitarias se han cometido algunos crímenes de lesa humanidad. Además, la definición de los delitos políticos y de los delitos de derecho común varía de un país a otro. En cuanto a la urgencia, su determinación tiene un carácter tan subjetivo que un acuerdo sobre ese punto es difícilmente factible. La práctica feliz del asilo diplomático en ciertas regiones no podría considerarse como la base para su generalización a toda la comunidad internacional. Al contrario del asilo territorial, que reafirma el principio de la soberanía de los Estados, el asilo diplomático constituye un grave atentado a la soberanía de los Estados y una injerencia en sus asuntos internos. El Congo teme que, si se extendiera a su región, la práctica del asilo diplomático se convertiría en una nueva fuente de conflictos y una prima de consolación otorgada al imperialismo. Aunque reafirma su adhesión a las ideas humanitarias en que se basa la práctica del asilo diplomático y su convicción de que, en un momento en que miles de personas son perseguidas a causa de sus actividades progresistas o de su participación en la lucha por la liberación nacional, resulta más que urgente reforzar el control del respeto de los derechos humanos, el Congo cree que la cuestión del asilo diplomático no podría ser objeto de una convención de carácter universal.

22. El Sr. BOOH BOOH (República Unida del Camerún) comprende las consideraciones humanitarias invocadas por la delegación de Australia, pero cree que ha llegado el momento de tomar una decisión en cuanto a la conveniencia de proseguir o no el examen de la cuestión del asilo diplomático. Si el concepto de asilo territorial goza de cierto apoyo entre los Estados y puede considerarse como la expresión del derecho internacional público contemporáneo, no sucede lo mismo con la cuestión del asilo diplomático, que suscita controversias políticas fundamentadas y no podría erigirse en una institución aceptada por la comunidad internacional. En el párrafo 1 del informe del Secretario General se indica que la "terminología en toda esta materia carece de uniformidad", lo que es una primera prueba de las incertidumbres y divergencias existentes sobre ese particular. El Secretario General señala igualmente en el párrafo 23 de su informe que esa institución ha servido para sustraer a personas "a la amenaza de procedimientos judiciales regulares" y que la actitud de los Estados carece de coherencia en la medida en que su posición oficial no coincide necesariamente con su actitud de hecho. Así pues, no puede considerarse que el asilo diplomático forme parte del derecho internacional consuetudinario, y es sólo en la América Latina que esa situación parece ser objeto de un consenso. Además, la Corte Internacional de Justicia, en el asunto del derecho del asilo, ha indicado que no es posible extraer "una costumbre constante y uniforme aceptado como derecho en lo tocante a la pretendida norma de la calificación unilateral y definitiva del delito"³. Además, los Estados responden en forma diferente a la cuestión de determinar si el asilo diplomático es un derecho del Estado frente a otros Estados

o bien un derecho del individuo mismo como sujeto de derecho internacional.

23. En la medida en que la decisión de conceder asilo diplomático a una persona que se encuentra en el territorio de un Estado en el que ha cometido un delito implica una innegable derogación de la soberanía de ese Estado y una intervención en una esfera que pertenece a la competencia exclusiva del Estado territorial, se trata de una institución bien extraña que puede funcionar sólo en el seno de una comunidad regional donde exista una tradición común suficientemente sólida. Los propios países de la América Latina dudan con razón que un órgano mundial pueda abordar ese problema con el mismo espíritu que los Estados de su región. La delegación de la República Unida del Camerún duda que sea oportuno codificar esa cuestión en el momento actual y que una medida en ese sentido promueva la causa de la paz y las relaciones de amistad entre los Estados. Fuera de la América Latina, el asilo diplomático se basa esencialmente en consideraciones de cortesía, conveniencia y oportunidad política y no en consideraciones jurídicas. Esa idea esencialmente política difícilmente se presta a una sistematización jurídica precipitada. Las consideraciones humanitarias y las circunstancias de urgencia invocadas para justificar el asilo diplomático pueden dar lugar a interpretaciones tendenciosas, al igual que la distinción entre delitos políticos y delitos de derecho común. De este modo, los "terroristas" quedarían excluidos del beneficio del asilo diplomático por ciertos Estados mientras que serían tratados con dignidad por otros. Los países africanos, por ejemplo, consideran su ayuda a los combatientes por la libertad en África como un deber sagrado que no debería ser obstaculizado por normas jurídicas a las que no hubieran expresamente consentido. Muchos Estados tendrían dificultad en aceptar que su autoridad en el plano interno fuera puesta a raya en nombre de principios no definidos por una convención o con el pretexto de circunstancias calificadas de excepcionales que podrían ser creadas artificialmente por una Potencia extranjera a fin de justificar una intervención exterior en los asuntos del Estado territorial. Además, sería delicado hacer asumir a una misión diplomática tareas incompatibles con sus derechos y obligaciones y de naturaleza tal que deterioraran las relaciones de amistad entre el Estado acreditante y el Estado receptor. Por esas razones, la delegación de la República Unida del Camerún cree que la Sexta Comisión debe fijar un plazo para el estudio de la cuestión del asilo diplomático. Un debate apasionado sobre la cuestión del asilo diplomático podría contribuir a radicalizar las posiciones de los Estados y a desacreditar a una institución que puede prestar todavía servicios útiles a la Humanidad. En cambio, le parece razonable que esa cuestión sea objeto de investigaciones profundas en el plano bilateral o regional.

24. En vista de que lo que trata de salvaguardar el asilo diplomático son los derechos humanos, la comunidad internacional debería más bien esforzarse por actualizar los Convenios de Ginebra sobre el derecho humanitario y resolver los problemas del hambre, la enfermedad, la ignorancia y las catástrofes generales en el mundo.

³ *Ibid.*, pág. 277.

1554a. sesión

Viernes 31 de octubre de 1975, a las 10.55 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1554

TEMA 111 DEL PROGRAMA

Cuestión del asilo diplomático: informe del Secretario General (*continuación*) (A/10139, parte I y Add.1 y parte II)

1. El Sr. MITCHELL (Estados Unidos de América) expresa su gratitud al Gobierno de Australia por la forma en que ha centrado la atención en cuestiones sobre las que debe reflexionarse y nunca deben desecharse a la ligera, ya que afectan a los derechos humanos. La declaración del representante de Australia (1551a. sesión), lúcida, completa y franca, es simplemente el más reciente ejemplo de la contribución de su Gobierno a la cuestión. Aunque varios gobiernos, incluido el suyo propio, no consideran productivo que la Sexta Comisión siga discutiendo la cuestión del asilo diplomático en el momento actual, todos se han beneficiado del intercambio de ideas y de la información tan útilmente reunida en el excelente informe del Secretario General (A/10139, parte II). A juicio de su delegación, no convendría tratar de generalizar la práctica del asilo diplomático tal como se ha ido desarrollando a lo largo de muchos decenios en las circunstancias únicas de la América Latina. El orador declara que no puede pasarse por alto la complejidad y la homogeneidad cultural y jurídica de la América Latina como elemento crítico en la práctica del asilo diplomático. Así pues, desde la codificación de la práctica en convenciones regionales, su aplicación real continúa basándose en parte en una adhesión profunda y comúnmente compartida por parte de los Estados latinoamericanos, adhesión que colma las lagunas de los regímenes jurídicos sobre ese tema. Si se continuara examinando la cuestión se podría desestabilizar no sólo la institución latinoamericana, sino quizá incluso comprometer la continuación del tipo de asistencia humanitaria especial que el representante de Australia ha resumido de forma tan coherente en su declaración.

2. La posición del Gobierno de los Estados Unidos sobre la cuestión del asilo diplomático es bien conocida y fue expuesta últimamente en la declaración de su delegación en la Sexta Comisión en el vigésimo noveno período de sesiones (1510a. sesión) y en la respuesta de los Estados Unidos al Secretario General (A/10139, parte I/Add.1). Su Gobierno no adopta esa opinión a la ligera. Además su opinión no deriva de la creencia de que las cuestiones humanitarias entrañan una intromisión en los asuntos internos de otro país. En el mundo contemporáneo es más esencial que nunca que los Estados mantengan los medios de comunicación entre ellos. No favorece a la paz o a los derechos civiles y políticos de los individuos comprometer la capacidad de los Estados para comunicarse, y las embajadas siguen siendo uno de los principales conductos de tal comunicación. Se requiere particular vigilancia para proteger los derechos de los individuos y asegurar la libertad civil y política, incluido el derecho al procedimiento

jurídico debido y el derecho a salir y a regresar al país de origen. No debe hacerse caso omiso de la realidad de que el mundo es interdependiente.

3. Su delegación da las gracias al Gobierno de Australia por estimular el pensamiento sobre esas cuestiones y por el tacto con que ha indicado que está dispuesto a ajustar su petición a las opiniones que la delegación de los Estados Unidos y otras delegaciones han expresado. Por su parte, los Estados Unidos seguirán examinando la cuestión cuidadosamente.

4. El Sr. GÜROL (Turquía) felicita al representante de Australia por su completa y lúcida presentación de la cuestión del asilo diplomático. Esa aclaradora exposición ha contribuido a lograr una mejor comprensión del problema. El Secretario General también ha presentado un admirable informe sobre el tema.

5. Su delegación aprecia las consideraciones humanitarias que inspiran los esfuerzos para establecer normas internacionalmente aceptables que rijan el asilo diplomático. Los intereses humanitarios son un objetivo básico de las Naciones Unidas. Las opiniones de su Gobierno sobre el asilo diplomático han sido presentadas al Secretario General y se exponen en el documento A/10139, parte I. Como se explica en ese documento, su Gobierno opina que la cuestión del asilo diplomático debería examinarse principalmente desde una perspectiva restrictiva y aplicable solamente en circunstancias excepcionales. Conceder asilo diplomático no es una de las funciones ordinarias de las misiones diplomáticas, que no deben injerirse en los derechos jurisdiccionales del país receptor.

6. El asilo diplomático se caracteriza por aparecer en una región determinada, y Turquía ha tenido poca experiencia en esa materia. Todos los países pueden beneficiarse de la inmensa experiencia y práctica de los países latinoamericanos y puede aprenderse mucho de esa fuente de información. En vista de su carácter regional y debido a la complejidad e importancia del tema, su delegación está convencida de que los esfuerzos para transformar la institución del asilo diplomático en normas internacionalmente aceptables corren el riesgo de congelar el proceso en una frase prematura e incluso en cierto modo pueden ir en detrimento de las personas a las que el asilo diplomático está destinado. Ahora bien, cuando el tiempo esté maduro, la cuestión podría someterse a la Comisión de Derecho Internacional para que la siguiera estudiando. Debe tenerse presente que esa cuestión ha sido incluida en el programa de la Sexta Comisión anteriormente.

7. El documento que contiene las opiniones de algunos Estados Miembros (A/10139, parte I y Add.1) proporciona elementos pertinentes que podrían utilizarse en el estudio del asilo diplomático. Ahora bien, muy pocos Estados

Miembros han podido presentar sus observaciones sobre la cuestión debido al período de tiempo relativamente corto concedido para presentar sus opiniones. Por consiguiente, tal vez convendría incluir en la resolución que se adopte sobre el tema una invitación renovada a los Estados para que presenten sus opiniones. Tal invitación promovería más los esfuerzos encaminados a establecer una base mejor para que los trabajos sobre el tema fueran fructíferos.

8. El Sr. PRANDLER (Hungría), recordando la esperanza expresada por el representante de Australia de que los miembros de la Comisión participen en el debate de la cuestión del asilo diplomático con espíritu constructivo, dice que su delegación está dispuesta a contribuir de forma constructiva al debate de ese complejo y contradictorio problema. Aunque la posición de su delegación sobre la cuestión ya fue expuesta en la Comisión durante el vigésimo noveno período de sesiones (1510a. sesión), desea destacar que debe hacerse una clara distinción entre el asilo diplomático y el asilo territorial. El asilo territorial es una institución jurídica plenamente reconocida en la práctica internacional y en el derecho internacional, que ha sido reafirmada en la resolución 2312 (XXII) de la Asamblea General y está firmemente anclada en la legislación interna de la mayoría de los Estados, incluido el suyo. El asilo diplomático, en cambio, no se ha convertido en una institución jurídica reconocida universalmente en la práctica interestatal o en el derecho internacional general. Incluso en su aplicación regional restringida en la América Latina, la institución del asilo diplomático sigue adoleciendo de contradicciones inherentes, como se desprende del estudio de los fallos de 1950¹ y 1951² de la Corte Internacional de Justicia sobre los casos relativos a Haya de la Torre, que ponen de manifiesto que la concesión del asilo diplomático entraña una derogación de la soberanía del Estado afectado.

9. Observando que las delegaciones que desean promover un reconocimiento de aplicación más amplia del asilo diplomático están animadas primordialmente por consideraciones humanitarias, su delegación no puede concebir una forma posible de establecer criterios uniformes para tales consideraciones. Además, la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas³, de 1961, establece las normas básicas que indudablemente establecen la incompatibilidad de conceder el asilo diplomático con las principales funciones de las misiones diplomáticas. Además, las consideraciones humanitarias podrían fácilmente explotarse como pretexto en beneficio de la desacreditada noción de "intervención humanitaria" que ha sido expresamente rechazada por varias resoluciones y declaraciones importantes de las Naciones Unidas. Los pocos casos excepcionales y concretos en que se ha concedido el asilo diplomático en el pasado no justifican el intento de establecer una nueva norma jurídica que, a su vez, llevaría solamente a conflictos entre los Estados y constituiría una nueva fuente de intromisión en cuestiones que esencialmente son de la jurisdicción interna de los Estados. A juicio de su delegación, hay muchos temas importantes en relación con el

desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional que son más necesarios y que producirían resultados más positivos en beneficio de las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados.

10. El Sr. URIBE (Colombia) expresa su agradecimiento a la delegación australiana por haber promovido el debate del asilo diplomático durante el actual período de sesiones. Colombia ha sido una de las naciones latinoamericanas más estrechamente ligadas con la formulación de los principios y la aplicación práctica de la institución del asilo, y desde la obtención de la independencia se ha preocupado por delimitar el ámbito jurídico del asilo diplomático. La importancia concedida por su delegación a la cuestión del asilo diplomático se demostró en la Sociedad de las Naciones, en la Comisión de Derecho Internacional, en la Corte Internacional de Justicia y en otros órganos.

11. La Carta de las Naciones Unidas enlaza la paz con la protección de los derechos humanos. El compromiso de las naciones de tutelar los derechos humanos no puede circunscribirse a la declaración de principios contenida en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el mecanismo previsto en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. Las Naciones Unidas tienen el deber de perfeccionar y ampliar el mecanismo para salvaguardar los derechos humanos de conformidad con el desarrollo progresivo de las relaciones existentes en el seno de la comunidad internacional. El asilo diplomático es uno de los procedimientos orientados a salvaguardar la vida humana en circunstancias excepcionales, como se reconoce en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Durante el debate en la Asamblea General, varias delegaciones destacaron que el asilo diplomático constituía una limitación de la soberanía nacional. Ello es cierto. Pero la sola existencia de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales, aunque entraña necesariamente un recorte a la soberanía estatal en su concepción absoluta, también abre el campo a una estructuración basada en el imperio del derecho.

12. De las opiniones expresadas por los gobiernos y de la labor realizada por órganos internacionales se desprende que el asilo diplomático se considera una institución válida no sólo en la región de la América Latina sino también en naciones de distintos continentes. La posición de Australia lo confirma. Incluso aquellos que inicialmente se opusieron al concepto han terminado por aceptar que en circunstancias excepcionales los locales diplomáticos pueden dar asilo a los delincuentes políticos.

13. El argumento de que el asilo diplomático genera peligros para las relaciones de amistad entre los gobiernos está desvirtuado en la práctica. Colombia, que ha aplicado con lealtad el principio, conoce, igual que otras naciones del hemisferio, hasta qué punto la práctica del asilo diplomático ha contribuido a favorecer la solidaridad entre los pueblos. La defensa de la vida humana y la protección otorgada a numerosos delincuentes políticos han fortalecido los lazos humanitarios entre las naciones. El solo hecho de que la cuestión se esté examinando en las Naciones Unidas, junto con el informe del Secretario General sobre la cuestión, demuestran claramente que el asilo diplomático es una institución del derecho internacional y, aunque puedan discutirse sus modalidades, no

¹ *Affaire colombo-péruvienne relative au droit d'asile, Arrêt du 20 novembre 1950: C.I.J. Recueil 1950, pág. 266.*

² *Affaire Haya de la Torre, Arrêt du 13 juin 1951: C.I.J. Recueil 1951, pág. 71.*

³ Naciones Unidas, *Recueil des Traités*, vol. 500, No. 7310, pág. 162.

puede negarse su existencia. Incluso aquellos gobiernos que han demostrado su oposición no pueden desconocer los beneficios que confiere en orden a evitar genocidios.

14. De conformidad con el inciso b) del párrafo 1 del Artículo 13 de la Carta, su delegación considera que convendría redactar una declaración sobre el asilo diplomático que confirmase el carácter humanitario de esa institución y determinase algunos de los elementos básicos que precisan su alcance. El asilo diplomático nunca podrá concederse a delincuentes comunes, sino que deberá reservarse exclusivamente para los delitos políticos, cuya calificación unilateral corresponde al Estado asilante. La urgencia y la gravedad de las circunstancias deberán igualmente ser determinadas por ese Estado, que no deberá estar obligado a conceder asilo a nadie que lo solicite. La declaración de la Asamblea General debería también ayudar a establecer las características del carácter temporal del asilo y la cuestión del salvoconducto.

15. El Sr. AL-ADOOFI (Yemen) expresa su gratitud al Secretario General por su completo y valioso informe sobre el asilo diplomático, y a la delegación australiana por haber pedido la inclusión del tema en el programa de la Asamblea General. El asilo territorial se ha convertido en una de las normas establecidas de derecho internacional positivo y ha sido reafirmado en la resolución 2312 (XXII) de la Asamblea General; es reconocido y practicado por todos los Estados y ha sido incorporado en la legislación interna de muchos Estados, incluido el suyo. Ahora bien, el asilo diplomático no goza de esa condición general en el derecho internacional; pese a sus orígenes históricos, sigue siendo solamente una práctica territorial de conformidad con las convenciones y tratados celebrados entre ciertos Estados, cuyas admirables costumbres deben, no obstante, respetarse.

16. Pese a la amplia gama de opiniones que se encuentra en los puntos de vista expresados por los Estados sobre la cuestión, todos ellos reconocen el aspecto humanitario del asilo diplomático; no obstante, muchas delegaciones han pedido prudencia al tratar el tema, recomendando que la práctica se limite a los casos urgentes y excepcionales y se restrinja dentro de límites estrechos. El interés de su delegación se basa, por una parte, en la necesidad de respetar la Declaración Universal de Derechos Humanos, especialmente el artículo 14 y, por otra, en las tradiciones tribales yemeníes que requieren que cada tribu proteja a todo el que solicite asilo hasta que puedan demostrarse los motivos reales por los que solicita asilo.

17. Pese al interés inherente del tema, que surge de consideraciones humanitarias y de la necesidad de proteger la libertad humana, el asilo diplomático es un problema muy complejo y polifacético y tiene ramificaciones y repercusiones que pueden constituir una amenaza para las relaciones de amistad entre los Estados. Es difícil armonizar la necesidad de respetar los principios humanitarios con la necesidad de respetar la soberanía nacional del Estado territorial.

18. Existe también el problema de conseguir que el Estado territorial se comprometa a conceder al asilado un salvoconducto para salir de su territorio.

19. A juicio de su delegación, el asilo diplomático afecta a la soberanía del Estado territorial y es un tipo de intromisión en sus asuntos internos. Al desempeñar sus funciones, las misiones diplomáticas y consulares no deben rebasar las normas de las Convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y sobre relaciones consulares. Las misiones deben desempeñar sus funciones sin hacer caso omiso de la legislación local ni entrometerse en los asuntos internos del Estado territorial, y no deberán escatimar esfuerzos para mejorar las relaciones con ese Estado.

20. Evidentemente, en la comunidad internacional no hay consenso sobre el complejísimo tema del asilo diplomático, que requerirá un estudio muy serio antes que la Comisión intente la codificación del mismo. Por tanto, su delegación sugiere que la Secretaría siga recabando las opiniones de los Estados y de los expertos en derecho internacional sobre el tema, con objeto de determinar los aspectos sobre los que podría llegarse a un consenso y aquellos sobre los que hay diferencias de opinión. Eso proporcionaría una base más clara para toda labor futura.

21. El Sr. MAKAREVICH (República Socialista Soviética de Ucrania) dice que su delegación ha estudiado el informe del Secretario General sobre el tema en examen y ha seguido atentamente el debate en la Comisión. Dicha delegación aprecia el enfoque constructivo del problema adoptado por la delegación de Australia, que se basa en consideraciones humanitarias analizadas con profundidad y amplitud por el representante de ese país. Si bien ve con simpatía esas consideraciones, la delegación de la RSS de Ucrania abriga serias dudas sobre la conveniencia de codificar el derecho relativo al asilo diplomático. Al respecto, el orador señala que de los 25 Estados Miembros que han respondido al cuestionario del Secretario General de conformidad con la resolución 3321 (XXIX) de la Asamblea General, solamente ocho Estados se han pronunciado a favor de la elaboración de un instrumento jurídico internacional para tratar esa materia. El resto ha expresado recelo o incluso ha considerado inoportuno estudiar la cuestión en esa etapa, con miras a codificarla. El concepto mismo de asilo diplomático es controvertible e incierto. Algunos Estados, como Francia, si bien niegan la existencia del derecho de asilo diplomático desde el punto de vista jurídico, están dispuestos en circunstancias excepcionales a otorgar asilo en sus embajadas a personas en peligro. Otros Estados opinan que el asilo otorgado por razones puramente humanitarias y durante un período limitado es solamente un tipo de asilo diplomático. Incluso dentro de una región determinada, la práctica de los Estados varía extremadamente.

22. La RSS de Ucrania reconoce el derecho de asilo territorial establecido y definido claramente en el artículo 109 de su Constitución. Al reconocer esa institución, la enfoca desde una perspectiva clasista y otorga asilo a los extranjeros que son perseguidos por proteger los intereses de los trabajadores, por sus actividades científicas o por su participación en una lucha de liberación nacional. La RSS de Ucrania examina con extrema cautela las cuestiones relativas al asilo diplomático y sostiene que el principio de la soberanía del Estado es incompatible con el concepto de extraterritorialidad de los locales diplomáticos.

23. Se abstendrá de analizar la cuestión en detalle, pues ya lo han hecho varios oradores, en particular el representante

de Bulgaria (1551a. sesión), cuyas opiniones hace suyas la delegación de la RSS de Ucrania. No ha llegado aún el momento de debatir a fondo la cuestión en las Naciones Unidas o de codificar normas pertinentes y universales de derecho internacional. La introducción de la práctica del asilo diplomático en regiones en que no se basa en la tradición y es incompatible con su desarrollo histórico puede dar lugar a malentendidos y aun a controversias entre los Estados. Sería muy difícil definir los casos típicos de asilo diplomático y elaborar principios y normas generalmente aceptables. En realidad, la falta de normas jurídicas sobre el tema da gran flexibilidad a los Estados que conceden asilo y a los Estados cuyos nacionales piden asilo diplomático. La regulación estricta de esa materia en un instrumento de derecho internacional reduciría esa flexibilidad y quitaría a los Estados la posibilidad de analizar cada caso por separado. Por todas esas razones, la delegación de la RSS de Ucrania cree que la Asamblea General debe circunscribirse a discutir la cuestión, tomar nota del informe del Secretario General y volver a tratar el tema en un momento más apropiado.

24. El Sr. FUENTES IBÁÑEZ (Bolivia) dice que el hecho de que el examen del tema por la Comisión lo haya iniciado la delegación de Australia testimonia el interés de gran parte de la comunidad internacional por la institución del asilo diplomático.

25. La opinión del Gobierno de Bolivia sobre esa cuestión figura en el documento A/10139, parte I. En el pasado, tanto en la teoría como en la práctica, el asilo diplomático ha sido una institución regional y no universal, si bien en más de una ocasión otros Estados que no reconocían la existencia jurídica del asilo diplomático lo han otorgado de hecho por razones humanitarias, cuando las circunstancias así lo exigían.

26. Las opiniones expresadas por los gobiernos parecen indicar que han preferido considerar el asilo como una facultad electiva y no la afirmación de una norma positiva de derecho. Pese al largo estudio de que han sido objeto las convenciones existentes, aún no se ha logrado un ordenamiento claro y preciso. Uno de los aspectos más controversiales de la cuestión es el que se refiere a la calificación unilateral de los hechos por el Estado asilante. Con miras a evitar el riesgo que entraña esa facultad unilateral, varios países latinoamericanos, entre ellos Bolivia, elaboraron las llamadas Reglas de Asunción que establecen el equilibrio que debe prevalecer entre la demanda de asilo y la concesión de éste. Como surge del párrafo 30 del documento A/10139, parte II, el procedimiento recomendado es que la persona que invoque el asilo exponga las circunstancias de hecho que la hayan decidido a solicitarlo y que corresponderá al jefe de la legación interesada apreciar esas circunstancias. Ese prudente enfoque se hace cada vez más necesario, pues por ser precisamente el asilo diplomático una institución que trata de defender al individuo de las situaciones de violencia y riesgo inminente que conllevan a veces los acontecimientos políticos, se hace también indispensable fijar las normas que han de regular su más adecuado ejercicio, a fin de evitar que se convierta en un recurso para que delincuentes comunes o funcionarios que abusaron de su autoridad escapen de su justo castigo.

Aunque se alegue que la extradición existe para solucionar esos casos, esa institución opera en un plano diferente y se aplica a delincuentes comunes que se acogen al asilo territorial. No conviene que la evaluación del asilado por el Estado asilante se vea influida por consideraciones de ese tipo. Aparte de ello, cabe agregar la renuencia que oponen los gobiernos para atender las demandas de extradición, ya que estiman que la salida del asilado ha puesto fin al caso definitivamente. Sería, pues, más conveniente que la institución del asilo diplomático integrase el derecho internacional universalmente reconocido. Uno de los caminos para alcanzar ese objetivo sería que el representante de Australia llevase adelante su propuesta. De tal modo, el ejercicio del asilo diplomático, hasta ahora circunscrito a los países que se han adherido a las Convenciones de Caracas, La Habana o Montevideo, pasaría a ser regulado por un instrumento internacional aplicable en cualquier lugar del mundo donde hubiera un individuo perseguido por razón de su ideología, religión u origen étnico. La delegación de Bolivia cree que ningún Estado que practique leal y honestamente las disposiciones de la Carta puede oponerse a ese compromiso. Debe señalarse, además, que los Estados que no aceptan la doctrina y desconocen sus reglas, a veces aplican el asilo diplomático circunstancialmente, en forma masiva y arbitraria y por ello cuestionable. Al hacerlo, ejercen un derecho humanitario, pero sin asumir las obligaciones que éste entraña.

27. Aunque no deja de tener cierta lógica el argumento de que la calificación unilateral y subjetiva, que no está sujeta a normas determinadas, podría considerarse perjudicial para la soberanía del Estado territorial, esa consideración se ve compensada adecuadamente por los innumerables casos en que dicha calificación ha beneficiado a individuos sujetos a persecución por razones estrictamente políticas, a quienes en ningún caso cabría llamar delincuentes.

28. Bolivia es profundamente respetuosa de la institución del asilo diplomático; ha acatado firmemente sus principios y ha ejecutado los procedimientos convenidos. La experiencia ha revelado que si bien la doctrina es inobjetable, el mecanismo de ejecución sigue siendo imperfecto. Su delegación teme que si se permite que la práctica del asilo sea una facultad optativa en tiempos de convulsión, cuando hay un profundo desconcierto en cuanto a la calificación del delito y de la naturaleza del delincuente, quizá se produzcan situaciones conflictivas con mayor frecuencia de las que ocurren esporádicamente en los países que practican el asilo diplomático dentro de normas obligatorias para todas las partes de un convenio.

29. Como resultado de los sorprendentes cambios ocurridos en el mundo, la humanidad se encuentra actualmente frente a un vacío moral difícil de llenar. En consecuencia, tal vez la Comisión deba verse compelida con mayor urgencia a examinar la cuestión del asilo, con miras a lograr su más amplia y racional aplicación. La materia que se analiza es un tema de profunda trascendencia social, ya que por un lado está la protección del individuo, sea quien fuere, y por el otro la sociedad indefensa frente a quienes buscan el triunfo de una causa por medios violentos.

30. La delegación de Bolivia cree que cualquier proyecto sobre ese asunto tendrá que ser en principio un documento de avenencia. La Comisión no debe amilanarse por esa consideración. Los países latinoamericanos cuentan con varios instrumentos que prestan útiles servicios no obstante sus imperfecciones. Además, el Comité Jurídico Interame-

ricano ha preparado un nuevo proyecto que se halla a la espera de ser examinado por la Organización de los Estados Americanos.

Se levanta la sesión a las 12 horas.

1555a. sesión

Lunes 3 de noviembre de 1975, a las 15.10 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1555

TEMA 111 DEL PROGRAMA

Cuestión del asilo diplomático: informe del Secretario General (continuación) (A/10139, parte I y Add.1 y parte II)

1. El Sr. SETTE CAMARA (Brasil) dice que el notable material contenido en el informe del Secretario General (A/10139, parte II) le ha llevado a la conclusión de que la práctica del asilo diplomático conforme a normas de derecho internacional consuetudinario o convencional está limitada actualmente a los Estados de la América Latina. No obstante, la práctica se originó en costumbres que eran comunes a todo el *jus gentium* de otras épocas y se admite en general que el derecho de asilo se remonta a los orígenes mismos de las misiones diplomáticas permanentes. Según la vieja doctrina de la extraterritorialidad, los locales de las embajadas u otros sitios se transformaban en santuarios para las personas perseguidas por el Estado territorial y no protegidas por los recursos jurídicos normales. Puede decirse, pues, que los países latinoamericanos han cristalizado esas prácticas consuetudinarias inmemoriales en normas jurídicas obligatorias, en tanto que el resto del mundo las interrumpió, reemplazándolas por otras doctrinas jurídicas como la de la necesidad de independencia para el desempeño de funciones oficiales.

2. Pero las raíces de la institución del asilo diplomático son tan profundas que ni siquiera los Estados que lo repudian han vacilado en utilizarlo cuando así lo requieren circunstancias especiales, como lo muestran varios ejemplos mencionados en el informe del Secretario General. Ha habido asilados que han permanecido en locales de embajadas durante más de un decenio, y el orador afirma que no conoce ningún caso en que un Estado territorial haya recurrido a medidas extremas para poner fin a esa situación. En tiempos muy recientes, la embajada de un país que está muy lejos de reconocer el derecho de asilo se convirtió en el único refugio de cientos de refugiados que huían de un movimiento insurreccional victorioso, y el nuevo gobierno respetó el asilo diplomático concedido y proporcionó los medios para evacuar a los asilados a un país vecino.

3. Sin embargo, a juzgar por los comentarios escritos de gobiernos y por el presente debate, las dificultades nacen de la falta de unanimidad respecto de la existencia de un principio firme de derecho internacional general que justifique el asilo diplomático. Los partidarios del no recono-

cimiento de esa práctica alegan que el asilo es una derogación de la soberanía y que es incompatible con las funciones de las misiones diplomáticas, según están definidas en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas¹. No obstante, existe un reconocimiento general del aspecto humanitario de la cuestión, y muchos Estados que no aceptan la institución han concedido en la práctica asilo en circunstancias especiales, animados por el deseo de salvar vidas. La delegación del Brasil conviene con el representante de Australia (1551a. sesión) en que esas consideraciones humanitarias han sido reconocidas ampliamente, y cree que proporcionan un denominador común bastante amplio que podría utilizarse como punto de partida para la labor futura sobre el tema.

4. El Brasil, como miembro de la región que ha logrado regular la cuestión del asilo diplomático mediante normas jurídicas, y como parte en todas las convenciones pertinentes, valora todos los esfuerzos realizados para lograr un mejor entendimiento de la institución del asilo diplomático en el plano mundial. A ese respecto, el orador desea señalar que su país atribuye gran importancia a dos aspectos principales de la práctica del asilo diplomático en la América Latina, a saber, la exclusión de los delincuentes comunes y el derecho del Estado asilante a calificar la naturaleza del delito del que se acusa al individuo. La delegación del Brasil ve con satisfacción que otros representantes latinoamericanos han tenido la oportunidad de reafirmar su adhesión a la práctica del asilo diplomático.

5. El orador desea felicitar a la delegación de Australia por la prudente posición que ha adoptado. El objetivo inmediato de esa delegación, de plantear el asunto a fin de actualizar la información relativa a las pertinentes actitudes gubernamentales, ha sido logrado, y la delegación del Brasil conviene en que el insistir en el debate sobre el asunto con miras a la redacción de un texto podría tener un resultado negativo e incluso contrario a los intereses de quienes apoyan la institución del asilo diplomático. Las reservas expresadas por muchos Estados son de tal índole que las concesiones que serían necesarias para lograr un consenso podrían deformar la institución y poner en peligro su aplicación, incluso en los países que la aceptan como parte de su derecho internacional.

¹ Naciones Unidas, *Recueil des Traités*, vol. 500, No. 7310, pág. 162.

6. La labor futura sobre el asunto, sean cuales fueren sus resultados, no debe estar encaminada a restar mérito a las presuntas ventajas de la flexibilidad e incertidumbre que prevalecen actualmente en muchos Estados. La confianza mutua sólo podrá surgir si se disipan las dudas y se trata de lograr un acuerdo sobre las normas mínimas para el funcionamiento del derecho de asilo fuera del derecho convencional, posibilitando así que los principios humanitarios se apliquen sin crear fricciones políticas. La delegación del Brasil está dispuesta a cooperar en la aplicación de cualquier medida futura que se adopte para realzar el papel del asilo diplomático.

7. El Sr. AÏSSI (Dahomey) da las gracias a la delegación de Australia por haber solicitado la inclusión en el programa de la importante cuestión del asilo diplomático, que interesa a la delegación del Dahomey porque atañe a un aspecto de los derechos humanos, cuya promoción es una de las tareas de las Naciones Unidas. El interés de los Estados en salvaguardar su soberanía absoluta no debe llevarlos a sacrificar consideraciones de índole humanitaria. Algunos Estados cuya política se basa en un imperialismo y un neocolonialismo anacrónicos piensan que el debate por la Asamblea General y, *a fortiori*, la codificación del asilo diplomático, podrían menoscabar su soberanía.

8. La idea de la soberanía nacional absoluta privó en épocas de nacionalismo estrecho y egoísta, pero la calidad de Miembro de las Naciones Unidas impone a los Estados ciertas obligaciones, inclusive las de naturaleza humanitaria. El hecho de que la resolución 3321 (XXIX) de la Asamblea General fuera aprobada por una mayoría abrumadora muestra que la mayoría de los Estados ya han aceptado que el concepto de soberanía absoluta del Estado puede ser objeto de algunas modificaciones. El Secretario General ha citado en su informe (véase A/10139, parte II, párr. 313) las opiniones de Ulloa sobre este punto², que dan al asilo diplomático un fundamento jurídico.

9. Además, las Naciones Unidas harían una aportación útil si eliminaran las dudas en los casos en que los Estados pudiesen considerar que el otorgamiento de asilo diplomático constituye un acto poco amistoso hacia el otro Estado interesado.

10. La delegación del Dahomey espera que la Comisión de Derecho Internacional (CDI) continúe aplicando sus métodos habituales, que consisten en elaborar proyectos de artículos que codifican la práctica establecida sobre la materia. Esa práctica ha sido reconocida por buen número de Estados, si bien se encuentra mucho más desarrollada en la América Latina que en otras partes, y la delegación del Dahomey rinde homenaje a los Estados latinoamericanos por su sólida tradición en materia de asilo diplomático.

11. Los textos reunidos por el Secretario General en su informe pueden ser mejorados con arreglo a lineamientos aceptables para todos los Estados Miembros. Debe evitarse en particular la confusión terminológica y, a ese respecto, el orador opina que la Corte Internacional de Justicia hizo una prudente distinción entre asilo diplomático y asilo territorial al decidir el litigio entre Colombia y el Perú sobre el

caso del asilo³. En cuanto a las personas a quienes puede concederse asilo diplomático, la historia internacional contemporánea muestra que existen diversas formas de lucha y, por consiguiente, varias razones que podrían llevar a la persecución de los que combaten por una causa justa. Es por ello que el Gobierno Militar Revolucionario del Dahomey ha favorecido siempre la adopción de medidas para proteger los derechos humanos fundamentales. Considera que todo individuo responsable de delitos distintos de los del derecho común no debe verse afectado ni en su persona ni en su libertad.

12. El Dahomey pertenece al continente que aún sufre de los males del colonialismo, el racismo y el *apartheid*. Es por ello que ha mencionado delitos distintos de los del derecho común. En el proyecto de artículos que pueda preparar la CDI se debe tener en cuenta que el beneficiario del derecho de asilo diplomático debe ser cualquier persona perseguida por delitos políticos o por opiniones políticas (por ejemplo, sobre el colonialismo o el *apartheid*) o por su raza o religión. Ello excluiría a los mercenarios. Si bien admite el principio del asilo diplomático, el Dahomey desea dejar en claro que se opone a que se conceda asilo a una persona condenada por confabularse con una Potencia extranjera para perjudicar los intereses legítimos de pueblos que luchan para liberarse de toda forma de dominación extranjera. Es necesario aclarar ese punto, porque el imperialismo internacional y el neocolonialismo en todas sus formas operan siempre en los países en desarrollo por intermedio de individuos reaccionarios ganados para su causa.

13. En lo tocante a la cuestión de la urgencia, esa condición debe ser interpretada como una injerencia en los asuntos internos de un Estado, puesto que la urgencia podría ser evaluada de distinta manera por el Estado territorial y por el Estado asilante. El Estado territorial siempre puede sostener que no existe la urgencia requerida para la concesión del asilo diplomático. La definición de criterios objetivos razonables para la evaluación de esa urgencia es una tarea que corresponde a la CDI. Debe tenerse presente también que en los casos relativos a delitos políticos puede haber circunstancias o presiones que afecten la tradicional independencia de los jueces, o éstos pueden ser reemplazados por tribunales especialmente constituidos que responden a prejuicios institucionales o jerárquicos.

14. El Sr. LANG (Austria) dice que su país tiene la puerta abierta para los que busquen asilo político. Esa antigua tradición se encuentra firmemente arraigada en las convicciones humanitarias del pueblo austríaco y su Gobierno la ha seguido incluso cuando le ha impuesto una carga considerable.

15. No obstante, la delegación de Austria desea reiterar las dudas que expresó en el debate realizado en el vigésimo noveno período de sesiones en la Comisión (1507a. sesión) y en sus comentarios escritos, que figuran en el documento A/10139, parte I, acerca de la conveniencia de redactar una convención sobre asilo diplomático. La decisión de otorgar asilo diplomático se justifica sólo en circunstancias especiales, cuando una persona corra un riesgo grave e inme-

² A. Ulloa, "El asilo diplomático", *Anuario Jurídico Interamericano*, 1949, pág. 40.

³ *Affaire colombo-péruvienne relative au droit d'asile*, Arrêt du 20 novembre 1950: C.I.J. Recueil 1950, pág. 266.

diato o cuando un Estado persiga a una persona de manera incompatible con pautas mínimas de derechos humanos. La estructuración del asilo diplomático no contribuirá a mejorar su aplicación sino que obstaculizará la flexibilidad con que los Estados interesados han actuado hasta la fecha.

16. Por otra parte, la iniciativa de Australia de proponer el tema ha tenido varios efectos útiles. Ha dado lugar al valiosísimo informe del Secretario General y ha hecho que los representantes participen en un proceso de toma de conciencia en el curso del cual todos han adquirido una comprensión profunda de las consideraciones humanitarias en que se basan las cuestiones jurídicas y políticas involucradas. Si bien una solución jurídica universal del problema del asilo diplomático podrá obtenerse sólo en un futuro distante, el presente debate puede considerarse como un paso importante en esa dirección.

17. La Srta. AGUTA (Nigeria) expresa su agradecimiento a la delegación de Australia por haber iniciado el actual debate, que ayudará a fomentar el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional y está encaminado a proteger la dignidad humana y sustentar los ideales de las Naciones Unidas.

18. El asilo territorial y el asilo extraterritorial se rigen por principios diferentes. La facultad de otorgar asilo territorial es una consecuencia de la soberanía territorial, mientras que la concesión de asilo extraterritorial es una derogación de la soberanía del Estado territorial, en la medida en que se requiere a ese Estado que tolere que personas que huyen de sus autoridades estén exentas de detención en legaciones u otros locales. Todo Estado tiene el derecho absoluto de otorgar asilo territorial, a menos que haya aceptado alguna restricción particular a ese respecto, en tanto que el derecho de conceder asilo extraterritorial es excepcional y debe establecerse en cada caso.

19. El aspecto común de ambos tipos de asilo es que los dos conllevan un ajuste entre las reivindicaciones jurídicas de soberanía estatal y las consideraciones de índole humanitaria. El asilo territorial tiene un origen remoto, y abarca no sólo a los refugiados políticos, sociales y religiosos sino también a todos los extranjeros, inclusive los que cometen delitos graves. Ese asilo es solamente un aspecto de la facultad general del Estado de admitir personas en su territorio o de excluirlas del mismo.

20. El derecho internacional no reconoce al fugitivo el derecho a exigir asilo; el único derecho admitido internacionalmente es el del Estado asilante. Naturalmente, ese derecho puede ser restringido mediante acuerdos, cuyos ejemplos más comunes son los tratados de extradición. En principio, el asilo no debe otorgarse a ninguna persona cuando haya razones bien fundadas para considerar que ha cometido un delito de lesa humanidad.

21. En cuanto al asilo diplomático, el derecho internacional moderno no reconoce ningún derecho general de concesión de asilo cuando su efecto sea eximir al fugitivo de la aplicación normal de las leyes del Estado territorial. No obstante, como medida temporal, puede otorgarse asilo a los individuos a quienes una turba amenace físicamente o cuando los fugitivos corran peligro a causa de la extrema corrupción política del Estado local. Cabe suponer que la

justificación empleada es que la concesión de asilo permite evitar temporalmente una amenaza inminente.

22. El asilo diplomático se basa en el respeto mutuo entre el Estado territorial y el Estado asilante. Si el Estado territorial acepta el asilo lo hace porque comprende que ha sido otorgado por consideraciones humanitarias y no tiene por objeto ofenderlo. Los antecedentes de cada caso deben examinarse a fin de evitar abusos de ese respeto mutuo. Es poco probable que se conceda asilo diplomático a un delincuente común. Toda negociación entre los dos Estados interesados debe efectuarse sobre la base de la cortesía y por conductos diplomáticos. De esa manera, el asilo diplomático no se considerará habitualmente una injerencia en los asuntos internos del Estado territorial.

23. Hasta la fecha no se han elaborado normas generales y obligatorias de derecho internacional para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales que cuentan con un mecanismo apropiado de ejecución. En realidad, el punto que se discute no es si el asilo diplomático debe ser institucionalizado universalmente, sino si el examen del asunto debe continuar. La delegación de Nigeria, aunque no cree que la cuestión haya llegado a un punto apropiado para su codificación, opina que debe ser debatida en forma amplia y exhaustiva. Por ello aprecia la iniciativa de Australia de introducir el tema, así como el claro informe del Secretario General.

24. El Sr. VANDERPUYE (Ghana) señala que la práctica del asilo diplomático es ajena a las instituciones jurídicas de su país. A ninguna misión diplomática en Ghana ni a ninguna misión de Ghana en el extranjero (excepto en un caso aislado) se le ha pedido jamás que conceda o ha concedido efectivamente asilo a ningún refugiado de la persecución política o de la justicia. No obstante, su delegación apoyó la resolución 3321 (XXIX) de la Asamblea General, preocupada por los aspectos humanitarios del asilo diplomático, por una parte, y deseosa de recibir información sobre tema tan intrincado, por la otra; su Gobierno sabía muy poco acerca del tema y consideró que necesitaba preparación para abordar cualquier problema de asilo diplomático que pudiera surgir en el futuro. El orador expresa su gratitud al Secretario General por elaborar un informe completo e informativo sobre la cuestión y un estudio de las respuestas de los Estados, y señala que han ayudado a su país a corregir una serie de ideas erróneas sobre el fundamento jurídico del asilo diplomático y sobre las actitudes de los Estados acerca de esa cuestión tan controversial. Del informe se deduce claramente que el asilo diplomático no es una institución de derecho internacional, en el sentido de que no existe derecho consuetudinario generalmente reconocido sobre el asunto. Ni el antiquado concepto de la extraterritorialidad de los locales diplomáticos ni el de su inviolabilidad pueden ya servir de base para la institución del asilo diplomático. Las disposiciones de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas tampoco pueden servir de base jurídica para ese concepto. El orador señala que la diferencia básica entre el asilo diplomático y el asilo territorial es que el último, concedido por un Estado en su propio territorio en ejercicio de su soberanía, no menoscaba esa soberanía. El asilo diplomático, en cambio, parece ser una intromisión en los asuntos internos de otro Estado y una derogación de su autoridad y, por consiguiente, podría ser una fuente de

conflicto internacional y ser contrario al espíritu y a los propósitos de la Convención de Viena. Basándose en ese razonamiento, el asunto del asilo diplomático no parece ser un tema adecuado para que lo examine la Comisión.

25. Pero a la delegación de Ghana no la mueve el peso de esos argumentos contra la continuación del examen del tema, e insta a la Comisión a que examine cuidadosamente y sin pasión el otro lado de la cuestión. El asilo diplomático es una institución social importante de indudable utilidad que ha sido sancionada por la tradición y que ha prestado grandes servicios humanitarios. Ha sido practicada por los Estados desde tiempo inmemorial siempre que ha surgido la necesidad, o sea, durante tiempos anormales. Los países latinoamericanos han establecido la condición jurídica del asilo diplomático por convención. Las páginas iniciales del informe del Secretario General, que se refieren a la historia de la institución, muestran que los Estados aún recurren a la práctica del asilo diplomático, incluso fuera de la América Latina. La probable continuación de los disturbios civiles, de las revueltas internas y de los golpes de estado que se producen en todas partes del mundo hacen que el derecho de asilo sea esencial para todas las naciones. Ningún país puede considerarse totalmente inmune frente a disturbios civiles, como lo demuestran los recientes acontecimientos ocurridos en África e incluso en Europa. En todos los países sujetos a disturbios civiles, reales o potenciales, la institución del asilo diplomático formalmente reconocido por la comunidad internacional puede ayudar a salvar las vidas de futuros dirigentes que pueden estar llamados a prestar valiosos servicios a sus países en el futuro. Además, no es correcto igualar a los refugiados puramente políticos que solicitan asilo con los delincuentes comunes. Los supuestos delincuentes políticos pueden más tarde ser llevados al poder, quizá por las mismas personas que los persiguieron anteriormente. A los que consideran que la Comisión no puede tratar el tema del asilo porque no es una institución jurídica, sino más bien una institución extrajurídica, se les debe recordar que en general se han reconocido las poderosas consideraciones humanitarias que justifican la institución del asilo como excepción a esa posición negativa, según se indica en los párrafos 293 a 295 del informe del Secretario General.

26. Con respecto a la supuesta derogación por el asilo diplomático de la soberanía de los Estados y su supuesta injerencia en los asuntos internos del Estado, en especial los procedimientos judiciales normales del Estado, el orador destaca la importancia de las consideraciones humanitarias y el hecho de que el asilo territorial, generalmente aceptado por los Estados, no está totalmente libre de tal derogación. Citando el párrafo 295 del informe del Secretario General, el orador declara que el derecho de asilo, en sus diversas formas históricas, constituye la reacción defensiva de los supremos postulados de la cultura frente a fenómenos sociales que, en una forma u otra, son una negación de la cultura.

27. A su juicio, la polarización de opiniones surgida en el debate sobre el tema constituye otra prueba de la típica reacción de la Comisión y de la comunidad internacional ante todo nuevo tema cuyo examen se propone. Las fuerzas interesadas en el mantenimiento del *statu quo* se alinean frente a las fuerzas del cambio y del progreso. A ese respecto, debe elogiarse a los países latinoamericanos por su

constante presencia en la vanguardia del desarrollo progresivo del derecho internacional. La cuestión del asilo diplomático no debe dejarse de lado con el mero pretexto de que no ha llegado el momento oportuno para su examen. Gran parte de las bases de la labor futura de la Comisión ya han sido sentadas en las distintas convenciones latinoamericanas y en los proyectos preparados por otras organizaciones no gubernamentales que se ocupan del derecho internacional. Hay ciertos aspectos de la cuestión que requieren mayor estudio y desarrollo debido a su poderoso significado humanitario. Lo más probable es que la práctica del asilo diplomático aumente en el futuro, y la clara definición y la regulación internacional de la práctica beneficiarían a la comunidad internacional y a varios de sus líderes potenciales. Por consiguiente, el orador sugiere que el tema se someta a examen dentro de dos o tres años para que la Comisión pueda considerar de nuevo las perspectivas de su codificación bien en una declaración o en una convención.

28. El Sr. JACHEK (Checoslovaquia) señala a la atención la posición de su país sobre la cuestión del asilo diplomático y sobre la posibilidad y conveniencia de elaborar un instrumento jurídico internacional universal sobre esa institución, posición que se expone en el documento A/10139, parte I.

29. La Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en la que Checoslovaquia es parte, no prevé el asilo diplomático. En efecto, el asilo diplomático, tal como se entiende ese término en el debate actual, no sólo no pertenece a los derechos y obligaciones de las misiones diplomáticas, sino que van contra el espíritu y la letra de esa Convención. A menos que exista un acuerdo especial entre las partes, la concesión del asilo diplomático puede causar daños considerables a las relaciones mutuas entre los Estados de que se trate, ya que constituye una violación significativa de la soberanía de uno de ellos. La finalidad de la Convención de Viena, en cambio, es reforzar y promover las relaciones entre los Estados con sistemas sociales diferentes.

30. Como Estado socialista, Checoslovaquia brinda protección en su territorio a los ciudadanos extranjeros perseguidos por defender los intereses del pueblo trabajador, por participar en movimientos de liberación nacional, por realizar trabajos científicos y artísticos creativos o por sus actividades en defensa de la paz, concediéndoles el derecho de asilo al amparo del artículo 33 de su Constitución. Ahora bien, el derecho checoslovaco no reconoce el asilo diplomático, que no ha llegado a ser una institución universalmente aceptada de derecho internacional. No obstante, Checoslovaquia tiene conciencia de la importancia de los aspectos humanitarios de esa cuestión y, por consiguiente, en su intervención en el anterior período de sesiones (1510a. sesión), no expresó objeciones a que se siguiera estudiando la cuestión. Sin embargo, en ese momento señaló que los problemas involucrados eran complejos y controversiales, y que sería prematuro sacar conclusiones sobre su futura regulación jurídica internacional.

31. De las observaciones escritas de los gobiernos y del debate actual puede sacarse sólo una conclusión: la elaboración de un instrumento jurídico internacional sobre el

asilo diplomático, en el momento actual, sería una tarea no realista para las Naciones Unidas, ya que el asilo diplomático dista mucho de ser universalmente reconocido en la teoría o en la práctica. Como cuestión práctica, queda limitado a una región, y los Estados que lo reconocen como cuestión de tradición no basan la práctica en principios idénticos. La elaboración de criterios universalmente aceptables para el asilo diplomático sería muy difícil, debido al carácter excepcional de los casos pertinentes. Además, su delegación duda de que la codificación del asilo diplomático en las condiciones internacionales actuales pueda influir positivamente en el desarrollo de la cooperación amistosa entre los Estados.

32. Aunque el continuar los esfuerzos hacia la codificación no es oportuno en el momento actual, el intercambio de opiniones sobre el tema es útil, ya que aclara la actitud de los Estados y, junto con el excelente informe del Secretario General, establece una base más amplia para la posible labor futura sobre los distintos problemas relacionados con el derecho de asilo. El orador desea expresar el agradecimiento de su delegación a la delegación de Australia, que inició el debate, por su serio enfoque de la cuestión y por su conciencia de la complejidad y la susceptibilidad política de las cuestiones involucradas.

33. Sir Vincent EVANS (Reino Unido) dice que, cuando la cuestión del asilo diplomático se incluyó en el programa del vigésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General, su delegación expresó (1509a. sesión) que temía que la búsqueda de claridad en la definición de los principios que rigen el asilo diplomático podría tener el efecto de limitar las posibilidades de conceder asilo por razones humanitarias. Pero el debate subsiguiente ha contribuido en gran medida a aclarar la posición, y el enfoque cauteloso de la delegación de Australia tiene en cuenta las consideraciones humanitarias en juego.

34. Pese a la antigüedad del concepto de asilo diplomático, nunca ha llegado a estar firmemente establecido como institución del derecho internacional universal definida por un código generalmente aceptado de normas, convencionales o consuetudinarias. Incluso en la parte del mundo en que más ha florecido en tiempos recientes, a saber, la América Latina, la práctica de conceder el asilo diplomático se ha desarrollado para responder a las necesidades políticas y sociales de esa región, y en modo alguno todos los Estados han aceptado las convenciones relativas al asilo diplomático. Eso demuestra la dificultad de formular un código generalmente aceptable de normas jurídicas que regulen la materia.

35. Desde luego, ello no significa necesariamente que, excepto entre Estados latinoamericanos, no haya existido nunca fundamento jurídico para conceder el asilo diplomático y que no exista en absoluto circunstancia alguna en que pueda concederse como cuestión de derecho internacional. La posibilidad de conceder asilo diplomático surge en la práctica de la inviolabilidad de que gozan los locales en los que se solicita. Por otra parte, se ha establecido claramente que el jefe de la misión no tiene un derecho general a conceder asilo, ya que la decisión de hacerlo saca al asilado de la jurisdicción del Estado receptor y, por consiguiente, entraña una derogación de su soberanía. En principio, como lo reconoció la Corte Internacional en el

caso del asilo, el asilo no puede oponerse al funcionamiento de la justicia. De ello se desprende que el asilo debe concederse solamente en circunstancias muy excepcionales. El problema consiste en saber si conviene tratar de definir tales circunstancias.

36. Además de los casos en que existe un tratado aplicable que prevé el asilo o una costumbre local que lo permite, algunas autoridades opinan que es legítimo conceder el asilo en ciertos casos en los que hay razones humanitarias extremas. Varios oradores han mencionado el caso de la persona que huye de la violencia de las turbas. El fallo de la Corte Internacional en el caso del asilo indica firmemente que la concesión del asilo podría estar justificada cuando, bajo la apariencia de justicia, el imperio del derecho es sustituido por medidas arbitrarias. Ahora bien, hay cierta incertidumbre en cuanto a los límites precisos de las razones humanitarias extremas que puedan justificar la concesión del asilo, y no sería fácil definir esos límites jurídicamente. Además, la concesión del asilo por una misión diplomática por razones humanitarias podría en la práctica ser tolerada por el Estado receptor por razones políticas u otras razones extrajurídicas, independientemente de sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Ese factor agrega una dimensión muy importante desde el punto de vista humanitario.

37. Como ha señalado la delegación de Australia, la posición jurídica actual es incierta; no obstante, existe cierto grado de flexibilidad en la práctica que beneficia a la causa humanitaria y que podría perderse si se formulara un rígido código de normas para el asilo diplomático. Por consiguiente, la delegación del Reino Unido no está convencida de que sería provechoso tratar de llegar a tal formulación mediante una convención o declaración.

38. El Sr. APRIL (Canadá) dice que, como la mayoría de la comunidad internacional, su país considera que el asilo diplomático no es una institución reconocida por el derecho internacional universal contemporáneo y que carece de un fundamento jurídico generalmente reconocido y aceptado. La teoría de que el asilo diplomático se basa en el principio de la extraterritorialidad de los locales diplomáticos ya no es aceptada, al quedar anticuada la ficción jurídica de la extraterritorialidad. El principio de la inviolabilidad de los locales diplomáticos tampoco se acepta como fundamento del asilo diplomático, ya que la inviolabilidad se reconoce solamente con miras a asegurar el desempeño efectivo por la misión diplomática de sus funciones, entre las que no figura la concesión del asilo diplomático.

39. En el derecho latinoamericano, las Convenciones de La Habana⁴ y de Montevideo⁴ se refieren a la costumbre local como el fundamento de la institución del asilo. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia, en el litigio entre Colombia y el Perú sobre el caso del asilo, declaró que en el caso del asilo diplomático no existía costumbre en el sentido jurídico del término. Por consiguiente, la Convención de Caracas de 1954⁴ dispuso que el asilo diplomático se respetaría de conformidad con las disposiciones de esa Convención. Así pues, incluso en la América Latina el

⁴ Unión Panamericana, *Tratados y Convenciones Interamericanas sobre Asilo y Extradición*, Serie sobre tratados 34 (OEA Documentos Oficiales, OEA/Ser/X/7).

supuesto fundamento consuetudinario del asilo diplomático ha tenido que ser sustituido por el fundamento convencional. Por lo tanto, el asilo diplomático tiene existencia jurídica solamente en la medida en que los Estados interesados estén dispuestos a ser partes en un tratado o convención sobre esa cuestión. El orador considera que la labor realizada desde que el tema en examen se incluyó en el programa y los debates sobre el tema indican claramente que a nivel mundial no existen ni las condiciones fundamentales ni la voluntad política necesarias para la conclusión de un tratado sobre el asilo diplomático.

40. Si se llegara a elaborar un proyecto de tratado sobre el asilo diplomático, las circunstancias en que se aplicaría serían tan difíciles de definir que probablemente su texto sería demasiado rígido o demasiado vago en la práctica, por lo que se convertiría en letra muerta o en fuente de controversias. Por otra parte, si no se adoptara el proyecto, ello tendría consecuencias negativas sobre los ideales humanitarios fundamentales y sobre ciertas prácticas conexas, tales como el refugio temporal o el amparo seguro.

41. A juicio de la delegación del Canadá, el derecho internacional reconoce que en ciertas circunstancias excepcionales un embajador puede y debe proporcionar refugio seguro temporal a toda persona cuya vida esté en peligro inmediato. El asilo diplomático, con sus marcadas connotaciones políticas, no debe confundirse con el refugio seguro temporal, que es esencial y exclusivamente una práctica humanitaria. Evidentemente es imposible definir en detalle las circunstancias excepcionales en que puede y debe concederse el refugio seguro temporal. Cada caso tendrá que decidirse individualmente, sobre la base de consultas entre las partes interesadas. La falta de codificación sobre la cuestión no debe considerarse una laguna, ya que ofrece una oportunidad para actuar con flexibilidad y pragmatismo.

42. El orador da las gracias al Secretario General por su excelente informe y dice que su delegación apoyará cualquier proyecto de resolución sobre la cuestión, siempre que en él se reconozca que sería inútil que la Comisión siguiese estudiando la cuestión en la etapa actual.

43. La Sra. PEREYRA (Venezuela) desea ratificar la posición de su delegación en apoyo de los principios que sustentan la institución del asilo y su vigencia en la América Latina. Su delegación desea subrayar, en particular, los aspectos del asilo diplomático concernientes a la protección de los derechos humanos fundamentales. La práctica del asilo diplomático, consagrada en acuerdos regionales en que son partes los Estados latinoamericanos desde fines del siglo XIX, constituye un motivo de legítimo orgullo para el continente latinoamericano. Ella ha sido el resultado de peculiares tradiciones políticas y culturales, y el hecho de que se haya desarrollado tanto en la América Latina es una prueba de que responde a necesidades sociales y políticas.

44. Si bien los acuerdos regionales sobre asilo diplomático constituyen una fuente de orgullo para la América Latina, no se puede decir lo mismo de las circunstancias históricas y políticas en que algunos de ellos fueron firmados. Por ejemplo, mientras distinguidos juristas llegaban a un acuerdo con respecto a la Convención sobre asilo diplomático firmada en Caracas en 1954, el Gobierno huésped se

ocupaba de perseguir a sus opositores demócratas. Eso demuestra el contrasentido entre la teoría y la práctica, que ejemplifican algunos Estados que conceden actualmente asilo diplomático por razones políticas cuando tradicionalmente se han opuesto a él.

45. La delegación de Venezuela considera que es preciso evitar los dos extremos, ya que si se utilizan los principios jurídicos inherentes al asilo con fines de propaganda internacional, se pueden desvirtuar hasta el punto de negarlos en la práctica.

46. Aunque la institución del asilo es parte del derecho internacional latinoamericano, su aplicación ha trascendido los límites de la América Latina, pues muchos países han concedido asilo por motivos humanitarios. El informe del Secretario General registra opiniones ampliamente divergentes por parte de los Estados, y la delegación de Venezuela se limita a afirmar, aun reconociendo el derecho internacional latinoamericano como fuente del derecho de asilo, que sobre la base de la práctica es imposible negar la perspectiva universal de la institución, ya que los principios en que se apoya, a saber, la defensa de los derechos fundamentales del hombre, no pueden considerarse patrimonio exclusivo de la América Latina, sino que son de carácter universal. Preocupa a la delegación de Venezuela la opinión expresada por otras delegaciones de que la universalización de la institución del asilo pueda llegar a comprometer su eficacia. Como lo afirmó la delegación de Venezuela en el anterior período de sesiones (1506a. sesión), ninguna medida que respecto del asilo adopten las Naciones Unidas debe menoscabar los principios latinoamericanos sobre la materia.

47. La preparación de un proyecto de convención sobre el asilo diplomático por la Asociación de Derecho Internacional hace tres años indica que muchos abogados internacionalistas tienen conciencia de la pertinencia y la importancia del asilo diplomático en el mundo contemporáneo. Su delegación considera que el simple reconocimiento de ese hecho fuera del ámbito latinoamericano es un paso positivo, no sólo para los Estados, sino para toda la humanidad, ya que las naciones civilizadas no pueden desconocer los aspectos humanitarios del asilo. En consecuencia, la oradora espera que la CDI considere en breve y fructíferamente la cuestión del asilo diplomático. La institución del asilo tendrá vigencia mientras los sistemas de gobierno no se basen en verdaderos principios democráticos; desconocerla equivaldría a atentar contra los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos en cuanto al respeto a la vida y la integridad de la persona humana.

48. El Sr. EFIMOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación reconoce las razones constructivas y humanitarias en que se basa la iniciativa tomada por la delegación de Australia sobre la cuestión sumamente compleja y controvertida del asilo diplomático. Con todo, la delegación de la URSS se une a otras que han expresado sus dudas sobre la posibilidad de resolver rápidamente el problema. Los debates de la Comisión durante el actual período de sesiones y el anterior, así como la mayoría de las observaciones de los Estados Miembros reproducidas en el informe (A/10139, parte I y Add.1), evidencian que los Estados encontrarían muy difícil in-

corporar la institución en sus leyes nacionales y atender a las probables consecuencias políticas de su codificación, lo que en consecuencia podría afectar negativamente el desarrollo de relaciones de amistad y cooperación entre Estados. Las relaciones jurídicas internacionales no apoyan la pretensión australiana sobre la solución de los problemas; de hecho, las posiciones de los Estados respecto del asilo diplomático y el uso de locales diplomáticos para esos fines no sólo difieren, sino que con frecuencia se excluyen recíprocamente.

49. La Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas no incluye el otorgamiento de asilo diplomático entre las funciones de una misión diplomática enumeradas en el artículo 3, y el uso de locales diplomáticos para ese propósito está excluido del párrafo 3 del artículo 41. Además, incluso en la América Latina, no todos los Estados son partes en las convenciones sobre la materia. Gran parte de su práctica se rige por un entendimiento mutuo tácito y no por convenciones. Más aun, la Corte Internacional de Justicia, en su decisión de 1950 sobre el caso de asilo entre Colombia y Perú, dictaminó que los principios de derecho internacional no reconocían ninguna norma de calificación unilateral y definitiva por el Estado que concedía el asilo diplomático. A juicio del orador, los casos de concesión de asilo diplomático por países latinoamericanos de conformidad con acuerdos regionales, tales como las Reglas de Lima de 1865 y otras, no apoyan de manera convincente la institución del asilo diplomático, pues se trataba de acuerdos transitorios, de limitada aplicación y se habían concertado con la aprobación de sus gobiernos. Algunos gobiernos, al tiempo que niegan la existencia de un derecho al asilo diplomático, están dispuestos a otorgarlo, en circunstancias excepcionales, a personas en peligro. Esas circunstancias excepcionales difieren ampliamente y no pueden dar lugar a ninguna práctica uniforme; en consecuencia, no puede extraerse de ellas una situación típica o una norma general.

50. Aun los ejemplos incompletos de opiniones jurídicas autorizadas sobre la materia, escogidos para los fines del informe, indican el rechazo general de la institución del asilo diplomático en el derecho internacional contemporáneo. Ni la práctica consuetudinaria entre los Estados ni la doctrina sobre la materia ofrecen base suficiente para considerar el asilo diplomático como institución generalmente aceptada o como posible objeto de codificación. La mayoría de los Estados no están dispuestos a aceptar la institución y, a juicio de la delegación de la URSS, no existe el requisito previo para la elaboración de un instrumento jurídico internacional sobre la cuestión de aceptación universal y general. Los esfuerzos encaminados a establecer una base jurídica para la institución del asilo diplomático sólo servirían para complicar las relaciones entre los Estados y afectar negativamente el proceso de distensión. Por esas razones, la delegación de la URSS considera, como muchas otras, que debe aplazarse el examen en las Naciones Unidas de la cuestión del asilo diplomático.

51. El Sr. BUSSE (República Federal de Alemania) dice que su delegación se congratula del debate sobre la cuestión del asilo diplomático. Son impresionantes los estudios académicos completos emprendidos por los juristas latinoamericanos sobre la materia, y la tolerancia y comprensión demostradas por los gobiernos latinoamericanos respecto de

la concesión del asilo diplomático reflejan profundas convicciones humanitarias.

52. El informe del Secretario General indica con toda claridad que, a juicio de la gran mayoría de los Estados situados fuera del ámbito jurídico latinoamericano, no hay acuerdo sobre si el concepto de asilo diplomático integra o no el derecho internacional vigente. Esa situación no constituye una negación de la existencia del asilo diplomático como institución jurídica, sino que implica simplemente que las opiniones acerca del alcance y la importancia del concepto, así como de los requisitos para su aplicación, difieren todavía en forma tan amplia que sería prematuro encarar una definición de principios. Sin embargo, la incertidumbre dominante no plantea ningún peligro importante desde un punto de vista humanitario. Aunque no se establezcan normas o directrices, ello no impedirá que las misiones extranjeras protejan las vidas humanas en circunstancias excepcionales.

53. El orador agradece a la delegación de Australia el haber promovido, por razones humanitarias, el debate sobre la cuestión del asilo diplomático. El representante de Australia ha ofrecido una reseña clara y convincente de la iniciativa australiana, y su delegación confía en que el debate actual ayudará a esclarecer el tema que se examina y servirá de base para la evolución del concepto del asilo diplomático.

54. El Sr. MUHAMMAD (India) dice que su delegación considera que el asilo diplomático es distinto del asilo territorial y que entraña un desconocimiento de la soberanía del Estado territorial y una injerencia en asuntos que son de la exclusiva competencia de ese Estado. Por esa razón, el Gobierno de la India dirigió el 30 de diciembre de 1967 una circular a todas las misiones diplomáticas extranjeras y del Commonwealth acreditadas en la India, en la que expresaba que no reconocía el derecho de esas misiones a conceder asilo a persona alguna dentro de sus locales. Esa posición recibió apoyo adicional en las observaciones de los Estados Miembros sobre la materia.

55. La delegación de la India no comparte el parecer de que la institución del asilo diplomático esté fundada en consideraciones humanitarias. Esa opinión no está apoyada por ninguna de las declaraciones de las Naciones Unidas ni por los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, y los esfuerzos anteriores por dotar a la institución del asilo diplomático de un carácter humanitario han fracasado.

56. La posición jurídica de los Estados latinoamericanos es un tanto diferente, ya que en ellos la cuestión se rige por tratados regionales bien definidos, encaminados por acuerdo común a tener en cuenta las características especiales de la situación política regional. Sin embargo, la práctica regional desarrollada en la América Latina en circunstancias especiales no puede tener validez ni aplicación universal. El debate en la Comisión y los estudios realizados sobre la materia indican claramente que el concepto del asilo diplomático no es ni parte del derecho internacional ni norma que se desprenda del derecho internacional consuetudinario. Esa opinión se ve confirmada por la práctica de los Estados, con excepción de algunos incidentes aislados no fundados en consideraciones jurídicas.

57. Las prerrogativas, inmunidades y funciones de las misiones diplomáticas están claramente definidas en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Cualquier expansión unilateral de esas funciones por una misión diplomática sería considerada por el Estado territorial como una usurpación de su autoridad. Sin embargo, la práctica de los Estados permite que una misión diplomática ofrezca refugio temporal en sus locales a una persona cuya vida corra peligro inminente, hasta que cese ese peligro. Si bien se halla claramente justificada por razones humanitarias, esa práctica no implica de ningún modo la sustracción de la persona afectada de la jurisdicción del Estado territorial. Hay una diferencia fundamental entre el refugio temporal dado por razones humanitarias y el asilo diplomático concedido por razones políticas. Se dice que el asilo diplomático se otorga sólo a las personas que pueden ser víctimas de persecución por motivos políticos, pero no se aclara cuáles son esos motivos políticos y sobre qué base puede una misión diplomática calificarlos de tales. La definición de los delitos políticos varía de una nación a otra, y una misión diplomática no puede hacer valer sus propias concepciones jurídicas respecto de acontecimientos que ocurren en un Estado receptor.

58. El representante de Australia ha dicho que el concepto de asilo diplomático no implica para la misión ninguna obligación de conceder asilo, ni autoriza al refugiado a exigirlo, sino que denota el reconocimiento de una libertad o facultad para la misión diplomática. No obstante, si la institución del asilo diplomático se basa en consideraciones humanitarias, cabe preguntarse cómo puede una misión diplomática conservar la opción de dar asilo a unos y negarlo a otros, y sobre qué bases se hace esa elección. La facultad discrecional de la misión podría emplearse para dar refugio a personas con cuya posición política se coincida, lo que equivaldría a una injerencia en los asuntos internos de un Estado Miembro, a tenor del párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, y a un menosprecio de la soberanía de ese Estado. La delegación de la India no puede aceptar una situación de esa índole, que no es propicia para la armonía internacional.

59. El debate en la Comisión ha demostrado una vez más que es inútil seguir estudiando el tema. La cuestión del asilo diplomático figura en el programa de la CDI, y la delegación de la India espera que la CDI examine oportunamente la cuestión, prestando especial atención a los aspectos humanitarios implícitos en ella.

60. El Sr. RAKOTOSON (Madagascar) dice que las opiniones de su Gobierno figuran en el documento A/10139, parte I. Hay una profunda diferencia entre el asilo territorial y el asilo diplomático. En el caso del asilo territorial, el refugiado se encuentra fuera del Estado territorial en el que se ha cometido el delito, y con la concesión del asilo no se desconoce la soberanía de dicho Estado, en tanto que en el caso del asilo diplomático el refugiado se encuentra en el territorio del Estado en el que se ha cometido el delito. Atendiendo a que se ha abandonado la ficción de la extraterritorialidad de los locales diplomáticos, en particular desde la decisión pertinente de la Corte Internacional de Justicia, la decisión de una misión diplomática de conceder asilo a un habitante del Estado huésped equivale a sustraer a esa persona de la jurisdicción de dicho Estado, con lo que se desconoce su soberanía. Cuando se redactaron

el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración sobre el Asilo Territorial (resolución 2312 (XXII) de la Asamblea General) se rechazó la extensión del régimen de asilo territorial al asilo diplomático.

61. El objeto de las misiones diplomáticas, según se dice en el inciso e) del párrafo 1 del artículo 3 de la Convención de Viena, es fomentar las relaciones amistosas entre el Estado acreditante y el Estado receptor, pero la conversión del asilo diplomático en un derecho jurídico general aumentaría los obstáculos para alcanzar ese objetivo. Además, existe el peligro de que los Estados acreditantes puedan utilizar la concesión del asilo diplomático como medio de proteger a una de las partes en una controversia, interviniendo así indirectamente en los asuntos internos del Estado receptor.

62. Su delegación ha tomado nota de los argumentos expuestos en favor de que el asilo diplomático sea reglamentado por el derecho internacional, y le interesan en particular aquellos que subrayan las consideraciones humanas en que se basa la concesión del asilo diplomático. Aunque algunas situaciones extraordinarias podrían justificar medidas excepcionales, sería difícil en la práctica enunciar reglas generales para determinar fuera de toda duda el carácter excepcional de cada caso, sobre todo dado que en algunas convenciones latinoamericanas al respecto, la evaluación corresponde en forma unilateral al Estado que concede el asilo. Aunque no se prevé la aplicación del asilo diplomático a los delincuentes comunes, el hecho de conceder a un Estado el derecho exclusivo de evaluar la índole del delito constituiría un nuevo apartamiento del ejercicio normal de la soberanía territorial. Además, el concepto de delito político puede variar de un país a otro. Está asimismo la cuestión de si habrá de concederse asilo diplomático a personas cuya libertad se ve amenazada, o sólo a aquellas cuya vida está amenazada. No siempre es fácil establecer la distinción entre ambos casos. Por otra parte, el asilo diplomático sólo puede lograr su objetivo si se da un salvoconducto al refugiado. Para cumplir con ese requisito, varios países, entre ellos Madagascar, tendrían que enmendar su legislación y sus reglamentos.

63. Para la mayor parte de los países en desarrollo, la codificación del derecho de asilo diplomático bajo la forma de una convención internacional plantearía problemas jurídicos y políticos. Esos países, en su esfuerzo por llegar a una estructura social y económica más justa, tienen que lidiar con enemigos dentro y fuera de sus fronteras. La reglamentación y el posible uso del asilo diplomático en dichos países serviría simplemente los intereses de las fuerzas reaccionarias, y por consiguiente desacreditaría la práctica.

64. En todo caso, su delegación no está convencida de que el asilo diplomático se preste a la codificación bajo la forma de una convención internacional. La decisión por parte del Estado territorial de reconocer el asilo diplomático depende de consideraciones inherentes a cada caso particular, en especial a consideraciones políticas, y ese poder discrecional no debería limitarse. En consecuencia, sería difícil codificar la práctica del asilo diplomático mediante reglas preestablecidas bajo la forma de una convención internacional.

65. Su delegación agradece a la delegación de Australia su iniciativa de solicitar la inclusión del tema en el programa.

66. El Sr. IŁOPUSZAŃSKI (Polonia) dice que la cuestión del asilo diplomático es muy compleja. Su delegación ha observado por eso con aprobación la forma circunspecta y realista con que el representante de Australia ha vuelto a presentar la cuestión en el presente período de sesiones. Su delegación ha tomado nota de las opiniones de los gobiernos que figuran en el documento A/10139, Parte I y Add.1, entre las que se incluyen las de su Gobierno. Aunque es innegable que existe el aspecto humanitario del asilo diplomático, en todo análisis objetivo del problema deben tenerse asimismo en cuenta consideraciones jurídicas y políticas o pragmáticas.

67. Refiriéndose al aspecto jurídico de la cuestión, dice que no hay normas de derecho internacional universal relativas al asilo diplomático y que no existe ninguna "costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho". Esa opinión fue confirmada por la decisión de la Corte Internacional de Justicia del 20 de noviembre de 1950 sobre el caso del asilo. Para evitar todo error de interpretación cabe recordar que existe una distinción en la doctrina entre la costumbre, por una parte, y el uso que, según se dice en el párrafo 298 del informe del Secretario General, es el resultado de la práctica.

68. La mayoría de los Estados se oponen al reconocimiento pleno del asilo diplomático en el derecho internacional universal por tres razones fundamentales y afines. La primera es su convicción de que el asilo diplomático es incompatible con el pleno y libre ejercicio de la soberanía por parte del Estado territorial. A ese respecto, su delegación comparte plenamente la opinión — respaldada por la Corte Internacional de Justicia — de que la decisión de conceder el asilo diplomático entraña una derogación de la soberanía del Estado territorial. La diferencia entre la institución del asilo diplomático y la del asilo territorial es particularmente obvia en sus efectos respectivos sobre la soberanía. Según la Corte, el asilo territorial no constituye en modo alguno una derogación de la soberanía del Estado en el que se ha cometido el delito.

69. En segundo lugar, existe una tendencia creciente en las relaciones internacionales a atribuir mayor importancia al principio de la no intervención en los asuntos internos de los Estados. Ese principio se ha convertido en una norma jurídica, enunciada en la Carta y reafirmada en la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas (resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, anexo). La tercera razón de las reservas de los Estados es su convicción, plenamente justificada, de que la institución del asilo diplomático es incompatible con las normas del derecho diplomático internacional y en particular con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.

70. Refiriéndose al aspecto político y pragmático del asilo diplomático, dice que el carácter altamente político de esa institución no sólo explica el hecho de que sea incierta e inestable, sino que constituye también su mejor protección, dado que permite a los Estados actuar con prudencia y con

un amplio margen de flexibilidad. Como declaró el representante de la RSS de Ucrania en el vigésimo noveno período de sesiones (1510a. sesión), hay cuatro actitudes posibles con respecto a la institución del asilo diplomático. De considerable pertinencia para las consideraciones *de lege ferenda* es la actitud de aquellos Estados que, aunque no reconocen jurídicamente la institución, se encuentran en un dilema cuando se plantean circunstancias excepcionales. En esos casos excepcionales, la práctica es sumamente diversa. El informe del Secretario General no se ocupa de los casos ocurridos desde la segunda guerra mundial, pero ha habido una serie de casos en que se ha concedido refugio temporal más que asilo. El primer concepto ha sido defendido por varias delegaciones, y su delegación le reconoce cierta validez. Podría constituir una justificación para la práctica de un Estado en casos excepcionales. Las observaciones del Sr. Lauterpacht, reproducidas en el párrafo 308 del informe del Secretario General, revisten gran interés al respecto.

71. Antes de poder efectuar un análisis detallado de la cuestión es preciso responder a una serie de interrogantes. Por ejemplo, no resulta claro si la concesión de asilo o de refugio temporal ha de limitarse únicamente a las personas amenazadas con violencia descontrolada. Indudablemente es significativo a ese respecto el hecho de que la Corte Internacional de Justicia haya sostenido que la concesión del asilo diplomático viola la soberanía del Estado territorial en la medida en que se sustrae al delincuente de la justicia de dicho Estado, y es al delincuente y no a ninguna otra persona a quien se hace referencia específicamente. La evaluación del caso podría ser distinta si no se tratara de un delincuente sino de otra persona contra la cual no se siguieran procedimientos jurídicos pero que estuviera expuesta a peligros ocasionados por fuentes extrajudiciales. Otros interrogantes son si la posible perspectiva de un juicio normal justifica la concesión de asilo o de refugio, cuáles son los límites de la jurisdicción interna del Estado territorial, cuál es el significado del término "urgencia", en qué forma ha de establecerse la base jurídica en cada caso particular, y si el Estado territorial está obligado a proporcionar un salvoconducto. Las convenciones latino-americanas no ofrecen respuestas uniformes a ese último interrogante.

72. El estudio del problema no puede considerarse completo; quedan por aclarar muchos puntos. Su delegación cree que sería conveniente permitir que los gobiernos reflexionaran sobre los difíciles problemas implícitos, y apoyará por consiguiente las propuestas de la mayoría de la Comisión en que se tenga en cuenta la complejidad del problema.

73. El Sr. MANYANG d'AWOL (Sudán) agradece a la delegación de Australia su iniciativa de presentar el presente tema, que reviste gran importancia humanitaria, y su útil declaración introductoria.

74. Su delegación cree que el asilo diplomático es muy importante desde el punto de vista humanitario, pues permite a los individuos escapar a peligros a que están expuestos por razones políticas. Los debates sostenidos en la Comisión demuestran que casi todos están de acuerdo en que la práctica carece de la sanción del derecho internacional e infringe la soberanía del Estado. Sin embargo, el derecho internacional no se impone a la comunidad

internacional, sino que emana de fuentes dentro de ella. Los acuerdos internacionales están entre las más importantes de dichas fuentes, y es apropiado que en virtud de un acuerdo de esa índole un Estado adopte el principio del asilo diplomático y haga de él un principio de derecho internacional, aunque no lo haya sido antes. En consecuencia, no es apropiado oponerse totalmente al asilo diplomático, puesto que ello equivaldría a oponerse a la evolución política y social en la comunidad internacional que, después de todo, refleja las aspiraciones de la comunidad internacional.

75. La aceptación del derecho de asilo diplomático por razones humanitarias permitiría enfrentar ciertas situaciones bien conocidas, tales como las que se plantean como resultado de perturbaciones políticas y sociales internas. En esas situaciones, muchas personas podrían encontrarse en peligro y salvaguardar sus vidas sólo refugiándose en una embajada o consulado. La concesión del asilo en tales casos podría salvar la vida de una persona inocente y no debería interpretarse como una contravención de los principios del derecho internacional o de la competencia de los tribunales apropiados.

76. Por otra parte, es necesario definir el término “delito político” si el principio del asilo diplomático ha de tener la eficacia deseada. La existencia de una definición impediría abusos del derecho de asilo en situaciones fuera del alcance de la definición. Los representantes diplomáticos estarían facultados para determinar si la situación del refugiado justifica la excepción de “delito político” sobre la base de sus circunstancias particulares. Naturalmente, el asilo cesaría tan pronto como el refugiado dejara de estar en peligro.

77. La defensa de principios humanitarios básicos, tales como el de preservar la vida de personas inocentes, justifica que la comunidad internacional se ocupe de la cuestión del asilo diplomático. Sin embargo, la decisión de recomendar la preparación de un instrumento internacional sobre la cuestión sería prematura y no ayudaría a lograr los objetivos que ha enunciado.

78. Para concluir, agradece a la Secretaría su minucioso informe.

79. El Sr. RETIVEAU (Francia) dice que las opiniones de su Gobierno están enunciadas en el documento A/10139, parte I. Felicita al Secretario General por su informe, que constituirá una valiosa guía para los Estados.

80. Su delegación simpatiza con las consideraciones humanitarias que llevaron a la delegación de Australia a plantear la cuestión del asilo diplomático en el vigésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General, y tiene entendido que, al hacerlo, ella se ha guiado únicamente por el deseo de explorar nuevos medios de salvar vidas amenazadas en casos determinados. Sin embargo, es improbable que una empresa de esa índole logre éxito en las circunstancias actuales.

81. El asilo diplomático, a diferencia del asilo territorial, no es una institución de derecho internacional general, sino que en la práctica se limita esencialmente a los países latinoamericanos. Esa situación se explica por el hecho de que, si bien el asilo territorial es uno de los derechos que puede ejercer un Estado dentro de su esfera de competencia, el asilo diplomático es una derogación de la soberanía de un Estado, pues sustrae al delincuente de la justicia de su país. Además, aun sin esas objeciones, es evidente que habría considerable dificultad en elaborar reglas al respecto dentro de las Naciones Unidas, dado que la práctica de los Estados varía ampliamente y en muchas regiones del mundo no existe tradición con respecto a la práctica del asilo diplomático. En consecuencia, su delegación cree que la cuestión del asilo diplomático no se presta para la formulación de reglas de aplicación universal. La existencia de reglas rígidas podría incluso actuar contra las preocupaciones humanitarias en las que se basa la resolución 3321 (XXIX) de la Asamblea General.

82. Su delegación ha escuchado con gran interés la declaración formulada por el representante de Australia. Considera que debería pedirse a los Estados Miembros que proporcionaran más información sobre el asilo diplomático, pues esa información sería útil para proseguir los esfuerzos ya realizados por asegurar el respeto de los derechos humanos.

Se levanta la sesión a las 17.55 horas.

1556a. sesión

Martes 4 de noviembre de 1975, a las 10.55 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1556

En ausencia del Presidente, el Sr. Godoy (Paraguay), Vicepresidente, ocupa la Presidencia.

TEMA 111 DEL PROGRAMA

Cuestión del asilo diplomático: informe del Secretario General (continuación) (A/10139, parte I y Add.1 y parte II; A/C.6/L.1018)

1. El PRESIDENTE anuncia que se ha distribuido un proyecto de resolución sobre la cuestión del asilo diplomático (A/C.6/L.1018).

2. El Sr. YOKOTA (Japón) felicita al Secretario General por su excelente informe (A/10139, parte II) y reitera su agradecimiento a la delegación de Australia por la iniciativa que tomó el año anterior, basada en consideraciones

humanitarias, de proponer que se incluyera el tema en el programa de la Asamblea General para el vigésimo noveno período de sesiones. Su delegación ha escuchado con gran interés la declaración hecha por el representante de Australia (1551a. sesión).

3. La delegación del Japón está convencida de que es necesario prestar mayor atención a los problemas humanitarios para establecer un orden mundial que honre la dignidad y el valor de los seres humanos. No obstante, abriga ciertas dudas acerca de la conveniencia de institucionalizar el asilo diplomático a escala mundial. Como han hecho notar otras delegaciones y varias autoridades en la materia, el derecho de las misiones diplomáticas a conceder asilo no forma parte del derecho internacional general. Aunque la delegación del Japón no ignora que ha habido muchos casos en que las misiones diplomáticas se han utilizado para proteger a ciertas personas de un riesgo inminente debido a trastornos sociales o para sustraerlas a la jurisdicción del Estado territorial, considera que esas situaciones de hecho no engendran por sí derechos o deberes jurídicos. Para constituir una norma jurídica, las costumbres o usos deben ir acompañados de una *opinio juris* bien establecida. Este requisito no se da en el caso de la institución del asilo diplomático. Al hacer este aserto, la delegación del Japón no excluye la posible existencia de un derecho consuetudinario de asilo diplomático en algunas regiones, por ejemplo, en la América Latina. A ese respecto, el Sr. Yokota señala que el carácter regional de una institución no se modifica por el hecho de que recurra a ella la representación diplomática de un Estado ajeno a la región en referencia.

4. En relación con la conveniencia de institucionalizar el asilo diplomático como forma de desarrollo progresivo del derecho internacional, la delegación del Japón desea hacer dos consideraciones. En primer lugar, aunque es cierto que la institución del asilo diplomático impone una seria limitación a la jurisdicción territorial del Estado, ello no constituye de por sí un impedimento. En efecto, la aceptación de limitaciones a la jurisdicción territorial constituye la base de la cooperación internacional. Lo que preocupa al Sr. Yokota es el carácter y el alcance de esa limitación. En su opinión, la clave está en determinar si se debe aceptar, como principio general, la limitación de jurisdicción que hasta ahora se ha venido ejerciendo en el caso de los delitos políticos. En segundo lugar, en lo que se refiere a la compatibilidad de la institución del asilo diplomático con las funciones de las misiones diplomáticas, el representante del Japón considera que la concesión del asilo político puede redundar en perjuicio del fin principal de una misión diplomática, a saber, fomentar las relaciones de amistad entre los Estados. Aunque se ha alegado que en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas¹ no se hace una enumeración exhaustiva de las funciones de las misiones diplomáticas, la idea de utilizar los locales diplomáticos como refugio no se puede justificar, ya que su inviolabilidad sólo tiene por objeto asegurar la eficacia de sus actividades.

5. Al hacer esas consideraciones, la delegación del Japón no excluye la existencia de la institución del asilo diplo-

mático en una región concreta, ni niega el hecho de que, en circunstancias excepcionales, sea preciso adoptar medidas excepcionales. Precisamente por ese carácter excepcional, el Sr. Yokota considera imposible formular una disposición jurídica aplicable a todos los casos, los que se han de considerar individualmente.

6. El Sr. GARCIA ORTIZ (Ecuador) felicita al representante de Australia por su exposición y al Secretario General por su informe. El Ecuador patrocinó el proyecto de resolución presentado por Australia en el vigésimo noveno período de sesiones, aprobado por la Asamblea General como resolución 3321 (XXIX), y remitió sus observaciones (véase A/10139, parte I) al Secretario General en cumplimiento de esa resolución.

7. Se ha alegado que el asilo diplomático tiene un carácter humanitario pero que carece de fundamentación jurídica. Precisamente por eso es necesario establecer una convención de alcance universal, suscrita y ratificada por una mayoría de Estados, para que entre a formar parte del derecho internacional general. Que el asilo diplomático implique una restricción de la soberanía del Estado no resta nada a su efectividad práctica. Además, el actual concepto de soberanía sólo puede y debe ser entendido como relativo y limitado por la primacía del orden jurídico internacional. En relación con el argumento de que el asilo diplomático está en contradicción con las normas de la Convención de Viena, el Sr. García Ortiz dice que eso se subsanaría mediante la aceptación de una nueva convención sobre asilo.

8. El asilo diplomático no es una invención de la América Latina, sino que tiene un origen europeo. Lo que sucede es que ha sido en la América Latina donde la institución ha enraizado y ha alcanzado un desarrollo notable, llegando a constituir uno de los pilares del derecho internacional americano y contribuyendo a preservar muchas vidas y libertades. Sólo ello justificaría su permanencia y universalización.

9. Al tratar de una institución nueva, lo que debe analizarse es si constituye o no una fase del desarrollo progresivo del derecho y si perfecciona el ordenamiento jurídico. El Sr. García Ortiz opina que no hay duda de que el asilo diplomático cumple con esos requisitos, pues implica la aplicación de los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos, en 1948, y en otras similares. El Ecuador considera que no hay argumento eficaz posible en contra del asilo, sino, a lo sumo, problemas técnicos susceptibles de solución. El núcleo de la problemática del asilo es el asunto de la calificación del delito y la necesaria delimitación de las fronteras entre los delitos políticos y los delitos comunes, que obviamente están descartados de la posibilidad de amparo. La calificación del delito sólo puede atribuirse al Estado que concede el asilo.

10. El Sr. García Ortiz ratifica los puntos enunciados por el Gobierno del Ecuador en las observaciones que remitió al Secretario General y se adhiere a las delegaciones que han solicitado que se dé curso al tema, se vuelva a pedir opiniones y sugerencias a aquellos Estados que aún no lo hayan hecho y se inscriba de nuevo el tema en el programa del trigésimo primer período de sesiones, para que la Sexta

¹ Naciones Unidas, *Recueil des Traités*, vol. 500, No. 7310, pág. 162.

Comisión examine un proyecto de convención que permita la universalización del asilo y contribuya, de ese modo, al desarrollo progresivo del derecho. En cualquier caso, el Ecuador seguirá manteniendo y practicando el asilo diplomático, así como el refugio territorial.

11. El Sr. MONTENEGRO (Nicaragua) felicita al Secretario General por su informe y a la delegación de Australia por su constructivo esfuerzo para la inclusión del tema en el programa del vigésimo noveno período de sesiones. El representante de Nicaragua considera que la cuestión del asilo diplomático es muy relevante, porque afecta a los intereses de la persona humana. Ese tema, tan debatido, ha sido objeto de numerosos estudios, relativos, entre otros aspectos, a la calificación del delito y a la delimitación de las jurisdicciones. El asilo diplomático contribuye a la defensa de los derechos fundamentales que posibilitan la paz y la seguridad internacionales.

12. Aunque no se trata de una institución exclusivamente latinoamericana y tiene un origen europeo, ha sido en la América Latina donde el asilo diplomático se ha perfeccionado, llegándose a una coincidencia de criterios. Así, la Constitución de Nicaragua afirma que el territorio de Nicaragua es de asilo para todo perseguido político.

13. El Sr. Montenegro no cree que la institución del asilo diplomático constituya una fuente de fricciones o se oponga a las relaciones de amistad entre los Estados. Además, aunque supone una limitación de la jurisdicción territorial, el asilo diplomático no menoscaba el derecho ni la soberanía de los Estados, pues establece una neta distinción entre los delitos políticos y los delitos comunes, y el mismo hecho de formar parte de una convención constituye un acto de soberanía.

14. Nicaragua realizará cuantos esfuerzos sean necesarios para conseguir proporcionar un fundamento jurídico al asilo diplomático mediante una convención de alcance universal. A ese respecto, el Sr. Montenegro apoya la idea de que la Asamblea General siga estudiando el tema y que se incluya en el programa del trigésimo primer período de sesiones.

15. El Sr. KHAN (Pakistán) manifiesta que para su delegación el derecho de conceder asilo diplomático es básicamente una cuestión de *lege ferenda* y no de *lex lata*. El asilo diplomático es el refugio que se otorga en una misión diplomática, consulado, buque o aeronave extranjeros, para sustraer a una persona del proceso jurisdiccional del Estado que aquélla trata de abandonar. En cuanto concepto jurídico, el asilo se basa en la teoría de la "extraterritorialidad" de una misión diplomática o buque. Según muchos expertos, la concesión de asilo diplomático entraña una derogación notable de la soberanía territorial del Estado huésped. Su delegación opina que esa cuestión delicada e importante debe examinarse detenidamente antes de que la Comisión se pronuncie a su respecto.

16. El asilo diplomático sólo ha de concederse cuando existe un peligro inminente para la vida de la persona que lo solicite, la cual no debe ser un delincuente de derecho común. Sin embargo, debe precisarse clara e inequívocamente lo que constituye un "peligro inminente".

17. El asilo diplomático difiere del asilo territorial por su carácter transitorio. El estado asilante debe entregar a la persona asilada una vez que haya desaparecido el peligro inminente, e igualmente está obligado a garantizar que, durante el período de asilo, la persona asilada se abstenga de realizar actividades políticas desfavorables a los intereses de su Estado.

18. Su delegación reitera las opiniones de su Gobierno contenidas en el documento A/10139, parte I. A su juicio, el estudio futuro de esa materia ha de basarse en los siguientes principios: a) debe concederse asilo diplomático en caso de persecución por razones políticas, raciales o religiosas, cuando exista un peligro inminente para la vida, sin que ello se extienda al peligro para la libertad; b) no debe convertirse el asilo diplomático en asilo territorial, conduciendo al asilado al territorio del Estado asilante; y c) debe entregarse al asilado a la autoridad del Estado en que se ha cometido el delito cuando existan garantías de que se observará un procedimiento normal.

19. El Sr. AL-ADHAMI (Iraq) dice que la delegación del Iraq está convencida de que no existe regla alguna que obligue a los Estados a reconocer el derecho de asilo diplomático a excepción de los Estados que ya lo han aceptado. Se plantea la cuestión de si conviene hacer extensiva una institución regional al conjunto de la comunidad internacional. Su delegación no considera que ése sea el caso. En primer lugar está la cuestión compleja de elaborar textos adecuados y definir los delitos políticos. Otra cuestión es la de establecer si el asilo es un derecho del individuo o del Estado, y cuáles son sus consecuencias sobre las relaciones entre los Estados. En segundo lugar está la imposibilidad de examinar la cuestión del asilo diplomático separadamente de la realidad del mundo actual. La historia moderna, especialmente después de la segunda guerra mundial, enseña que algunos Estados han utilizado los pretextos más diversos para atentar contra la soberanía de otros Estados e intervenir en sus asuntos internos. Por ese motivo, es legítimo preguntarse si el asilo diplomático no se convertiría en un arma para atentar contra esa soberanía e intervenir en esos asuntos. Desde luego que cabe remitirse a la feliz experiencia del asilo diplomático en la América Latina, pero no debe olvidarse el marco histórico, político y geográfico del desarrollo de tal institución en la América Latina. Por ello, el Sr. Al-Adhami considera prematura la elaboración de cualquier texto sobre el tema.

20. El Sr. PRIETO (Chile) declara que el Gobierno de Chile no ha hecho llegar al Secretario General sus opiniones sobre la cuestión del asilo diplomático, pues ha preferido exponer sus puntos de vista sobre el particular durante el debate general, con la esperanza de que sus alegaciones en favor de la institucionalización del asilo diplomático a nivel universal puedan cobrar mayor fuerza y, de ese modo, contribuir en alguna manera a la resolución que en definitiva adopte la Comisión en esa materia.

21. Chile tiene una valiosa experiencia práctica que aportar en cuanto al asilo diplomático, y la continuada tradición chilena en esa materia es inherente a la historia de un pueblo en el cual existe la arraigada convicción de que lo fundamental son los valores esenciales del hombre.

22. Chile no sólo ha cumplido estrictamente las diversas convenciones que ha ratificado sobre asilo diplomático, sino

que incluso ha permitido que invocaran la institución del asilo otros Estados que no tenían derecho alguno para hacerlo, y ello por razones puramente humanitarias. Chile jamás ha puesto inconveniente alguno en materia de asilo diplomático.

23. Su Gobierno está firmemente convencido de que mientras mayor sea la incertidumbre que exista respecto de los principios aplicables en materia de asilo diplomático, mayores serán también las consecuencias adversas para las relaciones amistosas que deben exigirse entre los Estados.

24. Una obligación fundamental de las Naciones Unidas es crear las instituciones básicas que resguarden los derechos esenciales del hombre. La propia Carta otorga a la Organización el mandato de desarrollar progresivamente el derecho internacional en los más diversos campos, y tanto más urgentemente en el del asilo diplomático.

25. Casi toda la América Latina ha sido un ejemplo permanente en cuanto al respeto del asilo diplomático se refiere. Frente a lo que afirman los tratadistas, en orden a que el asilo diplomático se institucionalizó en la América Latina como consecuencia de las turbulencias que siguieron al logro de la independencia de esos Estados, cabe preguntarse si existe algún rincón en el mundo que pueda sentirse a salvo de idénticas turbulencias y por razones ciertamente muy distintas. El Sr. Yepes, al presentar una propuesta específica sobre el asilo diplomático a la Comisión de Derecho Internacional el 5 de mayo de 1949, afirmó que no era exacto que los Estados de la América Latina fueran los únicos que hubieran reconocido el derecho de conceder asilo a los refugiados políticos, pero que no obstante, eran los que lo habían practicado con mayor frecuencia y que, al hacer uso frecuente del derecho de asilo, esos países habían permitido a jefes políticos, que de otra forma hubieran sido sin duda sacrificados al odio y al rencor de los adversarios, prestar a sus países servicios inapreciables².

26. Una de las principales objeciones que se han hecho para fundamentar la negativa a que el asilo diplomático se institucionalice universalmente consiste en señalar que ello entrañaría una derogación de la soberanía del Estado territorial. Sin embargo, ese argumento es falaz, ya que lo mismo cabría decir en contra de todas las normas en desarrollo del derecho internacional consuetudinario, y también en contra de toda convención que obligue en algún sentido a un Estado. Cuanto se exprese en uno u otro sentido no pasa de ser una discusión tanto más baladí, si se tiene presente que las víctimas de la discusión no serán los académicos que la sostienen, sino aquellos a quienes se niega entregar una herramienta tan importante como el asilo diplomático.

27. La América Latina, por razones meramente humanitarias, ha preferido limitar su propia soberanía, pues lo fundamental son los derechos humanos.

28. Se ha manifestado que la concesión del asilo diplomático a una persona sometida a la jurisdicción del Estado receptor representaba claramente una injerencia en los asuntos internos de ese Estado, pero, por el contrario, es

una prueba de madurez política permitir a otro gobierno que evalúe con sangre fría lo que los interesados juzgaban con pasión y reconocer que esa evaluación no era un acto de enemistad sino más bien el ejercicio de un poder consagrado por el derecho internacional.

29. Otras delegaciones han señalado que la concesión del asilo diplomático es incompatible con el párrafo 3 del artículo 41 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y que la concesión del asilo diplomático no figuraba entre las funciones de las misiones diplomáticas definidas en el artículo 3 de dicho instrumento. Ahora bien, es fundamental tener presente que el artículo 3 de la Convención de Viena no contiene una enumeración exhaustiva de las funciones de la misión diplomática, por lo que no existen razones con real fundamento jurídico para llegar a la conclusión de que no es posible universalizar la institución del asilo diplomático.

30. El derecho es una ciencia que debe estar al servicio del hombre, y convendría que la Sexta Comisión arbitrara medidas para que la universalización del asilo diplomático se consiguiera en plazos prudentes. Existen varios caminos para conseguirlo y Chile está dispuesto a apoyar cualquier iniciativa que tienda a conseguir un objetivo tan genoroso como imperativo.

31. El Sr. CRUCHO DE ALMEIDA (Portugal) estima que la Sexta Comisión debate actualmente una cuestión de auténtica trascendencia humanitaria, y la delegación portuguesa se considera obligada a responder a la iniciativa de la delegación de Australia y de otras delegaciones que estimularon el debate. Las Naciones Unidas, al igual que la Sociedad de las Naciones, no han olvidado los padecimientos de los refugiados. A ese respecto, cabe mencionar la labor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la aprobación de la resolución 2312 (XXII) de la Asamblea General y la adopción por la Conferencia de plenipotenciarios de las Naciones Unidas de la Convención sobre el Estatuto de los refugiados³, en 1951, y la adopción del Protocolo de 1967⁴ al que Portugal está a punto de adherirse.

32. La definición del derecho de asilo diplomático es una parte limitada de la amplia cuestión de los refugiados. Sería inadmisibles que la Comisión tomara a la ligera la cuestión del asilo diplomático, que está enraizada en los mismos antecedentes que el problema general de los refugiados.

33. Su delegación abordará esa cuestión desde un punto de vista pragmático y no teórico. El primer dato de que debe partirse es la incertidumbre que existe en relación con los aspectos jurídicos del asilo diplomático. Ese hecho señala la necesidad de ulteriores estudios de la materia y, en su caso, de cierta aclaración de la cuestión, por ejemplo mediante la formulación de recomendaciones prácticas.

34. Por otra parte, todo nuevo estudio de la materia hará necesario adoptar una posición, por lo menos con respecto a dos cuestiones decisivas y muy delicadas: qué es un delito de derecho común en contraposición a un delito político y

² Véase *Yearbook of the International Law Commission*, 1949, 16a. sesión, párr. 69 (en inglés solamente).

³ Naciones Unidas, *Recueil des Traités*, vol. 189, No. 2545, pág. 137.

⁴ *Ibid.*, vol. 606, No. 8791, pág. 267.

cuándo la concesión de asilo diplomático adquiere carácter urgente frente a trastornos políticos internos.

35. No se ha podido dar todavía una respuesta precisa o satisfactoria a la primera cuestión, mientras que la segunda, por su naturaleza, rebasa cualquier marco jurídico y entra en el campo de la discreción y la prudencia.

36. Puede, por ello, entenderse la vacilación de los Estados en adoptar una posición oficial sobre la materia. Sin embargo, los Estados latinoamericanos han adoptado oficialmente posiciones al respecto en varios tratados. Para comprender ese fenómeno, debe tenerse presente que esos países tienen un firme sentimiento de hermandad y comparten profundamente valores comunes. Ese patrimonio común ha resultado más duradero que las divergencias transitorias. ¿Cabe decir lo mismo de la comunidad mundial en la presente situación? En caso negativo, no debe tratarse de imitar las formas jurídicas de una comunidad cuyas normas de conducta internacional no se está dispuesto a aceptar en general y a observar persistentemente.

37. Otra consideración fundamental es la de si en los casos en que se negó el derecho de asilo esa circunstancia afectó a las consecuencias humanitarias de tales casos. Al respecto, cabe decir que en muchos casos en que no se reconocía en general el derecho de asilo diplomático, las partes interesadas convinieron en conceder asilo, bien fuera por tolerancia del Estado territorial o sobre la base de acuerdos especiales, a cuyo respecto puede mencionarse el párrafo 3 del artículo 41 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.

38. Si una embajada recibe a un refugiado, aunque no tenga derecho de conceder asilo, el derecho de inviolabilidad de los locales garantizará *in extremis* la protección del refugiado hasta que pueda resolverse mediante negociaciones la controversia entre las partes interesadas.

39. En cuanto a los casos de denegación de asilo que se mencionan en el informe del Secretario General, puede afirmarse que ninguno de ellos reunía condiciones para la concesión de asilo, aun cuando se reconociera en general el derecho de asilo diplomático.

40. Esas últimas consideraciones no confieren urgencia a la necesidad de reconsiderar los aspectos jurídicos del asilo diplomático pero, al mismo tiempo, no tranquilizan la conciencia. Al igual que en la esfera de la criminalidad, podemos hablar de las estadísticas negras del asilo diplomático. Solamente se conocen los delitos que se comunican a la policía. Si se hubiera reconocido en general el derecho de asilo diplomático, ¿cuántos más casos de asilo se habrían solicitado y concedido?

41. Enfrentada con diversos factores contradictorios, la delegación portuguesa está dispuesta a aceptar la opinión de la mayoría de la Comisión, pero espera que, por lo menos, los Estados continuarán examinando esa materia y comunicarán sus opiniones sobre ella a la Asamblea General.

42. El Sr. FERNANDEZ BALLESTEROS (Uruguay) dice que, si bien se esperaba la reacción contraria de muchos Estados Miembros respecto del tema en discusión, no se

creía que llegara a extremos como proponer que no se siguiera con su examen, especialmente si se tiene en cuenta que esa opinión fue expresada antes de conocer el informe del Secretario General y las opiniones de otros Estados, en particular las observaciones formuladas por el Gobierno de Australia (véase A/10139, parte I) y la intervención del Sr. Lauterpacht (1551a. sesión). Al respecto, el orador dice que quienes aplaudieron en el período anterior al Gobierno de Australia por su iniciativa de solicitar la inclusión del tema, deben expresar su respeto intelectual por el criterio y la erudición demostrados en ambas oportunidades, y su delegación, orgullosa de que en la América Latina se haya consagrado desde hace tanto tiempo, de hecho y de derecho, una institución que tiende a proteger los más caros bienes del ser humano, su vida y su libertad, se siente obligada a acompañar a Australia en su noble propósito.

43. Con objeto de disipar las dudas a que ha dado lugar el asilo diplomático, injustificadamente en opinión de su delegación, el orador recuerda que algunas delegaciones se han referido, en primer lugar, a la falta de base jurídica del asilo diplomático, y dice que no constituye una crítica al asilo diplomático como institución, sino precisamente a la actitud adoptada por muchos Estados que lo practican sin nombrarlo y sin previamente reconocerlo como parte del derecho internacional, lo que demuestra lo acertado de la propuesta de Australia, cuya única finalidad es convertirlo en parte del derecho internacional general.

44. Refiriéndose al argumento de que el asilo diplomático carece de fundamento por cuanto la teoría de la extraterritorialidad de los locales diplomáticos ha sido abandonada, el orador cita a Reale, quien estima que consideraciones más humanitarias que jurídicas justificarían la institución, aunque en forma reglamentada para evitar abusos, y a Cabral de Moncada, quien dice que se trata de una institución humanitaria basada en la protección internacional de los derechos mínimos de la persona humana. Según Accioly, el asilo diplomático debidamente reglamentado, restringido a casos políticos y discretamente utilizados, presta todavía servicios reales y no es incompatible con los principios que regulan la concesión de los privilegios e inmunidades. Por su parte, el tratadista uruguayo Vieira dice que la tendencia moderna centra su preocupación no solamente en el Estado, sino en el hombre como sujeto de derecho internacional, del cual los Estados son meros servidores. Hugo Gobbí, en un artículo publicado en la *Revista Española de Derecho Internacional*, de 1962, titulado "Ensayo de una crítica del asilo diplomático", dice que lo que hace lícita la no entrega del delincuente es única y exclusivamente la norma contractual o consuetudinaria que establece el asilo y, tras reconocer que la doctrina de la extraterritorialidad no sirve para fundamentar el asilo en la actualidad, afirma que el único fundamento jurídico del asilo está dado por las normas del asilo mismo.

45. En cuanto al argumento de que, el asilo diplomático significa una injerencia en los asuntos internos de otro Estado, el orador estima que ha perdido toda su validez, y cita a Gobbí, quien afirma que, de toda evidencia, la existencia de una norma internacional, ya sea consuetudinaria o contractual, que limita la facultad sancionadora de un Estado y posibilita la actuación de otro Estado, en ese caso en calidad de asilante, significa que se ha producido una especie de estrechamiento lícito del ámbito del

dominio reservado o de la jurisdicción doméstica de un Estado. El orador cita además a Charles Rousseau quien, en su obra *Derecho Internacional Público*, distingue entre intervenciones lícitas e ilícitas⁵, siendo las últimas aquellas en que el Estado que interviene actúa sin título jurídico suficiente, y afirma que la intervención es lícita cuando el Estado actúa en virtud de un derecho propio, lo que ocurre, entre otras circunstancias, siempre que se pueda invocar un tratado especial o una norma abstracta y en ciertas hipótesis en que el Estado actúa en beneficio del interés general de la comunidad internacional, como es el caso de las intervenciones de policía internacional y, sobre todo, en la intervención de humanidad, práctica particularmente dirigida a impedir crueldades y atrocidades. El orador dice que ello demuestra que la regulación jurídica del asilo diplomático enerva por sí misma las críticas que se le hacen respecto de la limitación de soberanía o de la injerencia en los asuntos internos de otro Estado.

46. El orador sostiene que el ejemplo de los países latinoamericanos consiste en haber conseguido, mediante un acto soberano, la juridicidad de la renuncia, haciendo prevalecer los caros postulados que el asilo diplomático representa y defiende, al igual que en el caso de la renuncia que implica la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, y afirma que lo que se discute es la conveniencia de llegar a una consagración jurídica universal del asilo diplomático, que se desprende de dos elementos: la propia actitud en los hechos y en las palabras de quienes se oponen al asilo diplomático y el reconocimiento general que ha obtenido el asilo territorial, y recuerda los ejemplos que cita el tratadista Rousseau en su obra citada, además de los que señaló la delegación de Australia, el caso de la guerra civil española y más recientemente el de Chile, además de los casos del Cardenal Mindszenty y el Primer Ministro húngaro Imre Nagy en Hungría en 1956. Ello se refleja en la opinión prácticamente unánime de reconocer los fundamentos humanitarios del asilo diplomático, pero llevar a cabo su práctica sin previamente establecer y cumplir las normas dentro de las cuales se reglamentará su ejercicio puede significar una grave lesión a los derechos soberanos del Estado territorial, lo que constituye el primer argumento para sostener la necesidad de proseguir los estudios e intentar plasmarlos en el reconocimiento universal de ese derecho.

47. Los mismos Estados que niegan el asilo diplomático aceptan en cambio el asilo territorial, que también ha sido reconocido en la América Latina desde fines del siglo XIX, aunque, a pesar de ello, la delegación del Uruguay no se atreve a hacer una afirmación tan tajante. Se afirma que la Declaración Universal de Derechos Humanos sólo hace referencia al asilo territorial, pero el orador recuerda al respecto que la delegación boliviana y la uruguaya intentaron sin éxito extender las disposiciones acerca del asilo territorial al asilo diplomático, y que las enmiendas presentadas por esas delegaciones en los documentos A/C.3/227 y A/C.3/268 fueron retiradas en la 122a. sesión de la Tercera Comisión para evitar que un voto contrario sentara un precedente inconveniente y debilitara en consecuencia el principio.

48. Como ha afirmado el representante de Guatemala (1553a. sesión), el asilo territorial podría significar, en la interpretación de quienes critican el asilo diplomático, una injerencia en los asuntos internos de otro Estado. El tratadista uruguayo Quintín Alfonsín, criticando la tesis de la Declaración Universal de Derechos Humanos, decía que a primera vista no se encontraba razón alguna para que esa Declaración consagrara un asilo y no el otro. El orador agrega que en el Primer Congreso Hispano Luso Americano de Derecho Internacional se formuló una declaración en que se establece que el derecho de asilo diplomático es inherente a la persona humana.

49. En cuanto al fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso Haya de La Torre⁶, el orador recuerda que es un fallo en el que hay una contradicción, y que la base jurídica de discusión fue la Convención de La Habana de 1928⁷, que ha sido superada por la Convención de Caracas de 1954⁸, hasta el punto de que en la actualidad, si se planteara un caso idéntico, el recurso ante la Corte no tendría razón de ser, porque lo que se discutió, en definitiva, fue el derecho de calificación por el asilante, que para Colombia estaba implícito en la Convención de La Habana. Ese fallo de la Corte Internacional de Justicia provocó la reacción americana, cuya consecuencia fue la redacción y firma del tratado de Caracas de 1954, en cuyo artículo 4 se establece que "corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución". En consecuencia, el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso Haya de La Torre conserva solamente su valor histórico, como reflejo de una coyuntura especial en el desarrollo del derecho de asilo en América, pero debe considerarse letra muerta en lo que a fundamento y principio del asilo diplomático se refiere.

50. En cuanto al terrorismo, la presunta crítica va dirigida solamente a uno de los aspectos del asilo diplomático que no corresponde analizar cuando todavía se discute la validez jurídica y humanitaria de su fundamento y la conveniencia o no de continuar su estudio.

51. La delegación del Uruguay considera que están fuera de la realidad las opiniones que estiman que la práctica latinoamericana no puede servir de base a los trabajos de la Comisión, en circunstancias en que el asilo diplomático nació, creció y adquirió su plena madurez jurídica en el seno de la América Latina, y reitera que no admitirá el menor detrimento de los principios que se han logrado consagrar al cabo de tantos años, y apoya, en consecuencia, el procedimiento propuesto por la delegación de Guatemala.

52. La delegación del Uruguay cree que el asilo diplomático constituye un instrumento necesario para la protección, en ciertas circunstancias, de los derechos del ser humano, tan proclamados, y al mismo tiempo, tan pisoteados en los tiempos actuales. Es cierto que en la actualidad constituye un remedio imperfecto, pero más vale una solución imperfecta que la carencia de remedio contra

⁶ *Affaire Haya de la Torre, Arrêt du 13 juin 1951: C.I.J. Recueil 1951. pag. 71.*

⁷ Véase Unión Panamericana, *Tratados y Convenciones Interamericanas sobre Asilo y Extradición*, Serie sobre tratados 34 (OEA Documentos Oficiales, OEA/Ser.X/7), pag. 27.

⁸ *Ibid.*, pag. 81.

⁵ Traducción al español por F. Giménez Artigues, Ediciones Ariel, S.L., Barcelona, 1957, págs. 309 y 311.

las opresiones de que es objeto quien ocupa el centro de las preocupaciones del derecho, el ser humano. Se trata de mejorar su mecanismo en esa etapa, utilizando para ello el contralor del derecho internacional tendiente a impedir el desconocimiento por parte de los gobernantes del respeto debido a la personalidad humana por un lado y eliminar los abusos cometidos en su ejercicio por otros.

53. El Sr. PEDAUYE (España) agradece al Gobierno de Australia la iniciativa que adoptó en el vigésimo noveno período de sesiones de llamar la atención de la Asamblea General sobre la cuestión del asilo diplomático, iniciativa que ya ha producido importantes resultados, como las intervenciones de diversas delegaciones, las respuestas de 25 Estados y el informe objetivo, bien elaborado y sumamente valioso del Secretario General. El orador recuerda que el asilo es una vieja institución jurídica, que se aplicó en la Edad Media europea en recintos sagrados y se secularizó en los siglos XV y XVI con la aparición del Estado moderno, y que el asilo diplomático es una institución de derecho internacional particular de iberoamérica, regulada por diversos tratados internacionales, cuyos grandes principios son los siguientes: *a)* el asilo protege exclusivamente a personas perseguidas por motivos o delitos políticos; *b)* corresponde al Estado asilante la calificación del delito y la urgencia del asilo solicitado; *c)* el Estado es libre de conceder o negar asilo diplomático, y *d)* el Estado territorial está obligado a conceder salvoconducto tan pronto como lo solicite el Estado asilante. El carácter convencional de la institución del asilo en iberoamérica hace que en esa región no se plantee el problema que ha frenado su desarrollo en otros continentes, a saber, la supuesta derogación del principio de la soberanía territorial de los Estados.

54. Sin embargo, como señaló el representante de Australia, muchos Estados no latinoamericanos han ejercido en diferentes ocasiones y oportunidades el derecho de asilo, como ocurrió en Madrid en 1936 y más recientemente en Santiago de Chile. Todo parecería indicar que el asilo diplomático pudo ser efectivo en esos casos gracias a la tolerancia del Estado territorial, que respetó la inviolabilidad de los locales diplomáticos en una serie de casos en que determinados Estados asilantes, que formalmente declaraban y declaran no hallarse vinculados por la institución, se vieron impulsados por razones graves a dar refugio a determinadas personas. El elemento decisivo para la la concesión del refugio sería, a juicio de su delegación, la consideración de la existencia de circunstancias de emergencia política de carácter grave que impulsarían a los Estados a defender a la persona humana contra violencias injustificables. Por otra parte, parecería que en esos mismos casos no existe un atentado al ejercicio normal por parte del Estado territorial de su jurisdicción, por cuanto el Estado asilante sale en ayuda de un individuo que no puede ser

protegido por el Estado territorial en momentos en que no ejerce el control en su propio territorio. Por ello, parecería también descartado el elemento de injerencia en los asuntos internos de otros Estados y no podría considerarse esa concesión de asilo por un deber de humanidad como un acto inamistoso frente a otro Estado.

55. La delegación de España estima que la institución del asilo diplomático es más compleja de lo que parece a primera vista y que encierra elementos altamente positivos que hacen que se recurra a ella en determinadas circunstancias, incluso por aquellos Estados que formalmente declaran no aceptarla. Por esos motivos, la delegación de España se une a quienes la han precedido señalando la necesidad de proseguir el examen de esa cuestión, y está dispuesta a apoyar, en caso de existir consenso en la Comisión, la constitución de un grupo de expertos que continúe estudiando el tema del asilo diplomático con objeto de que sus principios puedan trasladarse al ámbito universal. La delegación de España apoya cualquier iniciativa en ese sentido, porque considera que podría tener importancia para el desarrollo del derecho internacional en el campo humanitario y, al mismo tiempo, evitaría la doble medida que algunos Estados utilizan en ese terreno.

56. El Sr. HAGARD (Suecia) dice que no se han modificado las opiniones expresadas por su delegación en el vigésimo noveno período de sesiones (1506a. sesión) ni las enviadas por su Gobierno al Secretario General (A/10139, parte I). La delegación de Suecia reitera que, si se exceptúa la América Latina, el asilo diplomático no está reconocido en sí mismo como una institución jurídica, aunque está de acuerdo en que, en ciertos casos excepcionales, las consideraciones humanitarias y la necesidad de proteger unos derechos humanos fundamentales tienen una importancia decisiva. El Sr. Hagar no considera que sea necesario formular inmediatamente un instrumento internacional en una esfera en la que la acción de los Estados se rige por consideraciones humanitarias y no estrictamente jurídicas.

57. El representante de Suecia considera que su delegación podrá apoyar el proyecto de resolución contenido en el documento A/C.6/L.1018, y expresa su reconocimiento a la delegación de Australia por su interesante introducción y por la actitud tan constructiva que ha adoptado. Aunque su delegación se muestra algo escéptica acerca de la necesidad o la conveniencia de proceder a una codificación del asilo diplomático, considera que los debates de la Comisión y las opiniones de los gobiernos son interesantes y valiosas.

58. El PRESIDENTE anuncia que Dahomey, el Ecuador y Nicaragua se han unido a los patrocinadores del proyecto de resolución contenido en el documento A/C.6/L.1018.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

1557a. sesión

Martes 4 de noviembre de 1975, a las 15.20 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1557

TEMA 111 DEL PROGRAMA

Cuestión del asilo diplomático: informe del Secretario General (continuación) (A/10139, parte I y Add.1 y parte II; A/C.6/L.1018)

1. El Sr. HAFIZ (Bangladesh) felicita a la delegación australiana por haber propuesto que se haga un estudio preliminar de la delicadísima cuestión del asilo diplomático y elogia al Secretario General por su admirable informe (A/10139, parte II) sobre el tema. Debe trazarse una distinción entre el asilo territorial, respecto del cual existe cierta uniformidad en la práctica, y el asilo diplomático, que es una institución controvertida sobre la que no hay práctica uniforme y que algunos Estados Miembros no consideran parte del derecho internacional general. La institución del asilo diplomático, aunque no es ampliamente conocida en el Asia Sudoriental, es importante para esa región, debido a la inestabilidad política de la zona. La inestabilidad política existe en los pequeños países en desarrollo debido a que sus condiciones económicas, sociales y políticas cambian rápidamente; la injusta disparidad económica entre las clases lleva a constantes choques violentos entre los grupos políticos de esos Estados, que producen inestabilidad gubernamental y causan peligro para las vidas de los jefes de Estado y de gobierno. Por consiguiente, la institución del asilo diplomático es pertinente a esos países. En efecto, la cuestión tiene una atracción universal y se sostiene ampliamente en los pequeños Estados en general, y no sólo en los países latinoamericanos, por lo que debería estudiarse más con miras a llegar a un acuerdo internacional general sobre los principios que rigen esta institución.

2. La institución del asilo diplomático es tan antigua como la civilización; se basa en consideraciones humanitarias y, por consiguiente, cae dentro del ámbito del párrafo 3 del Artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas y del artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es necesaria para proteger a los defensores de las minorías raciales, culturales, religiosas y lingüísticas y a los dirigentes que afrontan su aniquilación inmediata por sostener determinadas opiniones políticas o por luchar por la liberación económica o nacional. Las personas perseguidas por turbas violentas que escapan al control del Estado territorial, los miembros de un gobierno legal cuyas vidas están en inminente peligro durante insurrecciones violentas y los dirigentes de grupos étnicos deberían poder invocar la protección de sus vidas como derecho humano básico. A ese respecto, el orador cita la concesión de asilo en 1973 a 8.000 personas por 25 misiones diplomáticas en Santiago de Chile.

3. En vista de la creciente interdependencia de las naciones, es necesario formular reglas universalmente aceptadas que establezcan normas mínimas para la concesión del

asilo diplomático, pese a las bien conocidas diferencias de opinión respecto de la legalidad y el alcance del derecho a tal asilo. La opinión de que conceder el asilo diplomático va contra las disposiciones de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas no se basa en una recta interpretación del derecho internacional. La concesión del asilo diplomático en casos graves y urgentes para la protección de las vidas de personas que lo solicitan por razones políticas u otras razones reconocidas constituye, a su juicio, una de las funciones de las misiones diplomáticas. Hablando en sentido estricto, la sola concesión de privilegios a las misiones diplomáticas en virtud de la Convención de Viena constituye en sí una derogación de la soberanía del Estado territorial. Además, el consentimiento de los Estados Miembros de respetar las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos ofrece una base para la protección de la vida humana en una misión diplomática en ciertas condiciones convenidas. Su Gobierno se adhiere a la plena observancia y aplicación de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, por consiguiente, apoyará todas las iniciativas y medidas adoptadas por las Naciones Unidas con miras al desarrollo progresivo y a la codificación del derecho internacional dentro de ese marco.

4. El orador sugiere que, al formular la reglamentación internacional sobre la cuestión del asilo diplomático, se tomen en consideración las siguientes directrices generales: el fundamento del asilo diplomático podría buscarse en los supremos principios de los derechos humanos y la dignidad humana; la cuestión del asilo diplomático es compleja y delicada y debería abordarse con suma prudencia y realismo; los mismos nobles principios en que se basa la concesión del asilo territorial deberían extenderse al asilo diplomático; la cuestión debería considerarse puramente por razones humanitarias y sobre fundamentos definidos; y debería informarse inmediatamente al Estado territorial cuando se ejercite el derecho a conceder el asilo diplomático.

5. El Sr. ABUL-KHEIR (Egipto) dice que su delegación admira a los países latinoamericanos por haber ofrecido a la comunidad internacional un ejemplo de cómo armonizar las exigencias de la soberanía nacional y del humanitarismo en un momento en que los derechos humanos constituyen una preocupación cardinal de la comunidad internacional y se han convertido en la piedra angular de las relaciones internacionales. Esa preocupación se manifiesta no sólo en la Declaración Universal de Derechos Humanos sino también en los esfuerzos para desarrollar leyes humanitarias relativas a las luchas armadas, los tratados multilaterales relativos a los derechos humanos y las resoluciones de la Asamblea General en las que se afirma el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales y en las que se condenan las violaciones de los derechos humanos y de los crímenes contra la humanidad.

6. El asilo diplomático, que es un aspecto de la defensa de los derechos humanos, es incluso más urgente que el asilo territorial en las situaciones en que un individuo no puede defenderse por sí mismo frente a una amenaza contra su vida. Las consideraciones en que se basa el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el que se afirma el derecho del individuo a solicitar asilo en otros países, justifican también el asilo diplomático.

7. La delegación australiana ha hecho bien en recordar a la comunidad internacional la necesidad de desarrollar principios jurídicos internacionales relativos a la práctica del asilo diplomático. Como su delegación destacó en el vigésimo noveno período de sesiones (1509a. sesión), existen diferencias de opinión entre los que consideran que la práctica se basa en principios de derecho internacional consuetudinario y los que temen que infringe la soberanía del Estado territorial y va contra el principio de la inmunidad diplomática. No obstante, su delegación comparte la opinión australiana de que el tema, y las consideraciones humanitarias en que se basa, merecen serio estudio con miras a preparar un proyecto que armonice las necesidades de la soberanía nacional y las consideraciones humanitarias. A ese respecto, el orador da las gracias al Secretario General por su excelente informe, que ha convencido a su delegación de la necesidad de establecer principios que pongan término a las actuales diferencias de opinión sobre la cuestión y colmen la laguna existente en el derecho.

8. Aunque durante el debate se ha dicho que el asilo diplomático está limitado a la América Latina, su delegación cree que todos los sistemas jurídicos nacionales tienen aspectos positivos a los que se puede recurrir para establecer normas jurídicas pertinentes que sean generalmente aplicables. El orador se pregunta si el asilo diplomático se ha practicado en otras regiones distintas de la América Latina, y en caso afirmativo, cuáles son los principios jurídicos en que se basa, y por qué la soberanía nacional y la inmunidad diplomática no han impedido la concesión del asilo. En realidad, Estados distintos de los Estados de la América Latina han practicado el asilo diplomático, como lo demuestran los Estados que han participado en el establecimiento de las Reglas de La Paz y de las Reglas de Asunción.

9. Dejar a cada Estado la libertad de conceder el asilo diplomático sin restricciones para impedir su abuso solamente podría perjudicar las relaciones de amistad entre los Estados. Por consiguiente, su delegación está a favor de establecer principios bien definidos, a fin de lograr relaciones internacionales amistosas basadas en el derecho, la justicia y el humanitarismo. Existe una serie de principios, en los que se deberían basar las normas jurídicas sobre el tema. El asilo diplomático se concede por razones políticas y los delitos comunes, incluso si tienen aspectos políticos, deberían excluirse. Por consiguiente, es necesario llegar a una definición clara y precisa de "delito político". Ese término, en opinión de los juristas, comprende la actividad política organizada, la actividad con características predominantemente políticas o la actividad encaminada a evitar la opresión política. A juicio de su delegación, comprende también la actividad individual continuada en pro de la libre determinación, los derechos humanos, la paz o la justicia, o contra el imperialismo, la ocupación extranjera o la

discriminación racial. No comprende la actividad dirigida contra la paz y la seguridad internacionales, los actos de traición o espionaje, los crímenes contra la humanidad o los crímenes de guerra, ya que los autores de tales actos no pueden ser protegidos por la doctrina humanitaria.

10. El asilo diplomático se concede debido a condiciones de urgencia, es decir, una amenaza contra la vida del asilado surgida durante disturbios internos o una guerra civil en la que las autoridades locales no pueden proporcionar protección, o no están dispuestas a hacerlo debido a que el asilado ha cometido un delito político, en el sentido en que el orador ha definido ese concepto. Deberá ponerse término al asilo si la misión diplomática considera que ya no hay razón para el mismo o que la misión erró al evaluar los hechos o la magnitud de la amenaza contra el asilado. Igualmente, el asilo podrá ser temporal si termina la amenaza contra el asilado. Por último, corresponde al Estado territorial proporcionar un salvoconducto al asilado si la misión diplomática así lo solicita, y el asilado no podrá ser entregado a ese Estado si reinan las condiciones que ha descrito el orador.

11. No sería difícil establecer principios claros y definidos tales como los que ha descrito si los Estados estuviesen convencidos de la necesidad de hacerlo. El debate sostenido en la Comisión ha demostrado que tal vez el tiempo no esté maduro para acelerar un acuerdo internacional sobre el asilo diplomático, pero ha demostrado también la necesidad de aclarar el tema y de reafirmar las bases humanitarias de las relaciones de amistad entre los Estados. El debate tal vez sea un paso hacia el establecimiento de un código de conducta que regule la práctica de los Estados con respecto al asilo diplomático, lo que colmaría una laguna en el derecho internacional.

12. Su delegación anuncia que se ha unido a los patrocinadores del proyecto de resolución A/C.6/L.1018.

13. El Sr. VAN BRUSSELEN (Bélgica) dice que su delegación está de acuerdo con la definición del asilo diplomático dada por el Gobierno argentino en el documento A/10139, parte I, a saber, que es una institución humanitaria establecida desde hace mucho tiempo, cuya finalidad esencial es proteger a los individuos de la persecución en tiempos de trastornos internos dentro de los Estados. El asilo diplomático no es un derecho, y la concesión de tal asilo puede considerarse solamente que se basa en razones puramente humanitarias. Debe observarse que los autores de la resolución 3321 (XXIX) evitaron calificar de derecho el asilo diplomático.

14. El orador da las gracias a la delegación de Australia por haber pedido la inclusión de la cuestión en el programa de la Asamblea General. La iniciativa ha servido para recordar que aún queda mucho por hacer en la esfera del derecho humanitario, tanto con respecto a la identificación y codificación de los derechos del individuo, como en cuanto a obtener la aceptación por parte del Estado de la necesidad de respetar esos derechos fundamentales.

15. El excelente informe del Secretario General demuestra la suma dificultad, si no la imposibilidad, de intentar en el momento actual la codificación en relación con el asilo diplomático, al menos si ha de ser universalmente aceptable.

El informe demuestra también que la concesión del asilo diplomático está relacionado con la aparición de la diplomacia permanente. Por consiguiente, no es sorprendente que los primeros casos de concesión del asilo diplomático se produjeran en Europa y que la institución se haya desarrollado allí. Actualmente, sin embargo, se está desarrollando en un grado sin precedentes en la América Latina. Las razones de esa evolución se pusieron de manifiesto en el memorando presentado a la Corte Internacional de Justicia por el Gobierno colombiano en relación con el caso del asilo colombiano-peruano de 1950¹.

16. El derecho de asilo es en realidad una práctica más que una institución. El asilo diplomático no debería confundirse con la concesión de refugio estrictamente temporal. El informe del Secretario General y el debate celebrado en la Comisión en el vigésimo noveno período de sesiones y en el actual período de sesiones muestran con bastante claridad que la práctica de los Estados es muy diversa. Por consiguiente, no es sorprendente que la Corte Internacional de Justicia considerara imposible discernir la existencia de un uso constante y uniforme, aceptado como derecho, con respecto a la supuesta norma de la calificación unilateral y definitiva del delito. Esa conclusión puede extenderse a otros problemas que plantea la concesión del asilo diplomático.

17. No parece posible codificar el llamado derecho del asilo diplomático a escala mundial. En efecto, tampoco es necesario codificar las circunstancias que rodean a las obligaciones humanitarias evidentes. Ni siquiera es conveniente seguir adelante con tal codificación, ya que la institucionalización del asilo diplomático le privaría de la flexibilidad en la que se basa y que le permite funcionar de forma equilibrada.

18. Aunque en la fase actual la Asamblea General puede hacer poco más que reafirmar las consideraciones humanitarias en juego, es útil que examine la cuestión a intervalos regulares. La práctica de los Estados puede evolucionar; pueden formarse nuevas agrupaciones regionales dentro de las cuales sea concebible la codificación de ciertos aspectos de la práctica del asilo diplomático. La teoría jurídica evoluciona también, y convendría que la Sexta Comisión no sólo tomara nota de propuestas tales como las formuladas por la Asociación de Derecho Internacional sino que también debatiera esas propuestas.

19. El Sr. BA-SALEH (Yemen Democrático) da las gracias a la delegación de Australia por haber propuesto la inclusión del tema en el programa de la Asamblea General; felicita al representante de ese país por sus excelentes comentarios introductorios y agradece al Secretario General su informe objetivo y minucioso que ha facilitado el estudio de la cuestión del asilo diplomático.

20. Debe establecerse una distinción entre el asilo territorial y el asilo diplomático. El asilo territorial ha asumido carácter internacional merced a su práctica generalizada, al artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y a la resolución 2312 (XXII) de la Asamblea General, que lo han transformado en un derecho incon-

trovertible en favor de las personas perseguidas por sus creencias políticas o religiosas, o por su raza. El asilo territorial no conlleva ninguna violación de la soberanía ni injerencia alguna en los asuntos internos de otro Estado.

21. El asilo diplomático, en cambio, no ha sido reconocido aún por el derecho internacional. Surgió en los albores de la representación diplomática permanente en Europa y se desarrolló en la América Latina como principio jurídico reconocido, fomentado por las peculiares condiciones de los Estados latinoamericanos, al punto de ser una práctica de naturaleza regional, como lo señalaron varios Estados en sus respuestas al Secretario General y durante el debate general. Si bien la delegación del Yemen Democrático comprende las consideraciones humanitarias que han impulsado a la delegación de Australia a proponer la inclusión de la cuestión del asilo diplomático en el programa, y simpatiza con ellas, concuerda con el representante de Polonia (1555a. sesión) y con otros representantes en que el asilo diplomático implica también consideraciones jurídicas y políticas.

22. Es indudable que de permitirse que una misión diplomática conceda asilo diplomático, basándose únicamente en su evaluación sobre si el asilado ha cometido o no un delito político, se estaría violando la soberanía territorial del Estado receptor y la competencia de sus autoridades legales. Las funciones de las misiones diplomáticas, según han sido especificadas en las Convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y sobre relaciones consulares y por el derecho internacional moderno, se circunscriben al fortalecimiento de las relaciones amistosas entre los Estados; esas misiones tienen la obligación de respetar las leyes nacionales y de no utilizar su condición jurídica para propósitos incompatibles con sus funciones. El derecho moderno ha abolido también el principio de la extraterritorialidad, que prevaleció en el pasado.

23. El Yemen Democrático reconoce y practica el asilo territorial. El artículo 93 de su Constitución, sancionada el 30 de noviembre de 1970, otorga al Presidente del Consejo de Ministros la facultad de conceder asilo territorial, de conformidad con la práctica moderna y con la Declaración sobre el Asilo Territorial (resolución 2312 (XXII) de la Asamblea General).

24. Aunque las dimensiones del asilo diplomático no se han definido aún con claridad, de las respuestas escritas de los Estados y del debate realizado durante el actual período de sesiones y en el anterior surge que muchos Estados tienden a no seguir apoyando por el momento el examen del tema o su codificación. Además, los Estados que se han mostrado partidarios de la codificación lo han hecho sin perjuicio de condiciones previas que inducen a la delegación del Yemen Democrático a dudar sobre la oportunidad de la codificación. En opinión de esa delegación, el debate que acaba de finalizar es suficiente y los Estados están en libertad de celebrar acuerdos bilaterales o regionales sobre asilo diplomático, como lo han demostrado los países latinoamericanos.

25. El Sr. SHAMS (Bahrein) agradece al Gobierno de Australia que haya propuesto la inclusión del presente tema en el programa y desea dar las gracias al Secretario General por su notable informe.

¹ Corte Internacional de Justicia, *Mémoires, plaidoiries et documents, Affaire du droit d'asile (Colombie/Pérou)*, vol. I, pág. 13.

26. Las relaciones diplomáticas y consulares son el instrumento básico que los gobiernos y los pueblos utilizan para establecer la cooperación internacional, fortalecer sus relaciones y solucionar sus problemas; por ello, esas relaciones interesan grandemente a todos los Estados. La delegación de Bahrein concuerda con quienes han dicho que el asilo diplomático no es un principio claramente reconocido por el derecho internacional ni una práctica consuetudinaria establecida y que tampoco está maduro para la codificación. Las opiniones expresadas en la respuesta del Gobierno de Bahrein al Secretario General (A/10139, parte I, siguen siendo la base de su política sobre la cuestión.

27. El orador ha escuchado con particular interés las opiniones expresadas por los países latinoamericanos que han celebrado acuerdos sobre asilo diplomático como resultado de las condiciones predominantes en su región. No obstante, las condiciones existentes en la región de Bahrein son diferentes, y un acuerdo sobre asilo diplomático no sería allí adecuado. La cuestión del asilo diplomático está prevista en el artículo 21 de la Constitución de Bahrein, que prohíbe la extradición de los refugiados políticos. Esa disposición se basa en consideraciones puramente humanitarias y concuerda con la Declaración Universal de Derechos Humanos, con la costumbre internacional y con los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.

28. Bahrein no ha celebrado todavía ningún acuerdo bilateral o multilateral sobre asilo diplomático. La delegación de ese país cree que todo acuerdo internacional sobre ese tema, deberá tener en cuenta el inciso a del párrafo 1 del Artículo 13 de la Carta, que se refiere al desarrollo y la codificación del derecho internacional. El acuerdo no deberá ser una fuente de conflictos sino que habrá de promover relaciones estables y amistosas y la cooperación entre los Estados. La delegación de Bahrein apoya el punto de vista tradicional y no está de acuerdo en que se otorgue incondicionalmente el derecho de asilo.

29. El Sr. KRISHNADASAN (Swazilandia) agradece la oportuna iniciativa de la delegación de Australia de incluir la cuestión del asilo diplomático en el programa del vigésimo noveno período de sesiones. En su excelente introducción al debate, el representante de Australia ha ubicado en la perspectiva correcta la compleja y controvertible cuestión del asilo diplomático. El debate en la Comisión ha servido para lograr mayor claridad y comprensión de los problemas vinculados al asilo diplomático.

30. El problema fundamental es equilibrar el importantísimo elemento humanitario, que justifica la existencia del asilo diplomático, con la soberanía del Estado en cuyo territorio se plantea el problema del asilo. La Corte Internacional de Justicia ha declarado que la concesión del asilo diplomático implica una derogación de la soberanía del Estado territorial y que esa derogación no puede ser admitida, a menos que se establezca su base jurídica en cada caso. El interrogante que debe resolverse es bajo qué circunstancias y condiciones cabe establecer una base jurídica y admitir tal derogación de la soberanía. La Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas no constituye aparentemente un obstáculo para el otorgamiento del asilo diplomático. Sin embargo, aunque la institución del asilo diplomático está reconocida y opera en

la América Latina, es evidente que no integra el derecho internacional consuetudinario. Incluso en la América Latina, las diversas reservas a la Convención sobre asilo diplomático firmada en Caracas en 1954, indican que ese concepto no es interpretado uniformemente. Además, las conclusiones de los oradores durante el debate en la Comisión, luego del estudio del informe del Secretario General, son diversas y en alguna medida contradictorias. El fundamento jurídico de esa institución sólo puede afirmarse si la comunidad internacional considera que ha llegado el momento de efectuar un examen suplementario del concepto a fin de aplicarlo internacionalmente. Es dudoso que la comunidad internacional se ponga de acuerdo sobre los elementos principales del asilo diplomático. Quizá sería necesario contar previamente con sistemas políticos y jurídicos razonablemente homogéneos, antes que los Estados pudiesen avenirse sobre esos elementos. En la actualidad, la existencia de ideologías opuestas, el resurgimiento del nacionalismo y la celosa custodia de la soberanía de los Estados impediría todo intento colectivo fructífero de codificación. En el mejor de los casos, la cuestión podría mantenerse en estudio y examinarse más adelante, en un período de sesiones venidero de la Asamblea General.

31. Puesto que la práctica del otorgamiento del asilo diplomático sólo puede defenderse actualmente sobre la base del consentimiento de los Estados en cuya jurisdicción se pide, la delegación de Swazilandia coincide con el representante de Australia en que un Estado siempre estará facultado para declarar unilateralmente su voluntad de permitir que las misiones diplomáticas en su territorio concedan asilo diplomático con arreglo a las condiciones que desee indicar. Ese método es particularmente adecuado en una región o Estado que cuenta con una firme tradición de reconocimiento de la institución del asilo.

32. El Sr. BAVAND (Irán) dice que su delegación concede gran importancia al derecho de asilo, una de las creaciones más nobles del derecho internacional consuetudinario que está profundamente enraizada en las tradiciones sociales del Irán. Al señalar el aspecto humanitario del asilo diplomático, el orador puntualiza que el problema que se encuentra a consideración de la Comisión es determinar los límites y las condiciones dentro de los que puede otorgarse ese asilo. Con ese fin, es necesario estudiar y resolver la cuestión básica del fundamento jurídico del asilo diplomático, materia compleja y delicada que presenta asimismo importantes rasgos políticos. El Sr. Bavand cree que el asilo diplomático no debe considerarse una extensión del concepto de extraterritorialidad o una derogación de la soberanía del Estado territorial; en cambio, se debería enfocar en el contexto de la creciente necesidad de dar mayor elasticidad al concepto de soberanía en consonancia con el vigoroso desarrollo del derecho internacional humanitario. El problema reside en conciliar las consideraciones humanitarias con ciertas pautas reconocidas de derecho internacional, con las normas establecidas en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y los principios de soberanía de los Estados y de no injerencia en sus asuntos internos.

33. Habida cuenta de esos principios, el orador cree que, antes de intentar la codificación de las normas que regulan el asilo diplomático, debe alcanzarse un acuerdo general apoyado en los siguientes principios básicos: el asilo

diplomático debe enfocarse desde un punto de vista puramente humanitario; no debe considerarse una función inherente a las misiones diplomáticas; las personas condenadas por delitos no políticos no deben beneficiarse de manera alguna con el asilo diplomático; debe prohibirse a las personas asiladas que participen en actos perjudiciales para la paz pública y que intervengan en la política interna del Estado territorial.

34. La tarea de estudiar y, posiblemente, codificar los principios y normas relativos al asilo diplomático debe confiarse a la Comisión de Derecho Internacional. No obstante, antes de emprender esa tarea, es necesario que se estudie a fondo y minuciosamente el aspecto humanitario del asilo diplomático, posiblemente en el seno de la Comisión de Derechos Humanos o en la Tercera Comisión.

35. La delegación del Irán apoya el modesto y objetivo proyecto de resolución sobre la cuestión del asilo diplomático (A/C.6/L.1018) y está segura de que obtendrá el apoyo unánime de la Comisión.

36. El Sr. LAUTERPACHT (Australia) presenta el proyecto de resolución A/C.6/L.1018 y dice que el debate

sobre la cuestión del asilo diplomático en la Comisión ha sido instructivo y alentador. Ese debate deberá considerarse un acontecimiento importante en la evolución del derecho de asilo diplomático. La Comisión ha expresado su interés por esa cuestión y ha evitado adoptar posiciones extremas.

37. Expresa la esperanza de que el proyecto de resolución, en su forma actual, no suscitará ninguna oposición. La fecha del 31 de diciembre de 1976 que se menciona en el párrafo 2 de la parte dispositiva ha sido elegida para dar a los Estados un período razonable a fin de que puedan comunicar sus opiniones, mientras que evita al mismo tiempo prolongar excesivamente el proceso. No se ha dado ninguna fecha específica para un nuevo examen de la cuestión por la Asamblea General, pues se consideró que todo progreso real debería ser necesariamente paulatino. Una acción precipitada podría ser contraproducente. El Sr. Lauterpacht espera que cuando el tema vuelva a incluirse en el programa de la Asamblea General, será sobre la base de una evaluación realista de las perspectivas de progresos adicionales.

Se levanta la sesión a las 16.50 horas.

1558a. sesión

Miércoles 5 de noviembre de 1975, a las 10.55 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1558

TEMA 112 DEL PROGRAMA

Informe del Comité de Relaciones con el País Huésped (A/10026)

1. El Sr. ROSSIDES (Chipre), que hace uso de la palabra en su calidad de Presidente del Comité de Relaciones con el País Huésped dice que, en cumplimiento de la resolución 3320 (XXIX) de la Asamblea General, el Comité continuó su labor en 1975 y ha presentado un informe sobre la marcha de sus trabajos (A/10026). El Comité se ocupó en su mayor parte de quejas de actos concretos de violencia y vejámenes contra misiones, por un lado, y de la delicada cuestión de las deudas de las misiones y de su personal, por otro.

2. Tres actos de violencia examinados por el Comité en el presente año revisten especial gravedad. Se trata de los disparos hechos contra los edificios en que se hallan instaladas las Misiones de la RSS de Bielorrusia, la RSS de Ucrania y la Unión Soviética, de las bombas incendiarias arrojadas contra la Misión de Iraq, y del ataque con bombas a la Misión de Yugoslavia.

3. El Comité condenó esas acciones y pidió al país huésped que intensificara sus esfuerzos para garantizar la seguridad de las misiones. El país huésped respondió que haría cuanto estuviera en sus manos para descubrir y castigar a los culpables. En los párrafos 9 a 15 del informe figuran las observaciones generales del Comité a ese respecto.

4. El Comité dedicó considerable atención al informe de su Grupo de Trabajo sobre la cuestión de las obligaciones de las misiones permanentes ante las Naciones Unidas y de las personas protegidas por la inmunidad diplomática (*ibid.*, anexo I). El representante del país huésped en el Grupo de Trabajo señaló que, si bien la mayoría de las misiones observaban escrupulosamente sus obligaciones financieras, un número reducido de ellas tenían deudas pendientes desde hacía mucho tiempo. Las opiniones divergentes del Comité sobre esa materia figuran en la sección IV de su informe. El Comité decidió que el Grupo de Trabajo continuara examinando esta cuestión con miras a facilitar su solución.

5. El Comité tomó nota del informe del Grupo de Trabajo sobre cuestiones relativas al seguro médico del personal de las misiones ante las Naciones Unidas y la exención de impuestos sobre los bienes raíces a los locales diplomáticos (*ibid.*, anexo II). Igualmente examinó las cuestiones del estacionamiento, organización de sus trabajos y relaciones de la comunidad de las Naciones Unidas en la ciudad huésped. Las recomendaciones pertinentes del Comité figuran en el párrafo 66 de su informe.

6. Por lo que respecta a su labor futura, el Comité recomienda que prosiga el examen de los problemas que entran en la esfera de sus atribuciones, en cumplimiento de las resoluciones 2819 (XXVI), 3033 (XXVII), 3107 (XXVIII) y 3320 (XXIX) de la Asamblea General.

Se levanta la sesión a las 11.05 horas.

1559a. sesión

Jueves 6 de noviembre de 1975, a las 10.50 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1559

TEMA 112 DEL PROGRAMA

Informe del Comité de Relaciones con el País Huésped (continuación) (A/10026)

1. El Sr. POVZHIK (República Socialista Soviética de Ucrania) dice que el Comité de Relaciones con el País Huésped tuvo una ardua labor en el año recién pasado, ocupándose de muchos asuntos, el más importante de los cuales es la cuestión de la seguridad de las misiones diplomáticas acreditadas ante las Naciones Unidas y de su personal. En ese período hubo seis atentados contra misiones diplomáticas de Estados socialistas, árabes y otros, incluso la Misión de la RSS de Ucrania. El 19 de enero de 1975 se hicieron disparos contra los locales de las Misiones de la Unión Soviética, la RSS de Ucrania y la RSS de Bielorrusia. En el caso de la Misión de la RSS de Ucrania, dos disparos penetraron en los aposentos destinados a vivienda del local de la misión, que afortunadamente no causaron víctimas. La Misión de la RSS de Ucrania protestó enérgicamente ante las autoridades del país huésped, pidiendo que se investigaran los disparos y se castigara a los autores e instigadores de ese delito. Era la segunda vez que se atentaba a balazos contra la Misión de la RSS de Ucrania; en la primera oportunidad, en 1971, tampoco hubo víctimas, afortunadamente, y también provocó una enérgica protesta, pero al igual que en el último incidente, no se ha encontrado ni castigado a sus autores.

2. Además, la Misión de la RSS de Ucrania ha sido objeto de amenazas por teléfono y por correo. Pese a todos esos hechos, no se conocen medidas tomadas por el país huésped para impedir la repetición de tales atentados criminales, aunque la Misión informó inmediatamente de esos hechos a la policía y a las autoridades de la ciudad de Nueva York.

3. Aunque hay una ley federal que tiene por objeto proteger a las misiones de Estados extranjeros, es claro que no ha sido plenamente aplicada por las autoridades del país huésped, lo que no da garantías de que esos atentados no se repetirán y de que en el futuro no habrá víctimas. Además del elevado índice de delincuencia que existe en la ciudad de Nueva York, las misiones diplomáticas acreditadas ante las Naciones Unidas por los Estados socialistas, los Estados árabes y otros Estados, están sujetas a las provocaciones de organizaciones sionistas, de emigrados y otros grupos interesados en emponzoñar la atmósfera de cooperación y confianza creada por la distensión de las relaciones internacionales. La llamada Liga de Defensa Judía está especialmente activa en ese campo, y los medios de comunicación dan amplia publicidad a todos sus actos, dirigidos especialmente contra las misiones de los Estados socialistas y los Estados árabes. Las autoridades locales y la policía ven con indiferencia esas actividades hostiles de la Liga de Defensa Judía. Por su parte, la Misión de la RSS de Ucrania está convencida de que dicha Liga no refleja el sentir del pueblo

norteamericano, interesado en la distensión de las relaciones internacionales. La falta de castigo de las actividades de esos grupos es todavía menos comprensible, por cuanto perjudican las relaciones entre los Estados, y no pueden tener mejor estímulo que la impunidad. La delegación de la RSS de Ucrania pide, por tanto, que se apliquen medidas adecuadas de protección de las misiones extranjeras acreditadas ante las Naciones Unidas.

4. Esas misiones tropiezan además con las dificultades provocadas por las condiciones de estacionamiento. La imposición de multas arbitrarias a los coches de diplomáticos y la exagerada publicidad que se les da tienden a desacreditar innecesariamente al cuerpo diplomático. La delegación de la RSS de Ucrania apoya las recomendaciones del Comité de Relaciones con el País Huésped que figuran en el párrafo 66 de su informe (A/10026). El Comité ha realizado una labor eficiente y la delegación de la RSS de Ucrania estima que la Asamblea General debe prorrogar el mandato del Comité en 1976.

5. El Sr. GODOY (Paraguay) dice que el complejo panorama del funcionamiento de las misiones permanentes en Nueva York debe considerarse a la luz no sólo de los acuerdos bilaterales básicos entre las Naciones Unidas y el Estado huésped, sino también de todos los instrumentos multilaterales y bilaterales vigentes en materia de organismos internacionales y relaciones diplomáticas bilaterales. La cuestión de la seguridad de las misiones y su personal tal vez sea el tema más importante sometido al estudio y consideración del Comité de Relaciones con el País Huésped. Aunque el concepto de seguridad constituye una noción sumamente abstracta, ella debe garantizarse en su más amplia acepción, para permitir y facilitar el ejercicio de las funciones oficiales de las misiones diplomáticas. Sin embargo, el logro de ese objetivo puede tropezar en la práctica con situaciones de hecho que en muchos casos escapan totalmente al control, y aun al más riguroso celo puesto por las autoridades encargadas de asegurar su observancia.

6. Esa dificultad aumenta cuando tal seguridad ha de mantenerse en grandes concentraciones urbanas, cuyos habitantes disfrutan en forma casi irrestricta de todas las libertades y derechos fundamentales reconocidos a la persona humana por la Carta de las Naciones Unidas y por todas las declaraciones y principios sustentados por esa Organización. Con toda objetividad y honestidad, debe interpretarse que ésa es la situación que enfrenta la comunidad diplomática en Nueva York. La delegación del Paraguay lamenta profundamente y condena todo acto violatorio de la seguridad y dignidad que se merece todo funcionario extranjero en cualquier parte del mundo, y rechaza cualquier pretexto que pretenda justificar la consumación de tales hechos en perjuicio de los agentes diplomáticos, los locales de las misiones, las residencias o

cualesquiera bienes de su propiedad. Por otra parte, se conocen las dificultades insalvables que generalmente obstaculizan la labor de las autoridades policiales y judiciales de Nueva York en la indagación de un acto de naturaleza criminal. En la gran mayoría de los casos, las partes damnificadas se han contentado con la simple denuncia, a veces muy tardía, de esos actos, pero se han negado a una mayor cooperación con las autoridades, incluso para la mera identificación de los supuestos delincuentes. Aunque es justo reconocer que la inmunidad de que gozan los funcionarios diplomáticos los exime de la obligación de someterse a la jurisdicción de cualquier autoridad local y, consiguientemente, de adquirir la calidad de parte en cualquier proceso judicial, quizá sea precisamente la invocación de esa inmunidad la que ha impedido o dificultado la adopción de medidas más efectivas y la instauración de procesos criminales para la debida sanción de los culpables. Si verdaderamente se busca la sanción de quienes cometen tales actos, y con ello una mayor garantía de la seguridad de las misiones y su personal, es imprescindible hallar una fórmula que, sin renunciar a las inmunidades que las normas positivas internacionales y el derecho consuetudinario internacional confieren a todo agente diplomático, permita a las misiones cooperar con las autoridades de la ciudad de Nueva York, a quienes compete la protección de la seguridad de las misiones y su personal.

7. Así como la delegación del Paraguay ha condenado todo acto que afecte la dignidad de los funcionarios diplomáticos, no considera justas ni apropiadas las acusaciones de connivencia o colusión de las autoridades policiales de Nueva York con quienes cometen tales actos reprensibles. El orador afirma que, por el contrario, a pesar de los alarmantes problemas actuales de carácter financiero por los que atraviesa la ciudad de Nueva York, ésta ha mantenido en grado aceptable, y a veces hasta encomiable, las medidas normales y especiales de seguridad que garantizan el cometido de los funcionarios diplomáticos y el de los muchos dignatarios extranjeros que frecuentemente concurren a la Sede de las Naciones Unidas. Asimismo, expresa su convicción de que, a fin de mejorar las garantías de la seguridad de las misiones y su personal y las de muchas otras víctimas ocasionales inocentes, es la propia comunidad internacional, a través de los múltiples foros y mecanismos efectivos con que cuenta, quien debe asumir un rol activo, decidido y responsable para reducir y, si fuera posible, eliminar los dolorosos episodios en que funcionarios diplomáticos han perdido sus vidas, quizá en gran parte debido a la persistencia de santuarios y la completa impunidad de que siguen gozando algunos de sus autores. En ese sentido, la delegación del Paraguay disiente de quienes opinan que Nueva York es el lugar en que ocurren más actos de vandalismo o terrorismo contra las misiones diplomáticas y su personal; es claro que se trata de una exageración.

8. Otro de los problemas que afligen a las grandes ciudades es el del estacionamiento de automóviles. Aunque ese tema tal vez sea el más superficial y poco digno de considerarse en ese foro, constituye un eterno motivo de fricción entre la comunidad diplomática, por una parte, y las autoridades municipales de tránsito y la propia comunidad local, por la otra. El origen del problema es sencillo: hay 1.330 vehículos con placas DPL y 550 vehículos con placa FC, en tanto que la ciudad sólo ha podido habilitar unos 550 sitios

especiales para el estacionamiento de los vehículos de todas las misiones y oficinas consulares. La situación empeora porque casi la tercera parte de esos espacios están ocupados por vehículos no autorizados de toda especie, aunque sólo sea transitoriamente, y los espacios se reducen aún más debido a los trabajos de demolición o construcción. La delegación del Paraguay apela al sentido de seriedad y responsabilidad de las delegaciones a fin de que no abusen en forma intencional y sistemática de las infracciones a las reglas de tránsito, especialmente cuando se trata de sitios que deben ser utilizados en caso de emergencia. Han sido precisamente esas faltas las que han provocado sensibles reacciones de varios sectores de la población local y han hecho que toda la comunidad diplomática se vea afectada negativamente por la publicidad adversa que esos abusos ocasionan. Asimismo, apela a la mayor comprensión de las autoridades del Departamento de Tránsito de la ciudad de Nueva York en cuanto a la expedición de citaciones por infracción de las reglas de estacionamiento. Es necesario que los funcionarios que expiden las boletas correspondientes sepan evaluar cada situación y reducir la expedición de citaciones al mínimo indispensable para las normas de seguridad del tránsito y para la protección de las personas y de sus propiedades. Aparte del efecto psicológico, la delegación del Paraguay estima que la expedición indiscriminada e innecesariamente repetida de citaciones producirá a la larga un efecto contrario al que se pretende lograr con ellas.

9. En cuanto a las obligaciones de las misiones permanentes ante las Naciones Unidas y de las personas protegidas por la inmunidad diplomática, la buena reputación de la comunidad de las Naciones Unidas exige soluciones satisfactorias urgentes para las partes afectadas por faltas u omisiones de cualquiera de sus miembros. No se puede condonar la práctica de actos intencionales que ocasionan perjuicios a personas o a instituciones que de buena fe han celebrado actos lícitos de carácter comercial con miembros de la comunidad diplomática.

10. En cuanto a las relaciones públicas de la comunidad de las Naciones Unidas en Nueva York, cabe lamentar que no siempre hayan recibido la debida atención, con la amplitud y objetividad necesarios, para una mayor comprensión y cooperación en todas partes. Es digno de destacar, sin embargo, el esfuerzo que en ese sentido realizan algunas instituciones oficiales y privadas de Nueva York. La delegación del Paraguay estima que esas relaciones pueden mejorar y que, tanto la comunidad local, especialmente los medios de comunicación, como la colectividad diplomática y consular, deben esforzarse más por crear las condiciones necesarias. La delegación del Paraguay desea que el Comité de Relaciones con el País Huésped continúe estudiando la cuestión del seguro del personal de las misiones ante las Naciones Unidas que, por sus repercusiones directas e inmediatas en el bienestar y la seguridad de la comunidad diplomática, merecen una atención preferente. Asimismo, apoya la continuación del estudio y de las gestiones referentes a la exención de impuestos sobre los bienes raíces a los locales diplomáticos y de la exención de impuestos establecidos por los demás Estados del país huésped.

11. El Sr. APRIL (Canadá) declara que su delegación ha examinado el informe del Comité de Relaciones con el País Huésped tanto desde el punto de vista de país acreditante

como de país huésped, ya que es sede de un organismo especializado. Ello le permite comprender cabalmente la situación y, en tal sentido, el orador expresa su solidaridad con las misiones que han sido víctimas de actos de violencia que son y serán siempre deplorables. Por otra parte, el país huésped estará también al tanto de toda la situación, pues varios de sus diplomáticos han sido objeto de atentados en el extranjero.

12. En general, el Canadá está satisfecho con la protección que recibe, y supone que esa opinión es compartida por los países que ocupan el mismo local e incluso por la mayoría de las misiones permanentes acreditadas ante las Naciones Unidas. Sin embargo, no por ello debe entenderse que se esté restando importancia a la gravedad de los problemas que han tenido que enfrentar algunas misiones. Por lo tanto, deben adoptarse medidas eficaces para evitar la repetición de esos actos.

13. El Comité ha iniciado ya el estudio de algunos de los delicados problemas que son de su competencia. La delegación del Canadá opina que debe seguir examinándolos con toda energía, por delicados que sean esos problemas, a fin de mejorar el ambiente en que se desenvuelve la comunidad diplomática. Es lamentable que el término "diplomático" esté adquiriendo en Nueva York una connotación peyorativa, pero ello se debe simplemente a algunos abusos de los privilegios e inmunidades, como la contravención de reglamentos de tránsito y el incumplimiento de deudas y obligaciones. Junto con el programa de información al público sobre las razones que justifican las prerrogativas e inmunidades diplomáticas, el Comité debería iniciar una campaña de ilustración para los propios diplomáticos, sobre todo para quienes no son juristas, a fin de hacerles ver las obligaciones que para ellos derivan del Acuerdo entre las Naciones Unidas y los Estados Unidos de América relativo a la Sede de las Naciones Unidas (resolución 169 (II)) de la Asamblea General. Quienes disfrutan de privilegios e inmunidades tienen el deber de observar las leyes y reglamentos locales.

14. Indudablemente, el Comité es el foro más adecuado para el examen de los graves problemas con que tropiezan las misiones, y debe continuar su labor a fin de crear condiciones más favorables para el ejercicio eficaz de las funciones encomendadas a las misiones permanentes. Por otra parte, también debería examinar, con toda la atención que merecen, las quejas planteadas por los vecinos de la ciudad de Nueva York contra personas que gozan de prerrogativas diplomáticas.

15. El Sr. BOJILOV (Bulgaria) manifiesta que su delegación asigna importancia a la labor del Comité de Relaciones con el País Huésped, en cuya lista de cuestiones figura con carácter prioritario, en consonancia con la resolución 2819 (XXVI) de la Asamblea General, la cuestión de la seguridad de las misiones y de su personal.

16. Si bien es cierto que el país huésped ha adoptado algunas medidas con motivo de esa cuestión, ellas han resultado insuficientes e incompletas. En realidad, se han cometido hechos punibles contra seis misiones, algunos de ellos muy graves, como los disparos contra la Misión de la

RSS de Ucrania y las bombas en las Misiones del Iraq y Yugoslavia. En dos ocasiones, el Comité condenó los actos de terrorismo y exhortó al país huésped a intensificar las medidas relativas a la protección y seguridad de las misiones acreditadas ante las Naciones Unidas y de su personal.

17. Es difícil comprender que haya un conflicto entre la legislación local y la federal que impida aplicar eficazmente las normas relativas a la protección de funcionarios extranjeros y huéspedes oficiales de los Estados Unidos, y un Estado no puede invocar su legislación como excusa para la inobservancia de sus obligaciones según el derecho internacional. Ese principio figura en diversos instrumentos jurídicos internacionales, y el orador cita especialmente en su apoyo los artículos 23 y 28 de la Convención de Viena sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal¹. Por lo tanto, considera que el país huésped no ha agotado las posibilidades jurídicas y prácticas de que dispone para ofrecer una protección efectiva.

18. El Comité ha examinado la cuestión de las obligaciones de las misiones permanentes ante las Naciones Unidas y de las personas protegidas por la inmunidad diplomática, la del seguro médico del personal de las misiones ante las Naciones Unidas y la exención de impuestos sobre los bienes raíces a los locales diplomáticos. En cuanto a la primera cuestión, la delegación de Bulgaria considera prudente la decisión del Comité de recomendar que el Grupo de Trabajo siga examinando el problema de las deudas de las misiones o de los diplomáticos por bienes y servicios, con miras a facilitar su solución. Agradece también a la Misión de los Estados Unidos la asistencia prestada en la solución de un problema inmobiliario de la Misión de Bulgaria.

19. El orador señala la importancia que revisten algunas de las recomendaciones adoptadas por consenso por el Comité, especialmente la condenación enérgica de los actos de violencia y de otros hechos delictivos contra cualquier misión, su personal o sus bienes; la necesidad de tomar medidas para castigar a los culpables de esos actos y la posibilidad de proceder contra las organizaciones o personas que públicamente admitan su responsabilidad por la comisión de tales actos de violencia. El orador destaca, además, la esperanza expresada por el Comité de que el país huésped examine de nuevo lo dispuesto en relación con el estacionamiento de vehículos diplomáticos, a fin de atender más adecuadamente las necesidades de la comunidad diplomática.

20. La delegación de Bulgaria se asocia a quienes han expresado su reconocimiento a la Comisión de la Ciudad de Nueva York para las Naciones Unidas y el Cuerpo Consular por su labor en beneficio de la comprensión recíproca entre la comunidad diplomática y los habitantes de la ciudad de Nueva York. Su delegación recomienda la aprobación del informe que se examina y apoya la recomendación de que el Comité siga estudiando los problemas de su competencia.

¹ Véase *Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales* (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.75.V.12), documento A/CONF.67/16.

TEMA 111 DEL PROGRAMA

Cuestión del asilo diplomático: informe del Secretario General (continuación) (A/10139, parte I y Add.1 y parte II; A/C.6/L.1018)

21. El PRESIDENTE anuncia que Bangladesh y Uganda han solicitado su inclusión en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución A/C.6/L.1018.

Se levanta la sesión a las 11.50 horas.

1560a. sesión

Viernes 7 de noviembre de 1975, a las 15.20 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1560

***Felicitaciones con motivo del aniversario
de la Revolución de Octubre***

1. El PRESIDENTE, hablando en nombre de la Comisión, felicita a la delegación de la Unión Soviética y, por su intermedio, a su Gobierno y a su pueblo, con motivo del aniversario de la Gran Revolución Socialista de Octubre.

TEMA 112 DEL PROGRAMA

**Informe del Comité de Relaciones con el País
Huésped (continuación) (A/10026)**

2. El Sr. DONORABAYE (Chad) da la bienvenida a las delegaciones de Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, Mozambique y Papua Nueva Guinea, que fortalecerán las filas de los países del tercer mundo, promoviendo así el desarrollo progresivo y la codificación de un nuevo derecho internacional.

3. La delegación del Chad ha debido quejarse últimamente por el trato recibido de las autoridades de Nueva York. El 11 de octubre de 1975, el Representante Permanente del Chad ante las Naciones Unidas organizó una recepción en su residencia en honor del Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación, quien viajó a Nueva York para asistir al séptimo período extraordinario de sesiones y al trigésimo período de sesiones de la Asamblea General. Aunque no estaba obligado a hacerlo, el representante del Chad informó a sus vecinos inmediatos algunos días antes de la recepción proyectada. Con todo, instigada por ciertos individuos malintencionados, la policía realizó varios intentos de irrumpir en la residencia del Embajador con el falso pretexto de que se estaba haciendo demasiado ruido. Con la complicidad de la policía, los medios informativos de Nueva York emprendieron una campaña denigrativa y calumniosa contra el Chad y, por tanto, contra toda África. Se enviaron a la Misión del Chad cartas anónimas sumamente ofensivas que contenían amenazas de violencia física y de muerte contra el Embajador. Cuando el Embajador de los Estados Unidos en el Chad organiza una recepción, se dispone lo necesario para garantizar la seguridad y protección de los diplomáticos. Esas recepciones no son menos ruidosas por cierto, y la población local del Chad también gusta de la paz y la quietud.

4. Curiosamente, esa campaña gratuita y calumniosa contra el Chad se produce en un momento en que las relaciones entre ese país y Francia, aliado natural de los

Estados Unidos, se encuentran en su punto más bajo. La actitud del Gobierno del Chad hacia Francia ha sido dictada por los supremos intereses del pueblo chadiano. La evacuación total de las tropas francesas estacionadas en el territorio del Chad es solamente una de las consecuencias de los excesos intolerables cometidos por Francia. Ese acto de soberanía permitirá al Chad concentrarse con toda seriedad e íntegramente en su desarrollo. Los métodos utilizados por Francia son notoriamente imperialistas y neocolonialistas, y la delegación del Chad se opone a ellos con toda energía. La Misión de los Estados Unidos ha sido mantenida al tanto de la marcha de la situación.

5. Las responsabilidades del país huésped se definen claramente en la resolución 3320 (XXIX) de la Asamblea General. El Comité de Relaciones con el País Huésped ha tratado todos los problemas urgentes que preocupan a las misiones permanentes ante las Naciones Unidas, y el orador apoya calurosamente las recomendaciones que figuran en el informe del Comité (A/10026). Mientras el país huésped no considere seriamente ni aplique al pie de la letra las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, las misiones permanentes ante las Naciones Unidas jamás podrán llevar a cabo sus tareas en paz y seguridad. Los progresos hechos a ese respecto han sido casi insignificantes. El país huésped debe adoptar medidas más enérgicas para garantizar que las misiones permanentes no sigan trabajando en una atmósfera de inseguridad, miedo y odio.

6. El Sr. KOLESLNIK (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) agradece al Presidente y a la Comisión las felicitaciones dirigidas a su delegación y al Gobierno y pueblo de la URSS con motivo del aniversario de la Gran Revolución Socialista de Octubre.

7. Para la delegación de la URSS, el asunto más importante planteado en el Comité de Relaciones con el País Huésped ha sido el problema de la seguridad de las misiones diplomáticas y de su personal. La situación relativa a esa seguridad sigue siendo insatisfactoria a pesar de la sanción de la Ley federal sobre la protección de funcionarios extranjeros y huéspedes oficiales de los Estados Unidos, de 1972. El informe que se examina revela que durante el año pasado se han producido nuevos incidentes que abarcan actos de terrorismo, violencia y vandalismo cometidos, en especial, por gamberros sionistas contra las misiones de países socialistas y de otras naciones. El hecho de que ninguno de los perpetradores de esos criminales actos de violencia haya sido detenido y enjuiciado preocupa particularmente a la

delegación de la URSS. Desde la publicación del informe del Comité, se han producido nuevos actos provocativos contra la misión de la URSS y su personal, lo que prueba una campaña sistemática y organizada de hostilidad.

8. No obstante las reiteradas resoluciones de la Asamblea General y las recomendaciones del Comité en que se le insta a que adopte todas las medidas necesarias de precaución para garantizar la seguridad de las misiones y de su personal, los representantes de los Estados Unidos se han limitado simplemente a expresar su pesar en relación con los incidentes criminales y a prometer que adoptarán las medidas necesarias para prevenir la comisión de esos actos en el futuro. Las autoridades del país huésped deberán asumir plena responsabilidad por cualquier consecuencia grave de esos actos criminales, si ellos continúan. A pesar de la Ley federal de 1972, cuya definición de la naturaleza criminal de los actos de que se trata es muy precisa, ante la repetición de los incidentes las autoridades del país huésped han persistido en afirmar que no se ha violado ninguna ley. Ello demuestra que los funcionarios del país huésped no están adoptando medidas eficaces para cumplir sus obligaciones internacionales y aplicar la Ley de 1972.

9. Los actos criminales cometidos por la tristemente célebre organización sionista extremista que se autodenomina Jewish Defense League no reflejan las opiniones del pueblo norteamericano, que desea mejorar las relaciones entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de América; por ello resulta aún más anormal que las autoridades del país huésped no hayan adoptado aún las medidas necesarias para suprimir la actividad delictiva de esa presunta organización. El país huésped debe decidirse finalmente y con toda seriedad a adoptar medidas positivas para evitar y suprimir todo tipo de acto terrorista criminal dirigido contra la comunidad diplomática de la ciudad de Nueva York y para perseguir y castigar a sus perpetradores, instigadores y organizadores de esas actividades.

10. La delegación de la URSS apoya las recomendaciones del Comité de Relaciones con el País Huésped e insta a la Asamblea General a que prorrogue el mandato del Comité para el año próximo.

11. El Sr. MONTENEGRO (Nicaragua) dice que los actos dirigidos contra las misiones diplomáticas y su personal constituyen actos de terrorismo internacional y crímenes contra la comunidad internacional. Esos actos deben investigarse y castigarse dondequiera que sucedan. La delegación de Nicaragua lamenta los ataques contra las Misiones de la RSS de Bielorrusia, la RSS de Ucrania, la URSS, el Iraq, Egipto y Yugoslavia y considera que el país huésped tiene el deber de garantizar que las autoridades locales procesen y castiguen severamente a los perpetradores de esos delitos. En países pequeños como Nicaragua se adoptan todas las medidas necesarias para proteger a las misiones diplomáticas y a su personal. Por otra parte, la policía de Nueva York no ha demostrado suficiente respeto por las prerrogativas e inmunidades del personal de las misiones diplomáticas. En varios casos, por ejemplo, las autoridades locales han expedido citaciones por estacionamiento a los diplomáticos, prescindiendo en absoluto de la inmunidad diplomática. A ese respecto, el orador deplora la reducción del número de lugares de estacionamiento reservado para los diplomáticos.

12. El Comité de Relaciones con el País Huésped se ha esforzado de manera encomiable por lograr que la población de Nueva York se percate mejor de la importancia de la labor de los diplomáticos. No obstante, los medios de información lanzan frecuentemente campañas calumniosas contra la comunidad diplomática.

13. La delegación de Nicaragua espera que la Asamblea General prorrogará el mandato del Comité de Relaciones con el País Huésped.

14. El Sr. BAULIN (República Socialista Soviética de Bielorrusia) dice que su delegación ha estudiado con gran detenimiento el informe del Comité de Relaciones con el País Huésped. El problema central sigue siendo el de la seguridad de las misiones diplomáticas y de su personal. Las medidas adoptadas por el país huésped para reprimir los delitos contra las misiones diplomáticas y su personal no han logrado hasta ahora el resultado deseado, que es garantizar condiciones normales para el desempeño de funciones diplomáticas normales. El cuerpo diplomático acreditado ante las Naciones Unidas se ha visto sometido a actos organizados, hostiles y provocativos de organizaciones y grupos sionistas que se han propuesto crear condiciones difíciles para el funcionamiento de las misiones diplomáticas de los países socialistas, de los países árabes y de otras naciones.

15. Al citar un incidente producido el 19 de enero de 1975, cuyos detalles se señalaron a la atención de la Misión de los Estados Unidos en una carta que figura en el documento A/AC.154/73, el orador dice que las autoridades del país huésped, resistiendo la resolución 3320 (XXIX) de la Asamblea General, no han adoptado todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las misiones y de su personal y crear condiciones normales para su desempeño. Además, no han logrado aprehender, perseguir ni castigar a los perpetradores de tales actos punibles. No se han observado mejoras significativas en la situación desde que se promulgó la Ley federal de 1972. Sólo un número pequeño de personas detenidas por la comisión de esos actos criminales contra las misiones y su personal han sido condenadas, a pesar de la grave naturaleza de los delitos cometidos. A ese respecto, sería útil que los Estados Unidos suscribiesen la Convención de Viena sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal.

16. La delegación de la RSS de Bielorrusia apoya el llamamiento del Comité de Relaciones con el País Huésped que figura en el párrafo 24 de su informe, para que se intensifiquen las medidas tendientes a garantizar la seguridad de las misiones y de su personal y para que se aplique la Ley de 1972, asegurando así las condiciones normales para el desempeño de las funciones diplomáticas.

17. Esa delegación apoya la recomendación del Comité que figura en el inciso 5 del párrafo 66 del informe, de que el país huésped, la Secretaría y otras organizaciones interesadas deberían promover vigorosamente el entendimiento mutuo entre la comunidad diplomática y la población local. Debe procurarse poner en marcha programas de información que familiaricen a la población de la ciudad de Nueva York y de sus municipios con las prerrogativas e inmunidades del personal de las misiones acreditadas ante

las Naciones Unidas y con la importancia de las funciones internacionales que cumple ese personal. El orador espera que esas medidas influyan en la opinión pública y creen un espíritu de comprensión y cooperación mutuas en las relaciones entre la comunidad diplomática y las Naciones Unidas por una parte y la sociedad norteamericana y la población de Nueva York por la otra.

18. El Sr. Baulin apoya las otras recomendaciones que figuran en el párrafo 66 del informe, en que se condenan los actos criminales de violencia contra los locales, el personal y la propiedad de las misiones y se expresa la esperanza de que el país huésped examinará nuevamente las medidas adoptadas en relación con el estacionamiento de los vehículos diplomáticos, la expedición de citaciones y el remolque de esos vehículos.

19. Su delegación expresa su reconocimiento a la Comisión de la Ciudad de Nueva York para las Naciones Unidas y el Cuerpo Consular por la atención que han prestado a las necesidades y los intereses de la comunidad diplomática. Insta también a la Asamblea General a que prorrogue el mandato del Comité de Relaciones con el País Huésped para el año siguiente.

20. El Sr. KAPETANOVIĆ (Yugoslavia) dice que su delegación celebra que el Comité de Relaciones con el País Huésped haya examinado los graves problemas que afectan al funcionamiento de las misiones diplomáticas en Nueva York. La experiencia ha mostrado la importancia de examinar y resolver esos problemas, y la delegación de Yugoslavia considera por lo tanto que el Comité debe proseguir su actividad.

21. Toda una serie de casos mencionados en el informe que se examina evidencian que no se ha prestado suficiente atención a la seguridad y protección de las misiones y de su personal ni se han adoptado otras medidas indispensables para prevenir actos criminales. La investigación de esos actos y el castigo de sus autores no han sido adecuados y podrían provocar en consecuencia otros actos parecidos en el futuro. Por ejemplo, la Misión de Yugoslavia y sus miembros han sido objeto en repetidas ocasiones de actos criminales perpetrados por miembros de organizaciones extremistas fascistas, y la reacción inapropiada de las autoridades del país huésped ante las advertencias de la Misión de Yugoslavia ha facilitado sin duda la comisión de esos actos.

22. El orador proporciona detalles sobre varios incidentes, inclusive los ataques contra la Misión de Yugoslavia y sus miembros el 2 de noviembre de 1974, el 14 de mayo y el 23 de junio de 1975 y un incidente antiyugoslavo provocado por elementos emigrados fascistas el 10 de septiembre de 1975, durante el séptimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General. En relación con esos incidentes, la Misión de Yugoslavia ha protestado oficialmente ante la Misión de los Estados Unidos el 4 de noviembre de 1974 y el 26 de noviembre, el 15 de mayo y el 23 de junio de 1975, pero los resultados de las investigaciones, si se han efectuado, nunca se comunicaron a la Misión de Yugoslavia ni se enjuició o castigó jamás a un solo perpetrador de esos actos terroristas.

23. La Misión de Yugoslavia ha informado asimismo al Secretario General sobre esos incidentes en una nota de

fecha 3 de julio de 1975, distribuida como documento A/AC.154/86 y en un *aide-memoire* presentado al Secretario General el 11 de septiembre de 1975.

24. Esos hechos, considerados a la luz de las reglamentaciones y convenciones internacionales vigentes en el país huésped, obligan a adoptar medidas enérgicas para prevenir actos criminales contra las misiones diplomáticas y su personal, castigar severamente a los perpetradores de esos actos y proteger la integridad física de los representantes diplomáticos que viven y trabajan en Nueva York. La delegación de Yugoslavia apoya decididamente las recomendaciones que figuran en el párrafo 66 del informe y está segura de que, si la Sexta Comisión las hace suyas, será posible que el Comité de Relaciones del País Huésped continúe su labor para ejecutarlas.

25. La Srta. WILMSHURST (Reino Unido) dice que su delegación toma nota con preocupación de los incidentes de violencia descritos en el capítulo II del informe que se examina. Ninguna misión está exenta de tales ataques; la propia misión británica fue víctima en el pasado. Dichos ataques no son peculiares de Nueva York, sino que representan una tendencia general hacia un aumento de la violencia y la ilegalidad en todo el mundo. El problema de cómo prevenir la violencia debe preocupar a todos los países que actúan de huéspedes de una comunidad diplomática. En un Estado como los Estados Unidos, que tienen una firme tradición de libertad individual para sus ciudadanos, el problema de proteger a los agentes diplomáticos es especialmente difícil, pues el Estado debe intentar continuamente establecer un equilibrio entre el principio de libertad de expresión y la consideración de que la libertad de cada cual no debe ejercerse a expensas de los derechos ajenos ni interferir con las funciones legítimas y necesarias de la comunidad diplomática. Su delegación no puede aceptar que los Estados Unidos toleran oficialmente, ni mucho menos que alientan, actos delictivos.

26. Su delegación condena sin reservas los incidentes descritos durante el debate. El Gobierno de los Estados Unidos tiene un deber en virtud del derecho internacional de tomar todas las medidas necesarias y razonables para impedir la comisión de dichos actos y asegurar la detención y procesamiento de los delincuentes. Su delegación confía en que el Gobierno de los Estados Unidos cumple y continuará cumpliendo este deber. Por supuesto, existe una obligación recíproca por parte de los agentes diplomáticos de cooperar con las autoridades en la aplicación de la ley, siempre que ello no sea incompatible con sus inmunidades en virtud del derecho internacional. Su delegación toma nota con pesar de que ciertas misiones continúan impidiendo que los miembros de su personal comparezcan ante los tribunales para dar testimonio o que cooperen de otro modo con las autoridades de los Estados Unidos. Es política constante de la misión del Reino Unido estar dispuesta a formular denuncias formales y prestar testimonio ante los tribunales locales cuando sea razonablemente preciso en interés de la justicia y cuando los intereses reales del Gobierno del Reino Unido no corran peligro de sufrir menoscabo alguno mediante dicha acción.

27. Con respecto a la cuestión de las obligaciones de las misiones ante las Naciones Unidas y de las personas protegidas por la inmunidad diplomática, dice que su

delegación cree que el Comité de Relaciones con el País Huésped ha llegado a una conclusión satisfactoria al decidir que el Grupo de Trabajo continúe su labor sobre la cuestión de las deudas de los agentes diplomáticos o las misiones. La comunidad diplomática debe tener mucho cuidado en no crear resentimientos innecesarios entre los habitantes de Nueva York al no cumplir sus obligaciones de algún modo. Su delegación expresa la esperanza de que la labor del Grupo de Trabajo será una ayuda al proporcionar soluciones a los casos individuales que se le presenten.

28. Su delegación, que integra el Comité de Relaciones con el País Huésped, expresa la esperanza de que la Asamblea General autorice la continuación de los trabajos del Comité durante el año siguiente.

29. El Sr. SIAGE (República Árabe Siria) dice que, a pesar de los encomiables esfuerzos del Comité de Relaciones con el País Huésped para asegurar que las misiones permanentes acreditadas ante las Naciones Unidas puedan desempeñar sus funciones, la banda sionista denominada Jewish Defense League ha multiplicado sus ataques contra dichas misiones. Aunque su delegación ha pedido continuamente medidas para poner fin a dichos actos delictivos, no ha habido respuesta por parte del país huésped. Reitera el llamamiento al país huésped para que incoe procedimientos penales contra los responsables de dichos actos criminales y aplique plenamente la Ley federal de 1972, tal como recomienda el Comité de Relaciones con el País Huésped en su informe.

30. Su delegación apoya todas las medidas y recomendaciones de ese Comité, cuyo mandato debe prorrogarse.

31. La Sra. HERNANDEZ CARMONA (Cuba) dice que su delegación ha expresado sus opiniones sobre la cuestión de las relaciones con el país huésped en anteriores ocasiones. Muchos actos han sido perpetrados contra la misión cubana y condenados por su delegación tanto en el Comité de Relaciones con el País Huésped como en la Sexta Comisión. Sin embargo, los autores de dichos delitos no han sido procesados. Tales actos perjudican el funcionamiento adecuado de las misiones diplomáticas en Nueva York, y la actitud impasible de las autoridades de los Estados Unidos es injustificable. Es inaceptable el argumento de que los agentes diplomáticos causan problemas a las autoridades de los Estados Unidos y les hacen efectuar considerables gastos. Los Estados Unidos reciben un beneficio anual de aproximadamente 1.000 millones de dólares de los gastos de las Naciones Unidas, las misiones diplomáticas y las delegaciones. Existe también un efecto multiplicador sobre la economía de los Estados Unidos dimanado de las inversiones de la Caja de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

32. Dadas las múltiples ventajas que reporta a los Estados Unidos el establecimiento de la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, no existe justificación alguna para la actitud de las autoridades de los Estados Unidos al tolerar actos que violan no sólo el derecho internacional sino también el derecho interno de los Estados Unidos.

33. Su delegación conviene en que el mandato del Comité de Relaciones con el País Huésped debe extenderse, y no tiene nada que objetar al contenido del informe del Comité.

34. El Sr. AL-SAMMAK (Kuwait) dice que su Gobierno ha condenado todos los actos violentos, amenazas e insultos perpetrados contra las misiones, su personal y sus bienes; dichos actos ponen en peligro la seguridad de las misiones y constituyen una transgresión de la seguridad internacional, por lo que su delegación desea que se tomen medidas preventivas más adecuadas para desalentar esos actos en el futuro.

35. Con respecto al capítulo VI del informe del Comité de Relaciones con el País Huésped, subraya que todos los agentes diplomáticos que trabajan en misiones acreditadas ante las Naciones Unidas, además de sus derechos, tienen el deber de respetar las leyes y relaciones del país huésped y cooperar tan plenamente como sea posible con las autoridades federales y locales de los Estados Unidos. Por otra parte, el país huésped debe tratar de fomentar el entendimiento mutuo entre la comunidad diplomática y la población local a fin de asegurar relaciones amistosas entre todas las partes interesadas.

36. Su delegación desearía que el Comité de Relaciones con el País Huésped continuara su estudio de la cuestión de las dificultades de estacionamiento y explorara las posibilidades de aumentar el número de lugares de estacionamiento reservado para los vehículos con matrícula diplomática. El problema es importante para los representantes de su país y cree que también para otros.

37. El Sr. VILLAGRAN KRAMER (Guatemala) dice que el informe que se examina interesa especialmente a su país, porque tiene consecuencias generales para todos los países huéspedes de organismos internacionales. Guatemala es huésped de varias organizaciones regionales e internacionales y, en consecuencia, le interesa especialmente que se tomen las medidas adecuadas sobre las recomendaciones del Comité de Relaciones con el País Huésped. Ello serviría de guía a su propio país en sus relaciones con las misiones en Guatemala y en las relaciones de sus propias misiones en el extranjero.

38. El problema de las relaciones con el país huésped no se limita a las relaciones entre las autoridades del país huésped y las misiones acreditadas, sino que también implica al personal de las misiones y la población local. Dichas relaciones son recíprocas y exigen un respeto mutuo. Los incidentes descritos en el informe, especialmente los mencionados como actos terroristas, son muy lamentables y es importantísimo que el país huésped actúe con la debida diligencia a este respecto. Por otra parte, los miembros de las misiones diplomáticas deben cooperar adecuadamente con las autoridades locales.

39. Las autoridades locales deben tomar no sólo medidas punitivas, sino también preventivas. Ha de informarse a la población local del deber de esas autoridades de proteger a los representantes y hacerle conocer las sanciones aplicables.

40. La Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas no llegó al extremo de disponer que las misiones deben invocar la inmunidad diplomática si el resultado de dicha actitud es una falta de cooperación con las autoridades del país huésped. Si la policía local presencia un incidente en el que se ofende la dignidad de un miembro de una misión,

entonces no hay necesidad de que el representante comparezca ante los tribunales para confirmar el testimonio de la policía. Pero en situaciones extremas, cuando ni la policía ni la prensa están presentes, la cooperación de los representantes diplomáticos es importante.

41. Su delegación aprueba las recomendaciones del informe y estima que el Comité de Relaciones con el País Huésped debe continuar su labor. Su delegación también apoya las opiniones expresadas por el representante del Reino Unido.

42. La Sra. WHITE (Estados Unidos de América) dice que los Estados Unidos continúan deseando ser el mejor huésped posible para las Naciones Unidas. Consideran su posición de país huésped como un privilegio y un honor y se percatan bien de las responsabilidades que ello significa. Ha escuchado con atención los comentarios y sugerencias formulados y les prestará la debida atención.

43. Como las delegaciones que no tienen problemas normalmente no intervienen en el tema actual, e incluso no hacen acto de presencia en las reuniones del Comité de Relaciones con el País Huésped, el debate ofrece una imagen desequilibrada de las relaciones con el país huésped. Aun cuando algunos de los problemas mencionados sólo los experimentan un pequeño número de delegaciones, cree que está bien demostrado que los Estados Unidos se ocupan seriamente del asunto.

44. De ese modo, su delegación reconoce que los problemas relativos a la seguridad de las misiones son motivo de grave preocupación para algunos y continuará haciendo todo lo posible para impedir dichos incidentes. Cree que la actuación a ese respecto ha sido buena. Es satisfactorio que Nueva York se haya visto libre de las horribles atrocidades perpetradas contra agentes diplomáticos en otras ciudades del mundo, incluidos los trágicos sucesos de semanas recientes. En efecto, la situación en Nueva York ha de contemplarse como una situación de relativa seguridad en un mundo demasiado violento. Los Estados Unidos no proporcionarán la sombría seguridad de un Estado policía, y cree que la mayoría de las delegaciones no la desean. En vez de ello, tratan de ofrecer seguridad dentro de la vibrante y constante mutación de una sociedad, libre y abierta, de la que se enorgullecen. En respuesta a quienes han denunciado negligencia en la captura y castigo de los infractores, desea señalar que en virtud del sistema de justicia de los Estados Unidos no es posible obtener una declaración de culpabilidad a no ser que las pruebas en que se basa se presenten en un tribunal público. En aquellos casos en que el único testigo es un agente diplomático, la cooperación de éste es necesaria para obtener dichas declaraciones. Ello no rebasa las obligaciones de todos los agentes diplomáticos en virtud del derecho en vigor. Al respecto, menciona la sección 14 del artículo IV de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas (resolución 22 A (I) de la Asamblea General), que prevé la renuncia a la inmunidad diplomática en ciertas circunstancias.

45. En cuanto a la cuestión de los automóviles, algunos incluso han sugerido que los agentes diplomáticos tienen derecho a lugares de estacionamiento reservados en virtud del derecho internacional. No existe seguramente una convención de la que pudiera dimanar tal derecho. Tales

lugares de estacionamiento no se proporcionan en varias capitales importantes, inclusive la otra ciudad en la que las Naciones Unidas tienen una secretaría importante, misiones permanentes y conferencias. Por lo tanto no existe ningún uso ni mucho menos una costumbre que respalde la práctica. Aunque a las autoridades de los Estados Unidos les complace tratar de remediar las necesidades proporcionando tantos lugares reservados como sea posible, piden a la comunidad diplomática que respete las leyes y reglamentos de Nueva York, de conformidad con el derecho internacional y como una cuestión de cortesía para con la ciudad huésped.

46. Su delegación conoce el problema de los automóviles ilegalmente estacionados en lugares de estacionamiento reservados para vehículos con matrícula diplomática, y las autoridades de Nueva York continúan tomando medidas para mantener esos lugares exclusivamente para el estacionamiento de vehículos diplomáticos. En septiembre de 1975, el Departamento de Tráfico impuso multas a casi 400 vehículos ilegalmente estacionados en espacios reservados a vehículos diplomáticos, y el Departamento de Policía ha remolcado a más de 50 vehículos de dichos espacios. Los transgresores no pertenecientes a la comunidad diplomática no están inmunes al pago de 25 dólares por cada infracción y 50 dólares por el remolque. A ese respecto desea recordar a la Comisión que las violaciones de las leyes y reglamentaciones de estacionamiento de Nueva York por parte de los agentes diplomáticos constituyen una fuente constante de fricción en la ciudad. Aunque los agentes diplomáticos están inmunes a las sanciones, no quedan exonerados de la obligación de respetar las leyes del país.

47. Es conveniente que la Comisión tome nota de los múltiples actos de hospitalidad de la comunidad de la ciudad de Nueva York, de los servicios — sin parangón en ninguna otra ciudad del mundo — prestados por la Comisión de la Ciudad de Nueva York para las Naciones Unidas y el Cuerpo Consular, de la amabilidad y la generosidad del Comité de Hospitalidad de las Naciones Unidas y de las giras ofrecidas por el Programa de Viajes para Agentes Diplomáticos. Aunque la delegación de los Estados Unidos no ha patrocinado dichas actividades, está muy orgullosa de ellas, y confía en que contribuirán a hacer la estancia de los huéspedes de los Estados Unidos interesante y agradable y a familiarizar al público de los Estados Unidos con los representantes de las Naciones Unidas.

48. La oradora se refiere a otras actividades destinadas a mejorar las relaciones y a fomentar un espíritu de mejor comprensión entre la comunidad diplomática y la ciudad de Nueva York. Dichas actividades incluyen una serie de seminarios celebrados en el Instituto Ralph Bunche de las Naciones Unidas; un informe sobre las Naciones Unidas ofrecido en horas en las que es mayor el número de televidentes en el canal 7; un folleto distribuido por la United Nations of the United States of America titulado *The "you" in the UN*, que su delegación pidió a la Secretaría se distribuyera a cada misión, y un cartel titulado *What's in it for you?*, que se colocará en trenes y autobuses a la vista de millones de personas.

49. Los Estados Unidos y Nueva York continuarán cooperando con la comunidad diplomática en la solución de sus

problemas, y pide la cooperación de la comunidad diplomática en interés de todos.

50. El Sr. MUSEUX (Francia), hablando en ejercicio del derecho a contestar, dice que lamenta verse obligado a intervenir en relación con las insinuaciones del representante del Chad de que existe un vínculo entre un incidente en Nueva York y las relaciones bilaterales entre Francia y Chad. Huelga decir que dicha acusación carece en absoluto de fundamento y que no merece más consideración.

TEMA 111 DEL PROGRAMA

Cuestión del asilo diplomático: informe del Secretario General (continuación) (A/10139, parte I y Add.1 y parte II; A/C.6/L.1018, A/C.6/L.1020)

51. El PRESIDENTE anuncia que Sudán ha pasado a ser patrocinador del proyecto de resolución A/C.6/L.1018.

Se levanta la sesión a las 17.05 horas.

1561a. sesión

Lunes 10 de noviembre de 1975, a las 15.20 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1561

TEMA 111 DEL PROGRAMA

Cuestión del asilo diplomático: informe del Secretario General (conclusión) (A/10139, parte I y Add.1 y parte II; A/C.6/L.1018, A/C.6/L.1020)

1. El Sr. GOBBI (Argentina) dice que en un espíritu de consenso, del que siempre ha sido partidario el Grupo Latinoamericano, las delegaciones de Panamá, el Paraguay y el Uruguay, habiendo juzgado que la Comisión no apoya unánimemente el sentimiento prevaleciente en el Grupo Latinoamericano, han decidido retirar la enmienda al proyecto de resolución A/C.6/L.1018 que figura en el documento A/C.6/L.1020. Esa loable medida ha sido motivo de decepción para el Grupo Latinoamericano. La gran mayoría de las delegaciones que se refirieron al tema admitieron la base humanitaria del asilo diplomático y consideraron que su práctica tenía un alcance regional reconocido. En las Naciones Unidas, que deberían estar interesadas en la protección de los derechos humanos, no se justifica la oposición a una enmienda mesurada y objetiva al preámbulo de un proyecto de resolución como la que figura en el documento A/C.6/L.1020. De perpetuarse esa rigidez, podría destruir el consenso en la Sexta Comisión; ello constituiría un paso hacia atrás.

2. El Grupo Latinoamericano se reserva el derecho de solicitar que se siga considerando el tema una vez recibidas las respuestas solicitadas en el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución A/C.6/L.1018.

3. El PRESIDENTE dice que, al expresar su profundo reconocimiento al Grupo Latinoamericano, está hablando sin duda en nombre de toda la Comisión. La enmienda presentada por ese Grupo reflejaba evidentemente la situación existente y el debate sobre el asilo diplomático en la Comisión. Sin embargo, esa cuestión ha provocado temores en algunas delegaciones, reales o imaginarios.

4. El retiro de la enmienda permitirá quizá que la Comisión adopte por consenso el proyecto de resolución y

marque el camino para su aprobación de otras resoluciones durante el presente período de sesiones.

5. El Sr. LAUTERPACHT (Australia) dice que el Presidente ha expresado los sentimientos de muchas delegaciones al manifestar su reconocimiento por el generoso gesto de los patrocinadores de la enmienda. Esa actitud refleja una tradición honorable y progresista que la Comisión haría bien en tener en cuenta.

6. El PRESIDENTE sugiere que el proyecto de resolución A/C.6/L.1018 sea adoptado por consenso, sin someterlo a votación.

7. El Sr. AL-ADHAMI (Irak) dice que antes de que la Comisión apruebe el proyecto de resolución desearía que se aclarase el significado de las palabras "plus avant" en el párrafo 3 de la parte dispositiva del texto francés.

8. El Sr. LAUTERPACHT (Australia) dice que, en el texto inglés, la palabra "further" pretende indicar que cualquier consideración futura de la cuestión del asilo diplomático será una continuación de su examen en anteriores períodos de sesiones de la Asamblea General.

9. El Sr. MAÏGA (Mali) dice que la cuestión planteada por el representante del Irak es atendible. Las palabras "plus avant" agregan muy poco al texto y sugiere que se supriman.

10. EL PRESIDENTE hace notar que, al parecer, el texto inglés no plantea problemas. Sugiere que se encomiende a la División de Traducción de la Secretaría la preparación de un texto en francés y, de ser necesario, en otros idiomas, más en armonía con la versión inglesa.

Así queda acordado.

Queda aprobado el proyecto de resolución A/C.6/L.1018.

TEMAS 113 Y 29 DEL PROGRAMA

Informe del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas (A/10033, A/10102, A/10108, A/10113 y Corr.1 y Add.1 a 3, A/C.6/437)

Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones y la promoción de las normas del derecho internacional en las relaciones entre los Estados: informes del Secretario General (A/10218, A/10219, A/10255, A/10289, A/C.6/437)

11. El Sr. BAJA (Filipinas) Relator del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas, presenta el informe de ese Comité (A/10033).

12. Luego de describir la estructura del informe, el orador hace notar que sus párrafos 1 a 8 fueron aprobados por el Comité *ad hoc* sin ninguna dificultad. Los párrafos 9 y siguientes, por el contrario, supusieron al Comité tres días de negociaciones y su aprobación por consenso se logró en buena medida gracias a la dirección, paciencia y discreta diplomacia de su Presidente.

13. El Sr. Baja recomienda a la Comisión que examine la declaración que figura en el párrafo 10, en el sentido de que “hubo una discrepancia fundamental respecto de la necesidad de llevar a cabo una revisión de la Carta”. El debate de esa cuestión es tan importante como el debate sobre la renovación del mandato del Comité *ad hoc*, o quizás más. La polarización de las posiciones en el Comité *ad hoc*, que reflejó la división observada en la Asamblea General durante el vigésimo noveno período de sesiones, difícilmente podría subrayarse demasiado. Si se autorizara al Comité *ad hoc* a proseguir su labor, la Comisión debe, como asunto prioritario y necesario, aprobar una resolución que reemplace las divergencias por esfuerzos cooperativos. El orador considera que podrá llegarse a un consenso sobre una línea de conducta generalmente admitida. Los fundamentos de una relación de trabajo más estrecha podrán afianzarse si las delegaciones, al examinar la Carta, no lo hacen en función exclusiva de sus intereses particulares y si el tema no se identifica con el de la reforma de la Carta.

14. Las “esferas de actividad” que se mencionan en el párrafo 11 incluyen el proceso normativo en el seno de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad; las operaciones de mantenimiento de la paz; el arreglo pacífico de controversias, inclusive el papel que le cabe a la Corte Internacional de Justicia; el funcionamiento de las Naciones Unidas en los campos económico y social; y la reforma o supresión de las disposiciones de la Carta calificadas de anacrónicas.

15. Habida cuenta de que durante el período de sesiones del Comité *ad hoc* se hicieron conocer formalmente algunos textos y como las sugerencias formuladas mediante declaraciones individuales no han sido debatidas suficientemente, el Comité *ad hoc* no pudo enumerar las propuestas hechas con arreglo al inciso d) del párrafo 1 de la resolución 3349 (XXIX) de la Asamblea General. Dado el tiempo disponible, habría sido por supuesto inconcebible que el Comité *ad hoc* hubiese elaborado los detalles de las

propuestas relativas a la Carta y al fortalecimiento de las Naciones Unidas.

16. No obstante, el período de sesiones ha dado a los miembros del Comité *ad hoc* la oportunidad de intercambiar ideas y sugerencias sobre la manera de fortalecer la Carta y el papel y funcionamiento de las Naciones Unidas. A ese respecto, sería útil que la Comisión procurara formular una declaración aceptable en términos generales sobre el mandato del Comité *ad hoc* y que indicara un calendario de tareas, así como las directrices, posibles esferas de negociación y ciertos principios amplios para lograrla. En el momento actual, una nueva exposición de posiciones conocidas no sólo sería contraproducente sino también negativo. En cambio, las delegaciones deberían encaminar su labor a la creación de una atmósfera conducente a la aceptación de la realidad del Comité *ad hoc*.

17. El hecho de que el Comité *ad hoc* no haya podido enumerar las propuestas no significa que no se le hayan presentado ideas específicas. Al respecto, sería útil que los miembros de la Comisión analizaran por sí mismos las que figuran en el anexo I del informe. Por ejemplo, Sierra Leona, Zambia, Nigeria, Rwanda y México han dado a conocer opiniones bien claras sobre el proceso normativo y sobre la cuestión del veto en el Consejo de Seguridad, e Indonesia, Nueva Zelandia, España y Colombia se han manifestado respecto del párrafo 3 del Artículo 27 de la Carta. Filipinas, Colombia y Guyana han mencionado la asignación de nuevas funciones al Consejo de Administración Fiduciaria. Algunas delegaciones han calificado de anacrónicos a los Artículos 53 y 107 de la Carta. En el ámbito del mantenimiento de la paz, Guyana sugirió el establecimiento de un mecanismo internacional de observación de la paz, Colombia una fuerza internacional de mantenimiento de la paz, Filipinas se refirió al mantenimiento de la paz por interposición e Indonesia propuso la creación de una comisión permanente a fin de proporcionar una serie de procedimientos para la solución de controversias. Nueva Zelandia formuló una propuesta muy interesante en relación con el párrafo 2 del Artículo 4 de la Carta, respecto de la admisión de nuevos Estados en las Naciones Unidas. Esos ejemplos no pretenden ser exhaustivos, sino simplemente ilustrativos.

18. El orador también desea mencionar a ese respecto las importantes opiniones expuestas por los países socialistas y por la mayoría de los países del Grupo de Estados de Europa Occidental y otros Estados, de que las Naciones Unidas han soportado la prueba del tiempo y que la mejor manera de fortalecerlas aún más era utilizando más cabalmente las actuales disposiciones de la Carta y aplicando más estrictamente sus decisiones los Estados Miembros.

19. Los miembros del Comité *ad hoc*, en especial durante la primera semana de sesiones, sabían muy bien lo que deseaban, pero no precisamente cómo iniciar su labor. El Sr. Baja sugiere en consecuencia que, si se prorroga el mandato del Comité *ad hoc*, la Comisión formule recomendaciones y directrices acerca de los métodos de trabajo. Al respecto, señala a la atención el anexo II del informe, en que figuran las propuestas de México sobre dichos métodos. El Comité *ad hoc* no tuvo ocasión de estudiar esas propuestas.

20. El orador expresa la esperanza de que el informe, aunque no describe con absoluta exactitud la labor del Comité *ad hoc*, ayude por lo menos a la Comisión a orientar esa labor.

21. El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que sólo se han programado siete sesiones para el examen del informe del Comité *ad hoc* y cinco sesiones para el tema del programa concerniente al fortalecimiento del papel de las

Naciones Unidas. Las delegaciones han convenido en que, si así lo desean, se podrán referir a ambos temas simultáneamente, e insta a los representantes a que presenten lo antes posible cualquier proyecto de resolución, a fin de evitar más de una declaración por delegación. El Presidente se propone cerrar la lista de oradores sobre ambos temas durante la semana en curso.

Se levanta la sesión a las 15.50 horas.

1562a. sesión

Martes 11 de noviembre de 1975, a las 15.20 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1562

TEMAS 113 Y 29 DEL PROGRAMA

Informe del Comité *ad hoc* sobre la carta de las Naciones Unidas (continuación) (A/10033, A/10102, A/10108, A/10113 y Corr.1 y Add.1 a 3, A/C.6/437)

Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones y la promoción de las normas del derecho internacional en las relaciones entre los Estados: informes del Secretario General (continuación) (A/10218, A/10219, A/10255, A/10289, A/C.6/437)

1. El Sr. BAQIR (Pakistán) dice que las opiniones de su Gobierno sobre la cuestión de la revisión de la Carta de las Naciones Unidas fueron expuestas en la 2059a. sesión plenaria celebrada en el vigésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea General.

2. Las consultas y discusiones realizadas hasta la fecha indican que las opiniones están profundamente divididas. Algunos Estados apoyan vigorosamente el criterio de que la Carta ha soportado la prueba del tiempo, ha ayudado a evitar algunos conflictos internacionales y ha podido detener muchos otros. Esos Estados han aducido que la validez y fuerza inherente de la Carta ha quedado ampliamente demostrada en los últimos 30 años y que ha promovido la cooperación entre Estados de diferentes niveles de desarrollo económico. No obstante, otros Estados Miembros son igualmente convincentes al propugnar una revisión de la Carta que tenga en cuenta las realidades actuales; el número de Miembros de las Naciones Unidas casi se ha triplicado desde su creación y la Carta debería adaptarse a los intereses manifestados por muchos de los nuevos Miembros, en su mayoría países en desarrollo.

3. Otro grupo de Estados se declara partidario de modificaciones y enmiendas de procedimiento, pues consideran que el propósito esencial de la Carta — el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales — ha sido satisfecho adecuadamente. Un estudio minucioso de las opiniones de los Estados Miembros revela que la mayoría favorece un

proceso gradual de examen de las diversas disposiciones de la Carta y de su validez frente a la situación actual, con miras a realzar la eficacia de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. El orador considera que, a pesar de sus fracasos, de los que el Pakistán tiene cierta experiencia trágica, las Naciones Unidas han logrado asimismo algunos resultados dignos de mención. Si bien la Organización no siempre ha podido cumplir con su cometido primordial, el fracaso puede atribuirse a la avasalladora influencia de los intereses nacionales de algunos Estados Miembros y no a defectos de la Carta. También ha habido casos en que algunos Estados Miembros han hecho escarnio de la Carta o de la voluntad de la comunidad internacional y en que las Naciones Unidas no han podido siquiera adoptar las medidas autorizadas o exigidas por la Carta. Esos casos no deben atribuirse a la Carta, sino a la falta de voluntad política de algunos Estados Miembros de respetar la letra y el espíritu de aquélla.

4. Refiriéndose al principio de unanimidad de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, el Sr. Baqir dice que el desencanto a ese respecto se debe a los casos en que el veto ha sido utilizado para frustrar no solamente la voluntad casi unánime de la comunidad internacional, sino también las mismas disposiciones de la Carta. Las sugerencias concernientes al alcance o al futuro del veto pueden atribuirse más a esos casos de su uso indebido que a cualquier obstinación irrazonable de la mayoría de los Estados Miembros.

5. La Carta debe adaptarse a los cambios acaecidos en el escenario político mundial desde 1945. La delegación del Pakistán tiene plena conciencia de la naturaleza extremadamente delicada del problema, pero está convencida de que esos cambios, una vez aceptados luego de un detenido examen, fortalecerán los principios básicos de la Carta. Existen disposiciones a este respecto en el Artículo 108. Los cambios ya realizados respondiendo a nuevas realidades, como el aumento del número de miembros del Consejo de Seguridad y del Consejo Económico y Social, no han socavado y menos aún destruido el equilibrio logrado en la Carta. Futuras modificaciones similares no habrán de producir semejante catástrofe.

6. La delegación del Pakistán, si bien reconoce que las propuestas de cambios en el equilibrio existente entre los diversos órganos de las Naciones Unidas deben pasar por una etapa de estudios intensos, opina que ninguno de esos cambios debe ser rechazado de plano. Esa delegación ha estudiado cuidadosamente las opiniones y sugerencias presentadas hasta la fecha y considera que debe tomarse debida nota de las recientes deliberaciones de los períodos extraordinarios de sesiones sexto y séptimo de la Asamblea General, que reflejan los intereses generales de la comunidad internacional, y en particular de los países en desarrollo. Las disparidades económicas existentes son la causa en buena medida del desacuerdo y del descontento que someten a las relaciones internacionales a presiones y tiranteces. Una actitud de entendimiento y cooperación con los países del tercer mundo, en particular en el campo económico, mitigará, según la delegación del Pakistán, algunas de las preocupaciones que inspiraron las sugerencias de cambios en el orden existente. Ese aspecto tiene una

importancia cada vez mayor para la Carta. Al parecer, existe una esfera creciente de acuerdo sobre los cambios en las disposiciones relativas a la estructura económica.

7. El orador sugiere que, si bien debería permitirse que la estructura política básica de la Carta siguiese funcionando sin cambios por ahora, podría solicitarse al Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas que prosiguiese sus deliberaciones en 1976, prestando particular atención a las esferas de posible acuerdo general concernientes a la revisión o examen.

8. El PRESIDENTE sugiere que se cierre la lista de oradores sobre los temas 113 y 29 el miércoles 12 de noviembre, a las 18 horas.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 15.40 horas.

1563a. sesión

Miércoles 12 de noviembre de 1975, a las 10.40 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1563

TEMAS 113 Y 29 DEL PROGRAMA

Informe del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas (*continuación*) (A/10033, A/10102, A/10108, A/10113 y Corr.1 y Add.1 a 3, A/C.6/437)

Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones y la promoción de las normas del derecho internacional en las relaciones entre los Estados: informes del Secretario General (*continuación*) (A/10218, A/10219, A/10255, A/10289, A/C.6/437)

1. El Sr. DATCU (Rumania) dice que su país atribuye gran importancia a los temas que se examinan, pues considera que las Naciones Unidas son un medio importante que tiene la humanidad para resolver los problemas internacionales y promover la realización de los ideales que inspiraron la creación de la Organización. Desde entonces, se han producido grandes transformaciones en el mundo, han aparecido nuevos países socialistas de positiva influencia en el escenario mundial, el sistema colonial se ha desplomado y han surgido decenas de nuevos Estados independientes. Todo ello ha marcado nuevas características en la vida internacional contemporánea, reflejadas en la mayor participación de todos los Estados, en la búsqueda de soluciones mediante negociaciones y en la adopción de medidas encaminadas a la distensión y cooperación entre Estados con sistemas diferentes. En ese sentido, se ha celebrado con resultados felices la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, cuya Acta Final señala la inauguración de una etapa que plantea nuevos estímulos a los países y pueblos de ese continente.

2. Por otra parte, subsisten en la vida internacional problemas graves que preocupan a toda la humanidad, principalmente el de instaurar un nuevo orden económico y político que permita substituir las antiguas relaciones de dominación y opresión por otras nuevas basadas en la igualdad y en la equidad.

3. A lo largo de su existencia, las Naciones Unidas han desempeñado un papel positivo en el escenario mundial, pero, al mismo tiempo, su actividad ha revelado algunas insuficiencias y debilidades. Serios conflictos producidos en distintas partes del mundo, así como acontecimientos económicos y sociales de alcance mundial, no se han tratado en las Naciones Unidas sino fuera de ellas; en cambio, bajo su patrocinio se han tomado medidas extrañas al espíritu y a los propósitos de su Carta. La actividad de las Naciones Unidas no se ajusta al impetuoso ritmo de cambio y su estructura no refleja adecuadamente las nuevas realidades sociales y políticas.

4. La delegación de Rumania considera necesario crear condiciones favorables a una mayor participación de todos los Estados Miembros, en condiciones de igualdad perfecta, ya que sólo así las Naciones Unidas podrán aumentar su contribución a la solución de los problemas con que tropieza la humanidad y llegar a ser un instrumento internacional más eficaz.

5. En ese orden de ideas, el Gobierno rumano ha presentado el documento A/C.6/437, que refleja su posición respecto de los temas que se examinan. En efecto, Rumania considera que las Naciones Unidas y sus documentos fundamentales deben ajustarse plenamente a las realidades y tendencias actuales. Debido al momento en que fue redactada, la Carta contiene disposiciones en que se

aceptaba y reconocía de hecho el colonialismo, cuyo mantenimiento equivale a perpetuar relaciones de dominación y de injerencia en asuntos de otros Estados. La Carta debe proclamar claramente la abolición completa y definitiva del colonialismo, del neocolonialismo y del racismo, así como la determinación de eliminar todas las prácticas emanadas de esos sistemas. Asimismo, debe proclamar enérgicamente el derecho fundamental de los pueblos a decidir sus propios destinos y a ejercer su soberanía permanente sobre sus recursos naturales y debe prever la equiparación del desarrollo económico de todos los Estados como base efectiva de la democratización de la vida internacional. La delegación de Rumania considera que ya es hora de considerar la inclusión de disposiciones de esa índole en la Carta, a fin de acabar con las contradicciones actuales.

6. La permanencia en la Carta de disposiciones relativas a los "Estados enemigos" constituye no sólo un anacronismo, sino un obstáculo a la distensión y a la instauración de relaciones fundadas en la igualdad plena. Para iniciar una nueva era en la historia de la humanidad, la Carta debe asegurar la cooperación de todos los Estados.

7. La Carta no debe dar lugar a que sus disposiciones se interpreten en el sentido de que exista más de una categoría de Estados Miembros. Debe consagrar sin equívocos la igualdad de todos los Estados Miembros, y el derecho y el deber que ellos tienen de participar en los esfuerzos por evitar y extinguir conflictos.

8. Convencida de la necesidad de fortalecer el papel de las Naciones Unidas en la vida internacional, Rumania considera acertado proseguir las actividades encaminadas a desarrollar, precisar y adaptar las normas y principios de las relaciones entre los Estados. Los instrumentos ya elaborados hasta el presente por las Naciones Unidas constituyen jalones importantes en ese proceso. Con ese objeto, la delegación de Rumania propone que las Naciones Unidas elaboren y aprueben un código de conducta de carácter universal, donde figuren los derechos y deberes fundamentales de los Estados. Un código de esa índole revestiría especial importancia para la causa de la seguridad internacional, así como para la independencia y el progreso de las naciones.

9. Asimismo, Rumania considera que incumbe a las Naciones Unidas una función importante en la instauración del nuevo orden económico internacional, del que dependen la verdadera distensión y la paz efectiva. Deben darse a la Asamblea General las estructuras organizacionales necesarias para la obtención de resultados prácticos en esa esfera. La posición y las propuestas de Rumania a ese respecto fueron presentadas el 5 de septiembre de 1975¹.

10. Fundamentalmente, las Naciones Unidas se crearon para preservar a las generaciones venideras del flágeo de la guerra y asegurar el arreglo pacífico de toda controversia internacional. Sin embargo, eso no se ha cumplido totalmente, pues todavía se producen casos en que se emplea la fuerza o se amenaza con hacerlo. En tal sentido, las Naciones Unidas pueden y deben dar pruebas de inventiva y desempeñar un papel más activo en la prevención o el

arreglo de controversias. Con ese objeto, Rumania propone (véase A/C.6/437) la creación de una comisión permanente de la Asamblea General encargada de las funciones de mediación, buenos oficios y conciliación. Esa comisión tendría un carácter preventivo y en su actividad participarían todos los Estados interesados, incluso aquellos que no fueran partes en la controversia. En definitiva, la comisión podría preparar el camino para la aprobación por las Naciones Unidas de un instrumento internacional en que se establecieran principios y normas para el arreglo pacífico de controversias. Además, la participación universal reforzaría la confianza de los Estados en la capacidad de las Naciones Unidas en esa esfera.

11. Una de las tareas fundamentales de las Naciones Unidas se relaciona con el desarme general y, sobre todo, con el desarme nuclear, y la delegación de Rumania ha expresado su posición y presentado sus propuestas a ese respecto en la Primera Comisión durante el actual período de sesiones².

12. En cuanto a la consolidación del prestigio de las Naciones Unidas, el orador señala que depende del perfeccionamiento de su universalidad y del mejoramiento de su estructura, organización y funcionamiento, condiciones apuntadas en fecha reciente por el Presidente de Rumania. La acentuación del carácter democrático de la labor de las Naciones Unidas requiere ampliar las atribuciones y la competencia de la Asamblea General, a fin de que mejore su funcionamiento y que las resoluciones que apruebe tengan el apoyo unánime de los Estados Miembros. Asimismo, conviene extender la práctica de los períodos extraordinarios de sesiones para el análisis de problemas importantes y para la preparación de los programas destinados a resolverlos. En ese sentido, la Asamblea General debe utilizar todos los recursos que le permite la Carta para intensificar sus relaciones con el Consejo de Seguridad en cuanto a los problemas de la paz y la seguridad internacionales, esfera en que tal vez sería importante consagrar en la Carta el procedimiento de consenso. Esa regla debería definirse a fin de facilitar la solución de los problemas mediante negociaciones en que participasen todos los interesados, sin que ello implicara descartar los procedimientos actuales en los casos en que no se pueda llegar a un consenso. Asimismo, convendría establecer en la Carta que las resoluciones aprobadas por consenso o por unanimidad de votos constituyen un compromiso firme para todos los Estados Miembros. Convendría igualmente introducir en la Carta disposiciones que reafirmasen la práctica de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de establecer procedimientos, mecanismos u organismos para la aplicación plena de resoluciones aprobadas por esos órganos.

13. El mejoramiento de las estructuras de los órganos y organismos de las Naciones Unidas y la democratización de sus actividades contribuirían considerablemente a aumentar la eficacia de la Organización. En tal sentido, habría que aprobar en primer lugar medidas que permitieran una mayor participación de los países pequeños y medianos en el sistema de seguridad colectiva, para lo cual habría que aumentar el número de miembros del Consejo de Seguridad en proporción al número de Estados Miembros y a los cambios que se produjesen en la estructura de las Naciones

¹ Véase A/AC.176/3.

² Véase A/C.1/1066.

Unidas. En segundo lugar, convendría que cada región geográfica tuviese uno o dos representantes que gozasen, por rotación anual, de los mismos derechos que los miembros permanentes del Consejo para la toma de decisiones sobre problemas de fondo. El principio de la distribución geográfica equitativa debe aplicarse en forma amplia en todas las actividades de la Organización, incluida la elección de sedes. También debería extenderse la práctica de celebrar reuniones en los distintos Estados Miembros. Por último, Rumania considera conveniente mejorar los métodos de trabajo de la Secretaría y asegurar una representación adecuada de todos los Estados.

14. Interesada como otros Estados en el fortalecimiento de la capacidad de las Naciones Unidas, Rumania presenta sus propuestas relativas al tema en la inteligencia de que la humanidad se halla en los umbrales de una nueva era, y de que deben incorporarse en la Carta los principios y normas más avanzados del derecho internacional. El Gobierno rumano declara que seguirá colaborando decididamente con todos los Estados en el desarrollo y la reafirmación del papel de las Naciones Unidas en la vida internacional, ya que interesa a todas las naciones que el desempeño de la Organización se ajuste a la Carta y a las resoluciones por ella aprobadas.

15. El tema 29 del programa tiene su origen en las resoluciones 2925 (XXVII), 3073 (XXVIII) y 3282 (XXIX), aprobadas por unanimidad por la Asamblea General, y ya se dispone de tres informes del Secretario General, en que figuran las observaciones y propuestas de unos 40 Estados Miembros sobre el tema. Simultáneamente, y por las mismas preocupaciones, se ha iniciado el debate sobre la forma de mejorar la Carta y en el anterior período de sesiones se estableció el Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas, cuyo informe se ha publicado en relación con el tema 113 del programa (A/10033). Rumania considera acertado el examen conjunto de ambos temas porque, obedeciendo al mismo propósito, se complementan recíprocamente.

16. Rumania ha expresado desde el primer momento su deseo de integrar el Comité *ad hoc*, deseo que no ha podido cumplirse por circunstancias conocidas. La delegación de Rumania se pronuncia firmemente por la extensión del mandato conferido al Comité y propone su ampliación, a fin de permitir la participación de los países que deseen aportar su contribución. Con ese espíritu de cooperación, la delegación de Rumania está dispuesta a celebrar consultas con el objeto de preparar un proyecto de resolución sobre la continuación de los trabajos.

17. El Sr. URIBE (Colombia) dice que los cambios que diariamente ocurren en la balanza del poder mundial y la aparición de hechos nuevos en las relaciones entre los pueblos obligan necesariamente a reflexionar sobre las medidas que permitan perfeccionar los mecanismos operativos de las Naciones Unidas. El no aceptar la evolución de los hechos en la comunidad internacional equivale a desconocer la evidencia de los factores que delimitan y condicionan su contorno. En cambio, el aceptar que el orden jurídico necesita desenvolverse al ritmo de las nuevas circunstancias es posición que fortalece, en vez de debilitar, la Organización internacional.

18. El orden jurídico se destruye en la medida en que deje de ser el reflejo de los nuevos hechos sociales y políticos. La situación política de 1945 se ha modificado sustancialmente en 30 años. Tales cambios tienen su origen, en buena medida, en el propio ejercicio de las facultades atribuidas a los órganos de las Naciones Unidas, a cuyo respecto la descolonización constituye excelente muestra de tal fenómeno.

19. La actualización de las Naciones Unidas es imperativo de la época actual, pero cabe preguntarse si los cambios indispensables han de provenir sólo de un grupo privilegiado de Estados o si, por el contrario, todos los gobiernos, incluidos los medianos y pequeños Estados, tienen posibilidad de cooperar en la gran empresa del desarrollo operativo de las Naciones Unidas.

20. El espíritu de la creación del Comité *ad hoc* es el de ofrecer a los Miembros de las Naciones Unidas, y en particular a los miembros de la Sexta Comisión, la posibilidad de contribuir directamente a la difícil, pero imprescindible, tarea de actualizar los mecanismos de la Organización internacional. Es indudable que el estudio de las sugerencias en orden a la revisión de la Carta no puede cumplirse en corto término, a riesgo de caer en la improvisación. En todo caso, es innegable que la tarea de poner al día la Carta de las Naciones Unidas está en marcha y que todos los Estados aguardan confiadamente el fruto promisorio de tal esfuerzo.

21. El deseo de participación a nivel de las decisiones mundiales es característica de las naciones pequeñas y medianas, tradicionalmente colocadas en posición marginal frente a las grandes Potencias. Pero, al lado del ánimo de participación, quizá la única tarea a que ningún Estado está dispuesto a renunciar es a la de discutir y cooperar en los cambios que se introduzcan en la estructura de las Naciones Unidas, entidad que representa el mejor símbolo de un mundo en armonía y cooperación constructiva.

22. La propuesta de prorrogar el mandato del Comité *ad hoc* persigue una mayor operancia de sus labores. La urgencia de actualizar los mecanismos de las Naciones Unidas constituye una materia sobre la cual existe plena conciencia en los Estados Miembros de la Organización. La solicitud para que todos los Estados colaboren al buen éxito de las labores confiadas al Comité *ad hoc* se complementa con el comedido llamamiento para prorrogar la vigencia de tal grupo de estudio, en el entendido de que el compromiso que contrajeran los suscriptores de la Carta de San Francisco para el mantenimiento de la paz incluye también la colaboración en toda iniciativa que conlleve otorgar a las Naciones Unidas mayor eficacia, sin permitir que los nuevos hechos del mundo escapen a su competencia o que la responsabilidad de la paz se limite a un solo grupo de Estados con prescindencia de los países nuevos, cuya libertad es tal vez el mayor fruto de los 30 años de vida de la Organización.

23. La Srta. VEGA (Perú), citando al Secretario General, dice que las Naciones Unidas han pasado de ser la asociación de 51 naciones estrechamente vinculadas con las circunstancias de la segunda guerra mundial a ser la Organización mundial con más de 140 Miembros, estando ya muy cerca de la universalidad. Al salir de un conflicto

mundial, era natural que a los fundadores de las Naciones Unidas les preocupara en especial concebir un sistema de mantenimiento de la paz con el que se pudiera evitar una repetición de los acontecimientos que llevaron a la segunda guerra mundial. Pero la evolución del mundo de la posguerra ha creado una nueva estructura de las relaciones internacionales en los últimos 30 años. Así, la base del poder político y económico, en el mundo en su conjunto, ha cambiado radicalmente de una manera imprevisible en San Francisco.

24. Entre las disposiciones establecidas en uno de los últimos capítulos de la Carta de San Francisco figuran una relativa al poder de introducir reformas (Artículo 108) y otra concerniente a la posibilidad de revisarla (Artículo 109). Entre los términos "reforma" y "revisión" hay una diferencia de alcance y de fondo. Cuando se trata de mantener los principios fundamentales que constituyen la base de un instrumento y de modificar tan sólo ciertas disposiciones, se puede hablar de reforma. Por el contrario, existe revisión cuando se busca alterar esos principios. El problema de la revisión de la Carta quedó, pues, planteado desde el momento mismo en que entró en vigencia, debido, tal vez, a ciertas deficiencias que se revelaron en la Organización desde el comienzo de su actuación.

25. Por un lado, el Artículo 108 acuerda a la Asamblea General la facultad de reformar la Carta, para lo que basta que un Estado incluya en el programa provisional la reforma proyectada. Si la Asamblea resuelve considerarla y la aprueba, es sometida a ratificación de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, y si es ratificada por los dos tercios de dichos Estados, incluidos los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, queda incorporada en la Carta.

26. Por otra parte, el Artículo 109 confiere a una Conferencia General de los Miembros de las Naciones

Unidas el poder de revisar la Carta, esto es, prevé un órgano nuevo, una especie de asamblea constituyente o "*ad hoc*" encargada de la revisión de la Carta.

27. Frente al tema de la revisión de la Carta, han surgido en la Sexta Comisión tres tendencias principales, a saber: la de aquéllos francamente adversos a toda posibilidad de revisión de la Carta y que mantienen una posición conservadora; la de los que están decididamente en favor de una revisión de la Carta; y la de los que se han pronunciado en contra de una revisión de la Carta en forma general, pero que no excluyen las reformas concretas.

28. Frente a esos tres bloques, el informe del Grupo de Expertos para el estudio de la estructura del sistema de las Naciones Unidas³ podría constituir una fórmula de transacción en lo que respecta a ese delicado tema. Dicho informe, que ha sido presentado al Secretario General dentro del marco de un plan estructural general para su estudio por el Comité Preparatorio del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, tiene por finalidad servir de ayuda para remediar algunas deficiencias en la estructura de las Naciones Unidas que impiden que la Organización se convierta en un instrumento más eficaz. En vista de esas consideraciones, se puede llegar a la conclusión de que está presente en el ambiente de las Naciones Unidas la necesidad urgente de reestructuración del sistema y de adaptación a los nuevos cambios internacionales ocurridos últimamente.

29. Cualquiera que sea la vía a través de la cual se revitalice a la Organización es bienvenida, ya sea a través del Comité *ad hoc*, ya sea a través de los trabajos del Grupo de Expertos, lo importante es la toma de conciencia y las primeras medidas que lleven a ese fin.

Se levanta la sesión a las 11.55 horas.

3 E/AC.62/9.

1564a. sesión

Jueves 13 de noviembre de 1975, a las 15.20 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1564

TEMAS 113 Y 29 DEL PROGRAMA

Informe del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas (continuación) (A/10033, A/10102, A/10108, A/10113 y Corr.1 y Add.1 a 3, A/C.6/437)

Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones y la promoción de las normas del derecho internacional en las relaciones entre los Estados: informes del Secretario General (continuación) (A/10218, A/10219, A/10255, A/10289, A/C.6/437)

brados en el Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas y en otras ocasiones, su delegación rechaza enérgicamente la revisión de la Carta. Durante sus 30 años de existencia, la Carta, en su carácter de documento fundamental del derecho internacional actual, ha demostrado que es lo bastante flexible para guiar a todos los Estados en sus relaciones internacionales, aun para el futuro.

2. Es especialmente importante que se hable acerca de la cuestión en el año que señala el trigésimo aniversario de la Carta, que, a causa de una correlación histórica inmediata, es también el trigésimo aniversario de la victoria de la coalición antihitleriana sobre la Alemania fascista y sus aliados, y, por lo tanto, del final de la segunda guerra mundial. La Carta recoge las lecciones dadas por los acontecimientos que condujeron a esa guerra y por la lucha y victoria comunes de la coalición antihitleriana sobre el

1. El Sr. SEIDEL (República Democrática Alemana) dice que, tal como ha manifestado durante los debates cele-

fascismo. Sobre todo, esas lecciones consistían en que era necesario establecer una organización internacional para asegurar el cumplimiento estricto de los principios por los cuales los países del mundo habían hecho un sacrificio tan grande, especialmente la paz y la seguridad internacionales y la cooperación pacífica entre los Estados, independientemente de su sistema social. Esos principios siguen teniendo la misma validez que tenían cuando fueron incorporados en la Carta. Junto con las disposiciones de la Carta relativas a la estructura y procedimientos de las Naciones Unidas, hacen que la Organización pueda realizar sus tareas cada vez mejor en un mundo en cambio permanente.

3. Cambios históricos importantes, como el proceso de descolonización ya casi terminado, han tenido lugar basándose en la Carta, y la lucha de liberación de numerosos pueblos oprimidos por el colonialismo ha sido fomentada por el hecho de que la Carta, como primer instrumento de derecho internacional con obligatoriedad general, obliga a los Estados a reconocer el derecho de los pueblos a la libre determinación. La Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales (resolución 1514 (XV) de la Asamblea General), que se basa en ese principio de la Carta, es otra importante arma política y jurídica para esos pueblos en su justa lucha por la independencia nacional.

4. Gracias al principio de igualdad soberana consagrado en la Carta, los Estados que han surgido del proceso de descolonización están participando activamente en las Naciones Unidas, en pie de igualdad con todos los demás Estados, independientemente de su estructura social o tamaño. Los resultados del séptimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General y la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados (resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General) muestran que las Naciones Unidas están aplicando su Carta y que están en situación de adoptar medidas eficaces para satisfacer los requerimientos especiales de los países en desarrollo, especialmente en la esfera económica. Así, la Carta no ha impedido un desarrollo progresivo sino que lo ha fomentado, y su delegación está firmemente convencida de que podrá estar a la altura de las necesidades futuras.

5. Su delegación sabe que las actividades de las Naciones Unidas no siempre han estado de acuerdo con las disposiciones fundamentales de la Carta, que ha habido violaciones de la Carta y que no siempre se han agotado completamente las posibilidades que ella ofrece. Eso no se debe a la Carta en sí, sino a que algunos Estados Miembros no han cumplido plenamente las obligaciones que la Carta les impone. La práctica muestra que las Naciones Unidas solamente han aplicado con éxito sus propósitos y principios cuando sus Miembros se han regido por la Carta. Así pues, su delegación desea repetir enérgicamente el llamamiento que figura en la resolución 2627 (XXV) de la Asamblea General de que se observe estrictamente la Carta y se aplique plenamente. En ello, y no en la revisión de la Carta ni en los intentos por hacerla jurídicamente perfecta, está la clave del fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas, de la misma manera que las violaciones de las leyes nacionales se combaten básicamente no modificando la ley, sino instando a quienes la violan a que la cumplan. Los esfuerzos para sustituir por discusiones sobre la revisión el esfuerzo necesario para aplicar plenamente la Carta sola-

mente servirán para obstaculizar las actividades de las Naciones Unidas. No se puede hacer nada con respecto al hecho de que existan Estados con sistemas diferentes. Esos Estados pueden vivir juntos y lo harán solamente si se respetan los principios de la coexistencia pacífica. Negarlo significa socavar, voluntaria o involuntariamente, los fundamentos de las Naciones Unidas.

6. La Carta es un sistema bien equilibrado de principios y normas democráticos que corresponden plenamente a las necesidades actuales, es decir, a la política de coexistencia pacífica de Estados con sistemas sociales distintos y al nacimiento de numerosos Estados liberados con su influencia cada vez mayor. Las disposiciones sobre la composición, las funciones y las atribuciones del Consejo de Seguridad, que todos los Estados Miembros han aceptado en el ejercicio de sus derechos soberanos al ser admitidos como Miembros, no están anticuados ni son antidemocráticos, y reflejan adecuadamente el equilibrio de poder que prevalece actualmente en el mundo. En consecuencia, no deben ser modificados ni enmendados. Ello se aplica también al principio de unanimidad en el Consejo de Seguridad. Su delegación apoya la posición adoptada en el Consejo de Seguridad por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuyos objetivos han sido constantemente el mantenimiento de la paz y el apoyo a la lucha de liberación colonial y los intereses de los países en desarrollo.

7. Asimismo, toda interferencia con la Carta sería causa de inseguridad para los órganos y organismos especializados de las Naciones Unidas y, debido al carácter general y complejo de la Carta, repercutiría en las relaciones entre los Estados y tendría inevitablemente una influencia negativa sobre la situación internacional. De esa manera, la petición de que se revise la Carta está vinculada estrechamente con la cuestión de la viabilidad permanente de las Naciones Unidas.

8. La modificación de la Carta tendría repercusiones de largo alcance sobre la condición jurídica de muchos acuerdos que, pese a haber sido concertados fuera del marco de las Naciones Unidas, se basan en las normas de la Carta o se refieren a ellas. Ello se aplica a los acuerdos regionales sobre cooperación de los Estados en la esfera política y en otras esferas, a los estatutos de las organizaciones internacionales y a numerosos acuerdos bilaterales sobre cooperación en las esferas política, económica y militar. Análogamente, el Acta Final de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa expresó la adhesión de los Estados participantes a la Carta y, como muchos otros documentos de derecho internacional, consideró que las disposiciones de la Carta son la norma suprema para la política entre los Estados y las consideró directrices inalterables para sus actividades.

9. Las opiniones de los Estados que figuran en el informe del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas (A/10033) confirman la opinión de su delegación; muestran claramente que no hay base alguna para poder llegar a un acuerdo sobre el problema. Por tanto, duda de que sea útil que el Comité *ad hoc* siga celebrando reuniones el año próximo.

10. El orador cita y reafirma la posición de su Gobierno tal como se expone en el último párrafo de sus comentarios en el documento A/10113/Add.1.

11. El Sr. ROMULO (Filipinas) dice que el séptimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General demostró que la comunidad mundial está avanzando rápida e irrevocablemente hacia la adopción de medidas para el establecimiento de un orden económico mundial más equitativo. En un plazo relativamente corto se dieron los primeros pasos para permitir que se adopten criterios comunes y cooperativos acerca de los futuros problemas, peligros y oportunidades. Para que las Naciones Unidas puedan asumir un papel central en los asuntos mundiales en una era de interdependencia, deben ser aptas para la tarea. Con ocasión del vigésimo quinto aniversario de las Naciones Unidas, su delegación señaló (1878a. sesión plenaria) que, si bien la Organización había demostrado una capacidad de adaptación notable y sus principios eran irreprochables, no era adecuada en todo sentido para las nuevas demandas que se le hacían. Esas observaciones han adquirido mayor fundamento con el paso del tiempo.

12. Su delegación se alegra de que se hayan adoptado diversas iniciativas con respecto a la modernización y mejora de los procedimientos y estructura de las Naciones Unidas y de que una gran mayoría de los Miembros haya convenido en que no se puede seguir aplazando el examen de la estructura de las Naciones Unidas y de su Carta. Las medidas tomadas por la Asamblea General al aprobar la resolución 3349 (XXIX) han sido tan populares que ha sido necesario aumentar el número de miembros del Comité *ad hoc*. La tarea de ese Comité no hace más que empezar. En general, sus miembros están enfocando la empresa histórica con la prudencia y la seriedad necesarias para asegurar la confianza y el apoyo de todos los Miembros de las Naciones Unidas.

13. Aunque durante el debate general en el Comité *ad hoc* se hicieron muchas contribuciones constructivas y útiles, la actitud de algunos de sus miembros ha seguido siendo obstructiva, negativa y empecinada. Ese obstruccionismo tendió a retrasar la organización de sus trabajos. Sin embargo, el Comité *ad hoc* ha comenzado a funcionar de acuerdo con los términos precisos de su mandato. Los Miembros de las Naciones Unidas tienen un derecho claro establecido en la Carta de que sus recomendaciones y sugerencias sean oídas y examinadas debidamente. Todo intento de impedir el ejercicio de ese derecho solamente se puede considerar como un intento de imponer la voluntad rígida de unos pocos con respecto al deseo claramente expresado y al derecho fundamental de la mayoría.

14. Parece que la Secretaría tiene una cierta renuencia a prestar asistencia al Comité *ad hoc*. Los miembros de ese Comité han sido magnánimos al limitarse a sugerir amablemente que los materiales que se les han facilitado no son suficientes ni están de acuerdo con una interpretación razonable de la resolución 3349 (XXIX) de la Asamblea General. Es difícil entender cómo puede calificarse adecuadamente de "analítico" el informe presentado por el Secretario General (A/10113 y Corr.1 y Add.1 a 3) en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 4 de esa resolución. El Comité *ad hoc* podía haber esperado por lo menos un documento que expusiera en términos concisos y ordenados según los temas las opiniones de los gobiernos sobre las cuestiones principales planteadas en los debates celebrados durante los últimos años. Si las directrices dadas a la Secretaría era inadecuadas, hay que esforzarse para

asegurar que no aparezcan esas deficiencias en las resoluciones que se aprueben durante el actual período de sesiones. El orador está seguro de que se renovará el mandato del Comité *ad hoc*.

15. Se han hecho diversas sugerencias prácticas en cuanto a la forma en que debería actuar el Comité *ad hoc* durante 1976. Esas sugerencias deben ser consideradas como cuestión de gran prioridad. Además, habría que fijar la celebración del período de sesiones de 1976 del Comité en una época más propicia que en la de 1975.

16. La labor y el mandato del Comité *ad hoc* son muy claros y tienen unos límites estrictos. Toda propuesta hecha por el Comité *ad hoc* que entrañe enmiendas a la Carta está sujeta a la aprobación de la Asamblea General y al principio de unanimidad en el Consejo de Seguridad. Por lo tanto, no hay ninguna amenaza a los intereses de las Potencias principales. Las propuestas de su Gobierno sobre la revisión de la Carta figuran en su respuesta al Secretario General¹ enviada de conformidad con la resolución 2697 (XXV) de la Asamblea General.

17. Para compensar las deficiencias del informe del Comité *ad hoc*, los patrocinadores de la resolución 3349 (XXIX) de la Asamblea General presentarán en breve un proyecto de resolución para que la Asamblea adopte medidas positivas prorrogando el mandato del Comité *ad hoc* con los fondos suficientes y un calendario adecuado hasta que termine su labor, a reserva del examen de la Asamblea General. No tiene ninguna duda de que ese proyecto de resolución será aprobado por una mayoría aún más fuerte que la que apoyó la creación del Comité *ad hoc* en 1974. Una organización mundial con una eficacia y prestigio máximos aumentaría la probabilidad de que sus miembros adoptaran medidas responsables, y eliminaría las excusas que se dan para no recurrir a las Naciones Unidas, lo que las haría más accesibles y atractivas como el instrumento principal para resolver los problemas mundiales.

18. El Sr. NYAMDO (Mongolia) dice que no sorprende a su delegación ver que en el informe del Comité *ad hoc* se refleje una divergencia fundamental de opinión en lo que concierne a la necesidad de revisar la Carta y a la forma en que el Comité *ad hoc* debería proseguir su labor. Debido a esa divergencia, el Comité *ad hoc* no pudo formular ninguna conclusión concreta en cumplimiento de la resolución 3349 (XXIX) de la Asamblea General, y la delegación de Mongolia se inclina a creer que habría que reflexionar seriamente sobre la conveniencia de que el Comité *ad hoc* se reuniera todos los años.

19. La posición del Gobierno de Mongolia sobre el asunto que se examina está determinada básicamente por los principios generales de su política exterior, que persigue el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Esa es también la tarea fundamental de las Naciones Unidas, incorporada como tal en su Carta, que cuenta con todo el apoyo de Mongolia. La carta es el instrumento jurídico más importante y valioso del mundo contemporáneo, y contiene principios de derecho internacional tan fundamentales como la coexistencia pacífica de Estados con diferentes sistemas sociales, la libre determinación, la igualdad sobre-

¹ Véase A/9739.

rana, la no injerencia en los asuntos internos, el arreglo pacífico de las controversias internacionales, la cooperación en condiciones de igualdad y reciprocidad, y otros. El orador menciona otros documentos de importancia histórica aprobados sobre la base de la Carta, entre ellos, como más recientes, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados y la Declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional (resolución 3201 (S-VI) de la Asamblea General). Las disposiciones básicas de la Carta se han recogido también en la mayor parte de los tratados bilaterales y multilaterales que se han concertado y en otros documentos análogos, de los cuales el ejemplo más reciente es el Acta Final de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa. Todos esos hechos demuestran claramente que, sin introducir revisión alguna en la Carta, es posible adelantar mucho en el intento de poner en práctica sus disposiciones fundamentales.

20. Todo lo que han logrado hacer las Naciones Unidas durante sus 30 años de existencia, incluso el haber ahorrado a la humanidad una guerra mundial, y la importante función que han desempeñado al apoyar las luchas por la independencia nacional y contra el colonialismo, el neocolonialismo y el racismo, demuestran que las Naciones Unidas han resistido la prueba del tiempo y que su Carta es suficientemente flexible para ajustarse a los cambios que se registran en el mundo.

21. El hecho de que muchas resoluciones de las Naciones Unidas no se hayan cumplido no debe imputarse a la Carta sino a las violaciones de la misma por los Estados Miembros. El cumplimiento de las disposiciones de la Carta depende en primer término de la voluntad política de los Estados Miembros y no de la revisión de aquélla. El simple hecho de abordar la cuestión de la revisión de la Carta causaría inevitablemente controversias que podrían debilitar a la Organización.

22. Si bien algunos partidarios de la revisión de la Carta han tratado de criticar el principio de la unanimidad de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, dicho principio es esencial para el logro de los propósitos principales de las Naciones Unidas y constituye una garantía segura contra todo intento de utilizar el Consejo de Seguridad en detrimento de los propósitos fundamentales de la Carta o de la causa del fortalecimiento de la paz y seguridad internacionales. Además, ese principio consagra la igualdad de los dos sistemas sociales y económicos, y la experiencia ha confirmado que tiene gran influencia en cuestiones como la protección de la justa causa de los pueblos que luchan por la libertad y la independencia nacional y el cuidado de los intereses de los nuevos Estados independientes. Toda la estructura de las Naciones Unidas descansa sobre esa norma, y cualquier tentativa de revisarla pondría en peligro la propia existencia de la Organización. Sin embargo, al defender el principio de la unanimidad, la delegación de Mongolia no aprueba de ningún modo el recurso al veto por razones egoístas o para favorecer causas injustas.

23. Muchos han sostenido que habría que poner la Carta a tono con los tiempos modernos. Es cierto que se han registrado cambios importantes desde que se aprobó la Carta, inclusive el surgimiento de muchos Estados de reciente independencia y el consiguiente aumento del

número de miembros de los principales órganos de las Naciones Unidas. Mongolia ha acogido siempre con beneplácito la admisión de los nuevos Estados independientes y ha apreciado en todo su valor su activa participación en la labor de las Naciones Unidas. La Carta continúa ofreciendo muchas posibilidades de participación activa a todos los Estados Miembros, incluso a los países en desarrollo.

24. La observancia estricta de las disposiciones de la Carta y de los documentos aprobados sobre su base habrían permitido resolver con justicia muchos de los problemas urgentes, como las cuestiones de Namibia, Chipre, el Oriente Medio, el *apartheid* y otros.

25. El hecho de que en los debates relativos a la Carta no se haya puesto de manifiesto ninguna tendencia general demuestra claramente que hay una mayoría de miembros que juzgan que la Carta satisface plenamente las necesidades contemporáneas en la esfera de las relaciones internacionales. Por tanto, es preciso conservar la forma y el contenido actuales de la Carta. Ella ofrece muchas posibilidades, no aprovechadas aún, que podrían y deberían utilizarse para aumentar la eficacia de las Naciones Unidas.

26. Mongolia ha sido siempre partidaria de incrementar la eficacia de las Naciones Unidas, según lo demuestra la carta dirigida al Secretario General por el Ministro de Relaciones Exteriores de Mongolia, reproducida en el documento A/10113/Add.1.

27. El Sr. SETTE CAMARA (Brasil) opina que la aprobación de la resolución 3349 (XXIX) de la Asamblea General, en cuya virtud decidió establecer el Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas, constituyó el primer paso hacia la aplicación de su Capítulo XVIII, que ciertas Potencias cautelosas han tratado hasta ahora de relegar al olvido. Sin embargo, con ese paso no se hizo más que volver a poner en práctica los ideales de los fundadores de las Naciones Unidas, quienes previeron la necesidad de hacer revisiones periódicas de la Carta en el Artículo 108.

28. Los resultados logrados hasta el momento por el Comité *ad hoc* no son sino un comienzo. Todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre ninguna medida ni enmienda concreta. Sin embargo, lo exiguo del informe del Comité *ad hoc*, lejos de desalentar a los que creen en la necesidad de introducir un cambio, es prueba de que todos reconocen lo serio, complejo y difícil de la tarea. Los resultados consignados en ese informe constituyen una buena respuesta a aquellos que tenían alguna acción precipitada e imprudente o que había advertido que no convenía alterar las disposiciones de la Carta. Por más que en el seno del Comité *ad hoc* una apreciable mayoría se declaró abiertamente favorable a abordar el problema de la revisión de algunas disposiciones de la Carta, no se hizo ningún intento de arrollar a los que creían lo contrario.

29. Desde la celebración de la Conferencia de San Francisco, la delegación de Brasil ha abogado siempre porque se revise la Carta cada cinco años, independientemente del veto. La aplicación del Artículo 108, lejos de constituir una amenaza contra las Naciones Unidas, es un corolario necesario de la observancia de los propósitos y principios de la Carta. A ese efecto, la delegación del Brasil participó activamente en la labor del Comité *ad hoc*, y su exposición

se reproduce en la páginas 11 y 12 del informe (A/10033). Como patrocinadora de la resolución 3349 (XXIX), su delegación desea felicitar al Comité *ad hoc* por la labor cumplida en un tiempo tan breve y en circunstancias tan difíciles. Si bien algunas delegaciones formularon muchas sugerencias importantes, la falta de tiempo impidió tomar una decisión a su respecto. Sin embargo, el Comité *ad hoc* no logró organizar eficientemente su labor futura. En el anexo II del informe se reproduce un documento de trabajo sumamente interesante presentado por la delegación de México, que se refiere concretamente a ese punto.

30. Las delegaciones que, durante muchos años, se empeñaron en conseguir que se abordara la revisión de la Carta y, especialmente, las que patrocinaron la resolución 3349 (XXIX), no pueden aceptar que sus esfuerzos culminen en el intercambio de opiniones registrado en el seno del Comité *ad hoc*. Los resultados alcanzados durante las reuniones de ese Comité no son sino un comienzo. La consecuencia más importante de esas reuniones es la prueba de que el Comité *ad hoc* debería proseguir su labor hasta lograr resultados positivos y concretos. Por tanto, la delegación del Brasil está dispuesta a sumarse a los patrocinadores de cualquier proyecto de resolución encaminado a prorrogar el mandato del Comité *ad hoc* para permitirle que llegue, por lo menos, a tomar unas pocas decisiones importantes y concretas. Las atribuciones del Comité *ad hoc* deberían ajustarse a los lineamientos generales establecidos en la resolución 3349 (XXIX) de la Asamblea General, para permitir el examen de cada una de las sugerencias hechas con respecto a la cuestión global de la revisión de la Carta. Su delegación aplaude la decisión de examinar conjuntamente los temas 113 y 29. La intervención del representante de Rumania en la sesión anterior demostró la importancia de esa labor y permite abrigar esperanzas legítimas de obtener resultados fructíferos.

31. En lo que respecta a la eficiencia de la labor futura del Comité *ad hoc*, sería conveniente que el estudio del Secretario General se complementara con una presentación analítica y temática de los juicios expresados por los gobiernos acerca de las distintas disposiciones de la Carta. Un documento de esa índole tendría gran utilidad para los miembros del Comité *ad hoc*, quienes estarían en mejores condiciones para organizar un programa racional de trabajo acorde con los principales sectores de interés. Además, teniendo en cuenta la importancia y significación de la labor del Comité *ad hoc*, la preparación de actas resumidas no pasa de ser un requisito normal y no acarrearía mayores gastos, porque se podría omitir la transcripción de las exposiciones de las delegaciones contenida en el anexo I del informe actual.

32. La delegación del Brasil espera que en el curso del presente debate se reconozca cabalmente lo beneficioso que sería para todos los Estados Miembros un examen de la cuestión hecho en forma seria y meticulosa, y espera también que muchas delegaciones se sumen a las que apoyaron la resolución 3349 (XXIX) de la Asamblea General, con el propósito común de impulsar la revisión de la Carta.

33. El Sr. GROZEV (Bulgaria) dice que su Gobierno dio a conocer su posición acerca de la revisión de la Carta de las Naciones Unidas en sus comunicaciones enviadas al Secre-

tario General en los períodos de sesiones vigésimo séptimo² y trigésimo (A/10113/Add.3). Las Naciones Unidas nacieron de las cenizas de la segunda guerra mundial, con la victoria de la coalición antihitleriana que inició cambios profundos e irreversibles en la estructura social y política del mundo. Desde entonces, las Naciones Unidas desempeñaron una función importante en la prevención de una tercera guerra mundial. La Carta resistió la prueba del tiempo y demostró su viabilidad en momentos en que se registraban cambios dinámicos. La Carta ofreció asimismo suficiente flexibilidad para permitir que la Organización contribuyera a resolver diversos problemas mundiales actuales, y cabe afirmar que actualmente no hay ningún acontecimiento ni cuestión internacional ajenos a la esfera de actividad de las Naciones Unidas. Sobre la base de la Carta se estableció un sistema completo de principios jurídicos y declaraciones internacionales de suma importancia. Si se socavaran los fundamentos de la Carta, aun sin llegar a destruirlos, se arriesgaría dañar seriamente la superestructura de las relaciones internacionales contemporáneas.

34. Su delegación reconoce, naturalmente, que las Naciones Unidas, en anteriores oportunidades, fracasaron en el intento de actuar con eficacia, pero al subrayar esos fracasos se haría más confuso el cuadro, olvidando los éxitos logrados. En realidad, aquellos fracasos no se deben a ninguna deficiencia de la Carta sino que son el resultado directo de la falta de observancia de sus principios. Las condiciones favorables para la solución pacífica y justa de los problemas, las crisis y los conflictos internacionales y la capacidad de las Naciones Unidas para actuar eficazmente dependen directamente de la voluntad política de sus Estados Miembros.

35. El informe del Comité *ad hoc*, breve y de carácter formal, ha puesto de manifiesto una divergencia fundamental de opiniones entre los Estados Miembros en lo que atañe a la necesidad de llevar a cabo la revisión de la Carta. El principal argumento que se aduce a favor de tal revisión es que la mayoría de los actuales Estados Miembros de las Naciones Unidas no asistieron a su creación en la Conferencia de San Francisco, y que, por consiguiente, la forma de la Organización no les permite ejercer suficiente influencia en sus actividades. Sorprende al orador la afirmación de que, en el momento en que las Naciones Unidas se encuentran en el umbral de la universalidad, el aumento del número de miembros exigiría la revisión de su estructura. El orador rechaza la idea de que los países en desarrollo y los países recién liberados, que constituyen el grueso del grupo de Estados no alineados, no estén en condiciones de desempeñar la función que les corresponde en las actividades de las Naciones Unidas. En la Asamblea General y en el Consejo Económico y Social no puede aprobarse resolución alguna sin su consentimiento. Son contadas las resoluciones del Consejo de Seguridad que no han sido patrocinadas por los Estados no alineados o los miembros no permanentes del Consejo. A juicio del orador, bajo la alegación de que se niega a los países en desarrollo la oportunidad de desempeñar una función adecuada en las actividades de las Naciones Unidas, se oculta el desagrado de ciertos Estados Miembros frente a la relación que establece la Carta entre las funciones y poderes de la

² Véase A/8746/Add.1.

Asamblea General y los del Consejo de Seguridad. No obstante, es justamente ese vínculo crítico entre el Artículo 11 y el Artículo 27 de la Carta lo que permite a las Naciones Unidas evitar la adopción de decisiones alejadas de la realidad, imposibles de cumplir o que amenacen la paz y la seguridad internacionales.

36. En un mundo en que hay diferentes sistemas sociales y políticos, la Carta permite velar en máximo grado por la protección de los intereses de todas las partes interesadas. Dispone que ningún Estado o grupo de Estados tiene el derecho de utilizar a las Naciones Unidas para imponer su voluntad política a otro Estado o grupo de Estados, y que las Naciones Unidas pueden tomar medidas para mantener la paz y la seguridad internacionales, incluso recurriendo a la fuerza armada, siempre que haya unanimidad entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Es indudable que la relación que la Carta establece entre las funciones y poderes de la Asamblea General y los del Consejo de Seguridad en lo referente al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales es la columna vertebral de la Organización. Es absurdo creer que se podría quebrar esa columna vertebral sin paralizar la actividad de la Organización ni amenazar su existencia misma.

37. La delegación de Bulgaria está convencida de que la prolongación del debate sobre la cuestión de la revisión de la Carta no ha de contribuir a suscitar un ambiente favorable para resolver satisfactoriamente los complejos problemas actuales. Desde un punto de vista objetivo, en la labor del Comité *ad hoc* se refleja la existencia de fuerzas centrífugas que no han de fortalecer, ciertamente, la función de las Naciones Unidas como el instrumento más importante de la cooperación internacional multilateral.

38. Es claro que lo que impide que los Estados Miembros tomen medidas acerca de una serie de importantes cuestiones no es la Carta. El desarrollo de las relaciones internacionales contemporáneas exige que la Carta se considere con un enfoque positivo y constructivo y no con uno negativo o nihilista. El proceso de distensión se sigue extendiendo, concediendo mayor libertad de acción a los miembros de la comunidad internacional. El papel de los países en desarrollo en las relaciones internacionales, así como dentro de las Naciones Unidas, sigue aumentando. La favorable situación política actual abre nuevas posibilidades y perspectivas para las Naciones Unidas en todas las esferas de su actividad. Las Naciones Unidas tienen muchas tareas importantes que realizar en los sectores del mantenimiento de la paz internacional, la consolidación de la seguridad internacional y el desarrollo de la cooperación entre los Estados; exigen el esfuerzo perseverante de los Estados Miembros, y la mejor forma de cumplirlas es respetando estrictamente los principios y normas de la Carta.

39. El Sr. NICOL (Sierra Leona) dice que, en razón de la ardiente fe de su delegación en las Naciones Unidas, ha manifestado gran interés en los esfuerzos por revisar la Carta, teniendo en cuenta las distintas opiniones e ideologías representadas actualmente en las Naciones Unidas. La delegación de Sierra Leona se une al parecer de que el Comité *ad hoc* debe presentar a la Asamblea General propuestas concretas que en general se consideren necesarias para la revisión de la Carta sobre la base del Artículo 108. Además, no está convencida de la necesidad de

convocar para ese propósito a la Conferencia General como se prevé en el Artículo 109.

40. La revisión de la Carta está estrechamente vinculada con la reestructuración del sistema de las Naciones Unidas. La delegación de Sierra Leona considera aceptable el contenido del informe del Grupo de Expertos para el estudio de la estructura del sistema de las Naciones Unidas³; las ideas que aparecen en ese informe podrían emplearse para mejorar el funcionamiento de los órganos de las Naciones Unidas.

41. Casi todos los que se oponen a la revisión de la Carta han sostenido que, si bien no sea tal vez perfecta, ha resistido a la prueba del tiempo. Sin embargo, si la Carta no es perfecta, cabe mejorarla y actualizarla, a fin de que tenga en cuenta la nueva situación internacional en el mundo contemporáneo. Algunos artículos, como los Artículos 53 y 107, ya no tienen pertinencia y deben ser suprimidos; otros tendrían que ser revisados para ajustarlos a la opinión internacional actual. Respondiendo a las delegaciones que han asumido la posición extrema de que incluso el debate acerca de la revisión de la Carta es perjudicial y peligroso, el orador observa que los redactores de la Carta previeron, 30 años atrás, en el Artículo 108, la revisión periódica, porque comprendían que las relaciones internacionales no permanecerían ni podían permanecer estáticas. Debe ponerse la Carta en consonancia con las actuales aspiraciones políticas de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. En relación con la preocupación expresada por algunas delegaciones de que toda revisión de la Carta tendría un efecto de inestabilidad y comprometería en definitiva la existencia de la Organización, el orador señala que todas las delegaciones presentes poseen madurez suficiente para saber qué grado de prudencia debe ejercerse en una empresa tan delicada. No se trata de una revisión total de la Carta vigente ni de su sustitución por otra nueva. La delegación de Sierra Leona acoge con beneplácito la posición de las delegaciones que demuestran un espíritu abierto hacia la revisión de la Carta y están dispuestas a estudiar propuestas concretas relacionadas con una revisión que en definitiva mejore la eficacia de la Organización, y expresa la esperanza de que la Asamblea General prorrogará el mandato del Comité *ad hoc* a fin de que pueda continuar su labor en 1976.

42. Refiriéndose a uno de los aspectos de la Carta que ha suscitado muchas controversias, a saber, el Artículo 23, el orador observa que la composición y el sistema de votación en el Consejo de Seguridad no satisfacen a su delegación. Exhorta al Comité *ad hoc* a encarar la muy delicada tarea de formular recomendaciones a la Sexta Comisión en un período de sesiones ulterior sobre una versión revisada, que sea aceptable para todas las partes interesadas, de ese Artículo y de cualquier otro cuya enmienda considere necesaria el Comité *ad hoc*. Además, la delegación de Sierra Leona estima que se debe lograr que la Corte Internacional de Justicia desempeñe un papel más importante, especialmente en el proceso de mantenimiento de la paz y de distensión.

43. El Sr. AL-OTHMAN (Kuwait) declara la adhesión de su delegación a los propósitos y principios de la Carta y dice

³ E/AC.62/9.

que corresponde a las Naciones Unidas tomar en cuenta, sin que ello interfiera con las características fundamentales de su labor, los cambios que se han producido en la sociedad internacional durante los últimos 30 años.

44. La revisión de la Carta debe emprenderse con gran cautela, a fin de que no vaya en detrimento de los Estados. Sin embargo, no hay motivos para que no se examinen modificaciones limitadas y claras de la Carta, y su delegación aceptará cualquier enmienda que promueva los intereses de la comunidad internacional y la paz mundial.

45. La delegación del Kuwait apoya las modificaciones encaminadas a aumentar la eficacia de las recomendaciones y resoluciones de la Asamblea General y de otros órganos principales de las Naciones Unidas, especialmente el Consejo de Seguridad, y apoya también en consecuencia el estudio de la cuestión de la aplicación de sanciones a los Estados que se nieguen a acatar la voluntad de la mayoría abrumadora de los Estados.

46. Su delegación está dispuesta a examinar cualquier sugerencia concreta y limitada relativa a la Carta, teniendo presentes los intereses de la comunidad internacional.

47. Su delegación es partidaria de los cambios que faciliten la labor de la Corte Internacional de Justicia, estimulen a los Estados a recurrir a ella para la solución de problemas mundiales o reduzcan las formalidades que entraña la presentación de casos a la Corte.

48. La delegación del Kuwait está a favor de que se enmiende el Artículo 111 para que se incluya el árabe como sexto idioma oficial, ya que se ha creado un Servicio Árabe de Traducción y se ha tomado la decisión de emplear el árabe como idioma de trabajo en varios organismos especializados.

Se levanta la sesión a las 17.05 horas.

1565a. sesión

Viernes 14 de noviembre de 1975, a las 10.50 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1565 y Corr.1

TEMAS 113 Y 29 DEL PROGRAMA

Informe del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas (continuación) (A/10033, A/10102, A/10108, A/10113 y Corr.1 y Add.1 a 3, A/C.6/437)

Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones y la promoción de las normas del derecho internacional en las relaciones entre los Estados: informes del Secretario General (continuación) (A/10218, A/10219, A/10255, A/10289, A/C.6/437)

1. La Srta. RANA (Nepal) dice que han transcurrido tres decenios desde que la última contienda mundial, de magnitud sin precedentes en la historia de la humanidad hiciera imperativa la creación de la Organización, con las justificadas esperanzas de “preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra”. Desde su creación, la Organización ha aportado considerables contribuciones al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, aunque, desgraciadamente, no siempre haya estado a la altura de lo que se esperaba de ella en dicha esfera. Pero esa insuficiencia de las Naciones Unidas no se debe únicamente a defectos inherentes a su Carta, que, por otra parte, no es perfecta, sino a la actitud de ciertos Estados Miembros que se niegan a respetarla y manifiestan el mayor desprecio hacia las decisiones de la Organización.

2. Otra evolución desconcertante en las Naciones Unidas ha sido la aparición de intereses de grupo en contra de los

intereses comunes. Es triste observar que, después de transcurridos 30 años de su existencia, las Naciones Unidas, en lugar de convertirse en un todo armonioso, han pasado a ser un foro en el que las naciones se consideran obligadas a dividirse en grupos y a enfrentarse entre sí con el fin de lograr los intereses de su grupo, y no de alcanzar los propósitos comunes de la Carta.

3. La Carta, en su forma actual, posee las calidades necesarias para que las Naciones Unidas sean una entidad viable y eficaz. Si en ocasiones no se ha podido hacer frente a una determinada situación, ello no se debe a la debilidad intrínseca de la Carta, sino a la falta de voluntad política de los Estados Miembros de la Organización de respetar sus disposiciones. En ese sentido, incumbe una responsabilidad especial a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

4. Desde 1945 se han producido en el mundo muchas modificaciones de gran alcance que deben quedar adecuadamente reflejadas en la Carta. Sin embargo, la revisión de la Carta es la cuestión más delicada con que se enfrentan las Naciones Unidas, y debe procederse con un criterio sumamente cuidadoso y prudente al introducir los cambios necesarios.

5. La posición de Nepal quedó claramente reflejada en la declaración que su delegación hizo ante la Sexta Comisión, en el vigésimo séptimo período de sesiones (1380a. sesión), al afirmar que, si bien había defendido siempre firmemente la Carta y los principios que la informaban, estimaba que su adaptación no haría sino acrecentar la eficacia de la función de las Naciones Unidas en la esfera de la paz y la seguridad internacionales.

6. Guiada por esas consideraciones, la delegación de Nepal estaría dispuesta a considerar las ventajas de cualquier propuesta concreta destinada a fortalecer y realzar la función y eficacia de la Organización, de modo que pudiera desempeñar sus onerosas responsabilidades con mucha mayor eficiencia y prontitud.

7. El Sr. LEIGH (Estados Unidos de América) dice que los temas de que se ocupa actualmente la Comisión son los más importantes que ha de tratar el presente año.

8. Su delegación continúa considerando la cuestión de la revisión de la Carta con escepticismo y preocupación. Dicho escepticismo no se basa en la creencia de que las Naciones Unidas funcionen perfectamente. Lejos de ello, las Naciones Unidas pueden y deben desarrollar una mejor labor. Sin embargo, para conseguir ese objetivo, deben evitarse acciones precipitadas e insuficientemente estudiadas. Los impedimentos a una mayor eficacia de la Organización se encuentran en la voluntad política de los Estados que interpretan y aplican las disposiciones de la Carta. Las dudas de su delegación sobre la oportunidad de revisar la Carta se basan en la preocupación de que las Naciones Unidas pierdan incluso el grado de consenso que ahora existe. Es apenas probable que la reapertura de cuestiones sobre materias que han sido aceptadas libre y universalmente en diversas ocasiones en el pasado amplíe las esferas de acuerdo. Por el contrario, es mucho más probable que conduzca a un endurecimiento de posiciones y se oponga de ese modo al desarrollo evolutivo que ha sido uno de los pilares de la institución.

9. Es probable que los intentos de afrontar problemas particulares del momento actual de la historia mediante reformas de la Carta restrinjan su capacidad de continuar abordando flexiblemente las necesidades del futuro. Existe el peligro grave de que, si se modifica la estructura constitucional de la Organización, se desvíen la atención y la preocupación de los problemas urgentes que las Naciones Unidas pueden y deben afrontar.

10. Los Estados Unidos han afirmado repetidas veces que estaban dispuestos a examinar medidas para mejorar el funcionamiento de las Naciones Unidas y su capacidad de asumir las obligaciones que les impone la Carta. Sin embargo, eso solamente puede realizarse en forma útil con el amplio acuerdo de todas las partes interesadas, debido principalmente a que toda mejora, por definición, exigirá ese amplio acuerdo para que sea eficaz. La falta completa de éxito del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas el pasado verano demuestra que las circunstancias no estaban entonces maduras para realizar un trabajo serio. Ninguna finalidad útil puede conseguirse si se repite esa experiencia. Por consiguiente, su delegación no está convencida de la oportunidad de que el Comité se reúna de nuevo, especialmente a la luz del programa tan recargado que se presenta en la esfera jurídica internacional.

11. Parecería útil en cierto grado que se estableciera un comité para examinar las abundantes observaciones que ya han presentado los gobiernos en el contexto del fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas. A ese respecto, una materia principal de preocupación para todos los Miembros de las Naciones Unidas es la de la elaboración y robustecimiento de medidas para el arreglo pacífico de

controversias. Es indudable que eso puede hacerse por entero ateniéndose a la redacción actual de la Carta y del Estatuto de la Corte. Deben examinarse muy atentamente las múltiples y variadas oportunidades que el mecanismo de la Corte proporciona para el arreglo pacífico de controversias, y ha de procurarse que todos los Estados de la comunidad internacional conozcan plenamente esas posibilidades. Al mismo tiempo, debe también reconocerse que existen algunas controversias que pueden resolverse mejor, o por lo menos mejorarse inicialmente, por otros medios. Así pues, han de examinarse también plenamente las otras muchas posibilidades que existen de arreglo de controversias, incluso la negociación entre las partes, los buenos oficios, la mediación y la conciliación. Deben investigarse medios de perfeccionar esos mecanismos para hacer más eficaz el sistema de las Naciones Unidas. Debe procurarse hacer cuanto humanamente sea posible a tal efecto, dentro del marco de la Carta, más bien que tratar acometer proyectos más ambiciosos y con menos perspectivas de éxito que entrañen la reforma de dicho instrumento.

12. El Sr. LAUTERPACHT (Australia) dice que, en el vigésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General, la delegación de Australia patrocinó la resolución 3283 (XXIX), sobre arreglo pacífico de las controversias internacionales, en cumplimiento de la cual el Secretario General ha presentado un informe (A/10289) que constituye un modelo de concisión. El Secretario General ha interpretado que la petición a él dirigida excluye toda revisión del mecanismo para arreglo de controversias previsto en la propia Carta. Igualmente ha excluido los diversos tipos de mecanismo de carácter especial establecidos por órganos de las Naciones Unidas para desempeñar funciones de arreglo de controversias en relación con situaciones concretas. En cierta medida, la labor del Secretario General ha sido complementada por estudios publicados recientemente por el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones. Sin embargo, el referido informe del Secretario General es un útil recordatorio de las limitaciones con que ha tropezado la Asamblea General en 30 años de preocupación general por el arreglo pacífico de controversias. Ahora bien, esas limitaciones no deben considerarse aisladamente, sino en unión de la existencia y logros de otros mecanismos. Así, dentro del marco de la Carta, debe recordarse la función primordial del Consejo de Seguridad en cuanto al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Igualmente debe recordarse la actuación concreta de mediadores, conciliadores, comisiones de buenos oficios y representantes especiales nombrados por el Consejo de Seguridad o por el Secretario General a petición de aquél. Tampoco debe pasarse por alto el funcionamiento de la Corte Internacional de Justicia.

13. Pero esto no es todo. El arreglo pacífico de controversias no puede considerarse exclusivamente desde el punto de vista de las Naciones Unidas. Gran parte de esas actividades se celebran en otros órganos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y las comisiones internacionales de pesquerías.

14. La verdadera cuestión con que se enfrenta la Comisión es la de si está dispuesta a dejar el problema de las controversias en la comunidad internacional en la fase en

que actualmente se encuentra, o si ha de examinar también la cuestión conexa de impedir o evitar las controversias. ¿Debe considerarse esa materia únicamente en función de mecanismos, o ha de pensarse en la utilización de nuevos métodos dentro de los mecanismos existentes? Tal vez se guarde demasiado apego a ciertas nociones tradicionales relativas al arreglo obligatorio de controversias o a la calidad vinculante de las decisiones de terceros. ¿Se utiliza en el proceso de negociación todo medio eficaz para conseguir una armonización de opiniones divergentes? En resumidas cuentas, ¿puede decirse que, colectiva o individualmente, se dispone de suficiente información para aplicar, en situaciones que fluctúan con gran rapidez, conocimientos bastantes que reduzcan o eliminen las posibilidades de una verdadera controversia y utilizar para su arreglo el tipo de enfoque que mejor se adapte a sus características especiales?

15. Tales son las interrogantes a que debe responder la Comisión y, para ello, el problema fundamental que debe resolver es el de si la cuestión de la prevención y arreglo de controversias ha de considerarse separadamente o como parte de los trabajos realizados sobre la Carta. La separación de ambas cuestiones ofrece ciertas ventajas, la más importante de las cuales tal vez sea el hecho de que, si se deja el tema del arreglo de controversias como parte del estudio del funcionamiento de la Carta, existe el peligro real de que cada elemento llegue a oscurecer al otro, en detrimento mutuo. Por otra parte, parecería útil una identificación clara y separada de la cuestión del arreglo de controversias como tema independiente del programa de la Asamblea General. Sin embargo, si la Comisión no comparte en general ese criterio, la delegación de Australia no insistirá en que se adopte una decisión que sólo podría alcanzarse mediante una votación divisiva. Si la Comisión en su conjunto es partidaria de que se constituya la prevención y arreglo de controversias como tema separado, la delegación de Australia celebrará proponer o patrocinar un proyecto de resolución en ese sentido. Pero, a menos que se manifieste un claro consenso por ese proceder, la delegación de Australia respetará la opinión de que la prevención y arreglo de controversias debe tratarse como parte de los trabajos del Comité *ad hoc*.

16. La Srta. AGUTA (Nigeria) opina que, si se ha propuesto revisar la Carta, no es porque se juzgue que existen en ella deficiencias, sino simplemente para mantenerla al día. La Carta, que es la constitución de las Naciones Unidas, está abierta a la revisión y a la enmienda, y los Miembros fundadores ya previeron la posible necesidad de introducir cambios, como lo demuestra la existencia de los Artículos 108 y 109.

17. La representante de Nigeria considera que debe distinguirse entre un examen crítico y una revisión de la Carta. Mientras que el primero es simplemente un proceso de evaluación de una situación con miras a dar los retoques necesarios y no tiene que justificarse con poderosas razones, la revisión, en cambio, supone una nueva edición, requiere el examen a fondo de las cuestiones implícitas y se ha de fundar en razones muy serias.

18. La delegación de Nigeria, patrocinadora de la resolución 3349 (XXIX) de la Asamblea General y miembro del Comité *ad hoc*, sin dejar de sostener que los propósitos y

principios enunciados hace 30 años siguen siendo válidos, recomienda que se proceda a un examen crítico de la Carta en consideración al tiempo transcurrido desde su aprobación, al carácter universal de la Organización — manifestado por el aumento que ha experimentado el número de sus miembros — y a la posibilidad de que se haya modificado el equilibrio de poderes. En cuanto a la revisión de la Carta, la Srta. Aguta cree que, en primer lugar, el Comité debe continuar su trabajo de recogida de información para recomendar a la Comisión si procede o no realizar un examen crítico de la Carta. En caso afirmativo, habría que constituir un grupo de examen que, a su vez, reuniera información con miras a determinar la necesidad de proceder a una revisión, total o parcial. Sólo entonces deberían hacerse propuestas concretas de revisión. La delegación de Nigeria considera que tal revisión ha de consistir en una ampliación de la estructura existente para acomodar equitativamente a los Estados Miembros y garantizar un funcionamiento apropiado de la Organización.

19. La Srta. Aguta insiste en la importancia de un examen crítico. Sólo de esa forma se puede determinar en qué medida se han alcanzado los ideales de la Carta y se ha logrado el objetivo de la Organización, a saber, mantener la paz y la seguridad internacionales y preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra. Asimismo, sólo mediante un examen crítico se puede determinar la manera de llegar a un nuevo equilibrio entre las Potencias, ahora que han surgido tantos nuevos Estados independientes. Por consiguiente, la delegación de Nigeria desea que prosigan los trabajos del Comité para poder encontrar soluciones a los problemas que obstaculizan la paz y la seguridad internacionales.

20. En cuanto a la cuestión del fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas, la representante de Nigeria considera que está íntimamente relacionada con la del Comité *ad hoc* y estima que ambas se han de examinar simultáneamente y que, además de las disposiciones concretas de la Carta, deberían establecerse otras disposiciones para el fortalecimiento del papel y de las actividades de la Organización.

21. El Sr. MONTENEGRO (Nicaragua) reitera el apego de su país a los propósitos y principios de las Naciones Unidas contenidos en la Carta. Nicaragua, que concurrió a la Conferencia de San Francisco, ha celebrado jubilosamente los éxitos alcanzados por las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. El Sr. Montenegro recuerda la reacción violenta e intemperada que opusieron hace algunos años ciertas Potencias a la revisión de la Carta, afirmando que equivaldría al fin de las Naciones Unidas. Por eso, ahora observa con satisfacción que se han atenuado las resistencias y entablado un diálogo y que por mayoría abrumadora se creó el Comité *ad hoc* cuyo informe (A/10033) tiene ante sí la Comisión.

22. La delegación de Nicaragua cree que, si bien los propósitos y principios de las Naciones Unidas son inmutables, sus órganos deben revitalizarse. De lo contrario, seguirán repitiéndose en el ámbito internacional ciertas situaciones que revelan violaciones del estatuto jurídico de la Organización. A ese respecto, el representante de Nicaragua hace notar que los autores de esas violaciones son precisamente los principales opositores a la revisión. Según

el informe, se han manifestado tres posiciones con respecto a la revisión de la Carta. Ciertos Estados se oponen abiertamente a ella; otros son partidarios de que se vigore el papel de las Naciones Unidas sin enmendar la Carta; por último, otros, entre ellos Nicaragua, abogan por una revisión.

23. Nicaragua cree oportuno revisar muchos Artículos de la Carta, pero no se niega a un diálogo franco y abierto. En cualquier caso, considera necesario que la Asamblea General prorrogue el mandato del Comité *ad hoc* para que siga recabando información de los gobiernos, y presente su resultado el año próximo.

24. El Sr. PI Chi-lung (China) se refiere a los enormes cambios en la situación internacional y la de las Naciones Unidas durante los 30 últimos años. La lucha revolucionaria que los pueblos oprimidos llevan a cabo por su independencia y su liberación ha constituido una corriente poderosa de la historia contemporánea. El tercer mundo ha crecido hasta convertirse en la fuerza principal en la lucha contra el colonialismo, el imperialismo y el hegemonismo. Por otra parte, ha surgido el socialimperialismo, que, junto con la otra superpotencia, persigue una política agresiva y expansionista y pretende controlar las Naciones Unidas y utilizarlas para sus fines. La Carta, redactada hace 30 años, contiene algunas disposiciones que limitan considerablemente el papel de los países del tercer mundo y no refleja sus aspiraciones, ni satisface las necesidades de nuestro tiempo. Los países pequeños y medianos consideran indispensable revisar la Carta para que la Organización responda a las necesidades de la situación objetiva y desempeñe el papel que le corresponde.

25. A continuación, el Sr. PI Chi-lung se refiere a los ataques y calumnias que han dirigido ambas superpotencias contra los países partidarios de la revisión de la Carta. Una de ellas ha calificado de tiranía de la mayoría a algunas de las resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas en los últimos años. Ese ataque se opone en esencia al principio de igualdad de todos los países, grandes y pequeños. La otra superpotencia sostiene que quienes proponen la revisión de la Carta socavan las Naciones Unidas, y los califica de fuerzas reaccionarias. El Sr. PI Chi-lung cita una serie de casos que, en su opinión, son el resultado de la obstrucción y oposición de las superpotencias amparadas en los privilegios que les concede la Carta. Precisamente para corregir esa situación y salvaguardar a las Naciones Unidas, es necesario revisar la Carta e introducir las enmiendas necesarias. En cuanto al argumento de que la revisión de la Carta llevará a la guerra mundial, el Sr. PI Chi-lung afirma que el verdadero peligro de guerra está en los actos de las superpotencias y especialmente en la ambición de los socialimperialistas. En bien de la paz y la seguridad internacionales, es preciso que los países pequeños y medianos consoliden su propia capacidad defensiva y se unan para exponer y combatir firmemente la política de agresión, expansión y hegemonismo de las superpotencias. Es, pues, absolutamente necesario examinar a fondo y revisar en el momento oportuno la Carta para que las Naciones Unidas puedan responder a las necesidades de la evolución de la situación actual.

26. Es perfectamente legítimo revisar la Carta y enmendarla. Se trata de un derecho y un deber de todos los

Estados Miembros, reconocido por la propia Carta. Además, dado el crecimiento que ha experimentado la Organización, como la mayoría de los actuales Miembros no participaron en la Conferencia de San Francisco, ha llegado el momento de permitirles que aporten su contribución. Negarse al examen y revisión de la Carta equivale a privar a la inmensa mayoría de los Miembros de un derecho que les corresponde. El representante de China considera que la firme oposición a cualquier modificación de la Carta por parte de la superpotencia que se pretende paladín de los intereses de los países pequeños constituye la denegación de una demanda justa de éstos y viola las disposiciones conexas de la Carta.

27. El Sr. PI Chi-lung opina que los argumentos de las superpotencias para oponerse a la revisión de la Carta no son sino excusas. Lo que temen es perder sus privilegios. No puede negarse que la Carta adolece de deficiencias. Las superpotencias saben que cualquier examen conducirá inevitablemente a su revisión. Para evitarlo, a falta de razones, recurren a calumnias y a una oposición tenaz. No obstante, la revisión de la Carta constituye una tendencia general imposible de detener.

28. La delegación de China reitera su posición favorable al examen de la Carta y a la introducción de las enmiendas que sean necesarias. Se pueden exponer todas las opiniones en relación con la revisión de la Carta. Muchos países han expresado opiniones en principio sobre la revisión de ciertas disposiciones de la Carta, tales como sobre la ampliación de las atribuciones de la Asamblea General, la restricción de las atribuciones del Consejo de Seguridad, el cambio en la composición del Consejo de Seguridad y la limitación o la abolición del derecho de veto de los Estados que son miembros permanentes del Consejo. Esas opiniones merecen una seria consideración. El Sr. PI Chi-lung está convencido de que, si se llevan a cabo consultas y discusiones sobre la base del principio de igualdad de todos los países, podrá encontrarse una solución racional aceptable a todos.

29. La delegación de China cree necesario que la Asamblea General prorrogue el mandato del Comité *ad hoc*.

30. El Sr. DE Ceglie (Italia) dice que la labor de la Sexta Comisión consiste en evaluar el informe del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas y tomar una decisión sobre la prórroga de su mandato. Con ese objeto, debe tener en cuenta la importancia de la tarea encomendada al Comité y no limitarse a los resultados obtenidos hasta ahora.

31. Como lo indicó el Ministro de Relaciones Exteriores de Italia en su declaración ante la Asamblea General en la 2357a. sesión plenaria, el Gobierno italiano sigue con profundo interés los esfuerzos por racionalizar y mejorar las actividades y el mecanismo de las Naciones Unidas. Varios son los aspectos que merecen una atenta consideración. En lo que respecta al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la separación básica de poderes establecida por la Carta sigue siendo válida, sin que ello signifique que no se pueda dotar a la Organización de una mayor eficacia en esa esfera. Por el contrario, convendría explorar todas las posibilidades de mejorar el sistema sin apartarlo de la competencia del Consejo de Seguridad. En ese sentido, el

orador reitera la opinión de que la Corte Internacional de Justicia debe desempeñar un papel rector, por lo que cabe intensificar los esfuerzos por ampliar las funciones de la Corte. En cuanto al desarrollo económico, a la cooperación económica internacional y, en particular, a la asistencia a los países en desarrollo, Italia considera necesario adoptar medidas para hacer más efectivo el papel de las Naciones Unidas. Con ese objeto, ha propugnado que se preste cuidadosa atención a todas las propuestas encaminadas a la reestructuración del sistema económico y social de la Organización.

32. Otro aspecto que requiere urgente examen es el de los asuntos sociales y los derechos humanos, mencionado por el Ministro de Relaciones Exteriores de Italia en su referido discurso, al afirmar que la conciencia civilizada de la humanidad requiere un esfuerzo más decisivo de las Naciones Unidas en defensa de los derechos humanos. Con ese espíritu, Italia ha propuesto que se dé a la Comisión de Derechos Humanos el carácter de órgano principal de las Naciones Unidas en el contexto del Artículo 7 de la Carta. Ese nuevo órgano, tal vez con el nombre de "Consejo de Derechos Humanos", relevaría al Consejo Económico y Social de las funciones que cumple actualmente en esa esfera.

33. Por cierto, no todos los progresos deseados deben alcanzarse mediante enmiendas a la Carta. Por el contrario, debería preferirse el método opuesto siempre que se pudieran alcanzar resultados adecuados sin modificar la Carta. Mucho se puede hacer mejorando los reglamentos de los diversos órganos y evaluando la práctica general de la Organización. Naturalmente, ello no implica que deba excluirse por anticipado la posibilidad de modificar la Carta. Por lo que atañe a la evaluación de la labor realizada por el Comité *ad hoc* y a la decisión relativa a la prórroga de su mandato, no sorprende al orador que el primer período de sesiones del Comité no haya producido más resultados, a la luz de las consideraciones expuestas, de la importancia de la delicada tarea que se le ha confiado y del tiempo disponible. Por lo tanto, entiende que esos resultados no deben constituir un motivo para no prorrogar el mandato del Comité sino que, por el contrario, deben considerarse como indicación de la necesidad de esa prórroga.

34. En efecto, espera que la Sexta Comisión decidirá por consenso o por una gran mayoría prorrogar el mandato del Comité e incluso añadir orientaciones lo más claras posibles respecto de la labor futura del Comité. A ese respecto, sugiere que el Comité se concentre en cada una de las funciones o atribuciones que desempeñan las Naciones Unidas y que luego individualice las medidas más adecuadas para la ejecución plena y cabal de esas atribuciones. Esas medidas podrían ser enmiendas a la Carta o simplemente modificaciones de los reglamentos o la práctica de los órganos de las Naciones Unidas.

35. Asimismo, está convencido de que las innovaciones deben elaborarse gradualmente y examinarse con la mayor atención y prudencia, a fin de asegurarles un consenso amplio. Sin ello serían superfluas, si no peligrosas. Para asegurar el éxito completo de la labor del Comité *ad hoc*, debe pedirse a la Secretaría el máximo grado de asistencia y la preparación de un estudio complementario en que se presenten en forma analítica las opiniones expresadas por

los gobiernos respecto de las diversas esferas de competencia de las Naciones Unidas, así como de las distintas disposiciones de la Carta.

36. El Sr. BOOH BOOH (República Unida del Camerún) dice que su país cree que los propósitos y principios enunciados en la Carta siguen siendo válidos y que está convencido de que la sola revisión técnica y jurídica de la Carta no beneficiaría a la Organización.

37. El Jefe de Estado de la República Unida del Camerún señaló en el vigésimo quinto período de sesiones de la Asamblea General (1845a. sesión plenaria) que la ineficacia de las Naciones Unidas se debe principalmente al egoísmo nacional de sus Miembros cuando están en juego sus intereses individuales. Lo que debe combatirse es el incumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, la inobservancia por muchos Estados de sus obligaciones como Estados Miembros, la persistencia de la política de fuerza y de intrigas en las relaciones internacionales y las relaciones económicas injustas entre las naciones. A ese respecto, su delegación recuerda la propuesta, que figura en tres proyectos de resolución presentados en el anterior período de sesiones¹, de que la Asamblea General exhorte a todos los Estados a observar escrupulosamente el espíritu y la letra de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. La delegación camerunesa apoyará toda propuesta encaminada a establecer un mecanismo adecuado para hallar soluciones al grave problema del incumplimiento de las resoluciones y decisiones de la Organización.

38. A pesar de la prudencia con que examina la revisión de la Carta, la delegación camerunesa, consciente de los cambios profundos acaecidos en el mundo, votó a favor de la resolución 3349 (XXIX) de la Asamblea General, relativa a la creación del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas.

39. No se puede desatender la legítima indignación de los países jóvenes ante el ejercicio abusivo por determinadas Potencias del derecho de veto y de otros privilegios que les concede la Carta. Si se justifican tales privilegios por la necesidad de permitir la coexistencia del capitalismo y el socialismo, hay que admitir que se tiene bien en poco la dignidad y los intereses de otros países no capitalistas ni socialistas que rechazan esa categorización.

40. La resolución 3349 (XXIX) de la Asamblea General es flexible y no entraña perjuicios para ningún Estado Miembro. Además, el mandato del Comité *ad hoc* no consiste en revisar la Carta, sino en reunir informaciones y presentar las propuestas pertinentes, y sus conclusiones no prejuzgan sobre la decisión final que adoptará la Comisión.

41. En consecuencia, a juicio de su delegación, el Comité *ad hoc* se limitaría a presentar propuestas tendientes a reforzar la actividad de las Naciones Unidas, sin que hubiese necesidad de modificar la Carta, ya que ella ofrece amplias posibilidades de adaptación. También podría presentar propuestas que implicasen la revisión de la Carta, pues el intercambio preliminar de pareceres permite esperar que

¹ Véase *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno período de sesiones, Anexos*, tema 95 del programa, documento A/9950, párrs. 4, 6 y 7.

haya amplio acuerdo sobre la supresión de ciertos términos contenidos en ella y sobre la reorientación de las actividades de algunos órganos.

42. Su delegación espera que con un poco más de tiempo el Comité *ad hoc* pueda aclarar el alcance de su tarea y cumplir el mandato que se le ha confiado. En todo caso, el diálogo que la Asamblea General ha iniciado con la creación del Comité *ad hoc* no se interrumpirá en un momento en

que suscita un interés cada vez mayor. Con ese espíritu de diálogo y con la conciencia de la delicada misión que compete a los miembros del Comité *ad hoc*, la delegación camerunesa está dispuesta a apoyar todo proyecto de resolución encaminado a prorrogar el mandato del Comité *ad hoc* y a exhortar a los Estados Miembros a que observen cabalmente la Carta de las Naciones Unidas.

Se levanta la sesión a las 12.40 horas.

1566a. sesión

Martes 18 de noviembre de 1975, a las 10.55 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1566

TEMAS 113 Y 29 DEL PROGRAMA

Informe del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas (continuación) (A/10033, A/10102, A/10108, A/10113 y Corr.1 y Add.1 a 3, A/C.6/437)

Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones y la promoción de las normas del derecho internacional en las relaciones entre los Estados: informes del Secretario General (continuación) (A/10218, A/10219, A/10255, A/10289, A/C.6/437)

1. El Sr. SHARAF (Jordania) agradece al Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas su esclarecedor informe (A/10033) y al Gobierno de Rumania los esfuerzos por llevar adelante su iniciativa en relación con el fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas (A/C.6/437). El panorama internacional contemporáneo, radicalmente diferente del que había cuando se crearon las Naciones Unidas, debe quedar reflejado en el espíritu, la dirección y el alcance de la actividad de la Organización. El mundo moderno ha dejado de ser un pequeño club de naciones de antecedentes y puntos de vista predominantemente europeos, para convertirse en un conjunto mucho mayor de naciones que representan civilizaciones, acervos culturales y filosofías diferentes. La labor de las Naciones Unidas ha llegado a centrarse en cuestiones relativas al desarrollo y la cooperación económica internacionales con miras a la reestructuración de las relaciones económicas entre las naciones sobre la base de sus nuevas relaciones políticas. Las Naciones Unidas, y en realidad el mundo entero, tienen que hacer frente a los agudos problemas de la pobreza masiva, la brecha económica internacional cada vez más ancha, el agotamiento de los recursos de la tierra, la erosión del medio ambiente, el espacio ultraterrestre y la tecnología nuclear.

2. El número cada vez mayor de países representados en las Naciones Unidas ha conducido a una democratización más acentuada de la Organización. Las esperanzas y sufrimientos de la mayoría de la población del mundo

deben adquirir ahora prioridad en el quehacer de las Naciones Unidas, que no son sólo una organización dedicada a la paz y la seguridad, sino también al cambio y a la emancipación humana. Más que nunca es necesario que se destaquen ahora los elementos dinámicos de la Carta y no los estáticos. En la actualidad, la paz y la seguridad internacionales están amagadas tanto por las prácticas coloniales, el *apartheid*, la discriminación racial y la represión de la libre determinación nacional, como por las amenazas convencionales previstas por los fundadores de la Organización. Los esfuerzos de las naciones pequeñas y más débiles para lograr la justicia social internacional y la justicia política internacional deben canalizarse en las Naciones Unidas. La supervivencia de la Organización dependerá de su capacidad de asimilación de los cambios que se han producido.

3. El desarrollo internacional se ha convertido ahora en una nueva dimensión de las Naciones Unidas, que, en el decenio pasado, encontraron en esa esfera un nuevo papel importante y provechoso. La comunidad internacional considera ahora que es necesario — en realidad, inevitable — que los países en desarrollo y desarrollados formen una asociación positiva de cooperación basada en la equidad y el beneficio mutuo. Es preciso que se creen nuevos mecanismos y estructuras organizacionales para abordar los problemas complejos, mucho más numerosos, que enfrenta el mundo.

4. Como toda constitución moderna, la Carta de las Naciones Unidas es un documento básico que da margen para una evolución razonable y puede someterse a revisiones concretas razonables, sin necesidad de una revisión fundamental que pueda amenazar la estabilidad y el progreso. Los propósitos y principios de la Carta son universales y perennes y sus procedimientos son relativamente flexibles. Por consiguiente, aún no ha llegado el momento de iniciar una revisión radical de la estructura fundamental de la Carta, ni es necesario hacerlo.

5. La Carta no constituye un obstáculo en la necesaria evolución de las Naciones Unidas para reflejar en mejor forma los cambios en el mundo y cumplir sus nuevas responsabilidades. Los numerosos problemas graves que enfrentan las Naciones Unidas se resolverán mediante la

modificación de las relaciones de poder entre los Estados y de las actitudes de los Estados antes que mediante la modificación de los textos.

6. La delegación de Jordania considera que deben hacerse cambios limitados en la propia Carta, de manera de reflejar el proceso de democratización internacional. Debe dotarse a la Asamblea General de un cierto grado de autoridad que ayudaría a contrarrestar el poder del veto en el Consejo de Seguridad. Deben introducirse además otras enmiendas para actualizar la Carta y liberarla de la influencia psicológica del ambiente de la guerra durante la cual se la concibió.

7. Refiriéndose a otras medidas necesarias para fortalecer a las Naciones Unidas, el orador indica que, aunque pueden contemplarse innovaciones estructurales y organizacionales para llenar determinados vacíos en la estructura de las Naciones Unidas, el verdadero cambio que se necesita para que las Naciones Unidas se conviertan en un instrumento más eficaz de la paz, la seguridad y la emancipación humanas, radica en la esfera política, mental y psicológica. Será posible que las Naciones Unidas se conviertan en una organización más vigorosa y eficaz cuando sus Miembros así lo decidan hacer. Esa tarea es responsabilidad de todos sus Miembros, grandes y pequeños, pero los Miembros grandes principalmente son quienes deben cambiar sus actitudes y hábitos mentales para adecuarse a las realidades, necesidades e ideales internacionales nuevos. Los países pequeños, que constituyen la mayoría, pero que son menos poderosos que los países grandes, deben proteger a la Organización actuando con responsabilidad y prudencia. Los países grandes no deben actuar y pensar como si el *statu quo* fuera permanente y sacrosanto. La época actual se caracteriza por la interdependencia e igualdad económica y política y por un nuevo orden económico internacional. La antigua élite del poder debe aprender a vivir de acuerdo con la época, para que se logren la cooperación internacional y la supervivencia y crecimiento de las Naciones Unidas.

8. Sr. ALTING VON GEUSAU (Países Bajos) dice que la Carta de las Naciones Unidas, cualesquiera que sean sus limitaciones, es el resultado más sobresaliente de un período excepcional, si no un punto decisivo de la historia humana. Con sus principios y propósitos fundamentales ha permitido que la Organización alcance casi la universalidad en su composición y suministre un marco para el surgimiento de muchos Estados nuevos y muchas formas nuevas de cooperación internacional. Sin embargo, no ha mejorado la eficacia de la Organización en cuanto instrumento para el mantenimiento de la paz y la armonización de la acción de los Estados Miembros. El actual período de sesiones de la Asamblea General constituye una prueba más de los conceptos profundamente diferentes que tienen los países de las Naciones Unidas y sus tareas. El problema de la mengua de valor de la Organización no radica en la eficiencia o falta de actualidad de la Carta, sino en la carencia de disposición de los Estados Miembros a utilizar plenamente la Carta y la Organización en pro de la paz. La delegación de los Países Bajos, en consecuencia, considera imprudente que se inicie un examen general de la Carta, aunque ya ha expresado su disposición a cooperar en revisiones incidentales de Artículos de la Carta, a medida que surja y se difunda entre los Estados Miembros la conciencia de su necesidad.

9. El informe del Comité *ad hoc* confirma los temores de su delegación acerca de la imprudencia de crear un comité separado con un mandato tan ilimitado como el que se creó en virtud de la resolución 3349 (XXIX) de la Asamblea General, y demuestra que el Comité *ad hoc* no ha cumplido ninguna de las tareas que se le asignaron en esa resolución.

10. De las observaciones formuladas hasta el momento por escrito y verbalmente parecen surgir dos argumentos fundamentales en favor de la revisión de la Carta. El primero consiste en que la Carta ya no refleja las nuevas realidades del mundo, y que, en consecuencia, han de eliminarse disposiciones obsoletas y redactarse nuevos principios y normas. El segundo argumento estriba en que algunas disposiciones de la Carta, especialmente las que otorgan una situación privilegiada a las grandes Potencias en su calidad de miembros permanentes del Consejo de Seguridad, han sido siempre objetables para ciertos Estados Miembros y que la situación, por consiguiente, debe corregirse, recurriendo a las disposiciones de los Artículos 108 y 109 de la Carta. En opinión del orador, durante gran parte de los debates se ha confundido continuamente un argumento con el otro, con el resultado de que algunos Estados Miembros han tendido a asimilar las propuestas concretas de revisión de la Carta con los esfuerzos tendientes a socavar la propia Carta.

11. La necesidad de la revisión de la Carta no depende primordialmente de los cambios políticos que se han producido desde el momento en que entró en vigencia, sino de la flexibilidad del propio instrumento para adaptarse a esos cambios. El orador opina que la Carta ha demostrado ser flexible y capaz de proporcionar a los Miembros de las Naciones Unidas los medios para elaborar declaraciones y convenios que reflejen los cambios que se han producido. Un examen cabal de la Carta corre el riesgo de constituir una actividad aventurada, si no perjudicial, que no es necesaria. Es posible interpretar más dinámicamente la Carta de manera que refleje los cambios políticos y permita a la Organización ingresar en nuevas esferas de actividades. Pueden señalarse muchos ejemplos de nuevas formas de cooperación económica y política que se han logrado cuando los Estados Miembros han estado dispuestos a utilizar la Organización y la Carta como instrumentos dinámicos. Los fracasos de algunos de esos esfuerzos no se deben tanto a las disposiciones de la Carta como a la renuencia de ciertos Estados Miembros a fortalecer el papel de las Naciones Unidas.

12. Una esfera en la que podría lograrse éxito, siempre que los Estados Miembros estuvieran dispuestos a aprovechar mejor los instrumentos disponibles, es la del arreglo pacífico de las controversias internacionales. La delegación de los Países Bajos hace suyas las opiniones expresadas por los representantes de los Estados Unidos y Australia en la sesión anterior en relación con la necesidad de un examen a fondo de los métodos y mecanismos para la prevención y el arreglo pacífico de las controversias. Si se renovara el mandato del Comité *ad hoc*, éste debería estudiar esa importante cuestión. El informe del Secretario General sobre el arreglo pacífico de las controversias internacionales (A/10289) indica que los Estados Miembros no han recurrido a los servicios de los órganos nuevos establecidos desde 1945, como la Corte Internacional de Justicia, para los fines de la solución de las controversias.

13. El Comité *ad hoc* podría examinar también las propuestas tendientes a hacer más eficiente el funcionamiento de las Naciones Unidas, inclusive la mejora de los procedimientos legislativos internacionales y la racionalización de los debates y de la toma de decisiones en la Asamblea. El orador encarece que se recuerde al Comité *ad hoc* las metas que le fueron señaladas en los incisos b) y c) del párrafo 1 de la resolución 3349 (XXIX) y que se abstenga de abordar temas que se examinan en otros órganos especiales. La Carta es un instrumento único para el mantenimiento de la paz, la práctica de la tolerancia, el aliento de la cooperación y la promoción de los derechos humanos. Debe hacerse un examen general de las actitudes de los Estados Miembros ante la paz y la interdependencia más bien que de las normas de la Carta. Es preciso modificar y actualizar las bases de la santurronería nacional e ideológica de los Estados y su tendencia a considerar el rechazo de toda transacción como la virtud de la ortodoxia.

14. El Sr. VILLAGRAN KRAMER (Guatemala) dice que el informe del Comité *ad hoc* demuestra claramente que se tropezará con obstáculos para revisar la Carta. Sin embargo, el tema despierta cada vez más interés, toda vez que los problemas que preocupan a la comunidad mundial exigen los reajustes indispensables en los mecanismos institucionales y la necesidad de institucionalizar en un contexto normativo ciertas tendencias o prácticas que se han desarrollado gradualmente, pero que carecen de obligatoriedad general porque no han sido incorporadas en un tratado de carácter universal. Es explicable que algunos Estados Miembros hayan manifestado reservas respecto de la revisión de la Carta por no haberse definido claramente los límites de esa revisión y las instituciones que se modificarán. Es necesario determinar con claridad y precisión las normas que deben seguirse en el proceso de estudio y debate y en el acto mismo de la revisión. La Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y la Definición de la agresión (resoluciones 2625 (XXV) y 3314 (XXIX) de la Asamblea General, anexos) muestran que los esfuerzos de ese tipo son difíciles al comienzo, pero una vez definidos claramente los límites y el alcance de dicha revisión, con un margen razonable de seguridad para los Estados que se preocupan por ese aspecto, es posible abordar el problema de fondo y el resultado mismo se puede obtener por consenso y por confrontación.

15. Su delegación celebra las iniciativas de algunos gobiernos, entre ellos los de Rumania y Colombia, con miras a especificar claramente los temas que deben considerarse. No hay duda de que la estructura de las Naciones Unidas debe reajustarse para satisfacer las necesidades contemporáneas. El Consejo de Administración Fiduciaria pronto no tendrá razón de ser, y el Consejo Económico y Social tendrá que ser adaptado a las tendencias actuales para que no haya que tratar en otros foros problemas económicos y sociales que interesan a la comunidad internacional. Sin embargo, en algunos casos esos otros foros parecen ofrecer un marco más adecuado para el examen de los problemas económicos y sociales, particularmente los que interesan a los países productores y consumidores. Su delegación considera esencial adoptar un enfoque abierto, pero realista, al considerar los problemas de la reforma institucional de las Naciones Unidas. No es realista esperar que los miembros perma-

nentes del Consejo de Seguridad vayan a aceptar cualquier revisión de la Carta que afecte sus derechos como miembros permanentes.

16. Quizás las normas aprobadas inicialmente para una organización que tenía sólo 50 Miembros se han vuelto insuficientes con el tiempo para regular las relaciones entre un número de Estados Miembros que casi se ha triplicado en 30 años. Lo que antes se conocía como el "club selecto" de Estados que creaban las normas de conducta para ellos y para los demás ha desaparecido, por cuanto ahora 143 Estados gozan del privilegio de pertenecer a las Naciones Unidas en pie de igualdad. Los controles que los miembros de ese selecto grupo de Estados solían aceptar han sufrido cambios con el transcurso del tiempo. En consecuencia, es esencial, por una parte, incluir en la Carta indicaciones precisas respecto de los derechos y deberes de los Estados y, por la otra, fijar con la mayor claridad posible los controles que aseguren la legalidad dentro de las Naciones Unidas. A ese respecto, su delegación hace suya la sugerencia formulada por la delegación de Australia en la sesión anterior en el sentido de que el mecanismo de solución de conflictos debe hacerse más dinámico y ágil. Cabe esperar que todos los Estados consideren aceptable la sugerencia de Australia.

17. También pueden producirse situaciones de conflicto como consecuencia de un abuso de poder por la mayoría de la Asamblea General en oposición a un Estado o a un grupo de Estados. Ciertamente la Asamblea General puede abusar de su poder o actuar excediéndose de su competencia, lo que se conoce en el derecho anglosajón como actuar *ultra vires*. También debe reconocerse que habrá siempre un margen de posibles ilegalidades cuando la Carta, como derecho principal o primario, se oponga a una resolución contraria a las normas fijadas en la Carta. La Asamblea General puede por supuesto revisar sus decisiones anteriores, pero ello requiere una mayoría de dos tercios. Si no puede obtenerse esa mayoría, queda como válida una decisión que en sí puede ser inválida frente a la Carta. Eso es motivo de preocupación para su delegación, puesto que el número cada vez mayor de Miembros de las Naciones Unidas aumenta el margen de error jurídico y político. En consecuencia, es necesario que haya un mecanismo que salvaguarde la legalidad de las decisiones adoptadas por las Naciones Unidas. Una de esas salvaguardias es la facultad de veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que es un mecanismo que reduce el margen de posible ilegalidad. En el plano de la Asamblea General, el recurso de revisión es otra forma de control, pero la mayoría de dos tercios necesaria para revisar las decisiones anteriores corre el riesgo de crear graves conflictos políticos, en cuyo caso tiene que intervenir el Consejo de Seguridad.

18. Un Estado o un grupo de Estados que desee poner en duda la legalidad de una decisión lo hace actualmente sobre una base unilateral no acatándola y negándose a cumplirla. Durante muchos años los países desarrollados han abusado de su poder de adopción de decisiones ejerciendo presiones económicas o políticas o invocando el derecho de veto, y han impuesto así sus decisiones a otros Estados. El proceso de descolonización, en algunos casos, y de emancipación económica y política, en otros, ha provocado un cambio drástico en la situación, y actualmente el péndulo se ha desplazado aún más, afectando en algunos casos los

intereses de los países desarrollados y en otros los de los países del tercer mundo. Debe eliminarse de las Naciones Unidas la posibilidad de la ilegalidad consentida y reemplazarla por una vocación por la paz mundial, la legalidad y el derecho. En el pasado ha sido útil recurrir a la Corte Internacional de Justicia para solicitar de ella opiniones consultivas con el fin de prevenir acciones y decisiones ilegales. Sin embargo, ese mecanismo sólo puede ponerse en movimiento en virtud de una decisión de la mayoría. Quizás fuera útil adoptar una norma que permitiera a la Asamblea General, por el voto afirmativo, por ejemplo, de un tercio de sus miembros, pedir una opinión consultiva. El Estatuto de la Corte no permite que un solo Estado impugne los actos del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General. Así, la introducción de nuevos procedimientos para atacar decisiones contribuiría también a reducir el área conflictiva como resultado de la adopción de decisiones que afectasen los derechos de los Miembros de las Naciones Unidas.

19. Otro problema que debe aclararse en el contexto de la Carta es la posibilidad de que un Estado Miembro se retire voluntariamente de la Organización. Esa posibilidad se está discutiendo en los Estados Unidos de América y en otros países entre algunos sectores de la opinión pública. También en Guatemala hay sectores de la opinión pública que son partidarios de retirarse de las Naciones Unidas, y esa cuestión ha sido ampliamente debatida en la prensa. Se ha sostenido que un Estado no puede de ningún modo retirarse legalmente de la Organización. Algunas autoridades mantienen que incluso aunque un Estado se retirara voluntariamente de las Naciones Unidas, la Carta seguiría siendo obligatoria para él. Otras han adoptado la opinión de que, puesto que la Carta es un tratado internacional, se puede denunciar como cualquier otro instrumento del mismo tipo. Un debate sobre toda esa cuestión sería útil. Es evidente que hay que elaborar un procedimiento que prevea la posibilidad de que un Estado quiera retirarse de la Organización.

20. La delegación de Guatemala expresa satisfacción por los progresos realizados por el Comité *ad hoc* y apoya la idea de que continúe su labor.

21. El Sr. AL-ADOOFI (Yemen) dice que, después de 30 años, las Naciones Unidas han entrado en una fase de madurez en la que deberán desempeñar una función mayor y más eficaz en la comunidad internacional. Han sido el medio más exitoso de preservar la paz y la seguridad internacionales, y la comunidad internacional está en deuda con ellas, no sólo por eso, sino también porque fomentan la cooperación entre los Estados en las esferas económica y social y en el terreno de la libre determinación.

22. Eso no significa, sin embargo, que las Naciones Unidas estén libres de defectos o que hayan podido hacer frente a todas las situaciones. A veces no han puesto en práctica sus propósitos y principios, particularmente con respecto al fomento de la paz y de la seguridad internacionales y de la cooperación económica. Lamentablemente, algunos Miembros de las Naciones Unidas aún consideran a la Organización como un campo para la rivalidad y para ejercer influencia. Miran al mundo como lo hacían hace un cuarto de siglo, cuando la mayoría de los Estados que acababan de independizarse estaban todavía sometidos al imperialismo y a la ocupación extranjera. Se niegan obstinadamente a

reconocer los cambios importantes que se han producido en el mundo o a respetar el principio de la igualdad de derechos de todas las naciones, grandes y pequeñas, y de la cooperación basada en principios democráticos. La resolución 3282 (XXIX) de la Asamblea General es un primer paso hacia el diagnóstico y eventualmente la solución de ese problema.

23. Su delegación apoya sin reservas el fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas. La forma más eficaz de lograr ese objetivo es atenerse enteramente a la letra y al espíritu de la Carta, en la que se establecen medios claros y bien definidos para la cooperación entre los Estados. Todos los Estados deben evitar la amenaza o el uso de la fuerza y respetar la integridad nacional, la independencia política y el derecho de todos los Estados a la plena soberanía sobre su territorio. Asimismo deben resolver sus diferencias por medios pacíficos, contener la carrera de armamentos, prohibir la producción de armas de destrucción en masa y apoyar al Comité de Desarme.

24. Debido a que los países del tercer mundo están empeñados en el aprovechamiento de sus recursos económicos y en la construcción de una sociedad mejor, es importante aplicar rápidamente las decisiones adoptadas por la Asamblea General en su sexto y su séptimo período extraordinarios de sesiones, establecer un nuevo orden económico internacional, robustecer las economías de los países en desarrollo y distribuir los recursos del mundo equitativamente. También es necesario fomentar la labor en la esfera de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

25. Si las Naciones Unidas fueran capaces de desempeñar mejor sus funciones, su papel por supuesto se robustecería. Los esfuerzos han de concentrarse en aumentar la eficacia de la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y la Corte Internacional de Justicia aplicando sus decisiones. Además, la Secretaría debe ser democrática y recoger plenamente las aspiraciones de las Naciones Unidas. Su delegación, que respeta la Carta y cree plenamente en sus propósitos y principios, apoya todos esos esfuerzos.

26. La Carta ya ha sido reformada varias veces en virtud del Artículo 108. Ahora que el número de Miembros de las Naciones Unidas ha aumentado más de lo que podían imaginarse los que redactaron la Carta y que se ha aprobado la resolución 3349 (XXIX) de la Asamblea General, ha llegado el momento de que se revisen algunos otros artículos a fin de asegurar la aplicación de los principios democráticos de la Organización. Algunos Estados abusan ahora de las ventajas que les concede la Carta, en perjuicio de los derechos y los deseos de Estados más pequeños. En cambio, aquellos Estados deberían asumir su parte de la carga de preservar la paz y la seguridad internacionales cooperando con los otros Miembros de las Naciones Unidas en beneficio de toda la humanidad.

27. Los artículos de la Carta que se redactaron como resultado directo de la segunda guerra mundial deben eliminarse, puesto que no hay necesidad de mantenerlos.

28. El apoyo de su delegación a la revisión de algunos artículos no significa que apoye la abolición de toda la Carta o su sustitución por otra nueva. La mayoría de las

disposiciones de la Carta siguen siendo válidas, responden a las aspiraciones de todos los pueblos y fomentan la aplicación de los propósitos y principios de las Naciones Unidas. El problema reside básicamente en la falta de respeto a la Carta por parte de algunos Estados que anteponen sus propios intereses particulares a los de todo el mundo.

29. Su delegación apoya toda recomendación encaminada a prorrogar el mandato del Comité *ad hoc*, y cree que ese Comité es el foro adecuado para continuar la labor acerca de la revisión de la Carta. El Comité *ad hoc* debe analizar las opiniones de los Estados sobre esa cuestión, a fin de facilitar la labor de la Sexta Comisión. Para favorecer sus trabajos, la Secretaría debe suministrarle toda la asistencia posible. En opinión de su delegación, no hay inconveniente en postergar por algún tiempo una decisión sobre las enmiendas de la Carta, puesto que ella debe estar más allá de toda crítica y ser compatible con los conceptos modernos, realista y democrática.

30. El Sr. BAROODY (Arabia Saudita) dice que no hay duda de que algunos representantes que tratan de lograr la revisión de la Carta consideran que las Naciones Unidas no están cumpliendo sus obligaciones, especialmente con respecto a los Estados más pequeños. Sin embargo, su larga experiencia en las Naciones Unidas le ha enseñado que ninguna constitución nacional o internacional es perfecta. A menudo el introducir cambios en un instrumento como la Carta puede, además de debilitarlo, sentar un precedente para otros cambios que quizás más tarde haya que lamentar. En consecuencia, se opone a toda revisión radical de la Carta. El problema real no está en la Carta misma, sino en los gobiernos o en la opinión pública. Los gobiernos están constituidos en la mayoría de los casos por políticos y no por estadistas, y basan sus políticas en la conveniencia o en consideraciones personales.

31. A ese respecto, desea poner de relieve los peligros de introducir cambios en la Carta. Añade que estuvo en San Francisco cuando se firmó la Carta y tuvo dudas respecto de ella, especialmente en relación con el veto en el Consejo de Seguridad. Sin embargo, más tarde comprendió que un Estado que tuviera un gran poder, si carecía del veto, podría actuar precipitadamente. La ventaja del veto es que hace que las posiciones de los Estados, por injustas que sean a veces, resulten muy claras para todos.

32. Cuando la idea moderna del consenso suplantó al veto, deseó que éste se restableciera. Un consenso sirve a menudo los intereses nacionales de los Estados que tienen el poder de veto a expensas de los que plantean cuestiones ante el Consejo de Seguridad. Eso se aplica no sólo a las grandes Potencias, sino también a las Potencias menores que se ocultan tras ellas. El resultado es que se sacrifica la justicia. Por ello, muchos problemas no han sido resueltos por consenso, en tanto que con el veto por lo menos se sabe cuál es la posición de las delegaciones.

33. Señala que ha concentrado sus observaciones en el veto porque cree que es el objetivo de los que desean reformar la Carta. Hay también unos cuantos países que desean convertirse ellos mismos en miembros permanentes del Consejo de Seguridad o incluso ejercer el poder de veto. Aunque acogería con agrado que se agregaran otros

miembros permanentes, los que en realidad no ejercen un poder mundial, sino que tienen simplemente ambición de privilegio y poder, deberían en cambio trabajar con humildad en pro de la paz, como lo hace la mayoría de los Estados. Los pueblos se vuelven decadentes si son demasiado ricos, y tiránicos si son demasiado poderosos. Deben comportarse con más moderación.

34. Si se aboliera el veto en el Consejo de Seguridad, sólo podrían hacerse cambios en el mundo mediante revoluciones. Personalmente se inclina más por la moderación, o por la evolución acelerada.

35. El preámbulo de la Carta es una obra maestra de exposición de los propósitos y principios de las Naciones Unidas. A veces conviene hacer cambios estructurales en el cuerpo de la Carta, tales como la ampliación del Consejo de Seguridad y del Consejo Económico y Social, pero el orador se opone a introducir cambios en todo lo que no se puede mejorar, y particularmente en todo lo que atañe a los propósitos y principios de la Carta.

36. El orador lee y reafirma el texto íntegro de la carta que ha dirigido su Gobierno al Secretario General sobre el tema de una revisión de la Carta y que se reproduce en el documento A/10113.

TEMA 109 DEL PROGRAMA

Sucesión de Estados en materia de tratados: informe del Secretario General (continuación*) (A/10198 y Add.1 a 5, A/9610/Rev.1, A/C.6/L.1019)**

37. Sir Vincent EVANS (Reino Unido) presenta el proyecto de resolución A/C.6/L.1019 en nombre de sus autores.

38. Después de resumir las tendencias principales que se han manifestado en el debate celebrado en la Comisión sobre el tema, lee los cuatro párrafos del preámbulo, que son de carácter puramente formal. Refiriéndose a la parte dispositiva, observa que en el párrafo 1 se tienen en cuenta las opiniones expresadas por muchas delegaciones de que el tema debe volver a remitirse a la Comisión de Derecho Internacional (CDI) para que siga considerando las propuestas mencionadas en el párrafo 75 del informe de la CDI sobre la labor realizada en su 26° período de sesiones (A/9610/Rev.1) y los procedimientos que permitan a un Estado sucesor aplicar a su propia situación el régimen establecido en los artículos. La CDI presentará su informe, teniendo en cuenta los comentarios y observaciones de los Estados miembros y los debates realizados en la Asamblea General, a la Asamblea General en su trigésimo primer período de sesiones, en cuyo momento se tendría que poder decidir el procedimiento y las modalidades que habría que utilizar para terminar los trabajos sobre el proyecto de artículos. Para eso, en el párrafo 2 se insta a los Estados que aún no hayan podido hacerlo a que presenten por escrito lo antes posible al Secretario General sus comentarios y observaciones sobre el proyecto de artículos.

* Reanudación de los trabajos de la 1550a. sesión.

** Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno período de sesiones, Suplemento No. 10.

En el párrafo 3 se pide al Secretario General que envíe a la CDI las actas de los debates realizados en la Asamblea General en su trigésimo período de sesiones sobre el tema y los comentarios y las observaciones transmitidos por los Estados Miembros de conformidad con el párrafo 2. En el párrafo 4 se pide al Secretario General que distribuya el informe presentado por la CDI de conformidad con el

párrafo 1 y los comentarios y las observaciones transmitidos por los Estados Miembros de conformidad con el párrafo 2. Finalmente, en el párrafo 5 se decide incluir el tema en el programa provisional de la Asamblea General en su trigésimo primer período de sesiones.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

1567a. sesión

Martes 18 de noviembre de 1975, a las 15.20 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1567

TEMAS 113 Y 29 DEL PROGRAMA

Informe del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas (continuación) (A/10033, A/10102, A/10108, A/10113 y Corr.1 y Add.1 a 3, A/C.6/437)

Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones y la promoción de las normas del derecho internacional en las relaciones entre los Estados: informes del Secretario General (continuación) (A/10218, A/10219, A/10255, A/10289, A/C.6/437)

1. El Sr. MAHMUD (Pakistán) subraya el interés que el Gobierno y el pueblo pakistaníes han manifestado siempre por la cuestión del fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas, y recuerda que las opiniones de su país en la materia están consignadas en el documento A/AC.175/L.2 (segunda parte). La delegación pakistaní está convencida de que sólo se puede fortalecer el papel de las Naciones Unidas si todos los Estados Miembros respetan escrupulosamente la Carta. Como en el pasado, el Pakistán continuará defendiendo los principios y propósitos de la Carta para que una paz justa y duradera reine en todas partes, y en particular en el Asia meridional y en el Oriente Medio. La cuestión de Palestina y de los derechos del pueblo palestino, a la que la Asamblea General concede una atención particular en el período de sesiones en curso, motivó la convocatoria en Lahore, en febrero de 1974, de la segunda Conferencia Islámica en la cumbre. Las preocupaciones expresadas en la Declaración de Lahore son las mismas que las que se han expresado por la mayoría de los Estados Miembros en el trigésimo período de sesiones de la Asamblea General. Es cierto que las Naciones Unidas no han obtenido más que resultados limitados en la esfera del mantenimiento de la paz y que aún queda mucho por hacer en otras esferas conexas, tales como el desarme, la no proliferación de las armas nucleares o la creación de zonas exentas de armas nucleares.

2. La delegación pakistaní estima que podría ser útil crear un mecanismo encargado de examinar y evaluar en qué medida los Estados Miembros respetan las distintas resoluciones y decisiones de las Naciones Unidas y de los

organismos especializados. Ello contribuiría a poner de relieve los casos de violación o de inobservancia de las disposiciones de la Carta y daría más peso a las medidas que podrían adoptarse para instaurar la paz.

3. En sus períodos extraordinarios de sesiones sexto y séptimo, la Asamblea General destacó algunos de los problemas económicos más agudos que se plantean a la comunidad internacional y que deberían resolverse con toda urgencia, ya que los países en desarrollo, como el Pakistán, son cada vez más vulnerables a la recesión económica y las embestidas inflacionistas. La delegación pakistaní está convencida de que, para favorecer las relaciones de amistad entre los Estados, es esencial que las Naciones Unidas contribuyan activamente a hacer reinar la legalidad. Hasta que los Estados Miembros sean conscientes de sus deberes y estén seguros de sus derechos no alcanzará la paz una nueva dimensión. Habrá que esforzarse, dedicando a esa tarea recursos financieros e intelectuales cada vez mayores, para que los Estados sean más conscientes de los objetivos de la Carta y de las promesas de un mundo mejor que encierra. Igualmente, importa adoptar con urgencia medidas contra los que violan los principios de la Carta de forma flagrante y persistente. No obstante, no hay que hacerse ilusiones: en el curso de los próximos años tal vez se resolverán algunos problemas pero aparecerán otros. Por esa razón la delegación pakistaní recuerda una sugerencia hecha por varias delegaciones, encaminadas a establecer un mecanismo o modalidades para el arreglo pacífico de controversias.

4. El carácter casi universal de las Naciones Unidas repercute naturalmente en las estructuras del pasado. El papel cada vez más importante que desempeñan los países del tercer mundo, tanto dentro como fuera de las Naciones Unidas, muestra que esos países están animados por el deseo de fortalecer la eficacia de la Organización mundial. No cabría pensar en fortalecer el papel de las Naciones Unidas en lo que respecta a la paz y la seguridad internacionales sin reconocer la importancia de la Carta. La creación del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas expresa el deseo de examinar bajo una nueva luz ese instrumento, que refleja fielmente la situación política mundial de 1945 pero no la situación actual. La posición de la delegación pakistaní sobre ese punto es bien conocida. En un mundo cada vez más interdependiente, la comunidad

mudial comienza a ver ciertos problemas desde una perspectiva internacional y sopesa las ventajas y los inconvenientes colocándose en el plano mundial, ya se trate de la alimentación, la población, el medio ambiente o el desarme. Las Naciones Unidas constituyen una tribuna en la que los Estados pueden exponer sus preocupaciones y expresar sus opiniones sobre esas cuestiones, con miras a elaborar soluciones generalmente aceptables. Los errores del pasado deben incitarlos a conjugar sus esfuerzos para evitar la repetición de esos errores. La delegación pakistaní apoyará toda iniciativa encaminada a reforzar el papel de las Naciones Unidas para instaurar un orden mundial más justo y más equitativo.

5. El Sr. JAROSZEK (Polonia) declara que el informe del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas (A/10033) no contiene nada nuevo y confirma la convicción de la delegación polaca de que nada justificaba la creación de ese órgano. Los argumentos aducidos ante el Comité *ad hoc* son exactamente los mismos que los que se desprenden de las actas de la Sexta Comisión. El Comité *ad hoc* no ha llegado a ninguna conclusión nueva. Por una parte, no ha desempeñado su mandato, que desde el principio estaba condenado al fracaso y, por otra parte, ha rebasado su competencia al elaborar un informe voluminoso, que representa prácticamente un acta taquigráfica de sus debates, en tanto que la Asamblea General no le había ni siquiera autorizado a levantar actas resumidas. Los trabajos del Comité *ad hoc* han confirmado que es peligroso abordar una cuestión tan controvertida como la revisión de la Carta. El Gobierno polaco siempre ha estudiado atentamente las propuestas razonables encaminadas a hacer de la Carta un instrumento más eficaz, a racionalizar los mecanismos que sirven al funcionamiento de las Naciones Unidas y a traducir los objetivos y propósitos de la Carta en la práctica cotidiana, pero le inquietan las propuestas de revisión de la Carta. Ya se ha preconizado repetidas veces una revisión de la Carta. No obstante, parece que los partidarios de esa revisión no tienen en cuenta el interés de la Organización, sino que están animados por consideraciones de oportunismo y prosiguen sus propios intereses. Habida cuenta de las realizaciones logradas por las Naciones Unidas durante sus 30 años de existencia, Polonia, como Miembro fundador, debe oponerse a los que quieren "revisar por revisar". La delegación polaca estima que el hecho mismo de debatir la necesidad de revisar la Carta constituye un factor peligroso de controversia y de división entre los Estados Miembros.

6. El Gobierno polaco ya ha expuesto su punto de vista en repetidas ocasiones, particularmente en las observaciones que dirigió al Secretario General en 1972¹, en la intervención de la delegación polaca en la Sexta Comisión en el vigésimo noveno período de sesiones (1512a. sesión) y en las reuniones del Comité *ad hoc*. Además, en el período de sesiones en curso, el Ministro de Relaciones Exteriores de Polonia declaró (2361a. sesión plenaria) que para hacer más eficaces los trabajos de las Naciones Unidas no había que revisar la Carta, sino respetar rigurosamente sus principios y disposiciones en la práctica de las relaciones internacionales y utilizar mejor todas las posibilidades que ofrece. El propio Presidente de la Asamblea General ha declarado (2351a. sesión plenaria) que, durante sus 30 años de existencia, las

Naciones Unidas se habían inspirado constantemente en sus textos básicos y que de ahí habrán sacado directrices útiles, que todos los Estados Miembros se habían adherido a la Carta con plena libertad y con pleno conocimiento de causa y que la Carta debía seguir guiando la conducta de los Estados Miembros.

7. Para Polonia, la Carta no es un simple tratado multilateral, sino un conjunto de principios sancionados por la voluntad de los Estados. Las Naciones Unidas, creadas a raíz de la victoria sobre el fascismo, tienen como principal objetivo "preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra" y promover el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Si bien las Naciones Unidas no han respondido siempre a las esperanzas que se habían depositado en ellas, ha sido merced a la Carta, entre otras cosas, que por primera vez en los últimos 30 años en ninguna parte del mundo existe un conflicto armado abierto entre Estados.

8. Los principios y propósitos de las Naciones Unidas constituyen la base de un nuevo orden internacional que prohíbe el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza, que obliga a cada Estado a mantener la paz y la seguridad internacionales y que somete las relaciones interestatales a los principios de la coexistencia pacífica. Por esa razón el Gobierno polaco ha apoyado resueltamente el Acta Final de la Conferencia de Helsinki, así como otros instrumentos que constituyen fuentes del derecho internacional, porque se basan en la Carta de las Naciones Unidas, en su redacción actual. No se puede imaginar lo que sería de las centenas de acuerdos y tratados bilaterales y multilaterales que se basan en la Carta o que contienen referencias directas a la Carta si fuese hecha pedazos súbitamente como consecuencia de una revisión. Incluso aquellos que preconizan su revisión ya no tendrían apenas confianza en la Carta. Una revisión podría incluso atentar seriamente contra el fundamento del sistema jurídico internacional, tan laboriosamente elaborado en el curso de los últimos 30 años. El hecho de que el número de Miembros de la Organización haya aumentado considerablemente no disminuye en nada la importancia de la Carta como fuente de las normas que rigen la comunidad de las naciones. Al contrario, si gran número de antiguas colonias y de territorios dependientes han logrado la independencia y desempeñan actualmente un papel en el seno de las Naciones Unidas, se debe precisamente a la Carta. Todo Estado recientemente admitido en las Naciones Unidas aporta su apoyo total a la Carta y se compromete a respetarla rigurosamente. Esa es una condición *sine qua non* que deriva del Artículo 4 de la Carta. Ahora bien, parece que algunas delegaciones consideran que al convertirse en Miembros de las Naciones Unidas y al comprometerse solemnemente a respetar la Carta, sus países respectivos se proponen en efecto dirigirse hacia una revisión de la Carta y hacia una impugnación, efectuada desde el interior, de los fundamentos de la Organización. La delegación polaca es resueltamente hostil a tales iniciativas. Para ella, la eficacia de la Organización y el papel que puede desempeñar en la comunidad internacional dependen ante todo de la forma en que se apliquen las disposiciones de la Carta y no de la frecuencia con que son revisadas. Lo que es esencial es que todos los Estados apliquen cabalmente las disposiciones de la Carta, sea cual fuere su superficie, su nivel de desarrollo o su régimen social y político. No conviene que las tentativas de revisión de la Carta desvíen la

¹ Véase A/8746.

atención de la orientación que toman las actividades políticas de las Naciones Unidas y tengan consecuencias sobre la realización de objetivos importantes como los del nuevo orden económico.

9. En su forma actual, la Carta ofrece aún numerosas posibilidades y sugiere vías de acción que no han sido exploradas ni agotadas. No puede negarse que es necesario mejorar los medios de acción de la Organización. En el plano político, estos dependerán siempre de la medida en que los Estados Miembros estén dispuestos a dar a la Organización los poderes necesarios y apoyar y respetar sus decisiones. En el plano económico y social, no cabe duda que es necesaria una cierta reestructuración del sistema para afrontar las necesidades actuales. La utilidad de una reestructuración, que es muy diferente de una revisión de la Carta, se desprende de los trabajos del Comité Especial para la racionalización de los procedimientos y la organización de la Asamblea General, del Grupo de Expertos para el estudio de la estructura del sistema de las Naciones Unidas, así como de la resolución 3362 (S-VII) adoptada por la Asamblea General en su séptimo período extraordinario de sesiones de crear un Comité *ad hoc* de la reestructuración de los sectores económico y social del sistema de las Naciones Unidas. En el momento en que esos trabajos de reestructuración comienzan, apenas parece indicado iniciar paralelamente un proceso que impediría toda racionalización o mejora de los trabajos de la Organización conforme a la Carta.

10. El representante de Polonia declara que no hay razón para que el Comité *ad hoc* prosiga sus trabajos o para que se renueve su mandato. En el plano de las relaciones internacionales, emprender una revisión de la Carta sería verdaderamente abrir la "caja de Pandora". La delegación polaca estima que lo mejor que la Comisión puede hacer es tomar nota del informe del Comité *ad hoc* y eliminar de su programa la cuestión del fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas.

11. El Sr. OMAR (República Árabe Libia) recuerda que en varias ocasiones se ha pedido a la Asamblea General que indague la posición de los Estados Miembros sobre la cuestión de la revisión de la Carta y que en su vigésimo noveno período de sesiones aprobó la resolución 3349 (XXIX), por la que creó un Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas, encargado de examinar prioritariamente las observaciones recibidas de los gobiernos, las propuestas que pudieran hacer con miras a incrementar la eficacia de las Naciones Unidas e igualmente otras proposiciones para el funcionamiento más eficaz de las Naciones Unidas que pudieran no requerir la reforma de la Carta. Los gobiernos han expresado opiniones divergentes sobre la cuestión de la revisión de la Carta. Algunos se oponen a la idea de una revisión, otros la apoyan, mientras que otros se ubican todavía en una posición intermedia entre esas dos, como surge del informe del Comité *ad hoc*. Parece que 30 años después de la aprobación de la Carta es necesario hacer un alto y examinar la obra realizada por las Naciones Unidas.

12. Muchos acontecimientos importantes y cambios radicales se han registrado en las relaciones internacionales, por ejemplo, la liberación de numerosos países del yugo colonial y los progresos realizados en diversas esferas. Pero

las Naciones Unidas no han podido realizar su ideal de mantener la paz y la seguridad en el mundo, y el derecho de veto de que gozan algunas Potencias ha dificultado el ejercicio de las funciones del Consejo de Seguridad. Las Naciones Unidas no han podido encontrar soluciones a un gran número de problemas, algunos planteados desde su creación. La delegación de la República Árabe Libia se inclina, pues, a reflexionar en la necesidad de revisar la Carta para adaptarla al mundo moderno y el Sr. Omar recuerda que los autores de la Carta han consagrado un artículo especial a esa cuestión.

13. Convencida de que el mundo no podría prescindir de las Naciones Unidas, la delegación de la República Árabe Libia apoya la idea de revisar la Carta para reforzar el principio de la democracia a escala internacional, abolir los privilegios de algunas grandes Potencias — de los que algunas de ellas abusan — garantizar una distribución equitativa de la riqueza e imponer ciertas restricciones para asegurar la paz y la seguridad internacionales, mediante la adopción, por ejemplo, de medidas en materia de desarme y la eliminación de las existencias de armas de destrucción masiva. Así pues, la delegación de la República Árabe Libia opina que debe invitarse al Comité *ad hoc* a proseguir su tarea.

14. El Sr. LEE (Malasia) recuerda que su delegación votó a favor de la resolución 3349 (XXIX), por la que la Asamblea General creó el Comité *ad hoc*, porque cree útil examinar las sugerencias relativas a la revisión de la Carta, teniendo en cuenta la posición de los países no alineados y en desarrollo, según los cuales una reforma y una racionalización de las Naciones Unidas podrían permitirles realizar mejor sus objetivos. Ese examen tendría la ventaja de dar a todos los Miembros de las Naciones Unidas, en particular a los que no participaron en su creación, la oportunidad de hacer conocer sus opiniones, y podría conducir a adaptar algunas de las disposiciones de la Carta al mundo actual.

15. Por su parte, la delegación de Malasia no pretende una revisión completa de la Carta. No cree que el examen de la Carta tenga por objeto limitar los poderes de que actualmente disfrutaban ciertos países, y deplora la reticencia de que hacen gala ciertos Estados Miembros, pues se trata únicamente de mejorar la Organización para transformarla en el centro donde se armonicen los esfuerzos de todas las naciones.

16. La delegación de Malasia no se propone hacer, en la etapa actual, sugerencias relativas a las disposiciones de la Carta que habría que suprimir, enmendar o reformar, pero estaría dispuesta a prever sugerencias en ese sentido. Habría que examinar, especialmente, el uso del derecho de veto por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y preguntarse si conviene aumentar el número de miembros del Consejo y reforzar los poderes de las Naciones Unidas respecto de los Estados Miembros recalcitrantes, aumentar la eficacia y ampliar el alcance de las operaciones de mantenimiento de la paz.

17. El Comité *ad hoc* llama la atención en su informe sobre el hecho de que hubo discrepancias fundamentales respecto de la necesidad de llevar a cabo una revisión de la Carta. Para la delegación de Malasia, es obvio que hay que seguir tratando de armonizar las posiciones antes de que el

Comité *ad hoc* indique cuáles son las propuestas que han suscitado un interés particular. Como muchos representantes lo han hecho notar, la eficacia de las Naciones Unidas depende en gran medida de la voluntad de sus Miembros de respetar las disposiciones de la Carta. Antes de comenzar a revisar la Carta, los Estados deben, pues, llegar a un consenso sobre ese punto, y la delegación de Malasia se pronuncia en consecuencia por la prórroga del mandato del Comité *ad hoc*.

18. El Sr. JANKOWITSCH (Austria) recuerda que el mundo se ha transformado radicalmente desde la creación de las Naciones Unidas y que las nuevas naciones no tuvieron la posibilidad de participar en la elaboración de la Carta. Por lo tanto, es sumamente deseable, e incluso necesario, proceder a ciertas adaptaciones, y el representante de Austria felicita a la delegación de Rumania por haber expresado, en su documento de trabajo (véase A/C.6/437), ideas constructivas para resolver algunos de los problemas complejos que se plantean a la Organización. La delegación de Austria ha prestado igualmente atención a la declaración hecha por la delegación de Australia (1565a. sesión), que se centró en particular sobre el problema de la prevención y el arreglo pacífico de las controversias internacionales y en que sugirió sacar mayor partido del mecanismo existente en el marco de las Naciones Unidas y de otros órganos internacionales para el arreglo de controversias, previendo por otra parte acuerdos de arbitraje.

19. En el pasado, la delegación de Austria ha asumido una actitud prudente respecto de la cuestión de la revisión de la Carta, no por falta de interés, sino porque el Gobierno de Austria se esfuerza en ponderar las ventajas y los inconvenientes que tendría abordar el examen de un problema que sólo puede resolverse tras prolongados esfuerzos.

20. La delegación de Austria lamenta que el informe del Comité *ad hoc* consista en realidad en un anexo, donde se reproducen *in extenso* declaraciones hechas en el Comité *ad hoc*. Sin embargo, como la delegación de Filipinas (1564a. sesión), la delegación de Austria piensa que no hay que desanimarse por los resultados mediocres obtenidos hasta el presente y que debería, por lo tanto, invitarse al Comité *ad hoc* a proseguir su labor. El Comité *ad hoc* debería ir más allá de la cuestión de la revisión de la Carta y concentrar por el momento su atención en las mejoras que no entrañen una reestructuración de las Naciones Unidas. De esa manera, no habría que descuidar la posibilidad de una interpretación dinámica de la Carta y, en realidad, muchos oradores han destacado cuánto se prestan las disposiciones existentes a la adaptación. La delegación de Austria se pregunta, en particular, si se han analizado todas las posibilidades que ofrece el Capítulo XI de la Carta y sugiere

que el Comité *ad hoc* analice esa cuestión que, por cierto, dará menos lugar a controversia que una revisión de la Carta *stricto sensu*.

21. La posición de Austria como Miembro de las Naciones Unidas y Estado neutral ofrece un ejemplo de la flexibilidad de la Carta. Si bien el estatuto de neutralidad permanente no era una fórmula particularmente apreciada por los autores de la Carta, los 20 años de existencia de Austria como Estado neutral han probado ampliamente que podía contribuir, como cualquier otro Estado, a la realización de las tareas de las Naciones Unidas, porque la razón de ser de su estatuto coincide exactamente con el objetivo perseguido por las Naciones Unidas, a saber, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Austria permanece, además, firmemente convencida de que los órganos competentes de las Naciones Unidas tendrán en cuenta su estatuto si resulta necesario. Al respecto, el Sr. Jankowitsch recuerda una declaración del Gobierno austríaco relativa a las sanciones contra Rhodesia del Sur y publicada en el documento S/7795², así como las observaciones hechas por el representante de Austria en la 1000a. sesión, celebrada durante el vigésimo segundo período de sesiones. Señala igualmente a la atención la resolución pertinente adoptada por el Instituto de Derecho Internacional en agosto de 1975.

22. La delegación de Austria desea que el Comité *ad hoc* prosiga su labor, y se felicita por los esfuerzos realizados por muchas delegaciones que no comparten el mismo punto de vista, con miras a elaborar un proyecto de resolución único que la Comisión pueda adoptar por consenso.

23. Puesto que el Comité *ad hoc* ha emprendido una tarea a largo plazo, habría que encontrar una solución para permitir a los países que no se cuentan entre sus miembros participar en sus deliberaciones.

TEMA 109 DEL PROGRAMA

Sucesión de Estados en materia de tratados: informe del Secretario General (continuación) (A/10198 y Add.1 a 5, A/C.6/L.1019)

24. El PRESIDENTE anuncia que la RSS de Ucrania se ha unido a los autores del proyecto de resolución A/C.6/L.1019.

Se levanta la sesión a las 16.30 horas.

² Mimeografiado. Para un extracto de las partes más importantes de esa declaración, véase *Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Vigésimo Segundo Año, Suplemento de enero, febrero y marzo de 1967*, documento S/7781/Add.2, anexo.

1568a. sesión

Miércoles 19 de noviembre de 1975, a las 10.55 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1568

TEMAS 113 Y 29 DEL PROGRAMA

Informe del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas (continuación) (A/10033, A/10102, A/10108, A/10113 y Corr.1 y Add.1 a 3, A/C.6/437)

Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones y la promoción de las normas del derecho internacional en las relaciones entre los Estados: informes del Secretario General (continuación) (A/10218, A/10219, A/10255, A/10289, A/C.6/437)

1. El Sr. BRUCE (Canadá) dice que, en los últimos 30 años, las Naciones Unidas han registrado más éxitos que fracasos. En un proceso de evolución, las Naciones Unidas, actuando en gran medida de acuerdo con las disposiciones de su Carta inicial, han demostrado ser suficientemente adaptables para proporcionar a los casi 100 Estados que han pasado a ser Miembros desde 1945 un medio para promover el logro de sus objetivos, sirviendo al mismo tiempo los intereses cambiantes de los Miembros originales. Sin embargo, eso no quiere decir que no sea preciso perfeccionar las Naciones Unidas y su labor, y tal vez incluso la propia Carta. En gran medida, las comisiones y otros órganos subsidiarios de las Naciones Unidas son los que se establecieron en virtud de la Carta de hace 30 años. Mientras tanto, las condiciones han cambiado en formas que no pudieron ser previstas en 1945 y los valores y prioridades de todos los Miembros se han ajustado en consecuencia. Lo mucho que actualmente se exige a todos los elementos del sistema de las Naciones Unidas refleja no sólo la virtual triplicación del número de sus Miembros, sino también la gama más amplia de los intereses mundiales.

2. El Canadá ha tratado de trabajar activamente para lograr que las Naciones Unidas sean un instrumento más eficaz de cooperación internacional y ha estado dispuesto a considerar todas las propuestas — incluso las que entrañan una posible enmienda de la Carta — que puedan aumentar la eficacia de la Organización. Es algo decepcionante que el Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas no haya podido realizar mayores progresos en el cumplimiento de su mandato. No cabe duda de que hay problemas que afectan el funcionamiento de las Naciones Unidas, como la proliferación de órganos y secretarías intergubernamentales, la insuficiente importancia que se atribuye a la búsqueda de un verdadero consenso en cuanto a la formulación de decisiones, y métodos ineficientes de trabajo.

3. Además, parece que está surgiendo una tendencia potencialmente grave a confundir la autoridad y competencia del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General en las esferas políticas prescritas por la Carta, por una parte, y

la competencia y autoridad de las conferencias técnicas en sus respectivas esferas, por otra. A ese respecto, es especialmente digna de mención la labor del Grupo de Expertos para el estudio de la estructura del sistema de las Naciones Unidas. Es alentador que el Grupo de Expertos haya podido recomendar una serie de reformas concretas y de largo alcance que pueden mejorar en forma significativa la labor de las Naciones Unidas, sin recurrir necesariamente a la enmienda de la Carta. La delegación del Canadá proyecta participar activamente en el debate relativo a esas recomendaciones y espera que el examen lleve a una simplificación y a un fortalecimiento de los elementos de la labor de las Naciones Unidas relacionados con la cooperación económica entre los Estados.

4. Es posible que las dificultades con que ha tropezado el Comité *ad hoc* provengan del hecho de que su mandato no es suficientemente preciso. Podría, por ejemplo, tener atribuciones para efectuar una reforma ulterior de los procedimientos.

5. Pese a que la Carta contiene ciertos anacronismos, ha demostrado ser notablemente elástica en los últimos 30 años, y lo que algunas veces se han llamado deficiencias del mecanismo de las Naciones Unidas han sido en realidad fallas de los propios Miembros. En consecuencia, debe hacerse todo lo posible para garantizar que los instrumentos organizacionales de que se dispone se utilicen al máximo.

6. La delegación del Canadá estará al tanto de cualquier nuevo examen de propuestas para introducir cambios en otras esferas de la labor de las Naciones Unidas, incluso las sugerencias que surjan en un nuevo examen de la Carta. En el futuro inmediato, las mayores posibilidades para llegar a un acuerdo en cuanto a las mejoras prácticas no parecen requerir enmiendas a la Carta y, por lo tanto, debe darse mayor importancia a esas esferas. Si la Comisión decide renovar el mandato del Comité *ad hoc* durante otro año, cabe esperar que ese mandato sea más preciso.

7. Con respecto a la prevención y al arreglo pacífico de controversias internacionales, la delegación del Canadá está plenamente de acuerdo con la opinión expresada por el representante de Australia (1565a. sesión). El informe del Secretario General (A/10289) es bastante desalentador, ya que no revela una preocupación especial por parte de los Estados Miembros respecto del importante problema de proporcionar a las partes interesadas medios aceptables para el arreglo pacífico o la prevención de controversias. La delegación del Canadá reconoce la responsabilidad principal que tiene el Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y el papel central de la Corte Internacional de Justicia dentro del mecanismo de las Naciones Unidas para el arreglo pacífico de controversias. Sin embargo, un nuevo examen de las situaciones en que surgen controversias podría dar a conocer nuevas técnicas y

métodos de arreglo que se aplican en otras esferas de la actividad. La creciente interdependencia de las sociedades ha acercado a los pueblos y ha aumentado la posibilidad de que se produzcan fricciones que pueden convertirse en peligrosos enfrentamientos. Esos cambios fundamentales exigen un examen realista y a fondo del mecanismo existente para el arreglo de las controversias internacionales. La delegación del Canadá aceptará el criterio de la Comisión en su totalidad en cuanto al contexto en que puedan realizarse nuevos trabajos sobre la cuestión, si bien espera que el debate que se realice en la Comisión revele una preocupación auténtica por parte de todos los Estados Miembros en cuanto a la búsqueda vital de soluciones distintas del enfrentamiento.

8. El Sr. BRUNA (Chile) dice que el informe del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas (A/10033) demuestra que no ha podido completar su labor por la dificultad del tema, la falta de tiempo y el poco apoyo administrativo. En consecuencia, la Asamblea General debe permitir que el Comité *ad hoc* continúe su labor en 1976, con un período de sesiones de duración adecuada, y deben proporcionársele, por lo menos, actas resumidas. La delegación de Chile apoyará todo proyecto de resolución que refleje esas opiniones.

9. Las Naciones Unidas, como toda institución humana, tiene algunos defectos, y es obligación de sus Miembros tratar de corregirlos. En consecuencia, el Comité *ad hoc* debe examinar las observaciones de los gobiernos y toda propuesta destinada a incrementar la capacidad o mejorar el funcionamiento de las Naciones Unidas, requiera o no la revisión de la Carta. La delegación de Chile no puede aceptar la afirmación mal intencionada de que quienes propician un estudio de la revisión de la Carta son enemigos de las Naciones Unidas. En realidad, los que se oponen a toda reforma sólo quieren impedir que se les prive de injustos privilegios.

10. Han aparecido muchos problemas que no se previeron en 1945 y aún no se ve cómo se solucionarán. Existe la agresión psicológica de nuevos imperios surgidos después de la segunda guerra mundial; si bien hay una ausencia de guerra general, no existe un respeto auténtico por la independencia de los Estados y la libre determinación de los pueblos; algunas de las Potencias vencedoras en la segunda guerra mundial han sido despojadas de sus colonias y territorios, mientras que otras han continuado extendiendo su ideología y su influencia económica y bélica en un grado jamás conocido antes en la historia. Esa situación no puede considerarse un éxito de las Naciones Unidas. Además, no todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas reciben un trato igual. Algunos de ellos parecen disfrutar de ciertas inmunidades o de la protección de ciertos Estados. En las esferas económica y social queda mucho por hacer y la Carta no parece haber sido un instrumento adecuado; no ha podido impedir que algunos Estados eludan que la Organización analice ciertos problemas, como los derechos humanos. Convendría reforzar el derecho sobre ese tema y buscar un procedimiento que permitiera el respeto de tales derechos en todo el mundo, sin móviles de carácter político.

11. En una época de creciente interdependencia de los Estados, las Naciones Unidas adquieren una importancia

singular como única organización que tiene en su seno la representación de casi todos los Estados. Las Naciones Unidas necesitan una Carta que se ajuste a sus necesidades y a las nuevas realidades. El derecho no es estático, sino dinámico, de manera que no puede hacerse una defensa de que no debe revisarse una constitución o una Carta, pues todo examen que se haga para mejorar es útil. Por lo tanto, la delegación de Chile estima que debe considerarse si es preciso revisar la Carta para el mejor cumplimiento de los fines de las Naciones Unidas, y confía en el buen juicio de los miembros del Comité *ad hoc*.

12. La incorporación de nuevos Estados a las Naciones Unidas crea nuevas situaciones. La delegación de Chile no comparte la opinión de que los nuevos Estados que han ingresado recientemente en la Organización aceptaron la Carta y que, por lo tanto, no debieran querer revisarla. Todos los Estados, sean Miembros fundadores o no, tienen los mismos derechos, y a nadie se le ha condicionado su ingreso en las Naciones Unidas a una aceptación permanente de un texto. Para la subsistencia de las Naciones Unidas y para que cumpla sus fines, debe encontrarse una fórmula que permita conciliar los intereses de todos los Estados.

13. Las constituciones o cartas, por muy perfectas que sean, no sirven de nada si quienes deben aplicarlas no creen en ellas ni se adhieren honestamente a sus finalidades. El Gobierno de Chile cree en las Naciones Unidas y se adhiere a sus propósitos, y hace un llamado para que se observen la letra y el espíritu de la Carta.

14. Por ahora, un estudio de la necesidad de revisar la Carta es la mejor manera de fortalecer el papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones y el fomento de las normas de derecho internacional en las relaciones entre los Estados. En especial, como lo indicó el Gobierno de Chile en el documento A/10255, las Naciones Unidas deben convertirse en un instrumento más eficaz para salvaguardar y fortalecer la independencia y la igualdad soberana de todos los Estados, así como el derecho inalienable de todos los pueblos a decidir su propio destino sin ninguna injerencia extranjera.

15. El Sr. ALIHONOU (Congo) dice que su delegación da la bienvenida a las Comoras con motivo de su admisión en las Naciones Unidas y espera con interés la próxima admisión de Angola.

16. La revisión de la Carta resolverá los problemas que se presentan en el marco del tema 29 del programa, y la delegación del Congo, que es miembro del Comité *ad hoc*, considera que la cuestión es especialmente importante. La Carta debe ser actualizada a fin de democratizar las actividades de las Naciones Unidas con miras a incrementar la cooperación internacional. El mandato del Comité *ad hoc* debe ser no solamente ampliado, sino también reforzado, ya que tarde o temprano surgirán esferas en que haya coincidencia de opiniones.

17. La Carta fue concebida hace 30 años y fue un arreglo de avenencia entre las grandes Potencias de aquella época. El Congo, al lograr la soberanía internacional, se adhirió a los principios proclamados en la Carta. No obstante, el

progreso ha sido a menudo obstaculizado por disposiciones que han llegado a perder actualidad y que son utilizadas en forma injusta por algunos países. En efecto, algunas disposiciones de la Carta suelen estar reñidas con el carácter universal e igualitario de las Naciones Unidas. Mientras nuevos Estados se identificaban con el pacifismo, algunos Miembros originarios mantenían una guerra injusta y feroz a miles de millas de su propio territorio. Las condiciones han cambiado completamente, y mantener a las Naciones Unidas en un marco de normas obsoletas, injustas e incompletas sencillamente destruirá su credibilidad.

18. La delegación del Congo no está de acuerdo con quienes se oponen a toda revisión de la Carta con el argumento de que cualquier enmienda provocaría el derrumbe de toda la estructura. Además, introducir únicamente cambios marginales cautelosos entrañaría tener que enmendar la Carta cada dos o tres años. La delegación del Congo considera que se debe llevar a cabo un examen general de las actividades de las Naciones Unidas y que no se debe vacilar en suprimir todas las disposiciones anacrónicas e injustas. Aunque la Carta no es causa de todos los males de las Naciones Unidas, su revisión constituirá un paso importante hacia la paz y la comprensión mutua. No se alcanzará ese objetivo si la Carta sigue proporcionando a una minoría de países los medios de detener cualquier acción. No hay nada sagrado en la Carta, como lo demuestran su constante violación bajo la mirada benévola de varios de los países que predicen que su enmienda equivaldría a un desastre. La delegación del Congo está convencida de que la forma de impedir tal desastre es revisar la Carta, haciéndola un instrumento para la democracia y exponiendo claramente los derechos y deberes de cada Estado en el nuevo orden económico internacional.

19. El Sr. MALIK (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la posición de su país acerca de los dos temas estrechamente interrelacionados y complementarios que la Comisión examina es absolutamente clara y coherente. La Unión Soviética defiende la permanencia de los principios y propósitos de la Carta y rechaza todo intento de revisarla en las condiciones actuales. Al mismo tiempo, apoya firmemente el fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas y de la eficacia de sus actividades, sobre la base de la observancia estricta y escrupulosa de los propósitos y principios de la Carta.

20. En el vigésimo noveno período de sesiones (1514a. sesión), la Unión Soviética se pronunció en contra de la revisión de la Carta y de la creación de un comité encargado de estudiar tal revisión. Como confirmación de la posición de la Unión Soviética, el informe del Comité *ad hoc* ha revelado una discrepancia fundamental respecto de la necesidad de llevar a cabo una revisión de la Carta, y es evidente que el Comité *ad hoc* ha emprendido una labor inútil e improductiva. Deben terminar tales intentos de socavar los fundamentos de las Naciones Unidas, y quienes abogan por la revisión de la Carta deben reconocer la absoluta falta de posibilidades de éxito de sus intentos de destruir el mecanismo universal de cooperación internacional que fue creado con tantas dificultades en el período que siguió a la segunda guerra mundial.

21. Quienes propugnan la revisión de la Carta han citado a menudo los 30 años transcurridos y los cambios que han

tenido lugar en el mundo desde la fundación de las Naciones Unidas. Deben recordar que 20 de esos años han sido años de "guerra fría". A pesar de las dificultades de esa época, las Naciones Unidas, actuando en el marco de su Carta, pudieron así y todo hacer una contribución substancial a la causa del mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales y a la solución de varios problemas internacionales complejos. Por un período que ya es de 30 años, la humanidad ha sido salvada de los horrores de una guerra mundial y, con la reducción de la tirantez, se han aprobado numerosos documentos de importancia histórica. No es una novedad que se critique a las Naciones Unidas y su Carta, pero quienes las han defendido han podido, no obstante, lograr muchos resultados positivos para la consolidación de la paz y la seguridad internacionales y el desarrollo de la cooperación internacional.

22. En el debate general celebrado durante el corriente período de sesiones de la Asamblea General, la mayoría de los oradores han expresado la firme adhesión de sus respectivos países a los propósitos y principios de la Carta. Lamentablemente, otros han hablado a favor de la revisión de la Carta, con la demanda de que se destruyan sus principales disposiciones y principios y, en particular, atacando el principio básico de la unanimidad de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. El orador recuerda a los miembros de la Comisión que, para la Unión Soviética, país socialista, el derecho de veto no es un privilegio, sino una necesidad histórica y que sin él el principio de la igualdad del socialismo y el capitalismo en el Consejo de Seguridad — fundamento principal de la Carta — habría sido violado mil veces en los últimos 30 años, y la existencia de gran número de países se habría visto amenazada. Por tal razón, la existencia de las Naciones Unidas es impensable e imposible sin el derecho de veto para la Unión Soviética. La división de esferas de competencia entre la Asamblea General y el Consejo de Seguridad está basada en la realidad de los dos sistemas sociopolíticos existentes en el mundo contemporáneo. En la carta que dirigió al Secretario General sobre la cuestión de la Carta (véase A/10102), el Gobierno de la Unión Soviética puntualizó que el principio clave de la unanimidad de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad había servido y seguía sirviendo como firme barrera contra la utilización del Consejo de Seguridad para fines contrarios al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y que la Unión Soviética había utilizado reiteradamente su pleno poder de miembro permanente del Consejo de Seguridad en apoyo de los movimientos de liberación nacional, para la defensa de la justa causa de los pueblos que luchan contra la dominación colonialista y racista.

23. No es difícil comprender que, en las circunstancias actuales, es imposible resolver las importantes cuestiones del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales por el habitual procedimiento del voto de la mayoría. Los intentos de algunos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de recurrir a la coerción y hasta a la fuerza contra otros miembros permanentes en nombre de las Naciones Unidas, aun cuando se apoyasen en el voto de la mayoría, conducirían a desencadenar una guerra mundial termonuclear, con sus desastrosas consecuencias para toda la humanidad.

24. Además, después de la ampliación del número de miembros del Consejo de Seguridad a 15, el número de los miembros no permanentes ha aumentado en tal medida que permite actualmente una especie de "veto colectivo", y ninguna decisión del Consejo de Seguridad se puede apoyar sin el consentimiento y los votos de los miembros no permanentes. La delegación de la Unión Soviética rechaza absolutamente todos los demás planes tortuosos de privar a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de su responsabilidad especial del mantenimiento de la paz y la seguridad, aumentando, por ejemplo, el número de miembros permanentes, o transfiriendo la responsabilidad principal del mantenimiento de la paz y la seguridad a la Asamblea General, o haciendo que las decisiones de la Asamblea General sean jurídicamente obligatorias en lugar de ser recomendaciones, como se dispone actualmente en la Carta.

25. Algunos oradores han criticado la retención en la Carta de las expresiones "miembros originarios" y "Estados enemigos". Sin embargo, esas expresiones reflejan hechos históricos incuestionables; en particular, la segunda expresión no es un anacronismo, sino un recordatorio de los sucesos de la segunda guerra mundial, en la que 20 millones de ciudadanos de la Unión Soviética perecieron en la heroica lucha por la libertad. Suprimir las referencias a los "Estados enemigos" significaría sumir el nazismo, el fascismo y el militarismo en el olvido y alentar a quienes dejan de tener en cuenta las lecciones de la historia. La existencia de los Artículos de la Carta que se refieren a "Estados enemigos" no ha impedido el desarrollo de las Naciones Unidas ni la admisión como miembros de los dos actuales Estados alemanes y el Japón, que no deben ser identificados con los citados "Estados enemigos". Análogamente, el Capítulo XII, sobre los territorios en fideicomiso, debe permanecer en la Carta como recordatorio para las generaciones futuras de la situación desigual de un determinado grupo de Estados y sus pueblos en el pasado y como prueba del hecho de que tales países y pueblos han obtenido su derecho inalienable a la independencia y la soberanía con el apoyo de las Naciones Unidas.

26. En la presente atmósfera de reducción de la tirantez se deben utilizar más cabalmente las todavía desaprovechadas posibilidades de la Carta. Esas posibilidades quedan demostradas por las numerosas decisiones de importancia histórica en el campo económico recién elaboradas en pleno acuerdo con sus disposiciones, principios y propósitos, sin que el derecho de veto en el Consejo de Seguridad impidiese su aprobación. A ese respecto, los países en desarrollo han tenido la comprensión y el apoyo plenos de la Unión Soviética y de todos los demás países socialistas, que seguirán aunando fuerzas con los países en desarrollo y no alineados a fin de promover conjuntamente la solución de los problemas internacionales y vencer los obstáculos que oponen las fuerzas de la agresión y la reacción.

27. La tarea fundamental de las Naciones Unidas en virtud de la Carta es el mantenimiento de la paz y la seguridad, y la promoción eficaz de la solución de los problemas internacionales principales en pro de la paz, la seguridad internacional y el desarrollo de una cooperación equitativa y amistosa entre los Estados deben ser siempre el punto central de las actividades de la Organización. Un buen ejemplo de aplicación creativa de las disposiciones de la

Carta, sin violación alguna de sus propósitos y principios, es la reciente Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa.

28. La delegación de la Unión Soviética apoya las críticas y propuestas constructivas para aumentar la eficacia de la labor de las Naciones Unidas, pero desea señalar ciertas tendencias peligrosas, que bajo la apariencia de medidas supuestamente destinadas a aumentar la eficacia de las actividades de las Naciones Unidas, entrañan la imposición de propuestas que no tienen nada que ver con los propósitos y principios de la Carta y que, en realidad, los perjudican. Propuestas como las de que todos los Estados sometan sus controversias a las Naciones Unidas para que las estudien o de que se cree una comisión permanente de la Asamblea que se encargue de la conciliación y la mediación, carecen de valor y no pueden ser justificadas en virtud de la Carta. Esas propuestas violan directamente el derecho soberano de todo Estado a determinar, de conformidad con la Carta, sus propios medios para el arreglo pacífico de las controversias.

29. No se logrará que las Naciones Unidas sean más eficientes destruyendo la estructura existente de la Organización y la Carta, sino utilizando cabalmente las posibilidades de la Carta en beneficio de la paz y logrando que todos los Estados cumplan las obligaciones que en virtud de ella les corresponden. Las observaciones presentadas por escrito por los gobiernos y las declaraciones hechas durante el debate indican que la mayoría de los Estados convienen en que la eficacia de las Naciones Unidas depende principalmente de la voluntad política de los Estados Miembros de lograr que se apliquen en forma consecuente los propósitos y principios de la Carta. En la actualidad y en el futuro previsible, la solución de todo problema internacional importante sólo será posible sobre la base de la coordinación de las posiciones de los Estados que tienen sistemas sociales diferentes. Las Naciones Unidas sólo pueden funcionar con éxito si se ajustan a las realidades políticas. Son utópicos los intentos que se hacen de modificar la estructura básica de la Organización con miras a conferir a la Asamblea General el derecho de adoptar decisiones obligatorias para los Estados.

30. En el período actual de distensión internacional puede comenzar una auténtica reconstrucción de las relaciones internacionales sobre la base de los principios de la Carta. Por consiguiente, el verdadero deber de todos los Estados es hacer irreversible el proceso de distensión y aplicar las disposiciones de la Carta, por medio de los instrumentos políticos y jurídicos adecuados, a situaciones concretas y a la solución de problemas funcionales que afecten a los intereses de la humanidad. Los intentos serios de fortalecer el papel de las Naciones Unidas requerirán que se preste la máxima atención a problemas clave aún no resueltos, como liberar a la humanidad de la aceleración de la carrera armamentista, fortalecer la paz y la seguridad internacionales, eliminar los conflictos armados y proscribir la guerra. Debe ser puesto en práctica el sistema de seguridad colectiva, firmemente asentado en la Carta. La Unión Soviética está dispuesta a cooperar de la manera más estrecha posible con otros Miembros a fin de utilizar más plenamente las grandes posibilidades propias de la Carta. Entre las medidas que pueden contribuir a fortalecer el papel de las Naciones Unidas y a aumentar su prestigio y su

autoridad están el desarme, en especial el desarme nuclear, y la convocación de una conferencia mundial de desarme; la no utilización de la fuerza en las relaciones internacionales y la prohibición para siempre del uso de armas nucleares; la aceptación obligatoria de la Definición de la agresión; la eliminación definitiva y completa del colonialismo, el racismo y todas las formas de discriminación racial, y el desarrollo más amplio de relaciones de igualdad entre los Estados, en materia económica, comercial, científica, técnica y cultural.

31. En respuesta a las calumniosas mentiras del representante de China, el representante de la Unión Soviética dice que su país nunca ha utilizado y nunca utilizará el principio de la unanimidad de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad con fines de injusticia o "hegemonía". Por el contrario, China, tan pronto como pasó a ser Miembro de las Naciones Unidas, utilizó indebidamente el derecho de veto para oponerse a la admisión de Bangladesh. La Unión Soviética, por su parte, siempre ha utilizado el derecho de veto exclusivamente en beneficio de los países socialistas en su lucha por ser admitidos como Miembros de las Naciones Unidas, en beneficio de los pueblos oprimidos y no autónomos con miras a liberarlos del yugo colonial, y contra los intentos de la mayoría capitalista de imponer su voluntad y sus decisiones arbitrarias. Se produjo un caso instructivo y triste en la historia de las Naciones Unidas cuando la Unión Soviética no ejerció su derecho de veto en defensa de los intereses de un Estado socialista y, como consecuencia, fuerzas imperialistas bajo la bandera de las Naciones Unidas agredieron a la República Popular Democrática de Corea, agresión cuyas desastrosas consecuencias todavía no se han superado. El principio de la unanimidad de los miembros del Consejo de Seguridad no es para la Unión Soviética un privilegio ni un medio de lograr hegemonía, sino una necesidad histórica, como medio vital de política internacional para defender los intereses del socialismo contra las amenazas y los ataques del capitalismo.

32. El representante de la Unión Soviética señala al representante de China que, a pesar de que habla de fortalecer el papel de las Naciones Unidas y su eficiencia, China es uno de los principales perturbadores de la actividad normal de las Naciones Unidas. Los representantes de China adoptan continuamente posturas negativas, no presentan una sola propuesta constructiva y parecen irritarse especialmente por las iniciativas pacíficas de la Unión Soviética. Para la abrumadora mayoría de los Estados Miembros, que favorecen la paz y la coexistencia, en especial los países socialistas y los países del tercer mundo, la posición de China en las Naciones Unidas no sólo es motivo de burla, sino también de indignación. La abstención de China en la votación que se realizó el 14 de noviembre en la Segunda Comisión sobre el proyecto de resolución A/C.2/L.1442/Rev.2, proyecto que fue aprobado por 100 votos contra ninguno, demuestra su falta de solidaridad con la causa de la paz y la coexistencia pacífica. China vocifera sobre la inevitabilidad de la guerra y con ello deshonor su condición de miembro permanente del Consejo de Seguridad y carga sobre sí una responsabilidad especial en relación con el mantenimiento de la paz y la seguridad.

33. Con demagogia evidente y deshonesto, China exhorta, en voz más alta que nadie, a la revisión de la Carta, pero no renuncia a su propio derecho de veto. La delegación de

China, en un esfuerzo por ocultar su indecorosa posición, ha recurrido como siempre a las calumnias antisoviéticas como cortina de humo.

34. El Sr. KASHAMA (Zaire) dice que, dada la abrumadora mayoría por la que se aprobó la resolución 3349 (XXIX) de la Asamblea General y el gran número de respuestas recibidas de Estados Miembros en cumplimiento de dicha resolución, es evidente que hay un gran interés por la cuestión de la revisión de la Carta. Sin embargo, su delegación no está satisfecha con el informe del Comité *ad hoc* y considera que ese Comité no ha cumplido plenamente su mandato, tal como figura en la resolución. El Comité debe proseguir su labor conforme a la resolución 3349 (XXIX) y a cualesquiera otras directrices que la Asamblea General apruebe durante el actual período de sesiones.

35. El orador señala que las Naciones Unidas han adoptado varias medidas importantes en relación con el mantenimiento de la paz durante los 30 años de su historia, incluso la aprobación de ciertas declaraciones significativas. El Zaire nunca olvidará los esfuerzos hechos para restablecer la paz en su territorio por las Naciones Unidas cuando sufría graves disturbios internos. Debido a esos logros notables, algunas delegaciones consideran que puede permitirse ahora a las Naciones Unidas seguir su propio curso y que pueden pasarse por alto los muchos cambios que han ocurrido en el mundo desde la aprobación de la Carta, incluso las transformaciones realizadas por las Naciones Unidas mismas. Sin embargo, no puede hacerse caso omiso de las realidades actuales y en una declaración ante la Asamblea General el 4 de octubre de 1973 (2140a. sesión plenaria), el Presidente del Zaire sugirió que se revisara la Carta para adaptarla a la situación mundial existente — teniendo particularmente en cuenta la representación del continente africano y el hecho de que países que anteriormente estaban sujetos a dominación se habían transformado en grandes Potencias — y para asegurar que todos los Miembros aplicaran las decisiones de las Naciones Unidas.

36. Los que se oponen a la revisión de la Carta sostienen que ello llevaría a una nueva guerra mundial. Los redactores de la Carta fueron idealistas en cuanto a evitar el horror de otra guerra, pero es dudoso que los Estados que se resisten al desarme y comercian con armas de destrucción masiva puedan realmente preservar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra. Sin embargo, ése no es el único propósito de la Carta. Los redactores de ese instrumento también previeron que la Carta promovería la elevación del nivel de vida, el pleno empleo y condiciones de progreso y desarrollo en las esferas económica y social, asegurando con ello relaciones pacíficas y amistosas entre los Estados, basadas en el respeto de los principios de la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos. Evidentemente su optimismo fue reemplazado por el egoísmo, ya que algunos Estados consideran ahora la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados y las resoluciones aprobadas por la Asamblea General en su séptimo período extraordinario de sesiones, como contrarias a sus deseos.

37. Aunque podría aducirse que esa situación demuestra que lo que debe cambiarse es la actitud de los Estados Miembros y no la Carta, a la delegación del Zaire le parece que con el refuerzo de ciertos mecanismos de la Carta

puede fortalecerse el papel de las Naciones Unidas. El Zaire apoya todas las propuestas concretas que se han hecho en ese sentido.

38. Los que se oponen a la revisión de la Carta también aducen que el principio de la unanimidad de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y su corolario, el veto, son una expresión de la igualdad en las relaciones internacionales de los dos sistemas sociales existentes: el socialismo y el capitalismo. La delegación del Zaire opina que el veto contradice el principio de la igualdad soberana de los Estados y se basa en relaciones anticuadas de dominación y opresión características de un mundo en el que algunos Estados adoptaban todas las decisiones.

39. Por tanto, la delegación del Zaire estima que la Carta no es sacrosanta y que algunas de sus disposiciones ya resultan anticuadas. Los Artículos 108 y 109 son una indicación suficiente de que los redactores de la Carta no pensaron que estaban produciendo un instrumento inmutable. Cuando ciertos Estados, a falta de argumentos reales, declaran que no se han cumplido los requisitos necesarios para la revisión de la Carta, sin duda lo hacen porque la revisión la propone una mayoría supuestamente "tiránica" en vez de la minoría "ilustrada". Como cada vez es más evidente que la mayoría permanecerá firme, el orador se pregunta si los que se oponen a la revisión de la Carta aceptarían una revisión basada en la supresión de los Artículos 108 y 109.

40. El Sr. KRISPIS (Grecia) señala que aunque la finalidad de la Carta, quizás el instrumento internacional más importante de toda la historia de la diplomacia, es evitar la guerra, en su texto se utiliza, en forma característica, la palabra "guerra" sólo una vez, en el preámbulo. Eso se debe a que la prohibición de la Carta es más amplia, y abarca la amenaza o el uso de la fuerza.

41. El texto de la Carta está bien equilibrado, es conciso, amplio, y flexible. También es general, e incluso vago, hasta el extremo que puede llamársela una ley fundamental. Como tal, ha funcionado efectivamente por 30 años y después de tanto tiempo es aconsejable considerar cuidadosamente si hay necesidad de revisarla. Evidentemente, no puede sostenerse que la Carta funciona perfectamente, y no sería perjudicial examinar, conforme a la resolución 3349 (XXIX) de la Asamblea General, en qué forma ha satisfecho las necesidades de un mundo en rápida evolución. Sin embargo, la tarea de revisar ese instrumento, sobre el cual se han basado los elementos fundamentales de la política mundial durante casi un tercio de siglo, debe emprenderse tanto con cautela como con coraje. Esa ha sido la actitud de Grecia como miembro del Comité *ad hoc*. La necesidad de modificación, para no hablar de revisión, tendría que ser sumamente apremiante para justificar enmiendas. En cambio, hay necesidad de complementar la Carta con convenciones especiales y declaraciones adecuadas de los órganos de las Naciones Unidas.

42. La delegación de Grecia se siente escéptica respecto de que haya una necesidad urgente de enmendar la Carta. Algunas de sus disposiciones podrían haberse redactado mejor, pero ello se aplica a cualquier texto jurídico. Las disposiciones de la Carta, particularmente las de carácter general, han demostrado ser suficientemente bien fundadas

para afrontar situaciones mundiales sin precedentes. La Carta también ha crecido y evolucionado en los 30 años de su historia, como lo demuestra la concesión a la Asamblea General, en los Tratados de Paz de París de 1947, de poderes que la letra de la Carta no admite con facilidad, y la interpretación del párrafo 3 del Artículo 27, en el sentido de que significa que la abstención o no participación de un miembro permanente del Consejo de Seguridad no constituye veto.

43. En resumen, las quejas sobre la letra y el espíritu de la Carta no parecen estar plenamente justificadas. Los problemas relativos a la aplicación de la Carta se han debido a la renuencia de algunos Estados a utilizar los órganos de las Naciones Unidas o cumplir las decisiones o resoluciones de esos órganos, especialmente el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Más aún, la Corte Internacional de Justicia no se ha utilizado como debiera haberse hecho para resolver las muchas controversias surgidas entre los Estados.

44. En su aspecto de procedimiento, la labor de revisar la Carta — y el orador subraya la palabra "revisar" — es muy compleja. Analizar la Carta artículo por artículo sería inútil, y sin embargo uno no puede hablar razonablemente de deficiencias de la Carta sin analizar críticamente muchas de sus disposiciones. En cambio, no puede evitarse una revaluación de la Carta. La cuestión que debe examinarse es si ha habido en la Carta algo que no funciona sea al principio o durante su existencia, es decir, si el mecanismo existente de la Carta, a diferencia de sus métodos, ha resultado inadecuado para atender las necesidades concretas de la vida internacional. Se necesita constancia y mucho tiempo para resolver esa cuestión y habrá que analizarse a fondo situaciones concretas del pasado. Si el mecanismo o los métodos han fallado, será necesario examinar en qué medida ello ha ocurrido, y por qué, y cómo hubieran tenido éxito mecanismos o métodos diferentes. Habrá que evaluar las funciones y los poderes de cada uno de los órganos principales de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta tanto el pasado como el futuro. Las sugerencias y propuestas para el establecimiento de órganos principales nuevos sólo debieran hacerse después de un análisis lo más detallado posible y después de comprobar que los órganos existentes han fracasado y son inadecuados. Por otra parte, podrían establecerse ahora órganos subsidiarios conforme al párrafo 2 del Artículo 7.

45. En la etapa actual del debate, la delegación de Grecia sigue sin haber adoptado una posición firme sobre la cuestión. Considera que debería prorrogarse el mandato del Comité *ad hoc*, tal como figura en la resolución 3349 (XXIX) de la Asamblea General.

TEMA 109 DEL PROGRAMA

Sucesión de Estados en materia de tratados: informe del Secretario General (continuación) (A/10198 y Add.1 a 5, A/C.6/L.1019)

46. El PRESIDENTE informa a la Comisión de que Cuba se ha sumado a los patrocinadores del proyecto de resolución A/C.6/L.1019.

47. El Sr. MANGAL (Afganistán) dice que desea proponer algunas enmiendas¹ al proyecto de resolución A/C.6/L.1019.

48. La primera enmienda está encaminada a evitar una mala interpretación, puesto que en el tercer párrafo del preámbulo se habla de los “comentarios y observaciones de los Estados Miembros transmitidos...”, mientras que en el párrafo 2 de la parte dispositiva se insta todavía a los Estados Miembros a que formulen comentarios y observaciones. El propósito de la segunda enmienda es reflejar el hecho de que la labor de la Comisión de Derecho Internacional sobre el proyecto de artículos todavía no ha terminado. El objeto de la tercera enmienda es añadir un nuevo inciso a) al párrafo 1, en el que se hace referencia específica al proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados. La finalidad de la cuarta

enmienda es evitar una contradicción entre el párrafo 1 y el párrafo 5, al aclarar que en el último no se prejuzga sobre las medidas que pueda adoptar la Asamblea General.

49. El orador lamenta no haber podido todavía celebrar consultas con los patrocinadores del proyecto de resolución, y espera poder hacerlo para encontrar una solución aceptable para todos.

50. El Sr. MAIGA (Malí) dice que está celebrando consultas con otras delegaciones en relación con ciertas partes del proyecto de resolución, y pregunta si la Comisión puede aplazar su decisión sobre ese documento.

51. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión atienda esa solicitud, para dar tiempo a celebrar consultas ulteriores.

Así queda acordado.

¹ Distribuidas ulteriormente como documento A/C.6/L.1022.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

1569a. sesión

Miércoles 19 de noviembre de 1975, a las 15.20 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1569

TEMAS 113 Y 29 DEL PROGRAMA

Informe del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas (continuación) (A/10033, A/10102, A/10108, A/10113 y Corr.1 y Add.1 a 3, A/C.6/437)

Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones y la promoción de las normas del derecho internacional en las relaciones entre los Estados: informes del Secretario General (continuación) (A/10218, A/10219, A/10255, A/10289, A/C.6/437)

1. El Sr. GARCIA ORTIZ (Ecuador) dice que no tenía intención de hacer uso de la palabra, porque la delegación ecuatoriana ya ha dado a conocer su posición sobre la cuestión de la revisión de la Carta en el Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas (véase A/10033, pág. 30), pero, en vista de las observaciones formuladas por algunos representantes, considera útil recordar un cierto número de puntos. Ante todo, no hace falta decir que ningún estatuto jurídico puede considerarse inmutable, ya que sus normas están destinadas a regir las relaciones humanas, las cuales evolucionan constantemente. Por otra parte, es necesario estudiar la posibilidad de revisar algunas disposiciones para mejorar el funcionamiento de las Naciones Unidas, tarea que es indispensable abordar sin prejuicio alguno y para la cual serán muy útiles los documentos ya publicados, en especial el informe del Comité *ad hoc* (A/10033). Además, el documento presentado por la delegación de Rumania (A/C.6/437) contiene ciertos datos que convendría tener en

cuenta. Así pues, el único procedimiento posible sería renovar el mandato del Comité *ad hoc*, y la delegación ecuatoriana está dispuesta a patrocinar todo proyecto de resolución en ese sentido y a apoyar cualquier otra propuesta realista.

2. El Sr. JACHEK (Checoslovaquia) quiere recordar, como ya lo ha hecho el Ministro de Relaciones Exteriores de su país en la 2371a. sesión plenaria de la Asamblea General, que si bien en los 30 años de existencia de las Naciones Unidas las relaciones entre los Estados han evolucionado en el sentido de la distensión, esas relaciones aún no han llegado a un estado capaz de garantizar una paz y una seguridad internacionales duraderas. Por lo tanto, hay que acrecentar la eficacia de la Organización en la lucha por la paz y la seguridad basándose en el respeto estricto de los objetivos y principios de la Carta, y debe condenarse todo lo que pueda debilitarla, especialmente las tentativas encaminadas a iniciar un proceso de revisión de la Carta, así como las propuestas formuladas a ese respecto, que pretenden socavar los cimientos mismos de la Organización.

3. Checoslovaquia, que fue una de las primeras víctimas del nazismo, es plenamente consciente de los enormes sacrificios hechos por los Estados de la coalición antihitleriana, en especial la Unión Soviética, que son quienes originaron la Carta. Es cierto que durante los 30 años transcurridos el mundo ha sufrido transformaciones radicales, pero esas transformaciones han servido para acercar más aún a la comunidad internacional a las finalidades y los objetivos de la Carta, cuya validez se reconoce en general actualmente. A quienes para preconizar una revisión de la Carta aducen el aumento considerable del número de

Miembros de la Organización, se les puede contestar que esa misma Carta ha desempeñado un papel importante en la lucha de las naciones contra el colonialismo y ha contribuido a su liberación. Esas naciones, que actualmente son mucho más numerosas que los Miembros fundadores de la Organización, han aceptado la Carta en su forma actual voluntariamente y sin reservas. No se puede pretender que en sus 30 años de existencia las Naciones Unidas no han cosechado más que éxitos. Sin embargo, una evaluación global del papel desempeñado por la Organización sería un testimonio a su favor, y también a favor de la Carta, cuya vitalidad y capacidad de adaptación ya no es necesario probar. La Carta ha demostrado ser un instrumento útil para conservar la paz y la seguridad en el mundo, así como para apoyar la lucha contra el colonialismo, el racismo y la opresión. También se ha llegado a resultados positivos en otras esferas, especialmente en la esfera económica y social. No se pueden achacar a la Carta las debilidades de la Organización, que en realidad hay que atribuir al hecho de que sus disposiciones no se cumplen.

4. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, la Carta es un tratado multilateral que puede ser revisado de conformidad con el procedimiento establecido en el Artículo 109. Pero también es el acta constitucional de la comunidad internacional. Codifica los principios de la coexistencia pacífica y de la cooperación entre todos los Estados, independientemente de que sean o no sean Miembros de la Organización. Todos los tratados que anuncian normas generales y los documentos constitutivos de los organismos especializados se derivan de la Carta. La Carta sirve de base para el desarrollo progresivo del derecho internacional y hay numerosos instrumentos internacionales de primera importancia que están fundados en los principios proclamados en ella. Así pues, toda propuesta de iniciar un proceso de revisión de las disposiciones fundamentales de la Carta atentará contra todo el edificio que reposa sobre ella y socavaría los cimientos mismos de la coexistencia pacífica y de la cooperación entre todos los Estados.

5. La reunión del Comité *ad hoc* ha demostrado que no se dan las condiciones que justifican una reforma de la Carta y que las propuestas que se han presentado a tal efecto adolecen de falta de unidad. Por otra parte, los Estados que se han pronunciado a favor de la reforma distan mucho de ser la mayoría. La resolución 3349 (XXIX) de la Asamblea General confirma los propósitos y principios de la Carta y no llega a ninguna conclusión en cuanto a la necesidad de revisar ese instrumento. Además, el Comité *ad hoc* estaba encargado de examinar todas las propuestas tendientes a lograr que las Naciones Unidas funcionaran con más eficacia sin que fuera necesario enmendar la Carta. Los resultados de los trabajos del Comité no son satisfactorios, lo que no es sorprendente dadas las divergencias de opiniones que se manifestaron con respecto a la orientación de esos trabajos. A juicio de la delegación checoslovaca, hay que examinar todas las propuestas que contribuyan a racionalizar las actividades de la Organización y acrecentar su eficacia, sin proceder por ello a la revisión de la Carta. La Carta ofrece numerosas posibilidades que no han sido aprovechadas por completo ni mucho menos.

6. El Sr. RAKOTOSON (Madagascar) recuerda que su delegación ha apoyado desde el principio las propuestas de

examinar la posibilidad de mejorar la Carta y reforzar el papel de las Naciones Unidas, y que desea repetir cuán interesada está en toda iniciativa que ayude a acrecentar la eficacia de la Organización. La posición del Gobierno malgache acerca de ese punto fue expuesta en 1972¹ y en 1975 (véase A/10255). Además, recuerda que su delegación figura entre los autores de la resolución 3349 (XXIX), por la que se dispuso la creación del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas. Su delegación ha examinado con cuidado el informe del Secretario General (A/10113 y Corr.1 y Add.1 a 3) sobre los trabajos de ese Comité, que ha dado lugar a fructíferos intercambios de opiniones. Sin embargo, habría sido preferible que el Comité hubiera abordado inmediatamente las tareas que se le encomendaron en el párrafo 1 de la resolución 3349 (XXIX), en lugar de extenderse largamente en consideraciones abstractas. En efecto, no le corresponde debatir la cuestión de saber si es oportuno modificar la Carta, sino cumplir el mandato que la Asamblea General le ha confiado. Es la Asamblea quien, a la vista de las propuestas concretas del Comité, juzgará si es oportuno adoptar medidas.

7. La delegación malgache recuerda que apoya especialmente las propuestas destinadas a: a) democratizar la comunidad internacional; en ese sentido habrá que volver a examinar la composición y el funcionamiento del Consejo de Seguridad; b) asegurar la aplicación efectiva de las decisiones de los órganos de las Naciones Unidas; se podrá crear una comisión permanente con este fin; c) asegurar el arreglo pacífico en el seno de las Naciones Unidas de las controversias sometidas a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad, lo que debería permitir la creación de una comisión permanente de buenos oficios y de mediación; d) reforzar la función de las Naciones Unidas en materia económica y de desarrollo; se deberá crear una comisión de desarrollo que reagrupe ciertos comités y diversos servicios de la Secretaría. En lo que concierne al reparto de esas tareas, sería útil que el Comité examinara la propuesta de la delegación mexicana que figura en el anexo II del informe del Comité, en la que se preconiza la formación de dos subcomités, uno de ellos para estudiar las enmiendas que haya que introducir en la Carta, y el otro las sugerencias para aumentar la eficacia de la Organización sin que sea necesario modificar la Carta. De todas formas, la distinción entre esas dos categorías de tareas podría suscitar controversias inútiles. Quizás fuera preferible efectuar un examen sistemático de todos los capítulos y artículos de la Carta y a la vez tratar de coordinar esas distintas actividades.

8. En caso de que haya que considerar intangibles los principios y objetivos enunciados en la Carta, se deben volver a examinar detenidamente las disposiciones relativas a la estructura y al funcionamiento de la Organización con vistas a conferir mayores responsabilidades a las Naciones Unidas. En efecto, las Naciones Unidas tienen que resolver problemas cada vez más variados y urgentes en un número creciente de esferas. La comunidad internacional tiene el derecho de reclamar una nueva carta inspirada en la actual y adaptada a las exigencias del mundo contemporáneo. La delegación malgache tiene conciencia de que la empresa no es fácil y que exige la voluntad política de los gobiernos. De todas formas, hay derecho a tener esperanzas, puesto que en las Naciones Unidas ha llegado a formarse una voluntad

¹ Véase A/8746.

democrática, surgida de la victoria de las ideas progresistas y revolucionarias, que se ha manifestado concretamente cuando se definió la agresión y nuevamente en el sexto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Esa voluntad debe permitir que se instaure una cooperación más duradera que sirva mejor a la causa de todos los pueblos del mundo. Cuando confió al Comité el mandato de reexaminar el estatuto de la Organización y los medios de acrecentar su eficacia, la comunidad internacional tenía por única meta la búsqueda de esa cooperación, en interés de la paz, el desarrollo y la justicia.

9. El Sr. RAMPHUL (Mauricio) señala una vez más el interés que su Gobierno tiene en las Naciones Unidas y su dedicación a los propósitos y principios definidos en el Capítulo I de la Carta. Es indudable que ninguna modificación de la Carta o de la estructura de las Naciones Unidas podrá substituir la voluntad de los Estados de cumplir de buena fe las obligaciones fundamentales que ese instrumento les impone. De todos modos, conviene no olvidar que la situación mundial ha cambiado radicalmente desde la época en que se redactó la Carta. Actualmente, los Estados que entonces fueron enemigos forman parte de la comunidad de las naciones. Por ejemplo, la República Democrática Alemana practica una política que no tiene nada que ver con la que practicaba la Alemania fascista. Esa situación nueva debería reflejarse debidamente en la Carta. En 1945 la mayor parte del planeta estaba sometida a la dominación colonial, y esa realidad se recogió en la Carta, pues ella reconoce el derecho de los Estados a tener colonias. Ahora bien, las antiguas colonias han logrado ya el rango de miembros iguales de la comunidad de las naciones y el colonialismo en todas sus formas está condenado. Una vez más se trata de una situación nueva que debería tenerse debidamente en cuenta en la Carta. Además, en un momento en que las naciones se esfuerzan en establecer un nuevo orden mundial más equitativo, es fundamental que la Carta y sus mecanismos no obstaculicen esos esfuerzos. Como en cierta medida la revolución técnica y científica ha reducido las dimensiones del mundo y acentuado la interdependencia de todas las naciones, la Carta, apartándose de la visión de la segunda guerra mundial, debe convertirse en un instrumento de cooperación en el que se establezcan los medios de resolver los problemas actuales y futuros. Es fundamental adaptar la Carta a las realidades nuevas.

10. A lo largo de la historia se han ido aboliendo muchos privilegios, no obstante la violenta oposición de quienes se beneficiaban de ellos. Los que se esfuerzan en mantener sus privilegios tienen conciencia de ello. Por ejemplo, la Sociedad de las Naciones tenía grandes Potencias cuya grandeza se medía por su potencia militar, pero en 1975 la grandeza de un país debe medirse con patrones que se acerquen más a las aspiraciones comunes de la comunidad internacional. Para oponerse a cualquier modificación de la Carta, un representante ha aducido como argumento que los 50 Miembros fundadores de las Naciones Unidas habían pagado la victoria sobre el fascismo. Sobre eso, desea recordar que las antiguas colonias también contribuyeron a la victoria de las fuerzas aliadas sobre el fascismo. Sin embargo, no se las invitó a participar en la redacción de la Carta. No hay ningún motivo para mantener la distinción entre los Miembros fundadores de la Organización y los demás.

11. En realidad, la Carta ya ha sido modificada, como lo demuestra, por ejemplo, el aumento del número de miembros del Consejo de Seguridad. En ese sentido, no comprende la posición del representante que, oponiéndose a toda modificación de la Carta, ha esgrimido como argumento el hecho de que el aumento del número de miembros del Consejo de Seguridad y del Consejo Económico y Social había servido para tener en cuenta el aumento del número de Miembros de la Organización, tanto más cuanto que el país representado por esa persona no había aprobado tal medida.

12. Es fundamental modernizar la Carta, y no hay ningún motivo para temer que la generación actual sea menos racional que la de 1945. Toda referencia a la posibilidad de reconocer *de jure* o *de facto* el derecho de un Estado a dominar a otro debe desaparecer, pues la Carta debe sancionar la igualdad de derechos entre los Estados; los derechos y las obligaciones de los Estados deben formularse teniendo en cuenta las exigencias del nuevo orden económico y político; la Carta debe prever los problemas del mundo en su contexto actual, y éste es la interdependencia entre la seguridad internacional y el desarrollo económico y social; por último, hay que hacer hincapié en la cooperación entre todos los Estados, y la Carta debe tener en cuenta la capacidad de las naciones pequeñas y medianas para contribuir a solucionar los problemas internacionales.

13. En consecuencia, desea formular algunas sugerencias. Se debería aumentar el número de miembros del Consejo de Seguridad para que fueran aún más los países no alineados y los países en desarrollo que formasen parte de él. El principio de la unanimidad en el Consejo de Seguridad debería significar la unanimidad no sólo de los cinco miembros permanentes actuales, sino también de varios miembros no permanentes, designados para ese fin por la Asamblea General entre los países que representan a los distintos grupos regionales. La Organización debería esforzarse en adoptar las decisiones por consenso; para ello, todos los Estados deberían entablar negociaciones a fondo, en un espíritu de respeto mutuo y de transacción, y la Asamblea General sólo debería recurrir al voto tras haber agotado todas las demás posibilidades. Las decisiones adoptadas deberían ser obligatorias. Se debería crear un organismo suficientemente importante y representativo para el arreglo pacífico de las controversias internacionales, que además debería estar encargado de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. La Asamblea General debería estar facultada para examinar todas las cuestiones con respecto a las cuales el Consejo de Seguridad no consigue tomar medidas y debería poder tomar decisiones sobre aquéllas. Teniendo en cuenta la actual carrera de armamentos, es preciso que haya un órgano de las Naciones Unidas encargado del desarme; ese órgano podría ser el antiguo Comité de Desarme o un nuevo organismo parecido. Convendría crear medios de comunicación con la opinión pública mundial para asegurar una buena información recíproca entre los pueblos y la Organización. La Secretaría debería servir a la Organización con toda lealtad y fidelidad; habría que reestructurarla para que todas las regiones geográficas estuvieran equitativamente representadas en ella a todos los niveles, lo que evidentemente no sucede en la actualidad.

14. La delegación de Mauricio opina que se debería aumentar el número de miembros del Comité *ad hoc*, el

cual debería proseguir sus trabajos y examinar a la vez las opiniones y las posiciones que contribuyan a reforzar la función de las Naciones Unidas, y las que se refieran a modificaciones de la Carta y las que no supongan tales modificaciones.

15. El Sr. BA-HADOUD (Qatar) dice que su delegación da mucha importancia al fortalecimiento de la función de las Naciones Unidas, que es la única organización que puede reglamentar la cooperación entre Estados y hacer frente a los problemas permanentes de la comunidad internacional. Como se desprende del Artículo 1 de la Carta, los propósitos principales de las Naciones Unidas son mantener la paz y la seguridad internacionales y fomentar entre los Estados relaciones de amistad. Las Naciones Unidas tienen una importante función que desempeñar en el plano mundial, en esferas tales como la descolonización y la defensa de los derechos humanos. Deberían adoptar medidas eficaces para poner fin a la carrera de armamentos, a la colonización, a la política de discriminación que se practica en Sudáfrica, y a los actos de que es culpable Israel con el pueblo árabe de Palestina. Al no respetar las decisiones de las Naciones Unidas, Sudáfrica e Israel se exponen a medidas coercitivas internacionales, aplicadas de conformidad con la Carta. Ya es hora de que las Naciones Unidas impongan sanciones a los países que no respetan ni la Carta ni las decisiones de la Organización. A ese respecto, convendría elaborar un sistema de vigilancia de la aplicación de las resoluciones para fortalecer la función de las Naciones Unidas y para instaurar la cooperación y la buena voluntad en las relaciones internacionales.

16. El Sr. HELLMERS (Suecia) recuerda que en los 30 años de existencia de las Naciones Unidas se han hecho críticas a la Carta y que periódicamente los partidarios de su revisión la han reclamado. Hasta el momento nunca se ha revisado la Carta de conformidad con el Artículo 109, pero sí han introducido reformas en ella con arreglo al Artículo 108; la necesidad de esas reformas ha sido reconocida por todos los Estados Miembros. En las observaciones que dirigió al Secretario General en 1972 acerca de la conveniencia de revisar la Carta, el Gobierno de Suecia declaró² que no estaba convencido de que una revisión contribuiría a fortalecer la función de las Naciones Unidas, porque no parecía que tal medida pudiera encontrar amplio apoyo entre los Estados Miembros. Asimismo señaló que, en su forma actual, la Carta sancionaba ciertos principios que permitirían alcanzar los propósitos de las Naciones Unidas si se observaran estrictamente. A juicio del Gobierno de Suecia, el buen funcionamiento de las Naciones Unidas depende esencialmente de la forma en que los Estados Miembros se propongan utilizar la Organización y de la medida en que estén dispuestos a respetar sus principios. Además, sin rebasar los límites de la Carta, es perfectamente posible hacer modificaciones e introducir reformas. Sin embargo, el Gobierno de Suecia no se opone a que se introduzcan reformas en la Carta si ellas contribuyen a mejorar el funcionamiento de la Organización.

17. Mientras algunos Estados son partidarios de una revisión completa de la Carta, otros están a favor de algunas modificaciones que, aunque son parciales, podrían no obstante transformar radicalmente el equilibrio y la distri-

bución de los poderes en el seno de la Organización. Esos últimos Estados han formulado sobre todo propuestas relativas a la composición del Consejo de Seguridad, a sus funciones y al derecho de sus miembros permanentes al veto. Por su parte, el representante de Suecia estima que por el momento no se puede pensar en reformas de esa índole, porque no cuentan con un apoyo bastante extendido.

18. Cuando se redactó la Carta, no se podía prever con exactitud los rápidos cambios que se habrían de producir en ciertos terrenos. Se puede opinar que las disposiciones relativas al desarrollo económico y social, al Consejo de Administración Fiduciaria y a los derechos humanos no coinciden enteramente con la situación actual, pero también cabe afirmar que, a pesar de ciertas imperfecciones, se ha comprobado que la Carta ha resultado estar tan bien concebida que ha permitido hacer frente a los cambios acaecidos en numerosos sectores, sea mediante la interpretación de sus Artículos, sea adaptando oportunamente su aplicación práctica o incluso introduciendo modificaciones de procedimiento. Además, ciertas cuestiones que no se han previsto en la Carta ocupan un lugar importante en la labor de las Naciones Unidas, por ejemplo, lo concerniente a las operaciones de mantenimiento de la paz, al medio ambiente, al espacio ultraterrestre y al mar. No sería fácil modificar la Carta para incorporar en ella disposiciones relacionadas con esos temas.

19. En ciertos círculos se han hecho también críticas al mantenimiento de ciertas disposiciones de la Carta que no se han aplicado nunca, como el Artículo 45 y los siguientes relativos al Comité de Estado Mayor y a las fuerzas armadas puestas a su disposición. A juicio de muchos Estados, hay otras disposiciones de la Carta, especialmente los Artículos 53, 106 y 107, referentes a la situación que existía al acabar la segunda guerra mundial, que no tienen ya utilidad práctica alguna y deberían suprimirse.

20. El Gobierno de Suecia estima que no conviene proceder ahora a revisar la Carta en los puntos que no cuentan con el acuerdo general. Ahora bien, parece evidente que ninguna de las modificaciones estructurales propuestas merece tal acuerdo. Sea como fuere, en el anterior período de sesiones la Asamblea General decidió crear un Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas, encargado de examinar las propuestas presentadas con el fin de acrecentar la eficacia de las Naciones Unidas, supusieran o no esas propuestas una modificación de la Carta. Aunque en el Comité *ad hoc* no se haya podido lograr la unanimidad sobre ningún punto concreto, la delegación de Suecia estima que el Comité debería proseguir sus esfuerzos para determinar las cuestiones de interés común en lo que atañe a ciertos Artículos de la Carta o a la eficacia del funcionamiento de las Naciones Unidas. Por el momento, el Comité debería dejar a un lado todos los puntos sobre los cuales hay criterios dispares.

21. En lo que respecta al fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas, el representante de Suecia hace hincapié en las sugerencias presentadas por la delegación de Rumania en el documento A/C.6/437; de ese documento se deduce que la revisión o la modificación de la Carta, aunque es uno de los medios de fortalecer el papel de las Naciones Unidas, no es el único ni siquiera el principal. Es obvio que existe

² *Ibid.*

un vínculo entre la cuestión de la revisión de la Carta y la del fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas; los que proponen que se revise la Carta se inspiran en un sincero deseo de fortalecer el papel de la Organización. Como ya lo indicó al referirse a la revisión de la Carta, los Estados Miembros de las Naciones Unidas deberían empezar por fortalecer el papel y acrecentar la eficacia de la propia Organización. Es posible recurrir a diversos medios, según que se asigne mayor importancia a una función o a un órgano particular de las Naciones Unidas. Quizás las deliberaciones del Comité *ad hoc* demuestren que conviene modificar ciertos Artículos de la Carta. Ahora bien, aun incluso para tales modificaciones, es esencial que exista un amplio acuerdo entre los Miembros de la Organización. Al parecer, el Comité *ad hoc* está efectivamente en condiciones de averiguar cuáles son los puntos de vista comunes y, eventualmente, de favorecer su formación; por consiguiente, la delegación de Suecia sería partidaria de que se refundiera el examen de ambas cuestiones, lo que naturalmente exigiría que se modificara el nombre del Comité *ad hoc*.

22. El Sr. PEDAUYE (España) recuerda que la delegación de su país no sólo ha votado siempre a favor de las resoluciones relativas a la necesidad de revisar la Carta, sino que también figuró entre los autores de las dos últimas resoluciones: la resolución 2968 (XXVII) y la resolución 3349 (XXIX) de la Asamblea General. En su resolución 992 (X), la Asamblea General ya estimó conveniente revisar la Carta aprovechando la experiencia obtenida durante su vigencia, pero desde entonces se han producido cambios todavía más profundos en las relaciones internacionales, no sólo por la adhesión de numerosos países a la independencia, sino porque la coexistencia pacífica ha sustituido a la guerra fría.

23. Aunque la Carta se haya elaborado en un momento en que la estructura de la sociedad internacional era muy distinta de la actual, ello no ha impedido que los órganos de las Naciones Unidas, utilizando muchas veces la técnica de la interpretación progresiva, hayan logrado importantes resultados no previstos inicialmente. A ese respecto, la revisión de la Carta podría dar como primer fruto la consolidación de los resultados ya obtenidos. Pero no debe tenerse en cuenta exclusivamente lo que la Carta ha permitido hacer, sino que además hay que tener en cuenta todo lo que podría lograrse con un instrumento renovado, no sólo en el ámbito vital del mantenimiento de la paz y de la seguridad, sino también en esferas como el desarrollo, la cooperación económica internacional y el arreglo pacífico de las controversias.

24. La Carta es el más importante de todos los tratados multilaterales y, al mismo tiempo, es el instrumento constitutivo de la sociedad internacional, que contiene toda una serie de cláusulas que crean unos mecanismos institucionales y unos órganos de determinado perfil. Por tanto, para que la Organización cumpla su papel con efectividad, no basta con señalar que los Estados Miembros deben cumplir las obligaciones que les incumben. También es necesario modificar aquellas estructuras que, según la opinión general de los Estados Miembros, sean inadecuadas a la realidad presente.

25. La delegación de España se siente muy satisfecha de la labor realizada por el Comité *ad hoc*, del que, por otra

parte, es miembro. En el curso del debate general, una decena de delegaciones que hasta entonces no se habían pronunciado sobre el fondo del tema, se han declarado a favor de la necesidad de revisar la Carta y han hecho propuestas concretas al efecto. Pero la importante labor realizada por el Comité *ad hoc* es todavía más destacable si se tienen en cuenta las circunstancias poco favorables en que se ha visto obligado a llevar a cabo sus trabajos. Por una parte, las reuniones del Comité *ad hoc* fueron fijadas en fechas poco adecuadas y, por la otra, la Secretaría se contentó con presentar al Comité un documento en el que se limitaba a reproducir numerosos documentos ya publicados con anterioridad y cuya publicación, dado su volumen, ha debido tener cuantiosas consecuencias financieras, sin llegar a responder, pese a todo, a las disposiciones de la resolución 3349 (XXIX) de la Asamblea General. El Comité *ad hoc* tampoco pudo contar con actas que reflejaran sus debates y se vio obligado a superar, además, las técnicas obstruccionistas practicadas por ciertas delegaciones. Ahora bien, a pesar de esos obstáculos, el Comité *ad hoc* ha cumplido con su mandato, lo que no hubiera sido posible si el tema no interesara tan vivamente a la inmensa mayoría de los Miembros de las Naciones Unidas. La delegación de España expresa la esperanza de que en adelante reine un clima de colaboración, y el orador termina declarando que, de todos modos, es evidente la necesidad de prorrogar el mandato del Comité *ad hoc*, que ha trabajado con miras a realizar los propósitos y principios de la Carta de San Francisco.

26. El Sr. FIFOOT (Reino Unido) recuerda que en su presentación del informe del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas en la 1561a. sesión, el Relator puso de manifiesto la existencia de divergencias de opinión fundamentales acerca de la necesidad de revisar la Carta. En efecto, no es posible desconocer el hecho de que, fuera de las delegaciones que aconsejan revisar la Carta, hay muchas que se oponen firmemente a esa medida y bastantes otras que abriga dudas al respecto. Además, muchas delegaciones que votaron a favor de la creación del Comité *ad hoc* han expuesto también sus dudas, sólo han manifestado interés por cuestiones que no suponen modificaciones de la Carta y han exhortado a que se actúe con prudencia. En tales circunstancias, no cabe pretender que los que se oponen a la revisión de la Carta practican una política de obstrucción. Tanto el debate que tuvo lugar el anterior período de sesiones en la Sexta Comisión como el mandato del Comité *ad hoc* tenían como único propósito el de examinar la posibilidad de revisar la Carta. Ahora bien, las diferencias de criterio al respecto no se han allanado en la Sexta Comisión ni tampoco en el Comité *ad hoc*, y por ello no es inoportuno presentar en el actual período de sesiones argumentos en contra de la revisión de la Carta.

27. La delegación del Reino Unido estima que esa revisión es inútil. Muchos oradores, y entre ellos ciertos partidarios de la creación del Comité *ad hoc*, han señalado la sorprendente capacidad de adaptación de la Carta que se ha manifestado en los últimos 30 años. La delegación del Reino Unido no sólo considera inútil revisar la Carta, sino que además teme que tal medida sea una fuente de enfrentamientos, rencores y desengaños. En una época en que abundan tanto los motivos de preocupación en el mundo, no conviene que las propias Naciones Unidas susciten nuevas disensiones. Los acontecimientos ocurridos

desde el vigésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General no han hecho más que confirmar las vacilaciones de la delegación del Reino Unido. Antes de la reunión del Comité *ad hoc*, los partidarios de la revisión de la Carta habían proclamado que no se discutían los propósitos y principios de la Carta. Pero ya se ha propuesto, en el Comité *ad hoc*, una modificación del Artículo 1 de la Carta, propuesta que se acaba de repetir en la sesión anterior de la Comisión. Ocurre así lo que temía la delegación del Reino Unido: se propone que se introduzcan en la Carta modificaciones que no atañen solamente a la estructura de la Organización, sino que tienden a institucionalizar, en la Carta, cuestiones esencialmente políticas. La Carta regula esencialmente las cuestiones de estructura; la estabilidad de las estructuras es un fin en sí. La política no depende de la estructura de la Organización, sino que depende de sus actividades. Por consiguiente, sería peligroso recoger los problemas políticos en la Carta.

28. A juicio de la delegación del Reino Unido, es preciso sacar las conclusiones obligadas en vista de la ineficacia del Comité *ad hoc*, ineficacia que se debe al hecho de que se creó en un ambiente de discordia y no con miras a conciliar intereses dispares.

29. Parece poco probable que una revisión de la Carta dé resultados fructuosos. Tal vez algunas delegaciones deseen discutir ciertas cuestiones, y especialmente la de la revisión de la Carta, mientras que otras deseen examinar los medios de poner a las Naciones Unidas en condiciones de cumplir mejor su función, sin recurrir por ello a procedimientos que podrían crear enfrentamientos y producir desengaños. Solamente tratando de conciliar esos puntos de vista dispares se podrá evitar que se repita el estéril debate del Comité *ad hoc*.

30. En caso de que el Comité *ad hoc* tuviera que proseguir sus actividades, quizás convendría que examinara también la cuestión del fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas. Las observaciones del Gobierno del Reino Unido sobre ese tema fueron transmitidas al Secretario General el 29 de abril de 1974³.

31. En cuanto al arreglo pacífico de las controversias internacionales, cuyo historial se describe en el documento A/10289, conviene que se le asigne un lugar central en las preocupaciones de la Organización. Sin dejarse desanimar por los fracasos, es preciso entablar deliberaciones en un ambiente de mutua confianza y de cooperación, en ocasión del examen de esos dos temas del programa.

32. La Sra. HO Li-liang (China), ejerciendo su derecho a contestar, manifiesta que la declaración hecha por el representante de la URSS en la sesión anterior descubre en él a un hegemónista ciento por ciento. En efecto, desde el momento en que la delegación soviética ha oído la expresión "revisión de la Carta", ha lanzado injurias contra China y los países pequeños y medianos que piden la observancia del principio de la igualdad entre todos los países. La delegación china apoya esa justa petición, que refleja las aspiraciones de la mayoría de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, pero la delegación soviética hace todo lo posible por poner trabas al examen

de la Carta. La posición de la delegación soviética sobre la revisión de la Carta difiere de la de muchos países del tercer mundo. ¿Quién tiene razón y quién no la tiene? ¿Quién favorece el progreso de las Naciones Unidas y quién hace lo posible por cambiar la marcha de la historia? Es fácil responder a esas preguntas. El representante de la URSS ha lanzado injurias contra los países que defienden la justicia. Examinar la cuestión de la revisión de la Carta equivaldría, para la delegación soviética, a sacudir todo el edificio, pero en realidad esa delegación califica de crimen encaminado a socavar las Naciones Unidas y la Carta toda tentativa que pueda comprometer sus privilegios de superpotencia. A juicio de la delegación china, la piedra angular sobre la que descansan las Naciones Unidas es en realidad el principio de la igualdad de derechos de todos los países. Las Naciones Unidas no son un feudo donde las superpotencias pueden practicar una política de fuerza, y todos los Estados del mundo deben regir los asuntos mundiales. La delegación soviética ha afirmado también que la revisión de la Carta pondría fin a la "coexistencia pacífica de los dos sistemas y perjudicaría el equilibrio de fuerzas". Es evidente que, con la aparición del socialimperialismo, dejó de existir el campo socialista. La Unión Soviética y los Estados Unidos pertenecen al primer mundo, que se yergue contra el tercer mundo, compuesto de los países en desarrollo que han venido sufriendo la intimidación, el control y la intervención de las dos superpotencias. En efecto, esas dos superpotencias se esfuerzan en imponer su hegemonía en el mundo, y la URSS desprecia a los países pequeños mientras se jacta de proteger sus intereses.

33. En el momento mismo en que la delegación soviética no hace más que entonar alabanzas a la distensión y el desarme, la Unión Soviética pone en práctica una política de agresión y de expansión del socialimperialismo, y cada vez que surgen tensiones en alguna región del mundo, aparecen los tentáculos de las dos superpotencias que rivalizan entre ellas, en forma abierta o embozada. En realidad, la distensión sólo es un simulacro. Según la delegación soviética, señalar el carácter inevitable de la guerra es hacer propaganda, pero eso no es más que una calumnia siniestra destinada a distraer la atención de los miembros de la Comisión, y esos esfuerzos son un derroche de energía. Por el momento, las dos superpotencias prosiguen su carrera de armamentos y un día su rivalidad las llevará a la guerra. Así, en el curso de los 10 últimos años la Unión Soviética ha consumido un centenar de miles de millones de dólares para su defensa, y sus fuerzas armadas exceden a sus necesidades.

34. Por su parte, el pueblo chino necesita un clima internacional más favorable para entregarse a la construcción del país, pero debe reforzar su vigilancia y tiene la obligación de manifestar su conciencia de los peligros denunciando las falsas declaraciones de distensión y luchando contra la hegemonía de las superpotencias.

35. La delegación soviética ha declarado además que la delegación china es antisoviética. Ahora bien, todo el mundo sabe que el pueblo chino es amigo del pueblo soviético, y que la camarilla dirigente soviética ha traicionado desde hace mucho tiempo al leninismo y al socialismo. La delegación china continuará alzando su voz contra la hegemonía de la Unión Soviética porque apoya las justas demandas y las propuestas razonables de los países pequeños.

³ Véase A/9695.

36. Negar que la delegación soviética ha abusado de su derecho de veto en el Consejo de Seguridad es un argumento vano, porque ¿acaso esa delegación no ha impedido, por ejemplo, que en agosto de 1968 se aprobara un proyecto de resolución en virtud del cual la mayoría de los miembros del Consejo condenaban a la URSS por haber enviado sus fuerzas armadas al territorio de uno de sus aliados, como lo prueban los documentos oficiales del Consejo de Seguridad?

37. La delegación china actúa con sinceridad y seriedad respecto de la cuestión del examen y revisión de la Carta. La oradora declara que procede examinar cuidadosamente las sugerencias relativas a la ampliación de las facultades de la Asamblea General, la limitación de los poderes del Consejo de Seguridad, la modificación de su composición y la limitación o abolición del derecho de veto, pero la delegación soviética no se atreve a hacer frente a la realidad ni a las justas demandas de la mayoría de los Estados Miembros.

38. El Sr. KOLESNIK (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que las mentiras y calumnias lanzadas contra el primer país socialista del mundo eran en otros tiempos expresión de la impotencia de la burguesía y de su deseo de volver a tomar el poder quitándoselo a los trabajadores. En ese caso, esas calumnias no son nuevas y sirven de armas a la camarilla de Pekín, que con hipocresía trata de colocarse entre los países del tercer mundo, lo que

es cómico y repulsivo al mismo tiempo. Para saber de qué lado se encuentra la verdad, hay que remitirse a Cervantes, uno de cuyos personajes dice: "Ladran, Sancho, señal de que cabalgamos."

39. La Sra. HO Li-liang (China) dice que el representante de la URSS ha tenido que recurrir a calumnias que demuestran que la delegación soviética es consciente de su culpabilidad y que teme la verdad. El examen crítico de la Carta responde a las aspiraciones de los pueblos, y la creación del Comité *ad hoc* es un primer paso al respecto. Cualquiera sea la forma en que la delegación soviética trate de oponerse a las justas peticiones de un número grande de países, no tendrá éxito, y la hegemonía de las grandes Potencias, que va a contracorriente de la historia, está condenada al fracaso.

TEMA 109 DEL PROGRAMA

Sucesión de Estados en materia de tratados: informe del Secretario General (*continuación*) (A/10198 y Add.1 a 5, A/C.6/L.1019, A/C.6/L.1022)

40. El PRESIDENTE informa a la Comisión de que Liberia se ha sumado a los patrocinadores del proyecto de resolución A/C.6/L.1019.

Se levanta la sesión a las 17.15 horas.

1570a. sesión

Jueves 20 de noviembre de 1975, a las 10.55 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1570

Homenaje a la memoria del Generalísimo Francisco Franco, Jefe del Estado Español

1. El PRESIDENTE expresa su pesar por la muerte del Generalísimo Francisco Franco, Jefe del Estado Español, que falleció la noche anterior después de una larga enfermedad. En nombre de la Sexta Comisión y en el suyo propio, pide a la delegación de España que transmita el más profundo pesar y las condolencias de la Comisión a los miembros más cercanos de la familia del Generalísimo Franco y al Gobierno y al pueblo de España.

A propuesta del Presidente, los miembros de la Comisión guardan un minuto de silencio en homenaje a la memoria del Generalísimo Franco, Jefe del Estado Español.

2. El Sr. FUENTES IBAÑEZ (Bolivia), hablando en representación del Grupo Latinoamericano por delegación de su Presidente, expresa su profundo pesar en la triste ocasión de la muerte del Generalísimo Franco, que será recordado en la historia de los últimos 50 años como uno de los grandes dirigentes de la política internacional. El Sr. Fuentes Ibañez espera que el representante de España transmita el más profundo pesar y las condolencias de su delegación al pueblo y al Gobierno de España.

3. El Sr. PEDAUYE (España) agradece al Presidente de la Comisión y al Presidente del Grupo Latinoamericano sus expresiones de condolencia por la muerte del Generalísimo Franco.

TEMAS 113 Y 29 DEL PROGRAMA

Informe del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas (*continuación*) (A/10033, A/10102, A/10108, A/10113 y Corr.1 y Add.1 a 3, A/C.6/437)

Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones y la promoción de las normas del derecho internacional en las relaciones entre los Estados: informes del Secretario General (*continuación*) (A/10218, A/10219, A/10255, A/10289, A/C.6/437)

4. El Sr. MANYANG D'AWOL (Sudán) dice que, puesto que la Carta recoge los ideales y las aspiraciones más altas de la comunidad internacional, cualquier intento de revisar ese instrumento debe hacerse con miras a evitar todo debilitamiento de sus principios y propósitos fundamentales, en los

cuales su delegación cree firmemente. Pero, las instituciones, como los hombres, crecen y se hacen anticuadas, así que es imperativo efectuar cambios para que haya un nuevo orden internacional basado en la justicia. Lo que debe atacarse no es tanto el poder mesurado de algunos Estados, lo que es intrínseco a la Carta, como el ejercicio abusivo de ese poder.

5. El Sudán no está satisfecho con los abusos deplorables que cometen algunos Estados cuando practican el veto. Es intolerable que se utilice el veto para apoyar la represión y la discriminación racial, como se hizo el año anterior cuando algunas Potencias lo utilizaron en favor de Sudáfrica. Aunque no desean eliminar el veto, que es un hecho histórico, la mayoría de los Miembros actuales de las Naciones Unidas habrían tenido algo distinto que decir si hubieran participado en la Conferencia de San Francisco en 1945. No se escuchó entonces a otros países porque estaban bajo la dominación colonial, pero eso no quiere decir que ahora deba seguirse sin escuchar sus opiniones. Para limitar y equilibrar el uso del veto en el Consejo de Seguridad, debería darse más poder a las resoluciones de la Asamblea General, que los Estados Miembros deberían aplicar efectivamente. Algunas disposiciones de la Carta han llegado a perder actualidad: por ejemplo, deberían reestructurarse los artículos en los que se trata del Consejo de Administración Fiduciaria y debería eliminarse la referencia a los "Estados enemigos" en el Artículo 53. Además, habría que dar más influencia a la Corte Internacional de Justicia, y los Estados deberían acudir a ella con más frecuencia para dirimir sus controversias. Los Estados podrían tener mayor confianza en la Corte si ésta tuviera más poder o si se reformaran sus procedimientos, que son muy lentos. El mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales es de la máxima importancia, y el concepto de paz debe ampliarse para poder dar soluciones universales conformes con las exigencias de la comunidad internacional. También debería tenerse en cuenta, en la nueva estructura de la Carta, la reestructuración económica que hace falta para satisfacer las necesidades económicas del mundo.

6. La delegación del Sudán cree que el Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas tiene una función importante que cumplir, y apoyaría por lo tanto la prórroga de su mandato.

7. El Sr. HOLLAI (Hungría) dice que su delegación ha estudiado cuidadosamente el informe del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas (A/10033), así como las observaciones que el Secretario General ha recibido de los gobiernos en cumplimiento de la resolución 3349 (XXIX) de la Asamblea General. Las observaciones del Gobierno húngaro figuran en el documento A/10113/Add.1, en el que se actualiza su posición anterior sobre el tema presentada en el vigésimo séptimo período de sesiones¹.

8. El informe del Comité *ad hoc* y el debate en la Sexta Comisión durante el actual período de sesiones han revelado claramente que existe una divergencia fundamental de opiniones sobre la necesidad de llevar a cabo una revisión de la Carta. Eso constituye el argumento más importante en contra de una revisión de la Carta, y levanta un obstáculo

insuperable a su realización. La delegación de Hungría ha estudiado atentamente todos los argumentos aducidos por diversos Estados Miembros en favor de la revisión de la Carta, y sigue dispuesta a escuchar cualquier argumento que esté inspirado en un deseo de fortalecer las funciones de las Naciones Unidas en el cumplimiento de los elevados propósitos sancionados en la Carta. Sin embargo, al mismo tiempo espera sinceramente que se escuchen sus propios argumentos.

9. La Carta no es perfecta, por ser obra del hombre y por reflejar las circunstancias históricas en que se aprobó. Las contradicciones de las relaciones internacionales son el producto de condiciones objetivas que determinan el curso de la situación internacional o, a veces, el producto de decisiones adoptadas subjetivamente por los Estados interesados. Hay varias contradicciones en la estructura de las relaciones interestatales e imperfecciones inevitables en ciertos sistemas sociales o económicos y en las políticas internas de varios países. No puede esperarse eliminar los males de la vida internacional o incluso limitar considerablemente sus efectos incorporando nuevas disposiciones en la Carta o eliminando algunas de las existentes. Durante siglos y siglos se han formulado propuestas para la instauración de una paz duradera en el mundo, pero no han sido adoptadas por faltar el consentimiento de los Estados interesados. En vez de idear nuevas disposiciones para la Carta, los Estados debieran hacer todo lo que puedan, utilizando si fuera necesario métodos radicales y heterodoxos, para alcanzar los designios y propósitos que ya figuran en la Carta.

10. La mayoría de sus Miembros reconocen la capacidad de las Naciones Unidas para adaptarse a los cambios de condiciones y de necesidades. Esa adaptación ha sido en gran medida el resultado del curso que ha seguido la práctica y no de la revisión formal de la Carta. Su delegación reconoce que en el curso que ha seguido la práctica y en la interpretación constante de las disposiciones de la Carta por diversos órganos, ha habido varios casos en los cuales la solución no ha correspondido a la letra y al espíritu de la Carta. Pero la culpa no hay que achacarla a la Carta, sino a los Miembros de la Organización que tienen la responsabilidad de tomar una determinada decisión. Su delegación está convencida de que, a pesar de los cambios que se han producido en el mundo, la Carta permite incuestionablemente a las Naciones Unidas cumplir con sus nobles tareas. Además, la Carta es lo suficientemente flexible como para permitir que las actividades de las Naciones Unidas se desarrollen progresivamente. Ello ha quedado demostrado por la rápida expansión de las actividades de las Naciones Unidas en la esfera económica y en la de la descolonización. No puede negarse que la adopción de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales ha contribuido considerablemente a eliminar la dominación colonial.

11. La caída en desuso de ciertas disposiciones anticuadas de la Carta no ha creado ninguna dificultad particular. Como ha señalado con acierto el representante del Reino Unido en el Comité *ad hoc*, el desuso tiene sus propios efectos constitucionales (*ibid.*, pág. 86). Todo intento de eliminar de la Carta las disposiciones que han caído en desuso encierra el peligro de que puede originar una reacción en cadena de otras reformas de fondo.

¹ Véase A/8746/Add.1.

12. La delegación de Hungría ha presenciado con satisfacción, durante los últimos años, el surgimiento de la política de distensión y los esfuerzos sinceros de los distintos grupos de Estados para fomentar relaciones de amistad y la cooperación. Sin embargo, la distensión y la cooperación no son irreversibles, y aunque algunas de las antiguas contradicciones están a punto de desaparecer, han surgido otras nuevas. En 1945 la unanimidad de las grandes Potencias había sido la principal fuerza que impulsara la creación de las Naciones Unidas; en 1975 ya no existe esa unanimidad. Debido a las circunstancias excepcionales de la segunda guerra mundial, los otros Miembros originarios de las Naciones Unidas se vieron obligados a actuar con una notable moderación al exponer sus respectivas posiciones nacionales, pero esa moderación ha cedido ahora el lugar a una afirmación vigorosa de los intereses nacionales y a la proliferación de propuestas que a veces son diametralmente opuestas entre sí. En consecuencia, la delegación de Hungría cree que el momento no es oportuno para emprender una revisión general de la Carta.

13. Con frecuencia se acusa a los que están en contra de la revisión de la Carta de que adoptan una posición supuestamente conservadora, de defensa del *statu quo* de una era supuestamente pasada. Sería equivocado considerar que la delegación de Hungría y muchas otras que tienen opiniones análogas están unidas al conservadurismo y al *statu quo*. La verdad es exactamente lo contrario. Su delegación está a favor de convertir a las Naciones Unidas en un instrumento más eficaz para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Las Naciones Unidas pueden desempeñar una función importante en el establecimiento de un sistema universal de seguridad colectiva que sea estrechamente interdependiente y que mantenga una mutua relación con las organizaciones regionales, y también en la ampliación de las relaciones bilaterales y la cooperación entre los Estados en las esferas política, económica, social y cultural. Su delegación defiende además el principio de la unanimidad de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, sobre quienes recae la máxima responsabilidad en cuanto a mantener la paz mundial y a evitar la guerra termonuclear. El progreso en la esfera del desarme es de una importancia vital. Las Naciones Unidas tienen una función que desempeñar a ese respecto, junto con otros foros bilaterales y multilaterales. Deben eliminarse tanto los antiguos como los nuevos focos de tensión internacional, y la estructura existente de la Carta proporciona amplio campo para afirmar la función de las Naciones Unidas en esa esfera. En el marco de las disposiciones existentes de la Carta, las Naciones Unidas pueden y deben contribuir más eficazmente al progreso económico de los países en desarrollo y al establecimiento de relaciones económicas internacionales sobre fundamentos nuevos y más equitativos. El colonialismo, el racismo, el *apartheid* y todas las otras formas de discriminación racial deben eliminarse completa y definitivamente. Su delegación favorece la modernización de las Naciones Unidas, la actualización de sus métodos y el combate contra la ineficiencia de la burocracia. Las propuestas de esa naturaleza, como las presentadas en el informe del Grupo de Expertos para el estudio de la estructura del sistema de las Naciones Unidas², deben estudiarse cuidadosamente. Último aspecto, sin que ello quiera decir que sea el menos importante: el desarrollo

progresivo del derecho internacional y su codificación tendrían consecuencias importantes para las relaciones entre los Estados y para las actividades de las Naciones Unidas.

14. Como lo ha declarado en el párrafo 6 de su respuesta al Secretario General, el Gobierno húngaro está firmemente convencido de que la atención de las Naciones Unidas no debe concentrarse en una revisión de la Carta, sino en la eliminación de los focos existentes de tensión internacional, en la promoción de la política de distensión y en los esfuerzos tendientes a hacer que la distensión sea irreversible. Hungría tiene fe en las disposiciones de la Carta y está convencida de que los esfuerzos encaminados a revisarla sólo debilitarán la función desempeñada por la Organización en el mantenimiento de la paz y la seguridad.

15. El Sr. SANDERS (Guyana) observa que la cuestión de la necesidad de revisar la Carta no forma parte del mandato del Comité *ad hoc*. Cuando creó ese Comité, la Asamblea General ya había decidido, en su resolución 3349 (XXIX), que aquella necesidad existía, y en los párrafos 1 y 5 de la resolución estableció algunas tareas para el Comité *ad hoc*. El primer período de sesiones del Comité *ad hoc* estuvo dedicado a un intercambio general de opiniones, lo que en última instancia impidió que el Comité cumpliera su mandato. Son muchas las razones que explican ese fracaso; agosto no era probablemente el mes más apropiado para reunirse; reinó un ambiente general de enfrentamiento y sospechas, y los representantes obraron con extrema cautela y sin saber de qué manera actuar en esa primera etapa. Una parte demasiado extensa del debate general fue absorbida por una discusión inútil sobre si era necesario revisar la Carta, aunque la Asamblea General ya había decidido afirmativamente esa cuestión.

16. La delegación de Guyana opina que es demasiado temprano para decidir si el Comité *ad hoc* ha tenido éxito o no. Muchos otros comités han comenzado lentamente su labor, pero han podido, con paciencia y buena voluntad, llegar a soluciones generalmente aceptables, incluso sobre problemas en que las posiciones iniciales parecían irreconciliables. Su delegación insta a la Sexta Comisión a que recomiende a la Asamblea General que renueve el mandato del Comité *ad hoc* a fin de que pueda reunirse por lo menos durante otro período de sesiones.

17. Es importante que el Comité *ad hoc* halle la manera de salir de la presente etapa de paralización y enfrentamiento. Por ejemplo, podría concentrar sus esfuerzos iniciales en los aspectos en que existe acuerdo, como las propuestas y sugerencias para un funcionamiento más eficaz de las Naciones Unidas que no requieran reformas de la Carta. Se pueden encontrar esas sugerencias en las observaciones escritas de los Estados, en las declaraciones formuladas durante el debate general y en la carta presentada recientemente por Rumania (A/C.6/437).

18. En relación con las posibles recomendaciones y directrices sobre métodos de trabajo para el Comité *ad hoc*, el Sr. Sanders considera positivas las sugerencias de México que figuran en el anexo II del informe del Comité *ad hoc*. El representante de Madagascar propuso en la sesión anterior otro método de trabajo, a saber, que ese Comité examine la Carta y la revise artículo por artículo, sin proceder a cambio alguno.

² E/AC.62/9.

19. La delegación de Guyana no comparte los temores de las delegaciones que consideran que la revisión de la Carta es indeseable y peligrosa. El orador no cree que la mayoría de los Miembros de la Organización, los Estados pequeños, vayan a “cortar la rama sobre la que están parados”. Su delegación apoyará toda resolución que recomiende que el Comité *ad hoc* se reúna nuevamente en una fecha que convenga, por lo menos durante otro período de sesiones, y que su mandato sea ampliado a fin de que incluya un estudio sobre las propuestas relativas al fortalecimiento del papel y las funciones de las Naciones Unidas. Tampoco pondrá objeciones a que se aumente el número de miembros del Comité *ad hoc*.

20. El Sr. PHUMAPHI (Botswana) dice que la controvertida cuestión de la revisión de la Carta es un asunto muy delicado que debe manejarse con el mayor cuidado. No obstante, podría hallarse una respuesta en la Carta misma leyendo sus disposiciones a fin de determinar las intenciones de los fundadores de la Organización. Su delegación opina que, cuando se redactó la Carta, se esperaba que algún día sería necesario modificar sus disposiciones, como lo confirman los Artículos 108 y 109. La revisión de la Carta no se justifica por sí misma, sino que debe responder a la existencia de condiciones favorables al cambio. La delegación de Botswana opina que ciertas consideraciones que fueron válidas en 1945, y a las que se debió la forma original de la Carta, ya no son aplicables. Por ejemplo, algunos Miembros fueron designados miembros permanentes del Consejo de Seguridad y se les confirió un poder de veto sobre la base de su contribución a la victoria en la segunda guerra mundial; ese criterio fue oportuno en su momento, pero ahora debe elaborarse una fórmula más apropiada que refleje mejor las realidades actuales y las aspiraciones de la comunidad mundial. Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad se han polarizado en bloques de poder que tienden a coincidir en muy contadas ocasiones. Se ha abusado de su poder de veto para frustrar la realización de los propios objetivos que se han propuesto las Naciones Unidas, como la paz internacional. Los países no alineados están interesados en que las Naciones Unidas no degeneren en un foro de controversias entre los bloques de poder mientras se viola la paz internacional.

21. Los temores de quienes se oponen a la revisión de la Carta son infundados y en buena medida reflejan el temor a lo desconocido. Si se aboga por la revisión de la Carta no es porque el documento haya resultado totalmente inútil. Mucho se ha logrado con arreglo a la Carta tal como está redactada. Se busca una revisión a fin de identificar al menos los defectos que impiden lograr el máximo de los objetivos previstos en la Carta. Todos admiten que ésta no es perfecta, pero algunos Estados se niegan a cooperar con quienes propugnan su mejoramiento, manifiestamente porque temen que la eliminación de las imperfecciones de la Carta reduzca su poder y los coloque en pie de igualdad con otros Miembros de la Organización. Esa falta de cooperación es un ejemplo de la negativa de los Estados a cooperar o a transar a que se han referido muchos representantes y es otra de las muchas razones que justifican la revisión de la Carta. Es importante tener en cuenta además que, si bien la revisión de la Carta es un paso importante hacia el fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas, es de esperar, por supuesto, que los Estados Miembros continuarán guiándose por las disposiciones de la Carta.

22. El Sr. RASSOLKO (República Socialista Soviética de Bielorrusia) dice que su delegación rechaza terminantemente todo intento de revisar la Carta bajo cualquier pretexto y afirma, como se expresa en la carta que ha dirigido su Gobierno al Secretario General (véase A/10108), que los nobles ideales de las Naciones Unidas y el fortalecimiento de la paz y de la seguridad sólo se conseguirán respetando los propósitos y principios de la Carta. Ya se han presentado dos informes exhaustivos sobre la cuestión de la revisión de la Carta³, y el presente informe del Comité *ad hoc* demuestra nuevamente que existe una divergencia fundamental de criterios sobre la necesidad de llevar a cabo una revisión de la Carta y que, como consecuencia de ello, el Comité *ad hoc* no ha logrado nada útil. La mayoría de los Estados, en sus observaciones escritas sobre la cuestión, han expresado su oposición o sus dudas a la revisión. La falta de un deseo general por parte de los Estados de que se revise la Carta no proporciona al Comité *ad hoc* base alguna para llevar a cabo esa acción y confirma que su creación ha sido una decisión apresurada e irreflexiva, contraria a los intereses de las Naciones Unidas.

23. Algunos Miembros del Comité *ad hoc* han tratado de crear un sentimiento artificial de urgencia y han intentado llevar a ese Comité a entrar en terrenos que rebasan su competencia. El Sr. Rassolko acoge favorablemente la declaración del representante de Italia en el Comité *ad hoc* (véase A/10033, pág. 60), en que se hace una advertencia al Comité *ad hoc* para que no adopte medidas apresuradas e inconsideradas. Debe recordarse que el hecho de que algunos Estados hayan formulado propuestas para revisar la Carta no es de por sí prueba suficiente de la necesidad de esa revisión.

24. Algunos representantes partidarios de la revisión se han referido al paso del tiempo desde la fundación de las Naciones Unidas, a la falta de revisión de la Carta durante ese período de 30 años y al aumento del número de Miembros de las Naciones Unidas. Deberían recordar que los cambios que se han producido en el mundo durante esos últimos 30 años se han debido a la Carta, lo que confirma su viabilidad y eficacia. El incremento del número de Miembros prueba el valor de la Carta, a la que todos los Miembros se han comprometido a guardar fidelidad al ser admitidos en las Naciones Unidas. No es cierto que los intereses de los países en desarrollo no estén suficientemente representados en la estructura actual de las Naciones Unidas, ya que esos países participan en todos los órganos principales de la Organización y desempeñan un papel importante en el proceso decisorio. Gracias a la participación activa de los países en desarrollo y de los países socialistas, las Naciones Unidas han adoptado durante los últimos años un número significativo de decisiones útiles.

25. Algunos partidarios de la revisión de la Carta han hecho objeciones al principio de la unanimidad de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La delegación de la RSS de Bielorrusia considera que ese principio es un instrumento indispensable para el mantenimiento de la paz y la seguridad y para la adopción de decisiones basadas en el acuerdo de los Estados Miembros sobre los principales problemas del mundo contemporáneo. Es necesario que se entienda que las Naciones Unidas no

³ A/AC.175/L.2 y A/AC.175/L.3 y Corr.1 y Add.1.

pueden concebirse sin ese principio, dada la situación actual en que hay dos sistemas sociales dispares que coexisten uno con el otro. El principio de la unanimidad ha permitido en muchas oportunidades que las Naciones Unidas evitasen la adopción de decisiones apresuradas, que habrían tenido serias consecuencias para la causa de la paz. Ese principio es el fundamento de la Organización en su conjunto y evita el posible uso del Consejo de Seguridad en beneficio de los intereses limitados de gobiernos o de grupos de gobiernos o de la causa de la desunión y la no cooperación. La Unión Soviética, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, ha utilizado muchas veces el derecho de veto en interés de los pueblos que luchan por su libertad e independencia nacional y en defensa de los movimientos de liberación nacional y de los intereses y derechos jurídicos de los Estados pequeños. La revisión de ese principio podría destruir a la Organización.

26. Su país, como todos los países socialistas, ha sido siempre partidario de mejorar la eficacia de las Naciones Unidas, pero desea señalar a la atención de la Comisión el peligro de las propuestas que supuestamente pretenden aumentar la eficacia y fortalecer el papel de las Naciones Unidas. La Organización y su Carta poseen gran fuerza y autoridad, como lo demuestra el gran número de importantes documentos sobre cuestiones sociales, económicas y políticas vitales que han sido aprobados. En el Acta Final de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, los Estados signatarios han reafirmado su adhesión a los principios y propósitos de la Carta y han declarado su apoyo activo a la Organización.

27. En las actuales circunstancias, en que se vislumbra una clara tendencia a la reducción de las tensiones internacionales, y en que las Naciones Unidas han comenzado a resolver más eficazmente los problemas previstos por la Carta, los propósitos y principios de la Carta deberían ser ratificados y no atacados y los Estados deberían dedicarse nuevamente a cumplir sus obligaciones que les impone la Carta. No puede atribuírsele el hecho de que ciertas decisiones útiles de las Naciones Unidas hayan quedado sin cumplir, sino que debe atribuirse a algunos Estados que no han cumplido las obligaciones que les fija la Carta y que violan efectivamente sus propósitos y principios.

28. La delegación de la RSS de Bielorrusia se opone con la mayor energía a la revisión de la Carta porque está convencida de que entraña una grave amenaza para la existencia de las Naciones Unidas, y por ello se opone a la renovación del mandato del Comité *ad hoc*, cuyas actividades perjudicarían el clima de confianza entre los Estados y obstaculizarían las actividades normales de las Naciones Unidas.

29. El Sr. DONORABAYE (Chad) dice que, debido a los cambios profundos ocurridos en la vida del pueblo del Chad, su país no ha podido responder oportunamente a la invitación formulada por la Asamblea General en el párrafo 2 de la resolución 3349 (XXIX). Se adhiere, no obstante, a la declaración de principios que sobre la importante cuestión de la revisión de la Carta ha expuesto el Ministro de Relaciones Exteriores y de Cooperación del Chad en su discurso pronunciado en la 2359a. sesión plenaria de la Asamblea General, celebrada el 24 de septiembre de 1975.

30. Como muchas otras delegaciones, la del Chad cree que ciertas disposiciones anticuadas de la Carta deberían ser reemplazadas por otras nuevas, más compatibles con las realidades de la vida internacional contemporánea. El propósito fundamental de las Naciones Unidas es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales a fin de evitar los horrores de la guerra, y esa tarea no debe ser monopolizada por las grandes Potencias. Las soluciones de los problemas internacionales de interés general, sean económicas o sociales, deben ser buscadas por todos los países, independientemente de su tamaño. Es la única manera de que las Naciones Unidas puedan corregir ciertos errores del pasado y convertirse en un instrumento eficaz para el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, del desarrollo y de la cooperación entre los Estados. La delegación del Chad se propone, como cuestión prioritaria, comunicar más adelante al Secretario General sus observaciones y propuestas.

31. El Comité *ad hoc* ha realizado una tarea útil a pesar de las divergencias que han surgido en su primer período de sesiones. Su delegación se felicita de ver el interés que ha despertado la cuestión de la revisión de la Carta y apoyará un proyecto de resolución que prorrogue el mandato del Comité *ad hoc*.

32. El Sr. ANWAR SANI (Indonesia) dice que es muy significativo que el tema del informe del Comité *ad hoc* haya sido examinado durante el período de sesiones en que se conmemora el trigésimo aniversario de las Naciones Unidas, ya que durante esos 30 años el panorama internacional en que se redactó la Carta ha experimentado cambios fundamentales. Entre ellos figuran el surgimiento de nuevos Estados independientes, que ha permitido tomar conciencia de la necesidad de un proceso normativo más democrático en las Naciones Unidas, basado en el principio de la igualdad soberana reconocido por la Carta; cambios importantes en el campo político; una diferencia cada vez mayor entre ricos y pobres; y la creciente escasez de recursos, que ha creado una mayor interdependencia en las relaciones internacionales junto a la necesidad cada vez mayor de soluciones mundiales. Es asimismo digno de señalar que la preocupación principal de la comunidad internacional ya no radica meramente en la paz y la seguridad internacionales, como ocurría en el período inmediato de la posguerra, sino que se ha extendido a la justicia y al bienestar internacionales.

33. Debido a esos cambios, está de acuerdo con quienes opinan que en ciertas esferas la Carta ya no está en condiciones de satisfacer las necesidades de la comunidad internacional. Al mismo tiempo, la delegación de Indonesia se adhiere a los propósitos y principios de la Carta, que han servido y seguirán sirviendo de base para las relaciones internacionales.

34. Es alentador comprobar que durante el vigésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General las opiniones de los Estados Miembros sobre la Carta se tradujeron en una acción positiva con la aprobación de la resolución 3349 (XXIX). El hecho de que la resolución haya tenido el apoyo de la mayoría de los Estados Miembros indica la necesidad de adoptar medidas concretas para revisar la Carta.

35. No obstante, el Comité *ad hoc* ha sido creado contra la enérgica oposición de algunos Miembros, por razones bien conocidas, y es de lamentar que esa actitud negativa haya continuado durante la labor del Comité *ad hoc* mismo. Eso ha menoscabado en parte su eficacia. Pero el Comité no ha fracasado. Su mandato ha sido complejo y políticamente controvertido, y ha tenido que trabajar en una atmósfera injustificada de desconfianza y de sospecha que ha demorado el comienzo de un intercambio fructífero de opiniones, aun cuando muchos Miembros partidarios de la revisión de la Carta hubieran tomado la iniciativa de promover ese intercambio. En tales circunstancias, es poco práctico esperar que el Comité *ad hoc* pueda finalizar su labor en un solo y breve período de sesiones, por lo que el pasado período de sesiones debería considerarse un primer paso provechoso hacia el cumplimiento de su mandato.

36. El Comité *ad hoc* ha servido de foro útil para que los Estados Miembros formularan propuestas específicas, como se indica en el anexo I del informe. La delegación de Indonesia ha presentado al Comité *ad hoc*, en términos generales, algunas propuestas para limitar la aplicación del principio de la unanimidad en el Consejo de Seguridad, institucionalizar las operaciones de mantenimiento de la paz mediante interposición y aumentar el interés de los procedimientos para el arreglo pacífico de controversias, merced a la ampliación de las opciones que brinda el Artículo 33 de la Carta.

37. No deben pasarse por alto los aspectos positivos de la labor del Comité *ad hoc*, cuyo mandato debe ser renovado conforme a un calendario más realista que le permita proseguir sus trabajos. No cabe esperar que los termine en uno o dos períodos de sesiones más. La primera tarea del Comité *ad hoc* debería ser la creación de un método de trabajo eficaz con el fin de evitar un mero "diálogo entre sordos". Sería útil que los argumentos poco realistas de quienes afirman que la revisión de la Carta es inoportuna fuesen reemplazados por discusiones francas y útiles que explorasen las esferas menos polémicas con miras a alcanzar un entendimiento, si no un consenso, sobre los medios de realizar las mejoras necesarias. Eso se podría lograr con más eficacia si el Comité *ad hoc* estableciese uno o más grupos de trabajo. A ese respecto, sería adecuado que considerase seriamente las propuestas formuladas por México, que figuran en el anexo II del informe. Dada la importancia de la labor del Comité *ad hoc* y la necesidad de coherencia, el Comité debería preparar, para presentarlo a la Asamblea General, otro informe técnico en el que se recogieran las principales tendencias que se han manifestado en sus discusiones.

38. La delegación de Indonesia espera que en el Comité *ad hoc* reine inmediatamente un clima de entendimiento y cooperación. Debe tomarse nota con reconocimiento de los serios esfuerzos que se realizan en ese sentido y apoyarlos. El orador desea recordar al Comité que reformar la Carta no significa necesariamente revisarla.

39. El Sr. ALVAREZ PIFANO (Venezuela) dice que su delegación desea reiterar su interés en el estudio de la posibilidad de modificar la Carta de las Naciones Unidas, y ello por dos razones. En primer lugar, se han producido cambios complejos desde que se aprobó la Carta, entre ellos

el que los países del tercer mundo han empezado a tener un papel significativo en la búsqueda de la paz y la seguridad, así como los cambios sociales que impulsan a esos países a buscar una participación activa en las decisiones políticas internacionales. Esos cambios hacen que sea necesario reajustar anteriores instrumentos jurídicos, y por lo tanto debe prestarse seria atención a la posibilidad de revisión de la Carta, de manera que responda a las necesidades de los tiempos modernos.

40. En segundo lugar, muchos países atribuyen una importancia fundamental a la cuestión de la revisión de la Carta y desean tener la oportunidad de expresar sus puntos de vista sobre esa cuestión, bien con miras a incrementar la capacidad de las Naciones Unidas para lograr sus propósitos, bien para elaborar un instrumento revisado que permita alcanzar más ambiciosos objetivos. Las Naciones Unidas tienen ante sí importantes problemas de reestructuración, puesto que su tarea es cada vez más compleja y exige mayor dinamismo y creatividad. Se requieren soluciones nuevas para resolver conflictos y definiciones firmes que guíen la conducta de los Estados grandes y pequeños en las esferas de mayor interés, que sobrepasan el alcance del orden político interno tradicional.

41. Sin embargo, no puede emprenderse la revisión de la Carta como si se tratara de un instrumento inoperante. Constituiría una grave error la subestimación de todo cuanto las Naciones Unidas han hecho durante 30 años por la paz del mundo, y no sería menos grave pedir a las Naciones Unidas más de lo que en términos prácticos pueden dar. En consecuencia, la delegación de Venezuela está dispuesta a cooperar en aquellas revisiones de la Carta que mejoren el funcionamiento de la Organización y gocen de la aceptación más amplia posible.

42. Se necesita cuanto antes una reestructuración profunda del sistema de las Naciones Unidas con miras a mejorar su organización y agilizar sus actividades. Venezuela, como país del tercer mundo, atribuye una importancia primordial a los instrumentos para la acción efectiva en favor de los países en desarrollo, tales como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Cualquier reforma que se realice en ese campo debe dirigirse a fortalecer y perfeccionar esos instrumentos para que puedan responder de manera más eficaz a las exigencias del nuevo orden económico internacional. Sólo así se puede conseguir el equilibrio efectivo entre todos los intereses en juego.

43. La delegación de Venezuela, que apoyó la creación del Comité *ad hoc*, advierte con satisfacción que el Comité ha iniciado sus trabajos con una conciencia clara de su mandato. La forma prudente en que ha llevado a cabo sus deliberaciones demuestra que muchos de los temores que suscitó su creación eran infundados. No se ha lesionado en absoluto el prestigio de la Organización ni las disposiciones de la Carta han sufrido descrédito. A decir verdad, no se ha producido más confrontación política que la que se produce en un debate sobre cualquier otro tema importante.

44. Por lo tanto, el Comité *ad hoc* debería continuar su labor el próximo año, en un período de sesiones de una duración adecuada, y debería establecer las líneas generales

de su labor. La delegación de Venezuela, en consecuencia, apoya la propuesta de México (véase A/10033, anexo II) de que se creen dos subcomités, uno que examine las propuestas de enmiendas a la Carta y otro que examine las propuestas dirigidas a incrementar la capacidad de las Naciones Unidas y que no requieran enmiendas a la Carta.

45. El orador menciona varias medidas importantes adoptadas por las Naciones Unidas en la esfera de la paz y la seguridad internacionales que constituyen los fundamentos de la estructura mundial que se desea. La cooperación de los grandes países es indispensable en esa esfera, como lo es el respeto absoluto de la soberanía de los países en desarrollo sobre sus recursos naturales renovables y no renovables. Los países del tercer mundo están convencidos de que cualquier acción que infrinja el principio de soberanía pondría en peligro la seguridad internacional.

46. El orador se refiere también a diversas actividades emprendidas en la región de la América Latina, que demuestran que la seguridad internacional es un concepto con el que todos los países están comprometidos y que garantiza los derechos de todos. Venezuela, que siempre ha luchado por el ejercicio de su soberanía y ha respetado la de los demás países, cree firmemente que las Naciones Unidas, en sus 30 años de historia, han realizado esfuerzos muy fecundos para armonizar las relaciones en un mundo cada vez más interdependiente.

47. El Sr. SIMANI (Kenya) dice que su delegación, como miembro del Comité *ad hoc*, lamenta que, debido a la polarización de las posiciones, el Comité no haya podido llevar a cabo ninguna de sus tareas. Sin embargo, con buena voluntad y entendimiento el Comité *ad hoc* puede tener éxito en el desempeño de sus funciones, y en consecuencia hace un llamamiento a la Sexta Comisión para que examine seriamente la necesidad de prorrogar el mandato del Comité *ad hoc*.

48. La posición de la delegación de Kenya respecto de la revisión de la Carta fue claramente reflejada en el vigésimo noveno período de sesiones⁴ y en la declaración hecha por el Ministro de Relaciones Exteriores de Kenya en la 2362a. sesión plenaria de la Asamblea General, celebrada el 25 de septiembre de 1975. Por las razones expuestas en esa declaración, la delegación de Kenya estima que una revisión de la Carta es no sólo oportuna, sino también imperativa, y rechaza totalmente el argumento aducido por algunos según el cual la Carta es un documento sacrosanto que ha superado la prueba del tiempo y no puede revisarse sin poner en peligro la existencia de la Organización. Ese argumento ha quedado desacreditado por el hecho de que ya se han hecho reformas importantes de la Carta que no han alterado el funcionamiento ágil de la Organización, como ha sido la ampliación de la composición del Consejo de Seguridad y la del Consejo Económico y Social.

49. Aun cuando la Carta haya sido un instrumento perfecto cuando se redactó, no puede, habida cuenta de la transformación radical del panorama internacional, continuar siendo inmutable y satisfacer al mismo tiempo los intereses de los Estados Miembros. Los fundadores de la Organización ya previeron esa circunstancia cuando con-

templaron en el Artículo 109 la posibilidad de revisar la Carta. La delegación de Kenya, por lo tanto, ha apoyado firmemente la creación del Comité *ad hoc*. No aboga por una revisión total de la Carta, sino por una revisión de sus métodos de trabajo, cosa que sólo puede hacerse sistemáticamente si se confía esa tarea a un comité de ese tipo. Por ello, continuará apoyando al Comité *ad hoc* con la esperanza de que todos los Estados adopten una actitud práctica que permita hacer de la Carta un instrumento que responda mejor a los intereses de toda la comunidad internacional.

50. Como quiera que toda reforma de la Carta debe ser adoptada por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea General y ratificada por todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, los temores de que la revisión de la Carta permita que la mayoría imponga su voluntad a una minoría, con el consiguiente compromiso de los intereses vitales de algunos, se han exagerado grandemente. De cualquier manera, a esos argumentos bien podría dárseles la vuelta.

51. La delegación de Kenya apoyará todos los esfuerzos que faciliten la labor del Comité *ad hoc*, y cree que su mandato debe prorrogarse. Asimismo, ha advertido con interés las propuestas y sugerencias hechas en relación con el tema 29 del programa, que tienden a facilitar la labor del Comité *ad hoc*. En la medida en que esas propuestas y sugerencias correspondan al mandato del Comité, la delegación de Kenya apoyará la remisión de las mismas al Comité para que las examine. No se opondrá a la posibilidad de ampliar la composición del Comité *ad hoc* agregando un número reducido de Estados, inclusive Rumania.

52. El Sr. BENITEZ (Uruguay) dice que su delegación asigna particular importancia al tema 113 del programa. Como pueblo amante de la paz, el Uruguay ha seguido muy de cerca los progresos y la evolución del derecho internacional, sabedor de que sólo respetando sus normas y principios puede garantizarse la paz y la seguridad a las generaciones venideras. La delegación del Uruguay, aunque no es miembro del Comité *ad hoc*, ha seguido muy de cerca su labor y ha patrocinado las resoluciones referentes al tema que se está examinando.

53. La Carta es una obra humana y, por lo tanto, imperfecta. Por ese motivo, sus redactores incluyeron el Capítulo XVIII, en el que se establecen los mecanismos formales para su revisión.

54. Quienes se oponen sistemáticamente a la revisión hablan a menudo del acuerdo político incluido en la Carta y temen que, si se tocara, se alteraría el equilibrio que hizo nacer ese instrumento. Verdaderamente, es esencial preservar el acuerdo político, pero la sustancia del acuerdo se encuentra en los principios y propósitos de la Carta y no en la estructura institucional o en los órganos creados por ella. Como ha dicho el Sr. Eduardo Jiménez de Aréchaga, jurista uruguayo actualmente miembro de la Corte Internacional de Justicia, la Carta, como las constituciones de los Estados, consta de una parte dogmática y una parte orgánica, una parte que contiene los principios y propósitos fundamentales y otra relativa a los órganos que sirven para cumplir esos fines. La parte dogmática de la Carta, en la que

⁴ Véase A/9739.

se establecen los principios y propósitos fundamentales, constituye el objeto de un verdadero acuerdo político y debe mantenerse. Sin embargo, no existe verdadero acuerdo político inmutable sobre la parte orgánica de la Carta. En los últimos 30 años se han producido grandes cambios, y unas modificaciones de la parte orgánica podrían ayudar a las Naciones Unidas a cumplir su cometido con mayor eficacia. Especialmente, carecen de sentido las menciones en la Carta a categorías históricas ya superadas. Las realidades del mundo actual no pueden soslayarse, y si no se incluyen en los mecanismos de las Naciones Unidas o no se hacen esfuerzos serios para incluirlas, se estará dejando

envejecer a las Naciones Unidas. Como señaló el Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay en su declaración hecha en la 2360a. sesión plenaria de la Asamblea General, celebrada el 24 de septiembre de 1975, se necesitan reformas institucionales para coordinar los esfuerzos en favor de los países más necesitados. Con ese espíritu, la delegación del Uruguay tiene el propósito de patrocinar los proyectos de resolución que prorroguen el mandato del Comité *ad hoc*, para que continúe su muy importante labor.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

1571a. sesión

Viernes 21 de noviembre de 1975, a las 10.55 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1571

TEMAS 113 Y 29 DEL PROGRAMA

Informe del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas (continuación) (A/10033, A/10102, A/10108, A/10113 y Corr.1 y Add.1 a 3, A/C.6/437)

Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones y la promoción de las normas del derecho internacional en las relaciones entre los Estados: informes del Secretario General (continuación) (A/10218, A/10219, A/10255, A/10289, A/C.6/437)

1. El Sr. MAKEKA (Lesotho) dice que la delegación de Lesotho no llega a comprender el razonamiento de los que se oponen a una revisión de la Carta. Esa cuestión ha estado sometida a la Asamblea General durante muchos años, y la delegación de su país votó a favor de la resolución 3349 (XXIX) en la inteligencia de que el debate de procedimiento sobre la cuestión había terminado. Es muy de lamentar que el Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas no haya podido ir más allá de la fase del debate de procedimiento y que persista una divergencia fundamental de opiniones sobre la necesidad de llevar a cabo una revisión de la Carta. El Gobierno de Lesotho apoya la revisión de la Carta por considerarla el método más adecuado para fortalecer la eficacia de las Naciones Unidas en su conjunto y reafirmar la confianza en la Carta.

2. El Gobierno de Lesotho aún no ha respondido a la invitación del Secretario General, de conformidad con la resolución 3349 (XXIX) de la Asamblea General, de presentar sus opiniones sobre la cuestión de la revisión de la Carta debido a que la cuestión es sumamente compleja y delicada y necesita ser examinada más a fondo. Está actualmente examinando la cuestión con miras a hacer observaciones concretas.

3. Al examinar las observaciones presentadas por otros gobiernos es interesante observar que la mayoría de los que

se oponen a la revisión son Miembros fundadores de las Naciones Unidas. Parece que no se dan cuenta de que la revisión propuesta no llevaría necesariamente a enmendar la Carta. En la Conferencia de San Francisco los Miembros fundadores aceptaron la idea de revisar la Carta e incluyeron el Artículo 109 en la Carta para ese fin. La formación del Comité *ad hoc* es un paso adelante hacia la aplicación de ese Artículo. La labor del Comité *ad hoc* no es irreversible ni vinculatoria para ningún país, su mandato consiste simplemente en presentar un informe.

4. La finalidad de la revisión no es provocar conflictos o confrontaciones entre los Miembros de las Naciones Unidas. Ahora bien, en el seno de las Naciones Unidas se han producido profundas transformaciones, particularmente en los últimos 15 años. Una enorme mayoría de los Miembros actuales de la Organización no participaron en la formulación de la Carta.

5. Sin pasar por alto las destacadas contribuciones hechas por las Naciones Unidas para mantener la paz internacional y promover el proceso de descolonización, no debe olvidarse que la distensión es un juego del que el mundo en desarrollo ha sido excluido. Los pequeños países piensan en la Carta como instrumento para proteger su independencia soberana y su integridad y seguridad territoriales, que son constantemente amenazadas y pisoteadas. Chipre es un caso al respecto, y otra tragedia sangrienta se está produciendo en Angola. Desde la creación de las Naciones Unidas, los africanos negros han estado y siguen estando sujetos a las formas más inhumanas de discriminación racial y esclavitud en su propio país por una minoría de europeos.

6. Se ha dicho que la ineficacia de las Naciones Unidas para tratar conflictos localizados se debe a la falta de voluntad política por parte de los Estados Miembros que no cumplen estrictamente la Carta. Una revisión de la Carta podría exponer las raíces de esa falta de voluntad política. La delegación de Lesotho observa con satisfacción que la URSS parece haber hecho sugerencias constructivas que pueden ser de gran utilidad para el Comité *ad hoc*. Otros Estados, en particular México, han presentado al Comité *ad*

hoc propuestas constructivas que merecen más estudio. La delegación de Lesotho apoyará toda resolución que dé al Comité *ad hoc* más tiempo para llevar a cabo su mandato.

7. El orador felicita al Relator del Comité *ad hoc* por su concisa y lúcida presentación del informe del Comité (A/10033).

8. El Sr. YOKOTA (Japón) felicita al Relator del Comité *ad hoc* por su lúcida y equilibrada presentación del informe, que ha realizado la difícil tarea de expresar las divergencias de opinión surgidas en ese Comité.

9. Como es bien sabido, la delegación del Japón considera adecuado emprender una revisión de la Carta, primero, porque en 30 años se han producido cambios enormes en la situación internacional, en la naturaleza y el alcance de las tareas que abordan las Naciones Unidas y en la composición de las Naciones Unidas; y, segundo, porque la mayoría de los Estados Miembros consideran oportuno emprender esa revisión.

10. Ahora bien, si los miembros de la Comisión continúan destacando y, por lo tanto, ahondando, las discrepancias fundamentales de opinión mencionadas en el informe del Comité *ad hoc*, ello solamente servirá para agravar las frustraciones, y seguramente no se producirán resultados significativos en el presente año. Sería de lamentar. Es lo menos que se puede decir. En vez de repetir sus posiciones de principio, los miembros de la Comisión harían mejor en tratar directamente el problema buscando el camino de salvar la disparidad de opiniones, opiniones al parecer diametralmente opuestas respecto de la necesidad de revisar la Carta. El orador espera que la Comisión examine atentamente el posible daño que se causaría a las Naciones Unidas si ello no se hiciera.

11. El hecho de que en el pasado la Comisión haya realizado con éxito tareas de análoga dificultad, tales como la redacción de la Definición de la agresión y la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, induce a la delegación del Japón a esperar que las divergencias puedan ser superadas si se abordan con una actitud abierta y con espíritu de avenencia. La delegación japonesa está dispuesta a hacer mucho para aproximarse a los oponentes de la revisión de la Carta y elaborar un enfoque mutuamente aceptable, pero si continúan rechazando francamente el deseo espontáneo y legítimo de un número considerable de Estados Miembros de revisar la Carta, parece que no habrá más opción que dejar constar oficialmente que la divergencia fundamental se debe a un pequeño número de Estados Miembros que se oponen obstinadamente a los deseos de la abrumadora mayoría.

12. La Asamblea General sigue necesitando un foro especial para tratar de la revisión de la Carta, ya sea el Comité *ad hoc* u otro foro que se convenga, ya que las opiniones de los Estados Miembros parecen requerir un estudio a fondo con una razonable concentración de esfuerzo. La actitud de la delegación del Japón es abierta en cuanto a la formulación de la tarea que se asigne al foro especial, pero considera inconcebible que no estudie el informe preparado por la Secretaría (A/10113 y Corr.1 y Add.1 a 3) en cumpli-

miento del párrafo 4 de la resolución 3349 (XXIX) de la Asamblea General.

13. El Comité *ad hoc*, debido a que sólo ha celebrado debates generales, apenas ha comenzado su trabajo y necesitará algunos años para completarlo. Revisar la Carta, documento fundamental de las Naciones Unidas, es una tarea seria que requiere máximo cuidado. La delegación del Japón no comparte el deseo de llegar a conclusiones apresuradas, ni critica al Comité *ad hoc* por no producir resultados en un período de sesiones tan corto.

14. Además, la Asamblea General debe proporcionar al Comité *ad hoc*, o a otro órgano que lo sustituya, servicios adecuados para sus trabajos. En particular, a medida que el Comité se acerque a la fase avanzada de sus trabajos, sería esencial levantar actas resumidas para facilitar las deliberaciones. Además, muchos miembros del Comité *ad hoc* han considerado que el informe presentado por la Secretaría en cumplimiento del párrafo 4 de la resolución 3349 (XXIX) no es suficientemente analítico. Debido a la dificultad de preparar un informe analítico sobre una cuestión políticamente delicada, hay que hacer una petición más concreta al Secretario General: que prepare un informe analítico con objeto de reducir la dificultad que la Secretaría va a tener para prepararlo.

15. La delegación del Japón no opina que los dos temas del programa en examen sean diametralmente opuestos. Existe bastante coincidencia entre ellos en esferas tales como el papel de las Naciones Unidas en el arreglo pacífico de las controversias. No es necesario limitar el debate del tema sobre el fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas al marco existente de la Carta, y podría abarcar también la cuestión de la revisión de la Carta. En ese caso, habría que identificar las esferas de actividades de las Naciones Unidas que necesitan ser fortalecidas, decidir los remedios y ver si esos remedios requieren o no una enmienda de la Carta.

16. Ahora bien, los dos temas no coinciden totalmente. Un ejemplo evidente son las dos cláusulas de la Carta relativas a los "Estados enemigos", que algunas delegaciones desean suprimir por considerarlas anacrónicas. Ello no podría considerarse dentro del marco del fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas. El orador se pregunta si la declaración del representante soviético en la 1568a. sesión significa que el Japón postbélico y las dos Alemanias ya no pueden identificarse con los Estados enemigos mencionados en el Artículo 53 y que, por consiguiente, no existe la posibilidad de aplicar esas cláusulas al Japón o a Alemania. En ese caso, sería ciertamente difícil que el representante soviético negase el carácter anacrónico de la cláusula. A fin de aclarar la situación y de disipar las dudas relativas a la posición del Gobierno japonés sobre esa cuestión, la delegación japonesa desea declarar que aunque el Artículo 53 de la Carta define los Estados enemigos, la evolución que ha habido después de la segunda guerra mundial, en particular la admisión de los llamados Estados enemigos en las Naciones Unidas como Estados amantes de la paz, ha hecho que las dos cláusulas mencionadas sean anacrónicas y, en general, anticuadas.

17. El Sr. SHAMS (Bahrein) dice que su delegación celebra los esfuerzos que se han realizado para fortalecer el papel de

las Naciones Unidas, y cree que el tema merece la atención de todos los Estados Miembros. En apoyo de la iniciativa de Rumania, a solicitud de la cual se incluyó el tema en el programa del vigésimo séptimo período de sesiones¹, la delegación de Bahrein participó en el debate del tema, y se adhirió a las opiniones expresadas por su Gobierno en un memorando dirigido al Secretario General de fecha 17 de mayo de 1974².

18. Como se afirma en ese memorando, el debate sobre el fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas está encaminado a reforzar la paz y los principios del derecho internacional relativos a las relaciones entre los Estados. Incumbe a todos los Estados cumplir su compromiso de respetar los propósitos y principios de la Carta y, a menos de que los Estados Miembros cumplan las decisiones de la Organización, no podrá haber progreso.

19. Un rasgo destacado de las Naciones Unidas es su hincapié en la necesidad de que los Estados busquen la paz a través de un diálogo abierto. La Organización ha dado un gran paso adelante al aumentar el número de sus Miembros hasta ser casi universal ahora. Los Estados han realizado logros considerables mediante la cooperación y estrechos contactos en las Naciones Unidas. Han fortalecido el principio del respeto de la independencia política y la soberanía nacional de todos los Estados, han repudiado la amenaza y el uso de la fuerza, han garantizado los derechos legítimos de todos los pueblos, particularmente el derecho a decidir la forma de desarrollar sus recursos naturales sin interferencia exterior, han apoyado los esfuerzos para eliminar el imperialismo, el *apartheid* y todas las formas de discriminación racial y han promovido el desarrollo económico de los países en desarrollo y el establecimiento de relaciones internacionales basadas en la igualdad y en la cooperación. En los últimos tres decenios, las Naciones Unidas no solamente han conservado la paz y la seguridad internacionales fomentando el diálogo pacífico, sino que han demostrado ser un instrumento para el desarrollo económico y social. Han apoyado los trabajos encaminados al logro de las metas comunes de los Estados Miembros y han desempeñado un papel eficaz para eliminar las causas de la tensión internacional y para juntar a los pueblos de muchas regiones del mundo. Todo ello ha aumentado su importancia política y ha hecho que sea una organización activa de capital importancia.

20. El papel de las Naciones Unidas se ha hecho también más eficaz con la adhesión a sus propósitos y principios, la fe en las relaciones diplomáticas como medio de resolver pacíficamente las controversias internacionales, el rechazo del uso de la fuerza en cualquier parte del mundo y la oposición a la intervención en los asuntos internos de los Estados. Las Naciones Unidas han reforzado también la cooperación económica internacional, la participación en los esfuerzos para establecer un nuevo orden económico que reduzca la disparidad entre los países desarrollados y los países en desarrollo, han apoyado el derecho a la libre determinación para todos los pueblos aún sujetos al imperialismo y a la dominación extranjera, han respaldado

los movimientos de liberación y han condenado todas las formas de discriminación racial.

21. La fuerza de las Naciones Unidas en todas esas esferas depende de la cooperación de todos los Estados, democráticamente, de conformidad con el espíritu de la Carta. La incapacidad de las Naciones Unidas para aplicar sus decisiones se debe a que algunos Estados no dan importancia a esas decisiones y siguen creyendo en la lógica de la fuerza. Lamentablemente la fuerza aún reina en algunas zonas del mundo, pese a los principios de justicia consagrados en la Carta. No obstante, habría que dar especial importancia al papel de las Naciones Unidas, ya que la Organización ha demostrado en muchas ocasiones que puede superar los intentos de hacer prevalecer la fuerza. El apoyo moral expresado en las Naciones Unidas y en sus decisiones puede contribuir a resolver los problemas que el orador ha descrito.

22. La fuerza y la unidad de los países en desarrollo y su participación en el éxito de la Organización es importante e inevitable. Debido a que se ha despertado la conciencia y la solidaridad de esos países, la coerción practicada en el pasado por algunas grandes Potencias para polarizar a esos países ya no es aceptable. Otros Miembros de las Naciones Unidas deben tratar de comprender las aspiraciones y los intereses de los países en desarrollo y aplicarlos plenamente en vez de hacer acusaciones infundadas y ajenas a la realidad. Las Naciones Unidas tendrán que adaptarse a la evolución política moderna, y las decisiones adoptadas por una mayoría de sus Miembros habrán de aplicarse de conformidad con las disposiciones de la Carta y sin discriminación, si se quiere que la Carta no sea letra muerta. El orador se refiere especialmente a las decisiones relativas a las amenazas contra la paz y la seguridad internacionales. Un requisito básico para la reorganización de las Naciones Unidas es fortalecer la Organización y hacer más efectivas sus decisiones.

23. El Gobierno de Bahrein ha puesto gran confianza en las Naciones Unidas, como único foro que puede plenamente comprender la situación mundial. Las negociaciones en las Naciones Unidas, particularmente las celebradas durante el séptimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, han demostrado la existencia de un nuevo espíritu de acuerdo y solidaridad, para sustituir a la confrontación y las recriminaciones pasadas entre los países desarrollados y países en desarrollo. Si ese espíritu continúa, las Naciones Unidas lograrán sus propósitos y establecerán sus principios.

24. El Sr. GÜNEY (Turquía) dice que la posición de la delegación de Turquía sobre la cuestión de la revisión de la Carta es bien conocida, ya que ha sido manifestada en varias oportunidades en el seno de la Sexta Comisión. Los comentarios del Gobierno de Turquía sobre ese tema figuran en el documento A/10113/Add.1. Si bien el orador no rechaza los argumentos expresados por los partidarios de la revisión de la Carta, cree que la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas ha hecho innecesaria por ahora una revisión formal y general de la Carta. Los resultados de la labor del Comité *ad hoc* no han sido alentadores, y el Gobierno de Turquía duda de que las

¹ Véase *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo séptimo período de sesiones, Anexos*, tema 24 del programa, documento A/8792.

² Véase A/9695.

circunstancias internacionales actuales sean más auspiciosas para una revisión general que las que existían cuando se aprobó la resolución 992 (X) de la Asamblea General, en 1955.

25. Como miembro del Comité *ad hoc*, Turquía ha observado que existe una diferencia de opinión fundamental respecto de la necesidad de revisar la Carta. Es su labor futura, el Comité *ad hoc* debería examinar las propuestas que no tuviesen como efecto la enmienda o la revisión formal de la Carta. Ese Comité haría bien en examinar los medios y procedimientos destinados a mejorar la capacidad de la Organización para alcanzar sus propósitos, sin recurrir a la revisión de la Carta, y su mandato debería reformularse en consecuencia. La delegación de Turquía no tiene objeciones a las sugerencias de Rumania (1563a. sesión) de que se amplíe el número de miembros del Comité *ad hoc*, sin excluir a ninguno de los miembros actuales, a condición de que ello sea aceptable para la mayoría de los miembros de la Sexta Comisión.

26. La delegación de Turquía da las gracias a la delegación de Rumania por haber introducido en el vigésimo séptimo período de sesiones el tema del fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas y por los esfuerzos realizados desde entonces para mejorar el funcionamiento y la eficacia de la Asamblea General en lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones que tiene en virtud de la Carta. El informe del Secretario General sobre ese tema³ contiene varias sugerencias y propuestas constructivas de los Estados Miembros, que los órganos principales de las Naciones Unidas deberían tener en cuenta con miras a mejorar su labor. Debería continuarse el estudio de los medios para fortalecer el papel de las Naciones Unidas y mejorar su eficacia.

27. El Sr. MUHAMMAD (India) observa que los dos temas en examen están estrechamente vinculados entre sí; sus proponentes piden a la Asamblea General que reevalúe el papel de las Naciones Unidas y que revise la Carta a la luz de un contexto modificado de relaciones internacionales. Los países no alineados han acogido siempre favorablemente todas las iniciativas encaminadas a fortalecer a las Naciones Unidas y expresan su pleno apoyo a los propósitos y principios de la Carta.

28. El Gobierno de la India ha expuesto su posición sobre el tema de la revisión de la Carta, tanto en la Sexta Comisión como en el Comité *ad hoc*. Si bien su delegación no se opone *per se* a la revisión de la Carta, no está convencida de que haya llegado el momento de llevar a cabo una revisión y modificación en gran escala. La Carta no es ciertamente un instrumento perfecto, pero tampoco se le deben atribuir todos los fracasos y frustraciones de una comunidad mundial imperfecta. La Carta ha demostrado su flexibilidad al ajustarse a las expectativas de un mundo en cambio. Varias esferas abarcadas por ese documento han sido revisadas y perfeccionadas mediante pactos, declaraciones y definiciones, inclusive la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y la Definición de la agresión.

29. Las Naciones Unidas enfrentan hoy día numerosos problemas complejos y difíciles, inclusive la cooperación y

el desarrollo económicos, los problemas raciales y coloniales en el África meridional, las amenazas a la paz en Chipre y en el Oriente Medio, la protección del medio ambiente, la crisis de la energía, el desarme, el derecho del mar, los usos del espacio ultraterrestre y la promoción del comercio internacional. Es evidente que la lentitud de los progresos realizados en esas esferas y en esferas conexas no puede atribuirse a deficiencias de la Carta. La resistencia de algunos Miembros de las Naciones Unidas a respetar los propósitos y principios establecidos en la Carta complica las dificultades inherentes de esos problemas. Estos no se resolverán mediante una simple modificación de la Carta. Su revisión o modificación no puede, pues, ser un fin en sí mismo. Debe insistirse en la utilización del potencial latente de ese documento para mejorar la capacidad de las Naciones Unidas a fin de que puedan alcanzar su propósito.

30. La delegación de la India está dispuesta a examinar toda propuesta o enmienda destinada a garantizar el funcionamiento eficaz de las Naciones Unidas en los campos económico, social y humanitario. No obstante, por lo que hace a las cuestiones políticas, debe adoptarse un enfoque realista. Aunque el sistema del veto es obviamente discriminatorio, las Naciones Unidas no podrían funcionar en absoluto sin él.

31. Es evidente que una clara mayoría de los Miembros de las Naciones Unidas apoyan la revisión de la estructura de la Organización y la reevaluación de ciertas disposiciones de la Carta. No hay peligro alguno en acceder a ese pedido, y un debate general de las sugerencias y propuestas pertinentes podría conducir a una evaluación más adecuada de las realidades actuales, de la relativa importancia práctica de las disposiciones de la Carta consideradas objetables y de la real necesidad de enmendar las disposiciones que puedan haber llegado a ser obsoletas.

32. El Sr. SIAGE (República Árabe Siria) dice que su país, que actualmente tiene el insigne honor de estar representado en la Corte Internacional de Justicia, continuará trabajando en pro del fortalecimiento de los principios de derecho internacional a fin de que la paz y la justicia prevalezcan por igual para todos los pueblos. Los dos temas que se debaten son los más importantes quizás que debe tratar la Sexta Comisión, si bien se va a referir a ellos por separado, están estrechamente vinculados entre sí, ya que el fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas es el resultado lógico del mejoramiento de la Carta.

33. En los 30 años transcurridos desde el fin de la segunda guerra mundial y la victoria sobre el fascismo se han producido cambios radicales en el mundo. Incluyen la triplicación del número de Miembros de las Naciones Unidas y el cambio en la naturaleza en la Organización producido por la representación de África y de Asia. La Carta y el mandato de los órganos de las Naciones Unidas deben reflejar esa nueva realidad, ya que la continua vitalidad de cualquier instrumento internacional depende de cómo refleje las condiciones actuales.

34. Ello no significa que deban infringirse los propósitos y principios de la Carta. Por el contrario, el objetivo de cualquier enmienda o revisión debe ser fortalecer esos propósitos y principios a fin de hacer de las Naciones Unidas un instrumento eficaz para el mantenimiento de la

³ *Ibid.*

paz y poner coto a la agresión. Eso debe conseguirse imponiendo sanciones generales destinadas a garantizar el respeto a la Carta y a las resoluciones de las Naciones Unidas.

35. Los fracasos de las Naciones Unidas son el resultado de malentendidos y de interpretaciones erróneas sobre las funciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General, según fueron establecidas en la Carta. El Consejo de Seguridad es un órgano ejecutivo que tiene la responsabilidad particular del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Su autoridad en la Organización no puede ser suprema ni sus facultades más amplias que las de la Asamblea General, en la medida en que en el Consejo sólo representa el 10 por ciento aproximadamente de los Miembros de las Naciones Unidas. La autoridad suprema de las Naciones Unidas debe recaer en la Asamblea General.

36. Otra aplicación errónea del espíritu de la Carta es el abuso que algunos grandes Estados hacen del derecho del veto. Aún es posible que un Estado se oponga a la voluntad casi unánime de otros Estados Miembros. Así, la revisión de la Carta debería incluir la ampliación de la autoridad de la Asamblea General a fin de que ocupe un lugar de primacía en los asuntos de las Naciones Unidas. El poder de veto ha sido creado debido a que las Potencias victoriosas en la segunda guerra mundial tuvieron una responsabilidad especial en la solución de los problemas surgidos de esa guerra. Esa situación ha cambiado actualmente, ya que los Estados que habían sido enemigos se han convertido en aliados y no existen justificaciones para otorgar a algunos Estados un poder de veto ilimitado. En consecuencia, deberían establecerse severas limitaciones a esa facultad, que evitarían su abuso en violación del espíritu de la Carta y de los propósitos de las Naciones Unidas, en particular en lo que hace a la libre determinación y a la prevención de la agresión. A ese respecto, debe lograrse plena igualdad en lo que se refiere a la existencia de miembros permanentes, substituyendo el sistema actual por otro que garantice la presencia casi continua de los Estados que tienen responsabilidades particulares, no como una cuestión de derecho absoluto, sino sobre la base de acuerdo entre grupos geográficos. Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad ya no son las únicas fuerzas o grupos en el mundo, como lo eran cuando las Naciones Unidas fueron fundadas, y debe encontrarse un medio para garantizar la presencia permanente o casi permanente de los representantes de otros grupos y fuerzas que se han convertido en una realidad innegable del mundo moderno.

37. Es adecuado también que se enmiende la Carta en lo relativo a la admisión de nuevos miembros en las Naciones Unidas, tarea que debería corresponder a la Asamblea General. La autoridad del Consejo de Seguridad en ese punto debería derivar de la Asamblea General y no obligar a ésta. Las mismas consideraciones se aplican al Capítulo VII de la Carta; la Asamblea General debería estar facultada para imponer sanciones, y el papel del Consejo de Seguridad en esa esfera debería ser limitado.

38. Los asuntos a que se acaba de referir el orador son muy delicados. Los cambios necesarios en la Carta deberían efectuarse con extremo cuidado, luego de un estudio minucioso y de haber logrado el mayor acuerdo posible, a condición de que la necesidad de ese acuerdo no se utilice como pretexto para obstruir la reforma de la Carta.

39. Refiriéndose al tema del fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas, el Sr. Siage dice que dicho fortalecimiento sólo podrá lograrse por intermedio de la "mayoría legal" de las Naciones Unidas, dado que esa mayoría es la única que puede defender el derecho de los pueblos a la libre determinación y condenar el racismo, el *apartheid* y sionismo. El fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas sólo se convertirá en una realidad cuando la "obstinada minoría" desista de su empeño en dividir a la mayoría legal. Esa minoría, que ya no considera aceptables las tradiciones parlamentarias, amenaza con destruir a las Naciones Unidas si las decisiones adoptadas no concuerdan con sus deseos. Cuando constituyó una mayoría en el decenio de 1950, no habló como lo hace hoy de la "tiranía de la mayoría", sino que actuó contra los deseos y los intereses de los pueblos. La mayoría legal usará su fuerza solamente para aplicar los principios y el espíritu de la Carta a fin de preservar la paz basada en la justicia, permitir a todos los pueblos del mundo que decidan su destino y liberar al mundo del racismo, de la hegemonía y de la agresión.

40. El Sr. MREMA (República Unida de Tanzania) dice que la posición de la delegación de su país respecto de la cuestión de la revisión de la Carta es la misma que en el período de sesiones anterior. Los autores de la Carta habrán previsto en los Artículos 108 y 109 un procedimiento determinado para enmendarla, pero esos mismos Miembros se oponen ahora incluso a examinar la aplicación de esas disposiciones. En las dos ocasiones anteriores en que se enmendó la Carta, las delegaciones de que se trata no tuvieron esos recelos. La delegación tanzaniana no entiende por qué no es momento oportuno para realizar una labor seria de revisión de la Carta. Aunque algunos Miembros tuviesen la intención de alterar radicalmente las disposiciones de la Carta, lograrlo sería imposible sin el consentimiento de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

41. Se ha dicho que el "derecho de veto" para un país socialista no es un privilegio, sino una necesidad histórica. La delegación tanzaniana no va a impugnar esa afirmación pero no alcanza a ver por qué, para los nuevos Estados, y en realidad para el tercer mundo, no existe la necesidad histórica de tener el mismo derecho de veto. Sería injusto dejar de manifestar gratitud para con esos Estados que repetidas veces han usado de sus facultades de miembros permanentes del Consejo de Seguridad para apoyar los movimientos de liberación nacional y defender la justa causa de los pueblos que estaban luchando contra la dominación colonial y racista. Sin embargo, sería incongruente que esos mismos Estados que tan admirable y consecuentemente han sostenido los derechos de los pueblos colonizados adoptaran una actitud de oposición incluso a la discusión misma de la posibilidad de extender los derechos de tales pueblos.

42. Mientras que aquellos que sostienen que la Carta ha resistido con éxito la prueba del tiempo subrayan que se ha evitado así al mundo el flagelo de una guerra mundial, pasan por alto la circunstancia de que durante los últimos 30 años centenares de miles de toneladas de bombas se han lanzado sobre seres humanos inocentes en muchas partes del mundo.

43. La delegación tanzaniana no está con la falsa impresión de que todos los problemas que se plantean a la comunidad internacional son consecuencia de la Carta. Señala con preocupación que muchas veces ha habido países que, a fin de beneficiar sus intereses inmediatos, han decidido hacer caso omiso de la obligación que tenían de cumplir estrictamente las disposiciones de la Carta. Por consiguiente, hay que responder como es debido a esas violaciones de la Carta; y eso no se puede hacer verdaderamente sin entrar al mismo tiempo en cierta discusión de las disposiciones de la Carta. He ahí dos aspectos del mismo problema con que el Comité *ad hoc* se ha de enfrentar. Si cabe proponer que el Comité *ad hoc* acometa el primero de esos dos aspectos, que es el más escabroso, no ve qué riesgo se puede correr revisando la propia Carta. Revisar la Carta no quiere decir, en modo alguno, debilitarla, como se ha insinuado.

44. Al prorrogar el mandato del Comité *ad hoc*, no deben escatimarse esfuerzos por asegurar un diálogo útil. Debe prestarse consideración a las sugerencias hechas por el representante de Rumania (1563a. sesión) para mejorar las actividades de las Naciones Unidas y fortalecer su papel, sin que ello signifique, sin embargo, menoscabo para las importantes funciones del Comité *ad hoc*. A ese respecto, el orador observa con simpatía las observaciones hechas por la delegación de México en el Comité *ad hoc* (véase A/10033, pág. 69). La delegación tanzaniana comparte la preocupación del representante de Australia expresada en la 1565a. sesión con respecto a la prevención y el arreglo de controversias internacionales y espera que también se preste consideración a las causas de esas controversias.

45. La delegación tanzaniana cree que debe prorrogarse el mandato del Comité hasta que se llegue a un acuerdo general sobre las disposiciones de la Carta que requieren revisión.

46. El Sr. ABDALLAH (Túnez) dice que, aunque las Naciones Unidas se crearon hace 30 años para que fueran el instrumento de la paz y la seguridad mundiales, se enfrentan ahora con nuevos problemas, como el nuevo orden económico que debe lograrse; el desarrollo económico, social y cultural en la gran mayoría de los Estados Miembros; la lucha contra la pobreza, el hambre, la enfermedad y la ignorancia; la cooperación internacional en todas esas esferas y el establecimiento de nuevas relaciones entre los Estados. Todo ello requiere que la Organización se adapte a esos nuevos problemas, teniendo especialmente en cuenta que su capacidad para resolver conflictos se halla limitada porque la mayoría de sus decisiones no pueden ejecutarse coercitivamente.

47. El número de Miembros de las Naciones Unidas casi se ha triplicado y la Organización se ha vuelto universal. Naturalmente, ese carácter exige que haya igualdad entre todos los Miembros y que los procedimientos de la Organización sean democráticos. La igualdad de los Estados se afirma en el párrafo 1 del Artículo 2 y en el párrafo 1 del Artículo 18 de la Carta y se observa en todos los órganos de las Naciones Unidas con excepción del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad desmiente el principio de igualdad y con frecuencia no cumple su función de promotor principal de la Organización. Se ha sostenido incluso que se ha convertido en un freno para las

actividades de la Organización. El párrafo 1 del Artículo 23, relativo a la composición del Consejo de Seguridad, es anticuado porque varios Estados que no son miembros permanentes del Consejo cumplen, sin embargo, obligaciones especiales en sus respectivas regiones y se consideran investidos también de la delicada misión de mantener la paz y la seguridad.

48. En el marco de la igualdad consagrada por la Carta ¿cómo puede justificarse el sometimiento de Estados soberanos a la tutela mantenida por un grupo pequeño de países? La responsabilidad de cada Estado, basada en los principios de democracia e igualdad, forma la responsabilidad colectiva de todos los Miembros de la Organización. Ningún Estado Miembro está más calificado que otro en el proceso común de adopción de decisiones que emana de esa responsabilidad colectiva.

49. Debe reafirmarse claramente la universalidad de la Organización, y todo nuevo Estado debe tratar de ser Miembro, cualquiera sea el régimen y el sistema económico que haya escogido. La calidad de Miembro no es un derecho impugnado frecuentemente por uno o más miembros permanentes del Consejo de Seguridad, sino un deber primordial de todo nuevo Estado. El empleo del veto para impedir la admisión de un nuevo Miembro indica a menudo los intereses puramente egoístas y oportunistas del Estado que abusa de un privilegio que se le ha otorgado en el interés general. El procedimiento de admisión de nuevos Miembros debe simplificarse. Los Estados Miembros tienen la obligación de ayudar al nuevo Estado en el cumplimiento de sus obligaciones y en el ingreso como Miembro de la Organización lo antes posible. Por ejemplo, la admisión podría examinarse sólo por la Asamblea General, que admitiría al nuevo Miembro por una mayoría de dos tercios.

50. Sin embargo, el problema principal radica no en hallar nuevas fórmulas o correctivos, sino en cambiar la manera de pensar de quienes se oponen incluso a la revisión parcial de la Carta, manifestando así su ignorancia de las disposiciones de la propia Carta, dando la espalda al progreso y a la evolución y rechazando los principios a que ellos mismos se han adherido.

51. El orador desea recordar al representante que rechazó categóricamente hace poco toda modificación de la Carta "inviolable", que él mismo apoyó las dos revisiones de la Carta en un pasado no muy lejano. Después de todo, un texto debe adaptarse a la comunidad a que se aplica. Otro representante, adoptando un parecer análogo, acusó a quienes se inclinaban por la revisión de la Carta de desear arruinar la estructura de las Naciones Unidas. La realidad es exactamente lo contrario: quienes proponen la revisión desean fortalecer la estructura. Como toda obra humana, la Carta puede ser mejorada y debe mejorarse cuando ello sea necesario; además, como toda constitución, la Carta contiene disposiciones relativas a su revisión.

52. La delegación tunecina apoyará cualquier iniciativa fundada y ponderada para la modernización de la Carta y desea que se prorrogue el mandato del Comité *ad hoc* a fin de que pueda emprender un estudio serio de la cuestión.

El Sr. Klafkowski (Polonia), Vicepresidente, ocupa la Presidencia.

53. El Sr. HAFIZ (Bangladesh) cree que uno de los motivos para la divergencia de opiniones sobre la cuestión de la revisión de la Carta es la confusión existente entre el concepto de revisión de la Carta, establecido en el Artículo 109, y el concepto de enmienda de la Carta, previsto en el Artículo 108. Así, la Carta ha estipulado dos procedimientos distintos, condicionados ambos en definitiva al derecho de veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pero no ha definido el alcance de ninguno de ellos. A juicio de la delegación de Bangladesh, esos Artículos prevén cambios básicos y fundamentales en la Carta, aunque por métodos y procedimientos distintos. Desde un punto de vista técnico, la Carta puede considerarse un tratado multinacional que, con arreglo a la práctica del derecho internacional, puede revisarse mediante el examen de conjunto con miras a introducir las modificaciones que se consideren necesarias, o puede enmendarse mediante la modificación de una o más de sus disposiciones. Una enmienda preservaría los principios fundamentales del documento, mientras que una revisión podría incluso afectar esos principios fundamentales. La propia Carta no ha establecido límites en la clase de cambios de que puede ser objeto. A juicio del orador, la diferencia entre el concepto de enmienda y de revisión no es esencial; es sólo una cuestión de fraseología y no de fondo.

54. El mero examen de las observaciones y opiniones de los Estados Miembros sobre la materia no constituye de por sí revisión o enmienda. Por lo tanto, no se justifican los temores manifestados por algunos de que la simple expresión de pareceres de los Estados sobre la cuestión de la revisión de la Carta afectaría negativamente las relaciones de amistad entre los Estados Miembros. Al contrario, el debate y las consultas francas entre los Estados Miembros podrían despejar muchas dudas y fomentar la comprensión internacional y es, por lo demás, un proceso democrático. No cabe sostener que la revisión o enmienda de la Carta contraría los propósitos y principios de la Carta, ya que los propios autores han previsto ese cambio y han elaborado un texto flexible de la Carta a fin de dar lugar a acontecimientos futuros y prever la forma de llenar lagunas. Más aún, ya se han introducido algunas enmiendas en la Carta que no han comprometido la existencia de la Organización, sino que han fortalecido su papel y la han hecho más dinámica y eficaz.

55. No es democrático el privilegio o la prerrogativa especial concedida a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad; no refleja el cambio de la situación en el mundo y en la Organización desde 1945 y retarda la expansión y desarrollo de las relaciones internacionales de amistad y la consecución de los propósitos y la afirmación de los principios de la Carta.

56. La delegación de Bangladesh apoyará las enmiendas o revisiones que sean necesarias para fortalecer el papel de las Naciones Unidas, para promover sus actividades o para fomentar los propósitos y principios de la Carta. Propugna la idea de que se celebren consultas entre los Estados Miembros con ese objeto. Las cuestiones pertinentes son las

siguientes: ¿Es oportuno o apropiado el momento para la enmienda o revisión? ¿Qué enmiendas concretas son indispensables para fortalecer el papel de las Naciones Unidas o para fomentar sus propósitos y principios? ¿Cuáles son las lagunas en la Carta? ¿Debe abolirse el derecho de veto? ¿Retarda en realidad el derecho de veto el desarrollo de las relaciones internacionales o interfiere con el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales?

57. Uno de los defectos de las Naciones Unidas consiste en que carece de un mecanismo para arreglar pacíficamente las controversias o para aplicar las decisiones y resoluciones de la Organización. Se debe aumentar la eficacia de la Corte Internacional de Justicia y lograr que desempeñe un papel más activo en el proceso de consecución de la paz. La delegación de Bangladesh declara su firme adhesión a los propósitos y principios de la Carta y acogerá con beneplácito toda iniciativa encaminada a reforzar el papel de las Naciones Unidas y a aumentar la eficacia de la Carta. Sin embargo, no está a favor de ninguna medida apresurada y recomienda un proceso gradual de examen de las disposiciones de la Carta para la introducción de enmiendas adecuadas. La delegación de Bangladesh considera que las energías de las Naciones Unidas son decisivas para la fuerza y la seguridad de los Estados más pequeños, por lo que recibirá con satisfacción y apoyará toda medida destinada a fortalecer el papel de la Organización y a hacerla más eficaz. Los Estados más pequeños están en constante temor por su existencia y no están libres de la amenaza o del empleo de la fuerza contra su integridad territorial y su independencia política. Además, la delegación de Bangladesh considera que una representación adecuada de todos los Estados Miembros en la Secretaría aumentaría la conciencia de su participación en los asuntos de las Naciones Unidas.

58. El Sr. VANDERPUYE (Ghana) dice que las opiniones de la delegación de Ghana sobre la cuestión de la revisión de la Carta constan en el documento A/AC.175/L.2 (Parte II). Recuerda a la Comisión que la cuestión que se examina no es la de averiguar si debe revisarse la Carta; esa cuestión ya se decidió positivamente con la aprobación de la resolución 3349 (XXIX) de la Asamblea General, por la que se creó el Comité *ad hoc* y se le dio un mandato. La tarea de la Sexta Comisión consiste en examinar el informe del Comité *ad hoc* y planear medidas futuras, como la de prorrogar el mandato del Comité *ad hoc* a fin de permitirle terminar su labor. A juicio de la delegación ghanesa, no debe permitirse que decaiga tan importante tarea relativa a la Carta y debe prorrogarse el mandato del Comité *ad hoc*. Tal vez también sea necesario renovar la invitación hecha a los gobiernos en el párrafo 2 de la resolución 3349 (XXIX).

59. El mandato del Comité *ad hoc* excede a la mera revisión de la Carta: incluye también el examen de otras sugerencias acerca de un funcionamiento más eficaz de las Naciones Unidas que puede o no requerir enmiendas en la Carta. Por esa razón, se ha presentado recientemente a la Sexta Comisión la propuesta de Rumania (A/C.6/437). A juicio de la delegación de Ghana, la denominación de "Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas" parece bastante restrictiva si se considera el amplio alcance de las funciones de ese Comité. Esa es una cuestión de alguna importancia que merece ser considerada por la Sexta

Comisión. No es muy clara la relación que debe haber entre el Comité *ad hoc* y otros comités especiales que cumplen funciones análogas en el examen de los aspectos relacionados con el fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas. Tal vez el Comité *ad hoc* podría desempeñar una

función coordinadora en relación con los demás comités. A fin de evitar la duplicación, tal vez sea necesario establecer un mecanismo de consultas entre esos comités especiales.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

1572a. sesión

Lunes 24 de noviembre de 1975, a las 10.55 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1572

TEMAS 113 Y 29 DEL PROGRAMA

Informe del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas (continuación) (A/10033, A/10102, A/10108, A/10113 y Corr.1 y Add.1 a 3, A/C.6/437)

Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones y la promoción de las normas del derecho internacional en las relaciones entre los Estados: informes del Secretario General (continuación) (A/10218, A/10219, A/10255, A/10289, A/C.6/437)

1. La Srta. RANA (Nepal) observa que, pese a que casi se ha logrado la universalidad en la composición de las Naciones Unidas y pese a la aparición de algunas formas de cooperación internacional, poco se ha progresado para aumentar la eficacia de la Organización como instrumento para mantener la paz y como centro para armonizar las medidas que adoptan los Estados Miembros. Ello se debe no tanto a defectos inherentes en la Carta sino a la falta de voluntad política de los Estados Miembros para cumplir los propósitos y principios consagrados en ella. No obstante, la delegación nepalesa considerará cualquier propuesta encaminada a fortalecer el papel y la eficacia de la Organización. A ese respecto, coincide plenamente con el parecer de que las Naciones Unidas deben preparar y aprobar un código universal de conducta que abarque los derechos y deberes fundamentales de los Estados. Las Naciones Unidas pueden tener verdadera eficacia sólo cuando sean capaces de contribuir más a la creación de nuevas relaciones basadas en principios de igualdad, respeto a la independencia y a la soberanía nacional, no injerencia en los asuntos internos de otros Estados, beneficios recíprocos, renuncia al uso o a la amenaza de la fuerza y respeto al derecho de todo pueblo a escoger libremente su propio sistema de desarrollo económico, social y político.

2. El Sr. GOBBI (Argentina) recuerda que la delegación argentina ha expuesto suficientemente su posición con respecto a la revisión de la Carta en el Comité *ad hoc* (véase A/10033, pág. 9). Las diferencias de opinión entre quienes propician la revisión y quienes prefieren el *statu quo* son comprensibles y, en realidad, son esenciales para mantener el equilibrio dentro de la Organización. Esas diferencias no son en absoluto irreconciliables; fundamentalmente,

quienes abogan por la revisión no proponen ningún cambio radical sino que simplemente desean ajustar la Carta a la realidad del mundo moderno. Cabe destacar que la gran mayoría de los países que favorecen la revisión de la Carta deben su propio nacimiento como Estados soberanos a los principios consagrados en ella y que son ellos los que no han tenido oportunidad de participar en su redacción.

3. La delegación argentina considera que el Comité *ad hoc* constituye un medio esencial y que las propuestas concretas de reforma, el tema del fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas y otras sugerencias como la presentada por la delegación de Australia (1565a. sesión) en relación con el arreglo pacífico, deben estudiarse en un foro especial. Negarse a examinar los temas propuestos es una actitud poco defendible desde el punto de vista intelectual, ya que pasar por alto un problema es la forma menos adecuada de ocuparse de él. Los debates en la Sexta Comisión han abierto senderos de comunicación que permitirán que se evite forzar decisiones y crear antagonismos insuperables. La prudencia es fundamental para el éxito de la empresa. Sin embargo, la delegación argentina está convencida de que la Carta no debe ser sólo expresión de las preferencias de los más fuertes sino el instrumento que recoja las aspiraciones predominantes en toda la sociedad de los tiempos actuales.

4. El Sr. JEANNEL (Francia) pide al Presidente que transmita las felicitaciones del Gobierno francés a los gobiernos cuyos nacionales han sido elegidos hace poco magistrados de la Corte Internacional de Justicia.

5. Dado que la posición del Gobierno francés sobre los temas que se examinan es bien conocida, el orador sólo se va a referir brevemente a los puntos que considera dignos de especial atención.

6. Francia no mantiene una actitud estática frente a un mundo en transformación, sino que trata de adaptar su conducta a los problemas importantes, lo que no implica cambios en el marco institucional. Ese marco institucional refleja un equilibrio valioso con el que sería peligroso jugar. La Carta ha podido cumplir su función de instrumento de la paz y la seguridad internacionales gracias a su flexibilidad. ¿Cómo se puede proclamar que la Organización no cumple los propósitos y aspiraciones de sus Miembros más nuevos cuando se han celebrado períodos extraordinarios de sesiones de la Asamblea General para examinar los nuevos problemas económicos y sociales que afectan a esos

Miembros? Además, esos Estados desempeñan un papel decisivo en las actividades de la Organización; sin su apoyo no se puede hacer nada útil.

7. En tales circunstancias, le preocupa a la delegación de Francia la tendencia a favor de que se enmiende la Carta, aunque está convencida de que los que abogan por ese cambio lo hacen movidos por un deseo sincero de mejorar el funcionamiento de las Naciones Unidas. A causa de las fuertes reservas que inspira, esa tendencia sólo puede añadir un motivo más a la serie de desacuerdos que la Organización debe resolver. Además, el objetivo fundamental de las Naciones Unidas sigue siendo el mantenimiento de la paz y es principalmente porque la Carta atribuye una competencia especial en las cuestiones relacionadas con la paz y la seguridad al órgano en el cual se requiere la unanimidad entre las Potencias que poseen las mayores responsabilidades, por lo que se han logrado resultados efectivos, incompletos si se quiere. Naturalmente, siempre caben las mejoras, y hay que esforzarse continuamente por mejorar el funcionamiento de los diversos órganos, especialmente de la Asamblea General, con los recursos que les asigna la Carta. Es evidente que la eficacia de la Asamblea General depende del apoyo que puedan reunir sus resoluciones. En lugar de forzar las cosas mediante el voto de la mayoría, vale más proceder por consenso. En consecuencia, los proyectos de resolución deben reflejar los intereses fundamentales de los Estados afectados y elaborarse en un clima de estrecha cooperación y concesión recíproca.

8. En términos generales, el Gobierno francés considera que las Naciones Unidas pueden fortalecerse mediante la racionalización de las estructuras de cada uno de sus órganos principales y la adaptación de sus reglamentos. A ese respecto, podrían reactivarse las sugerencias formuladas en 1971 durante las deliberaciones del Comité Especial para la racionalización de los procedimientos y la organización de la Asamblea General. También se pueden aprovechar las propuestas y sugerencias enviadas por los gobiernos en respuesta a la solicitud de opiniones formulada por la Asamblea General sobre el tema del programa relativo al fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas. Los Estados deben tener en cuenta el informe del Grupo de Expertos para el estudio de la estructura del sistema de las Naciones Unidas¹, creado por la resolución 3343 (XXIX) de la Asamblea General.

9. Es probable que esas medidas aumenten la eficacia de la Organización más que cualquier enmienda de textos porque, aunque no siempre las Naciones Unidas han coronado con éxito sus empresas, ello se ha debido más a la falta de voluntad política que a los defectos de los textos.

10. El Sr. RESHETNYAK (República Socialista Soviética de Ucrania) dice que la posición del Gobierno de su país sobre la cuestión de la revisión de la Carta, que figura en el documento A/10113/Add.1, se basa en su indeclinable adhesión a los propósitos y principios de la Carta. Firmemente convencida del carácter, el papel y el significado especiales de la Carta y de su viabilidad en las relaciones internacionales contemporáneas, la delegación ucraniana cree que lo que se necesita para aumentar la eficacia de la Organización no es una revisión de la Carta, sino observar

estrictamente sus principios y aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece.

11. La cuestión planteada a la Comisión es la de averiguar si es ventajoso continuar en ese momento el estudio de las propuestas relativas a la revisión o la enmienda de la Carta y si se justifica que siga en funciones el Comité *ad hoc*. La importancia especial de la Carta radica en que, como acuerdo internacional universal de carácter especial, ha establecido una base jurídica firme para mantener la paz internacional y desarrollar las relaciones internacionales contemporáneas en condiciones de coexistencia y cooperación pacíficas entre Estados con sistemas sociales distintos. En épocas de profundos cambios políticos, económicos y sociales, la Carta ha demostrado su viabilidad y su importancia para el mantenimiento de la paz y la cooperación entre los gobiernos y para el fortalecimiento de principios fundamentales progresistas en las relaciones internacionales contemporáneas y el derecho internacional. Los principios consagrados en la Carta sirven, al mismo tiempo, como base de una amplia gama de acuerdos bilaterales y multilaterales sobre la cooperación internacional a nivel regional, tanto dentro como fuera de la Organización.

12. La importancia de la Carta en las relaciones internacionales contemporáneas hace que sea indispensable considerar con la mayor seriedad las consecuencias que pueden tener los intentos deliberados de alterar o revisar la Carta o las propuestas mal fundadas de revisión o enmienda que sus patrocinadores consideran imprudentemente que pueden aumentar la eficacia de la Organización. Habida cuenta del informe del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas (A/10033) y del informe del Secretario General sobre la cuestión (A/10113 y Corr.1 y Add.1 a 3), la delegación ucraniana desea señalar algunos puntos a la atención de la Comisión.

13. En primer lugar, puede observarse con objetividad que no serviría de nada que el Comité *ad hoc* prosiguiera su labor. El Comité *ad hoc* se ha dividido radicalmente sobre la cuestión de la necesidad de revisar la Carta, y del número relativamente escaso de gobiernos que han respondido a la invitación del Secretario General a presentar opiniones — sólo 43 en los últimos cinco años — la mayoría ha considerado innecesaria la revisión de la Carta. La mayoría de los oradores que han intervenido en el actual período de sesiones de la Asamblea General y han mencionado la cuestión de la Carta han subrayado, primero y sobre todo, la adhesión de los gobiernos de sus países a los propósitos y principios de la Carta. Una cuestión tan importante como la revisión de la Carta requiere la convicción general de la mayoría de los Miembros de que esa revisión es necesaria. Sin esa convicción y acuerdo general no se justifica que el Comité *ad hoc* continúe su labor.

14. En segundo lugar, los gobiernos que han expresado su apoyo a la revisión de la Carta han atacado el principio de unanimidad de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad alegando que ese principio debe ajustarse a la realidad de la situación actual. Sin embargo, olvidan que ese principio de unanimidad es uno de los principios básicos y fundamentales de la Carta. Existen una vinculación e interdependencia muy estrechas entre los principios y propósitos básicos de las Naciones Unidas y la realización

¹ E/AC.62/9.

de esos principios en las disposiciones de la Carta que establecen el mecanismo de funcionamiento de la Organización. El principio de la unanimidad de los cinco miembros permanentes es de decisiva importancia para establecer la relación entre las facultades del Consejo de Seguridad y las de la Asamblea General y refleja de manera muy adecuada la verdadera situación actual de coexistencia entre Estados que poseen dos sistemas sociales y económicos distintos. De conformidad con la Carta, corresponde al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial del mantenimiento de la paz internacional, y el principio de la unanimidad de sus miembros permanentes impide que se haga uso del Consejo o de las Naciones Unidas para fines contrarios al mantenimiento de la paz. No hay razones para afirmar que ese principio impida tener en cuenta los intereses de los países del tercer mundo. En la práctica, y con arreglo a las disposiciones de la Carta, esos países ejercitan su propia suerte de "veto colectivo". La estructura actual de los órganos principales de las Naciones Unidas, incluido el Consejo de Seguridad, permite la participación de los países en desarrollo en escala amplia e intensa en todas las actividades de la Organización y en el proceso de formulación de sus decisiones.

15. En tercer lugar, todos los gobiernos han convenido en que existen importantes posibilidades no explotadas en la Carta y en que el aumento de la eficacia de las Naciones Unidas depende considerablemente de la determinación y voluntad de los Estados de observar estrictamente las disposiciones de la Carta y aunar esfuerzos para la consecución de los objetivos de la Organización. El único método adecuado y lógico consiste en apartarse del examen de la Carta y concentrar todos los esfuerzos en la explotación máxima de las grandes posibilidades que ofrece la Carta para aumentar la eficacia de la Organización y fortalecer su papel.

16. Si bien la delegación ucraniana se opone a los intentos de revisar o destruir la Carta, no rechaza la crítica constructiva de la Organización, motivada por el deseo genuino de eliminar deficiencias, ni desconoce la necesidad de que los gobiernos se esfuercen en común por encontrar medios efectivos para aumentar la eficacia de la Organización. Sin embargo, su delegación debe rechazar todas las propuestas sobre el fortalecimiento de las Naciones Unidas que contradigan la Carta o que tiendan a desvirtuar o socavar sus disposiciones. En las circunstancias actuales, sólo se puede encontrar y realizar medios para promover el papel y la eficacia de la Organización dentro del marco de la Carta y mediante la observancia estricta de sus disposiciones.

17. El Sr. BUSSE (República Federal de Alemania) felicita a las delegaciones del Japón, Nigeria, Polonia y la República Árabe Siria por la elección de nacionales de esos países como magistrados de la Corte Internacional de Justicia.

18. La opinión de la República Federal de Alemania sobre el fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas se ha expresado en la declaración escrita enviada al Secretario General el 15 de julio de 1974², y en las intervenciones de su delegación durante los períodos de sesiones vigésimo

octavo y vigésimo noveno de la Asamblea General (2184a. y 2307a. sesiones plenarias, respectivamente). Los propósitos de la Carta — mantener la paz, asegurar el respeto a los derechos humanos y promover el progreso económico y social — no han perdido importancia con el transcurso de 30 años. Los acontecimientos de los últimos años han demostrado la creciente interdependencia de los Estados; por cierto, el número cada vez mayor de problemas sólo puede resolverse mediante la cooperación mundial. La Organización podrá satisfacer las crecientes esperanzas depositadas en ella únicamente si existe la determinación general de utilizarla como foro para el debate razonado y como instrumento para la consecución de un equilibrio justo de intereses. Uno de los medios para fortalecer el papel de las Naciones Unidas consiste en revisar su eficacia y examinar su funcionamiento con miras a reajustarlo y simplificarlo. Deben utilizarse más cabalmente las posibilidades que a ese respecto ofrecen la Carta y el reglamento. Lo mismo se aplica a los procedimientos previstos en la Carta para el arreglo pacífico de controversias entre los Estados. La Corte Internacional de Justicia, en tanto que órgano judicial principal de las Naciones Unidas, desempeña un papel importante en ese orden de ideas. La interrelación que existe entre el arreglo pacífico de controversias y el fortalecimiento de la eficacia de las Naciones Unidas debe tenerse en cuenta en la planificación futura del programa de trabajos de la Comisión.

19. Con respecto a la revisión de la Carta de las Naciones Unidas, el orador afirma que los propósitos y principios de la Carta deben seguir siendo la base de la coexistencia pacífica entre los Estados y que, por ende, los principios fundamentales de la Carta deben permanecer intactos. Sin embargo, debe examinarse la cuestión de cómo ajustarse a las circunstancias de profunda transformación y, a ese respecto, también sería posible examinar racionalmente las disposiciones que han quedado anticuadas. Habida cuenta de la dificultad de la tarea que se le ha encomendado, el Comité *ad hoc* debe proceder con extremo cuidado en el estudio de las posibles enmiendas. En la etapa actual, debe prorrogarse el mandato de ese Comité por otro año, dándole una definición más clara. También sería útil proporcionar al Secretario General más detalles en lo que respecta a los documentos que deben prepararse para el Comité *ad hoc*.

20. El Sr. JAZIĆ (Yugoslavia) señala que el aumento del número de Miembros de las Naciones Unidas confirma la vitalidad de la Organización y ayuda a fortalecerla. En efecto, las Naciones Unidas han contribuido enormemente a mantener la paz mundial y a resolver importantes problemas internacionales, particularmente a través de la expansión de la cooperación en diversas esferas mucho más allá de las esferas en que tenían interés cuando se estableció la Organización. Aunque es cierto que las Naciones Unidas no siempre han tenido éxito en sus esfuerzos y frecuentemente han estado paralizadas en situaciones de agresión e intervención militar extranjeras, las Naciones Unidas sólo pueden ser lo que los Miembros hagan de ellas. La conducta de los Estados, más que las deficiencias de la Carta o las debilidades de organización, son el factor decisivo que determinan su papel.

21. Muchas dificultades se deben a la negativa de algunos Estados Miembros a ajustar su conducta a las obligaciones

² Véase A/9695.

que han asumido en virtud de la Carta. Aunque el resultado de lograr el principio de universalidad debería ser plantear ante las Naciones Unidas los principales problemas internacionales, algunos elementos internacionales tienden a soslayar el mecanismo de las Naciones Unidas y a buscar acomodos en grupos cerrados. En el pasado se han impedido los esfuerzos encaminados a imponer sanciones a países que violaban persistentemente las decisiones de las Naciones Unidas, pese a la voluntad de la mayoría de los Miembros. Más recientemente se han hecho esfuerzos para desacreditar a la Organización a raíz de algunas decisiones adoptadas por grandes mayorías, aunque anteriormente no había habido oposición contra la adopción de decisiones por voto mayoritario.

22. Otra práctica inaceptable es la de poner calificativos a los países que participan en ciertas decisiones y la amenaza de suspender las contribuciones ordinarias o voluntarias. La delegación de Yugoslavia no puede aceptar los intentos de ningún país de prescribir normas de conducta a otros, ya que todos los países son libres para expresar sus opiniones y las decisiones deben adoptarse de forma democrática. En consecuencia, la delegación de Yugoslavia no puede aceptar que se resuelvan los problemas sin la participación directa en pie de igualdad de los países interesados.

23. La experiencia ha enseñado que no puede detenerse el progreso y que los esfuerzos persistentes y concertados por una causa justa pueden lograr que lo que en un momento dado se consideraba inaceptable acabe por ser aceptable para todos. La adopción de decisiones correctas naturalmente no equivale de por sí a una solución de los problemas. En consecuencia, el objetivo debería ser adoptar decisiones conjuntas a través de un sistema de consultas oportunas entre los Estados Miembros. Uno de los requisitos para el debido funcionamiento de la Organización es una mayor cooperación entre la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, y que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad se abstengan de abusar de su derecho de veto. Aunque muchos Estados Miembros han señalado que la Carta ofrece amplias posibilidades para resolver las controversias pacíficamente con arreglo al Capítulo VI, la petición de que se apliquen las medidas previstas en ese Capítulo no debe utilizarse como pretexto para oponerse a la aplicación de sanciones y de otras medidas con arreglo al Capítulo VII. Los esfuerzos para fortalecer el papel de las Naciones Unidas están relacionados con la actividad de la Organización encaminada a resolver problemas económicos. A ese respecto, debería continuarse la práctica de convocar períodos extraordinarios de sesiones de la Asamblea General, práctica que también debería extenderse para que abarcara otras esferas tales como la del desarme.

24. La cuestión del examen y la revisión de la Carta depende de la medida en que los cambios sean realmente esenciales para fortalecer el papel de las Naciones Unidas. Debería tomarse en consideración toda posibilidad de aumentar la eficacia de la Organización. A ese respecto, sería necesaria cierta reestructuración del sistema. La importancia de las nuevas esferas de la cooperación internacional ha aumentado desde que se adoptó la Carta; en consecuencia, parecería justificado realizar revisiones periódicas de las condiciones para enmendar la Carta y de la posibilidad de hacerlo. En cualquier caso, la revisión de la

Carta debería emprenderse solamente sobre la base del consenso más amplio posible.

25. El Sr. BROMS (Finlandia) dice que las opiniones del Gobierno de Finlandia sobre la cuestión de la revisión de la Carta fueron transmitidas al Secretario General el 26 de septiembre de 1972³. Además, la delegación finlandesa participó en el período de sesiones de 1975 del Comité *ad hoc* y encontró provechoso el intercambio de opiniones. Ninguna delegación insistió en una revisión general rápida y revolucionaria de la Carta, y con frecuencia se destacó que era esencial tratar de llegar a un consenso sobre cualquier problema determinado. Varios miembros del Comité *ad hoc* presentaron ideas relativas a las disposiciones de la Carta que, a su juicio, necesitaban más ser enmendadas. No se presentaron propuestas textuales, lo cual pudiera interpretarse que indica la conciencia de falta de consenso entre los Miembros en el momento actual. De conformidad con el mandato del Comité *ad hoc*, se presentaron también ideas sobre las formas de hacer más efectivo el funcionamiento de la Organización que no requiriesen enmiendas de la Carta.

26. En cuanto al futuro del Comité *ad hoc*, el actual debate demuestra un fortalecimiento de la tendencia que dominó en el anterior período de sesiones. Una clara mayoría de las declaraciones parece estar a favor de que continúen los trabajos del Comité *ad hoc*. Si la Asamblea General decidiera renovar el mandato del Comité *ad hoc*, éste no necesitaría entablar un debate general tan extenso como el sostenido durante su primer período de sesiones. También es de esperar que todos los miembros del Comité *ad hoc* estén dispuestos a ponerse de acuerdo en un programa para la continuación de su trabajo y en los métodos de trabajo que haya que adoptar. La propuesta mexicana contenida en el anexo II al informe del Comité *ad hoc* propugna el establecimiento de dos subcomités, uno para estudiar las propuestas para el fortalecimiento de las Naciones Unidas que parezcan requerir enmiendas de la Carta y el otro para examinar las sugerencias y propuestas que no requieran enmiendas de la Carta. La delegación de Finlandia no está a favor de ese criterio, que probablemente destacaría excesivamente las propuestas que parecieran requerir enmiendas de la Carta. La delegación de Finlandia considera que es mejor criterio asignar las propuestas a los subcomités por materias.

27. La Srta. DAHLERUP (Dinamarca) declara que el Gobierno danés se adhiere plenamente a la Carta de las Naciones Unidas, que ha demostrado ser de por sí un instrumento flexible y único para promover los propósitos últimos de la Organización. La Carta no es perfecta, y varias de sus disposiciones han quedado anticuadas, pero ello no la priva de su utilidad cuando los países se adhieren a ella con lealtad y cuando se utiliza de una forma debida, justa y conciliatoria. La Carta previó la posibilidad de enmienda en el Artículo 108 y de revisión en el Artículo 109. En el vigésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General, la delegación de Dinamarca tenía graves dudas de que fuera tiempo de revisar la Carta, aunque parte del mandato del Comité *ad hoc* parecía muy útil y realista, especialmente la petición dirigida al Comité de examinar las sugerencias para un funcionamiento más efectivo de las Naciones Unidas que pudieran no requerir enmiendas de la

³ Véase A/8746/Add.3.

Carta. El Gobierno danés, en su respuesta de 19 de julio de 1971 a la invitación contenida en la resolución 2697 (XXV) de la Asamblea General de expresar sus opiniones y sugerencias sobre la revisión de la Carta, declaró que consideraba que una revisión general no tendría utilidad en aquel momento, ya que parecía no haber una amplia base de acuerdo entre los Estados Miembros sobre la cuestión y que, por consiguiente, era poco probable que la iniciación del proceso de revisión llevara a un fortalecimiento de las Naciones Unidas⁴. Es de lamentar que esa opinión se haya visto confirmada por el informe del Comité *ad hoc*, que parece indicar que ha aumentado la disparidad entre los diferentes puntos de vista de los Miembros. No obstante, el Comité no debería abandonar sus esfuerzos por encontrar la forma de fortalecer el papel de las Naciones Unidas. Debería ser posible encontrar esferas en que los Miembros pudieran llegar a soluciones comunes de forma pragmática.

28. La delegación danesa conviene con la delegación australiana en que merecen más examen los métodos y el mecanismo para el arreglo pacífico de las controversias internacionales tal como se describen en el informe del Secretario General (A/10289). El Comité también podría aprovechar con utilidad las ideas y sugerencias contenidas en el informe del Grupo de Expertos para el estudio de la estructura del sistema de las Naciones Unidas.

29. El Sr. VAN BRUSSELEN (Bélgica) dice que la delegación de Bélgica, cuando se abstuvo de votar sobre la resolución 3349 (XXIX) de la Asamblea General, tenía graves dudas acerca de la idea de emprender una revisión completa de la Carta y de establecer un comité para ese fin. Después de transcurrido un año, durante el cual el orador asistió personalmente a todas las reuniones del Comité *ad hoc*, solamente puede decir que las dudas de la delegación belga han aumentado muy considerablemente. Como declaró el Ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica, que expuso la posición del Gobierno sobre esa cuestión durante el debate general de la Asamblea General el 25 de septiembre de 1975 (2361a. sesión plenaria), la delegación belga no deseaba votar contra el examen de la forma de mejorar el funcionamiento de las Naciones Unidas o los posibles cambios necesarios de la Carta. El orador considera que esa posición era correcta, pero los acontecimientos han demostrado ahora que es imposible llegar a un acuerdo ni tan siquiera sobre el principio de una revisión amplia de la Carta. El informe del Comité *ad hoc* demuestra tan profundas diferencias de opinión y tal falta de entendimiento que difícilmente podría esperarse una solución.

30. El Relator del Comité *ad hoc*, en su excelente presentación del informe en la 1561a. sesión, señaló debidamente a la atención de la Comisión el párrafo 9, el único párrafo con contenido sustantivo, y acertadamente apuntó que se precisaba una resolución en la que se sustituyeran las diferencias por esfuerzos encaminados a la cooperación. La delegación de Bélgica se suma plenamente a ese llamamiento, ya que considera que esa cooperación es posible.

31. Aunque ciertamente no comparte todas las ideas o suscribe todas las propuestas presentadas por Rumania en el documento A/C.6/437, comparte la preocupación de la

delegación rumana, suscribe las ideas generales en que se basa ese documento y acepta la idea básica de que es conveniente e incluso necesario fortalecer el papel de las Naciones Unidas y mejorar su funcionamiento. En efecto, en años anteriores la delegación de Bélgica ha patrocinado proyectos de resolución presentados por Rumania sobre este tema.

32. Las Naciones Unidas fueron creadas como resultado de un período histórico excepcional por un puñado de dirigentes que buscaban ciertas metas bien definidas pero que no pensaban en crear un gobierno mundial. Como ha destacado el representante de los Países Bajos (1566a. sesión), ellos también tenían diferencias en cuanto a los medios de lograr sus metas. Bélgica, por ejemplo, se opuso firmemente en la Conferencia de San Francisco al derecho de veto. No obstante, los fundadores de las Naciones Unidas al menos estaban unidos en sus metas, y el debate actual demuestra que ciertamente ya no es así por el momento.

33. La Carta tiene puntos débiles y puntos fuertes, como todas las constituciones, y contiene algunas ideas que eran muy avanzadas para su tiempo, pero carece de otras que han surgido desde entonces y han pasado a ser muy importantes. Desde 1945 el mundo ha experimentado cambios rápidos, y algunos parecen considerar que la Carta tiene solamente carácter histórico. Ahora bien, el orador se pregunta si esos cambios son razón suficiente para descartar un instrumento que ha servido tan bien y que sigue teniendo tantos servicios que prestar. La Constitución belga no fue enmendada hasta después de transcurridos casi 100 años desde su promulgación inicial en 1830, y es la Constitución de un Estado, no de una organización cuya finalidad es promover la comprensión y la cooperación entre Estados soberanos independientes.

34. Aunque algunos oradores han considerado axiomático que, como las circunstancias han cambiado también debe cambiar la Carta, los debates sostenidos en el Comité *ad hoc* y en la Sexta Comisión contienen pocas críticas sustantivas de la Carta. Muchos partidarios de la revisión de la Carta han expuesto opiniones que rayan con un ideal: lo que podría ser la Carta con sólo que algunos países convinieran voluntariamente en aplicar ciertos principios cuidadosamente escogidos. Estas opiniones o son insuficientemente realistas o se proponen construir una organización totalmente diferente de lo que ahora son las Naciones Unidas.

35. Por otra parte, muchos adversarios de la revisión de la Carta han dado la impresión de estar contentos, tal vez demasiado fácilmente, con lo logrado, sin desear mirar al futuro, como si rechazaran la noción de que lo que el representante soviético ha denominado la historia de las Naciones Unidas pudiera ser diferente de su prehistoria. Incluso durante su prehistoria, la Carta experimentó varias enmiendas dictadas por la necesidad. Apenas nadie en 1945 podía prever la rapidez con que iba a avanzar el proceso de descolonización y el papel decisivo de las Naciones Unidas en ese proceso, o el hecho de que el Consejo de Administración Fiduciaria iba a perder virtualmente su razón de ser. Pocos podrían sostener ahora que las insuficiencias de la Carta han detenido la elaboración de un nuevo orden económico, o que una diferente redacción de algunos Capítulos de la Carta podría haber acelerado ese proceso.

⁴ Véase A/8746.

36. Si hay una lección que sacar del informe del Comité *ad hoc*, y una cuestión en la que todos pueden estar de acuerdo, es que el tema en examen es exclusivamente político. Tomando eso como punto de partida, mucho podría hacerse si existiera la voluntad política necesaria a todos niveles. Entonces, el texto mismo de la Carta pasaría a ser secundario, puesto que la Carta ya no sería más que lo que debería ser: un cuerpo de principios y mecanismos para guiar la voluntad política hacia la consecución de metas aceptadas por todos. La Carta no tendría que ser objeto de una revisión completa, ya que hacerlo no presenta ventajas y sí muchos peligros. Eso no significa que no debería cambiarse en absoluto el funcionamiento de las Naciones Unidas, pero es esencial convenir en un orden de prioridad. Al respecto, el orador es escéptico en cuanto a la afirmación de algunos oradores de que la revisión de la Carta no significa necesariamente su enmienda.

37. Muchas delegaciones partidarias de redactar de nuevo la Carta han hablado de la necesidad de introducir más igualdad y más democracia en las Naciones Unidas. Más igualdad significa que el veto debería o bien abolirse o darse a todos los Estados Miembros. El orador señala en respuesta que, aunque la delegación belga luchó contra el veto, nunca desde 1945 le ha impedido desempeñar el papel que creía que debería o podría desempeñar en las Naciones Unidas. Además, el veto, aunque quizás sea un privilegio, es ciertamente más una carga de obligaciones y de graves responsabilidades que pocos estarían dispuestos a asumir.

38. Por muy conveniente que pueda parecer la eliminación del veto en abstracto, hay que ser realista. A ese respecto, el orador cita una declaración hecha en el Comité *ad hoc* por el representante de la India, quien señaló que la eliminación del veto no haría necesariamente al mundo mejor, ni su extensión a otros miembros mejoraría necesariamente la situación internacional, ya que no son los procedimientos de votación los que corrigen las situaciones, sino la voluntad de respetar escrupulosamente las disposiciones, los principios y los propósitos de la Carta (véase A/10033, pág. 52).

39. Hacer a las Naciones Unidas más democráticas, si el orador ha entendido correctamente esa idea, significa básicamente dos cosas: poner a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad en pie de igualdad, y dar a las decisiones de la Asamblea General carácter obligatorio. Ahora bien, a su juicio hay democracia en la Asamblea General si cada Estado tiene un voto y las soluciones se adoptan por mayoría simple. En la mayoría de los parlamentos bicamerales nacionales, una cámara tiene poderes más amplios que la otra. Hacer obligatorias las decisiones de las Naciones Unidas significaría crear una organización totalmente diferente de la actual e inevitablemente llevaría al retiro de muchos de sus Miembros actuales, ya que pocos países estarían dispuestos a pertenecer a una organización que tuviera el carácter de gobierno mundial.

40. Como los argumentos a que el orador se ha referido miran al ideal de una organización que tiene poco en común con las Naciones Unidas, no es probable que ayuden a las Naciones Unidas a funcionar de forma más eficaz. Por consiguiente, es natural que den lugar a desacuerdos. Por otra parte, le ha sorprendido observar que todas las delegaciones en la Sexta Comisión están de acuerdo en que

hay que fortalecer el papel de las Naciones Unidas y hacer que funcionen más eficazmente. Cabe, pues, esperar que la mayoría de la Comisión tome eso como base común y llegue a un acuerdo sobre lo que se debería y se podría emprender.

41. Debían estudiarse más a fondo varias sugerencias hechas en el Comité *ad hoc*. Como ejemplos, el orador menciona la propuesta colombiana de transformar el Consejo de Administración Fiduciaria en un consejo de derechos humanos y de tutela (*ibid.*, pág. 16), las propuestas hechas por muchas delegaciones para fortalecer el papel de la Corte Internacional de Justicia y las peticiones de revisión de los procedimientos de las Naciones Unidas. Al respecto, también hay que considerar el informe del Grupo de Expertos para el estudio de la estructura del sistema de las Naciones Unidas.

42. El orador está de acuerdo con los representantes de Australia y de los Estados Unidos y con otros representantes en que hay que estudiar más a fondo las formas de prevenir las controversias y de arreglar pacíficamente las que surjan.

43. Algunas de esas sugerencias pueden llevar a propuestas de enmendar la Carta y, como en el caso de la ampliación del Consejo de Seguridad, tales propuestas tendrían bastantes probabilidades de ser aprobadas. En efecto, todas las sugerencias podrían llevar a un fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas y a mejoras en su funcionamiento.

44. La delegación belga sigue convencida de que la Carta podría seguir prestando valiosos servicios en el futuro si se siguieran interpretando sus disposiciones de forma congruente y dinámica. Ahora bien, una revisión amplia ahondaría los desacuerdos existentes, crearía otros nuevos e, indudablemente, llevaría al fracaso. Un acuerdo sobre las formas de fortalecer el papel de las Naciones Unidas, que el orador considera posible, beneficiaría a las Naciones Unidas y a todos sus Miembros.

45. El Sr. MANSFIELD (Nueva Zelandia) dice que, al decidir apoyar la resolución 3349 (XXIX) de la Asamblea General, la delegación neozelandesa tuvo debidamente en cuenta el hecho de que, en vista de los cambios tan importantes que se habían producido en la composición de las Naciones Unidas y en las realidades políticas, económicas y sociales a que debían hacer frente, una gran proporción de los Miembros estaban claramente a favor de que se estudiara la forma en que se pudiera actualizar la Carta. Al mismo tiempo, la delegación de Nueva Zelandia estaba percatada de que los patrocinadores de aquella resolución no pretendían volver a redactar íntegramente la Carta y de que sabían perfectamente que revisar la Carta era una tarea delicada que había que abordar con moderación y sentido de la responsabilidad, sin esperar resultados inmediatos, imponer la voluntad de una mayoría, ni recurrir a cualesquiera otras presiones.

46. Nueva Zelandia, que es miembro del Comité *ad hoc*, no se hizo ilusiones de que éste pudiera desempeñar su amplio mandato en un sólo período de sesiones. Todos, incluidos los más comprometidos en la revisión de la Carta, tenían conciencia de los límites de lo posible en esa esfera. Aparte del hecho evidente de que el principio de una-

nimidad del Consejo de Seguridad se aplica también al procedimiento de enmienda de la Carta, por lo general se acepta que, si se quiere avanzar, es necesario convencer a todos los Miembros de la Organización de que no se van a tomar medidas precipitadas y de que nadie desea liquidar la Carta.

47. Por lo tanto, no es razonable insinuar que la falta de resultados concretos del primer período de sesiones del Comité *ad hoc* constituya un motivo suficiente para negarse a renovar su mandato. El Comité *ad hoc* ha logrado prácticamente lo más que cabía esperar dadas las circunstancias. El intercambio preliminar de opiniones mantenido ha sido indudablemente útil, ya que ha hecho posible una mejor comprensión de las posiciones de las delegaciones y ha proporcionado la oportunidad de ventilar nuevas ideas y de aclarar o desarrollar otras ya expresadas.

48. El Sr. Mansfield desea mencionar brevemente algunas de las opiniones sustantivas más importantes del Gobierno neozelandés, que figuran más extensamente en las páginas 77 a 81 del informe del Comité *ad hoc*.

49. En lo que se refiere a la admisión de nuevos miembros en las Naciones Unidas, el Gobierno de Nueva Zelandia cree que la condición que se establece en el párrafo 1 del Artículo 4 de la Carta, de que los solicitantes deban ser "amantes de la paz", introduce un criterio innecesariamente subjetivo. El principio de universalidad y la opinión tan difundida de que ser Miembro de las Naciones Unidas debe considerarse principalmente como un deber hacen pensar que la admisión como miembro debe estar abierta a cualquier entidad que satisfaga el criterio de estatidad generalmente aceptado en el derecho internacional. Siendo así, no hay ningún motivo que justifique someter las solicitudes de admisión al principio de unanimidad, de forma que sería preferible exigir únicamente una mayoría de dos tercios en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General.

50. En segundo lugar, el Gobierno de Nueva Zelandia cree que es posible introducir ciertos cambios en las disposiciones relativas a las sanciones que se pueden aplicar a un Miembro culpable. También en ese caso, el criterio de universalidad y la convicción de que la condición de Miembro no constituye tanto un privilegio como una obligación ponen de manifiesto que no es conveniente invocar la cláusula de expulsión contenida en el Artículo 6 y dispensar así al Estado culpable de sus obligaciones en virtud de la Carta. Sin embargo, en su forma actual la Carta dispone en su Artículo 5 que un Miembro únicamente puede ser suspendido — en vez de expulsado — en una situación en que haya sido objeto de acción coercitiva por parte del Consejo de Seguridad. Indudablemente, sería mejor estipular diversas sanciones contra un Miembro que violase la Carta, incluida la suspensión, como sanción máxima, del ejercicio de algunos o de todos los derechos y de los privilegios inherentes a su calidad de Miembro, pero no de las obligaciones como Miembro. A diferencia de las decisiones relativas a la expulsión, la decisión de aplicar esas sanciones no parece exigir la aplicación del principio de unanimidad, si bien tal vez convenga exigir una mayoría especialmente calificada, por ejemplo, dos terceras partes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General.

51. Otras esferas con respecto a las cuales Nueva Zelandia ha manifestado estar dispuesta a examinar propuestas de

cambio, si bien no todas ellas exigen introducir enmiendas en la Carta, son las operaciones de mantenimiento de la paz, las disposiciones del Capítulo XI de la Carta y la reforma estructural en la esfera de la cooperación económica y social. Naturalmente, existen también otras disposiciones de la Carta que actualmente resultan obsoletas o inapropiadas tales como las referencias a los "Estados enemigos" en el Artículo 53. Tales referencias deberían eliminarse.

52. Aunque es posible que en su primer período de sesiones el Comité *ad hoc* no haya obtenido resultados en el sentido estricto de la palabra, no cabe duda de que ha preparado el terreno para sus trabajos futuros. Es evidente que debe dejarse que el Comité prosiga sus labores, y tal es el deseo patente de la gran mayoría de la Sexta Comisión.

53. Con todo, para que ese trabajo sea constructivo, deben cumplirse dos condiciones importantes y conexas. En primer lugar, se ha de moderar la oposición al trabajo del Comité *ad hoc* de los que se oponen a la revisión de la Carta. Para ello, parece que se ha de encontrar alguna forma de corregir lo que el informe describe como "una discrepancia fundamental respecto de la necesidad de llevar a cabo una revisión de la Carta". En segundo lugar, el Comité *ad hoc* debe establecer métodos de trabajo apropiados. Se podrá progresar en cierto grado hacia la satisfacción de esas condiciones si se tiene presente que ninguna delegación ha insistido en que la introducción de enmiendas a la Carta sea el único método para mejorar el funcionamiento de las Naciones Unidas. Así, por ejemplo, el representante de Nueva Zelandia en el Comité *ad hoc* ha dicho explícitamente que el Gobierno de su país no considera esencial introducir enmiendas a la Carta en los casos en que una reforma o una innovación igualmente eficaz puedan realizarse por medios menos complicados. Añadió que Nueva Zelandia atribuye tanta importancia al inciso c) del párrafo 1 de la resolución 3349 (XXIX) de la Asamblea General, en que se encarga al Comité *ad hoc* que considere otras sugerencias para el funcionamiento más eficaz de las Naciones Unidas que puedan no requerir la introducción de reformas en la Carta, como otra parte del mandato del Comité (*ibid.*, págs. 78 y 81).

54. Por otra parte, es evidente que muchas delegaciones consideran conveniente y necesario examinar ciertos aspectos del funcionamiento de las Naciones Unidas y de su Carta que pueden llevar a la introducción de enmiendas a dicho instrumento. Las delegaciones que sostienen esa opinión están evidentemente interesadas sobre todo en mejorar el funcionamiento y fortalecer el papel de las Naciones Unidas, pero no están dispuestas a aceptar que un examen crítico del funcionamiento de las Naciones Unidas excluya artificialmente la reforma de la Carta. También se ha señalado que algunas de las enmiendas propuestas a la Carta, por ejemplo, las relativas a la eliminación de cláusulas obsoletas o actualmente no pertinentes, no pueden incluirse en sentido estricto en el concepto de fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas.

55. Así, pues, cabe esperar que al Comité *ad hoc* le sea más fácil realizar progresos en la esfera de las propuestas que no implican la reforma de la Carta; al organizar sus trabajos debería tomar debida cuenta de esa posibilidad. Al mismo tiempo, debe evitarse dejar de lado o posponer la discusión de aquellas sugerencias que impliquen enmiendas.

56. La delegación de Nueva Zelandia confía firmemente en que, con cierta comprensión de las cuestiones que ha planteado y con la buena voluntad de todos, es posible evitar la confrontación y que, con el apoyo y la asistencia plenas de la Secretaría, el Comité *ad hoc* celebrará en el futuro períodos de sesiones beneficiosos y constructivos.

Organización de los trabajos

57. El PRESIDENTE dice que, como la Comisión lleva ocho sesiones de retraso, agradecerá que las delegaciones que deseen hacer uso de la palabra en relación con los temas de derechos humanos en los conflictos armados, el cumplimiento por los Estados de las disposiciones de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y el programa de asistencia de las Naciones Unidas para la enseñanza, el estudio, la difusión y una comprensión más amplia del derecho internacional, estén preparadas para hacerlo en cualquier momento durante la semana en curso, a fin de que el examen de esos temas quede concluido a finales de la semana. Eso es muy importante si se quiere que la Comisión concluya a tiempo su programa de trabajo, como ha hecho en el pasado. Los temas que ha mencionado se examinarán en forma sucesiva.

58. El Presidente dice que, si no hay objeciones, considerará que la Comisión está de acuerdo en organizar de esta forma sus trabajos.

Así queda acordado.

TEMAS 114 Y 70 DEL PROGRAMA

Respeto de los derechos humanos en los conflictos armados: informe del Secretario General (A/10195 y Add.1)

Los derechos humanos en los conflictos armados: protección de los periodistas en misión peligrosa en las zonas de conflictos armados (A/10147)

59. El PRESIDENTE sugiere que, como ha venido haciendo en el pasado al examinar la cuestión del respeto de

los derechos humanos en los conflictos armados, la Comisión acceda a la solicitud del Gobierno suizo, que tan importante papel desempeña en esa esfera, de participar en los debates sin derecho a voto.

60. El Presidente dice que, si no hay objeciones, considerará que la Comisión lo autoriza a hacer los arreglos necesarios para ello.

Así queda acordado.

TEMA 110 DEL PROGRAMA

Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la labor realizada en su octavo período de sesiones (continuación*) (A/10017, A/C.6/L.1016, A/C.6/L.1017, A/C.6/L.1021)

61. El PRESIDENTE anuncia que el Afganistán y el Gabón se han unido a los patrocinadores del proyecto de resolución A/C.6/L.1021.

TEMA 109 DEL PROGRAMA

Sucesión de Estados en materia de tratados: informe del Secretario General (continuación) (A/10198 y Add.1 a 5, A/C.6/L.1019, A/C.6/L.1022, A/C.6/L.1023)**

62. El Sr. RASHID (Afganistán) dice que desea corregir la enmienda de la delegación afgana (A/C.6/L.1022) al proyecto de resolución A/C.6/L.1019. La intención de la tercera enmienda de su delegación no es sustituir el texto actual del inciso a) del párrafo 1 de la parte dispositiva por un nuevo texto, sino insertar un nuevo inciso a) y cambiar la designación de los incisos a) y b) actuales por b) y c), respectivamente.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

* Reanudación de los trabajos de la 1533a. sesión.

** Reanudación de los trabajos de la 1569a. sesión.

1573a. sesión

Martes 25 de noviembre de 1975, a las 10.55 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1573

TEMAS 113 Y 29 DEL PROGRAMA

Informe del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas (continuación) (A/10033, A/10102, A/10108, A/10113 y Corr.1 y Add.1 a 3, A/C.6/437)

Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones y la promoción de las normas del derecho internacional en las relaciones entre los Estados: informes del Secretario General (continuación) (A/10218, A/10219, A/10255, A/10289, A/C.6/437)

1. El Sr. BAVAND (Irán) dice que el tema del fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas se relaciona con una cuestión importante que debe ser objeto de atención especial y continua de la Asamblea General.

2. El sistema de las Naciones Unidas, que se estableció para fomentar la seguridad del sistema de Estado-nación en un mundo interdependiente, no siempre ha tenido éxito. No obstante, conserva todavía su adaptabilidad y una relativa capacidad para ocuparse con eficacia de los problemas internacionales existentes.

3. Algunos partidarios del *statu quo* constitucional creen que las Naciones Unidas deberían ser reforzadas y actuali-

zadas exclusivamente por intermedio de la mejora y desarrollo de su mecanismo actual, sin cambio alguno en la Carta. Entre sus sugerencias se incluyen la reinterpretación de la Carta por intermedio de instrumentos jurídicos y políticos previstos en ella, una mayor investigación de las posibilidades que brindan los Capítulos VI y VII, la intensificación e institucionalización del sistema de jurisprudencia que ha crecido dentro de las Naciones Unidas y el desarrollo permanente del derecho internacional. En el otro extremo están quienes creen que tales medidas, si bien son imperativas, no son suficientes y debían unirse a la revisión y examen cabales de la Carta, para adecuarla a la realidad moderna.

4. Entre esos dos extremos hay un tercer grupo de Estados que asume una actitud reformista respecto de la Carta. En principio no atacan la base jurídica de la opinión de los partidarios de la revisión, pero ponen en duda la conveniencia política de un enfoque tan general. No excluyen la posibilidad de enmendar disposiciones concretas de la Carta en las circunstancias adecuadas.

5. No deben considerarse las Naciones Unidas como una entidad estática, salvo en lo que respecta a sus propósitos y principios fundamentales, sino evolutiva, abierta y flexible ante las necesidades constantemente cambiantes de la comunidad internacional y las esperanzas en aumento de la humanidad. El fortalecimiento de su papel depende principalmente de la voluntad política de sus Miembros. Las propias Naciones Unidas, sin embargo, pueden ser un factor importante en la movilización de esa voluntad, y al hacerlo deben tener en cuenta la realidad moderna, incluso la tendencia a la relajación de las tensiones y a la universalidad de la participación en la comunidad internacional, la mayor interdependencia de los Estados Miembros, el descontento activo de un sector importante de la humanidad con la situación actual de las relaciones económicas internacionales, la división entre países desarrollados y países en desarrollo, con diferentes niveles de desarrollo y diferentes sistemas sociales dentro de cada uno de esos grupos, y el deseo cada vez mayor de la comunidad internacional de una gestión y aprovechamiento racionales de los recursos de los fondos marinos y el espacio ultraterrestre en beneficio de toda la humanidad.

6. La Carta, como puede verse en el párrafo 1 del Artículo 1, es un documento orientado hacia la seguridad que asigna un lugar secundario a las cuestiones económicas. Sólo desde mediados del siglo XX se ha reconocido la relación entre el bienestar económico internacional y la paz internacional y se han intentado crear los mecanismos para fomentar, según dice el Artículo 55, la creación de "las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias... entre las naciones". Esa relación se ve ahora más claramente que nunca.

7. En la época en que se aprobó la Carta no podían preverse cuestiones como la aplicación económica y política de la energía nuclear, las operaciones de mantenimiento de la paz, el medio ambiente humano, los usos pacíficos o militares de los fondos marinos y el espacio ultraterrestre y el papel de las empresas multinacionales en las relaciones internacionales y, de esta manera, la aplicación de la Carta a esos asuntos ha sido difícil, cuando no imposible. En consecuencia, recurrir a la interpretación de la Carta no

brinda las respuestas necesarias en algunos casos, y parece requerirse un mejoramiento sustantivo. Las sugerencias en cuanto a tal mejora, por lo tanto, no deben considerarse heréticas. En realidad, desde el punto de vista jurídico, los fundadores de la Carta contemplaron tales posibilidades incluyendo disposiciones especiales relativas a la enmienda y revisión por una conferencia general. Ya se han hecho varios cambios con objeto de ajustar la estructura de diversos órganos a la mayor cantidad de Miembros de las Naciones Unidas. No obstante, deben fijarse prioridades. A ese respecto, su delegación estima que la raíz de la crisis internacional actual se encuentra en el desajuste estructural del sistema económico internacional y que la revisión total del orden existente y el establecimiento de un conjunto nuevo de relaciones económicas internacionales basado en la igualdad y el interés común de todos los países son las tareas más importantes y urgentes que deben realizarse. Una evaluación general de los Capítulos IX y X de la Carta, con miras a incorporar los nuevos principios económicos fundamentales y a provocar cambios en la estructura del Consejo Económico y Social congruentes con sus nuevas responsabilidades, constituiría un paso positivo en esa dirección y debería dársele prioridad.

8. Su delegación no está comprometida con ninguna vía determinada de acción para mejorar la Carta y revitalizar las Naciones Unidas. Cualquier medio que se adopte para lograr esos fines, ya sea por intermedio del Comité *ad hoc* o de cualquier órgano semejante, contará con su pleno apoyo. Pero debe reconocerse la necesidad de tal acción, y ha de darse el primer paso.

9. La labor realizada hasta el momento por el Comité *ad hoc* debe considerarse como un comienzo. Es lógico, dado lo complejo y difícil de la tarea que tiene por delante, que se renueve el mandato del Comité.

10. El Sr. BOUCHOUAREB (Argelia) dice que Argelia, como expresó recientemente el Presidente de su delegación al inaugurarse el trigésimo período de sesiones de la Asamblea General, conserva su fe en las Naciones Unidas. No cabe negar ni subestimar la labor notable de la Organización, cuyo papel en el mantenimiento de la paz y la consolidación de la seguridad ha sido relativamente positivo. Tiene deficiencia, sin embargo, como lo demuestra su impotencia respecto de problemas como la cuestión de Palestina u otros problemas que en cualquier momento podrían poner en peligro el precario equilibrio alcanzado después de la derrota del nazismo y fascismo. El mejor medio de garantizar la paz y la coexistencia pacífica consiste en revisar y reforzar los mecanismos previstos en la Carta, teniendo presentes los fracasos de las Naciones Unidas en la esfera del mantenimiento de la paz, las causas de esos fracasos y posibles mejoras políticas o jurídicas. Desde luego, se ha mantenido la paz durante 30 años, pero sólo respecto de los Miembros fundadores. Lo que ocurrió en Viet-Nam, un genocidio que recuerda la segunda guerra mundial, no fue experimentado por esos países. Las Naciones Unidas tampoco pueden enorgullecerse de lo que ocurre en la Palestina ocupada, ni considerar que es favorable para la paz. De esa manera, pese a cualquier elogio de las Naciones Unidas, no puede sostenerse que logró su objetivo fundamental.

11. La idea de la paz y la seguridad, tal como fue concebida después de la victoria sobre el nazismo, se refería a un número limitado de países. Los países pequeños no consideraban esas ideas en forma tan estrecha, sino que creían que había de jugar un papel activo en el mantenimiento de la paz, basada en la justicia y el respeto de su soberanía. Las aspiraciones de las antiguas colonias son legítimas y no contradicen el espíritu de la Carta; por el contrario, esos países procuran salvaguardar su futuro exigiendo el derecho de participar activamente en los asuntos internacionales, especialmente fortaleciendo el papel de las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz. No se les puede negar ese derecho, especialmente porque se les otorga en la Carta. Sólo otorgándoles ese derecho podrían contribuir las Naciones Unidas a resolver esos problemas y transformarse en el instrumento universal que los fundadores, en su calidad de colonialistas, no pudieron crear. Su delegación no comparte la opinión de que la Carta fomentó la liberación y la descolonización de los países del tercer mundo. Fue la lucha de los pueblos interesados la que llevó a las Potencias coloniales a poner fin a esa dominación, y fue por iniciativa de esos pueblos que las Naciones Unidas se enriquecieron con algunas declaraciones cuyo valor moral debe reflejarse en la Carta.

12. La Asamblea General, en sus períodos extraordinarios de sesiones sexto y séptimo, puso de relieve problemas tan importantes que los Estados Miembros deben pasar de la etapa de la presión y de la intimidación y buscar soluciones basadas exclusivamente en la interdependencia de todos los países. Las Naciones Unidas y sus documentos fundamentales deben estar en total armonía con la nueva situación creada por el surgimiento del tercer mundo. La Carta debe proclamar sin ambigüedad la abolición definitiva del colonialismo y el racismo y debe afirmar el derecho fundamental de todos los pueblos a la libre determinación y a la soberanía total y permanente sobre sus recursos naturales. Además, deben contemplarse medidas contra los países que violen la Carta de manera flagrante.

13. Su delegación estima también que dentro de las Naciones Unidas debe haber un órgano eficaz encargado del control y la aplicación de las normas de conducta establecidas por iniciativa del grupo de países no alineados, y fomentar el establecimiento de un nuevo orden económico internacional con objeto de garantizar la estabilidad de las relaciones internacionales.

14. La aplicación de esos principios debe asegurarse por intermedio de las disposiciones de la Carta que se refieren en especial a la interpretación del derecho de veto, el papel del Consejo Económico y Social, la regulación de las operaciones de mantenimiento de la paz y la ampliación del papel de la Asamblea General. En cuanto al veto, su delegación no comparte la opinión de que todos los titulares de ese privilegio son igualmente culpables; en especial señala que algunos miembros permanentes del Consejo de Seguridad han utilizado el veto sólo para defender causas que habían sido condenadas por resoluciones de la Asamblea General y en violación flagrante de los principios de la Carta. Argelia ha proclamado en repetidas oportunidades su preocupación acerca del mantenimiento de la paz y la seguridad por las Naciones Unidas. Tras su lucha por la libre determinación, considera que ese es un principio fundamental que no puede negociarse.

15. Es posible sostener que la ineficacia de las Naciones Unidas deriva de la falta de aplicación de sus resoluciones y de la falta de respeto por la Carta, y su delegación, en consecuencia, estima que debe estudiarse la forma en que las Naciones Unidas podrían asegurar la aplicación de sus decisiones. Si bien no formulará sugerencias a ese respecto, cree que el Comité *ad hoc*, si se le dan el tiempo y los medios, podrá estudiar esa cuestión a la luz de las opiniones de los Estados Miembros. Si la Sexta Comisión decidiera no prorrogar el mandato del Comité *ad hoc*, el problema seguiría preocupando a los gobiernos partidarios de la revisión de la Carta. Por ese motivo, su delegación estima que la Comisión debe preocuparse sólo de la importancia de la labor de ese Comité y no de los resultados de su primer período de sesiones. Su delegación se propone apoyar toda sugerencia de que se prorrogue el mandato del Comité, y al hacerlo está cumpliendo con un compromiso firme que Argelia asumió dentro del marco de las actividades de los países no alineados, que ya se pronunciaron en favor de la adaptación de la Carta a la nueva realidad. Esos países no plantean amenaza alguna a los principios fundamentales de la Carta ni actúan movidos por un ideal filosófico. Más bien, la experiencia les ha revelado que la descolonización, que constituyó un ideal durante su lucha, no basta para garantizar la paz y el progreso. No es ilógico ni ambicioso que deseen corregir los defectos de las Naciones Unidas y las lagunas de la Carta. A ese respecto, el documento presentado por la delegación de Rumania (A/C.6/437) merece atención detenida, ya que las sugerencias que contiene reflejan la preocupación de la mayoría de los Estados Miembros en lo que respecta al fortalecimiento de las Naciones Unidas.

16. El Sr. FRANCIS (Jamaica) dice que su delegación no puede agregar útilmente nada nuevo a lo que ya han dicho muchas delegaciones partidarias de la revisión de la Carta. Su delegación no comparte la opinión de que el progreso realizado por el Comité *ad hoc* hasta el momento o en el futuro deba medirse solamente por la extensión de su informe. Ese Comité es de reciente constitución, y debe darse a sus miembros tiempo para la adaptación recíproca y para comprender las preocupaciones de cada uno antes de llegar a la etapa de la transacción y al ajuste constructivos. Debe recordarse lo frustrantes y desilusionantes que fueron los primeros informes del Comité Especial sobre la cuestión de la definición de la agresión, y del Comité Especial de los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados; sin embargo, ambos pudieron lograr soluciones realmente aceptables después de varios años. Su delegación no está nada convencida de que la Sexta Comisión, que más que ninguna otra Comisión Principal del sistema de las Naciones Unidas ha hallado el modo de llegar a un consenso, no podrá alcanzar resultados respecto del presente tema.

17. Las opiniones de los miembros del Comité *ad hoc*, ya se trate de partidarios de la revisión de la Carta o de opositores a ella, fueron expresadas con profunda convicción, y los partidarios de la revisión de la Carta, en consecuencia, deberían recurrir a la tolerancia y a la capacidad de persuasión con que están bien dotados. Para ello se requerirá una evaluación detenida y una selección realista de las posibilidades.

18. El representante de Guyana en el Comité *ad hoc* señaló correctamente que no se podía eliminar el veto

mediante deseos ni argumentos (véase A/10033, pág. 48), ya que es tan permanente como los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Con justa razón, el representante de Guyana no fue partidario tampoco de dar el veto a otros Estados. Es partidario de una situación en que el uso del veto por los miembros permanentes no reduzca la eficacia del Consejo de Seguridad ni de las Naciones Unidas en general. A ese respecto, el representante de Nueva Zelanda presentó una sugerencia muy interesante que implicaba la eliminación del veto respecto de la admisión de nuevos Miembros en las Naciones Unidas (*ibid.*, pág. 78). El orador menciona esas opiniones no sólo porque la cuestión del veto es fundamental en la insatisfacción de muchas delegaciones respecto de la Carta, sino también para subrayar que el enfoque sugerido por Guyana y Nueva Zelanda respecto de ese asunto tan delicado tiene muchos aspectos positivos.

19. El documento de trabajo presentado por México (A/10033, anexo II) es muy constructivo. No obstante, su delegación estima que las deliberaciones acerca de si ha de revisarse la Carta bien podrían ser prolongadas y que el Comité *ad hoc*, en consecuencia, debe considerar en primer término los medios para el funcionamiento más eficaz de las Naciones Unidas que no requieran una enmienda de la Carta.

20. Como uno de los objetivos del Comité *ad hoc* es analizar en detalle las observaciones recibidas de los gobiernos, debe hacerse lo posible por obtener esas respuestas. Deben darse al Comité más herramientas para realizar esa labor y, en consecuencia, su delegación está dispuesta a apoyar la prórroga de su mandato.

21. El Sr. AISSI (Dahomey) dice que es evidente que se deben revisar los textos básicos que rigen a la Organización. Su delegación acoge complacida la creación del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas y espera que se prorrogue su mandato.

22. Se han producido muchos cambios en las relaciones internacionales durante los 30 años que han pasado desde que se fundaron las Naciones Unidas. Por intermedio del Consejo de Seguridad, los miembros permanentes han podido imponer su escala de valores a todo el mundo. Su delegación estima que junto con el nuevo orden económico preconizado por el séptimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General se debe establecer un nuevo orden político internacional. Las declaraciones hechas por algunos Estados para que se mantenga el *statu quo* no han convencido a su delegación. No cree que sea necesario esperar a que haya otra guerra mundial para adaptar la Carta a las realidades actuales. En su presente forma, la Carta refuerza una contradicción flagrante entre la igualdad jurídica de todos los Estados Miembros y el privilegio de veto que algunas Potencias se arrogaron en 1945. Las relaciones internacionales deben ser democratizadas. Su delegación no quiere la abolición del veto, porque ello podría hacer que el Consejo de Seguridad perdiera toda su importancia. Se podría modificar el derecho de veto de forma que el voto afirmativo de tres miembros permanentes bastara para la aprobación de una decisión.

23. También existe el problema de la distribución geográfica del poder en el Consejo de Seguridad, único órgano principal de las Naciones Unidas que no sigue la norma de la

distribución geográfica equitativa. Cada una de las cinco regiones geográficas creadas en 1945 por el sistema de las Naciones Unidas deberían estar en situación de participar en la preparación de soluciones equitativas y justas para las numerosas crisis iniciadas y mantenidas en el tercer mundo por las Potencias que practican de forma inveterada el imperialismo, el colonialismo, el neocolonialismo, el racismo y el *apartheid*. Así pues, su delegación propone que se aumente el número de puestos permanentes en el Consejo de Seguridad basándose en las cinco regiones geográficas y que se sustituya la norma de unanimidad por una de mayoría holgada de miembros permanentes. También se deberían aumentar las atribuciones de la Asamblea General en la esfera del mantenimiento de la paz.

24. Su delegación comparte la opinión de que se deben respetar escrupulosamente el espíritu y la letra de la Carta y las decisiones y resoluciones de las Naciones Unidas. Es lamentable que algunos Estados desafíen esas decisiones y resoluciones, especialmente en las esferas del desarme, la lucha contra el colonialismo, el racismo y el *apartheid* y el desarrollo del comercio internacional. Con respecto al desarme, las Potencias nucleares no han considerado conveniente disminuir el ritmo de la proliferación de armas destructivas. Han recurrido principalmente a consultas bilaterales, con lo que han evitado que la comunidad internacional pudiera ejercer un control en esa esfera. En cuanto a la lucha contra el racismo y el *apartheid*, algunas Potencias han decidido violar las sanciones económicas impuestas contra las minorías racistas del África meridional por la venta de oro sudafricano y de cromo de Rhodesia.

25. Su delegación estima que los resultados de los períodos extraordinarios de sesiones sexto y séptimo de la Asamblea General deben ser aplicados plenamente en pro de los intereses de la comunidad internacional. Parece que algunos Estados consideran que no se deben tener en cuenta los resultados de esos dos períodos de sesiones en un período ordinario de sesiones de la Asamblea General. Por ejemplo, durante la preparación del proyecto de resolución A/C.6/L.1021, relativo al informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, esos Estados se opusieron fieramente a los esfuerzos hechos por el Grupo de los 77 para que se incluyera una referencia a las resoluciones pertinentes de los períodos extraordinarios de sesiones sexto y séptimo. Debe haber continuidad en la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas, independientemente de que hayan sido aprobadas en un período ordinario o extraordinario de sesiones.

26. En la esfera económica, continúan deteriorándose las condiciones del comercio. Las Naciones Unidas deberían ayudar a los países en desarrollo a industrializarse por conducto de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ya que la asistencia para la diversificación de las materias primas solamente puede ser una solución a corto plazo que, en definitiva, empobrecerá aún más a los países del tercer mundo. Su delegación desearía ver una cooperación más estrecha entre los órganos económicos y sociales subsidiarios que han sido establecidos por las Naciones Unidas y cuyos objetivos son complementarios.

27. El Sr. BA-SALEH (Yemen Democrático) dice que si bien su Gobierno no ha intervenido en la Sexta Comisión

con respecto a los dos temas importantes y tan estrechamente relacionados que se están examinando, ni ha presentado observaciones por escrito en cumplimiento del párrafo 2 de la resolución 3349 (XXIX) de la Asamblea General, se adhiere a los propósitos y principios de la Carta y ha expresado en muchas ocasiones el deseo de que se fortalezca continuamente el papel de las Naciones Unidas y se aumente su eficacia para poder hacer frente a los problemas que enfrenta la comunidad internacional.

28. La Carta, una expresión de la aspiración del hombre de evitar las pérdidas desastrosas de otra guerra mundial, ha establecido principios para las relaciones entre los Estados basadas en la igualdad soberana, la no intervención en los asuntos internos y la renuncia a la amenaza o al uso de la fuerza. Es el punto en el que se concentran los esfuerzos efectuados para cooperar y para aumentar el bienestar económico y social de todos los pueblos. Sin embargo, ha sido el producto de las naciones representadas en la Conferencia de San Francisco, y desde entonces han ingresado en las Naciones Unidas otros Estados soberanos o que acababan de alcanzar la independencia.

29. En sus 30 años de historia, las Naciones Unidas han logrado bastante y en más de una ocasión han demostrado que pueden hacer frente a los acontecimientos mundiales, tal como se puede ver en el acercamiento y la cooperación internacional que han contribuido a suavizar la tirantez internacional en una cierta medida. Además, no se puede olvidar la función que han desempeñado las Naciones Unidas para conseguir la independencia de muchas naciones y pueblos y su batalla contra todas las formas de discriminación racial. Sin embargo, ese lado positivo de la historia de las Naciones Unidas no debe hacer que se olviden sus deficiencias y fracasos, que no se deben atribuir tanto a defectos de la Carta como a la posición que adoptan algunos Estados y su renuencia a cumplir lo dispuesto en la Carta y a aplicar las decisiones de las Naciones Unidas. Algunos Estados Miembros han perpetrado agresiones, hecho estragos en el mundo, expulsado pueblos de sus hogares y violado los derechos humanos, burlándose así de las decisiones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General. Asimismo, se ha utilizado el veto para frustrar la voluntad de la gran mayoría de los Estados Miembros.

30. No se podrá fortalecer el papel de las Naciones Unidas ni aumentar su eficacia a menos que todos los Estados estén verdaderamente dispuestos, independientemente de su tamaño, fuerza o sistema social, económico y político, a adherirse a los propósitos y principios de la Carta y a cumplir las decisiones de las Naciones Unidas y el principio de que la minoría debe acatar los deseos de la mayoría.

31. El Comité *ad hoc* no ha cumplido las tareas para las que había sido creado a causa de las diferencias existentes entre sus miembros, que reflejan las diferencias ya manifestadas en el pasado en la Sexta Comisión y en las observaciones escritas de los gobiernos. Algunos consideraron necesario que se revisara y modernizara la Carta para ponerla de acuerdo con la realidad actual y el espíritu de la época, mientras que otros han tratado de mantener la Carta como un documento histórico. Ha habido un tercer grupo que acogió complacido los cambios de la Carta que no afectaban a sus principios. No hay duda alguna de que el mundo ha cambiado desde que se redactó la Carta. No

solamente ha cambiado el número y el carácter de los Miembros de las Naciones Unidas, sino que, además, los problemas a los que hace frente la Organización se han hecho más numerosos y más complejos. Pese a sus éxitos, la Carta contiene ambigüedades y defectos como toda obra humana y, por lo tanto, sus autores previeron en los Artículos 108 y 109 la posibilidad de enmendarla.

32. El Comité *ad hoc* fue creado con la esperanza de que su trabajo indicara si había o no necesidad de revisar la Carta o si se podía fortalecer el papel de las Naciones Unidas sin afectar la Carta. Sin embargo, como el Comité *ad hoc* no ha logrado los resultados deseados en su primer período de sesiones, su delegación apoya la idea de que continúe su labor.

33. El Sr. ABUL-KHEIR (Egipto) dice que su país cree firmemente en la Carta de las Naciones Unidas y la respeta. Durante los últimos 30 años, las Naciones Unidas han hecho una contribución eficaz a la descolonización y han sido el instrumento que ayudó a muchos pueblos a lograr la independencia. Egipto fue uno de los Miembros fundadores de las Naciones Unidas en 1945, y ha considerado con satisfacción los progresos hechos desde entonces en el desarrollo gradual del derecho internacional y el establecimiento de relaciones de igualdad, justicia y cooperación entre las naciones. Ha apoyado siempre todas las iniciativas destinadas a aumentar la capacidad de las Naciones Unidas para desempeñar sus responsabilidades según lo dispuesto en la Carta y para reformar su función de mantenimiento de la paz y seguridad internacionales.

34. Aunque la Carta ha demostrado ser un instrumento flexible capaz de adaptarse a las condiciones cambiantes del mundo, durante los últimos 30 años se han aprobado diversos instrumentos de derecho internacional que han reforzado y ampliado las disposiciones de la Carta. Entre ellos figuran la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración y el Programa de acción sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional y la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, para citar solamente algunos. A juicio de su delegación, no es necesario incorporar las disposiciones de esas declaraciones de principios en la propia Carta, por cuanto esos instrumentos tienen de por sí fuerza jurídica y moral. La necesidad real consiste en tanto en revisar la Carta como en modificar la conducta de ciertos Estados que violan sus disposiciones premeditadamente y se niegan a cumplir lo dispuesto en las resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas. Pese a la prohibición del empleo de la fuerza expuesta en la Carta, no es ningún secreto que algunos Estados han recurrido a la fuerza para ocupar el territorio de otros Estados y pisotear los derechos humanos. Egipto y otros Estados árabes han sido víctimas de agresión armada; parte del territorio de Egipto aún está ocupado por las fuerzas armadas de un Estado expansionista que no solamente se niega a retirar sus fuerzas de ocupación, sino que además ha establecido asentamientos en los territorios ocupados. Ese Estado se ha burlado de numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y se ha negado a conceder

el derecho a la libre determinación a los pueblos de los territorios ocupados.

35. El derecho de veto de que disfrutaban los miembros permanentes del Consejo de Seguridad no es perjudicial en sí mismo, siempre que se utilice para fomentar los propósitos y principios de la Carta. No obstante, algunos Estados han abusado de ese derecho y han evitado que el Consejo de Seguridad actúe en determinadas situaciones. Para citar sólo un ejemplo, el orador señala que tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad han utilizado su poder de veto para evitar que se aprobaran medidas contra el régimen racista de Sudáfrica que estaban destinadas a poner fin a la ocupación ilegal de Namibia.

36. Si bien no se opone a la idea de que se enmiende la Carta, siempre que lo considere necesario una mayoría de Estados, subraya que el problema esencial consiste en modificar la conducta de los Estados. Los Estados que se oponen tenazmente incluso a que se considere la posibilidad de revisar la Carta están adoptando un enfoque de una rigidez innecesaria.

37. El orador aboga porque se prorrogue el mandato del Comité *ad hoc* y apoya la idea de que se aumente el número de sus miembros a fin de que puedan participar en sus trabajos todos los Estados que deseen hacerlo. El Comité *ad hoc* debe hacer todo lo posible por evitar el enfrentamiento y establecer un diálogo constructivo entre las posiciones encontradas con respecto a la cuestión del examen de la Carta.

38. El Sr. RENNER-THOMAS (Sierra Leona) dice que su delegación apoya plenamente todo intento de encontrar nuevos métodos para que las Naciones Unidas puedan desempeñar su función con respecto al mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de la cooperación entre todos los países y la promoción de las normas de derecho internacional. Las Naciones Unidas son el mecanismo más importante en la actualidad para lograr las metas de la paz internacional y el desarrollo económico y social de todos los pueblos. Pese a los éxitos que han obtenido las Naciones Unidas y sus organismos especializados, no se puede hablar de asegurar la paz mundial mientras no haya un esfuerzo decidido por eliminar las separaciones entre los Estados y garantizar el desarrollo armonioso de todos los pueblos.

39. Pese a todos sus defectos, es en el marco de las Naciones Unidas donde mejor se pueden encontrar las soluciones de los problemas a que se enfrenta actualmente el mundo. Su delegación está de acuerdo con la delegación de Rumania en que ya es hora de que se consideren los intereses de todos los Estados y se creen las condiciones necesarias para una participación más amplia y activa en las actividades de las Naciones Unidas de parte de todos los Estados Miembros, independientemente de su tamaño y en un pie de total igualdad. Se debe establecer el mecanismo adecuado para estudiar detalladamente las propuestas de Rumania y otros países con miras a llegar a un consenso que asegure el máximo de cooperación por parte de todos los Estados Miembros en un nuevo programa para la paz y

la seguridad internacionales y el desarrollo económico y social.

40. Hay dos esferas principales en que es necesario fortalecer el papel de las Naciones Unidas. La primera es el arreglo de las controversias internacionales por medios pacíficos. Se debe capacitar a la Corte Internacional de Justicia para que desempeñe una función más eficaz en ese sentido y habría que utilizar en mayor medida otras formas de arreglo judicial, como la mediación, la conciliación y el arbitraje. Al respecto, se debe estudiar muy detenidamente la propuesta de Rumania de que se cree una comisión permanente de la Asamblea General encargada de esas funciones. La segunda esfera, igualmente importante, es la del desarrollo económico y social, y en ella se debe atribuir gran importancia a la creación de un nuevo orden económico internacional, incluso un código de conducta de las relaciones económicas internacionales, justo y más equitativo. La importancia que el orador atribuye a esas dos esferas no quiere decir que haya que descuidar cuestiones tales como el desarme, la descolonización, los derechos humanos, el racismo y el *apartheid*.

41. Su delegación insta a que se establezca un mecanismo para explorar los medios de eliminar todos los factores que impiden una mayor eficacia de las Naciones Unidas, sea que se deban o no a restricciones impuestas por la Carta.

42. El Sr. GONZALEZ GALVEZ (México) dice que, tal como su delegación ha señalado en muchas ocasiones, el problema principal de las Naciones Unidas es la falta de voluntad política para aplicar las decisiones de la Organización. Se ha desarrollado una tendencia inquietante a resolver los principales problemas fuera del marco de las Naciones Unidas. Por otra parte, se han dado muchos pasos positivos para asegurar la paz y la seguridad en Europa, mejorar la situación en el Oriente Medio, reconocer los derechos del pueblo palestino y proseguir el proceso de descolonización de las antiguas colonias portuguesas en Africa.

43. La revisión de la Carta es una cuestión importante pero no de la mayor prioridad. Se debe recordar que la Carta fue redactada en circunstancias singulares al final de la segunda guerra mundial, y es dudoso que las condiciones actuales sean apropiadas para lograr una medida de acuerdo tan amplia como la que se alcanzó en 1945. Quienes abogan por la revisión de la Carta lo hacen por razones diversas: algunos porque creen que así mejoraría la posición de sus países en las Naciones Unidas y otros porque están auténticamente interesados en dar una nueva orientación a la Organización en relación con los problemas de importancia primordial para el tercer mundo. Sin embargo, enmendar la Carta es un asunto muy delicado y habrá que proceder gradualmente. Su delegación ofreció sus observaciones sobre ese tema en la declaración que hizo durante el debate general en el Comité *ad hoc* que se reproduce en las páginas 69 a 72 del informe del Comité *ad hoc*. Ha abogado (*ibid.*) porque se establezcan dos subcomités, uno encargado de los cambios estructurales que no exijan enmiendas a la Carta, y otro encargado de un análisis muy preliminar de las enmiendas concretas a la Carta sugeridas por los distintos países. Su país está muy agradecido porque varios otros han apoyado esa idea.

44. La delegación de Australia (1565a. sesión) ha hecho una propuesta muy interesante, a saber, que se preste atención especial a la cuestión del arreglo pacífico de las controversias como tema separado. México apoya esa propuesta e insta a que se incluya ese tema en el programa del próximo período de sesiones de la Asamblea General con miras a la elaboración de un proyecto de convención sobre el arreglo pacífico de las controversias.

45. La delegación de Rumania ha hecho también varias propuestas interesantes que merecen ser estudiadas detenidamente. Sin embargo, su delegación no puede aceptar la propuesta de que se elimine de la Carta el concepto de "Estados enemigos", en vista de la oposición general a esa propuesta manifestada por algunos miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La propuesta relativa al establecimiento de un nuevo orden económico internacional debe incorporarse en la Carta, así como las disposiciones de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados.

46. La delegación de México apoya la idea de que se renueve el mandato del Comité *ad hoc*.

47. El Sr. ROSSIDES (Chipre) dice que, aparte de estar previsto en la Carta, es conveniente que se revise periódicamente el funcionamiento de las Naciones Unidas. La revisión de la Carta en el año que marca el trigésimo aniversario de las Naciones Unidas adquiere una importancia aún mayor. Desde que se aprobó la Carta han pasado 30 años de cambios y progresos tecnológicos que han planteado muchos problemas nuevos. El problema central previsto por los autores de la Carta fue el de evitar una nueva guerra mundial. En aquel momento no se podía prever la posibilidad de otros peligros mundiales igualmente amenazadores.

48. Así pues, es completamente natural que se revise la Carta, y la cuestión es saber cómo hacerlo. En su origen, la Carta representó un paso hacia la unificación de un mundo sufriendo desgarrado por los desastres de la guerra. El objetivo consistió en introducir la cordura en la dirección de los asuntos mundiales y establecer la unidad. Esos mismos objetivos deberían fundamentar la acción destinada a revisar la Carta en el mundo actual, que se caracteriza por la interdependencia creciente de los Estados y la necesidad de cooperación entre ellos. No obstante, las Naciones Unidas aún tienden a subrayar los aspectos nacionales y soberanos de los Estados y, en consecuencia, no tienen la autoridad suficiente para lograr la cooperación y el progreso hacia el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales.

49. La Organización ha estado funcionando en forma anormal a causa de una dolencia muy profunda, a saber, que no ha logrado cumplir su responsabilidad fundamental y primaria del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Hay muchas razones para justificar el fracaso continuo de las Naciones Unidas en ese sentido; por ejemplo, la guerra fría y otras consideraciones mezquinas de carácter político. En sus enfoques egoístas y antagónicos hacia las relaciones internacionales, los Estados no han cumplido lo dispuesto en la Carta y el principio más

importante, que es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. En el Capítulo VII de la Carta se prevé el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales mediante las decisiones y medidas del Consejo de Seguridad, pero esas decisiones no han sido aplicadas y han perdido toda su importancia. Las medidas necesarias de aplicación han sido pasadas por alto de manera lamentable y descartada. Es cierto que no ha habido una nueva guerra mundial, pero ello se debe más bien al temor de la catástrofe nuclear que a un verdadero interés por la paz.

50. La falta de seguridad internacional ha tenido consecuencias desastrosas. La permanente carrera de armamentos es una carga intolerable para los Estados y consume recursos que se podrían invertir en ayudar a los países en desarrollo a desarrollarse. La solución de los problemas del desarme y de la carrera de armamentos requiere disposiciones para lograr la seguridad de los Estados por medios distintos de la fuerza. Es inútil que se trate de resolver los problemas con conferencias y comités sin establecer antes la paz y la seguridad internacionales. Es un hecho básico que no existe seguridad internacional en el anárquico mundo contemporáneo. El Consejo de Seguridad adopta decisiones sin tomar medidas para su aplicación, y los Estados se niegan a cumplir lo dispuesto en la Carta. El peligro de una catástrofe nuclear ha eliminado la posibilidad de guerras de un alcance o duración considerables. Así pues, los Estados deben contar con otros medios pacíficos para poder resolver las controversias de conformidad con las disposiciones de la Carta y los principios de la justicia internacional. El mundo sigue acosado por los problemas a causa de las acciones de quienes imponen la injusticia en el mundo mediante el uso de la fuerza. Así pues, es absolutamente necesario lograr la aplicación de las decisiones del Consejo de Seguridad.

51. La revisión de la Carta debe considerarse en ese contexto. Los medios con que se cuenta actualmente para aplicar las decisiones son insuficientes y deben ser estudiados, enmendados y modernizados según sea necesario. La capacidad de las Naciones Unidas para mantener la paz y la seguridad internacionales aumentaría con el establecimiento de una fuerza de paz de las Naciones Unidas que pudiera interponerse entre los beligerantes, aun antes de que se iniciaran las hostilidades. Ello serviría como un tipo de medida intermedia entre la práctica del mantenimiento de la paz por invitación y las medidas más severas de coerción contra los agresores previstas en el Capítulo VII de la Carta.

52. El actual período de distensión y universalidad casi total de las Naciones Unidas proporciona nuevos motivos para avanzar hacia la aplicación de las disposiciones de la Carta. Su delegación se opone a todo cambio en las Naciones Unidas que afecte el equilibrio cuidadosamente establecido por la Carta, incluso el derecho de veto. No se debe aumentar el número de Estados que tienen ese derecho. Su delegación simplemente quiere que la Organización funcione mejor en bien del orden jurídico. En ese sentido, la Comisión de Derecho Internacional debe dedicar toda su atención al desarrollo y codificación de los principios de la Carta con miras a establecer un orden jurídico y la seguridad internacional.

TEMA 109 DEL PROGRAMA

Sucesión de Estados en materia de tratados: informe del Secretario General (*continuación*) (A/10198 y Add.1 a 5, A/C.6/L.1019, A/C.6/L.1022/Rev.1, A/C.6/L.1023)

53. El PRESIDENTE anuncia que Kenya se ha unido a los patrocinadores de las enmiendas que figuran en el documento A/C.6/L.1023.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

1574a. sesión

Martes 25 de noviembre de 1975, a las 15.20 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1574

TEMAS 113 Y 29 DEL PROGRAMA

Informe del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas (*continuación*) (A/10033, A/10102, A/10108, A/10113 y Corr.1 y Add.1 a 3, A/C.6/437)

Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones y la promoción de las normas del derecho internacional en las relaciones entre los Estados: informes del Secretario General (*continuación*) (A/10218, A/10219, A/10255, A/10289, A/C.6/437)

1. El Sr. DIENG (Senegal) considera que las dos cuestiones en examen son particularmente importantes porque el Senegal, desde su acceso a la plena soberanía, ha depositado una fe inquebrantable en las Naciones Unidas, institución capital en la lucha de los pueblos por la llegada de un mundo más justo y más humano. Así pues, el Senegal ha trabajado permanentemente en pro de la universalidad de la Organización, de la mejora de sus procedimientos y métodos de trabajo, de su democratización en el sentido de una participación real de todos sus miembros, según el principio de la igualdad soberana de los Estados en la adopción de decisiones, y de la aplicación efectiva de esas decisiones. Por tanto, es racional examinar simultáneamente los temas 113 y 29 del programa, ya que las propuestas hechas con miras a hacer ciertas modificaciones a la Carta de las Naciones Unidas tienen por último objeto el fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas.

2. El representante del Senegal lamenta que las legítimas reivindicaciones de la comunidad internacional para la instauración de una sociedad más justa y más humana aún no sean comprendidas por todos los Miembros de las Naciones Unidas. No obstante, las razones que justifican una reestructuración del sistema de las Naciones Unidas son evidentes, ya que se basan en el sentido común. En primer lugar, las Naciones Unidas han acogido desde su creación un número apreciable de nuevos Estados cuyos intereses no se pudieron tomar en consideración hace 30 años. Además, hay que institucionalizar las transformaciones que se han producido en el curso de los últimos 30 años en las esferas política, económica y social. En particular, la solución de los problemas relativos al desarrollo, a una mejor distribución de la riqueza, a un pleno desarrollo de los hombres en

el seno de un mundo más equilibrado o a la prevención o el arreglo de las situaciones graves no debe depender de la responsabilidad exclusiva de las grandes Potencias. El Sr. Dieng piensa en particular que el conflicto israelí-árabe, la situación en Chipre y el drama angolano demuestran ampliamente los errores que son capaces de cometer las grandes Potencias que adoptan decisiones contrarias a los intereses de los pueblos afectados.

3. La delegación del Senegal ha examinado atentamente los argumentos de los Estados Miembros que consideran posible aumentar la eficacia del sistema de las Naciones Unidas sin tener que revisar la Carta. A ese respecto, su delegación ha estudiado en particular las sugerencias que figuran en el informe del Secretario General sobre el arreglo pacífico de las controversias internacionales (A/10289) y en el informe del Grupo de Expertos para el estudio de la estructura del sistema de las Naciones Unidas,¹ así como las observaciones de los Estados interesados. Las propuestas que tienen por objeto fortalecer el papel de la Asamblea General y el Consejo Económico y Social, reorganizar la Secretaría, reagrupar las actividades y los fondos operacionales, reforzar las estructuras regionales y revisar los procedimientos de arreglo de controversias y la práctica del Consejo de Seguridad revisten gran interés, pero no bastan para dar a las Naciones Unidas la eficacia deseada, ya que jamás será posible mejorar el funcionamiento de ciertos órganos de las Naciones Unidas si ciertos Estados, que ponen su egoísmo nacional por encima de cualquier otra consideración, no aplican las resoluciones de las Naciones Unidas, si las naciones prósperas obstaculizan el establecimiento de un nuevo orden económico internacional y si las grandes Potencias continúan abusando de su derecho de veto.

4. Al examinar el informe del Comité *ad hoc*, sobre la Carta de las Naciones Unidas (A/10033), a la delegación del Senegal le ha sorprendido que una mayoría de los Estados se haya pronunciado por la revisión de la Carta. Aparte de los argumentos que el representante del Senegal acaba de exponer, los Estados partidarios de la revisión de la Carta han presentado propuestas concretas encaminadas no a destruir, sino a consolidar los logros de las Naciones Unidas. Aunque sean excépticos, los Estados que no son partidarios de revisar la Carta deberían demostrar cierta apertura de espíritu y no oponerse sistemáticamente a todo deseo

¹ E/AC.62/9.

legítimo de cambio. El Comité *ad hoc* debería examinar las propuestas pertinentes hechas por cierto número de delegaciones con miras a modificar algunos artículos precisos de la Carta, en particular las de México (*ibid.*, pág. 69) y Rumania (A/C.6/437). Ese examen permitiría sin duda llegar a soluciones dinámicas, teniendo en cuenta las opiniones de un número importante de Estados Miembros.

5. Respondiendo a los principales argumentos aducidos contra la revisión de la Carta, el representante del Senegal declara que no es posible mejorar las Naciones Unidas sin revisar la Carta, dado que hay que incorporar en ella disposiciones sobre las relaciones económicas, que la mayoría de los Estados se ha pronunciado a favor de una revisión de la Carta, que el riesgo de ruptura del equilibrio carece de fundamento puesto que ese equilibrio está roto desde hace mucho tiempo y dado que la Carta contiene disposiciones precisas relativas a su revisión. Según algunos Estados, el principio de la igualdad soberana de los Estados no es realista, ya que hay que tener en cuenta las responsabilidades y privilegios de las grandes Potencias, pero ahí reside justamente la causa de un desequilibrio que hay que remediar. Además, es evidente que desde hace más de 10 años gran número de Estados que no se alinean ni con el capitalismo ni con el comunismo buscan su propio camino y desean conservar su identidad. Por tanto, es legítimo que los Estados del tercer mundo pidan también gozar ellos del derecho de veto. En efecto, la delegación del Senegal piensa que no sería realista querer reglamentar el uso del derecho de veto, y mucho más aún pedir su supresión, sino que los países del tercer mundo deberían disponer de un poder de negociación más importante.

6. La delegación del Senegal apoyará toda propuesta encaminada a fortalecer el sistema de las Naciones Unidas mediante la revisión de la Carta.

7. El Sr. SABEL (Israel), ejerciendo su derecho de réplica, considera deplorable que algunas delegaciones árabes sigan ahora la práctica de utilizar todas las instancias y todos los proyectos de las Naciones Unidas para servir sus intereses infames y que hayan conseguido en la Tercera Comisión, en violación flagrante de los propósitos y principios de la Carta, sabotear la lucha de las Naciones Unidas contra el racismo y la discriminación racial. En el curso del debate sobre la cuestión de la revisión de la Carta, han llegado a decir que las Naciones Unidas deberían tener por objeto hacer una campaña contra el Estado judío.

8. ¿No es por lo menos pavoroso, en el momento en que una organización nacida de la segunda guerra mundial celebra su trigésimo aniversario, oír a representantes que hablan tranquilamente de la revisión de la Carta para ajustarla a las necesidades de su campaña perniciosa contra el Estado de Israel? Sería un golpe cruel para las Naciones Unidas que la Sexta Comisión se sumara a otros órganos de las Naciones Unidas que ciertos representantes árabes manipulan para servir sus objetivos, pero tal resultado no es posible. El Sr. Sabel, recordando a los representantes interesados los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas que piden a los Miembros de la Organización respetar la soberanía de otros Estados y arreglar pacíficamente sus controversias, declara que la violación grosera y flagrante de esos principios es tal vez el error más cargado de consecuencias que hayan presenciado las Naciones Unidas.

9. El Sr. ABUL-KHEIR (Egipto) recuerda que en la sesión precedente dijo que el problema del fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas no estaba ligado a la revisión de la Carta, sino al comportamiento de los Estados, y dio cierto número de ejemplos. En efecto, ¿quién viola la Carta de las Naciones Unidas? ¿Quién ocupa territorios por la fuerza? ¿Quién no respeta las resoluciones de las Naciones Unidas? ¿Quién viola los derechos humanos en los territorios ocupados? ¿Quién se niega a otorgar al pueblo palestino el derecho a la libre determinación? ¿Quién desgarrar resoluciones ante la Asamblea General? La historia responderá a esas preguntas.

TEMA 117 DEL PROGRAMA

Programa de asistencia de las Naciones Unidas para la enseñanza, el estudio, la difusión y una comprensión más amplia del derecho internacional: informe del Secretario General (A/10332, A/C.6/438)

10. El Sr. SUY (Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos, Asesor Jurídico), presentando en nombre del Secretario general su informe sobre el programa de asistencia de las Naciones Unidas para la enseñanza, el estudio, la difusión y una comprensión más amplia del derecho internacional (A/10332), recuerda que ese programa fue establecido en 1965 por la resolución 2099 (XX) de la Asamblea General y que se ha proseguido en cumplimiento de las resoluciones aprobadas ulteriormente todos los años hasta 1971, fecha en que la Asamblea, por su resolución 2838 (XXVI), decidió que el mantenimiento del programa sólo sería objeto de una resolución cada dos años. Así pues, el último informe sobre ese tema fue presentado a la Sexta Comisión en 1973². En el informe que se examina, el Secretario General da cuenta de las actividades emprendidas en en curso de los dos años siguientes y formula recomendaciones en lo que respecta a la continuación del programa en 1976 y 1977.

11. El capítulo II del informe da cuenta de las actividades llevadas a cabo en 1974 y 1975 por los tres principales órganos que participan en la ejecución del programa, a saber: las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR). Esas actividades son algo diferentes de las de los años anteriores. No obstante, el Sr. Suy desea destacar que la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) celebró por primera vez en 1975 un simposio sobre el papel de las universidades y de los centros de investigación en la esfera del derecho mercantil internacional. Señala igualmente con satisfacción que la UNESCO ha aumentado sus actividades relativas al estudio del derecho mercantil internacional y que el UNITAR ha hecho de nuevo una contribución importante al programa, en particular proporcionando asistencia administrativa y financiera para el programa de becas Naciones Unidas/UNITAR y organizando cursos regionales de formación y perfeccionamiento en Sierra Leona y en Zaire. El Secretario General expresa su profunda gratitud a la UNESCO y al UNITAR y se suma al Director General del UNITAR para dar las gracias a los Gobiernos de Sierra Leona y Zaire.

12. El capítulo III contiene las recomendaciones del Secretario General relativas a la ejecución del programa en 1976 y 1977. Como se desprende de los párrafos 64 y 65, el Secretario General no recomienda ninguna modificación importante en las actividades de las Naciones Unidas. En cambio, del párrafo 66 se desprende que la UNESCO debería iniciar en 1977 un programa de mucha mayor envergadura para el período de mediano plazo 1977-1982. El UNITAR proseguirá su ciclo de cursos regionales, y ha previsto organizar en 1976 dos cursos de formación y perfeccionamiento en Asia, uno para el Asia occidental y otro para el resto de Asia.

13. El capítulo IV se refiere a las consecuencias administrativas y financieras de la participación de las Naciones Unidas en el programa, y en los párrafos 71 a 74 se dan las informaciones pertinentes para 1974 y 1975. A ese respecto, el Sr. Suy da las gracias a los gobiernos que en los dos últimos años han participado en la financiación del programa aportando contribuciones voluntarias. Se trata de los Gobiernos de la Argentina, Austria, el Irán y Yugoslavia en 1974 y 1975 y de los Gobiernos de Australia, Camboya, Chipre, Iraq, Kenya, Filipinas, Tailandia y Togo en 1974 ó 1975. Además, varios gobiernos aportaron contribuciones para participar en la financiación del Seminario de derecho internacional que se celebró en Ginebra y del simposio sobre el papel de las universidades y de los centros de investigación en la esfera del derecho mercantil internacional organizado por la CNUDMI. En el primer caso, se trata de los Gobiernos de Dinamarca, Finlandia, Israel, Noruega, los Países Bajos, la República Federal de Alemania y Suecia, y en el segundo caso de los Gobiernos de Austria, Noruega, la República Federal de Alemania y Suecia. El Secretario general expresa su agradecimiento a todos esos Gobiernos.

14. En lo que respecta al bienio 1976-1977, se solicita un crédito de 176.000 dólares en el proyecto de presupuesto por programas para las becas y los gastos de viaje de los participantes en los cursos regionales que ha de organizar el UNITAR durante esos dos años. Esa cifra elevada se explica por el aumento de los costos y la fuerte tasa de inflación prevista.

15. El capítulo V da cuenta de las reuniones del Comité Consultivo del Programa celebradas en 1974 y 1975. El Secretario General está profundamente agradecido al Comité por su ayuda. El Comité Consultivo aprobó las recomendaciones del Secretario General relativas a la ejecución del programa en 1976 y 1977, que se presentan ahora a la Asamblea General para su aprobación. Tras haber recordado que el mandato de los miembros actuales del Comité Consultivo expira a fines de 1975, el Sr. Suy señala a la atención de los miembros de la Sexta Comisión la nota del Secretario General publicada con la signatura A/C.6/438.

TEMA 110 DEL PROGRAMA

Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la labor realizada en su octavo período de sesiones (continuación*) (A/10017, A/C.6/L.1016, A/C.6/L.1017, A/C.6/L.1021)

* Reanudación de los trabajos de la 1572a. sesión.

16. El PRESIDENTE anuncia que Bulgaria y Lesotho se han sumado a los patrocinadores del proyecto de resolución A/C.6/L.1021.

17. El Sr. ABUL-KHEIR (Egipto), presentando en nombre de los patrocinadores el proyecto de resolución A/C.6/L.1021, subraya la importancia que le conceden al párrafo 8 de la parte dispositiva. En efecto, estiman que es esencial que la CNUDMI tenga en cuenta la evolución de las relaciones económicas internacionales, y que si los organismos de las Naciones Unidas no participan en la aplicación de las resoluciones de los períodos extraordinarios de sesiones sexto y séptimo de la Asamblea General, éstas serán letra muerta. El Sr. Abul-Kheir expresa la esperanza de que la Sexta Comisión adopte el proyecto de resolución por consenso.

TEMA 108 DEL PROGRAMA

Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 27º período de sesiones (continuación) (A/10010, A/C.6/L.1024)**

18. El PRESIDENTE anuncia que El Salvador se ha sumado a los patrocinadores del proyecto de resolución A/C.6/L.1024.

TEMA 109 DEL PROGRAMA

Sucesión de Estados en materia de tratados: informe del Secretario General (continuación) (A/10198 y Add.1 a 5, A/9610/Rev.1*, A/C.6/L.1019, A/C.6/L.1022/Rev.1, A/C.6/L.1023/Rev.1)**

19. El PRESIDENTE invita al representante de Malí a presentar las enmiendas al proyecto de resolución A/C.6/L.1019 publicadas con la signatura A/C.6/L.1023/Rev.1.

20. El Sr. MAÏGA (Malí) explica que los autores de las enmiendas piden que se suprima la última parte del segundo párrafo del preámbulo a partir de las palabras "incluso comentarios y observaciones..." por estimar que la Comisión de Derecho Internacional (CDI) ha terminado sus trabajos sobre el proyecto de artículos relativo a la sucesión de Estados en materia de tratados y que ahora corresponde a otra instancia, por ejemplo, a una conferencia de plenipotenciarios, ocuparse de la cuestión. Esa es igualmente la razón por la cual piden que se supriman las disposiciones de la parte dispositiva del proyecto de resolución, que preveían remitir el proyecto de artículos a la CDI. Además, de la lectura del capítulo II del informe de la CDI (véase A/9610/Rev.1) se desprende que si no adoptó una decisión sobre las propuestas mencionadas en el párrafo 75 de dicho informe no fue debido a la falta de tiempo, sino a que no había surgido en su seno una actitud común que le permitiera aceptarlas. Corresponderá a la conferencia de plenipotenciarios resolver el problema. Tras dar lectura a la nueva parte dispositiva que se propone, el Sr. Maïga indica que los autores de las enmiendas originales (A/C.6/L.1023), tras celebrar consultas, decidieron revisar las mismas con la

** Reanudación de los trabajos de la 1550a. sesión.

*** Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno período de sesiones, Suplemento No. 10.

adición en la enmienda al párrafo 3 de la frase "e incorpore el resultado de su labor en una convención internacional y en los demás instrumentos que estime conveniente".

21. El orador expresa la esperanza de que en el trigésimo primer período de sesiones la Sexta Comisión decida el

lugar y la fecha en que conviene convocar una conferencia de plenipotenciarios encargada de examinar y adoptar un instrumento jurídico apropiado relativo a la sucesión de Estados en materia de tratados.

Se levanta la sesión a las 16.30 horas.

1575a. sesión

Miércoles 26 de noviembre de 1975, a las 15.20 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1575

TEMAS 114 Y 70 DEL PROGRAMA

Respeto de los derechos humanos en los conflictos armados: informe del Secretario General (*continuación) (A/10195 y Add.1, A/C.6/L.1025)**

Los derechos humanos en los conflictos armados: protección de los periodistas en misión peligrosa en las zonas de conflictos armados (*continuación) (A/10147, A/C.6/L.1025)**

1. El Sr. MAÏGA (Mali) presenta, en nombre de sus autores, el proyecto de resolución A/C.6/L.1025, e indica que su texto es consecuencia del segundo período de sesiones de la Conferencia diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados, celebrada en Ginebra del 3 de febrero al 18 de abril de 1975, y que ha sido objeto de un informe del Secretario General (A/10195 y Add.1). El preámbulo del proyecto de resolución hace hincapié especialmente en los apreciables progresos realizados en ese segundo período de sesiones. En efecto, mientras que en su primer período de sesiones la Conferencia diplomática sólo había aprobado cinco artículos, en la segunda aprobó casi 70, o sea, alrededor de la mitad de los que tenía ante sí. En el último párrafo del preámbulo, la Asamblea General toma nota de una resolución cuyo proyecto le fue presentado recientemente por la Primera Comisión con la signatura A/C.1/L.728, por la que se invita a la Conferencia diplomática a continuar examinando la cuestión del empleo de determinadas armas de tipo corriente, y tratando de lograr un acuerdo, por razones humanitarias, sobre posibles reglas para prohibir o restringir el uso de tales armas.

2. Al pasar revista a la parte dispositiva del proyecto de resolución, el representante de Mali insiste en la necesidad de que se adopten medidas adecuadas para promover, sobre una base universal, la difusión de las normas del derecho internacional humanitario aplicables en los conflictos armados y la instrucción sobre dichas normas, cuestión sobre la que se llama la atención en el párrafo 2. Dada la complejidad de las normas aplicables en esa esfera, sería necesario, como algunos representantes lo declararon en la Conferencia diplomática, que cada soldado fuera acompañado de un jurista. La cuestión de la protección de los periodistas en

misión peligrosa en las zonas de conflictos armados fue estudiada primeramente por la Tercera Comisión y remitida luego a la Conferencia diplomática por la Asamblea General por su resolución 3058 (XXVIII); sólo en su segundo período de sesiones la Conferencia diplomática examinó esa cuestión y aprobó algunas disposiciones. Como se indica en el párrafo 4 del proyecto de resolución, convendría que la Conferencia terminara sus trabajos sobre esa cuestión en su próximo período de sesiones.

3. El representante de Mali expresa la esperanza de que se mantenga el espíritu de cooperación y de solidaridad que ha imperado hasta el presente en los debates de la Conferencia diplomática.

4. El Sr. HAGARD (Suecia) subraya los sustanciales progresos realizados por la Conferencia diplomática en su segundo período de sesiones, especialmente en lo que se refiere al respeto de las normas relativas a la protección de la población civil contra los efectos de las hostilidades. El Gobierno de Suecia estima que es particularmente importante prohibir los bombardeos de zonas, los ataques dirigidos contra cosechas o víveres indispensables para la supervivencia de la población civil, o contra obras e instalaciones que contengan fuerzas peligrosas, como las estaciones nucleares. Acoge con agrado los resultados obtenidos en materia de protección de los heridos, los enfermos y los náufragos. El acuerdo logrado respecto de la designación de "Potencias protectoras" y de su "sustituto" debería contribuir sensiblemente a garantizar una mejor aplicación del derecho humanitario.

5. En el segundo período de sesiones de la Conferencia diplomática se consagraron prolongadas negociaciones a la cuestión del ámbito de aplicación del proyecto de protocolo II, relativo a los conflictos armados que no son de carácter internacional. El texto finalmente perfeccionado por consenso (véase A/10195, anexo I) refleja el espíritu de conciliación y cooperación que animó a las delegaciones. En realidad, la protección de las víctimas de conflictos que no son de carácter internacional es tan importante como el de los conflictos internacionales.

6. Sin embargo, hay varias otras cuestiones de fondo que habrán de ser reglamentadas en el tercer período de sesiones de la Conferencia diplomática y necesitarán también la cooperación de las delegaciones. Entre ellas, el problema de

* Reanudación de los trabajos de la 1572a. sesión.

la concesión de estatuto de prisionero de guerra a los guerrilleros, la responsabilidad penal por violación del protocolo, y la creación de una comisión investigadora imparcial encargada de examinar las violaciones de los convenios y del protocolo. Es importante promover el respeto de las obligaciones que imponen los instrumentos humanitarios internacionales. Al respecto, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja pueden dar directrices útiles para la aplicación de esas normas.

7. En lo que respecta a la prohibición o restricción del empleo de determinadas armas de tipo corriente, especialmente destructivas, la delegación de Suecia ya expuso su punto de vista en la 2091a. sesión de la Primera Comisión. Desea agradecer al CICR el haber convocado una segunda conferencia de expertos gubernamentales sobre esa cuestión y expresa la esperanza de que los resultados de tal reunión faciliten los trabajos de la Conferencia diplomática.

8. El representante de Suecia hace votos porque sea coronado por el éxito el tercer período de sesiones de la Conferencia diplomática, convocado por el Consejo Federal Suizo y porque la aplicación de los futuros protocolos por todas las partes de un conflicto armado permita reducir un poco los sufrimientos que esos conflictos imponen al hombre y los estragos que causan en el medio ambiente.

9. El Sr. SABEL (Israel) indica que su país estuvo representado, tanto en las diversas conferencias de expertos gubernamentales que precedieron a la Conferencia diplomática como en los dos períodos de sesiones de la propia Conferencia. Estima que la Sexta Comisión no debería dedicarse a un debate de fondo sobre la cuestión. Es importante que se mantenga una distinción clara entre la rama del derecho constituida por los derechos humanos y que ocupa un lugar particular en el mundo y en el sistema de las Naciones Unidas, y el derecho humanitario internacional aplicable en los conflictos armados. El derecho humanitario internacional tiene sus propias fuentes históricas, y la práctica jurídica está cristalizada en un derecho internacional consuetudinario; tiene vínculos particulares con el CICR de Ginebra y continúa siendo uno de los pilares del derecho internacional a pesar de los tropiezos y las vicisitudes que han caracterizado la evolución de las creencias, las ideologías y las convicciones políticas y sociales en el mundo. Cuando se procura mejorar o proteger los derechos humanos en el sistema de las Naciones Unidas, es necesario cuidarse de no perjudicar ni quebrantar la clara estructura actual del derecho internacional humanitario. Por esa razón, la delegación de Israel se abstuvo de pronunciarse sobre el fondo de las cuestiones que la Conferencia diplomática tiene ante sí. No obstante, el representante de Israel desea hacer notar que en el informe del Secretario general no se menciona la enmienda CDDH/1/286, presentada por la delegación de Israel a la Conferencia diplomática en su segundo período de sesiones, y que tendía a añadir un nuevo artículo 2 bis a la primera parte del proyecto de protocolo I, según el cual siendo que el escudo rojo de David sobre fondo blanco se utiliza ya como emblema distintivo, ese emblema debe ser reconocido por los convenios y por el protocolo I. Desde su creación, Israel utilizó el escudo rojo de David como emblema distintivo de los servicios sanitarios de sus fuerzas armadas, respetando la inviolabilidad de los signos y emblemas de los

Convenios de Ginebra de 1949. El escudo de David es un emblema del judaísmo universal conocido y reconocido; su origen es muy antiguo y muy anterior a la creación del Estado de Israel. Además, la Conferencia de 1949 admitió que ese emblema era bien conocido y respetado en las regiones del mundo en que se utilizaba. La delegación de Israel explicó largamente ese punto en los períodos de sesiones vigésimo octavo y vigésimo noveno (sesiones 1453a. y 1519a., respectivamente) y ahora expresa la esperanza de que la Conferencia diplomática consagre en el plano jurídico el derecho que tiene Israel de protegerse de esa manera.

10. El Sr. KUSSBACH (Austria) recuerda que, en 1971, cuando se celebró en Ginebra la primera conferencia de expertos gubernamentales, comenzaron las negociaciones relativas a la reafirmación y desarrollo del derecho humanitario aplicable en los conflictos armados, que tales negociaciones se prosiguieron en 1974 y 1975 en la Conferencia diplomática y que deberían quedar terminadas en un futuro próximo. Si bien es demasiado pronto para llegar a conclusiones sobre los resultados definitivos de tales negociaciones, es innegable que en su segundo período de sesiones la Conferencia diplomática realizó importantes progresos. Como lo indica el informe del Secretario General sobre la materia, más de la mitad de los proyectos de artículos presentados a la Conferencia diplomática fueron aprobados, y algunos de ellos son particularmente importantes. En comisión, la Conferencia diplomática logró también aprobar en su segundo período de sesiones un proyecto de artículo sobre la protección de los periodistas en misión peligrosa (véase A/10195, anexo I, pág. 9). El Gobierno de Austria acoge ese resultado con tanto más beneplácito cuanto que durante muchos años se ha esforzado con otros gobiernos, dentro de las Naciones Unidas, por obtener una mejor protección para los periodistas en misión en regiones peligrosas. En lo que se refiere a los debates consagrados a la prohibición o restricción del empleo de ciertas armas de tipo corriente, permitieron definir mejor el tema y resolver ciertas controversias.

11. A pesar de sus notables resultados y a despecho de la prolongada duración de su segundo período de sesiones, la Conferencia diplomática no ha podido terminar sus trabajos a tiempo. Antes del tercer período de sesiones, en el cual todavía deberán debatirse cuestiones complejas y delicadas, del 28 de enero al 26 de febrero de 1976 se reunirá en Lugano con los auspicios del CICR una segunda conferencia de expertos gubernamentales, con miras a presentar propuestas concretas sobre la prohibición o restricción del empleo de determinadas armas de tipo corriente. El Gobierno de Austria teme que pueda ser necesario un cuarto período de sesiones de la Conferencia diplomática, habida cuenta de que tras haberse aprobado en comisión los proyectos de artículos, deberán aún ser examinados por el Comité de Redacción para ser sometidos finalmente a la Conferencia plenaria. Puede ocurrir que el trabajo del Comité de Redacción lleve cierto tiempo.

12. El Gobierno de Austria atribuye particular importancia al proyecto de protocolo II, y estima que la Conferencia diplomática no lograría plenamente su finalidad si no llegase a un acuerdo sobre normas relativas a los aspectos humanitarios de los conflictos armados no internacionales. Estima que no es posible subestimar la importancia del

problema de la prohibición o restricción del empleo de determinadas armas de tipo corriente y que deberían adoptarse normas básicas sobre la materia. Habida cuenta de las cargas financieras que implica para el país huésped la celebración de la Conferencia diplomática, las delegaciones participantes en ella deberían esforzarse por no prolongar inútilmente los trabajos.

13. Tras expresar el reconocimiento del Gobierno de Austria al Consejo Federal Suizo y al CICR por la perfecta organización de los trabajos de la Conferencia diplomática, el representante de Austria expresa la esperanza de que el proyecto de resolución A/C.6/L.1025, del cual la delegación de Austria es una de las autoras, sea aprobado por consenso.

14. El Sr. BUSSE (República Federal de Alemania) indica que, desde el principio, su país ha apoyado activamente los esfuerzos del CICR y del Consejo Federal Suizo tendientes a desarrollar y reafirmar el derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados. En el segundo período de sesiones de la Conferencia diplomática fueron aprobados más de la mitad de los artículos contenidos en los proyectos de protocolos adicionales. Es de esperar que la Conferencia pueda terminar sus trabajos en su próximo período de sesiones.

15. El excelente informe del Secretario General sobre el segundo período de sesiones de la Conferencia diplomática es particularmente conciso. La delegación de la República Federal de Alemania atribuye una importancia especial a las disposiciones que se refieren a la designación de Potencias protectoras, y que son mucho mejores que las previstas en los Convenios de Ginebra de 1949; al acuerdo logrado sobre la cuestión de la protección de los periodistas en misión peligrosa, a las disposiciones aprobadas por consenso, tanto en lo que atañe a los métodos y medios de combate como a la protección de la población civil contra los peligros que surgen de operaciones militares, y finalmente a las importantes decisiones adoptadas respecto del ámbito de aplicación del proyecto de protocolo II y a las garantías fundamentales que se dan a los particulares.

16. Como se indica en el capítulo VI del informe del Secretario General, en el segundo período de sesiones de la Conferencia diplomática la Comisión Especial de Armas Convencionales estudió atentamente los resultados de la Conferencia de Expertos Gubernamentales sobre el empleo de ciertas armas convencionales, que se había reunido en Lucerna en el otoño de 1974, y llegó a la conclusión de que debía proseguirse el estudio de esa cuestión, por lo que antes del tercer período de sesiones de la Conferencia diplomática se va a reunir en Lugano otra conferencia de expertos gubernamentales.

17. En su tercer período de sesiones, la Conferencia diplomática tendrá todavía mucho que hacer para acabar el examen de los dos protocolos adicionales que tienden a asegurar una mejor protección de los particulares, combatientes o no, en tiempo de guerra. Deberían recibir esa protección, cualesquiera que fueran su origen y el régimen social y los objetivos del Estado a que pertenecieran. Únicamente una protección de esa naturaleza estaría conforme con los principios que defiende el CICR y con las normas que rigen el derecho internacional humanitario.

Teniendo en cuenta el hecho de que 40 de los 50 conflictos armados que se han producido en el curso de los últimos decenios no han sido conflictos internacionales, la delegación de la República Federal de Alemania estima que es especialmente urgente adoptar el proyecto de protocolo II, que debe aplicarse en los conflictos armados no internacionales. Dicho protocolo llenaría una laguna, pues en materia de derecho humanitario existen muy pocas normas universalmente aceptadas que sean aplicables a los conflictos no internacionales. En los conflictos de esa categoría, ofrecería un mínimo de protección humanitaria, correspondiente a la protección que ofrecen los pactos internacionales relativos a los derechos humanos en tiempos de paz.

18. El representante de la República Federal de Alemania expresa la esperanza de que la Conferencia diplomática pueda terminar los trabajos en su siguiente período de sesiones, e indica que la delegación de su país apoyará el proyecto de resolución A/C.6/L.1025.

19. El Sr. JEANNEL (Francia) indica que la delegación de Francia aprueba el proyecto de resolución A/C.6/L.1025, y en especial los siete párrafos de la parte dispositiva, pero que el último párrafo del preámbulo le plantea dificultades. En dicha disposición, la Asamblea General toma nota de una resolución, no adoptada aún, cuyo proyecto le habrá de presentar la Primera Comisión durante el actual período de sesiones, y en la que se invita a la Conferencia diplomática a continuar examinando la cuestión del empleo de determinadas armas convencionales y a tratar de lograr un acuerdo sobre posibles reglas para prohibir o restringir el uso de tales armas. La delegación francesa opina que la Conferencia diplomática no debe ocuparse del desarme y que el estudio de esa cuestión no puede por menos de obstaculizar sus trabajos. No obstante, si la idea expresada en el último párrafo del preámbulo fuera aceptada por consenso, la delegación francesa no se opondría a ella. Sin embargo, en la situación actual es imposible que la Sexta Comisión proponga a la Asamblea General que tome nota de un documento del que la Sexta Comisión no conoce ni siquiera el contenido exacto. Cabe que el contenido del proyecto de resolución de la Primera Comisión, una vez aprobado por la Asamblea General, difiera de la descripción que se hace de él en dicho párrafo.

20. Por otra parte, debe observarse que, al igual que las demás Comisiones Principales, la Sexta Comisión sólo aprueba proyectos de resolución, que luego se presentan a la Asamblea General. Mientras la Asamblea General no haya aprobado un proyecto, no existe una resolución propiamente dicha. Por ello, la delegación francesa estima que ese párrafo está fuera de lugar en el proyecto de resolución objeto de examen. Su posición no implica que vaya a oponerse en sesión plenaria a que se mencione una resolución que la Asamblea General aprobaría sobre la base de un proyecto de una Comisión Principal, si dicha mención fuera objeto de un consenso. Pero la Sexta Comisión no puede, de momento, prejuzgar la decisión que vaya a adoptar la Asamblea General sobre un proyecto de resolución que le habrá de presentar la Primera Comisión. Una vez que disponga de los proyectos de resolución de sus Comisiones Principales, la Asamblea General debe proceder a un trabajo de coordinación; en ese momento, las delegaciones que deseen mencionar la resolución que tal vez

se adopte sobre la base del proyecto de la Primera Comisión podrán manifestar su opinión.

21. En consecuencia, el representante de Francia propone que se suprima el último párrafo del preámbulo del proyecto de resolución A/C.6/L.1025.

22. El Sr. MELESCANU (Rumania) declara que, a juicio de su país, que ha participado en las conferencias organizadas a iniciativa del CICR y de la Confederación suiza, las cuestiones que son objeto de esas conferencias constituyen parte integrante de su política extranjera. Con el propósito de reforzar la paz y la seguridad internacionales y de establecer nuevas relaciones entre los Estados, Rumania estima que las cuestiones concernientes al derecho internacional humanitario de los conflictos armados deben ser abordadas teniendo en cuenta la necesidad de poner fin a las guerras y de suprimir las fuentes de tensión y de conflicto.

23. El derecho humanitario no puede desarrollarse sino en el marco más amplio de la protección general de los pueblos y de las naciones basada en el respeto de las normas y de los principios del derecho internacional contemporáneo. Ese derecho debe orientarse hacia una mejor protección de la población civil y de su economía y descansar en una distinción neta entre combatientes y población civil; y de ahí la necesidad de prohibir para siempre las armas de destrucción en masa y las que producen efectos indiscriminados, las represalias, la toma de rehenes y todos los actos de terror.

24. Al abordar la cuestión de los conflictos armados que no tienen carácter internacional, debe partirse de la necesidad de respetar el derecho de cada pueblo a elegir, desarrollar libremente y defender su sistema político, económico, social y cultural, así como de la obligación de cada Estado de abstenerse de todo acto que tenga por objeto derrocar el régimen de otro Estado. Por ello, la delegación rumana cree que aplicar a los conflictos internos una reglamentación válida en el caso de los conflictos internacionales podría tener consecuencias negativas y entrañar violaciones del derecho internacional.

25. Las Naciones Unidas no pueden permanecer insensibles ante el deseo de la comunidad internacional de garantizar el imperio del derecho humanitario y de hacer que prevalezca la justicia, y deben alentar los esfuerzos para el desarrollo del derecho humanitario. Los proyectos aprobados en el segundo período de sesiones de la Conferencia diplomática ilustran la importancia del trabajo realizado para elaborar futuros protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949, lo que constituye el primer paso hacia la reafirmación y el desarrollo del derecho humanitario a que debe procederse dentro del marco del derecho internacional contemporáneo.

26. Para todos los pueblos que han conseguido la independencia tras una lucha prolongada y grandes sacrificios, el desarrollo del derecho humanitario debe servir para consolidar su soberanía y reforzar su protección en caso de agresión. De ese modo, el derecho humanitario contribuirá igualmente a una aplicación más estricta del derecho internacional general. La delegación rumana está persuadida de que el tercer período de sesiones de la Conferencia, al

que aportará su contribución, tendrá una importancia decisiva para la reafirmación y el desarrollo del derecho humanitario.

27. El Sr. GONZALEZ GALVEZ (México) pide a los miembros de la Comisión que aprueben por consenso el proyecto de resolución A/C.6/L.1025. Recuerda al respecto que es tradicional que la Sexta Comisión examine los resultados de las conferencias de plenipotenciarios. Aunque la cuestión de que se ocupa la Comisión sea estudiada en otros órganos, las Naciones Unidas faltarían a uno de sus deberes, el de garantizar la paz y la seguridad internacionales, si no se pronunciaron sobre cuestiones vinculadas con los propósitos que persiguen.

28. En cuanto al problema a que ha hecho alusión el representante de Francia, el Sr. González Gálvez comprende que sea difícil aprobar el proyecto de resolución objeto de examen antes de que la Primera Comisión se haya pronunciado sobre el proyecto mencionado en el último párrafo del preámbulo, pero no podría aceptar la supresión de ese párrafo, que contiene una noción fundamental para el desarrollo y la codificación del derecho humanitario. En efecto, por lo menos a juicio de la delegación de México, uno de los problemas más importantes de que se ocupa la Conferencia es el de la prohibición y limitación de ciertos tipos de armas, mientras que, para el representante de Francia, ese problema debe ser tratado por separado dentro del marco del desarme. Al respecto, el representante de México lamenta que Francia no participe en las negociaciones sobre el desarme que se están celebrando actualmente. Si se remite esa cuestión a la Conferencia del Comité de Desarme, se aplazaría de hecho el examen por una decena de años, pues el representante de Francia no ignora ciertamente que el programa de la Conferencia del Comité de Desarme está recargado. Por otra parte, la delegación mexicana ha subrayado en la Conferencia diplomática que si la Conferencia no establecía normas sobre la limitación o prohibición de armas convencionales, México no firmaría ni ratificaría los protocolos que pudiera aprobar la Conferencia. Por esas razones, la delegación mexicana se opone a la supresión del último párrafo del preámbulo y ha presentado a la Primera Comisión, en concierto con otras delegaciones, una propuesta publicada con la signatura A/C.1/L.728 referente al napalm y otras armas incendiarias y todos los aspectos de su eventual empleo.

29. En lo que respecta al cuarto párrafo del preámbulo del proyecto de resolución, el representante de México hace observar que, durante los debates celebrados en la Tercera Comisión y en la Conferencia diplomática, algunos representantes expresaron dudas sobre la oportunidad de que se concediera una protección especial a los periodistas en misión peligrosa en las zonas de conflicto armado, por temor de que, si la definición de la expresión "conflicto armado no internacional" no fuese suficientemente clara, un Estado se viera obligado, en caso de conflicto interno, a conceder una protección especial a los periodistas. El problema parece haberse resuelto en la definición que se ha adoptado, pero como no es seguro que el proyecto de protocolo II reciba el apoyo de la comunidad internacional, México está reexaminando su posición ante dicho instrumento. Para la delegación mexicana, las Naciones Unidas no solamente tienen el poder de expresar su opinión sobre esa cuestión, sino el derecho a hacerlo.

30. En lo que respecta a la prohibición de las armas incendiarias, el Sr. González Gálvez hace observar que el párrafo 100 del informe del Secretario General expone el alcance de una propuesta que atañe a toda una serie de prohibiciones de utilización de esas armas, que, en opinión de la delegación mexicana, deben ser examinadas con prioridad en el próximo período de sesiones de la Conferencia. A ese respecto, deplora la actitud negativa de algunas Potencias, que se esfuerzan por retrasar el examen de esa cuestión. Pese a la prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza, consagrada en la Carta de las Naciones Unidas desde 1945, han estallado en el mundo más de un centenar de conflictos armados, si bien ninguno de ellos ha tenido por teatro un país desarrollado. Por consiguiente, la delegación mexicana desea muy especialmente que se conceda prioridad a la referida cuestión.

31. El Sr. SIEV (Irlanda) declara que la delegación de Irlanda ha tomado nota con satisfacción de los progresos realizados en el segundo período de sesiones de la Conferencia diplomática, pues, para el Gobierno irlandés, la concertación de nuevos instrumentos internacionales relativos al derecho humanitario aplicable en casos de conflicto armado se hace cada vez más urgente en un período de inseguridad y de tensión mundiales. Con respecto al párrafo 10 del informe del Secretario General, subraya que, hasta 1974, el número de delegaciones participantes en los trabajos sobre el derecho humanitario aumentó, pero que, de 126 en 1974, el número de Estados participantes en la Conferencia disminuyó a 121 en 1975, probablemente a causa de la multiplicación de las conferencias diplomáticas, a las que los pequeños Estados no pueden siempre enviar representantes. Sin embargo, la delegación irlandesa hace un llamamiento a todas las delegaciones, en especial a las de los nuevos Estados Miembros, para que estudien la posibilidad de participar en el tercer período de sesiones de la Conferencia diplomática.

32. El Sr. ROSENSTOCK (Estados Unidos de América) estima que, por las razones expuestas por el representante de Francia, el último párrafo del preámbulo del proyecto de resolución A/C.6/L.1025 plantea ciertamente un problema que no puede soslayarse mediante sarcasmos. No sostiene necesariamente que el fondo de dicho párrafo sea inaceptable, pero estima que, si se aprobara en su forma actual, claramente inadecuada, la Sexta Comisión no procedería con la seriedad que cabe esperar de ella.

33. El Sr. JEANNEL (Francia), respondiendo al representante de México, dice que no ha querido enfrascarse en una polémica ni en un regateo. Si ha recordado su posición, es porque le resultaba difícil no hacerlo. Por otra parte, ha precisado que la delegación francesa no se opondría a un consenso si es necesario llegar a uno en la materia. El problema que se plantea es un problema jurídico. Dado que es la Asamblea General la que aprueba las resoluciones, ella sola puede introducir en una resolución una referencia a otra resolución que todavía no ha sido aprobada. Una solución podría consistir en que la Sexta Comisión aprobase el proyecto de resolución sin el último párrafo del preámbulo y que el Presidente de la Sexta Comisión señalase a la atención de la Asamblea General el hecho de que algunas delegaciones estiman que sería conveniente hacer referencia en el texto de la Sexta Comisión a la resolución que se apruebe sobre la base de un proyecto de la Primera Comisión.

34. El Sr. HAGARD (Suecia) propone que se modifique la redacción del último párrafo del preámbulo del modo siguiente: “*Observando* que la Conferencia diplomática debe continuar examinando...” Se evitaría de ese modo toda referencia a un proyecto de resolución que no ha sido todavía aprobado por otra comisión.

35. E. Sr. MAÏGA (Malí) apoya la propuesta del representante de Suecia, a reserva de una ligera modificación. Propone que se sustituyan las palabras “debe continuar examinando” por las palabras “continúa examinando”.

36. El Sr. JEANNEL (Francia), apoyado por el Sr. ROSENSTOCK (Estados Unidos de América), dice que está reconocido a los representantes de Suecia y de Malí por su propuesta y se declara dispuesto a aceptar la propuesta del representante de Malí si puede ser objeto de un consenso.

TEMA 108 DEL PROGRAMA

Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 27º período de sesiones (conclusión) (A/10010, A/C.6/L.1024)

37. El PRESIDENTE hace saber que las delegaciones del Canadá, Hungría, Nigeria, Polonia y Turquía se han sumado a los autores del proyecto de resolución A/C.6/L.1024.

38. El Sr. GOBBI (Argentina), presentando el proyecto de resolución A/C.6/L.1024, dice que dicho proyecto refleja el espíritu de conciliación que reina en la Sexta Comisión y expresa la esperanza de que su texto sea aprobado por unanimidad.

39. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, considerará que la Sexta Comisión desea aprobar el proyecto de resolución A/C.6/L.1024 sin votación.

Queda aprobado el proyecto de resolución A/C.6/L.1024.

TEMA 110 DEL PROGRAMA

Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la labor realizada en su octavo período de sesiones (conclusión) (A/10017, A/C.6/L.1016, A/C.6/L.1017, A/C.6/L.1021)

40. El PRESIDENTE anuncia que Ghana y Nigeria se han unido a los autores del proyecto de resolución A/C.6/L.1021 e invita a los miembros de la Sexta Comisión a que voten sobre ese proyecto de resolución. Hace saber que una delegación ha pedido que el párrafo 8 de la parte dispositiva de dicho proyecto se someta a votación por separado.

41. El Sr. STARČEVIĆ (Yugoslavia) pide que la delegación de que se trata presente una moción de división.

42. El Sr. ROSENSTOCK (Estados Unidos de América) dice que, para ganar tiempo, la delegación de los Estados Unidos ha pedido previamente que el párrafo 8 sea objeto de votación separada, pero que no tiene objeciones a que su petición conste en el acta resumida.

43. El Sr. ABUL-KHEIR (Egipto) se opone a la petición de división y pide al Presidente que aplique el artículo 129 del reglamento de la Asamblea General.

44. El PRESIDENTE anuncia su intención de dar, conforme a lo dispuesto en el artículo 129, la autorización para hacer uso de la palabra sobre la moción de división a dos oradores a favor y uno en contra.

45. El Sr. STEEL (Reino Unido) deplora la tendencia a impedir que se expresen opiniones divergentes, práctica que no había ocurrido hasta la fecha en la Sexta Comisión. Apoya enérgicamente la petición de división.

46. El Sr. BOUCHOUAREB (Argelia) dice que el proyecto de resolución se refiere a esferas comerciales y económicas de que han tratado las decisiones adoptadas en dos períodos extraordinarios de sesiones de la Asamblea General, y que el párrafo 8 se armoniza perfectamente con el resto del proyecto. La delegación de Argelia se pronuncia en contra de una votación por partes.

47. El Sr. WANG (Canadá) comparte por entero la posición del representante del Reino Unido. Estima que el proyecto de resolución no se refiere a cuestiones comerciales y económicas, sino a cuestiones jurídicas, sobre las cuales los miembros de la Sexta Comisión pueden, como juristas, tener opiniones diferentes.

Se procede a votación no registrada de la moción de división.

Por 67 votos contra 24 y 12 abstenciones, queda rechazada la moción.

A petición del representante de Yugoslavia, se procede a votación registrada del proyecto de resolución A/C.6/L.1021.

Votos a favor: Afganistán, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bahrein, Bangladesh, Bélgica, Bolivia, Botswana, Brasil, Bulgaria, Birmania, República Socialista Soviética de Bielorrusia, Canadá, Chad, Chile, China, Colombia, Congo, Cuba, Checoslovaquia, Yemen Democrático, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, República Democrática Alemana, Ghana, Grecia, Guatemala, Guyana, Hungría, India, Indonesia, Irán, Iraq, Irlanda, Israel, Italia, Costa de Marfil, Japón, Jordania, Kenya, Kuwait, Laos, Lesotho, República Árabe Libia, Madagascar, Malasia, Malí, México, Mongolia, Mozambique, Nepal, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nigeria, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, Rumania, Rwanda, Arabia Saudita, Senegal, Sierra Leona, Singapur, España, Sri Lanka, Sudán, Suecia, República Árabe Siria, Tailandia, Túnez, Turquía, Uganda, República Socialista Soviética de Ucrania, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Emiratos Árabes Unidos, República Unida del Camerún, República Unida de Tanzania, Alto Volta, Uruguay, Venezuela, Yemen, Yugoslavia, Zaire, Zambia.

Votos en contra: Ninguno.

Abstenciones: Alemania (República Federal de), Swazilandia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América.

Por 98 votos contra ninguno y 4 abstenciones, queda aprobado el proyecto de resolución.

48. El Sr. ROSENSTOCK (Estados Unidos de América) lamenta que se haya privado a la Sexta Comisión de la posibilidad de votar por separado sobre el párrafo 8 de la parte dispositiva. Las reservas de la delegación de los Estados Unidos sobre los resultados de los trabajos del sexto período extraordinario de sesiones y sobre ciertos aspectos de la labor del séptimo período extraordinario de sesiones son bien conocidas. Cabe dudar que las recomendaciones formuladas en esos dos períodos de sesiones, o las que figuran en la resolución 3281 (XXIX), hayan sido ponderadas lo suficiente como para incluirlas en un contexto jurídico. La delegación de los Estados Unidos trató de buscar una base común que permitiera aprobar el proyecto de resolución por consenso. A ese respecto da las gracias al Relator, quien presidió las consultas oficiosas. Desea también expresar su gratitud al grupo latinoamericano en su conjunto y a un número considerable de delegaciones de África y de Asia, que han demostrado estar animadas por un espíritu de conciliación. Expresa su pesar por la conducta premeditada e irresponsable de una delegación, que no es del África ni de Asia, que ha sido primordialmente responsable del fracaso en el logro de un consenso. Deplora que, por primera vez, la Sexta Comisión no haya podido adoptar por consenso un proyecto de resolución relativo a la labor de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

49. El Sr. BUSSE (República Federal de Alemania) subraya el interés que despierta en su Gobierno la labor de la CNUDMI, como lo prueban las contribuciones que aportó para ayudar a financiar el último simposio organizado por la CNUDMI, en relación con los gastos de los juristas procedentes de los países en desarrollo. La delegación de la República Federal de Alemania lamenta haber tenido que abstenerse en la votación del proyecto de resolución, pero no podía aceptar las referencias que se hacían en el tercer párrafo del preámbulo a las resoluciones 3201 (S-VI) y 3202 (S-VI) de la Asamblea General ni el párrafo 8 de la parte dispositiva. La CNUDMI, cuya labor tiene por objeto elaborar normas uniformes en la esfera del derecho mercantil internacional, debe evitar toda intención política que apunte a favorecer a ciertos Estados.

50. El Sr. GODOY (Paraguay) indica que su delegación votó a favor de la moción de división presentada por la delegación de los Estados Unidos porque está convencida de que toda delegación tiene el derecho absoluto de no hacerse parte de un consenso "forzado", derecho que la Sexta Comisión debe preservar respecto de cada uno de sus miembros. No obstante, votó a favor del proyecto de resolución en su totalidad.

51. El Sr. KRISHNADASAN (Swazilandia) dice que su delegación se abstuvo por error en la votación sobre el proyecto de resolución, pero que de hecho apoya plenamente ese texto, sobre todo el párrafo 8 de la parte dispositiva.

52. El Sr. SIBLESZ (Países Bajos) deplora que la Comisión haya rechazado la petición de una votación por separado sobre el párrafo 8 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, pero subraya que la delegación de los Países

Bajos habría votado a favor de que se retuviera el párrafo 8, a pesar de ciertas reservas relativas a las resoluciones mencionadas en él. Recuerda que durante el vigésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General, la delegación de los Países Bajos se abstuvo en la votación relativa a la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados y agrega que tiene dudas de que sea oportuno pedir a la CNUDMI que tenga en cuenta las disposiciones de resoluciones aprobadas durante los períodos extraordinarios de sesiones sexto y séptimo de la Asamblea General.

53. El Sr. BOSCO (Italia) votó a favor del proyecto de resolución, pero lamenta que la Comisión no haya podido votar por separado sobre el párrafo 8 de la parte dispositiva, en el que, al igual que en el tercer párrafo del preámbulo, se mencionan ciertas resoluciones que inspiran serias reservas a la delegación de Italia. No es adecuado que se señalen a la atención de la CNUDMI, que es un órgano jurídico y técnico, resoluciones relativas a cuestiones de política económica.

54. El Sr. SHIGETA (Japón) votó a favor del pedido de votación por separado en el entendimiento de que convenía dar a las delegaciones la posibilidad de expresar su opinión mediante una votación. La delegación del Japón también votó a favor del proyecto de resolución en su totalidad, pero tiene cierta dificultades para aceptar el párrafo 8 de la parte dispositiva; se habría abstenido si ese párrafo hubiese sido sometido a una votación por separado.

55. El Sr. STEEL (Reino Unido) declara que su delegación figura entre las que propugnaron una votación por separado sobre el párrafo 8 de la parte dispositiva y deplora que la Comisión se haya negado a dar a las delegaciones la oportunidad de expresar su disenso. Si ese párrafo hubiese sido sometido a votación, la delegación del Reino Unido habría votado en contra, razón por la que no ha tenido otra opción que abstenerse en la votación sobre el proyecto de resolución en su totalidad. Tradicionalmente, la delegación del Reino Unido figura todos los años entre los autores del proyecto de resolución que se aprueba respecto del informe de la CNUDMI, y de no haber sido por el párrafo ofensivo hubiera estado dispuesta a patrocinarlo el año actual. Fue sólo la insistencia de muy pocas delegaciones en que se incluyera ese material extraño y provocador lo que impidió tal resultado y lo que frustró los largos y pacientes intentos de las delegaciones de todos los grupos regionales para hallar una fórmula menos confrontante. Si tales esfuerzos fracasaron no fue por culpa de esas delegaciones ni de la delegación del Reino Unido. Su delegación considera que el proyecto de resolución es inaceptable por varias razones. No puede sumarse para recomendar a la CNUDMI que tenga en cuenta resoluciones respecto de partes de las cuales ha formulado reservas expresas que aún mantiene. Además, aunque el sexto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General se desarrolló en una atmósfera de enfrentamiento, el séptimo período extraordinario de sesiones sembró la esperanza de llegar a un diálogo. Ese último período de sesiones es el punto inicial apropiado para un diálogo constructivo en el porvenir. Es, pues, poco provechoso dar tal trato a las resoluciones del sexto período extraordinario de sesiones. Por último, impartir a la CNUDMI tal recomendación equivaldría a desviarla de su propio cometido y a comprometer su capacidad para continuar produciendo resultados benéficos.

56. El Sr. WANG (Canadá) votó a favor del proyecto de resolución en su conjunto, pero si el párrafo 8 de la parte dispositiva hubiera sido sometido a una votación por separado, la delegación del Canadá no habría podido apoyarlo. El orador desea subrayar además que el hecho de haber votado a favor del proyecto de resolución no implica en absoluto un cambio de actitud de la delegación del Canadá sobre las resoluciones mencionadas en el párrafo 8 de la parte dispositiva, sobre las que esa delegación ha formulado reservas.

57. El Sr. VAN BRUSSELEN (Bélgica) se adhiere a los representantes que han deplorado que no se les haya autorizado a expresar libremente su opinión. La delegación de Bélgica votó a favor del proyecto de resolución en su conjunto, pero mantiene sus reservas sobre los resultados del sexto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General; si la moción de votación por separado no hubiese sido rechazada, esa delegación no habría votado a favor del párrafo 8 de la parte dispositiva.

58. El Sr. BRUNA (Chile) votó a favor de la moción de votación por separado porque considera conveniente que se dé a todas las delegaciones la posibilidad de expresar su opinión. Sin embargo, la delegación de Chile habría votado a favor del párrafo 8 si hubiese sido sometido a una votación por separado y, además, votó a favor del proyecto de resolución en su totalidad.

59. El Sr. GÜNEY (Turquía) votó a favor del pedido de votación por separado por las razones expuestas por el representante del Paraguay. No obstante, habría votado a favor del párrafo 8 si hubiese sido sometido a votación por separado y votó a favor del proyecto de resolución en su totalidad.

60. El Sr. STARČEVIĆ (Yugoslavia) aclara que la intención de los autores del proyecto de resolución era la de armonizar los trabajos de la CNUDMI con las decisiones adoptadas por las Naciones Unidas en el ámbito económico, lo que es perfectamente natural habida cuenta, sobre todo, del último párrafo del preámbulo de la resolución 3362 (S-VII). Además, es evidente que la CNUDMI se ocupa de problemas jurídicos que están vinculados a cuestiones planteadas durante el séptimo período extraordinario de sesiones. Por ello al Sr. Starčević le sorprende la oposición manifestada por ciertos representantes respecto de una referencia relativa al vínculo natural que liga la labor de la CNUDMI a la de la Asamblea General.

61. Por otra parte, no es conveniente restar importancia a los resultados obtenidos durante el sexto período extraordinario de sesiones ni tratar de dar la impresión de que fueron superados por los países del séptimo período extraordinario de sesiones. La delegación de Yugoslavia considera que las resoluciones aprobadas en el sexto período extraordinario de sesiones enuncian los principios sobre cuya base los países deben actuar en pro del desarrollo económico. Los autores del proyecto de resolución hicieron todo lo posible por alcanzar un consenso y el párrafo 8 de la parte dispositiva está redactado en términos mucho más suaves que lo que se había intentado inicialmente. Ceder sobre esa cuestión de principio equivaldría a negar los resultados obtenidos durante los dos últimos períodos extraordinarios de sesiones de la Asamblea General, y un consenso obtenido

a expensas de los países en desarrollo y de sus intereses no realzaría la labor de las Naciones Unidas.

62. El Sr. BRACKLO (República Federal de Alemania), Relator, recuerda que en su resolución 2292 (XXII) la Asamblea General recomendó a sus Comisiones Principales que no incluyesen en sus informes, salvo en casos excepcionales, actas de sus debates. El informe de la Sexta Comisión sobre los informes de la Comisión de Derecho Internacional y de la CNUDMI siempre ha contenido no sólo los textos de las propuestas, las enmiendas y las decisiones adoptadas, sino también un resumen de los debates. Si la Comisión lo desea, el proyecto de informe de la Sexta Comisión se preparará de conformidad con los mismos criterios y comprenderá un resumen de sus debates sobre el informe de la Comisión de Derecho Internacional, de aproximadamente 65 páginas, lo que significaría gastos estimados en 16.240 dólares, y uno sobre el informe de la CNUDMI, de aproximadamente 10 páginas, que entrañaría gastos calculados en 2.500 dólares.

TEMA 117 DEL PROGRAMA

Programa de asistencia de las Naciones Unidas para la enseñanza, el estudio, la difusión y una comprensión más amplia del derecho internacional: informe del Secretario General (continuación) (A/10332, A/C.6/438)

63. El Sr. BAQIR (Pakistán) observa con satisfacción que las Naciones Unidas han adoptado una serie de medidas encaminadas al desarrollo progresivo del derecho internacional, en particular a la armonización del derecho mercantil internacional, y está convencido de que el simposio sobre la función de las universidades y los centros de investigación con respecto al derecho mercantil internacional permitirá que las universidades interesadas centren su atención en una rama importante del derecho. No sorprende a la delegación del Pakistán que la Secretaría haya recibido numerosos pedidos de que se organicen simposios semejantes en otras regiones del mundo; el Sr. Baqir subraya la necesidad de que esos simposios se celebren en países en desarrollo, pues los países desarrollados deberían difundir sus conocimientos para favorecer a los países del tercer mundo que luchan por eliminar los vestigios de la explotación pasada y se esfuerzan por modelar un nuevo orden económico más equitativo. El programa de becas también reviste cierto interés. El Pakistán aprecia las medidas adoptadas por el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para organizar cursos de formación y perfeccionamiento en derecho internacional y espera participar en el programa de estudios.

64. El Sr. STARČEVIĆ (Yugoslavia) declara que su delegación siempre ha asignado gran importancia al Programa de asistencia de las Naciones Unidas, que contribuye a promover el imperio del derecho en las relaciones internacionales y que por ello merece el apoyo total de los Estados. No debe subestimarse la importancia de ese Programa, puesto que permite capacitar a juristas de países en desarrollo en cuestiones que revisten particular interés para sus países. Durante los dos últimos años, la ejecución del Programa se ha desarrollado de conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y, habida

cuenta de las posibilidades y los recursos disponibles, ha sido coronada por el éxito. La delegación de Yugoslavia se pregunta si no sería posible dar más publicidad a las actividades jurídicas de las Naciones Unidas, y se felicita del desarrollo de las actividades emprendidas en materia de derecho mercantil internacional. Por lo que hace a los Programas de becas para estudios de derecho internacional Naciones Unidas/UNITAR, la delegación de Yugoslavia aprueba sus propósitos, así como los criterios para seleccionar a los candidatos, pero no comprende la práctica de asignar becas a ciudadanos de países que no son Estados Miembros de las Naciones Unidas; desearía que se le aclarase ese punto.

65. La delegación de Yugoslavia apoya las recomendaciones formuladas por el Secretario General para 1976-1977 en su informe (véase A/10332, cap. III) y expresa la esperanza de que los Estados Miembros aumenten su apoyo al Programa para permitir que se extienda.

66. El Sr. KASHAMA (Zaire) recuerda que su país tuvo el honor de recibir, del 16 al 29 de enero de 1975, a los participantes en los cursos regionales de formación y repaso en derecho internacional para abogados africanos de habla francesa, organizados por el UNITAR. Esos cursos tuvieron mucho éxito; sin embargo, el programa aparentemente fue demasiado recargado, ya que una vez finalizadas las exposiciones teóricas, no fue posible dedicar tiempo suficiente a los debates. El Zaire siempre ha considerado que conviene más enseñar a una persona a trabajar que a sufragar sus necesidades. A ese propósito tiende el nuevo ciclo de cursos regionales de formación y repaso en derecho internacional organizado por el UNITAR para África, Asia y la América Latina. Por lo tanto, la delegación del Zaire desea agradecer al UNITAR y a todos los profesores y expertos que participan en la organización de esos cursos, así como los gobiernos que contribuyen a las actividades del Programa y las financian.

67. El Sr. MAKAREVICH (RSS de Ucrania) dice que su delegación ha estudiado con interés el informe del Secretario General sobre el Programa. En la actualidad, el derecho internacional es cada vez más importante, por lo que un mejor conocimiento de las normas jurídicas favorece las relaciones de buena vecindad entre los países que se rigen por sistemas económicos y sociales diferentes. A ese respecto, el Programa, establecido de conformidad con la resolución 2099 (XX), desempeña una función importante. Del informe del Secretario General se desprende que durante los dos últimos años se han logrado progresos considerables en la aplicación del Programa. Por ejemplo, se organizaron seminarios durante los períodos de sesiones 26º y 27º de la Comisión de Derecho Internacional y se celebró un simposio sobre la función de las universidades y los centros de investigación con respecto al derecho mercantil internacional con ocasión del octavo período de sesiones de la CNUDMI. Además se han prestado servicios de asesoramiento de expertos y se han difundido publicaciones jurídicas en los países en desarrollo. Es conveniente señalar asimismo la útil función desempeñada por la UNESCO y el UNITAR. Convendría invitar a juristas de países socialistas a que participasen en las actividades del Programa a fin de que los juristas de los países en desarrollo pudieran familiarizarse con todas las concepciones del derecho internacional.

68. El Gobierno de la RSS de Ucrania asigna suma importancia al estudio del derecho internacional; como lo demuestran los cursos organizados en varios establecimientos de enseñanza superior de ese país. La RSS de Ucrania proporciona asistencia bilateral para la formación de especialistas en derecho internacional; en los últimos años la RSS de Ucrania ha formado a más de 200 especialistas procedentes de países en desarrollo. La ayuda bilateral en esa esfera no reduce en absoluto la utilidad del Programa, pero conviene tenerla en cuenta durante su evaluación. Habida cuenta de la crítica situación financiera en que se encuentran las Naciones Unidas, la ejecución del Programa en 1976 y en 1977 no debería entrañar gastos suplementarios para el presupuesto de la Organización.

69. El Sr. ROSENSTOCK (Estados Unidos de América) expresa su satisfacción por la excelente labor realizada en el marco del Programa, que aporta un complemento útil a las

actividades de asistencia bilateral. También subraya que es particularmente apropiado el principio de la universalidad, puesto que la cuestión incluye, entre otras cosas, la difusión más amplia del derecho internacional.

TEMA 109 DEL PROGRAMA

Sucesión de Estados en materia de tratados: informe del Secretario General (continuación) (A/10198 y Add.1 a 5, A/C.6/L.1019, A/C.6/L.1022/Rev.1, A/C.6/L.1023/Rev.1)

70. El PRESIDENTE anuncia que Nigeria se ha unido a los patrocinadores de las enmiendas contenidas en el documento A/C.6/L.1023/Rev.1.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

1576a. sesión

Viernes 28 de noviembre de 1975, a las 10.55 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1576

TEMAS 114 Y 70 DEL PROGRAMA

Respeto de los derechos humanos en los conflictos armados: informe del Secretario General (continuación) (A/10195 y Add.1, A/C.6/L.1025/Rev.1)

Los derechos humanos en los conflictos armados: protección de los periodistas en misión peligrosa en las zonas de conflictos armados (continuación) (A/10147, A/C.6/L.1025/Rev.1)

1. El PRESIDENTE anuncia que Noruega se ha asociado a los patrocinadores del proyecto de resolución A/C.6/L.1025/Rev.1.

2. El Sr. HAGARD (Suecia), hablando en nombre de los patrocinadores del proyecto de resolución A/C.6/L.1025/Rev.1, dice que no se observan cambios de fondo en el texto revisado sino sólo mejoras en la versión inglesa.

3. El Sr. BAQIR (Pakistán) señala con satisfacción que su país ha podido realizar algunas contribuciones modestas pero positivas al segundo período de sesiones de la Conferencia diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados. Considera necesario que se haga una distinción entre los movimientos de liberación que propugnan el derecho a la libre determinación y los grupos que intentan la subversión interna y la secesión con el objeto de desintegrar un Estado. Las personas comprometidas en esa última actividad, que es condenable, no pueden ni deben quedar incluidas en la definición de prisioneros de guerra. Todo rebelde que se dedique a infringir la ley y alterar el orden sigue sujeto al derecho nacional y debe ser juzgado y

castigado en consecuencia, si se le hallare culpable. Durante el segundo período de sesiones de la Conferencia diplomática, el Pakistán presentó una enmienda dirigida a que solamente los movimientos de liberación nacional que cumplan ciertos requisitos puedan invocar la protección dada con arreglo al proyecto de protocolo I, en tanto que una rebelión no podría ampararse en esa protección y los rebeldes deberían ser considerados delincuentes comunes.

4. Respecto de los artículos que se refieren a la restricción y prohibición de determinadas armas que por su naturaleza y efecto se consideran perjudiciales por igual para civiles y combatientes, la delegación del Pakistán propuso también una enmienda a fin de que las Altas Partes Contratantes se reunieran periódicamente para estudiar las armas que pudiesen producir resultados tan generalizados. Su delegación continúa oponiéndose a los bombardeos de zona que puedan causar bajas civiles. La población civil y los bienes de carácter civil deben recibir protección absoluta contra cualquier ataque. No obstante, si ciertos bienes de carácter civil fuesen utilizados en apoyo directo de objetivos militares, se considerará que han perdido su carácter civil. Además, deberá prohibirse todo ataque contra obras e instalaciones vitales como presas y centrales de energía, por constituir un peligro en potencia contra la población civil.

5. El Pakistán no se opone a la creación de un organismo imparcial que verifique si una localidad está defendida o no. Deberá prohibirse el uso de prisioneros de guerra para lograr una ventaja política.

6. En relación con el proyecto de convención para la protección de los periodistas en misión peligrosa en las zonas de conflictos armados a que se refiere la nota del

Secretario General (A/10147), la delegación del Pakistán propone que se agregue lo siguiente como párrafo 3 del artículo 6:

“Un periodista que no sea nacional de un Estado parte en la Convención podrá solicitar, no obstante, la expedición de una tarjeta de identificación al Estado parte que participe en un conflicto armado o en cuyo territorio éste tenga lugar. El Estado parte podrá expedirle la tarjeta si a juicio de una autoridad competente del Estado para el periodista satisface a las normas y cumple las condiciones establecidas para la expedición de la tarjeta”.

La delegación del Pakistán considera que la pronta celebración de la convención es vital, y expresa su agradecimiento al Grupo de Trabajo de la Comisión I de la Conferencia diplomática para la preparación de un modelo de tarjeta de identificación para los periodistas en misión peligrosa.

A invitación del Presidente, el Sr. Marcuard (observador de Suiza) toma asiento a la mesa de la Comisión.

7. El Sr. MARCUARD (observador de Suiza) dice que el respeto de los derechos humanos en los conflictos armados ha sido siempre una de las preocupaciones principales del Gobierno de su país. Felicita al Secretario General por su informe (A/10195 y Add.1), que refleja con fidelidad y objetivamente la labor del segundo período de sesiones de la Conferencia diplomática. El hecho de que las Naciones Unidas hayan participado en la Conferencia como observadoras, sumado a las deliberaciones que ha habido en las Naciones Unidas sobre ese tema, evidencia claramente la cooperación existente desde hace años entre las Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el Gobierno suizo en el campo del derecho internacional humanitario. Complace particularmente al Gobierno suizo que la Asamblea General haya reiterado su llamamiento a todos los participantes en la Conferencia diplomática para que adopten todas las medidas que estén a su alcance a fin de llegar a un acuerdo sobre normas adicionales que ayuden a aliviar los sufrimientos causados por los conflictos armados y a respetar y proteger a los no combatientes y los bienes de carácter civil en esos conflictos.

8. Al Consejo Federal le ha sido grato recibir otra vez en Ginebra a un número considerable de delegaciones. El alto nivel de participación en la Conferencia fue en extremo satisfactorio y demostró la importancia que la comunidad mundial atribuye a las tareas asignadas a la Conferencia. También demostró la universalidad del derecho humanitario, que debe ser mantenido para permitir la redacción de textos claros y simples que todos los Estados participantes puedan ratificar.

9. El segundo período de sesiones de la Conferencia diplomática logró progresos considerables, puesto que aproximadamente la mitad de los artículos que figuran en los dos protocolos en proyecto fueron aprobados en comisión.

10. El Consejo Federal espera que todas las delegaciones invitadas se reunirán en Ginebra el año próximo para el tercer período de sesiones de la Conferencia y que los plenipotenciarios podrán alcanzar un acuerdo completo

sobre principios unánimemente reconocidos y respecto de mejoras concretas en la situación de las víctimas de los conflictos armados.

11. El Sr. NOLAN (Australia) elogia la voluntad que existió durante el segundo período de sesiones de la Conferencia diplomática de proceder al examen constructivo de los proyectos de protocolo. Los progresos logrados sobre cuestiones de fondo relativas a esos proyectos configuraron un cambio alentador en relación con el primer período de sesiones. La Comisión I logró la aprobación del artículo 1 del proyecto de protocolo II y del artículo 5 del proyecto de protocolo I. Por su parte, la Comisión II llegó a un acuerdo sobre el otorgamiento de mayor protección al personal, las unidades y los transportes sanitarios y a las personas privadas de libertad. Ese avance debe considerarse una ampliación importante del derecho humanitario. Además, la importante labor realizada sobre el proyecto de protocolo I ha garantizado que todas las ventajas del transporte aéreo moderno estén disponibles en el futuro para asistir en la evacuación de las personas heridas o enfermas y de los naufragos. También se consiguieron progresos sustanciales en el seno de la Comisión III y de la Comisión Especial de Armas Convencionales.

12. Si bien los progresos generales logrados durante el segundo período de sesiones son alentadores, existen varios problemas fundamentales que aún quedan por resolver. No obstante, el orador espera que la atmósfera de trabajo seguirá prevaleciendo durante el tercer período de sesiones a fin de que la Conferencia pueda finalizar su labor. La delegación de Australia que asista al tercer período de sesiones colaborará en pro de ese fin, y el orador desea expresar su agradecimiento al Consejo Federal Suizo por convocar dicho período de sesiones.

13. Por lo que hace a la protección de los periodistas en misión peligrosa, su delegación ha desempeñado un papel activo en el desarrollo de tan importante cuestión desde su introducción en el programa de la Asamblea General, en el vigésimo quinto período de sesiones, y ha presentado un proyecto de convención que ha sido combinado con un proyecto francés para formar la base del borrador del proyecto de convención examinado en la Conferencia diplomática. La complejidad del tema ha quedado demostrada por el hecho de que ha permanecido en examen durante cinco años. El derecho de investigar, recibir y difundir informaciones e ideas, sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión, conforme al artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, difícilmente podrá ejercerse si no se otorga a los periodistas una protección especial cuando desempeñan sus funciones en situaciones peligrosas. La delegación de Australia cree firmemente en la importancia de la función desempeñada por los periodistas en la infortunada ocasión de un conflicto armado, como lo ha demostrado su actividad sobre la cuestión, y sabe las importantes consideraciones humanitarias que esa función implica. Si bien los progresos en esa materia no han sido rápidos, los resultados del segundo período de sesiones de la Conferencia diplomática han sido aceptables. En ese período de sesiones se llegó a la conclusión de que si se desea lograr progresos decisivos hay que descartar la idea de una convención por separado. La delegación de Australia considera que el resultado ideal habría sido la aprobación de una convención. No obstante,

en vista de la urgencia y de la importancia del tema, dicha delegación comprende que hay que adoptar un instrumento que sea generalmente aceptado. El orador manifiesta que apoyará el proyecto de resolución A/C.6/L.1025/Rev.1.

14. El Sr. SZELEI (Hungría) dice que la delegación de Hungría, si bien ve con satisfacción los progresos sustanciales logrados durante el segundo período de sesiones de la Conferencia diplomática, deplora profundamente que se haya rechazado la idea de la participación universal.

15. El Gobierno de Hungría continúa atribuyendo gran importancia a su participación en la elaboración de los dos proyectos de protocolo destinados a complementar los Convenios de Ginebra de 1949. Ambos protocolos son igualmente esenciales para el desarrollo del derecho internacional humanitario en general y para la protección de las víctimas de la guerra en particular.

16. La labor más fructífera y promisorio ha sido cumplida en relación con el proyecto de protocolo I, particularmente en la Comisión III de la Conferencia. El orador señala con satisfacción los párrafos 76, 77 y 91 del informe del Secretario General (A/10195), puesto que en la Conferencia de Expertos Gubernamentales celebrada en 1972 el representante de Hungría había señalado la necesidad de elaborar reglamentaciones concernientes a la restricción del daño al medio ambiente natural en los conflictos armados.

17. Como figura en el párrafo 75 del informe, un gran número de países han formulado una propuesta de considerable significación sobre la necesidad de un nuevo artículo en el proyecto de protocolo I, dedicado al reconocimiento de la importancia de la Definición de la agresión, aprobada por la Asamblea General en su vigésimo noveno período de sesiones (resolución 3314 (XXIX), anexo). Esa propuesta mereció la más cuidadosa atención.

18. En lo que respecta a la labor de la Comisión Especial de Armas Convencionales, la delegación de Hungría opina que hubiese sido preferible que la Conferencia del Comité de Desarme u otros foros sobre el desarme, o ambos conjuntamente, hubiesen tenido la oportunidad de estudiar la cuestión y de adoptar medidas adecuadas.

19. El orador se asocia a lo expresado en los párrafos 143 y 145 del informe y espera con interés la celebración del tercer período de sesiones de la Conferencia diplomática. El éxito en la elaboración de los dos proyectos de protocolo contribuirá sustancialmente a reafirmar y desarrollar el derecho internacional humanitario.

20. El Sr. RASSOLKO (República Socialista Soviética de Bielorrusia) dice que su delegación atribuye gran importancia al tema del respeto de los derechos humanos en los conflictos armados y está satisfecho en términos generales con la labor de la Conferencia diplomática, que ha actuado con espíritu de cooperación y consenso constructivos. Considera, además, que las disposiciones del proyecto de artículo sobre la protección de los periodistas, preparado por el Grupo de Trabajo de la Comisión I (véase A/10195, anexo I, pág. 9), en que participó su país, se ajusta al espíritu de la resolución 3058 (XXVIII) de la Asamblea General y representa un nuevo avance en el desarrollo de las normas de derecho internacional humanitario. Deplora, no

obstante, la exclusión discriminatoria de los representantes del Gobierno Revolucionario Provisional de la República de Viet-Nam del Sur de los períodos de sesiones primero y segundo de la Conferencia.

21. La cuestión de la prohibición o restricción del uso de determinadas armas de tipo corriente que puedan considerarse excesivamente nocivas o que tengan efectos indiscriminados presenta aspectos humanitarios importantes, pero debería examinarse en el marco general de los problemas del desarme.

22. La delegación de la RSS de Bielorrusia considera que los proyectos de protocolo I y II no deben ser combinados en uno solo, ya que es tanto útil como necesario que los conflictos armados internacionales y los conflictos armados internos se traten por separado. La necesidad de protocolos separados ha quedado demostrada, además, por la sección relativa a los náufragos. La función más importante de los protocolos es fortalecer la protección jurídica internacional de la población civil durante los conflictos armados.

23. El orador atribuye gran importancia a las medidas destinadas a garantizar el enjuiciamiento eficaz de las personas que hayan violado leyes humanitarias generalmente aceptadas, como las establecidas en la resolución 3074 (XXVIII) de la Asamblea General, relativa a los principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad. Existe un vínculo muy estrecho entre esos principios y las normas de los Convenios de Ginebra de 1949 que deben tenerse en cuenta durante el examen final de los artículos correspondientes de los Protocolos adicionales.

24. La Srta. WILMSHURST (Reino Unido) felicita a los participantes en la Conferencia diplomática por los progresos realizados durante el segundo período de sesiones. La elaboración de normas y procedimientos para mitigar el horror de la guerra es una tarea imperativa en que se han logrado considerables progresos durante los últimos 100 años. Un avance mucho mayor podrá conseguirse mediante la aceptación y el cumplimiento universales de la gran legislación humanitaria que la Conferencia diplomática intenta elaborar. Dadas las realidades fundamentales con que se enfrenta la Conferencia, los participantes deben ser felicitados, en particular, por haber abordado su tarea de manera tan eficaz y práctica, por haber buscado soluciones con el objeto de avenir las diferencias entre las delegaciones y por haberse esforzado en la elaboración de disposiciones destinadas a lograr la mayor medida posible de aceptación. La delegación del Reino Unido confía en que igual espíritu presidirá el tercer período de sesiones de la Conferencia diplomática.

25. Refiriéndose al proyecto de resolución A/C.6/L.1025/Rev.1, la oradora expresa que el segundo párrafo del preámbulo reitera el segundo párrafo del preámbulo de la resolución 3319 (XXIX) de la Asamblea General. En consecuencia, remite a la Comisión a los comentarios de la delegación del Reino Unido sobre ese párrafo durante el vigésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General.

26. Por lo que hace al último párrafo del preámbulo del proyecto de resolución A/C.6/L.1025/Rev.1, la delegación

del Reino Unido ve con satisfacción la labor realizada durante el primer período de sesiones de la Conferencia de Expertos Gubernamentales sobre el empleo de ciertas armas convencionales. Si bien puede haber algunas diferencias en la Comisión sobre la conveniencia de incluir el último párrafo del preámbulo, conciernen más a la fraseología y al procedimiento que al fondo. En relación con el fondo, la delegación del Reino Unido comparte la gran preocupación manifestada por otras delegaciones. En el próximo período de sesiones de la Conferencia de Expertos Gubernamentales, dicha delegación tratará de lograr una base práctica y realista para las prohibiciones y restricciones relativas al uso de ciertos tipos de armas convencionales.

27. El Sr. ŁOPUSZAŃSKI (Polonia) dice que su país, que fue la primera víctima de la segunda guerra mundial y que se ha visto tan trágicamente afligido por las atrocidades de esa guerra, atribuye especial importancia a la contribución al proceso de la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados. Por consiguiente, el Gobierno de Polonia se siente satisfecho por los resultados conseguidos en el segundo período de sesiones de la Conferencia diplomática. Los progresos conseguidos en ese período de sesiones se deben a los esfuerzos de todas las delegaciones que consideran importante el derecho internacional humanitario y a la atmósfera de trabajo y de mutuo entendimiento reinante. Esa atmósfera produjo resultados tangibles, como lo demuestra el número de artículos aprobados por las comisiones de la Conferencia. Debe agradecerse al Gobierno Federal suizo y al CICR la manera en que la Conferencia fue organizada. El trabajo del segundo período de sesiones de la Conferencia diplomática se ha reflejado con gran fidelidad en el informe del Secretario General. La Conferencia se preocupó por reafirmar y no por desarrollar el derecho internacional humanitario. Esa tendencia la demuestra claramente el que los dos proyectos de protocolo no contengan principios jurídicos internacionales de derecho internacional humanitario totalmente nuevos, sino que simplemente corroboran o reafirman los ya existentes. Los trabajos sobre el desarrollo del derecho humanitario adoptan la forma de varias disposiciones de gran valor práctico relativas a varias esferas.

28. Aunque casi la mitad de los artículos de los proyectos de protocolo ya han sido aprobados, todavía queda mucho por hacer para el tercer período de sesiones de la Conferencia diplomática, en 1976. Una pregunta que queda por contestar es si deben elaborarse uno o dos protocolos, uno que se ocupe de los conflictos internacionales y otro de los conflictos de carácter no internacional. La delegación de Polonia está a favor de la elaboración de dos protocolos. Otra cuestión que habrá que resolver es la de la relación entre las propuestas relativas a la prohibición de ciertas armas y los trabajos sobre desarme que realizan otros órganos y se tratan en negociaciones internacionales. Además, la solución de transacción dada al problema de la protección de los periodistas puede no ser adecuada para varias delegaciones o puede ser objeto de críticas por parte de otras sobre la base de que los periodistas no deben ser tratados de modo diferente simplemente debido a su ocupación. Expresa la esperanza de que la Conferencia diplomática sea un éxito completo y que su trabajo sea ratificado por muchos Gobiernos, si no por todos.

29. El Sr. EFIMOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la cuestión del respeto de los derechos humanos en los conflictos armados es de gran importancia, no sólo teóricamente, como un nuevo aspecto de las normas del derecho internacional humanitario, sino también en la práctica como un paso hacia la aplicación de las normas más antiguas y humanas del derecho internacional. Los conflictos armados plantean enormes problemas para la protección de los derechos humanos, incluso los de los crímenes masivos y monstruosos contra los pueblos y la imposición de sufrimientos sin límites.

30. Las fuerzas amantes de la paz han conseguido recientemente progresos importantes en la lucha por la preservación y el fortalecimiento de la paz y la relajación de la tensión internacional. Sin embargo, todavía existe en el mundo mucha injusticia y crueldad: conflictos armados y levantamientos, colonialismo, racismo y *apartheid*. Para millones de personas la paz todavía no existe; se les obliga a recurrir a la lucha armada contra los agresores imperialistas y sus cómplices en defensa del elemental derecho a disponer en su propia casa. Esa injusticia y crueldad son los peores enemigos de los pueblos y conducen a las violaciones más graves de los derechos humanos y libertades elementales. El orador deplora la violación masiva de derechos humanos y libertades fundamentales por los regímenes racistas del África meridional y la junta militar fascista en Chile, así como los repetidos crímenes de guerra cometidos por los agresores israelíes contra la población de los territorios árabes ocupados.

31. El Sr. PRIETO (Chile), interviniendo sobre una cuestión de orden, dice que el representante de la Unión Soviética injuria a menudo al Gobierno de Chile, pero nunca explica sus términos. Pide que el representante de la Unión Soviética defina el fascismo. Además, se pregunta si el Gobierno de la Unión Soviética no es, en realidad, una forma de fascismo rojo.

32. El Sr. EFIMOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que contestará la observación del representante de Chile más adelante.

33. Es también importante examinar la cuestión de la observancia de los acuerdos internacionales sobre las limitaciones de los métodos y medios de combate y la protección de los derechos humanos en los conflictos armados. Las convenciones existentes han resistido la prueba del tiempo, y los actuales sufrimientos del mundo no son resultado de las deficiencias en esos acuerdos, sino que se deben más bien a que los Estados imperialistas y los regímenes racistas han pasado sistemáticamente por alto las normas generalmente aceptadas de derecho humanitario. La delegación de la URSS se opone decididamente a que se trastoquen o revisen esas convenciones, pero apoyará la formulación de nuevos instrumentos jurídicos internacionales sobre la definición y la aplicación de los deberes existentes de los Estados con respecto a la protección de los derechos humanos en los conflictos armados. La delegación de la URSS participa activamente en los trabajos de la Conferencia diplomática y apoya los esfuerzos de los gobiernos para formular la disposición de los protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949.

34. La delegación de la URSS está de acuerdo, generalmente, en los resultados del segundo período de sesiones de

la Conferencia diplomática tal como se indican en el documento A/10195 y Add.1 y acoge con agrado la participación de las nuevas delegaciones que representan a los movimientos de liberación nacional. Deplora la discriminación contra la participación en los trabajos de la Conferencia del Gobierno Revolucionario Provisional de Viet-Nam del Sur. Lamenta la continua tendencia de algunos Estados de retrasar los trabajos de la Conferencia por intentar combinar los dos proyectos de protocolo en un documento único. Los resultados del anterior período de sesiones de la Conferencia han demostrado convincentemente la necesidad de dos protocolos distintos: el protocolo I, que trata de la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, y el protocolo II, sobre la protección de las víctimas de conflictos armados que no sean de carácter internacional. Además, se opone a los intentos de que la Conferencia diplomática examine la cuestión de prohibir varias formas de armas convencionales. No incumbe a la Conferencia examinar dichos asuntos, que deben ser examinados dentro del contexto de los problemas generales del desarme por los órganos internacionales competentes adecuados.

35. La delegación de la URSS atribuye especial importancia a la cuestión de asegurar el enjuiciamiento eficaz de las personas que violen las normas generalmente aceptadas de derecho humanitario. Las disposiciones pertinentes de los Convenios de Ginebra de 1949 deben extenderse a los nuevos protocolos.

36. Recuerda que la Asamblea General ha condenado en varias decisiones el uso de mercenarios al servicio de las fuerzas colonialistas y de movimientos de independencia nacional. Dichos mercenarios deben considerarse como criminales, y los mercenarios de Sudáfrica que luchan en el nuevo Estado de Angola deben verse así.

37. La delegación de la URSS cree que el proyecto de resolución A/C.6/L.1025/Rev.1 constituye una base para un acuerdo general sobre el problema de la protección de los periodistas que llevan a cabo misiones peligrosas en zonas de conflicto armado.

38. El Sr. STARČEVIĆ (Yugoslavia) expresa su satisfacción por los resultados conseguidos en el segundo período de sesiones de la Conferencia diplomática y dice que confía en que ese trabajo, en extremo importante, se complete con prontitud. A ese fin, es necesario tener en cuenta las opiniones del mayor número de Estados posible sin dejar que los intereses militares y particularmente los intereses políticos interfieran con el máximo respeto a las consideraciones humanitarias. En la elaboración de los artículos del proyecto de protocolo II debe reflejarse el pleno respeto de los principios de soberanía e integridad territorial de los Estados y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados. La delegación de Yugoslavia atribuye gran importancia a los esfuerzos hechos para conseguir un acuerdo sobre las posibles normas que prohíban o restrinjan el uso de ciertas armas convencionales, inclusive cualesquiera que puedan considerarse explícitamente dañinas o que producen efectos indiscriminadamente. Al respecto, la delegación de Yugoslavia confía en que el segundo período de sesiones de la Conferencia de Expertos Gubernamentales sobre el empleo de ciertas normas convencionales, que ha de reunirse en

Lugano del 28 de enero al 26 de febrero de 1976, pueda proporcionar una base para el ulterior examen de la cuestión por la Conferencia diplomática y que el documento de trabajo CCDH/IV/201, de la que la delegación de Yugoslavia es patrocinadora, sea estudiado a fondo por la Conferencia de Expertos.

39. El Sr. BENNETT (Estados Unidos de América) dice que el Gobierno de su país mantiene el mismo interés de siempre en mejorar las normas existentes sobre el respeto de los derechos humanos en los conflictos armados y en que tanto las normas nuevas como las existentes sean efectivamente aplicadas. Esa posición fue reafirmada por el Secretario de Estado de los Estados Unidos en agosto de 1975, en un discurso que pronunció en Montreal.

40. El informe del Secretario General da, en general, un examen a fondo y fidedigno de los trabajos de la Conferencia diplomática. El informe también cumple una función muy importante al reproducir en el anexo I el texto de los artículos aprobados en las comisiones de la Conferencia.

41. Los progresos conseguidos en el segundo período de sesiones de la Conferencia diplomática justifican la esperanza de que los nuevos proyectos de protocolo sean aprobados en un tiempo razonable. A diferencia del primer período de sesiones, el segundo no se preocupó por cuestiones políticas que dan lugar a divisiones y los trabajos se llevaron a cabo, por lo general, con espíritu de cooperación. Al respecto, la delegación de los Estados Unidos lamenta que durante el debate actual algunas delegaciones hayan creído oportuno lanzar acusaciones de índole política. Se hubieran conseguido progresos más rápidos adoptando un enfoque humanitario y objetivo de la cuestión.

42. En opinión de la delegación de los Estados Unidos, la cuestión de si la Comisión Especial de Armas Convencionales va a poder funcionar como comisión principal de la Conferencia y examinar los artículos y las enmiendas depende primordialmente de los progresos que se consigan en el segundo período de sesiones de la Conferencia de Expertos Gubernamentales sobre el empleo de ciertas armas convencionales, que ha de celebrarse en enero y febrero de 1976, en la que el Gobierno de los Estados Unidos va a participar.

43. Entre los artículos más importantes aprobados en el segundo período de sesiones de la Conferencia diplomática se encuentran el artículo 5 del proyecto de protocolo I, destinado a reforzar el sistema de "potencias protectoras", y los que tratan de la protección de las aeronaves sanitarias y destinados a fomentar una evacuación más rápida y segura de los heridos del campo de batalla. La Comisión II también examinó la importante propuesta de informar sobre los muertos y los desaparecidos en los conflictos armados, que se ha basado en la resolución 3220 (XXIX) de la Asamblea General. El artículo propuesto sobre ese tema fue aceptado en principio y transmitido a un grupo de trabajo. Aunque todavía queda mucho trabajo por hacer en relación con ese artículo, la delegación de los Estados Unidos toma nota con satisfacción de la unanimidad mostrada por la Comisión II en su disposición a ocuparse del problema. Continúa habiendo muchas personas desaparecidas, de las que no se

tienen noticias a causa de las situaciones conflictivas en muchas partes del mundo. También existe una preocupación especial por los periodistas desaparecidos como consecuencia de los conflictos armados, y la delegación de los Estados Unidos cree que las medidas que se tomen con respecto a los muertos y los desaparecidos en los conflictos armados también serán útiles en relación con los periodistas desaparecidos.

44. La Comisión III logró progresos notables al aprobar la mayor parte de sus artículos por consenso. Esos artículos deben proporcionar una protección importante y benéfica a la población civil atrapada en los conflictos armados, sin restringir injustificadamente las operaciones militares. Entre los artículos aprobados más importantes figuran aquellos que codifican la norma de que la población civil, al igual que las personas civiles, no debe ser objeto de ataques; los que proporcionan normas relativas a los ataques y bombardeos indiscriminados en los sectores poblados; los que proporcionan especial protección para las presas, diques y estaciones de energía nuclear y los que codifican en derecho internacional, por primera vez, la norma de la proporcionalidad. Los Estados Unidos continuarán trabajando para reforzar dicha protección a la población civil, teniendo a la vez en cuenta el hecho de que restricciones demasiado complejas y engorrosas son susceptibles de ser pasadas por alto bajo la tensión de las condiciones de batalla, en detrimento del derecho internacional humanitario.

45. El Gobierno de los Estados Unidos es menos optimista con respecto a los trabajos del segundo período de sesiones sobre el proyecto de protocolo II. A su delegación, aunque sigue convencida de la urgente necesidad de aprobar las nuevas reglas para establecer normas de conducta humana y para reflejar la protección de las víctimas de las guerras civiles, le defrauda que el artículo clave que trata del ámbito de aplicación del protocolo requiera un umbral relativamente alto de violencia, dependiendo en parte de la capacidad de los rebeldes de aplicar las nuevas disposiciones.

46. Un sector en el que la Conferencia diplomática ha logrado progresos notables se refiere a la protección de los periodistas que llevan a cabo misiones profesionales peligrosas en las zonas de conflictos armados. La Conferencia dio una nueva sensación de urgencia a la cuestión y predominó un nuevo espíritu de flexibilidad y cooperación. Un grupo de trabajo, formado por representantes de todos los grupos regionales e incluyendo a los patrocinadores del tema 70 del programa de la Asamblea General, pudo llegar a un consenso subsiguientemente aprobado por la Comisión I. La acción definitiva puede esperarse antes del pleno de la Conferencia en 1976.

47. El nuevo artículo del proyecto de protocolo I que sustituye a la convención separada propuesta refleja la intención primera de los que la redactaron, al establecer una tarjeta de identidad universalmente reconocida para los periodistas que lleven a cabo misiones profesionales peligrosas en las zonas de conflictos armados y al definir claramente la protección a que tienen derecho. La Conferencia diplomática merece elogios por haber hallado una brillante solución al problema.

48. Hay motivos para confiar en que el tercer período de sesiones de la Conferencia diplomática sea tan productivo y

apolítico como el segundo. Con casi los dos tercios de los trabajos de la Conferencia terminados, y con algunos de los artículos más difíciles despachados, existe una oportunidad razonable para que los trabajos sustantivos puedan concluirse en el tercer período de sesiones. Los Estados Unidos harán todo lo posible por conseguir ese objetivo, y confían en que los gobiernos de otros países hagan lo mismo.

49. Da las gracias al Gobierno suizo y al CICR por su valioso apoyo en el esfuerzo por alcanzar dichos objetivos.

50. El Sr. PLAMONDON (Canadá) dice que, como lo hace notar el informe del Secretario General, la Conferencia diplomática ha realizado notables progresos. La delegación del Canadá se congratula en particular del consenso alcanzado en la Comisión I sobre el proyecto de artículo relativo a la protección de los periodistas en misión peligrosa en las zonas de conflictos armados. Es la primera vez que se reconoce esa especial condición en el derecho humanitario internacional.

51. La participación de 121 Estados y de 9 movimientos de liberación nacional en la Conferencia diplomática puso de manifiesto la importancia que atribuye la comunidad internacional al éxito de la misma y a la aprobación de los dos proyectos de protocolo.

52. Si el Gobierno del Canadá ha seguido apoyando la aprobación de un protocolo separado para los conflictos armados no internacionales, ha sido para hacer extensiva la protección humanitaria a tantas víctimas de los conflictos armados como sea posible. Los progresos realizados en el examen del proyecto de protocolo II durante el segundo período de sesiones de la Conferencia diplomática y la aprobación en comisión de cuatro de las seis partes esenciales del mismo son sumamente alentadoras a ese respecto. La opinión del Gobierno del Canadá acerca del contenido de ese proyecto de protocolo se expuso claramente en el segundo período de sesiones de la Conferencia. Ese instrumento debe concebirse en su conjunto en términos de las víctimas de los conflictos armados y debe orientarse hacia la protección de ellas más que de las partes responsables de los conflictos armados. Por consiguiente, debe ser realista y poderse aplicar a todas las partes implicadas en un conflicto armado, a todas las cuales debe ofrecer ventajas. En consecuencia, se ha de basar en unas normas simples, claras y fundamentales, que cualquier gobierno responsable no sólo sea capaz de aplicar en el pleno ejercicio de su soberanía, sino que desee hacerlo. La aprobación del artículo 1 del proyecto de protocolo II constituye un paso importante en esa dirección, ya que las condiciones que establece son razonablemente objetivas y se pueden aplicar sin gran dificultad. El artículo es algo excepcional en el derecho internacional, porque hace depender el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el protocolo de la capacidad de las fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados para aplicar el protocolo en el territorio que controlen. Así, pues, el protocolo no tendría ninguna utilidad si las obligaciones que contuviera fueran tan detalladas y restrictivas que las partes interesadas no las pudieran aplicar.

53. Los resultados positivos del segundo período de sesiones de la Conferencia diplomática se deben en gran parte al espíritu de entendimiento mutuo y a los sinceros

esfuerzos realizados por todos los participantes para llegar a una transacción mutuamente aceptable. La delegación del Canadá confía en que ese mismo espíritu siga reinando en el tercer período de sesiones de la Conferencia y en el segundo período de sesiones de la Conferencia de Expertos Gubernamentales sobre el empleo de ciertas armas convencionales, que se va a celebrar en 1976.

54. El Sr. PLAMONDON da las gracias al Gobierno suizo por su invitación a asistir al tercer período de sesiones de la Conferencia diplomática. El Gobierno canadiense agradece profundamente el sincero apoyo prestado por el Gobierno suizo a las reuniones preparatorias y a los trabajos de la Conferencia misma. También desea dar las gracias al CICR por el papel que ha desempeñado en la organización de la Conferencia.

55. La delegación del Canadá apoya el proyecto de resolución A/C.6/L.1025/Rev.1 y desea sumarse a sus patrocinadores, porque las recomendaciones que figuran en él constituyen un estímulo para la continuación de las importantes tareas de la Conferencia en 1976.

56. El Sr. EFIMOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), haciendo uso de la palabra en ejercicio del derecho a contestar, dice que se ve en la obligación de responder al escandaloso ataque del representante de Chile contra su país. Dicho representante ha pedido que se le dé una definición del fascismo. Basta con que mire la situación actual en su país: los hechos son bien conocidos por los Miembros de las Naciones Unidas y también por el representante de Chile. Las Naciones Unidas han aprobado resoluciones en las que se pide que se ponga fin a las graves violaciones de los derechos humanos que actualmente están ocurriendo en Chile. Como ejemplo pueden citarse la resolución 3219 (XXIX) de la Asamblea General y el proyecto de resolución A/C.3/L.2172, recientemente aprobado por la Tercera Comisión con el voto a favor de 88 Miembros. El Sr. Efimov no quiere quitarle tiempo a la Comisión citando ejemplos de todos los tipos de torturas y violaciones de los derechos humanos que están ocurriendo en Chile, ya que la cuestión ha sido sobradamente documentada. Unos métodos inhumanos como las variedades refinadas de tortura que actualmente se aplican en Chile únicamente habían sido utilizados antes por los regímenes fascistas de la segunda guerra mundial. No está de más pedir al representante de Chile que, en vez de hacerse el injuriado, diga a la Comisión cuándo piensan las autoridades chilenas empezar a aplicar las resoluciones de la Asamblea General y las decisiones de otras organizaciones internacionales.

57. El Sr. PRIETO (Chile) dice que lo único que ha pedido a la delegación soviética es que defina lo que quiere decir cuando habla del fascismo y se pregunta por qué no ha sido capaz de hacerlo. El fascismo, el nazismo y el totalitarismo soviético son idénticos y no tienen ningún parecido con lo que está ocurriendo en Chile. Como el representante soviético no ha sido capaz de definir el fascismo, lo ha ligado al nazismo. Sin embargo, la delegación de Chile desea señalar que el vil ataque que desencadenó la segunda guerra mundial fue celebrado con champán en Moscú. El representante soviético ha dicho que todos los países que violan los derechos humanos son fascistas. La delegación de Chile no tendría nada que objetar a que se examinara el problema de los derechos humanos en la Unión Soviética y reco-

mienda que el representante soviético lea *El archipiélago Gulag*, la historia de las purgas en la Unión Soviética, y los escritos de Sakharov, un premio Nobel, quien dice que la Unión Soviética ha instituido un sistema para la supresión de los derechos humanos más perfecto aún que el de los nazis. El Sr. Prieto recuerda también las declaraciones hechas por Nikita Khrushchev en el Vigésimo Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. La Unión Soviética dice favorecer la libertad de otros pueblos. El representante de Chile se pregunta por qué, entonces, se enviaron a Checoslovaquia 30 divisiones del Ejército Rojo y por qué murieron 50.000 personas en Hungría. El representante soviético se ha referido a las resoluciones de la Asamblea General sobre Chile. El Sr. Prieto, a su vez, se pregunta por qué el Gobierno soviético no cumplió las decisiones de las Naciones Unidas relativas a Checoslovaquia y Hungría. Su país se considera inocente de los crímenes que le atribuye la Unión Soviética y se pregunta por qué ese país ha sido el primero en oponerse a una propuesta hecha en la Tercera Comisión de que se permita a una comisión investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos en todos los países.

58. El Sr. EFIMOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la declaración que acaba de hacer el representante de Chile fue preparada hace ya tiempo y se está repitiendo como un disco rayado cada vez que alguien menciona los derechos humanos en Chile. Sin embargo, el representante de Chile no ha podido refutar el contenido sustancial de las resoluciones de la Asamblea General relativas a la situación en Chile. Es imposible dar gato por liebre; los intentos del representante de Chile de defender a su régimen no han tenido ningún éxito.

59. El Sr. MAÍGA (Malí), haciendo uso de la palabra sobre una cuestión de orden, dice que en una sesión precedente la Comisión intentó hacer desistir a los miembros de servirse del derecho a contestar para enzarzarse en una polémica política. En consecuencia, hace un llamamiento a los representantes de la Unión Soviética y de Chile para que permitan a la Comisión seguir con sus tareas.

60. El Sr. JACHEK (Checoslovaquia) dice que se ve en la obligación de protestar enérgicamente contra las observaciones relativas a los sucesos de 1968 en Checoslovaquia, hechas por el representante de la Junta chilena. Como la delegación de Checoslovaquia ha explicado ante diversos órganos de las Naciones Unidas, la asistencia fraternal prestada por otros países socialistas a la Checoslovaquia socialista impidió que se produjeran fenómenos fascistas en Checoslovaquia.

61. El Sr. ROSENSTOCK (Estados Unidos de América), haciendo uso de la palabra sobre una cuestión de orden, dice que no ve claro si esa discusión constituye una polémica enteramente gratuita o si corresponde de alguna manera a la opinión expresada por la delegación de su país de que los debates deberían ampliarse para abarcar las violaciones no internacionales de los derechos humanos. Aunque no está de acuerdo en la manera como se está desarrollando la discusión, cree que el tema puede ser pertinente.

62. El Sr. PRANDLER (Hungría) debe refutar el ataque calumnioso dirigido por el representante de Chile contra su

país. Como la delegación de Chile no ha sido capaz de presentar ningún hecho concreto relativo a la situación en su país, ha preferido referirse a un pasado remoto y alterar los hechos al atacar a Hungría. Las observaciones del representante de Chile relativas a Hungría carecen de fundamento; en cambio, la situación en Chile sí que merece ser examinada por la Comisión.

63. El Sr. PRIETO (Chile) dice que quienes "calumniaron" a la Unión Soviética fueron, entre otros, Khrushchev, un ex dirigente, y Sakharov y Solzhenitsyn, ambos Premios Nobel. El representante de Chile comprende la posición tan incómoda en que se encuentran Hungría y Checoslovaquia, pues ninguno de ellos puede expresar sus opiniones con respecto a la Unión Soviética. El Sr. Prieto no cree que los sucesos a que se ha referido sean tan remotos y no tiene conocimiento de la existencia de derecho alguno de prescripción que se aplique a los crímenes de lesa humanidad.

TEMA 117 DEL PROGRAMA

Programa de asistencia de las Naciones Unidas para la enseñanza, el estudio, la difusión y una comprensión más amplia del derecho internacional: informe del Secretario General (continuación) (A/10332, A/C.6/438)

64. El Sr. EFIMOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), refiriéndose a los párrafos 71 a 74 del informe del Secretario General (A/10332), relativos a las consecuencias administrativas y financieras de la participación de las Naciones Unidas en el Programa, dice que la delegación de la URSS ha opinado siempre que los gastos adicionales consecuencia de la inflación y de las fluctuaciones monetarias se deben compensar mediante economías en otras secciones del presupuesto, redistribución de fondos y eliminación de programas obsoletos.

TEMAS 113 Y 29 DEL PROGRAMA

Informe del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas (continuación*) (A/10033, A/10102, A/10108, A/10113 y Corr.1 y Add.1 a 3, A/C.6/437, A/C.6/L.1028)

Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones y la promoción de las normas del derecho internacional en las relaciones entre los Estados: informes del Secretario General (continuación*) (A/10218, A/10219, A/10255, A/10289, A/C.6/437, A/C.6/L.1028)

65. El PRESIDENTE anuncia que Bangladesh, Bolivia, Kenya, Malí, México, Túnez, Uruguay y Yugoslavia se suman a los patrocinadores del proyecto de resolución A/C.6/L.1028.

66. El Sr. ROMULO (Filipinas) dice que se deduce claramente de las deliberaciones sobre los dos temas que se examinan que ningún Miembro tiene nada que objetar a que se mejoren las Naciones Unidas. Aunque pueda haber

diferencias acerca del método que se haya de seguir, existe un auténtico consenso acerca de la conveniencia de equipar a la Organización para que desempeñe un papel cada vez más eficaz en los asuntos de la humanidad. El proyecto de resolución que la delegación de Filipinas quiere presentar (A/C.6/L.1028) es el resultado de un esfuerzo admirable de cooperación entre muchos países, cuya intención ha sido desde el principio proporcionar una tribuna en la que se pueda examinar cuidadosamente cualquier sugerencia de los Miembros para mejorar algún aspecto de la estructura, el funcionamiento, los procedimientos o el mandato de las Naciones Unidas, implique o no cambios en la constitución de la Organización.

67. Se ha demostrado que carecen de fundamento los rumores de que los patrocinadores del proyecto de resolución buscan un examen o una revisión a fondo de la Carta o de que los esfuerzos del organismo llamado antes Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas, que, en virtud del proyecto de resolución, se va a llamar en adelante Comité Especial de la Carta de las Naciones Unidas y del fortalecimiento del papel de la Organización, no incluirán sugerencias de mejoras que no afecten a la Carta. Lo que los Estados Miembros de la Organización tienen ante sí es una oportunidad para tomar en consideración varios hechos nuevos acaecidos en la vida internacional; a ese respecto, se ha hecho evidente la utilidad de combinar los dos temas que se examinan. El proyecto de resolución combina los dos temas en forma tal que se optimizan las posibilidades inherentes en ambos.

68. La necesidad de tener una oportunidad como la que ofrece el Comité *ad hoc* ha sido puesta aún más de relieve por la gama de intereses y preocupaciones que se han expresado durante las deliberaciones de la Sexta Comisión. Entre las observaciones más interesantes y cruciales para la eficacia de las Naciones Unidas hay que citar las relativas a la mejora de la capacidad de las Naciones Unidas en relación con el arreglo pacífico de las controversias y el estímulo de la voluntad de los Miembros para utilizar los cauces que se les ofrecen. Esos dos aspectos clave del problema del arreglo pacífico de las controversias deberían constituir uno de los principales temas del programa del Comité Especial para el año próximo.

69. Otra razón de peso para proseguir y fortalecer el mandato de ese organismo estriba en la estrechez de los moldes en que se han confinado necesariamente ciertas actividades conexas. Así, por ejemplo, aunque el Comité *ad hoc* de la reestructuración de los sectores económico y social del sistema de las Naciones Unidas atiende a una necesidad concreta y reconocida, omite necesariamente todos los demás aspectos de la estructura, el funcionamiento y el mandato de las Naciones Unidas, en particular los que se refieren al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

70. En el proyecto de resolución se ha tomado buena cuenta de los debates habidos durante el actual período de sesiones. Aunque no ha sido posible ponerse en contacto con todos los patrocinadores de la resolución 3349 (XXIX) para que se unieran de nuevo en el presente proyecto de resolución, todos ellos ven la necesidad de poner punto final a las confrontaciones y a la polarización que obstaculizaron la labor del Comité *ad hoc* en su primer período de

*Reanudación de los trabajos de la 1574a. sesión.

sesiones y han ratificado los esfuerzos realizados para conseguir, de ser posible, que la resolución se apruebe por consenso. El Sr. Romulo confía en que también ellos se sumarán a los patrocinadores del presente proyecto de resolución y acogerá con agrado a las delegaciones que, compartiendo sus ideas, deseen patrocinar un proyecto de resolución que tiene por objeto aumentar la capacidad de las Naciones Unidas para lograr sus objetivos y propósitos.

71. Se ha realizado un esfuerzo para eliminar cualquier vestigio de ambigüedad en lo que se refiere al alcance de los trabajos del Comité Especial y establecer un mandato claro y ampliado que tome en cuenta las preocupaciones de todos los grupos y combine en forma creativa y armoniosa el contenido de los dos temas que tiene ante sí la Comisión. Además, se da a la Secretaría una guía y una dirección más específicas para que sus tareas de apoyo al Comité Especial resulten más productivas. Al prorrogar el mandato del Comité, se ha dejado en claro que no se puede esperar que sus trabajos se concluyan en un plazo determinado o preestablecido. Hay una amplia gama de temas que han estado esperando durante años para ser examinados y que ahora se han de tratar adecuadamente y con cuidado.

72. En el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución se modifica el nombre del Comité para tomar en cuenta la combinación de los dos temas y se añade, para que sea objeto de examen detallado, una segunda esfera en la que se incorpora el contenido del tema relativo al fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas. La iniciativa australiana relativa a la prevención y al arreglo de las controversias internacionales (1565a. sesión) se puede examinar perfectamente en virtud del inciso a) del párrafo 1 de la parte dispositiva. En los demás aspectos, el mandato del Comité sigue siendo esencialmente el mismo, si bien se presta atención a la cuestión de prioridad en los temas.

73. En el párrafo 3 de la parte dispositiva se recomienda ampliar el Comité *ad hoc* con la inclusión de cinco Estados Miembros adicionales, como respuesta al deseo urgente de otros Estados de tomar parte en las deliberaciones del Comité, lo cual da fe de la importancia que se atribuye a sus trabajos.

74. En otros párrafos se reitera en forma rutinaria la invitación a los gobiernos a que sigan presentando o actualicen sus propuestas, se expone la petición más concreta al Secretario General, se pide al Comité Especial que presente un informe a la Asamblea General en su próximo período de sesiones y se decide incluir un tema nuevo, combinación de los dos actuales, en el programa provisional de dicho período de sesiones.

75. Una vez que se haya aprobado el proyecto de resolución — lo que confía que se hará por consenso — el Sr. Romulo considera que será necesario y urgente proporcionar cierta orientación para la preparación del calendario de reuniones de 1976, ya que las que tuvieron lugar durante el año en curso se celebraron en un momento particularmente inoportuno para llevar a cabo un trabajo eficaz, y el Comité Especial deseará evitar que se repitan esas circunstancias.

76. El Sr. Romulo confía en que los miembros de la Sexta Comisión, acostumbrados por su formación y por su

vocación a examinar ordenada y minuciosamente las cuestiones en un ambiente de sosiego y deliberación, aprobarán abrumadoramente que se siga ofreciendo la oportunidad de examinar precisamente de esa manera la eficiencia de la Organización.

77. El Sr. DATCU (Rumania) rinde especial tributo a la elocuencia con que el representante de Filipinas ha presentado el proyecto de resolución A/C.6/L.1028 y hace resaltar los esfuerzos incansables que han realizado los representantes de ese país para llegar al texto en cuestión, texto que espera se apruebe por consenso. El proyecto de resolución es el resultado de los debates sostenidos en la Comisión acerca de los dos temas que se examinan y de laboriosas negociaciones en las que participaron con espíritu de conciliación y de entendimiento un gran número de delegaciones. La delegación de Rumania se congratula de que haya sido posible redactar un proyecto relativo a los dos temas que sea generalmente aceptable. Ello confirma la esperanza manifestada por muchas delegaciones de que el examen conjunto de ambos temas, que en esencia se refieren a cuestiones que apuntan hacia los mismos objetivos, haría posible encontrar los medios prácticos más apropiados para concertar los esfuerzos de todos los que deseen contribuir. Si se aprobara el proyecto de resolución se dispondría de un marco adecuado para que el Comité Especial iniciara sus trabajos animado por un espíritu de cooperación. El Sr. Datcu confía en que el Comité Especial logre encontrar soluciones que sean aceptables para todos los Estados Miembros y que fortalezcan la capacidad de la Organización y aumenten su prestigio y autoridad. La delegación de Rumania seguirá trabajando junto con otras delegaciones con el mismo espíritu de cooperación.

78. El Sr. Datcu da las gracias a todas las delegaciones que se han manifestado a favor de las propuestas del Gobierno rumano (A/C.6/437), propuestas basadas en un deseo sincero de buscar en común medios que permitan mejorar la labor de las Naciones Unidas y fortalecer su papel en la vida internacional.

79. El Sr. URIBE (Colombia) se congratula de que el proyecto de resolución A/C.6/L.1028 se refiere tanto a la Carta como al fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas. No se hace ningún intento por ponerle trabas a la Organización; lo que se pretende es hacerla más eficaz, darle un mayor campo de acción y asegurar que todos los Estados Miembros sin distinciones de tamaño o de importancia puedan participar en los esfuerzos destinados a reestructurarla. El espíritu de cooperación de que se ha hecho gala al preparar el proyecto de resolución constituya un paso adelante en los esfuerzos encaminados a mejorar las Naciones Unidas y su funcionamiento. Las propuestas rumanas permitirán al Comité Especial convertirse en una tribuna donde se puedan formular medidas destinadas a fortalecer el papel de las Naciones Unidas, que siguen constituyendo la mayor esperanza de paz. Al Sr. Uribe le complace observar que existe ahora un mayor acuerdo acerca de la importancia de los dos temas que se están examinando.

80. El Sr. BAROODY (Arabia Saudita) dice que la declaración del representante de Filipinas ha dejado bien en claro que examinar la Carta no significa necesariamente alterar los propósitos y principios de las Naciones Unidas,

sino más bien determinar si existe alguna posibilidad de ampliarla mediante la adición de disposiciones para hacer frente a los nuevos hechos acaecidos en la vida internacional. El representante de Arabia Saudita previene de que no se debe abolir el derecho de veto sin estar seguro de que no va a ser sustituido por algo peor.

81. El Sr. Baroody sugiere que los patrocinadores del proyecto de resolución consideren la posibilidad de dar otra

redacción al párrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, para que no se pida al Secretario General que analice las opiniones expresadas por los gobiernos, sino únicamente que las consolide en un documento. Los Estados Miembros tendrán que llegar a una decisión sobre la cuestión entre ellos mismos y no deben pedir al Secretario General que exprese sus opiniones al respecto.

Se levanta la sesión a las 13.30 horas.

1577a. sesión

Lunes 1º de diciembre de 1975, a las 15.20 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1577

TEMAS 114 Y 70 DEL PROGRAMA

Respeto de los derechos humanos en los conflictos armados: informe del Secretario General (*conclusión*) (A/10195 y Add.1, A/C.6/L.1025/Rev.1)

Los derechos humanos en los conflictos armados: protección de los periodistas en misión peligrosa en las zonas de conflictos armados (*conclusión*) (A/10147, A/C.6/L.1025/Rev.1)

1. El Sr. KRISPIS (Grecia) da las gracias al Secretario General por su excelente informe sobre el segundo período de sesiones de la Conferencia diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados (A/10195 y Add.1). Puesto que no serviría a ningún fin práctico entablar una discusión sobre la labor sustantiva de la Conferencia, la delegación de Grecia se limitará a expresar su satisfacción por los progresos realizados hasta la fecha por la Conferencia y su esperanza de que complete con éxito su tarea en el próximo período de sesiones. Su delegación se siente particularmente complacida por el cuidado con que la Conferencia ha examinado la cuestión de la protección de los periodistas en misión peligrosa en las zonas de conflictos armados. Los periodistas deben estar decididamente protegidos cuando desempeñen sus actividades profesionales en zonas de conflictos armados, no sólo por su propio bien sino, más aún, por consideración al público que sirven, al que se debe mantener informado sobre los acontecimientos concernientes a los conflictos armados.

2. Desde el fin de la segunda guerra mundial el mundo ha experimentado infortunadamente numerosos conflictos armados; de ahí la necesidad de contar con normas de derecho humanitario aplicables a esos conflictos. En consecuencia, la primera tarea de la Conferencia ha sido, correctamente, reafirmar las diversas normas de derecho humanitario al respecto. La segunda, aunque no menos importante, ha sido el perfeccionamiento de esas normas. Al acometer ese objetivo es necesario, entre otras cosas, tener en cuenta la experiencia acumulada en los conflictos armados posteriores a la aprobación de los Convenios de Ginebra de 1949, a fin de modificar y completar las normas

pertinentes de la legislación internacional. El texto final que elabore la Conferencia deberá contener principios sensatos y prácticos que se ajusten a las condiciones tecnológicas de la guerra moderna.

3. La delegación de Grecia apoya el proyecto de resolución A/C.6/L.1025/Rev.1 y espera que sea aprobado por consenso. La modificación del último párrafo del preámbulo propuesta por la delegación de Francia es muy conveniente.

4. En nombre del Gobierno de Grecia, el orador agradece a Suiza el papel que ha desempeñado en relación con la Conferencia; y expresa, asimismo, su gratitud al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) por su valiosa contribución en lo atinente a la Conferencia.

5. El PRESIDENTE anuncia que el Canadá y Zambia deben agregarse a la lista de patrocinadores del proyecto de resolución A/C.6/L.1025/Rev.1.

6. El Sr. BAVAND (Irán) dice que la reafirmación y el desarrollo progresivo del derecho internacional humanitario, particularmente en la esfera de los conflictos armados, debe recibir atención prioritaria. En principio se admite internacionalmente que los medios y métodos bélicos están restringidos por la moral del comportamiento civilizado. Sin embargo, medios bélicos modernos, que en general se consideran contrarios al espíritu — si no a la letra — del derecho internacional se emplean ampliamente por “necesidad militar”. En los últimos 40 años, ciertos medios y métodos bélicos han sido utilizados en violación de dos principios fundamentales del derecho internacional, a saber, que las armas no deben causar sufrimientos innecesarios y que no deben tener efectos indiscriminados. Existe la necesidad urgente de ratificar la primacía de las consideraciones humanitarias sobre las exigencias de la conveniencia política y militar.

7. El primer paso encaminado al logro de ese noble objetivo es que todos los Estados reconozcan y cumplan estrictamente los instrumentos internacionales humanitarios existentes, como el Protocolo de Ginebra de 1925, los Convenios de Ginebra de 1949 y las resoluciones pertinentes aprobadas en diversos foros internacionales, por

ejemplo la resolución XXVIII de la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Viena en 1965; la resolución XXIII de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, celebrada en Teherán en 1968, y la resolución 2444 (XXIII) de la Asamblea General. La delegación del Irán valora la inclusión de ese importante concepto en el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución A/C.6/L.1025/Rev.1.

8. Habida cuenta de la naturaleza indiscriminada y de los efectos incapacitantes cada vez mayores de las armas convencionales modernas, la reafirmación y el desarrollo de las normas de derecho internacional para la protección de las víctimas de los conflictos armados es más urgente que nunca. Por esa razón, la delegación del Irán atribuye especial importancia a la labor de la Conferencia diplomática. Dicha delegación ha estudiado con especial interés el informe del Secretario General sobre el segundo período de sesiones de la Conferencia, en que se han logrado progresos sustanciales, debidos en gran medida al espíritu de cooperación demostrado por los participantes, que se esforzaron por avenir numerosos temas polémicos. Es de esperar que todos los participantes en la Conferencia sigan demostrando el mismo espíritu de cooperación con miras a alcanzar un acuerdo sobre los artículos restantes y sobre las normas adicionales, que han de permitir aliviar los sufrimientos producidos por los conflictos armados.

9. Sin entrar a discutir el fondo de la cuestión, el orador se felicita de los progresos alcanzados por la Conferencia en lo que hace a la protección de los periodistas en misiones profesionales peligrosas en las zonas de conflictos armados. Esos progresos constituyen un avance significativo en el desarrollo progresivo del derecho internacional humanitario; y la delegación del Irán espera que la Conferencia pueda completar su labor sobre la materia durante su próximo período de sesiones.

10. Respecto de la labor de la Comisión III de la Conferencia acerca de los conflictos armados internacionales, deben señalarse particularmente dos logros importantes. En primer lugar, la trascendental cuestión considerada en el artículo 33 del proyecto de protocolo I, de las limitaciones jurídicas a los métodos de combate, ha sido resuelta de manera aceptable para todos. Las normas abstractas y generales establecidas en el artículo 33 constituyen el fundamento de un futuro tratado que prohíba clases específicas de armas o ciertos usos de las armas. Debe hacerse hincapié también en que el artículo 44 del proyecto de protocolo I ha extendido por primera vez las normas de la guerra en general a fin de abarcar a la guerra aérea. Ello es particularmente importante debido a las armas incendiarias, que en su mayoría se lanzan desde el aire. Los usos más indiscriminados de esas armas son los bombardeos desde el aire contra las poblaciones civiles; ello ha suscitado la más intensa preocupación mundial. La necesidad de contar con normas que rijan la guerra aérea es hoy día más urgente que nunca, y el artículo 44 constituye un avance importante en el desarrollo progresivo del derecho internacional humanitario en ese campo.

11. El Sr. HAFIZ (Bangladesh) dice que la delegación de Bangladesh atribuye gran importancia a la cuestión del respeto de los derechos humanos en los conflictos armados y apoyará toda medida destinada a desarrollar el derecho

internacional humanitario en ese campo y a modernizar las normas internacionales existentes que se aplican en los conflictos armados. Aunque los conflictos armados son condenados en teoría, parece imposible eliminarlos en las circunstancias actuales. Corresponde entonces que la comunidad internacional se esfuerce por eliminar los efectos más inhumanos de los conflictos armados y por reducir al mínimo los sufrimientos humanos.

12. Las normas internacionales humanitarias existentes no bastan para proteger a las poblaciones civiles contra los aterrantes progresos tecnológicos de la guerra moderna. Sin embargo, no sólo hay que reafirmar las leyes humanitarias existentes y garantizar su estricta aplicación, sino que también hay que tomar medidas más positivas para su desarrollo progresivo, a fin de ajustarse a las condiciones cambiantes de la guerra moderna.

13. El Gobierno de Bangladesh recibió, pues, con satisfacción la iniciativa del Consejo Federal Suizo de convocar los dos períodos de sesiones de la Conferencia diplomática en 1974 y 1975, para modernizar las leyes humanitarias existentes aplicables en los conflictos armados, y también la organización por el CICR de la primera Conferencia de Expertos Gubernamentales. Bangladesh participó activamente en los dos períodos de sesiones de la Conferencia Diplomática y su representante tuvo el privilegio de actuar como Presidente del Comité de Redacción durante el segundo período de sesiones de la Conferencia. En esa oportunidad fue posible llevar a cabo una labor abundante y valiosa, y la delegación de Bangladesh espera que en el curso del próximo período de sesiones de la Conferencia sea posible acordar y formular normas adicionales para reducir los sufrimientos de los no combatientes y de los individuos civiles en los conflictos armados, y para proteger a los periodistas en misión peligrosa en las zonas de conflictos armados.

14. El Gobierno de Bangladesh agradece muchísimo al Consejo Federal Suizo que se haya ofrecido como país huésped para el tercer período de sesiones de la Conferencia, y al CICR que haya pensado en convocar el segundo período de sesiones de la Conferencia de Expertos Gubernamentales sobre el empleo de ciertas armas convencionales.

15. El orador desea dejar constancia del profundo agradecimiento del Gobierno de Bangladesh por los extraordinarios servicios humanitarios prestados por el CICR en Bangladesh durante el conflicto armado de 1971 y posteriormente. El CICR está a cargo aún de varias actividades humanitarias en Bangladesh. La delegación de ese país valora también el excelente estudio hecho por la Secretaría sobre las normas existentes de derecho internacional concernientes a los problemas humanitarios en los conflictos armados. El informe del Secretario General es un documento valioso y útil para las deliberaciones de la Sexta Comisión.

16. La delegación de Bangladesh ha observado con gran satisfacción la constructiva cooperación establecida entre las Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias, en particular el CICR, que están interesadas en el desarrollo progresivo y en la reforma del derecho internacional humanitario. Dicha delegación apoya el proyecto de reso-

lución A/C.6/L.1025/Rev.1 y desearía que se agregase el nombre de Bangladesh a la lista de patrocinadores. Espera que ese proyecto de resolución se apruebe por consenso.

17. El Sr. JACHEK (Checoslovaquia) dice que la mejor garantía para la protección de los derechos humanos sería la eliminación de todos los conflictos armados y de sus causas. Así, pues, los esfuerzos de todos los Estados deben encaminarse primordialmente al logro de ese objetivo. No obstante, si se obra con criterio realista, debe admitirse que sigue habiendo conflictos armados como resultado de la política agresiva de las Potencias imperialistas y coloniales. Los derechos humanos y los principios fundamentales del derecho internacional son notoriamente violados en esos conflictos y las poblaciones civiles se ven sometidas a sufrimientos particularmente severos. El ejemplo más trágico de esos conflictos ha sido la guerra agresiva de Viet-Nam, que terminó a comienzos de 1975 con la victoria del heroico pueblo vietnamita. La delegación de Checoslovaquia lamenta profundamente que los representantes del Gobierno Revolucionario Provisional de la República de Viet-Nam del Sur no hayan podido participar en los primeros dos períodos de sesiones de la Conferencia.

18. Es particularmente importante que se garantice la obediencia a los instrumentos jurídicos internacionales existentes en el campo del derecho internacional humanitario, en particular a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. Checoslovaquia ve con satisfacción el comienzo de la labor sobre los dos proyectos de protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra, elaborados para proporcionar una protección más eficaz a los derechos humanos en las circunstancias actuales. La delegación de Checoslovaquia ha participado en la labor de ambos períodos de sesiones de la Conferencia diplomática y continuará atribuyendo gran importancia y urgencia a esos trabajos.

19. El segundo período de sesiones de la Conferencia diplomática logró resultados importantes en lo relativo a la codificación del derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados. Los artículos formulados en ese período de sesiones representan una solución de avenencia aceptable para todos los Estados. Es de esperar que durante el tercer período de sesiones de la Conferencia, en 1976, pueda concluirse la labor de codificación y que los protocolos adicionales constituyan una contribución significativa al desarrollo de ese importante campo del derecho internacional. Durante el segundo período de sesiones de la Conferencia prevalecieron un espíritu de comprensión y un procedimiento práctico dignos de elogio; y la delegación de Checoslovaquia espera que el tercer período de sesiones prosiga la labor de la misma manera. Dicha delegación apoyará la aprobación del proyecto de resolución A/C.6/L.1025/Rev.1.

20. El Sr. BELOUSOV (República Socialista Soviética de Ucrania) observa que el segundo período de sesiones de la Conferencia diplomática logró significativos progresos en su labor sobre la elaboración de dos proyectos de protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949. Se llegó a un acuerdo sobre varios artículos que planteaban serios problemas, y la labor de la Conferencia se desarrolló en una atmósfera constructiva y práctica. Se formularon en particular nuevas normas para proteger a la población civil y a los bienes de carácter civil contra los peligros resultantes de

las operaciones militares y para prohibir algunos métodos de combate que causen sufrimientos innecesarios a la población civil. La mayoría de los participantes en la Conferencia procedieron correctamente sobre la base de las normas fundamentales establecidas en las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907, en el Protocolo de Ginebra de 1925 y en los Convenios de Ginebra de 1949. Varios puntos de redacción han sido perfeccionados, pero debe subrayarse que esos cambios de redacción no han de afectar a la sustancia de las decisiones de la Conferencia concernientes al contenido de cada artículo de los proyectos de protocolos adicionales.

21. Uno de los logros más importantes de la Conferencia diplomática es la extensión del campo de aplicación de los Convenios de Ginebra de 1949 y del proyecto de protocolo I a los conflictos armados de los movimientos de liberación nacional dirigidos contra la dominación colonial, la ocupación extranjera y los regímenes racistas.

22. Las disposiciones del artículo 42 del proyecto de protocolo I, concerniente a nuevas categorías de prisioneros de guerra, son particularmente importantes. Ese artículo trata específicamente de los derechos de los combatientes que pertenecen a movimientos de liberación nacional. Durante el debate se ha observado correctamente que esos derechos no deben hacerse extensivos a los mercenarios coloniales que se utilizan para intentar sofocar la justa lucha de los pueblos contra el colonialismo. Ejemplos de crueldad y de violencia perpetrados por esos soldados de fortuna han quedado profusamente reflejados en los conflictos habidos en el ex Congo Belga, en Biafra y en otras partes de África. Los mercenarios practican nuevamente su sangrienta profesión en Angola, bajo la dirección del régimen racista de Sudáfrica. Según informes de prensa, han sido reclutados en los Estados Unidos de América y en otros países occidentales que habían participado en la agresión a Indochina y en otras guerras coloniales. Tal situación es intolerable. Esos soldados de fortuna deben entender que se les tratará como delincuentes si participan en la represión de los movimientos de liberación nacional y si sirven a la causa del neocolonialismo, el racismo y del *apartheid*. La Asamblea General ha condenado a los mercenarios como delincuentes e individuos fuera de la ley, y en su vigésimo quinto período de sesiones (resolución 2708 (XXV)) instó a todos los Estados a que no permitieran el reclutamiento, la financiación o la instrucción de mercenarios en sus territorios y a que prohibieran a sus nacionales servir como mercenarios. Esa condenación ha sido enérgicamente reafirmada en la resolución 3103 (XXVIII) de la Asamblea General. La delegación de la RSS de Ucrania confía en que una condenación similar será incorporada a los artículos pertinentes del proyecto de protocolo I.

23. Su delegación espera que la Conferencia diplomática pueda concluir con éxito su labor sobre los protocolos adicionales en su tercer período de sesiones, en 1976. Las perspectivas de éxito de la Conferencia se verán grandemente realzadas si evita examinar temas que le son ajenos, como las cuestiones del desarme y, en particular, la cuestión de la prohibición del uso de categorías específicas de las llamadas armas convencionales. Esa cuestión no corresponde a la competencia de la Conferencia diplomática, y la delegación de la RSS de Ucrania no puede aceptar las disposiciones del proyecto de resolución A/C.6/L.1025/Rev.1 a ese respecto.

24. El Sr. OLMOS (Argentina) agradece al Secretario General sus excelentes informes sobre los temas en examen y expresa su satisfacción por los resultados conseguidos hasta ahora en los dos períodos de sesiones de la Conferencia diplomática. Se han logrado progresos importantes en lo relativo a la protección de los derechos de los no combatientes, en particular de los periodistas en misión peligrosa en las zonas de conflictos armados. La delegación de la Argentina apoya el proyecto de resolución A/C.6/L.1025/Rev.1 y pide que se agregue su nombre a la lista de patrocinadores.

25. El Sr. TODOROV (Bulgaria) dice que su delegación atribuye gran importancia al tema del respeto de los derechos humanos en los conflictos armados, cuestión sumamente seria y urgente en el mundo contemporáneo. El segundo período de sesiones de la Conferencia diplomática produjo resultados alentadores; se aprobaron varias formulaciones generalmente aceptables debido al espíritu de constructiva cooperación que imperó en la Conferencia. Hay motivos suficientes para creer que el tercer período de sesiones va a completar con éxito su labor sobre el proyecto de artículos para los dos protocolos adicionales.

26. La delegación de Bulgaria desea reiterar la opinión de que deben elaborarse dos protocolos distintos, uno sobre la protección de las víctimas en los conflictos armados internacionales y otro relativo a la protección de las víctimas en los conflictos armados que no son de carácter internacional.

27. Su delegación acoge con agrado la decisión de incluir en el proyecto de protocolo I un artículo sobre la protección de los periodistas que llevan a cabo misiones profesionales peligrosas en las zonas de conflictos armados, en vez de preparar una convención distinta sobre ese tema.

28. Con respecto a los trabajos futuros de la Conferencia, la delegación de Bulgaria recomienda que la cuestión de la posible prohibición o limitación de determinadas armas convencionales sea decidida por la Primera Comisión de la Asamblea General, que está actualmente examinando un proyecto de resolución sobre ese tema. También sería útil incluir en los dos proyectos de protocolo una referencia a la Definición de la agresión. Asimismo, la delegación de Bulgaria sugiere que los proyectos de protocolo incluyan una referencia a los principios de cooperación internacional en la identificación, la detención, la extradición y el castigo de las personas culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad, tal como se define en la resolución 3074 (XXVIII) de la Asamblea General.

29. El Sr. ALVAREZ PIFANO (Venezuela) dice que su país atribuye gran importancia a la cuestión del respeto de los derechos humanos en los conflictos armados y está satisfecho con los resultados del segundo período de sesiones de la Conferencia diplomática. La Conferencia debe continuar sus esfuerzos con miras a la formulación de nuevas disposiciones para proteger a los no combatientes y a los bienes civiles, prohibir la utilización de armas que afectan indiscriminadamente y, sobre todo, prohibir y restringir el uso de determinadas armas convencionales que pueden causar males superfluos o sufrimientos innecesarios. La delegación de Venezuela confía en que la Conferencia diplomática continúe su trabajo de reafirmar y desarrollar el

derecho humanitario, dejando a un lado intereses particulares y diferencias políticas e ideológicas. Rinde homenaje a los esfuerzos humanitarios del CICR y expresa su gratitud al Gobierno suizo por haber convocado los períodos de sesiones de la Conferencia diplomática.

30. La delegación de Venezuela apoya las iniciativas tendientes a elaborar instrumentos internacionales para asegurar la protección de los periodistas que llevan a cabo misiones profesionales peligrosas en zonas de conflictos armados, con base en el respeto de la soberanía de los Estados y el carácter realista de los medios de protección previstos. Confía en que la Conferencia, en su próximo período de sesiones, complete sus trabajos sobre ese tema que preocupa profundamente a la comunidad internacional.

31. La delegación de Venezuela cree que el proyecto de resolución A/C.6/L.1025/Rev.1 toma satisfactoriamente en cuenta las opiniones expresadas en la Comisión. Es evidente que nadie se opone a que se mejore la aplicación de las normas de derecho humanitario en los conflictos armados, y nadie ha negado la necesidad de formular nuevas normas para mitigar el sufrimiento causado por tales conflictos.

32. La delegación de Venezuela atribuye especial importancia al último párrafo del preámbulo del proyecto de resolución, que refleja los aspectos políticos, militares y tecnológicos que han caracterizado a los recientes conflictos internacionales y no internacionales. La inclusión de ese párrafo y su aprobación por la Comisión debe interpretarse como expresión del deseo de la comunidad internacional de hallar una solución constructiva y humanitaria a los problemas suscitados por la existencia y el desarrollo creciente de armas convencionales excesivamente nocivas o que tienen efectos indiscriminados. Hace suyo el espíritu humanitario de ese párrafo y confía en que el proyecto de resolución sea aprobado por aclamación.

33. El Sr. ROSENSTOCK (Estados Unidos de América), interviniendo en ejercicio del derecho a contestar, dice que, con respecto a las observaciones sobre mercenarios en Angola, la Comisión acaba de oír un ejemplo de la técnica de grandes mentiras a que recurren los regímenes totalitarios. Los que intervienen en África no pueden ocultar la naturaleza de sus actos acusando a los inocentes. Fotografías aparecidas en la prensa han identificado a los posibles nuevos colonizadores de África, uno de los cuales ha sido él mismo una colonia. Las grandes mentiras no pueden ocultar los hechos.

34. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe el proyecto de resolución A/C.6/L.1025/Rev.1 sin votación.

Queda aprobado el proyecto de resolución.

35. El Sr. KOLESNIK (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), hablando en explicación de voto, dice que la delegación de la URSS no opuso objeciones al proyecto de resolución A/C.6/L.1025/Rev.1 porque, tal como lo indicó en la 1575a. sesión, proporciona una base sólida para un acuerdo amplio. Sin embargo, no todas sus disposiciones le satisfacen plenamente, sobre todo el último párrafo del preámbulo. Como la delegación de la URSS lo indicó en la citada sesión, la Conferencia diplomática no tiene competencia para examinar la cuestión de prohibir el uso de

determinados tipos de armas. Ese asunto es una cuestión de desarme que debe ser examinada por los órganos apropiados.

36. El Sr. GOERNER (República Democrática Alemana) dice que su delegación apoyó el proyecto de resolución A/C.6/L.1025/Rev.1 pero que no le satisface el último párrafo del preámbulo. La Conferencia diplomática no es el órgano competente para examinar el uso de ciertas armas convencionales y su posible prohibición o restricción. Debe dejarse el asunto a la consideración de los órganos apropiados de las Naciones Unidas.

37. El Sr. JEANNEL (Francia) dice que su delegación no quiso oponerse a la aprobación del proyecto de resolución A/C.6/L.1025/Rev.1 por consenso, ya que Francia atribuye especial importancia a la cuestión de los derechos humanos. Sin embargo, lamenta la inclusión a última hora de un elemento extraño, que pertenece con mayor propiedad a la cuestión del desarme. La introducción de un elemento político de dicha índole en el debate, que hasta la fecha se ha desarrollado con calma y ha estado orientado en función de los temas, restará inevitablemente valor al debate. No está de acuerdo con quienes afirman que el proyecto de resolución refleja adecuadamente la opinión de la Comisión y se refiere a las dificultades obvias que tienen muchas delegaciones para aceptar el último párrafo del preámbulo. Si la Asamblea General aprueba el proyecto de resolución en su forma actual, interferirá con la autoridad de una conferencia soberana.

38. El Sr. ENKHSАIKHAN (Mongolia) expresa la satisfacción general de la delegación de Mongolia por el hecho de que el proyecto de resolución A/C.6/L.1025/Rev.1 haya sido aprobado por consenso, pero dice que lamenta la inclusión del último párrafo del preámbulo. El asunto a que se refiere dicho párrafo está ya siendo examinado en otros órganos, especialmente en la Primera Comisión.

39. El Sr. BELOUSOV (República Socialista Soviética de Ucrania) dice que la delegación de la RSS de Ucrania no puede estar de acuerdo con la referencia que en el proyecto de resolución que acaba de aprobarse se hace al examen por la Conferencia diplomática de la prohibición de ciertos tipos de armas convencionales.

40. Señalando que un representante ha reaccionado contra su referencia a que los mercenarios que luchan en Angola son reclutados en los Estados Unidos de América, se refiere a artículos publicados en la prensa de los Estados Unidos en junio de 1975, en los que se indica que una agencia en los Estados Unidos había comenzado a reclutar mercenarios para luchar en Angola. Se ha anunciado que el Departamento de Estado va a llevar a cabo una investigación sobre el asunto y le interesaría saber los resultados de dicha investigación.

41. El Sr. RASSOLKO (República Socialista Soviética de Bielorrusia) dice que la delegación de la RSS de Bielorrusia apoyó el proyecto de resolución A/C.6/L.1025/Rev.1, aunque no todas sus disposiciones le satisfacen. Resulta especialmente difícil aceptar el último párrafo del preámbulo, ya que la Conferencia diplomática no tiene competencia para examinar la cuestión del empleo de armas

convencionales. Esa cuestión debe examinarse aparte en el contexto de una conferencia de desarme.

TEMA 112 DEL PROGRAMA

Informe del Comité de Relaciones con el País Huésped (conclusión*) (A/10026, A/C.6/1027)

42. El PRESIDENTE anuncia que Chipre se ha agregado a los patrocinadores del proyecto de resolución A/C.6/L.1027.

43. El Sr. ROSSIDES (Chipre), presentando el proyecto de resolución A/C.6/L.1027 en nombre de los patrocinadores, dice que la primera parte del párrafo 10 de la parte dispositiva debe modificarse para que diga "Insta al país huésped, la Secretaría, la comunidad diplomática y las organizaciones interesadas a que procuren por todos los medios la mejora. . ."

44. Lamenta con hondo pesar que el grueso del trabajo realizado en 1975 por el Comité de Relaciones con el País Huésped se haya visto perturbado con nuevos incidentes de violencia y otros actos ilícitos de hostigamiento contra misiones y sus bienes. El más grave de esos incidentes resultó en unos disparos efectuados contra los locales de misiones y la colocación de bombas.

45. El preámbulo del proyecto de resolución expresa la preocupación por los actos ilícitos cometidos contra las misiones y recuerda la responsabilidad del país huésped a ese respecto. La parte dispositiva del proyecto de resolución expresa de nuevo la honda preocupación de la Asamblea por los actos de violencia, hostigamiento y vandalismo perpetrados contra las misiones y condena todos esos actos por considerarlos básicamente incompatibles con el estatuto de las misiones en virtud del derecho internacional. Se hacen varios llamamientos al país huésped, instándolo a hacer todo lo posible por garantizar la seguridad de las misiones y su personal, inclusive tomando todas las medidas necesarias para aprehender y castigar a los culpables de dichos actos.

46. El proyecto de resolución subraya, además, la necesidad de mejorar las relaciones entre la comunidad diplomática y la población local, observando con aprecio los esfuerzos del país huésped, la comunidad local y la Comisión de la Ciudad de Nueva York para las Naciones Unidas y el Cuerpo Consular por fomentar el entendimiento a ese respecto y proporcionar hospitalidad y servicios a los agentes diplomáticos. Tanto el preámbulo como la parte dispositiva del proyecto de resolución hacen referencia a las obligaciones de las misiones de respetar las leyes y reglamentaciones locales, especificando que ello no prejuzga los privilegios e inmunidades de que disfrutaban los agentes diplomáticos en virtud del derecho internacional. El proyecto de resolución prevé, además, que continúen los trabajos que el Comité de Relaciones con el País Huésped ha venido realizando desde 1971 de conformidad con su mandato.

*Reanudación de los trabajos de la 1560a. sesión.

47. El orador recomienda el proyecto de resolución a la Comisión, en la creencia de que establece un justo equilibrio entre los derechos de las misiones acreditadas ante las Naciones Unidas y las correspondientes obligaciones de esas misiones. Expresa la esperanza de que el proyecto de resolución, que es el fruto de amplias consultas y tiene en cuenta la recomendación del Comité de Relaciones con el País Huésped, reciba el apoyo unánime de los miembros de la Comisión.

48. El Sr. ROBERTSON (Canadá) dice que su país está de acuerdo en la tendencia general del proyecto de resolución, pero que no puede apoyarlo con entusiasmo. La delegación del Canadá no puede aceptar la frase final del párrafo 7 de la parte dispositiva, que trata de las multas a los vehículos diplomáticos, ya que la práctica canadiense es expedir citaciones a los agentes diplomáticos en tales situaciones.

Por unanimidad, queda aprobado el proyecto de resolución A/C.6/L.1027, en su forma oralmente revisada.

49. El Sr. ROSENSTOCK (Estados Unidos de América) dice que su delegación no opuso objeciones formales a la aprobación del proyecto de resolución porque la mayoría de sus párrafos no son en sí mismos especialmente objetables, aunque hubo algunos cambios en relación con el texto generalmente acordado. Es tal vez en cierto modo propio de la naturaleza del tema mismo y característico de la mayor parte de los trabajos del Comité de Relaciones con el País Huésped hasta la fecha que el foco del debate y el proyecto de resolución se hayan centrado con tal intensidad en los problemas y las quejas de unos pocos, sin dar reconocimiento adecuado a los aspectos positivos de la vida en un gran centro metropolitano y los esfuerzos hechos por las autoridades federales, estatales y locales y por los ciudadanos para proporcionar los servicios básicos e incluso las comodidades para el funcionamiento adecuado de las misiones. Espera que los neoyorquinos que han contribuido tan generosamente con sus esfuerzos a ofrecer hospitalidad no se vean desalentados por el tono del proyecto de resolución, que refleja, largamente y en un lenguaje discutible, los problemas de unas pocas misiones.

50. Se espera que los ciudadanos de Nueva York reconozcan que el agente diplomático que ocasionalmente estaciona su automóvil junto a una boca de riego, se niega a pagar sus facturas o se comporta de manera antisocial, constituye la excepción, y, de ese modo también, la comunidad diplomática debe reconocer que el censurable incidente que ocasionalmente afecta a una misión es la excepción. Los aspectos difíciles de la vida en una metrópoli importante como Nueva York constituyen una de las consecuencias inevitables de aquellos factores que hacen la vida en la ciudad interesante y estimulante.

51. La delegación de los Estados Unidos condena los actos de violencia y hostigamiento contra las misiones diplomáticas y su personal. Sin embargo, se pregunta si los patrocinadores del proyecto de resolución que condenan tan firmemente los actos contra los agentes diplomáticos han firmado, por ejemplo, la Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos. Algunas delegaciones parecen esperar que el país huésped

mantenga unas normas superiores a las que ellos mismos intentan mantener.

52. Un serio problema del proyecto de resolución es que un lector que no esté familiarizado con los antecedentes puede llegar a la conclusión de que las misiones se encuentran en una situación de virtual sitio en la ciudad de Nueva York, que los agentes diplomáticos son personas que se centran en los aspectos negativos de la situación de una manera no realista y unilateral y que no les interesan ni les preocupan sus propias responsabilidades para con la comunidad huésped o los problemas que plantean. Tales resoluciones unilaterales contribuyen bien poco al tipo de entendimiento que se pide en el párrafo 10 de la parte dispositiva del proyecto de resolución.

53. El Sr. STEEL (Reino Unido) expresa su acuerdo con la declaración del representante de los Estados Unidos de América; su país es también un país huésped y puede contemplar el problema en perspectiva. Aunque la delegación del Reino Unido está de acuerdo fundamentalmente con el tenor del proyecto de resolución, considera necesario hacer algunas críticas detalladas de sus disposiciones. Mientras la mayoría de las disposiciones son similares a las que figuran en anteriores resoluciones sobre la cuestión, algunas son nuevas y fuera de lugar y lamenta su inclusión.

54. Opina que el cuarto y el quinto párrafo del preámbulo recalcan excesivamente ciertos casos aislados que son deplorables en sí mismos pero que no deben falsear el cuadro general de amistad, hospitalidad y asistencia de que todas las delegaciones disfrutan por lo general, salvo excepciones. Además, tiene serias dudas sobre la exactitud de dos de los párrafos como propuestas de derecho. Con respecto al séptimo párrafo del preámbulo, duda de que sea correcto decir que el deber de las misiones diplomáticas de respetar las leyes del país está de algún modo subordinado al disfrute de sus privilegios e inmunidades en virtud del derecho internacional. Los deberes y los privilegios de las misiones diplomáticas son conceptos iguales y no existe jerarquía entre ellos. Con respecto al párrafo 2 de la parte dispositiva, duda de que sea correcto sugerir que "todo acto de violencia y otros actos delictivos perpetrados contra los locales de las misiones y contra su personal" deban considerarse necesariamente como incompatible con el estatuto de las misiones diplomáticas en virtud del derecho internacional. Muchos de esos actos pueden ser incompatibles, otros no cabe duda de que lo son, pero el asunto dista de estar claro. Lamenta que un lenguaje tan exagerado haya desfigurado el proyecto de resolución.

55. El Sr. JEANNEL (Francia) dice que su delegación se asoció al consenso por el que se aprobó el proyecto de resolución. Aunque aprecia la moderación general en su lenguaje, cree que algunas de sus disposiciones son ambiguas y excesivas. Cualquier país que sirva de huésped a organizaciones internacionales se enfrentará con dificultades, especialmente en la medida en que ese país permita libertad de pensamiento y expresión. No está del todo convencida de que algunas de las disposiciones sean absolutamente esenciales o de que no vayan más allá de lo que un país huésped pueda prometer. Cree que, en general, la Comisión y la Asamblea General deben evitar tocar temas que den lugar a excesos polémicos y de vocabulario.

TEMAS 113 Y 29 DEL PROGRAMA

Informe del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas (continuación) (A/10033, A/10102, A/10108, A/10113 y Corr.1 y Add.1 a 3, A/C.6/437, A/C.6/L.1028, A/C.6/L.1030)

Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones y la promoción de las normas del derecho internacional en las relaciones entre los Estados: informes del Secretario General (continuación) (A/10218, A/10219, A/10255, A/10289, A/C.6/437, A/C.6/L.1028, A/C.6/L.1030)

56. El PRESIDENTE anuncia que las delegaciones de Chile, el Irán, el Yemen y Zambia se han sumado a las patrocinadoras del proyecto de resolución A/C.6/L.1028.

57. El Sr. KRISPIS (Grecia) dice que su delegación también desea sumarse a los patrocinadores del proyecto de resolución A/C.6/L.1028.

58. El Sr. ABDALLAH (Túnez) sugiere que en el apartado i) del inciso a) del párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución A/C.6/L.1028 se inserten las palabras "la revisión de" después de "relativas a", reteniendo así los términos utilizados en resoluciones anteriores de la Asamblea General. Refiriéndose al párrafo 3 del documento A/C.6/L.1030, pide algunas aclaraciones respecto de los 15 intérpretes que habrán de ser contratados en Ginebra. Si el Comité Especial se va a reunir en la Sede ¿cómo puede justificarse ese gasto?

59. El Sr. ABUL-KHEIR (Egipto) señala que los cinco Estados Miembros adicionales a que se refiere el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución A/C.6/L.1028 no se designan. En consecuencia, sería preferible insertar las palabras "con arreglo a una distribución geográfica equitativa" después de "Estados Miembros adicionales siguientes".

60. El Sr. BAJA (Filipinas) dice que los autores del proyecto de resolución se proponían que se nombrara a un Estado adicional de cada grupo regional antes de la presentación del proyecto de resolución en sesión plenaria. Ya se han establecido contactos con los presidentes de los grupos regionales en relación con esa cuestión.

61. El Sr. ABUL-KHEIR (Egipto) señala que en el vigésimo octavo período de sesiones los nombramientos se produjeron después de aprobarse la resolución pertinente en sesión plenaria.

62. El Sr. MAKEKA (Lesotho) dice que se necesitan algunas aclaraciones respecto del significado preciso de la palabra "despertado" que figura en el inciso c) del párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución. Además, como el apartado i) del inciso a) del mismo párrafo no resulta claro en su forma actual, la Comisión quizá debiera tener en cuenta la sugerencia del representante de Túnez.

63. El Sr. BAJA (Filipinas), refiriéndose al apartado i) del inciso a) del párrafo 1 del proyecto de resolución, dice que los autores consideraron que no era posible hacer sugerencia ni propuesta alguna sin una revisión de la Carta.

64. El Sr. EFIMOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) indica que el texto del proyecto de resolución se logró tras largas y delicadas consultas. En consecuencia, es inconcebible toda nueva enmienda al proyecto.

65. El Sr. JEANNEL (Francia) manifiesta que cualquier intento de la Comisión de enmendar el proyecto de resolución en la etapa actual podría reabrir un asunto posiblemente difícil. Por lo tanto, habrá que retener el texto actual.

66. La Sra. DUQUE DE OSPINA (Colombia) dice que, en vista de los prolongados debates que fueron necesarios para llegar al texto actual, el texto del proyecto de resolución debe mantenerse como está.

67. El Sr. PEDAUYE (España) conviene en que debe mantenerse el actual texto del proyecto de resolución.

68. El Sr. DATCU (Rumania) indica que su delegación, que participó en la elaboración del proyecto de resolución, espera que sea aprobado en su forma actual.

69. El Sr. BOSCO (Italia) concuerda con los puntos de vista expresados por oradores anteriores de que no debe modificarse el texto del proyecto de resolución.

70. El Sr. VANDERPUYE (Ghana) se declara de acuerdo con el criterio de que el proyecto de resolución debe quedar como está. Propone que la Comisión apruebe el proyecto de resolución por consenso.

71. El Sr. ABDALLAH (Túnez) reafirma que su delegación entiende que el apartado i) del inciso a) del párrafo 1 se refiere a una revisión o actualización de la Carta. En esa inteligencia no se opondrá al consenso en la Comisión.

72. El Sr. RYBAKOV (Secretario de la Comisión), en respuesta a la pregunta formulada por el representante de Túnez respecto del documento A/C.6/L.1030, dice que, si bien el Departamento de Servicios de Conferencias hará todo lo posible por proporcionar los servicios necesarios utilizando los disponibles en Nueva York, al preparar la exposición sobre las consecuencias financieras del proyecto de resolución A/C.6/L.1028 tuvo en cuenta la posibilidad de verse obligado a contratar algunos funcionarios de Europa, y previó créditos a ese respecto.

73. El Sr. EFIMOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, para aprobar el proyecto de resolución, la Comisión debe esperar hasta tanto se haya dado forma final a algunos detalles técnicos, como los nombres de los Estados Miembros adicionales a que se refiere el párrafo 3. Además, su delegación está aún esperando instrucciones respecto del proyecto de resolución y, en consecuencia, en la presente sesión no podrá participar en ningún consenso.

TEMA 117 DEL PROGRAMA

Programa de asistencia de las Naciones Unidas para la enseñanza, el estudio, la difusión y una comprensión más amplia del derecho internacional: informe del Secretario General (continuación) (A/10332, A/C.6/438, A/C.6/L.1029)

74. El Sr. VANDERPUEYE (Ghana) presenta el proyecto de resolución A/C.6/L.1029 e indica que en él se sigue la modalidad de resoluciones anteriores sobre el tema, y que no requiere explicaciones. Respecto del párrafo 9 de la parte dispositiva, señala que no se ha modificado la composición del Comité Consultivo del Programa de asistencia excepto por la inclusión de Filipinas e Italia para sustituir a Bélgica y el Iraq. No es necesario remitir el proyecto de resolución a la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de conformidad con el artículo 153 del reglamento de la Asamblea General, pues los créditos para las actividades que comprende ya están consignados en el presupuesto ordinario para 1975-1976 y fueron aprobados por la Quinta Comisión.

75. El orador comunica a la Comisión que las delegaciones de Sierra Leona y el Zaire se han sumado a los patrocinadores del proyecto de resolución.

76. El Sr. KRISPIS (Grecia) dice que el informe del Secretario General (A/10332) presenta un impresionante cuadro del éxito del Programa. El Seminario sobre derecho internacional para estudiantes especializados en la materia y jóvenes funcionarios gubernamentales está en camino de convertirse en una institución mundial para la enseñanza y promoción del derecho internacional, y las actividades relacionadas con el simposio sobre derecho mercantil internacional prometen también dar buenos resultados. Ese último programa comenzó muy satisfactoriamente en 1975 con el simposio sobre la función de las universidades y los centros de investigación en la enseñanza, la difusión y una comprensión más amplia del derecho mercantil internacional. En su último período de sesiones, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional invitó a los participantes en el simposio a asistir extraoficialmente a los debates sobre un tema de su programa. La actuación de los participantes fue excelente y el experimento resultó un éxito.

77. Igualmente satisfactorias fueron las actividades del Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1974 y 1975. La delegación de Grecia, que apoya con entusiasmo la totalidad del programa, hace suyas las recomendaciones del Secretario General que figuran en los párrafos 63 a 70 de su informe, y estima que la Comisión debe aprobar por consenso el proyecto de resolución A/C.6/L.1029.

78. El Sr. HAFIZ (Bangladesh) expresa gran satisfacción por el informe del Secretario General. Las notables actividades llevadas a cabo en 1974 y 1975 constituyen una aportación significativa al desarrollo gradual del derecho internacional y merecen el apoyo de los Estados Miembros, como también lo merecen las recomendaciones que contiene el informe.

79. La delegación de Bangladesh estima que el estudio del derecho internacional promueve no solamente el desarrollo del propio derecho internacional, sino también el entendimiento y la amistad internacionales. La continuación del Seminario de derecho internacional y de otras partes del Programa reviste vital importancia para el desarrollo gradual del derecho internacional y para los países en desarrollo. En consecuencia, el Programa no sólo debe continuarse, sino también ampliarse. El alcance de la enseñanza y la difusión del conocimiento del derecho internacional en el tercer mundo es muy limitado. Es indispensable la enseñanza del derecho internacional, inclusive el derecho mercantil internacional y el derecho humanitario internacional aplicable en los conflictos armados y la difusión del conocimiento de los instrumentos internacionales, como la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos. En los países en desarrollo deberían establecerse, con cargo al Programa, centros de investigación y capacitación en materia de derecho internacional, con el fin de permitir que el tercer mundo se beneficie de los conocimientos adquiridos en esa esfera por los países desarrollados. También debe continuar el Seminario sobre derecho internacional. Bangladesh se benefició de él en 1973 a través de la participación de uno de sus nacionales. A ese respecto, la delegación de Bangladesh expresa su sincero agradecimiento por las generosas y constructivas aportaciones hechas por la RSS de Ucrania al proporcionar facilidades para el estudio y la enseñanza de derecho internacional a estudiantes procedentes de 50 países de Asia, Africa y América Latina en la Universidad de Kiev. El orador expresa la esperanza de que otros países desarrollados proporcionen facilidades análogas.

80. La delegación de Bangladesh se complace en observar que continuará llevándose a cabo el ciclo de cursos regionales de formación y repaso. Es satisfactorio advertir que el UNITAR proyecta realizar dos cursos de ese tipo para Asia, con el fin de hacer frente a los actuales problemas de derecho internacional relativos al desarrollo económico y social de los países en desarrollo, con especial referencia al contexto asiático. El orador expresa la esperanza de que el UNITAR elija a Bangladesh como país huésped del curso que habrá de organizarse para los Estados miembros de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico.

81. El orador expresa satisfacción por el hecho de que una de las 20 becas para 1975 haya sido concedida a un nacional de Bangladesh.

82. Aunque sea un país pequeño y en desarrollo, Bangladesh está contribuyendo positivamente a la promoción y el desarrollo del derecho internacional. El Instituto de Derecho y Asuntos Internacionales de Bangladesh, una organización no gubernamental, fue huésped de la Tercera Conferencia Internacional de Derecho Penal celebrada en Dacca en diciembre de 1974. Además, la Academia Islámica de Bangladesh realiza investigaciones y estudios en derecho islámico, con especial referencia a la concepción islámica del derecho y las relaciones internacionales. En su calidad de organización no gubernamental, recibe asistencia de las Naciones Unidas, la UNESCO y el UNITAR, como la que recibió en 1973 el Centro Austríaco de Estudios Chinos. Ambas instituciones cooperarán activamente con el UNITAR, la UNESCO y las Naciones Unidas en la

organización de todo seminario o conferencia que se celebre en Bangladesh sobre cualquier tema de derecho internacional incluido en el marco del Programa.

83. La delegación de Bangladesh expresa también su gratitud a las Naciones Unidas por continuar proporcionando al Instituto de Derecho y Asuntos Internacionales de Bangladesh ejemplares de las publicaciones jurídicas de las Naciones Unidas aparecidas durante 1974 y 1975, de conformidad con el párrafo 1 de la resolución 2838 (XXVI) de la Asamblea General.

84. El Sr. BROMS (Finlandia) dice que el informe del Secretario General indica que una vez más el Programa ha logrado resultados positivos.

85. Su delegación se complace en anunciar que el Gobierno de Finlandia ha decidido conceder una beca de 2.000 dólares para participantes de países en desarrollo en el seminario que ha de celebrarse durante el próximo período de sesiones de la Comisión de Derecho Internacional en Ginebra en 1976.

86. El Sr. GÜNEY (Turquía) expresa su reconocimiento por los esfuerzos realizados por el Secretario General en el marco del Programa. Las actividades de la UNESCO y del UNITAR son también dignas de encomio. Respecto del programa de becas, la delegación de Turquía se complace en observar que continúa la práctica de dar preferencia a candidatos de países cuyos nacionales no han recibido becas en los últimos años. Es igualmente grato observar que las Naciones Unidas continuarán proporcionando ejemplares de sus publicaciones jurídicas y de las de la Corte Internacional de Justicia a instituciones de los países en desarrollo.

87. Apoya las recomendaciones del Secretario General sobre la ejecución del Programa en 1976-1977 (véase A/10332, cap. III).

88. En lo concerniente al proyecto de resolución A/C.6/L.1029, el orador se pregunta si los presidentes de los grupos regionales han consultado con sus respectivos grupos

respecto del nombramiento de los 13 miembros del Comité Consultivo del Programa de Asistencia.

89. El PRESIDENTE anuncia que las delegaciones de Liberia y de Uganda se han sumado a los patrocinadores del proyecto de resolución A/C.6/L.1029.

90. El Sr. RYBAKOV (Secretario de la Comisión), en respuesta a la pregunta formulada por el representante de Yugoslavia en la 1575a. sesión de la Comisión sobre la concesión de una beca a un nacional de un país que no es Miembro de las Naciones Unidas, recuerda que en el inciso a) del párrafo 1 de la resolución 3106 (XXVIII) de la Asamblea General, se autorizó al Secretario General a conceder 15 becas como mínimo en 1974 y 1975 a solicitud de gobiernos de países en desarrollo. Como se señala en el párrafo 26 del informe del Secretario General, a los efectos del programa de becas se considera que un país está "en desarrollo" si recibe asistencia técnica de las Naciones Unidas. El país en cuestión ha recibido tal asistencia. En consecuencia, la Oficina de Asuntos Jurídicos estima que la medida del Secretario General está en consonancia con la resolución de la Asamblea General.

91. El Sr. STARČEVIĆ (Yugoslavia) dice que la aclaración del Secretario no es totalmente satisfactoria. El programa de becas fue organizado con los auspicios de las Naciones Unidas y por lo tanto corresponde dar preferencia a nacionales de los Estados Miembros, entre los cuales no faltan candidatos. Además, el país de que se trata no se halla en proceso de descolonización, que las Naciones Unidas están obligadas a ayudar.

92. El Sr. RYBAKOV (Secretario de la Comisión) indica que la Oficina de Asuntos Jurídicos tendrá en cuenta la declaración del representante de Yugoslavia.

93. El Sr. ROSENSTOCK (Estados Unidos de América) dice que confía en que la Oficina de Asuntos Jurídicos tendrá en cuenta todas las declaraciones formuladas en relación con el tema que se examina.

Se levanta la sesión a las 17.55 horas.

1578a. sesión

Martes 2 de diciembre de 1975, a las 15.25 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

TEMAS 113 Y 29 DEL PROGRAMA

Informe del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas (continuación) (A/10033, A/10102, A/10108, A/10113 y Corr.1 y Add.1 a 3, A/C.6/437, A/C.6/L.1028, A/C.6/L.1030)

Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones y la promoción de las normas del derecho internacional en las relaciones entre los Estados: informes del Secretario General (continuación) (A/10218, A/10219, A/10255, A/10289, A/C.6/437, A/C.6/L.1028, A/C.6/L.1030)

A/C.6/SR.1578

1. El PRESIDENTE dice que, si no se presenta ninguna objeción, entenderá que la Comisión desea aprobar por consenso el proyecto de resolución A/C.6/L.1028.

Por consenso, queda aprobado el proyecto de resolución.

2. El Sr. DIENG (Senegal), hablando en explicación de su voto, dice que la delegación del Senegal se sumó al consenso sobre el proyecto de resolución A/C.6/L.1028 en vista del considerable esfuerzo que fue necesario para poder llegar a la actual redacción. Sin embargo, la delegación del Senegal, que ha manifestado claramente que es partidaria de la revisión de la Carta, no está enteramente satisfecha con las disposiciones del proyecto de resolución. El orador se

congratula del hecho de que el Comité *ad hoc* vaya a ser nuevamente convocado, como Comité Especial, con una composición ampliada. El orador está convencido de que, si se sigue estudiando el asunto en el trigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General, se progresará notablemente y se encontrará una solución adecuada.

3. El Sr. TIEN Chin (China) recuerda, explicando su voto, que, durante el debate en la Sexta Comisión, la mayoría de los países abogaron por una revisión de la Carta. Señalaron claramente que el objeto de la revisión y de la introducción de las necesarias enmiendas en la Carta era poner en práctica eficazmente los propósitos y principios de la misma, es decir, asegurarse de que las Naciones Unidas se adaptaran a los enormes cambios ocurridos en la situación internacional y en su propia composición durante los 30 años transcurridos desde que fueron creadas, a fin de que los numerosos países pequeños y medianos que constituyen actualmente la gran mayoría de los Estados Miembros pudieran disfrutar del derecho a hablar y a adoptar decisiones en los órganos principales de las Naciones Unidas, asegurando de ese modo que la Organización desempeña el papel que le corresponde. Un número bastante crecido de representantes ha presentado opiniones y propuestas concretas sobre las necesarias enmiendas a la Carta. Puede verse que un número cada vez mayor de países se suma a las filas de los que abogan por la revisión de la Carta. El debate ha demostrado una vez más de modo convincente que el examen y la revisión de la Carta son una manifestación de la tendencia general y de las aspiraciones de los pueblos.

4. Como resultado de la lucha de los países del tercer mundo, el Comité *ad hoc* original se convertirá en un Comité Especial dotado de una mayor permanencia. Es evidente que la tarea principal del Comité Especial en el futuro consistirá en examinar las cuestiones relativas a la revisión de la Carta. La delegación de China considera que, tanto en el Comité Especial como en la Sexta Comisión, hay que hacer hincapié en el examen de las propuestas relacionadas con la Carta y en consultas pacientes.

5. Es inadmisibles que las superpotencias traten de distorsionar el espíritu de la resolución una vez aprobada y que usen varios pretextos para negarse a entablar consultas sobre la cuestión de la revisión de la Carta. Durante los debates en la Sexta Comisión, la actitud de las superpotencias consistió en oponerse al examen y la revisión de la Carta. La superpotencia que pretende defender los intereses de los países pequeños llegó incluso a intimidar y a insultar a los países que abogan por el examen y la revisión de la Carta. Aunque tienen mala conciencia y están cada vez más aislados, cabe predecir que recurrirán todavía a varios arbitrios para continuar obstruyendo y sabotando el examen y la revisión de la Carta. Es necesario aumentar la vigilancia a ese respecto.

6. La labor de examen y revisión de la Carta puede progresar continuamente y llegar a resultados sólo si los numerosos países del tercer mundo emprenden repetidas pruebas de fuerza con las superpotencias. La lucha será larga y complicada. Sin embargo, la verdad está del lado de los países partidarios del examen y la revisión de la Carta. La delegación de China cree que, si los numerosos países del

tercer mundo se unen estrechamente y persisten en su lucha, triunfará en definitiva su justa causa.

7. El Sr. ROSENSTOCK (Estados Unidos de América) dice que la delegación de los Estados Unidos se sumó al consenso movida en gran parte por el respeto y el aprecio que le inspiran el espíritu de moderación y cooperación de que dieron muestras los patrocinadores del proyecto de resolución. Sin embargo, ello no implica que la delegación de los Estados Unidos haya abandonado sus ideas, sostenidas con firmeza y bien conocidas, sobre lo imprudente que es manosear las disposiciones de la Carta. La delegación de los Estados Unidos está de acuerdo en la opinión expresada por el representante de Filipinas en el debate sobre el tema (1576a. sesión) en el sentido de que ningún Estado Miembro opone objeciones a que se perfeccionen las Naciones Unidas ni desea ver incumplidos los propósitos de la Carta y que ningún Miembro cree que las Naciones Unidas sean inmejorables o que no haya que hacer esfuerzos tan a menudo y tan continuamente como sea necesario para mejorarlas. Esa actitud parece más pertinente que las exhortaciones a empeñarse en pruebas de fuerza.

8. Refiriéndose al preámbulo del proyecto de resolución, el orador dice que la recapitulación de las anteriores resoluciones no indica ninguna disminución de la oposición de la delegación de los Estados Unidos a aquellas contra las cuales votó. Además, al pedir que se estudien más las propuestas, de ninguna manera apoya ninguna de ellas.

9. Refiriéndose al párrafo 1 de la parte dispositiva, dice que su delegación, aunque conviene en que se examinen las observaciones recibidas de los gobiernos no respalda en absoluto ninguna de ellas y, si bien no opone objeciones a las sugerencias y propuestas relativas a la Carta, mantiene su derecho a sugerir que no se introduzcan cambios y no deja de lado sus objeciones a las propuestas formuladas hasta el momento.

10. Refiriéndose al inciso c) del párrafo 1, el orador dice que no cree que el Comité Especial tenga la obligación de confeccionar listas de propuestas, a menos que el debate indique que tales listas concuerdan con las opiniones del representante de Filipinas a que acaba de hacer referencia y con las tareas prioritarias de ese Comité.

11. En opinión de la delegación de los Estados Unidos, el párrafo 2, así como la declaración del representante de Filipinas, constituyen un ejemplo concreto del espíritu de prudencia, moderación y responsabilidad de los patrocinadores. Cualquier enfoque que parta de una base que no sea el acuerdo general sólo puede debilitar a las Naciones Unidas.

12. Refiriéndose al párrafo 5, el orador dice que la formulación precisa y la historia legislativa de ese párrafo deben ser tenidas cuidadosamente en cuenta por la Secretaría al preparar el estudio que se le pide.

13. La delegación de los Estados Unidos, aunque está firmemente empeñada en fortalecer a las Naciones Unidas, no es partidaria de que se enmiende la Carta como medio para alcanzar ese fin. Si los trabajos continúan sobre la base del consenso, todas las partes se beneficiarán de ello. En cambio, apartarse de esa base perjudicará a todas las partes.

14. El Sr. FIFOOT (Reino Unido) dice, en explicación del voto, que en el debate general había expresado la opinión (1569a. sesión) de que toda nueva discusión se debía basar en el reconocimiento de la considerable diversidad de opiniones que se había manifestado respecto del tema. Las concienzudas y prolongadas negociaciones que han dado como resultado el proyecto de resolución que se acaba de aprobar prueban el deseo de los que participaron en ellas de que los trabajos del Comité Especial se asienten sobre una base menos conflictiva. La delegación del Reino Unido, que participó en esas negociaciones, desea expresar su aprecio por la actitud constructiva de aquellos cuyas opiniones no comparte y declara que se esforzará por llegar a un texto que sea generalmente aceptable.

15. La aprobación del proyecto de resolución no significa el fin de la controversia. La delegación del Reino Unido no ha cambiado en modo alguno su punto de vista: sigue opinando que no es probable que una revisión de la Carta produzca resultados fructíferos y que es potencial e intrínsecamente peligrosa y frustrante. Sin embargo, cabe esperar que la manera como la Comisión ha aprobado el proyecto de resolución disminuya las perspectivas de discordia. El párrafo 2 de su parte dispositiva permitirá al Comité Especial empezar con buen pie, especialmente si reina el mismo espíritu de cooperación. Han sido los términos del proyecto de resolución, incluso los términos del mandato del Comité y los términos en que se expresa la prioridad, y no ninguna de las interpretaciones que de él se han hecho, los que han permitido a la delegación del Reino Unido sumarse al consenso.

16. El Sr. JEANNEL (Francia) dice, en explicación del voto, que su delegación se une a la de los Estados Unidos de América para expresar agradecimiento a los patrocinadores del proyecto de resolución por su espíritu de cooperación y su paciencia. La delegación de Francia se congratula del consenso, que considera conforme con las mejores tradiciones de la Sexta Comisión. El orador aclara que la participación de su delegación en el consenso no significa que haya abandonado sus ideas respecto de los medios para lograr los objetivos comunes de los Estados Miembros. El fortalecimiento de las Naciones Unidas y la consolidación de su eficacia no pueden conseguirse con revisiones de la Carta, sino sólo mediante mejores métodos de trabajo y la utilización de todas las posibilidades ofrecidas por la Carta.

17. El Sr. KOLESNIK (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice, en explicación del voto, que la posición de su delegación sobre el tema ha sido expresada con claridad durante el debate en la Comisión (1568a. sesión). La Unión Soviética se ha opuesto de manera consecuente a cualquier tentativa de revisar la Carta, porque cree que, en su forma actual, es suficientemente útil para mantener y fortalecer la paz internacional, que continúa siendo la tarea principal de las Naciones Unidas. Aunque la delegación de la Unión Soviética se sumó al consenso sobre el proyecto de resolución, su posición permanece sin cambios. Si se hubiera votado sobre el proyecto de resolución, se habría abstenido. El fortalecimiento de la eficacia de las Naciones Unidas puede y debe conseguirse a través del estricto cumplimiento de la Carta.

18. El proyecto de resolución tiene, sin embargo, varios aspectos positivos. En primer lugar, el Comité Especial

podrá ahora centrar sus actividades no en la modificación de la Carta, sino en la preparación de medidas destinadas a robustecer el papel de la Carta en el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales y en el desarrollo de la cooperación entre todos los pueblos. Además, las disposiciones del párrafo 2 de la parte dispositiva harán posible examinar la cuestión con espíritu de cooperación. El Comité Especial debe ceñirse a aspectos específicos en los que se pueda fortalecer con soluciones constructivas el papel y la eficacia de las Naciones Unidas, aumentando de ese modo el prestigio y la utilidad de la Organización sin que sea preciso modificar en absoluto la Carta. Sin embargo, varias delegaciones siguen sintiéndose obligadas a dar su interpretación unilateral del proyecto de resolución, a fin de canalizar las actividades del Comité Especial hacia la revisión de la Carta. La delegación de la Unión Soviética no se considera vinculada por esa interpretación y, por lo tanto, no está enteramente satisfecha con el proyecto de resolución.

19. Refiriéndose a las observaciones formuladas por el representante de China, el orador dice que la declaración injuriosa de esa delegación es una prueba más de sus intentos constantes de introducir la disensión en los trabajos de las Naciones Unidas y de la Sexta Comisión, y es un ejemplo más de la utilización arbitraria de las Naciones Unidas para fines incompatibles con las metas y objetivos de la Carta.

20. El Sr. TIEN Chin (China) manifiesta, en uso del derecho a contestar, que el representante de la Unión Soviética ha tratado de negar que ha intimidado e insultado a los países que abogan por el examen y la revisión de la Carta. Ese intento es completamente fútil. No hace falta remontarse muy lejos — tanto en 1974 como en 1975 los representantes de la Unión Soviética utilizaron ese tipo de tácticas despreciables. Esas tácticas están todavía frescas en la memoria de los representantes que participaron en las sesiones de la Comisión. Las actas son también irrefutables.

21. Existe una razón muy sencilla por la que la delegación de la Unión Soviética se opone al examen y revisión de la Carta. Se opone a la ejecución en las Naciones Unidas del principio de la igualdad entre todos los Estados, grandes y pequeños, y trata de mantener su posición de abuso de los privilegios a fin de promover el hegemonismo.

22. Sin embargo, la intimidación y las tiradas verbales no pueden resultar de ninguna manera útiles a la delegación de la Unión Soviética. Sólo sirven para revelar su mala conciencia y poner de manifiesto una vez más su comportamiento hegemónico. En la actualidad, quien sea que trate de blandir el garrote en las Naciones Unidas es seguro que no tendrá éxito. Cuando se enfrenta con los países del tercer mundo en continuo despertar, el hegemonismo de las superpotencias está condenado al fracaso.

23. El Sr. GOERNER (República Democrática Alemana), hablando en explicación del voto, dice que, por espíritu de transacción, su delegación no se opuso al consenso sobre el proyecto de resolución. La posición de su delegación está expuesta en el documento A/10113/Add.1 y fue expresada claramente en el debate en la Comisión (1564a. sesión). Esa posición sigue siendo que la Carta es suficientemente flexible para guiar a todos los Estados en sus relaciones. En

consecuencia, la delegación de la República Democrática Alemana seguirá oponiéndose a cualquier tentativa de revisión de la Carta.

24. El Sr. MAKAREVICH (República Socialista Soviética de Ucrania) dice, en explicación del voto, que la posición de su delegación respecto del Comité Especial fue expuesta en el debate (1572a. sesión). El Gobierno de la RSS de Ucrania se opone a cualquier intento de revisión de la Carta, que ha superado la prueba del tiempo y sigue satisfaciendo las necesidades de la comunidad internacional. Su delegación se habría abstenido si el proyecto de resolución hubiera sido puesto a votación. El Comité Especial debe consagrarse a fortalecer la eficacia de las Naciones Unidas, en vez de dedicarse a revisar la Carta.

25. El Sr. RASSOLKO (República Socialista Soviética de Bielorrusia), interviniendo en explicación de voto, dice que el hecho de que la delegación de la RSS de Bielorrusia se haya sumado al consenso sobre el proyecto de resolución no significa que apruebe completamente las disposiciones del proyecto de resolución. Como ya indicó claramente en el debate (1570a. sesión), ha estado siempre a favor de aumentar la eficacia de las Naciones Unidas para mantener la paz y la seguridad y ha subrayado la necesidad de aplicar las disposiciones de la Carta en lugar de cambiarlas. Si el proyecto de resolución se hubiera sometido a votación, su delegación se hubiera abstenido.

26. El PRESIDENTE da las gracias a todas las delegaciones por su espíritu de cooperación en un tema difícil. La adopción del proyecto de resolución es un punto de partida muy importante para el Comité Especial y es de esperar que la misma atmósfera constructiva prevalezca en las sesiones de dicho Comité.

TEMA 117 DEL PROGRAMA

Programa de asistencia de las Naciones Unidas para la enseñanza, el estudio, la difusión y una comprensión más amplia del derecho internacional: informe del Secretario General (continuación) (A/10332, A/C.6/438, A/C.6/L.1029)

27. El Sr. VANDERPUYE (Ghana), hablando en nombre de los patrocinadores del proyecto de resolución A/C.6/L.1029, dice que en el curso de consultas oficiosas celebradas entre los patrocinadores se acordó que la República Árabe Siria sustituyera a Filipinas entre los Estados enumerados como miembros del Comité Consultivo en el párrafo 9 de la parte dispositiva. También anuncia que Lesotho debe añadirse a la lista de patrocinadores del proyecto de resolución.

28. El Sr. GÜNEY (Turquía), apoyado por el Sr. MAKEKA (Lesotho), el Sr. ABDALLAH (Túnez) y el Sr. ACOLATSE (Liberia), se refiere a su intervención en la 1577a. sesión y objeto al procedimiento que se ha seguido para la designación de los miembros del Comité Consultivo. El procedimiento normal y correcto habría sido transmitir dicha cuestión para su decisión al grupo geográfico interesado, siguiendo así al procedimiento bien establecido.

29. El Sr. MAIGA (Malí) cree que ése es el procedimiento que se ha seguido en el caso actual.

30. El Sr. ROSENSTOCK (Estados Unidos de América), apoyado por el Sr. ACOLATSE (Liberia), propone que la decisión sobre la composición del Comité Consultivo se aplase hasta la sesión siguiente, a fin de que los grupos regionales interesados puedan tener la oportunidad de celebrar consultas oficiosas y seguir el procedimiento establecido para proponer las candidaturas de los miembros del Comité Consultivo.

31. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, entenderá que la Comisión está de acuerdo en la propuesta formulada por el representante de los Estados Unidos y apoyada por Liberia.

Así quedado acordado.

32. El Sr. GODOY (Paraguay), apoyado por el Sr. PEDAUYE (España), señala un error de traducción en la versión española del proyecto de resolución A/C.6/L.1029. En el inciso b) del párrafo 1 de la parte dispositiva, la expresión "*travel grant*" debe traducirse por "subsidio de viaje" en vez de "bolsa de viaje".

33. El PRESIDENTE dice que la División de Traducción hará la corrección necesaria.

TEMA 115 DEL PROGRAMA

Cumplimiento por los Estados de las disposiciones de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961 y medidas para aumentar el número de las partes en ella (A/C.6/L.1031)

34. El Sr. KOLESNIK (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) recuerda que su delegación ya intervino en el anterior período de sesiones (1519a. sesión) en relación con el tema que se está examinando, pero que el tema no fue examinado en detalle por falta de tiempo. Señala que, en los últimos años, debido a los esfuerzos de los Estados amantes de la paz, se han producido importantes cambios positivos en pro de la relajación de la tensión internacional. Por consiguiente, se atribuye especial importancia a la cuestión de reforzar la legalidad internacional, que es la única base sobre la que cabe desarrollar relaciones entre Estados con sistemas sociales diferentes. A ese respecto, son de gran importancia las convenciones y los acuerdos internacionales de carácter universal, especialmente los referentes a las relaciones diplomáticas, tales como la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas¹, de 1961. Esa Convención incorpora las normas generalmente reconocidas que regulan las relaciones diplomáticas, destinadas a mantener y reforzar los vínculos políticos, económicos y culturales entre los Estados. La observancia de las disposiciones de la Convención se ha convertido en la condición esencial para conservar y desarrollar relaciones normales de buena vecindad entre Estados.

35. Sin embargo, la eficacia de los instrumentos del derecho internacional depende del número de Estados que se adhieran a ellos. Aunque más de 100 Estados se han adherido a la Convención, no ha sido universalmente

¹ Naciones Unidas, *Recueil des Traités*, vol. 500, No. 7310, pág. 162.

aceptada. Unos 40 Estados Miembros de las Naciones Unidas todavía no son partes en ella.

36. La Convención no sólo ha codificado y reforzado las normas generalmente reconocidas del derecho diplomático, sino que también ha servido para impulsar el desarrollo de las relaciones diplomáticas entre los Estados, asunto de particular importancia para los países en desarrollo de Asia, África y América Latina. La Convención proporciona una base uniforme y regular para las relaciones diplomáticas entre los Estados, representando así una gran ventaja sobre la situación que existía hasta 1961, en que las relaciones diplomáticas eran regidas por más de 3.000 acuerdos bilaterales.

37. La Convención ha resistido claramente la prueba del tiempo y no hay necesidad de revisarla. Lo que es preciso ahora es asegurar su aplicación estricta, ya que la falta de cumplimiento de sus disposiciones por ciertos Estados ha conducido ocasionalmente a fricciones y desacuerdos peligrosos. Lamentablemente, hay todavía casos de violaciones de las disposiciones de la Convención, que la delegación de la URSS y varias otras señalaron ya en el período de sesiones anterior de la Asamblea General. Desde entonces se han producido más incidentes vergonzosos, incluido el asesinato de dos agentes diplomáticos turcos, disparos contra el edificio de la Misión Permanente de la URSS ante las Naciones Unidas y demostraciones antisoviéticas en Nueva York en las proximidades de la Misión, así como la transgresión de la inviolabilidad de la embajada soviética en Tokio y otros incidentes que han sido condenados por las Naciones Unidas y la opinión pública mundial. Todas esas violaciones son intolerables y deben tomarse las medidas necesarias, también dentro del contexto de las Naciones Unidas, para asegurar el cumplimiento estricto por los Estados de las disposiciones de la Convención.

38. Aunque no hace falta enmendar la Convención, existen ciertas cuestiones relativas al derecho diplomático en las que sería conveniente detallar más las normas pertinentes. En especial, ello es necesario en el caso del estatuto y los derechos del correo diplomático, tema que no ha sido adecuadamente cubierto en la Convención. Casos en que se ha obstaculizado a los correos diplomáticos en el cumplimiento normal de sus deberes han dado lugar frecuentemente a malentendidos y a situaciones difíciles. Al tratar el tema del correo diplomático, debe prestarse especial atención a la reglamentación de las cuestiones relativas a la comunicación mediante correo diplomático, la definición de sus funciones, la entrega del correo diplomático, la exención del correo diplomático y de su equipaje personal de la inspección aduanera, inclusive el uso de nuevos instrumentos tecnológicos, el deber de los Estados a tomar medidas para asegurar la protección de los locales utilizados por los correos diplomáticos, los privilegios e inmunidades de los correos diplomáticos, la inviolabilidad del correo diplomático en caso de que las relaciones diplomáticas hayan sido rotas y varias otras disposiciones destinadas a asegurar el funcionamiento normal del servicio diplomático. Las cuestiones mencionadas se pueden reglamentar mediante un protocolo adicional a la Convención que, aunque no la cambiaría en sí misma, añadiría un nuevo e importante instrumento internacional que reglamentaría las cuestiones relativas al correo diplomático.

39. Con miras a asegurar la aplicación por los Estados de las disposiciones de la Convención y aumentar el número de partes en ella, la delegación de la URSS, juntamente con las de la Argentina, Bulgaria, Checoslovaquia, Chipre, Hungría, Malí y la República Democrática Alemana, ha presentado el proyecto de resolución A/C.5/L.1031, que reafirma la necesidad de que los Estados apliquen estrictamente las disposiciones de la Convención, deplora los casos que se han producido de violación de dichas disposiciones, insta a los Estados que todavía no lo hayan hecho a adherirse a la Convención, pide al Secretario General que prepare un informe sobre las formas y medios de velar porque los Estados cumplan sus disposiciones y lo presente a la Asamblea General en su próximo período de sesiones, invita a la Comisión de Derecho Internacional a estudiar la cuestión de normas relativas al estatuto del correo diplomático y decide incluir el tema en el programa del trigésimo primer período de sesiones. El proyecto de resolución ha sido preparado en consultas con los representantes de casi todos los grupos geográficos, y el orador confía en que recibirá el apoyo de la Comisión.

40. El Sr. GOERNER (República Democrática Alemana) dice que el establecimiento y el mantenimiento de relaciones diplomáticas normales entre los Estados constituye un requisito para la consecución de los propósitos y la aplicación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. El hecho de que algunos Estados no hayan querido establecer relaciones diplomáticas con su país por más de dos decenios ha sido un serio obstáculo a la relajación de las tensiones internacionales. La superación de ese bloqueo y el establecimiento de relaciones normales en virtud del derecho internacional entre los Estados europeos, basadas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, constituye una indicación del cambio en la relación de fuerzas y sirve para acelerar el proceso de distensión. Actualmente, la Convención, a la que se han adherido más de 100 Estados, constituye la norma vinculativa mínima para el mantenimiento de relaciones diplomáticas entre los Estados y sirve de marco para toda codificación ulterior del derecho diplomático internacional. Ello se evidenció en los debates en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales. Una mayoría abrumadora de los Estados participantes votó por la inclusión de normas inspiradas en los principios de la Convención con miras a promover el ejercicio sin trabas de las funciones de los representantes de los Estados en un espíritu de cooperación pacífica e igualdad.

41. Los principios de la Convención han servido a la perfección durante más de 10 años, pero se ha hecho evidente que algunas disposiciones necesitan más detalle y precisión. En especial, el artículo 27, que trata del estatuto del correo diplomático, no es lo suficientemente preciso, especialmente con respecto a la inadmisibilidad de cualquier inspección o control personal, incluido el uso de instrumentos técnicos de inspección remota. La inviolabilidad del local de vivienda utilizado por el correo diplomático durante su estancia en el Estado huésped también precisa establecerse mediante la regulación correspondiente.

42. En consecuencia, la delegación de la República Democrática Alemana cree que la Comisión de Derecho Internacional (CDI) debe elaborar un protocolo adicional a la

Convención, sobre el estatuto del correo diplomático. Redundará en interés de la cooperación diplomática entre todos los Estados amantes de la paz sobre la base del derecho internacional que más Estados lleguen a ser partes en la Convención.

43. El Sr. PRANDLER (Hungría) dice que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, por ser un tratado multilateral general ampliamente aceptado, se ha convertido en una de las piedras angulares del desarrollo progresivo del derecho internacional y de su codificación. Existe, sin embargo, la necesidad de revisar la aplicación por los Estados de las disposiciones de la Convención y de fomentar su aceptación más amplia. Muchos Estados todavía no han considerado apropiado adherirse a la Convención, lo que origina incertidumbres y conflictos en las relaciones diplomáticas. A pesar de la adhesión general a las disposiciones de la Convención, hay casos en que se violan las normas generalmente reconocidas del derecho internacional aplicables a esa esfera, como resultado de actos voluntarios o de negligencia. Además, hay disposiciones de la Convención que podrían desarrollarse más y hacerse más precisas, tales como las relativas a la condición del correo diplomático. A pesar de las disposiciones del artículo 27, en el que se trata ese tema, ha habido casos en que se ha hostigado a correos diplomáticos, que les han impedido cumplir sus funciones conforme a la Convención. Algunos Estados, además, han hecho ciertas reservas acerca del párrafo 3 del artículo 27, que trata de la inviolabilidad de la valija diplomática. El Gobierno de Hungría no puede aceptar reservas que sean contrarias a la norma que figura en dicho párrafo.

44. El Sr. Prandler recibió con beneplácito la iniciativa del representante de la Unión Soviética en el anterior período de sesiones de señalar a la atención de la Asamblea General el importante asunto de la aplicación por los Estados de las disposiciones de la Convención. Sería útil, en su opinión, que el Secretario general preparara un informe completo sobre las prácticas de los Estados respecto de las disposiciones de la Convención. También sugiere que la CDI elabore un protocolo adicional sobre la condición del correo diplomático, con miras a desarrollar y a concretar las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, de 1961, de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, de 1963, de la Convención sobre las Misiones Especiales, de 1969 y de la Convención de Viena han encontrado nueva confirmación y relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal, de 1975.

45. El Sr. ENKHSKHAHAN (Mongolia) dice que el tema que se está debatiendo es sumamente importante para la comunidad internacional, porque los contactos diplomáticos normales contribuyen al desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones, sin distinción de tamaño, población, nivel de desarrollo económico u orden social. La Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas es una convención de carácter universal, y el principio de que un tratado no puede imponer obligaciones o conferir derechos a un tercer Estado no se aplica a tales tratados o convenciones, cuyos objetivos y metas son de interés vital para la comunidad internacional en su conjunto. Las normas de la Convención son perentorias, es decir, normas que están aceptadas y reconocidas por la comunidad

mundial y cuya derogación complicaría las relaciones entre las naciones. El período actual de distensión, los principios generales de las relaciones internacionales y los de la Convención de Viena han encontrado nueva confirmación y desarrollo en muchos instrumentos bilaterales y multilaterales, tales como el Acta Final de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, de 1975.

46. Debe señalarse, sin embargo, que varios países todavía no se han hecho partes en la Convención, y ese es un hecho que demuestra la oportunidad de la propuesta soviética de contemplar la aplicación por los Estados de sus disposiciones y medidas para aumentar el número de Estados partes en ella.

47. Algunos hechos desagradables y deplorables en las relaciones de Mongolia con uno de sus vecinos hizo que Mongolia adquiriera especial conciencia de situaciones en que se violan las inmunidades de las misiones diplomáticas o se emplean los privilegios de los agentes diplomáticos para injerirse en los asuntos internos del Estado receptor. Mongolia se enteró con satisfacción hace unos pocos días de que ese vecino finalmente ha pasado a ser parte en la Convención y espera que, en adelante, se observen estrictamente el espíritu y la letra de dicha Convención. Debe pedirse a todos los Estados que pasen a ser partes en la Convención con miras a promover la estricta observancia universal de las normas generalmente reconocidas del derecho internacional de la diplomacia y de las disposiciones de la Convención. Con el fin de fortalecer la paz y la seguridad internacionales y de fomentar la cooperación internacional, apoya la idea de pedir a la CDI que examine la cuestión de la condición del correo diplomático con miras a desarrollar las disposiciones de la Convención de Viena sobre el tema.

48. El Sr. TODOROV (Bulgaria), señalando que el objetivo principal de las relaciones diplomáticas entre los Estados es el establecimiento de relaciones amistosas, el entendimiento mutuo y el desarrollo del intercambio económico, científico y cultural, dice que la Convención de Viena es de una importancia especial en la era actual de cambio rápido, disminución de las tensiones internacionales y rápido desarrollo progresivo del derecho internacional. Algunos Estados que son partes en la Convención de Viena la han violado en ciertos casos y otros Estados, que no son oficialmente partes en la Convención, permiten actividades con respecto a las misiones diplomáticas de otros países que son incompatibles con las normas generalmente aceptadas del derecho internacional de la diplomacia. Entre tales violaciones generales se incluyen los impuestos a los locales diplomáticos, la violencia contra los diplomáticos extranjeros, el trato arbitrario de los representantes diplomáticos por los servicios de los aeropuertos e incluso el sometimiento de los diplomáticos a registro en algunos casos.

49. La participación en la Convención de Viena todavía no es universal e interesa a la comunidad internacional que todos los Estados sean partes en la Convención y reconozcan las normas jurídicas que contiene. Por tal razón, la delegación de Bulgaria recibe con beneplácito el llamamiento hecho a todos los Estados para que pasen a ser partes en la Convención y la propuesta de examinar el texto de algunos de sus artículos a la luz de ciertos artículos de la

Convención de Viena sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal, de 1975, especialmente aquellos artículos en los que tratan de la inviolabilidad de los locales, la exención fiscal de los mismos, la libertad de comunicación y la condición del correo diplomático.

50. El Sr. IŁOPUSZAŃSKI (Polonia) dice que la iniciativa de la delegación soviética de introducir el tema merece el apoyo general. Los dos elementos del tema están estrechamente vinculados.

51. Con respecto a la aplicación de las disposiciones de la Convención de Viena, es deseable que se progrese algo en el cumplimiento estricto de sus disposiciones por todas las partes. Dicho cumplimiento estricto es necesario para aumentar la eficacia de la cooperación internacional, que es un aspecto importante de los esfuerzos por fortalecer la paz mundial. Cada violación de las disposiciones de la Convención tiene un efecto pernicioso sobre las relaciones entre los países interesados. El grado de aplicación de la Convención por los Estados puede considerarse como una medida de sus intenciones hacia otros Estados. Las relaciones diplomáticas siguen siendo la piedra angular de las relaciones entre los Estados, en el sentido de que los actos de los representantes diplomáticos se consideran actos de los respectivos gobiernos. En consecuencia, es muy importante que los representantes diplomáticos puedan desempeñar sus funciones en condiciones jurídicamente garantizadas. Tales garantías jurídicas figuran en las disposiciones de la Convención.

52. Polonia ha ratificado la Convención y su delegación participó en su redacción en la Conferencia de Viena. Las disposiciones de la Convención corresponden a la condición actual de las relaciones internacionales y a las necesidades de los Estados. Sin embargo, una esfera que requiere un nuevo examen, como lo ha señalado el representante soviético, es la de la condición del correo diplomático. A ese respecto, la delegación de Polonia comparte las opiniones de los patrocinadores del proyecto de resolución. La forma de protocolo parece ser la más razonable, después del examen por la CDI.

53. Sin embargo, desafortunadamente, la participación en la Convención no es universal. Hay Estados que todavía no la han ratificado, y esa situación no es favorable para el conjunto de la comunidad internacional. No se han explicado plenamente las razones de tal actitud. Naturalmente, cada Estado tiene el derecho soberano de participar o no participar en los tratados internacionales, pero, dada la importancia de la Convención, la comunidad internacional podría esperar que sus llamamientos para que la participación sea universal tuvieran eco y que se dieran razones válidas para una actitud tan negativa.

54. La delegación de Polonia espera que se complete la labor de codificación del derecho internacional de la diplomacia y que su resultado sea ratificado por todos los Estados Miembros. La delegación de Polonia votará a favor del proyecto de resolución A/C.6/L.1031.

Se levanta la sesión a las 17.45 horas.

1579a. sesión

Miércoles 3 de diciembre de 1975, a las 11 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1579

TEMA 115 DEL PROGRAMA

Cumplimiento por los Estados de las disposiciones de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961 y medidas para aumentar el número de las partes en ella (continuación) (A/C.6/L.1031)

1. El Sr. JACHEK (Checoslovaquia) dice que pese al número importante de ratificaciones de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961 o adhesiones a ella, aún hay muchos países que no han llegado a ser partes en dicha Convención. Sabido es que ocurren casos de violación de la Convención, ya sea por el mal uso que los representantes diplomáticos hacen de ella con fines que no fomentan el desarrollo de las buenas relaciones de amistad entre los Estados o mediante otras infracciones de las disposiciones de la Convención, por ejemplo, las relativas a la libertad de comunicación de las misiones diplomáticas y a la inviolabilidad de los correos diplomáticos y de la correspondencia diplomática. Tanto en el anterior período de sesiones de la Asamblea General como en el actual se han dado numerosos ejemplos. La delegación de Checoslovaquia

considera muy importante y urgente el objetivo de alcanzar la participación universal en los acuerdos multilaterales y generales del mismo tipo de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, la Convención de Viena sobre relaciones consulares, la Convención sobre las Misiones Especiales y la Convención de Viena sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal, ya que esas normas, juntamente con la Carta, crean el fundamento político y jurídico de la cooperación internacional y de su desarrollo en todas las esferas de la vida de la comunidad internacional.

2. Las Naciones Unidas deberían evaluar las experiencias acumuladas hasta ahora respecto de la aplicación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y adoptar medidas para asegurar eficazmente la aplicación de todas sus disposiciones. En ese sentido, debe prestarse especial atención a la esfera del servicio de los correos diplomáticos, así como al estatuto y los derechos de los correos diplomáticos y los principios para el transporte de correspondencia y equipaje diplomático, respecto de los

cuales la Convención de Viena contiene principios correctos, como el de la libertad de comunicación de la misión del Estado acreditante a todos los efectos oficiales, el derecho de utilizar todos los medios de comunicación, inclusive los correos diplomáticos y mensajes en clave, el principio de la inviolabilidad de la correspondencia diplomática y su protección por el Estado receptor. No obstante, la Convención de Viena sólo contiene el marco de la reglamentación en esa esfera de las actividades diplomáticas, de manera que surge la necesidad de elaborar en forma detallada ese principio, por ejemplo elaborando un protocolo complementario de la Convención. La necesidad de una reglamentación más detallada se desprende también de que en esa esfera de los servicios de los correos ocurren frecuentes infracciones de la Convención.

3. Por esos motivos, el Gobierno de Checoslovaquia acogió con beneplácito la propuesta hecha por la Unión Soviética en noviembre de 1974¹ de que las Naciones Unidas se ocuparan de los problemas del cumplimiento de las disposiciones de la Convención de Viena, y su delegación patrocina el proyecto de resolución respectivo (A/C.6/L.1031), encaminado a una elaboración más detallada de las disposiciones de la Convención en la esfera en que las disposiciones actuales son más bien generales y en que la práctica de los Estados señala la necesidad de una labor más detallada. La delegación de Checoslovaquia expresa la esperanza de que el proyecto de resolución, que ha sido presentado en bien del fortalecimiento de la cooperación amistosa entre los Estados y encaminado a la solución de los problemas urgentes que constituyen obstáculos para esa cooperación, cuente con el apoyo general de los Estados Miembros.

4. El Sr. STEEL (Reino Unido) dice que si bien su delegación está de acuerdo con el tenor general del proyecto de resolución que se ha presentado, tiene reservas respecto de algunas de sus disposiciones. Por ejemplo, en el segundo párrafo del preámbulo parece hacerse una distinción entre los principios y normas generalmente reconocidos del derecho internacional y otro tipo de principios y normas de derecho internacional, distinción que su delegación no puede aceptar, pues desde el momento en que los principios y normas han sido reconocidos como principios y normas del derecho internacional deben observarse. El tercer párrafo suscita dificultades debido a su referencia a "los casos" de violación de las normas del derecho diplomático. Parece sugerirse que los redactores del proyecto de resolución tuvieron en cuenta hechos determinados. Tales hechos no han sido identificados, pero de todos modos su delegación estima que sería preferible no referirse a casos determinados. Por consiguiente, debería suprimirse el artículo "los". En el quinto párrafo figura una aseveración que la Sexta Comisión tal vez no esté en condiciones de aceptar sin mayor estudio. Sería preferible quizá darle una redacción más tentativa, refiriéndose a la conveniencia de estudiar la posibilidad de ampliar las disposiciones de la Convención de Viena. Por su parte, el Gobierno del Reino Unido no considera necesario seguir ampliando las normas contenidas en el artículo 27 de la Convención de Viena.

¹ Véase *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno período de sesiones, Anexos*, tema 112 del programa, documento A/9745.

5. Respecto del párrafo 1 de la parte dispositiva cabría la misma observación ya hecha respecto del segundo párrafo del preámbulo. Acerca del párrafo 2, también en él se sugiere que hay casos especiales de violación, referencia que su delegación estima infortunada. En cuanto al párrafo 4, su delegación no ve claramente cuál sería el contenido del informe que se pide al Secretario General de las Naciones Unidas que prepare. Un medio claro de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Convención de Viena, que el informe podría recomendar, sería la adhesión al Protocolo facultativo sobre la jurisdicción obligatoria para la solución de controversias. Pero es difícil imaginar qué otras cuestiones podría abarcar el informe. De cualquier modo, se atendería más a la práctica habitual de la Comisión pedir que los Estados Miembros formularan observaciones al respecto antes de pedir al Secretario General que preparase un informe. En cuanto al párrafo 5, es prematuro invitar a la Comisión de Derecho Internacional (CDI) a que estudie la elaboración de normas especiales relativas al estatuto del correo diplomático. Tampoco en ese caso se trata de una práctica habitual sin contar antes con las observaciones de los Estados Miembros. Aunque ha habido excepciones a esa práctica, ello ha ocurrido en casos muy especiales que no son análogos al caso que se examina.

6. La delegación del Reino Unido simpatiza con la tendencia general del proyecto de resolución y de las declaraciones hechas en su apoyo, y sugiere nuevas consultas oficiosas al concluir el debate general para dar una redacción al proyecto que permita aceptar sus disposiciones.

7. El Sr. RASSOLKO (República Socialista Soviética de Bielorrusia) dice que los principios de la coexistencia pacífica en las relaciones entre Estados con sistemas sociales diferentes se reflejan en el estado actual de las relaciones entre los países y en la celebración de acuerdos de diversos tipos, así como en la distensión. Entre los convenios celebrados se encuentra la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961, que es una prueba clara de que la codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional es una de las labores más importantes de las Naciones Unidas. Pero no basta con elaborar normas de derecho internacional, sino que también es indispensable garantizar el cumplimiento estricto de sus disposiciones por todos los Estados. Aunque 114 Estados han llegado a ser partes en esa Convención, no puede afirmarse aún que ella sea universal, pese a que en la actualidad no hay obstáculos para la universalidad de la Convención de Viena. El orador afirma que no cabe sino expresar inquietud por las violaciones de las disposiciones de esa Convención cometidas por Estados que no son partes en ella. Por esos motivos, la Asamblea General debe confirmar en una resolución la necesidad de que los Estados cumplan estrictamente las disposiciones de convenios que contribuyen a la normalización de las relaciones entre Estados.

8. La Convención de Viena de 1961, al igual que otros documentos, no resuelve la situación del estatuto de los correos diplomáticos. Es indispensable elaborar un documento en ese sentido, que por su forma y contenido podría ser un protocolo adicional a la Convención de Viena de 1961 y debería basarse en sus disposiciones, a la vez que debería reflejar toda la gama de privilegios e inmunidades

de los correos diplomáticos y racionalizar los procedimientos que rigen la correspondencia diplomática. La redacción de ese documento podría encomendarse a la CDI, que cuenta con la experiencia necesaria. El orador estima que no es conveniente aplazar el examen de esa cuestión y que los temores expresados por el representante del Reino Unido no se justifican. La delegación de la RSS de Bielorrusia apoya plenamente el proyecto de resolución A/C.6/L.1031, que está en condiciones de ser aprobado por la Sexta Comisión.

9. El Sr. TIEN Chin (China) dice que hay numerosos convenios internacionales acerca de las relaciones entre los países y que la cuestión de si éstos, especialmente los países que alcanzaron su liberación e independencia no hace mucho tiempo, llegan a ser parte en esos convenios o no corresponde por entero a su soberanía. Los hechos demuestran que el respeto de un país por las normas generales de las relaciones entre los Estados no depende de las aseveraciones verbales de ese país ni de si es o no parte en una convención internacional determinada, sino que debe juzgarse sobre la base de los hechos. Si un país intenta hacer propaganda con respecto a una convención internacional persiguiendo motivos ulteriores, ello, por decir lo menos, no es una actitud seria.

10. En cuanto a los llamamientos pomposos a otros países para que cumplan una convención internacional en tanto que ese país comete actos que violan seriamente esa misma convención internacional, se trata todavía más de una actitud de total hipocresía. Todos recuerdan que a mediados del período de sesiones anterior de la Asamblea General, cierto país presentó un tema titulado "Cumplimiento por los Estados de las disposiciones de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961 y medidas para aumentar el número de las partes en ella" en calidad de asunto importante y urgente. Para todos era claro que ese tipo de táctica perseguía un motivo ulterior. Ese país estimó que había alcanzado su objetivo, pero su plan fracasó. El orador pregunta por qué ese país intenta utilizar ese tema nuevamente el presente año, y afirma que se debe a que ese país en los últimos años ha alabado el "desarrollo de las relaciones de amistad y cooperación entre los países" por una parte, en tanto que, por la otra, orientado por su política de expansión y agresión, algunos de sus agentes diplomáticos estacionados en países extranjeros utilizan los privilegios diplomáticos de manera flagrante para cometer innumerables actos que violan la soberanía y ponen en peligro la seguridad del Estado receptor. Muchos países no sólo tienen plena conciencia de ello, sino que los han expuesto públicamente y han adoptado a la vez medidas enérgicas para defender la soberanía y la seguridad de sus respectivos países. En esas circunstancias, ese país intenta en vano utilizar el tema de las relaciones diplomáticas para encubrir sus propios actos infames. El resultado es que mientras más intenta ocultarlos, más quedan expuestos.

11. El orador dice que no puede evitarse preguntar si ese país, cuyas ideas son por completo diferentes de sus aseveraciones verbales, tiene el descaro de hablar acerca de lo que llaman "cumplimiento de la Convención sobre relaciones diplomáticas", y pregunta si no equivale a hacer mofa de esa Convención y del número superior al centenar de países que se encuentran representados en la Sexta

Comisión. La delegación de China estima que los gobiernos deben observar las normas generales relativas a las relaciones entre los Estados, pero que el país anteriormente mencionado no tiene derecho a pedir a otros países que cumplan la Convención sobre relaciones diplomáticas. Ese país debería ser el primero en acatar esa Convención.

12. El Sr. MAKAREVICH (República Socialista Soviética de Ucrania) considera muy oportuna la inclusión del tema en el programa del trigésimo período de sesiones, y felicita a la delegación de la URSS por su iniciativa. La Convención de Viena, que es uno de los documentos más importantes del derecho internacional contemporáneo, declara en su preámbulo que tiene por objeto fomentar el desarrollo de relaciones de amistad entre los Estados con independencia de las diferencias que existan entre sus sistemas políticos y sociales. El cumplimiento de la Convención es indispensable para el mantenimiento de relaciones normales entre los Estados. Por eso, aunque en la actualidad ya son partes en ella más de 110 Estados, es de lamentar que la Convención todavía no sea universal. Dada su importancia, la delegación de la RSS de Ucrania considera que la Asamblea General debería hacer un llamamiento a los Estados que aún no se hayan adherido, para que lo hicieran cuanto antes.

13. A la RSS de Ucrania, que participó en la elaboración de la Convención y es parte en ella, le preocupan las violaciones de la misma por algunos de los Estados que son partes en ella. En opinión del Sr. Makarevich, el desarrollo de relaciones entre los Estados quedaría mejor servido si se adoptaran normas nacionales que reflejaran los principios y normas del derecho diplomático moderno y crearan condiciones favorables para el ejercicio de los derechos diplomáticos extranjeros y el fomento de las relaciones comerciales. La RSS de Ucrania así lo hizo cuando en 1966 adoptó nuevas disposiciones sobre las representaciones diplomáticas y consulares.

14. La Convención de Viena, que ha soportado bien la prueba del tiempo, no requiere más cambios que los que imponga la evolución misma del derecho diplomático. La delegación de la RSS de Ucrania apoya la institución del correo diplomático y lamenta que no haya sido reconocida en las convenciones. La práctica demuestra la importancia que reviste para el funcionamiento de las misiones diplomáticas. Por eso, ha llegado el momento de reglamentar la institución y liberar a los correos de inspecciones aduaneras y cacheos personales. La delegación de la RSS de Ucrania apoya la propuesta de que se reglamente la condición jurídica del correo diplomático mediante un protocolo adicional, y considera que la CDI es el órgano más adecuado para redactarlo. Asimismo, está de acuerdo en que el Secretario General prepare un informe sobre las formas y medios de velar porque los Estados cumplan las disposiciones de la Convención y lo presente a la Asamblea General en su trigésimo período de sesiones.

15. El Sr. Makarevich dice que su delegación apoya el proyecto de resolución A/C.6/L.1031.

16. El Sr. ROSENSTOCK (Estados Unidos de América) ensalza la Convención de Viena, que constituye una codificación ejemplar del derecho diplomático internacional, y aprovecha la oportunidad para volver a encomiar la labor de la CDI. Aunque, por tratarse de una

codificación del derecho diplomático existente no es necesario que un Estado sea parte en la Convención para quedar obligado por aquél, el representante de los Estados Unidos subraya la importancia de conseguir la adhesión o ratificación del mayor número posible de Estados e insta a los que aún no lo hayan hecho a que envíen cuanto antes los instrumentos pertinentes de adhesión. Igualmente exhorta a los Estados partes en la Convención a que se adhieran también al Protocolo facultativo sobre la jurisdicción obligatoria para la solución de controversias, y señala que esa es la mejor manera de asegurar la aplicación de las reglas contenidas en la Convención.

17. El Sr. Rosenstock hace notar que los privilegios e inmunidades no se conceden para beneficiar a las personas, sino para asegurar el desempeño eficiente de las funciones de las misiones diplomáticas. Los privilegios e inmunidades no tienen por objeto facilitar las infracciones de las leyes y reglamentos de los Estados huéspedes. Además, parecería razonable que los representantes diplomáticos se ajustaran lo más posible a las normas, reglamentos y usos vigentes en el país huésped para proporcionar la necesaria seguridad a los extranjeros. El derecho codificado en la Convención de Viena incluye disposiciones en las que se establecen claramente ciertas obligaciones de los Estados huéspedes en relación con la valija y los correos diplomáticos. La delegación de los Estados Unidos no cree que sean necesarios nuevos textos al respecto.

18. El Sr. Rosenstock dice que su delegación cree que, si se introducen ciertas modificaciones, el proyecto de resolución podrá ser aprobado por consenso.

19. El Sr. HAFIZ (Bangladesh) felicita a la delegación de la URSS por haber solicitado la inclusión en el programa de este tema tan importante y vital para el desarrollo de la cooperación y las relaciones de amistad entre los Estados.

20. La delegación de Bangladesh lamenta que ciertos Estados que son partes en la Convención violen sus disposiciones y que otros que no lo son permitan en sus países actividades incompatibles con las funciones de las misiones diplomáticas. Para evitar esas violaciones sería conveniente que el mayor número posible de Estados prestara su adhesión a la Convención. Los privilegios e inmunidades diplomáticas no se conceden para beneficiar a las personas, sino para asegurar el funcionamiento eficaz de las misiones diplomáticas. El Sr. Hafiz confía en que éstas no utilicen sus locales en forma alguna que resulte incompatible con sus funciones, que se enumeran en el artículo 3 de la Convención.

21. El Sr. Hafiz dice que su país respeta fielmente las disposiciones de la Convención de Viena y concede a todas las representaciones acreditadas en Bangladesh los privilegios e inmunidades estipuladas en ella. Sin embargo, debido a ciertas cuestiones de procedimiento, no es oficialmente parte en la misma. En efecto, como el Pakistán sí lo es, la participación de Bangladesh plantea la cuestión más amplia de la sucesión de Estados, cuestión que hasta 1974 estuvo sometida a la consideración de la CDI. Ahora que la misma ha aprobado los textos finales al respecto, se están adoptando las medidas pertinentes para que Bangladesh participe en todos los tratados multilaterales importantes, entre ellos la Convención de Viena. La dele-

gación de Bangladesh apoyará toda medida encaminada a asegurar el cumplimiento estricto de la Convención de Viena y de las demás normas de derecho diplomático internacional universalmente reconocidas.

22. El Sr. KRISPIS (Grecia) dice que el punto de vista de su delegación con respecto al tema y al proyecto de resolución que se estudian coincide en principio con el que ha expresado el representante del Reino Unido.

23. En relación con el segundo párrafo del preámbulo y el párrafo 1 de la parte dispositiva, el Sr. Krispis considera que basta decir que es preciso que se cumplan las normas del derecho internacional y las disposiciones de la Convención de Viena, sin que sea necesario hacer referencia explícita a razones concretas para ello. En relación con el tercer párrafo del preámbulo y el párrafo 2 de la parte dispositiva, debería hablarse de "cualquier violación" en vez de "los casos ocurridos [o acontecidos] de violación", ya que ello exigiría aclaraciones. En el párrafo 4 sería preciso aclarar aún más la petición que se hace al Secretario General. En cuanto al párrafo 5, aun cuando está de acuerdo en que la CDI es el órgano apropiado, el representante de Grecia estima que la invitación resulta prematura.

24. El Sr. Krispis felicita a la delegación soviética por su iniciativa de presentar el tema, y confía en que será fácil encontrar un texto que pueda ser aprobado por consenso.

25. El Sr. GODOY (Paraguay) dice que, si bien valora la importancia del correo diplomático, su delegación estima que, tal vez, el problema no constituya un motivo de especial preocupación para la mayoría de los países y que quizá basten por el momento las disposiciones al respecto contenidas en el párrafo 5 del artículo 27 de la Convención de Viena. En consecuencia, considera innecesaria la elaboración de un nuevo documento al respecto. Además, si se le encomendara esa tarea, la CDI se vería obligada a retrasar el examen de otras cuestiones más importantes.

26. En cuanto al párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, el Sr. Godoy estima que, si se siente una preocupación auténtica por los casos de violación ocurridos, la terminología resulta débil. El representante del Paraguay dice que su delegación está dispuesta a apoyar el proyecto de resolución si se introducen algunas modificaciones que los hagan más realista.

27. El Sr. ENKHSIAKHAN (Mongolia), haciendo uso de la palabra en el ejercicio del derecho a contestar, dice que va a citar algunos casos de violaciones de las normas diplomáticas internacionales de que ha sido objeto su país.

28. La principal función de las misiones diplomáticas es fomentar las relaciones de amistad entre los Estados. Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todos los diplomáticos tienen la obligación de respetar las leyes del Estado ante el cual están acreditados. Sin embargo, la Embajada de China en Ulan Bator trata de utilizar a los 7.000 ciudadanos chinos que viven en Mongolia para sus actividades antimongolas. Así, el Segundo Secretario de esa Embajada les dijo en una reunión que deberían luchar sin temor por las ideas de sus dirigentes y que los revisionistas mongoles y soviéticos serían derrotados. Igualmente, el Encargado de Negocios de la misma Embajada dijo en una

recepción ante 200 invitados que no debían temer a los mongoles y que debían luchar para difundir en Mongolia las ideas del Presidente Mao.

29. Según el derecho internacional contemporáneo, los locales de las misiones son inviolables, al igual que sus medios de transportes. Sin embargo, en 1967 la Embajada de Mongolia en Pekín fue sitiada y asaltada por las turbas y dañados varios coches de la Embajada con matrículas diplomáticas. Incluso se llegó a incendiar el coche del Embajador.

30. Uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo es el de no injerencia en los asuntos internos de los Estados. Su estricto cumplimiento es un requisito esencial para la convivencia pacífica, y cualquier violación del mismo origina situaciones que amenazan la paz y la seguridad internacionales. No obstante, en 1967-68 la Embajada de China en Ulan Bator distribuyó en Mongolia más de 20.000 ejemplares de 70 folletos subversivos antimongoles. En 1969 el número ascendió a 30.000. En cuanto a las emisiones de radio, otra modalidad de subversión ideológica e injerencia en los asuntos internos, durante los años de la "revolución cultural" seis estaciones emitieron propaganda calumniosa en lengua mongola. En la actualidad, las emisiones en mongol, kasakh, ruso y chino suman unas 40 horas diarias.

31. El Sr. Enkhsaikhan recuerda cómo en 1936 Mao afirmó en Edgar Snow que, tras la victoria de la revolución china, Mongolia "por voluntad propia" entraría a formar parte "automáticamente" de la federación china. En febrero de 1949 y en 1954, con motivo del quinto aniversario de la victoria de la revolución china, Mao quiso discutir con los dirigentes soviéticos la cuestión de la anexión de Mongolia. Los soviéticos respondieron que no creían que Mongolia renunciaría a su independencia y que, en todo caso, la cuestión debía ser decidida por Mongolia. El Sr. Enkhsaikhan estima que no es una coincidencia que Chiang Kai-shek y Mao sostengan las mismas opiniones acerca de la mayoría de las cuestiones territoriales. A lo largo de la frontera los chinos han construido varias instalaciones militares estratégicas y han estacionado grandes unidades del ejército. Entre 1969 y julio de 1973 las tropas chinas realizaron 151 maniobras militares en la zona fronteriza y efectuaron unas 8.000 explosiones y disparos de artillería. A pesar de las protestas de Mongolia, soldados y oficiales chinos se han internado deliberadamente en varias ocasiones en territorio mongol y son frecuentes las provocaciones de menor importancia. Para defender sus fronteras, Mongolia se ve obligada a sustraer de la producción material una cantidad considerable de recursos y de mano de obra. La Unión Soviética y los demás países socialistas están ayudando a Mongolia a superar las dificultades originadas por el empeoramiento de sus relaciones con China.

32. El Sr. Enkhsaikhan dice que, si ha citado algunos ejemplos, ha sido para demostrar la necesidad de disponer de una garantía jurídica más universal de que los diplomáticos desempeñan sus funciones de conformidad con los principios del derecho internacional.

33. El Sr. TIEN Chin (China), en ejercicio del derecho a contestar, dice que no se ha referido en su intervención a

Mongolia y que, sin embargo, el representante de Mongolia ha llegado incluso a proferir necedades contra China y a atacarla con calumnias. Las difamaciones del representante de Mongolia no tienen absolutamente nada que ver con el tema que se examina. Puede comprenderse la situación deplorable en que se ha colocado el representante de Mongolia. Con todo, no ayuda para nada a quienes trata de defender.

34. El Sr. ENKHSAIKHAN (Mongolia), en ejercicio de su derecho a contestar, dice que, en primer lugar, si bien el representante de China no mencionó a su país de modo expreso, sí lo hizo implícitamente y, en segundo lugar, que los ejemplos por él citados se refieren a la cuestión objeto de examen.

35. El Sr. KOLESNIK (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación está dispuesta a iniciar consultas oficiosas con el fin de que el proyecto de resolución contenido en el documento A/C.6/L.1031 reciba amplio apoyo y sea aprobado por consenso.

TEMA 117 DEL PROGRAMA

Programa de asistencia de las Naciones Unidas para la enseñanza, el estudio, la difusión y una comprensión más amplia del derecho internacional: informe del Secretario General (conclusión) (A/10332, A/C.6/468, A/C.6/L.1029)

36. El PRESIDENTE dice que, a propuesta de Ghana, se ha sustituido a Filipinas por la República Árabe Siria entre los miembros del Comité Consultivo a que se hace referencia en el párrafo 9 de la parte dispositiva del proyecto de resolución contenido en el documento A/C.6/L.1029. Por otra parte, la delegación del Paraguay ha indicado que debe sustituirse la expresión "bolsa de viaje" que figura en el inciso b) del párrafo 1 de ese mismo proyecto de resolución por "subsidio de viaje".

37. El Sr. MAHMUD (Pakistán) expresa, en su calidad de Presidente del Grupo Asiático, la aprobación de dicho Grupo por la inclusión de Chipre y de la República Árabe Siria como miembros del Comité Consultivo del Programa de asistencia de las Naciones Unidas para la enseñanza, el estudio, la difusión y una comprensión más amplia del derecho internacional. Sin embargo, señala a la atención que no se ha observado debidamente el principio de una adecuada representación geográfica al fijar la composición del Comité Consultivo. Debe reexaminarse esa cuestión teniendo en cuenta el aumento del número de miembros de los Grupos Africano, Asiático y Latinoamericano al haber logrado la independencia los territorios que se hallaban sometidos anteriormente a la dominación colonial. El Grupo Asiático no insistirá en que se proceda actualmente a tal revisión, pero sí cuando se inicie el nuevo mandato del Comité Consultivo.

38. El Sr. SIBLESZ (Países Bajos) informa a la Comisión que, como en años anteriores, su país ha ofrecido una beca de 5.000 florines para estudiantes procedentes de países en desarrollo que asistan al Seminario que ha de celebrarse en Ginebra en 1976, en relación con los trabajos de la CDI.

39. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, se procederá a la aprobación, sin votación, del proyecto de resolución contenido en el documento A/C.6/L.1029, en su forma oralmente revisada en la 1578a. sesión.

Así queda acordado.

Queda aprobado el proyecto de resolución en su forma revisada.

TEMA 109 DEL PROGRAMA

Sucesión de Estados en materia de tratados: informe del Secretario General (continuación*) (A/10198 y Add.1 a 5, A/9610/Rev.1, A/C.6/L.1019/Rev.1, A/C.6/L.1022/Rev.1, A/C.6/L.1023/Rev.1, A/C.6/L.1026)**

40. El PRESIDENTE anuncia que el Sudán y Uganda se han sumado a los autores de las enmiendas revisadas al proyecto de resolución A/C.6/L.1019, que figuran en el documento A/C.6/L.1023/Rev.1.

41. El Sr. STEEL (Reino Unido), haciendo uso de la palabra en nombre de los autores del proyecto de resolución A/C.6/L.1019/Rev.1, dice que se han introducido en dicho proyecto las siguientes modificaciones: al final del párrafo 1 de la parte dispositiva, deben añadirse las palabras “sin falta” a continuación de las palabras “y que informe”, y en el párrafo 6, el título del tema que se propone incluir en el programa provisional del trigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General deber ser “Conferencia de Plenipotenciarios sobre la sucesión de Estados en materia de tratados” en lugar de “Sucesión de Estados en materia de tratados”.

42. El orador estima que las enmiendas que figuran en el documento A/C.6/L.1023/Rev.1 no son verdaderamente enmiendas, sino propuestas independientes. Pide una decisión del Presidente sobre ese particular.

43. Tras un debate de procedimiento en el que intervienen el Sr. ABUL-KHEIR (Egipto), el Sr. ROSENSTOCK (Estados Unidos de América), el Sr. JEANNEL (Francia), el Sr. MAIGA (Malí), el Sr. RASHID (Afganistán), el Sr. DIENG (Senegal), el Sr. GOBBI (Argentina) y el Sr. GODOY (Paraguay), el Sr. SETTE CÂMARA (Brasil), que hace uso de la palabra en explicación de voto, dice que su delegación se opone a todo intento de remitir a la CDI cualquier parte del proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados, pues ello sería contrario a la práctica de la Sexta Comisión. Cualquier duda

que suscite el referido proyecto será debidamente examinada en la Conferencia de Plenipotenciarios. Su delegación se opone, pues, al proyecto de resolución A/C.6/L.1019/Rev.1, toda vez que entrañaría una tercera lectura, sin precedentes, del proyecto de artículos. Por el contrario, acoge con satisfacción las enmiendas contenidas en el documento A/C.6/L.1023/Rev.1, mientras que se opondrá a las enmiendas contenidas en el documento A/C.6/L.1022/Rev.1, por las razones que ya ha indicado.

44. El Sr. FRANCIS (Jamaica), explicando su voto antes de la votación, considera preferible la remisión del proyecto de convención sobre la sucesión de Estados en materia de tratados a la CDI, y estima además que los trabajos de la Conferencia sobre el Derecho del Mar obstaculizarán la realización de la Conferencia de Plenipotenciarios en 1977. Por esos motivos, la delegación de Jamaica votará en contra de las enmiendas contenidas en el documento A/C.6/L.1023/Rev.1.

45. El PRESIDENTE, pronunciándose sobre la cuestión de orden planteada por el representante del Reino Unido, dice que como por el proyecto contenido en el documento A/C.6/L.1023/Rev.1 se suprimen algunas disposiciones del proyecto de resolución A/C.6/L.1019/Rev.1 y se modifican otras de ese texto, estima que constituyen una enmienda en el sentido del artículo 130 del reglamento de la Asamblea General.

46. Luego somete a votación la tercera y cuarta enmiendas presentadas por el Afganistán (A/C.6/L.1022/Rev.1), indicando que no es necesario votar sus dos primeras enmiendas, por haber sido incorporadas en el proyecto de resolución revisado.

Por 68 votos contra 8 y 22 abstenciones, quedan rechazadas las enmiendas.

47. El PRESIDENTE somete a votación las enmiendas revisadas al proyecto de resolución A/C.6/L.1019/Rev.1 contenidas en el documento A/C.6/L.1023/Rev.1.

Por 58 votos contra 16 y 15 abstenciones, quedan aprobadas las enmiendas.

48. El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución A/C.6/L.1019/Rev.1 en su formada enmendada.

Por 70 votos contra 1 y 28 abstenciones, queda aprobado el proyecto de resolución en su forma enmendada.

49. El Sr. RASHID (Afganistán) pide que se considere negativo su voto.

Se levanta la sesión a las 13.30 horas.

* Reanudación de los trabajos de la 1575a. sesión

** Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno período de sesiones, Suplemento No. 10.

1580a. sesión

Jueves 4 de diciembre de 1975, a las 11 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1580

TEMA 109 DEL PROGRAMA

Sucesión de Estados en materia de tratados: informe del Secretario General (conclusión) (A/10198 y Add.1 a 5, A/9610/Rev.1*, A/C.6/L.1019/Rev.1, A/C.6/L.1022/Rev.1, A/C.6/L.1023/Rev.1, A/C.6/L.1026)

1. El Sr. VAN BRUSSELEN (Bélgica) dice que su delegación votó en contra de las enmiendas que figuran en el documento A/C.6/L.1022/Rev.1 porque considera que el proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados (véase A/9610/Rev.1, cap. II, secc. D) representa una transacción difícilmente mejorable, de forma que no es necesario que la Comisión de Derecho Internacional (CDI) lo siga considerando, y además porque deja totalmente abierta la cuestión de la convocación de una conferencia de plenipotenciarios, a favor de la cual se ha manifestado Bélgica.

2. En cuanto a las enmiendas contenidas en el documento A/C.6/L.1023/Rev.1, la delegación de Bélgica se abstuvo de votar, pese a coincidir con algunas de las ideas contenidas en ellas, porque no se prevé el envío a la CDI para su ulterior estudio de las propuestas mencionadas en el párrafo 75 de su informe (A/9610/Rev.1), no obstante que ella misma ha manifestado que le faltó tiempo para examinarlas. Además, en el párrafo 3 de la parte dispositiva que propone dicha enmienda, se decide que la conferencia de plenipotenciarios incorpore el resultado de su labor en una convención internacional, y Bélgica considera que resulta prematuro decidir ahora la forma final que han de revestir los artículos. Tampoco cree que sea una convención la mejor fórmula y, en cualquier caso, estima que habrá de ser la conferencia misma la que se pronuncie al respecto. Al haberse aprobado las enmiendas contenidas en el documento A/C.6/L.1023/Rev.1, la delegación belga se vio obligada a abstenerse de votar sobre el proyecto de resolución A/C.6/L.1019/Rev.1 en su forma enmendada.

3. El Sr. KUSSBACH (Austria) dice que su delegación votó en contra de las enmiendas contenidas en el documento A/C.6/L.1023/Rev.1 porque creyó que se estaba votando el último párrafo del documento A/C.6/L.1022/Rev.1. En realidad, la delegación de Austria tenía la intención de votar a favor de las enmiendas contenidas en el documento A/C.6/L.1023/Rev.1, porque reflejan plenamente su punto de vista. Por eso, a continuación votó a favor del proyecto de resolución A/C.6/L.1019/Rev.1 en su forma enmendada.

4. El Sr. MAKEKA (Lesotho) dice que, desgraciadamente, su delegación estaba ausente cuando se efectuó la votación. De lo contrario, hubiera votado a favor de las enmiendas

contenidas en el documento A/C.6/L.1023/Rev.1 y del proyecto de resolución A/C.6/L.1019/Rev.1 en su forma enmendada.

5. El Sr. BOSCO (Italia) dice que su delegación votó en contra de las enmiendas contenidas en el documento A/C.6/L.1023/Rev.1 porque, aunque estaba de acuerdo con los párrafos 1 y 2 de la parte dispositiva que se proponían, no podía aceptar, en cambio, los párrafos 3 y 4, ya que considera prematuro decidir la convocación de una conferencia de plenipotenciarios en 1977 antes de conocer los comentarios y observaciones de otros Estados Miembros. Por la misma razón, la delegación italiana no pudo votar a favor del proyecto de resolución A/C.6/L.1019/Rev.1 en su forma enmendada.

6. El Sr. JEANNEL (Francia) dice que su delegación votó en contra de las enmiendas contenidas en el documento A/C.6/L.1022/Rev.1 por considerar que, de aprobarse, supondrían una demora indefinida de cualquier decisión sobre el proyecto de artículos. La delegación francesa votó también en contra de las enmiendas contenidas en el documento A/C.6/L.1023/Rev.1 porque está convencida de que una convención no es la forma más apropiada y eficaz de recoger los artículos y porque quedan en el texto ciertos elementos que, como ha reconocido la misma CDI, no han sido suficientemente estudiados.

7. En cuanto al proyecto de resolución A/C.6/L.1019/Rev.1 en su forma enmendada, la delegación de Francia, que fue uno de los patrocinadores del proyecto de resolución inicial e introdujo en él la decisión de convocar la conferencia de plenipotenciarios, lamenta que no haya sido posible encontrar una fórmula de acuerdo. En consecuencia, se abstuvo de participar en la votación.

8. El Sr. RASHID (Afganistán) considera que, si bien en conjunto el proyecto de artículos preparado por la CDI se encuentra en una fase bastante avanzada, todavía merece ser objeto de un examen más profundo en el que se tengan en cuenta las observaciones formuladas en el transcurso de las sesiones de la Sexta Comisión, observaciones que se refieren no sólo al párrafo 75 del informe de la CDI, sino también al párrafo 84 de dicho informe. Como algunas delegaciones han hecho observaciones pertinentes acerca de los artículos supuestamente ultimados, la delegación de Afganistán estima que no se puede dar por terminado el estudio de la cuestión.

9. En relación con el órgano que ha de encargarse de ultimar el proyecto de artículos, el Sr. Rashid ha podido observar que algunas delegaciones son partidarias de que se remita nuevamente la cuestión a la CDI y otras de que sea la Sexta Comisión la que estudie el proyecto. También han surgido discrepancias acerca de la forma o denominación que ha de recibir el proyecto de artículos. Así, unos

* Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno período de sesiones, Suplemento No. 10.

Estados hablan de convención, otros optan por una resolución de la Asamblea General o por una declaración y muchos no se han pronunciado al respecto.

10. En cuanto a la conferencia de plenipotenciarios, las opiniones estuvieron divididas hasta el momento del voto. Así pues, lejos de haber un consenso, puede decirse que no había una mayoría que se pronunciara en forma uniforme sobre el conjunto de la cuestión. Al mismo tiempo fue tomando cuerpo la opinión de que, antes de pronunciarse en forma definitiva, la Sexta Comisión debería esperar a que la CDI terminara sus trabajos relativos a la otra parte de la cuestión, a saber, la sucesión de Estados en materias distintas de los tratados, a fin de disponer de un texto unificado.

11. Esas divergencias se reflejan en las enmiendas propuestas. El proyecto de resolución A/C.6/L.1019/Rev.1 limitaba exclusivamente al párrafo 75 del informe de la CDI las cuestiones que se le habían de remitir y no se pronunciaba acerca del procedimiento y las modalidades que habría que utilizar para terminar los trabajos sobre el proyecto de artículos. Por su parte, por una de las enmiendas contenidas en el documento A/C.6/L.1023/Rev.1 se pediría al Secretario General que distribuyera los comentarios y observaciones de los Estados antes del trigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General y por otra se decidiría que ésta tratara la cuestión de la conferencia de plenipotenciarios, que debería reunirse en 1977. En cambio, las enmiendas presentadas por la delegación del Afganistán pedían que, en consideración de las opiniones formuladas en el curso de los debates, se remitieran a la CDI, para que las examinara, las observaciones de los Estados relativas no sólo al párrafo 75 del informe, sino también a otras cuestiones y que, en su próximo período de sesiones, la Asamblea General examinara los distintos aspectos de la cuestión con miras a adoptar una decisión acerca del futuro de los artículos. La razón de esas enmiendas es que, en opinión de la delegación del Afganistán, la cuestión no está suficientemente madura para dar por terminado el examen del proyecto de artículos y otros aspectos de procedimiento. El Sr. Rashid cree que, dada la importancia del proyecto, hay que extremar las precauciones para llegar a un resultado positivo y teme que, si se fuerza la convocación de una conferencia de plenipotenciarios mediante una votación mayoritaria, se corre el riesgo de que el proyecto fracase en una fase ulterior. Incluso si la conferencia de plenipotenciarios aprueba mediante una mayoría insignificante los artículos de una convención, los Estados pueden verse inducidos a no firmarla o ratificarla o a formular reservas a los artículos.

12. Por todas esas razones, la delegación del Afganistán no pudo votar a favor de las enmiendas contenidas en el documento A/C.6/L.1023/Rev.1 y votó en contra del proyecto de resolución A/C.6/L.1019/Rev.1 en su forma enmendada. En cambio, si el proyecto de resolución A/C.6/L.1019/Rev.1 no hubiera sido enmendado, se habría abstenido y hubiera votado a favor si se hubieran aprobado sus enmiendas.

13. El Sr. Rashid desea hacer constar que, como lo indicó en su momento (1579a. sesión), debido a la forma apresurada en que se desarrolló la votación no pudo quedar registrado su voto en contra del proyecto de resolución

A/C.6/L.1019/Rev.1 en su forma enmendada. A ese respecto, pide al Secretario de la Comisión que así lo haga constar en el documento pertinente y en el acta de la sesión. El Sr. Rashid se admira de que el Presidente haya llevado a paso de carga la votación de esa cuestión tan importante y delicada.

14. La delegación del Afganistán da las gracias a las delegaciones que votaron a favor de sus enmiendas.

15. El Sr. ROSENSTOCK (Estados Unidos de América) dice que su delegación estuvo de acuerdo en que se prescindiera de remitir ciertas cuestiones a la CDI por considerar que no era oportuno sobrecargar sus tareas, pero que no por ello deja de creer que, sin unas disposiciones relativas a la solución de controversias, el proyecto de convención resulta incompleto. Aunque confía en que la CDI lo tendrá presente en sus futuros trabajos, el Sr. Rosenstock estima que la cuestión debería ser debidamente resuelta en la conferencia de plenipotenciarios. Su delegación también está de acuerdo con la sugerencia implícita de que deben encontrarse medios y formas de facilitar la aplicación de la convención al mayor número posible de circunstancias, y cree que también esa cuestión podrá ser aclarada en la conferencia.

TEMA 115 DEL PROGRAMA

Cumplimiento por los Estados de las disposiciones de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961 y medidas para aumentar el número de las partes en ella (continuación) (A/C.6/L.1031/Rev.1)

16. El Sr. JEANNEL (Francia) dice que el establecimiento de unas relaciones bilaterales de calidad constituye un elemento fundamental de la cooperación internacional y que, en ese sentido, la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas¹ resulta sumamente valiosa, ya que codifica las normas que rigen esas relaciones. Aunque nadie puede negar su eficacia, ciertas delegaciones se han referido a los problemas que plantea la Convención. Sobre la base de las observaciones que han formulado, el Sr. Jeannel cree que esos problemas se pueden agrupar en dos categorías, a saber, los problemas relacionados con el correo diplomático y los problemas relacionados con el tratamiento de los diplomáticos mismos. Acerca de los primeros, el Sr. Jeannel cree que las críticas apuntan más a la manera de aplicar las disposiciones de la Convención de Viena que a las disposiciones mismas, ya que el artículo 27 de la Convención resulta suficientemente claro y amplio. Lo mismo cabe decir sobre los segundos: aunque se han citado actos condenables de cacheos y de detenciones, ellos son el resultado de una aplicación deficiente de la Convención, ya que en el artículo correspondiente se afirma la inviolabilidad del personal de las misiones, se prohíbe su arresto o detención bajo cualquier forma y se estipula el deber de los Estados huéspedes de impedir cualquier ataque a la dignidad e integridad de sus personas. El representante de Francia cree que debería hacerse una encuesta para ver cómo se aplican en la práctica las disposiciones de la Convención de Viena, sobre todo en lo que se refiere a las

¹ Naciones Unidas, *Recueil des Traités*, vol. 500, No. 7310, pág. 162.

dos esferas citadas. En consecuencia, debería aprobarse una resolución en la que se pidiera al Secretario General que recabara las observaciones y sugerencias de los gobiernos al respecto, preparara un informe y lo sometiera a la Asamblea General en su trigésimo primer período de sesiones para que lo estudiase y tomara una decisión. Asimismo, debería hacerse un llamamiento a los gobiernos que aún no lo hubiesen hecho para que se adhirieran a la Convención.

TEMA 116 DEL PROGRAMA

Medidas para prevenir el terrorismo internacional que pone en peligro vidas humanas inocentes o causa su pérdida, o compromete las libertades fundamentales, y estudio de las causas subyacentes de las formas de terrorismo y los actos de violencia que tienen su origen en las aflicciones, la frustración, los agravios y la desesperanza y que conducen a algunas personas a sacrificar vidas humanas, incluida la propia, en un intento de lograr cambios radicales: informe del Comité Especial sobre el Terrorismo Internacional (A/9028*)

17. El Sr. FERNANDEZ BALLESTEROS (Uruguay) dice que las obligadas posposiciones que por falta de tiempo la Asamblea General tuvo que decidir para el debate del tema, obligan a su vez a retomar el estado del mismo tal como se encontraba tres años atrás. Pero, al hacerlo, se advierte que las circunstancias que motivaron su inclusión no han cambiado, y que durante ese tiempo han continuado sucediéndose actos de terrorismo internacional que han renovado día a día los motivos que tuvo el Secretario General para solicitar la ayuda de la Asamblea General ante la amenaza palpable que el mundo comenzaba a afrontar y para solicitar que se incluyera en el programa del vigésimo séptimo período de sesiones, como tema adicional de carácter importante y urgente, un tema titulado "Medidas para prevenir el terrorismo y otras formas de violencia que ponen en peligro vidas humanas inocentes o causan su pérdida, o comprometen las libertades fundamentales"². Respondiendo a esa solicitud, la Asamblea General aprobó, el 18 de diciembre de 1972, la resolución 3034 (XXVII), por la que se engrosó el título propuesto inicialmente y se creó el Comité Especial sobre el Terrorismo Internacional.

18. El Uruguay recogió el llamado del Secretario General y de la Asamblea y se dispuso generoso a afrontar el compromiso exigido, esperando contar como aliados a todos los pueblos que han abrazado la causa de las Naciones Unidas, a los enemigos de la violencia, a los propulsores del derecho humanitario, en definitiva, a los amantes de la paz. Tal disposición del Uruguay se ha manifestado en todos los ámbitos y en todas las circunstancias. La voz del Uruguay no sólo se ha elevado cuando las vidas arrebatadas por el terrorismo son las de sus hijos, como en el caso del asesinato brutal y a sangre fría del Agregado Militar en París, Coronel Ramón Trópoli, sino también a raíz de las víctimas cobradas por los terroristas en la sede de la representación de la República Federal de Alemania en

Estocolmo, en cuya ocasión el Gobierno del Uruguay manifestó su enérgica condena al Canciller de la República Federal de Alemania.

19. Retomando las palabras del Secretario General cuando advertía que esos actos de violencia han creado en todo el mundo un clima de temor del que nadie está inmune, es el Uruguay el que puede ofrecer el más claro ejemplo de la verdad de tal aserto, y ello porque ese país, que fue atacado por la más violenta ola de terror de su historia, ya felizmente eliminada por completo, no era otro que el que fuera llamado durante tanto tiempo "la Suiza de América". El Uruguay, que ostentó desde 1908 a 1972 el orgullo de no tener ningún muerto por razones directa o indirectamente políticas, se vio sorprendido y sin defensas ante el ataque terrorista. Esa puntualización es imprescindible para comprender que la posición del Uruguay aúna a su franqueza la objetividad y la seriedad.

20. No es un secreto para nadie que el tema en estudio se ha convertido en una especie de tabú para algunos de los Estados representados en la Comisión. Ello porque se teme que una condena por parte de la Asamblea General perjudique la legítima lucha de determinados pueblos o movimientos contra el colonialismo o por la autodeterminación. Asimismo se identifica a quienes toman una posición ante el terrorismo, distribuyéndolos según cual sea ella en uno u otro bando del conflicto del Oriente Medio. Al respecto, cabe recordar las palabras que el Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay pronunciara en el anterior período de sesiones (2240a. sesión plenaria), cuando afirmó que, sin dejar de apoyar las medidas inmediatas que la Organización continuara tomando para aliviar la triste condición del pueblo palestino, el Gobierno del Uruguay abogaba por fórmulas más profundas que abordasen y atendiesen las legítimas aspiraciones de ese pueblo, afrontando el problema en su sustancia real, política, social y, en definitiva, humana, todo ello en el cuadro de negociaciones globales de paz.

21. Pasando al informe del Comité Especial sobre el Terrorismo Internacional (A/9028), el orador indica que dicho informe no da una idea exacta de las dificultades encontradas hasta llegar a una forma de transacción para organizar sus trabajos. El empecinamiento de varias delegaciones, y en especial la actitud intransigente de otras, determinaron que no fuera posible lograr el consenso que venía vislumbrándose, y la reunión fue clausurada con una simple exposición de las sesiones del Comité, que, si bien podrá servir como base para ulteriores trabajos, no significa aquel aporte clarificador que se deseaba y que determinó su creación, ni facilita la posibilidad de que la Asamblea General pueda adoptar recomendaciones en la materia.

22. Dicho informe obliga a su delegación a volver a expresar lo que expresó en el Comité y que el informe no refleja. El Uruguay expresó y expresa su más categórico repudio a los actos de terrorismo internacional que en forma progresiva se han reiterado en los últimos tiempos y que no se encuentran limitados por determinadas regiones geográficas o sistemas político-ideológicos, sino que, por el contrario, indiscriminadamente se perpetran sin tomar en cuenta otro tipo de consideraciones que no sean las propias de la barbarie y de la absoluta falta de piedad de los criminales que los practican.

* Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo octavo período de sesiones, Suplemento No. 28.

² Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo séptimo período de sesiones, Anexos, tema 92 del programa, documentos A/8791 y Add.1.

23. Es indudable que ningún sistema represivo, ningún procedimiento de colaboración internacional para la sanción de esos delitos, por más fuerte y coordinado que sea, podrá alcanzar nunca la definitiva erradicación de esa clase de delincuencia si no se atacan las causas que la engendran. Los gobiernos deben, pues, ayudarse recíprocamente para luchar contra ese tipo de delincuencia, pero también deben ayudarse en la sublime y enorme tarea de poner fin a los desequilibrios de viejas y obsoletas estructuras socio-económicas. Ello, no obstante, debe ser sin perjuicio de que, frente al hecho concreto de la delincuencia terrorista en sus diversas variantes, los Estados se preocupen en tipificar dichas figuras delictivas en sus respectivas legislaciones, en colaborar entre sí para evitar y reprimir ese tipo de delitos, impidiendo mediante los acuerdos correspondientes que los agentes de los mismos puedan lograr su impunidad mediante el simple arbitrio de refugiarse en el territorio de un país distinto al que cometieron sus crímenes.

24. El terrorismo no puede ser amparado por ningún instituto de derecho internacional, ya que de otro modo se estaría legitimando el principio maquiavélico de que el fin justifica los medios. En tal sentido, su delegación desea expresar que otorga un hondo contenido moral a los auténticos movimientos de liberación nacional y que, en atención a ello, se resiste a admitir que los mismos sean caracterizados por la utilización de procedimientos terroristas.

25. El Uruguay considera que la comunidad internacional organizada debe ser especialmente diligente en la adopción inmediata de medidas en esa materia, frente a una opinión pública mundial que, cada día más preocupada por los actos de terrorismo que se perpetran por doquier, reclama la inmediata puesta en marcha de procedimientos eficaces dirigidos a ponerle término. En tal sentido, tal vez el único camino viable sería el de reforzar las legislaciones nacionales, a menudo carentes de instrumentos jurídicos aptos para poder combatir ese fenómeno relativamente nuevo en su virulencia, y afianzar a través de convenciones bilaterales una red de defensa eficaz desde el punto de vista internacional. Por otra parte, la firma y ratificación de convenciones multilaterales del tipo de las tres celebradas en Montreal, La Haya y Tokio, en asuntos de piratería aérea, así como la de prevención y castigo de los delitos contra los agentes diplomáticos y otras personas internacionalmente protegidas constituyen una necesidad, y su delegación hace un llamamiento a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas al respecto.

26. El Uruguay apoyará la adopción de medidas concretas que permitan prevenir y condenar esa creciente violencia, cuyos métodos inhumanos crean un clima de inseguridad y de peligro y provocan la pérdida de vidas inocentes.

27. El Sr. GÜNEY (Turquía) dice que su Gobierno, profundamente preocupado por el aumento alarmante de actos de terrorismo que no sólo ponen en peligro vidas inocentes, sino también los derechos fundamentales de los Estados, apoyó la iniciativa del Secretario General de que se incluyese en el programa del vigésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea General un tema adicional relativo a las medidas para prevenir el terrorismo y las demás formas de violencia. Ahora bien, es un hecho lamentable y

alarmante para las Naciones Unidas y la comunidad internacional en su conjunto que no se haya alcanzado hasta la fecha la finalidad perseguida por la iniciativa del Secretario General y que el Comité Especial sobre el Terrorismo Internacional no haya podido concluir sus tareas y formular ciertas conclusiones.

28. En los últimos años, se ha producido un encadenamiento de violencias que han multiplicado las víctimas inocentes. Ningún país, comunidad, o región puede considerarse al abrigo de esa ola de violencia. Debe subrayarse que son muy pocos los Estados representados en la Sexta Comisión cuyos ciudadanos no hayan sufrido gravemente como consecuencia de un número siempre creciente de actos de terrorismo. A ese respecto, cabe citar la experiencia de Turquía: dos jóvenes diplomáticos turcos fueron asesinados hace apenas tres años en los Estados Unidos; se han desviado aviones turcos hacia el extranjero y aviones extranjeros hacia Turquía; los embajadores turcos en Viena y París fueron asesinados con dos días de intervalo, el 22 y el 24 de octubre de 1975, respectivamente. Ese breve catálogo de la experiencia de un solo país, en un pasado reciente, debería ilustrar la forma en que los actos de violencia tienden a formar parte del modo de vida y demostrar que ninguna región del globo se halla inmune de ese fenómeno.

29. El terrorismo no es un hecho nuevo, pero, con los progresos técnicos y el desarrollo de los medios de comunicación, se ha convertido, desde el término de la primera guerra mundial, en un problema internacional con consecuencias cada vez más graves. Los actos de terrorismo revisten formas muy variadas, siendo la más frecuente y especial en los días actuales la que se ensaña en las personas de los diplomáticos. Se trata de una forma de terrorismo internacional que ha substituido los privilegios e inmunidades diplomáticas por el riesgo permanente y que ha creado un sentimiento de inseguridad para todos los diplomáticos, en primer lugar para los embajadores, que pone gravemente en peligro el propio mecanismo de la cooperación internacional. En ese sentido, el orador esboza los acontecimientos ocurridos del 22 al 24 de octubre de 1975, que ponen de manifiesto la recrudescencia de los actos de violencia dirigidos contra los diplomáticos y personas inocentes y el sentimiento de inseguridad que esa violencia provoca en el seno de la comunidad internacional. Sin embargo, las medidas adoptadas hasta la fecha por la comunidad internacional han resultado ser insuficientes, entre ellas las convenciones firmadas en Tokio, en 1963, en La Haya, en 1970 y en Montreal, en 1971, así como el instrumento internacional más reciente aprobado por la Asamblea General, a saber la Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos (resolución 3166 (XXVIII), anexo), que no ha entrado todavía en vigor por falta del número preciso de ratificaciones o adhesiones.

30. En lo que respecta a las causas del terrorismo internacional, no hay nada que agregar a las conclusiones del estudio preparado por la Secretaría³, y cabe mencionar igualmente la declaración hecha por el Secretario General cuando se incluyó el tema en el programa, en la cual precisó

³ A/C.6/418/Rev.1.

que los actos de violencia derivados del terrorismo internacional son contrarios al derecho y la moral internacionales, que constituyen asimismo violaciones de los propósitos y principios fundamentales de la Carta, y que son contrarios a las declaraciones y resoluciones en que se han desarrollado y confirmado esos principios.

31. El orador declara que las Naciones Unidas no pueden seguir siendo testigos pasivos de los actos de violencia; ha llegado el momento de poner en práctica los principios basados en la Carta y tomar medidas apropiadas teniendo plenamente en cuenta objetivos prácticos, que podrían ser los siguientes: debe obrarse con objetividad y dejarse de lado las consideraciones de orden político, que han de examinarse en sus esferas respectivas y tratadas en consecuencia; no se puede atentar contra el derecho fundamental de los pueblos a la libre determinación ni contra la lucha de liberación que libran contra el colonialismo; aunque sería conveniente definir el concepto de terrorismo internacional, que no es preciso ni se presta a una definición exacta, tal vez bastaría con precisar el concepto en disposiciones destinadas a ese objeto; debe emprenderse en forma paralela el estudio de las causas del terrorismo, que son diversas y complejas, pero sin retardar las medidas que han de tomarse para impedir y reprimir el terrorismo internacional, que requiere con urgencia la acción concertada; no podrá combatirse eficazmente el terrorismo internacional sino mediante la cooperación internacional; ella sólo puede concebirse en una convención, que debe contener disposiciones relativas a la cooperación en materia de prevención y represión de los actos de terrorismo internacional, así como disposiciones relativas al enjuiciamiento, castigo y extradición de sus autores.

32. La Asamblea General debe actuar con rapidez y firmeza si se quieren evitar nuevos actos de violencia que provoquen más víctimas inocentes. Pero ello debe, por una parte, condenar el terrorismo internacional, estimular a los Estados a hacerse parte en las convenciones existentes y a que refuercen las medidas antiterroristas ya tomadas en el plano nacional, y estimular el intercambio de información acerca de las precauciones y técnicas eficaces ya aplicadas o en elaboración dentro de los países, hacer un llamamiento a los Estados para que aumenten la cooperación bilateral o regional con miras a combatir mejor el terrorismo internacional y, por otra parte, renovar el mandato del Comité Especial para que prosiga su labor y haga todo lo posible hasta alcanzar los objetivos prácticos ya mencionados. La comunidad internacional debe poner fin al aumento de la brutalidad, de la cual el terrorismo internacional es una de las formas más graves que asume en la sociedad, cuyo límite de tolerancia, una vez alcanzado, si no sobrepasado, puede llevar a una desintegración irreversible y fatal de las relaciones internacionales.

33. El Sr. SABEL (Israel) dice que, tal como en años anteriores, debe lamentarse que la Sexta Comisión haya dejado una vez más de dar un paso definitivo para asegurar la acción jurídica internacional contra el azote del terrorismo internacional. La opción es clara; se trata de saber si hay algunos actos cometidos por particulares que la comunidad mundial estima tan reprensibles, despreciables y contrarios a los ideales fundamentales de la humanidad que diferentes países de sistemas políticos muy diversos han de unirse para denunciarlos y tomar contra ellos acciones

claras e inequívocas. No cabe justificar los actos de terrorismo por razones políticas.

34. El informe presentado en el vigésimo octavo período de sesiones por el Comité Especial sobre el Territorio Internacional debe ser uno de los informes más áridos y estériles que haya presentado un comité siguiendo instrucciones de la Asamblea General; la incapacidad del Comité Especial para hacer progreso alguno en el enfrentamiento con ese mal sólo completa el círculo vicioso del fracaso que ha sido la suerte de toda la acción de las Naciones Unidas contra el terrorismo internacional, desde los llamados consensos del Consejo de Seguridad en 1970 y 1972 hasta los diversos debates realizados en la Asamblea General sobre el desvío a mano armada de aeronaves. La delegación de Israel ha seguido un enfoque constructivo en todos esos debates, intentando plantear algunas consideraciones fundamentales y propuestas prácticas en la forma menos controversial, como es el caso de las observaciones presentadas por Israel en respuesta a la resolución 3034 (XXVII) de 1972, que aparecen en el documento A/AC.160/1/Add.1. Pero consideraciones políticas irrelevantes que han estado presentes a lo largo de todo ese proceso y que prácticamente han dejado sin efecto la iniciativa tomada por el Secretario General en 1972 se han combinado para transformar al Comité Especial y su informe y los debates de la Sexta Comisión sobre el tema en una parodia, en un trago amargo para todas las víctimas inocentes o potenciales del terrorismo internacional que habían esperado que la actividad de las Naciones Unidas generara medidas concretas y serias para eliminar ese azote.

35. Existe la necesidad clara y urgente de un instrumento internacional que asegure que las personas que cometen tales actos no rehúyan el castigo, instrumento que ha de basarse en el principio de que el Estado debe otorgar la extradición del delincuente o provocar su enjuiciamiento, que es el principio de los convenios de aviación civil de La Haya y Montreal, que han sido ratificados por Israel. El elemento perturbador del informe del Comité Especial es el esfuerzo hecho por algunas delegaciones por impedir que se tome medida concreta alguna encaminada a la redacción de tal instrumento. La obstrucción parece haber seguido dos sentidos; en primer lugar, la cuestión de las causas del terrorismo internacional, basada en la tesis inaceptable de que puede haber alguna causa política que justifique o atenúe el terror. La delegación de Israel estima que es esencial que la Comisión declare categórica y claramente que el terror es un mal que ha de ser contrarrestado universal, absoluta e incondicionalmente. La otra táctica diversionista ha sido la cuestión de la responsabilidad de los Estados o del llamado terrorismo estatal. Israel ha sostenido desde hace muchos años que en los casos en que participe directa o indirectamente un Estado en acciones terroristas está implicada la responsabilidad directa del Estado, lo que está claramente establecido en la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas (resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, anexo). El único objetivo que pueden perseguir quienes traen a colación ese asunto en relación con el tema del programa es enturbiar el claro principio de la responsabilidad del Estado o reducir la responsabilidad de los particulares implicados. Cabe lamentar cualquiera de esos objetivos, porque en ellos

hay un claro intento por impedir que la Comisión prosiga la labor de proponer medidas jurídicas con objeto de asegurar el enjuiciamiento o la extradición de los autores de tales actos. El derecho internacional, cuando se encontraba en un estado mucho más primitivo que el actual, pudo tomar medidas internacionales en contra de los azotes de la piratería y la trata de esclavos, y constituirá un descrédito permanente que la Sexta Comisión no pueda tomar medidas semejantes contra el azote actual del terrorismo internacional.

36. El Sr. FUENTES IBAÑEZ (Bolivia) dice que cuando el Secretario General propuso un examen profundo y exhaustivo del terrorismo internacional no hizo sino recoger un clamor general que las Naciones Unidas no podían desoír. Tras un debate en que los principios sucumbieron por explicables derivaciones políticas, el tema se ha mantenido gracias a la perseverancia de algunas delegaciones, pero ello no ha significado progreso alguno. Aunque la violencia terrorista no ha disminuido, la comunidad internacional parece encontrarse en un estado de paralogización con respecto al tema, y el orador cita como ejemplo la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, que no incluyó mención alguna al terrorismo entre sus resoluciones.

37. Aunque han transcurrido tres años desde que se introdujo el tema y han surgido nuevas realidades, sigue

siendo deber imperioso de la comunidad internacional proceder a su examen, establecer las causas que lo originan, estudiar las medidas para su más adecuado tratamiento y el marco jurídico dentro del cual la sociedad podrá erradicarlo o defenderse de actos criminales que tergiversan y mancillan las más justas reivindicaciones. La delegación de Bolivia reitera su más sincero y absoluto repudio al empleo de la violencia terrorista, cualquiera que sea su origen.

38. Se sabe que el tema es difícil y que podría ser conflictivo, pero el orador pregunta si hay algún tema del programa que no revista ese riesgo, y afirma que todos han de poner de su parte la voluntad suficiente para evitar sus dificultades y profundizar no los puntos más controvertidos, sino los que ofrecen posibilidades de acuerdo. La delegación de Bolivia estima que la Sexta Comisión está preparada para aprovechar las cuatro sesiones reservadas al tema y hacer algo que satisfaga siquiera en parte la esperanza que puso en ella la Asamblea General y de la cual sigue pendiente, aunque con visible desaliento, la opinión pública. La delegación de Bolivia está dispuesta a respaldar cualquier iniciativa destinada a mantener la vigencia del tema y a que se adopten las medidas necesarias para su más pronto y exhaustivo examen, sin evadir la responsabilidad que corresponde a la Sexta Comisión.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

1581a. sesión

Jueves 4 de diciembre de 1975, a las 15.30 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1581

TEMA 116 DEL PROGRAMA

Medidas para prevenir el terrorismo internacional que pone en peligro vidas humanas inocentes o causa su pérdida, o compromete las libertades fundamentales, y estudio de las causas subyacentes de las formas de terrorismo y los actos de violencia que tienen su origen en las aflicciones, la frustración, los agravios y la desesperanza y que conducen a algunas personas a sacrificar vidas humanas, incluida la propia, en un intento de lograr cambios radicales: informe del Comité Especial sobre el Terrorismo Internacional (conclusión) (A/9028*)

1. El Sr. ROSENSTOCK (Estados Unidos de América) deplora el hecho de que los actos de terrorismo sigan atormentando a la comunidad internacional, y cita varios incidentes de terrorismo dirigidos contra ciudadanos de los Estados Unidos y otros países. La comunidad internacional no ha hecho mucho para resolver el problema y los Estados Unidos no han insistido todo lo posible a fin de que se tomen medidas debido a que reconocen que los miembros

de la Comisión aún no están preparados para aceptar su responsabilidad de afrontar el problema del terrorismo. El orador espera que, con el transcurso del tiempo, haya un número suficiente de miembros que estén dispuestos a sumarse en la adopción de medidas, no sólo para condenar esos actos, sino también para combatirlos con medidas jurídicas. Comprende que si se insta a los gobiernos a que tomen medidas antes de que estén dispuestos a hacerlo, ello puede dar origen a acciones que sean peores que la inacción y llevar a la creación de obstáculos innecesarios que se opongan a medidas constructivas. Sin embargo, llega el momento en que la omisión deja de ser una actitud comprensible de prudencia para pasar a ser parte de la norma de renuencia irresponsable a la hora de abordar problemas difíciles.

2. El tema del terrorismo ha sido nuevamente colocado al final del programa del período de sesiones en curso, lo cual refleja la aceptación tácita del hecho de que la Comisión no está dispuesta a tomar medidas en el actual período de sesiones. No obstante, el orador insta a la Comisión a que repase el problema y a que comience a reconsiderar algunos de los prejuicios que hasta el momento han impedido que se tomen medidas significativas. Un examen de ese tipo podría

* Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo octavo período de sesiones, Suplemento No. 28.

preparar a la Comisión para tomar medidas significativas en 1976 y comenzar así a librar a las Naciones Unidas del estigma de ser una institución que ni siquiera está dispuesta a tratar de abordar un flagelo que cada año ocasiona daños mentales y corporales a innumerables personas inocentes o las lleva a la muerte. El orador recuerda algunos de los antecedentes del tema, desde que fuera incluido por primera vez en el programa del vigésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea General. La Secretaría preparó un excelente estudio sobre el problema¹ para que se examinara en ese período de sesiones y el Sr. Rosenstock insta a los miembros de la Comisión a que lo releen, en particular el párrafo 10.

3. A pesar de los motivos evidentes para tomar medidas y del progreso importante que se está realizando en relación con la legislación relativa a la guerra, la Comisión ha adelantado poco en el estudio del terrorismo internacional. Algunos miembros han declarado que la Comisión debe ocuparse más bien de las causas del terrorismo. El Sr. Rosenstock espera que los que insisten en el estudio de las causas realmente deseen eliminar el fenómeno y que no estén simplemente tratando de justificar actos de terrorismo. Estima que la cuestión de las causas no debe impedir que la Comisión examine las medidas jurídicas. La Asamblea General, el Consejo de Seguridad y otros órganos de las Naciones Unidas ya están tratando de una forma u otra las causas, tales como la cuestión del Oriente Medio, la denegación de la igualdad de derechos y la libre determinación y los problemas económicos y sociales. Se burlarían las funciones especiales de la Comisión si se insistiera en que duplicara esa labor antes de abordar la cuestión de las medidas jurídicas. Otra razón para tratar la cuestión de las medidas jurídicas con objeto de combatir los actos de terrorismo es que todos los países han promulgado leyes contra el asesinato, el secuestro, y la violencia, pese a que las causas de esas formas de comportamiento antisocial no se han llegado a comprender plenamente y mucho menos a eliminar. Otros han tratado de oscurecer la índole del problema ampliándolo para que incluya todo tipo de medidas tomadas por Estados que entrañen violencia o daños a personas inocentes. Hay que rechazar ese enfoque debido a que mezcla dos problemas diferentes de manera tal que asegura que no se tome ninguna medida significativa respecto de ninguno de ellos. Además, la legislación relativa a la actuación de los Estados ha sido abordada en otros contextos y se encuentra en una etapa mucho más avanzada, como lo demuestran instrumentos internacionales tales como la Carta de las Naciones Unidas, los estatutos y decisiones de los Tribunales de Nuremberg y Tokio, los Convenios de Ginebra de 1949, la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y la Definición de la agresión. Existe el problema cada vez más grave y espantoso del terrorismo que la Comisión no puede negarse responsablemente a abordar aduciendo que no es el único problema relacionado con la violencia. Otros han afirmado que hay cierto conflicto entre el respeto adecuado de la igualdad de derechos y la libre determinación, por una parte, y el deseo de tomar medidas jurídicas para afrontar el terrorismo, por otra. El Sr. Rosenstock recuerda a esos oradores que ninguno de los muchos Estados que han

obtenido su independencia mediante la lucha se ha entregado al tipo de violencia internacional a que ahora se refiere. Además, existe un derecho más fundamental aún que el derecho a la igualdad y a la libre determinación, esto es, el derecho a la vida. Recuerda a los miembros de la Comisión que ni siquiera es lícito que un Estado-nación se valga de cualquier medio o de todos en el ejercicio de su derecho intrínseco a la defensa propia. Aun un Estado cuya propia existencia se vea amenazada no tiene derecho a hacer caso omiso de la legislación relativa a la guerra. Por muy amplio que sea el apoyo que su causa reciba en un momento dado, los individuos, al igual que los Estados, deben estar sujetos a límites respecto de su conducta en apoyo a esa causa.

4. El orador reconoce que en el período de sesiones en curso ya no queda tiempo para abordar los detalles del problema, pero insta a la Comisión a que considere el proyecto de convención presentado por su delegación en el vigésimo séptimo período de sesiones² que aún está ante la Comisión y que se formuló de manera que sólo se trataran las más graves amenazas criminales; hay que cumplir cada una de las cuatro condiciones individuales indicadas en el párrafo 1 del artículo 1 del proyecto de convención antes de que sean aplicables las disposiciones del mismo. El orador insta a la Comisión a que dedique algún tiempo antes del período de sesiones siguiente a reflexionar más sobre el problema del terrorismo internacional, a considerar la propuesta de los Estados Unidos, a meditar sobre otras medidas posibles o complementarias, a firmar y ratificar los convenios de Tokio, Montreal y La Haya sobre actos de injerencia en la aviación civil y a firmar y ratificar la Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos.

5. El Sr. HAMMAD (Emiratos Arabes Unidos) dice que su delegación hubiera querido que el tema relativo al terrorismo internacional se hubiese concluido en el vigésimo noveno período de sesiones, pero que accedió al deseo de la mayoría de aplazar su examen hasta el período de sesiones en curso. El orador espera que el tema se discuta ampliamente en el actual período de sesiones y recuerda a la Comisión que el estudio del terrorismo y de las medidas para combatirlo requiere un examen completo de las razones que impulsan a ciertos individuos a perpetrar actos de coacción contra otros para lograr objetivos nacionales relacionados con la liberación de su pueblo del colonialismo, la dominación y la ocupación extranjeras y la discriminación racial.

6. Ahora bien, el uso del terrorismo por Estados es más peligroso que su uso por individuos. Los medios de que disponen los Estados para cometer actos de terrorismo son mucho más amplios que los que están al alcance de los individuos y los movimientos de liberación nacional y, en consecuencia, el uso del terrorismo por Estados entraña mayores pérdidas de vida y destrucción de bienes y hay mayores posibilidades de que el crimen quede impune. Pese a todos los instrumentos internacionales citados por el representante de los Estados Unidos de América, el uso del terrorismo por los Estados a nivel internacional sigue existiendo y es preciso adoptar medidas con objeto de

¹ A/C.6/418/Rev.1.

² A/C.6/L.850.

aplicar sanciones contra los Estados que cometen actos de terrorismo y contra sus agentes, incluidos los agentes secretos y los pilotos. No cabe ninguna disculpa en el caso de esos individuos, incluso si afirman que llevaban a cabo su misión bajo órdenes de superiores. El juicio de Nuremberg ha estipulado la legislación relativa a ese aspecto de la cuestión al declarar que esos agentes son criminales internacionales sujetos al castigo internacional. El ejemplo más absoluto del uso del terrorismo por un Estado es el de Israel, cuyos agentes secretos cometen actos de asesinato y destrucción en muchas ciudades del mundo y cuyos bombarderos asesinan a niños y mujeres inocentes en los campamentos de refugiados de Palestina. Los agentes y pilotos de Israel son terroristas internacionales que merecen ser castigados.

7. El Sr. SIAGE (República Árabe Siria) señala que la última persona que puede hablar de terrorismo es el representante del régimen racista de Israel, cuyas manos están aún manchadas con la sangre de las víctimas del más reciente ataque bárbaro llevado a cabo por aviones israelíes contra blancos civiles y campamentos de refugiados en el Líbano. Esos refugiados habían sido expulsados previamente de sus hogares por ese mismo régimen, cuya larga historia de continuos actos terroristas demuestra que tiene su fundamento en el terrorismo y la matanza de inocentes. Incluso el emisario de Israel es un terrorista conocido por los combatientes en la orilla occidental que siguen sufriendo a causa de la tortura israelí.

8. Ninguna jurisdicción internacional puede calificar de terrorismo la lucha legítima librada por un pueblo por su liberación. Esa lucha es legítima y se basa en la Carta y en las resoluciones de las Naciones Unidas. Se trata de combatir a un criminal agresor. El orador insta a la Comisión a que condene el verdadero terrorismo, esto es, el uso del terrorismo por Estados. Cuando un Estado Miembro ataca a otro Estado Miembro, eso es terrorismo. La lucha desesperada llevada a cabo por víctimas a las que no les queda otro recurso para expresar sus ansias de libre determinación no puede denominarse terrorismo.

9. El Sr. FIFOOT (Reino Unido) dice que aborda el tema con gran desaliento, no tanto por la cuestión a que se refiere, sino por las muestras que da de la falta de iniciativa y voluntad por parte de la comunidad internacional. La Comisión no ha logrado ningún adelanto respecto del tema, y el orador teme que éste incluya demasiadas esferas distintas de estudio. El tema es excesivamente amplio y representa una disipación deplorables de esfuerzos. Es innecesario enumerar los actos terroristas, que sólo sirven para suscitar explicaciones e incluso disculpas. La comunidad internacional no ha logrado concentrarse, como debe, en la víctima y ha desviado su atención hacia otros aspectos distintos del problema, tales como los principios o las cuestiones de política o la culpabilidad. Observa que el concepto de una guerra justa o injusta ya no es pertinente en el derecho humanitario, y lamenta que se vuelva sobre un concepto tal, esto es, los actos terroristas justos o injustos, en el debate sobre el tema que se examina. Hay pruebas más que suficientes de la necesidad de que la comunidad internacional tome todas las medidas que pueda para resolver el problema. Su Gobierno se unirá a otros en la búsqueda de medios para lograr ese fin.

10. El Sr. HELLNERS (Suecia) dice que el terrorismo internacional constituye todavía un problema grave. Hace algunos años la atención mundial se centró principalmente en los actos dirigidos contra la aviación civil, y los Convenios de La Haya y Montreal fueron instrumentos importantes en la lucha para la represión de esos delitos. Más recientemente, ha predominado la captura de rehenes para inducir a los gobiernos a hacer concesiones. Todos los Estados deben considerar completamente inaceptable que grupos irresponsables o criminales ataquen a particulares de esa manera e interfieran en el ejercicio de la autoridad pública. Además, confía en que un número suficiente de Estados ratificarán pronto la Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas; inclusive los agentes diplomáticos, de 1973, a fin de que dicha Convención entre pronto en vigor.

11. Es importante que continúen los esfuerzos para combatir el terrorismo y que se dedique especial atención a las causas de las actividades terroristas, cuyos motivos son a menudo confusos o incluso incomprensibles. En algunos casos pueden encontrarse ciertos motivos comprensibles, aunque ello no es excusa suficiente para los métodos utilizados por los terroristas. Además, la actividad terrorista afecta a menudo a personas y Estados completamente inocentes, que no tienen nada que ver con el conflicto original. Cualquier país puede convertirse en víctima de actos terroristas, como lo ha demostrado la reciente experiencia de su propio país. En interés común de todos se deben explorar todas las posibilidades y medios de combatir el terrorismo internacional.

12. El Sr. BUSSE (República Federal de Alemania) dice que su Gobierno está profundamente preocupado por los actos de terrorismo que continúan perpetrándose en todo el mundo. Algunos de los incidentes más odiosos han ocurrido en su país o han afectado a sus nacionales. Su país, que ha abogado repetidamente por medidas mundiales coordinadas para una prevención eficaz del terrorismo y está dispuesto a adherirse a acuerdos que prevean medidas significativas, ha iniciado el procedimiento legislativo para la ratificación de las distintas convenciones contra el terrorismo relativas a la aviación civil, así como de la Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, e insta a todos los gobiernos a que consideren seriamente la adhesión a los acuerdos existentes a fin de asegurar su reconocimiento y aplicación a escala mundial. No obstante, esos acuerdos se refieren sólo a sectores concretos, y debe buscarse un acuerdo general sobre la prevención de los actos terroristas y la lucha contra ellos. Puede resultar útil establecer una prohibición mundial de admitir y amparar terroristas y personas liberadas de la cárcel como resultado de actividades terroristas. Todos los Estados deben comprometerse a negar protección o refugio a los terroristas, dejándolos de ese modo sujetos a procesamiento.

13. Sería útil estudiar y eliminar las causas subyacentes de los delitos, pero es esencial que el debate en la Comisión se centre sobre la cuestión de las medidas directas de prevención. Debe formularse una condena clara de los actos insidiosos de violencia contra las personas inocentes, indefensas y no protegidas. Es un signo esperanzador que en los

casos recientes de toma de rehenes haya habido una creciente renuencia a conceder refugio a los terroristas.

14. Confía en que en el trigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General la atmósfera sea más propicia para un examen fructífero del tema.

15. El Sr. GARCIA ORTIZ (Ecuador) recuerda que el tema ha figurado en el programa durante los últimos cuatro períodos de sesiones y que nunca ha sido tratado adecuadamente. Aunque en la actualidad existen varios instrumentos internacionales encaminados a prevenir y castigar los actos de terrorismo internacional, dichos actos continúan multiplicándose. Las Naciones Unidas deben preocuparse por la situación y poner término a dichos actos, o por lo menos reducir su frecuencia, ya que constituyen una afrenta a la conciencia jurídica y moral de la humanidad.

16. El asunto es complejo y delicado, como puede verse en el informe del Comité Especial sobre el Terrorismo Internacional (A/9028). Se ha planteado la cuestión inicial de cómo definir el terrorismo. En su opinión, dichas definiciones son difíciles y no abarcan la esencia del problema; el debate debe más bien centrarse en medidas eficaces para prevenir y castigar los actos de terrorismo. El informe del Comité Especial es bueno, y debe renovarse el mandato de dicho Comité a fin de que en el trigésimo primer período de sesiones pueda elaborarse un instrumento que aclare los distintos elementos del problema. A ese respecto, considera aceptable la sugerencia del representante de Turquía hecha en la sesión anterior. Como el asunto es de naturaleza técnica, la Comisión podría considerar la posibilidad de crear un pequeño grupo de expertos para elaborar un proyecto de convención o de resolución sobre el tema. El asunto no puede dejarse a merced de los acontecimientos ni de la política de los Estados.

17. El Sr. JEANNEL (Francia) dice que se han perdido muchas vidas inocentes como consecuencia de actos de terrorismo que tienen un origen político y persiguen objetivos políticos. Por esa razón es importante estudiar no sólo los efectos trágicos, sino también las causas subyacentes del terrorismo. El estudio cuidadoso de los acontecimientos de que se trata pone de relieve que el fenómeno está vinculado al sentimiento que experimentan las minorías, acertada o erróneamente, de haber sido excluidas de la sociedad, considerando que se las ha privado del derecho de existir y sin posibilidad alguna de reafirmar su identidad. Ese mismo sentimiento las ha conducido a expresarse violentamente colocando explosivos en lugares públicos, aprehendiendo rehenes, desviando aeronaves a mano armada o atentando contra las vidas de agentes diplomáticos.

18. Al respecto, desea asegurar al representante de Turquía que Francia deplora y condena enérgicamente el reciente asesinato del Embajador de Turquía en Francia y está tomando todas las medidas para descubrir y castigar a los culpables.

19. La vocación humanitaria y los ideales democráticos de las Naciones Unidas las obligan a tratar de resolver el problema complejo de la despiadada embestida de la violencia ciega y sus causas. La solución del problema debe resultar aceptable para todos los Estados, ya que de otro

modo no habría más resultado que fórmulas vacías de todo contenido práctico real. Por supuesto, dichas soluciones deben ser compatibles con los esfuerzos para reforzar la protección internacional de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y deben tener en cuenta las disposiciones de acuerdos internacionales recientes, como los que se refieren a la aviación civil. Debe invitarse además a los Estados a que examinen de nuevo su legislación nacional y sus acuerdos bilaterales y multilaterales relativos al terrorismo. Cita a ese respecto la reciente legislación francesa relativa a la prevención y el castigo de la desviación a mano armada de aeronaves, que refleja el deseo de su Gobierno de combatir actos bárbaros condenados por todos los pueblos, por noble que sea la causa en cuyo nombre se cometan.

20. El Sr. KUSSBACH (Austria) dice que su Gobierno ha condenado siempre los actos de violencia cometidos contra personas inocentes y que es bien conocida su posición con respecto al terrorismo. Desea asegurar una vez más al representante de Turquía que su Gobierno deplora profundamente y condena el crimen cometido en la Embajada de Turquía en Viena el 22 de octubre de 1975. Las autoridades austríacas harán todo lo posible para llevar a buen fin sus investigaciones, con miras a hacer comparecer ante la justicia a los criminales responsables.

21. El Sr. TERZI (Organización de Liberación de Palestina), hablando por invitación del Presidente, señala a la atención los párrafos 1 y 4 de la resolución 3034 (XXVII) de la Asamblea General, en que se expresa profunda preocupación por los actos de violencia cada vez más frecuentes y se condena la persistencia de los actos represivos y de terrorismo cometidos por regímenes coloniales y racistas o bajo otras formas de dominación extranjera. Señala también que en el párrafo 38 del informe del Comité Especial sobre el Terrorismo Internacional se dice que varios representantes insistieron especialmente en la importancia del terrorismo de Estado, que consideraban la forma más peligrosa de terrorismo internacional. El terrorismo internacional está siendo practicado en Palestina por las fuerzas de ocupación, como se comprueba claramente en el documento A/10272. Las personas que escapan a dichos actos de terrorismo en sus propios países son perseguidos en los campamentos que ocupan actualmente en países vecinos. Un ejemplo notorio de terrorismo estatal han sido los bárbaros ataques aéreos llevados a cabo por Israel contra los campamentos de refugiados en el Líbano meridional dos días antes. Irónicamente, el llamado Estado sionista fue proclamado como resultado del terrorismo perpetrado por las huestes hitlerianas contra judíos inocentes, entre otros, y el terrorismo de los sionistas racistas explota la tragedia y el sufrimiento de las víctimas de los racistas nazis. El terrorismo ha sido siempre una característica del sionismo, como se demostró, entre otras cosas, mediante la colocación de bombas en el Hotel King David y en mercados de ciudades y aldeas de toda Palestina.

22. En el párrafo 66 del informe se señaló que los esfuerzos para remediar estas situaciones que generaban violencia eran contrarrestados con demasiada frecuencia por Estados Miembros de las Naciones Unidas. A ese respecto, los actos de terrorismo cometidos por los sionistas deben vincularse al suministro de armas mortíferas proporcionadas por los Estados Unidos de América. Fueron aviones de

fabricación estadounidense, utilizando bombas del mismo origen, los que llevaron a cabo los recientes ataques contra los campamentos de refugiados.

23. Su organización cree que todos los Estados deben respetar los principios de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, las resoluciones relativas a la ocupación de territorios extranjeros, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

24. El Sr. AL-ADHAMI (Irak) hace suyas las observaciones formuladas por los representantes de otros Estados árabes y la Organización de Liberación de Palestina.

25. Refiriéndose a un artículo que figura en la edición de *Le Monde* de 3 de diciembre, relativa a la situación en el Oriente Medio dos años después de la guerra de octubre de 1973, insta a quienes sufrieron la agresión de las fuerzas hitlerianas a que recuerden la teoría de que las fronteras son móviles y siguen a los movimientos de población, incluso en detrimento de otros pueblos. Otros artículos de la misma edición describen también los ataques contra los campamentos de refugiados y el plan de establecer cuatro aldeas más en las Alturas de Golán. La situación del pueblo palestino que lucha por su libertad merece que la Comisión la examine seriamente.

26. El Sr. ROSSIDES (Chipre) dice que todos los miembros de la Comisión se oponen al terrorismo y creen que deben utilizarse todos los medios posibles para terminar con él. A ese fin, es necesario buscar las causas del terrorismo. Dichas causas están vinculadas al actual desorden mundial, en que no se aplican las disposiciones de la Carta, cunde la injusticia y la seguridad internacional se basa en el concepto anticuado del uso de la fuerza. La inobservancia o la violación activa de las resoluciones del Consejo de Seguridad es acogida con indiferencia por la comunidad internacional y las Naciones Unidas. Su delegación se ha opuesto siempre a todas las formas de terrorismo.

27. El Sr. ABUL-KHEIR (Egipto), hablando en ejercicio del derecho de respuesta, dice que ha sorprendido a su delegación que el representante de Israel se haya atrevido a hablar en la sesión anterior sobre la cuestión del terrorismo de Estado cuando la celebración de las reuniones del Consejo de Seguridad han sido provocadas por actos de terrorismo llevados a cabo por Israel mismo. Las razones subyacentes de la violencia en el Oriente Medio están vinculadas con la ocupación de los territorios árabes y con la negativa de Israel a conceder a los pueblos árabes su derecho a la libre determinación. El pueblo palestino está luchando con todos los medios a su alcance para conseguir el ejercicio de sus derechos legítimos, tal como los pueblos de Europa lo hicieron contra las fuerzas del fascismo y el nazismo durante la segunda guerra mundial, y tal como hicieron también los pueblos de África y Asia.

28. El Sr. SABEL (Israel), hablando en ejercicio del derecho de respuesta, dice que en su declaración no mencionó al Gobierno de Egipto ni a ningún Estado árabe, sino simplemente a quienes apoyan el terrorismo. Sin

embargo, el representante de Egipto parece que ha considerado apropiado responder a esas observaciones.

29. El apoyo de los Estados árabes al terrorismo constituye uno de los episodios más horribles en la historia moderna. Al proporcionar dicho apoyo, cae sobre sus cabezas la sangre de inocentes, niños, pasajeros de líneas aéreas, hombres de negocio, atletas, agentes diplomáticos y todos aquellos árabes de la orilla occidental y de Gaza que se han negado a seguir las instrucciones de la Organización de Liberación de Palestina. Esos Estados árabes están personificados por el Coronel Qadafi, que concedió un premio de 5 millones de dólares a los asesinos de los atletas en Munich. Los Estados árabes se jactan abiertamente de las hazañas de los terroristas fedayín que utilizan campamentos de refugiados en el Líbano como bases para sus ataques contra civiles israelíes. El Gobierno del Líbano se muestra renuente o incapaz de tomar medida alguna contra los terroristas. Los Estados árabes manifiestan públicamente su satisfacción en cada caso de asesinato, dando señales de angustia tan sólo cuando Israel devuelve el ataque, no contra civiles, mujeres y niños, sino contra los mismos terroristas. La exactitud de dichos ataques ha sido reconocida por los terroristas mismos en su propia publicación semanal, *Ila El Amam*. El "terrorismo de Estado", si existe, está constituido por la ayuda, la complicidad, el apoyo abierto y la satisfacción con los actos de terror. No está incluida en él la devolución del golpe a los terroristas.

30. El Sr. ABDALLAH (Túnez) dice que la lista de crímenes de Israel es demasiado larga para ser tratada en el tiempo de que dispone la Comisión. Por consiguiente no replicará a las acusaciones israelíes, que ya han sido contestadas por la opinión pública mundial.

31. Como no puede darse al tema el examen detallado que merece en el tiempo que le queda a la Comisión en el actual período de sesiones, su delegación, que ha condenado a menudo al terrorismo, propone que se aplase el debate sobre el tema de conformidad con el artículo 116 del reglamento de la Asamblea General, y que se reanude en el trigésimo primer período de sesiones.

32. El PRESIDENTE sugiere que la propuesta de aplazar el debate se aborde después de que todas las delegaciones que deseen hacerlo hayan podido ejercer su derecho de respuesta.

33. El Sr. OMAR (República Árabe Libia), hablando en ejercicio del derecho de respuesta, dice que no es sorprendente que el representante del régimen racista y sionista hable sobre el tema del terrorismo. Las ideas de guerra y de fuerza están indisolublemente vinculadas con el sionismo y forman parte integrante del pensamiento de sus dirigentes.

34. Con respecto a las observaciones del representante israelí sobre el Coronel Qadafi, dice que Libia está orgullosa de proporcionar asistencia al pueblo palestino en su legítima lucha para regresar a su tierra y sus hogares, y de ayudar a los pueblos que luchan por sus derechos en todo el mundo. Su Gobierno continuará apoyando a sus hermanos palestinos hasta que la bandera palestina se ices una vez más sobre Palestina.

35. El Sr. VANDERPUEYE (Ghana), hablando sobre una cuestión de orden, dice que la moción de Túnez debe

recibir la consideración debida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 116 del reglamento. La Comisión pasa por alto ese artículo en perjuicio propio. Es desagradable que la Comisión tenga que escuchar una larga lista de acusaciones y respuestas cuando debe preocuparse de hallar soluciones a los problemas de que se trata. La causa del terrorismo es el estado de guerra no declarada existente en muchas zonas del mundo. En consecuencia, apoya la moción tunecina.

36. El Sr. JEANNEL (Francia) dice que comparte la preocupación expresada por el representante de Ghana. El diálogo que tiene lugar en la Comisión es un diálogo de sordos. Por consiguiente, debe aplazarse el debate sobre el tema hasta el trigésimo primer período de sesiones, en el que la cuestión podrá examinarse con más objetividad. Su delegación apoya la moción tunecina.

37. El Sr. HAMMAD (Emiratos Arabes Unidos), apoyado por el Sr. AL-ADHAMI (Iraq), se opone a la moción tunecina. Como no ha habido oposición al procedimiento sugerido por el Presidente, esa sugerencia constituye una decisión de la Comisión que, en virtud del artículo 123 del reglamento, sólo puede rechazarse por una mayoría de dos tercios. Además, deplora que el representante de Ghana haya creído oportuno sermonear a otras delegaciones al interrumpir el ejercicio del derecho de respuesta para plantear una cuestión de orden.

38. El PRESIDENTE dice que la Comisión no ha adoptado oficialmente ninguna decisión y que, en consecuencia, no es aplicable el artículo 123 del reglamento. La moción del representante de Túnez consiste en aplazar el debate del tema hasta el trigésimo primer período de sesiones. Incluso en el caso de que se aprobara la moción, las delegaciones que desearan hacerlo podrían ejercer el derecho de respuesta.

Queda aprobada la moción de aplazar el debate del tema hasta el trigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General.

39. El Sr. HAMMAD (Emiratos Arabes Unidos), hablando en ejercicio del derecho de respuesta con respecto a la afirmación hecha por el representante de Israel de que Israel sólo se defiende de ataques, se pregunta si los agentes secretos israelíes que atacaron la Embajada de Libia en Roma y mataron a un conocido poeta y músico árabe actuaron en legítima defensa, y si la causa del asesinato de un trabajador marroquí en Estocolmo y de un representante de relaciones públicas sirio fue la legítima defensa. Agentes del Gobierno de Israel enviaron por correo una bomba que hirió gravemente al jefe de un centro de investigaciones de Beirut, y soldados israelíes mataron a un poeta árabe muy conocido en un ataque contra Beirut. ¿Pueden considerarse actos de legítima defensa esos asesinatos y la muerte de decenas de mujeres y niños en los campamentos de refugiados palestinos del Líbano y otros lugares?

40. Su delegación está totalmente de acuerdo con la declaración hecha por el representante del Reino Unido en el sentido de que la comunidad internacional debe preocuparse en primer término por las víctimas del terrorismo. Sin embargo, en opinión de su delegación, el terrorismo de

Estado que llevan a cabo agentes militares y la policía secreta es mucho más reprensible que los actos de terrorismo individual ejecutados por luchadores por la libertad.

41. El Sr. TERZI (Organización de Liberación de Palestina) dice que los palestinos han emprendido una lucha armada para liberar su país y se ven obligados a actuar desde campamentos de refugiados porque fueron expulsados de sus hogares y las fuerzas de ocupación les han negado el derecho de regresar a su país. De igual manera que los guerrilleros de distintos países que luchaban contra la ocupación nazi durante la segunda guerra mundial se vieron obligados a pasar a la clandestinidad y a vivir en el seno de su propio pueblo, los palestinos que luchan por la libertad están obligados a vivir con su pueblo en campamentos de refugiados.

42. En cuanto al bombardeo que tuvo lugar dos días antes, acaba de recibir un cablegrama en el que se confirma que 52 personas, en su mayoría mujeres y niños, murieron como resultado de ese ataque salvaje del racismo sionista. En la lista de los asesinados no figura ni un solo hombre joven capaz de luchar por la libertad.

43. El Sr. SABEL (Israel) dice que su delegación no se opuso a la decisión por consenso de aplazar hasta el trigésimo primer período de sesiones el debate del tema que se examina porque la discusión se ha tornado en un árido debate, pero está decepcionada porque la Comisión no ha formulado ningún plan constructivo para tomar medidas jurídicas encaminadas a combatir el terrorismo. En respuesta a las observaciones hechas por ciertas delegaciones árabes, desea informar a la Comisión de un caso que constituye un ejemplo auténtico de terrorismo. A fines de octubre, las fuerzas de defensa de Israel capturaron a un terrorista que había penetrado en territorio israelí. Posteriormente fue entrevistado por televisión y se le preguntó por qué había incluido un hacha como parte de sus pertrechos. Contestó que el hacha era para cortar las cabezas a los habitantes de los asentamientos israelíes con el propósito de llevar las cabezas cortadas a la República Árabe Siria para probar que el grupo terrorista al que pertenecía había logrado penetrar en la aldea, matar a sus víctimas y retirarse sin contratiempos. Eso habría surtido el efecto de aterrorizar a la población civil e inducir a abandonar Israel y a irse a cualquier otro país que la aceptara. El orador afirma respetuosamente que eso es terrorismo.

44. El PRESIDENTE observa que hay varios oradores que todavía desean hablar sobre el tema, pero que, dada la decisión de la Comisión de postergar el debate, tendrán que hacerlo en el trigésimo primer período de sesiones.

TEMA 115 DEL PROGRAMA

Cumplimiento por los Estados de las disposiciones de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961 y medidas para aumentar el número de las partes en ella (conclusión) (A/C.6/L.1031/Rev.1)

45. El Sr. KOLESNIK (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala a la atención el proyecto de resolución A/C.6/L.1031/Rev.1, que contiene algunos cambios de fondo con respecto al proyecto de resolución primitivo. En

el preámbulo del proyecto de resolución revisado, el único cambio de fondo está en el quinto párrafo, en que se aboga por el estudio de la cuestión del estatuto del correo diplomático teniendo en cuenta la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas³ de 1961. En la parte dispositiva del proyecto revisado se han hecho cambios de fondo en los párrafos 4 y 5. En particular, en el párrafo 5 ya no se invita a la Comisión de Derecho Internacional (CDI) a que aborde el estudio de la elaboración de normas especiales relativas al estatuto del correo diplomático, sino que se pide al Secretario General que presente un informe sobre los cometarios y observaciones hechos por los Estados Miembros acerca del tema en respuesta a la invitación que se les extiende en el párrafo 4 del proyecto de resolución revisado. Los cambios introducidos en los párrafos 4 y 5 constituyen un intento de los patrocinadores por dar cabida a las opiniones manifestadas por ciertas delegaciones en el sentido de que sería prematuro, en esa etapa, encomendar a la CDI la tarea de estudiar la cuestión del estatuto del correo diplomático. Antes de adoptar tal medida, se ha creído aconsejable pedir a los Estados Miembros sus opiniones sobre la materia. El orador espera que los cambios hayan hecho más generalmente aceptable el proyecto y que sea aprobado por consenso.

46. El PRESIDENTE agradece a los patrocinadores del proyecto de resolución sus esfuerzos por dar cabida a las observaciones hechas por otras delegaciones y el espíritu de buena voluntad que han demostrado.

47. El Sr. FIFOOT (Reino Unido) agradece al representante de la URSS y a los demás patrocinadores del proyecto de resolución revisado la comprensión que han demostrado introduciendo en él cambios que superan las dificultades manifestadas por su delegación en la sesión anterior respecto del proyecto.

48. El Sr. ABUL-KHEIR (Egipto) observa que ha habido varios errores de traducción en el texto árabe del proyecto de resolución revisado, en particular en el párrafo 5 de la parte dispositiva.

49. El PRESIDENTE dice que la División de Traducción hará las correcciones necesarias.

50. El Sr. JEANNEL (Francia) se une al representante del Reino Unido en su reconocimiento a los patrocinadores del proyecto de resolución por los cambios que hicieron en el proyecto, que ahora es por completo aceptable para la delegación de Francia. Como en el texto árabe, en la traducción al francés del proyecto revisado hay varios errores que su delegación señala a la atención.

51. El PRESIDENTE dice que se hará concordar las traducciones del proyecto de resolución revisado, que se hicieron bajo una considerable presión de tiempo.

52. El Sr. KRISPIS (Grecia) recuerda que su delegación objetó ciertos puntos de la versión primitiva del proyecto

de resolución; la versión revisada le satisface por entero y espera que el proyecto se apruebe por consenso.

53. Tras un breve debate acerca de la redacción en que intervienen el Sr. JEANNEL (Francia), el Sr. FIFOOT (Reino Unido), el Sr. KOLESNIK (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), el Sr. VANDERPUYE (Ghana), el Sr. ROSENSTOCK (Estados Unidos de América) y el Sr. FRANCIS (Jamaica), hay acuerdo en que el texto inglés del proyecto de resolución revisado es fidedigno en lo substancial.

54. El Sr. GODOY (Paraguay), haciendo referencia al texto español del proyecto de resolución revisado, dice que en el párrafo 1 de la parte dispositiva sería más correcto usar la palabra "*Reafirma*" en vez de la palabra "*Confirma*".

55. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, entenderá que la Comisión desea aprobar el proyecto de resolución A/C.6/L.1031/Rev.1 sin someterlo a votación, entendiéndose que los textos inglés y ruso constituyen las versiones correctas y que las versiones en otros idiomas deben ajustarse a ellos.

Así queda acordado.

56. El Sr. ROSENSTOCK (Estados Unidos de América) expresa su reconocimiento por el espíritu de cooperación manifestado por los patrocinadores del proyecto de resolución revisado al hacer los cambios solicitados por varias delegaciones. La versión actual permite que su delegación siga estimando que no debe cambiarse el texto de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, debiendo mantenerse en particular el texto del artículo 27. La delegación de los Estados Unidos hace suyo el llamamiento a adherirse a la Convención dirigido a los Estados que aún no lo hayan hecho.

57. El Sr. SIBLESZ (Países Bajos) dice que su delegación participó en el consenso por el cual se aprobó el proyecto de resolución revisado, aunque tiene ciertas reservas respecto de la conveniencia de estudiar la cuestión del correo diplomático; no está convencida de que los supuestos casos de violación de las disposiciones de la Convención de Viena deban examinarse como tema separado del programa. Con respecto al párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución revisado, complace a su delegación anunciar que el Gobierno de los Países Bajos presentará dentro de poco un proyecto de ley al Parlamento en virtud del cual su país podrá ratificar la Convención de Viena.

TEMA 118 DEL PROGRAMA

Resoluciones aprobadas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales:

- a) Resolución relativa a la condición de observador de los movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana o la Liga de los Estados Arabes, o por ambas;

³ Naciones Unidas, *Recueil des Traités*, vol. 500, No. 7310, pág. 162.

b) Resolución relativa a la aplicación de la Convención en las actividades futuras de las organizaciones internacionales (A/10141)

58. El PRESIDENTE dice que, como consecuencia de las consultas celebradas al respecto con muchas delegaciones interesadas, estima que hay un consenso general en que, por falta de tiempo, el examen del tema 118 del programa se

aplaze hasta el trigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General. Si no hay objeciones, considerará que la Comisión decide aplazar el examen del tema.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.

1582a. sesión

Viernes 5 de diciembre de 1975, a las 11.05 horas

Presidente: Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya).

A/C.6/SR.1582

TEMAS 113 Y 29 DEL PROGRAMA

Informe del Comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas (conclusión*) (A/10033, A/10102, A/10108, A/10113 y Corr.1 y Add.1 a 3, A/C.6/437, A/C.6/L.1028, A/C.6/L.1030)

Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones y la promoción de las normas del derecho internacional en las relaciones entre los Estados: informes del Secretario General (conclusión*) (A/10218, A/10219, A/10255, A/10289, A/C.6/437, A/C.6/L.1028, A/C.6/L.1030)

1. La Sra. LOPEZ (Filipinas) refiriéndose al documento A/C.6/L.1030, en el que se exponen las consecuencias financieras del proyecto de resolución A/C.6/L.1028, que aprobó por consenso la Comisión, dice que su delegación tiene entendido que los miembros del Comité Especial de la Carta de las Naciones Unidas y el Fortalecimiento del Papel de la Organización, están celebrando consultas sobre otras posibles fechas en que pueda reunirse el Comité. Los miembros del Comité consideran que febrero de 1976 es una fecha demasiado temprana y que la gran mayoría de ellos prefiere que la reunión tenga lugar en una fecha más avanzada, incluso si no se celebra en la Sede. Su delegación pide a la Secretaría que informe a la Comisión sobre otras posibles fechas de reunión del Comité Especial, que espera puedan ser aprobadas por consenso. También pide al Presidente que haga un llamamiento a los presidentes de los grupos regionales para que comuniquen al Relator los nombres de los Estados Miembros adicionales, conforme a lo previsto en el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución A/C.6/L.1028.

2. El PRESIDENTE, atendiendo a la solicitud de la representante de Filipinas, dice que hará tal llamamiento a los presidentes de los grupos regionales, pues se trata de una cuestión urgente.

3. El Sr. RYBAKOV (Secretario de la Comisión) dice que la otra fecha posible de reunión del Comité Especial,

además de la prevista en el documento A/C.6/L.1030, es del 5 al 30 de julio de 1976, en Ginebra. Por lo que se refiere al costo de la prestación de servicios al Comité, si se reuniera en Ginebra, importaría una suma de 373.300 dólares, es decir, unos 37.000 dólares más que si la reunión se celebrara en la Sede. Ahora bien, esa cifra no refleja la consignación adicional que el Secretario General tendría que solicitar para el presupuesto correspondiente al bienio 1976-1977. Si la reunión se celebrase en Ginebra, la necesidad de consignaciones adicionales dependería no sólo de esa reunión, sino de las demás que pudieran celebrarse al mismo tiempo. Es probable que parte, por lo menos, de las necesidades de servicios del Comité Especial tuvieran que satisfacerse mediante personal supernumerario, lo que daría lugar a gastos adicionales. Sin embargo, habida cuenta de la totalidad de recursos disponibles en Ginebra, el Secretario General no pediría consignaciones adicionales para la celebración de la reunión en Ginebra, sino que informaría a la Asamblea General sobre la medida en que se precisarían esas consignaciones, atendido el calendario de reuniones en Ginebra. Por el contrario, en lo que respecta a los gastos de viaje del personal sustantivo de la Oficina de Asuntos Jurídicos a Ginebra, el Secretario General tendría que pedir una consignación adicional de 9.200 dólares. Esa cifra es inferior a lo que pudiera haber sido, pues algunos miembros del personal sustantivo estarán disponibles en Ginebra durante el mes de julio, en relación con la reunión de otro órgano jurídico.

4. La Srta. AGUTA (Nigeria) dice que el proyecto de resolución A/C.6/L.1028 fue aprobado por consenso y que si se introducen cambios en él desearía que se celebraran consultas al respecto.

5. El Sr. SANDERS (Guyana) dice que en el segundo párrafo de la carta, de fecha 19 de mayo de 1975, dirigida al Presidente de la Asamblea General por el Presidente de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar¹ se prevé la posibilidad de celebrar un quinto período de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y que a las delegaciones reducidas, como la de su país, les suscitaría dificultades participar en las reuniones del Comité Especial y de la Conferencia si se celebraran al mismo tiempo.

* Reanudación de los trabajos de la 1578a. sesión.

¹ A/10121.

6. El Sr. KOLESNIK (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el calendario de reuniones para 1976 está ya muy recargado, por lo que sería preferible que el Comité Especial se reuniera en 1977. En todo caso, si la reunión se celebrara en 1976, su delegación preferiría que se respetaran las fechas propuestas inicialmente, no sólo por las consideraciones de orden financiero expuestas por el Secretario de la Comisión, sino porque se corre el peligro de que no se puedan prestar servicios adecuados al Comité, pues es muy probable que la Conferencia sobre el Derecho del Mar no concluya sus trabajos en el cuarto período de sesiones y requiera la convocación de un quinto período de sesiones que coincidiría precisamente con la nueva fecha sugerida de reunión del Comité Especial y al que habría que dar carácter prioritario.

7. El Sr. ROSENSTOCK (Estados Unidos de América) dice que a su delegación le resulta difícil, en tan breve plazo, adoptar una decisión para modificar la fecha y lugar de reunión del Comité Especial. Sería preferible que esa cuestión se decidiera cuando se examinaran en la Quinta Comisión las consecuencias financieras del proyecto de resolución A/C.6/L.1028.

8. El Sr. VAN BRUSSELEN (Bélgica) hace un llamamiento para que se tengan en cuenta los problemas que plantearía a las pequeñas delegaciones el envío de representantes a las reuniones del Comité Especial y de la Conferencia sobre el Derecho del Mar en las mismas fechas. Aun cuando su país no es miembro del Comité Especial, tendría interés en asistir como observador a sus reuniones, y ello le ocasionaría dificultades si se celebrasen al mismo tiempo que la Conferencia sobre el Derecho del Mar.

9. La Sra. LOPEZ (Filipinas) dice que su delegación se limitó a pedir otras fechas posibles de celebración de la reunión del Comité Especial, pero que no propuso fecha alguna. Su delegación acepta la sugerencia de los Estados Unidos de que se decida esa cuestión en la Quinta Comisión.

10. El Sr. ABDALLAH (Túnez) dice que no le parece que plantee graves problemas la celebración de la reunión del Comité Especial en la Sede, en febrero de 1976. Apoya a ese respecto las observaciones del representante de la URSS y dice que la decisión de principio sobre el lugar y fecha de esa reunión debe adoptarse en la Sexta Comisión.

11. El Sr. STARČEVIĆ (Yugoslavia) dice que la aprobación del proyecto de resolución A/C.6/L.1028 no prejuzga la decisión sobre el lugar y fecha de celebración de las reuniones del Comité Especial. A ese respecto, se suma al representante de Túnez para afirmar que la decisión correspondiente debe ser adoptada por la Sexta Comisión.

12. El Sr. RYBAKOV (Secretario de la Comisión) dice que la Secretaría ha examinado muy atentamente las posibles

fechas de reunión del Comité Especial y que la única alternativa es: mediados de febrero a mediados de marzo de 1976 en la Sede, o julio de ese mismo año en Ginebra. En cuanto a la decisión relativa al lugar de celebración de la reunión, forma parte integrante del proyecto de resolución y no puede adoptarse ulteriormente.

13. El Sr. JEANNEL (Francia) dice que ambas fechas de reunión propuestas presentan ventajas e inconvenientes, sin que ninguna de ellas hagan pesar definitivamente la balanza en uno u otro sentido. No obstante, parece desprenderse en la Comisión una tendencia a que la reunión del Comité Especial se celebre en febrero de 1976, en la Sede, y su delegación está dispuesta a sumarse a esa tendencia. Por otra parte, desea señalar a la atención una cuestión muy alarmante, a saber, que, en todas las exposiciones sobre consecuencias financieras de proyectos de resolución, las reuniones celebradas en Ginebra resultan más costosas que las celebradas en la Sede. Comprende que ese será el caso cuando se reúna en Ginebra una conferencia importante que exija varios equipos de interpretación y traducción, ya que los servicios de Ginebra son más limitados que los de Nueva York y tendrían que reforzarse con personal enviado de la Sede. Pero no cree que para la celebración de una reunión de un órgano como el Comité Especial sea necesario enviar a personal de la Sede y, en todo caso, la contratación de personal local no tiene por qué ser más costosa en Ginebra que en Nueva York. Su delegación desea que no se opongan sistemáticamente consideraciones de orden financiero a la celebración de reuniones en Ginebra.

14. El PRESIDENTE sugiere que la decisión sobre el lugar y fecha de reunión del Comité Especial se adopte en la Quinta Comisión cuando se debatan las consecuencias financieras del proyecto de resolución A/C.6/L.1028.

Así queda acordado.

Conclusión de los trabajos de la Comisión

15. Tras el habitual intercambio de cortesías, en que intervinieron el Sr. CEAUSU (Rumania), en nombre del Grupo de Estados de Europa Oriental; el Sr. ROSENSTOCK (Estados Unidos de América), en nombre del Grupo de Estados de Europa Occidental y otros Estados; el Sr. MANGONGO-NZAMBI (Gabón), en nombre del Grupo de Estados de África; el Sr. BAQIR (Pakistán), en nombre del Grupo de Estados de Asia; el Sr. OLMOS (Argentina), en nombre del Grupo de Estados de América Latina, el Sr. SUY (Secretario General Adjunto de Asuntos de la Asamblea General y de Asuntos Jurídicos, Asesor Jurídico) y el PRESIDENTE, éste anuncia que la Comisión ha concluido los trabajos del trigésimo período de sesiones.

Se levanta la sesión a las 12.10 horas.

كيفية الحصول على منشورات الأمم المتحدة

يمكن الحصول على منشورات الأمم المتحدة من المكتبات ودور التوزيع في جميع أنحاء العالم. استعلم عنها من المكتبة التي تتعامل معها أو اكتب إلى : الأمم المتحدة، قسم البيع في نيويورك أو في جنيف.

如何购取联合国出版物

联合国出版物在全世界各地的书店和经售处均有发售。请向书店询问或写信到纽约或日内瓦的联合国销售组。

HOW TO OBTAIN UNITED NATIONS PUBLICATIONS

United Nations publications may be obtained from bookstores and distributors throughout the world. Consult your bookstore or write to: United Nations, Sales Section, New York or Geneva.

COMMENT SE PROCURER LES PUBLICATIONS DES NATIONS UNIES

Les publications des Nations Unies sont en vente dans les librairies et les agences dépositaires du monde entier. Informez-vous auprès de votre libraire ou adressez-vous à : Nations Unies, Section des ventes, New York ou Genève.

КАК ПОЛУЧИТЬ ИЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Издания Организации Объединенных Наций можно купить в книжных магазинах и агентствах во всех районах мира. Наводите справки об изданиях в вашем книжном магазине или пишите по адресу: Организация Объединенных Наций, Секция по продаже изданий, Нью-Йорк или Женева.

COMO CONSEGUIR PUBLICACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS

Las publicaciones de las Naciones Unidas están en venta en librerías y casas distribuidoras en todas partes del mundo. Consulte a su librero o diríjase a: Naciones Unidas, Sección de Ventas, Nueva York o Ginebra.
